CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1996

DR. ARTURO HOYOS
PRESIDENTE

SALA PRIMERA (CIVIL)

LICDO. RAFAEL A. GONZÁLEZ
PRESIDENTE

LICDO. ELIGIO A. SALAS — LICDO. ROGELIO A. FÁBREGA ZARAK

LICDA. SONIA F. DE CASTROVERDE
SECRETARIA

SALA SEGUNDA (PENAL)

LICDO. JOSÉ MANUEL FAÚNDES
PRESIDENTE

DRA. AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ — DR. FABIÁN ECHEVERS

LICDO. MARIANO HERRERA
SECRETARIO

SALA TERCERA (CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Y LABORAL)

DR. ARTURO HOYOS
PRESIDENTE

LICDA. MIRTZA A. FRANCESCHI DE AGUILERA — DR. EDGARDO MOLINO MOLA

LICDA. JANINA SMALL
SECRETARIA

SALA CUARTA (NEGOCIOS GENERALES)

DR. ARTURO HOYOS
PRESIDENTE

LICDO. JOSÉ MANUEL FAÚNDES — LICDO. RAFAEL A. GONZÁLEZ

DR. CARLOS H. CUESTAS G.
SECRETARIO GENERAL

PONENCIA

UN NUEVO DERECHO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA

Por: Magistrada Esmeralda Arosemena de Troitiño

Con frecuencia escuchamos decir a algunas autoridades del Ministerio Público, la Policía Técnica Judicial, abogados, profesionales, sin mencionar al común de la gente de la colectividad adulta que, a los menores hay que "sancionarlos", que hay que reducir la edad penal, para que asuman su "responsabilidad penal", que los actos violentos y agresivos y de alta peligrosidad cometidos por algunos menores son evaluados y regulados con criterios paternalistas, así como el uso de la expresión popular, que los muchachos están "vueltos el diablo", por lo que se pone en peligro la seguridad de la colectividad. Cuando escuchamos todo ésto, sentimos con gran preocupación que la visión o el estudio de la situación de la infancia y adolescencia y sus derechos, corresponde a la posición "represiva y sancionadora", que sabemos bien que, ni aún en los adultos ha funcionado ya que, probado está, que las cárceles no corrigen. Este enfoque está muy distante y contrario a la legislación nacional vigente, Ley 15 de 6 de noviembre de 1990, mediante la cual se ratificó la Convención de los Derechos del Niño, de igual forma al Código de Familia aprobada y sancionada mediante la Ley N° 3 de 17 de mayo de 1994, esa posición, a nuestro criterio, sólo atiende a la preocupación por la "seguridad de la colectividad adulta" que quiere dormir tranquila sabiendo que los "malandros juveniles" están tras las rejas.

Estamos obligados a señalar que estos planteamientos son resultado de criterios superficiales, precipitados, no responden a una realidad objetiva, es una percepción muy sesgada o limitada del verdadero problema que afecta a un grupo social y minoritario de adolescentes que cometen actos violentos y con niveles alarmantes de crecimiento en agresividad y organización criminal.

Reconocer ésto debe servirnos para evaluar las potencialidades que poseen los adolescentes y que no sólo serán negativas sino también positivas.

Estos "menores" en conflictos con la ley que son los "menos", son los que "más" inquietan o preocupan a la sociedad.

Analicemos con algo de curiosidad el concepto "menor", a fin de tener algunos elementos necesarios para estudiar culturalmente el problema, identificar su origen, sus causas para evaluar y resolver la situación de este grupo de población llamado menores, como la describe muy bien GARCÍA MÉNDEZ, Emilio.

El concepto menor identifica que frente al adulto se es "menos"; pero no porque sean los menos en número de la población latinoamericana; para nosotros los menores constituyen casi el 50%; más de 1 millón 200 mil jóvenes; pero lo que si es cierto es que, son los que menos poder o fuerza tienen en su núcleo familiar, son los que menos pueden exigir o defenderse en las organizaciones políticas, administrativas o comunitarias e indudablemente están frente al adulto en una relación de subordinación de poder; téngase claro que digo de poder y no autoridad o disciplina, lo cual es necesario, pero muy distinto al sometimiento del poder con desconocimiento de sus derechos que le corresponden en su condición humana.

Esta visión sesgada de la que hemos hablado, no reconoce ni identifica las muchas veces, trágica y triste historia que envuelve las vidas de estos jóvenes, antes de su peligrosidad y odio, ellos fueron privados de sus derechos por abandono, carencias en las satisfacción de sus necesidades, maltrato, excluido de las políticas públicas, sin salud, educación, alimentación, etc. Sus vidas se desarrollaron en circunstancias especialmente difíciles, los adultos "les hemos fallado" primero, ésto es ignorar la responsabilidad que la colectividad adulta tiene con este particular grupo, sin proporcionarles las condiciones que le permitan aprender los valores y responsabilidades ciudadanas, considerándolos como miembros de esa comunidad, pero sobre todo, con esta posición represiva y sancionadora contra los "menores infractores", se hecha a un lado e ignora al

resto y la mayoría de la población minoril que precisamente éstos "no son los menos sino los más".

Dentro de esa población, millón 200 mil, un aproximado de seiscientos (600) jóvenes han estado involucrado en delitos violentos, lesiones personales graves y homicidio entre los años 1990-1995; para identificar la realidad del problema, no hay que hacer una resta del millón de niños y jóvenes, sino de unos 506,606 menores que comprenden los grupos etarios entre 10 y 14 años y entre 15 y 19 años de la población minoril, que correspondería a las edades de nuestros "menores infractores", lo que no alcanzaría ni el 1% (0.71%). Por otro lado, de 1,500 jóvenes atendidos en un Juzgado de Menores, 500 de ellos, que representan casi el 40%,fueron atendido por una categoría de conducta sin identificar (otros) pero que podemos calificar de "falta": el deambular; este grupo son los niños y adolescentes recogidos en las llamadas "Batidas". Nuestras preguntas son: ¿Cuales son las respuestas que la "sociedad" y la "familia" tiene para este grupo que aún no es delincuente?; ¿Dónde están los programas de recreación, prevención y atención que se requieren dirigir a estos jóvenes?. La realidad de nuestro problema de delincuencia juvenil exige de un estudio serio y científico, que nos permita a través de un diagnóstico, plantear la necesidad de hablar de un derecho penal especial minoril.

Reconocemos el problema y no justificamos ni apadrinamos la violencia juvenil, pero denunciamos nuestra culpabilidad como sociedad, ente la incapacidad para atender a este especial grupo de la población y sólo relevamos el impacto moral que sus conductas delictivas producen en la comunidad. No podemos aceptar que siendo "niños" generen esos niveles de violencia, pero no pensamos que siendo niños, muchos no satisfacen sus necesidades básicas. Por ello, proponemos un compromiso de estudio e investigación para analizar el problema desde sus raíces y encontrar respuestas efectivas, de manera que podamos presentar a la sociedad una realidad social de la vida de estos jóvenes sin ignorar la seguridad y el bien común y una pedagogía de la responsabilidad ciudadana. Estamos obligados a analizar los mensajes de violencia y la constante presentación de actitudes delictivas en todos los medios de información y socialización, de la programación de la televisión, inclusive y en especial dentro de los programas dedicados y hechos para los niños y adolescentes.

Es imperativo conocer la Nueva Legislación de "Menores" de nuestro país, que si bien, no alcanza una debida adecuación a la Convención, toma alguna línea de las corrientes modernas de una Protección Integral del desarrollo evolutivo de la personalidad del menor; considerando al niño como un sujeto titular de derechos y no como un objeto requerido de protección legal, y no desconoce que ese sector de la población minoril que entra en conflicto con la ley penal requiere de respuestas socio-educativas que implican conciencia de la responsabilidad que él tiene como miembro de la sociedad y como principio de la solidaridad humana.

Pasamos a identificar el principio rector en que se fundamenta esta legislación en el Libro II del Código de la Familia que consta de 80 artículos:

> EL PRINCIPIO BÁSICO RECTOR EN EL DERECHO DE MENORES Y EN LA CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO ES: "EL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO".

Debemos señalar que el Código de la Familia en su fase inicial no tuvo intencionalidad d una legislación de menores autónoma, recordemos que se denominaba Código de Familia y de Menores; en su última fase de discusión, en lo relativo a menores El Libro II, fue motivo de largos e intensos debates, partiendo desde la impropiedad jurídica de mantenerlo en un Código de Familia, por la especialidad y especificidad del tema, hasta lograr introducirle importantes reformas aunque no completas, ni del todo coherentes, pero sí se dejó sentada la base para la creación de un Estatuto o Código de Niñez y Adolescencia, autónomo e independiente a través de una norma (Art. 568) que expresamente señala la vigencia de estos artículos hasta la creación de dicho código.

La Legislación Minoril es considerada como un Derecho de carácter Tuitivo - protector; siendo la Convención de los Derechos del Niño, ley positiva panameña,

el gobierno y el Estado panameño están obligados a la creación de un sistema jurídico tuitivo - como parte de un cuerpo orgánico y sistemático, lo que es un Código, que contemple todo lo relativo a las situaciones que más comprometen o afectan el bienestar físico, afectivo, mental, emocional, material, económico y social de la infancia y la adolescencia, todas sus necesidades y requerimientos para el desarrollo evolutivo y morales como grupo humano especialmente vulnerable, que para garantizar sus derechos, se plantea la necesidad de recurrir a un régimen normativo tutelar, protector, educativo, resocializador, un derecho en el que se parte de las condiciones privilegiadas por la condición del sujeto, titular del derecho en este caso en el niño o niña, en razón de su categoría de grupo social más débil frente al resto de la sociedad que por el propio concepto de "menor" como ya hemos dicho, ha sido considerado menos como persona, incluso así considerado, dentro de su propio núcleo familiar, el útero social del niño, para usar la expresión del tratadista Mendizábal Osses.

Si reconocemos que los menores constituyen una categoría social más débil frente a las relaciones jurídico-sociales (similar al grupo de trabajadores en la relación obrero-patronal), tenemos que aceptar que, requiere de un derecho tuitivo que garantice, por encima de los demás, las condiciones necesarias para el Desarrollo Integral de su Personalidad Evolutiva atendiendo al concepto de protección integral con un enfoque interdisciplinario más que como simple protección legal, con el cual está comprometida toda la sociedad organizada.

Sabemos que los niños no constituyen grupos de presión social; sin participación en la vida comunitaria porque erróneamente aunque por disposición constitucional, no son considerados "ciudadanos" (Art. 125 C. N.) por razón de la "edad" carecen de poder político, contractual, gremial o sindical, ellos no votan en una elección, no deciden, no pueden actuar por sí mismos, necesitan ser representados por los adultos y es por ello que, la colectividad adulta tiene una responsabilidad que cumplir.

Cuando hablemos de los menores infractores de "conducta irregular" hay también que aceptar que la sociedad donde ellos se desenvuelven es irregular porque no ha sido capaz de proporcionarle una vida regular desde su primer núcleo social (la familia) hasta las esferas más altas de gobierno. La situación del niño refleja la situación de la sociedad. La Protección Integral que plantea la Convención, significa según Edson Seda "... instaurar reglas jurídicas para que todos los ciudadanos individual o colectivamente consideradas, puedan comparar la realidad de los niños y adolescentes, en el hogar, vecindad, calle, escuela, tribunales de justicia, instituciones, viviendas, educación, salud, etc., con la exigencia o eficacia de sus derechos consagrados en la Convención, y comprobar si en cada una de esas situaciones hay un "desvío" que ocurre por el no uso o por uso dañoso de las normas".

Concluimos con unos cuestionamientos: ¿Son las políticas sociales de nuestros pueblos coherentes con la necesidad de este tan vulnerable y débil grupo social, los niños y niñas? ¿A quiénes alcanzan los programas de esas políticas? Sabemos que no todos nuestros niños y adolescentes están incluidos; los excluidos son los que han merecido la calificación de "menores", y de sus conductas y condiciones de vida, hemos llamado "Situaciones Irregulares".

Es el momento del cambio de mentalidad que nos exige la Convención; la reflexión crítica sobre nuestra responsabilidad y la nueva concepción de los Niños y Niñas y Adolescentes para la humanidad.

BIBLIOGRAFÍA

GARCÍA MÉNDEZ, Emilio. Infancia, Adolescencia y Control Social en América Latina. Editorial De Palma, Bs. As. Argentina, 1990.

Citado en La Niñez y Adolescencia en Conflicto con la Ley Penal. Proceso de adecuación de la legislación interna. Experiencia de El Salvador-Ilanud, U. C., 1995.

MENDIZÁBAL OSSES, Luis. Derecho de Menores-Teoría General. Edic. Pirámida, S. A. Madrid, 1977.

TROITIÑO, Esmeralda. Conferencia: Legislación de Menores - MITRABS.

SEDA, Edson. Ley de la Niñez y la Adolescencia-Observación, Comentarios y Sugerencias. Septiembre 1994. Material fotocopiado. Venezuela.

Constitución Nacional de la República de Panamá.

Código de la Familia de la República de Panamá.

Estadísticas del Juzgado Primero Seccional de Menores de Panamá.

ÍNDICE

PONENCIA i

ÍNDICE I

PLENO 1

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LCDO. SATURIO SEGARRA ESQUIVEL EN REPRESENTACIÓN DE LOS SEÑORES VÍCTOR MENDOZA EN SU CONDICIÓN DE REPRESENTANTE LEGAL DE TRANSCOLPILMA, S. A., SR. JULIO LEGUÍA SERRANO, REPRESENTANTE LEGAL DE LA RUTA COLÓN COCOSOLO, S. A., SR. ROBERTO GIONO, REPRESENTANTE LEGAL DE LA RUTA PANAMÁ CENTROAMÉRICA, SR. JOSÉ SANTIZO EN REPRESENTACIÓN DE LA RUTA PORTOBELO Y SR. PABLO RODRÍGUEZ EN REPRESENTACIÓN DE LA RUTA BUENA VISTA, CONTRA LA ORDEN DE NO HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN N° 1 DE 3 DE ENERO DE 1996 Y EL RESUELTO 123R-23 DE 19 DE MARZO DE 1996, AMBAS DICTADAS POR EL DIRECTOR NACIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE DEL MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TRES (3) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 2

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR LA FIRMA FORENSE FRAGUELA-RUÍZ, HOQUEE Y ASOCIADOS, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE FERNANDA JAVIER SKLIAREVSKY GRACIA, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN EL OFICIO N° 398 DE 8 DE MARZO DE 1996, DICTADO POR EL JUEZ SEGUNDO DE LO PENAL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, TRES (3) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). . 3

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LCDO. JACINTO CEREZO GÓNDOLA, EN REPRESENTACIÓN DE FERNANDO HERNÁNDEZ ARIAS, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN N° 10 DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 1995, EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, SIETE (7) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 6

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTO POR INÉS MARÍA FÁBREGA, DELSA LORENA FÁBREGA DE DOWELL Y LUMY FÁBREGA DE ARIAS, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN S/N DE 5 DE MARZO DE 1996, PROFERIDA POR EL PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, OCHO (8) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 7

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LCDO. EDUARDO E. RÍOS MOLINAR, EN REPRESENTACIÓN DE MARIO ENRIQUE GARCERÁN, CONTRA LA ORDEN DE NO HACER CONTENIDA EN EL AUTO DE 19 DE MARZO DE 1996, EXPEDIDO POR LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y DECISIÓN N° 3. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, NUEVE (9) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 8

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTO POR EL LCDO. EDUARDO E. RÍOS MOLINAR, EN REPRESENTACIÓN DE LOURDES CEDEÑO CONTRA LA ORDEN DE NO HACER CONTENIDA EN EL AUTO N° 24-SJ-96 DE 14 DE MARZO DE 1996, DICTADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y BIENESTAR SOCIAL. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, DIEZ (10) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 9

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS HERRERA MORÁN, EN REPRESENTACIÓN DE CHON LEÓN LIAO CHUANG, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN EL AUTO N° 55 DE 12 DE MARZO DE 1996, DICTADO POR EL JUEZ CUARTO DE TRABAJO DE LA PRIMERA SECCIÓN DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, DIEZ (10) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 10

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LCDO. CARLOS G. QUIRÓS A., EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE JULIO CONSTANTINO ANTIPARRA, CONTRA LA ORDEN DE NO HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN JUDICIAL DE 28 DE

FEBRERO DE 1996, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL, CON SEDE EN PENONOMÉ. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, TRECE (13) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 11

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTO POR EL LICENCIADO ROGELIO CRUZ RÍOS EN REPRESENTACIÓN DE JOSÉ CASTRILLÓN HENAO, CONTRA LA ORDEN DE NO HACER EXPEDIDA POR EL FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, CATORCE (14) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 13

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO MARCOS TULIO LONDOÑO A., EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE ROLANDO RODRÍGUEZ CABALLERO, CONTRA LA ORDEN DE NO HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN S/N DE 26 DE MARZO DE 1996, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO, DENTRO DEL PROCESO LABORAL INTERPUESTO POR ROLANDO RODRÍGUEZ CABALLERO, CONTRA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS LÁCTEOS, S. A. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 15

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LCDO. GENARINO ROSAS ROSAS, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR ALFREDO QUIJANO ROYO, EN SU CONDICIÓN DE PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD TOP REAL STATE, INC., CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN S/N DE 16 DE FEBRERO DE 1996, DICTADA POR EL DIRECTOR GENERAL DE TRABAJO. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 17

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LICENCIADO OCTAVIO OCHOA GUILLLÉN, EN REPRESENTACIÓN DE JORGE LUIS PINILLA QUEZADA CONTRA LA ORDEN DE NO HACER PROFERIDA EN LA RESOLUCIÓN DE 24 DE ABRIL DE 1996, DICTADA POR EL JUEZ PRIMERO DEL CIRCUITO DE HERRERA. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 26

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR LA FIRMA FORENSE LUQUE CORONELL Y LAM, EN REPRESENTACIÓN DE TURKI ABUZENNI, EN SU CONDICIÓN DE PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE HOTELERA FLAMINGO, S. A., CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA SENTENCIA DE 28 DE MARZO DE 1996, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 27

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR LA FIRMA VÁSQUEZ & VÁSQUEZ, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE EDWARD WILLIAM ANCHOR BARRY, CONTRA LA ORDEN DE NO HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN DE 14 DE FEBRERO DE 1996, EMITIDA POR EL TRIBUNAL DE APELACIONES Y CONSULTAS DE LO PENAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 27

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LICENCIADO ROLANDO VILLALAZ GUERRA EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL DR. MAURO ZÚÑIGA ARAÚZ EN SU CONDICIÓN DE SECRETARIO GENERAL DE LA ASOCIACIÓN DE MÉDICOS, ODONTÓLOGOS Y PROFESIONALES AFINES DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL (AMOACSS) CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN EL AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA N° 9-96 EMITIDO POR EL DIRECTOR NACIONAL DE COMPRAS Y ABASTOS DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 29

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES CONTRA LA ORDEN DE NO HACER CONTENIDA EN EL AUTO DEL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA EL 22 DE FEBRERO DE 1996. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTE (20) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 30

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LICENCIADO

JAIME PADILLA GONZÁLEZ, EN SU CONDICIÓN DE GESTOR OFICIOSO DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE HOTELERÍA, S. A., CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA NOTA N° 210-73 DE 3 DE MAYO DE 1996, PROFERIDA POR EL JEFE DE AUDITORÍA, A. I. DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y TESORO. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). . . 32

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTO POR LA FIRMA FORENSE GALINDO, ARIAS & LÓPEZ, EN REPRESENTACIÓN DE RITA IRENE TYPALDOS DE OZORES, CONTRA LA ORDEN DE NO HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN N° 578 DE 25 DE MARZO DE 1996, DICTADA POR EL JUEZ SEGUNDO DEL CIRCUITO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL RAMO CIVIL. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). . . 34

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LICENCIADO HÉCTOR A. CÁRDENAS, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE ROBERTO BRANDAO DE GRACIA, CONTRA LA RESOLUCIÓN DE 18 DE ABRIL DE 1996, EXPEDIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL CUARTO DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TREINTA (30) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 35

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LICENCIADO HILARIO BELLIDO, EN REPRESENTACIÓN DE ALBERTO VÍCTOR BTESH, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN N° 03-96- D. D. DE 7 DE FEBRERO DE 1996, DICTADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARRENDAMIENTOS DEL MINISTERIO DE VIVIENDA. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 37

RECURSO DE HABEAS CORPUS 38

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE FÉLIX FRAÑA MOREIRA, CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, DOS (2) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). . . 38

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE DORIS RAMONA MACHADO RUBIDES CONTRA EL FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DOS (2) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 39

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ELIÉCER AIZPURÚA, CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, TRES (3) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). . 42

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JUSTO PASTOR PIMENTEL, CONTRA EL FISCAL ESPECIAL EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, TRES (3) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 42

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JOSÉ RAMIRO FONSECA PALACIOS, A FAVOR DEL CIUDADANO NIVALDO MADRIÑÁN APONTE Y CONTRA EL FISCAL SEGUNDO DE CIRCUITO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TRES (3) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 43

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ARMANDO CHAMORRO PONCE CONTRA EL DIRECTOR NACIONAL DE CORRECCIÓN. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, SEIS (6) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 47

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JOHN JAIRO CRUZ CONTRA EL DIRECTOR DE INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN POLICIAL (D. I. I. P). MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, SEIS (6) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 50

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE PABLO LINARES ASPRILLA CONTRA EL DIRECTOR NACIONAL DE CORRECCIÓN. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, SIETE (7) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 50

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE AIDÉ DUARTE CONTRA EL FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, NUEVE (9) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 52

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JUAN CARLOS LOAIZA STEVENS CONTRA EL DIRECTOR DE CORRECCIÓN. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DIEZ (10) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 54

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE CÉSAR AUGUSTO ORDOÑEZ CONTRA EL FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DIEZ (10) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 55

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE LEINES GARCÍA HURTADO CONTRA EL DIRECTOR NACIONAL DE MIGRACIÓN. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIEZ (10) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 57

RECURSO DE HABEAS CORPUS INTERPUESTO A FAVOR DE JAVIER BAILEY CONTRA EL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE. FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, TRECE (13) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 58

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JUAN ANTONIO TELLO, CLEIDIS SÁEZ Y JOSÉ ISABEL TELLO CONTRA LA FISCAL PRIMERA SUPERIOR DEL CUARTO DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, TRECE (13) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 59

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE MARCOS ANTONIO REYES CONTRA EL FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, TRECE (13) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 62

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JORGE LUIS ZÁRATE SALAZAR CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, TRECE (13) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 63

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE PAOLA TEJADA GARCÍA CONTRA EL FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, CATORCE (14) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 64

HABEAS CORPUS A FAVOR DE ERNESTO HEADLEY CONTRA EL FISCAL SEGUNDO DE CIRCUITO DE COLÓN. MAGISTRADO PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, QUINCE (15) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 67

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE LUIS GABRIEL DUQUE MACHADO CONTRA EL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, QUINCE (15) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 69

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE GRACIELA REAL Y LOYDETH JIRADO DEL REAL CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICÍA NACIONAL. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, QUINCE (15) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 70

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE DANIEL RÍOS SALDAÑA CONTRA EL FISCAL PRIMERO SUPERIOR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, QUINCE (15) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 70

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE EVERTH HINESTROZA ZÚÑIGA CONTRA EL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 71

HABEAS CORPUS A FAVOR DE DANIEL ENRIQUE PRINCE, CONTRA LA FISCAL TERCERA SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 74

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ELVIA ALTAGRACIA DE JESÚS MERCADO O GLADYS ANTONIA ALMONTE GRUÑÓN CONTRA EL DIRECTOR NACIONAL DE MIGRACIÓN Y NATURALIZACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 75

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE LUIS ALBERTO VERGARA VÁSQUEZ CONTRA EL FISCAL OCTAVO DE CIRCUITO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL. MAGISTRADO: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 76

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE RICARDO VICKER JOHNSON RAYMORE Y DARMAN GLORIA RAYMORE DE POCASANGRE CONTRA LA JUEZ CUARTA DE CIRCUITO PENAL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ, APELACIÓN. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 78

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE GENEROSO FIGUEROA ORTIZ, CONTRA EL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 81

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE LAW KEN CONTRA EL DIRECTOR NACIONAL DE MIGRACIÓN Y NATURALIZACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). . . . 81

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS (PREVENTIVO) A FAVOR DE LOICIBER DE PERALTA CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 83

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ABDIEL ALEXIS ALVARADO DÍAZ CONTRA EL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). . . . 85

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE LESDIEL ANTONIO RAMOS CONTRA LA JUEZ SECCIONAL DE MENORES DE LA CHORRERA. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 85

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ROBINSON MORENO PEREA CONTRA EL DIRECTOR NACIONAL DE CORRECCIÓN. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). . . . 87

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE LOU XUE YING CONTRA EL DIRECTOR NACIONAL DE MIGRACIÓN Y NATURALIZACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 88

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ÁLVARO RODRÍGUEZ, JENNY NIETO ROJAS Y JORGE MONTOYA CONTRA EL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 90

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE MARCOS JIMÉNEZ PEDROZA CONTRA EL FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 91

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS INTERPUESTO A FAVOR DE RICAUTER EURÍPIDES SINCLAIR CONTRA EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 93

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE FELIPE CAMARGO AMAYA CONTRA EL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). . . 95

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE LEOBARDO SAMUDIO SANTOS CONTRA EL DIRECTOR NACIONAL DE CORRECCIÓN. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). . . 96

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ROGELIO ROCA BRÍAS Y ERIC ABDIEL TROYA TORRES CONTRA EL FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 98

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ALEJANDRO WHITE LINDO CONTRA EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 101

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE LUIS CARLOS CEDEÑO AVENDAÑO CONTRA EL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 104

HABEAS CORPUS A FAVOR DE MARIO REYNALDO SQUIRE DE LOS RÍOS CONTRA EL MAGISTRADO GUILLERMO MÁRQUEZ AMADO, DEL TRIBUNAL ELECTORAL. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS E. MUÑOZ POPE. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 105

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ISAÍAS AURELIO GAHONA GUTIÉRREZ CONTRA LA JUEZ TERCERA DE CIRCUITO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 106

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE PEDRO PABLO CASTREJÓN CEDEÑO CONTRA LA JUEZ DÉCIMA QUINTA DE CIRCUITO PENAL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 110

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE QUINTÍN CÓRDOBA ESQUIVEL CONTRA EL FISCAL CUARTO SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 111

HABEAS CORPUS A FAVOR DE ROBERTO MAXWELL CONTRA EL DIRECTOR NACIONAL DE CORRECCIÓN. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 114

ACCIÓN DE CORPUS A FAVOR DE RUBÉN ANTONIO SOTO CANDANEDO CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 115

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE BAZZEL EZZI CONTRA EL FISCAL CUARTO DE CIRCUITO DE CHIRIQUÍ. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 116

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS INTERPUESTA A FAVOR DEL SEÑOR FUNG YONG CHING CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 117

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ÁLVARO RODRÍGUEZ, JENNY NIETO ROJAS Y JORGE

MONTOYA CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 117

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JOSÉ A. MIRANDA PEDROZA CONTRA EL FISCAL ESPECIAL EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, TREINTA (30) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 118

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE EDWIN ANTONIO VALLEJOS CONTRA EL FISCAL PRIMERO DEL TERCER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ, LA CHORRERA. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, TREINTA (30) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 121

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JORBI ORIEL CERRUD NAVARRO CONTRA EL FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. PANAMÁ, TREINTA (30) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. 123

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE EDILBERTO VÁSQUEZ CONTRA EL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TREINTA (30) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 125

HABEAS CORPUS A FAVOR DE ALCIBIADES MESÚA CONTRA EL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 126

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD 127

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR LA FIRMA FORENSE MORENO & FÁBREGA CONTRA LA FRASE "POR EL TÉRMINO DE CINCO DÍAS" CONTENIDA EN EL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 1250 DEL CÓDIGO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TRES (3) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 127

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR EL LICENCIADO NELSON BARRAGÁN GONZÁLEZ CONTRA EL ARTÍCULO 968, NUMERAL 2, DEL CÓDIGO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, SEIS (6) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 129

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR EL LICENCIADO ERIC SIERRA GONZÁLEZ, CONTRA EL ARTÍCULO 2410 DEL CÓDIGO JUDICIAL, DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A RAMÓN FERNÁNDEZ Y EUGENIA LORENZO, SINDICADOS POR DELITO CONTRA EL PATRIMONIO EN PERJUICIO DEL ALMACÉN "EL MACHETAZO". MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, NUEVE (9) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 130

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR EL LICENCIADO ERIC SIERRA GONZÁLEZ, EN REPRESENTACIÓN DE EUGENIA LORENZO Y RAMÓN FERNÁNDEZ, CONTRA LA RESOLUCIÓN DE 1° DE FEBRERO DE 1996, PROFERIDA POR EL JUZGADO OCTAVO DE CIRCUITO DE LO PENAL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ, DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO POR DELITO CONTRA EL PATRIMONIO EN PERJUICIO DEL ALMACÉN "EL MACHETAZO, S. A." MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, NUEVE (9) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 131

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR ARROCHA, BLANDÓN, CASTRO & YOUNG, EN REPRESENTACIÓN DE MARCO A. AMEGLIO S., CONTRA FRASE "Y DEROGA LOS DECRETOS EJECUTIVOS N° 14 DE 1992, N° 196 DE 1993 Y EL N° 356 DE 1994" CONTENIDA EN EL ART. 34 DE LEY N° 31 DE 30/12/1994, "POR LA CUAL SE MODIFICAN LOS ARTS. C. FISCAL SOBRE CONTRATACIÓN PÚBLICA, Y SE ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES". MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, TRECE (13) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). . . . 132

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR SAMUEL GRIMES, LETICIA HENRY,

VIRGILIO MORRIS Y OTROS EX-EMPLEADOS DE LA OFICINA DE MANTENIMIENTO VIAL Y ESTRUCTURAS PÚBLICAS EN EL ÁREA DEL CANAL (OMVEPAC) CONTRA LOS DECRETOS N° 137 DE 16 DE ABRIL DE 1990 Y N° 104 DE 9 DE MARZO DE 1990 DICTADOS POR EL EX-PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, GUILLERMO ENDARA GALIMANY Y EL RESUELTO N° 169 DE 16 DE MAYO DE 1990 SUSCRITO POR EL EX-MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES, JULIO E. LINARES (Q. E. P. D.) MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 137

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR EL LICENCIADO RUBÉN MONCADA LUNA EN REPRESENTACIÓN DE JEANE JOHNSON JUSTINIANI EN CONTRA DEL DECRETO EJECUTIVO N° 133 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 1994. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 140

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR EL LICENCIADO ENRIQUE OMAR PITTÍ, EN REPRESENTACIÓN DE DIAMANTIS PAPADIMITRIU, CONTRA EL ARTÍCULO 2022 DEL CÓDIGO JUDICIAL, DENTRO DE LA ACUSACIÓN PARTICULAR PROPUESTA POR DIAMANTIS PAPADIMITRIU CONTRA CONSTANTINO LEKAS, THELMA ROBERTSON Y MANUEL GAURILIDIS. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 141

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR LA LCDA. MABEL DEL C. ATENCIO, EN REPRESENTACIÓN DE JAIME PADILLA GONZÁLEZ, EN SU CONDICIÓN DE PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE HOTELERÍA, S. A., CONTRA EL ARTÍCULO 11 DE LA LEY N° 76 DE 22 DE DICIEMBRE DE 1976, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 36 DE LA LEY 31 DE 30 DE DICIEMBRE DE 1991. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 143

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR EL LICENCIADO EDUARDO E. RÍOS MOLINAR, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE JOSÉ DEL ROSARIO MUÑOZ, CONTRA LA SENTENCIA DE 30 DE MAYO DE 1995, PROFERIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 144

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR LA LICENCIADA MARIBLANCA STAFF WILSON CONTRA LA FRASE "ABANDONASE" CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 494 DEL CÓDIGO DE LA FAMILIA. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 145

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR LA LICENCIADA MARIBLANCA STAFF WILSON EN CONTRA DEL ARTÍCULO 480 DEL CÓDIGO DE LA FAMILIA. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 149

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR LA FIRMA DE ABOGADOS TRONCOSO, LACAYO & PORRAS EN REPRESENTACIÓN DE ÍTALO ROJAS DE LEÓN EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD CÁMARA NACIONAL DE RADIO EN CONTRA DE LOS ARTÍCULOS 19, 21, 77, 90, 109, 122, 124, y 134 DE LA LEY 15 DE 8 DE AGOSTO DE 1994. DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS. (SOLICITUD DE ACLARACIÓN DE SENTENCIA). MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 153

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR EL LICENCIADO JUAN CARLOS HENRÍQUEZ CANO EN REPRESENTACIÓN DE EYDER CASASOLA DOMINGO Y EN CONTRA DE LOS ARTÍCULOS 59, 105, 328, 330 Y 807 DE LA LEY N° 3 DEL 17 DE MAYO DE 1994 (CÓDIGO DE LA FAMILIA). MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 155

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADO POR MORGAN & MORGAN CONTRA LA RESOLUCIÓN JD-N° 016-94 EXPEDIDA POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, TREINTA (30) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS

(1996). 162

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR LA FIRMA FORENSE SUCRE, ARIAS, CASTRO Y REYES, CONTRA EL ARTÍCULO 1150 DEL CÓDIGO JUDICIAL. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TREINTA (30) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). . . 167

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR LA FIRMA FORENSE RIVERA Y BOLÍVAR EN CONTRA DE LA SENTENCIA SD-180 DEL 2 DE NOVIEMBRE DE 1994, EXPEDIDA POR EL JUZGADO PRIMERO DEL CIRCUITO DE LO PENAL DEL TERCER CIRCUITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 170

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR EL LICENCIADO SAMUEL QUINTERO MARTÍNEZ, EN SU PROPIO NOMBRE Y REPRESENTACIÓN, CONTRA LOS NUMERALES 3 Y 4 DEL ARTÍCULO 217 DE LA LEY N° 3 DEL 17 DE MAYO DE 1994. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 172

TRIBUNAL DE INSTANCIA 176

PROCESO DISCIPLINARIO SEGUIDO CONTRA EL LICENCIADO RUBÉN E. PECCHIO OSPINO, DEFENSOR DE OFICIO CIRCUITAL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL, EN VIRTUD DE RESOLUCIÓN DE 4 DE MARZO DE 1996, DICTADA POR LA SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DOS (2) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 176

CALIFICACIÓN DE IMPEDIMENTO DENTRO DE LA ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LICDO. ROLANDO VILLALAZ GUERRA, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL DR. MAURO ZÚÑIGA ARAÚZ, EN SU CONDICIÓN DE SECRETARIO GENERAL DE LA ASOCIACIÓN DE MÉDICOS, ODONTÓLOGOS Y PROFESIONALES AFINES DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL (AMOACSS), CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN EL AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA N° 9-96, EMITIDO POR EL DIRECTOR NACIONAL DE COMPRAS Y ABASTOS DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, SEIS (6) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 181

RECURSO DE HECHO INTERPUESTO POR EL FISCAL PRIMERO DE CIRCUITO DE COLÓN, CONTRA RESOLUCIÓN DE 18 DE ENERO DE 1996, DICTADA POR EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, DENTRO DE LA ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE MOISÉS DAVID MIZRACHI E IDA DOMÍNGUEZ. MAGISTRADO PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, NUEVE (9) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 182

IMPEDIMENTO EN LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR LA LICDA. MARIBLANCA STAFF WILSON CONTRA LA FRASE "ABANDONASE" CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 494 DEL CÓDIGO DE LA FAMILIA. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, NUEVE (9) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 185

MANIFESTACIÓN DE IMPEDIMENTO DEL MAGISTRADO JUAN ANTONIO TEJADA MORA EN LA ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LCDO. LUIS CARLOS CEDEÑO, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE CARLOS ALFREDO LÓPEZ GUEVARA, CONTRA LAS ORDENES DE HACER CONTENIDAS EN LOS AUTOS N° 3992 DE 19 DE DICIEMBRE DE 1995, Y N° 4036, DE 26 DE DICIEMBRE DE 1995, AMBOS EXPEDIDOS POR EL JUEZ TERCERO DE CIRCUITO DE LO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, DIEZ (10) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 186

MANIFESTACIÓN DE IMPEDIMENTO DE LA MAGISTRADA AURA E. GUERRA DE VILLALAZ DENTRO DE LA ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR LA LCDA. MABEL DEL C. ATENCIO EN REPRESENTACIÓN DE JAIME PADILLA BELIZ, CONTRA LOS ARTÍCULOS 1230 Y 1235 DEL CÓDIGO FISCAL. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, QUINCE (15) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 187

MANIFESTACIÓN DE IMPEDIMENTO DE LA MAGISTRADA AURA E. GUERRA DE VILLALAZ DENTRO DE LA DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR LA LICENCIADA MARIBLANCA STAFF EN CONTRA DE UNA FRASE CONTENIDA EN LA PARTE FINAL DEL NUMERAL 6 DEL ARTÍCULO 212 DEL CÓDIGO DE LA FAMILIA. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 188

MANIFESTACIÓN DE IMPEDIMENTO DENTRO DEL INCIDENTE DE RECUSACIÓN, DENUNCIA DE FALTA A LA ÉTICA JUDICIAL Y VIOLACIÓN DE LOS DEBERES, RESPONSABILIDAD Y FACULTADES DE LOS MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL, DENTRO DEL PROCESO MENDIZÁBAL-FALCONETT. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 189

SALA PRIMERA DE LO CIVIL 191

ACLARACIÓN DE SENTENCIA 192

ACLARACIÓN DE SENTENCIA: SUCESIÓN TESTAMENTARIA DE RODRIGO ALVARADO SANGUINETTI (Q. E. P. D.) RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO SUMARIO QUE LE SIGUE RODRIGO OCTAVIO ALVARADO RÍOS. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 192

APELACIÓN EN PROCESO MARÍTIMO 192

EZCONY INTERNATIONAL CORP., ASSICURAZIONI GENERALI, S. P. A. Y ASEGURADORA MUNDIAL DE PANAMÁ, S. A. APELAN CONTRA LA RESOLUCIÓN DE FECHA 17 DE MAYO DE 1995, PROFERIDA POR EL TRIBUNAL MARÍTIMO EN EL PROCESO ORDINARIO (ACUMULADOS) QUE EZCONY INTERNATIONAL CORP. LE SIGUE A ASSICURAZIONI GENERALI, S. P. A. Y ASEGURADORA MUNDIAL DE PANAMÁ, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 192

RECURSO DE CASACIÓN CIVIL 201

LAS FUENTES TENIS CLUB, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE INGENIERÍA AGRIOYANIS, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, DOS DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). . . . 201

CARLOS AMEGLIO MONCADA Y CARMEN ELENA RODRÍGUEZ DE AMEGLIO O CARMEN ELENA RODRÍGUEZ RECURREN EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUEN A KONINKLIJK LUCHTVAAR MAATSCHAPPIJ N. V. (HOLANDÉS); K. L. M. COMPAÑÍA REAL HOLANDESA DE AVIACIÓN, S. A. (ESPAÑOL). MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, SIETE (7) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 203

MÉLIDA OSORIO CASTRO Y MARÍA DE LA CRUZ OSORIO CASTRO RECURREN EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE LUZMILA ULLOA. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, SIETE (7) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 208

BANCO CAFETERO PANAMÁ, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE BANCO EXTERIOR DE LOS ANDES Y DE ESPAÑA, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, SIETE (7) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 210

BOLÍVAR RACINES PEARCE Y JAVIER BOLÍVAR RACINES PEARCE RECURREN EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUEN A COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE SEGUROS, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, OCHO (8) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 211

ROGELIO BUITRAGO RAMOS RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ESPECIAL DE PAGO POR CONSIGNACIÓN PRESENTADA POR ASENTAMIENTO CAMPESINO 11 DE OCTUBRE A FAVOR DE ROGELIO BUITRAGO RAMOS. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, CATORCE (14) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

. 213

CREDIT LIBANAIS, S. A. L. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE CINCINNATI HOLDING, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, CATORCE (14) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 213

LIZDO, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL INCIDENTE DE LEVANTAMIENTO DE SECUESTRO INCOADO POR MANUEL CORONADO, MIGUEL MARTÍNEZ, ENRIQUE CHONG, JOSÉ SALAZAR VÁSQUEZ, MIGUEL ESCOBAR Y RAÚL MENDOZA CONTRA DESARROLLO AGROPECUARIO, S. A. Y JORGE HEALY DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO QUE LIZDO, S. A. LE SIGUE A DESARROLLO AGROPECUARIO, S. A. Y/O JORGE HEALY. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 216

JORGE ENRIQUE RUIDÍAZ PLATAÑIOTIS RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO SUMARIO QUE LE SIGUE A ANDES TRADING COMPANY. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 220

DORADO INVESTMENT REAL STATE, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A DESARROLLO EL DORADO, S. A. Y CONDOMINIO EL DORADO. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 222

ANTONIO FLORES RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE ABEL PITTÍ CONCEPCIÓN. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). . 229

RUTH HYACINTH THOMPSON RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO DE DIVORCIO QUE LE SIGUE JAMES HILARY APOLLO MINOTT. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 235

PAULINO ABADÍA CAJAR RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A COMPAÑÍA DE MARISCOS ISLAS DE LAS PERLAS, S. A. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 236

LUIS ERNESTO HERRERA MOJICA RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A CHÁVEZ, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 237

JAIME OBREGÓN ORTEGA RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE VIRCA, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 242

LUIS ALBERTO ESPINOZA RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO DE OPOSICIÓN A TÍTULO QUE LE SIGUE DORILA ESPINOZA DE RODRÍGUEZ. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 243

MICHAEL CARUSO & CO., INC. RECURRE EN CASACIÓN DENTRO DE LA SOLICITUD DE LEVANTAMIENTO DE SECUESTRO CON SOLICITUD DE ENTREGA DE CAUCIÓN PRESENTADA EN LA ACCIÓN DE SECUESTRO PROPUESTA POR MICHAEL CARUSO & CO., INC. CONTRA LA SOCIEDAD ALDO ROSSINI, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 248

CARLOS PAREJA RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE AIR PANAMÁ INTERNATIONAL, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). . 252

FINANZA, CONTADURÍA Y COBRANZA RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO SUMARIO QUE LE SIGUE CÉSAR AUGUSTO ACHÓN BALLESTEROS. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS

(1996). 255

AGROPECUARIA COMERCIAL, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A PORCINOCULTORES UNIDOS DE AZUERO, S. A. Y PRODUCTORES ASOCIADOS, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 259

DENIS LAWRENCE GILL, MARÍA DEL CARMEN VANZILLOTA DE GONZÁLEZ Y OSCAR ALEJANDRO GONZÁLEZ RECURREN EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO DECLARATIVO QUE LE SIGUE DENIS LAWRENCE GILL A MARÍA DEL CARMEN VANZILLOTA DE GONZÁLEZ Y OSCAR ALEJANDRO GONZÁLEZ. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). . 260

ANA VICTORIA POSSE DE VALLARINO RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO DE SUCESIÓN TESTAMENTARIA DE LOUIS MARTINZ ANDERSEN. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 267

ARTEMIO JAÉN V., DANILO MEDINA, MIGUEL GIRÓN, RAMIRO VERGARA Y CARLOS RÍOS RECURREN EN CASACIÓN EN EL PROCESO SUMARIO QUE LE SIGUEN A ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES PARA LA EXPORTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN, S. A. (A. P. E. C. S. A.). MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 268

RAMÓN JUÁREZ ACHURRA RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A ELEUTERIO RAMOS. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 269

LUIS ROGELIO ESQUINA RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO SUMARIO DE LIQUIDACIÓN DE CONDENA EN ABSTRACTO INCOADO POR LUIS ROGELIO ESQUINA CONTRA SERVICIOS TURÍSTICOS PANAMEÑOS, S. A. (EN ESPAÑOL) Y PANAMENIAN TOURIST SERVICE, INC. (EN INGLÉS) Y COMERCIALMENTE NATIONAL CAR RENTAL. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 270

HANESHER HOLDING, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A BANCO ALEMÁN PANAMEÑO, S. A. E IBERO AMÉRICA, A. G. (AHORA) BANCO ALEMÁN PLATINA, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 271

JUSTINO ACEVEDO VÁSQUEZ RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A JOSÉ ÁLVAREZ PÉREZ. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 272

ALBERTO SÁNCHEZ, EFRAÍN ALCIDES CORREA Y JOSÉ A. ISAZA RECURREN EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO PROPUESTO POR AGRO GANADERÍA SANTA FE, S. A. CONTRA MUNICIPIO DE TABOGA, ALBERTO SÁNCHEZ, EFRAÍN ALCIDES CORREA Y JOSÉ A. ISAZA. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 274

INSTITUTO DE RECURSOS HIDRÁULICOS Y ELECTRIFICACIÓN (I. R. H. E.) RECURRE EN CASACIÓN EN EL INCIDENTE DE NULIDAD PROPUESTO POR AMÉRICA TORRALBO GARCÍA, NUMILA TORRALBO GARCÍA Y OTROS DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO QUE LES SIGUE EL INSTITUTO DE RECURSOS HIDRÁULICOS Y ELECTRIFICACIÓN (I. R. H. E.). MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, TREINTA (30) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 274

RECURSO DE HECHO 276

EL LICENCIADO SANTANDER TRISTÁN DONOSO INTERPONE RECURSO DE HECHO CONTRA LA RESOLUCIÓN DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 1995, DICTADA POR EL PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL PROCESO SUMARIO DE INTERDICTO POSESORIO DE PERTURBACIÓN INTERPUESTO POR COLÓN INTERNACIONAL, S. A. CONTRA JORGE ALLEN, TOMÁS ROWE, BALTAZAR BETEGÓN Y OTROS. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 276

IMPEDIMENTO 277

MANIFESTACIÓN DE IMPEDIMENTO PRESENTADA POR EL JUEZ DEL TRIBUNAL MARÍTIMO DE PANAMÁ, INC., LICENCIADO ÁLVARO CABAL EN EL PROCESO ORDINARIO DECLARATIVO QUE INVERSIONES PESQUEROS DE PANAMÁ, S. A. LE SIGUE A YOEMI BEYSI RODRÍGUEZ. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 277

MANIFESTACIÓN DE IMPEDIMENTO DEL MAGISTRADO RAFAEL A. GONZÁLEZ, EN EL RECURSO DE HECHO INTERPUESTA POR EL LICDO. EDUARDO ESCOBAR DÍAZ EN CONTRA LA RESOLUCIÓN DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 1995, EMITIDA POR EL PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL PROCESO ORDINARIO DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO INTERPUESTA POR MENITZA CAJAR SIERRA CONTRA COMPAÑÍA BITE CORP. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 278

SALA SEGUNDA DE LO PENAL 280

ACUSACIÓN PARTICULAR 281

ACUSACIÓN PARTICULAR INTERPUESTA POR MARITZA GISELA MONTENEGRO CONTRA ERNESTO MUÑOZ GAMBOA, POR LA SUPUESTA COMISIÓN DE DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 281

ACUSACIÓN PARTICULAR PRESENTADA POR EL LCDO. RIGOBERTO VERGARA DENTRO DE LA QUEJA PRESENTADA POR MARITZA GISELA MONTENEGRO CONTRA EL LCDO. ERNESTO MUÑOZ GAMBOA, POR SUPUESTOS DELITOS CONTRA EL HONOR. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 282

AUTO APELADO 284

PROCESO SEGUIDO A PLINIO CEDEÑO VILLAMONTE POR EL DELITO DE HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA, EN PERJUICIO DE EVA MARÍA SANTOS. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, NUEVE (9) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 284

AUTO DE ENJUICIAMIENTO APELADO 286

APELACIÓN DEL AUTO DE LLAMAMIENTO A JUICIO EN LAS SUMARIAS SEGUIDAS A RODOLFO BONILLA SÁNCHEZ Y JAIME RAÚL GONZÁLEZ DELGADO POR LOS DELITOS DE HOMICIDIO Y ROBO EN PERJUICIO DE ROSAURA CAMPOS Y JOSÉ DE LA CRUZ OJO CRUZ. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, TRECE (13) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 286

APELACIÓN DEL AUTO DE LLAMAMIENTO A JUICIO, DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A DOMINGO LUIS CHÁVEZ MELÉNDEZ, POR DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE VÍCTOR CHÁVEZ. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS E. MUÑOZ POPE. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 294

AUTO CONSULTADO 296

JUICIO SEGUIDO A CLAUDINO MORALES VILLARREAL, POR DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE MANUEL ASPEDILLA MURILLO, Y DE LESIONES PERSONALES EN PERJUICIO DE LUIS DÍAZ SIERRA. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 296

RECURSO DE CASACIÓN PENAL 299

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A JUAN ANTONIO ESKILDSEN, SINDICADO POR EL DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE MAYO DE MIL

NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 299

RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A FELIPE HENRÍQUEZ REVILLA, POR DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 301

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A ENRIQUE MATA ZÚÑIGA Y OTROS, SINDICADOS POR EL DELITO DE SECUESTRO EN PERJUICIO DE JULY DE WATSON Y JOSÉ AGUILAR. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 302

RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A CALAZANCIO GONZÁLEZ CHÁVEZ, POR DELITO CONTRA LA VIDA E INTEGRIDAD PERSONAL, EN PERJUICIO DE REYES GONZÁLEZ BENÍTEZ. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, TREINTA (30) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 307

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL JUICIO SEGUIDO A NICOMEDES CHANIS ARCIA, SINDICADO POR EL DELITO DE VENTA ILÍCITA DE DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, TREINTA (30) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 308

CONFLICTO DE COMPETENCIA 309

CONFLICTO DE COMPETENCIA DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A RODOLFO RAMIRO ZEPEDA JARQUÍN, NOEL ENRIQUE CORALES, ROLANDO VALENTÍN CARRANZA MEJÍA Y OTROS, POR LA SUPUESTA COMISIÓN DE DELITOS CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, SEIS (6) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 309

IMPEDIMENTO 310

MANIFESTACIÓN DE IMPEDIMENTO DE LA MAGISTRADA AURA E. GUERRA DE VILLALAZ DENTRO DEL CUADERNO QUE CONTIENE LA RESOLUCIÓN DE 19/ABRIL/1996, QUE RECHAZA DE PLANO, INCIDENTE DE NULIDAD CONTRA PROCESO DE EXTRADICIÓN QUE SE SIGUE A ALFREDO LÓPEZ, REQUERIDO POR LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA POR LA COMISIÓN DE DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, SIETE (7) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 311

QUEJA 311

QUERELLA PRESENTADA POR MARITZA GISELA MONTENEGRO, CONTRA ERNESTO MUÑOZ GAMBOA, DIRECTOR NACIONAL DEL INSTITUTO DE DEFENSORÍA DE OFICIO, POR LA SUPUESTA COMISIÓN DE DELITOS CONTRA EL HONOR. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 311

RECURSO DE RECONSIDERACIÓN 316

RECURSO DE RECONSIDERACIÓN CONTRA RESOLUCIÓN DE 19/ABRIL/1996, DE LA SALA PENAL, CORTE SUPREMA, QUE RECHAZA DE PLANO INCIDENTE DE NULIDAD INTERPUESTO EN EL PROCESO DE EXTRADICIÓN SEGUIDO A ALFREDO LÓPEZ, REQUERIDO EN ESTADOS UNIDOS POR LA COMISIÓN DE DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, QUINCE (15) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 316

RECURSO DE HECHO 318

RECURSO DE HECHO DENTRO DE LA ACUSACIÓN PARTICULAR PROPUESTA EN CONTRA DE CRISTÓBAL DELGADO Y OTROS POR PRESUNTA COMISIÓN DE DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO Y CONTRA LA SEGURIDAD COLECTIVA. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 318

RECURSO DE REVISIÓN 320

RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO POR EL LICENCIADO EDUARDO BADILLO PAZ A FAVOR DE DALYS OGLIVIES, SINDICADA POR EL DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA (TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS). MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, DOS (2) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 320

RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A AGUSTÍN PALMA ESPINOSA, SINDICADO POR EL DELITO DE ROBO EN PERJUICIO DEL BANCO EXTERIOR. MAGISTRADO PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, SEIS (6) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 321

SOLICITUD PARA QUE SE COMPULSEN LAS COPIAS QUE SEAN NECESARIAS PARA LA INVESTIGACIÓN QUE SE RECOMIENDA EN LA RESOLUCIÓN DE 26 DE JULIO DE 1995, EMITIDA POR LA SALA SEGUNDA DE LO PENAL, DONDE NIEGA EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN, DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A CANCIO M. CIACCI TASÓN Y OTROS, POR EL SUPUESTO HOMICIDIO DEL MENOR MARCOS ALBERTO RODRÍGUEZ JUSTINE. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, NUEVE (9) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996) 323

RECURSO DE REVISIÓN PRESENTADO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A BERTO AZAEL MOSQUERA PALACIOS, SINDICADO POR EL DELITO DE FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO PÚBLICO. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, TRECE (13) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 324

RECURSO DE REVISIÓN DENTRO DEL JUICIO SEGUIDO A JORGE ARIEL LACAYO, CONDENADO POR EL DELITO DE ROBO. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). . 326

RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A SALVADOR VÁSQUEZ GÓMEZ, POR EL DELITO CONTRA LA SALUD PUBLICA. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 326

RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO POR REYNALDO CABALLEROS ELÍAS DENTRO DEL PROCESO QUE SE LE SIGUE POR DELITO DE POSESIÓN ILÍCITA DE DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 327

SENTENCIA APELADA 328

APELACIÓN DE SENTENCIA CONDENATORIA, DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A PATRICIA BEDOYA BARRIGÓN Y OMAR PURRUTIA PINILLA WHITE PHILLIPS, POR DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE SERGIO FERNÁNDEZ AROSEMENA. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS E. MUÑOZ POPE. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 329

JUICIO CONTRA JOSÉ JOEL BEITÍA ELIZONDRO, SINDICADO POR HOMICIDIO EN PERJUICIO DE SU MENOR HIJA JOSELÍN BEITÍA ESCOBAR Y LESIONES PERSONALES EN PERJUICIO DE FULVIA ESCOBAR GÓMEZ. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS E. MUÑOZ POPE. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 331

PROCESOS SEGUIDOS A LUIS ANTONIO SÁNCHEZ MENDOZA Y CELSO ELOY GÓMEZ, SINDICADOS POR LOS DELITOS DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE AXIS BERNAL ESTRADA Y DE LESIONES EN PERJUICIO DE AXIS BERNAL (PADRE). MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, TREINTA (30) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 333

TRIBUNAL DE INSTANCIA 336

SUMARIAS EN AVERIGUACIÓN DEL ACCIDENTE AUTOMOVILÍSTICO, EN COLISIÓN OCURRIDA ENTRE JUAN CARLOS CEDEÑO BETHANCOURT Y LA MAGISTRADA SANDRA HUERTAS DE ICAZA. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, TRECE (13) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 336

JUICIO SEGUIDO A ALBERTO ANTONIO GONZÁLEZ RAMOS, SINDICADO POR EL DELITO DE HOMICIDIO CALIFICADO COMETIDO EN PERJUICIO DE LEONARDO CAMPOS CRUZ. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, TREINTA (30) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 338

TRIBUNAL DE INSTANCIA 339

SUMARIAS SEGUIDAS A ERNESTO MUÑOZ GAMBOA, IMPUTADO POR EL DELITO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, SEGÚN DENUNCIA SUSCRITA POR MARITZA GISELA MONTENEGRO MONTENEGRO. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 340

SALA TERCERA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 343

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN 344

DEMANDA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO DOMINGO SANTIZO EN REPRESENTACIÓN DE ROSARIO MARTÍNEZ , PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL EL DECRETO N° 3 DE 1° DE JUNIO DE 1995, EXPEDIDO POR EL PRESIDENTE DEL PATRONATO DEL CENTRO VOCACIONAL "BASILIO LAKAS" Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, SEIS (6) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 344

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. ADEMIR MONTENEGRO, EN REPRESENTACIÓN DE ADELA C. DE CARDOZE, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 4/95 DE 17 DE MARZO DE 1995, DICTADA POR LA COMISIÓN NACIONAL DE BOLOS DE PANAMÁ, LOS ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, SEIS (6) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 345

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. FELIPE C. RANGEL, EN SU PROPIO NOMBRE Y REPRESENTACIÓN, PARA QUE SE DECLAREN NULAS POR ILEGALES, LA RESOLUCIÓN N° 13004-86 DE 1° DE OCTUBRE DE 1986, EMITIDA POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, Y LAS RESOLUCIONES N° 1025-95 J. D. DE 23 DE MARZO DE 1995 Y LA RESOLUCIÓN DE 9 DE AGOSTO DE 1995, EMITIDAS POR LA JUNTA DIRECTIVA DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, SEIS (6) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 346

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA MORENO Y FÁBREGA, EN REPRESENTACIÓN DE JACSI PANAMÁ, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 4961-93 SUB. D. G. DE 29 DE JULIO DE 1993, PROFERIDA POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, NUEVE (9) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 347

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA FORENSE AROSEMENA Y DÍAZ, EN REPRESENTACIÓN DE INMOBILIARIA TU HOGAR, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 6281-94-SUB-D. G. DE 20 DE MAYO DE 1994, EXPEDIDA POR EL SUBDIRECTOR GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, ACTOS CONFIRMATORIOS. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DIEZ (10) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 350

DEMANDA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL DR. NORBERTO CASTILLO, EN REPRESENTACIÓN DE VELKYS YARIELA SANTAMARÍA MARTÍNEZ, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL DECRETO EJECUTIVO N° 204 DE 14 DE AGOSTO DE 1995, EMITIDO POR EL ÓRGANO EJECUTIVO, POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DIEZ (10) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 357

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA ICAZA, GONZÁLEZ-RUIZ Y ALEMÁN, EN REPRESENTACIÓN DE DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S. A. PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 213-4271 DE 5 DE MAYO DE 1994, EXPEDIDA POR LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE INGRESOS DE LA PROVINCIA DE PANAMÁ, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, TRECE (13) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). . . . 359

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO MIGUEL BATISTA GUERRA, EN REPRESENTACIÓN DE ELVIRA ISABEL PINEDA, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 242-93 DE 1° DE NOVIEMBRE DE 1993, EMITIDA POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, TRECE (13) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). . . . 366

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA FORENSE SOLÍS, ENDARA, DELGADO Y GUEVARA, EN REPRESENTACIÓN DE POLAR FRIGORÍFICO, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 4964-93-SUB-D. G. DE 29 DE JULIO DE 1993, EMITIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, CATORCE (14) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 371

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL DR. DONALDO SOUSA GUEVARA, EN REPRESENTACIÓN DE ELVIA SUIRA CASTILLO, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 5135 DE 7 DE JULIO DE 1995, EMITIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CAJA DEL SEGURO SOCIAL, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA: PANAMÁ, CATORCE (14) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 375

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO GUSTAVO H. VILLALAZ-ISAZA EN REPRESENTACIÓN DE FELICIO SOLÍS VARGAS, PARA QUE DECLARE NULO POR ILEGAL EL DECRETO N° 017 DRH DE 12 DE ENERO DE 1996, DICTADO POR EL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, EL ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, CATORCE (14) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 376

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA TROYANO, VISUETTI Y VILLALAZ, EN REPRESENTACIÓN DE AMÍLCAR SÁNCHEZ ELIZONDRO, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 33-94 DE 18 DE MAYO DE 1994, EMITIDA POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, QUINCE (15) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 377

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA PITTY Y ASOCIADOS, EN REPRESENTACIÓN DE NIKOS II, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 603-04-225-ALCN DE 15 DE JULIO DE 1994, DICTADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSULAR Y DE NAVES DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y TESORO, ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). . 378

DEMANDA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA INTERPUESTA POR EL LICENCIADO DALBER FERNÁNDEZ, EN REPRESENTACIÓN DE HUDSON TAPIA, PARA QUE SE CONDENE AL ESTADO PANAMEÑO AL PAGO DE SEIS MILLONES DE DÓLARES (B/.6.000.000.00), EN CONCEPTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS MATERIALES Y EMERGENTES POR LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DE LA DESAPARICIÓN DE LA MOTONAVE DIANA IV. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). . 384

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL

LICDO. HUMBERTO A. COLLADO, EN REPRESENTACIÓN DE ESPERANZA ATENCIO DE GARRIDO, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL ACUERDO N° 18 DE 9 DE JUNIO DE 1993, EMITIDO POR EL CONSEJO MUNICIPAL DE CHITRÉ, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTE (20) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 385

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. RAMÓN ANDRADE, EN REPRESENTACIÓN DE SEBASTIÁN ARDINES, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL LA RESOLUCIÓN N° 14 DE 5 DE DICIEMBRE DE 1995, DICTADA POR LOS FISCALES DEL CIRCUITO JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE COLÓN. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTE (20) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 390

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICDO. ABDIEL GONZÁLEZ, EN REPRESENTACIÓN DE JOSÉ ALBERTO REMÓN, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 72-95 DE 3 DE JULIO DE 1995, EMITIDA POR EL MINISTRO DE VIVIENDA, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTE (20) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 391

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA SOLÍS, ENDARA Y DELGADO, EN REPRESENTACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS FARMACÉUTICOS ECONÓMICOS, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 4968-93 SUB. D. G. DE 29 DE JULIO DE 1993, PROFERIDA POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTE (20) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 392

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA CHAVARRÍA, RODRÍGUEZ Y SÁNCHEZ, EN REPRESENTACIÓN DE JULIO ALBERTO CASTILLO, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 94 DE 5 DE MARZO DE 1993, PROFERIDA POR EL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS.PANAMÁ, VEINTE (20) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 396

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA RIVERA, BOLÍVAR Y CASTAÑEDAS, EN REPRESENTACIÓN DE TARJETA DE CRÉDITO ESTRELLAMAR, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 213-060 DE 7 DE FEBRERO DE 1994, EXPEDIDA POR LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE INGRESOS DE LA PROVINCIA DE PANAMÁ, ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTE (20) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 397

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO DIONISIO RODRÍGUEZ BERNAL, EN REPRESENTACIÓN DE PORFIRIO ARGUETA, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 30 DE 3 DE JULIO DE 1995, EMITIDA POR EL DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTE (20) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 398

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL DR. JAVIER CASTILLO G. EN REPRESENTACIÓN DE KIA PANAMÁ, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° DN-41-2-95 EMITIDA POR EL DIRECTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INAFORP). MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 404

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA GALINDO, ARIAS Y LÓPEZ, EN REPRESENTACIÓN DE ESTELA DE CABALLERO Y OTROS, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA NOTA N° D. G. N° 209-94 DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 1994, EMITIDA POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA CAJA DE

SEGURO SOCIAL, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 405

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA MORENO Y FÁBREGA, EN REPRESENTACIÓN DE POSTENLOSA, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 4847-93-SUB. D. G. DE 7 DE JUNIO DE 1993, EMITIDA POR LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 409

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA RIVERA, BOLÍVAR Y CASTAÑEDA EN REPRESENTACIÓN DE AEROLÍNEAS PACÍFICO ATLÁNTICO, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL COBRO CONTENIDO EN LA FACTURA N° 36876 DE 19 DE JUNIO DE 1995, EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN DE AERONÁUTICA CIVIL, ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 412

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTO POR EL LICENCIADO FELIPE RANGEL, EN REPRESENTACIÓN PROPIA, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 13004-86 DE 1° DE OCTUBRE DE 1986, EMITIDA POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS DE LA CAJA DEL SEGURO SOCIAL, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 413

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. CARLOS J. GEORGE, EN REPRESENTACIÓN DE ALEXIS COBOS MORÁN, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL ACTO ADMINISTRATIVO CONTENIDO EN LA NOTA N° 120-44-84 DE 30 DE OCTUBRE DE 1984, SUSCRITA POR EL GERENTE GENERAL DEL INSTITUTO PANAMEÑO DE TURISMO, ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). . 414

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA SOLÍS, ENDARA DELGADO Y GUEVARA EN REPRESENTACIÓN DE LAS SOCIEDADES INDUSTRIAS EL TORERO, S. A., TRANSPORTE LIGO, S. A., FINCAS BREMER, S. A. Y POLLNETT, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULAS POR ILEGALES, LAS RESOLUCIONES N° 4966-93 SUB. D. G. DE 29 DE JULIO DE 1993, LA N° 4973-93 SUB. D. G. DE 29 DE JULIO DE 1993, LA N° 4958-93 SUB. D. G. DE 29 DE JULIO DE 1993 Y LA N° 4965-93 SUB. D. G. DE 29 DE JULIO DE 1993, TODAS EMITIDAS POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 420

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. CARLOS BONILLA EN REPRESENTACIÓN DE DEPORTES Y ZAFARIS, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL LA RESOLUCIÓN N° 6131-94 D. G. DE 30 DE MARZO DE 1994, DICTADA POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, EL ACTO CONFIRMATORIO DICTADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 425

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO EMILIO DE LEÓN LOKEE, EN REPRESENTACIÓN DE RUBÉN DARÍO RODRÍGUEZ, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL RESUELTO N° 022 DE 19 DE OCTUBRE DE 1994, EXPEDIDO POR EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA DE PANAMÁ (IDIAP), Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 426

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA

FIRMA ALEMÁN, CORDERO, GALINDO Y LEE, EN REPRESENTACIÓN DE MISTER POLLO, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LAS RESOLUCIONES N° 213-702 DE 9 DE MARZO DE 1992 Y 213-5118 DE 10 DE JULIO DE 1992, EMITIDAS POR EL ADMINISTRADOR REGIONAL DE INGRESOS DE LA PROVINCIA DE PANAMÁ, Y LA RESOLUCIÓN N° 205-045 DE 18 DE JULIO DE 1994, EXPEDIDA POR LA COMISIÓN DE APELACIONES DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y TESORO, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 430

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA ICAZA, GONZÁLEZ RUÍZ Y ALEMÁN, EN REPRESENTACIÓN DE INDUSTRIA NACIONAL DE PLÁSTICOS, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 213-8451 DE 14 DE JULIO DE 1986, LA N° 213-13930 DE 24 DE NOVIEMBRE DE 1986, DICTADAS POR LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE INGRESOS DE LA PROVINCIA DE PANAMÁ; Y, LA N° 205-25 DE 29 DE MAYO DE 1987, DICTADA POR LA COMISIÓN DE APELACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y TESORO. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 433

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR LA FIRMA AROSEMENA, NORIEGA Y CONTRERAS, EN REPRESENTACIÓN DE JOSÉ AROSEMENA GUERRERO, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL ACTO ADMINISTRATIVO CONTENIDO EN LA NOTA N° DNPE 048-93 DE 24 DE MARZO DE 1993, PROFERIDA POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, LA NEGATIVA TÁCITA POR SILENCIO ADMINISTRATIVO AL NO RESOLVER EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN CON APELACIÓN EN SUBSIDIO, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 434

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA FORENSE ARIAS, FÁBREGA Y FÁBREGA EN REPRESENTACIÓN DE COMPAÑÍA DE PRODUCTOS DE ARCILLA, S. A. PARA QUE SE DECLAREN NULAS POR ILEGALES, LA RESOLUCIÓN N° 6366-85 SUB-D. G. DEL 18 DE DICIEMBRE DE 1985, DICTADA POR EL SUB-DIRECTOR GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 440

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA DUDLEY & ASOCIADOS EN REPRESENTADOS DE BANCO AGRO-INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE PANAMÁ (BANAICO), S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN CBN N° 12-96 DE 18 DE ABRIL DE 1996 DICTADA POR LA COMISIÓN BANCARIA NACIONAL DEL MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y POLÍTICA ECONÓMICA, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 441

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA LICENCIADA SANDRA AGUILAR, EN REPRESENTACIÓN DE SILVERIO RÍOS Y SONIA GONZÁLEZ, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° SCCA-59 DE 10 DE FEBRERO DE 1995, EMITIDA POR EL ALCALDE DE SAN MIGUELITO, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 442

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA BERROCAL Y DÍAZ, EN REPRESENTACIÓN DE EMPRESAS Q & Q, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL RESUELTO N° DG-692-94 DE 11 DE MAYO DE 1994, EMITIDO POR EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE RECURSOS HIDRÁULICOS Y ELECTRIFICACIÓN (I. R. H. E.), Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 445

DEMANDA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR LA LICENCIADA IRENE STANZIOLA, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE AGENCIAS COSMOS,

S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 4362-SUB-D. G., DEL 17 DE FEBRERO DE 1993, DICTADA POR LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, EL ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 449

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS ARAÚZ, EN REPRESENTACIÓN DE EDMUNDO BOTELLO, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL ACUERDO N° 11 DE 18 DE DICIEMBRE DE 1995, EMITIDO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE TABOGA, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TREINTA (30) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). . . 450

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA CHAVARRÍA, RODRÍGUEZ Y SÁNCHEZ EN REPRESENTACIÓN DE FERNAVICO, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 6962-94-SUB-D. G., DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 1994, DICTADA POR EL SUB-DIRECTOR GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, LOS ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TREINTA (30) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 451

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR LA FIRMA FORENSE SHIRLEY Y DÍAZ, EN REPRESENTACIÓN DE DISTRIBUIDORES DE MARISCOS, SEAFOOD DISTRIBUTORS, CORP., PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA DECISIÓN ADOPTADA POR LA COMISIÓN TÉCNICA DE INCENTIVOS A LAS EXPORTACIONES EN REUNIÓN DEL 12 DE MARZO DE 1994, LOS ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TREINTA (30) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 452

DEMANDA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO EMILIO DE LEÓN, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR JOSÉ DEL CARMEN ESPINOZA, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL RESUELTO N° 032 DEL 15 DE JUNIO DE 1995, EXPEDIDO POR EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA DE PANAMÁ; ASÍ COMO LA NEGATIVA TÁCITA POR SILENCIO ADMINISTRATIVO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TREINTA (30) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). . . 454

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA ALFARO, FERRER, RAMÍREZ Y ALEMÁN, EN REPRESENTACIÓN DE COMPAÑÍA ASTOR, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 010 DE 20 DE MARZO DE 1995, EMITIDA POR LA MINISTRA DE SALUD, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TREINTA (30) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 454

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL DOCTOR MIGUEL ANTONIO BERNAL VILLALAZ, EN REPRESENTACIÓN DE YARITZA AMELIA SOLANO DE VILLALAZ, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 713 DE 18 DE SEPTIEMBRE DE 1995, EMITIDA POR LA MINISTRA DE SALUD Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 455

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD 456

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD INTERPUESTA POR EL DOCTOR ROLANDO VILLALAZ, EN REPRESENTACIÓN PROPIA PARA QUE SE DECLARE NULOS, POR ILEGALES, TODOS LOS ACTOS PÚBLICOS CELEBRADOS POR LA AUTORIDAD DE LA REGIÓN INTEROCEÁNICA SOBRE SOLICITUD DE PRECIOS PARA ADQUIRIR VIVIENDAS EN RESIDENCIAL ESPINAR, PROVINCIA DE COLÓN Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TRECE (13) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

. 456

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR LA FIRMA RIVERA Y BOLÍVAR, EN REPRESENTACIÓN DE HERCILIA R. ESPINOSA, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, EL DECRETO N° 294 DE 7 DE DICIEMBRE DE 1994, EMITIDO POR EL ÓRGANO EJECUTIVO, POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTE (20) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 457

DEMANDA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LCDO. ALEXIS VIANOR HERRERA, EN SU PROPIO NOMBRE Y REPRESENTACIÓN, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL ARTÍCULO 8 DEL DECRETO EJECUTIVO N° 175 DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 1995, EMITIDO POR EL ÓRGANO EJECUTIVO, POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y TESORO. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). . 459

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO RAFAEL SOLANO G., EN REPRESENTACIÓN DE SANDRA ISABEL ELETA BOYD, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 14 DE 30 DE MARZO DE 1992, DICTADA POR LA ALCALDÍA DEL DISTRITO DE PORTOBELO. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 463

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD INTERPUESTA POR EL LICENCIADO MIGUEL SIFONTES, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE IDALDO ATENCIO BÓSQUEZ, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 2 DEL 18 DE AGOSTO DE 1995, DICTADA POR LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA DE HERRERA Y EL ACTO CONFIRMATORIO. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 472

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JOSÉ D. FAJARDO EN REPRESENTACIÓN DE BERASVAS, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL RESUELTO N° 135 DE 22 DE FEBRERO DE 1995, DICTADO POR EL MINISTERIO DE HACIENDA Y TESORO. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 473

JURISDICCIÓN COACTIVA 475

INCIDENTE DE RESCISIÓN DE SECUESTRO, INTERPUESTO POR LA LICENCIADA EDA RODRÍGUEZ, EN REPRESENTACIÓN DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, DENTRO DEL JUICIO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, CASA MATRIZ, CONTRA PEDRO AGUSTÍN D'MEZA LASSO Y NEREYDA GARCÍA DE D'MEZA. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TRES (3) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).
. 475

INCIDENTE DE RESCISIÓN DE SECUESTRO, INTERPUESTO POR EL LICENCIADO JOSÉ A. HENRÍQUEZ, EN REPRESENTACIÓN DE NORIS EDITH GUERRA DE CONTE, DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, CASA MATRIZ, CONTRA JAIME LUIS MARTÍNEZ Y OTROS. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, SEIS (6) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 477

EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO TOMÁS VEGA CADENA, EN REPRESENTACIÓN DE CARLOS BARRIGA, DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, CASA MATRIZ, A CREDILUM, S. A. Y OTROS. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, CATORCE (14) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 479

TERCERÍA COADYUVANTE, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS QUINTERO, EN REPRESENTACIÓN DE DARÍO PITTÍ SERRANO, DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, (SUC. DE DAVID), A CAFETALERA CHIRICANA, S. A. Y TORREFACTORA CHIRICANA, S. A. MAGISTRADO

PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTE (20) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 482

TERCERÍA COADYUVANTE, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO HÉCTOR GUERRA NÚÑEZ, EN REPRESENTACIÓN DE GRACIELA HERNÁNDEZ DE MORENO Y OTROS DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL A QUEEN CHEMICAL INDUSTRY, INC. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTE (20) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 484

EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. ANTONIO LOAIZA EN REPRESENTACIÓN DE INMOBILIARIA CARIOCA, S. A. DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE EL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ LE SIGUE A INMOBILIARIA CARIOCA, S. A. Y BORIS JAVIER AGUILAR. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 486

TERCERÍA COADYUVANTE, INTERPUESTA POR EL LCDO. JAIME DELGADO ANGUIZOLA, EN REPRESENTACIÓN DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, ZONA DE CHIRIQUÍ, A FRUTAS PANAMEÑAS (FRUPASA) E INGEMAR LUNDBERG. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 487

EXCEPCIÓN DE PAGO PARCIAL, INTERPUESTO POR EL LICENCIADO RAFAEL PONCE GONZÁLEZ, EN REPRESENTACIÓN DE OMAR SEBASTIÁN RÍOS GALLEGOS, ESTELLA MARIS RÍOS DE RÍOS Y LA PERLINA, S. A., DENTRO DEL JUICIO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, DE DAVID, PROVINCIA DE CHIRIQUÍ. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 489

EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO ADELMINO ANTONIO RIVERA VARGAS, EN REPRESENTACIÓN DE ALEXIS STANZIOLA PINZÓN, DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, CASA MATRIZ, A CENTRO INTERNACIONAL DE MUEBLES, S. A. Y OTROS. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 493

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL 494

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL, INTERPUESTO POR EL LICENCIADO VÍCTOR HARDING, EN REPRESENTACIÓN DE DIOVELIS JAÉN, CONTRA LA SENTENCIA DE 25 DE MARZO DE 1996, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: GRUPO HOTELERO MAR Y SOL, S. A. -VS- DIOVELIS JAÉN ÁBREGO. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, SEIS (6) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 494

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL, INTERPUESTO POR EL LCDO. BOLÍVAR J. CANO EN REPRESENTACIÓN DE ISRAEL COBA, CONTRA LA RESOLUCIÓN DE 20 DE MARZO DE 1996, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DENTRO DEL PROCESO LABORAL: ISRAEL COBA VS MANUEL CARRERA Y/O CAPAT. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTE (20) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 495

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL, INTERPUESTO POR EL LCDO. ELVIS ALBERTO POLO, EN REPRESENTACIÓN DE MÁXIMO HENRÍQUEZ Y OTROS, CONTRA LA SENTENCIA DE 26 DE ENERO DE 1996, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DENTRO DEL PROCESO LABORAL: MÁXIMO HENRÍQUEZ Y OTROS VS ALLIED CONTRACTORS CO., INC. Y/O LEETEL, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTE (20) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 497

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL, INTERPUESTO POR LA LICENCIADA MÓNICA IVANKOVICH L'HOESTE, EN REPRESENTACIÓN DE EDGAR IVANKOVICH ANZOLA, CONTRA LA RESOLUCIÓN DE 21 DE MARZO DE 1996, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DENTRO DEL PROCESO LABORAL: EDGAR IVANKOVICH ANZOLA-VS-ALMACENAJES INDUSTRIALES, S. A. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTE (20) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS

(1996). 498

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL, INTERPUESTO POR EL LICENCIADO FRANCISCO ESPINOSA CASTILLO, EN REPRESENTACIÓN DE BOLÍVAR CASTILLO, CONTRA LA SENTENCIA DE 28 DE MARZO DE 1996, EMITIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: BOLÍVAR CASTILLO -V- SUPERMERCADOS Y COMISARIATOS, S. A.; CASA DE LA CARNE N° 3, S. A.; FORTUNATO MANGRAVITA, S. A.; MANGRAVITA, S. A. Y OTROS. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTE (20) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 499

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL, INTERPUESTO POR LA LICENCIADA ELIZABETH MORENO TOROK, EN REPRESENTACIÓN DE CONSTANTINO BEITÍA, CONTRA LA SENTENCIA DE 27 DE FEBRERO DE 1996, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: CONSTANTINO BEITÍA -VS- VENTAS DE EQUIPOS, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 500

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL, INTERPUESTO POR EL LICENCIADO JOSÉ DE JESÚS GÓNDOLA MOLINAR, EN REPRESENTACIÓN DE JAMES ANDERSON, CONTRA LA SENTENCIA DE 28 DE FEBRERO DE 1996, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: JAMES ANDERSON -VS- PANAMÁ AIR MARINE SAFETY & SUPPLY INC. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 502

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL, INTERPUESTO POR EL LCDO. ANTONIO OSORIO ÁBREGO, EN REPRESENTACIÓN DE ELENA ROJAS DE CONCEPCIÓN, CONTRA LA SENTENCIA DE 15 DE MARZO DE 1996, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: ELENA ROJAS DE CONCEPCIÓN VS NOHAMED MAHMUD ABDEL HAMID ABED Y/O ALMACÉN LA FAMA. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). . 503

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL, INTERPUESTO POR EL LICENCIADO RANDOLPH A. LAWSON EN REPRESENTACIÓN DE RODOLFO CHIARI, CONTRA LA RESOLUCIÓN DE 15 DE ABRIL DE 1996, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: RODOLFO CHIARI-VS-INVERSIONES NATO, S. A. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 505

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL, INTERPUESTO POR EL LCDO. ELÍAS IBARRA, EN REPRESENTACIÓN DE WALTER ROY TOMLINSON, CONTRA LA SENTENCIA DE 23 DE ABRIL DE 1996, EMITIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: WALTER ROY TOMLINSON -VS- CLUB DE GOLF DE PANAMÁ, S. A. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 507

IMPEDIMENTO 510

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL, INTERPUESTO POR EL LCDO. HIPÓLITO MARTÍNEZ, EN REPRESENTACIÓN DE GREGORY BURICH, CONTRA LA SENTENCIA DE 29 DE FEBRERO DE 1996, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DENTRO DEL PROCESO LABORAL: GREGORY BURICH VS PANAMÁ TUG SERVICES, S. A. Y PETROTERMINAL DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTE (20) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 510

TRIBUNAL DE INSTANCIA 511

DEMANDA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA DE NULIDAD INTERPUESTA POR LA PROCURADORA DE LA ADMINISTRACIÓN, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL ÓRGANO EJECUTIVO, PARA QUE SE DECLARE NULOS, POR ILEGALES, LOS RESUELTOS N° 51 DEL 19 DE ABRIL, N° 172 DEL 21 DE SEPTIEMBRE, N° 189, N° 190 Y N° 191, DEL 18 DE NOVIEMBRE, TODOS EXPEDIDOS EN 1993. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. 511

SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES 514

CARTA ROGATORIA 515

COMISIÓN ROGATORIA LIBRADA POR EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚMERO 4, DE DENI (ALICANTE), ESPAÑA, DENTRO DEL PROCESO DE MAYOR CUANTÍA N° 458/91 QUE SE LE SIGUE A CHARLES D. BACKER DIRKS, PETRA I. BACKER DIRKS Y COASTLINE CORPORATION, S. A. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, QUINCE (15) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 515

CARTA ROGATORIA EXPEDIDA POR LA ALCALDÍA PRIMERA DE PENSIONES ALIMENTICIAS DE SAN JOSÉ, REPÚBLICA DE COSTA RICA, DENTRO DE LA DEMANDA DE PENSIÓN ALIMENTICIA N° 123-95 PROMOVIDA POR DORIS FRANCO SÁNCHEZ CONTRA SAYED DUMANI VANEGAS. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, QUINCE (15) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 516

COMISIÓN ROGATORIA LIBRADA POR EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚMERO SEIS CIVIL, SECCIÓN 1ª EN LOS AUTOS DE DECLARATIVO DE MENOR CUANTÍA-RECLAMACIÓN DE CANTIDAD, NÚMERO 0626/87, ENTABLADO POR ENRIQUE BERMÚDEZ VILLARDELL, SUBROGADO EN ANTEX INVESTMENT INC. CONTRA DA. ELENA IMIRIZALDU. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 517

CARTA ROGATORIA SIN NÚMERO, DE 14 DE DICIEMBRE DE 1995, LIBRADA POR EL JUZGADO CINCUENTA Y OCHO PENAL DEL CIRCUITO DE SANTA FE DE BOGOTÁ, D. C., REPÚBLICA DE COLOMBIA, DENTRO DEL PROCESO N° 5521 SEGUIDO CONTRA RODRIGO BOTERO MEJÍA Y OTROS, POR LOS DELITOS DE EXPORTACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 519

COMISIÓN ROGATORIA PROCEDENTE DEL TRIBUNAL MUNICIPAL POPULAR DE LA PLAZA DE LA REVOLUCIÓN DE LA REPÚBLICA DE CUBA, LIBRADA DENTRO DEL PROCESO DE DIVORCIO POR JUSTA CAUSA N° 2576/92, ENTABLADO POR DIGNA ANDREA MONTESINO CONTRA EL SEÑOR REINALDO ERNESTO RODRÍGUEZ GARCÍA, A FIN DE QUE ESA CORPORACIÓN JUDICIAL DETERMINE SU VIABILIDAD PARA EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, TREINTA (30) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 520

EJECUCIÓN DE SENTENCIA EXTRANJERA 522

LUZMILA LAWSON DE BLANCO, SOLICITA SE DECLARE EJECUTABLE EN PANAMÁ LA SENTENCIA PROFERIDA POR EL JUZGADO GENERAL DE JUSTICIA DE APELACIONES DE LA CORTE DEL DISTRITO DEL CONDADO DE CUMBERLAND, CAROLINA DEL NORTE, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, SEIS (6) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 522

VITTA LÓPEZ DE BURKE, SOLICITA EL RECONOCIMIENTO Y LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA DE DIVORCIO DICTADA POR LA CORTE SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE WATERBURRY, EN WATERBURRY, ESTADO DE CONNECTICUT, DE FECHA 22 DE JUNIO DE 1992, MEDIANTE EL CUAL SE DECRETÓ LA DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO MATRIMONIAL QUE LA UNÍA A PHILLIP M. BURKE. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL GONZÁLEZ. PANAMÁ, SEIS (6) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 524

MARCELA BARDAYAN ZAYAT, SOLICITA EL RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA EXTRANJERA DICTADA POR EL JUZGADO SUPERIOR TERCERO EN LO CIVIL Y MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL DISTRITO FEDERAL Y ESTADO MIRANDA EN CARACAS, VENEZUELA, CON FECHA DE 23 DE OCTUBRE DE 1981, MEDIANTE LA CUAL SE DISUELVE EL VÍNCULO MATRIMONIAL QUE LA UNÍA AL SEÑOR WALTER SALOMÓN BONDER. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 526

EXHORTOS 527

EXHORTO LIBRADO POR EL JUZGADO NACIONAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL N° 5 DE LA CAPITAL FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, REFERENTE A LOS AUTOS CARATULADOS "CORREA, CARLOS NORBERTO Y OTROS S/ DEFRAUDACIÓN". MAGISTRADO

PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, QUINCE (15) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 527

EXHORTOS N° 1508-95 Y 1510-95 LIBRADOS POR EL JUEZ DE LETRAS SECCIONAL SUPERNUMERARIO DE EL PROGRESO, DEPARTAMENTO DE YORO, REPÚBLICA DE HONDURAS, DENTRO DEL PROCESO INSTRUIDO CONTRA OSCAR RAQUEL GUILLÉN CONTRERAS, SINDICADOS POR LOS DELITOS DE ROBO, FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS, EN PERJUICIO DE LA CORPORACIÓN SALVADOREÑA DE CALZADO, S. A., LA FE Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL GONZÁLEZ. PANAMÁ, QUINCE (15) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 530

COMISIÓN ROGATORIA LIBRADA POR EL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO UNO DE MADRID, ESPAÑA, DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A JUAN CARLOS RUBIO MONTES Y ANNABELLE GONZÁLEZ CALVO DE LA PUERTA Y OTRO, POR EL DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL GONZÁLEZ. PANAMÁ, QUINCE (15) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 531

EXHORTO ROL. N° 20.646 LIBRADO POR EL SÉPTIMO JUZGADO CRIMINAL DE VALPARAÍSO, CHILE, DENTRO DEL PROCESO CARATULADO "FALSIFICACIÓN DE INSTRUMENTO PRIVADO Y FRAUDE AL FISCO", EN CONTRA DEL SEÑOR GUILLERMO ANTONIO KEGEVIC AHUMADA. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL GONZÁLEZ. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996) 534

TRIBUNAL DE INSTANCIA 535

RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR EL LICENCIADO JULIÁN GARCÍA TREJOS CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 87-95 DE FECHA DE 23 DE NOVIEMBRE DE 1995, EMITIDA POR LA COMISIÓN DE PERSONAL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, RAMO PENAL DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL GONZÁLEZ. PANAMÁ, SIETE (7) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 535

EDUARDO BARROSO MORALES INTERPONE DENUNCIA CONTRA EL LICENCIADO LUIS ALBERTO ARBOLEDA POR FALTA A LA ÉTICA PROFESIONAL DEL ABOGADO (TRIBUNAL DE HONOR). MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 537

ÓRGANO JUDICIAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

PLENO

MAYO 1996

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LCDO. SATURIO SEGARRA ESQUIVEL EN REPRESENTACIÓN DE LOS SEÑORES VÍCTOR MENDOZA EN SU CONDICIÓN DE REPRESENTANTE LEGAL DE TRANSCOLPILMA, S. A., SR. JULIO LEGUÍA SERRANO, REPRESENTANTE LEGAL DE LA RUTA COLÓN COCOSOLO, S. A., SR. ROBERTO GIONO, REPRESENTANTE LEGAL DE LA RUTA PANAMÁ CENTROAMÉRICA, SR. JOSÉ SANTIZO EN REPRESENTACIÓN DE LA RUTA PORTOBELO Y SR. PABLO RODRÍGUEZ EN REPRESENTACIÓN DE LA RUTA BUENA VISTA, CONTRA LA ORDEN DE NO HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN N° 1 DE 3 DE ENERO DE 1996 Y EL RESUELTO 123R-23 DE 19 DE MARZO DE 1996, AMBAS DICTADAS POR EL DIRECTOR NACIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE DEL MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TRES (3) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Licenciado Saturio Segarra E., actuando en representación de los señores VÍCTOR MENDOZA, en representación de la ruta Transcolpilma, S. A.; JULIO LEGUÍA SERRANO, en representación de la ruta Colón-Cocosolo; ROBERTO GIONO, en representación de la ruta Panamá-Centroamérica; JOSÉ SANTIZO, en representación de la ruta Colón-Portobelo; y PABLO RODRÍGUEZ, en representación de la ruta Buena Vista; ha interpuesto demanda de amparo de garantías constitucionales contra el Director Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (D. N. T. T. T.) del Ministerio de Gobierno y Justicia y el Ministro de Gobierno y Justicia.

En la demanda se pide a la Corte que se revoque una orden de hacer proferida por la Dirección Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre del Ministerio de Gobierno y Justicia, mediante Resolución N° 1 de 3 de enero de 1996, que niega la impugnación propuesta por los amparistas y confirma el acto administrativo de las elecciones celebradas por la Dirección Provincial de Colón, el 12 de noviembre de 1995, en el cual fueron elegidos los representantes transportistas ante el Consejo Técnico Provincial de la Provincia de Colón. Igualmente, se pide que se revoque la orden contenida en el Resuelto 123-R-23 de 19 de marzo de 1996 en el cual se niega el recurso de apelación promovido contra la resolución arriba mencionada.

Considera el Pleno que estamos en presencia de un acto administrativo y su acto confirmatorio los cuales son impugnables en la vía contencioso administrativa ante la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, previo agotamiento de la vía gubernativa. En este sentido, no es el amparo de garantías constitucionales la vía procesal adecuada para impugnar los mencionados actos administrativos, criterio que ha sentado la Corte en numerosas ocasiones.

En consecuencia, el Pleno de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE, por ser manifiestamente improcedente, la demanda de amparo de garantías constitucionales presentada por el Licenciado Saturio Segarra en representación de los señores VÍCTOR MENDOZA, JULIO LEGUÍA SERRANO, ROBERTO GIONO, JOSÉ SANTIZO Y PABLO RODRÍGUEZ contra el Director Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (D. N. T. T. T.) del Ministerio de Gobierno y Justicia y el Ministro de Gobierno y Justicia.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ

CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR LA FIRMA FORENSE FRAGUELA-RUÍZ, HOQUEE Y ASOCIADOS, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE FERNANDA JAVIER SKLIAREVSKY GRACIA, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN EL OFICIO N° 398 DE 8 DE MARZO DE 1996, DICTADO POR EL JUEZ SEGUNDO DE LO PENAL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, TRES (3) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Procedente del Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, ha ingresado a la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia, en grado de apelación, la sentencia de 25 de marzo de 1996, dentro de la acción de amparo de garantías constitucionales, interpuesta por la firma forense FRAGUELA-RUÍZ, HOQUEE Y ASOCIADOS en representación de FERNANDA JAVIER SKLIAREVSKY GRACIA, contra la orden de hacer contenida en el Oficio N° 398 de 8 de marzo de 1996, dictado por el Juez Segundo de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial.

El Tribunal Superior del conocimiento del referido proceso de amparo constitucional, DENIEGA la acción de amparo propuesta por FERNANDA JAVIER SKLIAREVSKY GRACIA contra el Juez Segundo de Circuito de lo Penal de Panamá del Primer Circuito Judicial.

El caso se encuentra en estado de decidir la apelación interpuesta por la demandante, y a ello se procede, previas las siguientes consideraciones:

La firma forense FRAGUELA-RUÍZ, HOQUEE Y ASOCIADOS ha promovido recurso de apelación contra la Resolución del Primer Tribunal de Justicia, del Primer Distrito Judicial, mediante la cual se denegó recurso de amparo de garantías constitucionales promovido por la firma forense antes indicada, contra la orden de hacer contenida en el oficio N° 398, de 8 de marzo de 1996, mediante la cual se hace una citación para que los doctores ELAINE BRESSAN, ALEJANDRO PÉREZ MÉNDEZ, NILDA SANTAMARÍA y LUIS RODRÍGUEZ para la práctica de una diligencia judicial. La acción de amparo fue admitida por el Tribunal Superior de Justicia, quien decidió negar el amparo en cuestión. Evacuados los trámites pertinentes, debe este Pleno, decidir la apelación promovida contra la sentencia del Tribunal Superior antes indicada.

Antes de ello, no obstante, debe señalar este Pleno, el extremado cuidado que deben los Tribunales inferiores que conocen del recurso de amparo, para admitirlo. Este denominado recurso es de naturaleza extraordinaria y procede, dentro de los procesos judiciales, contra órdenes de hacer o no hacer, que violen algún derecho fundamental, cuando se hubieren agotado todos los remedios procesales en vía ordinaria, y cuando, además, la orden de hacer o de no hacer deba revocarse de inmediato para no causar un daño grave, evidente y de difícil reparación, conforme lo dispone el artículo 2606 del Código Judicial.

De lo expresado, el Tribunal, antes de admitir la acción de inconstitucionalidad debe:

1. Determinar que el acto acusado constituía, en efecto, una orden de hacer o de no hacer.

2. Que la permanencia en el proceso de dicho acto jurisdiccional, causa al recurrente perjuicios graves, evidentes y de difícil reparación.

3. Que el recurrente haya agotado los medios y trámites previstos en la ley para la impugnación de la resolución judicial de que se trate.

4. Que el acto vulnere algún derecho fundamental o garantía constitucional. Es decir, que lo que se debate sea materia constitucional.

De no darse alguno de los presupuestos para la admisibilidad de la acción de amparo, el Tribunal debe inadmitir el mal denominado recurso de amparo.

Con respecto a la procedencia del amparo contra decisiones judiciales, sostuvo su inspirador el doctor JOSÉ DOLORES MOSCOTE:

"...
Indudablemente no están exentos los funcionarios judiciales de ser recurridos en caso de que den "ordenes de hacer o de no hacer". También ellos pueden caer en la tentación de apartarse de las pautas que les señala su grave ministerio; pero en este caso débese andar con mucho cuidado al calificar las órdenes que pueden impartir. Muchas de éstas son "órdenes de hacer o de no hacer" en sentido lato, de modo que apenas habrá algunas que no estén incluidas en las de esta clase. En realidad, la mayor parte de las decisiones judiciales son verdaderas órdenes, explícitas o implícitas. Basta, sin embargo, que ellas sean dadas en virtud de las leyes que regulan los procesos para que ya por esta sola razón se considere que no las comprende el artículo 189. Esas leyes determinan una competencia, regulan ramas enteras del derecho y proveen o deben proveer los remedios legales aplicables para corregir, para subsanar, los errores de cualquier clase en que los jueces incurran con motivo de su aplicación. Solamente cuando éstos se aparten del orden jurídico a que se hallan vinculados dictando "órdenes de hacer o de no hacer" en sentido estricto, violatorias directamente de los derechos y garantías constitucionales que salvaguarda la constitución, es cuando procede contra ellos el recurso sumario de amparo de que habla el artículo 189 comentado. En cualquier otro caso o situación su uso es incorrecto; inoperante ...".

(José Dolores Moscote, DERECHO CONSTITUCIONAL PANAMEÑO, Panamá, 1943, pág. 468).

Es a esa dirección a la que responde el artículo 2606 del Código Judicial y reiterada jurisprudencia constitucional sobre este extremo.

No obstante, en el recurso en mención se cuestiona una supuesta orden, contenida en un oficio, el número 398, de 8 de marzo de 1996. El Magistrado EDGARDO MOLINO MOLA, en la ponencia "Los actos sujetos a la acción de amparo", se refiere, como actos jurisdiccionales no susceptibles de amparo, a los oficios, en la forma que se reproduce:

"B. Determinación de si un acto contiene o no una orden por parte de la jurisprudencia de la Corte Suprema.

Este aspecto de determinar si existe orden o no, ha sido uno de los más importantes en la jurisprudencia, que se ha pronunciado en los siguientes casos, sosteniendo que no estamos en presencia de una orden o que los requisitos que deben cumplir la orden no se dan:
...
6. Los oficios. "En reiteradas ocasiones la Corte ha señalado que los oficios no son recurribles en amparo, pues no tienen carácter de órdenes de hacer sino meras comunicaciones accesorias de una orden principal, sin la cual aquéllos no tendrían valor alguno".

El Pleno ha tenido ocasión de pronunciarse sobre los oficios y ha negado su condición de orden de hacer o no hacer, a los efectos de la instauración del proceso constitucional de amparo de garantías fundamentales. Sobre el particular, véanse las sentencias de amparo de 16 de mayo de 1994, la de 25 de marzo de 1994, la de 1° de junio de 1994 y la de 1° de junio de 1993. Por ejemplo, la de 25 de marzo de 1994 señala:

"...
Dado lo anterior, ya esta Corporación de Justicia ha señalado en reiteras ocasiones que los oficios son irrecurribles en amparo, en vista de que no tienen carácter de órdenes de hacer, sino son meras comunicaciones accesorias de una orden principal, que en este caso es el Auto N° 358 del 3 de septiembre de 1992, proferido por la Juez Tercera del Tercer Circuito Judicial, y confirmado por el Tribunal Superior de ese mismo Distrito, mediante Auto de 19 de mayo de 1993. Los oficios no podrían tener valor, si no existiese las órdenes

anteriormente aludidas, (Ver Sentencias de Amparo de 1 de junio de 1993, cuyos ponentes son: Mag. Edgardo Molino Mola y Mag. Carlos Lucas López).

(Registro Judicial, Marzo de 1994. Sentencia de 25 de marzo de 1994. Ponente: Edgardo Molino Mola; pág. 28).

No obstante, en consideración a que el amparo fue admitido y, además, decidido en primera instancia por el Tribunal Superior de Justicia, este Pleno entra a analizar el recurso de apelación promovido contra la referida sentencia.

La orden, que no es tal, está contenida en un oficio, mediante el cual el Tribunal a-quo, en ejercicio de la facultad que le otorga el artículo 2262, ordinal 2°, en consonancia con el artículo 782, ordenó que se practicase, como prueba de oficio del Tribunal, diligencia judicial para lo que se requiere la presencia de los cuatro especialistas, a saber, ELAINE BRESSAN, NILDA SANTAMARÍA y ALEJANDRO PÉREZ, Psiquiatras Forenses, y al psicólogo LUIS RODRÍGUEZ.

La apelante considera que la prueba que se ha de evacuar, consiste en una solicitada por la acusación particular presentada fuera del término procesal correspondiente, cuando consta en el expediente, que el oficio en mención, lo mismo que el oficio 158, de 26 de enero de 1996, son para poner en ejecución la resolución de 26 de enero de 1996 (visible a foja 229), mediante la cual, y como prueba de oficio del Tribunal, se ordenó su práctica. Es cierto que la prueba de oficio fue instada por la representación procesal del acusador particular, pero la realidad procesal es que fue el Tribunal el que ordenó la práctica de dicha prueba, y el fundamento legal que esgrimió el Tribunal a-quo es, precisamente el artículo 2262, ordinal 2° del Código Judicial. La diligencia, además, no violenta los principios de contradicción y bilateralidad, pues, debe notificarse a las partes, quienes pueden concurrir a la diligencia judicial respectiva, con fundamento en el artículo 782. Visto, pues, que la prueba que se ordenó practicar en una prueba que permite la ley procesal, que se practique por la persona competente para decretar su práctica, es evidente que no se ha violado la garantía fundamental del debido proceso, como alega el apelante, sino todo lo contrario. Adviértase que las pruebas de oficio por parte del Tribunal constituyen una innovación del Código Judicial, y van dirigidas a entronizar una mayor intervención del Tribunal en los procesos, que tienda a buscar la verdad material, es decir, a lo preceptuado por el artículo 464 del Código Judicial, en relación con el artículo 212 de la Constitución Política. Adicionalmente, como quiera que el documento presentado por la acusación particular con la solicitud de que el Tribunal ordenase la valoración de dicho documento como prueba de oficio del Tribunal, dice relación con la realización de una evaluación psiquiátrica a la menor LINETH ISABEL SKLAREVSKY, cuya práctica no es aconsejable en opinión de la Doctora CARMEN GIBSON, resulta en interés superior del menor determinar, como parece entenderlo el Tribunal a-quo, en la forma mas exacta posible, si se encuentra o no se encuentra debidamente protegido el interés superior del menor, con respecto a la expresada evaluación psiquiátrica, interés superior que, en virtud de la doctrina del bloque de constitucionalidad, forma parte del artículo 52 de la Constitución Política.

Sobre este último aspecto, conviene referirse a la sentencia de amparo de 20 de marzo de 1996, que en parte pertinente señala:

"...
Respecto a la infracción del artículo 52 de la Constitución, que trata sobre la obligación del Estado de proteger la salud física, mental y moral de los menores y garantizar el derecho de éstos a la alimentación, la salud y la educación y la seguridad y previsión sociales, cabe anotar que en el presente caso esa obligación estatal está supeditada a determinar previamente cuál es el interés superior del menor, que es precisamente la omisión que se advierte en la orden de hacer que se impugna".

Son las consideraciones que anteceden, la que mueven a este Pleno a confirmar la sentencia de amparo apelada.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en

nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de 25 de marzo de 1996, dictada por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, dentro de la acción de amparo de garantías constitucionales propuesto por FERNANDA JAVIER SKLIAREVSKY GRACIA, mediante apoderado judicial.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LCDO. JACINTO CEREZO GÓNDOLA, EN REPRESENTACIÓN DE FERNANDO HERNÁNDEZ ARIAS, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN N° 10 DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 1995, EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, SIETE (7) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Se encuentra para resolver sobre su admisibilidad, acción de amparo de garantías constitucionales presentada por el licenciado Jacinto Cerezo Góndola, quien actúa en representación de Fernando Hernández Arias, contra orden de hacer contenida en la resolución número 10, de 29 de septiembre de 1995, dictada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, que concede la extradición de su poderdante, solicitada por el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica. Se citan como infringidos los artículos 18, 32 y 189 de la Constitución Nacional.

Es preciso recordar que la acción de amparo de garantías constitucionales es un mecanismo procesal extraordinario, que tiene como propósito la tutela de los derechos o garantías fundamentales consagrados por la Constitución, en los casos de órdenes de hacer o de no hacer que impliquen la amenaza de un daño **inminente** contra cualquier persona, por lo que requieren de una revocación inmediata.

Estas características llevan implícitos los conceptos de **oportunidad** y **utilidad** de la acción, componentes íntimamente relacionados con un tercer concepto, cual es el de la eficacia de la tutela jurídica, todo lo cual condiciona la admisibilidad o procedencia de la acción.

Hoy día es un hecho público y notorio, que Hernández Arias ya no se encuentra dentro de la jurisdicción panameña, por haber sido ejecutada la orden de extradición que decretara el Ministerio de Relaciones Exteriores, con su entrega al Estado requirente. Ello plantea, entonces, el hecho de la imposibilidad objetiva de retrotraer la situación jurídica del extradido al momento anterior a la ejecución de la medida, a los fines de hacer de alguna utilidad el examen del fondo de esta pretensión constitucional. Íntimamente relacionado con esta consideración, tenemos también que, por ejecutada ya la orden de extradición, sería vano sostener que en la actualidad Hernández Arias enfrenta la amenaza de un daño grave e inminente, derivada del acto acusado.

Por otra parte, es de observar que la garantía constitucional concerniente a la extradición de ciudadanos, prohíbe la extradición de **nacionales** y de extranjeros **por delitos políticos**, y el beneficiario de esta acción no se encuentra comprendido en ninguno de estos dos supuestos.

A juicio de la Corte Suprema, se trata entonces de una acción manifiestamente improcedente, con las consecuencias que le asigna el artículo

2611 del Código Judicial.

Por las razones anteriores, EL PLENO DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la acción de amparo de garantías constitucionales presentada por el licenciado Jacinto Cerezo Góndola, contra la resolución ejecutiva N° 10, de 29 de Septiembre de 1995, expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Notifíquese.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ M. FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTO POR INÉS MARÍA FÁBREGA, DELSA LORENA FÁBREGA DE DOWELL Y LUMY FÁBREGA DE ARIAS, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN S/N DE 5 DE MARZO DE 1996, PROFERIDA POR EL PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, OCHO (8) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Jorge Francisco Orcasita Ng, en su calidad de abogado sustituto de las señoras **DELSA FÁBREGA DE DOWELL**, **LUMY FÁBREGA DE ARIAS e INÉS MARÍA FÁBREGA**, presentó acción de amparo de garantías constitucionales contra la resolución calendada el 5 de marzo de 1996, proferida por el **Primer Tribunal Superior de Justicia**, por medio de la cual se confirma el auto de 27 de marzo de 1995, expedido por el Juzgado Tercero del Primer Circuito Judicial, Ramo Civil, dentro del proceso de rendición de cuentas instaurado por IVONNE FÁBREGA DE SUCRE contra sus poderdantes.

Al considerar que el libelo reunía los requisitos que la ley exige en los casos de amparos contra resoluciones judiciales,se admitió la acción presentada y se dispuso solicitar de la autoridad demandada el envío de la actuación correspondiente o un informe sobre los hechos a que se contrae este caso.

Mediante oficio N° 96-390 de 18 de marzo del año en curso, el Primer Tribunal Superior informó que el expediente contentivo del sumario de rendición de cuentas en el que se dictó la resolución impugnada, se encontraba en el Juzgado Tercero del Circuito, Ramo Civil y procedió a remitirnos el incidente de nulidad por falta de competencia presentado por la parte demandada en el proceso sumario de rendición de cuentas, antes mencionado.

Al examinar los antecedentes remitidos, se advierte que la acción de amparo se dirigió a la resolución de segunda instancia confirmatoria de la expedida por el a-quo, que niega el incidente de nulidad por falta de competencia, lo que constituye un error en la admisión in limine de la acción, pues la autoridad que generó la orden acusada en este caso lo es el Juzgado Tercer de Circuito, del Primer Circuito Judicial, Ramo Civil, ya que el Superior se limitó a confirmar dicha decisión.

Ante la realidad procesal constatada, el Pleno carece de competencia para conocer de esta acción, tal como lo ha expresado en plural número de casos en los que se inadmite la acción o se declara no viable por razones de competencia.

Por tanto, el PLENO DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre

de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA NO VIABLE la presente acción.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) JORGE FEDERICO LEE (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LCDO. EDUARDO E. RÍOS MOLINAR, EN REPRESENTACIÓN DE MARIO ENRIQUE GARCERÁN, CONTRA LA ORDEN DE NO HACER CONTENIDA EN EL AUTO DE 19 DE MARZO DE 1996, EXPEDIDO POR LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y DECISIÓN N° 3. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, NUEVE (9) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado EDUARDO E. RÍOS MOLINAR en su condición de apoderado especial de MARIO ENRIQUE GARCERÁN ha interpuesto **Amparo de Garantías Constitucionales** contra la orden de no hacer contenida en el Auto de 19 de marzo de 1996, proferido por la Junta de Conciliación y Decisión Número Tres (3).

El Pleno de la Corte procede al examen de la demanda de amparo, en atención a los presupuestos que establecen los artículos 2606 y concordantes del Código Judicial, como necesarios para su admisión.

En el caso subjúdice se observa que el amparo está dirigido contra un Auto mediante el cual la Junta de Conciliación y Decisión N° 3 **DECLINA EL CONOCIMIENTO** del proceso laboral instaurado por el amparista, MARIO ENRIQUE GARCERÁN, al Ministerio de Trabajo y Bienestar Social (Dirección General de Trabajo), por razón de competencia y, se abstiene de entrar en el conocimiento del mismo.

Como ha reiterado la Corte en casos similares, resulta evidente que este tipo de resolución no conlleva la expedición de una orden de no hacer contra el amparista. No se trata de alguna forma de mandato que vulnere sus derechos constitucionales y, tampoco se desprende de lo que dispone algún daño, menos aún grave e inminente, que requiera su revocación inmediata.

El acto jurisdiccional impugnado obedece al cumplimiento de las normas jurídicas sobre competencia y si bien se podría considerar que conlleva una abstención de la autoridad para resolver el proceso laboral que se le ha planteado, esa determinación se encuentra legalmente fundamentada, expresando, en consecuencia, la designación de la entidad (competente) que considera le correspondería asumir el conocimiento del conflicto. La controversia lo que revela es una actuación entre autoridades que, en todo caso, podría generar un conflicto (de competencia) entre ellas, el cual tendría que dirimir el superior jerárquico de ambas, tal como lo preceptúa el artículo 634 y concordantes del Código de Trabajo.

De lo expuesto se infiere que la pretensión del demandante, en el sentido de que en virtud de una acción de amparo de garantías constitucionales el Pleno de la Corte revoque el Auto Declinatorio de competencia, es totalmente improcedente pues dicho problema no es de carácter constitucional sino uno de orden legal que no puede ser resuelto a través de esta acción constitucional. Por ello, en el presente caso el amparo de garantías resulta manifiestamente improcedente.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia

en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la acción de amparo de Garantías Constitucionales propuesta por MARIO ENRIQUE GARCERÁN contra la Resolución de 19 de marzo de 1996 dictada por la Junta de Conciliación y Decisión N° 3.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTO POR EL LCDO. EDUARDO E. RÍOS MOLINAR, EN REPRESENTACIÓN DE LOURDES CEDEÑO CONTRA LA ORDEN DE NO HACER CONTENIDA EN EL AUTO N° 24-SJ-96 DE 14 DE MARZO DE 1996, DICTADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y BIENESTAR SOCIAL. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, DIEZ (10) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado EDUARDO E. RÍOS MOLINAR en su condición de apoderado especial de **LOURDES CEDEÑO** ha interpuesto acción de **Amparo de Garantías Constitucionales** contra la orden de no hacer contenida en el Auto N° 24 SJ-96 de 14 de marzo de 1996 dictada por el Director General del Trabajo.

La Corte procede al examen de la naturaleza del acto impugnado y de ciertas condiciones que deben cumplirse para la admisión de este remedio constitucional, de conformidad con lo preceptuado por los artículos 2606, 2610, 2611 y concordantes del Código Judicial.

Según lo expresa el recurrente, y se puede verificar a fojas 1-2, la orden de no hacer se encuentra contenida en la resolución de 14 de marzo de 1996 proferida por el Director General de Trabajo "mediante la cual Declina el conocimiento del Proceso de Reintegro incoado por mi representada a favor de los Juzgados Seccionales de Trabajo ...". De modo que el amparista pretende que de concederse esta acción "dicha orden sea revocada y se declare que los Procesos de Reintegro ... son de competencia de la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Bienestar Social".

En este caso se plantea un problema de tipo legal y no constitucional, que consiste en fijar la competencia del juzgador que debe conocer el caso laboral correspondiente. Esta situación debe resolverse de conformidad con las normas legales que regulan la materia y por las autoridades o jueces que las mismas señalen.

La situación que se desprende en este caso, no entraña ningún perjuicio al recurrente en amparo, en su condición de parte dentro del proceso de reintegro, porque el proceso que instauró se ventilará ante el juzgador competente, cuya designación es un problema legal y no constitucional, y no compete a la Corte como tribunal de amparo dilucidarlo. Sobre el particular el artículo 634 del Código de Trabajo preceptúa que en casos como el presente, el tribunal designado deberá avocar el conocimiento del proceso, si estuviese conforme con lo resuelto, de lo contrario remitirá el expediente al superior para que dirima el conflicto de competencia.

En el ejercicio de la jurisdicción no constitucional, los jueces, magistrados y autoridades en general aplicarán las numerosas disposiciones sobre cómo fijar la competencia, que el sistema jurídico contiene. Y sólo en casos en

que la cuestión trascienda al rango de lo constitucional, deberá admitirse el recurso de amparo.

Todo lo anteriormente anotado lleva a concluir que el amparo de garantías propuesto resulta manifiestamente improcedente.

En consecuencia la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE el Amparo de Garantías Constitucionales propuesto por el licenciado Eduardo E. Ríos Molinar en representación de LOURDES CEDEÑO.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FUNDÁIS (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS HERRERA MORÁN, EN REPRESENTACIÓN DE CHON LEÓN LIAO CHUANG, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN EL AUTO N° 55 DE 12 DE MARZO DE 1996, DICTADO POR EL JUEZ CUARTO DE TRABAJO DE LA PRIMERA SECCIÓN DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, DIEZ (10) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia conoce en grado de apelación, la acción de amparo de garantías constitucionales presentada por el licenciado CARLOS M. HERRERA MORÁN, actuando en nombre del señor CHIN LEÓN LIAO, representante a su vez de su padre, LIAO YUK MING, propietario del RESTAURANTE LIAO, quién originalmente promovió acción de amparo de garantías constitucionales ante el Tribunal Superior de Justicia, a los efectos de que se revocase la orden de hacer, mediante la cual se fija fecha para diligencia de remate, por razón de la ejecución de la resolución de la Junta de Conciliación y Decisión PJ-4, de 27 de abril de 1995, y por medio de la cual desató demanda de despido injustificado promovida por el trabajador HÉCTOR EVILDIO MARÍN.

El Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial resolvió no admitir el amparo mediante sentencia de 16 de abril de 1996, sobre la base de haber incumplido los presupuestos para promover esta acción extraordinaria contra resoluciones judiciales. Es decir, por no haber agotado todos los remedios y vías de defensa existentes en la legislación común, en este caso, el artículo 1014 del Código de Trabajo.

La Sala concuerda con el Tribunal Superior de Justicia, ya que ha sido jurisprudencia constante sobre admisibilidad de los recursos de amparo, que éstos se interpongan cuando se hayan agotado todos los recursos en vía ordinaria, derivado de la naturaleza de acción extraordinaria del amparo.

El Magistrado Sustanciador, mediante Oficio N° 305 de 29 de abril de 1996, requirió del Juzgado Cuarto del Trabajo, tribunal en el cual se tramitaba la ejecución de la sentencia antes expresada, la remisión del expediente, y se pudo percatar que el apelante había presentado, con posterioridad a la demanda de amparo y a la decisión del mismo en primera instancia, solicitud de levantamiento de embargo de bienes, el cual fue presentado el 26 de abril del año en curso, indicativo, por lo tanto, que sí tenía a su alcance la posibilidad de enervar la orden acusada, formulando, como en efecto lo hizo, una solicitud de levantamiento del embargo, acción ésta que denota que, en efecto, le quedaba al amparista un remedio procesal en vía ordinaria, contenida en el artículo 1014 del Código de

Trabajo, y no cabía, por lo tanto, la acción constitucional de amparo promovida, por disposición expresa del artículo 2606, ordinal 2° del Código Judicial.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de 16 de abril de 1996 dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LCDO. CARLOS G. QUIRÓS A., EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE JULIO CONSTANTINO ANTIPARRA, CONTRA LA ORDEN DE NO HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN JUDICIAL DE 28 DE FEBRERO DE 1996, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL, CON SEDE EN PENONOMÉ. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, TRECE (13) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Licdo. Carlos G. Quirós A., en representación de **JULIO CONSTANTINO ANTIPARRA**, interpuso amparo de garantías constitucionales contra la orden de no hacer contenida en la resolución del 28 de febrero de 1996, emitida por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, con sede en Penonomé, la cual negó la solicitud de nulidad de la sentencia de segunda instancia dentro del proceso ordinario y declarativo de mayor cuantía entre el amparista y **JORGE ENRIQUE GONZÁLEZ CONCEPCIÓN** y **JOSÉ DEL CARMEN MITRE ADAMES.**

El accionante fundamenta el presente recurso en los siguientes hechos:

Que mediante edicto N° 4 del 2 de enero del año que decurre, se notificó la sentencia de segunda instancia dentro del proceso declarativo de mayor cuantía interpuesto por **JULIO ANTIPARRA.**

Que dicha sentencia no se notificó como correspondía, ya que por haberse fallado dos meses después de haber ingresado el expediente al despacho del Magistrado Sustanciador para ser resuelto, debe aplicarse lo normado en el artículo 990 del Código Judicial, que señala que debe enviarse copia del acta por medio de mensajero, correo recomendado a la dirección postal del apoderado o a entrega general, y un día después, se debe fijar el edicto en el Tribunal.

Que la falta de envío de la copia del fallo produce la pretermisión de lo ordenado por el artículo 990 de la excerta comentada.

Que el amparista quedó en estado de indefensión al no poder ejercer los recursos para impugnar la resolución notificada ilegalmente.

Que solicitó el actor la nulidad de la notificación en comento, la cual fue negada por el Tribunal acusado, mediante auto del 28 de febrero de 1996, pese a la omisión del trámite.

Luego de admitido el recurso, se le dio traslado al Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, que mediante oficio N° 466 del 9 de abril del presente año, envió el expediente contentivo del caso, que se encontraba en el Juzgado Primero de Circuito de Veraguas, Ramo Civil.

En dicho oficio, refiriéndose la Magistrada Sustanciadora Delia M. Carrizo de Martínez al auto impugnado mediante el recurso que nos ocupa, manifestó que "En dicho auto se explica los motivos por los cuales estimamos que esa notificación no es nula, con fundamento en los artículo 721 y 990 del Código Judicial."

También apuntó la Magistrada Sustanciadora que "De la norma anteriormente transcrita podemos colegir que, si bien es cierto el Tribunal no envió copia a los apoderados de lo resuelto, ni por correo ni por mensajero, ello no es óbice para anular ni tampoco invalidar la notificación realizada, puesto que estaríamos contraviniendo lo normado por nuestro ordenamiento procesal vigente."

Señaló la Autoridad Impugnada que el artículo 721 del Código Adjetivo señala que "los actos procesales no podrán anularse por causas distintas de las consagradas taxativamente en la ley", y que dicha omisión no está contenida en las causales de nulidad contenidas en esa norma, por lo que decidió negar lo pedido.

Expuestos los elementos principales del negocio, se dispone el Pleno a emitir su veredicto, no sin antes emitir las siguientes consideraciones.

Advierte esta Colegiatura que el norte de este negocio estriba en la aplicación del artículo 990 del Código Judicial, que a la letra dice:

> "ARTíCULO 990. Las sentencias de segunda instancia o el auto que ponga fin al proceso se notificarán por edicto, pero si se le hubiere de hacer la notificación dos meses después de haber ingresado el proceso al despacho del Magistrado Sustanciador para fallar, se enviará copia del acta por mensajero o por correo recomendado, a la dirección postal dada por el apoderado y a falta de ella a sus oficinas y en su defecto, a entrega general. En estos casos el edicto se fijará un día después del envío a la oficina del correo, de la copia de la resolución. Desde la desfijación del edicto se entiende hecha la notificación al apoderado. La falta de remisión de la copia del edicto no anula ni invalida la notificación, sin perjuicio de las sanciones disciplinarias que puedan imponerse al Secretario por esta omisión."

Según se desprende del artículo transcrito, el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial debía enviar por mensajero o correo, la copia de la resolución un día antes de fijar el edicto respectivo, toda vez que el negocio ingresó a dicha Colegiatura para fallarse el 18 de septiembre de 1995, es decir, dos meses antes del 21 de diciembre de 1995, fecha en que se dictó la sentencia.

Pero esa pretermisión no anula el acto de notificación pues la misma norma esgrimida por el amparista señala que "... La falta de remisión de la copia del edicto no anula ni invalida la notificación, ..."; por ello, considera el Pleno que la situación planteada se debate en un mero asunto de legalidad, ya que la pretermisión del Tribunal no anula el trámite ni el proceso, lo que revela que el mismo no alcanza el rango constitucional necesario para decidir la misma mediante la presente acción; por consiguiente, la pretensión es improcedente, y por lo tanto, no viable.

En virtud de lo anterior, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo de garantías constitucionales propuesto por el Licdo. Carlos G. Quirós A., en representación de JULIO CONSTANTINO ANTIPARRA, contra el auto del 26 de febrero de 1996, emitido por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial.

Cópiese y Notifíquese.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTO POR EL LICENCIADO ROGELIO CRUZ RÍOS EN REPRESENTACIÓN DE JOSÉ CASTRILLÓN HENAO, CONTRA LA ORDEN DE NO HACER EXPEDIDA POR EL FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, CATORCE (14) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Rogelio Cruz Ríos comparece ante la Corte Suprema de Justicia "como abogado defensor del señor José Castrillón Henao", en reclamo de amparo frente a lo que, según afirma, constituye violación de sus garantías constitucionales y las de su poderdante.

La acción va dirigida contra orden de no hacer del Fiscal Especializado en Delitos Relacionados con Drogas, "consistente en la **negativa tácita** del funcionario demandado de conceder, a nuestras costas, **copia íntegra y auténtica del expediente** que contiene las sumarias que adelanta en contra de mi defendido José Castrillón Henao, dentro de las cuales lo detuvo preventivamente y ordenó su indagatoria".

A juicio del demandante, la supuesta orden de no hacer atacada es violatoria de los artículos 22, 32, 40 y 17 de la Constitución Nacional, así como de la doctrina del bloque de constitucionalidad, esta última violación referida a la del artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Al rendir el informe de conducta que sobre el particular le fuera solicitado, la autoridad demandada comunica que:

> 1° "en ningún momento este despacho ha girado instrucciones y de alguna manera ha expresado que no dará copias a los distintos abogados que participan en la defensa de los sindicados dentro de este sumario.
>
> Muy por el contrario se les ha manifestado que las mismas serán dadas a cada uno de los abogados, pero que para ello ha de tenerse presente que este sumario consta de 34 tomos lo que implica que son más de cinco mil fojas las que se han de fotocopiar por lo que esto no puede hacerse en un término perentorio";
>
> 2° "Nuestro Despacho, ha habilitado un espacio en el cual se encuentran todos los tomos que, hasta la fecha se han incorporado a la investigación a fin de que los distinguidos abogados puedan consultar el expediente respectivo y ejercer así el sagrado hecho a la defensa";
>
> 3° "Finalmente queremos dejar constancia que **en ningún momento se les ha negado acceso al expediente a los distinguidos letrados**".

Al explicar el concepto de la violación de los artículos 22 y 32 constitucionales, el demandante sostiene que, al no serle entregadas las copias que solicita, se configura en este caso la reserva del sumario con perjuicio de los derechos de la defensa, mientras que resulta igualmente infringido el artículo 40 de nuestra Constitución, porque con esa conducta se le impide el ejercicio de la profesión en tanto que abogado defensor del imputado José Castrillón Henao. En cuanto a la alegada violación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se afirma que la no entrega de la copia de las sumarias infringe la garantía

procesal consistente en la comunicación previa y detallada de la acusación que se le formula al imputado.

A pesar del conocimiento público que se tiene sobre **la ya antigua mala práctica de funcionarios de instrucción que dificultan o ponen reparos al libre ejercicio de la profesión por parte de abogados que atienden la defensa de sindicados**, considera la Corte Suprema que en este caso particular no es esa la situación, y que se trata más bien de un planteamiento conceptual errado de parte del amparista.

Se advierte que lo que se impugna es la supuesta negativa de entregar "**copia íntegra y auténtica del expediente que contiene las sumarias**", pero no que se impida la garantía del contradictorio negando el acceso al expediente y, por lo tanto, el conocimiento de las sumarias. La garantía constitucional de la defensa no se perfecciona propiamente con la entrega de copia del expediente, sino con el libre y efectivo acceso del defensor al proceso, lo que no es objeto de la impugnación en esta causa. Este reconocimiento en modo alguno desconoce el derecho que tiene el abogado, y el deber correlativo del funcionario de instrucción, de solicitar y expedir las copias de la actuación, respectivamente.

Es imperativo considerar aquí la dificultad práctica de satisfacer, de manera inmediata, la demanda de uno o, eventualmente, de un número plural de letrados que participan en esta investigación, para que se les expida **"copia íntegra"** de unas sumarias que ya cuentan con 34 tomos. De allí que considere esta Corporación de Justicia que, mientras no se disponga de los medios adecuados para hacer posible el cumplimiento de tal cometido, la medida tomada por la Fiscalía, consistente en poner a disposición de las partes espacio y facilidades para la libre consulta del expediente, cumple con la finalidad de garantizar los derechos de la defensa, a través de la bilateralidad y del contradictorio.

Luego de la desestimación las supuestas infracciones anteriormente consideradas, no es del caso entonces estudiar por separado la alegada infracción del artículo 17 Constitucional, habida cuenta de su naturaleza programática.

Por las consideraciones anteriores, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DENIEGA la acción de amparo de garantías constitucionales propuesta por el licenciado Rogelio Cruz Ríos.

Notifíquese.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ M. FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (CON SALVAMENTO DE VOTO)
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO JOSÉ MANUEL FAÚNDES

Lamentablemente y con el debido respeto, no estoy de acuerdo con el Proyecto, partiendo del principio de que la debida defensa es irrebatible y admisible en toda circunstancia. Hablar de tantos tomos, de voluminosas páginas, no obvia el principio legítimo de la defensa lo que está establecido en el Artículo 22, Segundo aparte de la Constitución Nacional, que en su parte final dice,

> "Quien sea detenido tendrá derecho, desde ese momento, a la asistencia de un abogado en las diligencias policiales y judiciales".

Lo esencial en el Amparo de Garantías Constitucionales que consiste en hacer o no hacer, es que, encontrada la desatención al principio primero, hacer,

es que se acate dicha norma y la misma está denunciada en el Amparo, y reitero, que el funcionario instructor que niega la defensa la entrega del expediente para cerciorarse de su contenido, se le responda a ese derecho que sustenta lejos de toda razón expuesta por el contrario a entregar lo que se pide, visto que no hay norma constitucional o legal que exprese que por motivos de "tomos", "más de tres mil o cinco mil copias", no se pueda ofrecer al defensor del imputado el contenido de lo que existe en su contra.

Reitero nuevamente mi respeto y mi aclaración, esta última por la experiencia vivida durante mi andar de abogado litigante; y en actuaciones en que se me respondió a mi petición, caso similar al del abogado defensor del supuesto infractor en el delito de drogas, Castrillón Henao.

Fecha ut Supra.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO MARCOS TULIO LONDOÑO A., EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE ROLANDO RODRÍGUEZ CABALLERO, CONTRA LA ORDEN DE NO HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN S/N DE 26 DE MARZO DE 1996, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO, DENTRO DEL PROCESO LABORAL INTERPUESTO POR ROLANDO RODRÍGUEZ CABALLERO, CONTRA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS LÁCTEOS, S. A. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Mediante providencia de 17 de abril del año en curso, esta Corporación Judicial, después de examinar la concurrencia de los requisitos formales que la ley exige para la presentación de una acción de amparo de garantías constitucionales, admitió la promovida por el licenciado Marcos Tulio Londoño, en representación del señor **ROLANDO RODRÍGUEZ CABALLERO**, contra la orden de no hacer contenida en la resolución judicial de segunda instancia dictada por el **Tribunal Superior de Trabajo de Panamá**, dentro del proceso laboral interpuesto por Rodríguez Caballero contra Distribuidora de Productos Lácteos, S. A.

La orden de no hacer impartida, según el amparista, consiste en revocar la sentencia de primera instancia dictada por la Junta de Conciliación y Decisión N° 5 del Ministerio de Trabajo y Bienestar Social que condenó a la empresa Distribuidora de Productos Lácteos, S. A. a pagarle a Rolando Rodríguez Caballero la suma de dos mil trescientos cincuenta y dos balboas con dieciséis centésimos (B/.2,352.16) en concepto de indemnización, más los salarios caídos desde la fecha de despido hasta la ejecutoria de la sentencia, además del pago de los salarios correspondientes a los días comprendidos entre el 5 al 9 de agosto de 1993.

Con relación a las disposiciones constitucionales que se consideran infringidas, señala el artículo 32 de la Carta Fundamental en el concepto de violación directa por omisión, al desconocer el Tribunal Superior de Trabajo los derechos del trabajador a un juicio conforme a los trámites legales, no tomar en cuenta las pruebas irrefutables a favor del trabajador que existen en autos, ni respetar los derechos adquiridos y el principio "pro operario". También incluye como disposición constitucional infringida el artículo 17, que afirma fue violado directamente por omisión, ya que el Tribunal Superior de Trabajo "no está cumpliendo la Constitución y la Ley, y mucho menos asegurando la efectividad del derecho individual del señor Rolando Rodríguez Caballero".

Como quiera que contra la decisión del Tribunal Superior de Trabajo en materia de despido, no cabe recurso alguno y el libelo se presentó llenando las

exigencias normativas formales para la presentación de esta clase de acciones constitucionales, el Pleno optó por admitirla e imprimirle en consecuencia el trámite establecido por la Ley, por lo que se requirió de la autoridad demandada que enviara la actuación correspondiente al caso, o en su defecto un informe de los hechos sobre los que versa la presente acción.

El 19 de abril se recibió la Nota N° 540, en la que el licenciado Edgardo Villalobos, Magistrado del Tribunal Superior de Trabajo, informa que el Tribunal al resolver el recurso de apelación presentado tuvo en cuenta las normas y principios del debido proceso, al igual que el acatamiento de la ley y el ejercicio de las facultades que la Constitución y la ley le confieren al juzgador; por ello, infiere que la acción de amparo de garantías constitucionales presentada por el trabajador no obedece a la violación del artículo 32 de la Constitución, sino al resultado de la decisión, por ser contraria al criterio mayoritario de la Junta de Conciliación y Decisión que le favorecía. Estima que al emitir el fallo de segunda instancia, el Tribunal Superior no ha violado ninguna norma constitucional.

Cabe anotar que, además del informe presentado, se solicitó al Ministerio de Trabajo y Bienestar Social el expediente que recoge el proceso laboral interpuesto por Rolando Rodríguez Caballero contra Distribuidora de Productos Lácteos, S. A., el cual fue recibido en la Secretaría General el 29 de abril del año en curso y consta de 169 folios útiles.

El Tribunal de Amparo advierte que el accionante, al mencionar de manera expresa la orden de no hacer impartida (Cfr. fs. 16), afirma que la resolución s/n de 26 de marzo de 1996, expedida por el Tribunal Superior de Trabajo y mediante la cual revoca la sentencia PJ-5 del 19 de septiembre de 1995, "ordena a la empresa Distribuidora de Productos Lácteos, S. A. a no pagar prestaciones laborales al señor Rolando Rodríguez Caballero, ni los derechos adquiridos, a que hubiere lugar, en calidad de trabajador de la mencionada empresa". Tal afirmación no se compadece con la realidad procesal, pues en el texto de la parte resolutiva de la sentencia mencionada, el Tribunal Superior de Trabajo se limita a revocar la sentencia de la Junta de Conciliación y Decisión N° 5 y en su lugar declara el despido justificado, que era el punto sustancial de la demanda presentada por el trabajador.

En cuanto a la violación del debido proceso, debemos tomar en cuenta que esta institución, tal cual lo sostiene el Magistrado Arturo Hoyos en su obra de reciente aparición, editada por la Editorial Temis, "la garantía constitucional del debido proceso es una institución instrumental en virtud de la cual debe asegurarse a las partes en todo proceso -legalmente establecido y que se desarrolle sin dilaciones injustificadas- oportunidad razonable de ser oídas por un tribunal competente, predeterminado por la ley, independiente e imparcial, de pronunciarse respecto de las pretensiones y manifestaciones de la parte contraria, de aportar pruebas lícitas relacionadas con el objeto del proceso y de contradecir las aportadas por la contraparte, de hacer uso de los medios de impugnación consagrados por ley contra resoluciones judiciales motivadas y conformes a derecho, de tal manera que las personas puedan defender efectivamente sus derechos" (Cfr. Hoyos Arturo, El debido proceso, Edit. Temis, Colombia, 1996, pág. 54).

Por su rango constitucional, la acción de amparo no es una tercera instancia y de allí que no sea posible hacer una valoración de las pruebas aportadas, pues si bien es cierto que el debido proceso debe garantizar el derecho a presentar pruebas lícitas y a contradecir las aportadas por la contraparte, esa garantía procesal aparece cumplida en el curso del proceso laboral, pues tanto el demandante como la demandada aportaron pruebas documentales y testimoniales en tiempo oportuno y las mismas fueron apreciadas por la Junta de Conciliación y Decisión y por el Tribunal Superior de Trabajo en cada una de las instancias en que se desenvolvió el proceso.

No debe perderse de vista que cuando el punto que se debate -como ocurre en el caso que nos ocupa-, es el de la interpretación y valoración de la prueba, los errores en que se incurran devienen vicios de legalidad y es por ello que la Corte en diversos fallos ha sostenido que cuando se impugna la apreciación de la

prueba, cuyos principios se desarrollan en la ley, tales actos no logran trascender a una infracción constitucional, razón por la cual el amparo de garantías no es la vía idónea para reparar el agravio sufrido.

En lo que se refiere a la violación del artículo 17 de la Constitución Nacional, hay que recordar que dicha norma no contiene una garantía constitucional que integre derechos subjetivos del individuo, pues se trata de un enunciado programático, de carácter general, que sirve de marco conceptual y basamento constitucional en la asignación de funciones y responsabilidades de los servidores públicos que asumen la dirección de las diversas instituciones del engranaje de la administración pública.

Por tanto, no se registra la violación indicada por el amparista.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DENIEGA la acción de amparo de garantías constitucionales presentada contra la orden de no hacer contenida en la sentencia de 26 de marzo de 1996, emitida por el Tribunal Superior de Trabajo.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LCDO. GENARINO ROSAS ROSAS, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR ALFREDO QUIJANO ROYO, EN SU CONDICIÓN DE PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD TOP REAL STATE, INC., CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN S/N DE 16 DE FEBRERO DE 1996, DICTADA POR EL DIRECTOR GENERAL DE TRABAJO. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado GENARINO ROSAS actuando en nombre y representación de FERNANDO QUIJANO ROYO en su calidad de Presidente y Representante Legal de la sociedad **TOP REAL ESTATE, INC.**, ha interpuesto acción de **Amparo de Garantías Constitucionales** contra la Orden de Hacer contenida en la resolución S/N de 16 de febrero de 1996, dictada por el Director General de Trabajo.

Posteriormente, el licenciado ABDIEL ALGIS ÁBREGO en nombre y representación de la sociedad **SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, S. A.** interpuso acción de amparo contra orden de hacer contenida, como en el caso anterior, en la resolución S/N de 16 de febrero de 1996 dictada por el Director de Trabajo.

De acuerdo con los informes de secretaría, que obran a fojas 40 del primer expediente y fojas 30 del segundo, se indicó que ambas demandas estaban dirigidas contra órdenes similares contenidas en la misma resolución suscrita por la misma autoridad. En consecuencia, al considerarse que lo anotado es causa de acumulación de procesos (art. 710, núm. 2 del Código Judicial) se resolvió en ese sentido, acumulando la demanda de amparo más reciente a la más antigua para efecto de que se substancien conjuntamente y se fallen en una sentencia. (Fs. 35-36).

Admitidos los amparos, se solicitó a la autoridad demandada el envío de la actuación a esta Superioridad o en su lugar un informe acerca de los hechos

materia de estas acciones y se ordenó la suspensión inmediata de los efectos de las órdenes mientras se toma la decisión del caso.

En atención a lo anterior, el Director General de Trabajo envió los expedientes que contienen los Pliegos de Peticiones presentados por el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (SUNTRACS) en contra de Top Real Estate, INC. y de Servicios de Administración, S. A., así como los Proyectos de Convención Colectiva que el SUNTRACS pretende negociar con ambas empresas.

Como se señaló anteriormente, las dos demandas de amparo que la Corte procederá a examinar están dirigidas contra las órdenes de hacer contenidas en la resolución de 16 de febrero de 1996 dictada por el Director General de Trabajo, donde dispone u ordena que las dos sociedades amparistas celebren una Conciliación para la negociación de una Convención Colectiva de Trabajo con el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (SUNTRACS).

Veamos en síntesis los hechos que fundamentan las acciones de amparo:

En primer lugar se hace referencia al hecho que la resolución dictada en este caso por el Director General de Trabajo no admite recurso ordinario alguno, de conformidad con los artículos 436, 437, 438 y 439 y siguientes del Código de Trabajo.

Ambos libelos reiteran que mediante la orden de hacer se obliga a las empresas a contestar un pliego de peticiones presentado por el SUNTRACS y negociar con el sindicato una convención colectiva de trabajo. Que durante la Conciliación se encuentran impedidas de probar las objeciones al pliego, de expresar argumentos para enervar la legitimidad de la actuación del Sindicato y de aportar pruebas que las liberen de la obligación de negociar (art. 505 del Código de Trabajo).

Respecto a la sociedad **TOP REAL ESTATE, INC.** se indica que opera desde julio de 1995 (con un permiso provisional de operaciones), **se dedica a la actividad de mantenimiento de campos de golf**, con licencia comercial tipo A, con una planilla de 25 empleados.

Se alega que la sociedad **SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, S. A.** opera desde el 23 de octubre de 1995, **se dedica a la actividad de medición y lotificación de terrenos para la venta a particulares**, amparada con licencia tipo A, con una planilla de 27 empleados.

Los hechos antes aludidos se encuentran debidamente comprobados con las documentales acompañadas con los dos amparos interpuestos.

Argumentan los accionantes que dentro de las actividades de mantenimiento de campos de golf y de lotificación de terrenos sólo se utilizan esporádicamente los servicios de trabajadores del ramo de la construcción, para labores accidentales. Así, sobre el artículo 401 del Código de trabajo, que obliga a las empresas donde laboren trabajadores miembros de un sindicato a negociar, los amparistas puntualizan los siguientes aspectos:

1. Para que se genere la obligación de negociar se requiere que los trabajadores sean miembros del sindicato de la empresa o de un sindicato gremial de la actividad que permanentemente realiza la empresa. En estas empresas laboran trabajadores dedicados a diferentes actividades.

2. Ambas empresas alegan que hasta el momento en que se les notificó el pliego de peticiones "no contaban entre sus trabajadores de planta con ningún trabajador sindicalizado".En ningún momento la condición de sindicalizado de algún trabajador les fue comunicada "ni por el trabajador mismo, ni por las autoridades de trabajo, ni tan siquiera por el supuesto sindicato para cobrar la cuota respectiva".

Anotan que las firmas supuestamente recogidas entre los trabajadores de las

empresas que apoyan el pliego, en el caso de TOP REAL ESTATE, INC., de las siete (7) presentadas, "sólo una de ellas corresponde un trabajador de la misma" mientras que respecto a la empresa SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, S. A., de las veintisiete (27) presentadas, sólo siete de ellas corresponden a sus trabajadores, siendo que los dos supuestos alegan que dichos trabajadores "hasta donde sabemos no se encuentran sindicalizados".

Se expresa que las garantías fundamentales conculcadas en estos casos fueron las del debido proceso y el principio de legalidad que consagran los artículos 17, 18 y 32 de la Constitución. Esta afirmación se fundamenta en que la Dirección General de Trabajo acogió los pliegos de peticiones contra las empresas amparistas que presentaban defectos, que tales defectos no fueron señalados al sindicato cuando los presentó y en su lugar se ordenó a las empresas contestarlos y presentarse para la conciliación. En tal sentido, se sostiene que no se cumplió con lo exigido por los numerales 2 y 5 del artículo 427 del Código de Trabajo, pues la autoridad demandada no corroboró la información que contenía el pliego, con respecto a la existencia de la empresa, tampoco si los trabajadores que firmaron la hoja presentada por el sindicato trabajaban para las empresas, si las empresas se dedican a construir proyectos, la cantidad de trabajadores que mantienen y si alguno de ellos se encuentra filiado al SUNTRACS.

Expuestas las consideraciones de los amparistas, la Corte procede a resolver lo de lugar:

Las órdenes de hacer que se pretende sean revocadas mediante la concesión de estos amparos de garantías están contenidas en resolución dictada por el Director General de Trabajo, fundamentada en el artículo 435 y concordantes del Código de Trabajo. Como ha señalado la jurisprudencia de la Corte en casos similares al presente, en virtud del derecho invocado, la autoridad administrativa se encuentra obligada legalmente a correr traslado del pliego de peticiones (presentado por organizaciones sociales) a las respectivas empresas, señalándoles término para contestarlo y el período para la conciliación. Sin embargo, antes de dictar este acto el funcionario debe verificar el cumplimiento algunos presupuestos exigidos por otros preceptos de carácter laboral, a fin de no incurrir en arbitrariedades, obligando a una empresa o empleador a celebrar una convención colectiva con un sindicato al cual no estén afiliados los trabajadores que laboran para la misma.

Dicha consideración, sobre el cumplimiento aislado del trámite ordenado por los artículos 435, 436 y siguientes del Código de Trabajo por parte de la autoridad de trabajo, dejando de observar las obligaciones que le imponen otras normas del mismo texto legal contenidas en los artículos 401, 427 (numerales 2 y 5), 428 y 433, entre otros, que deben cumplirse con antelación a la iniciación del procedimiento de conciliación, es el cargo en que los amparistas fundamentan la violación del debido proceso legal.

De acuerdo al artículo 401 ibídem, la condición principal para que un empleador tenga la obligación de negociar con un sindicato una convención colectiva de trabajo es que entre los miembros del sindicato figuren trabajadores que presten servicios para la empresa.

Según se ha podido comprobar en los antecedentes sobre la actuación que se ha llevado a cabo en estos casos, los pliegos de peticiones presentados por el SUNTRACS contra las dos empresas amparistas, parecen contener los requisitos que determina el artículo 427 del Código de Trabajo. Sin embargo, curiosamente en ambos pliegos el contenido de los tres últimos numerales de la citada norma es igual, salvo por el nombre de las empresas. En tal sentido expresan lo siguiente:

"...

QUEJAS:

1. Que la empresa se encuentra construyendo el Proyecto Country Club, en Los Llanos de Cerro Azul, con más de sesenta (60) trabajadores, y la misma no ha formado una Convención Colectiva con el SUNTRACS, al cual están afiliados la mayoría de sus trabajadores.

2. Que los trabajadores de TOP REAL STATE, S. A., se encuentran en

condiciones de trabajo inferiores que los trabajadores que laboran en la industria de la Construcción.

PETICIONES:

1. Que la empresa TOP REAL STATE, S. A., en razón de que no existe una Convención colectiva, sea obligada a negociar el Pliego de Peticiones, y así acordar una Convención Colectiva de trabajo entre el SUNTRACS Y TOP REAL STATE, S. A.

Los trabajadores que laboran para la empresa TOP REAL STATE, S. A., suman sesenta (60), los trabajadores que apoyan el Pliego de Peticiones suman veintisiete (27), los trabajadores de confianza suman cinco (5), y en caso de huelga, deben considerarse cincuenta y cinco (55) trabajadores."

Acompañando al pliego se presentaron los documentos que enumera el artículo 428 ibídem, entre los que figura el que contiene el nombre y firma de todos los que apoyan el pliego, y según lo expresa son miembros del sindicato y laboran en las respectivas empresas (ver. fs. 7 y fs. 6 de los antecedentes adjuntos a cada amparo).

A juicio de la Corte no se puede interpretar ni se puede aplicar aisladamente el artículo 435 del Código de Trabajo, en particular en aquellos casos en donde puedan surgir dudas acerca de la veracidad de la información contenida en el pliego que se haya presentado. Es importante comprobar la veracidad del contenido de este último documento utilizando los medios que la Dirección General de Trabajo tiene a su alcance, como por ejemplo investigando de oficio si la empresa realmente se dedica a una actividad relacionada con aquella a la que pertenecen los miembros del sindicato que gestiona el pliego; aspecto que puede ser aclarado por los propios trabajadores acompañando la certificación correspondiente del Ministerio de Comercio e Industrias o por la Dirección General de Trabajo a través de las peticiones correspondientes. Estos puntos son claves y hay que dejarlos aclarados antes de dictar la resolución que le da traslado al empleador del pliego intimándolo a contestar y a comparecer a la conciliación.

La Corte observa con preocupación que el actuar al margen de lo que se acaba de exponer, viene dando lugar a que tanto las empresas como los trabajadores se vean obligados a interponer recursos de amparo de garantía ante esta Superioridad, cada vez con mayor frecuencia, en relación la presentación de pliegos ante la Dirección General de Trabajo, alegando los interesados que la actuación de las autoridades no se ajusta, en cuanto a estos menesteres, a lo establecido por la Constitución en sus artículos 32, 17 y 18.

Resulta recomendable entonces, que para asegurar las garantías constitucionales de unos y de otros se proceda, cada vez que un pliego comience a tramitarse en el Ministerio de Trabajo, adoptando aquellas medidas que impidan, por un lado, la vulneración de los derechos de los trabajadores y, por el otro, la comisión de abusos que puedan perjudicar el interés de las empresas.

En el caso que ahora analiza la Corte se puede comprobar que la información contenida en los documentos presentados por el Sindicato no es completamente veraz, puesto que la mayoría de los trabajadores que los suscriben como afiliados de la organización sindical no laboran para las empresas recurrentes mediante esta acción constitucional. Ello se puede verificar cotejando la lista con los nombres de los trabajadores que aparecen en dichos documentos con las copias autenticadas de las planillas de la Caja de Seguro Social que contienen la lista de los trabajadores que laboran para ellas y los correspondientes salarios que devengan (visible a fojas 20 y a fojas 18-19 de los respectivos antecedentes).

Al estudiar los antecedentes, la información que proporcionó el sindicato, y confrontándolos con la nómina de trabajadores de la empresa según la planilla del Seguro Social, la Corte ha podido determinar que en el caso de TOP REAL STATE, INC. sólo una (1) persona de las que figuran firmando el pliego es realmente trabajador de la empresa y el resto de los que firman el documento, es

decir ocho (8) personas no son trabajadores de ese empleador. En el caso de SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, S. A., de las veintisiete (27) personas que firmaron el pliego sólo seis (6) son trabajadores de la empresa.

Otro elemento importante que se debe tener en cuenta para proceder a la iniciación de un procedimiento de conciliación y que se puede verificar es la actividad a la que se dedica la empresa en relación a la naturaleza del sindicato que presenta el pliego. En este caso las empresas amparistas no están dedicadas a la construcción ni a actividades similares sino a la Administración de Empresas (TOP REAL ESTATE, INC.) y al SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN EN GENERAL (SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN, S. A.), según se desprende de las copias autenticadas del Registro Comercial de cada una de ellas, expedidas por la Dirección General de Comercio Interior. Las dos empresas están amparadas por una Licencia Comercial tipo "A", y no por Licencias Industriales que serían la necesarias para amparar la actividad de la construcción, de conformidad con el artículo 8 y concordantes del Decreto de Gabinete N° 90 de 25 de marzo de 1971 (por el cual se reglamenta el ejercicio del comercio y la explotación de la industrias).

No es congruente con la realidad ni conforme al orden jurídico que un sindicato de la construcción funcione o pueda agitarse dentro de empresas que lícitamente no pueden dedicarse ni remotamente a las actividades propias de la construcción u otras que le sean similares.

A solicitud de los amparistas, esta Corporación solicitó a la autoridad demandada el envío de una certificación del Departamento de Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo informando si los que firmaron los documentos de apoyo a los pliegos, que además trabajan para las empresas, se encuentran inscritos en el SUNTRACS u otro sindicato. También se pidió la certificación acerca de si ese despacho ha comunicado a las respectivas empresas lo concerniente a la sindicalización de sus empleados.

En tal sentido el Departamento de Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo y Bienestar Social certificó lo siguiente:

> "Que el libro de Registro de Organizaciones Sociales de Trabajadores y Patronos que para esos efectos se llevan en este Departamento a folio N° 446 se encuentra inscrita la Resolución N° 20 del 24 de abril de 1973, por medio de la cual el Órgano Ejecutivo Nacional le otorgó Personería Jurídica al SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN Y SIMILARES.
>
> Que no consta en nuestros archivos que los siguientes señores se encuentren afiliados a la precitada organización:
>
> | **Nombre** | **Cédula** |
> |---|---|
> | Alfonso Cruz | 9-138-474 |
> | Teodoro Rosales | 8-462-94 |
> | Mario Alberto Rosales | 8-317-805 |
> | Orlando Quintero | 4-703-2124 |
> | Duvidino Coba | 4-118-1048 |
> | Víctor Achurra | 8-456-209 |
> | Remigio Vergara | 2-162-1661 |
>
> Que el señor **Ariel Salinas**, con cédula de identidad personal N° 7-112-708 se encuentra afiliado al **Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares, (Suntracs) desde el 28 de junio de 1996 (sic).**
>
> Que no existiendo obligación legal este despacho no ha hecho comunicación alguna a las empresas **Top Real State, Inc. ni a la empresa Servicios de Administración, S. A.** sobre la existencia o no de trabajadores sindicalizados."

De lo expuesto se colige que sólo un trabajador de los que laboran para la

empresa SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, S. A., está afiliado al SUNTRACS, mientras que ninguno de los que prestan servicios para la empresa TOP REAL STATE, INC. pertenece a dicho sindicato; con lo cual se evidencia que les asiste razón a las empresas recurrentes en amparo al señalar que se les está obligando a negociar convenios colectivos solicitados por trabajadores que afirman, sin ser cierto, estar supuestamente sindicalizados.

Por lo que se deja expuesto, a juicio del Pleno en este caso se ha violado la garantía fundamental del debido proceso en perjuicio de las empresas demandantes, pues se les está obligando a someterse a un procedimiento de conciliación con un sindicato al cual no pertenecen sus empleados, que además integra a trabajadores de actividades (construcción) que no son a las que se dedican dichas empresas, no perteneciendo tampoco sus empleados a esa rama de la actividad industrial, ocurriendo además que un número plural de las personas que firman los pliegos no son trabajadores de las empresas emplazadas. Cabe señalar que dicha conculcación se debe al error a que fue inducida la autoridad (Director General de Trabajo) al considerar, de buena fe, como auténtico o verdadero el contenido de los documentos que le presentó el SUNTRACS en apoyo o prueba de sus pretensiones.

Conviene dejar bien sentado que el ejercicio de los derechos constitucionales que se les reconoce a los trabajadores para la práctica libre del sindicalismo (art. 64) y el ejercicio del derecho a huelga (art. 65), entre otros, supone el cumplimiento, por su parte, de las responsabilidades que la legislación les impone, precisamente para evitar que se incurra en el abuso de tan importantes libertades.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONCEDE el Amparo de Garantías Constitucionales propuesto por las sociedades TOP REAL ESTATE, INC. y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS, S. A. y REVOCA la resolución s/n de 16 de febrero de 1996 dictada por el Director General de Trabajo, denegando al SUNTRACS el derecho de negociar una convención colectiva con dichas empresas.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
Con Salvamento de Voto (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO RAFAEL A. GONZÁLEZ

Difiero respetuosamente del criterio de mayoría.

Estamos frente a dos recursos de amparo acumulados, interpuestos contra dos resoluciones del Director General de Trabajo de la misma fecha, las cuales simplemente disponen correr traslado de dos pliegos de peticiones a dos empresas distintas, dentro de procedimientos de conciliación separados; traslado que se surte de conformidad con el artículo 435 del Código de Trabajo.

Se dispuso acumular estos amparos. Pero cabe preguntarse si realmente en principio se puede disponer una misma cosa para ambas empresas recurrentes en amparo constitucional; o si por el contrario la decisión, en su contenido, puede ser distinta.

Aunque las similitudes son muchas, y es evidente que ambas empresas actúan de concierto (por la similitud de sus escritos y la oportunidad en que son presentados), resulta, por ejemplo, que una de ellas, Administración de Servicios, S. A. tiene afiliado a uno de sus trabajadores en el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (SUNTRACS), y en cuanto a la otra empresa nada se ha probado hasta ahora sobre ese extremo, en sentido

negativo o positivo.

Estoy consciente de lo delicado de la materia, pues se trata de una conciliación, como trámite previo a que vienen obligados por la ley los trabajadores antes de plantear el conflicto propiamente dicho, como se aprecia del artículo 426 del Código de Trabajo. De manera que bloquearle la puerta a los trabajadores, no admitiendo el pliego de peticiones, cuando al mismo tiempo que se les exige cumplir con ese trámite, resultaría en una situación kafkiana, con efectos de cámara de explosión.

Pero, por otro lado, el procedimiento de conciliación (como también el trato y arreglo directo, artículos 423-425 del Código de Trabajo) tiene consecuencias embarazosas para la empresa o empleador, que pueden resultar injustificadas.

Sin perjuicio de la buena fe de las partes, se requiere el buen juicio de las autoridades y jueces cuyo es el conocimiento de la materia. Habrá necesidad muchas veces de resolver la situación caso por caso, en vez de pretender una teoría, si ésta no tiene firmes fundamentos.

Para comenzar quisiera referirme a algunos principios generales del amparo constitucional.

La jurisprudencia ha sentado que el amparo de garantías constitucionales es para conjurar un daño que amenaza, no para revocar una orden que ya se cumplió (Sentencias Pleno, 30 de septiembre 1993, 15 de abril 1994).

Las dos empresas recurrentes contestaron el traslado ordenado por el Director General de Trabajo el 9 de abril de 1996, simultáneamente, en término de días, con la interposición de sendos recursos de amparo. De acuerdo con esto, no proceden los procesos de amparo porque el propósito del acto (orden?) ya había surtido sus efectos.

Sin perjuicio de lo expresado, que es razón suficiente para declarar no viable el amparo, parece conveniente hacer algunos alcances sobre la materia, por lo frecuente de los amparos contra la orden de traslado de pliegos de peticiones a los empleadores, dentro de las conciliaciones.

Partamos de los casos concretos de Top Real Estate, Inc. y de Servicios de Administración, S. A.

Primero hagamos referencia a los hechos.

Como lo indica la Sentencia (Pág. 8), parece que hubiera una grave irregularidad porque de ocho (8) trabajadores que el Sindicato afirma que prestan servicio a Top Real Estate, Inc. (sólo uno (1) lo es), según lo que consta en autos.

Sin embargo, se observa que el listado presentado por el Sindicato no tiene fecha. Ha podido tomarse tiempo en recoger esas firmas y presentar el pliego (f. 7 del procedimiento de conciliación). Por su parte, la Empresa al contestar el pliego no afirma que esos trabajadores no hayan estado a su servicio. Se limita a afirmar que no lo eran en el período de 28 de marzo al 3 de abril de 1996 (f. 14 de la conciliación).

En el libelo de demanda de amparo tampoco niega que hayan estado a su servicio (f. 32, amparo).

Ante esta situación no debemos ser conclusivos.

Creo que esos hechos no son propios de lidiar en un amparo, donde no se oye al Sindicato.

Eso se debe apreciar en el procedimiento de conciliación. Por eso mismo ha de corrérsele traslado del pliego a la empresa. Pero sí es conveniente que el punto tenga, en la conciliación, consideración previa o inicial; lo que envuelve

la facultad de la autoridad de trabajo para en caso necesario, cesar la conciliación.

Ahora vemos cuál es la tesis de la Sentencia. Aparece enunciada en estos términos:

> "Acompañando al pliego se presentaron los documentos que enumera el artículo 428 ibídem, entre los que figura el que contiene el nombre y firma de todos los que apoyan el pliego, y según se expresa son miembros del Sindicato y laboran en las respectivas empresas (ver fs. 7 y fs. 6 de los antecedentes adjuntos a cada amparo).
>
> A juicio de la Corte no se puede hacer una interpretación ni se puede aplicar aisladamente el artículo 435 del Código de Trabajo, en particular en aquellos casos en donde puedan surgir dudas acerca de la veracidad de la información contenida en el pliego que se haya presentado. Es importante comprobar la veracidad del contenido de este último documento utilizando los medios que la Dirección General de Trabajo tiene a su alcance, como por ejemplo investigando de oficio si la empresa realmente se dedica a una actividad relacionada con aquella a la que pertenecen los miembros del sindicato que gestiona el pliego; aspecto que puede ser aclarado por los propios trabajadores acompañando la certificación correspondiente del Ministerio de Comercio e Industrias o por la Dirección General de Trabajo a través de las peticiones correspondientes. Estos puntos son claves y hay que dejarlos aclarados antes de dictar la resolución que le da traslado al empleador del pliego intimándolo a contestar y a comparecer a la conciliación.
>
> La Corte observa con preocupación que el actuar al margen de lo que se acaba de exponer viene dando lugar a que tanto las empresas como los trabajadores se vean obligados a interponer recursos de amparo de garantía ante esta Superioridad, cada vez con mayor frecuencia, en relación con la presentación de pliegos ante la Dirección General de Trabajo, alegando los interesados que la actuación de las autoridades no se ajusta, en cuanto a estos menesteres, a lo establecido por la Constitución en sus artículos 32, 17 y 18.
>
> Resulta recomendable, entonces, que para asegurar las garantías constitucionales de unos y de otros se proceda, cada vez que un pliego comience a tramitarse en el Ministerio de Trabajo, adoptando aquellas medidas que impidan, por un lado, la vulneración de los derechos de los trabajadores y, por el otro, la comisión de abusos que puedan perjudicar el interés de las empresas".

Comparto plenamente el criterio de que en cuestiones de derecho no se puede aplicar aisladamente ninguna disposición legal. Agregaría que tampoco se debe aplicar mecánicamente ninguna disposición en sí misma considerada. El Magistrado Rogelio Fábrega ha sido autor de ponencias en donde muy acertadamente se enrumba el pensamiento en el mismo sentido.

Pero no comparto la posición de que el Director General de Trabajo deba, antes de correr traslado del pliego, "dejar aclarado:

(1) si los que aparecen como trabajadores en el listado presentado con el pliego son en efecto trabajadores de la empresa y miembros del sindicato (no es necesario que sean todos, basta uno (1);

(2) si la empresa se ocupa de la actividad propia del sindicato industrial.

Así se están marginando los artículos 433 del Código de Trabajo, que afirma que el pliego no se debe rechazar, y el 435 ibídem que le da dos (2) días a la Dirección Regional o General de Trabajo para notificar a la empresa.

Ese proceso quiere la ley que vaya caminando con ese ritmo. Si antes de los dos (2) días se puede dejar firmemente establecido que hay una razón para no dar

traslado del pliego, valga. Si no, que se discuta previamente, dentro de la conciliación, los extremos aludidos de si se trata de empleados de la empresa afecta, si hay inscritos en el sindicato que formula el pliego, y si la empresa pertenece a la actividad pertinente.

Pero que eso no se haga valer por medio de un recurso de amparo constitucional contra la providencia que corre traslado del pliego.

Toda esa actividad que nos ocupa bien se ve que es de orden legal en vez de constitucional; y tratarla en un recurso de amparo constitucional no tiene como resultado cosechar buenos frutos jurídicos.

Si el Pleno actúa de esa manera no habrá conciliación que no venga al conocimiento de la Corte.

Pasando a otro punto, que tampoco debiera ser materia de amparo, ha de tenerse presente, y esto vale solamente para Servicios de Administración, S. A., que basta que un solo trabajador de la empresa esté afiliado al sindicato, cuando éste (el sindicato) presente el pliego y el trabajador apoye el conflicto (Artículo 427, ordinal 6), para que proceda la conciliación.

La nota al artículo 426 del Código de Trabajo expresa:

> "Para la presentación del pliego por el sindicato no se exige requisito numérico en especial, pero tratándose de un grupo no organizado el artículo 430 señala el apoyo de por lo menos el 30% de los trabajadores de la empresa, establecimiento o negocio".

Por todas las razones anteriores creo que se debe negar el amparo solicitado. En la parte motiva creo que se debe explicitar el pensamiento de la Corte en esta materia.

Volviendo a los primeros párrafos de estas observaciones se trata de una materia delicada, a la cual hay que buscarle la debida expresión jurídica.

Por estas razones salvo el voto.

Fecha ut supra.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LICENCIADO OCTAVIO OCHOA GUILLLÉN, EN REPRESENTACIÓN DE JORGE LUIS PINILLA QUEZADA CONTRA LA ORDEN DE NO HACER PROFERIDA EN LA RESOLUCIÓN DE 24 DE ABRIL DE 1996, DICTADA POR EL JUEZ PRIMERO DEL CIRCUITO DE HERRERA. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Esta causa constitucional llegó a conocimiento de la Corte Suprema con motivo de recurso de apelación que propusiera el licenciado Octavio Ochoa Guillén contra resolución dictada el 2 de mayo de 1996 por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, mediante la cual no se admite el amparo de garantías constitucionales impetrado por Jorge Luis Pinilla Quinzada contra el Juez Primero del Circuito de Herrera.

El acto jurisdiccional recurrido se funda en el incumplimiento del requisito contenido en el inciso final del artículo 2610 del Código Judicial, que requiere la presentación de la orden acusada, de ser ello posible, o, en su

defecto, la manifestación expresa de no haberla podido obtener. Para este último supuesto la jurisprudencia complementa la exigencia legal requiriendo la manifestación de que se hizo lo posible por obtenerla, y las razones que lo impidieron. Enfrentado a esta exigencia, el libelo del amparo se limita a solicitar al tribunal que recaude copia autenticada del acto que contiene la orden, la que "no puedo acompañar este momento".

Este Tribunal de Apelaciones encuentra jurídicamente sustentada la resolución recurrida, y llama la atención sobre el reconocimiento que el propio amparista hace de esas razones cuando, en el escrito mediante el cual "apela y sustenta" (f. 13), explica extensamente los motivos de su omisión.

A las consideraciones que trae la resolución apelada debe agregar este Tribunal que el amparista incurre en el error de confundir la exigencia legal, común a toda demanda, de indicar "los hechos" en que funda su pretensión con las "razones de hecho en que se fundamenta el recurso" (f. 2), con el resultado de que los hechos de la demanda constituyen propiamente alegatos compendiados.

Por lo anteriormente expuesto, EL PLENO DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la resolución apelada.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ M. FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR LA FIRMA FORENSE LUQUE CORONELL Y LAM, EN REPRESENTACIÓN DE TURKI ABUZENNI, EN SU CONDICIÓN DE PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE HOTELERA FLAMINGO, S. A., CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA SENTENCIA DE 28 DE MARZO DE 1996, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La firma forense Luque Coronell y Lam, ha interpuesto acción de amparo de garantías constitucionales en representación de **TURKI ABU ZENNI**, quien es Presidente y representante legal de **HOTELERA FLAMINGO, S. A.**, contra la orden de hacer contenida en la sentencia del 28 de marzo de 1996, dictada por el Tribunal Superior de Trabajo, que confirmó la sentencia calendada 20 de enero de 1995, dictada por la Junta de Conciliación y Decisión N° 9 de Colón.

De la lectura del libelo, es ostensible que el amparista funda su impugnación en la violación del artículo 17 de la Constitución Nacional, lo cual hace la acción no viable.

Ello es así, por cuanto el Pleno de esta Corporación de Justicia ha manifestado en innumerables ocasiones que dicha precepto es de naturaleza programática, toda vez que no contiene derechos subjetivos susceptibles de ser violados, situación que, pese a que la acción se encuentra en etapa de admisibilidad, debe ser planteada, en virtud del principio de economía procesal.

Por consiguiente, no puede ser admitida la presente acción de garantías constitucionales.

En mérito de lo anterior, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la acción de amparo de garantías constitucionales propuesta por la firma forense Luque Coronell y Lam, en representación de TURKI ABU ZENNI, Presidente y representante legal de HOTELERA FLAMINGO, S. A., contra la sentencia del 28 de marzo de 1996, emitida por el Tribunal Superior de Trabajo.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR LA FIRMA VÁSQUEZ & VÁSQUEZ, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE EDWARD WILLIAM ANCHOR BARRY, CONTRA LA ORDEN DE NO HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN DE 14 DE FEBRERO DE 1996, EMITIDA POR EL TRIBUNAL DE APELACIONES Y CONSULTAS DE LO PENAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

En grado de apelación conoce la Corte, la acción de amparo de garantías constitucionales, propuesta por la firma forense VÁSQUEZ Y VÁSQUEZ, quienes actúan en nombre y representación de EDWARD WILLIAM ANCHOR BARRY, contra la sentencia de amparo de 9 de abril de 1996, dictada por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, mediante la cual "NIEGA el amparo de garantías constitucionales propuesto por EDWARD WILLIAM ANCHOR BARRY contra el TRIBUNAL DE APELACIONES Y CONSULTAS DE LO PENAL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL".

El Pleno de la Corte, al analizar la demanda de amparo propuesta, estima que no le asiste razón al accionante, por las siguientes razones:

La acción de amparo es un remedio jurisdiccional extraordinario, encaminado a revocar aquellas órdenes de autoridad que revistan la forma de una orden de hacer o de no hacer, orden ésta que viole algún derecho fundamental en contra de una persona específicamente determinada. Esta acción constitucional es viable, también, contra órdenes de hacer o de no hacer que violen algún derecho fundamental, que provengan de los órganos jurisdiccionales, no obstante que, en este último supuesto, el amparista no tenga a su alcance ningún remedio jurisdiccional en la vía ordinaria, precisamente por la naturaleza extraordinaria de la acción. Además, siendo que la orden a ser revocada es una que viola los derechos fundamentales, es preciso que la materia objeto de análisis tenga incidencia constitucional, no legal. Este Pleno, en sentencia de 3 de mayo de 1996, expuso, en parte pertinente, lo que se transcribe:

> "...
> Antes de ello, no obstante, debe señalar este Pleno, el extremado cuidado que deben los Tribunales inferiores que conocen del recurso de amparo, para admitirlo. Este denominado recurso es de naturaleza extraordinaria y procede, dentro de los procesos judiciales, contra órdenes de hacer o no hacer, que violen algún derecho fundamental, cuando se hubieren agotado todos los remedios procesales en vía ordinaria, y cuando, además, la orden de hacer o de no hacer deba revocarse de inmediato para no causar un daño grave, evidente y de difícil reparación, conforme lo dispone el artículo 2606 del Código Judicial.
>
> De lo expresado, el Tribunal, antes de admitir la acción de

inconstitucionalidad debe:

1. Determinar que el acto acusado constituía, en efecto, una orden de hacer o de no hacer.
2. Que la permanencia en el proceso de dicho acto jurisdiccional, causa al recurrente perjuicios graves, evidentes y de difícil reparación.
3. Que el recurrente haya agotado los medios y trámites previstos en la ley para la impugnación de la resolución judicial de que se trate.
4. Que el acto vulnere algún derecho fundamental o garantía constitucional. Es decir, que lo que se debate sea materia constitucional".

La situación en que nos encontramos se encuentra dentro de aquellas materias que tiendan a asegurar la imparcialidad de la justicia, y cuando en un proceso determinado este principio de imparcialidad se encuentre afectado, debe el juez de la causa, abstenerse de pronunciarse o intervenir en el asunto, mediante la manifestación de impedimento. No obstante, si a pesar de ello, el juez de la causa no manifiesta el impedimento correspondiente por alguna de las causales señaladas en el artículo 749, que constituye una enumeración taxativa, el ordenamiento jurídico procesal le otorga el derecho de recusar al funcionario, con arreglo al artículo 755 del Código Judicial. Como se aprecia, en el presente asunto, el ordenamiento jurídico procesal le confiere remedios procesales a una de las partes para asegurarse la independencia del juzgador. Con lo dicho bastaría para rechazar la acción de amparo, por cuanto tenía el amparista a su alcance, el mecanismo de la recusación si consideraba que el juez no debía conocer de la causa. Pero como el Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, no lo hizo, sino que entró a conocer el denominado recurso de amparo, y a decidir el mismo, denegándolo, corresponde a este Pleno resolver el recurso de apelación contra la sentencia de amparo ya mencionada.

El Pleno debe concordar con las argumentaciones del Tribunal Superior que desembocaron en la decisión de negar el amparo, sentencia jurisdiccional que, a juicio de este Pleno, y sin perjuicio de lo expresado en torno a la admisión de las acciones de amparo por parte de los Tribunales inferiores, es ajustada a nuestro ordenamiento jurídico.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de 9 de abril de 1996, dictada por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial.

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LICENCIADO ROLANDO VILLALAZ GUERRA EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL DR. MAURO ZÚÑIGA ARAÚZ EN SU CONDICIÓN DE SECRETARIO GENERAL DE LA ASOCIACIÓN DE MÉDICOS, ODONTÓLOGOS Y PROFESIONALES AFINES DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL (AMOACSS) CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN EL AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA N° 9-96 EMITIDO POR EL DIRECTOR NACIONAL DE COMPRAS Y ABASTOS DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Licenciado Rolando Villalaz Guerra, actuando en nombre y representación del Dr. **MAURO ZÚÑIGA ARAÚZ**, en su condición de Secretario General de la Asociación de Médicos, Odontólogos y Profesionales afines de la Caja de Seguro Social (AMOACSS) interpuso acción de amparo de garantías constitucionales contra la orden de hacer contenida en el Aviso de Licitación N° 9-96, para el 16 de abril de 1996, expedida por el Director Nacional de Compras y Abastos de la Caja de Seguro Social, Ingeniero Guillermo González.

Encontrándose el presente negocio en etapa de admisibilidad, el apoderado judicial del recurrente presentó escrito en el que manifiesta que desiste de la acción propuesta.

El artículo 1073 del Código Judicial, en forma expresa indica que la parte actora puede desistir de su pretensión. Si el desistimiento cumple con los requisitos que exige la ley, el Juez debe admitirlo y dar por terminado el trámite.

En vista de que el desistimiento presentado en esta ocasión llena las formalidades establecidas en el Artículo 1075 del citado Código, esta Corporación Judicial lo admite y ordena el archivo del expediente.

En mérito de lo expuesto, EL PLENO DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE el desistimiento de la acción de amparo de garantías constitucionales presentado por el Doctor Rolando Villalaz Guerra, en representación del Doctor MAURO ZÚÑIGA ARAÚZ y ORDENA el archivo del expediente.

Notifíquese.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS E. MUÑOZ POPE (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES CONTRA LA ORDEN DE NO HACER CONTENIDA EN EL AUTO DEL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA EL 22 DE FEBRERO DE 1996. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTE (20) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado ROLANDO VILLALAZ GUERRA, en calidad de parte demandante, ha interpuesto acción de amparo de garantías constitucionales contra la orden de no hacer impartida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, mediante Auto de 22 de febrero de 1996, que niega el incidente de recusación propuesto por la firma forense VILLALAZ Y ASOCIADOS en contra de la Fiscal Tercera Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá.

Corresponde en la presente etapa procesal determinar la admisibilidad del recurso de amparo, para lo que resulta necesario confrontar la demanda de amparo con los requisitos señalados en el artículo 2610, así como los criterios que, sobre este particular, ha señalado la Corte sobre esta acción constitucional.

Se observa que estamos ante una orden de no hacer, consistente en no admitir incidente de recusación propuesto por el amparista que, a su juicio, viola los artículos 19, 32 y 39 de la Constitución Política.

En lo relacionado con la pretendida orden de hacer o de no hacer, ésta debe revestir la forma de un mandato expedido por un servidor público, que origine un deber de acción o abstención, cuando tal orden viole alguna garantía constitucional del amparista, lo que no ocurre en este caso.

Sobre este particular, este Pleno ha señalado, en su decisión de 1° de noviembre de 1995, lo que se transcribe:

> "...
> Revisten la forma de una orden de hacer aquellos actos, jurisdiccionales o administrativos, que contienen en su parte resolutiva un mandato imperativo ya sea dirigido directamente al afectado o a un funcionario, con la finalidad que sea cumplido, y que de ese mandato se derive la violación de los derechos fundamentales subjetivos del amparista. Reiterada jurisprudencia de este tribunal manifiesta el criterio externado, entre otras sentencias de 22 de octubre de 1993 y de 3 de mayo de 1994".
> (Registro Judicial. Noviembre. 1995. Pág. 4).

Este pleno no advierte en que forma los artículos 19, 32 y 39 afectan los derechos fundamentales del amparista, por cuanto el incidente de recusación se ha llevado a cabo escrupulosamente en la forma que previene la ley, y, por el otro, los derechos de igualdad y de derecho de asociación no se refieren al amparista, sino al funcionario judicial sujeto de la recusación. En este recurso se aprecia, de su lectura, más bien una discrepancia del amparista con la decisión del Tribunal Superior, de negar el incidente de recusación.

De otra suerte, al exponer el concepto de la violación, no se desprende de la explicación del amparista, en que forma se ha violado los derechos constitucionales invocados como infringidos. El concepto de la infracción, para que se tenga por cumplido, ha de consistir en una explicación o conceptualización sobre la forma en que el derecho constitucional ha sido infringido. Sobre este aspecto y alcance de la explicación del concepto de la infracción, ha señalado este Pleno, en resolución de 6 de febrero de 1991 lo que se transcribe:

> "...
> A juicio del Pleno la demanda no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 2610 del Código Judicial, que requiere que en aquélla se expresen las garantías fundamentales que se estimen infringidas y el concepto de la violación, ya que el demandante no explica, no brinda argumentos, ni da razón alguna que exponga en qué consiste el concepto de la violación. Para cumplir con este requisito se requiere que el demandante no sólo enuncie formalmente cuál es el concepto de la violación sino que se dé una explicación del mismo que le permita a esta corporación poder evaluar el fondo de la violación que se invoca ...".

En sentido similar, la resolución de 12 de enero de 1994 expuso lo que se transcribe.

> "... Para considerar que está debidamente formulada la demanda, es obligación del amparista, no sólo mencionar la garantía que considere infringida, sino exponer el concepto de cómo ha sido violada. Aparte de no existir la exposición metódica sobre el concepto de la infracción, salta a la vista que el demandante se refiere más a aspectos de legalidad y no se adentra a determinar cuál es en sí la infracción de la garantía fundamental. Todo lo expuesto determina que no debe aceptarse el amparo de garantías constitucionales".

El recurso presentado se encuentra, a juicio de este Pleno, frente a estas dos circunstancias, es decir, que la supuesta orden de hacer o no hacer violen los derechos o garantías del amparista, por una parte, y la explicación de la forma en que la orden acusada ha violado las normas constitucionales señaladas en el recurso, que le impiden admitir el recurso interpuesto. En cuanto a este segundo aspecto, se puede sin esfuerzo mediante la lectura del recurso y de las piezas que con el mismo se aportan, que el concepto de la infracción se refiere a los argumentos de carácter legal que fueron el sustento de incidente de

recusación.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE el amparo de garantías constitucionales propuesto por la firma forense VILLALAZ Y ASOCIADOS contra la orden de no hacer contenida en el auto del Segundo Tribunal Superior de Justicia del 22 de febrero de 1996.

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) CARLOS MUÑOZ POPE
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JAIME PADILLA GONZÁLEZ, EN SU CONDICIÓN DE GESTOR OFICIOSO DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE HOTELERÍA, S. A., CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA NOTA N° 210-73 DE 3 DE MAYO DE 1996, PROFERIDA POR EL JEFE DE AUDITORÍA, A. I. DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y TESORO. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

JAIME A. PADILLA GONZÁLEZ, actuando, según dice, como gestor oficioso de la sociedad Administración y Servicios de Hotelería, ha presentado una acción de amparo con el propósito de que se revoque la orden de hacer contenida en la comunicación contenida en la nota N° 210-73, de 3 de mayo de 1996, del Departamento de Auditoría Integral de la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Hacienda y Tesoro que tiene como propósito poner en conocimiento del contribuyente que la Administración Tributaria realizará actividad de fiscalización tributaria e indica a los funcionarios del Departamento de Auditoría Integral que llevarán a cabo dicha función administrativa.

El Pleno observa que la acción de amparo es interpuesta por persona distinta de la que es titular de los derechos constitucionales supuestamente violados, a título de gestor oficioso, sin que se haya cumplido presupuesto alguno que, para tal gestión, consagra el Código Judicial (artículo 631 del Código Judicial). No obstante, sólo por dicha razón el Pleno considera que el amparista no carece de legitimación, dado que la acción de amparo la puede interponer la persona a quien la orden demandada le viola algún derecho o garantía fundamental, o un tercero. (Artículo 50 de la Constitución Política y artículo 2606 del Código Judicial).

El Pleno se ha pronunciado recientemente por el alcance que tiene la frase "o por cualquier persona" que contiene el artículo 50 de la Constitución Política, señalando, en primer lugar, en la sentencia de amparo de 5 de noviembre de 1990, que el tercero está legitimado en la medida en que no pueda ser extraño al interés de la persona contra la cual se haya expedido la orden que se estima violatoria de algún derecho fundamental, o por lo menos, que no tenga un interés opuesto al destinatario de la orden de hacer o de no hacer. Posteriormente, mediante sentencia de amparo de 17 de julio de 1991, señaló no estar legitimado en un proceso de amparo de garantías constitucionales, por cuanto la orden de hacer o de no hacer no le concernía, por cuanto no incidía en ningún derecho o garantía consagrada a su favor. Por el interés que tiene, este segundo fallo señala:

"Aquí aparecen obviamente traslapados los intereses de la demandante

> con los de su esposo, siendo que el último carece de legitimación en esta causa porque no es parte en la misma. Es fácil advertir que la "orden de no hacer" que se impugna no le concierne jurídicamente; la parte resolutiva del acto jurisdiccional que la contiene no viola ningún derecho o garantía consagrado a su favor por la Constitución Nacional como es la exigencia tanto de los artículos 50 de la Carta Magna y 2606 del Código Judicial. No está entonces investido de legitimación activa, y por no ser parte en el negocio -lo que le niega la titularidad de alguno de los derechos procesales básicos- no pueden ser anunciadas pretensiones en su nombre. De allí que esta presunta violación se refiera a un elemento extraño al proceso, por lo que no puede ser considerada favorablemente".

Como comenta el procesista PEDRO J. BARSALLO, en su monografía sobre aspectos procesales del amparo de garantías constitucionales, en cuyo trabajo aparecen citadas ambas sentencias, según la sentencia de 17 de julio de 1991, "la violación constitucional que se denuncia en el amparo debe dirigirse contra un derecho o garantía del actor del amparo consagrado ó establecido en la Constitución Nacional". (Aspectos Procesales del Amparo de Garantías Constitucionales; Pedro A. Barsallo J.; Panamá; Marzo, 1996; Pág. 15).

Por otra parte, advierte el Pleno que la personería jurídica del destinatario de la orden impugnada, la persona jurídica denominada "Administración y Servicios de Hotelería, S. A.", no fue acreditada ni acompañada con la demanda de amparo, omisión que no puede reemplazar este Pleno, por lo que, ante esta anomalía, no puede prosperar el recurso presentado.

Como es sobradamente conocido, la acción de amparo de garantías fundamentales, mal denominado recurso de amparo, constituye un remedio procesal de naturaleza extraordinaria, de tutela a los derechos fundamentales de las personas, que tiene como propósito revocar aquéllas órdenes que violen o menoscaben algún derecho fundamental al destinatario de la orden.

El Pleno debe, en esta etapa procesal, analizar si la acción de amparo cumple con los requisitos para su admisibilidad contenidos en el artículo 2610 del Código Judicial, esto es, que se trate de una orden de hacer o de no hacer, que la gravedad e inminencia del daño que representan amerite una inmediata revocación del mandato dirigido contra el destinatario de la orden, cuando dicha orden vulnere o lesione un derecho o una garantía fundamental establecida por la Constitución Política.

La supuesta orden cuya revocatoria se pide por medio de esta acción constitucional extraordinaria es contra la nota 210-73, de 3 de mayo de 1996, que, para mejor inteligencia de esta resolución, resulta conveniente transcribir:

> "Por este medio le informo que la Dirección General de Ingresos a través del Departamento de Auditoría Integral ha decido implantar la fiscalización de las entradas de los clientes a su establecimiento desde las 12:00 p. m. del día 3 de mayo de 1996 hasta las 6:00 a. m del Lunes 6 de mayo de 1996.
>
> La fiscalización se hará a través de tres (3) turnos rotativos y para esta labor hemos asignado a los siguientes funcionarios:
>
> | | |
> |---|---|
> | Sr. Leonardo Cajiga | Supervisor |
> | Lic. Julio Cedeño | Auditor |
> | Lic. Hermilio Ochoa | Auditor |
> | Lic. Jesús Caballero | Auditor |
> | Lic. Pascual Hayot | Auditor |
> | Lic. Marcos Yearwood | Auditor |
>
> Esperando su cooperación al respecto.
>
> Atentamente,
> (Fdo.)
> Alfonso Montenegro Solís

Jefe del Depto. de Auditoría Integral a. i.".

Salta a la vista que el acto impugnado no constituye una orden, es decir un mandato que impone a su destinatario una conducta o una abstención. La comunicación que se ha impugnado no constituye un mandato que obligue a una determinada conducta al contribuyente, sino una mera comunicación en el sentido que la Dirección General de Ingresos, realizará una actividad administrativo-tributaria de fiscalización, así como las personas que, dentro del Ministerio de Hacienda y Tesoro, realizarán la aludida fiscalización. Es, por lo tanto, el ejercicio de una función tributaria, justamente de fiscalización, para lo que la Ley dota a la Administración de potestades administrativas, mediante cuyo ejercicio el contribuyente se encuentra en una situación pasiva, de inercia, en una condición de sujeción, frente a la Administración. Naturalmente, el ejercicio de la potestad administrativa debe realizarse con arreglo a los procedimientos establecidos (principio de legalidad). Pues bien: el ejercicio de la potestad o de las potestades tributarias está debidamente fundamentado en las funciones y atribuciones que la ley (Ley 8ª de 1964 y Decreto de Gabinete N° 109 de 1970 y sus modificaciones) o de las normas reglamentarias (Decreto Ejecutivo N° 4, de 20 de enero de 1984) le asignan a la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Hacienda y Tesoro.

Por otra parte, el acto expedido por el Departamento de Auditoría Integral constituye un acto de comunicación, de mero trámite, para la adecuada fiscalización de las obligaciones tributarias a cargo de los contribuyentes. Dicho acto, como los oficios, no constituyen ordenes, por lo que se percibe claramente que la acción de amparo adolece de un presupuesto esencial que impide su admisión, es decir, no constituye una orden. Véase, sobre este último aspecto, la sentencia de amparo de 3 de mayo de 1996.

De lo dicho se desprende que la acción de amparo promovida es manifiestamente improcedente y la demanda que la contiene debe ser inadmitida.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la acción de amparo de garantías constitucionales interpuesta por el licenciado JAIME PADILLA GONZÁLEZ, en su condición de gestor oficioso de ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE HOTELERÍA, S. A., contra la orden de hacer contenida en la Nota N° 210-73 de 3 de mayo de 1996, proferida por el Jefe de Auditoría, A. I. de la DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y TESORO.

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) CARLOS MUÑOZ POPE
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTO POR LA FIRMA FORENSE GALINDO, ARIAS & LÓPEZ, EN REPRESENTACIÓN DE RITA IRENE TYPALDOS DE OZORES, CONTRA LA ORDEN DE NO HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN N° 578 DE 25 DE MARZO DE 1996, DICTADA POR EL JUEZ SEGUNDO DEL CIRCUITO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL RAMO CIVIL. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

A este despacho le fue repartida la acción de amparo de garantías constitucionales, llegada en grado de apelación, que ingresara a la Secretaría General de la Corte Suprema con el número 361-96. Esta acción de amparo fue: 1°

propuesta por la señora **Rita Irene Typaldos de Ozores**, 2° contra el **Auto número 578, de 25 de marzo de 1996**, 3° dictado por el **Juez Segundo del Primer Circuito Judicial de Panamá, Civil**, y 4° el recurso de apelación se propone contra **Sentencia de 22 de abril de 1996, dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial**.

Aun cuando en el cuaderno repartido a este despacho no aparece informe secretarial que lo indique, lo cierto es que por Secretaría ya había sido recibida, e ingresada con el número 360-96, otra acción de amparo de garantías constitucionales, igualmente en grado de apelación, con idénticas características, a saber: 1° propuesta por la señora **Rita Irene Typaldos de Ozores**, 2° contra el **Auto número 578, de 25 de marzo de 1996**, 3° dictado por el **Juez Segundo del Primer Circuito Judicial de Panamá, Civil**, y 4° el recurso de apelación se propone también contra **Sentencia de 15 de abril de 1996, dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial**, demanda que le correspondió en reparto al magistrado Eligio Salas.

La comprobación de estas circunstancias dio lugar a que el magistrado Rafael González dirigiera al magistrado Eligio Salas un memorándum, en el que expresa:

> "He recibido en lectura el presente proceso de amparo de garantías constitucionales (N° 360-96). Trata de la misma materia que recurso de amparo en conocimiento como ponente del Magdo. Fabián Echevers (N° 361-96). Resulta evidente que se trata de la misma situación jurídica, de hecho y de derecho, por tanto lo que se resuelve en un caso determina la suerte del otro. Pido respetuosamente que se acumulen".

Como quiera que se trata, a primera vista, de una petición debidamente fundada, lo que procede es resolverla favorablemente.

Por las anteriores consideraciones, la CORTE SUPREMA, EN SALA UNITARIA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECRETA LA ACUMULACIÓN del proceso de amparo identificado con el número 361-96, con el que lleva el número 360-96.

Cúmplase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS GÓMEZ
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LICENCIADO HÉCTOR A. CÁRDENAS, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE ROBERTO BRANDAO DE GRACIA, CONTRA LA RESOLUCIÓN DE 18 DE ABRIL DE 1996, EXPEDIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL CUARTO DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TREINTA (30) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Héctor A. Cárdenas, actuando en nombre y representación de Roberto Brandao De Gracia, ha promovido recurso de apelación contra la resolución, de 18 de abril de 1996, dictada por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, por la cual no se admitió el amparo de garantías constitucionales interpuesto contra el Auto de 5 de marzo de 1996, proferido por el Juez Segundo de Circuito de los Santos.

Mediante esta decisión se abrió causa criminal contra Roberto Hércules Brandao De Gracia, a quien se le aplicó la medida cautelar contenida en el artículo 2147-B del Código Judicial, consistente en la prohibición de abandonar

el territorio de la República de Panamá, con la obligación de presentarse el primer día de cada mes al Tribunal.

Considera el apoderado del amparista que la medida cautelar decretada en el Auto de 5 de marzo de 1996 viola los artículos 17, 19, 22 y 32 de la Constitución Nacional.

El Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial al resolver en primera instancia el amparo de garantías constitucionales, motivó su decisión así:

> "En reiterada jurisprudencia, la Honorable Corte Suprema de Justicia ha externado que el auto de enjuiciamiento no puede ser motivo de amparo, pues, es interlocutorio, o sea que no entra a considerar la inocencia o culpabilidad del procesado que sigue conservando a su favor el principio de presunción de inocencia aparte de que no es necesario esperar el auto de enjuiciamiento para tomar medidas cautelares contra el imputado (fallos de 16 de noviembre de 1992; 15 de enero de 1993; 18 de noviembre de 1993; y 24 de marzo de 1995).
>
> Ahora bien, como por otra parte, también se ha censurado por esta vía la concesión de una medida cautelar personal, que permite apelación en efecto diferido, lo que no se hizo oportunamente, tampoco procede la acción, al no haberse agotado los medios de impugnación ordinarios que flanquea (sic) nuestro derecho positivo." (Fs. 20).

Al sustentar la alzada, el apoderado especial del amparista manifestó lo siguiente:

> "Nuestra inconformidad con el auto de 18 de abril de 1996 estriba en el hecho de que consideramos que el Tribunal en el auto apenas aludido divide lo indivisible, considerando de una parte que contra el auto de proceder no procede amparo y de otra parte negando el amparo contra las medidas cautelares porque no se apeló de las mismas sin considerar que dichas medidas cautelares, como expusimos en nuestro escrito de 16 de abril de 1996 y que son las que consideramos aplicadas inconstitucionalmente, fueron dictadas juntas en un auto de llamamiento a juicio que no puede ser apelado, según disposición clara de ley, motivo por el cual El Tribunal nos hace imposible impetrar cualquier defensa, ya que no podíamos apelar de las medidas cautelares porque estaban en un auto inapelable y ahora no podemos presentar amparo porque debíamos apelar." (Fs. 23).

Tal como lo afirma el demandante, la orden de hacer impugnada mediante la presente acción es la medida cautelar decretada contra el amparista. Las resoluciones sobre medidas cautelares personales son apelables en el efecto diferido (Art. 2147-B del C. J.), por tanto, aún cuando sean dictadas en un auto de enjuiciamiento pueden impugnarse y la interposición del recurso suspenderá el cumplimiento de la medida cautelar personal apelada, pero continuará el curso del proceso ante el inferior, en lo que no dependa necesariamente de esta medida (Artículos 1123 ordinal 3 y 1125 del Código Judicial).

En cuanto a la procedencia de la presente acción, el Pleno de la Corte debe reiterar que las órdenes de hacer mediante las cuales se decreta una medida cautelar personal, restrictiva de la libertad personal, deben ser impugnadas mediante la acción de habeas corpus y no por medio del amparo de garantías constitucionales, ya que el proceso de habeas corpus es la vía idónea para determinar la constitucionalidad y legalidad de las órdenes mediante las cuales se decreta medidas restrictivas de la libertad personal. En este sentido se ha expresado el Pleno de la Corte en las sentencias de 18 de noviembre de 1991, proferida en la acción de amparo promovida por Constantino Juan Lekas y otros contra el Fiscal Tercero de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá; y de 14 de marzo de 1994, dictada en la acción de amparo promovida por Lastenia Esperanza Durán Escala contra el Juzgado Segundo de Circuito de Los Santos.

En consideración a lo expuesto, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia

estima que el fallo apelado, mediante el cual no se admite el amparo impetrado, debe confirmarse.

De consiguiente, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la resolución de 18 de abril de 1996, dictada por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, en la acción de amparo de garantías constitucionales promovida por el licenciado Héctor Cárdenas, en representación de ROBERTO BRANDAO DE GRACIA, contra el Auto de 5 de marzo de 1996 emitido por el Juez Segundo de Circuito de Los Santos.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LICENCIADO HILARIO BELLIDO, EN REPRESENTACIÓN DE ALBERTO VÍCTOR BTESH, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN N° 03-96- D. D. DE 7 DE FEBRERO DE 1996, DICTADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARRENDAMIENTOS DEL MINISTERIO DE VIVIENDA. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La sociedad anónima denominada QUASER, S. A., por conducto de su apoderado judicial, ha promovido acción de amparo de garantías constitucionales contra la Dirección General de Arrendamientos del Ministerio de la Vivienda, en el procedimiento administrativo de devolución del depósito a que se refiere el artículo 13 de la Ley 93 de 1973.

Corresponde en esta etapa analizar si la acción reúne los requisitos y presupuestos que la ley exige, y, en caso afirmativo, admitir el mismo. La acción constitucional se endereza contra la Dirección General de Arrendamientos, y persigue que se revoque la Resolución 03-96 D. D., de 7 de febrero de 1996, de la citada Dirección, confirmada por el Ministro de Vivienda, al resolver recurso de apelación contra la misma, dentro del procedimiento administrativo de devolución del depósito en los contratos de arrendamiento. La demanda cumple con los requisitos formales que se exigen para estos procesos constitucionales, puesto que cumple con los requisitos de toda demanda, las disposiciones constitucionales que se estiman infringidas, que es solamente una, la garantía del debido proceso consignada en el artículo 32 de la Constitución Política y el concepto de la infracción. La demanda viene acompañada de los actos administrativos demandados, en los que se encuentra contenida la orden de hacer o de no hacer, en el caso del presente proceso constitucional, la orden de devolver el depósito a que se refiere el artículo 13 de la Ley 93 de 1973.

Advierte este Pleno, que la orden de hacer atacada, constituye un acto administrativo, que ordena la devolución del depósito, cuyo conocimiento y decisión le corresponde a la Dirección General de Arrendamientos, contra cuya decisión se concede el recurso de apelación, el que agota la vía gubernativa (Decreto Ejecutivo N° 8, de 28 de septiembre de 1993, artículo 32). La acción de amparo constituye un remedio excepcional y extraordinario de tutela de los derechos fundamentales, otorgado a las personas contra las cuales se dicte por autoridad competente una orden de hacer o de no hacer, violatoria de los derechos fundamentales, cuando dicha orden, cuando por la inminencia y gravedad del daño que puede causar, amerite su inmediata revocación, preservando el respeto a los

derechos fundamentales por parte de las autoridades. Como acción extraordinaria, no cabe cuando el ordenamiento jurídico ofrezca remedios procesales al afectado, y cuando, por razón de la materia, se cuestione una materia que no sea constitucional, y que corresponda al plano de la legalidad. En este sentido, conviene hacer referencia al alcance del artículo 32, que consagra la aludida garantía, expuesto por el Magistrado ARTURO HOYOS, quien la concibe como "una institución instrumental en virtud de la cual debe asegurarse a las partes en todo proceso -legalmente establecido y que se desarrolle sin dilaciones injustificadas- oportunidad razonable de ser oídas por un tribunal competente, predeterminado por la ley, independiente e imparcial, de pronunciarse respecto de las pretensiones y manifestaciones de la parte contraria, de aportar pruebas lícitas relacionadas con el objeto del proceso y de contradecir las aportadas por la contraparte, de hacer uso de los medios de impugnación consagrados por ley contra resoluciones judiciales motivadas y conformes a derecho, de tal manera que las personas puedan defender efectivamente sus derechos". (El Debido Proceso, Temis, 1996, pág. 54).

Se observa que en el procedimiento administrativo de devolución del depósito se ha respetado el contenido esencial del derecho fundamental lesionado, al decidirse la solicitud de devolución por autoridad competente, brindando oportunidad para el ejercicio de defensa, acto debidamente notificado, y el recurrente ha tenido ocasión y acceso al uso de recursos en vía administrativa para contradecir las pretensiones de la Administración, la cual atendió todos los aspectos objeto de los medios de impugnación utilizados.

Desde otra vertiente, el Pleno advierte igualmente que el recurrente impugna, por esta vía extraordinaria de naturaleza constitucional, un acto administrativo, que ha sido consecuencia de un procedimiento administrativo, en el cual se ha respetado el derecho de defensa, por parte de la autoridad pública con competencia para decidir la petición y los recursos contra la misma. Como acto administrativo, el ordenamiento jurídico constitucional le ofrece un remedio, también constitucional, de acudir ante la jurisdicción contencioso administrativa, una vez que se haya agotado la vía gubernativa, como ocurre en el presente proceso.

Con lo dicho, queda de manifiesto que el recurrente utilizó, de manera inapropiada, los recursos que el ordenamiento pone a su alcance, que es la acción contencioso administrativa contra los actos de naturaleza administrativa, como ocurre en este caso. Por lo tanto, y como consecuencia de la utilización inapropiada del recurso que era el que correspondía por razón de la materia, la acción de amparo deviene manifiestamente improcedente. Ha sido, en verdad, constante la jurisprudencia de este Pleno en materia de este proceso constitucional, que la vía para cuestionar e impugnar un acto administrativo no es la vía constitucional del amparo, sino la vía contencioso administrativa, sea mediante el recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción, sea mediante el recurso administrativo de nulidad. Sin ánimo de ser exhaustivos, nos remitimos a las sentencias de amparo de 17 de octubre de 1994 y de 7 de abril de 1995.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la acción de amparo de garantías constitucionales interpuesta por el licenciado HILARIO BELLIDO, en representación de ALBERTO VíCTOR BTESH, contra la orden de hacer contenida en la Resolución N° 03-96 D. D. de 7 de febrero de 1996, dictada por la DIRECCIÓN GENERAL DE ARRENDAMIENTOS DEL MINISTERIO DE VIVIENDA.

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE HABEAS CORPUS

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE FÉLIX FRAÑA MOREIRA, CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, DOS (2) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Guillermo Augusto Salazar Melgar interpuso acción de Habeas Corpus a favor del señor **FÉLIX FRAÑA MOREIRA**, y contra el licenciado **ALEJANDRO MONCADA LUNA**, Director de la Policía Técnica Judicial.

Después de haber librado el correspondiente mandamiento ejecutivo contra varias autoridades, se recibió procedente de la Procuraduría General de la Nación, la Nota DPG-512-96 de fecha 24 de abril de 1996 (f. 9), en la cual se manifestó que el señor **FÉLIX FRAÑA MOREIRA**, fue puesto a órdenes de la Fiscalía de Circuito del primer Circuito Judicial de Panamá, de Turno, con el oficio PGN-SG-533-96, situación que varía la competencia del tribunal que debe conocer de la acción interpuesta.

En consecuencia la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLINA el conocimiento de esta acción ante el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial y ORDENA, su inmediata remisión.

BASE LEGAL: artículos 2588 y 2602 del Código Judicial.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE DORIS RAMONA MACHADO RUBIDES CONTRA EL FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DOS (2) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El señor Samuel Mathews James ha interpuesto ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, recurso de Habeas Corpus a favor de la señora Doris Ramona Machado Rubides y contra el Fiscal especializado en delitos relacionados con drogas.

Librado el mandamiento de Habeas Corpus contra el Fiscal especializado en delitos relacionados con drogas, el mismo dio respuesta mediante el Oficio N° 3386-96 de 15 de abril de 1996, en los siguientes términos:

> "A. Si, es cierto que este Despacho ordenó la detención de la señora DORIS RAMONA MACHADO RUBIDES, mediante resolución calendada veintitrés (23) de febrero de mil novecientos noventa y seis (1996).
>
> B. FUNDAMENTOS DE HECHO: Los hechos se inician el día (19) de

febrero del año que decurre, cuando agentes de la Zona de Policía del Canal, visualizan a un sujeto que salía de la vieja piquera de taxi ubicada frente al Muelle 18, quien responde al nombre de FRANCISCO BERNAL SAMANIEGO, al ser sometido al registro de rigor, se le encuentra en su poder dos (2) sobrecitos de plástico transparente contentivos de un polvo blanco que se presume sea COCAÍNA y seis (6) fragmentos de una sustancia compacta color crema presumible crack.

Es cuestionado el señor Bernal Samaniego por los agentes captores quien les manifiesta que la sustancia ilícita la compró a una señora que le apodan "LA NEGRA" o "LA CHOMBA", quien se encontraba en la parte trasera de la piquera antes mencionada y que la misma se dedica a la venta de drogas.

Las unidades de la Policía Nacional realizan un operativo en el lugar mencionado, logrando detener a la ciudadana DORIS RAMONA MACHADO RUBINDES, a quien se le incautó una bolsa de color blanco del almacén La Oca Loca, contentiva en su interior de TREINTA Y SEIS (36) sobrecitos de plástico transparente con un polvo color blanco que se presume sea la droga conocida como COCAÍNA, así también CUARENTA Y DOS (42) envoltorios en forma de cigarrillos de color blanco con una hierba seca que se presume sea MARIHUANA y la suma de VEINTICUATRO BALBOAS (B/.24.00) en efectivo, que se presume sean producto de la venta de droga.

Al ser indagada la señora MACHADO RUBIDES el día veintitrés (23) de febrero del año en curso, niega toda la responsabilidad que se le imputa.

A fojas 36-40 del sumario obra la Declaración Jurada, rendida ante este Despacho, por el Cabo 1° Euclides Cedeño, quien afirma y ratifica su informe de novedad, agregando que luego de obtener la información por parte del señor Bernal Samaniego, proceden a efectuar un operativo donde detienen a la señora DORIS RAMONA MACHADO RUBIDES, conocida como "la Chomba" o "la Negra", la cual al ver la presencia policial intenta deshacerse de un cartucho del Almacén La Oca Loca, la misma es sujetada por la Agente Yajaira Garzola al momento en que intentaba tirar el cartucho al techo de la piquera. Al ser revisado el mismo contenía en su interior la sustancia descrita en líneas anteriores.

A la sustancia incautada tanto al señor FRANCISCO BERNAL SAMANIEGO como la señora DORIS RAMONA MACHADO RUBIDES, se le practica la prueba de campo correspondiente arrojando un resultado positivo para la presencia de COCAÍNA y MARIHUANA.

Todos estos, elementos probatorios suficientes con los que contamos para establecer con claridad la responsabilidad que le corresponde a la señora MACHADO RUBIDES en el caso que nos ocupa y lo que nos lleva a mantener la detención preventiva que pesa sobre la misma.

FUNDAMENTOS DE DERECHO: Artículo 2148 y 2159 del Código Ley 13 de 27 de julio de 1994.

C. La señora DORIS RAMONA MACHADO RUBIDES, se encuentra a órdenes de este Despacho, pero a partir de este momento es puesto a órdenes de esa Augusta Corporación de Justicia.

Adjuntamos copias autenticadas del sumario seguido contra la señora DORIS RAMONA MACHADO RUBIDES.

El señor Mathews James considera que la detención de la señora Doris Ramona Machado Rubides es ilegal porque a su juicio se merman las garantías procesales previstas en su el artículo 32 de la Constitución. Además, señala que en la orden de detención se incrimina a la señora Machado como reincidente, porque le manifestó haber estado detenida en 1989 por delito relacionado con drogas

(Basuko). Por último, no se le presentó orden de detención escrita por alguna autoridad competente al momento de su detención.

En este momento, corresponde determinar si la medida cautelar de carácter personal atacada cumple con los requisitos que al efecto establecen los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial.

De conformidad con la diligencia que ordena la detención preventiva de la señora Machado Rubides, la medida se fundamenta en la supuesta comisión de delitos contra la salud pública, concretamente el tráfico de drogas.

En las sumarias consta como elemento que comprueba la existencia del hecho punible, el informe del incidente policivo suscrito por el Cabo 1° 2352 Euclides Cedeño en el que resulta detenida la señora Machado encontrándosele treinta y seis (36) sobrecitos de plástica transparente que en su interior contenía un polvo blanco que se presumía era droga y cuarenta y dos (42) envoltorios en forma de cigarrillo de color blanco, con una hierba seca que se presumía era marihuana, además de B/.24.00 dólares en efectivo. Luego, se aprecia de fojas 17 a 20 de las sumarias, la Indagatoria rendida por el señor Francisco Bernal Samaniego (a) "Choco", en la que señala que la señora Machado (a) "Negra" o "Chomba" le vendió dos sobrecitos plásticos contentivos de la droga conocida como Cocaína por el precio de B/.2.00 cada sobre, es decir, que pagó un total de B/.4.00.

Con fundamento en lo anterior, la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas ordena la detención preventiva de la señora DORIS RAMONA MACHADO RUBIDES, por considerar que existían los elementos incriminatorios suficientes para tal medida. En este sentido, señala ese despacho:

> "... como quiera que nos encontramos frente a la comisión de un delito CONTRA LA SALUD PÚBLICA, Relacionado con Drogas, y tomando en consideración el informe del agente captor y el resultado de la prueba de campo, además de el señalamiento que realiza el prenombrado Bernal Samaniego en contra de la ciudadana conocida como LA CHOMBA O LA NEGRA MACHADO, de quien dice le vendió los dos sobrecitos con sustancia, y la situación de reincidencia de ambos en este tipo de delitos relacionados con droga, es por lo que El Suscrito Fiscal Especializado en Delitos Relacionados con Droga, DISPONE: Ordenar la detención preventiva de los señores FRANCISCO BERNAL SAMANIEGO y DORIS RAMONA MACHADO RUBIDES, por existir los elementos incriminatorios suficientes para tal medida, ordenando su filiación en el correspondiente centro penitenciario.

Del estudio del expediente, el Pleno de esta Corporación estima que la declaración indagatoria del señor Francisco Bernal Samaniego (a) Choco (fojas 17-20), donde se señala directamente a la señora MACHADO, como la vendedora de la droga, más el hecho de que la misma fue detenida in fraganti con una bolsa que contenía droga en cantidad superior a la posología indicada para consumo propio, constituyen fuertes indicios que la vinculan con los hechos a ella imputados. Los mismos conllevan una pena de prisión superior a los dos años, lo cual amerita la detención preventiva.

En virtud de lo antes expuesto, el Pleno de esta Corporación estima que, en la detención preventiva de la señora DORIS RAMONA MACHADO RUBIDES no se ha infringido el debido proceso establecido en la Constitución Nacional y en las leyes de la República, ni tampoco las normas jurídicas que regulan la detención preventiva y por lo tanto, es procedente declarar legal dicha detención.

En consecuencia, el PLENO de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL la detención de la señora Doris Ramona Machado Rubides, y por lo tanto, dispone que la detenida sea puesta a órdenes de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ELIÉCER AIZPURÚA, CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, TRES (3) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El señor Ariel Aizpurúa, presentó el 25 de abril de 1996 ante la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia, acción de Habeas Corpus a favor de su hermano **ELIÉCER AIZPURÚA**, y contra el **DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL**.

Cumplidos los trámites del reparto, se libró mandamiento de Habeas Corpus contra la autoridad acusada quien, mediante nota A. L.-0559-96 de 26 de abril de 1996 (f. 6), manifestó que su Despacho no ordenó la detención del señor **ELIÉCER AIZPURÚA**, y mediante Oficio 6858 de 25 de abril de 1996, la Fiscalía Auxiliar de la República ordenó su libertad.

Como quiera que la acción de Habeas Corpus está destinada procesalmente a tutelar la libertad ambulatoria de los ciudadanos, contra cualquier orden que no reúna las exigencia que la ley señala y en el presente caso la persona a favor de quien se promovió la acción correspondiente se encuentra gozando de libertad; no procede la continuidad procesal de la acción interpuesta.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECRETA EL CESE de procedimiento en el presente caso y ORDENA el archivo del mismo.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JUSTO PASTOR PIMENTEL, CONTRA EL FISCAL ESPECIAL EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, TRES (3) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Roberto Candanedo en nombre y representación del señor **JUSTO PASTOR PIMENTEL**, interpuso acción de Habeas Corpus contra el **FISCAL ESPECIAL EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS**, el día 15 de abril de 1996.

Encontrándose el expediente para la lectura del proyecto que resuelve la acción interpuesta a favor del señor **JUSTO PASTOR PIMENTEL**, la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia, recibió el 24 de abril de 1996, escrito de desistimiento de la acción de Habeas Corpus presentada por el licenciado Roberto

Candanedo.

La Corte en reiterados pronunciamientos ha sostenido que es viable el desistimiento de la acción, siempre y cuando lo expresen el detenido o su apoderado legal, como es el caso que nos ocupa, es por ello que esta Corporación Judicial no tiene nada que objetar en cuanto al escrito de desistimiento presentado.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE EL DESISTIMIENTO presentado por el licenciado Roberto Candanedo, en la acción de Habeas Corpus promovida a favor del señor JUSTO PASTOR PIMENTEL.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JOSÉ RAMIRO FONSECA PALACIOS, A FAVOR DEL CIUDADANO NIVALDO MADRIÑÁN APONTE Y CONTRA EL FISCAL SEGUNDO DE CIRCUITO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TRES (3) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado José Ramiro Fonseca interpuso ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia recurso de apelación contra la Sentencia del 22 de marzo de 1996, expedida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, mediante la cual se declaró legal la detención del ciudadano NIVALDO MADRIÑÁN APONTE.

I. FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN RECURRIDA

Mediante la resolución que se impugna, el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial declaró legal la detención de NIVALDO MADRIÑÁN APONTE, fundamentándose particularmente en las siguientes razones:

> "La tesis del demandante pareciera admisible, por cuanto pretende excluir del radio de acción de los bienes nacionales, la suma de B/95,567.00, bajo el concepto de que fue un dinero entregado en custodia y como tal no tiene el carácter de formar parte del Tesoro Nacional.
>
> Ese planteamiento no lo compartimos, porque es la normativa contenida en el Código Fiscal la que establece qué se considera forma parte de la Hacienda Nacional y sobre el particular, el artículo 2 de la Ley 8 de 1956 (Código Fiscal) contempla que la Hacienda Nacional se divide en bienes nacionales y tesoro nacional, este último se compone, entre otros, del dinero que ingresa al Estado a cualquier título (Artículo 4 del Código Fiscal).
>
> Precisamente todos los bienes, dineros o valores aprehendidos con motivo de delitos, tratándose de hechos punibles relacionados con drogas, quedan fuera del comercio de los hombres y serán puestos a órdenes de la Fiscalía Especilizada en Delitos Relacionados con Drogas, por tanto ingresaban a una cuenta especial de la Procuraduría General de la Nación para la fecha en que fueron aprehendidos,

según el artículo 21 de la Ley N° 23 de 1986, modificado por el artículo 22 de la Ley 13 de 1994, que exige su ingreso a la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, hasta que se decida la causa.

Durante el período que esos bienes están en esa cuenta del Tesoro Nacional, los agentes de manejo o empleados que reciban o paguen o tengan bajo su cuidado, custodia o control fondos del Tesoro Nacional, serán responsables de ellos debido a la pérdida de éstos, porque en ese momento son fondos del tesoro del Estado, porque se le ha suspendido la propiedad a quienes se le aprehendieron, según lo que establecen los artículos 1089 y 1090 del Código Fiscal e incluso el artículo 1091 del mismo texto legal contempla que ningún empleado queda eximido de responsabilidad bajo el supuesto de actuar por orden superior.

Ante tales situaciones la persona que no ingresa al tesoro esos bienes, o se apodera de los mismos, debe ser investigada por un delito contra la administración pública, especialmente lo contenido en el Capítulo I, Título X, Libro II del Código Penal, sobre peculado, específicamente el artículo 322 que contempla sanción de 2 a 10 años de prisión y hasta 250 días multa, porque en el proceso debe comprobarse si en efecto la persona a quien le aprehendieron los bienes es legítimo propietario de éstos, es decir, no están vinculados con el hecho punible." (Fs. fs. 13-18).

II. LOS ARGUMENTOS DEL RECURRENTE

El licenciado José Ramiro Fonseca apeló de la Sentencia del 22 de marzo de 1996, por considerar incorrecta la tipificación del delito por el cual está sindicado NIVALDO MADRIÑÁN, pues, "los 95 mil balboas perdidos pertenecen a un particular, detenido y sindicado por el delito Contra la Salud Pública, de lo que se colige sin esfuerzo alguno, que no son del estado (sic) y por ende no forman parte del presupuesto nacional o el estado (sic) es su dueño, lo que convierte el bien o dinero en propiedad estatal. A contrario, es el mismo Tribunal a quo el que se encarga de asegurar que dicho dinero pertenece a un particular y no al estado (sic), y es por ello que el delito debe tipificarse como de Apropiación Indebida, cuya pena no encaja dentro del ámbito del artículo 2148 del Código Judicial. Ello vicia de ilegalidad la detención preventiva y por lo tanto pido la revocatoria de la sentencia de 22 de marzo de 1996" (f. 19).

III. CONSIDERACIONES DEL PLENO DE LA CORTE

De acuerdo con las constancias de autos, el señor NIVALDO MADRIÑÁN APONTE está sindicado por el delito de peculado, por razón de la pérdida de B/.95.567.00. que fueron puestos bajo su custodia mientras ocupaba el cargo de Director del Departamento de Nacional Investigaciones, a fin de que los depositara en una cuenta especial de la Procuraduría General de la Nación.

El tribunal a-quo consideró legal la detención porque, a su juicio, la conducta del sindicado corresponde a la acción típica de peculado, sancionada por el artículo 322 del Código Penal. El apoderado del señor MADRIÑÁN APONTE considera, por el contrario, que dicha conducta punible se enmarca en el tipo penal consagrado en el artículo 194 del mismo cuerpo legal, es decir, en el de apropiación indebida, porque el dinero supuestamente sustraído no pertenecía al Tesoro Nacional, sino que era de propiedad particular.

A juicio del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, no le asiste la razón al apoderado del actor, ya que de la atenta lectura del artículo 322 del Código Penal se desprende, sin lugar a dudas, que para que se configure la acción típica de peculado no es indispensable que "los dineros, valores, bienes u otros objetos" pertenezcan o sean propiedad del Estado. Para mayor ilustración, veamos el contenido exacto del citado precepto:

"**Artículo 322.** El servidor público que se apropie de dineros,

> valores, bienes u otros objetos **cuya administración, percepción o custodia le hubieren sido confiados por razón de su cargo**, será sancionado con prisión de 2 a 10 años y hasta 250 días-multa.
>
> Si antes de dictarse la sentencia de primera instancia en su contra, el responsable del hecho punible reintégrase los dineros, valores, bienes u otros objetos apropiados, la sanción aplicable se le reducirá hasta en dos terceras partes." (El subrayado es del Pleno).

Tal como se aprecia, el primer párrafo de la norma transcrita no exige que los dineros, valores, bienes u otros objetos sean de propiedad del Tesoro Nacional, con lo cual basta que su administración, percepción o custodia le hayan sido confiados al funcionario público por razón de su cargo. Comúnmente, se ha entendio que el delito de peculado sólo puede cometerlo un funcionario público cuando se apropia o sustrae dineros o efectos que pertenecen al Estado. Lo cierto es que tanto en la doctrina como en distintas legislaciones (inclusive en nuestro Código Penal), se ha reconocido lo contrario.

El artículo 153 del Código Penal panameño, anterior a la regulación introducida por la Ley N° 18 del 22 de septiembre de 1982, se refería expresamente a los caudales o efectos privados como bienes susceptibles de ser objeto material del delito de peculado. La parte inicial del mencionado precepto tenía el contenido siguiente:

> "Artículo 153. El funcionario público que se apropie, sustraiga o malverse en cualquier forma los caudales u otros objetos públicos **o privados**, que por razón de sus funciones está encargado de resguardar, retener, guardar, administrar, depositar o manejar bajo cualquier concepto, será castigado con interdicción para ejercer funciones públicas por el término de cuatro años y de reclusión en las siguientes formas: ..."

El actual Código Penal colombiano tipifica el delito de peculado por apropiación de la siguiente manera:

> "Artículo 133. El empleado oficial que se apropie en provecho suyo o de un tercero de bienes del Estado o de empresas o de instituciones en que éste tenga parte o de bienes de particulares, cuya administración o custodia se le haya confiado por razón de sus funciones, incurrirá en prisión de dos (2) a diez (10) años, multa de un mil a un millón de pesos e interdicción de derechos y funciones públicas de uno (1) a cinco (5) años. ..."

En la legislación penal argentina, si bien el artículo 260 del Código Penal alude a "fondos públicos" cuando regula el peculado, el artículo 263 del mismo Código hace extensivo ese concepto a los bienes que pertenecen a los establecimientos de instrucción pública o de beneficencia y a los caudales embargados, secuestrados o depositados por la autoridad, **aún siendo de particulares**. En la legislación penal española, por el contrario, se alude expresamente a "caudales o efectos públicos" (art. 394), con lo que el legislador limita el peculado a esta especial categoría de bienes.

Se observa, pues, que para que se configure el delito de peculado no es indispensable que los bienes objeto de la apropiación pertenezcan al Estado, a menos que esta condición la exija expresamente el ordenamiento jurídico. En el caso del Código Penal patrio vigente, el artículo 322 no exige que los bienes formen parte del Tesoro Público, lo cual se explica por el hecho de que en el delito de peculado, no sólo se tutela la propiedad estatal, sino el adecuado y correcto funcionamiento de la administración pública, materializada en las numerosas actividades que realizan los servidores públicos en ejercicio de la función pública. Sobre el particular, el Doctor Campo Elías Muñoz Rubio distingue claramente la dualidad del objeto jurídico en el delito de peculado, refiriéndose a ello en los siguientes términos:

> "Precisa distinguir, en primer lugar, un objeto genérico,

> consistente en el interés público por el normal funcionamiento de la administración pública. Es indudable, que las diversas modalidades del delito de peculado tienden a proteger la actividad administrativa en general, o esa, el interés social de que permanezca incólume el regular desenvolvimiento de la administración pública en sentido lato.
>
> El objeto específico de la tutela, en la norma que examinamos, está constituido por la seguridad de los bienes públicos o privados confiados a los funcionarios públicos por razón de sus funciones. La esencia del delito se encuentra en la quiebra de deber de probidad a que están sometidos los funcionarios públicos con relación a los fondos públicos o privados a ellos encomendados, precisamente, por razón del ejercicio de esas funciones.
>
> Por lo tanto, el interés protegido no tiene un carácter meramente patrimonial, pues, el funcionario público al apropiarse o sustraer los bienes que le son funcionalmente confiados, viola también sus deberes para con la administración pública."
> (MUÑOZ RUBIO, Campo Elías. **El Peculado**. Litho Impresora Panamá. Panamá. 1973. pág. 34).

Cabe señalar, que el criterio anotado lo sostuvo la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia en la Sentencia del 23 de enero de 1995, bajo la ponencia de la Magistrada Aura Emérita Guerra de Villalaz, al enumerar como elementos constitutivos del tipo de peculado propio, los siguientes: "a) La calidad del agente o sujeto activo, quien debe ostenar el cargo de servidor público; b) La relación funcional con los bienes, valores u objetos, cuya administración, percepción o custodia le hubiesen sido confiados por razón del cargo que desempeña en la administración pública; c) La realización de la conducta prevista por el verbo rector, en este caso: "apropiar" en su sentido de disponer con "animus domini", de las cosas y bienes bajo su administración o custodia; d) El objeto jurídico, constituido por la administración pública ... e) **El objeto material, constituido por los dineros, valores, bienes u otros objetos que se encuentran bajo la administración, percepción o custodia del servidor público**" (Registro Judicial de enero de 1995, págs. 233-237).

En el presente caso y de acuerdo con las piezas procesales que fueron remitidas como antecedentes, al señor NIVALDO MADRIÑÁN APONTE se le imputa la apropiación de noventa y cinco mil quinientos sesenta y siete balboas (B/95.567.00), incautados a varias personas dedicadas a actividades de narcotráfico. Según las investigaciones, a pesar de que el señor MADRIÑÁN recibió este dinero como evidencia, no lo puso a órdenes de la Procuraduría General de la Nación para que fuera depositado en el Fondo de Custodia que esta máxima Agencia de Instrucción tiene en el Banco Nacional de Panamá. Aun cuando los B/95.567.00. pertenecían a particulares y no al Estado, ello no descarta la acción típica de peculado, pues, como se ha explicado, de acuerdo con el artículo 322 del Código Penal, es indiferente el hecho de que los bienes pertenezcan o no al Estado, con lo cual basta que su administración, percepción o custodia hayan sido confiadas al funcionario público por razón de su cargo. La custodia provisional de la suma incautada fue dada provisionalmente al entonces Director del Departamento Nacional de Investigaciones, por lo que el mismo debe responder por las imputaciones que se le hacen por el delito de peculado.

Por otra parte, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia estima conveniente aclarar, que en el momento en que se produjo la pérdida del dinero incautado éste pertenecía a particulares y no al Estado, lo cual se explica por el hecho de que las sumas que se depositan en el Fondo de Custodia no ingresan automáticamente al Tesoro Nacional, sino que, de acuerdo con el artículo 22 de la Ley N° 23 del 30 de diciembre de 1986 (modificado por el artículo 21 de la Ley N° 13 del 27 de julio de 1994), se mantienen cauteladas provisionalmente **"a órdenes de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, hasta tanto la causa sea decidida en forma definitiva por el Tribunal jurisdiccional competente"**. En caso de que se compruebe la culpabilidad del imputado por un delito relacionado con drogas, el juez competente debe ordenar el comiso del dinero aprehendido

provisionalmente y adjudicarlo al Estado, tal como lo indica el artículo 55 del Código Penal que define el comiso como "la pérdida y adjudicación al Estado de los instrumentos con los que hubiese cometido el hecho punible y de los efectos que provengan de éste, salvo los que pertenezcan a un tercero no responsable del hecho". Sólo cuando la sentencia en que se decrete el comiso quede ejecutoriada puede hablarse de bienes que pertenecen al Estado.

También debe tomarse en consideración, como expone RODRÍGUEZ DEVESA, que con la aprehensión provisional de los bienes, efectos o instrumentos con los que se cometió el delito, así como de las ganancias obtenidas del mismo y con su depósito a órdenes de la autoridad judicial se persigue, precisamente, garantizar la efectividad del comiso desde el momento en que se realizan las primeras diligencias para investigar el ilícito (RODRÍGUEZ DEVESA, José María. **Derecho Penal Español. Parte Especial.** Editorial Dykinson. 13ª edición. 1990. pág. 1083).

Por las razones anotadas, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia considera que la detención del señor NIVALDO MADRIÑÁN APONTE es legal, por lo cual la Sentencia recurrida debe confirmarse.

De consiguiente, la Corte Suprema de Justicia, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la Sentencia del 22 de marzo de 1996, expedida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, mediante la cual se declaró legal la detención del ciudadano NIVALDO MADRIÑÁN APONTE.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA EMÉRITA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ARMANDO CHAMORRO PONCE CONTRA EL DIRECTOR NACIONAL DE CORRECCIÓN. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, SEIS (6) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El señor **ARMANDO CHAMORRO PONCE** ha presentado ante esta Superioridad, Acción de Habeas Corpus a su favor, contra el Director Nacional de Corrección por considerar que la privación de libertad que sufre es ilegal.

Una vez acogida la acción mediante providencia fechada 10 de abril de 1996, se libró el mandamiento de Habeas Corpus respectivo, el cual fue contestado por el señor Director Nacional de Corrección en los siguientes términos:

> "En ningún momento el suscrito ha ordenado la detención del señor **ARTURO ARMANDO CHAMORRO PONCE.**
> ...
> El señor ARTURO ARMANDO CHAMORRO PONCE se encuentra en el centro de Rehabilitación El Renacer bajo la custodia de la Directora de dicho Centro penal, cumpliendo condena la pena de cuarenta (40) meses de prisión, impuesta mediante sentencia proferida por el Juzgado Cuarto del Circuito Penal del primer Circuito Judicial de Panamá, mediante sentencia de 10 de mayo de 1994, confirmada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, al encontrarlo responsable del delito de Posesión Ilícita Agravada de Drogas. Inició el cumplimiento de la pena impuesta el 30 de junio de 1989; cumplió las 2/3 partes de la

> pena impuesta el 12 de abril de 1996; y cumplirá la totalidad de la pena impuesta el 22 de mayo de 1997."

Este Máximo Tribunal de Justicia, al examinar el escrito presentado por el señor **CHAMORRO**, así como el informe remitido por el funcionario demandado, advierte que la privación de libertad que sufre el prenombrado tiene sustento en una sentencia judicial condenatoria proferida por un Juzgado Circuital de la Provincia de Panamá y confirmada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, que le impuso la pena de 40 meses de prisión por delito de posesión agravada de drogas. A ello obedece su reclusión carcelaria, siendo que la sanción impuesta al señor **ARTURO CHAMORRO** se cumplirá en su totalidad en el mes de mayo del año **1997**.

Esta Superioridad constata que en el negocio sub-júdice no se ha argumentado que el sancionado ya haya cumplido la pena impuesta manteniéndose ilegalmente su detención, lo que hubiese permitido aplicar la figura del habeas corpus correctivo, sino que mediante el ejercicio de esta acción se pretende obtener la libertad de un condenado a pena de prisión alegando el derecho a que se le reconozca **ipso iure** el beneficio de **libertad condicional**, por haber cumplido las dos terceras partes de la condena.

En efecto, el proponente de la acción insistentemente señala en su escrito que su actual privación de libertad debe cesar, en vista de que ha cumplido las **dos terceras partes de la pena** y cumple con los condicionamientos de ley para ser beneficiado con libertad condicional, solicitando al Tribunal de Habeas Corpus que acceda a tal petición.

El Pleno debe recurrir a una interpretación sistemática de dos normas de nuestro ordenamiento jurídico que rigen la materia, esto es, los artículos 85 del Código Penal y 179 de la Constitución Nacional para aclarar la situación debatida. Los textos en comento se reproducen a continuación:

> "Artículo 85. El sancionado con pena de prisión que haya cumplido dos tercios de su condena con índices de readaptación, buena conducta y cumplimiento de los reglamentos carcelarios, podrá obtener la libertad condicional."

> "Artículo 179. Son atribuciones que ejerce el presidente de la República con la participación del Ministro respectivo:
> ...
> 12. Decretar indultos por delitos políticos, rebajar penas y conceder **libertad condicional** a los reos de los delitos comunes".

De las normas transcritas se desprende que la **libertad condicional** es un **beneficio** que puede ser otorgado al sancionado con pena de prisión, previa satisfacción, por una parte de los requisitos de: **a)** cumplimiento de dos tercios de la pena y **b)** la comprobación hecha por el Departamento de Corrección en el sentido de que el internamiento se cumplió con un adecuado índice de readaptación, buena conducta y acatamiento a los reglamentos carcelarios; y establece la concesión de tal beneficio a través del **Órgano Ejecutivo** mediante resolución, por ser una atribución que ejerce el Presidente de la República con el Ministro respectivo.

En consecuencia, este Tribunal debe indicar que **una vez cumplidos los condicionamientos de ley**, y no **ipso iure** por el sólo transcurso del tiempo, es viable el otorgamiento del beneficio, pero esta tutela legal debe realizarse por la **vía administrativa correspondiente**.

Ello hace imperativo indicar que la solicitud del actor, para que a través de la acción de habeas corpus se le otorgue el beneficio de libertad condicional resulta por completo **improcedente**, puesto que la institución del Habeas Corpus está encaminada a proteger al ciudadano de la adopción de medidas restrictivas de la libertad corporal que desconozcan los parámetros y formalidades constitucionales y legales establecidos, y el Tribunal sólo puede concretarse a determinar si la privación de libertad tiene o no fundamento legal.

En este orden de ideas el Tribunal de Habeas Corpus ha podido constatar que la detención preventiva y reclusión carcelaria del señor **ARTURO CHAMORRO** tiene plena legitimidad y sustento legal: fue condenado a cumplir pena de prisión por la comisión de un hecho punible en un proceso legalmente instaurado, sanción que aún no ha cumplido en su totalidad.

También sería conveniente aclarar que como el beneficio en cuestión es una atribución del Ejecutivo y no del Departamento de Corrección, la autoridad demandada no tiene en estos casos responsabilidad directa en la concesión de la medida liberatoria o en la demora en la adopción de la misma.

Sobre este particular es consultable el pronunciamiento proferido por esta Superioridad mediante sentencia de 12 de diciembre de 1995, cuando el Pleno de la Corte indicó:

> "Es imperativo entonces acreditar que se encuentran satisfechos los **dos** requisitos exigidos por ley, lo que indica que no basta el mero transcurso del plazo de las dos terceras partes de la pena impuesta para que opere **ipso jure**, como es la pretensión del demandante, la consecuencia de la libertad condicional, sin la verificación que corresponda a los otros factores condicionantes del beneficio penal. Con el objeto de hacer eficaz esta modalidad concreta de la tutela legal, se plantea la necesidad de que por vía administrativa se implementen con suficiente antelación los medios para que, al vencimiento del plazo que señala la ley, se pueda resolver de inmediato sobre el reconocimiento de la medida liberatoria.
>
> De cualquier modo, no se puede desconocer que se trata de una atribución presidencial, que no del Departamento de Corrección, por lo que este último tramo de la gestión administrativa no tiene fecha cierta de cumplimiento. Así las cosas, mal se puede, entonces, imputar a la autoridad demandada en esta acción responsabilidad alguna por la alegada demora en conceder la libertad condicional al detenido."

Más recientemente en sentencia de 8 de marzo de 1996, esta Máxima Corporación Judicial externó idénticos comentarios en relación a una acción de habeas corpus promovida con el fin de obtener la libertad condicional de un sancionado con pena de prisión.

Sería conveniente añadir que dadas las condiciones actuales del régimen penitenciario, el mantenimiento de estas instituciones que operan como alicientes o estímulos para alcanzar la libertad en períodos más cortos a los fijados por los Tribunales de Justicia, se requiere de una reglamentación que la haga accesible y expedita y la despoje de su atributo de gracia, convirtiéndola en uno de los derechos de los internos, tal como este Tribunal ha venido expresando con anterioridad. (V. g. resolución de 21 de marzo de 1996 y de 29 de abril de 1996.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL la detención preventiva del señor ARTURO ARMANDO CHAMORRO PONCE.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JOHN JAIRO CRUZ CONTRA EL DIRECTOR DE

INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN POLICIAL (D. I. I. P). MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, SEIS (6) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Ernesto Castillo Almengor ha presentado acción de habeas corpus a favor del señor **JOHN JAIRO CRUZ**, contra el Director de Información Policial (DIIP).

Cumplidos los trámites correspondientes, el Magistrado Sustanciador libró mandamiento de habeas corpus contra la autoridad acusada, quien respondió mediante Oficio N° DAL-0360-96 de 24 de abril de 1996, en el cual informa lo siguiente:

> "A). No es cierto que haya ordenado la detención del recurrente; ni por escrito ni verbalmente.
> B). Queda explicado en el literal anterior.
> C). No tengo bajo mi custodia, ni a mis órdenes al Señor JOHN JAIRO CRUZ".

Del informe transcrito se colige que el señor John Jairo Cruz no se encuentra detenido ni hay evidencias de que exista orden de detención en su contra, razón por la cual debe ordenarse el cese del procedimiento de la presente acción de habeas corpus, al tenor de lo dispuesto por el artículo 2572 del Código Judicial.

En consecuencia, EL PLENO DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA el cese del procedimiento y el archivo del expediente.

Notifíquese.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE PABLO LINARES ASPRILLA CONTRA EL DIRECTOR NACIONAL DE CORRECCIÓN. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, SIETE (7) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El señor PABLO LINARES ASPRILLA, en su propio nombre, ha presentado ante esta Corporación de Justicia, acción de habeas corpus contra el Director Nacional de Corrección.

En su debida oportunidad, el Director Nacional de Corrección, remitió su informe de conducta, mediante Nota 1451-DNC, DEL 18 DE ABRIL DE 1996, que se lee a continuación.

> "Honorable Magistrado:
>
> Con el debido respeto llevo a la consideración del Pleno de la Corte por su digno conducto, el informe sobre la demanda de Habeas Corpus, promovida por el señor PABLO LINARES ASPRILLA.

A. En ningún momento el suscrito ha ordenado la detención del señor Pablo Linares Asprilla ni verbalmente ni por escrito.

B. No podemos hacer referencia a motivos o fundamentos de hecho o de derecho de la detención, porque no la hemos ordenado.

C. El recurrente, señor PABLO LINARES ASPRILLA con cédula de identidad personal N° 8-165-1671 se encuentra a órdenes de la Dirección Nacional de Corrección, guardando detención en la Cárcel Modelo, toda vez que se encuentra condenado por el Segundo Tribunal Superior de Justicia mediante Sentencia de fecha once de marzo de 1985, a la pena de VEINTE (20) años de prisión por la comisión del delito de HOMICIDIO en perjuicio de ERIC ALBERTO JIMÉNEZ.

La misma fue confirmada por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante resolución de fecha 18 de septiembre de 1985.

De conformidad al Mandamiento N° 311-DNC de 17 de marzo de 1995, confeccionado por esta Dirección, el señor PABLO LINARES ASPRILLA concluirá dicha pena el día 19 de abril del año 2006; toda vez que el mismo según informes remitidos por la Sección Judicial de la Cárcel Modelo y la Policía Técnica Judicial, el mismo comenzó a cumplirla el día 13 de mayo de 1981, se evade el 8 de julio de 1984, es recapturado el 30 de agosto de 1984, se evade nuevamente el 26 de diciembre de 1987 siendo recapturado hasta el 10 de junio de 1993".

Del informe transcrito se colige que el señor LINARES ASPRILLA, se encuentra recluido en un centro penitenciario, debido a que está cumpliendo una pena, lo que es consecuencia de la terminación de un proceso seguido en su contra por el delito cometido. La pena impuesta surgió de un juicio penal (homicidio), tramitado por autoridad competente, resultando culpable el prenombrado LINARES ASPRILLA, en virtud de que se acreditó su culpabilidad.

La opinión del Pleno de la Corte Suprema de Justicia es que se mantenga la detención legal, ya que en el presente caso no estamos en presencia de una detención preventiva, sino más bien, ante una privación de libertad que tiene carácter de ejecución penal. Como consecuencia de ello, a la Dirección de Corrección sólo le compete la ejecución de la pena impuesta. Por otro lado, el informe y las fotocopias suministradas por la Dirección Nacional de Corrección certifican que el señor PABLO LINARES ASPRILLA, es reincidente, ya que presenta múltiples evasiones del centro penitenciario.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema de Justicia, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL la privación de libertad de PABLO LINARES ASPRILLA, y ORDENA sea puesto nuevamente a órdenes de la Dirección Nacional de Corrección, como responsable de la ejecución penal.

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE AIDÉ DUARTE CONTRA EL FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, NUEVE (9) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La licenciada **AIDA JURADO ZAMORA** ha interpuesto acción de habeas corpus a favor de **AIDÉ DUARTE**, quien se encuentra privada de su libertad a órdenes del Fiscal Especial en Delitos Relacionados con Drogas.

Librado el respectivo mandamiento de habeas corpus, la autoridad demandada contestó indicando que sí ordenó la detención preventiva de AIDÉ JOSEFINA DUARTE, Y que la decisión consta en la resolución de 9 de abril de 1996.

Entre los fundamentos de hecho que motivaron dicha actuación, destaca los siguientes:

Lo acontecido se origina con la detención de ERICK FELONY, debido a que tenía en su poder sustancias ilícitas. Este relató que vino a Panamá a realizar negocios en Zona Libre de Colón, pero como se encontraba cerrada por motivo de la Semana Mayor decidió regresar a Haití. Sin embargo, un amigo de apodo PANCHO le sugirió que le comprara droga a otro llamado **PEDRO**, a quien podía localizar al número de teléfono **224-0059**. Posteriormente se comunicó con PEDRO a dicho número, se encontraron en el Hotel Europa y se dirigieron a la residencia del mismo, en vía Cincuentenario, segundo piso de un edificio blanco frente al Banco General, donde le presentó a su esposa **AIDÉ** (a quien describe). Le preguntó que cuántos Kilos de cocaína quería comprar, respondiéndole que él sólo tenía B/.2,000.00, sobre lo cual le informó que con eso sólo podía comprar un Kilo.

Sostiene el funcionario de instrucción que AIDÉ DUARTE fue indagada negando conocer a FELONI, pero aceptó que el número de teléfono 224-0059 es el de su residencia.

Indica que contra AIDÉ DUARTE existe la descripción de su persona y residencia; la aceptación de parte, sobre la comunicación que se dio entre FELONY (poseedor de droga), PEDRO y AIDÉ DUARTE, quienes en asocio entregaron la droga, en una residencia común que es contactada para conseguir droga.

Concluye que en este caso se han configurado las fases preparatorias para la comisión del delito, de las que AIDÉ DUARTE tuvo conocimiento y participación. Sin embargo, por lo incipiente de la investigación y la posición ambivalente en algunas respuestas de FELONY, considera conveniente el acopio de otros elementos probatorios (como la declaración de los agentes de la PTJ), que "nos permitan establecer si aún existe o no acuerdo o asociación entre las partes que figuran como imputados".

Como fundamento de derecho para decretar la detención preventiva de la imputada DUARTE cita los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial y artículo 20 A de la Ley N° 13 de 27 de julio de 1994.

La proponente de la acción de habeas corpus a favor de AIDÉ DUARTE señala que la detención decretada contra ella no cumple los requisitos del artículo 2159 ibídem., toda vez que los elementos indiciarios considerados por el Fiscal de Drogas "no son suficiente y mucho menos graves".

Entre los argumentos utilizados en defensa de la imputada se observan:

En el apartamento 26, donde reside y fue detenida la ciudadana colombiana AIDÉ DUARTE, no se encontró sustancia ilícita, dinero, ni material vinculante a delito de drogas;

Que AIDÉ DUARTE niega conocer a FELONY y a Pedro que ellos hubieran estado en su casa; sostiene que su marido se llama SEROULA PRESENDIEU y que éste se encontraba con ella el día del allanamiento;

Sobre el señalamiento de FELONY, de que realizó un negocio de drogas en un apartamento, donde le fue presentada una tal AIDÉ como esposa de PEDRO (vendedor), alega que ese hecho "no implica que ésta tuviera participación alguna en el negocio", más cuando, según el mismo FELONY, no fue en dicho apartamento

donde le fue entregada la droga sino en el Hotel Europa dos días después;

Destaca la accionante que en la diligencia de careo (15 de abril de 1996), FELONY dice "no estar seguro de que la mujer a la que enfrenta sea la misma que le fue presentada por Pedro".

Luego de lo expuesto, la Corte procede verificar ciertos aspectos fundamentales para decidir lo que corresponde.

Como sostiene la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, la detención preventiva de la prenombrada ciudadana colombiana AIDÉ DUARTE se decretó mediante resolución motivada, cuya copia autenticada figura entre las enviadas a esta Corporación por dicha dependencia del Ministerio Público.

En atención al examen de los presupuestos legales necesarios para la viabilidad de la orden de detención decretada contra la imputada, vemos que se le vincula en la participación del delito de Tráfico Internacional de Drogas que preceptúa el artículo 355 del Código Penal.

Entre los elementos para la comprobación del hecho punible figuran, la captura infraganti (en posesión de la droga) en el aeropuerto al ciudadano haitiano ERICK FELONY y la información que éste suministró a las autoridades de diversos datos relacionados con la obtención de la sustancia ilícita que tenía en su poder, entre los que resultan relevantes el lugar donde realizó la negociación y las personas que participaron.

Esta Corporación no comparte el criterio expresado en el libelo de habeas corpus sobre la falta de indicios graves contra la favorecida con esta acción constitucional, señora AIDÉ DUARTE, pues según se ha podido verificar, hasta este momento existen ciertos elementos incriminatorios fundamentales que la vinculan directamente y no han sido desvirtuados. Esos elementos probatorios, que a su vez fueron descritos en la diligencia que ordena la detención como "contundentes indicios", consisten en que FELONY informó desde el principio que la señora AIDÉ fue la persona que lo recibió en el apartamento donde se verificó la compra de la droga e indicó **la localización exacta de dicho apartamento** y **su número de teléfono**.

A juicio de la Corte, dicha coincidencia en cuanto al señalamiento del lugar en se concretó el delito con la residencia de AIDÉ DUARTE, la identificación de su persona y número telefónico, la relacionan de forma directa con el hecho investigado, por lo que se justifica la orden de detención preventiva decretada en su contra.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención preventiva de AIDÉ JOSEFINA DUARTE.

Notifíquese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JUAN CARLOS LOAIZA STEVENS CONTRA EL DIRECTOR DE CORRECCIÓN. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DIEZ (10) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El señor Juan Carlos Loaiza Steves ha interpuesto ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, acción de habeas corpus a su favor, contra el Director Nacional de Corrección.

Librado el mandamiento de habeas corpus contra el Director Nacional de Corrección, dicho funcionario contestó mediante Oficio N° 1339-DNC. 96. S. de 11 de abril de 1996, lo siguiente:

> "A. En ningún momento el suscrito ha ordenado la detención del señor Juan Carlos Loaiza Stevens ni verbalmente ni por escrito.
>
> B. No podemos hacer referencia a motivos o fundamentos de hecho o de derecho de la detención, porque no la hemos ordenado.
>
> C. El recurrente, señor JUAN CARLOS LOAIZA STEVENS con cédula de identidad personal N° 8-249-841 se encuentra a órdenes de la Dirección Nacional de Corrección, guardando detención en el Centro de Rehabilitación El Renacer, toda vez que se encuentra condenado por el Juzgado Sexto de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, mediante sentencia de fecha 24 de enero de 1994 a la pena de CINCO (5) años de prisión por la comisión del delito de POSESIÓN ILÍCITA DE DROGA AGRAVADA.
>
> De conformidad al Mandamiento N° 1307-DNC comenzó a cumplir dicha pena el 14 de octubre de 1992 y cumplirá el total de la misma, el día 14 de octubre de 1997."

Una vez leída la acción de habeas corpus que nos ocupa visible de fojas 4 a 6 del expediente, observa el Pleno que el señor Carlos Loaiza en realidad lo que solicita es su libertad condicional, toda vez que afirma "fue condenado a sesenta (60) meses de prisión con derecho a que se descontase el tiempo detenido por dicha causa o sea desde el 14 de octubre de 1992. De lo anterior se concluye que la condena total se cumplió el 14 de octubre de 1997 y que los dos tercios de esa condena se cumplieron el pasado (14) de febrero de 1996.

En razón de lo antes señalado, se colige que el señor JUAN CARLOS LOIZA se encuentra legalmente detenido en cumplimiento de una sentencia proferida por tribunal competente.

En consecuencia, el Pleno de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL la detención del señor JUAN CARLOS LOAIZA STEVENS y lo pone a órdenes del Departamento Nacional de Corrección del Ministerio de Gobierno y Justicia.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE CÉSAR AUGUSTO ORDOÑEZ CONTRA EL FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DIEZ (10) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado **MANUEL E. CAJAR M.**, presentó Recurso de Habeas Corpus a favor de **CÉSAR AUGUSTO ORDOÑEZ** contra el Fiscal Especial en delitos relacionados con Drogas, licenciado **PATRICIO ELÍAS CANDANEDO**, por considerar que la detención que sufre, es ilegal.

En la demanda se expresa que **CÉSAR AUGUSTO ORDOÑEZ** y su consorte se encuentran detenidos debido a las imputaciones que se le hacen, sobre la propiedad de una droga **(CANNAVI SATIVA)**, (sic) la cual fue encontrada en la defensa de un vehículo que se encontraba a 75 metros del lugar donde ellos estaban hablando, y por encontrárseles en posesión de dieciocho balboas (B/.18.-00) que según **ORDOÑEZ** él mismo había entregado a dicha consorte ANAIS VARGAS para la compra de útiles escolares.

En la exposición sobre los hechos y consideraciones en que el Lic. Manuel E. Cajar fundamenta su recurso, sostiene que:

> "... en realidad a él no se le encontró en su posesión, droga alguna, es más en el informe de novedad, las autoridades manifiestan, que la droga se encontró en un paquete de cigarrillos Kool, como a 75 mts., del lugar donde fueron aprehendidos los indiciados, en un carro (defensa), el cual no es propiedad tampoco ni de mi defendido, así como tampoco de su señora, además de esto vemos que este lugar tampoco constituye, propiedad alguna de mi de mi defendido, así que a razón de que dichas autoridades, mantienen aún detenido al mismo, y por esta calidad no existe detención preventiva, ni siquiera aprehensión (término nuevo empleado para casos como el que nos atañe)".

Librado el mandamiento en fecha de 23 de abril de los corrientes, el funcionario demandado, rindió el informe de actuación el 24 de abril de 1996 mediante oficio N° 3613, que sin embargo fue recibido en forma tardía por la Secretaría General de la Corte Suprema, el día 29 de abril de 1996.

> "A. La orden de detención del ciudadano CÉSAR AUGUSTO ORDOÑEZ, fue decretada mediante providencia razonada de la Fiscalía Especializada en delitos Relacionados con Drogas de fecha nueve (9) de abril de 1996. (Fs. 19-29).
>
> b. Los fundamentos de hecho para ordenar la detención preventiva de CÉSAR AUGUSTO ORDOÑEZ, se reflejan en que el día 5 de abril de 1996, siendo las 5:20 de la tarde, se recibió una llamada anónima en las oficinas del SUB-DIIP de Balboa, en donde informaban que en la vieja piquera de taxis del muelle 18 se encontraban una mujer apodada la china y un sujeto apodado pato, los cuales se dedicaban a la venta de drogas. Luego de eso las unidades del DIIP se dirigieron al área antes mencionada, los cuales procedieron a rodear la misma, se procedió a un registro donde se encontraban sentados las sujetos antes mencionados, encontrándosele en la defensa del vehículo NISSAN, SUNNY, color blanco, matrícula N° 31990 un paquetito de cigarrillos de marca Kool con (25) veinticinco envoltorios en papel blanco en forma de cigarrillo que en su interior contiene una hierba seca que se presumía era marihuana y (18) dieciocho balboas en efectivo. Al momento de rendir declaración indagatoria CÉSAR AUGUSTO ORDOÑEZ, niega la vinculación con la droga incautada. El fundamento de derecho para ordenar la detención preventiva del señor CÉSAR AUGUSTO ORDOÑEZ, se encuentra consagrado en los Artículos 2148 y 2159 del Código Judicial.
>
> El resultado de la muestra analizada resultó POSITIVO, para la determinación de MARIHUANA.
>
> C. El señor CÉSAR AUGUSTO ORDOÑEZ, se encuentra recluido en el Centro Penitenciario Cárcel Modelo, a órdenes de este despacho, mediante oficio N° 3284-96, del 10 de abril de 1996, quien a partir de este momento es puesto a disposición de ese Augusto Tribunal,

mediante el oficio N° 3614 de 24 de abril de 1996".

El expediente enviado por la Fiscalía Auxiliar se inicia con el informe rendido por la **POLICÍA NACIONAL ZONA CANALERA**, fechado 5 de abril de 1996, que tiene por base el recibo de una llamada anónima en las oficinas del SUBDIIP de Balboa, donde informaban que en la vieja Piquera de taxi del muelle 18 se encontraban los ahora detenidos quienes se dedicaban a la venta de droga.

En dicho informe el cabo Cedeño señaló que una vez rodeada el área en compañía de otros agentes:

> "... se procedió a un registro donde se encontraban sentados los sujetos antes mencionados, encontrándosele en la defensa del vehículo NISSAN, SUNNY, color blanco, matrícula N° 319920 un paquetito de cigarrillo de marca Kool con (25) veinticinco envoltorios en papel blanco en forma de cigarrillo que en su interior contiene una hierba seca que se presume sea marihuana y (18) diez y ocho balboas en efectivo, producto de la venta."

Esta Superioridad procede en primer término al estudio de los elementos que constan en el cuadernillo contentivo de la instrucción sumarial iniciada contra CÉSAR AUGUSTO ORDOÑEZ.

El artículo 2148 del Código Judicial establece que cuando se proceda por delito que tenga señalada pena mínima de dos años de prisión o cuando el autor o partícipe ha sido sorprendido en flagrante delito, se podrá decretar la detención del imputado, previo cumplimiento de las formalidades previstas en el Código. El artículo 2159 de ese mismo cuerpo de leyes, a su vez, señala los requisitos que debe contener la diligencia de detención so pena de nulidad. Valga entonces determinar si se han cumplido con estas exigencias a la luz del caudal probatorio que presenta las sumarias.

La primera condición es la de señalamiento de "El hecho imputado", el cual lo constituye el presunto delito CONTRA LA SALUD PÚBLICA, relacionado con droga. Del informe de novedad rendido por la Policía Nacional Zona del Canal se desprende claramente que la sustancia incautada se trataba efectivamente de "CANNABIS SATIVA" (marihuana) la cual se hallaba precisamente en el lugar donde se encontraban sentados los sindicados.

En cuanto al segundo aspecto señalado en la última norma procesal citada sobre los elementos probatorios allegados para la comprobación del hecho punible es indudable que la sustancia incautada no se dirigía al consumo personal sino al tráfico ilícito de la misma, en este caso marihuana, por la forma en que la misma se encontraba: "en una cajetilla de cigarrillos marca Kool, con veinticinco envoltorios de papel blanco, en forma de cigarrillo ... en forma de hierba seca". (fs. 3 del expediente).

Satisface el tercer requisito señalado en el citado artículo 2159, para librar el mandamiento de detención, el indicio surgido de haber estado los detenidos precisamente sentados en la defensa del auto en que se halló la droga, por lo cual existen suficientes indicios de presencia y oportunidad que hacen presumir la vinculación de los prenombrados.

Sabido es que la acción promovida no busca establecer si los detenidos son inocentes o culpables, por lo que el tribunal de habeas corpus no está destinado a hacer una valoración de la prueba que determina el grado de participación de los imputado. Sin embargo, el examen del material fáctico tiende a establecer que sí existen elementos suficientes para mantener la detención preventiva de **CÉSAR AUGUSTO ORDOÑEZ**, misma que fue ordenada mediante resolución motivada de autoridad competente. (Fs. 19-20 del legajo sumarial).

Si bien al momento de interposición de la acción que nos ocupa no reposa aún en el expediente (por lo incipiente de la investigación) el examen pericial del Laboratorio Técnico Especializado en drogas de la Policía Técnica Judicial, relativo a la calidad y cantidad de la sustancia ilícita incautada, este Tribunal

Colegiado conceptúa que la forma en que se produce el hallazgo de la sustancia, es decir los **veinticinco (25) envoltorios separados**, da margen a afirmar que a nuestro juicio lo que pretendía el imputado era suministrarla en venta o traspaso para consumo ilegal.

El artículo 260 del Código Penal preceptúa en su segundo párrafo lo pertinente a lo ya manifestado:

> "Artículo 260 ... Cuando la posesión de droga resultare en tales cantidades que, a juicio del Tribunal, se demuestre que lo que se pretende es suministrarla en venta o traspaso a cualquier título para consumo ilegal, la sanción será de 5 a 10 años de prisión."

En estas circunstancias resulta pertinente invocar el texto legal del artículo 2148 del Código Judicial que ha dispuesto que la medida cautelar personal de detención preventiva sólo procede en aquellos casos en que el delito investigado tiene pena mínima de prisión de dos años, y en el caso sub-júdice la pena mínima es de cinco años, lo que evidencia que el delito excede la punibilidad mínima asignada en la ley.

Por las anteriores consideraciones, se evidencia que la detención decretada contra el señor **CÉSAR AUGUSTO ORDOÑEZ ESTRADA**, se ajusta a la legitimidad formal que debe revestir la medida preventiva, y así procede a declararlo esta Superioridad.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL la detención de señor CÉSAR AUGUSTO ORDOÑEZ ESTRADA.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE LEINES GARCÍA HURTADO CONTRA EL DIRECTOR NACIONAL DE MIGRACIÓN. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIEZ (10) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Luis Quintero Poveda ha interpuesto recurso de Habeas Corpus contra el Director Nacional de Migración y a favor de Leines García Hurtado quien, según afirma, fue detenida arbitrariamente el día 19 de abril de 1996 en San Miguelito por autoridades del DIRECCIÓN DE INFORMACIONES E INVESTIGACIONES DE LA POLICÍA (DIIP) sin que medie orden de autoridad competente ni cargos en su contra.

Mediante nota del 22 de abril de 1996 expedida por la DIRECCIÓN DE INFORMACIONES E INVESTIGACIONES DE LA POLICÍA (DIIP), dirigida al licenciado Germán Gil Sánchez, Director General de Migración y Naturalización, se puso a ordenes de su despacho la ciudadana Leines García Hurtado quien, en el momento de la detención, no portaba documentos que probaran su ciudadanía panameña.

El 23 de abril de 1996 se libró el mandamiento de Habeas Corpus correspondiente y se requirió al funcionario demandado que informara que si había ordenado la detención de Leines García Hurtado, los motivos o fundamentos de

hecho y de derecho que tuvo para ello, y si la misma estaba bajo su custodia o a sus órdenes o si la misma había sido transferida a órdenes de otra autoridad.

El funcionario demandado contestó el mandamiento de Habeas Corpus librado mediante nota DNNYN-126-96, de 25 de abril de 1996, en la cual informó lo siguiente:

> "A. No es cierto que ordenamos la detención de la ciudadana LEINES GARCÍA HURTADO.
> B. No existen al momento motivos, fundamentos de hecho ni de derecho para la detención de la señora LEINES GARCÍA HURTADO.
> C. No tenemos bajo nuestra custodia ni a nuestras órdenes a la ciudadana LEINES GARCÍA HURTADO. La misma fue puesta en libertad el día 22 de abril de 1996, ya que a la interesada se le comprobó que es de nacionalidad panameña."

A foja 10 del expediente consta el memorándum, de 22 de abril de 1996 expedido por la Dirección Nacional de Migración, mediante el cual se concedió la libertad a la ciudadana Leines García Hurtado, ya que se comprobó su nacionalidad panameña (fs. 1 a 2).

Por lo expuesto debe ordenarse el cese de este procedimiento de conformidad con el artículo 2572 del Código Judicial.

De consiguiente, la Corte Suprema de Justicia, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA EL CESE del procedimiento en la acción de habeas corpus promovida a favor de Leines García Hurtado.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE HABEAS CORPUS INTERPUESTO A FAVOR DE JAVIER BAILEY CONTRA EL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE. FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, TRECE (13) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La detención de Javier Bailey Sanjur, quien se encuentra a órdenes del Fiscal Auxiliar de la República, acusado de hurto agravado cometido en perjuicio de la empresa Pro Belleza, S. A., ha sido objeto de recurso de habeas corpus presentado por el licenciado Eduardo Badillo Paz.

A Bailey se le investiga, junto con otras personas, en relación con la sustracción de mercancía de propiedad de la empresa antes indicada, con valor de B/.101,416,043, delito que ha sido acreditado con informe de auditoría incorporado a la actuación, y se encuentra detenido conjuntamente con Luis Gabriel Duque Machado, con quien prestaba servicios de seguridad para la denunciante.

Pese al cargo de ilegalidad que se formula, lo cierto es que la medida de privación provisional de la libertad que ahora se examina fue decretada mediante diligencia consultable de folio 223 a 226 de las sumarias, en la que se expresa:

1. Que el hecho imputado es el **delito de hurto "con la connotación de**

agravado, puesto que así ha quedado establecido, mediante la diligencia de inspección que realizó el detective Azael Moreno, quien fue el que hizo dicha diligencia, y pudo constatar que unas de las puertas estaba forzadas, puesto que son bastante frágiles y con un pequeño esfuerzo se doblan" (fs. 225-226). De esta comprobación fáctica resulta la configuración del tipo agravado de hurto a que se refiere la diligencia comentada, previsto por el numeral 3 del artículo 184 del Código Penal, al que corresponde pena con mínimo superior a dos años de prisión;

2. Los señalamientos directos que recaen sobre Bailey como partícipe en la consumación del hecho delictivo emergen fundamentalmente del señalamiento positivo que le hace su presunto cómplice Luis Gabriel Duque Delgado (fs. 34-36), así como del testimonio de José Antonio Hing Ubarte (fs. 38-39).

A juicio de la Corte Suprema, en el actual estado de la investigación aparecen satisfechos los requisitos que exigen los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial para tomar y mantener la medida acusada.

Por las anteriores razones, EL PLENO DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL la detención de Javier Bailey Sanjur, y ordena que el detenido sea puesto nuevamente a órdenes del Fiscal Auxiliar de la República.

Notifíquese.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ M. FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JUAN ANTONIO TELLO, CLEIDIS SÁEZ Y JOSÉ ISABEL TELLO CONTRA LA FISCAL PRIMERA SUPERIOR DEL CUARTO DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, TRECE (13) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Ha ingresado al Pleno de la Corte Suprema, la acción de Habeas Corpus interpuesta por el Licenciado JULIO LU OSORIO, en favor de **JUAN ANTONIO TELLO**, **CLEIDIS SÁEZ** y **JOSÉ ISABEL TELLO**, y contra la señora Fiscal Primera Superior del Cuarto Distrito Judicial.

Acogida la presente acción, se libró el respectivo mandamiento de habeas corpus a la funcionaria del Ministerio Público, quien mediante Oficio N° 262 ARD, rindió su informe de conducta en los siguientes términos:

> "A. Sí, es cierto que ordené la detención de los señores JUAN ANTONIO TELLO SÁEZ, JOSÉ ISABEL TELLO SÁEZ y CLEIDIS ABDIEL SÁEZ, mediante Resolución fechada catorce (14) de febrero de mil novecientos noventa y seis (1996), y visible a fojas 74 a 76 del presente proceso que por delitos relacionados con Drogas (CONTRA LA SALUD PÚBLICA), se instruye a los precitados TELLO SÁEZ y SÁEZ, en este despacho.
>
> B. Los motivos de hecho que originaron la Resolución anterior tuvieron su génesis en la Operación Encubierta de Compra Controlada de Drogas, efectuada al Taller de Los Hermanos Tello Sáez, en dicha compra fueron utilizados billetes marcados debidamente autorizados

mediante Resolución expedida por este despacho; y los cuales posteriormente fueron ocupados en la persona del señor JOSÉ MANUEL TELLO SÁEZ, hermano de los precitados imputados. Además se deja claramente fundamentada la detención de los señores arriba señalados, y en favor de quienes se libra la presente acción en virtud de que en el expediente constan una gran cantidad de informes que señalan dierectamente a JUAN ANTONIO TELLO SÁEZ, JOSÉ ISABEL TELLO SÁEZ y CLEIDIS SÁEZ, y es más, corroboran la participación en dicho ilícito, por lo que se verifica la organización delictiva del tráfico y venta de drogas en el Taller Hermanos Tello, ya que mientras uno se dedicaba a la venta, los otros ejercían la labor de vigilantes y a la vez prestaban la seguridad en el área donde se cometía el hecho punible motivo de la presente investigación; así como obtenían lucro del producto de las transacciones ilícitas que llevaban a cabo en el referido Taller.
...
C. En efecto, hasta este momento los señores JUAN ANTONIO TELLO SÁEZ y JOSÉ ISABEL TELLO SÁEZ y CLEIDIS ABDIEL SÁEZ, se encuentran recluidos en la Penitenciaria de la Zona de Policía de la Provincia de Herrera a nuestras órdenes; pero de inmediato se girará la comnicación(sic) correspondiente para que los imputados sean puestos a disposición de la Honorable Corte Suprema de Justicia.

Por otra parte la Suscrita quiere hacer de su conocimiento que la detención de los señores arriba descritos, se encuentra además acreditada por los informes de inteligencia, y fueron tomados como base legal para mantener la detención preventiva. ...". (Fs. 9, 10 y 11).

El Licenciado JULIO LU OSORIO expresa en su demanda de habeas corpus, que la detención preventiva contra sus representados fue ordenada el día 14 de febrero de 1996, luego de que se realizara una operación encubierta de compra de droga controlada, en el taller de los hermanos Tello, en donde se encontró en poder de **JOSÉ MANUEL TELLO** uno de los billetes que habían sido autorizados para dicha operación. Que al rendir declaración indagatoria **JOSÉ MANUEL TELLO** acepta los cargos y además excluye a **JUAN ANTONIO TELLO**, **CLEIDIS SÁEZ** y **JOSÉ ISABEL TELLO** de haber participado en el hecho punible.

Sigue diciendo el Licenciado LU OSORIO, que la declaración jurada recibida a **JUAN DE DIOS GIRÓN VILLARREAL**, donde dice ser consumidor de drogas y haberle comprado a YEYI, JERE y CLEIDIS, es misteriosa y ofrece dudas razonables, pues no es más que una forma desesperada de querer vincular a sus representados en el hecho.

Consta en autos que el día trece (13) de febrero de 1996 rindió declaración indagatoria el señor **JOSÉ FRANCISCO RÍOS MENDOZA**, quien fuera conducido a la Agencia Regional de Drogas de Herrera y Los Santos, luego de habérsele encontrado en su poder un "pase" de diez balboas de cocaína que dijo haber comprado a **JOSÉ MANUEL TELLO SÁEZ (A) YEYI**, en el Taller Hermanos Tello ubicado en el corregimiento de La Arena, Provincia de Herrera. Además **RÍOS MENDOZA** se mostró anuente a cooperar con esa agencia a fin de capturar a los traficantes de sustancia ilícita; por lo cual la Fiscalía Primera Superior del Cuarto Distrito Judicial autorizó mediante Providencia visible a fojas 10 y 11 del expediente principal, la operación de compra controlada de sustancias ilícitas, que se llevaría a cabo con la participación del Detective **SECUNDINO AVILA**. Para ello se utilizaron billetes marcados, con los cuales **RÍOS MENDOZA** le compró a **JOSÉ MANUEL TELLO SÁEZ (a) YEYI** (en presencia del Detective **SECUNDINO AVILA**) un paquete contentivo de polvo blanco que al practicársele la prueba de campo dio resultado positivo para la droga **COCAÍNA**.

Como quiera que al momento de la compra, **JOSÉ MANUEL TELLO SÁEZ** se había dirigido en una bicicleta hacia la parte posterior del Taller a una distancia de cien metros aproximadamente, lugar en el cual se tardó de unos cinco (5) a diez (10) minutos, al cabo de los cuales regresó a donde se encontraba **RÍOS MENDOZA** y le hizo entrega de la droga, la Fiscalía ordenó entonces el Allanamiento del

Taller Hermanos Tello, con el fin de recuperar los billetes marcados utilizados en dicha operación.

Al momento de llevar a cabo el allanamiento, no se logró encontrar sustancia ilícita alguna en poder de **JOSÉ MANUEL TELLO SÁEZ**, ni en los predios del taller, no obstante, se le encontró un billete de los marcados y autorizados por la Fiscalía para ser utilizados en la operación de compra controlada. En el lugar se encontraba también presente **JUAN ANTONIO TELLO SÁEZ (A) TOÑITO**, quien es hermano de **JOSÉ MANUEL TELLO SÁEZ**, siendo conducidos ambos al despacho de la Fiscalía. También fueron llevados **CLEIDIS SÁEZ Y JOSÉ ISABEL TELLO SÁEZ**, quienes no se encontraban en el Taller pero existen informes de inteligencia relacionados con su participación en la venta de sustancias ilícitas.

Obran en el expediente principal, una serie de informes de llamadas telefónicas sobre datos suministrados por algunas personas no identificadas, que dicen tener conocimiento de que en el Taller Hermanos Tello se trafica con sustancias ilícitas. Los mencionados informes datan del año 1993, 1994, 1995 y 1996; y en ellos se pone de manifiesto que los tres hermanos **TELLO SÁEZ y CLEIDIS SÁEZ**, se dedican a la venta de drogas. Así tenemos, a fojas 39 el siguiente informe:

> "ANTECEDENTES:
>
> Debido a los constantes informes de seguimientos y Vigilancia donde se señala directamente al TALLER DE LOS HERMANOS TELLO, como el lugar que se dedica a la venta de Sustancias ilícitas (Drogas), en donde se involucra todos los hermanos TELLO y más recientemente un sujeto que se apoda CLEIDIS TELLO, pero después de verificar la información nos percatamos que el nombre real es CLEIDIS ABDIEL SÁEZ, involucrado en los informes como uno de los vendedores de la Droga y hermano de parte de madre de los TELLO. También se tiene conocimiento de los sujetos JOSÉ MANUEL TELLO (a) YEYI, JUAN ANTONIO TELLO (a) TOÑITO y JOSÉ ISABEL TELLO SÁEZ (a) GERES. Los informes levantados involucran a un sujeto de apodo YEYI, como el sujeto que se aleja del taller hacia la parte de atrás a traer la sustancia ilícita, a los sujetos "TOÑITO y GERES", también involucrados como vendedores."

Igualmente a foja 87 se lee la siguiente información:

> "Respetuosamente me dirijo a usted con la finalidad de informarle que siendo las tres treinta de la tarde (3:30 p. m.) de hoy miércoles diecisiete (17) de enero del año en curso recibí llamada telefónica anónima donde me informaban que en la ciudad de Chitré, en la circunvalación vía La Arena, viven unas personas que son conocidas con el apodo de los Tello, donde uno de ellos es conocido con el nombre de CLEIDIS TELLO, y que los mismos se están dedicando a la venta de drogas en esa área, ...".

De lo anterior se desprende que, en el proceso que nos ocupa existen suficientes elementos probatorios de la participación de **JOSÉ ISABEL TELLO SÁEZ, JUAN ANTONIO TELLO SÁEZ y CLEIDIS SÁEZ** en el ilícito en que se les vincula. Por tanto, se encuentran cumplidos los presupuestos del artículo 2148 del Código Judicial, para que pueda ordenarse la detención preventiva de alguna persona; esto es, que el delito tenga señalada pena mínima de dos (2) años o que el autor sea sorprendido en flagrancia. Al respecto el artículo 2149 del Código Judicial dice:

> "...
> También existe flagrancia cuando el infractor es aprehendido por autoridad pública inmediatamente después de cometer un hecho punible y **porque alguno lo señala como autor o partícipe**, ...". (Lo resaltado es nuestro).

También consta en autos lo declarado por **JUAN DE DIOS GIRÓN VILLARREAL**, quien vincula a los sindicados con la actividad ilícita:

> "... PREGUNTADO: Diga el declarante, si usted tiene conocimiento quién o quiénes se dedican a vender drogas en el Taller de los Hermanos Tello? CONTESTÓ: Señora Fiscal, **CLEIDIS**, **JERE y YEYI**. PREGUNTADO: Diga el declarante, si usted en alguna ocasión le ha comprado drogas a alguna de las personas conocidas como **CLEIDIS**, **JERE y YEYI**? CONTESTÓ: Señora Fiscal, sí, en varias ocasiones". (F. 138). (Lo resaltado es nuestro).

Existen pues, en la presente encuesta penal suficientes indicios de presencia y oportunidad que permiten concluir la participación de los recurrentes en la actividad ilícita de tráfico de drogas.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención preventiva de JUAN ANTONIO TELLO SÁEZ, JOSÉ ISABEL TELLO SÁEZ y CLEIDIS SÁEZ, en consecuencia ORDENA que sean filiados nuevamente en el centro penitenciario respectivo a órdenes de la Fiscalía Superior del Cuarto Distrito Judicial.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE MARCOS ANTONIO REYES CONTRA EL FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, TRECE (13) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado EULDARIN ASPRILLA C. promovió acción de habeas corpus a favor de MARCOS ANTONIO REYES, en contra del Fiscal Especializado en Delitos Relacionados con Drogas, por considerar que la privación de libertad que sufre su representado es ilegal.

El Magistrado Sustanciador acogió la acción formulada y, encontrándose el negocio en la etapa de recoger las firmas del resto de los Magistrados que integran el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, se recibió escrito de desistimiento de la acción de habeas corpus, con fecha 7 de mayo de 1997, presentado por el Licenciado EULDARIN ASPRILLA C. En virtud de que el artículo 1073 del Código Judicial le otorga el derecho para desistir, expresa o tácitamente de un incidente o la demanda que haya interpuesto una persona, es perfectamente viable el desistimiento formulado en la presente acción de habeas corpus.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ADMITE EL DESISTIMIENTO de la acción de habeas corpus a favor de MARCOS ANTONIO REYES en contra del Fiscal Especializado en Delitos Relacionados con Drogas y ORDENA el archivo del expediente.

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA

(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JORGE LUIS ZÁRATE SALAZAR CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, TRECE (13) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Ha ingresado al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, acción de habeas corpus a favor del señor Jorge Luis Zárate Salazar, contra el Director de la Policía Técnica Judicial.

Acogido el recurso, se libró mandamiento de habeas corpus contra la autoridad acusada, quién, mediante oficio N° A. L. 0605-96 de 6 de mayo de 1996, consultable a foja 4, manifestó lo siguiente:

> "1. No es cierto que hemos ordenado la detención del señor **JORGE LUIS ZÁRATE SALAZAR**.
> 2. No tiene razón de ser en base al punto anterior.
> 3. No tenemos bajo custodia ni a nuestras órdenes al prenombrado **JORGE LUIS ZÁRATE SALAZAR**, el mismo se encuentra a órdenes de la Fiscalía Tercera del Circuito Judicial de Colón".

Del texto transcrito se desprende que el señor Jorge Luis Zárate Salazar se encuentra a órdenes de la Fiscalía Tercera del Circuito Judicial de Colón, por lo cual esta Superioridad carece de competencia para conocer de la presente acción, conforme a lo señalado por el artículo 2602 del Código Judicial.

Por tanto, EL PLENO DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLINA el conocimiento de la presente acción de habeas corpus al Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, para los fines legales correspondientes.

Notifíquese.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE PAOLA TEJADA GARCÍA CONTRA EL FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, CATORCE (14) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Lcdo. Rafael E. Collins Núñez, ha interpuesto acción de habeas corpus a favor de PAOLA TEJADA DE CHONG contra el Fiscal Especial en Delitos Relacionados con Drogas.

Acogida la acción se libró mandamiento de habeas corpus contra el Fiscal Especial en Delitos Relacionados con Drogas, quien mediante Oficio N° 3760 de 25

de abril de 1996 expuso lo siguiente:

"1° Si es cierto que se ordenó la detención preventiva de la señora PAOLA TEJADA GARCÍA o PAOLA TEJADA DE CHONG. Dicha decisión fue emitida mediante Resolución fechada diecisiete (17) de abril de mil novecientos noventa y seis (1996).

A. FUNDAMENTOS DE HECHO

En el mes de octubre de 1995, se dio la captura del Catamarán MICHAEL ÁNGELO el cual se detectó 2,186,445.0 gramos de COCAÍNA, razón por la cual se da inicio a través de la División de Estupefacientes de la Policía Técnica Judicial a una serie de diligencia de inteligencias con la finalidad de recavar toda la información, tanto nacional como internacional, relacionada con la organización criminal de naturaleza internacional encabezada por JOSÉ CASTRILLÓN HENAO, dedicada a este tipo de actividades ilícitas.

La investigación conjunta y paralela con agencias homólogas de los países donde operaba esta organización permitió establecer que la misma tenía como uno de sus centro de operaciones el territorio nacional. La información obtenida reveló que esta organización tenía modus operandis el siguiente: la mercadería ilícita era transportada desde Colombia a través de distintos tipos de embarcaciones, tales como Catamaranes, veleros, etc., los cuales utilizaban nuestro territorio como lugar de descanso, mantenimiento, preparación de los compartimientos ocultos (caletos) elaborados dentro de las embarcaciones para cargar la sustancia ilícita, la cual posteriormente era transportada hacia los Estados Unidos y Europa.

Se ha podido establecer que CASTRILLÓN HENAO, líder de la organización criminal y miembro del cartel de CALI, mantenía vínculos con la imputada PAOLA TEJADA DE CHONG, ello es así puesto que ambos eran socios directivos de las sociedades anónimas GOLDEN ARRON INC. y GOLD STAR INTERNACIONAL.

PAOLA TEJADA DE CHONG aparece como directivo o dignataria de las sociedades ZOCCA INVESTJMENT HOLDING INC.; ATLANTIC SOUID, S. A.; LORIAN INVESTMENT INC.; HIRAM GROUP CORP.; AKKON PROPERTIES CORP; RED SNAPPER INVESTMENT INC., MOUNT MARITIME HOLDING INC; FUJI INVESTMENT, S. A.; TIFFANY REAL STATE INVESTMEN, S. A.; EMPRESAS INTEROCEANICAS, S. A. Y ZUKKI MARITIME HOLDING, INC., sociedades que no registran movimiento comercial y que eran utilizadas para el ocultamiento de los bienes producto de las actividades ilícitas arriba indicadas.

PAOLA TEJADA DE CHONG, al ser indagada y cuestionada en relación a su participación en las sociedades antes mencionadas manifestó que ello se hizo por instrucciones del señor CASTRILLÓN HENAO. Igualmente al ser cuestionadas acerca de los bienes registrados bajo la propiedad de alguna de estas sociedades anónimas, expresó que los mismos realmente eran de propiedad del prenombrado CASTRILLÓN HENAO. ...

Las conductas desplegadas por PAOLA TEJADA DE CHONG, además de procurarle el uso, gozo y disfrute fácil del producto de los ilícitos demuestra toda la colaboración que la misma prestó para el ocultamiento de la procedencia, origen y titularidad real del producto de esta actividad ilícita.

La participación o tarea que le correspondía a PAOLA TEJADA GARCÍA era la de ocultar las ganancias de las actividades ilícitas a través de cuentas bancarias y la constitución de sociedades anónimas. PAOLA DE CHONG, producto de la relación con CASTRILLÓN HENAO era la encargada de administrar los apartamentos 3-C; 18-A y 18-C, del Edificio Pacific Hills.

De igual forma, la prenombrada inculpada mantenía cuentas bancarias en el CHASE MANHATHAN BANK (cuenta N° 7671040793), en BANAICO y en el BANCO DEL PACIFICO, de los cuales aún y por lo reciente de la investigación, no se nos ha totalizado sus montos. Tiene hipotecado el apartamento 6-A ubicado en el piso N° 6, del edificio Torre Marbella, de propiedad de la sociedad HERMOSOS HORIZONTES, S. A., de la cual PAOLA DE CHONG es Vicepresidente y Secretaria. El apartamento en mención tiene un costo de B/.109,020.13 y la prenombrada DE CHONG efectuó un abono de B/.75,000.00, monto que fue entregado por CASTRILLÓN HENAO.

PAOLA TEJADA DE CHONG era la encargada de contactar las firmas de abogados y las personas claves de los bancos para el manejo de las cuentas de esta organización.

De acuerdo a las investigaciones realizadas, PAOLA TEJADA DE CHONG, era una "asalariada" de las Farmacias Arrochas, donde trabajaba como demostradora de belleza, y no existe constancia alguna que la misma haya incrementado su patrimonio de manera lícita. Lo anterior es así, ya que difícilmente y en tan escaso tiempo una persona puede cambiar su status económico realizando una actividades como a la que se dedicaba la inculpada antes de ser "empresaria", es decir, no es fácil pasar de "Demostradora de Belleza" a "Empresaria".

Por otro lado, es importante destacar que dentro de las evidencias ocupadas a la empresa MASTER AGENCIES, S. A., se logró detectar documentación de la embarcación NATALI I, la que fue abordada por guarda costas americanos en aguas del Pacífico, en junio de 1995, con doce toneladas de cocaína que vinculan a esta empresa con la organización criminal que dirige JOSÉ CASTRILLÓN HENAO.

ENRIQUE CHANG ORTIZ, en su indagatoria señaló que las instrucciones del manejo de esta embarcación por conducto del Capitán MANUEL RODRÍGUEZ, del grupo PESQUERO RODRÍGUEZ, quien también es investigado en esta causa. De acuerdo a lo expresado por PAOLA TEJADA DE CHONG, CASTRILLÓN HENAO le ofrecía hospedaje a MANUEL RODRÍGUEZ y consta en autos pruebas documentales con las cuales se acreditó que este último le enviaba sumas considerables de dinero a la precitada TEJADA DE CHONG, donde se evidencia una relación directa entre los investigados, es decir, entre RODRÍGUEZ CHANG, TEJADA DE CHONG Y CASTRILLÓN HENAO, con la motonave NATALI I., donde se ocupó las 12.5 toneladas de cocaína.

En ese mismo sentido, no existe y ni así lo ha acreditado su defensa, la forma como las expresas de la que formaba parte TEJADA DE CHONG, MOVIERON CANTIDADES considerables de dinero, sin realizar transacciones comerciales, ello deja en evidencia la vinculación criminal de la precitada imputada con la comisión del hecho punible.

Las anteriores afirmaciones las cuales se encuentran acreditadas en autos a través de toda serie de pruebas documentales fueron las que, en estricto derecho, nos permitieron adoptar la decisión que se pretende dejar sin efecto.

B. FUNDAMENTO DE DERECHO

Las conductas desplegadas se encuentran subsumidas en tipos penales previamente establecidos en nuestra legislación, específicamente en el Capítulo V, Título VII, Libro Segundo del Código Penal, conforme fue reformado por la Ley N° 23 de 30 de diciembre de 1986 y la Ley N° 13 de 27 de julio de 1994."

Por su parte, el Lcdo. Rafael E. Collins afirma que la detención preventiva de la cual es objeto su representada no cumple con las formalidades legales, pues, al momento del allanamiento a su residencia y posterior detención, no se le informaron las razones de allanamiento ni los cargos que se le imputan, aunado

al hecho que no contaban con orden alguna. Sostiene igualmente el Lcdo. Collins, que también se ha violado la garantía del debido proceso de su representada, al no permitir que un abogado la asista en su indagatoria y no permitir el acceso al expediente a fin de verificar la existencia de la orden de detención.

Observa el Pleno que se trata de un proceso iniciado de oficio en el cual se ha recabado documentación e información que revela la existencia de una gran organización criminal internacional vinculada al tráfico de drogas y otros delitos conexos, la cual tiene como uno de sus centros operacionales el territorio nacional. Igualmente se observa de la documentación allegada al proceso, que dicha organización criminal, encabezada por el ciudadano colombiano JOSÉ CASTRILLÓN HENAO, tiene como **modus operandi** el uso de distintos tipos de embarcaciones, tales como veleros, catamaranes, barcos pesqueros, yates de lujo y también incluye en nuestro país, la contratación de servicios especiales, preparación y abastecimiento de las embarcaciones, ocultamiento de las sustancias ilícitas y, finalmente, la puesta en circulación de los fondos obtenidos ilícitamente por medio de cuentas bancarias, sociedades anónimas e inversiones de bienes y raíces.

Consta de fojas 211 a 218 de las sumarias, una orden de detención escrita, expedida por autoridad competente como lo es el Fiscal Especial en Delitos Relacionados con Drogas fechada el 17 de abril de 1996 y en la cual se ordena la detención preventiva entre otros de la señora PAOLA TEJADA DE CHONG.

Una vez efectuado el estudio de las sumarias, el Pleno arriba a la conclusión de que sí existen indicios suficientes que vinculan a la señora PAOLA TEJADA DE CHONG con los hechos a ella imputados. A juicio del Pleno, dentro del expediente existen claras evidencias en su contra, como es el hecho de que aparece conjuntamente con JOSÉ CASTRILLÓN HENAO como signataria de las sociedades GOLDEN ARRON INC. Y GOLD STAR INTERNACIONAL y otras sociedades antes citadas, las cuales no reflejan movimiento comercial alguno y que presumiblemente eran utilizadas para el ocultamiento de los bienes producto de actividades ilícitas. Igualmente, al efectuarse el allanamiento a su apartamento se logró detectar su agenda personal la cual contenía un listado de números con nombres de personas, que posteriormente se pudo establecer correspondían a cajillas de seguridad de un banco de la localidad, contentivas de documentación que revelan identidades falsas del señor CASTRILLÓN HENAO. También se observa tanto de los informes recabados, como de la propia declaración rendida por la señora PAOLA TEJADA DE CHONG, que ella manejaba fuertes sumas de dinero y mantenía cuentas bancarias en diversos bancos de la localidad. (Ver foja 177 y de fojas 258 a 264). Finalmente, y en relación con lo antes anotado, también se aprecia en el expediente que la señora PAOLA TEJADA DE CHONG laboraba hasta no hace mucho tiempo en una farmacia como demostradora de belleza y al momento de ser indagada no explicó fehacientemente el cambio repentino a la posición económica que actualmente goza.

El Pleno concluye que, efectivamente, existen fuertes indicios que vinculan a la señora PAOLA TEJADA DE CHONG con los hechos que se le imputan, pues, de la documentación claramente se colige su colaboración a la organización criminal en referencia. A criterio del Pleno, la conducta de la señora PAOLA TEJADA DE CHONG se subsume en los tipos penales previstos en el Capítulo V, Título VII, Libro Segundo del Código Penal, tal como fue reformado por la Ley 23 de 30 de diciembre de 1986 y la Ley 13 de 27 de julio de 1994. Finalmente el Pleno considera que en la detención preventiva de la señora PAOLA TEJADA DE CHONG no se ha infringido el debido proceso establecido en la Constitución Nacional y en las leyes de la República ni tampoco las normas jurídicas que regulan la detención preventiva, por lo que lo procedente es, pues, declarar legal la detención.

En consecuencia, el Pleno de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL la detención de la señora PAOLA TEJADA DE CHONG y, por lo tanto, DISPONE que el detenido sea puesto nuevamente a órdenes del Fiscal Especial en Delitos Relacionado con Drogas.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

HABEAS CORPUS A FAVOR DE ERNESTO HEADLEY CONTRA EL FISCAL SEGUNDO DE CIRCUITO DE COLÓN. MAGISTRADO PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, QUINCE (15) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

En grado de apelación, procedente del Segundo Tribunal Superior de Justicia se recibió el 29 de abril en la Secretaria de la Corte Suprema de Justicia, el cuadernillo que contiene la acción de habeas corpus promovida a favor de **ERNESTO ANTONIO HEADLEY CAMPBELL** contra el **Fiscal Segundo de Circuito de Colón**, licenciada Haxciria M. Henríquez de Sanad. El recurso se presentó contra el auto de 28 de marzo de 1996, que declara legal la detención preventiva que sufre Headley Campbell como imputado por un delito contra la Salud Pública.

RELACIÓN DE LOS HECHOS

Mediante proveído de 23 de febrero de 1996, la Fiscalía Segunda del Circuito de Colón, del Primer Distrito Judicial, a solicitud de la Policía Nacional, ordenó el allanamiento a la casa N° 7087 cuartos números 8, 9 y 40 ubicada en calle 7 y 8 Central (f. 1-2).

Del acta de allanamiento y registro se desprende que en horas de la tarde de ese día se llevó a cabo la mencionada diligencia al cuarto N° 40, donde se encontraba su propietario, el señor Ernesto Antonio Headley Campbell, con cédula N° 3-86-1299, y en este registro no se encontró sustancia ilícita alguna.

No obstante, al regresar los comisionados a la Sub-dirección de Información e Investigación Policial, recibieron una llamada telefónica anónima que les informó que después de realizado el allanamiento el señor Headley amenazó a sus vecinos porque lo habían denunciado, que éste no guardaba la droga que vendía en su cuarto y que había trasladado dicha sustancia a la parte de atrás del servicio.

Al regresar los comisionados al lugar, encontraron a Headley Campbell conversando en la planta baja con la señora Michell Brown, persona ésta a quien ese mismo día se le había efectuado allanamiento a su casa y se le encontró una bolsa de papel manila vacía con residuos y olor a marihuana.

El señor Headley Campbell fue requerido y llevado al lugar donde estaban ubicados los baños de la casa N° 7087, conformado por siete puertas de diferentes colores, las cuales estaban cerradas con llave. Las propietarias de algunos de los cuartos mostraron las llaves de los baños que utilizaban y acto seguido se le pidió a Headley Campbell la llave que abría el candado de su baño y al revisar el servicio, se encontró una bolsa en cuyo interior había cincuenta y dos envoltorios de papel manila, contentivos de hierba seca, presumiblemente marihuana, por lo que se procedió a su detención (fs. 7-9).

El agente Virgilio Garibaldi Ávila en declaración jurada se afirma y ratifica del contenido de la diligencia de Allanamiento y Registro, agregando que a Headley Campbell poseía la llave que abría el candado del baño donde se encontró la droga y que éste manifestó como excusa que otras personas tenían llaves de ese candado, pero omitió decir el nombre de esas personas (fs. 27-28).

CONSIDERACIONES DEL PLENO

El Pleno luego de examinar la actuación a fin de establecer si la detención preventiva a que está sometido Headley Campbell, se ajusta a las normas constitucionales y legales, observa que el accionante afirma que la droga fue hallada en un servicio público de la casa abandonada y que su representado no se encontraba en el edificio allanado, pues no reside en el mismo.

Sin embargo, existe un acta firmada no sólo por los funcionarios en el cumplimiento de su deber sino también, por Headley Campbell, en la que consta que el servicio donde apareció la bolsa con 52 envoltorios de sustancia vegetal seca fue abierto con la llave que se encontraba en poder del sindicado.

Por otra parte, si bien es cierto que la investigación se encuentra en estado incipiente, dado que todavía faltan algunas diligencias, tales como: el dictamen científico legal sobre la determinación y cantidad de la sustancia encontrada; la declaración indagatoria de Campbell a pesar que desde el 23 de febrero mediante proveído se ordenó la misma, la declaración jurada de los inquilinos de la casa N° 7087 a objeto de constatar si otros tienen llave del baño donde se encontró la sustancia ilícita, no menos cierto es que hay graves indicios delictivos vinculantes a la persona de Headley Campbell, aunado a la forma y cantidad en que se encontraba distribuida la sustancia ilícita, todo lo cual hace presumir que su fin era para la venta y no el consumo personal.

Por esas razones, no queda otra alternativa de declarar legal la detención preventiva que sufre Headley Campbell, toda vez que no se transgrede las disposiciones legales que regulan la materia -artículos 2148 y 2159 del Código Judicial-, siendo su detención legal.

PARTE RESOLUTIVA

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia apelada que declara legal la detención de ERNESTO ANTONIO HEADLEY CAMPBELL.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE LUIS GABRIEL DUQUE MACHADO CONTRA EL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, QUINCE (15) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El señor **SAMUEL MATHEWS JAMES**, actuando de conformidad con lo previsto en los artículos 2573 del Código Judicial y 23 de la Constitución Nacional, promovió acción de habeas corpus a favor de **LUIS GABRIEL DUQUE MACHADO**, detenido preventivamente por orden del Fiscal Auxiliar de la República.

Mediante providencia de 3 de mayo de 1996 legible a foja 4 del presente negocio, se libró mandamiento de habeas corpus y se le requirió al funcionario demandado para que en el término de ley, rindiera un informe sobre las causas de la detención del señor **DUQUE MACHADO**.

En ese sentido el representante del Ministerio Público rindió oportunamente el informe que le fue solicitado, y el pasado 8 de mayo se sometió a la

consideración del resto de los Magistrados que integran el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, el correspondiente proyecto de sentencia.

Encontrándose en lectura de los honorables Magistrados el mencionado proyecto de resolución judicial, el señor **MATHEWS** desistió de la acción de habeas corpus propuesta. Dicho escrito calendado 8 de mayo de 1996, fue recibido ese mismo día en la Secretaría General de esta Corporación (cfr. fs. 9 del expediente).

Como quiera que "toda persona que haya entablado una demanda, promovido un incidente o interpuesto un recurso, puede desistir expresa o tácitamente" conforme lo establece el primer párrafo del artículo 1073 del Código Judicial, el Pleno de la Corte considera que debe acogerse el desistimiento presentado.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ADMITE EL DESISTIMIENTO presentado por el señor SAMUEL MATHEWS JAMES dentro de la acción de habeas corpus promovida a favor de LUIS GABRIEL DUQUE MACHADO, y ORDENA que el detenido sea puesto nuevamente a órdenes del Fiscal Auxiliar de la República.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE GRACIELA REAL Y LOYDETH JIRADO DEL REAL CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICÍA NACIONAL. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, QUINCE (15) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El señor REYNALDO ROJAS ha interpuesto "Recurso de Habeas Corpus Preventivo" a favor de GRACIELA DEL REAL y LOYDETH JIRADO DEL REAL contra el Director de la Policía Nacional, al considerar que se les "pretende vincular con un delito contra el patrimonio".

Librado el mandamiento de habeas corpus, la autoridad acusada contentó en los siguientes términos:

> "A) No es cierto que haya ordenado la detención de la recurrente; ni por escrito ni verbalmente.
> B) Queda explicado en el literal anterior.
> C) No tengo bajo mi custodia, ni a mis órdenes a la Señora GRACIELA DEL REAL."

Como se puede apreciar del informe transcrito, no se ha expedido orden de detención contra las favorecidas con esta acción, ni siquiera de manera verbal.

En tal sentido, del libelo de habeas corpus se colige que la circunstancia que origina la interposición de esta acción es que las prenombradas señoras temen ser detenidas varias semanas por los agentes de la policía si se presentan en la agencia de instrucción correspondiente a rendir declaración.

A juicio de la Corte, lo expresado en la demanda no demuestra que se intente confinar ilegalmente a las señoras GRACIELA DEL REAL y a LOYDETH JIRADO DEL REAL. Tampoco, se ha presentado algún tipo de prueba, ni existe indicio que haga suponer la actuación del funcionario demandado en ese sentido.

Por ello, al no cumplirse con lo normado por el artículo 2594 del Código Judicial, que regula el habeas corpus preventivo, la presente acción resulta a todas luces improcedente.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA NO VIABLE el recurso de habeas corpus preventivo propuesto por REYNALDO ROJAS.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE DANIEL RÍOS SALDAÑA CONTRA EL FISCAL PRIMERO SUPERIOR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, QUINCE (15) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Con motivo de auto inhibitorio dictado por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, ingresó a conocimiento del Pleno de la Corte Suprema acción de habeas corpus que en su propio nombre presentara Daniel Ríos Saldaña, quien se encuentra detenido en la Cárcel Pública de David a órdenes del Fiscal Primero Superior del Tercer Distrito Judicial.

A Ríos Saldaña se le investiga en relación con el contenido de una bolsa plástica que resultó ser marihuana (f. 11), la que supuestamente dejó abandonada en el Jardín El Productor, sito en la localidad de Progreso, provincia de Chiriquí, lugar donde llegó en aparente estado de ebriedad. De este hecho da cuenta el cantinero del establecimiento, Osman Canto Acosta (fs. 21-23), quien afirma haberlo visto llegar portando la bolsa en cuestión, y que la dejó abandonada luego de protagonizar agresiones tanto físicas como verbales, lo que motivó se solicitara la intervención de la policía.

Aun cuando Ríos no fue detenido en posesión de la droga y niega que le pertenezca, contra él figura la imputación que le hace Canto Acosta de haberlo visto llegar portando la bolsa, dentro de la cual fue encontrado también "un papel amarillo pequeño" (f. 41) y le fue ocupada la suma de B/.23.00 que dice provenía de su trabajo. En adición a estos elementos incriminatorios, el detenido confiesa haber sido condenado en oportunidad anterior por el delito de posesión ilícita de droga (f. 49).

A los efectos del examen de la situación procesal que corresponde a esta acción constitucional, se comprueba que, para decretar la detención preventiva de Ríos Saldaña, se encuentran satisfechas las exigencias que establece el artículo 2159 del Código Judicial (f. 17). En cuanto al tipo penal, a pesar de que a las sumarias no ha sido incorporado aun el certificado de laboratorio que acredite el peso de la sustancia que contiene la bolsa, según el razonamiento del funcionario de instrucción que ordenó la detención, y es quien tiene a su disposición las evidencias del caso, a "Ríos se le imputa un delito Contra la Salud Pública, cuya gravedad ha quedado demostrada con el volumen de la sustancia incautada, al igual que al hecho de encontrarse en un lugar público en horas nocturnas, con la intención, a nuestro juicio, de traspasar la misma a terceras personas" (f. 17).

La Corte Suprema realizó esfuerzos, hasta ahora infructuosos (f. 19), dirigidos a incorporar al expediente la certificación que acredita el peso de la

droga incautada, a pesar de que considera suficientes los elementos de prueba hasta ahora allegados para la decisión de la acción propuesta. En todo caso, cualquier cambio que en el futuro pudiera producirse en la situación procesal de Saldaña deberá de ser justamente considerado, según su mérito.

Por las razones anteriores, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL la medida de detención provisional que pesa sobre Daniel Ríos Saldaña, y ORDENA que el detenido sea puesto nuevamente a órdenes del Fiscal Primero Superior del Tercer Distrito Judicial.

Notifíquese.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ M. FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE EVERTH HINESTROZA ZÚÑIGA CONTRA EL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Procedente del Segundo Tribunal Superior de Justicia se recibe el cuadernillo de acción de habeas corpus interpuesto por el licenciado Cecilio Cedalise Riquelme en su condición de apoderado judicial de **EVERTH HINESTROZA ZÚÑIGA**, contra el **Fiscal Tercero del Circuito de Colón**; el cual contiene el auto inhibitorio de fecha 29 de abril de 1996, que indica que el funcionario a órdenes de quien se encuentra actualmente detenido Hinestroza Zúñiga **-Fiscal Auxiliar de la República-** posee mando y jurisdicción en toda la República, por lo que el conocimiento del recurso compete al Pleno de la Corte Suprema de Justicia (fs. 13-15).

FUNDAMENTO DE LA ACCIÓN

El proponente sostiene que al señor Hinestroza Zúñiga se le tiene detenido en desconocimiento de las elementales garantías constitucionales y procesales y hasta de la jurisprudencia sentada por la Corte Suprema de Justicia en esa materia, dado que se ha apoyado para privar de libertad a su defendido en una sospecha. Además, que la orden de detención, que también ordena se le reciba indagatoria a Hinestroza Zúñiga no menciona cuáles son los documentos, informes, pruebas, evidencias, indicios que incriminen a su defendido con los supuestos comportamientos penales investigados (fs. 1-4).

SUSTANCIACIÓN

Mediante providencia de 3 de mayo se acogió la demanda y al dársele el impulso procesal correspondiente, el funcionario acusado, licenciado Víctor Barrios Puga, en representación de la Fiscalía Auxiliar contestó el mandamiento de habeas corpus en estos términos:

> "a) Procedente de la Fiscalía tercera del Circuito de Colón, nos fue remitido el Oficio N° 1107, calendado el 15 de abril del año que decurre, por medio del cual se puso a órdenes de este despacho al señor EVERETH HINESTROZA ZÚÑIGA y OTROS, cuya detención fue dispuesta mediante Proveído suscrito por el Fiscal Tercero de Circuito de Colón, fechado el 9 de abril del año en curso y visible

a fojas 24 y 25 del presente negocio;

b) En cuanto a los fundamentos de hecho que se dieron para tal medida, los mismos radican en los acontecimientos acaecidos en horas de la mañana del día 8 de abril del año que decurre, en la Urbanización la VERBENA, Sector 1, ubicada en la ciudad de Colón, residencia del señor FRANCISCO GARCÉS ARROCHA, quien mediante denuncia que suscribiera y visible a fojas 4 y 5 del presente negocio, hizo del conocimiento del despacho que varios sujetos, los cuales no conoce y con armas de fuego, se introdujeron violentamente a su residencia, logrando llevarse de la misma la suma de mil ochenta y cuatro balboas (B/.1,084.00).

Sigue exponiendo el denunciante, que el día de los hechos, fue llamado a la casa de su suegra, por parte del señor LUIS ALBERTO TORRES, persona esta que es miembro de la Policía Nacional y quien habita en la residencia de la Verbena, quien solicitara la presencia de él en la casa, ya que algo estaba pasando, razón por la cual se presentó al lugar, percatándose que ya habían en el sitio personal de la Policía Nacional, quienes tenían a un sujeto detenido, procediendo entonces a revisar la casa y notar que la puerta principal estaba violada, al igual que las puertas de las recámaras, así como también habían abierto un boquete en el baño que esta construyendo.

Así mismo reposan en auto, informes de los agentes de la Policía Nacional, presentes en el lugar de los hechos y visibles a fojas 8 a la 19, quienes señalan que al apersonarse al lugar, observaron habían varios vehículos estacionados y aproximadamente más de seis (6) personas en el lugar, quienes les sorprendieron con detonaciones de armas de fuego y luego darse a la fuga, dejando en el lugar los vehículos y demás herramientas utilizadas para la comisión del hecho, resaltando entre los artículos encontrados, la existencia de actas de Allanamientos falsas, con sellos de este despacho, también falsos y las cuales según así se desprende de los informes fueron utilizadas por los facinerosos, al hacerse pasar los mismos como funcionarios de estas oficinas y estamentos de seguridad, al igual que los vehículos abandonados mantenían denuncias de hurtos y que en cuanto a la detención del señor HINESTROZA ZÚÑIGA, se da al encontrársele en la entrada de la barriada, a bordo de un vehículo el cual manifestó el prenombrado estaba dañado, cosa que de acuerdo a los agentes captores era falso, ya que ellos arrancaron y probaron el vehículo, no encontrándole al mismo desperfecto alguno. Por otro lado observamos en declaración Jurada rendida por el señor JOSÉ DE LOS SANTOS GÓMEZ BOCARANDA, visible a fojas 200 a 201, vecino del lugar de los hechos, este ha señalado que para la fecha y hora de la comisión del acto, se disponía a dirigirse a la ciudad capital, razón por la cual visualizó cuando entraron los vehículos, señalando entre ellos, uno de idénticas características al utilizado por el señor HINESTROZA ZÚÑIGA y el cual, según el declarante salió a los pocos minutos, tomando como si fuera para la ciudad capital, pero que luego el vehículo dio la vuelta en la feria y se estacionó en la entrada de la barriada, justamente en el lugar que señalan en sus Informes los miembros de la Policía Nacional, detuvieron al sumariado HINESTROZA (ver folio 19), entrada de la barriada.

En cuanto a los motivos de derecho que se dieron para tomar la medida de Detención Preventiva, se fundamentan al tenor de lo estipulado en los artículos 2147-B, literal e, 2148 y sub-siguientes del Código Judicial, dado la existencia de elementos graves que militan en contra del señor EVERETH HINESTROZA ZÚÑIGA.

c) Si mantenemos a órdenes de este despacho al señor EVERETH HINESTROZA ZÚÑIGA, el cual actualmente se encuentra en la Cárcel Pública de la ciudad de Colón, puesto a disposición de este despacho mediante Oficio N° 1109 del 15 de abril del año en curso (foja 157),

persona esta que en virtud del presente recurso queda a sus ordenes y disposición, del mismo modo, enviamos copia del expediente."

CONSIDERACIONES DEL PLENO

El examen de las constancias procesales son indicativas que contra el prenombrado Hinestroza Zúñiga existen indicios graves que lo vinculan al ilícito perpetrado en la residencia del señor Francisco Garcés Arrocha.

Ello es así, pues consta en informe de 8 de abril, signado por el Sargento Segundo 7116 Roque Mc Coney, que el señor Everth Hinestroza ZÚÑIGA, de nacionalidad colombiana, fue detenido a las 05:55 horas por unidades de la policía cuando se dirigían al lugar de los hechos. En dicho informe se indica que éste se encontraba sentado dentro de un vehículo marca Toyota Corolla color gris, matrícula 086193 estacionado de manera sospechosa a un costado de la carretera transístmica con dirección de Cativá hacia Colón, a unos metros de la entrada principal de la barriada La Verbena, Sector N° 1; que alegó que el vehículo tenía daños mecánicos, pero al realizarse la inspección, resultó que el mismo estaba en perfectas condiciones. En el registro de rigor se le encontró en su poder un bipper, marca Rapidphone, un llavero con dos llaves de vehículo, dos controles de alerta vehículares, con las siguientes tarjetas bancarias: Pronto de la Caja de Ahorros y Cajero Conveniente Sistema Clave del Chase ambas a nombre de Diana E. Abrahams; tarjeta Cinco estrellas del banco General Sistema Clave a nombre de Alice Adaine Davidson (f. 15).

Por otra parte, el vehículo en el cual se encontraba Hinestroza Zúñiga no es de su propiedad porque mantiene denuncia N° 1A-048-95 interpuesta en la Sección de Hurto de vehículos y accesorios de la Policía Técnica Judicial de Ancón.

Importante es destacar, que en igual condición se encontraban los vehículos utilizados por los otros sujetos que también se encuentran vinculados al ilícito (fs. 12-14 y 20-23).

Además, en autos aparece el señalamiento que le hace José De Los Santos Gómez Bocaranda en declaración jurada rendida ante la Policía Técnica Judicial (fs. 200-201), de la cual ha hecho mención la autoridad demandada en su escrito.

De lo expuesto se infiere que la detención provisional de Hinestroza Zúñiga se hizo conforme a las disposiciones constitucionales y legales, en virtud de que se dio en flagrancia en el área en que se desarrollaron los hechos investigados y el hecho punible imputado está conminado con pena privativa de libertad superior a dos años de prisión, ajustándose a lo dispuesto en los artículos 2148 y 2149 del Código Judicial.

PARTE RESOLUTIVA

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención de EVERTH HINESTROZA ZÚÑIGA.

Se dispone poner al imputado nuevamente a órdenes de la autoridad demandada.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

HABEAS CORPUS A FAVOR DE DANIEL ENRIQUE PRINCE, CONTRA LA FISCAL TERCERA SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El 10 de mayo del año en curso, fue presentada acción de habeas corpus a favor del señor **DANIEL ENRIQUE PRINCE** y contra la **FISCAL TERCERA SUPERIOR** del tercer Distrito Judicial, por razón de la orden de detención preventiva expedida desde el 27 de septiembre de 1995.

Como respuesta al libramiento de habeas corpus que se dictó en la misma fecha, la Fiscal Tercera, mediante Oficio N° 1425 del 13 de mayo del año en curso, informó que la detención preventiva del señor Daniel Enrique Prince fue ordenada por la Fiscalía Auxiliar de la República mediante providencia de 29 de septiembre de 1995 y que su despacho la mantuvo en virtud de que existen en el expediente que se instruye con motivo de la investigación del delito de homicidio en grado de tentativa en perjuicio de MANUEL ENRIQUE PÉREZ, varias declaraciones que lo incriminan como autor del hecho punible. Informó además, que el Segundo Tribunal Superior de Justicia le concedió fianza de excarcelación por el monto de B/.5,000.00, pero que la misma no ha sido consignada a la fecha.

Por su parte, el accionante al explicar los fundamentos de la acción sostiene que no se encuentra en autos, debidamente acreditado el delito que se le imputa, por cuanto no aparecen el dictamen médico legal sobre las lesiones sufridas y tampoco se ha establecido la incapacidad producida por las mismas, pues todo indica que la parte supuestamente afectada no alcanzó los 30 días de incapacidad y por lo tanto el delito que se le imputa de acuerdo a la Ley 53 de 12 de diciembre de 1995, es competencia de las autoridades de policía. También anota que el delito de homicidio en grado de tentativa, al tenor de lo que establece el artículo 2148 del Código Judicial, no conlleva detención preventiva.

Al examinar el expediente se puede constatar que a la fecha, después de transcurrido 8 meses de iniciada la investigación, pese a los requerimiento de la Agencia del Ministerio Público, no se ha incorporado el examen médico legal que describa las lesiones personales sufridas por Manuel Enrique Pérez, ni la incapacidad correspondiente. En cuanto a la calificación provisional del delito, mediante auto de 9 de octubre de 1995, el Segundo Tribunal Superior al resolver la solicitud de fianza de excarcelación a favor de DANIEL ENRIQUE PRINCE consideró que se trataba de una tentativa de homicidio que admite ese beneficio.

De conformidad con los artículos 131 en relación con el 60 del Código Penal, el intervalo penal mínimo en los casos de tentativa de homicidio es de 20 meses, monto punitivo que es inferior al previsto por el artículo 2148 del Código Judicial, en el cual se fundamenta la medida cautelar personal de detención preventiva. Por lo tanto, en la etapa en que se encuentra este proceso penal no hay mérito probatorio ni fundamento de derecho que apoye la continuidad de la medida adoptada contra DANIEL ENRIQUE PRINCE.

En consecuencia, el PLENO DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA ILEGAL la detención preventiva del señor DANIEL ENRIQUE PRINCE y ORDENA su inmediata libertad, siempre que no exista otra causa penal en su contra que así lo amerite.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ELVIA ALTAGRACIA DE JESÚS MERCADO O GLADYS ANTONIA ALMONTE GRUÑÓN CONTRA EL DIRECTOR NACIONAL DE MIGRACIÓN Y NATURALIZACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Licenciado Roberto Candanedo Mora presentó recurso de habeas corpus a favor de la señora **ELVIA ALTAGRACIA DE JESÚS MERCADO o GLADYS ANTONIA ALMONTE GRUÑÓN** y en contra del Director del Departamento Nacional de Migración del Ministerio de Gobierno y Justicia.

Librado el mandamiento de habeas corpus en contra del Director del Departamento Nacional de Migración del Ministerio de Gobierno y Justicia, dicho funcionario contestó mediante Oficio N° DNMYN-129-96 de 29 de abril de 1996, lo siguiente:

> "1. No es cierto que ordenamos la detención de la ciudadana ELVIA ALTAGRACIA DE JESÚS MERCADO ó GLADYS ANTONIA ALMONTE GRUÑÓN.
>
> 2. No existen al momento, motivos, fundamentos de hecho ni de derecho para la detención de la señora ELVIA ALTAGRACIA DE JESÚS MERCADO o GLADYS ANTONIA ALMONTE GRUÑÓN.
>
> 3. No tenemos bajo nuestra custodia ni a nuestras órdenes a la señora ELVIA ALTAGRACIA DE JESÚS MERCADO o GLADYS ANTONIA ALMONTE GRUÑÓN. La misma fue deportada del territorio nacional, mediante Resolución N° 9012 del 8 de agosto de 1995, por falsificación de documentos públicos."

Dado que del oficio antes citado se colige que la señora ELVIA ALTAGRACIA DE JESÚS MERCADO o GLADYS ANTONIA ALMONTE GRUÑÓN no ha sido detenida, ni existen motivos o fundamentos para su detención, y además, que la misma fue deportada del territorio nacional mediante Resolución N° 9012 del 8 de agosto de 1995, por falsificación de documentos públicos, el Pleno de esta Corporación considera que debe procederse entonces de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2572 del Código Judicial.

En consecuencia, el PLENO de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA el cese del procedimiento y DISPONE el archivo del expediente.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE LUIS ALBERTO VERGARA VÁSQUEZ CONTRA EL FISCAL OCTAVO DE CIRCUITO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL. MAGISTRADO: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Víctor Almengor Torres apeló de la decisión de dieciséis (16) de abril de 1996, mediante la cual el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial declaró legal la detención del ciudadano **LUIS ALBERTO VERGARA VÁSQUEZ**, ordenada en principio por el Fiscal Auxiliar de la República y mantenida por la Fiscal Octava del Primer Circuito Judicial de Panamá, Lic. Argentina Barrera Flores, a cuyas órdenes se encuentra el detenido.

Observa la Corte que el recurso de apelación anunciado el 24 de abril del año que decurre, no fue sustentado por el apelante, lo que hubiera proporcionado al Tribunal ad quem los elementos necesarios para dilucidar los motivos en que basa el recurrente su disconformidad con la actuación del Tribunal de primera instancia. Sin embargo, en razón del artículo 1122 del Código Judicial, por tratarse de una sentencia, la Corte debe entrar a decidir la apelación anunciada.

El segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, al conocer en primera instancia del recurso propuesto, decidió declarar legal la orden de detención, al considerar que el ciudadano **LUIS ALBERTO VERGARA** se encuentra suficientemente vinculado al delito contra el Patrimonio en perjuicio de **ALEJANDRO DELGADO HERNÁNDEZ**, tipificado en el Capítulo II. Titulo IV del libro II del Código Penal, el cual es sancionado con pena mínima superior a los dos (2) años de prisión, además de que dicha detención preventiva fue dispuesta por autoridad competente, mediante resolución escrita y motivada, fundada en razones de hecho y de derecho.

Así, el Tribunal en mención, al declarar legal la detención de **LUIS ALBERTO VERGARA VÁSQUEZ** basó su pronunciamiento en las siguientes razones:

> "Una vez analizado lo anterior debidamente cotejado estas piezas probatorias con lo argumentado por el demandante, estima la Colegiatura que a pesar de esta última manifestación del denunciante, en la que procura desvincular específicamente a VERGARA VÁSQUEZ del asunto, el hecho cierto es que SIMÓN RODRÍGUEZ, quien presenció lo sucedido y también resultó víctima, siempre indicó que fueron **tres (3)** los atacantes, afirman que fueron las personas que resultaron detenidas, entre las que se encuentra LUIS ALBERTO VERGARA.
>
> Pesa en su contra además, el hecho que de manera coincidental resulta detenido en los alrededores del lugar de los hecho y en compañía de los otros directamente involucrados, a quienes conoce y con quienes acepta que viajaba en el bus, sin que la versión por VERGARA brindada logre descartar estos elementos indiciarios existentes en su contra, sin dejar de mencionar lo sospechoso que resulta la actitud asumida por el conductor del bus, apagando la luz del mismo al empezar el problema y brindar posteriormente una versión que no logra encajar aún con los hechos denunciados". (Lo acentuado es de la Corte).

Esta Superioridad, al examinar los elementos que constan en el legajo contentivo de la investigación iniciada en relación a **LUIS ALBERTO VERGARA** ha podido constatar que existen en la instrucción las piezas que legitiman la medida cautelar adoptada.

Es así, debido a que a pesar de que la víctima, el señor **DELGADO HERNÁNDEZ** declaró no poder reconocer a las personas que lo asaltaron y despojaron de su cartera y dinero, por estar en estado de embriaguez, existe contra el sindicado la declaración del señor **SIMÓN RODRÍGUEZ** (fs. 4 del expediente), quien lo vincula de manera directa, como también la de los moradores del área, tal cual consta en el Informe de Novedad suscrito por el cabo 2° 1641 Rubén Delgado a fojas 8 del expediente, quienes reconocieron a los tres asaltantes, entre ellos el señor **LUIS ALBERTO VERGARA VÁSQUEZ.**

Aunado a lo anterior coexiste el indicio de oportunidad y presencia física, toda vez que él se encontraba en el lugar, el día y la hora del hecho punible, tal como se desprende de la propia declaración indagatoria del señor **VERGARA**

VÁSQUEZ.

Por tanto, los indicios recopilados permiten al Tribunal de alzada considerar que el juez a quo contaba con los elementos primarios que apuntan y convergen hacia su participación, en algún grado dentro del mismo, que se materializan en conclusión en los siguientes puntos:

1. La presencia en el lugar de los hechos.

2. Los testimonios de los moradores del área, quienes reconocen al sindicado.

3. Habérsele encontrado junto a los otros acusados que fueron vistos, precisamente actuando en la escena del robo.

En vista de que las cuestiones alusivas al fondo de la investigación o determinación de responsabilidad son ajenas a este proceso, y no pueden ser dirimidos por el Tribunal de Habeas Corpus que sólo examina la legitimidad formal de la medida, y que del análisis efectuado a la actuación acusada se concluye que sí se cumplieron con las formalidades legales y constitucionales, es procedente confirmar la resolución apelada.

Finalmente se advierte que el apelante, en fecha de 2 de mayo de 1996, en momentos en que el Tribunal de Alzada decidía la controversia planteada, presentó ante la Secretaría General de la Corte Suprema un escrito de "solicitud de práctica de pruebas", a fin de que esta Superioridad requiriese a la Fiscalía Octava de Circuito el envío de diligencias realizadas supuestamente en fecha reciente, que servirían de fundamento para la defensa técnica de **LUIS ALBERTO VERGARA.**

Sobre este particular debe el Tribunal indicar que conforme a lo previsto en el artículo 2589 del Código Judicial, las pruebas pedidas deben practicarse dentro de la audiencia oral, trámite que no se surte en el negocio sub-júdice, conforme a lo dispuesto en el artículo 2590 del citado texto legal.

Por otra parte, la normativa que regula la apelación en las acciones de habeas corpus tampoco prevé la posibilidad de surtir o practicar pruebas en segunda instancia ya que se falla con vista de los autos (artículo 2599 C. J.), y de cualquier forma, las pruebas solicitadas redundan en aspectos relativos a la presunta participación del imputado en el hecho punible investigado, mismas que ya han sido examinadas, tanto por Tribunal A-quo, como por esta Máxima Corporación Judicial, concluyéndose que en la investigación reposan elementos suficientes que justifican la adopción de la medida cautelar personal.

En consecuencia, la Corte Suprema, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA EN TODAS SUS PARTES, la sentencia de 16 de abril de 1996 proferida por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, que DECLARO LEGAL la detención del señor LUIS ALBERTO VERGARA VÁSQUEZ.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA

(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE RICARDO VICKER JOHNSON RAYMORE Y DARMAN GLORIA RAYMORE DE POCASANGRE CONTRA LA JUEZ CUARTA DE CIRCUITO PENAL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ, APELACIÓN. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE

AGUILERA. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Ha ingresado a esta Corporación, en grado de apelación, la acción de habeas corpus promovida por el licenciado José Luis Varela G., a favor de Ricardo Vicker Johnson Raymore y Darma Gloria Raymore de Pocasangre, y contra la Juez Cuarta del Circuito Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá.

Mediante sentencia de 15 de marzo de 1996, el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, resolvió en primera instancia esta acción y declaró legal la orden de detención preventiva contra Ricardo Vicker Jonhson Raymore y Gloria Raymore de Pocasangre.

El apoderado judicial de los imputados, en su escrito de apelación solicita que se revoque la resolución que declara legal la detención impartida contra sus representados, porque a su juicio, entre las pruebas documentales presentadas existen documentos del Registro Público que certifican que los Raymore e Inversiones Monique, S. A., estaban revestidos de mandatos y poderes de administración amplios y generales dentro de la jurisdicción Civil-Mercantil, que otorgaban a los Raymore derechos consagrados en los artículos 1420 y 1421 del Código Civil; 1401, 599, 594 y 582 del Código de Comercio; 21 y 32 de la Constitución; 19 y 1 del Código Penal, y el 2566 y 236 del Código Judicial. Además, señala que mediante certificado autenticado del Registro Público, quedó comprobado que el representante legal de Inversiones Monique, S. A., es Ricardo Vicker Jonhson y no el querellante David Sterental.

Por otro lado, afirma que los peritajes y las acciones exhibitorias practicadas carecen de valor jurídico, de acuerdo con la resolución del Primer Tribunal Superior de Justicia fechada el 15 de marzo de 1996, de la cual presentó copia y que las mismas son ilegales porque al recabarlas se violó los artículos 29 de la Constitución y 857 del Código Judicial, y concordantes del Código de Comercio, así como también resultó ilegal la revisión de papeles y cartas en ausencia de los Raymore y los Libros de contabilidad de los Raymore-Monique, S. A., utilizados en su contra.

Finalmente, alega el demandante que el auto de llamamiento a juicio en que se decreta la detención, no cumple con los requisitos que exige la Ley, ya que se omitió señalar el título genérico del delito por el cual se interpuso la querella y dicho auto tampoco establece claramente quién es el supuesto ofendido.

En el informe rendido al Segundo Tribunal Superior de Justicia, mediante Oficio N° 342 de 6 de marzo de 1995, la Jueza Cuarta de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, expresó que sí ordenó la detención preventiva de los señores Ricardo Vicker Johnson Raymore y Darma Gloria Raymore de Pocasangre. La Jueza señaló que las razones de hecho y de derecho en las cuales fundamenta la orden de detención se encuentran en el auto de llamamiento a juicio de 7 de septiembre de 1995. Adicionalmente, señaló que pese a la penalidad establecida para el delito de Apropiación Indebida, constan en autos reiteradas diligencias tendientes a lograr que los imputados rindiesen indagatoria dentro de la presente causa cuyo resultado fue infructuoso, razón por la cual, se profirió el auto encausatorio sin que los mismos fuesen indagados, y su detención preventiva se decretó en atención al artículo 2147-B, en concordancia con el 2147-C y 2147-D del Código Judicial. Por último, informó que los imputados no están bajo su custodia y que no existe orden de captura escrita contra estos porque no se han emitido las boletas de captura correspondientes.

El artículo 194 del Código Penal y los artículos 2147-C y 2147-D del Código Judicial establecen lo siguiente:

> "**Artículo 194**. Apropiación Indebida: El que se apropie en provecho suyo o de un tercero, de una cosa mueble ajena, que se le haya confiado o entregado por un título no traslaticio de dominio, será

sancionado con prisión de 6 meses a 3 años y de 50 a 250 días-multas.

Artículo 2147-C. Serán aplicables las medidas cautelares:

a) Cuando existan exigencias inaplazables relativas a las investigaciones, relacionadas con situaciones concretas de peligro para la adquisición o la autenticidad de las pruebas;

b) Cuando el imputado se dé a la fuga o exista peligro evidente de que intenta hacerlo, y el delito contemple pena mínima de dos años de prisión;

c) Cuando, por circunstancias especiales o por la personalidad del imputado, exita peligro concreto de que éste cometa delitos graves mediante el uso de armas u otros medios de violencia personal.

Artículo 2147-D. Al aplicar las medidas, el Juez y el funcionario de instrucción deberán evaluar la efectividad de cada una de ellas, en cuanto a la naturaleza y el grado de las exigencias cautelares requeridas en el caso concreto.

Cada medida será proporcionada a la naturaleza del hecho y a la sanción que se estime podría ser impuesta al imputado.

La detención preventiva en establecimientos carcelarios sólo podrá decretarse cuando todas las otras medidas cautelares resultaren inadecuadas.

Salvo que existan exigencias cautelares de excepcional relevancia, no se decretará la detención preventiva cuando la persona imputada sea una mujer embarazada, o que amamante a su propia prole, o una persona que se encuentre en grave estado de salud o que haya cumplido los sesenta y cinco años de edad.

Tampoco se decretará la detención preventiva, salvo en caso de exigencias cautelares excepcionales, cuando el imputado sea una persona tóxicodependiente o alcohol-dependiente, que se encuentre sometido a un programa terapéutico de recuperación en una institución de salud legalmente autorizada, siempre que la interrupción del programa pueda perjudicar la desintoxicación del imputado.

El Juez o funcionario de instrucción deberá comprobar que la persona dependiente se encuentra efectivamente sometida a un programa de recuperación."

El Pleno observa que de acuerdo con el informe de conducta rendido por la Jueza Cuarta de lo Penal al Segundo Tribunal Superior de Justicia, es evidente que los sindicados Ricardo Vicker Johnson Raymore y Darma Gloria Raymore de Pocasangre han estado rehuyendo la acción de la justicia, sin embargo, de las normas precitadas se desprende que como el delito de Apropiación Indebida tiene señalado pena de prisión cuyo mínimo es menor de 2 años,no procede la medida cautelar decretada y no es aplicable a los sindicados el literal c del artículo 2147-C del Código Judicial. En cuanto al artículo 2147-D, no estamos ante ninguno de los casos allí contemplados. Por tanto la medida cautelar decretada por la funcionaria demandada es ilegal.

En mérito de lo expuesto, el PLENO de la Corte Suprema, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley PREVIA REVOCATORIA de la sentencia dictada el 15 de marzo de 1996 por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, DECLARA ILEGAL la orden de detención preventiva decretada contra Ricardo Vicker Jonhson Raymore y Darma Gloria Raymore de Pocasangre impartida la Juez Cuarta de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá mediante auto de 7 de Septiembre de 1995 reformado por auto de 16 de enero

de 1996 Y ORDENA que se deje sin efectos.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE GENEROSO FIGUEROA ORTIZ, CONTRA EL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El señor **GENEROSO FIGUEROA ORTIZ**, en su propio nombre y representación interpuso acción de Habeas Corpus a su favor, y contra el **FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA**.

Una vez librado el correspondiente mandamiento ejecutivo contra la autoridad acusada quien, mediante Oficio N° 7900 de 16 de mayo de 1996 (f. 6), manifestó que el señor **GENEROSO FIGUEROA ORTIZ**, fue puesto a órdenes de la **FISCALÍA OCTAVA DE CIRCUITO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ**, mediante Oficio N° 4837 de fecha 8 de abril de 1996, situación que varía la competencia del tribunal que debe conocer de la acción interpuesta.

En consecuencia la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLINA el conocimiento de esta acción ante el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial y ORDENA, su inmediata remisión.

BASE LEGAL: artículos 2588 y 2602 del Código Judicial.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE LAW KEN CONTRA EL DIRECTOR NACIONAL DE MIGRACIÓN Y NATURALIZACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado César Guardia González interpuso demanda de habeas corpus a favor del señor LAW KEN contra el Director Nacional de Migración y Naturalización.

Librado el mandamiento de habeas corpus contra el Director Nacional de

Migración y Naturalización, dicho funcionario contestó, mediante Nota DNMYN-137-96 de 3 de mayo de 1996, lo siguiente:

> "a) No es cierto que ordenamos la detención del señor LAW KEN, de nacionalidad china; el mismo fue remitido por el Fiscal Auxiliar de la República, Encargado; y puesto a nuestras órdenes mediante oficio N° 6613 del 22 de abril de 1996.
>
> b) Los motivos de hecho en que se fundamenta la detención de dicho ciudadano son:
>
> PRIMERO: Que, mediante Oficio N° 6613 de 22 de abril de 1996, el señor LAW KEN, de nacionalidad china, fue remitido a esta Dirección a fin de determinar su situación migratoria.
>
> SEGUNDO: Que, se ha podido comprobar que desde su llegada a Panamá, en abril de 1982, al señor Law Ken se le han dado infinidades de oportunidades para arreglar su status, y el mismo no lo ha hecho.
>
> TERCERO: Que, además el señor LAW KEN, de nacionalidad china, es considerado un sujeto de alta peligrosidad, que atenta contra la seguridad y el orden público; tal cual lo muestra nuestro archivo y en innumerables ocasiones ha estado involucrado en la comisión de delitos de Homicidio y contra el patrimonio.
>
> CUARTO: Que, en nuestro Decreto Ley N° 16 del 30 de junio de 1960, no existe ninguna norma que contemple el derecho a la residencia por el hecho de tener hijos panameños.
>
> Los motivos de derecho están fundamentados en los preceptos legales contenidos en el Decreto Ley N° 16 del 30 de junio de 1960, modificado por el Decreto Ley N° 13 del 20 de septiembre de 1965 y la Ley 6ª del 5 de marzo de 1980, específicamente los Artículos 36, 54, 65 y 85, normas éstas que son concordantes con los constitucionales expresados en el Artículo 14 de nuestra Carta Magna, que dispone que "La inmigración será regulada por la Ley en atención a los intereses sociales, económicos y demográficos del país".
> ...
> c) El señor LAW KEN se encuentra a nuestras órdenes para su deportación, ordenada mediante Resolución N° 1628 del 29 de abril de 1996.
>
> Por imperio de la Ley, ponemos a órdenes de la Suprema Corte al señor LAW KEN, de nacionalidad china."

En el presente negocio, el Pleno de la Corte Suprema considera necesario hacer ciertas observaciones. En primer lugar, consta en el expediente, de fojas 13 a 15 la documentación que comprueba que, efectivamente, el señor LAW KEN se encuentra ilegalmente en el territorio nacional por cuanto la Dirección Nacional de Migración y Naturalización le había concedido prórroga por trámite, la cual era válida hasta el día 26 de marzo de 1995.

Consta igualmente, a fojas 10 y 11 del expediente el informe de conducta expedido por la Subdirectora Nacional de Migración y Naturalización del Ministerio de Gobierno y Justicia en el cual señala que el ciudadano chino LAW KEN no fue detenido por las autoridades migratorias sino que fue remitido por el Fiscal Auxiliar de la República mediante Oficio N° 6613 del 22 de abril de 1996 a fin de que se determinara su situación migratoria. En este mismo orden de ideas, se observa a foja 12 del expediente el oficio antes aludido, suscrito por el Fiscal Auxiliar de la República en el que señala que el señor LAW KEN, sindicado por la supuesta comisión del delito de secuestro en perjuicio del menor CARLOS JOSÉ YAP CHENG, según denuncia suscrita por el señor Carlos Joaquín Yap Cheng, es puesto a órdenes de migración con el objeto de que se determine su situación migratoria.

Por otro lado, la Corte observa a foja 35, copia autenticada de la Resolución DNMYN N° 1628 de 29 de abril de 1996, expedida por el Director Nacional de Migración y Naturalización en el cual se resuelve deportar del territorio nacional al ciudadano chino LAW KEN.

Al examinar estos hechos, tenemos que el Decreto Ley 16 de 1960 modificado por la Ley 6 de 1980, faculta al Director de Migración y Naturalización para tomar medidas directas sobre quienes permanezcan en nuestro país. Así vemos que el artículo 65 de dicho Decreto Ley 16 señala que los extranjeros que permanezcan en el país después de la fecha de vencimiento de su visa o tarjeta de tránsito, serán puestos a órdenes del Ministerio de Gobierno y Justicia. Asimismo, el artículo 16 del referido Decreto Ley faculta a los funcionarios del Departamento de Migración y Naturalización para que aprehendan a cualquier extranjero que fuera sorprendido en el territorio nacional sin documentos que acrediten su permanencia legal.

De todo lo anterior se desprende que el señor Law Ken ha sido privado de su libertad por orden de autoridad competente y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley 16 de 1960, razón por la cual procede declarar legal la medida cautelar de privación de la libertad impuesta al señor antes mencionado por el Departamento de Migración y Naturalización del Ministerio de Gobierno y Justicia.

Por tanto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley DECLARA que es LEGAL la medida cautelar de privación de la libertad expedida y practicada por el Departamento de Migración y Naturalización contra LAW KEN.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS (PREVENTIVO) A FAVOR DE LOICIBER DE PERALTA CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado **EDUARDO E. RÍOS** ha presentado ante esta Superioridad, acción de habeas corpus preventivo a favor **LOICIBER DE PERALTA** y contra el Director de la Policía Técnica Judicial, por considerar que la orden de privación de libertad supuestamente expedida por dicho funcionario contra la señora **PERALTA**, es ilegal.

Una vez acogida la acción y librado el mandamiento de Habeas Corpus en fecha de 9 de mayo de 1996, el señor Director de la Policía Técnica Judicial contestó el libramiento mediante memorial de 10 de mayo de 1996, recibido en la Secretaría General de la Corte Suprema el día 13 de mayo de los corrientes, y en el cual señaló básicamente que ese despacho no ha dispuesto la detención preventiva de la favorecida por esta acción. Así, el funcionario demandado indicó:

> "No es cierto que hemos ordenado la detención de la señora **LOICIBER DE PERALTA**. ...
>
> Tenemos conocimiento que la prenombrada **LOICIBER DE PERALTA** se encuentran gozando de libertad."

Por su parte, el proponente de la acción de habeas corpus acompaña como prueba de la existencia de la supuesta orden de "arresto ilegal" girada contra la señora **DE PERALTA**, copia fotostática de un informe secretarial de la División de Delitos contra la Fe Pública de la Policía Técnica Judicial calendado 22 de diciembre de 1995, en la que se recoge la circunstancia de que la prenombrada había sido conducida en aquella fecha a sus instalaciones con el fin de practicar una prueba caligráfica por razón de una denuncia presentada en su contra por delito de falsedad.

Sin embargo, en ningún momento se acredita que se hubiese detenido preventivamente a la señora **DE PERALTA**, o que exista en la actualidad orden de detención preventiva. Por el contrario, de los hechos narrados por la propia parte actora se desprende que la señora **DE PERALTA** no fue privada de su libertad corporal en aquella oportunidad, y que sigue gozando de libertad a la fecha.

Esta información es ratificada por el funcionario demandado al contestar el libramiento (informe ut supra), quien ha negado de manera rotunda que ese despacho haya expedido orden de privación de libertad contra **LOICIBER DE PERALTA.**

En estas circunstancias cabe advertir, por tratarse de un habeas corpus **preventivo**, que conforme a la jurisprudencia sentada por este Tribunal en seguimiento a la Constitución y la Ley, esta acción preventiva tiene la finalidad concreta de proteger a los individuos contra amenazas comprobadas a la libertad corporal, requiriéndose por tanto que el peticionario haga constar con certeza, la existencia de un temor fundado y actual, sobre la inminente afectación a su libertad personal.

En este contexto, la Corte ha venido reiterando que la esencia del Habeas Corpus preventivo descansa:

1. la existencia de una amenaza efectiva contra la libertad corporal, **la que por su naturaleza debe constar en un mandato que ordene una detención preventiva**; y 2. que tal mandato no se haya hecho efectivo.

Con vista en autos, esta Superioridad puede advertir que la señora **DE PERALTA** ha sido conducida en el pasado a las instalaciones de la agencia investigativa, no con el fin de aplicarle medida cautelar personal alguna, sino de realizar pruebas periciales dentro de una investigación que se adelanta en su contra. No se encuentra planteada de esta forma, orden de privación de libertad en su contra hasta la fecha, por parte de la autoridad demandada, máxime cuando este funcionario ha expresado de manera categórica que contra **LOICIBER DE PERALTA** no ha girado orden de detención alguna, y el actor tampoco ha acreditado que tal orden efectivamente exista.

Esta Corporación Judicial debe manifestar finalmente, que a través de diversos pronunciamientos ha insistido en que es al promotor de la acción preventiva a quien corresponde suministrar al Juzgador la comprobación de la existencia de la orden privativa o restrictiva de libertad, (v. g. resolución de 28 de agosto de 1992, 4 de enero de 1994 y más recientemente en resolución de 23 de enero de 1996).

La exigencia se justifica en la medida de que esta acción de naturaleza constitucional, como medio defensivo, supone la existencia de una medida que efectivamente se ha dictado y que amenaza la libertad corporal de una persona, y **tal amenaza debe ser cierta**, **no presuntiva**.

En vista de lo anterior, resulta evidente la no viabilidad de la acción presentada, ante la ausencia de uno de los elementos esenciales que deben revestir la figura del Habeas Corpus preventivo.

En consecuencia, la Corte Suprema, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA NO VIABLE la acción de Habeas Corpus Preventiva presentada en favor de LOICIBER DE PERALTA.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ABDIEL ALEXIS ALVARADO DÍAZ CONTRA EL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La señora **Mayte María Rodríguez**, ha presentado ante esta Superioridad, acción de Habeas Corpus en favor de **ABDIEL ALEXOS ALVARADO DÍAZ**, contra el Fiscal Auxiliar de la República, por considerar que la detención de ilegalidad que sufre el prenombrado es ilegal.

Una vez acogido el recurso en mención, mediante providencia fechada 13 de mayo de 1996 se libró el mandamiento de Habeas Corpus respectivo, el que fue contestado por el señor Fiscal Auxiliar mediante Oficio N° 7902 del 16 de los corrientes en los siguientes términos:

> "Con relación a darle respuesta a mandamiento de Habeas Corpus, librado en contra del suscrito y en favor de ABDIEL ALEXIS ALVARADO DÍAZ, informo a usted, que el expediente fue enviado a la Fiscalía Tercera del Primer Circuito Judicial de Panamá, mediante el Oficio N° 4414, el 25 de marzo de 1996."

En vista de que el expediente que se instruye al señor **ABDIEL ALEXIS ALVARADO DÍAZ** fue remitido por la Fiscalía Auxiliar de la República a la Fiscalía Tercera del Primer Circuito Judicial de Panamá, donde quedó radicada la instrucción sumarial y a cuyas órdenes se encuentra el prenombrado, procede enviar el presente recurso de Habeas Corpus presentado al Tribunal competente para conocer la acción de conformidad con el artículo 2602 del Código Judicial.

En consecuencia, la Corte Suprema, Pleno, administrandojusticia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLINA en el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, la acción de Habeas Corpus presentada a favor de ABDIEL ALEXIS ALVARADO DÍAZ.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE LESDIEL ANTONIO RAMOS CONTRA LA JUEZ SECCIONAL DE MENORES DE LA CHORRERA. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado JUAN ANTONIO LEDEZMA ha interpuesto ante el Pleno de la Corte, recurso de apelación contra la Resolución N° 04 H. B.-R. de 22 de abril de 1996 dictada por el Tribunal Superior de Menores dentro de la acción de **Habeas Corpus** propuesta a favor de **LESDIEL ANTONIO RAMOS** contra la Juez Seccional de Menores de La Chorrera.

El recurrente pretende que la citada resolución, visible de fojas 11 a 17 de este expediente, mediante la cual se declaró **LEGAL** el internamiento del menor LESDIEL RAMOS, sea revocada y en su lugar se ordene la libertad del menor. Esta consideración, en síntesis, se fundamenta en que: la orden de internamiento se dictó después de 48 horas de haberse detenido al menor y de que se tuvo conocimiento de la presentación del habeas corpus; y, porque dicha orden carece de los dos últimos requisitos establecidos por el artículo 2159 del Código Judicial.

Así, en el recurso de apelación (fs. 18 a 22) se destaca que el menor fue detenido el 16 de abril del año en curso, que fue puesto a órdenes del juzgado seccional de menores el 18 de abril, que "el día 19 de abril en horas de la mañana, y conversando con el Secretario encargado quien nos indicó que no se había proferido ningún tipo de Resolución en este Proceso". Por tanto, según expresa en cuanto a la resolución que ordena el internamiento, "nos sorprende que aparezca con fecha de 18 de abril de 1996".

Entre los aspectos analizados por la resolución impugnada, sobre los cargos hechos por la censura, consideramos importante citar lo siguiente:

> "Por las particularidades de estos casos, no puede esperarse la presencia inmediata de la autoridad competente para que ordene el arresto, porque facilitaría la fuga, pondría en peligro la adquisición de pruebas e impediría la recuperación de los bienes despojados. Es por ello que, en estas condiciones, la ley permite a la autoridad, como a cualquier particular, dar captura al individuo, sin esperar la orden escrita de la autoridad competente (Cfr. artículo 2155 ídem). Y es que, la situación de peligro que ocasiona la huida de individuos armados, recién haber cometido un delito, exige que sea conjurada por la policía con acciones rápidas y eficaces.

Ahora bien, la propia ley obliga a los agentes de policía a poner a estos individuos bajo orden de la autoridad dentro de las veinticuatro horas siguientes a su captura y si, resulta procedente su detención, así lo hará dentro de las otras veinticuatro horas siguientes (Cfr. artículo 2158 ídem). Es decir, que entre la captura y la orden de detención, puede transcurrir un plazo de cuarenta y ocho horas.

Si revisamos las actuales constancias procesales, podremos verificar que RAMOS fue capturado en la tarde del día 16 de abril y que la orden de internamiento fue dictada por la Juez de Menores el día 18 de abril. Es decir, la orden fue dictada dentro del término legal.

Por otro lado, el artículo 535 del Código de la Familia establece que el internamiento del menor constituye una de las medidas tutelares que dispone el Juez durante la investigación del acto infractor. La naturaleza y gravedad del ilícito cometido indica que el internamiento es la medida más adecuada para lograr su protección integral, educación y resocialización.

A juicio de la Corte, en los párrafos previamente transcritos, se explica en forma clara lo relativo al período de tiempo que puede mediar entre la captura que se realiza luego que el individuo ha cometido el hecho punible y el momento en que la autoridad competente dicta la orden de detención en su contra. Todo lo cual se fundamenta en lo preceptuado por los artículos 2149, 2155 y 2158 del Código Judicial.

En efecto, la situación acontecida en este caso es permitida por la ley, ya que el hecho de haberse sorprendido infraganti al menor LESDIEL RAMOS durante

la comisión de un asalto a mano armada, facultaba su detención inicial por las autoridades captoras, aunque no existiera en ese momento la orden al respecto. Sin embargo, su aprehensión fue formalizada con posterioridad por la autoridad competente, en este caso el juzgado de menores, quien ordenó su internamiento mediante resolución motivada. La aludida resolución, dictada por el Juzgado Seccional de Menores del Tercer Circuito Judicial con sede en La Chorrera, figura a fojas 76 de los antecedentes adjuntos al presente expediente de habeas corpus. En la misma se determina aplicar al menor, a quien se le atribuye un hecho calificado como delito por la ley penal (asalto a mano armada), una de las medidas tutelares descritas por el artículo 535 del Código de la Familia. Cabe observar que la resolución se encuentra precedida de la documentación, informes y trámites necesarios para su adopción.

La actuación que hasta el momento se ha realizado con respecto al caso del menor **LESDIEL RAMOS**, no vulnera las garantías individuales y procesales reconocidas a su favor por la Constitución Nacional, la Convención sobre los derechos del Niño y las leyes.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la resolución de 22 de abril de 1996 dictada por el Tribunal Superior de Menores.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ROBINSON MORENO PEREA CONTRA EL DIRECTOR NACIONAL DE CORRECCIÓN. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Al Pleno de la Corte Suprema ha ingresado la acción de habeas corpus propuesta a favor de **ROBINSON MORENO PEREA** y contra el Director Nacional de Corrección.

Acogida la presente acción, se libró el respectivo mandamiento de habeas corpus a el funcionario acusado, quien mediante Nota N° 1657-DNC de 8 de mayo de 1996 rinde su informe de conducta en los siguientes términos:

"...

C. El recurrente, señor **ROBINSON MORENO PEREA**, con cédula de identidad personal N° 5-16-2724 se encuentra actualmente a órdenes de la Dirección Nacional de Corrección, toda vez que el Juzgado Séptimo de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, mediante sentencia de fecha 7 de enero de 1992, condenara al precitado señor a la pena de SIETE (7) años y SEIS (6) meses de prisión por la comisión del delito de ROBO Y VIOLACIÓN en perjuicio de Odilia Díaz Pastor e Iluminada Díaz de Sánchez, respectivamente.

El señor ROBINSON MORENO PEREA desde su ingreso, 19 de marzo de 1988, ha registrado un sinnúmero de egresos, fugas y recapturas, como se hace constar en el Mandamiento N° 703-DNCNC, por lo que da un cómputo total de la pena impuesta hasta el día 24 de septiembre de 1998.

> En relación al delito de Aprovechamiento de cosas provenientes del delito en perjuicio de Jack Wade Sanders, por el que fuera condenado por el Juzgado Tercero Municipal del Distrito de Panamá, Ramo Penal, a la pena de UN AÑO de prisión y 25 días multa, según se hace constar en Mandamiento N° 702-DNC, el señor MORENO PEREA terminó de cumplir dicha pena el día 19 de marzo de 1989." (Fs. 11-12).

Del anterior informe se desprende, que el señor **ROBINSON MORENO PEREA,** cumplió al 19 de marzo de 1989 la pena de un (1) año y 25 días que le fuera impuesta por el delito de aprovechamiento de cosas provenientes del delito en perjuicio de Jack Wade Sanders; sin embargo actualmente **se encuentra cumpliendo una condena** impuesta a través de una sentencia debidamente ejecutoriada, dictada en un proceso penal ante el Juzgado Séptimo de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, por los delitos de robo y violación. Esta pena la terminará de cumplir en septiembre de 1998.

Se hace necesario indicar que la acción de habeas corpus persigue la restitución de la libertad cuando ésta ha sido restringida a través de una detención ilegal o arbitraria. Pero la medida que justifica la privación de la libertad debe ser la detención preventiva del individuo.

No es ilegal pues, una detención cuando ésta se produce en virtud del cumplimiento de una condena jurisdiccional debidamente ejecutoriada. Por lo tanto, no es viable la acción de habeas corpus en casos como el presente y lo que procede es declarar legal la detención del accionante.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención de ROBINSON MORENO PEREA, y en consecuencia ORDENA sea filiado nuevamente en el respectivo Centro Penitenciario, a órdenes de la Dirección Nacional de Corrección del Ministerio de Gobierno y Justicia de Panamá.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE LOU XUE YING CONTRA EL DIRECTOR NACIONAL DE MIGRACIÓN Y NATURALIZACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El señor NICOLÁS ACOSTA HERRERA ha interpuesto acción de habeas corpus a favor de la señora **LOU XUE YING**, ciudadana de nacionalidad china, quien se encuentra detenida desde el día 19 de abril de 1996 a órdenes del Director Nacional de Migración y Naturalización del Ministerio de Gobierno y Justicia.

Acogida la presente acción, se libró mandamiento de Habeas Corpus contra el aludido funcionario, quien mediante Nota N° DNMYN-128-96 de 29 de abril de 1996 rinde su informe de conducta:

> "A. Es cierto que ordenamos la detención de la señora LOU XUE YING, de nacionalidad china, en vista de que la misma trató de usurpar la identidad de otra ciudadana por no portar documentos que acrediten su estadía en Panamá.

B. Los motivos de hecho en que se fundamenta la detención de la señora LOU XUE YING, de nacionalidad china, son:

PRIMERO: Que, el día 18 de abril, la señora PON YAP GI, PAN YE MIAN, residente en nuestro país desde el mes de noviembre de 1992, y con cédula de identidad personal N° E-8-60372, se apersonó a nuestras oficinas a obtener un permiso de regreso, ya que la misma tenía intención de viajar.

SEGUNDO: Que, al momento de tomarse la foto del respectivo carnet, la señora LOU XUE YING, hizo uso del respectivo recibo de pago de la señora PON YAP GI, PAN YE MIAN, haciéndose pasar por ella, tal como lo muestra la fotocopia del carnet de regreso que acompañamos a este escrito.

TERCERO: Que, en la actualidad la señora LOU XUE YING, se encuentra indocumentada y desde su llegada al país en 1993, la misma no ha tramitado ningún tipo de documentación.

CUARTO: que, es evidente y claro la usurpación de identidad realizada por la señora LOU XUE YING, de nacionalidad china, y del cual la misma se veía beneficiada, puesto que con dicho carnet la mencionada ciudadana podría salir y entrar del país sin necesidad de visa autorizada, puesto que se haría pasar como residente.

Los fundamentos de derecho están basados en los preceptos legales contenidos en el Decreto-Ley N° 16 del 30 de junio de 1960, modificado por el Decreto-Ley N° 13 del 20 de septiembre de 1965 y la Ley 6ta., del 5 de marzo de 1980, específicamente los Artículos 36, 65, 68, 80 y 85, ...
...
C. La señora LOU XUE YING, de nacionalidad china se encuentra a nuestras órdenes para su deportación, ordenada mediante Resolución N° 1489 del 23 de abril de 1996, por estar indocumentada y por usurpación de identidad. ..." (Fs. 4 y 5).

Adjunto al informe de conducta, el Director Nacional de Migración envía copia de la Filiación en el Registro de Inmigrantes de **LOU XUE YING**; copia de la solicitud que hiciera **PON YAP GI**, **PAN YE MIAN** para el permiso de regreso, su cédula de identidad personal y su pasaporte; copia del carnet usurpado por **LOU XUE YING**; copia de la Resolución N° 1489 de 23 de abril de 1996 mediante la cual dicha Dirección ordena la deportación de esta ciudadana china.

Del contenido del informe anteriormente transcrito se colige que la detención corporal de la persona favorecida con el mandamiento de habeas corpus obedece, sin la menor duda a que fue aprehendida en las oficinas de la Dirección Nacional de Migración y Naturalización en los momentos en que usurpaba la identidad de otra persona, con el objeto de obtener un carnet de regreso y así "legalizar" de alguna forma su permanencia en el país.

La Ley 16 de 30 de junio de 1960, modificada por el Decreto-Ley N° 13 de 1965 y la Ley N° 6 de 1980, que reglamenta la materia migratoria, indica en su artículo 60 lo siguiente:

"Los funcionarios de Migración tendrán facultad para aprehender a cualquier extranjero que en su presencia o a su vista pretenda ingresar la territorio de la República violando los preceptos del presente Decreto Ley o **que fuere sorprendido en el territorio nacional sin documentos que acrediten su entrada legal, residencia o permanencia en el país, de conformidad con los requisitos legales** ..." (El resaltado es nuestro).

LOU XUE YING se encuentra detenida en espera de que se dé cumplimiento a la orden de deportación ordenada mediante la Resolución N° 1489 de 23 de abril de 1996. Dicha Resolución se basa en que desde el mes de noviembre de 1992, fecha

en que ingresó a nuestro país, no posee documentos ni realizó en ningún momento los trámites necesarios para obtenerlos y así legalizar su permanencia en el mismo.

La orden de deportación encuentra su fundamento en los artículos 60, 61 y 65 de la Ley 16 de 30 de junio de 1960, y deberá ser notificada a la afectada, a fin de que tenga la oportunidad de interponer los recursos que consagra la ley, y podrá ejecutarse cuando se encuentre ejecutoriada.

Esta Corporación en consecuencia, vistas las anteriores circunstancias, estima que LOU XUE YING ha sido detenida por autoridad competente y de acuerdo con los trámites de la ley; pues, resulta evidente que a la luz de la normativa que regula la Migración en nuestro país, el Director Nacional de Migración y Naturalización está facultado para aprehender a cualquier extranjero que permanezca en el territorio nacional en violación de los preceptos legales que rigen la materia, como ya hemos visto.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención de la ciudadana china LOU XUE YING.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ÁLVARO RODRÍGUEZ, JENNY NIETO ROJAS Y JORGE MONTOYA CONTRA EL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

En escrito dirigido a la Presidencia de esta Corporación, el Licenciado MARIO VAN KWARTEL VÉLEZ interpuso recurso de habeas corpus en favor de **ÁLVARO RODRÍGUEZ, JENNY NIETO ROJAS y JORGE MONTOYA** y en contra del Fiscal Auxiliar de la República, hecho que motivó que se diera acogida a la acción propuesta librándose de inmediato el mandamiento de habeas corpus contra dicho funcionario, quien envió el informe respectivo en donde expresa:

"...

1. Esta Agencia del Ministerio Público, no ha decretado la detención de los ciudadanos ÁLVARO RODRÍGUEZ, JENNY NIETO ROJAS y JORGE MONTOYA, ni verbalmente, ni por escrito.

2. En los sumarios donde aparecen como denunciantes, los señores CARMEN SARMIENTO DE RODRÍGUEZ y CARMEN ISABEL DE LA ROSA CASTILLO, ambos por el supuesto delito de ESTAFA, los citados ÁLVARO RODRÍGUEZ, JENNY NIETO ROJAS y JORGE MONTOYA, no se encuentran a nuestras órdenes. Se nos envió el expediente, a fin de realizar diligencia de Reconocimiento En Ruedad (sic) de Presos.

3. Los antes mencionados, no se encuentran bajo nuestra custodia, como tampoco a nuestras órdenes. Si fueron investigados por el mismo delito, sin embargo, **en los respectivos expedientes, se ordenó dejar sin efecto la aprehensión de cada uno de ellos.**

Adjunto copia autenticada de las notas, respectivas, fechadas 10 de los corrientes, cuyo(sic) números son 7582, 7592, 7594 y 7604." (F. 5). (Lo resaltado es nuestro).

De lo manifestado por el señor Fiscal Auxiliar de la República se desprende que en los respectivos expedientes en los que fueran investigados por los delitos de estafa los nombrados **ÁLVARO RODRÍGUEZ, JENNY NIETO ROJAS y JORGE MONTOYA** se dispuso concederles la libertad al ordenar dejar sin efecto sus aprehensiones. Adjunto al informe de conducta, el funcionario acusado envía copias de las respectivas órdenes de dejar sin efecto las aprehensiones de los accionantes (fs. 6-9).

Es notorio, pues, que se ha producido el fenómeno jurídico conocido como sustracción de materia; y consecuentemente sería infructuoso iniciar un procedimiento de habeas corpus, ya que contra los precitados **ÁLVARO RODRÍGUEZ, JENNY NIETO ROJAS y JORGE MONTOYA** no pesa orden de detención preventiva alguna, como hemos visto. Procede entonces, ordenar el cese del procedimiento.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA el CESE del procedimiento en la presente acción de habeas corpus; y en consecuencia, DISPONE EL ARCHIVO del expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE MARCOS JIMÉNEZ PEDROZA CONTRA EL FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Edwin H. León Rodríguez interpuso recurso de Habeas Corpus a favor de Marcos Jiménez Pedroza y contra el Fiscal Especializado en Delitos Relacionados con drogas.

La demanda fue acogida, se dictó el mandamiento de habeas corpus correspondiente, y se solicitó un informe de conducta al señor Fiscal Especializado en Delitos Relacionados con Drogas, quién lo rindió mediante Oficio N° 3214 de 22 de abril de 1996, en el cual expresó que sí ordenó la detención del señor Marco Antonio Jiménez Pedroza por medio de Resolución fechada el 18 de octubre de 1995 (fs. 26 y 27).

En el referido informe, al señalar los fundamentos de hecho que motivaron la detención del imputado, el señor Fiscal indicó que los agentes policivos del área de Santa Cruz vieron en el área de Avenida Nacional al señor Jiménez perseguido por otra persona, percatándose que se había cometido un robo, cuya denuncia fue interpuesta posteriormente por el señor John Tapia, quien informó que un sujeto lo había despojado de su cartera. Además, señaló que los agentes de policía persiguieron al sospechoso que se introdujo en el apartamento 14 del Edificio E. O. A. ocupado por la señora Martina Emilia Martínez Córdoba, quien dio autorización para sacar al sospechoso del baño, deteniéndose al mismo y sometiéndolo a un registro de rigor a fin de encontrar la cartera robada sin

resultados positivos. Ante este hecho los agentes solicitaron la presencia de la Corregidora de Calidonia para practicar la diligencia de allanamiento, durante la cual se encontró dos sobres transparentes de plástico, contentivos de un polvo blanco que se presumió era cocaína y además, en el baño, una cajeta recortada de bebida de naranja con hierba seca que se presumió era marihuana.

Por otro lado el Fiscal indicó que la comisión del delito contra la salud pública que se investiga, se ha comprobado con las siguientes diligencias:

Primero: Los análisis de las sustancias ilícitas incautadas por el Laboratorio Técnico Especializado en Drogas de la Policía Técnica Judicial, arrojaron resultados positivos para la determinación de cocaína (0,31 gramos) y de marihuana (5.65 gramos), sumando un total de 5.96 gramos (fs. 40-41).

Segundo: En la declaración indagatoria rendida por el señor Marcos Jiménez Pedroza, este acepta la comisión del delito de robo, pero niega toda vinculación con las sustancias ilícitas encontradas.

Tercero: En la declaración indagatoria rendida por la señora Martina Emilia Córdoba, la misma manifiesta haber presenciado la forma como este sujeto era perseguido por los agentes de policía y agrega que el mismo llevaba algo en su mano al momento en que se introdujo en su casa permitiéndole a los agentes sacarlo de la residencia. También aceptó que en la diligencia de allanamiento en su casa se encontró droga pero alega no conocer al señor Marcos Jiménez Pedroza.

Finalmente, el señor Fiscal señaló que de los elementos probatorios antes descritos, de la presencia del imputado en el lugar de los hechos y de la oportunidad que tuvo de cometer el delito surgen indicios graves de responsabilidad en su contra, y por tanto, cumplidos los requisitos señalados en los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial, se decretó la orden de detención preventiva del señor Marcos Jiménez Pedroza, quien fue puesto a disposición del Director de la cárcel Modelo mediante Oficio N° 3215 fechado 22 de abril de 1996.

El Pleno observa que en el momento que el Fiscal Especializado en Delitos Relacionados con Drogas dictó la orden de detención preventiva contra el señor Marcos Jiménez Pedroza, los hechos que rodearon el delito señalaban al imputado como presunto autor del supuesto delito contra la Salud Pública, sin embargo, posteriormente, se fueron introduciendo al expediente evidencias importantes que desvirtuaron la hipótesis inicial tales como, las declaraciones juradas rendidas por la Corregidora de Calidonia Omaris Martineau y por el Cabo Mario De León, quienes participaron de la deligencia de allanamiento al apartamento N° 14 del Edificio E. O. A. de propiedad de la señora Martina Emilia Martínez.

La Corregidora declaró que después de tocar reiteradamente la puerta del apartamento 14, la señora Martínez abrió encontrándose envuelta en una toalla y mojada, lo que indicaba que acababa de salir del baño. Se procedió a practicar la diligencia de allanamiento y uno de los miembros de la fuerza pública avisó que en el baño había gran cantidad de hierba seca, la cual estaba mojada, esparcida y tapando el desagüe, por lo que se ordenó recoger la misma y colocarla en un recipiente de cartón.

Posteriormente señaló, que al seguir con la revisión del apartamento se encontró dos (2) sobrecitos de plástico contentivos de un polvo blanco que se presumió era cocaína, dentro de un florero colocado sobre un aparador. Además, declaró que el señor Marcos Antonio Jiménez Pedroza al momento del allanamiento estaba esposado, y afuera del apartamento en compañía de los miembros de la Fuerza Pública (fs. 59). Por su parte el cabo segundo Mario De León Ríos, quien participó en la diligencia de allanamiento en declaración jurada testimonió lo siguiente: "Procedimos a abrir la puerta, en ese momento la señora Martina Martínez, estaba botando una droga en el servicio y en el baño. Yo procedí a recoger la evidencia del baño y del servicio." (Fs. 67-68).

De la declaración jurada del Cabo segundo Víctor Roberts a foja 49 del sumario, se desprende que la diligencia de allanamiento se llevó a cabo para comprobar si dentro de la residencia de la señora Martínez se econtraba la cartera que había sido robada por el encartado al señor John Tapia y no porque

hubiese indicios previos de la existencia de droga en el apartamento.

A foja 53 del expediente reposa el historial penal y policivo del señor Marcos Jiménez Pedroza en el cual se observa que el mismo ha sido penado en cuatro ocasiones por delito de hurto y robo, más no por la comisión de delitos contra la Salud Pública.

Finalmente, el examen Psiquiátrico Forense practicado al sindicado, no revela patología psicótica ni evidencia de dependencia a droga alguna (f. 37).

Una vez analizadas todas las diligencias de investigación que reposan en el expediente y las circunstancias que rodearon los hechos punibles, el Pleno considera que contra Marcos Jiménez Pedroza no existen, en esta incipiente investigación, los graves indicios de responsabilidad necesarios para decretar su detención preventiva, por delito contra la Salud Pública. En virtud de lo anterior esta medida cautelar decretada por el funcionario demandado debe declararse ilegal, sin perjuicio del sumario que se le instruye por delito contra la propiedad, cuya comisión confesó, al rendir declaración indagatoria, en los siguientes términos: " Señor Fiscal, yo no tengo nada que ver con esa droga que se encontró allí con lo que yo si estoy relacionado es con un hurto que se le cometió a un turista en el "Líder" de Calidonia, después de sacarle la cartera al turista y salir corriendo ..." (F. 16 del sumario).

En mérito de lo expuesto , el PLENO de la Corte Suprema, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley DECLARA ILEGAL la detención del señor Marcos Jiménez Pedroza ordenada por el señor Fiscal Especializado en Delitos Relacionados con Drogas, mediante Resolución fechada el 18 de octubre de 1995 por Delito contra la Salud Pública, y ORDENA su libertad si no existe orden de detención en su contra por otra causa.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS INTERPUESTO A FAVOR DE RICAUTER EURÍPIDES SINCLAIR CONTRA EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Mediante resolución de 29 de febrero de 1996, la Corte Suprema, PLENO, DECLINÓ al Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, la acción de habeas corpus propuesta a favor del señor RICAUTER EURÍPIDES SINCLAIR, en virtud de que el sindicado se encontraba a órdenes de la Fiscalía Tercera del Circuito de Colón, tal como lo informara la autoridad demandada, en ese entonces, por medio de Oficio N° 415 de 16 de febrero de 1996.

Consta a foja 21 y siguientes, la resolución de fecha 9 de abril de 1996, proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, por medio de la cual se INHIBE de conocer el presente negocio en base al Oficio N° 0915 de 21 de marzo del año en curso, expedido por la Fiscal Tercera del Circuito de Colón, y por medio de la cual le informaban a ese Despacho que el expediente en cuestión había sido remitido a la Fiscalía Superior de Turno, por lo que se declinó la competencia a esta Corporación de Justicia.

Ingresado por segunda vez el expediente que contiene la acción de habeas corpus a favor de RICAURTER EURÍPIDES SINCLAIR PÉREZ, el Magistrado Sustanciador solicitó mediante providencia de 17 de abril de 1996, el informe del funcionario acusado, este es, el señor Fiscal Cuarto Superior del Primer Distrito Judicial. Dicho funcionario contestó que en la Fiscalía Primera Superior, actualmente se tramita las sumarias contra SINCLAIR PÉREZ (f. 26). Enderezado el libramiento de habeas corpus, la autoridad demandada contestó el mandamiento por medio de Oficio de 18 de abril de 1996, en los siguientes términos:

"HONORABLE MAGISTRADO PONENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA:

Reciba nuevamente en este Despacho Acción de Habeas Corpus interpuesta por CARLOS P. BROWN, a favor del señor RICAURTER EURÍPIDES SINCLAIR (A) REY, quien se encuentra detenido en relación a investigación por el Delito Contra el Patrimonio y Contra la Vida e Integridad Personal en perjuicio de LUIS FERNANDO MARÍN GUTIÉRREZ, procedemos a dar fiel cumplimiento a lo dispuesto por esa Corporación de Justicia:

1. No es cierto que este Despacho haya ordenado la detención del recurrente. La detención del señor RICAURTER EURÍPIDES SINCLAIR PÉREZ (A) REY, fue ordenada mediante providencia fechada el día 30 de agosto de 1995, emitida por la Fiscalía Tercera del Circuito de la Provincia de Colón, (ver foja 49).

2. Según se desprende de la providencia en comento, la detención de RICAURTER EURÍPIDES SINCLAIR PÉREZ (A) REY tuvo como fundamento lo siguiente:

"... denuncia suscrita por EDWIN HENRY CABAL MARÍN, en la P. T. J. de Cristóbal, el día 21 de julio de 1995; por el asalto cometido en horas de la noche del veinte (20) de ese mismo mes y año, por dos sujetos en la residencia del prenombrado FERNANDO MARÍN, quien resultó herido con arma de fuego, debido a disparos hechos por los asaltantes.

Posteriormente rindió declaración jurada en la P. T. J. de Cristóbal, la señora RUBIELA MARÍN GUTIÉRREZ, hermana de Fernando Marín, quien dijo que al irlo a visitar en la sala de cuidados intensivos, del hospital Manuel Amador Guerrero, éste le dijo que los sujetos que lo atacaron fueron, el hijo de Gisela que le dicen ADI y otro de apodo REY, con residencia en Coco Solo, quienes tenían capuchas puestas en el rostro, logrando quitarle a uno de ellos la que tenía puesta ..."

3. En la actualidad el señor RICAURTER EURÍPIDES SINCLAIR PÉREZ (A) REY, con cédula de identidad personal N° 3-701-2333 y con residencia en la Barriada Coco Solo, se encuentra detenido en la Cárcel Pública de Colón, a órdenes de la Corte Suprema de Justicia en virtud del mandamiento de Habeas Corpus librado contra este Despacho por esa Corporación de Justicia con fecha del 2 de febrero de 1996. Anterior a eso, se encontraba a órdenes este Despacho Instructor, en virtud de nota N° 2677 del 13 de noviembre de 1995 mediante la que el Fiscal Cuarto Superior del Primer Distrito Judicial solicitó fuera filiado a órdenes de este Despacho al Director de Corrección de la Provincia de Colón. No obstante, a fin de verificar esa información en aquella ocasión se llamó vía telefónica a la Cárcel Pública de Colón en donde se nos manifestó que el detenido se encontraba a órdenes de la Fiscalía Tercera del Circuito de Colón por el mismo hecho delictivo.

De los Honorables Magistrados,

LIC. JUAN ANTONIO TEJADA, HIJO
Fiscal Primero Superior
del Primer Distrito Judicial".

Del informe transcrito, se colige que esta Superioridad carece de competencia para conocer este asunto, pues, obviamente las Fiscalías de Circuito no tienen mando y jurisdicción en todo el territorio nacional, o en dos o más provincias. Como consecuencia de ello y de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 2602 del Código Judicial, los Tribunales Superiores de Distrito Judicial son los juzgadores naturales del proceso constitucional de habeas corpus "por actos que procedan de autoridades o funcionarios con mando y jurisdicción en toda la República o en dos o más Provincias".

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLINA la competencia del presente negocio en el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE FELIPE CAMARGO AMAYA CONTRA EL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Carlos Enrique Carrillo Gomila, ha interpuesto acción de habeas corpus a favor del señor **FELIPE CAMARGO AMAYA** en contra del señor Procurador General de la Nación.

Librado el mandamiento de habeas corpus contra el Procurador General de la Nación, dicho funcionario dio respuesta al mismo mediante Oficio N° DPG-544-96 de 2 de mayo de 1996, en los siguientes términos:

> "a) La Procuraduría General de la Nación sí ordenó la detención del señor FELIPE CAMARGO AMAYA en enero de 1990, sin embargo, actualmente, este expediente no reposa en este despacho, por cuanto fue enviado, en su momento, a la Agencia del Ministerio Público que se encargó de la instrucción del sumario y ésta, a su vez, lo remitió al Tribunal Jurisdiccional correspondiente.
>
> b) Este despacho ordenó la detención de señor FELIPE CAMARGO AMAYA, en aquel momento, por haberse iniciado una investigación en contra del mismo por la supuesta comisión de los delitos CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD PERSONAL, CONTRA LA LIBERTAD INDIVIDUAL, CONTRA LA COMUNIDAD INTERNACIONAL y CONTRA LA INVIOLAVILIDAD DEL DOMICILIO.
>
> c) En la actualidad, es esta Procuraduría General de la Nación, no se sigue ningún proceso penal en contra del señor FELIPE CAMARGO AMAYA y, en consecuencia, el mismo no se encuentra a órdenes de este despacho".

Por instrucciones del Sustanciador, se le solicitó al señor Procurador General de la Nación que diera una mayor información con relación a qué Agencia del Ministerio Público instruyó las sumarias en contra del señor Felipe Camargo Amaya. Mediante Nota N° DPG-576-96 de 8 de mayo de 1996, dicha autoridad rinde un informe cuyo contenido se transcribe a continuación:

"1- Por los delitos CONTRA LA COMUNIDAD INTERNACIONAL Y LA INVIOLABILIDAD DEL SECRETO, el mismo fue instruido por la Personería Primera Municipal, quedando radicado en el Juzgado Cuarto Municipal.

2- Por los delitos CONTRA LA VIDA, LA INTEGRIDAD FÍSICA, LA LIBERTAD INDIVIDUAL Y OTROS BIENES JURÍDICOS TUTELADOS EN NUESTRO ORDENAMIENTO PENAL, el mismo fue instruido por la Fiscalía Tercera de Circuito y Radicado en el Juzgado Segundo Penal.

De conformidad con lo manifestado por el señor Procurador General de la Nación, se desprende que Felipe Camargo Amaya se encuentra a órdenes del Juzgado Cuarto Municipal, Ramo Penal de Panamá y del Juzgado Segundo del Circuito, Ramo Penal de Panamá, por lo cual esta Superioridad carece de competencia para conocer de la presente acción, de conformidad con los artículos 2588 y 2602, numerales 2 y 3 del Código Judicial; estos últimos indican que son competentes para conocer de la demanda de habeas corpus:

"... 2. Los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, por actos que procedan de autoridades o funcionarios con mando y jurisdicción en una provincia;

3. Los Jueces de Circuito en el ramo de lo penal, por actos que procedan de autoridad, o funcionarios con mando y jurisdicción en un distrito de su circunscripción; y, ...".

En virtud de lo anterior, LA CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, SE INHIBE del conocimiento del presente negocio; y en consecuencia, DECLINA COMPETENCIA por los delitos CONTRA LA COMUNIDAD INTERNACIONAL Y LA INVIOLABILIDAD DEL SECRETO al Juzgado del Circuito, de lo Penal en turno, y en los delitos CONTRA LA VIDA, LA INTEGRIDAD FÍSICA, LA LIBERTAD INDIVIDUAL Y OTROS BIENES JURÍDICOS TUTELADOS EN NUESTRO ORDENAMIENTO PENAL, SE DECLINA el conocimiento al Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá.

Se ordena que por Secretaría General, se compulse copia autenticada del expediente de habeas corpus y se remita al Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE LEOBARDO SAMUDIO SANTOS CONTRA EL DIRECTOR NACIONAL DE CORRECCIÓN. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial mediante resolución de 2 de mayo de 1996, (fs. 8-9) se inhibe de conocer la demanda de habeas corpus promovido por el señor **LEOBARDO SAMUDIO SANTOS**, porque se encuentra a órdenes de la Dirección Nacional de Corrección del Ministerio de Gobierno y Justicia, y ordena remitir el negocio ante el Pleno de la Honorable Corte Suprema de Justicia.

Acogido el presente recurso de habeas corpus, se libró el mandamiento

correspondiente contra el Director Nacional de Corrección, licenciado Enrique Mon Pinzón, quien mediante la nota N° 1644-DNC-96 de 8 de mayo de 1996, rinde su informe de conducta en los términos siguientes:

> "A. En ningún momento el suscrito ha ordenado la detención del señor **Leobardo Samudio Santos.**
>
> B. No podemos hacer referencia a motivos o fundamentos de hecho o de derecho de la detención, porque no la hemos ordenado.
>
> C. El recurrente, señor Leobardo Samudio Santos, con cédula de identidad personal N° 4-184-848, se encuentra bajo custodia de la Dirección Nacional de Corrección, guardando detención con la supervisión de la Dirección de la Cárcel Pública de David; toda vez que se encuentra condenado, mediante sentencia N° 72 de 29 de septiembre de 1995, proferida por el Juzgado Primero Municipal de David, Ramo de lo Penal, a nueve (9) meses de prisión y setenta y cinco (75) días-multa a razón de un balboa (B/.1.00) por cada día-multa por la comisión del delito de Estafa en perjuicio de EIRA ESTHER ACOSTA MORENO, ERNESTINA SERRANO DE CASTILLO, ENEIDA MORALES DE MARTÍNEZ y JAIME GIL TORRES HERTTENTAI.
>
> De conformidad al Mandamiento N° 701-DNC de fecha 7 de mayo de 1996, confeccionado por esta Dirección, el señor LEOBARDO SAMUDIO SANTOS concluirá la precitada pena el 29 de enero de 1997.
>
> Toda vez que el señor LEOBARDO SAMUDIO SANTOS, según informes emitidos por la Sección Judicial de la Cárcel Pública de David, Provincia de Chiriquí, comenzó a cumplirla el día 29 de abril de 1996".

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia, al examinar el escrito presentado por el señor Samudio Santos (fs. 1-4), así como el informe remitido por el funcionario acusado, advierte que la privación de libertad que sufre el prenombrado se justifica en la medida que cumple sentencia condenatoria de 29 de septiembre de 1995, proferida por el Juzgado Primero Municipal de David, Ramo de lo Penal, con una pena de 9 meses de prisión y setenta y cinco (75) días-multa a razón de un balboa (B/.1.00) por cada día-multa por la comisión del delito de estafa, la cual se encuentra debidamente ejecutoriada.

El recurso de habeas corpus como tutela de la libertad personal, está encaminado a que el tribunal correspondiente revise si la privación de libertad del accionante se ajusta a la ley. En el caso que nos ocupa, dicha detención es consecuencia de un proceso penal que culminó con una sentencia condenatoria de privación de libertad, la cual se comenzó a cumplir según el Director Nacional de Corrección el 29 de abril de 1996 y concluirá el 29 de enero de 1997.

Por tanto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL la privación de libertad de que es objeto el señor LEOBARDO SAMUDIO SANTOS; en consecuencia, DISPONE que sea nuevamente filiado en la Cárcel Pública de David, a órdenes de la Dirección de Corrección como responsable de la ejecución penal.

Notifíquese.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ROGELIO ROCA BRÍAS Y ERIC ABDIEL TROYA TORRES

CONTRA EL FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Ha ingresado al conocimiento del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, la acción de habeas corpus interpuesta por el Licenciado Narciso Herrera Grau, a favor de los señores **ROGELIO ROCA BRÍAS** y **ERIC ABDIEL TROYA TORRES**, quienes se encuentran detenidos a órdenes de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, por la supuesta comisión de delito contra la salud pública.

El apoderado judicial del recurrente alega que la detención de sus defendidos es injusta, arbitraria e ilegal, ya que la sustancia ilícita incautada no se la encontró a sus defendidos sino al dueño de la propiedad, señor Francisco Rodríguez y al señor Roberto Falcón Rodríguez. Explica el abogado que el señor Francisco Rodríguez acepta ser el dueño de la droga encontrada en el allanamiento; razón por la cual se ha violado el artículo 23 de la Constitución Política de Panamá y el artículo 2565 y subsiguientes del Código Judicial.

Cumplidos los trámites correspondientes, el Magistrado Sustanciador libró mandamiento de habeas corpus contra la autoridad acusada. Mediante Oficio N° 3821 de 18 de abril de 1996 el Fiscal Especial detalla los fundamentos de hecho y de derecho que tuvo para ordenar la detención preventiva de los señores Rogelio Roca Brías y Eric Abdiel Troya Torres, de la siguiente forma:

> "1. Si es cierto que se ordenó la detención preventiva de los señores ROGELIO ROCA BRÍAS y ERIC ARIEL TROYA TORRES, la misma fue decretada mediante Resolución de este Despacho, fechada 29 de marzo de 1996.
>
> 2. La orden proferida contra los señores ROGELIO ROCA BRÍAS y ERIC ARIEL TROYA TORRES, surge de los señalamientos formulados en su contra, a través del INFORME DE COMPRA SIMULADA y ALLANAMIENTO de fojas 1-4 del expediente.
>
> Refieren los informes antes descritos, que momentos seguidos a la Compra Simulada, siendo aproximadamente las diez de la noche (10:00 p. m.), funcionarios de la División de Estupefacientes de la Policía Técnica Judicial, en asocio del Secretario de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, Licdo. Rubén Remón, se presentaron al sector de San Vicente, Chilibre, casa N° 226-16. Que al momento de llegar al inmueble, habían cuatro (4) sujetos quienes al verse interrumpidos en su ilícita acción, los mismos reaccionaron de manera violenta intentando evadirse, siendo frustrados sus esfuerzos.
>
> Una vez controlada la situación, se procedió a registrar el lugar en presencia del propietario del inmueble quien resultó ser FRANCISCO RODRÍGUEZ, quien tenía en el bolsillo derecho del pantalón tenía la suma de tres (3) balboas, siendo quien intentara votar la evidencia que estaba sobre la mesa, la cual consistía en la cantidad de treinta y cuatro (34) sobrecitos de plástico transparente contentivos de cierta cantidad de polvo blanco el cual se presume sea droga (cocaína), además se encontró en la mesa un vidrio de color oscuro que tenía en el centro cierta cantidad de polvo de color blanco que se presume sea droga, adicional se encontró al momento de mover el vidrio en mención un sobrecito confeccionado en plástico transparente el cual en su interior contiene cierta cantidad de polvo de color blanco que se presume sea droga, sobre la mesa se encontró ocho (8) balboas, los que al momento de ser cotejados con la copia utilizada para la compra resultaron ser los mismos.

Al momento de ser revisada la residencia se encontraban presentes los señores ROBERTO ANTONIO FALCÓN RODRÍGUEZ, ROGELIO ROCA BRÍAS y ERIC ARIEL TROYA TORRES. Al señor ROBERTO ANTONIO FALCÓN RODRÍGUEZ se le encontró en su poder un (1) carrizo con cierta cantidad de polvo de color blanco la cual se presume sea droga y un billete de cinco balboas, además de todo lo anterior se encontró un pedacito de vela utilizada para sellar los carricitos plásticos, una gillete marca persona, tres carricitos plásticos vacíos y un sobrecito con residuos de polvo blanco.

Al ser sometido a los rigores de la declaración indagatoria al señor FRANCISCO RODRÍGUEZ, el mismo acepta que la droga encontrada en la diligencia de allanamiento era de su propiedad, que era con fines de venta y que era la primera vez, además reconoce que anteriormente ha sido investigado por vender drogas.

En relación al señor ROBERTO ANTONIO FALCÓN RODRÍGUEZ, acepta que la droga a él encontrada era para su consumo, y que el día de los hechos se encontraba solamente comprando droga donde su primo FRANCISCO RODRÍGUEZ.

De igual forma rinde declaración indagatoria el señor ROGELIO ROCA BRÍAS quien manifestó que se encontraba en el lugar de los hechos, ya que estaba esperando que el señor FRANCISCO terminara de preparar la droga y le vendiera un dólar de cocaína, es decir, un carricito.

ERIC ARIEL TROYA TORRES al ser indagado acepta ser consumidor, que al momento de efectuarse la compra simulada el se encontraba en la tienda, que solamente fue a la casa del señor FRANCISCO RODRÍGUEZ para comprar droga.

Como elemento probatorio que acredita la existencia del hecho punible que nos ocupa, consta de foja 13 del expediente, el resultado de la Diligencia de Prueba de Campo, extendida por la División de Estupefacientes de la Policía Técnica Judicial, el cual arrojó resultados positivos para la "COCAÍNA".

Cabe mencionar que además de acreditarse la comisión de un hecho punible, existe dentro de las piezas procesales que conforman el presente cuaderno penal, la confesión de parte de los señores FRANCISCO RODRÍGUEZ, ROBERTO ANTONIO FALCÓN RODRÍGUEZ, ROGELIO ROCA BRÍAS y ERIC ARIEL TROYA TORRES quienes admiten en sus deposiciones tener conocimiento de la existencia de la droga y que el señor FRANCISCO RODRÍGUEZ se dedica a la venta de sustancias ilícitas.

Los fundamentos de derecho sobre los cuales se ha fundamentado la detención preventiva de los señores FRANCISCO RODRÍGUEZ, ROBERTO ANTONIO FALCÓN RODRÍGUEZ, ROGELIO ROCA BRÍAS y ERIC ARIEL TROYA TORRES, se encuentra consagrada en el contenido de los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial, aunado a los señalamientos que existen en contra de los mismos por parte de los agentes captores" (fs. 5-7).

Por instrucciones del sustanciador, se le solicitó al Doctor Humberto Mas Calzadilla, Director Médico del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público, una evaluación Psiquiátrica forense al señor Eric Abdiel Troya Torres en relación al consumo de drogas. Mediante Nota N° 64-14185 de 9 de mayo de 1996 y recibida en Secretaría General el 13 de mayo de 1996, el Doctor Juan Manuel Benítez, Psiquiatra Forense del Instituto de Medicina Legal, informó que el prenombrado no muestra evidencia de enfermedad psiquiátrica, ni dependencia química a droga ilícita.

En relación con el informe rendido por el Fiscal Especial y las constancias procesales remitidas junto con el mismo, ponen de manifiesto que la detención preventiva de los señores Roca Brías y Troya Torres, no tiene vicios de ilegalidad.

Como podemos observar, la orden de detención fue dictada por autoridad competente, en este caso la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, mediante providencia de fecha 29 de marzo de 1996, consultable a fojas 36-38 del cuadernillo principal.

Con relación al elemento probatorio allegado a la sumarias para la comprobación del hecho punible, tenemos la diligencia de allanamiento consultable a fs. 9-11 del cuaderno principal, realizada el 28 de marzo de 1996, en la residencia de Francisco Rodríguez, ubicada en la casa N° 216, Calle 1ª, Vía Principal, San Vicente, sector de Agua Bendita, Chilibre, lugar donde se incautó 34 carricitos plásticos transparentes contentivos cada uno con un polvo blanco que se presume sea droga, carricitos sueltos vacíos, dinero fraccionado y otros objetos que se asocian con la venta y distribución de estupefacientes. Sometida la droga a la prueba de campo, resultó positiva para la determinación de **COCAÍNA** (f. 13 del cuadernillo principal).

En relación con el peso de la droga incautada, la Fiscalía Especial envío el dictamen de la Policía Técnica Judicial determinando el peso total de 4.95 gramos, consultable a f. 14 del cuaderno de habeas corpus.

Respecto a los elementos probatorios que figuran en el proceso contra los señores Rogelio Roca Brías y Eric Abdiel Troya Torres, consta los informes de allanamiento y de compra simulada, donde señalan a los prenombrados como dos de los cuatro sujetos que se encontraban en la residencia allanada y en la que se detectó la sustancia ilícita incautada. Por lo tanto, pesan sobre los imputados indicios graves de presencia y oportunidad.

En estas circunstancias se concluye que existen elementos que vinculan a los prenombrados con el delito que se les imputa y, por lo tanto, la detención preventiva que pesa sobre ellos es legal, ya que la ordenó una autoridad competente basándose en los requisitos establecidos en los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial.

Por las anteriores razones, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención preventiva de los señores ROGELIO ROCA BRÍAS y ERIC ABDIEL TROYA TORRES y ORDENA que sean puestos nuevamente a órdenes del Fiscal Especializado en Delitos Relacionados con Drogas.

Notifíquese.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ALEJANDRO WHITE LINDO CONTRA EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado **SAMUEL MATHEWS** ha presentado ante esta Superioridad, acción de habeas corpus a favor del señor **ROBERTO WHITE LINDO**, contra el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, por considerar que la privación de libertad que sufre, es ilegal.

Una vez acogida la acción mediante providencia fechada 11 de abril de 1996, se libró el mandamiento de Habeas Corpus respectivo, el cual fue contestado por el Magistrado Sustanciador del negocio mediante memorial de 15 de abril del año en curso, en los siguientes términos:

> "No ordenamos la detención de **ROBERTO WHITE LINDO**; ello lo dispuso el Fiscal Cuarto del Circuito de Colón el día 17 de noviembre de 1992, en resolución consultable a fojas 105 del proceso.
>
> El citado funcionario de instrucción fundó esa decisión en que contra el imputado existían suficientes elementos de convicción, emanados del hecho de que éste en compañía de dos menores entraron a efectuar un asalto a la Compañía Distribuidora de Gas Shellane y **Trinidad Martínez Soto** (vigilante civil), quien resultó muerto, al darse cuenta trató de defenderse e hirió con su arma de reglamento al menor Radamés Rodríguez. Los mismos portaban armas de fuego y fueron identificados por otros empleados de la compañía que iba a ser asaltada. La decisión la fundamentó el fiscal en los artículos 2115, 2148 y 2159 del Código Judicial.
>
> Sí, tenemos a nuestras órdenes a **WHITE LINDO** en virtud que el sumario levantado contra él por el delito de **"homicidio"** en perjuicio de **Trinidad Martínez Soto** nos fue remitido por la Fiscalía Tercera Superior para la correspondiente calificación legal, el día 26 de marzo de 1996 y el imputado fue puesto a disposición de esta colegiatura mediante el oficio N° 834 de 15 de marzo de 1996 ..."

Con el referido escrito, el Segundo Tribunal Superior adjunta dos cuadernillos con 612 fojas útiles, que guarda relación con las sumarias que se adelantan contra el señor **WHITE LINDO**, sindicado por delito contra la vida y la integridad personal. Dichas sumarias, como quedó expresado en párrafos precedentes, se encuentran en la actualidad en el Segundo Tribunal Superior de Justicia en espera de su calificación legal.

Según consta en autos, la detención preventiva del señor **WHITE**, ordenada por el Fiscal Cuarto de Circuito de Colón mediante resolución de 17 de noviembre de 1992 (f. 105 Tomo I), surge a raíz de su presunta vinculación con la comisión de un hecho punible contra la Vida y la Integridad personal en perjuicio de TRINIDAD MARTÍNEZ, guardia de seguridad que prestaba servicios a la empresa **Cía. Distribuidora de Gas Shellane** en la Provincia de Colón.

De las constancias sumariales se desprende que el hoy occiso resultó herido durante el desarrollo de una acción delictiva emprendida en horas de la tarde del día 16 de noviembre de 1992, en la que se encuentran principalmente implicados los menores de edad RADAMÉS RODRÍGUEZ y JUAN MIGUEL HOY DELGADO, quienes pretendían perpetrar un robo a mano armada al referido comercio, asalto que fue frustrado por el señor **MARTÍNEZ**. Este último recibió varios impactos de bala procedentes del arma de fuego que portaba uno de los asaltantes, heridas que según se constata en el protocolo de necropsia visible a fojas 345-357 del Tomo I del expediente, le causaron la muerte.

Por su condición de menores de edad al momento de producirse el hecho de sangre, los prenombrados jóvenes RODRÍGUEZ y HOY DELGADO han sido investigados ante la jurisdicción de menores.

EXAMEN DEL TRIBUNAL DE HABEAS CORPUS

Esta Superioridad, una vez examinados los elementos de convicción recopilados a la fecha, advierte que los dos menores de edad antes mencionados han sido positivamente identificados por testigos presenciales en el lugar de los hechos como los responsables del ilícito en que perdiera la vida el señor **MARTÍNEZ**.

Así se desprende de las declaraciones juradas visibles a folios 127-133 Tomo I del expediente, deposiciones mediante las cuales se ha acreditado que sólo

dos personas participaron en el intento de asalto al guardia de seguridad TRINIDAD MARTÍNEZ. Estas dos personas fueron posteriormente identificadas como los menores RADAMÉS RODRÍGUEZ y JUAN MIGUEL HOY.

En este orden de ideas se aprecia igualmente, que en los distintos informativos rendidos por los prenombrados (fs. 98, 100, 107 ss.), éstos han aceptado su vinculación en el ilícito, señalando que sólo ellos dos participaron en el hecho, y sus declaraciones, coincidentes en modo, tiempo y lugar, sólo difieren en el punto de cuál de los dos disparó el arma de fuego que hirió de muerte al señor MARTÍNEZ, responsabilidad que se atribuyen recíprocamente.

Del informe presentado por la Secretaria Judicial del Juzgado Seccional de Menores de Colón y San Blas el día 23 de enero de 1994 (cfr. fojas 583-594 Tomo II) se concluye efectivamente que estos dos menores (al momento del perpetrarse el hecho) participaron en el ilícito.

La vinculación del favorecido por esta acción de habeas corpus, señor **ROBERTO WHITE LINDO** con el hecho de sangre, emerge de la circunstancia de que en repetidas declaraciones los menores RODRÍGUEZ y HOY manifestaron que el arma de fuego utilizada en el intento de robo y que causara la muerte de TRINIDAD MARTÍNEZ **les había sido facilitada por el señor WHITE LINDO** (cfr. foja 98;100; 108).

Así, el propio JUAN MIGUEL HOY DELGADO declara a folio 107-108 del Tomo I del expediente lo siguiente: **"yo allí le expliqué a mi novia lo que había pasado y me dijo que porque (sic) yo había hecho eso y fue y se lo dijo a mi madre. Quiero manifestar que al rato llegó el señor ROBERTO WHITE y me dijo que le entregara el revólver porque él se lo había prestado a RADAMÉS RODRÍGUEZ y se lo entregué más porque el mismo RADAMÉS me dijo que él se lo había prestado antes de cometer el delito."**

De conformidad con el peritaje de balística efectuado por la Policía Técnica Judicial, el arma de fuego relacionada con el hecho punible investigado es descrita como un revólver Rossi cal. 38 con serie E-117001. Cabe destacar que dicha arma había sido a su vez robada a un vigilante de seguridad el día 13 de noviembre de 1992 (tres días antes del homicidio del señor TRINIDAD MARTÍNEZ). En aquel ilícito también se vinculó a **ROBERTO WHITE LINDO.**

Se advierte pues, que el arma de fuego robada al guardia de seguridad el 13 de noviembre de 1992 y utilizada por los menores para dar muerte a TRINIDAD MARTÍNEZ el 16 de noviembre de 1992 en horas de la tarde, **fue incautada** por las autoridades policiales en horas de la noche del mismo día 16 de noviembre de 1992 en poder del señor **ROBERTO WHITE LINDO**, quien fuera aprehendido luego de que en compañía de otros dos sujetos, asaltara a un conductor de taxi (f. 603 Tomo II del expediente).

Al rendir declaración indagatoria, el señor **WHITE LINDO** niega su vinculación con el acto delictivo que causó la muerte a TRINIDAD MARTÍNEZ y niega haber facilitado el arma de fuego a los menores de edad.

Sin embargo, no ha podido brindarse una justificación a la circunstancia de que dicha arma, utilizada en la tarde del día 16 de noviembre de 1992 para ultimar a TRINIDAD MARTÍNEZ, se encontrara en horas de la noche de ese mismo día en poder de **ROBERTO WHITE LINDO**, con la que se le acusa de haber perpetrado un asalto a un transportista.

El agente instructor consideró que se justificaba la adopción de la medida cautelar en este caso, toda vez que la investigación sumarial contenía elementos que vinculan a **ROBERTO WHITE** con el hecho punible en que perdiera la vida TRINIDAD MARTÍNEZ.

A la fecha en que se instaura la acción que nos ocupa, las sumarias habían sido remitidas por la Fiscal Tercera Superior del Primer Distrito Judicial al Segundo Tribunal Superior de Justicia con la Vista Fiscal N° 60 de 29 de febrero de 1996 solicitando la apertura de causa criminal contra **ROBERTO WHITE LINDO** por

la presunta infracción de disposiciones contenidas en el Libro Segundo, Título Primero, Capítulo Segundo del Código Penal.

En concepto de la agencia instructora que mantuvo la detención preventiva originalmente expedida por el Fiscal Cuarto de Circuito, "si bien **WHITE LINDO** no tuvo participación alguna en la ejecución material del hecho punible, sí prestó a los autores un auxilio sin el cual el hecho no había podido cometerse-facilitar el arma de fuego a los menores-" (Vista Fiscal N° 60 visible foja 606 del expediente).

DECISIÓN DEL TRIBUNAL DE HABEAS CORPUS

Este Tribunal Colegiado ha reiterado en numerosas oportunidades, que la finalidad de la acción de habeas corpus no alcanza a examinar aspectos relativos a la culpabilidad de un sujeto vinculado, a través de una investigación sumarial, con un hecho punible.

La función del Tribunal se concreta a determinar si se han cumplido las formalidades constitucionales y legales establecidas para la adopción de la medida cautelar personal de detención preventiva, circunstancia que acontece en este negocio, toda vez que la medida fue aplicada mediante resolución motivada, por autoridad competente, y se sustentó con base a los indicios incriminatorios que apuntan hacia la vinculación de **ROBERTO WHITE** con el hecho punible investigado.

Esta Superioridad, una vez realizado el examen del extenso legajo sumarial, ha podido advertir que existen en las piezas probatorias que reposan en el expediente, indicios que vinculan al señor **ROBERTO WHITE LINDO** con el ilícito bajo investigación.

En efecto, el imputado fue señalado por los dos sujetos vinculados al ilícito, como la persona que les facilitó el arma de fuego (auxilio sin el cual no hubiesen podido realizar el ilícito) y luego del hecho reaparece para solicitar que se le devuelva el arma, con la que posteriormente realizó un robo a mano armada esa misma noche. El artículo 2159 del Código Judicial contiene la exigencia, para los fines de decretar la medida de detención preventiva, de que se alleguen al expediente los elementos probatorios que apunten hacia la comisión del hecho punible por parte de la persona cuya detención se ordena, mismos que obran el legajo de la investigación.

Por otra parte, no escapa a la percepción del Tribunal que nos encontramos ante la comisión de al menos tres hechos punibles distintos, en los cuales se vincula de una u otra forma a **ROBERTO WHITE LINDO**, incluyendo el robo del arma al agente de seguridad, y el asalto a un conductor de taxi, lo que parece revelar la existencia de condiciones especiales de peligrosidad por parte del imputado que también justifican el mantenimiento de la máxima medida cautelar personal.

La medida adoptada, por ende, cumple con los requerimientos constitucionales y legales que regulan la medida, y así procede a declararlo este Tribunal.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención preventiva de ROBERTO WHITE LINDO con relación al proceso penal que se le sigue por homicidio en la persona de TRINIDAD MARTÍNEZ, y dispone que sea puesto nuevamente a órdenes del Segundo Tribunal Superior de Justicia.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS E. MUÑOZ POPE (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS

Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE LUIS CARLOS CEDEÑO AVENDAÑO CONTRA EL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La señora NIXOBENIA CEDEÑO AVENDAÑO ha promovido Acción de Habeas Corpus a favor de LUIS CARLOS CEDEÑO AVENDAÑO y contra del Fiscal Auxiliar de la República, por considerar que es ilegal la detención que lo mantiene privado de su libertad.

La acción fue interpuesta ante el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, el cual se abstiene de conocer la demanda, porque la autoridad contra la cual se interpuso la acción tiene mando y jurisdicción en toda la República, por lo que el expediente fue remitido a esta Corporación.

Una vez librado el mandamiento de habeas corpus, se requirió el informe de rigor a la autoridad demandada. Mediante Oficio N° 7903 de 16 de mayo de 1996, el funcionario acusado rindió el siguiente informe:

"...
Con relación a darle respuesta a mandamiento de habeas Corpus, librado en contra del suscrito y en favor de LUIS CARLOS CEDEÑO AVENDAÑO, informo a usted, que el expediente fue enviado a la Fiscalía Segunda del Circuito de San Miguelito, mediante el oficio N° 6728, el 23 de abril de 1996.

Asimismo le informo que aprehendido se encuentra en las Celdas de Sistema Carcelario de la Policía Técnica Judicial a órdenes de la Fiscalía Segunda de Circuito, San Miguelito.

De usted, atentamente,

(fdo.)
Licdo. Carlos Augusto Herrera
Fiscal Auxiliar de la República".

En vista de que el detenido se encuentra a órdenes de la Fiscalía Segunda del Circuito de San Miguelito, como se expresa en el informe transcrito, la Corte no puede conocer la presente acción por falta de competencia.

Por lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, SE INHIBE de conocer la acción y ordena el envío del expediente al Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Circuito Judicial.

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) CARLOS MUÑOZ POPE
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

HABEAS CORPUS A FAVOR DE MARIO REYNALDO SQUIRE DE LOS RÍOS CONTRA EL MAGISTRADO GUILLERMO MÁRQUEZ AMADO, DEL TRIBUNAL ELECTORAL. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS E. MUÑOZ POPE. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS

(1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Carlos Herrera Morán ha presentado ante el Pleno de la Corte Suprema, demanda de habeas corpus preventivo a favor del señor **MARIO REYNALDO SQUIRE DE LOS RÍOS** y contra el magistrado **GUILLERMO MÁRQUEZ AMADO** quien supuestamente ha girado orden escrita para detener a su representado.

Librado el correspondiente mandamiento de habeas corpus se recibió inmediatamente el informe del funcionario demandado quien manifestó en escrito visible a fojas 13-15, no haber ordenado la detención del señor SQUIRE DE LOS RÍOS y al mismo tiempo hace una exposición de los hechos conocidos por él y que guardan relación con la persona antes mencionada.

En su informe el magistrado Márquez Amado señala que investigó en el Tribunal Electoral al mencionado Mario Reynaldo Squire de los Ríos, quien dice ser panameño y portador de la cédula de identidad personal 8-515-2082, toda vez que la mencionada cédula pertenece a una persona que falleció el 9 de abril de 1974.

Del contexto de los hechos planteados por el demandante y de la contestación remitida por el funcionario demandado se observa que no existe orden escrita del magistrado Márquez para que se prive de la libertad al señor Squire de los Ríos, lo que implica que debe cesar la actuación toda vez que no hay orden de detención que pueda examinarse en esta acción constitucional de defensa de la libertad individual.

Los hechos planteados, por otra parte, imponen a la Corte la obligación de remitir copia del informe del magistrado Márquez y de todos los documentos que él acompaña al mismo al Procurador General de la Nación para que se haga la investigación sumarial correspondiente ya que es indudable que el señor Squire está usando una cédula de identidad personal que no le corresponde, hecho ilícito que puede estar tipificado en el artículo 271 del Código Penal, y en el proceso penal que se tramitó en el Juzgado Quinto del Circuito aparecen declaraciones juradas de personas que dicen que el señor Squire es el titular legítimo de la cédula en cuestión, lo que puede configurar un delito de falso testimonio a que alude el artículo 355 del Código Penal.

Por todo lo expuesto, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA EL CESE del procedimiento en esta acción y ORDENA se compulsen las copias pertinentes de este caso para que sean remitidas al Procurador General de la Nación para que se investigue lo relacionado con el uso de la cédula 8-515-2082 ya que su titular falleció en 1974 y los testimonios vertidos en la causa que se tramitó en el Juzgado Quinto de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) CARLOS ENRIQUE MUÑOZ POPE
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ISAÍAS AURELIO GAHONA GUTIÉRREZ CONTRA LA JUEZ TERCERA DE CIRCUITO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La firma forense Quiroz, Murillo y Asociados, actuando en representación de ISAÍAS GAHONA GUTIÉRREZ, ha interpuesto recurso de apelación contra la sentencia expedida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, el 19 de abril de 1996, mediante la cual declara legal la detención de la cual es objeto el señor Gahona.

El Segundo Tribunal Superior de Justicia decretó legal la detención preventiva del señor Gahona, dado que a su criterio, la situación jurídica del sindicado fue dilucidada en el auto de enjuiciamiento, pues, existe tanto el testimonio de la querellante y de la afectada que lo involucran como autor del delito violación, como el examen practicado a la joven en el Instituto de Medicina Legal.

A fojas 16 a 20 del expediente, aparece el escrito de apelación presentado por la firma apoderada judicial de la parte actora, cuyo texto es el siguiente:

> "... La Ley 1 de 1995 que fue expedida dentro de un contexto en el que se cuestionaba duramente la mora judicial y, sobre todo, el extenso período de duración de los procesos penales introdujo, con una filosofía simplificadora de trámites procesales, algunas reformas al procedimiento penal. Así, en su artículo se dispuso que la decisión mediante la cual se formulan cargos al imputado (auto de enjuiciamiento) no admite recurso alguno y, además, la comunicación que de esa decisión haga el Juez en el acto de audiencia surte todos los efectos de la notificación para las partes presentes (artículo 21 de la Ley 1 de 3 de enero de 1995).
>
> Estas reformas han generado alguna confusión pues, algunos funcionarios han entendido que si en el acto formal (resolución) ya sea oral o escrito en el que se formulen cargos al procesado (auto de enjuiciamiento) se adoptan concomitantemente otras decisiones jurisdiccionales, respecto de todas ellas no cabe recurso alguno, lo cual evidentemente constituye una interpretación errónea del artículo 21 de la Ley 1 citada.
>
> En el caso sub-júdice la señora Juez Tercera de Circuito de lo Penal de Primer Circuito Judicial al concluir el acto de audiencia preliminar dicta una resolución que contiene dos decisiones a saber:
>
> a. La formulación de cargos al procesado ISAÍAS GAHONA GUTIÉRREZ como presunto infractor de disposiciones legales contenidas en el Capítulo I, Título VI del Libro II del Código Penal, es decir, por el delito de violación carnal en perjuicio de Rosa María Pérez.
>
> b. La decisión de sustituir la medida cautelar previamente aplicada al imputado GAHONA GUTIÉRREZ por su detención preventiva.
>
> Ahora bien, ciertamente la primera de las decisiones anotadas (auto de enjuiciamiento), de acuerdo con el texto del artículo 21 de la Ley 1 de 1995 no admite recurso alguno, pero por lo que toca a la segunda (sustitución de la medida cautelar por la detención preventiva) de conformidad con lo que señala el último párrafo del artículo 2147-B del Código Judicial, la misma es apelable en el efecto diferido lo que significa, de acuerdo con el numeral 3 del artículo 1123 ibídem que se suspende el cumplimiento de la resolución hasta tanto sea resuelta la apelación, no obstante que el Juez de instancia continuará con el curso del proceso en lo que no dependa necesariamente del fallo impugnado.
>
> Desde esa perspectiva, la señora Juez Tercera de Circuito de lo Penal al emitir ambas decisiones en el acto de audiencia oral no podía ejecutar inmediatamente, como lo hizo, la relativa a la

detención preventiva del imputado porque esa decisión es apelable en efecto diferido y el trámite que correspondía imprimir establece que después de hecha la notificación (artículo 1117 del Código Judicial) las partes cuentan con el término de dos días hábiles para interponer el recurso de apelación luego de lo cual debe fijarse el negocio en la lista para la correspondiente sustentación del recurso enunciado y, agotado ese trámite, correr traslado de los alegatos a las respectivas contrapartes para que luego la cuestión sea decidida en segunda instancia y durante toda esta tramitación, como antes explicamos, la decisión sobre medidas cautelares que haya tomado el Juez de Primera Instancia no puede ejecutarse hasta tanto haya sido resuelta la apelación. ...

Honorables Magistrados, de lo que llevamos explicado es claro que la señora Juez Tercero de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial incurrió (de buena fe) en un error de procedimiento pues no podía bajo ninguna premisa ejecutar la detención preventiva de GAHONA GUTIÉRREZ como lo hizo, ya que lo que correspondía era no solo esperar la ejecutoria de esa decisión (2 días de acuerdo con el artículo 1117 y concordantes del Código Judicial) sino también imprimirle a la cuestión el trámite relativo al recurso de apelación inmediatamente anunciado y en el efecto correspondiente y además, aún cuando no se tomara en consideración desde el punto de vista técnico nuestra apelación por la forma en que fue planteada oralmente, no podía ejecutarse el fallo sin esperar antes el transcurso de los dos días hábiles que otorga la ley (artículo 1117 del Código Judicial) para interponer la apelación.

No es la primera vez que se producen situaciones confusas como la que ahora enfrentamos, pues en otras ocasiones se ha entendido erróneamente lo que establece el artículo 2266 del Código Judicial en el sentido de que las decisiones que tome el Juez durante el curso de la audiencia no admiten recurso alguno. Y es que una interpretación sistemática de esa disposición, considerada dentro del título y capítulo en que aparece formulada permite deducir con claridad que la irrecurribilidad de las decisiones del Juez está referida a las cuestiones relativas al desarrollo de la audiencia, como por ejemplo, el examen de los testigos, las prácticas de las pruebas, el mantenimiento del orden en el recinto del tribunal, etc., y no a cuestiones distintas como por ejemplo la aplicación de una medida cautelar personal o patrimonial, la cancelación de una fianza, etc, porque estos aspectos representan situaciones autónomas, distintas del desarrollo de la audiencia y que tienen su propia regulación procesal. Además, el sentido común permite deducir o bien entender, que el Juez debe estar facultado para tomar decisiones irrecurribles que garanticen el desarrollo continuo de la audiencia y cumplir así con el principio de unidad de acto que rige en el proceso penal, pues si se admitiesen recursos contra las decisiones relativas al desarrollo de la audiencia, ésta podría ser interrumpida y postergada un número plural de veces contrariando el principio de economía procesal.

Honorables Magistrados, la forma en que reclamamos sea corregida la actuación de la señora Juez Tercera de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial respecto de la detención preventiva de ISAÍAS GAHONA GUTIÉRREZ es, por demás, ajustada al debido proceso y al sentido común. Imprimir a la decisión sobre medidas cautelares dictada por la Juez Tercera de lo Penal en contra de ISAÍAS GAHONA GUTIÉRREZ el trámite previsto para esas resoluciones en los artículos 2147-B, 1117 y 1123 y demás concordantes del Código Judicial en nada contraría la filosofía simplificadora de trámites procesales que inspiró la expedición de la Ley 1 de 1995 pues, al conceder la apelación de la decisión sobre medida cautelar en el efecto diferido la Juez de grado debe continuar con la tramitación del proceso, dando curso a las subsiguientes etapas procesales, en el orden que señala la ley, porque así expresamente lo indica el

numeral 3 del artículo 1123 ibídem."

Se trata de un proceso iniciado en razón de una querella interpuesta por la señora JOSEFINA GUEVARA SÁNCHEZ ante la División de Delitos contra el Pudor y la Libertad Sexual de la Policía Técnica Judicial, en la que denuncia al señor ISAíAS GAHONA GUTIÉRREZ como autor de la violación carnal de la que fue víctima su hija menor de 17 años de edad, ROSA MARÍA PÉREZ GUEVARA.

Observa el Pleno, una orden de detención escrita contra el señor ISAíAS GAHONA GUTIÉRREZ por el delito de Violación Carnal, fechada el 4 de julio de 1995 y fue expedida por autoridad competente como lo es el Fiscal Auxiliar de la República. Mediante providencia de esa misma fecha, el Fiscal Auxiliar remite todo lo actuado al fiscal de circuito de turno, para que asuma el conocimiento del caso según lo que prevé el artículo 159 del Código Judicial. Posterior a ello, la Fiscalía Tercera del Primer Circuito Judicial de la Provincia de Panamá, expidió la resolución de 19 de julio de 1995, en la que reemplazó la detención preventiva de que fuera objeto el señor Gahona, por otra medida cautelar consistente en la prohibición de abandonar el territorio nacional sin autorización judicial y el deber de comparecer ante las autoridades judiciales cada quince días.

Finalmente, observa el Pleno de fojas 66 a 77 del expediente, que la audiencia preliminar se realizó el 11 de abril de 1996 en la que la Juez Tercera Penal del Primer Distrito Judicial, al calificar el sumario, abrió causa criminal contra el procesado, revocó la medida cautelar impuesta y ordena su inmediata detención. Contra dicha orden, la firma Quiroz, Murillo y Asociados interpuso acción de habeas corpus ante el Segundo Tribunal Superior del Primer Circuito Judicial, que determinó en resolución fechada el 19 de abril de 1996 que es legal la detención del señor Gahona por las razones antes expuestas.

Evacuadas todas las actuaciones legales efectuadas, el Pleno entra a resolver la acción constitucional interpuesta previa las siguientes consideraciones.

Para resolver, el Pleno parte del hecho de que el artículo 23 de la Constitución Nacional vigente regula el habeas corpus como garantía constitucional de la libertad corporal. En dicha disposición constitucional, se deja claramente establecido que, "Todo individuo detenido fuera de los casos y la forma que prescriben esta Constitución y la Ley, será puesto en libertad a petición suya o de otra persona mediante el recurso de habeas corpus ...". De la anterior premisa se deduce que el habeas corpus tutela la libertad corporal ante cualquier medida privativa de ella, cuando dicha medida fuere decretada en contravención de los casos y la forma previstos en la Constitución y la Ley. En ese sentido, el habeas corpus en nuestra legislación tendrá lugar, por un lado, cuando el delito imputado no tenga prevista pena mínima superior a dos años tal como lo señala el artículo 2148 del Código Judicial, y, por el otro lado, de ajustarse al anterior supuesto, si al momento de la detención no se siguió con las formalidades que fija el artículo 21 de la Constitución Nacional y el artículo 2159 del Código Judicial.

El Pleno de esta alta Corporación de Justicia ha señalado en varias ocasiones, que la facultad de examinar los anteriores hechos encuentra límites en la prohibición que tiene el tribunal para valorar aspectos de fondo, tales como si el detenido es culpable o no, si hubo dolo o culpa al momento de los hechos etc., dado que ello conllevaría a una degeneración de la institución de habeas corpus como tal.

Observa el Pleno que el recurrente alega básicamente en su escrito de apelación, que la Juez Tercera de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial, al emitir en el acto de audiencia oral tanto el auto de enjuiciamiento que no admite recurso alguno según lo señalado en la Ley 1 de 1995 y la decisión de sustituir la medida cautelar por la detención preventiva, incurrió en un error de procedimiento. A su juicio, la decisión relativa a la detención preventiva es apelable en el efecto diferido y bajo ninguna causa podía ejecutar la detención preventiva del señor Gahona como lo hizo, ya que lo que correspondía era esperar la ejecutoria de esa decisión que lo según lo dispone el artículo 1117 del Código

Judicial y concordantes es de dos (2) días.

Observa el Pleno, en cuanto a la medida adoptada de sustituir la medida cautelar impuesta por la Fiscalía Tercera del Primer Circuito Judicial por la detención preventiva, que la Juez Tercera de Circuito estaba plenamente facultada para ello, según lo que prevén los artículos 2147-A, 2148 y 2223 del Código Judicial, pues el delito que se le imputa al señor Gahona es violación carnal, que según los argumentos esbozados por la señora juez, se acredita plenamente en el expediente, toda vez que hubo señalamiento directo de la ofendida y la propia aceptación del imputado de los hechos, aunque excepciona el consentimiento de ella.

No obstante, en relación con lo antes anotado, la Corte Suprema reitera que sólo puede pronunciarse respecto a la legalidad de la detención, tomando en consideración los hechos que antes planteamos, mas en ningún momento puede entrar a cuestionar la actuación de la Juez dentro de un proceso por otras circunstancias, como en este caso se pretende.

En virtud de lo antes expuesto, concluye el Pleno, que ha equivocado la vía a fin de hacer valer su derecho, pues lo que se ventila en esta ocasión, escapa de la esfera de conocimiento del Tribunal de Habeas Corpus.

En consecuencia, el Pleno de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la resolución de 19 de abril de 1996, expedida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial mediante la cual se DECLARA LEGAL la detención preventiva del señor ISAíAS GAHONA GUTIÉRREZ y DISPONE que el detenido se puesto nuevamente a órdenes de la autoridad competente.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) CARLOS E. MUÑOZ POPE
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE PEDRO PABLO CASTREJÓN CEDEÑO CONTRA LA JUEZ DÉCIMA QUINTA DE CIRCUITO PENAL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El señor PEDRO PABLO CASTREJÓN CEDEÑO, actuando en su propio nombre y representación, ha interpuesto recurso de apelación contra la sentencia proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Circuito Judicial, el 3 de mayo de 1996, mediante la cual declara legal la detención preventiva de la cual es objeto el señor Castrejón.

El Segundo Tribunal Superior de Justicia decretó legal la detención, pues, en su criterio, la acción de habeas corpus en este caso, no es la vía correcta para que a PEDRO PABLO CASTREJÓN CEDEÑO se le libere de los cargos que pesan en su contra. Entre los criterios expuestos por el Segundo Tribunal Superior de Justicia figura que existe un proceso de por medio con sentencia de primer grado y el artículo 2569 del Código Judicial, excluye de la garantía del habeas corpus, toda cuestión de fondo con la que pueda tener relación. Finalmente, se expuso que la acción de habeas corpus ha sido prevista por la ley a afecto de decidir si al ordenarse la detención preventiva contra un sujeto se cumple con los requisitos de forma que contemplan la Constitución y las normas de procedimiento que rigen

esa materia.

La Corte observa de fojas 46 a 50 del expediente, el escrito de apelación presentado por el señor PEDRO PABLO CASTREJÓN CEDEÑO, donde sostiene entre otros argumentos, que mediante sentencia N° 87 de 4 de diciembre de 1995, fue condenado por la Juez Décimo Quinta de Circuito del Primer Circuito Judicial, Ramo Penal a ocho (8) años de prisión e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por igual período, por el Delito de Tráfico Ilegal de Drogas. Afirma el señor Castrejón, que contra dicha sentencia interpuso en tiempo oportuno recurso de apelación ante el Segundo Tribunal Superior de Justicia. Añade el señor Castrejón que, estando el expediente contentivo del proceso penal en estado de decidir la apelación, interpuso formal recurso de habeas corpus contra la Juez Décimo Quinta de Circuito Penal también ante el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial. A su juicio, la acción de habeas corpus no busca impugnar la sentencia de primera instancia, sino que busca restablecer su libertad, hasta tanto se impugne la misma a través del recurso de apelación. Finalmente, afirma el señor Castrejón, que del artículo 2565 del Código Judicial se infiere claramente, que el recurso de habeas corpus también es procedente contra resoluciones proferidas por autoridades del Órgano Judicial, aunado al hecho de que dicha norma también hace alusión indistintamente a "detención o prisión."

No coincide el Pleno con los criterios expuestos por la parte actora, pues, como bien lo señala el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, la acción de habeas corpus no es la vía correcta a fin de acceder a las pretensiones del actor de que se le libere de los cargos que pesan en su contra, sin soslayar el hecho de que media un proceso penal con sentencia condenatoria y el artículo 2569 del Código Judicial excluye expresamente de esa garantía todo lo referente a cuestiones de fondo con lo que pueda tener relación.

Efectivamente, la acción de habeas corpus tutela la libertad corporal ante cualquier medida privativa de ella, cuando dicha medida fuere decretada en contravención de los casos y formas previstos en la Constitución y la Ley. En ese sentido, también se ha establecido, que la facultad de examinar los anteriores hechos encuentra límites en la prohibición que tiene el tribunal para valorar aspectos de fondo, tales como si el detenido es culpable o no, si hubo dolo o culpa al momento de los hechos, toda vez que ello conllevaría a una degeneración de dicha institución.

En razón de lo antes expuesto, concluye el Pleno que se ha equivocado la vía a fin de hacer valer el derecho, dado que lo que se ventila en esta ocasión, escapa de la esfera de conocimiento del Tribunal de Habeas Corpus.

En consecuencia, el Pleno de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la resolución de 3 de mayo de 1996 expedida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, que DECLARA QUE ES LEGAL la detención del señor PEDRO PABLO CASTREJÓN CEDEÑO, y ORDENA que el detenido sea puesto a órdenes de la autoridad que corresponda para los efectos legales consiguientes.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) CARLOS E. MUÑOZ POPE
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE QUINTÍN CÓRDOBA ESQUIVEL CONTRA EL FISCAL CUARTO SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado **MARIO ANDRÉS BALLESTEROS DOMÍNGUEZ** ha presentado ante esta Superioridad, acción de habeas corpus a favor del señor **QUINTÍN CÓRDOBA ESQUIVEL,** persona esta que se encuentra detenida por el delito de homicidio.

Repartido este negocio, y acogida la acción mediante providencia fechada 15 de mayo de 1996 el Magistrado sustanciador libró mandamiento de habeas corpus contra el funcionario demandado, licenciado Dimas E. Guevara G. quien en su calidad de Fiscal Cuarto Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, respondió al informe solicitado en los siguientes términos:

> **"PRIMERO:** Este Despacho sí ordenó la detención en contra de **QUINTÍN CÓRDOBA ESQUIVEL** y la misma se hizo a través de la providencia de fecha primero (1) de marzo del presente año, visible a fojas 203 a 206, detención que al momento de hacerse efectiva en este Despacho, se le comunicó al sindicado del contenido de la misma.
>
> **SEGUNDO:** Habiéndose demostrado en debida forma el hecho punible a través del Protocolo de Necropsia N° 48-05-555, documento que aparece visible a fojas 46 a 58 y en donde el galeno forense, estableció como Causa precisa de la Muerte de la menor **SUNDARYS GISELLE GONZÁLEZ AÑINO: "Herida por proyectil de arma de fuego, penetrante a la cabeza",** hecho punible que también se demostró a través de las fotografías donde aprecia el cuerpo inerte de la víctima".
>
> En cuanto a los motivos de hecho que nos llevaron a ordenar la detención preventiva del imputado **QUINTÍN CÓRDOBA ESQUIVEL,** quien se encuentra vinculado con el delito de **HOMICIDIO** cometido en detrimento de la menor **SUNDARYS GISELLE GONZÁLEZ AÑINO,** se determinó desde el inicio de la investigación en un Informe de Comisión, que entre los presuntos responsables del ilícito, se encontraban **LALO, GUILLERMO, QUINTÍN, y ROBOCOP,** sujetos éstos que son mencionados por la madre de la menor, señora **INÉS MARÍA AÑINO DE GONZÁLEZ** (fs. 118-119) y la versión que da el propio sindicado, quien acepta haber estado presente cuando se dieron los hechos.
>
> También tenemos que existe dentro del presente infolio penal, lo declarado por **LUIS ALBERTO MC COY** (fs. 190-195), quien da a conocer que tanto los sujetos, **QUINTÍN, ROBOCOP, LALO** y **GUILLERMO,** efectuaron disparos entre sí resultando herida la infante **SUNDARYS GISELLE GONZÁLEZ AÑINO."**

Recibido el informe, entra el Pleno a resolver acerca de la acción propuesta en favor del imputado **QUINTÍN CÓRDOBA ESQUIVEL.**

Según consta en autos, la detención preventiva del señor **CÓRDOBA ESQUIVEL,** ordenada por el Fiscal Cuarto Superior del Primer Distrito Judicial mediante resolución de 15 de mayo de 1996 (fs. 203-206), surge a raíz de su presunta vinculación con la comisión de un hecho punible contra la Vida y la Integridad personal en perjuicio de la niña **SUNDARYS GISELLE GONZÁLEZ AÑINO.**

El artículo 2159 del Código Judicial establece que la diligencia en que se ordena la detención preventiva deberá expresar: 1) El hecho imputado; 2) Los elementos probatorios allegados para la comprobación del hecho punible; y 3) Los elementos probatorios que figuran en el proceso contra la persona cuya detención se ordena. Veamos, entonces, si realmente se dan las condiciones establecida en la norma citada.

De las constancias sumariales se desprende que la hoy occisa resultó herida durante un intercambio de disparos emprendido en horas de la tarde del día 4 de agosto de 1994, en el sector de Santa Librada, cuarta etapa y en la que se

encuentran principalmente implicados los señores EDUARDO CISNEROS GUEVARA (a. LALO), LUIS ALEXANDER GRENALD (a. ROBOCOP) y otro sujeto apodado GUILLERMO y el beneficiario con esta acción de habeas corpus, el ya precitado **QUINTÍN CÓRDOBA ESQUIVEL.**

Dichos sujetos realizaban descargas de balas en el momento que la hoy occisa **SUNDARYS GISELLE GONZÁLEZ AÑINO**, en compañía de su madre **INÉS DE GONZÁLEZ,** se dirigía hacia la Iglesia de Testigos de Jehová, ubicada a unos cuatrocientos metros de donde se suscitó el incidente. La menor recibió un impacto de proyectil en la región parieto-occipital derecha procedente del arma de fuego que portaba uno de los implicados, que según se constata en el protocolo de necropsia visible a fojas 46-58 del expediente, le causó la muerte.

De dicho informe médico forense, se desprende que el hecho imputado, tal como lo señala la diligencia de detención es homicidio, y por otro lado, los elementos probatorios de ese hecho punible están plenamente acreditados en el expediente con el protocolo de necropsia realizado.

Nos dice el informe rendido por el Fiscal Cuarto Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, que los elementos probatorios que figuran en el expediente contra **QUINTÍN CÓRDOBA ESQUIVEL** surgen de las indagatorias de los sumariados, así como de un número plural de testimonios.

Esta Superioridad, una vez examinados los elementos de convicción recopilados a la fecha, advierte que el señor **QUINTÍN CÓRDOBA ESQUIVEL** ha sido positivamente identificado por testigos presenciales en el lugar de los hechos como uno de los responsables del ilícito en que perdiera la vida la niña **SUNDARYS GONZÁLEZ.**

Así se desprende de las declaraciones juradas visibles a folios 38-39; 118-119; 190-195 del expediente, las cuales corroboran lo acreditado desde el inicio de las investigaciones preliminares de que sólo cuatro personas aparecían mencionadas y vinculadas como presuntos responsables del hecho ilícito, sujetos estos que obedecen a los apodos de **LALO**, **GUILLERMO**, **QUINTÍN Y ROBOCOP.**

Al rendir declaración indagatoria **LUIS ALBERTO MC COY**, en calidad de testigo, el mismo señaló:

> "... yo me encontraba en el garaje de mi casa, arrecostado e mi carro, y conmigo estaba ALDRIN CORONADO, entonces yo sí vi pasar a LALO y a GUILLERMO y que estos fueron hasta la barbería y tomaron por la calle que pasa lateral a mi casa, y como alrededor de quince minutos más o menos, regresaban LALO Y GUILLERMO por la misma calle que pasa lateral a mi casa, y en eso que ellos regresaban venían entonces la niña y la mamá de la niña y otra señora en dirección contraria de donde venían LALO, GUILLERMO, entretanto los sujetos apodados ROBOCOP, Y QUINTÍN venían caminando de un estacionamiento que está frente a la cancha de baskett (sic) ... ROBOCOP y QUINTÍN salen huyendo y corren hacia la misma cancha y ya desde allí no los veo, pero sí me percato de que éstos contestan los disparos y es allí cuando la niña sale herida y la mama grita y se pone a llorar al ver a la niña herida ...".
> ...
> Señor Fiscal, estoy seguro que tanto GUILLERMO como LALO, tenían arma en sus manos, ya que yo vi cuando GUILLERMO estando de pie y LALO estando arrodillado dispararon primero hacia los otros dos sujetos que estaban de espaldas, siendo estos ROBOCOP y QUINTÍN, los que después respondieron los disparos. Se que GUILLERMO tenía un revólver, oscuro, no sé que calibre, a LALO, a pesar de que sé que tenía un arma en la mano, no puedo precisar si era revólver o pistola, que todo fue muy rápido. En cuanto a ROBOCOP y QUINTÍN, cuando estos respondieron los disparos fue cuando ellos corrieron hacia la cancha y ya desde ese lugar a donde yo me encontraba, no podía verlos, pero sí me percaté que ellos contestaron, y fue cuando después de estos sujetos responde (sic), que la niña sale lesiona-

da".

La vinculación del favorecido por esta acción de habeas corpus, señor **QUINTÍN CÓRDOBA ESQUIVEL** con el homicidio de la menor **SUNDARYS GONZÁLEZ** se evidencia de la circunstancia de que en repetidas declaraciones se ha manifestado que el precitado se encontraba en el lugar de los hechos, con revólver en mano, y que participó en el intercambio de balas desde un lado a otro de la calle por donde transitaba la hoy occisa y su señora madre. No obstante, la muerte de la menor pareciera que no puede imputársele a título de dolo y da la apariencia de un homicidio culposo, por lo que no puede ser de aplicación el artículo 2148 del Código Judicial, pero sí el literal C del artículo 2147 del mismo Código, por lo que la Corte considera que se debe mantenerse la medida cautelar de la detención preventiva.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención preventiva de QUINTÍN CÓRDOBA ESQUIVEL con relación al proceso penal que se le sigue por la muerte de la niña SUNDARYS GISELLE GONZÁLEZ AÑINO.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS MUÑOZ POPE (fdo.) ARTURO HOYOS
(CON SALVAMENTO DE VOTO)
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO CARLOS E. MUÑOZ POPE

Lamento, con todo respeto, no estar de acuerdo con la decisión adoptada por el Pleno de esta Corporación de Justicia.

QUINTÍN CÓRDOBA no debe estar detenido por razón de la muerte de la menor SUNDARYS GONZÁLEZ AÑINO toda vez que la muerte de ésta se produjo cuando CÓRDOBA repelió una agresión grave y actual causada por sujetos que le hicieron varios disparos con arma de fuego por la espalda, siendo que la niña fue víctima accidental de los hechos por estar en el lugar donde se produjeron los disparos.

Como quiera que el delito de homicidio culposo tiene pena mínima y no justifica la detención preventiva, no comparto el criterio del Pleno de recurrir al literal c) del artículo 2147 del Código Judicial para justificar la prisión preventiva del sujeto.

Pretender que en un homicidio culposo se justifique la prisión preventiva del sujeto por razón de su supuesta personalidad o en razón del peligro de que pueda cometer nuevos delitos graves mediante el uso de armas es revivir la experiencia ya superada del derecho penal de autor, en donde no se sanciona por lo que hace la persona sino por su personalidad, por quien es.

La teoría del derecho penal de autor que sirvió de sustento a la ideología del Derecho Penal Nacionalsocialista está totalmente superada y rechazada por los penalistas de nuestro momento, quienes no aceptamos que se prive de la libertad a las personas por su forma de ser, como el caso que nos ocupa. Justificar la prisión preventiva en este caso en base a la supuesta peligrosidad de QUINTÍN CÓRDOBA implica que todo sujeto marginado, carente de posibilidades efectivas de un vivir digno y decente merece estar en la cárcel, situación que no puedo aceptar.

El Derecho Penal Moderno no puede poner énfasis en el sujeto por lo que éste es, ya que en todo caso debemos ocuparnos de lo que realiza. El Derecho Penal de Autor hace 40 años ha sido reemplazado por el Derecho Penal de Acto, lo que implica que sólo se castiga a la persona por lo que realiza y nunca en atención a sus características personales.

Por todo lo expuesto, en razón de que el Pleno no estuvo de acuerdo con este planteamiento me siento obligado a salvar el voto.

Fecha ut supra.

(fdo.) CARLOS E. MUÑOZ POPE
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

HABEAS CORPUS A FAVOR DE ROBERTO MAXWELL CONTRA EL DIRECTOR NACIONAL DE CORRECCIÓN. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

EIDER ROBERTO CASASOLA ha interpuesto recurso de Habeas Corpus a favor de **ROBERTO MAXWEL** contra el Director Nacional de Corrección.

Librado el mandamiento de habeas corpus contra la autoridad acusada, conforme lo estatuye el artículo 2578 del Código Judicial, el mismo fue contestado dentro del término de ley, informando lo siguiente:

"...
A. En ningún momento el suscrito ha ordenado la detención del señor ROBERTO MAXWEL.
B. No podemos hacer referencia a motivos o fundamentos de hecho o derecho de la detención dado que esta Dirección no la ha ordenado.
C. El señor ROBERTO MAXWELL no registra expediente en esta Dirección, ni en la Cárcel Modelo según nos informa el señor Javier Vanegas el funcionario de Secretaría Judicial de la citada cárcel.
...". (Fs. 5).

Según se desprende del informe transcrito la autoridad demandada no ha ordenado la detención del favorecido con esta acción, ni tiene en su poder expediente en que se registre su nombre, así como tampoco reposa el registro de dicho detenido en la Cárcel Modelo. Estas consideraciones demuestran que el señor ROBERTO MAXWEL no se encuentra privado de su libertad, por lo que el procedimiento de habeas corpus debe cesar según lo preceptúa el artículo 2572 del Código Judicial.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA EL CESE del procedimiento y el ARCHIVO del expediente correspondiente a la acción de habeas corpus propuesta a favor de ROBERTO MAXWEL contra del DIRECTOR NACIONAL DE CORRECCIÓN.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) CARLOS E. MUÑOZ POPE
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE CORPUS A FAVOR DE RUBÉN ANTONIO SOTO CANDANEDO CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Ramiro Sánchez presentó acción de habeas corpus en favor de RUBÉN ANTONIO SOTO CANDANEDO, de quien dice se encuentra detenido en las instalaciones de la Policía Técnica Judicial.

Afirma el demandante que Soto Candanedo ha sufrido privación de su libertad personal por más de 24 horas, en violación del artículo 21 de la Carta Fundamental, sin que siquiera se le haya interrogado.

Por concedido el mandamiento de cera corpus, se recibió el informe de conducta que fuera requerido a la autoridad acusada, en el cual se expresa lo siguiente:

> "1. No es cierto que hemos ordenado la detención del señor RUBÉN ANTONIO SOTO CANDANEDO.
> ...
> 3. No tenemos bajo custodia, ni a nuestras órdenes al prenombrado RUBÉN ANTONIO SOTO CANDANEDO.

Por otra parte, a foja 6 del cuaderno reposa informe que rindiera el 23 de mayo el Secretario General de la Corte Suprema, en el que manifiesta que, por vía telefónica, funcionarios de la Cárcel Modelo informaron que Soto Candanedo no se encuentra recluido en las instalaciones de ese centro penitenciario.

La situación que revela la información anterior es que la acción constitucional de cera corpus ha sido ejercida en este caso sin ningún fundamento, lo que no impide que en el futuro se demande nuevamente el amparo del tribunal de cera corpus, acreditando debidamente, con información fehaciente, que lo que se afirma es cierto.

Por las consideraciones anteriores, el PLENO DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ORDENA EL CESE del procedimiento en esta causa.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS E. MUÑOZ POPE (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO SALAS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE BAZZEL EZZI CONTRA EL FISCAL CUARTO DE CIRCUITO DE CHIRIQUÍ. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Ha ingresado a esta Corporación, en grado de apelación, la acción de Habeas Corpus promovida por el licenciado Rodrigo Miranda Morales a favor de Bassel Ezzi, quien fue detenido a órdenes de la señora Fiscal Cuarta del Circuito de Chiriquí.

Mediante sentencia de 22 de abril de 1996, el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial de David, resolvió en primera instancia esta acción y declaró legal la orden de detención de Bassel Ezzi, quien está vinculado a la comisión del delito de posesión de armas prohibidas.

Estando el presente proceso de habeas corpus listo para resolver, en

segunda instancia, el licenciado José María Lezcano, defensor de Bassel Ezzi (Cfr. foja 23), desistió del recurso de apelación interpuesto, mediante escrito fechado el 14 de mayo de 1996, y presentado en la Secretaría General de La Corte Suprema de Justicia el 16 de mayo de 1996.

Como quiera que "toda persona que haya entablado demanda, promovido incidente o interpuesto un recurso, puede desistir expresa o tácitamente" conforme lo establece el primer párrafo del artículo 1073 del Código Judicial, esta Corporación considera que debe acoger el desestimiento presentado personalmente por su signatario, ante la Jueza Primera Municipal del Distrito de David y su secretario.

De consiguiente, la Corte Suprema, PLENO, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE EL DESESTIMIENTO presentado por el licenciado José María Lezcano del recurso de apelación promovido contra la sentencia que resolvió el habeas corpus planteado a favor de Bassel Ezzi y contra la Fiscal Cuarta del Circuito de Chiriquí.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) CARLOS E. MUÑOZ POPE
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS INTERPUESTA A FAVOR DEL SEÑOR FUNG YONG CHING CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El señor Feliciano Ballesteros ha presentado acción de habeas corpus a favor del señor **FUNG YONG CHING**, contra el Licenciado Alejandro Moncada, Director de la Policía Técnica Judicial.

El funcionario acusado contestó el mandamiento de habeas corpus, mediante Oficio N° A. L. 0637-96 de 13 de mayo de 1996, en el cual informó que no tenía bajo su custodia al señor FUNG YONG CHIN, quien se encontraba a órdenes de la Fiscalía Auxiliar de la República.

Como consecuencia de lo anteriormente señalado, se libró mandamiento contra el Fiscal Auxiliar quien respondió que mediante providencia fechada 13 de mayo de 1996, esa Fiscalía dispuso dejar sin efecto la aprehensión del ciudadano FUNG YONG CHING y lo remitió a las autoridades de Migración, con la finalidad de que definieran su estado migratorio en nuestro país.

Finalmente, se libró mandamiento contra el Director Nacional de Migración y Naturalización del Ministerio de Gobierno y Justicia, quien mediante Oficio N° DNMYN-161-96 de 16 de mayo de 1996, respondió lo siguiente:

> "a) No es cierto que ordenamos la detención del ciudadano FUNG YONG CHING, de nacionalidad china.
> b) No existen al momento motivos, fundamentos de hecho ni de derecho para la detención del señor FUNG YONG CHING.
> c) No tenemos bajo nuestra custodia ni a nuestras órdenes al ciudadano chino FUNG YONG CHING. El mismo fue puesto en libertad en la mañana de hoy, 16 de mayo de 1996." (Foja 19).

De lo anteriormente expuesto se colige que el señor FUNG YONG CHING no se

encuentra privado de su libertad, por lo que esta corporación judicial debe ordenar el cese del procedimiento, al tenor de lo dispuesto por el artículo 2572 del Código Judicial.

Por tanto, EL PLENO DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA el cese del procedimiento de la acción de habeas corpus instaurada a favor del señor FUNG YONG CHING.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS E. MUÑOZ POPE (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ÁLVARO RODRÍGUEZ, JENNY NIETO ROJAS Y JORGE MONTOYA CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado **MARIO VAN KWARTEL VÉLEZ** ha interpuesto acción de habeas corpus a favor de **ÁLVARO RODRÍGUEZ, JENNY NIETO ROJAS Y JORGE MONTOYA** para que se declare ilegales las detenciones preventivas decretadas en su contra por el Director de la Policía Técnica Judicial.

Librado el mandamiento respectivo, dicho funcionario remitió su informe de conducta por medio de Oficio N° A. L. 0684-96 de 21 de mayo de 1996, en el cual indica que los prenombrados se encuentran bajo custodia en la Policía Técnica Judicial, pero a órdenes del Fiscal Auxiliar de la República.

Enderezada la acción hacia éste último funcionario, se informó mediante Oficio N° 8270 de 24 de mayo de 1996, que las sumarias seguidas a **ÁLVARO RODRÍGUEZ, JENNY NIETO ROJAS Y JORGE MONTOYA** fueron remitidas a la Personería Segunda Municipal de Panamá mediante Oficio N° 7895 de 16 de mayo de 1996.

En tales circunstancias cabe señalar que el tribunal competente para conocer el presente habeas corpus es un Juzgado de Circuito y no el Pleno de esta Corte, de conformidad con el artículo 2602, numeral 3 del Código Judicial.

Por lo tanto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLINA COMPETENCIA ante los Jueces de Circuito, Ramo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JOSÉ A. MIRANDA PEDROZA CONTRA EL FISCAL

ESPECIAL EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, TREINTA (30) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

PASCUAL MARTÍNEZ GUEVARA ha interpuesto recurso de habeas corpus contra el **FISCAL ESPECIAL EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS** y a favor de **JOSÉ A. MIRANDA PEDROZA**, quien se encuentra detenido por el delito contra la SALUD PÚBLICA.

Librado el respectivo mandamiento de habeas corpus contra la autoridad acusada, fue remitido el informe de rigor que a la letra dice:

"...

SEGUNDO: Los fundamentos de hecho y de derecho que motivaron la actuación atacada, lo exponemos a continuación.

A. FUNDAMENTOS DE HECHO:

Los hechos se dieron el día 2 de enero del año en curso, cuando las unidades del Área de San Miguelito en recorrido de rutina por el sector de Monte Oscuro, cuando a la altura de la calle El Progreso, visualizaron a un sujeto salir de una residencia de cuarto de alquiler, que al identificarse los agentes del orden público, salió en precipitada fuga por lo que procedieron a su persecución, retornando a la residencia antes mencionada y fue observado cuando suelta de su mano derecha un (1) bulto, en uno de los cuartos que se encontraba vacío, por lo que el Cabo 2° 15242 Domingo Cruz, procede a recogerlo y el mismo se trataba de una bolsita de plástico de rayas rojas y blancas que en su interior contenía la cantidad de catorce (14) sustancias sólidas de color crema que se presume sea la droga conocida como Crack o Piedra.

B. FUNDAMENTO DE DERECHO:

En las presentes sumarias el hecho punible que se investiga, el cual constituye un Delito Contra la Salud Pública Relacionado con Drogas, se encuentra plenamente acreditado en los siguientes puntos;

PRIMERO: La Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, procedió a realizarle la prueba de campo a las sustancias ilícita incautadas al señor José Miranda, las cuales resultaron POSITIVAS, para determinar que se trataba de COCAÍNA. (Fs. 5).

Mediante Oficio N° 321-96, de fecha 5 de enero de 1995, se procedió a llevar las sustancias al Laboratorio Técnico Especializado en Drogas de la Policía Técnica Judicial (P. T. J.) para su análisis y peso, pero hasta el momento de este Recurso, no se ha recibido el peso. (Fs. 12).

SEGUNDO: Al someterse a los rigores de la indagatoria el prenombrado se acogió al derecho constitucional que le otorga el artículo 22 de la Constitución Nacional (fs. 8) Mediante Oficio N° 840 de fecha 15 de enero de (sic) solicita al señor José Antonio Miranda, para que rinda su ampliación. (Fs. 15).

En el presente sumario se ha acreditado el elemento objetivo, con la prueba de campo realizada a las sustancias ilícitas, donde resultaron positivas a la cocaína, en cuanto al elemento subjetivo, contamos con el informe rendido por los agentes captores que participaron en la captura (fs. 13).

Con todos estos elementos expuestos se dan los presupuestos legales que establece el Artículo 2148 y 2159 de nuestro Código Judicial a efecto de que este Despacho haya adoptado la decisión jurisdiccional

de ordenar la detención del prenombrado. ...". (Fs. 6-7).

Con el oficio antes transcrito se envió las sumarias seguidas al favorecido con esta acción, sin embargo se observó que en dicho expediente no constaba el documento suscrito por el Laboratorio Especializado en Drogas que certificara la cantidad (peso) de la droga incautada. En ese sentido, a través de la Secretaría General de esta Corporación se solicitó fuese remitida dicha información a la mayor brevedad para proceder a resolver lo de lugar.

Una vez recibida la documentación requerida, la Corte realizará el examen de rigor a fin de determinar si la detención preventiva resulta fundamentada.

Al efecto, tal como señala el funcionario de instrucción en el informe antes transcrito, se ha podido constatar en el cuaderno antecedente adjunto los siguientes elementos que vinculan al favorecido con esta acción, al delito imputado:

1. El informe de novedad (fs. 1) del Director de Zona de Policía de San Miguelito en el cual relata los motivos de la captura del sindicado.

2. De fojas 6 a 7 se lee el auto dictado por la Fiscalía de Drogas, luego de haberse realizado la prueba de campo a la sustancia incautada resultando ser cocaína (Crack), por lo que se dispuso indagar al detenido.

3. De fojas 9 a 10 se encuentra la resolución motivada, también dictada por la Fiscalía, mediante la cual se decreta la detención preventiva.

Finalmente a fojas 11 de este expediente contentivo de la acción de habeas corpus se encuentra el Dictamen Pericial realizado por el Laboratorio Técnico Especializado en Drogas de la Policía Técnica Judicial en que se describe la evidencia como catorce (14) sustancias sólidas y residuos de la misma para la determinación de COCAÍNA (crack), con un peso total de "1.98 Gramos".

En los antecedentes adjuntos al expediente contentivo de esta acción de habeas corpus, remitidos por el Ministerio Público, no figura Certificación del médico forense que establezca "la medida posológica limitada a una dosis" en base al cual se podría suponer que la droga era para uso personal según el artículo 263-f del Código Penal, sin embargo en precedentes resueltos por la Corte dicho funcionario ha informado lo siguiente:

> "La dosis vía oral que produce efectos es de 0.2 a 0.4 gramos.
> La dosis media que produce efectos de cocaína es de 0.2 a 0.3 gramos, que se puede considerar como posológica.
> La dosis por inhalación que produce efectos es de 0.03 a 0.05 gramos.
> En los adictos la dosis por ingestión es de 1. a 1.5 gramos."

Como se ha podido constatar, la cantidad de droga (cocaína) que poseía **JOSÉ A. MIRANDA PEDROZA** al momento de su detención equivalía a un peso total de 1.98 gramos, por lo que sobrepasa la medida que usualmente se tiene como "cantidad escasa destinada para uso personal", que permite la aplicación de una medida de seguridad.

A pesar de lo anteriormente señalado, por el hecho de que la cantidad de droga que poseía el sindicado no sobrepasa en gran medida la cantidad que se tiene por escasa, se solicitó a la autoridad competente completar la información, sobre la condición del imputado a fin de determinar si se trata de un adicto epiléptico.

En ese sentido, el Psiquiatra Forense del Instituto de Medicina Legal envió oficio N° 64-15213 (fs. 25) acompañado de una evaluación psiquiátrica (fs. 26-27), en que certifica lo siguiente:

> "...
> En respuesta a su nota N° 697-96 en la cual solicita examen médico psiquiátrico de JOSÉ A. MIRANDA PEDROZA, sindicado por el delito

contra la Salud Pública, le informamos que fue examinado en la Cárcel Modelo y la historia médica social se elabora con datos suministrados por el sindicado.

Luego de lo anterior, Psiquiatría Forense establece que:

1. Presenta signos clínicos de Deficiencia Mental leve y datos en la historia de lesión orgánica cerebral de tipo epiléptica. (no controlado médicamente).

2. Es un abusador en el consumo de drogas ilícitas, aunque no presenta evidencia clínica de dependencia química a droga ilícita alguna.

3. No muestra evidencia clínica de actividad psicótica alguna.

Atentamente,

(fdo.) DR. JUAN MANUEL BENÍTEZ
PSIQUIATRA FORENSE INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL."

Lo anterior evidencia que JOSÉ A. MIRANDA es un "abusador en el consumo de drogas ilícitas" y, que utiliza el crack desde hace dos (2) años frecuentemente, por lo que ha de presumirse que la droga es para su consumo personal.

En virtud de lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA ILEGAL la detención preventiva decretada contra JOSÉ A. MIRANDA PEDROZA y ORDENA SU INMEDIATA LIBERTAD si no existe otra causa penal pendiente en su contra.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE EDWIN ANTONIO VALLEJOS CONTRA EL FISCAL PRIMERO DEL TERCER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ, LA CHORRERA. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, TREINTA (30) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

En grado de apelación ha ingresado a la Corte Suprema de Justicia el expediente contentivo de la acción de Habeas Corpus a favor de **EDWIN ANTONIO VALLEJOS** contra el **Fiscal Primero del Tercer Circuito Judicial de Panamá**.

El recurso de apelación, que procede a examinar el Pleno, ha sido interpuesto por el Defensor de Oficio de Edwin Antonio Vallejos contra la sentencia el 29 de abril de 1996 dictada por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, que resolvió declarar legal la detención preventiva de dicho imputado.

La sentencia impugnada, mediante la cual se decidió la acción de habeas corpus, en síntesis señala lo siguiente:

Con anterioridad a la interposición de esta acción, mediante sentencia de

28 de diciembre de 1995 se había resuelto acción de habeas corpus a favor de Edwin Antonio Vallejos, sindicado por el delito contra la salud pública, declarando legal su detención no sólo porque se le encontró vinculado al hecho punible investigado luego de un allanamiento realizado en su residencia, "sino porque previo a ello se realizó un compra-venta simulada, donde le fueron incautados los billetes marcados que utilizara el agente encubierto".

Sin embargo, a pesar de que el defensor del sindicado reconoce la existencia de dicho pronunciamiento, "en esta oportunidad cuestiona los lineamientos que se siguieron para la práctica de la operación encubierta".

En tal sentido el a-quo reconoce que en virtud del artículo 21 A de la Ley 13 de 1994 esas operaciones las realizará el Ministerio Público. Sin embargo, sostiene que en este caso la compra simulada u operación encubierta fue realizada por la Personera del Distrito de San Carlos con miembros del D. I. I. P. (Dirección de Información e Investigación Policial), según lo exige la ley (fs. 18-22).

Sobre la falta de competencia de miembros del orden público, señala que éstos tienen que prestar su colaboración en cualquier diligencia judicial indistintamente de su jurisdicción.

Finalmente señala que la Personera Municipal fundamentó el inicio de estas sumarias (fs. 7) en la solicitud de compra controlada formulada por el agente encargado del DIIP de Coclé.

Por lo anterior, consideró el sentenciador que los nuevos argumentos planteado por el proponente del habeas corpus "no sustentan una declaratoria de ilegalidad de la detención preventiva que pesa sobre Vallejos, ya que no se han conculcado sus garantías, así como tampoco los procedimientos de rigor".

En el escrito de apelación contra la aludida sentencia de habeas corpus, que consta de fojas 61 a 64, se señalan como principales argumentaciones las siguientes:

"...

1. El Ministerio Público no realizó la Operación Encubierta.

2. El Ministerio Público no comisionó ni autorizó expresamente a nadie y menos al D. I. I. P. para que realizara dicha diligencia.

Con respecto a este último punto, cabe hacer la observación de que la Ley alude es al Ministerio Público como la entidad que debe realizar las Operaciones Encubiertas en los casos de drogas y no otra institución.

...

1. La supuesta "Compra-Venta Simulada" a la cual se le da categoría de previa, no fue autorizada por el Ministerio Público ni hecha por este.

...

1. Existe la solicitud de autorización para la Compra controlada, pero no consta que se haya dado tal autorización.

2. Que, en caso de haber hecho el D. I. I. P. la diligencia de Compra Controlada, lo hizo sin autorización.

3. Que el Ministerio Público se confundió y se ha confundido al darle a una diligencia de allanamiento el **sugestivo** título de **DILIGENCIA DE COMPRA CONTROLADA A TRAVÉS DE UN AGENTE ENCUBIERTO** sin hacerlo en realidad. ..."

CRITERIO DE LA CORTE

Se observa que en este caso el favorecido con la acción de habeas corpus, y ahora apelante, fue capturado el 30 de noviembre de 1995 en su residencia como resultado de allanamiento realizado por la Personera del Distrito de San Carlos,

lo cual, según el recurrente, fue motivado por una operación encubierta realizada por la Dirección de Información e Investigación Policial (D. I. I. P.) de la Provincia de Coclé.

En virtud de habeas corpus interpuesto a favor del mismo sindicado-apelante, con anterioridad al presente, se declaró legal su detención mediante fallo de 28 de diciembre de 1995; esta vez, la acción de habeas corpus se dice fundamentada en la ilegalidad de la operación encubierta. En tal sentido se argumenta la incompetencia de la autoridad de policía que la realizó, en virtud de lo dispuesto por el artículo 25 de la Ley 23 de 1986 y, se señala que tal actuación fue extraterritorial por lo que se infringieron los artículos 21 y 42 del Reglamento Disciplinario de la Policía Nacional.

A juicio de la Corte, el problema que se plantea en el caso sub-júdice no es de índole constitucional sino de orden legal, pues lo que se pretende es que se revise la forma en que se realizó la aludida operación encubierta, situación que no puede ventilarse a través de una acción de habeas corpus a pesar de que sus efectos hayan contribuido a la determinación de los principales elementos para la comprobación del hecho punible.

Aunado a lo expuesto, como se señaló anteriormente, de fojas 68 a 70 de los antecedentes adjuntos a la presente acción, se observa la resolución sobre el primer habeas corpus, dictada por el Segundo Tribunal Superior de 28 de diciembre de 1995 que declaró legal la detención del imputado EDWIN VALLEJOS; en dicha sentencia se señala que tal detención fue decretada por la Personera Municipal del Distrito de San Carlos, por el hecho de haberse encontrado en poder de Vallejos billetes marcados, utilizados para la compra simulada de drogas en la operación encubierta y, además por los señalamientos que contra el mismo hizo el sindicado Omar Enrique Coronado.

Las alegaciones expresada por el procurador judicial del sindicado en este recurso de apelación, al igual que el pronunciamiento del a-quo por razón de la acción de habeas corpus interpuesta por segunda vez, no se encuentran comprendidas dentro del marco de aplicación de esta institución extraordinaria de garantía, ni dentro del examen que le corresponde realizar al tribunal de habeas corpus, el cual debe limitarse a la verificación del cumplimiento de las exigencias preceptuadas por los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial, en concordancia con el artículo 23 de nuestra Carta Fundamental.

En reiteradas ocasiones la Corte ha sostenido que el habeas corpus es un remedio procesal constitucional de naturaleza especial, con ámbito de aplicación restringido, creado con la finalidad de garantizar la eficacia del derecho fundamental de la libertad frente a las restricciones arbitrarias a que pueda ser sometido el individuo.

Para casos como el que nos ocupa el habeas corpus carece de eficacia jurídica, debido a que lo pretendido mediante el mismo es ajeno a su naturaleza ya que consiste en que se declare ilegal la actuación de autoridades de policía en una diligencia que coadyuvó a la detención de la persona; aún, cuando en este momento así se considerara, no cambiaría la situación del individuo pues dicha operación ya surtió el efecto de vincularlo al hecho punible. Fuera de que lo relativo al fundamento legal de esa detención ya había sido juzgado por el tribunal de habeas corpus.

Así las cosas, por las consideraciones expuestas esta Corporación considera que el tribunal de primera instancia debió declarar la improcedencia de esta acción de habeas corpus, sin que fuera necesario emitir un nuevo pronunciamiento sobre la legalidad de la detención, pues dicha situación ya había sido objeto de un fallo anterior, que reconoció que la persona no había sido privada de su libertad en forma arbitraria.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la Sentencia de 29 de abril de 1996 dictada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, mediante la cual se DECLARA LEGAL la detención de EDWIN ANTONIO VALLEJOS.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) CARLOS E. MUÑOZ POPE
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JORBI ORIEL CERRUD NAVARRO CONTRA EL FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. PANAMÁ, TREINTA (30) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La licenciada Asunción Alonso de Montalvo interpuso acción de habeas corpus a favor de YORBI ORIEL CERRUD NAVARRO, contra el Fiscal Especial en Delitos Relacionados con Drogas.

Por concedido el mandamiento de habeas corpus, la autoridad demandada remitió el informe de conducta a que se refiere el artículo 2582 del Código Judicial, para explicar que la detención de Cerrud Navarro fue decretada mediante resolución fechada 23 de febrero del año en curso, con indicación de las circunstancias de hecho y de derecho que dieron motivo a la aplicación de la medida restrictiva de la libertad corporal.

La Corte procede a examinar si la medida cautelar atacada cumple con los requisitos que establecen la Constitución y la ley.

Según la resolución que ordena la detención preventiva de Cerrud, la medida restrictiva de la libertad se fundamenta en la presunta comisión de delitos contra la salud pública, concretamente tráfico de drogas, que lleva aparejada pena mínima superior a los dos años de prisión.

Como elemento de prueba allegado al expediente para la comprobación del hecho punible se tiene la diligencia de allanamiento (fs. 6-9, sumarias), realizada el 17 de febrero del año que decurre en la residencia de la familia Cerrud Navarro, ubicada en Corregimiento de Pacora, Sector 24 de Diciembre, Calle Principal, lugar donde se incautó lo siguiente: en el cuarto N° 1, 33 carrizos plásticos transparentes vacíos; en el cuarto N° 2, dentro de una zapatilla de propiedad del detenido, un sobre plástico transparente pequeño en cuyo interior se encontraron 10 carrizos pequeños de plástico transparente, contentivos de polvo blanco, y una cajetilla de fósforos con 14 carrizos plásticos transparentes contentivos de polvo blanco. Aunado a lo anterior, en el bolsillo izquierdo del pantalón que vestía el imputado se encontraron 8 carrizos pequeños de plástico transparente que contenían polvo blanco. El análisis a que fuera sometida la sustancia ocupada por el laboratorio de la Policía Técnica Judicial, permitió comprobar que se trata de **COCAÍNA**, con un peso de **2.24 gramos** (f. 39, cuaderno de antecedentes).

Observa la Corte que, a pesar de que el peso de la droga incautada es de (**2.24 gramos**), lo que excede la dosis mínima de consumo que establece la tabla posológica del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público, durante el allanamiento no se encontró ninguna otra evidencia, como por ejemplo dinero fraccionado, instrumentos idóneos para la comercialización de la droga o insumos, como tampoco existe el señalamiento de tercera persona conocida en el sentido de que el detenido se dedica al tráfico de droga.

Este razonamiento se encuentra reforzado por el reconocimiento espontáneo que hace Cerrud sobre la propiedad de la droga, la que dice haber adquirido para

su uso personal y consumirla durante los días de carnaval, lo que viene haciendo desde hace dos años (fs. 24-26, sumarias). Como complento y confirmación de este aserto, figura el hecho de que el dictamen psiquiátrico forense determinó un cuadro de consumo (f. 45), lo que permite deducir que nos encontramos ante un caso de *posesión ilícita de drogas para fines de consumo*, que lleva aparejada una pena inferior a los dos años de prisión. Aun cuando el peso total de la droga excede el de la **dosis** de consumo personal establecida por la medicatura forense, se trata obviamente del caso de un consumidor habitual a quien se le ocupa, no **una dosis única**, sino el equivalente a **dosis múltiples**, para ser consumidas durante un período de tiempo. Igualmente relevante parece el hecho de que, entre lo ocupado durante el allanamiento, aparecen "33 carrizos plásticos transparentes vacíos que estaban metidos en un hueco de la pared"; todo apunta a que esta evidencia guarda relación con consumo "in situ", que no con tráfico, siendo razonable atribuirlo al imputado. Junto a todas estas comprobaciones concretas aparece el reconocimiento que hacen los agentes captores, en el sentido de que durante la vigilancia estacionaria, aparte de las sospechas de tráfico, "no se observó venta alguna".

Por las consideraciones anteriores, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA ILEGAL la detención preventiva de Yorbi Oriel Cerrud Navarro y, en consecuencia, ORDENA que el detenido sea puesto inmediatamente en libertad.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO SALAS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE EDILBERTO VÁSQUEZ CONTRA EL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TREINTA (30) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Edilberto Vásquez interpuso habeas corpus verbal a su favor y contra el Procurador General de la Nación.

La parte actora comunicó mediante llamada telefónica a la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia el 17 de mayo de 1996, que estaba detenido en la Corregiduría de Calidonia, ya que el Procurador General de la Nación mediante oficio DOG-611-96, ordenó a la señora Corregidora de Calidonia su detención.

Mediante auto de 17 de mayo de 1996 se libró mandamiento de habeas corpus y se requirió al funcionario demandado que informara si había ordenado o no la detención del licenciado Edilberto Vásquez, los motivos y fundamentos de hecho y de derecho que tuvo para ello y si el mismo está detenido a sus órdenes o ha sido transferido a órdenes de otra autoridad.

El funcionario demandado contestó el mandamiento de habeas corpus mediante la Nota DPG-624-96 de 17 de mayo de 1996, e informó a esta Corporación lo siguiente:

> "a) No es cierto que ordené, ni verbalmente ni por escrito, la detención del licenciado EDILBERTO VÁSQUEZ. Como consecuencia de denuncia interpuesta por el licenciado JAIME ABAD, el 17 de mayo de

1996 en contra del precitado licenciado Vásquez, este despacho remitió el oficio DPG-610-96, al Director General de la Policía Técnica Judicial, con el fin de que condujera a dicho profesional del derecho a esta agencia del Ministerio Público para la práctica de una diligencia judicial, lo que no puede asimilarse, en modo alguno, a una orden de detención. La denuncia en cuestión fue remitida a la Corregiduría de Calidonia el mismo día, por ser de su competencia.

b) Este despacho no tuvo motivos o fundamentos de hecho y de derecho para ordenar la detención del licenciado Vásquez, por no haberse producido ésta.

c) El licenciado Vásquez no está ni bajo la custodia ni a órdenes del suscrito, por no haberse dado orden de detención en su contra." (Fs. 4-5).

Esta Corporación de Justicia ha manifestado en reiteradas ocasiones que en las acciones de habeas corpus preventivo, se requiere la existencia de una orden de detención. En el presente caso, se ha comprobado plenamente que la autoridad demandada no ha emitido ninguna orden de detención contra el licenciado Eriberto Vásquez. Por lo tanto, no existe uno de los presupuestos esenciales que dan vida a este tipo de acción y el Pleno de la Corte Suprema de Justicia considera que el proceso debe cesar.

De consiguiente, el PLENO de la Corte Suprema, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA EL CESE del procedimiento en la acción de habeas corpus promovida por el licenciado Eriberto Vásquez a su favor y contra el Procurador General de la Nación.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==

HABEAS CORPUS A FAVOR DE ALCIBIADES MESÚA CONTRA EL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado **MANUEL VIDAL FUENTES MÉNDEZ** en su calidad de Defensor Circuital de la Provincia de Darién ha presentado acción de Habeas Corpus a favor de **ALCIBIADES MESÚA**, y en contra del Fiscal Auxiliar de la República, por considerar que la detención que sufre su patrocinado es ilegal.

Acogida la acción de Habeas Corpus y expedido el correspondiente mandamiento, el Fiscal Auxiliar de la República contestó el libramiento mediante oficio N° 8280, adjuntando copia del escrito girado a la Policía Técnica Judicial, (oficio 4935) donde consta que el día 3 de abril de 1996 se solicitó dejar sin efecto la aprehensión del señor **ALCIBIADES MESÚA CUÑAPA**, y en el mismo indicó que posteriormente el caso fue enviado a la Fiscalía Novena del Primer Circuito Judicial de Panamá, mediante el oficio N° 4947 del 8 de abril de 1996, dado que el beneficiado con esta acción se encuentra indiciado por el delito de Hurto según denuncia suscrita por Abraham Willians Della Sera.

Lo anterior demuestra que el señor **ALCIBIADES MESÚA CUÑAPA**, persona a cuyo favor se ha promovido el presente habeas corpus, en la actualidad, no se encuentra privada de su libertad, por lo que no tiene objeto continuar con este procedimiento.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA EL CESE DE PROCEDIMIENTO en el presente negocio y ORDENA el archivo del expediente.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) AURA GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR LA FIRMA FORENSE MORENO & FÁBREGA CONTRA LA FRASE "POR EL TÉRMINO DE CINCO DÍAS" CONTENIDA EN EL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 1250 DEL CÓDIGO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TRES (3) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La Licenciada ANALISA M. DE AROSEMENA, actuando en representación de HERBERT GARCÍA, ha demandado la inconstitucionalidad de la frase "por el término de cinco días" contenida en el párrafo tercero del artículo 1250 del Código Judicial de la República de Panamá.

I. La pretensión y su fundamento.

La pretensión que se formula en este proceso constitucional consiste en una petición dirigida al Pleno de la Corte Suprema de Justicia para que se declare que es inconstitucional la frase arriba citada.

Sostiene el demandante que la mencionada frase es violatoria del artículo 32 de la Constitución Nacional.

La disposición que contiene la frase cuya inconstitucionalidad se pide es del siguiente tenor literal:

> "ARTÍCULO 1250. Si hubiere varios demandados, y alguno de ellos deseare ejercer una pretensión en contra de otro de los demandados que se origine de la misma relación jurídico o de los mismos hechos que son objeto del proceso, el demandado reclamante podrá hacer valer sus derechos mediante la presentación del respectivo libelo.
>
> El derecho que se confiere en el inciso anterior deberá ejercitarse presentando el correspondiente libelo antes de la apertura del negocio a pruebas.
>
> Presentado oportunamente el escrito de la nueva demanda, se dará traslado al demandado **por el término de cinco (5) días**, y a partir de este momento todos los trámites serán comunes.
>
> En la sentencia, cuando fuere pertinente, el Juez se pronunciará sobre las pretensiones aducidas con base en el derecho de demandar

a la coparte, consagrado en este artículo."

El demandante considera que la frase por el impugnada infringe en forma directa la garantía constitucional del debido proceso al introducir una desigualdad en cuanto al término de traslado con que cuenta el demandado en proceso ordinario, lo cual afecta sus posibilidades de defensa. Agrega el demandante que la garantía del debido proceso también supone el ofrecer al demandado un término razonable para que conteste la demanda y formule los descargos que se lanzan en su contra. En este sentido, señala, si en el proceso ordinario la regla general es que el término de traslado de la demanda es de diez (10) días, el restringir a cinco (5) días el traslado de la demanda de coparte conlleva un tratamiento desigual hacia el demandado que acaba menoscabando el derecho que tiene a una razonable defensa que es consustancial al debido proceso, como lo concibe el estatuto fundamental.

II. La postura del Procurador General de la Nación.

El Procurador de la Administración rindió concepto mediante la Vista N° 1 de 5 de enero de 1996.

Sostiene dicho funcionario que a través del debido proceso legal, consagrado en el artículo 32 de la Carta Fundamental, se asegura a toda persona la oportunidad de ser oído o ejercer el derecho de defensa, de producir pruebas y decidir la causa mediante sentencia, dentro de un término prudencial. Agrega el Procurador que habrá violación de dicha norma cuando no se integre el tribunal conforme lo exige la ley, cuando se ignore un traslado de ley, cuando se haya ignorado un trámite de pruebas o de alegatos o se dicte una sentencia que no sea consecuente con un determinado procedimiento.

Finalmente, señala el Procurador, la norma constitucional no consagra igualdad en cuanto al término de traslados, sino la facultad de que el demandado tome conocimiento de la pretensión deducida en su contra, para defender sus derechos, tal como lo establece la disposición atacada. En este sentido, señala el funcionario, la Constitución Nacional delega la cuestión de política procesal a la ley en atención al principio de fundamentalidad, por razones de realismo y utilidad. Estima, pues, que es lógico que el legislador haya reducido los términos, toda vez que ya se ha establecido la relación procesal, es decir, que los elementos subjetivos de la relación procesal (demandante y demandado) se encuentran plenamente identificados y vinculados, por lo que concluye que la norma atacada respeta plenamente lo dispuesto en el artículo 32 y demás disposiciones de la Constitución Nacional.

III. Decisión de la Corte.

Vencida la fase de alegatos sin que ningún interesado presentase escritos dentro del término previsto en el artículo 2555 del Código Judicial, debe la Corte decidir el fondo de la pretensión formulada en la demanda.

La parte actora considera que la norma impugnada infringe el artículo 32 de la Constitución Nacional, que a la letra dice:

> **"ARTÍCULO 32.** Nadie será juzgado sino por autoridad competente y conforme a los trámites legales, ni más de una vez por la misma causa penal, policiva o disciplinaria."

Ciertamente, el artículo 32 de la Constitución Política consagra la garantía fundamental del debido proceso. El mismo debe ser entendido como una institución instrumental, en virtud de la cual debe asegurarse a las partes en todo proceso -legalmente establecido y que se desarrolle sin dilaciones injustificadas- oportunidad razonable de ser oídas por un tribunal competente predeterminado por la ley, independiente e imparcial de pronunciar respecto de las pretensiones y manifestaciones de la parte contraria, de aportar pruebas lícitas relacionadas con el objeto del proceso y de contradecir las aportadas por la contraparte, de hacer uso de los medios de impugnación consagrados por la ley contra resoluciones judiciales materiales y conforme a derecho, de tal manera que las personas puedan defender efectivamente sus derechos.

Así pues, uno de los elementos que integran la noción del debido proceso lo constituye la contradicción y bilateralidad. En este sentido, en la doctrina se define este elemento como la "oportunidad de tomar posición y pronunciarse sobre pretensiones y manifestaciones de parte contraria ... la bilateralidad de la audiencia no es más que un elemento de la garantía constitucional del debido proceso que es consecuencia del principio de igualdad ante la ley prevista en el artículo 20 de la Constitución Nacional. Las partes en el proceso, pues, tienen iguales derechos y oportunidades para defenderse, lo cual excluye, según el artículo 19 de la Constitución Nacional, los fueros o privilegios personales o cualquier discriminación por razón de raza, nacimiento, clase social, sexo, religión o ideas políticas. Ahora bien, esto no excluye que pueda darse distinto tratamiento procesal a los desiguales y, en este sentido, encontramos algunas desigualdades procesales en el derecho procesal del trabajo que obedece a las diferentes situaciones y supuestos de hecho en que se encuentran el empleador y el trabajador." (HOYOS, ARTURO. El Debido Proceso. Editorial Temis. 1996. pág. 92).

La Corte ha señalado en innumerables ocasiones que lo que se pretende es garantizar a las partes una igual oportunidad de acción y contradicción, es decir, el permitir a cada parte el tomar posición con respecto a las manifestaciones, pretensiones o pruebas de la otra parte, de manera que se desarrolle el contradictorio en igualdad de condiciones. En este sentido, la Corte ha señalado que se viola el debido proceso justamente cuando no se le permite a la parte participar efectivamente en esta etapa del proceso con igual oportunidad de defensa.

La Corte observa que la advertencia en estudio surge dentro de un proceso en que se presenta una demanda de coparte. La misma puede ser definida, como el "mecanismo mediante el cual una de las partes, normalmente uno de los demandados -en los supuestos de pluralidad de partes- puede promover una demanda en contra de su co-parte, siempre que se ejerza una pretensión derivada del mismo evento o negocio que es objeto del proceso original o que se refiera a un bien que es objeto del proceso ... se traduce en una nueva relación procesal, en que el demandado sin perder su condición de tal, se convierte en actor en contra del otro demandado. Así el demandado, atacado por el demandante, se defiende de éste y a su vez contraataca, pero no al demandante en este caso sino al otro demandado." (FÁBREGA, Jorge. Estudios Procesales. Tomo I. Editora Jurídica Panameña. Panamá. 1989. pág. 452).

Esta Corporación estima que es incorrecto el criterio expresado por la parte actora en el sentido de que el término de cinco días para el traslado de la demanda de coparte viola el debido proceso por conllevar un tratamiento desigual hacia el demandado, al afectar el derecho a una razonable defensa. Ello dista mucho de ser cierto pues a nuestro juicio -al tratarse de una demanda de coparte- se demanda a quien ya es parte en el proceso por lo que, efectivamente, ya se ha establecido la relación procesal y las partes ya tienen conocimiento del caso. Es lógico que se haya reducido el término de traslado por cuanto el nuevo demandado debe responder a una pretensión que se deriva de la pretensión original, pero en relación a su coparte.

No se viola el debido proceso por cuanto no se le coarta a ninguna de las partes la posibilidad de pronunciarse en torno a las pretensiones del nuevo demandante, ni se limita la bilateralidad y el contradictorio. Si bien se ha reducido el término de traslado, ello no afecta la posibilidad de una razonable defensa. No procede, pues, este cargo.

En consecuencia, la Corte Suprema de Justicia, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA que NO ES INCONSTITUCIONAL el artículo 1250 del Código Judicial.

Notifíquese y Publíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA

(fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR EL LICENCIADO NELSON BARRAGÁN GONZÁLEZ CONTRA EL ARTÍCULO 968, NUMERAL 2, DEL CÓDIGO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, SEIS (6) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La licenciada Delia Cedeño, Juez Segunda Seccional de Menores de Panamá, ha remitido a esta Corporación la advertencia de inconstitucionalidad presentada por el licenciado **NELSON BARRAGÁN GONZÁLEZ** contra el artículo 968, numeral 2 del Código Judicial.

Al examinar el escrito contentivo de la citada advertencia de inconstitucionalidad observa el Pleno que el mismo no cumple con los requisitos comunes a toda demanda, pues no contiene los hechos que sirven de fundamento a su pretensión, según lo establece el numeral 6 del artículo 654 del Código Judicial.

Por otro lado, tampoco cumple con el numeral 2 del artículo 2551 del Código Judicial que requiere que en la misma se señale y explique el concepto de la violación, en cualquiera de las modalidades en que se haya producido la infracción literal de un precepto constitucional. De conformidad con el artículo 2552 del mismo Código, esta omisión tiene como consecuencia la inadmisibilidad del recurso.

En mérito de lo anteriormente expuesto, el PLENO DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la advertencia de inconstitucionalidad presentada por el licenciado NELSON BARRAGÁN GONZÁLEZ contra el artículo 968, numeral 2 del código judicial.

Notifíquese.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR EL LICENCIADO ERIC SIERRA GONZÁLEZ, CONTRA EL ARTÍCULO 2410 DEL CÓDIGO JUDICIAL, DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A RAMÓN FERNÁNDEZ Y EUGENIA LORENZO, SINDICADOS POR DELITO CONTRA EL PATRIMONIO EN PERJUICIO DEL ALMACÉN "EL MACHETAZO". MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, NUEVE (9) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Eric Sierra González, en su carácter de apoderado especial de **RAMÓN FERNÁNDEZ y EUGENIA LORENZO**, dentro del proceso que se le sigue por un delito contra el patrimonio cometido en perjuicio del almacén El Machetazo, ha formulado ante el Juzgado Octavo de Circuito de lo Penal del Primer Circuito

Judicial, advertencia de inconstitucionalidad contra el artículo 2410 del Código Judicial que sirve de fundamento al auto de mejor proveer, de fecha 1° de febrero de 1996, al considerar pugna con el artículo 32 de la Constitución Nacional.

En cumplimiento de lo establecido por la ley, el Juzgado remitió el cuadernillo contentivo del escrito respectivo a la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia, mediante oficio N° 759 de 22 de abril de 1996.

Al revisar el texto de la advertencia de inconstitucionalidad presentada, saltan de bulto varios defectos que conllevan su inadmisión, entre ellos cabe mencionar:

1° La advertencia se hace contra una norma adjetiva que fue aplicada, al recoger la prerrogativa otorgada al juzgador para dictar autos de mejor proveer.

2° Se omiten los requisitos comunes a toda demanda.

3° No aparece la transcripción literal de norma acusada de inconstitucional.

4° No se establecen los hechos en que se apoya la advertencia presentada.

5° Se incumple con la indicación de las disposiciones constitucionales infringidas y el concepto de la infracción.

6° El término a que se refiere el artículo 2549 del Código Judicial incumbe al servidor público y no al advertidor, razón por la cual es inoperante la promesa de cumplimiento del artículo 2550 al que alude en el párrafo final de su escrito (cfr. fs. 5).

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la advertencia de inconstitucionalidad promovida por el licenciado Eric Sierra González dentro del proceso seguido a RAMÓN FERNÁNDEZ y EUGENIA LORENZO por delito contra el patrimonio.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR EL LICENCIADO ERIC SIERRA GONZÁLEZ, EN REPRESENTACIÓN DE EUGENIA LORENZO Y RAMÓN FERNÁNDEZ, CONTRA LA RESOLUCIÓN DE 1° DE FEBRERO DE 1996, PROFERIDA POR EL JUZGADO OCTAVO DE CIRCUITO DE LO PENAL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ, DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO POR DELITO CONTRA EL PATRIMONIO EN PERJUICIO DEL ALMACÉN "EL MACHETAZO, S. A." MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, NUEVE (9) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Eric Sierra González en calidad de apoderado especial de **RAMÓN FERNÁNDEZ y EUGENIA LORENZO** dentro del proceso que se les sigue por un delito contra el patrimonio cometido en perjuicio del almacén El Machetazo, presentó -el 22 de abril- nuevamente ante el Juzgado Octavo del Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial, advertencia de inconstitucionalidad contra la resolución de 1° de febrero de 1996 por medio del cual ese Juzgado decreta auto para mejor proveer dentro del proceso aludido; indicando que ese acto

jurisdiccional pugna con las garantías fundamentales previstas en el artículo 32 de la Constitución Nacional.

Dando cumplimiento a lo dispuesto por la ley procesal, el juzgado respectivo remitió el cuadernillo contentivo del escrito a la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia, mediante oficio N° 768 de 23 de abril de 1996.

Observa el Pleno en esta oportunidad, que el escrito de advertencia de inconstitucionalidad revisada, contiene los requisitos comunes a toda demanda, la literal transcripción de la norma acusada de inconstitucional y el concepto de la infracción.

No obstante, otra importante exigencia procesal **-que no se cumple-** lo es, que la disposición aún no se haya aplicado. Así lo ha sostenido esta máxima corporación de justicia, en repetidas ocasiones, indicando que ello se desprende claramente de lo normado en los artículos 2548 y 2549 del Código Judicial.

Las normativas en comento, tienen como condicionante, que el advertidor de manera subjetiva suponga que la norma atacada **será aplicada** como fundamento legal de una resolución jurisdiccional por la autoridad correspondiente.

Situación que no sucede en el presente caso, siendo extemporánea la advertencia de inconstitucionalidad.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA,PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la advertencia de inconstitucionalidad promovida por el licenciado Eric Sierra González dentro del proceso seguido a RAMÓN FERNÁNDEZ y EUGENIA LORENZO por delito contra el patrimonio.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR ARROCHA, BLANDÓN, CASTRO & YOUNG, EN REPRESENTACIÓN DE MARCO A. AMEGLIO S., CONTRA FRASE "Y DEROGA LOS DECRETOS EJECUTIVOS N° 14 DE 1992, N° 196 DE 1993 Y EL N° 356 DE 1994" CONTENIDA EN EL ART. 34 DE LEY N° 31 DE 30/12/1994, "POR LA CUAL SE MODIFICAN LOS ARTS. C. FISCAL SOBRE CONTRATACIÓN PÚBLICA, Y SE ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES". MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, TRECE (13) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La firma forense Arrocha, Blandón, Castro & Young, actuando en representación de MARCO A. AMEGLIO S., interpuso ante la Corte Suprema acción de inconstitucionalidad contra la frase "y deroga los Decretos Ejecutivos N° 14 de 1992, N° 196 de 1993 y el N° 356 de 1994", contenida en el artículo 34 de la Ley N° 31 de 30 de diciembre de 1994, "Por la cual se modifican artículos del Código Fiscal sobre la contratación pública, y se adoptan otras disposiciones", por considerar que vulnera los artículos 159 y 160 de la Constitución Nacional.

HECHOS EN QUE SE FUNDA LA DEMANDA

Según explica el actor, el 22 de diciembre de 1994 finalizó el segundo

debate del Proyecto N° 10 "Por el cual se modifican disposiciones del Código Fiscal referentes a la contratación pública y se adoptan otras medidas", presentado ante la Asamblea Legislativa por el Ministro de Hacienda y Tesoro el 11 de octubre del mismo año. Antes de finalizar la sesión del 22 de diciembre -afirma el demandante- se leyó por Secretaría de la Asamblea Legislativa una "supuesta" propuesta de los legisladores Elías Castillo y Carlos Alvarado, referente al artículo 25 del mencionado proyecto, que no fue sustentada ni explicada al Pleno del Parlamento y que el acta de dicha sesión no transcribe.

Agrega el demandante que el texto del Proyecto de Ley N° 10, tal como quedó después de las modificaciones realizadas en segundo debate, y que fuera presentado a consideración de la Comisión de Revisión y Corrección de Estilo, no contenía la reforma supuestamente aprobada al artículo 25 original, que pasó a ser el artículo 34 de la ley.

Luego de revisado el Proyecto por la comisión parlamentaria antes mencionada, el mismo fue sometido a tercer debate. El texto, según afirma el actor, "no contenía en su artículo 34 referencia alguna a la supuesta derogatoria de los Decretos Ejecutivos N° 14 de 1992, N° 196 de 1993 y el N° 356 de 1994, intención de la modificación aparentemente propuesta por los legisladores Castillo y Alvarado". No obstante, añade el demandante, "el texto que firma la Presidente y el Secretario General de la Asamblea Legislativa sí contiene dicha reforma al artículo 34 del Proyecto de Ley N° 10, el cual luego deviniera en la Ley N° 31 de 30 de diciembre de 1994" (f. 114).

NORMAS INFRINGIDAS Y CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN

El demandante acusa de inconstitucional la frase "y deroga los Decretos Ejecutivos N° 14 de 1992, N° 196 de 1993 y el N° 356 de 1994", contenida en el artículo 34 de la Ley N° 31 de 30 de diciembre de 1994, cuyo texto completo es el siguiente:

> "**ARTÍCULO 34**. Esta ley modifica los Artículos 23-A, 26-A, el parágrafo 2° del Artículo 31, 32, 40-A, el numeral 9 del Artículo 47, 50, 51, 53, 69, 70, 72 y 711 del Código Fiscal. Modifica los Artículos 2, 6, 9, 10 y 11 de la Ley N° 5 de 1988. Modifica el parágrafo 4 del Artículo 5 del Decreto de Gabinete N° 109 de 1970. Adiciona los literales e), f) y g) al Artículo 20; los Artículos 26-C, 29-A, 40-B, 40-C, 47-A, 47-B, 47-C, 47-D, 47-E, un tercer párrafo al Artículo 48; los Artículos 64-A, 68-A y el literal u) al Artículo 708 del Código Fiscal; *y deroga los Decretos Ejecutivos N° 14 de 1992, N° 196 de 1993 y el N° 356 de 1994*; deroga el Artículo 24-A del Decreto de Gabinete N° 109 de 1970; el literal i) del Artículo 3 de la Ley N° 31 de 1991, adicionado al Artículo 696 del Código Fiscal" (Cursivas de la Corte).

Sostiene el actor que la frase acusada infringe directamente el artículo 160 de la Constitución Nacional, cuyo tenor es el que sigue:

> "**ARTÍCULO 160.** Ningún proyecto será Ley de la República si no ha sido aprobado por la Asamblea Legislativa en tres debates, en días distintos y sancionado por el Ejecutivo en la forma que dispone esta Constitución.
>
> Es primer debate de todo proyecto de Ley el que se le da en la Comisión de que trata el artículo anterior.
>
> Un proyecto de Ley puede pasar a segundo debate cuando la mayoría de la Asamblea Legislativa, a solicitud de uno de sus miembros, revocare el dictamen de la Comisión y diere su aprobación al proyecto".

Al explicar el concepto de la infracción, afirma el demandante que la frase atacada no fue aprobada en tres debates, de conformidad con lo preceptuado en la ley orgánica de la Asamblea Legislativa (Ley N° 49 de 4 de diciembre de 1984,

reformada por la Ley N° 7 de 27 de mayo de 1992). En tal sentido, manifiesta que se violó el artículo 160 de la Carta Magna, "puesto que no se ha seguido el procedimiento previsto en varios artículos del Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa en lo que respecta al proceso de aprobación de las leyes" (f. 115).

Al profundizar su argumentación, el demandante explica la supuesta violación de los artículos 112, 143, 169, 139, 101 numeral 4, 49, 124 y 156, todos ellos del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Legislativa, cuerpo normativo que, en virtud de sentencia de Pleno de 16 de octubre de 1991, forma parte del bloque de la constitucionalidad.

El demandante también considera infringido el último párrafo del artículo 159 de la Constitución Nacional, que a la letra dice:

> "**ARTÍCULO 159.** Las leyes serán propuestas:
> ...
> Las Leyes orgánicas necesitan para su expedición del voto favorable en segundo y tercer debates, de la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Legislativa. Las ordinarias sólo requerirán la aprobación de la mayoría de los Legisladores asistentes a las sesiones correspondientes".

Indica que la frase atacada por inconstitucional no fue sometida a consideración del Pleno de la Asamblea Legislativa en segundo debate "y **ni siquiera fue sometida a votación** en Tercer Debate; por ende, siendo ley orgánica, mal puede ser constitucional su expedición" (f. 122, resaltado del actor).

El demandante resume el conjunto de irregularidades incurridas durante el proceso de adopción de la Ley N° 31 de 30 de diciembre de 1994, de la siguiente manera:

> "La propuesta de modificación en cuestión no fue explicada al Pleno, más bien fue presentada casi que subrepticiamente. Su texto fue el único que no fue incluido en el Acta correspondiente al día en que supuestamente se propuso y aprobó. La materia sobre la cual versaba no tenía relación con el tema en discusión y fue incluida dentro de un artículo final de forma. En el texto de (sic) Proyecto de Ley que la Comisión de Revisión y Corrección de Estilo revisó y presentó al Pleno para su discusión y eventual aprobación en Tercer Debate, no aparece dicha modificación. Dicha alteración, luego es "corregida" por el Secretario General de la Asamblea sin seguir los procedimientos establecidos y sin informarlo oportuna y claramente a los miembros del Órgano Legislativo" (f. 123).

OPINIÓN DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN

De conformidad con lo que preceptúa el artículo 2554 del Código Judicial, la demanda fue corrida en traslado al Ministerio Público, correspondiéndole al Procurador General de la Nación emitir concepto, deber que cumplió mediante Vista Fiscal N° 23 de 4 de mayo de 1995, visible a fojas 129 a 143 del expediente.

El máximo representante del Ministerio Público concuerda con la pretensión del demandante en cuanto a la alegada violación del artículo 160 de la Constitución Política. Al respecto señala:

> "En ese sentido y, en base a lo antes argumentado, tenemos que un estudio detenido de la documentación aportada por parte de la firma forense demandante, da cuenta que sí se ha producido la inconstitucionalidad por razones de forma, ya que la frase impugnada no fue aprobada en tercer debate" (f. 137).

Más adelante se expresa en la Vista que el proyecto de Ley N° 10 fue aprobado en tercer debate, pero que "en el caso específico de la frase impugnada ... ésta no fue incorporada a aquél, para su aprobación en el tercer debate, aparentemente, por un error de la Comisión de Revisión y Corrección de Estilo"

(f. 140).

Respecto a la alegada infracción del artículo 160 de la Ley Fundamental, concluye sus argumentaciones el Procurador sosteniendo que, pese a que se aprobó la frase impugnada en segundo debate, al omitirse ésta para su aprobación en el tercer y último debate legislativo, sobrevino un vicio de forma que la hace inconstitucional. En su opinión, ello es así toda vez que, "habiéndose detectado el error, éste, a nuestro juicio, ya no podía ser subsanado en la forma como se procedió -incorporar la frase al artículo 34, luego de haber sufrido el tercer debate-, firmándose por el Presidente de la Asamblea y su Secretario General, ya que la votación se había efectuado y ésta recayó sobre el Proyecto de Ley cuyo artículo 34, no la tenía. Al incorporarla después, se vicio (sic) la voluntad de los legisladores y con ésta, la votación" (fs. 141 y 142).

En lo que concierne a la alegada infracción del artículo 159 de la Carta Política, el Procurador se manifiesta en desacuerdo con los argumentos del actor. A su juicio en este proceso constitucional no se ha acreditado que en la aprobación del artículo 25 del proyecto de Ley N° 10 (artículo 34 de la Ley N° 31 de 1994) no hubiere intervenido la mayoría cualificada que requiere la norma constitucional, toda vez que en su opinión, para que se produzca la infracción de esta norma por un vicio de forma, es necesario comprobar que el proyecto de Ley no resultó aprobado por la mayoría absoluta de los parlamentarios.

Finaliza su Vista solicitando al Pleno la declaratoria de inconstitucionalidad de la frase impugnada, por violatoria del artículo 160 del texto fundamental.

ALEGATOS ESCRITOS

De conformidad con las normas procedimentales vigentes, luego de devuelto el expediente por la Procuraduría General de la Nación se fijó en lista el negocio por el término de 10 días, contados a partir de la última publicación del edicto correspondiente en un diario de circulación nacional, para que el peticionario y todas las personas interesadas presentaran argumentos escritos (a. 2555 Código Judicial).

Dentro del término de ley hicieron uso de tal derecho el demandante, mediante escrito consultable a folios 152-154, en el cual reitera su pretensión y argumentos, y el licenciado Salvador Sánchez González, para entonces asesor legal de la Asamblea Legislativa quien, en extenso escrito, se opone a la declaratoria de inconstitucionalidad de la frase acusada (fs. 155-175), suministra copias debidamente autenticadas de las Actas del Pleno de 22 y 27 de diciembre de 1994, del Diario de Debates de 27 de diciembre de 1994 y de la propuesta de modificación al artículo 25 del Proyecto de Ley N° 10, presentada por los legisladores Alvarado y Castillo.

El licenciado Sánchez hace un recuento de los antecedentes del acto acusado por inconstitucional. Señala que en el transcurso del segundo debate los legisladores Elías Castillo y Carlos Alvarado presentaron conjuntamente la propuesta de modificación al artículo 25 del proyecto de Ley N° 10, la que fue sometida a discusión y debidamente aprobada, sin necesidad legal de sustentación o explicación alguna.

Agrega que el texto de la referida propuesta no fue transcrito en el Acta de 22 de diciembre de 1994, pero que sí aparece en forma íntegra en el Diario de Debate, "que es el que realmente contiene y refleja el contenido de lo debatido y aprobado de un proyecto de ley. En consecuencia la omisión quedó inmediatamente subsanada en el **Diario de Debate**" (f. 157, resalta el abogado).

Indica que poco antes del inicio del tercer debate, "por un error de los servicios de apoyo legislativo, se repartió a los Honorables Legisladores el Proyecto de Ley N° 10 sin la inclusión de la frase demandada por inconstitucionalidad". A renglón seguido añade "Empero, al iniciarse el tercer debate el Secretario General leyó correctamente el texto completo del Proyecto con las modificaciones, lo que significa que lo que se sometió a la consideración de los Honorables Legisladores y lo que fue aprobado no fue el texto incompleto

a que hacemos referencia sino el texto íntegro, es decir, el Proyecto de Ley aprobado en segundo debate con las correspondientes modificaciones, entre ellas, la propuesta de modificación al Artículo 25, actual Artículo 34 de la Ley 31 de 1994" (f. 158). Sobre este punto concluye sosteniendo que, por el hecho de que el Secretario General haya leído el texto completo del Proyecto de Ley con todas sus modificaciones, todos los diputados tuvieron la oportunidad de documentarse y de conocer el contenido de la propuesta.

El letrado discrepa de la posición externada por el Procurador en el sentido de la no vulneración del artículo 159 de la Constitución Nacional, señalando que es errada tal conclusión puesto que "un proyecto que no cumple los tres debates **viola simultáneamente** los Artículos 160 y 159, porque ambos artículos exigen la realización de los tres debates" (fs. 167 y 168, resalta el abogado). Por considerar que la propuesta de modificación sí fue sometida a los tres debates que ordena la Ley Fundamental, concluye afirmando que "fueron respetados tanto el Artículo 160 como el 159 de la Constitución Política" (f. 168).

Por último, el coadyuvante se refiere a las alegadas infracciones de las disposiciones de la ley orgánica de la Asamblea Legislativa.

Señala que la Comisión de Revisión y Corrección de Estilo cumplió con las funciones que le asigna el artículo 49 del referido texto legal, así como con lo dispuesto en el artículo 124 de la misma excerta, al remitir el proyecto de ley con el informe correspondiente, de que trata dicha norma.

En cuanto a la violación del artículo 156, norma referente a las modificaciones de que puede ser objeto el proyecto durante el tercer debate, sostiene que el Proyecto de Ley llegó a tercer debate y fue leído al Pleno por el Secretario General, en la forma final aprobada por la Comisión de Revisión y Redacción de Estilo y que, por tanto, no hubo necesidad alguna de cambios y no sufrió ninguna modificación irregular.

En lo concerniente a la supuesta violación del numeral cuarto del artículo 101 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa, que ordena la inserción íntegra de las proposiciones en el acta del debate, el licenciado Sánchez admite que los servidores públicos adscritos al Departamento de Actas y Anales del Parlamento omitieron insertar en el Acta una proposición. Sin embargo, en su opinión la redacción de un acta no forma parte del procedimiento de aprobación de una ley, por lo que sus imperfecciones mal pueden viciar el proceso de creación legislativa, de donde resulta que no se vicia por inconstitucional la modificación que eventualmente no fuere mencionada textualmente en el acta. A su juicio, el procedimiento de creación de las leyes tiene que ver con el quórum, la mayorías necesarias y los tres debates "pero no con las formalidades de un Acta" (f. 171).

En cuanto a la alegada violación del artículo 112 de la ley orgánica de la Asamblea, precisa que esta norma ordena que, cuando el proyecto de ley contenga disposiciones derogatorias, deberá incluírsele un artículo final en que tal cosa se indique, de donde infiere que cuando el proyecto no contiene artículos derogatorios no existe la obligación de incluir tal disposición final, por lo que únicamente podría acusarse de inconstitucional una ley que, conteniendo la referida norma derogatoria, no contuviera tal artículo final.

Sobre la infracción de los artículos 143 y 169 del mismo cuerpo normativo, que tratan de la propuesta de modificaciones, su sustentación y posterior discusión, el licenciado Sánchez interpreta esas disposiciones en forma sistemática con el artículo 118 de la misma excerta, que define el concepto "debate", para llegar a la conclusión de que la propuesta de modificación al artículo 25 del Proyecto (34 de la Ley) sufrió el debido debate, "a pesar de que no se expresaran opiniones por parte de los H. H. L. L. de forma que pudieran quedar constancia en los registros de la Asamblea Legislativa. La ausencia de discursos o pronunciamientos, al tenor del sentido común y de nuestro ordenamiento jurídico, no sería lo que violentaría la Constitución Política" (f. 173).

Por último, el letrado hace referencia a la supuesta infracción del artículo 139 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Legislativa, que establece la prohibición de introducir modificaciones que versen sobre materia extraña al proyecto de ley en discusión. Manifiesta que al contemplarse en el Proyecto la derogatoria de los Decretos Ejecutivos N° 14 de 1992, N° 196 de 1993 y N° 356 de 1994, que tratan de la contratación de seguros por el Estado, los legisladores no incluyeron materia extraña al proyecto, por lo que la norma en referencia no resultó vulnerada.

El licenciado Sánchez finaliza su alegato demandando que se declare constitucional la frase atacada.

DECISIÓN DE LA CORTE

Surtidos los trámites que para esta iniciativa procesal establecen tanto la Constitución como el Código Judicial, procede la Corte a desatar la controversia.

Como viene expresado, la pretensión procesal constitucional en examen se encuentra dirigida a que se declare inconstitucional la frase "y deroga los Decretos Ejecutivos N° 14 de 1992, N° 196 de 1993 y el N° 356 de 1994", contenida en el artículo 34 de la ley N° 31 de 30 de diciembre de 1994, "Por la cual se modifican artículos del Código Fiscal sobre contratación pública, y se adoptan otras disposiciones". Tales Decretos fueron dictados en desarrollo del artículo 72 del Código Fiscal, precepto que versa sobre la contratación de consultoría, prestación de servicios técnicos y servicios personales de especialistas, entre los cuales se encuentran precisamente los corredores de seguros.

Es el caso que, mediante el artículo 118 de la Ley N° 56, de 27 de diciembre de 1995, "Por la cual se regula la contratación pública y se dictan otras disposiciones" (G. O. N° 22,939 de 28 de diciembre de 1995) fue expresamente derogado el referido artículo 72 del Código Fiscal, norma que, como se indicara anteriormente, servía de sustento jurídico a los mencionados decretos ejecutivos. Como circunstancia complementaria, precisa señalar que esta ley de contratación pública fue a su vez reglamentada por el Decreto Ejecutivo N° 18 de 25 de enero de 1996 (G. O. N° 22,961 de 29 de enero de 1996).

Resulta entonces obvio que, en virtud del acto legislativo derogatorio del artículo 72 del Código Fiscal y la vigencia de la nueva normativa en materia de contratación pública, sobreviene la pérdida del objeto del presente proceso constitucional, por lo que procede resolver de conformidad.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA SUSTRACCIÓN DE MATERIA en este negocio constitucional.

Notifíquese y Publíquese en la Gaceta Oficial.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ M. FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR SAMUEL GRIMES, LETICIA HENRY, VIRGILIO MORRIS Y OTROS EX-EMPLEADOS DE LA OFICINA DE MANTENIMIENTO VIAL Y ESTRUCTURAS PÚBLICAS EN EL ÁREA DEL CANAL (OMVEPAC) CONTRA LOS DECRETOS N° 137 DE 16 DE ABRIL DE 1990 Y N° 104 DE 9 DE MARZO DE 1990 DICTADOS POR EL EX-PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, GUILLERMO ENDARA GALIMANY Y EL RESUELTO N° 169 DE 16 DE MAYO DE 1990 SUSCRITO POR EL EX-MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES, JULIO E. LINARES (Q. E. P. D.) MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Manuel González C. ha presentado ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto N° 137 de 16 de abril de 1990 y el Decreto N° 104 de 9 de marzo de 1990, dictados por el Ex-Presidente de la República Guillermo Endara Galimany y el Resuelto N° 169 del 16 de mayo de 1990 suscrito por el Ex-Ministro de Relaciones Exteriores Julio E. Linares (Q. E. P. D.).

Se procede entonces a examinar la demanda de inconstitucionalidad, a fin de verificar si cumple con los requisitos formales exigidos para este tipo de demanda.

El Pleno estima que la demanda en estudio adolece de defectos formales que impiden su admisión. En este sentido se observa, en la parte correspondiente a lo que se demanda, que se señalan como impugnadas tres diferentes resoluciones en una sola demanda. Se trata, del Decreto N° 137 de 16 de abril de 1990 y el Decreto N° 104 de 9 de marzo de 1990, por medio de los cuales se declaran insubsistentes unos nombramientos y se realizan otros nombramientos en la Oficina de Mantenimiento Vial y Estructuras Públicas (OMVEPAC); y el Resuelto N° 169 de 16 de mayo de 1990, mediante el cual se deja sin efecto el Resuelto N° 95 de 15 de febrero de 1984 del Ministerio de Relaciones Exteriores, a través del cual se establecieron normas aplicables a los servidores públicos con servicio anterior en la Compañía del Canal de Panamá. Al respecto, la Corte ha señalado que no puede el demandante impugnar varias resoluciones mediante una misma demanda. Lo correcto es, pues, impugnar las resoluciones de manera individual, y si el Pleno lo considera procedente, ordenará la acumulación de las mismas. Aunado a lo anterior, la demanda de inconstitucionalidad no es la vía idónea para demandar aquellas resoluciones que tengan que ver con destituciones de servidores públicos, por cuanto las mismas son recurribles mediante la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción. Finalmente, el demandante impugna la totalidad de las resoluciones en comento, sin especificar el o los artículos que considera son inconstitucionales.

A juicio del Pleno, la demanda de inconstitucionalidad que nos ocupa tampoco cumple con el requisito previsto en el numeral 2 del artículo 2551 del Código Judicial, ya que si bien indica las disposiciones constitucionales que considera infringidas, no señala el concepto de la infracción. Aunado a lo anterior, el demandante menciona una posible violación a los Tratados Torrijos Carter (artículo III, párrafo 5). A este respecto la Corte estima que aun si, en gracia de discusión, se considerara que los Tratados Torrijos Carter integran el bloque constitucional, el demandante no menciona adecuadamente esta disposición como violada, no expresa cómo ocurre concretamente tal violación o como se materializa la relación viciada entre los actos impugnados y el artículo III de los Tratados, lo cual tampoco favorece la admisión de la presente demanda de inconstitucionalidad.

Por todo lo anteriormente expuesto, la Corte Suprema, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Licenciado Manuel González C. contra los decretos N° 137 de 16 de abril de 1990 y N° 104 de 9 de marzo de 1990 dictados por el Ex-Presidente de la República Guillermo Endara Galimany y el Resuelto N° 169 de 16 de mayo de 1990 suscrito por el Ex-Ministro de Relaciones Exteriores Julio E. Linares (Q. E. P. D.).

Cópiese, Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(Con Salvamento de Voto)

CARLOS H. CUESTAS G.

Secretario General

SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO RAFAEL A. GONZÁLEZ

Aún cuando estoy de acuerdo con la decisión de no admitir la demanda, no lo estoy con dos de las razones expresadas: la primera que se demandan en una sola demanda (1) el Decreto 137, de 16 de abril de 1990; (2) el Decreto 104, de 9 de marzo de 1990; y el Resuelto N° 169, de 16 de mayo de 1990; y, se sostiene, que no se pueden impugnar varios actos mediante una misma demanda.

Este principio no es mecánico. Los actos no se pueden acumular en una misma demanda y en un mismo proceso si no están relacionado uno con otros; pero si existe vinculación entre ellos, de hecho y de derecho, de manera que la proposición jurídica en que consiste la demanda, determina como lógico o necesario pedir la inconstitucionalidad conjunta de dichos actos, entonces no sólo es permisible sino necesario. El derecho categóricamente es práctico.

Por las mismas razones que el Pleno puede ordenar la acumulación (como lo admite la resolución en relación con la cual salvo el voto), puede el demandante juntarlas en una misma demanda.

El caso es precisamente uno en que los actos están íntimamente relacionados.

Mediante Resuelto N° 95, de 15 de febrero de 1984, el Ministerio de Relaciones Exteriores se refiere a la Oficina de Mantenimiento Vial y Estructuras Públicas en el Área del Canal (OMVEPAC) y establece algunas normas de clasificación de puestos y remuneración, aplicables a los servidores públicos con servicio anterior en la compañía del canal de Panamá.

Los Decretos 104 y 107, ya citado, destituyen servidores públicos de OMVEPAC (el último también nombra unos pocos en reemplazo).

Por último, el Resuelto N° 169 deja sin efecto el Resuelto N° 95.

Es clara y evidente la relación estrecha de los actos impugnados como inconstitucionales. Conjuntamente, según plantea el demandante, primero se destituye a los empleados de OMVEPAC (los Decretos) y luego se desintegra (el Resuelto N° 169) la entidad en que prestaban servicios. La proposición que se formula es que se obra inconstitucionalmente contra los empleados destituidos.

Sin embargo, como se expresa en la resolución que cuenta con asentimiento de mayoría, el demandante no expresa en la demanda cómo materialmente se constituye el problema constitucional a la luz del artículo III, párrafo 5°, del Tratado Torrijos Carter, aceptando la premisa de que esta disposición forma parte del orden constitucional de Panamá. No se puede por tanto actuar sobre la base de que se discute realmente un problema constitucional, cuando se refiere a destitución de servidores públicos, lo cual generalmente es propio de la esfera jurisdiccional contencioso administrativa.

Por eso, repito, comparto la decisión.

Salvo pues, el voto, respetuosamente; pero sólo en lo relativo a los argumentos indicados.

Fecha ut supra.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR EL LICENCIADO RUBÉN MONCADA LUNA EN REPRESENTACIÓN DE JEANE JOHNSON JUSTINIANI EN CONTRA DEL DECRETO EJECUTIVO N° 133 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 1994. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ,

DIECISIETE (17) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La señora Jeane Johnson Justiniani ha promovido, mediante apoderado judicial especial, proceso en el cual solicita que la Corte declare que es inconstitucional el Decreto Ejecutivo N° 133 del 30 de noviembre de 1994 expedido por el Presidente de la República y la Ministra de Comercio e Industrias.

Considera la demandante que por encontrarse en estado de gravidez al momento de ser despedida, su destitución del Ministerio de Comercio e Industrias se efectuó en violación del artículo 68 de la Constitución Nacional.

El Procurador General de la Nación estima en la Vista N° 37 de 4 de septiembre de 1995 que ha quedado debidamente acreditado, mediante la documentación aportada, que la señora Jeane Johnson Justiniani se encontraba en estado de gravidez cuando su nombramiento fue declarado insubsistente mediante Decreto Ejecutivo N° 133 de 30 de noviembre de 1994, y al no existir causal que justifique el despido, considera que la medida es violatoria del artículo 68 de la Constitución Nacional.

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia ha señalado en sentencias anteriores que el fuero de maternidad consiste en una protección especial de que gozan determinadas mujeres, incluidas las servidoras públicas, en virtud de la cual no pueden ser despedidas por razón de su estado de gravidez y sólo pueden ser destituídas mediante una justa causa prevista en la ley.

En el caso que nos ocupa el Decreto Ejecutivo N° 133 de 30 de noviembre de 1994 que expidió el Presidente de la República con la Ministra de Comercio e Industria contiene un artículo único que declara insubsistente el nombramiento de la señora JEANE JOHNSON, sin fundamentación de ninguna índole, basado en el poder nominador que le confiere la ley. Cabe señalar que el acto se realiza "en uso de sus facultades legales". Sin embargo, no debe perderse de vista que la Constitución Política -que es la norma de mayor rango dentro del ordenamiento jurídico de un país- contiene disposiciones que consagran derechos y garantías individuales y sociales, que son de obligatorio acatamiento, entre las que se destaca el artículo 68 de la Constitución.

En este mismo orden de ideas, el Pleno ha señalado con anterioridad que tanto la terminación de la relación laboral en el sector privado, como el despido mediante la declaración de insubsistencia del nombramiento del servidor o empleado del sector público, no excluye la existencia de justas causas para dar por terminada la relación de empleo de cualquier persona que se encuentre en estado grávido. De lo anterior se colige que la protección de la maternidad no alcanza el carácter de fuero intocable que dispone o absorba causas graves que justifiquen un despido. En este sentido, la conducta, eficiencia, habilidad, capacidad física y mental de la trabajadora son factores que, aunado a otros de carácter económico del empleador, configuran causales generadoras de despido, incluyendo a las mujeres en estado de gravidez. Pero, en todo caso, deben invocarse y eventualmente acreditarse.

También ha sostenido con anterioridad esta Corporación que si el empleado, funcionario o entidad nominadora no señala causal alguna para dar por terminada las relaciones de empleo, cabe deducir que no existe una causal que justifique o fundamente el acto que declara la insubsistencia del cargo. En el presente caso, la persona afectada es una mujer que se encontraba en proceso de gestación al momento de ser despedida. Tal condición requiere de la protección que el Estado debe ofrecer al concebido y a la mujer que trabaja, protección que conlleva descanso o licencia pre y post parto, garantía de empleo, servicio de maternidad (seguridad social, médica y hospitalaria) y estabilidad laboral; esta última implica la reserva obligatoria del puesto durante el lapso que por disposición constitucional se prevé y que determina que el despido sólo es factible -y así lo reitera esta Corporación- cuando exista causa justificada, acreditada plenamente.

Se observa a foja 7 del expediente contentivo de la demanda copia autenticada ante Notario del examen de laboratorio que recoge la prueba de embarazo en sangre, practicada por el Laboratorio Clínico Omega, con fecha 24 de noviembre de 1994, el cual establece que la señora Jeane Johnson Justiniani se encontraba en estado de gravidez a la fecha antes señalada. Igualmente se observa, a fojas 8 y 9 del expediente, copias autenticadas del informe del ultrasonido obstétrico efectuado por el Laboratorio Clínico Omega el 5 de abril de 1995 el cual demuestra que en dicha fecha la señora Jeane Johnson Justiniani presentaba un embarazo de 19 semanas de desarrollo, además de 6 distintas placas obtenidas del ultrasonido obstétrico practicado en la demandante.

Consta igualmente, a foja 3 del expediente, copia autenticada del Decreto Ejecutivo N° 133 de 30 de noviembre de 1994 impugnado en esta demanda, en el cual no se precisa la causal de despido, y menos se evidencia que la destitución se haya fundado en alguno de los supuestos contenidos en el reglamento interno de la institución que ameriten tal sanción. Al expedirse el acto acusado sin fundamento legal y sin que se determine si la servidora pública incurrió en alguna falta que justifique la medida adoptada, es obvio que se vulneró la garantía señalada en el artículo 68 de la Constitución Política.

Dado que se trata de un proceso de despido de una servidora pública en estado de gravidez, en el que la autoridad administrativa no determinó que la insubsistencia se sustenta en otra causa diversa del embarazo, esta Corporación estima que es inconstitucional la destitución ejecutada mediante el decreto demandado por haberse efectuado en violación del artículo 68 de la Constitución Nacional. La demandante debió, para poder hacer posible el reintegro, acudir a un proceso contencioso administrativo que le hubiere permitido a la Corte decretarlo.

En consecuencia, el Pleno de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA que es inconstitucional el Decreto Ejecutivo N° 133 del 30 de noviembre de 1994 que declara insubsistente el nombramiento de la señora JEANE JOHNSON JUSTINIANI, expedido por el Presidente de la República y la Ministra de Comercio e Industrias.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR EL LICENCIADO ENRIQUE OMAR PITTÍ, EN REPRESENTACIÓN DE DIAMANTIS PAPADIMITRIU, CONTRA EL ARTÍCULO 2022 DEL CÓDIGO JUDICIAL, DENTRO DE LA ACUSACIÓN PARTICULAR PROPUESTA POR DIAMANTIS PAPADIMITRIU CONTRA CONSTANTINO LEKAS, THELMA ROBERTSON Y MANUEL GAURILIDIS. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Segundo Tribunal Superior de Justicia ha elevado al Pleno de la Corte Suprema, consulta sobre la inconstitucionalidad del artículo 2022 del Código Judicial en atención a la advertencia formulada dentro del proceso penal por el delito contra la fe pública, el patrimonio y la seguridad colectiva seguido a CONSTANTINO LEKAS, THELMA ROBERTSON Y MANUEL GAURILIDIS.

Al momento de resolver sobre la admisibilidad de esta iniciativa procesal se observa que la advertencia elevada en consulta se produce en relación con una

norma jurídica que ya ha sido aplicada con ocasión del auto de 27 de julio de 1995, expedido por el Juzgado Décimo de Circuito De Lo Penal del Primer Circuito Judicial de la Provincia de Panamá que no admite la acusación particular interpuesta por el Licenciado Enrique Omar Pittí en nombre y representación de Diamantis Papadimitriu, dentro del proceso seguido a Constantino Lekas, Thelma Robertson y Manuel Gavrilides, por el delito contra la Fe Pública, Contra el Patrimonio y Contra la Seguridad Colectiva.

El auto antes mencionado resuelve no admitir la acusación particular antes aludida con fundamento en el artículo 2022 del Código Judicial. El mismo, fue apelado por el apoderado judicial del señor Papadimitriu, apelación esta que se encuentra pendiente de resolver ante el Segundo Tribunal Superior. Si bien es cierto, como señala el advirtente, que existe la posibilidad de que el Segundo Tribunal Superior aplique el artículo 2022 del Código Judicial para resolver el recurso de apelación interpuesto, también es cierto que esa norma ya ha sido aplicada en la decisión de primera instancia objeto de dicho recurso de apelación.

Esta comprobación coloca la consulta que ahora se examina dentro de una particular categoría jurisprudencial, a lo que se refieren reiterados pronunciamientos de esta Corporación, según los cuales la advertencia de inconstitucionalidad sólo procede cuando la norma o normas que en tal sentido se acusan no han sido aún aplicadas. De esta comprobación se deriva la necesaria consecuencia que todo anuncio formulado contrariando esa doctrina devenga extemporáneo y, por consiguiente, improcedente, así como que, en este momento preliminar del trámite, no corresponde otra decisión que la de declarar la inadmisibilidad de la advertencia formulada.

Por las consideraciones anteriores, la Corte Suprema, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la advertencia de inconstitucionalidad propuesta por el licenciado Enrique Omar Pittí, en representación de DIAMANTIS PAPADIMITRIU y en contra del artículo 2022 del Código Judicial.

Cópiese y Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
CON SALVAMENTO DE VOTO

CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO RAFAEL A. GONZÁLEZ

No soy del mismo criterio que la mayoría.

Se mantiene la tesis de que no procede la advertencia de inconstitucionalidad en segunda instancia porque ya la disposición legal que se indica como inconstitucional fue aplicada en primera instancia.

No comparto este criterio. La segunda instancia es una etapa procesal en que el tribunal de ese grado ejerce la función jurisdiccional, en el sentido de que determina la norma o el derecho aplicable al caso. Luego, si estamos ante esa actuación (de aplicar la norma) No es sostenible que ya fue aplicada.

Respetuosamente, por tanto, salvo el voto.

Fecha ut supra.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR LA LCDA. MABEL DEL C. ATENCIO, EN REPRESENTACIÓN DE JAIME PADILLA GONZÁLEZ, EN SU CONDICIÓN DE PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE HOTELERÍA, S. A., CONTRA EL ARTÍCULO 11 DE LA LEY N° 76 DE 22 DE DICIEMBRE DE 1976, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 36 DE LA LEY 31 DE 30 DE DICIEMBRE DE 1991. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Actuando en representación de la sociedad anónima Administración y Servicios de Hotelería, S. A., la licenciada Mabel del C. Atencio presentó advertencia de inconstitucionalidad contra el artículo 11 de la ley N° 76, de 22 de diciembre de 1976, tal como quedó modificado por el artículo 36 de la ley 31 de 1991. Como consecuencia de ese anuncio, el Administrador Regional de Ingresos de la Provincia de Panamá elevó la consulta correspondiente ante el Pleno de la Corte Suprema.

La advertencia se produce dentro de proceso tributario instaurado por la mencionada Administración Regional de Ingresos contra la empresa Administración y Servicios de Hotelería, S. A., "por efecto de una inspección que efectuara dicha Administración, en donde se determinó que la sociedad poderdante no factura los servicios de hotelería de acuerdo a los requisitos exigidos por la ley, ni tampoco se acoge al sistema de sustituto de factura que autoriza la Dirección Regional de Ingresos" (f. 2).

Dentro de ese proceso fue dictada la resolución N° 213-2253, de 26 de abril de 1996, que aplica la norma que se acusa, aun cuando, por haber sido apelada la resolución, en el libelo de la advertencia se sostiene que la resolución "no se encuentra ejecutoriada y la norma que se tacha de inconstitucional no ha sido formalmente aplicada".

En cuanto a la decisión que debe recaer sobre la admisibilidad de la demanda de inconstitucionalidad de origen incidental presentada, la jurisprudencia de la Corte Suprema tiene establecido que esta iniciativa procesal debe cumplir con los requisitos de procedibilidad que establecen los artículos 2551 y 2552 del Código Judicial para la presentación de la acción de inconstitucionalidad de naturaleza autónoma.

El examen del libelo presentado por la licenciada Atencio permite determinar que la advertencia formulada cumple con los requisitos que señala el artículo 2551, no así con los del artículo 2552, antes indicados. En efecto, el libelo contiene la transcripción del acto acusado de inconstitucional, e indica la disposición constitucional que se estima infringida, así como el concepto de la infracción. No obstante, se omite el cumplimiento del requisito consistente en el deber de acompañar "copia debidamente autenticada de la ley, decreto de gabinete, decreto ley, orden, acuerdo, resolución o acto que se considere inconstitucional ...", tal como expresamente lo manda el inciso primero del artículo 2552. A la omisión de cumplir con esta exigencia de naturaleza formal, el advertidor le agrega otra, al no indicar, por lo menos, el número de la gaceta oficial donde apareció publicada.

El inciso final de la última norma citada sanciona de manera categórica este incumplimiento, señalando que "La inobservancia de los requisitos a los que se refieren los artículos anteriores **producirá la inadmisibilidad de la demanda**".

Por las razones anteriores, EL PLENO DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la advertencia de inconstitucionalidad presentada por la licenciada Mabel del C. Atencio, contra el artículo 11 de la ley N° 76 de 1976, reformado por el artículo 36 de le ley 31 de 1991.

Notifíquese.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ M. FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR EL LICENCIADO EDUARDO E. RÍOS MOLINAR, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE JOSÉ DEL ROSARIO MUÑOZ, CONTRA LA SENTENCIA DE 30 DE MAYO DE 1995, PROFERIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Ante esta Corporación de Justicia, el licenciado EDUARDO RÍOS MOLINAR ha presentado demanda de inconstitucionalidad de la sentencia del Tribunal Superior de Trabajo, proferida dentro del proceso laboral promovido por el trabajador JOSÉ DEL ROSARIO MUÑOZ contra la empresa PARTES Y SERVICIOS TOYOPAN, S. A.

Corresponde en esta etapa, determinar si la demanda de inconstitucionalidad cumple con los requisitos procesales, a los efectos de que se determine si la misma es admisible, por cumplir los mismos o, por el contrario, no admitir la demanda, si ésta no cumple con los aludidos requisitos. Como es sabido, dichos requisitos vienen consignados en los artículos 2551 y 2552 del Código Judicial, y consisten en la transcripción del acto cuya declaratoria se pide, las disposiciones constitucionales que se entienden infringidas, el concepto en que lo han sido y los requisitos exigidos para toda demanda, señalados en el artículo 654 del Código Judicial, entre otros.

El Pleno advierte que existen, al menos, tres defectos que tiene la demanda. En primer lugar, la demanda va dirigida a "Los Honorables Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Pleno", desatendiendo el mandato contenido en el artículo 102 del Código Judicial, que señala perceptivamente que los negocios judiciales para los cuales es competente el Pleno deben dirigirse al Presidente de la Corte Suprema de Justicia, sin perjuicio de que, además, desee incluir a todos los integrantes de esta Corporación de Justicia.

En segundo lugar, no se establece contra quien va dirigida la demanda ni lo que se pide. En efecto, dice que se demanda la inconstitucionalidad de la sentencia de 30 de mayo de 1995, proferida por el Tribunal Superior de Trabajo, pero no indica la autoridad a quien se atribuye la actividad inconstitucional que, presume el actor, ha incurrido el juzgador al dictar la sentencia en referencia. Y, además, no indica en qué consiste su pretensión. Como es sabido, las pretensiones de inconstitucionalidad son pretensiones declarativas de la inconstitucionalidad de un acto expedido por una autoridad pública, por lo que, además de señalar esa autoridad, es menester que indique la pretensión que pide que se realice, que es siempre una declaración de inconstitucionalidad del acto dictado por la autoridad, el que, por razones de forma o de fondo, se considera que contraría disposiciones constitucionales.

En tercer lugar, los requisitos de la demanda exigen que se señale o establezcan los hechos en los que se basa su pretensión, es decir, supuestos fácticos que constituyen la causa petendi de la pretensión de inconstitucionalidad. Sin embargo, los diez y nueve hechos consignados en la demanda no constituyen situaciones fácticas, sino argumentaciones sobre el alcance jurídico de las disposiciones legales aplicadas por la sentencia les corresponde, en contraste con las aplicadas e interpretadas por la sentencia. En otras palabras, la enumeración de los hechos constituye, más bien, imputaciones

de orden jurídico que el demandante le hace a la sentencia que, a su juicio, vulnera la Constitución, esto es, errores in iudicando del Tribunal Superior de Trabajo, que no tienen la naturaleza de hechos que fundamenten la pretensión. Por lo tanto, no se satisface el ordinal 6° del artículo 654, en relación con el artículo 2551, ambos del Código Judicial.

En mérito de lo anteriormente expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la acción de inconstitucionalidad presentada por el licenciado EDUARDO RÍOS MOLINAR, en representación del señor JOSÉ DEL ROSARIO MUÑOZ.

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR LA LICENCIADA MARIBLANCA STAFF WILSON CONTRA LA FRASE "ABANDONASE" CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 494 DEL CÓDIGO DE LA FAMILIA. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La Licenciada Mariblanca Staff Wilson ha presentado demanda en la cual pide al Pleno de la Corte Suprema de Justicia que declare que es inconstitucional la palabra "abandonase" contenida en el artículo 494 de la Ley N° 3 de 17 de mayo de 1994 (Código de la Familia) publicada en la Gaceta Oficial N° 22,591 de 1° de agosto de 1994, por ser violatorio de los artículos 27 y 31 de la Constitución Política.

I. LA PRETENSIÓN Y SU FUNDAMENTO

La pretensión que se formula en este proceso constitucional consiste en una petición dirigida al Pleno de la Corte Suprema de Justicia para que se declare que es inconstitucional la palabra contenida en el artículo arriba mencionado.

Sostiene el demandante que la palabra impugnada en el artículo 494 del Código de la Familia viola los artículos 27 y 31 de la Constitución Política de la República de Panamá.

El demandante considera que la palabra "abandonase" contenida en el artículo 494 de la Ley 3 de 1994 infringe, de manera directa, el artículo 27 constitucional por cuanto, al sancionar al marido que abandone a la mujer durante el embarazo, se impide el libre tránsito y el cambio de domicilio o residencia, al querer obligar al marido a permanecer junto a la mujer embarazada. Por otra parte, el abandono de la mujer embarazada no se encuentra establecido como una limitación en las leyes o reglamentos de tránsito, salubridad o de inmigración.

Por otro lado, la demandante considera que la norma impugnada viola en forma directa, por comisión, el artículo 31 de la Constitución Política al sancionar como delito el abandono de una mujer embarazada, conducta que a su juicio, no está tipificada en la ley penal vigente, conculcando en forma directa el principio de la legalidad que señala que sólo serán penados los hechos declarados punibles por la ley. Señala la demandante que el principio de legalidad debe entenderse en el sentido de que nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que no son delictivas según la legislación aplicable y el abandono constituye, en su opinión, una causal de divorcio que puede invocar la

mujer abandonada sin que el mismo sea considerado delito.

II. LA POSTURA DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN

El Procurador General de la Nación rindió concepto mediante la Vista N° 41 de 6 de octubre de 1995. En dicho escrito el citado funcionario considera que la palabra demandada no es contraria a la Constitución por cuanto la misma se refiere al abandono absoluto por parte del marido de sus deberes de esposo o de padre, lo cual constituye una causal de divorcio según lo previsto en el numeral 6 del artículo 212 del Código de la Familia por lo que se entiende que se está aludiendo a una pena civil. En este sentido, entiende el Procurador, el cónyuge que abandona vendría a ser el cónyuge culpable. A juicio de dicho funcionario, la norma en comento pretende que tanto la mujer como su hijo no queden desprotegidos, lo que desarrolla y concreta las normas que sobre protección a la familia y a la maternidad consagra nuestra Constitución.

En torno al artículo 27 de la Constitución, la misma no guarda relación alguna, en opinión del Procurador, con la materia regulada por el artículo 494 del Código de la Familia pues, mientras el precepto contenido en la norma constitucional alude a la libertad de tránsito, la materia regulada en la norma impugnada se refiere al derecho social de familia el cual, según el artículo 52 de la Constitución es deber del Estado proteger al matrimonio, la maternidad y la familia.

Finalmente, señala el Procurador, el artículo 31 de la Carta Política consagra un principio fundamental del derecho penal regulado a nivel constitucional lo cual, a su juicio, es materia disímil al derecho de familia, salvo el maltrato físico que en nuestra legislación tiene consecuencias penales.

III. DECISIÓN DE LA CORTE

Una vez expuestos los argumentos del demandante, y el concepto vertido por el Procurador General de la Nación, entra el Pleno a considerar la pretensión que se formula en la demanda.

La parte actora considera que la palabra "abandonase" contenida en el artículo 494 del Código de la Familia infringe los artículos 27 y 31 de la Carta Magna vigente. Las normas antes mencionadas son del siguiente tenor literal:

> "ARTÍCULO 494. El marido que **abandonase** o causase maltrato físico o mental a la mujer durante el embarazo o el puerperio, o cualquier persona que cometa este último acto, será sancionado por la autoridad competente con el máximo de la pena correspondiente.
>
> Además de las sanciones anteriormente mencionadas, el involucrado deberá participar obligatoriamente en programas de orientación y deberá participar obligatoriamente en programas de orientación y tratamientos impartidos por profesionales idóneas de instituciones, a cuyo cargo está la atención de este problema."
>
> "ARTÍCULO 27. Toda persona puede transitar libremente por el territorio nacional y cambiar de domicilio o de residencia sin más limitaciones que las que impongan las leyes o reglamentos de tránsito, fiscales, de salubridad y de inmigración."
>
> "ARTÍCULO 31. Sólo serán penados los hechos declarados punibles por Ley anterior a su perpretación y exactamente aplicable al acto imputado."

Si bien es cierto que la redacción del artículo 494 es confusa, de su cuidadosa lectura se infieren dos diferentes conductas sancionables: la primera, el abandono de la mujer durante el embarazo o el puerperio; la segunda, el maltrato físico o mental a la mujer en dicho estado ya sea que el maltrato lo cause el marido u otra persona cualquiera. La infracción señalada por la demandante recae sobre el primer supuesto, es decir, cuando el marido abandona a la mujer. Este supuesto debe ser interpretado como la imposibilidad, a la luz

de dicha norma, de que el marido se retire definitivamente del hogar conyugal cuando la mujer se encuentre en estado de gravidez o en el puerperio, lo que a nuestro juicio coarta la libertad de tránsito, garantía fundamental protegida en nuestra Carta Magna. Por otro lado, esta Corporación considera que al aplicarle una pena a dicha conducta se violenta el artículo 31 de la Constitución Política pues, efectivamente, se sanciona una conducta no tipificada en nuestro Código Penal.

A juicio de esta Corporación, la palabra impugnada si limita la libertad de tránsito del marido por cuanto la misma pretende obligarlo a permanecer en el domicilio conyugal cuando la mujer se encuentre en estado de gravidez o durante el puerperio. Si bien no hay que dejar de lado que el permanecer en el domicilio conyugal es uno de los deberes de los cónyuges, pues así lo establecen los artículos 78 y 80 del Código de la Familia, también hay que tomar en consideración que dicho Código establece toda una serie de normas tendientes a salvaguardar el bienestar de la madre y de sus hijos, nacidos o por nacer, por lo que no considera necesario esta Corporación violentar una garantía fundamental como la libertad de tránsito para obligar al marido a cumplir con sus deberes de padre y cónyuge.

También considera esta Corporación que se sanciona como delito una conducta no tipificada en la ley penal. Ello es así por cuanto el abandono del marido a la mujer en estado de gravidez o durante el puerperio no es una conducta tipificada en el Código Penal panameño; sin embargo, el artículo contentivo de la palabra impugnada en esta demanda le está imponiendo una sanción de tipo penal, pues alude a la sanción máxima lo que da a entender que es una conducta ilícita que conlleva pena mínima y pena máxima. Debemos tener presente que la norma impugnada regula dos supuestos, el abandono y el maltrato (físico o mental), este último, tipificado y sancionado en nuestra ley penal. En este sentido, el artículo in comento señala que quien incurra en las acciones arriba mencionadas será sancionado por la **autoridad competente** con el máximo de la **pena correspondiente**. La Corte estima, pues, que de incurrirse en maltrato, ya sea físico o mental, se le aplicará al imputado la sanción penal máxima que nuestro Código Penal establezca para dicho ilícito. Por el contrario, si se incurre en abandono, no se le puede aplicar al marido, a juicio de esta corporación, una sanción penal por cuanto dicha conducta no está tipificada en nuestro Código Penal.

Dado que la palabra "abandonase" contenida en el artículo 494 del Código Penal infringe, efectivamente, los artículos 27 y 31 de la Constitución Política, lo procedente es declarar probados los cargos alegados.

En consecuencia, el Pleno de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE ES INCONSTITUCIONAL, la palabra "abandonase" contenida en el artículo 494 del Código de la Familia.

Notifíquese, Cúmplase y Publíquese En la Gaceta Oficial.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) CARLOS E. MUÑOZ POPE
(Con Salvamento de Voto)

CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO RAFAEL A. GONZÁLEZ

Respetuosamente disiento del criterio de mayoría.

Se interpone demanda de inconstitucionalidad para que se declare inconstitucional la voz "abandonase" del artículo 494 del Código de Familia, en la proposición "el marido que abandonase o cause maltrato físico o mental a la

mujer durante el embarazo o el puerperio, o cualquier persona que cometa este último acto, será sancionado por la autoridad competente con el máximo de la pena correspondiente".

Las disposiciones constitucionales que se invocan como desconocidas son los artículos 27 y 31 de la Constitución. La primera trata de la libertad de tránsito y de fijar el domicilio y la residencia. La otra contiene el principio de que no hay pena sino por hechos declarados punibles por Ley, anterior a su perpetración y exactamente aplicable al acto imputado.

La demanda estima que se coarta el derecho a libre tránsito; y, que se penan hechos que no constituyen delito de acuerdo con la Ley.

La sentencia acoge los planteamientos de la demanda:

> "Si bien es cierto que la redacción del artículo 494 es confusa, de su cuidadosa lectura se infieren dos diferentes conductas sancionables: la primera, al abandono de la mujer durante el embarazo o el puerperio; la segunda, el maltrato físico o mental a la mujer en dicho estado ya sea que el maltrato lo cause el marido u otra persona cualquiera. La infracción señalada por la demandante recae sobre el primer supuesto, es decir, cuando el marido abandona a la mujer. Este supuesto debe ser interpretado como la imposibilidad, a la luz de dicha norma, de que el marido se retire definitivamente del hogar conyugal cuando la mujer se encuentre en estado de gravidez o en el puerperio, lo que a nuestro juicio coarta la libertad de tránsito, garantía fundamental protegida por nuestra Carta Magna". ...
>
> "También considera esta Corporación que se sanciona como delito una conducta no tipificada en la ley penal. Ello es así por cuanto el abandono del marido a la mujer en estado de gravidez o durante el puerperio no es una conducta tipificada en el Código Penal panameño; ...".

Creo que la realidad de que trata la norma señalada de inconstitucionalidad es más amplia y compleja. Se trata de relaciones humanas; más específicamente, de las filiales. La disposición se encuentra en el Libro Segundo, De los Menores, que regula los derechos y garantías del menor, cuyo artículo 484 lo define como todo ser humano desde su concepción hasta los 18 años.

Equivocadamente, a mi juicio, se pone el acento indebidamente en la relación marido y mujer, que no es el centro de la cuestión. Sin embargo, tampoco en ese sentido se habría que llegar a otra conclusión.

Específicamente se trata de los deberes del padre durante el embarazo o el puerperio de la madre. La norma (en cuanto nos interesa en este momento) prohíbe que la abandone. La propia Constitución, artículo 55, sienta que "los padres están obligados a alimentar, educar y proteger a sus hijos para que obtengan una buena crianza y un adecuado desarrollo físico y espiritual ...".

Es ese el telón de fondo del término "abandonar". Ha de notarse la trascendencia y universalidad de esos deberes, que envuelven toda una concepción filosófica de la sociedad, la vida y la dignidad del ser humano.

"Abandonar", en el caso del artículo 494 del Código de Familia, es incumplir gravemente esos deberes (en las muy sensibles circunstancias del embarazo y del puerperio), concebidos en conjunto, como un universo. Lo que significa "abandonar a su suerte".

La concreción que en cada caso tomen en los hechos será muy distinta y variada; pero en todos los casos denotará, a juicio del juez de la causa, una actitud de no cumplir con sus deberes de padre.

No se trata de la libertad de tránsito ni la de fijación de domicilio. Eventualmente, según las circunstancias, podría suceder que como cuestión de

hecho y parte del cuadro, pudiera estar materialmente en juego el haberse mandado a cambiar, pero no se trata de eso en sí.

Por ejemplo, el padre, en una zona rural retirada, sin vecinos cercanos y sin medios de comunicación, que se ausenta de la casa. En determinadas circunstancias podría constituir delito.

Es labor del juez atender con sabiduría la aplicación de esta norma, que resulta evidente que transciende el ámbito de la libertad de tránsito; y que, por otra parte no pretende sancionar ninguna conducta específica como delito, sino que se remite a las normas, cualquiera que sean, que sancionen una conducta.

Ha de tenerse presente que dentro del sistema jurídico -también en el positivo panameño- no sólo se sancionan delitos, sino faltas. Son los casos de policía. También el de ciertas instituciones que por su naturaleza son más exigentes en cuanto al comportamiento de sus miembros, por ejemplo los jueces y los profesores de la Universidad de Panamá. El artículo 494 del Código de Familia transciende a casos como esos.

Creo que la vista del Procurador General de la Nación es acertada cuando expresa que el artículo 27 de la Constitución no está en relación alguna con los cargos que se le señalan al artículo 494 del Código de Familia.

En cuanto al artículo 31 de la Constitución, creemos haberlo dejado expresado, tampoco es contradicho. La disposición legal, el artículo 494, debe tenerla en cuenta el juez penal o la autoridad que sancione una falta, para proceder como manda la norma, en casos en que en efecto se haya cometido delito o falta. En forma alguna establece penas ni sanciones.

En conclusión contrariamente a un fenómeno de inconstitucionalidad, la norma puede cumplir un cometido importante en nuestra vida social.

Por estas razones salvo el voto.

Fecha ut supra.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR LA LICENCIADA MARIBLANCA STAFF WILSON EN CONTRA DEL ARTÍCULO 480 DEL CÓDIGO DE LA FAMILIA. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La licenciada Mariblanca Staff Wilson ha presentado demanda en la cual pide al Pleno de la Corte Suprema de Justicia que declare que es inconstitucional el artículo 480 de la Ley N° 3 de 17 de mayo de 1994 (Código de la Familia) publicada en la Gaceta Oficial N° 22,591 de 1° de agosto de 1994.

I. LA PRETENSIÓN Y SU FUNDAMENTO

La pretensión que se formula en este proceso constitucional consiste en una petición dirigida al Pleno de la Corte Suprema de Justicia para que se declare que es inconstitucional el artículo arriba mencionado.

Sostiene la demandante que el artículo impugnado es violatorio de los artículos 19, 20, 27 y 53 de la Constitución Política de la República de Panamá y principios universales de derechos humanos.

La demandante considera que el artículo 480 del Código de la Familia infringe de manera directa, por comisión, el artículo 19 constitucional por cuanto, a su juicio, se establece un privilegio personal a favor de las personas que no constituyen un patrimonio familiar, con respecto de las que si lo hacen, al condicionarle a las últimas la obligación de comunicar al Juez cuándo quieran contraer nuevo matrimonio, lo cual constituye a su vez una discriminación que infringe el artículo 19 de la Constitución.

Igualmente, considera la parte actora que el artículo 480 del Código de la Familia viola, directamente por comisión, el artículo 20 de la Constitución Nacional por cuanto, señala la demandante, se establece una desigualdad jurídica, en perjuicio de las parejas que constituyen un patrimonio familiar y las que no lo hacen, infringiendo el principio constitucional de igualdad de todos los seres humanos ante la ley, el cual debe ser entendido en un sentido real y razonable, de que todas las personas que se encuentren en igualdad de circunstancias jurídicas deben recibir el mismo tratamiento jurídico. Por otro lado, señala, el artículo impugnado lo que propicia es que las parejas decidan no constituir el patrimonio familiar.

La demandante considera que el artículo 480 del Código de la Familia infringe el artículo 55 de la Carta Fundamental por cuanto se establece como causal para suspender la patria potestad del padre o la madre que estén en el patrimonio familiar, el hecho de no dar aviso al juez cuando vaya a contraer nuevas nupcias, elevando tal hecho a causal de suspensión, cuando la misma no figura dentro de las causales de extinción, pérdida o suspensión que se contemplan en el Capítulo VI, Título IV del Libro I del Código de la Familia. Por tanto, el artículo impugnado atenta no solamente contra la libertad de las personas para contraer libre matrimonio, sino que infringe directamente la garantía de la patria potestad. Es innegable, que se produce una confusión entre lo que es el patrimonio familiar y lo que constituye la patria potestad.

También considera el demandante que la norma impugnada infringe el numeral 2 del artículo 17 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica", aplicable en relación con el valor que le otorga el artículo 4 de la Constitución Nacional. La violación consiste, en opinión de la demandante, en la restricción de la libertad del hombre y la mujer para contraer libre matrimonio, si no cumplen con el requisito de dar aviso al juez, hecho que le acarrea la pérdida del patrimonio familiar y la suspensión de la patria potestad.

II. OPINIÓN DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN

El Procurador General de la Nación rindió concepto mediante la Vista N° 33 de 21 de julio de 1995. En dicho escrito el citado funcionario considera que no ha sido violado el artículo 19 de la Constitución porque el patrimonio familiar es un derecho que bien se puede ejercitar o no, aunque una vez ejercitado se convierte en obligación, por lo que no puede entenderse que el mismo establece un fuero o privilegio en favor de determinada persona por el hecho de que ésta no constituya patrimonio familiar. La comunicación al juez de las nuevas nupcias tiene la finalidad de que el Juez pueda ponderar, en favor de los intereses de la familia, la posibilidad de que la persona que va a contraer nuevas nupcias pueda continuar en el patrimonio familiar, o si es necesario sustituirlo por el otro progenitor, o nombrar un guardador de acuerdo con los intereses de los hijos.

Tampoco se produce, a su juicio, la violación del artículo 20 de la Constitución Nacional que consagra el principio de igualdad jurídica ante la ley para nacionales y extranjeros, por cuanto la norma antes aludida no establece ningún tratamiento jurídico distinto para quienes constituyen patrimonio familiar y las que no lo hacen por cuanto la institución del patrimonio familiar no es una obligación sino que es potestativo de las personas constituirlo o no. Tampoco constituye, a juicio del Procurador, una restricción para contraer matrimonio sino que por ser una situación de derecho establecida, y ante la posibilidad de que varíe el status jurídico de uno de los integrantes del mismo, es necesario discernir sobre las decisiones que deban tomarse en el manejo de éste.

Tampoco considera el Procurador que el artículo 480 vulnere el artículo 27 de la Constitución Nacional por cuanto la norma atacada no restringe de manera alguna la libertad de tránsito o locomoción, ni existe congruencia entre la norma señalada como infractora de la Constitución Nacional y el texto constitucional argumentado como infringido.

No se ha violentado, a juicio de este funcionario, el artículo 55 de la Constitución Nacional, por cuanto el artículo impugnado tan sólo contempla la comunicación al juez de que se va a contraer nuevas nupcias y no un permiso para contraer matrimonio, con el propósito de salvaguardar el patrimonio familiar de acuerdo al interés de los hijos o de las hijas y en beneficio de éstos.

Por último, señala el Procurador, tampoco se produce la infracción del numeral 2 del artículo 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relacionada con el derecho que tiene un individuo para contraer matrimonio, por cuanto la misma no establece una limitante a dicho derecho. Tan solo es una comunicación que debe efectuar el padre o la madre que se queda en el patrimonio familiar al juez, cuando quieran contraer nupcias a efectos de que éste decida si se mantiene al padre o la madre que se casa dentro del patrimonio familiar, se sustituye por el otro progenitor o se nombra un guardador.

III. DECISIÓN DE LA CORTE

Una vez expuestos los argumentos del demandante, y el concepto vertido por el Procurador General de la Nación, entra el Pleno a considerar la pretensión que se formula en la demanda.

La parte actora señala que el artículo 480 del Código de la Familia es violatorio del artículo 19 de la Constitución Política. Las normas antes mencionadas son del siguiente tenor literal:

> "ARTÍCULO 480. Cuando el padre o la madre que queda en el patrimonio familiar quiera contraer nuevas nupcias con un tercero, debe comunicarlo al Juez, quien después de escuchar a las partes y al Ministerio Público, puede mantenerlo en su situación, sustituirlo por el otro progenitor, si ello es posible; o nombrar un guardador, de acuerdo al interés de los hijos o hijas, sin que surta efecto la determinación si el matrimonio no se realiza. El padre o la madre que no da aviso al Juez pierde el beneficio del patrimonio familiar y queda suspendido en el ejercicio de su patria potestad. De igual forma pierde el beneficio del patrimonio familiar el que es privado o suspendido en el ejercicio de la patria potestad."

> "ARTÍCULO 19. No habrá fueros o privilegios personales ni discriminación por razón de raza, nacimiento, clase social, sexo, religión o ideas políticas."

El Pleno de esta Corporación estima que, efectivamente, la norma arriba transcrita establece privilegios para aquellos que no constituyen patrimonio familiar frente a aquellos que sí lo han hecho. A estos últimos se les exige comunicar al juez cuando el progenitor a cargo del patrimonio familiar va a contraer nuevas nupcias y se establecen sanciones ante el incumplimiento de dicha notificación. Esta norma constituye una evidente restricción al libre matrimonio por cuanto, si bien no impide contraer nuevas nupcias, si exige al progenitor en cuestión que lo comunique antes de casarse, exigencia ésta que no se le impone a quien no ha constituido patrimonio familiar y cuyo incumplimiento le acarrea sanciones que obran como una barrera a un nuevo matrimonio. Y es que ya el artículo 479 establece que el Juez designará, si hay divorcio, nulidad o separación, el progenitor o el tutor que quedará a cargo del patrimonio familiar, e incluso, puede disponer la disolución del mismo, según convenga más al interés de los menores, por lo que la norma impugnada, además de violentar un precepto constitucional, se torna un tanto innecesaria. Procede, pues, el presente cargo.

Dado que el cargo anterior ha sido probado, el Pleno se abstiene del estudio del resto de las infracciones alegadas por la demandante. Lo procedente es, pues, declarar inconstitucional el artículo impugnado.

En consecuencia, el Pleno de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE ES INCONSTITUCIONAL el artículo 480 del Código de la Familia.

Notifíquese, Cúmplase y Publíquese En la Gaceta Oficial.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ (fdo.) CARLOS E. MUÑOZ POPE
(Con Salvamento de Voto)

CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO RAFAEL A. GONZÁLEZ

Respetuosamente considero que el Artículo 480 del Código de Familia, no es inconstitucional. El administrador del patrimonio familiar, padre o madre, que quiera contraer nuevas nupcias, puede estar (como puede no estar) en una situación, luego del nuevo matrimonio, que no justifica para nada que sea el administrador y beneficiario del patrimonio familiar. Luego entonces, la Ley ha de ocuparse de esto.

El patrimonio familiar es la asignación de bienes a la seguridad de la familia, una familia concreta. Se trata de una institución que podrías tener gran importancia, en beneficio principalmente de los sectores medios de la sociedad. El que contrae nuevas nupcias va a formar otra familia. He allí una causa suficiente para tomar ciertas medidas de control por parte de un instituto legal, el Código de la Familia, que se ocupa de reglamentar la materia.

El artículo 480 deja abierta la posibilidad de mantenerlo en la situación.

Pero es indudable que no se puede hablar ni de fueros ni privilegios, ni de desigualdad ante la Ley, ni de desconocimiento de la patria potestad.

Respetuosamente salvo el voto.

Fecha ut supra.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR LA FIRMA DE ABOGADOS TRONCOSO, LACAYO & PORRAS EN REPRESENTACIÓN DE ÍTALO ROJAS DE LEÓN EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD CÁMARA NACIONAL DE RADIO EN CONTRA DE LOS ARTÍCULOS 19, 21, 77, 90, 109, 122, 124, y 134 DE LA LEY 15 DE 8 DE AGOSTO DE 1994. DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS. (SOLICITUD DE ACLARACIÓN DE SENTENCIA). MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El BUFETE GARIBALDI Y ASOCIADOS, ha solicitado aclaración sobre algunos aspectos de mera forma y otros de fondo que inciden en la parte resolutiva de la sentencia del 24 de abril de 1996, dentro de la acción de inconstitucionalidad que la firma de abogados TRONCOSO, LACAYO & PORRAS, en representación de ÍTALO ROJAS presentó, a fin que fueran declarados inconstitucionales los artículos 19, 21, 77, 90, 109, 122, 124 y 134 de la Ley N°15 del 8 de agosto de 1994.

La firma de abogados GARIBALDI & ASOCIADOS, como fundamento de su solicitud

de aclaración esgrime, en parte de su escrito, la siguiente tesis:

"...
La aclaración solicitada es en algunos aspectos de mera forma y otro de fondo que inciden en la parte resolutiva.

PRIMERO: ASPECTOS DE FORMA.

1. En la primera página del fallo se identifica la Ley demandada como Ley N° 15 de 18 de agosto de 1994."

¿Debe entenderse Ley N° 15 de 8 (ocho) de agosto de 1994?

2. En la parte resolutiva se dice:

"DECLARA QUE NO SON INCONSTITUCIONALES los artículos 19, 21, 77, 109, 122, 124 y 134 de la Ley 15 de 1984 ..."

¿Debe entenderse Ley 15 de 1994?

SEGUNDO: ASPECTOS DE FONDO.

También en la parte resolutiva dice:

"... Y, QUE ES INCONSTITUCIONAL el vocablo "EXCLUSIVO" en el artículo 90 de la Ley 15 de 8 de agosto de 1994".

El artículo 90 de la Ley 15 de 1994 dice así:

"Artículo 90. Los productores fonográficos tienen el derecho exclusivo de autorizar o no autorizar la reproducción de sus fonógramas. Se permite la importación y distribución de fonógramas, siempre que éstos sean legítimos." (El subrayado es nuestro).

¿Qué debe entenderse?

1° Que cualquier persona puede reproducir (duplicar o copiar) un fonógrama ajeno sin autorización de su titular y por lo tanto la piratería fonográfica es una práctica lícita?

2° Que existe otra persona natural o jurídica que no sea el productor que lo creó que puede autorizar la reproducción (duplicación o copia) de fonogramas ajenos?

3° Que la reproducción (duplicación o copia) de un fonograma requiere de la autorización de su productor?

La aclaración de este aspecto de fondo del fallo es vital para la actividad del creador de fonogramas y de los demás titulares (autores musicales, compositores, arreglistas, artistas, intérpretes, artistas ejecutantes, organismos de radio) cuyas obras musicales, interpretaciones, ejecuciones musicales, programas de radio) pueden estar fijados en fonogramas con la autorización de todos ellos. Pero una vez producidos estos son abiertamente pirateados (reproducidos sin autorización) y vendidas las copias lícitas públicamente a lo largo y ancho de la República.

Esto, por otra parte, sería violatorio de tratados internacionales suscritos y vigentes en nuestro país sobre derechos de autor y derechos conexos, en particular el CONVENIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTORES DE FONOGRAMAS, CONTRA LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE SUS FONOGRAMAS", firmado en Ginebra el 29 de octubre de 1971 y adoptado por la República de Panamá mediante ley N° 5 de 8 de noviembre de 1973, publicada en la Gaceta Oficial N° 17, 481 de 27 de noviembre de 1973. ...".

El artículo 2559 del Código Judicial, en su primera parte, dice: "El fallo

quedará ejecutoriado tres días después de su notificación, término dentro del cual el agente del Ministerio Público o el demandante podrán pedir la aclaración de puntos oscuros de la parte resolutiva o pronunciamiento sobre puntos omitidos ...". Evidente es que la aclaración sólo puede presentarla el demandante sobre puntos oscuros de la parte resolutiva o un pronunciamiento sobre puntos omitidos. En el caso de la aclaración pedida se trata de dos aspectos, el primero de forma de la parte resolutiva. Es necesario que la Corte aclare la fecha de la Ley N°15 de 8 de agosto de 1994, la parte resolutiva de la sentencia de 24 de abril de 1996, expone: "DECLARA QUE NO SON INCONSTITUCIONALES LOS ARTÍCULOS 19, 21, 77, 109, 122, 124 y 134 de la Ley 15 de 1984 y, QUE ES INCONSTITUCIONAL el vocablo "EXCLUSIVO" en el artículo 90 de la Ley 15 del 8 de agosto de 1994." En este primer aspecto de forma, se concede la aclaración y esta Corporación desea dejar claro que la fecha de la Ley N° 15 sobre DERECHO DE AUTOR, es la de 8 de agosto de 1994.

El segundo aspecto de la sentencia, que se pide sea aclarado, es de fondo. El peticionario pretende que nuevamente la Honorable Corte Suprema de Justicia se refiera al criterio jurídico que utilizó para emitir el fallo, refiriéndose a los elementos de motividad que generaron el fallo, esto no es posible al tenor del artículo 2559 de Código de Procedimiento Civil. No hay, pues, falta de pronunciamiento de la Corte sobre ninguno de los puntos materia del recurso, ya que, los mismos, fueron resueltos por esta Alta Magistratura, en el momento de emitir la Resolución.

Por todo lo expuesto, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ACLARA la sentencia del 24 de abril de 1996, la cual se entiende así: "DECLARA QUE NO SON INCONSTITUCIONALES los artículos 19, 21, 77, 109, 122, y 134 de la Ley 15 de 1994 y, QUE ES INCONSTITUCIONAL el vocablo "EXCLUSIVO" en el artículo 90 de la Ley 15 de 8 de agosto de 1994."

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) CARLOS MUÑOZ POPE
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR EL LICENCIADO JUAN CARLOS HENRÍQUEZ CANO EN REPRESENTACIÓN DE EYDER CASASOLA DOMINGO Y EN CONTRA DE LOS ARTÍCULOS 59, 105, 328, 330 Y 807 DE LA LEY N° 3 DEL 17 DE MAYO DE 1994 (CÓDIGO DE LA FAMILIA). MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Licenciado Juan Carlos Henríquez Cano ha presentado demanda en la cual pide al Pleno de la Corte Suprema de Justicia que declare que son inconstitucionales los artículos 59, 105, 328, 330 y 807 de la Ley N° 3 de 17 de mayo de 1994 (Código de la Familia) publicada en la Gaceta Oficial N° 22,591 de 1° de agosto de 1994.

I. LA PRETENSIÓN Y SU FUNDAMENTO

La pretensión que se formula en este proceso constitucional consiste en una petición dirigida al Pleno de la Corte Suprema de Justicia para que se declare que son inconstitucionales los artículos arriba mencionados.

Sostiene el demandante que los artículos impugnados violan son violatorios

de los artículos 19, 44, 53 y 55 de la Constitución Política de la República de Panamá.

El demandante considera que el artículo 59 de la Ley 3 de 1994 infringe, de manera directa, el artículo 44 constitucional por cuanto, a su juicio, la garantía plena de la propiedad privada se menoscaba al exigir que la mitad de los bienes y sus frutos le corresponderá al miembro de la unión que no es titular del bien y que dicha partición a la mitad de los bienes al momento de disolverse la unión de hecho se consagra aunque la unión de hecho no haya sido reconocida legalmente. La violación se da debido a que si la unión de hecho no ha sido legalmente reconocida, mal puede desprenderse de ella cualquier obligación o derecho para quienes hayan estado en esta situación.

En cuanto al artículo 105 de la Ley 3 de 1994 viola, directamente por comisión el artículo 44 de la Constitución Nacional por cuanto, señala el demandante, no le reconoce a la propiedad privada de uno de los cónyuges la garantía o facultad de disposición ínsita en el derecho de propiedad. La facultad que tiene el propietario de transferir o enajenar su título sufre un deterioro tal que condiciona a la voluntad de otra persona que no es titular de ese derecho la posibilidad de éxito de esa operación. A juicio del demandante una cosa es que el cónyuge no propietario pueda gozar de los frutos de esa venta en el régimen de participación en las ganancias y otra es la prohibición de vender un bien del cual se es titular. Por otro lado, señala el demandante, se le otorga al Juez la facultad de dictar acciones que limiten o cautelen el bien que constituye la casa habitación de la familia sin que medie ningún proceso legal o judicial en merma del derecho a la propiedad privada que se garantiza con rango constitucional.

El demandante considera que el artículo 328 de la Ley N° 3 de 17 de mayo de 1994 infringe, de manera directa el artículo 19 de la Constitución Nacional por cuanto le da preferencia y privilegio a la mujer, en este caso la madre, en relación a la guarda y crianza de los hijos que han vivido con ambos y en virtud del desacuerdo surgido entre los cónyuges. Dicha preferencia, señala el demandante, viola el principio de que no habrá privilegios por razón de sexo por cuanto la norma impugnada otorga a la madre, sin consideración a ningún otro aspecto que no sea el de ser mujer, la guarda y crianza automática de los hijos menores.

También considera el demandante que la norma impugnada infringe el artículo 53 de la Constitución Nacional ya que la misma es clara en indicar que los cónyuges tienen en el matrimonio igualdad de derechos y que no estamos en presencia de un divorcio en donde los deberes y derechos de los cónyuges sufren modificaciones, sino que ante un simple desacuerdo en donde el matrimonio aún sigue vigente con las responsabilidades que ello conlleva, el legislador le da preeminencia a la mujer.

En cuanto al artículo 330 de la Ley N° 3 de 1994 el demandante considera que la misma viola, directamente por comisión, el artículo 55 de la Carta Magna por cuanto entre los derechos que comprenden la patria potestad se encuadra el de tener contacto permanente u ocasional con los hijos y el artículo impugnado no sólo limita la patria potestad sino que también y sobre todo prohíbe de manera absoluta la comunicación de padres e hijos.

Por último, se señala como violatorio del artículo 44 de la Constitución Nacional, el artículo 807 de la Ley N° 13 de 17 de mayo de 1994 por cuanto a través de dicha norma se vulnera y trastoca la propiedad privada obtenida legítimamente por una persona que no tiene ninguna vinculación con el alimentista. Además, señala el demandante, se constriñe solidariamente al empleador a pagar de su pecunio personal una obligación alimenticia a una persona que no es su dependiente ni existe algún vínculo de parentesco, en caso contrario se hace merecedor de una sanción de desacato y de la orden adicional de obligarlo solidariamente a pagar la pensión alimenticia sin que exista un nexo previo que lo conmine.

II. LA POSTURA DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN

El Procurador General de la Nación rindió concepto mediante la Vista N° 27

de 10 de mayo de 1995. En dicho escrito el citado funcionario considera que no ha sido violado el artículo 19 de la Constitución porque las normas impugnadas no conceden fueros o privilegios de manera personal sino en protección al interés del menor. Tampoco se produce, a su juicio, la violación del artículo 44 de la Constitución Nacional que consagra el derecho a la propiedad privada, que es sólo una de las clases de propiedad reconocidas por la Constitución, no es de carácter absoluto y tiene las limitaciones que establece la Carta Política. En este sentido, señala, el matrimonio de hecho existe desde el momento que ha transcurrido 5 años y la pareja ha vivido en condiciones de singularidad y estabilidad, y su reconocimiento puede hacerse aún después de disuelta la unión, por cualquiera de los cónyuges, dentro del término de la unión. No obstante, señala el Procurador, cada uno mantiene, como de su propiedad, los bienes adquiridos antes de la unión, así como los bienes recibidos a título gratuito, en atención al derecho reconocido en el artículo 54 de la Constitución Nacional. Por otro lado, señala, los artículos 81 y 82 del Código de la Familia son claros al establecer que a falta de declaración expresa, se presume que el régimen económico del matrimonio será el de participación de ganancias. De manera que los cónyuges están en libertad de decidir, al momento de contraer matrimonio, el régimen económico que regirá la relación.

Tampoco considera el Procurador que el artículo 807 vulnere el artículo 44 de la Constitución Nacional por cuanto la misma no tiene como finalidad imponer una carga alimenticia a quien no está obligado a darla, sino por el contrario, crear mecanismos efectivos para proteger los derechos del menor, en este caso, la prestación de alimentos, responsabilizando solidariamente, al empleador o persona que deba realizar el descuento directo, o la retención por secuestro, por una omisión que constituye una clara violación a las órdenes emanadas de la Ley y de autoridad competente.

No se ha violentado, a juicio de este funcionario, el artículo 55 de la Constitución Nacional, por cuanto corresponde al Estado proteger la salud física, mental y moral de los menores, para lo que crea los mecanismos legales necesarios tendientes a preservar los mejores intereses del menor.

III. DECISIÓN DE LA CORTE

Una vez expuestos los argumentos del demandante, y el concepto vertido por el Procurador General de la Nación, entra el Pleno a considerar la pretensión que se formula en la demanda.

La parte actora alega que el artículo 59 de la Ley N° 3 de 17 de mayo de 1994 (Código de la Familia) infringe el artículo 44 de la Constitución Política. Dichas normas son del siguiente tenor literal:

> "ARTÍCULO 59. En caso de disolverse la unión de hecho, aunque no haya sido reconocida legalmente como matrimonio, a pesar de haber vivido la pareja en condiciones de singularidad y estabilidad por cinco (5) años consecutivos, le corresponderá, a cada uno de los miembros de dicha unión, la mitad de los bienes y frutos de éstos, adquiridos a título oneroso por cualquiera de ellos dentro del término de la unión."
>
> "ARTÍCULO 44. Se garantiza la propiedad privada adquirida con arreglo a la Ley por personas jurídicas o naturales."

El Pleno de esta Corporación estima que no se ha producido la violación al artículo 44 de la Constitución Nacional, que establece el derecho a la propiedad privada por cuanto no es cierto, como señala el demandante, que de la unión de hecho no pueden desprenderse efectos cuando la misma no ha sido legalmente reconocida. Nuestra Constitución Nacional reconoce la unión de hecho en el artículo 54 a partir del momento en que se cumplen los cinco años de convivencia de una pareja en condiciones de singularidad y estabilidad, aún cuando su reconocimiento legal se dé con posterioridad a la disolución de la unión. De dicha unión se derivan derechos tales como la adquisición de la mitad de los bienes y frutos adquiridos a título oneroso por cualquiera de los cónyuges, dentro del término de la unión, ya que los bienes adquiridos antes de la unión,

así como aquellos adquiridos a título gratuito, permanecen en propiedad del adquirente. Se desestima, pues, este cargo.

La parte actora considera que el artículo 105 de la Ley N° 3 de 17 de mayo de 1994 (Código de la Familia) es violatorio del artículo 44 de la Constitución Política. La norma arriba mencionada señala lo siguiente:

> "ARTÍCULO 105. Para realizar actos de disposición a título oneroso sobre el inmueble que constituye la casa habitación de la familia, se requerirá el consentimiento de ambos cónyuges. Si uno lo negare o estuviese impedido para prestarlo, podrá el juez, previa información sumaria, autorizar uno o varios actos dispositivos cuando lo considere de interés para la familia. Excepcionalmente, acordará las limitaciones o cautelas que estime convenientes."

La Corte estima que el artículo 105 de la Ley 3 de 1994 infringe el artículo 44 constitucional por cuanto el mismo constituye sin lugar a dudas una limitación al derecho a la propiedad privada al no permitir los actos de disposición a título oneroso del inmueble que constituye la casa habitación de la familia, si no es con el consentimiento de ambos cónyuges. Si bien es cierto que el objeto de esta norma es la protección del interés del otro cónyuge, esta Corporación considera que el derecho de alimentos está ampliamente protegido en el Código de la Familia de manera que se garantiza, a través de un sinnúmero de medidas, que el mismo sea efectivo, ya sea dándole preferencia ante otros créditos y mediante amplias potestades del juez para decretar medidas cautelares por lo que, a juicio de quienes suscriben, no es necesario ni se justifica limitar la propiedad privada para tutelar derechos que ya están suficientemente protegidos en el Código de la Familia. La potestad de disponer del bien inmueble es exclusiva del propietario y dicha norma pretende desconocer ese derecho constitucionalmente protegido.

Por otro lado, la parte actora señala que el artículo 328 de la Ley N° 3 de 17 de mayo de 1994 (Código de la Familia) es violatorio de los artículos 19 y 53 de la Constitución Política. Las normas antes mencionadas son del siguiente tenor literal:

> "ARTÍCULO 328. En igualdad de condiciones, se tendrá, como regla general, que los hijos o hijas queden al cuidado del progenitor en cuya compañía se hayan encontrado hasta el momento de producirse el desacuerdo, prefiriendo a la madre si se hallaban en compañía de ambos, y salvo, en todo caso, que por razones especiales se indique otra solución.
>
> Si las circunstancias lo aconsejan, la guarda podrá ser otorgada incluso a una tercera persona."
>
> "ARTÍCULO 19. No habrá fueros o privilegios personales ni discriminación por razón de raza, nacimiento, clase social, sexo, religión o ideas políticas."
>
> "ARTÍCULO 53. El matrimonio es el fundamento legal de la familia, descansa en la igualdad de derechos de los cónyuges y puede ser disuelto de acuerdo con la Ley."

En torno a la supuesta violación del artículo 19 de la Constitución Nacional, que establece que no habrá fueros ni privilegios en razón de la raza, nacimiento, clase social, religión, sexo o ideología política, el Pleno de esta Corporación ha señalado en diversas ocasiones que los fueros y privilegios a los cuales se refiere este artículo guardan relación con aquéllos que se dan en razón de una persona determinada, es decir aquel privilegio que se otorga en consideración de una situación personal pero no impide distinción entre los sexos si ella está justificada por razones de interés social. Las normas contenidas en la Ley 3 de 17 de marzo de 1994, son de orden público y de interés social, dándole prioritaria importancia interés superior del menor y de la familia, principio este que debe privar en estas materias para la mejor protección de los menores de edad. No procede, pues, el presente cargo.

Por el contrario, el Pleno estima que sí se ha producido la violación del artículo 53 de la Constitución Nacional, que establece que el matrimonio es el fundamento legal de la familia y que el mismo descansa sobre la igualdad de derechos de los cónyuges. Si la Constitución prevé la igualdad de derechos entre los cónyuges ella veda romper esta igualdad en materia de guarda de menores: el artículo 328 sí establece una desigualdad en favor de la mujer que no permite el artículo 53 de la Constitución. Una cosa es la prohibición de discriminar y otra muy distinta es la igualdad de derechos de ambos cónyuges que prevé el artículo 53 de la Constitución Nacional, paridad que debe incluir el derecho a la guarda y crianza de los hijos. Procede, pues, el presente cargo, sólo en lo relativo a la frase "prefiriendo a la madre si se hallaban en compañía de ambos" , contenida en el párrafo primero del artículo 328.

La parte actora señala que el artículo 55 de la Constitución Política ha sido infringido por el artículo 330 de la Ley N° 3 de 17 de mayo de 1994 (Código de la Familia). Las normas en comento son del siguiente tenor literal:

> "ARTÍCULO 55. La patria potestad es el conjunto de deberes y derechos que tienen los padres en relación con los hijos."
>
> ARTÍCULO 330. Excepcionalmente, en beneficio del interés del menor, podrán tomarse disposiciones especiales que limiten la comunicación y la visita de uno o de ambos padres, de los ascendientes u otros parientes del menor e incluso que la prohíban por cierto tiempo o indefinidamente."

El Pleno de esta Corporación estima que no se ha producido la violación del artículo 55 de la Constitución Nacional relativo a la Patria Potestad, por cuanto el artículo 330 supracitado no limita ni restringe la Patria Potestad o relación parental que han de ejercer los padres en relación con sus hijos o hijas. La misma guarda relación con una serie de deberes y derechos, consistentes en velar por la vida y salud de sus hijos, tenerlos en su compañía, suplir sus necesidades afectivas, alimentarlos, educarlos, formarlos, corregirlos-razonable y moderadamente- y finalmente representarlos y administrar sus bienes. Estos deberes y derechos **deben ser ejercidos** aún cuando uno o ambos padres se encuentren sujetos a limitaciones de comunicación o visita, los cuales tal y como lo señala el artículo impugnado, son excepcionales y se imponen en beneficio del menor. Esta disposición debe aplicarse a la luz del artículo 331 de dicha Ley que establece que dichas restricciones pueden ser modificadas, una vez cambien las circunstancias que determinaron su pronunciamiento. No procede, pues, la violación alegada por el recurrente.

Finalmente, el demandante considera que el artículo 807 de la Ley N° 13 de 17 de mayo de 1994 (Código de la Familia) viola el artículo 44 de la Constitución Nacional, el cual garantiza la propiedad privada de las personas naturales y jurídicas. La norma impugnada dice lo siguiente:

> "ARTÍCULO 807. Para hacer efectiva la prestación de alimentos, el juzgador ejecutará y ordenará de oficio el descuento directo del salario y remuneraciones del obligado a favor del beneficiario y podrá, a petición del interesado y sin necesidad de caución alguna, ordenar el secuestro de bienes para asegurar su cumplimiento, e incluso decretar el impedimento de salida del país al obligado.
>
> Si el empleador o persona que deba realizar el descuento directo o la retención por secuestro, si fuere el caso, no lo hace, queda responsabilizado solidariamente en la obligación de dar alimentos, sin perjuicio de la sanción que le corresponda por desacato."

A juicio de esta Corporación, el artículo 807 de la Ley 3 de 1994 tampoco ha violado la excerta constitucional en comento, ya que dicha norma no tiene como fin limitar el derecho real de propiedad del empleador sujeto a esta medida, sino que más bien tiene como finalidad procurar que aquel que se encuentra obligado a suministrar alimentos a quien se encuentre incapaz de suministrárselo a sí mismo, cumpla con la obligación que la ley le impone. Este derecho de alimentos consagrado en el artículo 377 de la Ley 3 de 1994 constituye una obligación legal de asistencia y protección, para quien está obligado por ley a proporcionarlo y

debe ser acatada. El artículo impugnado permite garantizar el cumplimiento de ese derecho, a través de una medida cautelar de carácter patrimonial, responsabilizando solidariamente al empleador que estaba supuesto a realizar las deducciones o las retenciones por secuestro del salario de quien estaba en principio obligado a darlos y no lo hizo.

No obstante lo anterior, confrontada la norma acusada de inconstitucional con la totalidad de las normas constitucionales, es decir, la Constitución en su conjunto, el Pleno estima que la última frase contenida en párrafo primero del artículo 807 en estudio y que dice "e incluso decretar el impedimento de salida del país al obligado." es violatoria del artículo 27 de la Constitución Política por cuanto limita la garantía constitucional del libre tránsito establecida en dicha norma. Procede, pues, el cargo de inconstitucionalidad del artículo 807 sólo en lo relativo a la frase antes citada.

En consecuencia, el Pleno de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO SON INCONSTITUCIONALES, los artículos 59 y 330 de la Ley 3 de 1994 y que ES INCONSTITUCIONAL el artículo 105, la frase "prefiriendo a la madre si se hallaban en compañía de ambos" contenida en el artículo 328 de la Ley N° 3 de 1994 y la frase "e incluso decretar el impedimento de salida del país al obligado" contenida en el artículo 807 de la misma ley que aprobó el Código de la Familia.

Notifíquese, Cúmplase y Publíquese en la Gaceta Oficial.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (Con Salvamento de Voto)
(Con Salvamento de Voto) (fdo.) CARLOS E. MUÑOZ POPE

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

SALVAMENTO DE VOTO DE LA MAGISTRADA MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA

Respetuosamente manifiesto que no estoy de acuerdo con la sentencia dictada por la mayoría por las siguientes:

1. El artículo 105 de la Ley 3 de 1994 no es violatorio del artículo 44 de la Constitución porque si bien el propietario tiene la facultad de disponer de sus bienes, enajenarlos o transferirlos en cualquier forma, también la propiedad de esos bienes, de acuerdo con el artículo 45 de la Constitución "implica obligación para su dueño por razón de la función social que debe llenar". Cuando un inmueble constituye la casa habitación de la familia cumple una función social, y por tanto el artículo 105 al establecer límites a la propiedad que cumple una función social no viola precepto constitucional alguno. El artículo 105 del Código de la Familia al limitar la facultad del padre o madre propietario de un inmueble destinado a servir de habitación de la familia, está desarrollando normas constitucionales que protegen la familia. Tales normas constitucionales son los artículos 52 y 55.

De conformidad con el primer artículo citado el Estado debe proteger la salud física, mental y moral de los menores y garantizarles el derecho a la alimentación, la salud, la educación y la seguridad y previsión sociales. El segundo artículo constitucional citado señala dentro del conjunto de deberes que tienen los padres, en relación con sus hijos el de alimentarlos, educarlos y protegerlos. La casa habitación constituye parte del derecho de alimentos de los menores que el Estado debe garantizarles y los padres tienen el deber de darles.

2. El artículo 328 del Código de la Familia no reglamenta, o señala, o establece derechos de los padres. Este precepto señala las medidas que debe tomar el juzgador, en ciertas casos, en relación con el cumplimiento de uno de los deberes que constituyen la patria potestad. Los derechos que se derivan de la patria potestad para los padres son los de recibir respeto y asistencia de sus hijos.

Por ordenarlo así la Constitución en el artículo 55, la patria potestad es regulada por la ley "de acuerdo con el interés social y el beneficio de los hijos". En el artículo 328 cuya inconstitucionalidad se demanda, se regula la guarda de los menores en aquellos casos en que los progenitores no viven juntos y no logren ponerse de acuerdo respecto a la guarda y crianza y al régimen de comunicaciones y visitas de sus hijos. En estos casos, tomando en consideración del interés superior de los menores, el citado artículo 328 preceptúa que se preferirá darle la guarda a la madre cuando los menores estén en compañía de ambos padres al producirse las desavenencias entre ellos, porque la madre es el primer contacto que tiene el menor con el medio que le rodea y no solamente es la "base de la relación parental sino también de la filiación natural" (Roberto Suárez Franco, Derecho de Familia, Ed. Temis, S. A., Colombia, 1992 página 9).

La afirmación de que el artículo 328 regula derechos de los menores y no de los padres queda comprobada con la facultad que ese mismo precepto otorga al Juez, quien en los casos allí regulados, cuando las circunstancias lo aconsejen podrá otorgar la guarda de los menores incluso a una tercera persona. Esta regulación se compadece con la naturaleza de orden público e interés social de las normas del Código de la Familia, las cuales protegen el interés de los menores, con el fin de que sufran el menor daño posible como consecuencia de los desacuerdos y la separación de sus padres.

3. La última frase del primer párrafo del artículo 807 del Código de la Familia faculta al Juez que conoce de un juicio de alimentos para "decretar el impedimento de salida del país del obligado a dar los alimentos", a petición del interesado, para asegurar el cumplimiento de esta obligación. Este precepto no viola la garantía de libertad de tránsito, de domicilio y de residencia consagrada en el artículo 27 de la Constitución Política. En primer lugar estas libertades no son absolutas. la misma norma constitucional las sujeta a las limitaciones que les impongan "las leyes o reglamentos de tránsito, fiscales, de salubridad y de migración". En segundo lugar la norma no establece una limitación de carácter general a estas garantías. Solamente faculta al juez para decretar una medida cautelar, restrictiva de la libertad de tránsito, a solicitud de parte interesada para asegurar el cumplimiento de una obligación de alimentos, que es de interés social. Así está preceptuado en el artículo 52 de la Constitución Política que establece la obligación del estado de proteger la salud de los menores, los ancianos y enfermos desvalidos y de garantizarles sus alimentos.

Ante la frecuencia con que en nuestro medio se incumplen las obligaciones familiares lo conveniente es mantener las facultades legales de los jueces de familia que les permitan tomar enérgicas medidas para combatir ese mal social.

Fecha ut Supra.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO RAFAEL A. GONZÁLEZ

Se demanda la inconstitucionalidad de los artículos 59, 105, 328, 330 y 807 del Código de la Familia.

La Sentencia declara que no lo son el 59 y el 330.

Y que sí lo son el 105, el 328 (parcialmente) y el 807 (parcialmente).

1. En cuanto al artículo 105, considero que no es inconstitucional que "para realizar actos de disposición a título oneroso sobre el inmueble que constituye la casa habitación de la familia, se requerirá el consentimiento de ambos cónyuges" (artículo 105 Código de Familia).

La casa habitación tiene un valor muy especial, cumple con satisfacer necesidades básicas de la familia. No se justifica, por tanto, que se disponga unilateralmente del bien, como si fuera simplemente un objeto de especulación.

2. En cuanto a la frase "prefiriendo a la madre si se hallaran en compañía de ambos" del artículo 328, no considero tampoco que sea inconstitucional.

Participo del criterio sostenido por la Magistrada Franceschi, en el sentido de que la finalidad de lo dispuesto es en beneficio del menor.

No se trata de un privilegio para la madre. La medida está condicionada a que "por razones especiales se indique otra cosa". No es, pues, una medida absoluta.

Nuestra realidad social nos revela el fenómeno de que el padre y la madre no están en igualdad de condiciones en relación con el vástago. La madre es más próxima, más íntima, al menos por razones culturales. Esta diferencia autoriza un trato distinto, en beneficio del menor. Como es injusto el trato desigual de los iguales, es injusto el trato igual a los desiguales.

Sobre esta base, espontáneamente, creando derecho como lo indica Ihering, la cultura del panameño se determina en el sentido de preferir a la madre en la circunstancia que nos ocupa. Esta actitud tiene profundo arraigo en nuestro medio.

3. Tampoco comparto la declaración parcial de inconstitucionalidad del artículo 807, cuando esta disposición expresa la posibilidad de "decretar el impedimento de salida del país del obligado a dar los alimentos".

Esta medida se tomaría "para hacer efectiva la prestación de alimento", bien entendido, en caso que ello sea necesario.

No creo que ningún padre pueda invocar el derecho a libre tránsito con el resultado de desamparar a sus hijos en situación de depender de los alimentos que le deba suministrar.

Fecha ut supra.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADO POR MORGAN & MORGAN CONTRA LA RESOLUCIÓN JD-N° 016-94 EXPEDIDA POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, TREINTA (30) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La firma forense MORGAN & MORGAN actuando en su propio nombre y representación pero en interés de la sociedad **LAS OLAS, S. A.** ha interpuesto **Recurso de Inconstitucionalidad** contra la Resolución JD-N° 016-94 de 2 de agosto de 1994, expedida por la Junta Directiva del Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables, "Por la cual se establece el Refugio de Vida Silvestre Playa de la Barqueta Agrícola, en la Provincia de Chiriquí".

Admitida la demanda se corrió traslado al Procurador General de la Nación, quien contestó recomendando, según Vista que aparece de fojas 15 a 24, se declare que la resolución demandada "no viola los artículos 17, 32 y 44, ni ningún otro de la Constitución Nacional".

Posteriormente, el expediente se fijó en lista por el término de 10 días para que, contados a partir de la última publicación del edicto respectivo, el demandante y todas las personas interesadas presentaran argumentos por escrito sobre el caso.

Así las cosas, el Pleno de la Corte procede a decidir lo de lugar, previas las consideraciones que a continuación se expresan.

I. EL ACTO ACUSADO DE INCONSTITUCIONAL

Como se ha indicado, el acto impugnado en el presente proceso constitucional es la Resolución JD-N° 016-94 de 2 de agosto de 1994 dictada por la Junta Directiva del Instituto de Recursos Naturales Renovables (INRENARE), promulgada mediante su publicación en la Gaceta Oficial N° 22,617 del 7 de septiembre de 1994.

Mediante la resolución impugnada se declara una extensa zona del Distrito de Alanje (Provincia de Chiriquí) como refugio de vida silvestre y se autoriza a una entidad no gubernamental (ONG), denominada Comité Ambiental de Alanje, a desarrollar actividades de protección y conservación de las tortugas marinas en la Playa de la Barqueta Agrícola. Dentro de dicha zona de playa se encuentra incluido el lote de terreno denominado finca ABIGAÍL distinguida con el número 350, Folio 342, Tomo 52 de la Sección de la Propiedad, Provincia de Chiriquí, cuyo propietario es la sociedad anónima LAS OLAS, S. A.

II. SÍNTESIS DE LA DEMANDA

Expresa el accionante, entre los fundamentos de hecho de la demanda, que la aludida finca ABIGAÍL (350) ha sido utilizada por su propietario en el campo agropecuario, en forma productiva y lícita, desde hace más de veinte (20) años; la resolución demandada se expidió sin consultar o comunicar al propietario de la finca, a efecto de que pudiera hacer valer sus derechos frente a las consecuencias que podrían afectar las actividades que desarrollaba; las operaciones que ha realizado el Comité Ambiental de Alanje han incidido "negativamente" en los resultados agrícolas-productivos a los que estaba destinada la finca 350 y, de esa forma han interferido en el derecho de dominio que ostenta la propietaria del terreno; la cuestionada resolución autoriza también, de modo genérico al INRENARE a regular actividades de pesca y otras en la playa Barqueta Agrícola y áreas aledañas, en las que se encuentra la finca ABIGAÍL.

De acuerdo con el contenido de la demanda en estudio, debido a la expedición de la resolución acusada y su entrada en vigor se violaron los artículos 17, 32 y 44 de la Constitución Nacional.

Respecto al artículo 17 ibídem., el recurrente reconoce su carácter programático. Sin embargo, alega que en este caso su violación se produce por la vinculación con las otras normas fundamentales citada como quebrantadas.

Así, la infracción del artículo 32 de la Carta Fundamental, según se sostiene en la demanda, se debe a que "se ha producido una actuación administrativa que afecta intereses particulares -propietarios de las fincas afectadas por el área adscrita a la intervención de entes no gubernamentales-, a los que no se ha dado el mínimo derecho siquiera para ser oídos". Continúa sosteniendo, que al expedirse la resolución sin realizar una reunión informativa con los propietarios de las fincas afectadas, se irrespetan los derechos de ellos.

La infracción del artículo 44 de la Constitución en el caso subjúdice se atribuye por el hecho de que el acto impugnado facultó a un ente no gubernamental, "de cuya idoneidad profesional -o siquiera antecedentes de existencia jurídica- no se dice nada en la resolución", para interferir en los actos inherentes al derecho de dominio que tiene la sociedad propietaria de la finca sobre esta. Es decir, que aunque el acto impugnado contenga una declaración de reconocimiento a la propiedad privada (en su ordinal sexto), viola el derecho de propiedad de los que resultan afectados con la delimitación del área, debido a la autorización que el mismo otorgó al comité ambiental para realizar actividades en dicha zona.

III. OPINIÓN DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN

El señor Procurador General de la Nación en la opinión vertida en Vista que corre de fojas 15 a 24, arriba a la siguiente conclusión:

Aunque el artículo 17 de la Constitución no puede ser objeto de violación directa por su carácter programático, ya que no contiene derechos subjetivos en favor de los ciudadanos, existen circunstancias en las cuales puede producirse su violación indirecta siempre que se acredite la violación de otras normas superiores de igual rango, que establezcan tales garantías.

Sobre la garantía fundamental del debido proceso que consagra el artículo 32 de la Constitución y en virtud de la jurisprudencia de la Corte sobre el contenido de esta norma (Sentencia de 11 de marzo de 1992), considera el Procurador, que el acto impugnado no es atacable en base a la violación de dicha garantía, toda vez que el mismo no tiene que ver con la misma, debido a que "ni se trata de una resolución judicial ni ha sido expedido dentro de un proceso". Agrega, que por su naturaleza -de acto administrativo- podía ser proferido en forma unilateral por la administración, de modo que para su emisión "no se requería oír o dar participación o contar con el consentimiento de quienes se sienten afectados con tal medida".

La violación del artículo 44 de la Carta Política tampoco se ha logrado acreditar, ya que con el acto "no se está desconociendo el derecho a la propiedad privada, ni se le somete a restricciones que hagan imposible su uso, disfrute o traspaso". Por el contrario, con la expedición de la resolución demandada se está cumpliendo con lo preceptuado por el artículo 116 de la Constitución, pues se observa que la finalidad de la medida es crear un refugio para especies en peligro de extinción. Y, para alcanzar dicho objetivo, de proteger la fauna marina como parte del ambiente ecológico "se requiere la acción positiva del Estado".

En virtud de lo expresado, en el sentido que no se han infringido los artículos 32 y 44 de la Constitución, tampoco resulta violado el artículo 17 del citado texto.

IV. DECISIÓN DE LA CORTE

De lo anteriormente expuesto y previo análisis de la demanda de inconstitucionalidad, el Pleno de esta Corporación comparte el criterio expresado por el Ministerio Público, en el sentido, que carecen de fundamento los cargos de inconstitucionalidad formulados contra la Resolución JD-N° 016-94 de 6 de agosto de 1994, proferida por la Junta Directiva del Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables.

En este caso se puede apreciar que se cuestionan diversos aspectos, que si bien están relacionados con el acto objeto de esta acción autónoma constitucional, algunos de ellos no constituyen la materia pertinente para activar el control de la constitucionalidad que ejerce la Corte. Con esto nos referimos a cargos que se hacen sobre las facultades que tiene la autoridad pública que dictó el acto demandado, para regular ciertas actividades (como la pesca y otras) en el área a la cual se refiere la resolución. Igualmente, se hace énfasis en la idoneidad de la entidad no gubernamental y sobre la validez de la autorización que le fuere otorgada para desarrollar actividades de protección y conservación de las tortugas marinas.

Veamos, entonces, concretamente la conculcación de los preceptos de la Constitución que se citan en la demanda.

A juicio de la Corte, resulta totalmente improcedente la pretensión del accionante sobre la posible vulneración del artículo 32 de la Carta Fundamental. Dentro del concepto desarrollado acerca de su infracción, se reconoce que el acto acusado constituye una actuación administrativa que no genera ni ha sido expedida en algún tipo de proceso. Por ello, se observa que al tratar de forzar la infracción del debido proceso por el mencionado acto administrativo se incorporan a dicha garantía nuevos y extraños elementos, como lo son el irrespeto de los derechos del propietario a ser oído y a la celebración de una reunión informativa previa a la expedición del acto.

Sobre el contenido y alcance del citado artículo 32 la jurisprudencia ha reiterado que:

> "La constitución consagra, como hemos dicho, **la garantía del debido proceso**, que impone y orienta todo el derecho procesal objetivo panameño. Por consiguiente, cuando la Ley o la actividad del Tribunal conducen un proceso con alteración de esa garantía querida por la Constitución, entran en actos las medidas impugnativas adecuadas, constitucionales y legales, para que esta situación no perdure. Pero es menester, entonces, determinar que debe entenderse por **debido proceso**.
>
> En el aspecto puramente procesal, la Corte ha señalado ya que se desnaturaliza el proceso cuando, por errores jurídicos, se aparta de su finalidad y desconoce los principios que gobiernan el actuar procesal. Más concretamente, ha señalado la necesidad del emplazamiento, la oportunidad de audiencia, la oportunidad de prueba y la motivación de la sentencia conclusiva, con valoración no solo del derecho sustancial aplicable; sino también de la prueba producida. Tal es, entre otros, el fallo de 6 de agosto de 1980, parcialmente transcrito en la vista del señor procurador".
>
> ("Jurisprudencia Constitucional", Tomo III, 1985, publicado por el Centro de Investigación Jurídica de la Universidad de Panamá, pág. 316).

Tomando en cuenta el contenido textual del citado artículo 32, y en atención a la interpretación que ha dado la jurisprudencia de inicios de los ochenta que amplió el ámbito de aplicación del principio del debido proceso que dicha norma preceptúa, particularmente con respecto a la segunda de sus garantías (implícitas) -la del juzgamiento conforme a los trámites legales-, se tiene que esta garantía es aplicable en toda clase de juicios, sean penales, civiles, administrativos, laborales, tributarios etc. (Ver. Fallo de la Corte Suprema de 12 de diciembre de 1994). Sin embargo, como se colige de lo expuesto, la tutela que brinda el referido precepto es para casos de juzgamientos y no, como se pretende mediante esta acción, para impugnar o tratar de anular actuaciones administrativas contenidas en una resolución que afectan intereses particulares, pero que no conlleva la instauración de un proceso.

Por tanto, se deshecha el cargo formulado con relación al artículo 32 del texto fundamental.

En otro orden de ideas, como se expresó inicialmente, el demandante considera que la violación del artículo 44 de la Carta Política obedece a que la resolución impugnada faculta a un ente no gubernamental para interferir en los actos de dominio que tiene la sociedad LAS OLAS, S. A. sobre la finca 350.

La Corte ha podido comprobar, luego de examinar la acusada resolución emitida por la Junta Directiva del INRENARE (Fs. 2 a 4 del expediente), que el aludido cargo respecto al artículo 44 ibídem. resulta totalmente desvirtuado debido a los fundamentos de hecho y de derecho expuestos en la misma.

En tal sentido, el acto acusado declara que reconoce el régimen de propiedad privada y de posesión de la tierra en las inmediaciones de Playa la Barqueta Agrícola, pero atendiendo prioritariamente a las restricciones que se establecen en la Constitución, las leyes y, en consecuencia, en dicha resolución.

La razón que tuvo la institución autónoma para declarar esa playa y ciertas áreas aledañas como **"Refugio de Vida Silvestre"**, se debe a que es una zona en que anidan las aves marinas y forma parte de las rutas que ellas utilizan para sus migraciones. También, se trata de un área importante "de anidación de tortugas marinas". En atención a este hecho y por la circunstancia de que las tortugas blancas o verdes son una de las especies en vías de extinción, se dispuso ejecutar un proyecto en esa zona para la protección y conservación de las tortugas, para lo cual fueron encomendados, por una parte el Municipio de Alanje

y por otra, "algunas **ONG's**" (Organismos no Gubernamentales), "bajo la orientación y supervisión del INRENARE".

De lo expuesto se infiere que son justificadas las motivaciones que originaron la resolución y todo lo que ella implica (como la utilización de terrenos privados), pues obedece al deber constitucional que tiene el Estado de velar por la preservación, renovación y permanencia de la fauna y la flora dentro del territorio nacional, para lo cual la institución competente está obligada ha tomar la medidas necesarias, en tiempo oportuno.

El fundamento constitucional y legal para esta iniciativa, se invoca en la misma resolución en los siguiente términos:

"...

Que de acuerdo a la Constitución Política de la República de Panamá, en el Título III, Capítulo VII, sobre el Régimen Ecológico y en especial el artículo 114 se establece que es deber fundamental del Estado que la población viva en un ambiente sano y libre de contaminación, en donde el aire, el agua, y los alimentos satisfagan los requerimientos del desarrollo adecuado de la vida humana.

Que el artículo 116 de la misma excerta constitucional establece que el Estado reglamentará, fiscalizará y aplicará oportunamente las medidas necesarias para garantizar que la utilización y aprovechamiento de la fauna terrestre, pluvial y marina, así como los bosques, tierras y aguas se lleven a cabo racionalmente, de manera que se evite su depredación y se asegure su preservación, renovación y permanencia.

Que de acuerdo con la Ley 1 de 3 de febrero de 1994, constituye un deber del Estado: Proteger, conservar e incrementar los recursos forestales existentes en el país y promover su manejo y aprovechamiento racional y sostenible.

Que la Ley 21 de 16 de diciembre de 1986, por la cual se crea el Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables en su artículo 5, numeral 9, faculta a esta Institución para decidir en base a estudios, la creación, desarrollo, aprovechamiento y manejo de bosques de protección, bosques especiales y otras categorías de manejo para áreas silvestres. ..."

En atención a las citadas consideraciones, a juicio del Pleno, no hay perturbación al derecho consagrado en el artículo 44 Constitucional, ya que la resolución proferida por el INRENARE, con el fin de proteger especies de la fauna marina, no sólo no lo violenta, al tener el interés colectivo por encima del particular, sino que se enmarca dentro de las competencias de la institución emisora. Todo lo cual se fundamenta en lo dispuesto por los artículos 114, 116 entre otros de la Constitución, Ley 1 de 3 de febrero de 1994, Ley 21 de 16 de diciembre de 1986 y el Decreto Ejecutivo N° 104 de 4 de septiembre de 1974 (por el cual se adiciona el Decreto Ejecutivo N° 23 de 30 de enero de 1967).

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA que la Resolución JD-N° 016-94 de 6 de agosto de 1994, expedida por la Junta Directiva del Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables, NO ES INCONSTITUCIONAL.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (Con Salvamento de Voto)
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

SALVAMENTO DE VOTO DE LA MAGISTRADA MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA.

Estoy de acuerdo con la decisión de la mayoría pero con todo respeto considero que, en su parte motiva, la sentencia debió aclarar que si bien el artículo 116 de la Constitución Política faculta al estado para reglamentar, fiscalizar, y aplicar las medidas necesarias para garantizar que la utilización y el aprovechamiento de la fauna, la flora y las aguas se lleve a cabo racionalmente, de manera que se evite su depredación y se asegure su preservación, renovación y permanencia, y el artículo 117 dispone que la ley reglamentará el aprovechamiento de estos recursos para evitar que del mismo se deriven perjuicios para la sociedad, la Ley 21 de diciembre de 1986, orgánica del Instituto de Recursos Naturales Renovables, señala como objetivos de esa institución "la definición, planificación, organización, coordinación, regulación y fomento de las políticas y acciones de aprovechamiento, conservación y desarrollo de las aguas, suelos, flora, y fauna silvestre, bosques, parques nacionales, reservas equivalentes y las cuencas hidrográficas en el territorio nacional, en forma consistente con los planes nacionales de desarrollo" (art. 2) y dispone que podrá realizar esos objetivos (art. 4 ídem) "por si o en asocio con otras entidades públicas, de conformidad con los convenios, acuerdos o contratos que para tal efecto celebre, los cuales se regirán por las disposiciones relativas a la contratación de las entidades públicas". También puede Inrenare en coordinación con entidades privadas, obtener el financiamiento de programas y proyectos para la conservación de los recursos naturales no renovables (Art. 3 (3) ibídem) y promover programas de educación e investigación ambiental cooperando y coordinando con los organismos estatales y entidades privadas, pero mediante acuerdos, convenios o contratos. No está dentro de las funciones de la Junta Directiva de Inrenare autorizar a una ONG para que desarrolle las actividades ecológicas a que se refiere la resolución acusada de inconstitucionalidad, sin que medie el correspondiente convenio celebrado de acuerdo con las normas vigentes sobre la materia.

FECHA UT SUPRA.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR LA FIRMA FORENSE SUCRE, ARIAS, CASTRO Y REYES, CONTRA EL ARTÍCULO 1150 DEL CÓDIGO JUDICIAL. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TREINTA (30) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Mediante Oficio N° 37 del 4 de enero de 1996, el Juez Segundo de Circuito de lo Civil, del Primer Circuito Judicial de Panamá, remitió al Pleno de la Corte Suprema de Justicia la advertencia de inconstitucionalidad formulada por la firma forense Sucre, Arias, Castro & Reyes contra el artículo 1150 del Código Judicial, dentro del proceso ordinario que la sociedad Créditos Mundiales, S. A. y otros, le siguen a Aseguradora Mundial de Panamá, S. A.

I. LA NORMA ACUSADA

La norma que se estima inconstitucional es el artículo 1150 del Código Judicial, cuyo contenido es del tenor siguiente:

> **"Artículo 1150**. Procede igualmente el recurso de casación contra sentencias o autos proferidos en primera instancia por los Jueces de Circuito, cuando las partes están de acuerdo en prescindir de la segunda instancia y así lo manifiesten en escrito dentro del término de su ejecutoria, siempre que el asunto sea de aquellos que admiten

el recurso conforme a los artículos 1148 y 1149. **En este caso el recurso sólo podrá fundarse en casación en el fondo**."

II. LA NORMA INFRINGIDA Y EL CONCEPTO EN QUE SUPUESTAMENTE LO HA SIDO

A juicio de la demandante, la norma transcrita viola el artículo 32 de la Constitución Política, disposición que transcribimos a continuación:

"**Artículo 32**. Nadie será juzgado sino por autoridad competente y conforme a los trámites legales, ni más de una vez por la misma causa penal, policiva o disciplinaria."

La actora considera que la limitación contenida en la parte final del artículo 1150 del Código Judicial infringe directamente el mencionado artículo 32 de la Constitución Política al no permitir que se examinen las formalidades del proceso contentivo de la decisión sometida al recurso de casación. Con tal limitación, se afectan las posibilidades de defensa de las partes en el proceso.

Agrega la apoderada de quien hace la advertencia, que cuando se pretende que las partes no puedan exigir el lleno de las formalidades que la Ley establece para la tramitación de los procesos, se viola directamente la garantía del debido proceso y se pone en peligro la seguridad que debe reinar en la administración pública.

III. OPINIÓN DE LA PROCURADURÍA DE LA ADMINISTRACIÓN

Al emitir concepto a través de la Vista N° 53 del 25 de enero de 1996, la Procuradora de la Administración indicó que el artículo 1150 del Código Judicial no es inconstitucional porque la casación instituida en esa norma sólo puede darse cuando las partes así lo convienen y lo manifiestan por escrito dentro del término de la ejecutoria de la resolución de primera instancia. De esta forma, la parte que se considere agraviada debe tener presente que sólo procede la casación en el fondo, pues, para que sea admisible la casación en la forma es necesario el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 1179 del mismo Código (fs. 8-15).

IV. CONSIDERACIONES DEL PLENO

Al entrar en las consideraciones de fondo el Pleno de la Corte Suprema de Justicia desea observar, que a pesar de que el apoderado de la demandante manifiesta en forma general que advierte la inconstitucionalidad del artículo 1150 del Código Judicial, únicamente considera inconstitucional la parte final de esta norma, tal como se lee en la última línea de la foja 2 y se desprende de los argumentos esbozados al formular la advertencia. Ante esta realidad procesal, el Pleno de la Corte sólo se pronunciará respecto de la inconstitucionalidad de la parte final de dicha norma, que se refiere a que la casación directa o "per saltum" sólo podrá fundarse en causales de fondo.

El artículo 32 de la Constitución Política consagra el principio del "**debido proceso**", el que, de acuerdo con el contenido de dicho precepto, consiste en el derecho que tiene toda persona a ser juzgado por la autoridad competente; el derecho a que ese juzgamiento se realice conforme a los trámites legales y el derecho a no ser juzgado más de una vez por la misma causa penal, policiva o disciplinaria.

En el presente caso, nos interesa referirnos únicamente a la garantía que tiene toda persona de ser juzgado conforme a los trámites legales. Esta garantía parte del supuesto de que el ordenamiento jurídico se ha encargado de regular el procedimiento o la actuación que deben seguir las autoridades en la tramitación de los distintos negocios. La regulación o existencia previa de las normas procedimentales constituyen en sí misma una garantía para todos los asociados, la cual se vulnera en el momento en que las autoridades públicas dejan de aplicar dichas normas o aplican un trámite distinto al que las mismas preven.

En el caso que nos ocupa, la Ley prevé las reglas procedimentales a las que

deben sujetarse las partes y los tribunales en la tramitación y sustanciación del recurso de casación. Este recurso extraordinario está regulado en el Capítulo VI del Título XI del Código Judicial, relativo a los "Medios de Impugnación y Consulta", el cual contiene aspectos tales como: las resoluciones susceptibles de casación; el anuncio del recurso y envío de expediente a la Corte; la sustanciación del recurso, etc.

La norma contentiva de la frase acusada de inconstitucional, consagra la llamada casación **"per saltum"**, en virtud de la cual se permite a las partes obviar el trámite de la apelación y recurrir directamente a la Sala Civil de la Corte, con el fin de que ésta revise sentencias o autos de primera instancia, siempre que se cumplan los presupuestos contemplados en el artículo 1150 ibídem. LÓPEZ BLANCO sostiene que "Con este sistema sui generis de casación se busca evitar, cuando las partes van a apelar, o una de ellas lo va a hacer, y de acuerdo con la doctrina repetida del tribunal se sabe que el fallo posiblemente será confirmado, que se interponga la apelación para obtener un fallo de segunda instancia que a su vez se va a recurrir en casación, recurso que sí tiene probabilidades de éxito dada la posición de la Corte frente a determinados puntos de derecho. De este modo se procura suprimir el trámite dispendioso e inútil de la apelación, y se deja el camino expedito para que el proceso llegue en forma directa a la Corte, a fin de que ésta tramite el recurso de casación" (LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. **Derecho Procesal Civil Colombiano. Parte General. Tomo I.** Editorial Temis. Reimpresión de la Cuarta edición. Bogotá. 1989. pág. 427).

Del contenido del citado artículo 1150 del Código Judicial, se desprende que para que la casación "per saltum" opere es necesario que se cumplan ciertos presupuestos, a saber:

a) Debe tratarse de una sentencia o de un auto dictado en primera instancia por un Juez de Circuito;
b) Las partes, de común acuerdo, deben manifestar por escrito al juez de la causa su intención de prescindir de la segunda instancia;
c) Dicha manifestación deberá hacerse dentro del término de la ejecutoria del auto o sentencia que se pretende impugnar mediante la casación; y,
d) Debe tratarse de un asunto que admite el recurso de casación, de acuerdo con los artículos 1148 y 1149 del Código Judicial.

Tal como se observa, el Código Judicial señala un trámite ordinario para el recurso de casación en general, pero, tratándose de la llamada casación **"per saltum"**, consagra un procedimiento especial al que se acogen las partes por su expresa y voluntaria decisión. A juicio del Pleno de la Corte, la frase acusada no infringe el principio del debido proceso consagrado en el artículo 32 de la Constitución Política, porque cuando las partes se acogen al trámite previsto en el artículo 1150 ibídem, lo hacen bajo la premisa de que en la formalización del recurso de casación no podrán alegarse causales de forma. De esta manera, si las partes pretenden fundamentar su recurso en alguna de las causales contempladas en el artículo 1155 del Código Judicial, deben utilizar el trámite ordinario o normal que dicho cuerpo legal contempla para este tipo de recursos.

Cabe agregar, que el procedimiento que consagra el artículo 1150 tiene un carácter netamente optativo; es una facultad que la ley confiere a las partes en aras de la economía procesal, quienes están en condiciones de decidir si se acogen o no al mismo. Dicha norma no impone al demandante o demandado ningún trámite, sino que, por el contrario, cuando éstos deciden prescindir de la segunda instancia por medio de la casación "per saltum", están renunciando voluntariamente al trámite regular de la casación y se someten por sí mismos a la tramitación expedita que consagra la norma en cita, dentro de la cual está la imposibilidad de alegar causales de forma.

Por otra parte, en la casación "per saltum" tampoco pueden tener lugar las causales de forma, porque como bien afirma la señora Procuradora de la Administración, para que la casación en la forma sea admisible, debe reclamarse la reparación de la falta en la instancia en que se haya cometido y también en la siguiente, salvo que el reclamante hubiere estado legítimamente impedido para hacerlo o se tratare de un vicio insubsanable, tal como lo establece el artículo

1179 del Código Judicial.

Finalmente, debe tenerse presente que la casación "per saltum" obedece al principio de economía procesal que, precisamente, está contemplado en el artículo 212 de la Carta Fundamental. Pretender fundamentar la casación "per saltum" en causales de forma, obviando una segunda instancia, implica un verdadero contrasentido con respecto a la economía procesal que procuran las partes a través de esta especial tramitación de dicho recurso.

Por las razones anotadas, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia considera que la frase acusada no infringe el artículo 32 ni ninguna otra norma de la Constitución Política y así debe declararlo.

De consiguiente, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES INCONSTITUCIONAL la frase: "En este caso el recurso sólo podrá fundarse en casación en el fondo", consagrada en la parte final del artículo 1150 del Código Judicial.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR LA FIRMA FORENSE RIVERA Y BOLÍVAR EN CONTRA DE LA SENTENCIA SD-180 DEL 2 DE NOVIEMBRE DE 1994, EXPEDIDA POR EL JUZGADO PRIMERO DEL CIRCUITO DE LO PENAL DEL TERCER CIRCUITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La firma forense Rivera y Bolívar, actuando en representación de TABACALERA ISTMEÑA, S. A., ha presentado demanda en la cual pide al Pleno de la Corte Suprema de Justicia que declare que es inconstitucional la Sentencia SD-180 expedida por el Juzgado Primero de Circuito De Lo Penal del Tercer Circuito Judicial de Panamá, con sede en La Chorrera.

I. LA PRETENSIÓN Y SU FUNDAMENTO

La pretensión que se formula en este proceso constitucional consiste en una petición dirigida al Pleno de la Corte Suprema de Justicia para que se declare que es inconstitucional la sentencia arriba mencionada.

Sostiene la demandante que la sentencia impugnada es violatoria de los artículos 17 y 32 de la Constitución Política de la República de Panamá.

La demandante considera que la sentencia SD-180 de 2 de noviembre de 1984 infringe de manera directa, por comisión, el artículo 17 constitucional por cuanto, a su juicio, se dicta una resolución que niega un procedimiento elemental dentro de un proceso penal, sin el cual se garantiza la muerte o extinción del proceso. Ello es así, señala el demandante, por cuanto el Juez Primero de Circuito de lo Penal del Tercer Circuito Judicial de Panamá con sede en La Chorrera, ha calificado el mérito de las sumarias del expediente de la querella sin antes haber acumulado ésta al expediente de la Acusación Particular interpuesta por la firma Rivera y Bolívar en representación de Tabacalera Istmeña, S. A. cercenado el derecho de su poderdante a un proceso justo y limpio. El demandante considera que se ha demostrado la violación del artículo 17 de la

Constitución en conjunción con el artículo 32 de la misma.

II. OPINIÓN DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN

El Procurador General de la Nación rindió concepto mediante la Vista N° 379 de 4 de septiembre de 1995. En dicho escrito el citado funcionario considera que la resolución atacada de inconstitucional no fue recurrida por las partes, es decir, que se abstuvieron de recurrir contra ella por medio del recurso ordinario de apelación, ante el Segundo Tribunal Superior de Justicia y el extraordinario de casación, ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Agrega el citado funcionario que la Corte ha reiterado el criterio de que la acción de inconstitucionalidad sólo procede cuando hayan sido promovidos los recursos que la ley señale, para dejar sin efecto el acto jurisdiccional o variarlo. Además, estima el Procurador, la acción de inconstitucionalidad no constituye otra instancia dentro del proceso penal, de tal suerte que no debe asimilarse o integrarse a éste. Por el contrario, señala, la acción de inconstitucionalidad es de carácter extraordinaria y en ella la Corte actúa no como Tribunal de Instancia sino como intérprete auténtico de la Constitución.

Ante el incumplimiento de un requisito jurisprudencial el Procurador solicita se declare no viable la mencionada acción de inconstitucionalidad.

III. DECISIÓN DE LA CORTE

Una vez expuestos los argumentos del demandante, y el concepto vertido por el Procurador General de la Nación, entra el Pleno a considerar la pretensión que se formula en la demanda.

Se trata de un proceso de apropiación indebida en detrimento de la Compañía Tabacalera Istmeña, S. A. que se le sigue al señor Martín Justiniano Solís García y que tuvo su origen en la querella presentada por el señor Américo Augusto Tejada González. En el mismo, el Juzgado Primero de Circuito de lo Penal del Tercer Circuito Judicial de Panamá decretó el sobreseimiento definitivo a favor del mencionado Solís García mediante sentencia SD-180 de 2 de noviembre de 1994, por considerar que no se acreditó la legitimación del querellante, que no se ha probado el delito y que la extemporaneidad de la querella extingue la responsabilidad penal.

El demandante señala como una de las normas infringidas el artículo 17 de la Constitución Política. Dicha norma, ha señalado la Corte en innumerables fallos, es de carácter programático por lo que se descarta la atinencia de la infracción de esta disposición en apoyo de una demanda de inconstitucionalidad.

En segundo lugar, el demandante señala como violado el artículo 32 constitucional en relación a los artículos 2032, 2011, 2210 y 2291 del Código Judicial. El artículo 32 de la Constitución Política consagra la garantía constitucional del debido proceso. El mismo debe ser entendido como una institución instrumental, en virtud de la cual debe asegurarse a las partes en todo proceso -legalmente establecido y que se desarrolle sin dilaciones injustificadas- oportunidad razonable de ser oídas por un tribunal competente predeterminado por la ley, independiente e imparcial de pronunciar respecto de las pretensiones y manifestaciones de la parte contraria, de aportar pruebas lícitas relacionadas con el objeto del proceso y de contradecir las aportadas por la contraparte, de hacer uso de los medios de impugnación consagrados por ley contra resoluciones judiciales materiales y conforme a derecho, de tal manera que las personas puedan defender efectivamente sus derechos.

Así pues, uno de los elementos que integran la noción del debido proceso lo constituye la contradicción y bilateralidad. En este sentido, en la doctrina se define este elemento como la "oportunidad de tomar posición y pronunciarse sobre pretensiones y manifestaciones de parte contraria ... la bilateralidad de la audiencia no es más que un elemento de la garantía constitucional del debido proceso que es consecuencia del principio de igualdad ante la Ley prevista en el artículo 20 de la Constitución Nacional. Las partes en el proceso, pues, tienen iguales derechos y oportunidades para defenderse lo cual excluye, según el artículo 19 de la Constitución Nacional, los fueros o privilegios personales o

cualquier discriminación por razón de raza, nacimiento, clase social, sexo, religión o ideas políticas. (HOYOS, ARTURO. El Debido Proceso. Editorial Temis. 1996. pág. 92).

La Corte ha señalado en innumerables ocasiones que lo que se pretende es garantizar a las partes una igual oportunidad de acción y contradicción, es decir, el permitir a cada parte el tomar posición con respecto a las manifestaciones, pretensiones o pruebas de la otra parte, de manera que se desarrolle el contradictorio en igualdad de condiciones. En este sentido, la Corte ha señalado que se viola el debido proceso justamente cuando no se le permite a la parte participar efectivamente en esta etapa del proceso con igual oportunidad de defensa.

La Corte observa que esta demanda surge con relación a un fallo emitido en razón de una querella presentada por el señor Américo Augusto Tejada González contra el señor Martín Justiniano Solís García por el supuesto delito contra el patrimonio en detrimento de la empresa antes mencionada.

Esta Corporación estima que es incorrecto el criterio expresado por la parte actora al señalar que se ha violado el debido proceso al no haberse producido la acumulación de la querella antes mencionada con la acusación particular interpuesta posteriormente por la empresa Tabacalera Istmeña, S. A. en contra del señor Martín Solís. Tampoco procede aducir la violación al artículo 32 constitucional al haberse decretado el sobreseimiento definitivo a favor del antes mencionado Solís García por supuesta falta de legitimidad de personería. No son estos los aspectos que perfeccionan una infracción al debido proceso en un proceso constitucional como lo es la demanda de inconstitucionalidad. Las infracciones señaladas por el actor debían ser impugnadas en su momento mediante los recursos legales que la ley dispone, tales como la apelación ante el Segundo Tribunal Superior de Justicia y el extraordinario de Casación ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

No se viola el debido proceso por cuanto no se le coarta al actor la posibilidad de pronunciarse y de accionar en la querella que dio lugar al presente recurso, ni se limitan la bilateralidad y el contradictorio. Se contradice el actor al señalar que no le es posible intervenir en la querella por no ser parte en ella cuando en los hechos de la demanda de inconstitucionalidad que nos ocupa admite que el señor Américo Augusto Tejada González presentó la querella en cuestión en su calidad de Gerente de Personal de Tabacalera Istmeña, S. A. Si bien no se acredita en el expediente la legitimidad de personería del señor Américo Tejada ni se puede determinar si se produjeron las ilegalidades en cuestión, estos no constituyen aspectos impugnables en la vía constitucional. No se observa que se haya limitado la participación de los representantes legales de la empresa Tabacalera Istmeña, S. A. en el proceso de querella interpuesto contra el señor Martín Solís, ni mucho menos que se le haya impedido la defensa de sus derechos, por tanto, no se ha producido la violación al debido proceso. No procede, pues, el presente cargo.

En consecuencia, el Pleno de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES INCONSTITUCIONAL la sentencia SD-180 del 2 de noviembre de 1994, expedida por el Juzgado Primero de Circuito De lo Penal del Tercer Circuito Judicial.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR EL LICENCIADO SAMUEL QUINTERO

MARTÍNEZ, EN SU PROPIO NOMBRE Y REPRESENTACIÓN, CONTRA LOS NUMERALES 3 Y 4 DEL ARTÍCULO 217 DE LA LEY N° 3 DEL 17 DE MAYO DE 1994. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado SAMUEL QUINTERO MARTÍNEZ, actuando en su propio nombre y representación interpuso, ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, acción de inconstitucionalidad contra los numerales 3 y 4 del artículo 217 de la Ley N° 3 del 17 de mayo de 1994, por medio de la cual se aprobó el Código de la Familia.

Cumplidos los trámites a los que se refieren los artículos 2554 y siguientes del Código Judicial, el negocio se encuentra en estado de resolver y a ello se procede de conformidad con las consideraciones siguientes.

I. LAS NORMAS ACUSADAS

En la demanda se acusa de inconstitucionales los numerales 3 y 4 del artículo 217 de la Ley N° 3 del 17 de mayo de 1994, los cuales son del siguiente tenor:

> "**Artículo 217**. Al admitirse la demanda de divorcio o antes, si hubiese urgencia, se tomarán provisionalmente por el juez, y sólo mientras dure el juicio, las providencias siguientes:
> ...
> 3. Señalar la suma que el marido debe dar a la mujer para expensas de la litis, si ella no tiene sueldo o bienes bajo su propia administración y siempre que ella no viva públicamente con otro hombre;
>
> 4. Señalar alimentos: a) a los hijos o hijas que no estén en poder del padre, y b) a la mujer, si ésta no estuviese separada voluntariamente del marido o no viviese públicamente con otro hombre;"

II. DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES INFRINGIDAS Y EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN.

En la demanda se citan como infringidos los artículos 19 y 53 de la Constitución Política, los cuales establecen en su orden lo siguiente:

> "**Artículo 19**. No habrá fueros o privilegios personales ni discriminación por razón de raza, nacimiento, clase social, sexo, religión o ideas políticas."
>
> "**Artículo 43**. El matrimonio es el fundamento legal de la familia, descansa en la igualdad de derechos de los cónyuges y puede ser disuelto de acuerdo con la Ley."

El demandante estima que las normas impugnadas violan en forma directa el transcrito artículo 19, ya que las mismas dispensan un trato privilegiado a la mujer, en la medida en que ordenan al juez que, en caso de urgencia y sólo mientras dure el juicio de divorcio, señale la suma que el marido debe dar a la mujer para las expensas de la litis y sus gastos de alimentos, al igual que los alimentos de los hijos que no estén en su poder. Agrega el licenciado QUINTERO MARTÍNEZ, que tanto las expensas de la litis como la obligación de suministrar alimentos deben decretarse sobre uno de los litigantes, sin aplicar otra distinción que no sea la relativa a la capacidad económica. Sostiene,que el artículo 217 debió indicar que el obligado a sufragar las expensas de la litis es "**el cónyuge solvente**" y no señalar esa obligación en forma categórica a cargo del marido, además de que el cónyuge que reclame dicha asistencia no viva públicamente con otra pareja.

Con relación al artículo 53, el demandante considera que el mismo se violó en forma directa, ya que los presupuestos consagrados en los numerales 3 y 4 del artículo 217 de la citada Ley N° 3 de 1994 para que la mujer pueda exigir las expensas de la litis y los alimentos, no se hacen extensivos a ambos cónyuges, previendo que puede ser el marido quien requiera la asistencia de la mujer. Además, podría ocurrir que la mujer no tenga a los hijos bajo su poder y éstos requieran que ella les suministre los alimentos (fs. 3- 5).

III. OPINIÓN DE LA PROCURADURÍA DE LA ADMINISTRACIÓN

Mediante su muy ilustrativa Vista N° 166 del 26 de abril de 1995, el Procurador de la Administración Suplente emitió concepto. El representante del Ministerio Público estima que las normas acusadas infringen el artículo 19 de la Constitución Política, pero no por las razones que señala el demandante, sino porque establecen un trato discriminativo contra el hombre. Por esta misma razón, dicha normas violan el artículo 53 de ese cuerpo supralegal (fs. 17-24).

IV. DECISIÓN DE LA CORTE

El artículo 19 de la Constitución Política prohíbe toda clase de fueros o privilegios personales, así como toda discriminación por razón de raza, nacimiento, clase social, sexo, religión o ideas políticas. El artículo 53, por su parte, consagra el principio de igualdad de derechos de los cónyuges, sobre el cual descansa el matrimonio.

En nuestro ordenamiento jurídico existe un sinnúmero de disposiciones tendientes a garantizar esa igualdad. En materia de deberes y derechos de los cónyuges, por ejemplo, el artículo 77 del Código de la Familia los obliga a fijar de común el domicilio conyugal; el artículo 78, a vivir juntos en el domicilio conyugal y a guardarse fidelidad y, el artículo 79, a contribuir con los gastos de alimentos y otros de la familia, en forma proporcional a su estado económico.

En el caso bajo estudio, el artículo 217 del Código de la Familia establece las medidas provisionales que el juez puede adoptar antes o después de admitida una demanda de divorcio y sólo mientras dure el juicio. De acuerdo con el numeral 3 de esta norma, el juez puede establecer la suma que el marido debe dar a la mujer para las expensas de la litis, si ella no tiene sueldo o bienes bajo su propia administración y siempre que no viva públicamente con otro hombre. Asimismo, el numeral 4 faculta al juez para que asigne los alimentos a los hijos o hijas que no estén bajo el poder del padre, al igual que a la mujer, si ésta no estuviese separada voluntariamente del marido o no viviese públicamente con otro hombre.

El Pleno de la Corte considera que las medidas consignadas en los numerales 3° y 4° del citado artículo implican ciertamente una discriminación en contra del marido, ya que no sólo facultan al juez para establecer provisionalmente a cargo del marido las obligaciones allí establecidas, sino que además le impiden adoptarlas a cargo de la mujer, en caso de que sea el marido quien requiera la asistencia de aquélla para sufragar los gastos del proceso de divorcio, para cubrir parte de los alimentos de los hijos que estuviesen bajo su poder e, incluso, su propia alimentación.

El Pleno, al igual que el demandante, estima que para cumplir con el principio de igualdad que consagra el artículo 19 de la Constitución Política y, específicamente, con el principio de igualdad de los cónyuges, contenido en el artículo 53 del mismo Estatuto Fundamental, el juez debe quedar autorizado para fijar las expensas de la litis a favor de cónyuge insolvente y con cargo al cónyuge solvente, siempre que además se cumpla con el resto de los requisitos que establece el primer párrafo del artículo 217 ya citado. Si los dos cónyuges fuesen solventes esta norma no se aplicaría.

En el caso del numeral 4°, los alimentos de los hijos deben fijarse a cargo del cónyuge solvente, siempre que los mismos no estuviesen bajo su poder, lo mismo que los alimentos del cónyuge necesitado.

El Pleno coincide con lo expresado por el señor Procurador de la Adminis-

tración Suplente, en el sentido de que el hecho de "liberar a la cónyuge solvente de la obligación de suministrar alimentos cuando el marido sea insolvente o los hijos permanezcan en poder de éste" no se compadece con la filosofía que inspira al Código de la Familia. "La igualdad de derechos consagrada en la norma constitucional implica tutelar al cónyuge económicamente insolvente y a los menores que se encuentren en poder de éste, independientemente de que sea el hombre o la mujer".

Por lo expuesto, el Pleno de la Corte considera que únicamente deben declararse inconstitucionales aquellas frases que, dentro de las normas acusadas, implican un trato discriminatorio contra el marido, ya que la fijación provisional por parte del juez de la suma que debe aportar uno o ambos cónyuges para cubrir las expensas de la litis, así como de los alimentos a quienes tengan derecho, no viola en modo alguno el ordenamiento constitucional y estas medidas pueden ser aplicadas por el juzgador interpretándolas en relación con las normas vigentes sobre la materia.

De consiguiente, la Corte Suprema de Justicia, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE SON INCONSTITUCIONALES las frases: "... que el marido debe dar a la mujer ... si ella no tiene sueldo o bienes bajo su propia administración y siempre que ella no viva públicamente con otro hombre" y "... a) a los hijos o hijas que no estén en poder del padre, y b) a la mujer, si ésta no estuviese separada voluntariamente del marido o no viviese públicamente con otro hombre", contenidas en los numerales 3° y 4° del artículo 217 de la Ley N° 3 del 17 de mayo de 1994, por medio de la cual se aprobó el Código de la Familia. El texto de éste artículo quedará así:

> "ARTÍCULO 217. Al admitirse la demanda de divorcio o antes, si hubiese urgencia, se tomarán provisionalmente por el Juez, y sólo mientras dure el juicio, las providencias siguientes:
>
> 1. Separar a los cónyuges, si no existe separación anterior a la demanda;
>
> 2. Poner a los hijos o hijas al cuidado de uno de los cónyuges o de los dos, o de otra persona, según proceda;
>
> 3. Señalar la suma para expensas de la litis;
>
> 4. Señalar alimentos;
>
> 5. Ordenar, en caso de que haya dudas de que la mujer pueda estar embarazada, los exámenes médicos y/o de laboratorio necesarios para determinar tal situación; y en caso de estar embarazada, las medidas necesarias para evitar la suposición del parto.

Notifíquese y Publíquese en la Gaceta Oficial.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) CARLOS E. MUÑOZ POPE
(Con Salvamento de Voto) (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO RAFAEL A. GONZÁLEZ

Respetuosamente expreso que considero que solamente es inconstitucional, por constituir un trato preferencial, que el marido tenga siempre que pagar alimentos a la mujer, con las únicas excepciones de que ella se haya separado voluntariamente o viviese públicamente con otro hombre (artículo 217, ordinal 4°, literal (b).

Es un trato preferencial porque bien puede ser que el estado económico de

ella sea mejor que el de él; y a pesar de eso, él tendría que pagarle alimentos.

No sería privilegio si a las excepciones enunciadas en el ordinal 4°, literal (b) del artículo 217 del Código de Familia, se agregara "o no estuviese en igual o mejor situación económica que el marido".

Los alimentos para la mujer se justifican por la desigualdad social en que de hecho está. En cuanto al varón, no hay justificación para ello; podría resultar hasta inmoral.

No estoy de acuerdo con declarar inconstitucional el ordinal 3° del aludido artículo 217 del Código de Familia, de tal manera que ahora simplemente exprese que el juez debe "señalar la suma para expensas de la litis". ¿Quién tiene derecho a ello? ¿Ambos? Entonces se compensan.

Por estas razones, respetuosamente salvo el voto.

Fecha ut supra.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

TRIBUNAL DE INSTANCIA

PROCESO DISCIPLINARIO SEGUIDO CONTRA EL LICENCIADO RUBÉN E. PECCHIO OSPINO, DEFENSOR DE OFICIO CIRCUITAL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL, EN VIRTUD DE RESOLUCIÓN DE 4 DE MARZO DE 1996, DICTADA POR LA SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DOS (2) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado **GABRIEL E. FERNÁNDEZ MADRID**, actuando en su calidad de Director Nacional Encargado del Instituto de la Defensoría de Oficio, ha remitido a esta Superioridad el expediente disciplinario iniciado contra el licenciado **RUBÉN E. PECCHIO OSPINO**, Defensor de Oficio Circuital del Primer Circuito Judicial.

El proceso disciplinario de marras se inicia, conforme a la narrativa del licenciado **FERNÁNDEZ**, en virtud de los conceptos vertidos por la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia en resolución de 4 de marzo de 1996, dentro del recurso extraordinario de Revisión presentado por ROGELIO MANUEL CLOUGH, y dentro del cual fue designado el licenciado **RUBÉN PECCHIO** para que en su calidad de Defensor de Oficio del señor CLOUGH, le representara. Sin embargo, y tal como se desprende del texto de la resolución de 4 de marzo de 1996 visible a folios 3-6 del legajo, vencido el término de formalización del recurso de revisión, el defensor designado no presentó escrito alguno.

Esta actuación omisiva mereció por parte de la Sala Segunda de la Corte Suprema, adelantar los siguientes conceptos:

> "En cuanto al silencio por parte del Defensor de Oficio designado para la representación de ROGELIO MANUEL CLOUGH, durante el término concedido para la formalización del presente recurso, la Sala opina oportuno hacer ciertas consideraciones al respecto. Siendo que los defensores de oficio prestan un servicio de necesidad pública, como abogados designados"... para que actúen en defensa de los intereses de toda persona que tenga derecho a asistencia legal gratuita." (Artículo 406 del C. J.) y considerando que el defensor va a la jurisdicción a proteger o reivindicar el derecho de su patrocinado,

> se colige que éstos deben cumplir con todas las obligaciones que, en general, les impusiere una defensa técnica completa y eficaz, así pues, deberán velar porque se cumplan todas las garantías procesales en favor de sus defendidos, facilitándoles a los mismos la prestación de servicios legales competentes, para lo cual deberán cumplir el poder recibido sin demora y llevar a cabo oportunamente las diligencias que deban ejecutar. ...
>
> A juicio de esta Sala, en este caso en particular hay **negligencia manifiesta** por parte del Defensor de Oficio, toda vez que éste no ha presentado escrito alguno que justifique la falta de defensa legal de su representado, lo que conlleva un supuesto de responsabilidad por daños y perjuicios imputable a dicho defensor. En razón de esto, el Instituto de Defensoría de Oficio debe tomar las medidas pertinentes con el objeto de que se eviten situaciones similares en el futuro."

Como consecuencia del pronunciamiento transcrito **ut-supra**, el Director Nacional del Instituto de la Defensoría de Oficio designó una Comisión Especial que se encargaría de instruir una investigación relacionada con la actuación del licenciado **RUBÉN PECCHIO** en este caso.

Dicha Comisión, en escrito calendado 8 de abril de 1996 remitió al Director Nacional de la Defensoría de Oficio un Informe relacionado con los cargos imputados al licenciado **PECCHIO**, manifestándose en lo medular que los descargos presentados por el prenombrado satisfacían las explicaciones necesarias en vías de justificar su conducta en el caso del señor CLOUGH, por lo que su recomendación era la no imposición de sanción alguna contra el licenciado **PECCHIO.**

Sin embargo, el Director Nacional Encargado del Instituto de la Defensoría de Oficio, al evaluar las piezas de la investigación, externó su criterio en el sentido de que los razonamientos de la Sala Segunda de lo Penal, en lo atinente a la actuación negligente del licenciado **PECCHIO** eran correctas, remitiendo la investigación a la entidad nominadora para que procediera disciplinariamente, de conformidad con lo previsto en el Reglamento Interno de la Institución.

CONSIDERACIONES DE LA CORTE

Es de advertir que la competencia de esta Máxima Corporación Judicial para conocer de la investigación que se adelantó en relación a la conducta del licenciado **RUBÉN PECCHIO** se encuentra asignada tanto en normas del Código Judicial, como del Reglamento Interno del Instituto de la Defensoría de Oficio, aprobado mediante Acuerdo de la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema mediante Acuerdo N° 239 de 19 de noviembre de 1993.

En efecto, el artículo 406 del Código Judicial señala que:

> "ARTÍCULO 406: El Instituto de Defensoría de Oficio depende del Órgano Judicial, **está constituido por los abogados que designe el Pleno de la Corte Suprema de Justicia** para que actúen en defensa de los intereses de toda persona que tenga derecho a asistencia legal gratuita."

Por su parte, el Reglamento Interno del Instituto de la Defensoría de Oficio, en su artículo 5° asigna a su Dirección Nacional, entre otras, la función de velar por el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente reglamento **e imponer las sanciones correspondientes por faltas u omisiones al mismo, en los casos que no corresponda a la autoridad nominadora.**

El artículo 60 del citado Reglamento es del tenor siguiente:

> "Artículo 60. Las sanciones disciplinarias establecidas en los artículos anteriores se aplicarán a los Defensores de Oficio, Distritales y Circuitales, **por la autoridad nominadora**, **previo**

> **concepto del Director Nacional y el levantamiento de una investigación que instruirá una Comisión Especial compuesta por tres Defensores de Oficio, designados por el Director.** Respecto al personal subalterno las sanciones deberán ser aplicadas por el jefe inmediato."

Este procedimiento se cumplió fielmente, tal como consta en autos, correspondiendo al Pleno de la Corte, como autoridad nominadora, decidir en torno a la imposición o no de una sanción disciplinaria en este caso, con vista en el material probatorio que reposa en la investigación.

Como ha quedado en evidencia, la génesis de esta instrucción se ubica en la omisión en que incurrió el licenciado **PECCHIO**, defensor de oficio dentro del proceso que por tráfico internacional de drogas se seguía a ROGELIO CLOUGH por el que fuera condenado a la pena de 60 meses de prisión. El condenado anunció la presentación del recurso extraordinario de revisión, mismo que debía ser formalizado por su defensor, licenciado **PECCHIO**, quien sin razón aparente, no compareció al proceso, ni allegó justificación alguna para tal omisión.

Habida cuenta de que se trataba de un recurso de naturaleza eminentemente técnica, sujeto al cumplimiento de requisitos expresamente establecidos en el Código Judicial, la Sala Penal decidió inadmitir el recurso, ante la falta de formalización del mismo por parte del letrado que ejercía la defensa técnica del sancionado.

En vista de la conducta abiertamente omisiva por parte del defensor de oficio, que no se justificó en ningún momento, la Sala Penal externó los conceptos reproducidos previamente dentro de esta resolución judicial, indicando que todo parecía apuntar hacia la manifiesta negligencia del defensor.

ARGUMENTOS DEL ENCARTADO

En el escrito que corre a folios 11-16 del expediente, el licenciado **PECCHIO** ha justificado su omisión en este caso, indicando que luego de notificada la providencia que le corría traslado del negocio concediéndole término para que asistiese al señor CLOUGH en la formalización del recurso de revisión, el letrado se vio afectado por quebrantos de salud que le mantuvieron fuera de su despacho por espacio de un mes y dos días (según los certificados de incapacidad médica) aunque el imputado indica que su ausencia fue de aproximadamente 16 días.

Entre los argumentos que destacan en el escrito de descargos, el licenciado **PECCHIO** ha manifestado:

> "El día miércoles **10 de enero de 1996** la Secretaría de la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia me notificó de la Providencia fechada 15 de diciembre de 1995, mediante la cual se me designaba como defensor de Oficio a fin de representar los intereses de **ROGELIO MANUEL CLOUGH ROBLES** reo de un delito de Tráfico Ilícito de Drogas, dentro del Recurso de Revisión que éste elevara mediante nota manuscrita firmada por él mismo a dicha corporación de justicia.
>
> Sin embargo, a partir del día 24 de enero de 1996 se me otorgó incapacidad de ocho (8) días para efectuar mis labores habituales, es decir hasta el 31 de ese mismo mes, inclusive. La incapacidad fue extendida nuevamente por ocho (8) días adicionales a partir del 1° de febrero al 9 de febrero inclusive. Finalmente, se me extendió por segunda vez la incapacidad desde el 12 hasta el 26 de febrero del año en curso.
>
> Como quiera que la primera incapacidad otorgada fue por ocho días no se pudo proceder al nombramiento de un suplente, lo que también sucedió durante el período de la segunda incapacidad otorgada. Fue durante la primera incapacidad otorgada que se venció el término concedido por la Sala Segunda para la formalización del recurso

pedido por **CLOUGH ROBLES**. ...

Por si fuera poco, durante ese período se produjeron algunos incidentes entre nuestra asistente y nuestra secretaria, teniendo que proceder a amonestar verbalmente en varias ocasiones a mi regreso a la ex-asistente Anayansi De La Cruz, precisamente por falta a sus deberes, entre los cuales se encontraban estar al tanto de los términos concedidos por los Tribunales para la presentación de escritos ...

Precisamente a dicha persona le había asignado expresamente el trámite interno para la consecución de las copias del expediente del señor **CLOUGH ROBLES** que se encuentra archivado en el Juzgado Primero del Circuito Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, sin embargo al encontrarme yo incapacitado, ésta descuidó sus deberes. Cuando reingreso a mis labores tratando de ponerme al día en los asuntos pendientes ésta me negó expresamente que tuviéramos pendiente algún recurso de revisión ante la Corte ...

Es importante poner en conocimiento de ustedes que desde el 10 de enero al 23 de enero, es decir desde la fecha de notificación del término hasta el día antes de mi incapacidad el suscrito atendió 53 notificaciones personales en los Tribunales y 5 diligencias ante el Ministerio Público, atendí 11 familiares de defendidos, a 10 detenidos y a 6 procesados en libertad. Se sustentaron 2 apelaciones y se presentaron otros 12 escritos. Durante ese mismo período mi despacho realizó 30 a 45 audiencias entre ordinarias y preliminares programadas y ninguna de las 15 que no se realizaron fue por causa imputable al suscrito ..."

DECISIÓN DEL TRIBUNAL

Esta Superioridad, una vez examinadas las constancias que reposan en el expediente, y pese a que la Comisión Especial Investigadora conformada por tres Defensores de Oficio Circuitales consideró que no existía falta susceptible de sanción disciplinaria en relación con la actuación del licenciado **PECCHIO** en este caso, considera de lugar hacer énfasis en los siguientes puntos:

1. Si bien es cierto que la providencia de 4 de enero de 1996 que concedió término para presentar el recurso de revisión al licenciado **PECCHIO** le concedió un término perentorio de 15 días para la formalización del recurso, ésta le fue notificada el día 10 de enero de 1996, y no fue sino hasta el día 23 de ese mes en que se extiende la primera incapacidad al defensor de oficio.

2. El Pleno de la Corte es consciente de los ingentes esfuerzos que realizan los Defensores de Oficio para atender el creciente cúmulo de negocios que se les asignan en las diferentes esferas en que actúan. Estos funcionarios coadyuvan a la administración de justicia en nuestro país, desempeñando un rol importante, pese a los limitados recursos con que cuenta el Órgano Judicial, por lo que naturalmente es de asumir que el volumen de negocios por atender puede entorpecer o imposibilitar en determinadas situaciones el desempeño expedito de sus funciones.

Sin embargo, en el caso específico de la conducta del licenciado **PECCHIO** en lo atinente a los cargos que se investigan, este Tribunal ha podido advertir que aunque el letrado se encontraba bajo incapacidad médica al momento del vencimiento del plazo para la presentación del recurso de Revisión ante la Sala Penal, **ésta incapacidad devino con marcada posterioridad al momento en que se le notificara del término para presentar tal recurso.**

En estas circunstancias, cuando el defensor se acogió a su incapacidad estaba en perfecto conocimiento de la perentoriedad de formalizar la defensa del señor CLOUGH.

3. Se ha podido constatar efectivamente la concurrencia de una serie de problemas

de índole administrativo entre el licenciado **PECCHIO** y su personal subalterno (asistente), a quien éste atribuye la responsabilidad de los trámites dejados de realizar durante su período de ausencia.

Lamantablemente, la licenciada Anayansi De La Cruz quien se desempeñaba como Auxiliar o Asistente del Defensor de Oficio hasta el 5 de marzo de 1996, no compareció ante la investigación, quedando por deslindar el grado de responsabilidad que le atañe. Sin embargo, ésta sólo hubiese tenido que responder ante su jefe inmediato, ya que la responsabilidad primaria ante este Tribunal le corresponde al licenciado **PECCHIO** como Jefe de Despacho, y quien debió tomar las providencias pertinentes en vías de que sus representados no se viesen menoscabados en su derecho de defensa por razón de problemas de índole administrativo o disciplinario interno de su despacho, máxime cuando según expresó el propio licenciado **PECCHIO**, las diferencias entre éste y su Asistente legal eran de vieja data.

En cuanto a la pruebas aportadas por el letrado para justificar su ausencia del despacho: **CERTIFICADOS DE INCAPACIDAD MÉDICA**, esta Corporación Judicial advierte que conforme a lo previsto en el artículo 46 del Reglamento Interno del Instituto de la Defensoría de Oficio, para que una ausencia se considere justificada debe ser refrendada por el superior jerárquico, y si es ocasionada por enfermedad y es mayor de un día, será probada mediante certificado médico de incapacidad.

Sin embargo, al 9 de abril de 1996, según informe secretarial de la Dirección Nacional de la Defensoría de Oficio (cfr. foja 21), no constaba ni original ni copia de certificados de incapacidad otorgados al licenciado **RUBÉN PECCHIO**.

De ello se deduce que las certificaciones médicas que se adjuntaron al expediente, dos provenientes del Hospital Santo Tomás y la tercera proveniente de una Clínica Privada, fueron aportadas a requerimiento y luego de iniciada la investigación, pero no se presentaron ante la Dirección Nacional de la Defensoría de Oficio, trámite que debió surtirse para los efectos de constatar la causa de la ausencia del señor defensor.

Era pues, responsabilidad directa del prenombrado remitir a la instancia superior la justificación que motivó su ausencia prolongada del despacho, tal como lo prevé la disposición reglamentaria antes citada, en vías de que pudiesen tomarse las previsiones administrativas pertinentes para suplir el cargo, o coordinar la realización de las diligencias judiciales del despacho que se encontrasen pendientes o programadas.

Cabe igualmente indicar que si el letrado no hizo uso del último período de incapacidad que culminaba el 26 de febrero de 1996 (como ha señalado), no se explica la omisión en remitir en tiempo oportuno la justificación de sus ausencias a la Secretaría de la Dirección Nacional, siendo que su completa omisión hubiese originado que se calificaran como **ausencias Injustificadas**, definidas en el artículo 47 del Reglamento Interno como los casos en que el funcionario no acude a trabajar y no presenta ningún motivo que justifique su ausencia, y que se sancionan con descuentos al salario sin perjuicio de que se adopten otras sanciones disciplinarias.

En estas circunstancias, este Tribunal conceptúa que la actitud del licenciado **PECCHIO**, calificada en principio como de "manifiestamente negligente" por la Sala Penal de la Corte en la resolución de 4 de marzo de los corrientes, puede ser ponderada en esta etapa con mayores elementos de juicio, toda vez que dentro de esta causa, la parte afectada hizo uso de su derecho de defensa.

Así se advierte, tomando en consideración las delicadas y variadas funciones que desempeñan estos funcionarios aunado al quántum de negocios por atender que se les asigna, que se dificulta en cierto grado que el defensor que asume la representación de una persona pueda cumplir con esa representación y dedicarse a ella de una manera más eficaz.

Sin embargo, esta Colegiatura conceptúa que la actitud -si no negligente, sí poco diligente del licenciado **PECCHIO** en este caso específico- no es cónsona con el deber contenido en el artículo 36 numeral 3° del Reglamento Interno: "Desempeñar el trabajo convenido con la intensidad, cuidado, eficiencia, preparación y destreza, compatibles con sus aptitudes, en el tiempo y lugar establecidos."

Pese a ello, los aspectos y circunstancias que se suscitaron en este caso (aportación de certificaciones médicas, trastornos en la prestación de auxilio por parte del de personal subalterno, volumen de negocios por atender, etc,) atenúan la gravedad de la misma, por lo que conforme al artículo 291 del Código Judicial, procedemos a imponerle al licenciado **PECCHIO** la sanción prevista en el numeral 1° de dicha excerta legal.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, AMONESTA al licenciado RUBÉN PECCHIO, Defensor de Oficio Circuital del primer Circuito Judicial, por el incumplimiento del numeral 3 artículo 36 del Reglamento Interno del Instituto de la Defensoría de Oficio.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

CALIFICACIÓN DE IMPEDIMENTO DENTRO DE LA ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LICDO. ROLANDO VILLALAZ GUERRA, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL DR. MAURO ZÚÑIGA ARAÚZ, EN SU CONDICIÓN DE SECRETARIO GENERAL DE LA ASOCIACIÓN DE MÉDICOS, ODONTÓLOGOS Y PROFESIONALES AFINES DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL (AMOACSS), CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN EL AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA N° 9-96, EMITIDO POR EL DIRECTOR NACIONAL DE COMPRAS Y ABASTOS DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, SEIS (6) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La Magistrada Aura E. Guerra de Villalaz ha solicitado que se le separe del conocimiento del presente recurso de amparo de garantías constitucionales propuesto por la Asociación de Médicos, Odontólogos y Profesionales afines de la Caja de Seguro Social (AMOACSS), representada por el Doctor **MAURO ZÚÑIGA A.**, quien otorgó poder judicial al Doctor Rolando Villalaz Guerra; contra la orden de hacer contenida en el Aviso de Licitación N° 9-96, emitido por el Director Nacional de Compras y Abastos de la Caja de Seguro Social.

La Magistrada Guerra de Villalaz señala lo siguiente:

> "Para su correspondiente lectura, ha ingresado a este Despacho el proyecto presentado por el Magistrado Sustanciador que resuelve la acción de amparo de garantías constitucionales interpuesta por el doctor **ROLANDO VILLALAZ GUERRA**, en nombre y representación el doctor Mauro Zúñiga Araúz, en su calidad de Secretario General de la Asociación de Médicos, Odontólogos y Profesionales afines de la Caja de Seguro Social (AMOACSS), contra la orden de hacer contenida en el aviso de Licitación Pública N° 9-96, emitido por el **DIRECTOR NACIONAL DE COMPRAS Y ABASTOS DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL.**

Como quiera que el abogado en este caso es el doctor **ROLANDO VILLALAZ GUERRA** (f. 13), a quien me unen vínculos de parentesco dentro del primer grado de consanguinidad, solicito al resto de los Magistrados que conforman el Pleno de esta Corporación Judicial, me separen del conocimiento del presente caso.

Derecho: Artículo 749 numeral 1° del Código Judicial".

En opinión de los suscritos, la situación descrita por la Magistrada Guerra de Villalaz concuerda con lo dispuesto en la disposición invocada; por lo que se considera legal el impedimento solicitado.

En consecuencia, los suscritos Magistrados del PLENO DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA que la Magistrada Aura E. Guerra de Villalaz está impedida para conocer del presente negocio, y DISPONE que se llame a su suplente para que actúe en su lugar.

Notifíquese.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE HECHO INTERPUESTO POR EL FISCAL PRIMERO DE CIRCUITO DE COLÓN, CONTRA RESOLUCIÓN DE 18 DE ENERO DE 1996, DICTADA POR EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, DENTRO DE LA ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE MOISÉS DAVID MIZRACHI E IDA DOMÍNGUEZ. MAGISTRADO PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, NUEVE (9) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado **MANUEL ALONSO SUCCARI H.**, Fiscal Primero de Circuito de Colón, Agente Instructor de las sumarias seguidas a **MOISÉS DAVID MIZRACHI** e **IDA DOMÍNGUEZ** por delito contra la Fe Pública, presentó ante esta corporación de justicia, Recurso de Hecho, para que se concediera la apelación que había interpuesto contra la resolución de 18 de enero de 1996, mediante la cual el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, declaró ilegal la orden de detención preventiva girada por su despacho. Como el recurso reunía las exigencias formales, se dispuso conceder a las partes el término de tres días para presentar sus alegatos escritos, tal cual lo dispone el artículo 1139 del Código Judicial.

Durante ese lapso las partes interesadas aportaron sus puntos de vista sobre el asunto in examine, de los cuales se pone de relieve lo siguiente:

OPINIÓN DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN

Mediante Vista N° 12 del 18 de marzo de 1996, el licenciado José Antonio Sossa, da respuesta al traslado, solicitado en providencia de 27 de febrero de 1996 (f. 42).

Al exponer los antecedentes del caso, señala que el licenciado Succari al estar disconforme con la resolución del 18 de enero de 1996, en la cual el Segundo tribunal decretó ilegal la orden de detención preventiva de Moisés Mizrachi Russo e Ida Esperanza Domínguez Castillero, presentó recurso de apelación, el cual fue rechazado por ese tribunal al considerar que la resolución

cuestionada no admite el medio de impugnación presentado.

Estima la máxima representación del Ministerio Público, que el recurso de hecho ha sido presentado dentro del término legal, el cual resultó negado por el Juez (Segundo Tribunal Superior), las copias fueron solicitadas y retiradas dentro del plazo señalado (Fs. 16 y 35) y se acudió ante el superior (pleno de la Corte) en la debida oportunidad.

Agrega, que el único requisito del artículo 1141 del Código Judicial que requiere un estudio particular es el que establece que debe tratarse de una resolución recurrible, siendo precisamente este punto donde radica la controversia surgida entre el Segundo Tribunal Superior de Justicia y el Fiscal Primero de Circuito de Colón.

Sobre el particular, analiza el artículo 2599 del Código Judicial, e indica que éste contempla el recurso de apelación para el evento que se declare procedente la detención y deja una especie de silencio ante el supuesto que la detención sea decretada ilegal y que se permita su apelación por parte del funcionario que ha visto revocada la orden impartida por él y en la cual se decretaba la privación de la libertad de una persona.

Es así que considera, que ese silencio no impide que el funcionario pueda impugnar la resolución que decreta ilegal la detención; porque en el presente caso, la Fiscalía Primera del Circuito de Colón es parte dentro del proceso de habeas corpus y tiene los mismos derechos y garantías que el proponente de la referida acción.

Hace alusión al principio de Igualdad Jurídica de las partes,que significa otorgar a cada parte amplias facultades en paridad de condiciones para que pueda libremente llevar sus pretensiones, alegar y probar su derecho. Sobre el particular, transcribe parte de la sentencia de 3 de enero de 1994, dictada por el Pleno del a Corte Suprema de Justicia.

Concluye señalando, que negarle la apelación al licenciado Succari, es aceptar la vulneración del principio de igualdad jurídica, pues el artículo 2599 del Código Judicial no prohíbe de manera expresa la posibilidad de presentar el recurso de apelación en contra de la sentencia que decreta ilegal la detención.

En consecuencia solicita se admita la apelación contra la resolución del 18 de enero de 1996 emitida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia (fs. 43-49).

OPOSICIÓN DE LA DEFENSA TÉCNICA

La firma forense Rubio, Álvarez, Mizrachi & Díaz, presentó escrito de oposición a la vista emitada por el Procurador General de la Nación y solicita la no admisión del Recurso de Hecho presentado por el Fiscal Manuel Succari.

Como basamento a su solicitud manifiesta que el artículo 1141 del Código Judicial establece como primer requisito para la admisibilidad de un recurso de Hecho, el que la resolución que se intenta impugnar sea recurrible y la sentencia que decretó la ilegalidad de la orden de detención no es recurrible.

En cuanto al silencio aludido por el Procurador, estima no constituye una especie de derecho difuso apelar la declaratoria de ilegalidad, porque si fuera así, el legislador lo hubiese plasmado en la norma, máxime si se trata de la custodia de un derecho fundamental. Además, que al utilizar la norma la palabra **"sólo"**, apócope de **"solamente"**, lo que se hace es excluir cualquier otro recurso. Acota que si se acepta que la ley no es suficientemente específica, entonces de aplicarse los principios in dubio pro reo y el de que los servidores públicos, sólo pueden hacer lo que la ley expresamente les autorice. Por lo que en ningún caso procedería la apelación.

En cuanto al principio de Igualdad, señala que el Procurador equipara los derechos del Ministerio Público con los de los sujetos de la Orden de Detención, cómo si se tratara de un proceso ordinario. Indica que el Pleno de la Corte

Suprema de Justicia en resolución del 16 de febrero de 1996, manifestó que la Acción Extraordinaria de Habeas Corpus es un proceso especial, en el que la protección de la libertad del imputado prima y en consecuencia la ley le concede un margen amplio. Además, que el procedimiento extraordinario de Habeas Corpus se consagra bajo un libro aparte del Código Judicial, que trata exclusivamente de Instituciones de Garantías y no dentro de los procesos conocidos como ordinarios. De allí, que se tramita con prelación a otros casos pendientes, mediante proceso sumarísimo, con pocas formalidades y de manera expedita. Por lo que no admite recurso de apelación cuando una detención es decretada ilegal y no es recurrible, como ya lo afirmó la Corte (fs. 51-54).

FUNDAMENTO DEL PLENO

De conformidad con lo normado en el artículo 1141 del Código Judicial, es indispensable para la admisibilidad del recurso de hecho que la resolución cuya impugnación ha sido negada, sea recurrible mediante el recurso que no fue concedido. Luego entonces, para admitir el presente recurso de hecho se necesita que la resolución del 18 de enero de 1996 sea recurrible mediante recurso de apelación.

La constitución Nacional tutela el derecho a la libertad personal, por medio de la acción de habeas corpus (art. 21). Esta garantía constitucional tiene entre sus características procesales la de ser un procedimiento sumario, acelerado, unilateral y de acción popular.

Con respecto a la unilateralidad, el Dr. Cuestas en el Derecho Procesal panameño ha manifestado: **"puede afirmarse que en el proceso de habeas corpus existe un pequeño contradictorio, una fase limitada de pruebas, lo cierto es que en él sólo intervienen el recurrente, la autoridad que detiene, cuya participación se circunscribe a rendir un dictamen o un informe y el tribunal que resuelve. Como no existe posibilidad alguna de que la autoridad que realiza la detención tenga una participación activa en el proceso, aparte de la presentación escrita de su informe, hay que concluir que el habeas corpus es un procedimiento fundamentalmente unilateral"** (Dr. Carlos H. Cuestas G. El Habeas Corpus preventivo. Cuadernos de Educación Judicial N° 7 Septiembre 1995. Panamá).

En ese sentido, al analizar el artículo 2599 del Código Judicial que establece:

> "Contra la sentencia que dicte el Tribunal de Habeas Corpus, sólo cabe el recurso de apelación en el efecto suspensivo, en el caso de que se declare procedente la detención".

Se evidencia que dicha normativa, no hace más que proteger el derecho a la libertad personal, cuando establece que la decisión jurisdiccional que concluye un juicio especial constitucional de habeas corpus **sólo** puede ser cuestionada, mediante recurso de apelación, cuando se declare procedente la detención.

Es así, que al interpretar esta norma se debe favorecer, un derecho fundamental del ser humano, como lo es su libertad personal.

En cuanto al principio de Igualdad Jurídica, esa alegación no es consecuente, dado que el funcionario, precisamente con su orden de detención, está en un plano de ventaja y al accionarse la acción de habeas corpus, la ley desde el marco constitucional, arriba a ese equilibrio que mal invoca la Procuraduría General de la Nación, revisando si la orden impartida satisface las formalidades y fundamentos legales.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA NO VIABLE el recurso de hecho propuesto por el licenciado MANUEL ALONSO SUCCARI H., Fiscal Primero del Circuito de Colón, contra la resolución de 18 de enero de 1996, proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

IMPEDIMENTO EN LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR LA LICDA. MARIBLANCA STAFF WILSON CONTRA LA FRASE "ABANDONASE" CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 494 DEL CÓDIGO DE LA FAMILIA. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, NUEVE (9) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La Magistrada Aura E. Guerra de Villalaz ha manifestado impedimento para conocer de la demanda de inconstitucionalidad formulada por la licenciada MARIBLANCA STAFF WILSON contra la palabra "abandonase" Contenida en el artículo 494 del Código de la Familia.

La Magistrada Aura E. Guerra de Villalaz fundamenta su impedimento en los siguientes términos:

> "Como quiera que formé parte como miembro de la Comisión Codificadora del Código de la Familia y del Menor, me encuentro impedida de conocer de la presente demanda de inconstitucionalidad.
>
> Fundamento mi impedimento en el artículo 2562 numeral 2 del Código Judicial:
>
> "2562 Son causales de impedimento:
> ...
> 2. Haber dictado el acto acusado o intervenido en su preparación o expedición."

Observa el resto del Pleno, que la situación expuesta por la Magistrada Sustanciadora se subsume en lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 2562 del Código Judicial. Una vez configurada la causal de impedimento, lo procedente, es, pues, declarar legal el impedimento invocado por la Magistrada.

En consecuencia, la Corte Suprema, Pleno administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley DECLARA que es LEGAL el impedimento invocado por la Magistrada Aura E. Guerra de Villalaz para conocer de la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por la Lcda. Mariblanca Staff contra la palabra "abandonase" contenida en el artículo 494 del Código de la Familia.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

MANIFESTACIÓN DE IMPEDIMENTO DEL MAGISTRADO JUAN ANTONIO TEJADA MORA EN LA ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LCDO. LUIS CARLOS CEDEÑO, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE CARLOS ALFREDO LÓPEZ GUEVARA, CONTRA LAS ORDENES DE HACER CONTENIDAS EN LOS AUTOS N° 3992 DE 19 DE DICIEMBRE DE 1995, Y

N° 4036, DE 26 DE DICIEMBRE DE 1995, AMBOS EXPEDIDOS POR EL JUEZ TERCERO DE CIRCUITO DE LO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, DIEZ (10) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Honorable Magistrado **JUAN ANTONIO TEJADA MORA**, mediante escrito de fecha 26 de abril de 1996, solicita al resto del Pleno de esta Corporación de Justicia, se le declare impedido para conocer de la presente acción de amparo de Garantías Constitucionales, propuesta por el Lic. LUIS CARLOS CEDEÑO, en nombre y representación de CARLOS ALFREDO LÓPEZ GUEVARA contra el Juez Tercero del Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá.

El referido escrito de impedimento, es del tenor siguiente:
"...
El suscrito debe manifestar que desde hace más de 30 años mantiene una estrecha relación de amistad y familiaridad con el Doctor PEDRO BARSALLO, siendo que ambos somos recíprocamente padrinos de bautizo de nuestros hijos, lo que enfatiza los lazos de naturaleza religiosa y espiritual que nos vincula.

Esta situación podría conducir a que se interpretara que me anima algún interés particular en las resultas del negocio, causal de impedimento recogida en el numeral 2 del artículo 749 del Código Judicial. Por ende, y en vías de que no sobrevengan dudas en lo referente a la absoluta imparcialidad de la decisión judicial por causa del vínculo existente entre este juzgador y una de las partes interesadas en el negocio, solicito respetuosamente a mis colegas del Pleno de la Corte, se me declare impedido para conocer de la presente acción de amparo de garantías constitucionales.

Las causales de impedimentos de magistrados y jueces para el conocimiento de la acción de amparo se encuentran establecidas en el artículo 2619, en concordancia con el 2620 del Código Judicial, cuyo contenido textualmente es el siguiente:

"ARTÍCULO 2619: Los magistrados y jueces que conozcan esta clase de asuntos se manifestarán impedidos cuando sean parientes dentro del segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad de alguna de las partes o de sus apoderados, o hayan participado en la expedición del acto". (Subraya la Corte).

"ARTÍCULO 2620: En las demandas de amparo sólo se podrán promover incidentes de recusación por el impedimento que establece el artículo anterior".

En consecuencia, al no contemplar las normas antes citadas la circunstancia invocada por el Magistrado JUAN A. TEJADA MORA en su escrito de impedimento, considera la Corte que no es del caso acceder a su solicitud, tal como lo ha sentado en reiterada jurisprudencia esta Superioridad.

Por lo expuesto, la Corte Suprema, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES LEGAL el impedimento manifestado por el Honorable Magistrado JUAN A. TEJADA MORA.

Notifíquese.

(fdo.) ELIGIO SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.

Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

MANIFESTACIÓN DE IMPEDIMENTO DE LA MAGISTRADA AURA E. GUERRA DE VILLALAZ DENTRO DE LA ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR LA LCDA. MABEL DEL C. ATENCIO EN REPRESENTACIÓN DE JAIME PADILLA BELIZ, CONTRA LOS ARTÍCULOS 1230 Y 1235 DEL CÓDIGO FISCAL. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, QUINCE (15) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La Magistrada AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ ha presentado solicitud para que se le declare impedida y en consecuencia se le separe del conocimiento de la advertencia de inconstitucionalidad que contra los artículos 1230 y 1235 del Código Fiscal, formulara la licenciada **MABEL ATENCIO** en su calidad de apoderada judicial del señor **JAIME PADILLA**.

Sostiene la Magistrada **DE VILLALAZ**, para fundar su solicitud de impedimento lo siguiente:

> "... al percatarme de quien es el advertidor debo comunicar a los Magistrados que integran esta Corporación de la existencia de causales de enemistad grave, de trascendencia pública, contra el sujeto procesal que hace la pretensión, por lo que carezco de las condiciones anímicas de imparcialidad que permitan intervenir en este caso."

Esta Superioridad, al considerar la solicitud de impedimento de la Magistrada **AURA DE VILLALAZ**, debe señalar que la situación de enemistad entre el advertidor y la juzgadora que invoca la Honorable Magistrada, se encuentra excluida de las causales especiales de impedimento que para esta clase de procesos prevé el artículo 2562 del Código Judicial. Por otra parte es preciso considerar que en los procesos de naturaleza constitucional, la cuestión debatida es de puro derecho, sin que existan **partes** procesalmente hablando.

En estas circunstancias, y dada la existencia de causales legales específicas para estos casos, cuya aplicación prima sobre la causal general invocada de manera principal por la Magistrada **DE VILLALAZ** para fundar su solicitud de impedimento, esto es el artículo 749 numeral 15 del Código Judicial, no es dable acceder a la petición presentada.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES LEGAL el impedimento manifestado por la Magistrada AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ para conocer de la advertencia de inconstitucionalidad que contra los artículos 1230 y 1235 del Código Fiscal, formulara la licenciada MABEL ATENCIO en su calidad de apoderada judicial del señor JAIME PADILLA, y DISPONE que continúe conociendo del referido negocio.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

MANIFESTACIÓN DE IMPEDIMENTO DE LA MAGISTRADA AURA E. GUERRA DE VILLALAZ DENTRO

DE LA DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR LA LICENCIADA MARIBLANCA STAFF EN CONTRA DE UNA FRASE CONTENIDA EN LA PARTE FINAL DEL NUMERAL 6 DEL ARTÍCULO 212 DEL CÓDIGO DE LA FAMILIA. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Dentro de la demanda de inconstitucionalidad propuesta por la licenciada MARIBLANCA STAFF, contra la frase contenida en la parte final del numeral 6 del artículo 212 del Código de la Familia, la Honorable Magistrada AURA E. GUERRA DE VILLALAZ solicita al resto de los miembros del Pleno se le separe del conocimiento del presente caso.

Dicha solicitud se lee así:

"Para su correspondiente lectura, ha ingresado a este Despacho el proyecto presentado por le Magistrado Sustanciador que resuelve la demanda de inconstitucionalidad formulada por la licenciada MARIBLANCA STAFF WILSON, contra una frase contenida en al parte final del numeral 6 del Artículo 212 de la Ley N° 3 de 17 de mayo de 1994 (Código de la Familia y del Menor).

Como quiera fui miembro de la Comisión Codificadora del Código de la Familia y del Menor, participando en la elaboración del texto del Anteproyecto que se presentó a la Asamblea Legislativa para su consideración, me encuentro impedida para conocer de la presente demanda de inconstitucionalidad.

Fundamento esta manifestación de impedimento en el artículo 2562 numeral 2 del Código Judicial; que es del tenor siguiente:

"Artículo 2562. Son causales de impedimento:
...
2. Haber dictado el acto acusado o intervenido en su preparación o expedición".

Solicito por ello, al resto de los Magistrados que forman el Pleno de esta Corporación Judicial, me separen del conocimiento del presente caso.

Derecho: Artículo 2562 numeral 2 del Código Judicial.

Panamá, 3 de mayo de 1996.

(Fdo.)
AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
Magistrada de la Corte Suprema de Justicia".

Ahora bien, considera el Pleno que es del caso acceder a lo solicitado por la Magistrada manifestante puesto que, la circunstancia invocada constituye causal de impedimento al tenor de lo dispuesto en el artículo 2562, numeral 2, del Libro IV (Instituciones de Garantía), del Código Judicial.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL el impedimento manifestado por la Honorable Magistrada AURA E. GUERRA DE VILLALAZ, la separa del conocimiento de la presente demanda de inconstitucionalidad, y DISPONE que aprehenda el conocimiento del mismo el doctor CARLOS E. MUÑOZ POPE en su calidad de Suplente Personal del titular impedido.

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

MANIFESTACIÓN DE IMPEDIMENTO DENTRO DEL INCIDENTE DE RECUSACIÓN, DENUNCIA DE FALTA A LA ÉTICA JUDICIAL Y VIOLACIÓN DE LOS DEBERES, RESPONSABILIDAD Y FACULTADES DE LOS MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL, DENTRO DEL PROCESO MENDIZÁBAL-FALCONETT. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El magistrado JOSÉ MANUEL FAÚNDES, ha presentado manifestación de impedimento, para que se le separe del conocimiento en el incidente por recusación, denuncia de falta a la ética judicial y violación de los deberes, responsabilidad y facultades de los Magistrados del Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, dentro del proceso MENDIZÁBAL-FALCONETT.

El magistrado JOSÉ MANUEL FAÚNDES, fundamenta su impedimento en los siguientes términos:

> "Con anterioridad y por razón de otro recurso interpuesto en este mismo proceso me declaré impedido, visto que actué como apoderado en representación de la familia Mendizábal, me declaro impedido en esta nueva acción instaurada.
>
> (fdo.)
> JOSÉ MANUEL FAÚNDES".

La circunstancia invocada por el Honorable Magistrado, es causal de impedimento y la misma está consagrada en el numeral 5 del artículo 749 del Código Judicial, por lo que corresponde designar al Magistrado Suplente.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL el impedimento invocado por el Magistrado JOSÉ MANUEL FAÚNDES, para actuar en el incidente de recusación, denuncia de falta a la ética judicial y violación de los deberes, responsabilidad y facultades de los Magistrados del Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, dentro del proceso MENDIZÁBAL-FALCONETT, lo separa del conocimiento del mismo y, DISPONE llamar al Magistrado Suplente, para que asuma el conocimiento del proceso antes mencionado.

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ÓRGANO JUDICIAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA PRIMERA DE LO CIVIL

MAYO 1996

ACLARACIÓN DE SENTENCIA

ACLARACIÓN DE SENTENCIA: SUCESIÓN TESTAMENTARIA DE RODRIGO ALVARADO SANGUINETTI (Q. E. P. D.) RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO SUMARIO QUE LE SIGUE RODRIGO OCTAVIO ALVARADO RÍOS. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA PRIMERA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El Licenciado JOSÉ MANUEL FAÚNDES HIJO, apoderado especial de ANITA LYMA YOUNG DE ALVARADO, en calidad de albacea testamentaria de RODRIGO ALVARADO SANGUINETTI (q. e. p. d.), dentro del proceso sumario que le sigue RODRIGO OCTAVIO ALVARADO RÍOS, solicita a esta Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, la corrección de la Resolución del 18 de abril de 1996, dictada por esta Sala y por medio de la cual NO ADMITE el recurso de casación propuesto.

En la petición formulada por el licenciado FAÚNDES, visible a fojas 210 a 212, se considera que el recurso de casación es susceptible de corrección, por las razones que allí se expresan. El recurrente pretende que se cambie el criterio emitido por esta Sala, que declaró inadmisible el recurso, y que, en su defecto, se ordene la corrección o la admisibilidad del mismo, dicha petición es improcedente, tal como lo señala el artículo 1168 del Código Judicial, que a la letra dice:

> "ARTÍCULO 1168: Contra las resoluciones de la Corte sobre corrección o sobre admisibilidad no cabe recurso alguno".

Por tal razón, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RECHAZA DE PLANO la solicitud de corrección de la resolución dictada por esta Sala de la Corte Suprema de Justicia el 18 de abril de 1996.

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

APELACIÓN EN PROCESO MARÍTIMO

EZCONY INTERNATIONAL CORP., ASSICURAZIONI GENERALI, S. P. A. Y ASEGURADORA MUNDIAL DE PANAMÁ, S. A. APELAN CONTRA LA RESOLUCIÓN DE FECHA 17 DE MAYO DE 1995, PROFERIDA POR EL TRIBUNAL MARÍTIMO EN EL PROCESO ORDINARIO (ACUMULADOS) QUE EZCONY INTERNATIONAL CORP. LE SIGUE A ASSICURAZIONI GENERALI, S. P. A. Y ASEGURADORA MUNDIAL DE PANAMÁ, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA PRIMERA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Dentro del Proceso Ordinario Marítimo que **EZCONY INTERNATIONAL CORP**. le sigue a **ASSICURAZIONI GENERALI, S. P. A.** y a **ASEGURADORA MUNDIAL DE PANAMÁ, S. A.**, la firma SOLÍS, ENDARA, DELGADO Y GUEVARA en nombre de la demandante, al igual que la firma SUCRE, ARIAS, CASTRO & REYES representando a las demandadas, han interpuesto recurso de **Apelación** contra la sentencia de 17 de mayo de 1995 dictada por el Tribunal Marítimo.

La sentencia apelada consta de fojas 986 a 1032 de este expediente y resolvió lo que a continuación se transcribe:

"En mérito de lo expuesto, el que suscribe Juez del Tribunal Marítimo de Panamá, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **RESUELVE:**

1. ABSOLVER a las coaseguradoras ASSICURAZIONI GENERALI, S. P. A. y a ASEGURADORA MUNDIAL, S. A. conforme la póliza de seguros 50.1789 y sus adendas, por la reclamación del asegurado EZCONY INTERNATIONAL CORP. relacionada a las pérdidas sufridas en el contenido del contenedor TEXU-41351-2, transportado desde Busan, Corea, a ciudad del Este, Paraguay, correspondiendo condenar a la demandante EZCONY INTERNATIONAL CORP. en costas por trabajo en derecho y por los gastos relacionados con esta reclamación.

2. CONDENAR a las coaseguradoras en la presente causa, ASSICURAZIONI GENERALI, S. P. A. y ASEGURADORA MUNDIAL, CONFORME LA PÓLIZA N° 50.1789 y sus adendas, a pagar en concepto de indemnización por la mojadura de los televisores, al asegurado EZCONY INTERNATIONAL CORP. la suma de CIENTO CUATRO MIL NOVECIENTOS BALBOAS (B/.104,900.00), suma por la cual responde ASSICURAZIONNI GENERALI en el cincuenta por ciento (50%) y ASEGURADORA MUNDIAL en el (50%), más los intereses legales y gastos del proceso relacionados con esta reclamación, en las mismas proporciones del cincuenta por ciento (50%); pagaderos los intereses a partir de la fecha de la declinación del reclamo por mojadura, el 20 de agosto de 1993, fecha de la carta en la que el asegurador declina formalmente el reclamo por el siniestro número S/T/93.0005. Corresponde igualmente condenar a las coaseguradoras demandadas por costas en cuanto a trabajo en derecho en relación con esta reclamación.

3. CONDENAR en costas en cuanto a trabajo en derecho en ambas reclamaciones las cuales se compensan.

Liquide la Secretaría lo de su incumbencia. ..." (Fs. 1031-1032).

ANTECEDENTES DEL CASO

La sociedad **EZCONY INTERNACIONAL CORP.** (sociedad organizada según las leyes de Florida, E. U. A.) presentó ante el Tribunal Marítimo de Panamá el 9 de noviembre de 1993 demanda contra **AZZICURAZIONI GENERALI, S. P. A.** (compañía aseguradora italiana registrada en Panamá), para que fuese condenada a pagarle **B/.140,000.00** en concepto de indemnización por robo de carga de su propiedad, la cual estaba cubierta por la póliza de Seguro de Transporte N° 50.1789 que mantenía con dicha compañía (fs. 2-5). La aseguradora demandada contestó mediante escrito visible a fs. 20, advirtiendo que ciertamente emitió la póliza para amparar la mercancía de la actora, pero en coaseguro con ASEGURADORA MUNDIAL DE PANAMÁ, a quien correspondería responder por el 50% de la indemnización por cualquier siniestro.

Al verificarse la existencia del coaseguro, se llamó a la compañía ASEGURADORA MUNDIAL al proceso como litis consorte.

A fojas 63 consta otra demanda interpuesta el 20 de enero de 1994 ante el Tribunal Marítimo por EZCONY INTERNATIONAL CORP. contra ASSICURAZIONI GENERALI, S. P. A. y/o ASEGURADORA MUNDIAL, solicitando que se le condene al pago de B/.150,000.00 en concepto de indemnización por el costo de mercancía mojada en embarque, cubierta por la póliza de Seguro de Transporte N° 50.1789. La contestación de esta demanda consta de fojas 84 a 86.

Por figurar en ambos casos la misma parte y tratarse del reclamo relacionado con mercancía embarcada, cubierta por la misma póliza flotante de transporte, el tribunal decidió acumular los procesos. Por tanto, como se lee en la respectiva sentencia (fs. 986 a 1032), se examinaron ambos reclamos y se decidió en cuanto a cada uno de ellos.

La Sala procede al examen de los recursos de apelación propuestos por ambas partes según el orden en que fueron anunciados, resolviendo lo de lugar inmediatamente después del análisis de cada cargo, en concordancia con lo dicho al respecto en la resolución impugnada.

I. Recurso de Apelación interpuesto por EZCONY INTERNATIONAL CORPORATION (Fs. 1039-1059).

La disconformidad de la demandante radica en que la sentencia reconoció en forma parcial su pretensión puesto que sólo condenó a las demandadas a pagarle la suma de B/.104,900.00 con intereses a partir de la fecha del reclamo por mojadura y, "las absolvió por el reclamo referido a la pérdida sufrida en el contenido del Contenedor TEXU-41351-2, transportado desde Busan, Corea, a la ciudad del Este, Paraguay". En esta instancia persigue la actora que la Corte condene a las demandadas, por la pérdida de los televisores que eran parte del aludido contenedor, y que se "reconozca como probada la excepción de nulidad que mediante el presente recurso se ensayará, por permitirlo el Artículo 72 de la Ley 8 de 30 de marzo de 1982".

El apelante expresa como "**CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA**" que, el juzgador hizo énfasis en las constancias de la audiencia preliminar y la ordinaria concluyendo que la parte actora o asegurada no probó que hubiese promovido un documento, certificación o constancia ("hoja de excepción") "que pudiera haber mantenido -razonablemente- el derecho del asegurador de repetir contra presuntos responsables en el caso de haber pagado la indemnización, la que por ello no procede". Es decir, que el asegurador quedó legitimado contractualmente para rechazar y declinar el pago que tendría que entregar al asegurado, porque éste último no cumplió con su deber, conforme a la póliza y a lo dispuesto en el artículo 1407 del Código de Comercio, de mantener y promover el derecho de subrogación a favor de la aseguradora (sus derechos y acciones como subrogante, para que la aseguradora pudiera repetir en contra de los que causaron la pérdida y deterioro de los efectos asegurados).

Veamos los aspectos que cuestiona el demandante-apelante sobre el fallo marítimo antes aludido:

1. Plantea la **excepción de NULIDAD**, en atención a lo dispuesto por el artículo 72 y a la causal 7 del artículo 74, ambos de la Ley 8 de 1982. La nulidad pretendida es con respecto al contenido del Endoso N° 50.1789/3 con el que se enmienda la cláusula 16 de la póliza sobre "NORMAS A SEGUIR EN CASO DE SINIESTRO", toda vez que la censura considera que de la misma "deviene un pacto contrario a la ley". En tal sentido sostiene que se ha violado una de las limitaciones de la autonomía de la voluntad a que se refiere el artículo 1106 del Código Civil, a base de hacer surgir contractualmente un derecho que desborda lo permisible desde el punto de vista de la legalidad debido a que el título de la subrogación legal o el derecho de subrogación nada más tendrá lugar si el asegurador de manera efectiva indemniza el daño reclamado conforme al artículo 1407 del Código de Comercio. Explica que la subrogación "por más que se pacte en los contratos de seguro, no es convencional sino legal y esto, dentro de la regulación del seguro marítimo, encuentra su establecimiento legal en lo que dispone el artículo 1407 del Código de Comercio, que dice:

> "Pagada por el asegurador la cantidad asegurada, se subrogará en el lugar del asegurado en cuanto a los derechos y acciones que correspondan contra los que por malicia o culpa causaron la pérdida o deterioro de los efectos asegurados".

Según el apelante la subrogación, como viene definida por la ley es la sustitución del asegurador en el lugar del asegurado, en su misma situación jurídica frente al responsable del daño, por lo que ella no transmite un derecho mejor del que se tiene. Antes del pago de la indemnización "la obligación del asegurado es de diligencia y a título de cooperación con el propósito de impedir que sean perjudicados los futuros derechos del asegurador, por lo que debe comportarse de manera diligente a fin de que sus actos no perjudiquen el futuro derecho del asegurador" (Subrayado de la Sala).

Sobre este punto el Tribunal Marítimo sostuvo lo siguiente:
"...
Sin embargo, entre nosotros y en los Estados Unidos, se hace necesario el pago, reiteramos, para que nazca el derecho de subrogación y por ello la inclusión de las cláusulas 16.2 **del Instituto para Mercancías** y la cláusula 16 de las **CONDICIONES GENERALES** sobre NORMAS A SEGUIR **EN CASO DE SINIESTRO.**

De lo que viene exponiéndose, corresponde entonces determinar si en el presente caso, el no cumplir con las cláusulas 16.2 y 16 citadas y enfatizadas a través de un endoso en el caso subjúdice, exoneran del pago indemnizatorio a las aseguradoras en el presente caso.

Las cláusulas 16.2 y más específicamente, la cláusula 16 de las "CONDICIONES GENERALES", exigen contractualmente, entre otras cosas indispensables para reclamar en caso de siniestro, que se presente una excepción. La excepción como se explica inmediatamente a continuación en el numeral 2 de la cláusula 16, es un documento de certificación o excepción que sea suficiente para que los aseguradores puedan ejercer su derecho de subrogación y se dice claramente en esta cláusula, que "... las aseguradora (sic) no será responsable del pago de pérdidas que no estén claramente señaladas en las excepciones que **deberán ser siempre suficientes para ejercer derechos de subrogación. (Nota: la excepción es parte principal de las pruebas de la pérdida)"** (El subrayado es del Tribunal).
...
La norma que exigen la presentación de una excepción o certificación que sea suficiente para que la aseguradora al pagar el riesgo asegurado, pueda intentar resarcirse del responsable, ha sido introducida a la póliza tal como lo permite la ley dentro del principio de la libertad contractual consagrada en los artículos 194 y 195 del Código de Comercio y el artículo 1106 del Código Civil. Es más, la obligación del asegurado de presentar tal documento no es extraña a disposiciones, o más bien, a obligaciones explícitas del asegurado en el Código de Comercio referidas al seguro marítimo. Así, el artículo 1396 del Código de Comercio establece que:

"Toda reclamación procedente del contrato de seguro habrá de ir acompañada de los documentos que justifiquen:

1° El viaje del buque con la protesta del capitán o copia certificada del "Diario de Navegación";
...
4° La pérdida de las cosas aseguradas, con los mismos documentos del número 1°.

Cuando en materia marítima se habla de "protesta" sabido es que se refiere a declaraciones de justificación para salvaguardar responsabilidad cuando acaecen daños al buque o a su carga y las causas de dichos daños, o bien, constancia de averías o cualesquiera otras pérdidas.

Lo que venimos observando, sin duda indica una obligación del asegurado tendiente a que el asegurador acepte su reclamación o bien rechace la misma como es el caso, pues la carencia de esa información o documentación no permitirá al asegurador mantener si quiera el intento de hacer valer sus derechos de subrogado en caso de pagar la indemnización pactada con el asegurado.
...
Coincide este juzgador con el argumento, que el derecho de subrogación del asegurado contenido expresamente en el artículo 1407 del Código de Comercio, implica el deber del asegurado de proveer, de conformidad con el contrato o póliza de seguro, que el asegurador pueda mantener con suficiencia los derechos y acciones del asegurado-subrogante, en favor del asegurador al subrogarse en caso

> de pagar la pérdida y en contra de los que por malicia o culpa causaron la pérdida o deterioro de los efectos asegurados. Y en el caso subjúdice, esto no se ha dado en claro incumplimiento de lo previsto en la póliza de seguro, quedando el asegurador legitimado **contractualmente** para rechazar y declinar el pago como se ha hecho y así resolverá este Tribunal, pues los hechos comprobados, como se ha visto, indican sin lugar a dudas, que el asegurado en el caso subjúdice, no promovió ni logró un documento, certificación o constancia que pudiera haber mantenido -**razonablemente**- el derecho del asegurador de repetir contra presuntos responsables en caso de haber pagado la indemnización, la que por ello no procede." (Fs. 1010/13).

Luego de lo expuesto, la Corte debe señalar que si bien se examinará el primer aspecto planteado por la parte actora -la excepción de nulidad- no lo hará con base en el fundamento legal aducido (los artículos 72 y 74 numeral 11 del CPM), pues es al demandado a quien se otorga el derecho de valerse de excepciones y no al demandante. Más aún si la parte actora hizo descansar su pretensión en el contrato de seguro celebrado, resulta contradictorio que ahora aduzca la excepción de "Nulidad del acto o contrato" para respaldar la defensa de sus intereses. Sin embargo, ante la hipótesis de que haya ocurrido un posible error en la interpretación legal por parte del juzgador, la Sala se pronunciará al respecto.

A juicio de la Sala el endoso pactado no es ilegal y en nada contradice lo dispuesto por el artículo 1407 del Código de Comercio. El endoso, lo que en cualquier caso representa, es una especie de regulación previa que condiciona el pago de la cantidad asegurada al asegurado. Es una forma de prevenir o garantizar la comunicación a tiempo del siniestro ocurrido, por parte del asegurado, a la compañía aseguradora, para permitirle a esta última el reclamo contra el tercero responsable. Como el propio representante del asegurado indicó, este tipo de contratos (el seguro marítimo) conlleva obligaciones recíprocas, entre las que figuran, con respecto al asegurado, "comportarse de manera diligente a fin que sus actos no perjudiquen el futuro derecho del asegurador". Entre otras cosas, esa diligencia se traduce en no demorar el informe del reclamo incorporándole el detalle de los daños que le han sido irrogados a su propiedad. Por otra parte, mal puede ahora el asegurado alegar que se trata de un pacto al margen de la ley, cuando el mismo fue libremente consentido, no es ilícito ni contrario a la moral ni al orden público.

2. El siguiente cargo que desarrolla el recurrente contra el fallo del Tribunal Marítimo es acerca del "**EXAMEN DEL MATERIAL PROBATORIO**" realizado que lo condujo a determinar que el asegurado EZCONY INTERNATIONAL CORP. no aportó el documento (identificado como excepción) que le permitiese a la compañía aseguradora (una vez subrogada) promover acción en contra del tercero responsable de la pérdida; de modo que, debido a dicho incumplimiento contractual, no le asiste derecho para reclamar indemnización por la pérdida sufrida. Así, en el subsiguiente desarrollo del escrito de apelación, de fojas 6 a 14 (Fs. 1044 a 1052 del expediente) se realiza una exposición y evaluación de la fase probatoria durante el desenvolvimiento de la audiencia ordinaria y se destacan los dictámenes rendidos por los peritos en materia de ajustes, transporte de mercadería a nivel internacional y contratación de seguros.

El apelante considera, luego de realizar una valoración general del material probatorio, que "el dictamen pericial vertido en la primera instancia adolece de aquella valoración unificada o conjunta a la que está compelido el juzgador con respecto a las pruebas". Sobre este aspecto cita los artículos 205 y 379 del Código de Procedimiento Marítimo que se refieren a la apreciación conjunta de la pruebas y a la fuerza del dictamen pericial.

La Corte no entrará al análisis de lo expuesto por el impugnante sobre la apreciación que debió otorgar el sentenciador de primer grado a los diversos medios de prueba aportados al proceso y practicados en las audiencias que se llevaron a cabo ante dicho juzgador.

En atención a lo dispuesto por el artículo 483 de la Ley Marítima, esta Corporación ha expresado reiteradamente a través de su jurisprudencia (al actuar como tribunal de apelación en procesos marítimos) que en esta instancia los hechos no pueden discutirse; que en esta fase sólo procede el examen de los asuntos atinentes al derecho aplicable a la controversia. Sabido es que esta concepción legal se inspira en la naturaleza del juicio fundamentalmente oral que obra según lo dispone el artículo 25 del CPM, en donde los principios de inmediación y concentración cobran preeminencia y notoriedad, producto de que las pruebas se reciben directamente por el Juez, en especial la pericial. Esas características han dado paso a la reiterada y bien asentada interpretación tribunalicia consistente en que, como resultado del contacto directo del juzgador de instancia con los diversos elementos que acreditan los hechos, la valoración que pueda asignársele a las pruebas será mucho más completa y apropiada cuando provenga del juez encargado de recibirlas y practicarlas. En otras palabras, el examen valorativo de las piezas probatorias que realiza el juez de instancia debe prevalecer frente al que pudiera llegar a efectuarse en etapas subsiguientes del proceso, en donde no es posible una vinculación tan estrecha del juzgador en relación con el material probatorio.

3. Finalmente, la censura expresa una serie de consideraciones bajo el título "**RECLAMACIÓN POR MOJADURA**", refiriéndose al contenido del artículo 206 de la Ley marítima, resaltando que no requieren pruebas "los hechos afirmados por una parte y admitidos por la contraria" y "los hechos claramente reconocidos en el curso del proceso por la parte contraria", según lo cual estima que la carga de la prueba sólo recaía en los hechos no admitidos por las demandadas, que fueron probados plenamente en el proceso.

La Sala no entrará a considerar este punto debido a que no contiene cargo de ningún tipo contra la sentencia apelada pues, obviamente, no constituye un asunto que se haya decidido en forma adversa a los intereses del demandante; de allí que lo expresado sobre el particular es algo así como una forma de alegato de oposición por razón de lo que pueda pretender la contraparte al respecto.

II. Recurso de Apelación interpuesto por las compañías ASSICURAZIONI GENERALI, S. P. A. y ASEGURADORA MUNDIAL DE PANAMÁ, S. A. (Fs. 1060-1070).

Expresan las demandadas apelantes que su recurso sólo va dirigido a la parte de la sentencia que les fue desfavorable, es decir, a la parte que se ha denominado **RECLAMACIÓN POR MOJADURA**, de la cual se ocupa el fallo cuestionado a partir de foja 28. Esta disconformidad la fundamentan en que se ha desconocido que la parte demandante incumplió las obligaciones que adquirió al celebrar el contrato de seguro, "ya que no se han atendido los múltiples argumentos y pruebas aportadas al proceso en favor de la parte que representamos ...".

En síntesis, las co-aseguradoras demandadas sustentan su apelación en los siguientes puntos:

1. Falta de presentación del documento de excepción.

Sostiene el apoderado de las aseguradoras demandadas que estas declinaron el reclamo por mojadura de la mercancía a la demandante (asegurada) porque esta última había notificado ese daño a la Naviera transportista después de los tres (3) días que le imponía la cláusula 18 del Conocimiento de Embarque (notificó con 72 días de atraso); y, por lo tanto, ese reclamo no fue efectuado acompañándose de la "EXCEPCIÓN" exigida en la póliza.

Sobre la exigencia del documento de uso común en el negocio de seguros denominado la excepción, indica que se ha creado para abaratar las pólizas en áreas peligrosas y se fundamenta en "el compromiso del asegurado de desplegar la mejor diligencia posible para determinar el lugar, las circunstancias y el responsable del siniestro, si este ocurriese".

Se destaca el contenido de la Póliza de Transporte N° 50.1789 que emitieron los demandados en co-aseguro, específicamente lo dispuesto en el Endoso N° 50.1789/3, por el cual se enmienda el punto N° 16 parte 1 de las condiciones

generales de la póliza, que a la letra dice:

"...
16. NORMAS A SEGUIR EN CASO DE SINIESTRO:
1° ...
ASIMISMO QUEDA ENTENDIDO Y ACORDADO QUE PARA ATENDER CUALQUIER PERDIDA CUBIERTA POR LA PRESENTE PÓLIZA, ADEMÁS DE LOS REQUISITOS ESPECIFICADOS EN LA MISMA, SE HACE ESPECIAL ÉNFASIS EN QUE SE RECHAZARA CUALQUIER SINIESTRO QUE NO VENGA AMPARADO CON UNA HOJA DE EXCEPCIÓN QUE PERMITA MANTENER LOS DERECHOS DE SUBROGACIÓN DE LA COMPAÑÍA. ..." (Fs. 1061).
(Subrayado es del apelante).

Así, en esta instancia el apelante invoca como defensa que el asegurado nunca presentó la "Excepción" exigida por el endoso de la póliza, debido a lo cual cabe el RECHAZO DE CUALQUIER SINIESTRO. Además, sobre la importancia del aludido documento (EXCEPCIÓN), que no presentó la asegurada, se expresa que en el numeral 2 de la cláusula 16 de la póliza aparece la NOTA que señala "... la excepción es parte principal de las pruebas de la pérdida". De acuerdo a la censura, lo anteriormente expuesto hubiera bastado para exonerar a las demandadas de la obligación que le atribuye la demandante.

2. Las demandadas no comparten el criterio del juzgador marítimo, del cual se infiere que con la carta de declinación del reclamo suscrita por la aseguradora, ésta renuncia a su derecho de utilizar otras defensas. En ese sentido alega que a pesar de haber fundamentado su defensa en dicha carta, no existe ninguna disposición jurídica que le prohíba utilizar otros elementos para su defensa.

Sobre este aspecto, el apelante transcribe la cláusula 16, que fue modificada por el endoso que aumentó el término de 60 a 90 días que tiene el asegurado, con posterioridad al aviso de la pérdida a la compañía de seguros, para someter o formalizar el reclamo a dicha compañía detallando la pérdida y presentando, entre otros, los siguiente documentos: "carta de aviso de reclamo a los transportadores navieros ..." y "Excepciones ...".

3. Se alega que el juez no hizo una interpretación completa o adecuada sobre las consecuencias y los perjuicios, para las co-aseguradoras, derivados de la notificación tardía que hizo el asegurado a la Naviera del reclamo por el daño sufrido (mojadura de la mercancía). El fallo se limitó a expresar sobre ese acontecimiento que "lo único que hace es crear una presunción de que la mercancía fue recibida en buen estado"; y no tomó en cuenta que es precisamente tal presunción la que agrava la situación de las aseguradoras, "ya que al invertirse la carga de la prueba, tendrán que demostrar dónde se produjo la pérdida y a quién le corresponde la responsabilidad".

Dicha situación se hubiera evitado, según expresa el recurrente, si el asegurado hubiera cumplido con la obligación que le impone el artículo 16 de las "CLÁUSULAS DEL INSTITUTO PARA MERCANCÍAS (A)" de salvaguardar los intereses de las aseguradoras. En relación a dicho incumplimiento la censura recalca que, al detectarse el daño, la mercancía estaba seca y ello hace más difícil demostrar la culpabilidad del transportista marítimo.

Termina sosteniendo el representante judicial de las demandadas que el demandante (asegurado) reclamó no sólo por mojadura de la mercancía (que es el punto apelado) sino también por pérdida de mercancía (robo), ambos reclamos sobre la misma póliza, siendo el último fallado a favor de las demandadas precisamente porque el juzgador consideró "que al no haber presentado el asegurado el documento de "Excepción" a las aseguradoras, estas tenían derecho a rechazar el reclamo a tenor del Endoso N° 50.1789/3".

La posición del Tribunal Marítimo en relación a la reclamación por mojadura de la mercancía se puede sintetizar en los siguientes términos:

La sentencia apelada sostiene que en el proceso ese extremo quedó debidamente acreditado de acuerdo a lo que se desprende del contenido del acto de la audiencia preliminar, así como también del contenido de la demanda y su

contestación (v. fs. 65, hecho 9°). Las aseguradoras declinaron el mencionado reclamo en su nota de 20 de agosto de 1993 basándose en que el daño fue notificado con demasiada tardanza a la naviera, indicándose que, conforme al Conocimiento de Embarque, dicha demora da lugar a una inversión de la carga de la prueba, en virtud de que surge para el transportista una presunción favorable al no haberse realizado, por ese motivo, la inspección correspondiente en el puerto de arribo.

Al ponderar estas objeciones el Tribunal Marítimo estimó sin valor las defensas esgrimidas por las aseguradoras tomando en consideración que la tardanza alegada no constituye una eximente de responsabilidad de la Naviera. Consideró aplicable la ley sustantiva consentida por las partes en relación al conocimiento de Embarque (transporte combinado desde Hong Kong en tránsito por Brasil a Paraguay); en este caso el "CARRIAGE OF GOODS BY SEA ACT" de los Estados Unidos de 1936.

Para el Tribunal Marítimo lo acontecido en el caso de la mojadura es muy diferente a la situación creada por la pérdida de la mercancía que fuera examinada en la primera parte de la instancia. No considera que frente al reclamo por mojadura se produzca alguna circunstancia que impida el derecho de subrogación que tienen las compañías aseguradoras en contra de la naviera. En ese sentido, sostiene la sentencia de primer grado que la falta de notificación al transportista del daño ocurrido por mojadura dentro de los tres días de la llegada de la nave al puerto de arribo no puede considerarse como un incumplimiento del contrato de seguro marítimo, ya que el contrato de transporte celebrado con la naviera es uno de transporte combinado (de patio de contenedor a patio de contenedor) y el arribo de la nave al puerto brasileño fue meramente una parada en tránsito durante la cual la mercancía se mantuvo contenedorizada en custodio y bajo la responsabilidad del transportista, SEA LAND SERVICES, de modo que, en caso de que las aseguradoras indemnicen al asegurado, las primeras no pierden su derecho de subrogación para reclamar contra el transportista. Desde su punto de vista la presunción de que la carga llegó en buen estado que pudiese obrar en favor del transportista queda diluida ante el hecho de que se está en presencia de un contrato de transporte combinado y no ante uno de puerto a puerto. El Tribunal estima que en el caso de la mojadura no puede sostenerse que no se haya presentado la excepción ni que, en consecuencia, se haya producido una eximente de responsabilidad que favorezca a las compañías aseguradoras.

El fallo que se impugna examina el punto atinente a las extensiones tácitas que la parte demandada otorgó al asegurado, durante el período de reclamación, así como los documentos que este último le presentó a la demandada, entre los cuales se incluye copia de la factura comercial, la lista de embarque, la notificación del reclamo a la Naviera SEA LAND SERVICES, el "Survey" o inspección del Comisionado de Averías de ASSICURAZIONI GENERALI en Ciudad del Este, Paraguay (v. fs. 451 y ss. presunción de mojadura durante el viaje marítimo), destino final de la mercancía que se contrató, certificación de mojadura por agua salada y el conocimiento de embarque (todo lo cual demuestra la diligencia del asegurado), además de apreciar el hecho de que la aseguradora declina el pago, "no por la falta de la documentación pertinente o por lo extemporáneo de la presentación de la misma o el reclamo ante la aseguradora conforme a las extensiones otorgadas", sino por no haberse presentado el reclamo en tiempo en contra de la naviera, según lo establecido en el conocimiento de embarque. Concluye el juzgador marítimo que, de conformidad con las constancias procesales, "corresponde indemnizar al asegurado por la mojadura tal cual lo establece la póliza de seguro correspondiente".

No es admisible, bajo ninguna excusa, que los tribunales, en desarrollo de su gestión de administrar justicia, terminen haciendo interpretaciones absurdas de la ley o de las cláusulas de un contrato. Si la discutida cláusula 16 del contrato de seguro y sus endosos tienen por objeto "mantener los derechos de subrogación de la compañía" y si, como expresaron los peritos participantes en este caso, la certificación o documento de excepción no tiene siempre ni en todos los casos una forma específica determinada, presentada por el asegurado su reclamación en términos que razonablemente coloquen al asegurador en una situación que le permita formular la reclamación frente al tercero responsable del siniestro para recuperar la indemnización que haya tenido que pagar por las

pérdidas sufridas, debe entenderse que el asegurado ha cumplido la obligación que le impone la cláusula correspondiente.

En este caso particular tenemos que las constancias procesales revelan que el asegurado comprobó a plenitud que el daño sufrido por la mercancía asegurada efectivamente se produjo; que ese daño fue ocasionado por uno de los llamados "peligros del mar" (la mojadura), riesgo cubierto por la póliza que fuera contratada; se comprobó, además, mediante peritaje, que la mojadura de la mercancía la ocasionó el agua de mar. Lo anterior conduce inevitablemente a que se deduzca que el daño de los bienes asegurados no pudo producirse sino durante la travesía o tránsito de la mercancía asegurada en la ruta marítima por donde se dirigía a su destino final, de todo lo cual se colige que la mercancía, al sufrir el deterioro, se encontraba bajo el cuidado y la responsabilidad del transportista marítimo, es decir, de SEA LAND SERVICES.

A diferencia de la pérdida de los televisores examinada en la primera parte de este juicio (donde se reclamaba por supuesto robo, hurto o pillaje de la mercancía), en esta oportunidad la reclamación viene rodeada de tal precisión y certidumbre que resulta imposible considerar, como se hizo en el caso anterior, que estemos frente a una de esas pérdidas catalogadas como misteriosa y que hacen sospechar del reclamo impetrado.

En esas condiciones la Sala estima que ha sido evidente que el asegurado le ha entregado a la compañía aseguradora los elementos, la información y los medios capaces de permitirle subrogarse en los derechos que el asegurado pudiera tener en contra del transportista, en el supuesto de que este último haya sido el responsable de la pérdida sufrida por los televisores asegurados.

Ahora bien, en cuanto a la tardanza con que se interpuso el reclamo frente al transportista por parte del asegurado (72 días después de la entrega de la mercancía al consignatario) y a la alegada disminución de los derechos del asegurador por no haberlo hecho dentro de los tres días posteriores a la entrega, nada autoriza para que se concluya que dicha tardanza representa un incumplimiento de las obligaciones que emanan para el asegurado del contrato de seguro marítimo celebrado entre las partes. Hay que añadir que esa tardanza, cuyas razones fueron debidamente explicadas en el juicio por parte del asegurado (el daño no era aparente), no provocan la pérdida del derecho que la compañía aseguradora pudiese tener para subrogarse en los derechos del asegurado en contra del transportista. El que la tardanza en reclamar tenga el efecto de producir la inversión de la carga de la prueba no constituye un factor que desvirtúe la esencia del problema o extinga el derecho de subrogación que tienen las empresas demandadas. No hay que olvidar que lo normal es que la carga de la prueba sea responsabilidad de la parte que hace uso de la acción procesal correspondiente, es decir, de quien demanda el cumplimiento de una obligación, en este caso la que pueda surgir para el transportista en virtud de su falta o negligencia y del derecho de subrogación que ejerciten los aseguradores.

Para que la subrogación tenga cabida, al tercero contra quien el asegurador ejerza los derechos del asegurado le debe alcanzar alguna clase de responsabilidad por el percance ocasionado. En consecuencia, la Sala se debe resistir a dar por buenas o justificadas las exigencias de los aseguradores que persigan obtener seguridades, garantías o certezas absolutas de que se recuperarán o recobrarán los pagos que, en concepto de indemnización, hayan efectuado, sobre todo, cuando a todas luces la causa del daño proviene de acontecimientos fortuitos, inesperados o accidentales, propios de la acción violenta de los elementos, como en este caso se puede asegurar del provocado por el agua salada, peligro del mar cuyos efectos constituyen uno de los riesgos clásicos cubiertos por el contrato de seguro marítimo.

Finalmente, la Sala recuerda que el contrato de seguros es uno esencialmente de buena fe, la que no puede estar ausente ni del contrato ni del ánimo de las partes envueltas en este tipo de contratación, y al examinar la conducta de la parte demandante la Sala ha podido establecer que en todas sus actuaciones la misma se ha conducido con evidente buena fe.

En consecuencia la Corte Suprema, Sala de lo Civil, administrando justicia

en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA LA SENTENCIA de 17 de mayo de 1995 dictada por el Tribunal Marítimo de Panamá, dentro del Proceso Ordinario Marítimo que EZCONY INTERNATIONAL CO. le sigue a ASSICURAZIONI GENERALI, S. P. A. y ASEGURADORA MUNDIAL.

Condenar en COSTAS en cuanto a trabajo en derecho en ambas reclamaciones las cuales se compensan.

Notifíquese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN CIVIL

LAS FUENTES TENIS CLUB, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE INGENIERÍA AGRIOYANIS, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, DOS DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA PRIMERA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La firma forense MORGAN & MORGAN en su condición de apoderada especial de **LAS FUENTES TENIS CLUB, S. A.** ha interpuesto **Recurso de Casación** contra la resolución de 8 de noviembre de 1995 dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia dentro del proceso ordinario instaurado por **INGENIERÍA AGRIOYANIS, S. A.** contra la recurrente en casación.

Cumplidas las reglas de reparto, el negocio se fijó en lista para que las partes alegaran en cuanto a la admisibilidad del recurso, lo que fue aprovechado por ambas como se observa de fojas 225 a 226 (opositor) y 227 a 228 (recurrente).

La Sala procede al examen de confrontación del recurso con las exigencias que establece el artículo 1165 del Código de Procedimiento Civil.

La resolución objeto del recurso es de aquellas contra las cuales lo concede la ley, por su cuantía y naturaleza (artículos 1148 y 1149 ord. 1), toda vez que se trata de una sentencia de segunda instancia dictada en un proceso de conocimiento, mediante la cual se decide, previa revocatoria de la sentencia de primera instancia, CONDENAR "**EN ABSTRACTO** a la demandada, fijándose como base para la liquidación la expresada en la parte motiva de esta resolución".

En segundo lugar, el recurso de casación fue interpuesto en tiempo oportuno.

Se aprecia que en este caso la casación es en la **FORMA** y se invoca como causal "Por no estar la sentencia en consonancia con las pretensiones de la demanda, pues se resolvió sobre un punto que no ha sido objeto de la controversia" (Art. 1155, ord. 7, lit. a) del Código Judicial).

Los motivos expresados como fundamento de la causal señalan, en síntesis, que la pretensión principal en este caso es la condena al pago de una suma líquida (B/.93,731.15), que corresponde al valor total adeudado por razón de contrato de construcción de obra celebrado entre las partes; que el demandante no probó lo pretendido sobre el capital que se le adeuda, por lo que el Tribunal no podía decretar la condena pedida, "como tampoco transmutar la pretensión, como erróneamente ha hecho en una declaración en abstracto que sólo procede en los casos señalados en el artículo 983 del Código Judicial", es decir, cuando hubiese condena en frutos, intereses o daños y perjuicios, siendo que en la demanda interpuesta se pide una condena concreta fundada en una obligación contractual.

Así, la decisión "no recayó sobre el punto objeto de la controversia, que era probar en el proceso el monto del capital que se dice adeudado y proferir la condena consiguiente, no hacer una mera declaración de reconocimiento obligacional abstracto".

Las disposiciones citadas como infringidas son los artículos 978 y 983 del Código Judicial.

La Sala observa que el recurrente invoca como causal de casación la falta de congruencia entre lo fallado y lo pedido, específicamente bajo el supuesto que se resolvió sobre un asunto que no ha sido objeto de la controversia. En otras palabras, se trata del caso en que alguna de las pretensiones aducidas sea sustituida por otra que las partes no formularon (**incongruencia por extra petita**).

Así, en atención a lo que implica la causal y lo expresado en los motivos, no se percibe una relación armónica entre ambos apartados del recurso. El cargo que se infiere del contenido de los mismos es confuso y más bien tiende a desvirtuar el supuesto de la causal, pues claramente se sostiene que la pretensión principal consiste en que la parte demandada sea condenada al pago de una suma líquida de dinero, que la sentencia del Tribunal resolvió **condenar a pagar** pero en forma abstracta.

Sobre este punto de la sentencia de condena en abstracto, vale la pena recordar que dicha resolución se dicta cuando el juzgador tiene como probados los hechos constitutivos de la demanda, es decir, cuando tiene la certeza del derecho que le asiste al demandante sobre la obligación que reclama, pero considera que no ha sido probada la cuantía a la que asciende el reclamo.

De acuerdo al artículo 983 del Código Judicial este tipo de sentencia (de condena en abstracto) sólo cabe cuando se demanda el pago de un suma de dinero, en base a reclamo de intereses, frutos o daños y perjuicios, que el sentenciador considere que han sido probados, mas no el monto respectivo. Es decir, que el fallo de condena sólo puede ser en abstracto cuando la pretensión o al menos una de ellas gire en torno al pago de dinero como indemnización de daños o perjuicios sufridos o por frutos o por intereses debidos.

La condena en el presente caso evidentemente es por daños y perjuicios, pues se trata del supuesto que preceptúa el artículo 1346 del Código Civil, que a la letra dice: "El dueño puede desistir, por su sola voluntad, de la construcción de obra aunque se haya empezado, indemnizando al contratista de todos sus gastos, trabajo y utilidades que pudiera obtener de ella". En consecuencia, la aplicación del artículo 983 del Código Judicial resultaba procedente.

En cuanto al artículo 983 del Código Judicial, en los supuestos que contempla, expresa un derecho a favor del demandante con respecto a su pretensión sobre la premisa de que el demandado es responsable, permitiéndole a la vez que con posterioridad pruebe la cuantía del reclamo. Desde ese ángulo y en las circunstancias en que se le considera en el caso, se trata de una disposición de carácter sustantivo, cuya violación da lugar a casación en el fondo.

De lo expuesto se colige que la causal de forma invocada no es pertinente para este caso y no guarda relación con los motivos ni con la disposición legal de carácter sustantivo citada en el recurso, antes aludida.

Así las cosas, y en vista que los dos último apartados del recurso tienden a excluir al primero, a juicio de la Sala, este medio extraordinario de impugnación resulta ininteligible y se impone su rechazo, en virtud de lo preceptuado por el artículo 1167 del Código Judicial.

En consecuencia, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE el recurso de casación interpuesto LAS FUENTES TENIS CLUB, S. A. contra la resolución de 8 de noviembre de 1995 por el Primer Tribunal Superior de Justicia, dentro del proceso

ordinario instaurado por INGENIERÍA AGRIOYANIS, S. A.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) ELIGIO MARÍN
Secretario Interino

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

CARLOS AMEGLIO MONCADA Y CARMEN ELENA RODRÍGUEZ DE AMEGLIO O CARMEN ELENA RODRÍGUEZ RECURREN EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUEN A KONINKLIJK LUCHTVAAR MAATSCHAPPIJ N. V. (HOLANDÉS); K. L. M. COMPAÑÍA REAL HOLANDESA DE AVIACIÓN, S. A. (ESPAÑOL). MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, SIETE (7) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA PRIMERA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El abogado CARLOS AMEGLIO MONCADA, actuando en su propio nombre y en el de la señora CARMEN ELENA RODRÍGUEZ DE AMEGLIO o CARMEN ELENA RODRÍGUEZ, interpuso formal recurso extraordinario de casación contra la sentencia de 6 de marzo de 1995, proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia, fallo confirmatorio de la sentencia N° 35 del 29 de julio de 1994, dictada por el Juzgado Primero de Circuito, Ramo Civil, del Primer Circuito Judicial de Panamá. Ambas resoluciones absuelven a la empresa K. L. M., Compañía Real Holandesa de Aviación del pago de B/.10,000.00 por incumplimiento de contrato en los términos solicitados por los actores del juicio ordinario declarativo propuesto en contra suya.

El recurso de casación fue admitido por esta Sala de la Corte debiéndose proceder al estudio de los cargos de injuricidad imputados a la sentencia recurrida, para alcanzar el pronunciamiento que ponga punto final a este proceso.

LA CONTROVERSIA.

La parte actora propuso juicio ordinario declarativo de mayor cuantía para que se declarase que la parte demandada incumplió sus obligaciones con CARLOS AMEGLIO MONCADA y CARMEN ELENA RODRÍGUEZ DE AMEGLIO o CARMEN ELENA RODRÍGUEZ, surgidas de dos contratos de transporte, cuando fue alterado el itinerario de vuelo consignado en los respectivos pasajes, con ocasión de la culpa y negligencia del transportista, conducta que provocó daños y perjuicios por la suma de B/.5,000.00 balboas a cada uno de los demandantes. Se trata de dos pasajes de ida y vuelta por la ruta Panamá-Amsterdam-Frankfort y viceversa. Según los demandantes, el incumplimiento de las obligaciones contractuales generador de los daños y perjuicios ocurrió cuando, unilateralmente, el transportista, durante el itinerario del viaje, efectuó escalas no previstas en el contrato, en San José de Costa Rica y Curazao, Antillas Holandesas, en el transcurso del vuelo de ida, y en Curazao, Antillas Holandesas, en la ruta del vuelo de regreso.

La demanda se surtió en traslado mediante el procedimiento de la notificación con uso del edicto emplazatorio, en virtud de lo cual el tribunal de la causa designó el correspondiente defensor de ausente, quien al contestar procedió a negar los hechos y el derecho invocados por la parte actora. Practicadas las pruebas aducidas y solicitadas y cumplido el trámite de alegatos, el Juez Primero del Circuito dictó sentencia rechazando lo pedido por la parte demandante al considerar que no se produjo culpa o negligencia ni incumplimiento de las obligaciones contractuales contraídas por la K. L. M., Compañía Real Holandesa de Aviación, así como tampoco daños materiales y morales en perjuicio de los demandantes en este proceso.

Correspondíole al Primer Tribunal Superior de Justicia conocer del caso en grado de apelación y dicha Corporación decidió confirmar la sentencia proferida por el Juzgador Primario.

RECURSO DE CASACIÓN

El recurso interpuesto es de casación en el fondo y se invoca una sola causal: **Infracción de normas sustantivas de derecho por concepto de interpretación errónea de las normas de derecho**; y los cargos de injuricidad formulados se recogen en los motivos que se transcriben a continuación:

> **"PRIMERO:** La Sentencia impugnada, al aplicar el artículo 120 del Decreto-Ley N° 19 del 8 de agosto de 1963, al caso sub-júdice le dio un alcance distinto al que contiene dicha norma, confiriéndole un sentido o un alcance que pugna con el texto y el espíritu de esta excerta y que de no haberlo hecho así otro hubiera sido el contenido dispositivo del fallo.
>
> **SEGUNDO:** La Sentencia impugnada, al interpretar erróneamente el precepto legal aludido desconoció los requisitos insitos en él en cuanto a la forma el contrato de transporte, pues los dio por cumplidos a pesar de que las constancias procesales demuestran los contrario."

Termina el casacionista imputándole a la sentencia del Tribunal Superior la infracción de los artículos 9, 10 y 11 del Código Civil, normas en donde se fijan las reglas que deben ser observadas en materia de interpretación en lo atinente a la significación literal de los textos legales, al sentido natural de las palabras conforme al uso general de las mismas o a la definición expresa que le hubiese asignado el legislador o a la significación que hay que otorgarle a los vocablos, cuando estos sean empleados con propósitos técnicos en relación a una ciencia o a un arte determinados. Esas infracciones las liga el casacionista a la del artículo 120 del Decreto Ley N° 19 de 8 de agosto de 1963, por el cual se Reglamenta la Aviación Nacional en la República de Panamá, acusándose a la sentencia de haberle dado un sentido interpretativo incorrecto a esta última disposición, reguladora de las obligaciones impuestas por la ley al transportista internacional de pasajeros por aire en materia de las escalas que tengan que hacerse en el extranjero durante el transcurso del viaje que se cumple. Por último, también se denuncia la violación del artículo 176 del Decreto Ley N° 19 de 8 de agosto de 1963, cuyo contenido consagra la nulidad de las cláusulas contractuales que exoneren o disminuyan la responsabilidad del transportista fijada en el Decreto Ley dictado para reglamentar la aviación nacional en nuestro país.

POSICIÓN DE LA CORTE

Ante todo, la Corte considera necesario ubicar correctamente el escenario dentro del cual se desenvuelve la presente controversia. Desde ese punto de vista ha quedado muy claro que en este caso el debate jurídico no tiene nada que ver con los límites que contractualmente la ley establezca o las partes puedan haber llegado a pactar en relación con la responsabilidad del transportista y la Sala se siente obligada a desechar, desde el principio, el cargo de injuricidad que la censura le ha endilgado a la sentencia a causa de la supuesta interpretación errónea del artículo 176 del Decreto Ley N° 19 de 8 de agosto de 1963, sobre la base de las razones que a continuación se explican. Percibe la Sala que en esta causa no se discuten las limitaciones de la responsabilidad civil del transportista que pudiesen emanar de las cláusulas de un contrato celebrado en contravención con lo establecido en el Decreto Ley encargado de señalar los límites o grados de responsabilidad a que queda sometido el porteador aéreo en nuestro país. Aquí el problema a dilucidar es otro y consiste en esclarecer si, en efecto, la parte demandada incumplió o no sus obligaciones contractuales, por el hecho de que las escalas que se hicieron en el extranjero no fueron advertidas en los pasajes vendidos a los demandantes, y de haberse dado ese incumplimiento, a cuánto ascienden los daños y perjuicios que el omiso debe reparar para indemnizar el mal causado.

Planteado el problema en esos términos, la Sala se ve precisada a descartar la impugnación que el casacionista ha hecho recaer sobre la sentencia del Tribunal Superior a partir de la supuesta violación del artículo 176 del Decreto

Ley N° 19 que considera nula las cláusulas que exoneran o rebajan la responsabilidad del transportista establecidas en esa Ley. Es obvio que la responsabilidad establecida en esa norma se encuentra referida a los límites mínimos en que se podrán tasar económicamente los montos de las indemnizaciones que deba pagar el transportista en caso de daños y pérdidas sufridas por los pasajeros, sus equipajes y la carga transportada, claro está, como resultado de la ejecución del contrato de servicios que se presta. El de la responsabilidad consignada en el artículo 176 es un aspecto al cual, tanto la legislación nacional como los convenios internacionales de navegación aérea, le han prestado expresa y especial atención. El Convenio de Varsovia de 1929 para la unificación de ciertas reglas relativas al transporte aéreo internacional y sus posteriores enmiendas regulan la materia a nivel internacional estableciendo los límites pecuniarios dentro de los cuales queda comprendida la responsabilidad del transportista. Por ejemplo, el artículo 11 del Protocolo de la HAYA de 1955 que modifica el artículo 22 del Convenio de Varsovia de 1929 establece lo siguiente:

> "Art. 11: Se suprime el artículo 22 del Convenio y se sustituye por las siguientes disposiciones:
>
> Art. 22.1. En el transporte de personas la responsabilidad del transportista con respecto a cada pasajero se limitará a la suma de doscientos cincuenta mil francos. En el caso de que, con arreglo a la Ley del Tribunal que conozca del asunto, la indemnización pueda ser fijada en forma de renta, el capital de la renta no podrá sobrepasar este límite. Sin embargo, por convenio especial con el transportista, el pasajero podrá fijar un límite de responsabilidad más elevado."

Para la Sala es evidente, por lo tanto, que es a la nulidad de las cláusulas del contrato que se pacten en desconocimiento de esos límites a la que alude el artículo 176 del Decreto Ley N° 19, sin que entre tales nulidades queden comprendidas las de las cláusulas contractuales que atienden a otras responsabilidades u obligaciones diferentes que pudiesen surgir como resultado del contenido del resto del contrato. Es más, en opinión de esta Sala, lo dispuesto por el artículo 176 no puede ser interpretado sino tan sólo en conexión con lo señalado por los artículos 170 a 175 del Decreto Ley N° 19.

En cuanto a daños a los pasajeros el artículo 170 del Decreto Ley establece:

> "El transportista está obligado a indemnizar los daños y perjuicios ocasionados por muerte, heridas o cualquier lesión sufrida por cualquier pasajero si el hecho que causa los daños tiene lugar a bordo de la aeronave, o durante las operaciones de embarque o desembarque en cualquier aeródromo u otro lugar de aterrizaje, incluso el lugar de un aterrizaje forzoso o accidental".

Sobre los límites de responsabilidad el artículo 175 señala lo siguiente:

> "1. La indemnización que el transportista debe pagar se limitará:
>
> a) Por daño sufrido por un pasajero, la suma de ocho mil trescientos balboas (B/.8,300.00);
>
> b) Por pérdida, destrucción o avería del equipaje de mano, hasta treinta y tres balboas con veinte centésimos (33.20):
>
> c) Por pérdida, destrucción o avería de la carga o equipaje facturado, hasta diez y seis balboas con sesenta centésimos (B/.16.60) por kilogramo.
>
> 2. Si la carga o equipaje facturado se transporta conforme al valor declarado, y el interesado hubiere pagado la sobretasa según tarifa de la empresa, el límite de indemnización corresponderá al valor declarado".

No tiene ningún sentido lógico extender, como parece pretenderlo el recurrente, más allá de esos propósitos el alcance de lo dispuesto en el artículo 176 del Decreto Ley, mucho menos para extraer la inadmisible conclusión de que ese artículo 176 fue interpretado erróneamente porque **"la sentencia impugnada no puede aplicar ninguna cláusula de ley alguna que tienda a minimizar las obligaciones contenidas en esta Ley para la forma de los contratos"**, como sostiene el recurrente.

Recuérdese que el régimen de responsabilidad a que están sometidos los contratos de transporte de pasajeros de la Compañía K. L. M. es el establecido por el Convenio de Varsovia y sus enmiendas en donde se consignan límites de responsabilidad pecuniaria por encima de los mínimos establecidos por el Decreto Ley N° 19 en materia de daños y perjuicios, así como también que tal sometimiento es el resultado de lo que establece y ordena el numeral 3 del artículo 120 del Decreto Ley N° 19 de 1963.

No debe olvidarse que las pretensiones de los demandantes en este juicio radican en lograr el pago de una indemnización por daños y perjuicios, supuestamente provocados por el cambio unilateral del itinerario del viaje, asunto que ni siquiera tangencialmente tiene que ver con los límites o cuantificación en dinero de la responsabilidad que se señalan en el Decreto Ley N° 19 y en el Convenio de Varsovia de 1929 o en sus enmiendas. Mal podría entonces el Tribunal Superior haber interpretado erróneamente el artículo 176 del Decreto Ley N° 19, cuando lo discutido en el proceso nada tiene que ver con los límites de responsabilidad a que se encuentra sometido el transportista en esta clase de contratos.

Veamos ahora el resto de los cargos que el casacionista le endilga a la sentencia. Estos tienen que ver, como se ha dicho, con supuestas infracciones a los artículos 9, 10 y 11 del Código Civil que, al ser interpretados erróneamente de acuerdo con el recurrente, condujeron a que la sentencia aplicase, también, de manera equivocada el artículo 120 de la Ley N° 19 de 8 de agosto de 1963.

Sostiene el recurrente que el artículo 120 del Decreto Ley N° 19 de 1963 consigna que el contrato de transporte internacional de pasajeros por aire debe indicar por lo menos los puntos de salida y llegada y si estos puntos serán en la República, con escala en el extranjero, por lo que el juzgador de segunda instancia no debió desentenderse del tenor literal de la norma en aquello que se refiere a las escalas que durante el viaje se realizaron. Por ese motivo, en la sentencia que se impugna, según el casacionista, se le dio al contenido del artículo 120 una interpretación **"restrictiva y ambigua"** al darle a las palabras de la ley **-"escala en el extranjero"-** un sentido y una interpretación que no se corresponden con su real significado, pues si durante el viaje se hicieron diversas escalas en países extranjeros (Costa Rica, Curazao y Antillas Holandesas), la línea aérea demandada tenía la obligación de indicarlo así en el contrato de transporte, es decir, en lo que lo representa: los boletos o pasajes vendidos a los demandantes. Se acusa, por tanto, al Tribunal Superior de haber considerado cumplida la obligación contractual impuesta por la ley (art. 120) en lo atinente a las escalas, cuando esa información sólo fue satisfecha parcialmente, al ser mencionada nada más una de las escalas que se harían en el extranjero (la de Amsterdam).

Sobre el punto que atañe a las escalas del viaje, distinto a lo que sucede con los límites impuestos a la responsabilidad económica o patrimonial que pesa sobre el transportista, la Sala considera que las partes de la relación contractual se encuentran por completo autorizadas a pactar libremente lo que estimen conveniente, en seguimiento de lo consagrado por el artículo 1106 del Código Civil que permite, en materia de la autonomía de la voluntad, el establecimiento en el contrato de las cláusulas y condiciones lícitas que se consideren oportunas. Dentro de esa categoría hay que ubicar las cláusulas pactadas por los contratantes en cuanto a las paradas del vuelo en el extranjero que forman parte integral del contrato, tal como se previó en los boletos o billetes de aviación, en donde consta que el transportista podría alterar, sin previa notificación, la ruta, el avión y las paradas.

Formulada la impugnación en los términos antes indicados, la Sala debe analizar y examinar el fallo atacado para determinar si efectivamente el texto de la ley fue interpretado por el Juzgador en sentido contrario o distinto al prescrito por su contenido, con las consecuencias de influir de modo sustancial en la decisión que fue adoptada.

Una cuidadosa lectura de la sentencia censurada nos coloca en la situación de apreciar que el Tribunal Superior para resolver este caso no se limitó exclusivamente a aplicar las disposiciones contenidas por el Decreto Ley N° 19 de 1963. Además de las disposiciones del mencionado Decreto, el Tribunal Superior estimó oportuno tomar en consideración lo consignado en el Convenio de Varsovia de 1929 y los Protocolos adicionales aplicables que lo modifican porque, aún cuando la República de Panamá no es parte de los mismos, el artículo 120 del Decreto Ley N° 19 permite a los nacionales someter los contratos de transporte aéreo internacional al régimen de responsabilidad consagrado en esos instrumentos reguladores de la navegación aérea. En el caso concreto de la línea aérea K. L. M., Compañía Real Holandesa de Aviación, sus contratos se encuentran expresamente sometidos a la mencionada Convención Internacional (apreciar doc. visible a fs. 4 y 5 del exp.). El Tribunal Superior, basándose en lo establecido en el artículo 3 de la Convención de Varsovia conforme fue enmendado por el Protocolo de la Haya de 1955, estimó que el transportista, al indicar en el billete de pasaje por lo menos una de las escalas a efectuarse en el extranjero (la de Amsterdam), había cumplido a cabalidad con ese particular requisito, contrario a lo denunciado por la parte actora. Se reitera que en los pasajes vendidos por la demandada a los demandantes, o sea en los documentos que hacen las veces del contrato de acuerdo con la Ley, se puede leer que el transportista, además de no garantizar los horarios de vuelo, queda autorizado a sustituir, sin previa notificación, la ruta del vuelo, el avión y las escalas. Consta en el expediente, por otro lado, que la compañía aérea demandada le había comunicado a la Dirección de Aeronáutica Civil de la República de Panamá el nuevo itinerario del vuelo en que viajarían los demandantes, hecho motivado por razones del cambio de temporada (ruta de invierno) y que en ese cambio, conocido plenamente por las autoridades panameñas, fueron indicados todos los lugares en donde el vuelo debía hacer sus escalas (fs. 42-44).

Ha podido comprobar la Sala que la resolución atacada mediante el presente recurso extraordinario de casación se fundamentó en el examen y la aplicación de las disposiciones contenidas en el Decreto Ley N° 19 de 1963 conjunta y armónicamente interpretadas con el contenido de las normas que consagra el Convenio de Varsovia de 1929 y sus enmiendas, incluyendo lo pactado en las cláusulas del contrato de transporte aéreo libremente acordadas por las partes de esta controversia. El método y el sistema utilizado por el Tribunal Superior para dilucidar los términos en que la compañía aérea ejecutó los compromisos contractuales contraídos, a la luz de lo consignado en la Ley, las Convenciones Internacionales y las cláusulas del contrato le permiten a la Sala llegar a la conclusión de que no se produjo yerro alguno, por parte del Tribunal Superior, al momento en que interpretó las disposiciones legales que le sirvieron de fundamento al fallo proferido.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema, Sala de lo Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia de 6 de mayo de 1995 dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia, dentro del Proceso Ordinario Declarativo que CARLOS AMEGLIO MONCADA y CARMEN ELENA RODRÍGUEZ o CARMEN ELENA DE AMEGLIO le siguen a KONINKLIJKE LUCHTVAAR MAATSCHAPPIJ N. V. (Holandés); K. L. M. COMPAÑÍA REAL HOLANDESA DE AVIACIÓN, S. A. (español).

Las obligantes costas de casación se fijan en la suma de TRESCIENTOS BALBOAS CON 00/100 (B/.300.00).

Notifíquese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ

(fdo.) ELIGIO MARÍN
Secretario Interino

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

MÉLIDA OSORIO CASTRO Y MARÍA DE LA CRUZ OSORIO CASTRO RECURREN EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE LUZMILA ULLOA. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, SIETE (7) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA PRIMERA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Basándose en que la sentencia dictada el 26 de julio de 1995 por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial infringió normas sustantivas de derecho por error de hecho sobre la existencia de la prueba, hasta el extremo de que esa circunstancia influyó sustancialmente en lo dispositivo de la resolución proferida, el abogado JOSÉ LUIS VARELA ha promovido, en nombre y representación de MÉLIDA OSORIO CASTRO y MARÍA DE LA CRUZ OSORIO CASTRO, recurso de casación en el fondo. El recurrente apoya la censura haciéndole cargos de injuricidad a la sentencia porque, según afirma, se hizo abstracción de una inspección ocular practicada, de las declaraciones rendidas por dos testigos y de la contestación que la parte demandada le dio al hecho Primero de la demanda; piezas identificadas por el casacionista con la denominación de documentos. Como normas jurídicas infringidas o violadas se denuncian el ordinal 6 del artículo 669 y el artículo 769, ambos del Código Judicial; al igual que el artículo 447 del Código Civil.

La controversia jurídica se originó cuando las demandantes (MÉLIDA OSORIO CASTRO y MARÍA DE LA CRUZ OSORIO CASTRO) promovieron juicio ordinario para que, como herederas del señor EULOGIO ÁVILA OSORIO o EULOGIO OSORIO, se les declarase con derecho a las mejoras existentes en la finca N° 15,474, inscrita al Rollo 7030, Documento 10 del Registro Público, Sección de la Propiedad, Provincia de Herrera, finca que pertenece, de acuerdo con la parte actora, a la señora LUZMILA ULLOA.

La parte demandada, señora LUZMILA ULLOA, contestó los hechos de la demanda aceptando ser la legítima propietaria del inmueble, pero negando los restantes, es decir, aquellos en que se asegura que las mejoras de la finca son el producto del quehacer y la inversión del señor EULOGIO ÁVILA OSORIO.

El Tribunal Superior de Justicia llegó a la conclusión de que se debían negar las pretensiones de la parte actora porque no fueron allegadas al expediente las pruebas idóneas en capacidad de acreditar los derechos alegados por las demandantes. El Tribunal Superior advirtió en la resolución dictada que las demandantes pretendieron probar su condición de herederas del señor ÁVILA OSORIO mediante la copia de un auto de declaratoria de herederos dictado en un juicio de sucesión inconcluso, sin que se incorporaran al expediente los certificados de nacimiento de las pretendidas causahabientes expedido por el Registro Civil de las Personas, única forma indubitable de probar en este caso el vínculo de parentesco y la condición de hijas del causante aducida para reclamar y exigir el reconocimiento de las mejoras cuya existencia se atribuye al trabajo y la inversión de la persona fallecida. De esa suerte, la copia del auto de declaratoria de herederos que se acompañó como prueba no se consideró por sí sola capaz de establecer las identidades ni la subsecuente calidad de herederas del causante. La Sala observa, por su parte, que al expediente tampoco le fue incorporado el certificado de defunción del señor EULOGIO ÁVILA OSORIO, indispensable para poder identificar al causante de la pretendida herencia.

El Tribunal Superior encontró además defectuosa la prueba de autos referente a la existencia de la finca N° 15,474 sobre la cual se dice en la demanda que se hicieron las mejoras reclamadas. En efecto no se aportó el certificado del Registro Público necesario para comprobar un hecho de aquellos en donde el Código de Procedimiento indica como inadmisible la prueba testimonial, en virtud de que deben constar en documentos o medios escritos preestablecidos por las leyes sustanciales (art. 831 del C. Judicial). Para el Tribunal Superior, la ausencia de este certificado hace imposible que se tenga la certeza jurídica suficiente para determinar la existencia de la finca cuyas mejoras se reclaman como de propiedad de la parte demandante en ese juicio.

El recurso de casación interpuesto contra la resolución del Tribunal Superior se queja, como ya queda dicho, de que aquella Corporación no tomó en cuenta ciertas piezas probatorias que reposan en el expediente. Cuando la Sala examina las precisadas por el casacionista en este recurso no puede dejar de advertir que la inspección ocular de folio 25 a la que se refiere el recurrente constituye una diligencia de notable pobreza probatoria, en donde los peritos, aparte de mencionar ciertas generalidades sobre las mejoras que dicen haber encontrado en el terreno, no están en capacidad de ilustrar al juzgador ni siquiera acerca de si la inspección se practicó realmente sobre el predio objeto de litigio (no hay en el expediente un simple plano del inmueble). En cuanto a las declaraciones rendidas por los testigos MANUEL SANTANA HERNÁNDEZ y RODOLFO NIETO BARRERA (fs. 31, 32 y 33), conviene notar que, por una parte, aseguran que las mejoras en la finca fueron realizadas por el señor EULOGIO ÁVILA OSORIO o EULOGIO OSORIO y por la otra afirman, en forma que no puede dejar de llamar la atención, que tales mejoras también fueron realizadas por MÉLIDA Y MARÍA DE LA CRUZ OSORIO, lo cual es contradictorio. Por último, el cargo de que la sentencia no tomó en consideración la contestación dada por la demandada al hecho primero de la demanda es, a juicio de la Sala, una censura carente de sustento y fundamentación, pues lo que se discute en este proceso no consiste en quién es el propietario del inmueble sino a quién pertenecen las mejoras que sobre el mismo pudieron haberse constituido y, cuando la parte demandada acepta ser la propietaria del predio en referencia, la lógica no autoriza para que de ese hecho se deduzca que las mejoras le pertenecen a terceras personas.

Encuentra la Sala que el Tribunal Superior decidió conforme a los elementos de convicción reunidos en el expediente. El Tribunal Superior juzgó los hechos a la luz de las pruebas aportadas. Su conclusión de que la parte demandante no probó los hechos en que basó su demanda está respaldada en una realidad innegable: no hubo prueba idónea que sirviese para respaldar las aseveraciones y decires fácticos formulados por la parte actora. No se trata de que el Tribunal Superior haya dejado de tomar en consideración algunas de las pruebas aportadas por la parte demandante. Lo que ocurrió es que las pruebas aportadas, como bien lo dejó señalado el Tribunal, carecen de eficiencia para demostrar los hechos en que se fundó la demanda.

Por lo antes expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Civil, NO CASA la sentencia de 26 de julio de 1995 dictada por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial dentro del proceso ordinario que le sigue a LUZMILA ULLOA.

Las costas a cargo de la parte recurrente de fijan en la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA BALBOAS CON 00/100 (B/.250.00).

Notifíquese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ

(fdo.) ELIGIO MARÍN
Secretario Interino

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

BANCO CAFETERO PANAMÁ, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE BANCO EXTERIOR DE LOS ANDES Y DE ESPAÑA, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, SIETE (7) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA PRIMERA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La firma forense **BERRÍOS Y BERRÍOS** en su condición de apoderados del **BANCO CAFETERO (PANAMÁ), S. A.** dentro del proceso ordinario instaurado por **BANCO EXTERIOR DE LOS ANDES Y ESPAÑA, S. A. (EXTEBANDES),** solicita a esta Sala de Casación Civil reforme la sentencia proferida el 27 de febrero de 1996 "en cuanto a la no condena en costas".

La aludida sentencia dictada por esta Corporación resolvió CASAR la resolución de 29 de diciembre de 1994 emitida por el Primer Tribunal Superior y además, REVOCAR la dictada en primera instancia por el Juzgado Tercero del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil.

El escrito mediante el cual se solicita la adición de la sentencia en cuanto a la condena en costas, a cargo de la parte demandante dentro del proceso, se fundamenta en la consideraciones siguientes:

"...

a) El artículo 1181, del Código Judicial, a contrario sensu, permite que en caso de que se case una sentencia de segunda instancia, pueda la misma ser modificada o reformada en cuanto a la condena en costas.

b) El artículo 1057 del Código Judicial, en su segundo párrafo, establece lo siguiente:

`No podrá estimarse que hay buena fe, entre otros casos, cuando el proceso se sigue sin que el demandado comparezca al proceso habiendo sido notificado personalmente; cuando haya habido necesidad de promover ejecución en contra del deudor para la satisfacción del crédito; cuando el vencido hubiera negado pretensiones evidentes de la demanda o de la contrademanda, que el proceso indique que debió aceptarlas al contestarlos ... falsos o testigos falsos; cuando no se riendiere ninguna prueba para acreditar los hechos de la demanda o las excepciones interpuestas o cuando se advierta ejercicio abusivo del derecho de gestión.

c) La parte demandante incurrió en actos de mala fe en la tramitación del presente proceso, al presentar pruebas mutiladas, tales como el contrato de corresponsalía entre Banco Cafetero (Panamá), S. A. y Banco Exterior de los Andes y de España, S. A. (EXTEBANDES), sucursal Caracas Venezuela, como si fuera el situado en el Reino de España, con el objeto de confundir a los Tribunales al momento de desatar la litis y los recursos pertinentes.

En consecuencia, solicitamos se reforme o se modifique la sentencia antes aludida y se adicione la condena en costas a cargo de la parte demandante de conformidad con la tarifa de honorarios profesionales vigente. ...". (Fojas 397-398).

En cuanto a lo planteado, cabe indicar que el artículo 1055 de la citada legislación define lo que se entiende por costas y señala en cinco numerales lo que las comprenden y, por otro lado, el artículo 986 permite complementar, modificar o aclarar la sentencia en cuanto a frutos, intereses, daños y perjuicios y costas. La Corte, convertida en tribunal de instancia, no condenó a la demandante en costas. Sin embargo, ello fue así debido a que, a juicio de la Corte, en la actuación de la parte actora a lo largo del proceso se denota su evidente buena fe.

Por tanto, conforme a lo establecido en nuestra legislación procesal de concurrir dicha circunstancia, de la buena fe en el ánimo de las partes, no procede la condena en costas.

En consecuencia, la Corte Suprema, Sala de lo Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ACCEDE la petición de condena al pago de costas dentro del proceso ordinario seguido por BANCO EXTERIOR DE LOS ANDES Y DE ESPAÑA, S. A. contra BANCO CAFETERO PANAMÁ, S. A.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ

(fdo.) ELIGIO MARÍN
Secretario Interino

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

BOLÍVAR RACINES PEARCE Y JAVIER BOLÍVAR RACINES PEARCE RECURREN EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUEN A COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE SEGUROS, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, OCHO (8) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA PRIMERA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Mediante resolución dictada por esta Sala, de fecha ocho (8) de marzo de mil novecientos noventa y seis (1996), se ordenó la corrección del recurso de casación propuesto por BOLÍVAR RACINES PEARCE y JAVIER BOLÍVAR RACINES PEARCE, en el proceso ordinario que le siguen los recurrentes a la COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE SEGUROS, S. A. La Secretaría de la Sala de lo Civil, ha remitido a este Despacho el recurso de casación corregido dentro del término que establece la ley, razón por la cual precisa ahora que la Sala se pronuncie sobre la admisibilidad del recurso presentado, tomando en cuenta para ello lo que establecen los artículos 1160 y 1165 del Código Judicial.

La Sala observa que el recurrente no cumplió de manera satisfactoria con la corrección ordenada.

Básicamente, el casacionista debía subsanar los siguientes errores: indicar cuáles son las pruebas mal valoradas; y en qué consistió la mala valoración.

La Sala advierte que el recurrente corrige lo primero, pero no así lo segundo. El señalar, en los motivos, que "las pruebas no fueron valoradas de acuerdo a la sana crítica"; y que el tribunal no le dio el "valor de plena prueba" a un documento, no es suficiente para sustentar la causal aludida. El casacionista debe señalar la forma como el Juez dejó de aplicar la sana crítica. Este sistema de valoración tiene su base en la experiencia, la lógica y el correcto entendimiento humano, lo anterior supone que el recurrente al señalar que no se ha aplicado la sana crítica, debió explicar por qué no se aplicó, ya sea porque el razonamiento del juez es ilógico, o porque no está acorde con el entendimiento humano o la experiencia, de igual manera debe señalar en qué se basa para llegar a dicha conclusión. La sana crítica, es un sistema que le proporciona al juez la libertad para valorar el caudal probatorio, por lo que no se puede atacar este sistema de forma simplista, diciendo que el tribunal no lo aplicó correctamente; es necesario decir por qué el razonamiento del juzgador no está acorde con la conclusión a que se llega.

En el primer y quinto motivo se le hace el cargo al tribunal de haber valorado erróneamente al no darle el valor de plena prueba, según las reglas de la sana crítica, a la prueba pericial (grafotécnica) rendida por DOMINGO GAITÁN.

En el sistema probatorio instituido por el Código Judicial se establece como sistema de valoración de las pruebas, el de la sana crítica, por parte del juez o tribunal, cuyo contenido ha sido expuesto anteriormente. Pero, dentro de dicho sistema de valoración de las pruebas, señala limitaciones a este sistema de valoración al introducir, en algunas pruebas, unas que corresponden al sistema de prueba tasada en que es la propia ley la que le atribuye el valor que el juez debe darle a la prueba.

De tal suerte que si la ley establece el valor de plena prueba a una propuesta dentro de un proceso, el juez se encuentra vinculado por ella y constituye una excepción o limitación al principio de valoración de pruebas, según la sana crítica, como han tenido ocasión de señalar el Doctor JORGE FÁBREGA P. en el Tomo II de sus Estudios Procesales "limitaciones a la sana crítica en el nuevo Código Judicial" (pág 938 y ss.); así como el Doctor JORGE ISAAC IGLESIAS en su obra reciente denominada "Estudios Sobre Derecho Probatorio", en cuya recapitulación 20 también sienta el mismo criterio.

Se desprende, pues, que son incompatibles la prueba legal en aquellos casos en que el que la instituye le otorga el valor de plena prueba y el sistema de

valoración de la sana crítica, de esa misma prueba.

Por otra parte, a esta Corporación, le parece contradictorio lo conceptuado en el motivo primero, frente a lo expresado en el motivo cuarto. Por un lado, dice el recurrente en su primer argumento, que debe ser la prueba (prueba pericial) valorada de acuerdo a la sana crítica en relación con las demás pruebas (licencia de conducir). Sin embargo, en el cuarto motivo manifiesta que la licencia de conducir no debe ser valorada de acuerdo a la sana crítica.

De la relación entre estos dos motivos se desprende que el recurrente no tiene claro cual es el verdadero sentido que le da la ley al juzgador a los documentos públicos en cuanto a la apreciación de las mismas, conforme a las reglas de sana crítica. La afirmación que hace el casacionista en cuanto a los dos motivos señalados, se contradice con el artículo 823 del Código Judicial que trata precisamente de los documentos auténticos y señala a texto expreso, que deben apreciarse "según las reglas de la sana crítica".

La Sala considera que el presente recurso no ha sido enmendado tal como se le ordenó en la resolución de 8 de marzo de 1996, por lo que debe ser declarado inadmisible, en base a lo preceptuado en el artículo 1166 del Código de Procedimiento Civil.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA INADMISIBLE el recurso de casación, en el fondo, propuesto por BOLÍVAR RACINES PEARCE y JAVIER BOLÍVAR RACINES PEARCE, mediante apoderado judicial.

Las obligantes costas se fijan en la suma de CIEN BALBOAS (B/.100.00).

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ROGELIO BUITRAGO RAMOS RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ESPECIAL DE PAGO POR CONSIGNACIÓN PRESENTADA POR ASENTAMIENTO CAMPESINO 11 DE OCTUBRE A FAVOR DE ROGELIO BUITRAGO RAMOS. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, CATORCE (14) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA PRIMERA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El señor ROGELIO BUITRAGO RAMOS, por medio de apoderado judicial, no conforme con la resolución proferida por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial el día 23 de febrero de 1996, en el proceso especial de pago por consignación presentada por ASENTAMIENTO CAMPESINO 11 DE OCTUBRE en su favor, anunció y formalizó oportunamente recurso extraordinario de casación, en el fondo.

Acogido dicho recurso por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, ingresó el expediente a la Sala de lo Civil de la Corte, en donde se fijó en lista por el término de ley, con el propósito que las partes alegaran sobre la admisibilidad del recurso propuesto, Dentro de dicho término el Licenciado ALBERTO LÁZARO, apoderado especial del recurrente, presentó escrito de desistimiento, amparado en el artículo 1073 del Código Judicial, que expresamente faculta a toda persona que haya interpuesto una demanda o recurso, para desistir de la misma. Dicho artículo reza así:

> "ARTÍCULO 1073: Toda persona que haya entablado una demanda, promovido un incidente o interpuesto un recurso, puede desistir expresa o tácitamente.

El desistimiento, una vez presentado al Juez, es irrevocable.

El demandado puede también desistir de la oposición a la demanda, caso en el cual se hace responsable al tenor de la misma, conforme a derecho.

Todo desistimiento se entiende hecho simplemente y sin condición. Si el desistimiento es condicional, han de aceptarlo todas las partes expresamente por medio de memorial".

Por las consideraciones antes expuestas, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de ley, ADMITE EL DESISTIMIENTO, del recurso de casación, en el fondo, propuesto por ROGELIO BUITRAGO RAMOS, mediante apoderado judicial.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

CREDIT LIBANAIS, S. A. L. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE CINCINNATI HOLDING, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, CATORCE (14) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA PRIMERA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La firma forense SHIRLEY & DÍAZ, quienes representan la parte demandante en el proceso ordinario "CREDIT LIBANAIS, S. A. contra CINCINNATI HOLDING, S. A., ha interpuesto recurso de casación, en el fondo, contra la sentencia consultada de fecha 14 de agosto de 1995, dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial.

En virtud de que el recurso fue admitido y se encuentra en la etapa de resolver, a ello procede la Sala, previas las consideraciones siguientes:

La demanda que dio inicio al presente proceso se interpuso con el fin de que CINCINNATI HOLDING, S. A. fuera condenada a pagar a favor de CREDIT LIBANAIS, S. A., la suma de DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES DÓLARES CON SETENTA Y CUATRO CENTÉSIMOS ($19,420.653.74), más los intereses vencidos y por vencer desde el 30 de junio de 1990, más las costas y gastos del proceso.

Dicha demanda se fundamenta en que la demandada CINCINNATI HOLDING, S. A. recibió de CREDIT LIBANAIS, S. A. L., en calidad de préstamo y por conducto de BANQUE DE PARTICIPATIONS ET DE PLACEMENTS, Ginebra, la suma de CATORCE MILLONES ($14,000,000.00), mediante las partidas que se detallan en el hecho primero de la demanda (f. 36). En el hecho segundo, se expresa que el día 2 de febrero de 1988, la parte demandante "suscribió con BANK ALMASHREK, S. A. L. un contrato de garantía limitado a las acciones que Bank Almashrek, S. A. L. mantiene en COMPART, A. G., y en cuya atención CREDIT LIBANAIS, S. A. L. acordó diversos créditos a personas morales de derecho extranjero".

Una vez surtido el procedimiento correspondiente a la primera instancia, el Juzgado Segundo del Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, mediante Sentencia N° 32 de 17 de abril de 1995, CONDENO a CINCINNATI HOLDING, S. A., a pagarle a CREDIT LIBANAIS, S. A. L., la suma de DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES DÓLARES CON SETENTA Y CUATRO CENTÉSIMOS ($19.420.653.74) en concepto de capital más NOVECIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS CATORCE DÓLARES CON SETENTA Y CUATRO CENTÉSIMOS ($905.514.74) en concepto de costas legales e intereses vencidos. Posteriormente,

se remitió en grado de consulta al Tribunal Superior, en base a lo estipulado en el artículo 1210 del Código Judicial, cuya parte resolutiva expone: "NO APRUEBA la Sentencia N° 32 de 17 de abril de 1995 proferida en el proceso ordinario propuesto por CREDIT LIBANAIS, S. A. L. contra CINICINNATI HOLDING, S. A."

El recurrente ha invocado como única causal, infracción de normas sustantivas de derecho en la apreciación de la prueba, que constituye una de las causales para proponer este recurso extraordinario.

El error del Juzgador en la apreciación de la prueba la sustenta el recurrente en tres (3) motivos, los cuales tienen el común denominador de ubicar el error en la apreciación de la prueba en la inaplicación de las reglas de la sana crítica al realizar la valoración probatoria en cuestión.

La Sala considera oportuno recordar que el error en la apreciación de la prueba derivada del principio de la sana crítica, no basta que sea alegada, sino es preciso que se demuestre de que manera el Juzgador de segunda instancia ha vulnerado dicho principio. A este respecto conviene reproducir en parte lo que expresó la sentencia de 4 de mayo de 1994, a lo que se procede:

> "...
> En cuanto a la violación del artículo 770 del Código Judicial, el recurrente alega que el juez no aplicó la sana crítica al valorar las pruebas, no obstante, no señala en qué forma dejó de aplicarla. Este sistema de valoración de la prueba tiene su base en la experiencia, la lógica y el correcto entendimiento humano (tal como señala Couture). Esto quiere decir, que al señalar que no se ha aplicado la sana crítica debemos explicar por qué razón se considera que no se aplicó, ya sea porque el razonamiento del juez es ilógico, o porque no está acorde con el entendimiento humano o la experiencia, y también se debe al valorar el caudal probatorio en base a su experiencia, la lógica y el correcto entendimiento humano, no se puede atacar este criterio de manera simplista y decir que no se aplicó, es necesario señalar por qué el razonamiento del juzgador no está acorde con la conclusión a la que llega ...".
>
> (Registro Judicial. Mayo de 1994. Sentencia de 4 de mayo de 1994; pág. 180).

El primer motivo es la valoración errónea del documento visible a foja 18 (y traducido en fojas 14-16), que consiste, en una comunicación que el BANK ALMASHREK LIMITED le dirige al BANQUE DE PARTICIPATIONS ET DE PLACEMENTS, y en la cual se menciona como deudor a la demandada. El Tribunal a-quem señala que esa sola referencia no resulta suficiente para acreditar la relación jurídica reclamada entre el demandante y el demandado. La Sala comparte esa posición, toda vez que la relación crediticia entre ambos, en las cuales aparecen las reglas que van a gobernar esa relación, que no se aportó sino una comunicación derivada de una relación jurídica en la cual no era parte la demandada, es decir, el convenio de garantía visible a fs. 3 y 4. La prueba que debió presentar la demandante era una en la que fehacientemente acreditase la relación jurídica de crédito derivada del contrato de préstamo que supuestamente existía entre ambos.

El segundo motivo hace referencia al error en la apreciación del Tribunal en el aludido contrato entre BANK ALMASHREK LIMITED y BANQUE DE PARTICIPATIONS ET DE PLACEMENTS, visible en las fojas 2, 3 y 4, al cual se refirió el Tribunal ad-quem, en la forma que se transcribe:

> "...
> Y a este respecto, observa el Tribunal que dicho documento no se encuentra debidamente autenticado por la autoridad nacional pertinente de conformidad con lo establecido en el artículo 864 del Código Judicial. Si bien el mismo viene acompañado con una nota traducida a fojas 6 del expediente, dicha nota sólo cuenta con un sello en árabe; sello éste que sí se encuentra traducido al inglés (fs. 5) y luego al español (fs. 7).
>
> Resulta curioso que la traducción al inglés del sello en árabe es la que se encuentra autenticada por el Cónsul General de Panamá que

> autentica la firma del Notario de Ginebra; quien a su vez autentica "exclusivamente para la legalización de la firma puesta anteriormente por el señor Albert LAHAM" quien se limita a certificar que "Lo que antecede es una copia fiel del texto Árabe el cual aparece al reverso de la carta-documento firmada por el Sr. John H. Iglehart.
>
> Luego entonces, el documento en sí no se encuentra autenticado de conformidad con lo que al respecto exige el artículo 864 ya mencionado. Así las cosas, lo dicho en el mismo no puede tenerse como prueba en el proceso, o sea, la relación entre la demandante y el Bank Almasherek, S. A. L. expedidor del documento anteriormente mencionado y en el que aparecía la supuesta obligación de la demandada. ...". (Lo subrayado es del Tribunal; fs. 114-115).

El motivo tercero fue igualmente analizado en la sentencia, y fue apreciado erróneamente por el Tribunal, en la apreciación del recurrente, conclusión que no comparte la Sala, sino todo lo contrario, toda vez que el Tribunal valoró sobre la base de que el documento visible a foja 12 consiste en un documento expedido por la parte actora y otro tanto aparece en la foja 20, destacándose que no existe en el expediente constancia de cuenta abierta a favor de la demandada, y menos aún, el saldo que pudiese tener.

El contrato de préstamo, como es sabido, constituye un contrato real, el cual se perfecciona por la recepción de la suma entregada en concepto de préstamo, con la obligación de devolverla, con los intereses causados, que normalmente aparecen cuidadosamente prefijados y pactados en el contrato de préstamo respectivo (artículo 1431 del Código civil). El único indicio de la existencia de dicho contrato, derivado de la recepción de las sumas cuestionadas, constituye un documento que se ubica en la foja 22, y traducido en la foja 21, documento sin fecha, con letra ilegible, y el cual no ha sido autenticado en la forma prevista por el artículo 864 del Código Judicial, para que constituya una prueba idónea.

Sobre la naturaleza y efectos del contrato de préstamo se han pronunciado DIEZ-PICAZO y GULLÓN BALLESTEROS, en la siguiente forma:

> "Siendo una tradición que se suele remontar al Derecho romano, nuestro Código civil configura los contratos de préstamo como contratos reales, de manera tal que su perfección no se produce por el mero consentimiento, sino que es precisa la entrega de la cosa o datio rei. Esta entrega no supone cumplimiento de una obligación anterior, sino que es elemento o requisito de perfección del contrato y, por consiguiente, del nacimiento de las obligaciones derivadas de él, centradas en el prestatario; obligaciones de restitución (S. de 25 de febrero de 1986). La justificación racional de esta exigencia se basa en que si no ha existido entrega no existe obligación alguna a cargo del prestatario. La obligación de restituir no puede nacer por el mero consentimiento de las partes sino por la recepción de la cosa".
>
> (SISTEMA DE DERECHO CIVIL, Vol. II; Editorial Tecnos, S. A.; 1995; España; Pág. 453-454).

La Sala estima, en base a las consideraciones que anteceden, que la apreciación de la prueba se llevó a cabo correctamente por el Tribunal Superior, por lo que, en la presente encuesta, lo procedente es no casar la sentencia.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 14 de agosto de 1995, proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia, dentro del proceso ordinario incoado por CREDIT LIBANAIS, S. A. contra CINCINNATI HOLDING, S. A.

Las costas de casación se fijan en la suma de DOSCIENTOS BALBOAS (B/.200.00).

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

LIZDO, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL INCIDENTE DE LEVANTAMIENTO DE SECUESTRO INCOADO POR MANUEL CORONADO, MIGUEL MARTÍNEZ, ENRIQUE CHONG, JOSÉ SALAZAR VÁSQUEZ, MIGUEL ESCOBAR Y RAÚL MENDOZA CONTRA DESARROLLO AGROPECUARIO, S. A. Y JORGE HEALY DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO QUE LIZDO, S. A. LE SIGUE A DESARROLLO AGROPECUARIO, S. A. Y/O JORGE HEALY. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA PRIMERA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La Sala Civil de la Corte declaró admisible el recurso de casación en la forma y en el fondo interpuesto por el licenciado RODOLFO AGUILERA FRANCESCHI en representación de LIZDO, S. A. contra la resolución de 19 de enero de 1995 dictada por el Tribunal Superior de Justicia del Segundo Distrito Judicial (Coclé-Veraguas) para decidir en segunda instancia el incidente de levantamiento de secuestro propuesto por MANUEL CORONADO y otros dentro del proceso ordinario interpuesto por LIZDO, S. A. contra DESARROLLO AGROPECUARIO, S. A. y/o JORGE HEALY. La resolución recurrida confirma la dictada el 16 de junio de 1993 por el Juez Primero del Circuito de Coclé, Ramo Civil, ordenando el levantamiento parcial del secuestro decretado contra la parte demandada en el juicio ordinario que antes se deja mencionado.

Como queda dicho, el recurso se interpuso invocando una causal de forma y otra de fondo y, como es pertinente, la Sala examinará en primer lugar la causal de forma invocada.

Señala el casacionista que el incidente fue tramitado sin que en la actuación se observara el trámite de apertura a pruebas, omisión que da lugar a la nulidad de lo actuado. Sustenta su pretensión en los motivos que se pasan a reseñar de la siguiente manera: Al dársele contestación al incidente de levantamiento de secuestro, LIZDO, S. A. propuso y solicitó la práctica de una Diligencia Exhibitoria. Esa prueba no fue practicada porque el Juez de Primera instancia no abrió el negocio a pruebas, no ordenó la práctica de lo solicitado y no concedió, en consecuencia, el término para evacuarla. Se alega como infringido el numeral 8 del artículo 722 del Código Judicial, en donde se consigna que constituye causal de nulidad el no abrir el proceso o incidente a pruebas en los procesos de conocimientos.

Al estudiar la causal de forma invocada, en relación con los vicios imputados a la resolución que se cuestiona y a la norma de derecho que se dice infringida, queda de manifiesto la coherencia y la vinculación lógica existente entre los tres aspectos que configuran el cargo de injuricidad denunciado. Se impone entonces el examen del problema a la luz de las constancias procesales y de las normas jurídicas pertinentes, a fin de establecer si el error in procedendo, en efecto, ha tenido lugar y, en caso de que así haya sido, si el vicio procesal que se le atribuye a la actuación es de los que provoca la nulidad solicitada mediante el presente recurso.

A fojas 10 y siguientes del cuaderno que contiene el incidente de levantamiento de secuestro reposa la contestación dada por la defensa técnica de LIZDO, S. A. oponiéndose a las pretensiones del incidentista. En esa contestación (f. 12) se aprecia la solicitud formulada para que se ordene y practique una diligencia exhibitoria con la asistencia de peritos para la inspección judicial de los libros y correspondencia de EMPRESAS GAGO, S. A. en la ciudad de Panamá, con el fin de determinar lo siguiente:

"a. Si el 26 de Diciembre de 1990, EMPRESAS GAGO, S. A., mediante nota escrita puso a disposición del Juzgado Tercero del Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, el cual actuó como comisionado del Juzgado Primero del Circuito de Chiriquí de lo Civil, un crédito por B/.20,725.28 cuyo titular era DESARROLLO AGROPECUARIO, S. A.

b. Que a esa fecha de 26 de Diciembre de 1990, ni en fecha anterior, se le había notificado a EMPRESAS GAGO, S. A. cesión alguna del crédito descrito en el literal a. de esta prueba ...".

El Juez primario dictó el auto ordenando el levantamiento del secuestro solicitado, sin previamente haber dictado la providencia abriendo el incidente a pruebas, pasando así por encima de lo establecido en el artículo 693 del Código Judicial que es muy claro cuando expresa que "si hubiere pruebas que practicar, se concederá para ello un término de ocho días". Al sustentar la alzada, con motivo del recurso de apelación interpuesto contra la resolución del a-quo, la defensa técnica de LIZDO, S. A. le llamó la atención al Tribunal Superior acerca de la omisión en que se había incurrido en cuanto a la tramitación, por no haberse abierto el negocio a pruebas (fs. 43 y 44 del expediente). No obstante, el Tribunal Superior dictó un fallo adverso a LIZDO, S. A. sin detenerse a considerar y sin hacer ninguna referencia al grave error procesal advertido por la afectada y cuya reparación demandaba la parte que resultó desfavorecida.

La parte opuesta al recurrente ha ensayado su defensa recordando que, de acuerdo al artículo 1179 del Código Judicial, el recurso de casación en la forma no es admisible si no se ha reclamado la reparación de la falta en la instancia en que esta haya ocurrido y también en la siguiente, a menos que el reclamante hubiera estado legítimamente impedido para hacerlo o se tratare de un vicio insubsanable o no convalidable. Según la parte opositora, como la falta se produjo en la instancia primaria del proceso sin que el recurrente hiciera el reclamo pertinente en esa fase sino en el escrito en que sustentó la alzada ante el Tribunal Superior, la Sala Primera de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia no debe Casar el auto censurado. Agrega el oponente en su alegato que no concurrieron tampoco los supuestos que excepcionalmente se contemplan como eximentes del cumplimiento de las formalidades señaladas en la norma esgrimida en amparo de su defensa, a saber: el impedimento legítimo para reclamar en la primera instancia y la condición de insubsanable o no convalidable del vicio denunciado.

La Sala obligatoriamente tiene que proceder a analizar las alegaciones del oponente en casación que derivan de la interpretación que se hace del artículo 1179 del Código Judicial. Para comenzar, conviene tener presente que técnica y estrictamente hablando el artículo 1179 del Código Judicial es una disposición que regula la materia relacionada con la fase de la admisión del recurso de casación en la forma y no, como pareciera entender el opositor, lo atinente a la justificación o fundamentación de las causales invocadas. Desde ese punto de vista, al declarar la Corte admisible el recurso interpuesto se debe presumir que lo hizo porque concurrían las formalidades y los presupuestos de hecho y de derecho requeridos para aceptar su admisibilidad. De no haber sido así debió rechazarlo. Como no fue rechazado, la Corte, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 1169, tiene que entrar a decidir sobre el fondo del asunto, convirtiéndose en irrelevante a estas alturas del proceso lo dispuesto por el artículo 1179 en que apoya su solicitud la parte opositora.

La Sala le concede razón al oponente cuando afirma que la falta procesal denunciada, -la no apertura del negocio a pruebas- no es una nulidad o vicio de aquellos que pueden considerarse como insubsanables o no convalidables. Sobre el tema, la doctrina y la jurisprudencia parecen coincidir en que las nulidades insubsanables se limitan sólo a los de distinta jurisdicción, a la falta de notificación del Ministerio Público y a la suplantación de la persona de alguna de las partes. Esto nos lleva a la necesaria conclusión de que la no apertura del incidente a pruebas constituye una omisión subsanable o convalidable, pero de ninguna manera autoriza para deducir que su concurrencia carezca de consecuencias y trascendencias procesales. La Corte le ha otorgado a esta clase de errores una singular importancia al definir la pretermisión del trámite de apertura a pruebas

como una violación de una garantía constitucional capaz de convertirse en causa de invalidez de la sentencia dictada en el proceso dentro del cual se ha omitido dicho trámite. Solamente si el vicio hubiese sido convalidado, subsanado o saneado en los términos que el Código de Procedimiento lo tiene permitido una nulidad de esta especie deja de generar sus efectos. Y vale la pena indicar que ninguno de esos fenómenos llegaron a producirse en el caso bajo examen.

Correspóndele ahora a la Sala valorar el segundo argumento que el oponente utiliza al aducir que el recurrente no actuó oportunamente, a la luz de lo exigido por el artículo 1179 del Código Judicial pues, asegura que habiéndose cometido la falta (la no apertura del incidente a pruebas) en la primera instancia, el recurrente no pidió en ese instante procesal la corrección de la irregularidad cometida.

Al margen de que, como queda dicho, este es un elemento a considerar en la etapa de la admisibilidad del recurso extraordinario de casación y no en la actual fase sustanciación del recurso, si estima la Sala saludable agregar un criterio adicional en los siguientes términos. Cuando el Juzgado Primero del Circuito de Coclé, Ramo Civil, procedió a dictar el auto mediante el cual decidió la controversia en primera instancia, lo hizo después que la parte demandada había dado contestación al incidente, sin que mediara ningún otro trámite, lo que, a juicio de la Sala, eliminó todas las oportunidades para que el afectado presentase ante esa instancia la petición de reparación correspondiente. En cambio, las constancias procesales si arrojan evidencia suficiente de que la parte que está recurriendo en casación formuló el reclamo y exigió la reparación del error in procedendo ante el Segundo Tribunal Superior de Justicia o sea en la Segunda instancia. Tal solicitud, de manera inexplicable, fue desatendida cuando el deber del Tribunal Superior consistía en anular y retrotraer la actuación, ordenándole al juez de primera instancia la práctica de la prueba que había sido legalmente solicitada.

Para la Sala es incuestionable el hecho de que, por tratarse de un vicio orgánico cometido en detrimento de las garantías de defensa que hay que respetarle a todos los litigantes y una vez demostrado el defecto procesal acusado, es decir, la omisión de la apertura del incidente a pruebas, existe una causal de nulidad que permite que se case el auto impugnado.

En cuanto a la causal de fondo invocada por el casacionista, resuelta favorablemente la anterior, la Sala por supuesto que no ha de pronunciarse.

Por las consideraciones expuestas, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara que:

1. CASA el Auto de 19 de enero de 1995 dictado por el Tribunal Superior de Justicia del Segundo Distrito Judicial (Coclé-Veraguas);

2. INVALIDA la resolución de 16 de junio de 1993 dictada por el Juez Primero del Circuito de Coclé, Ramo Civil, mediante la cual se declaró "PROBADO El Incidente de Levantamiento de Secuestro interpuesto por MANUEL CORONADO, MIGUEL MARTÍNEZ, JOSÉ SALAZAR VÁSQUEZ, MIGUEL ESCOBAR, ENRIQUE CHONG Y RAÚL MENDOZA, dentro de la Acción de Secuestro presentada por LIZDO, S. A. contra DESARROLLO AGROPECUARIO, S. A. (DASA) y/o JORGE HEALY y en consecuencia SE LEVANTA EL SECUESTRO DECRETADO mediante auto de 4 de diciembre de 1990, proferido por el Juzgado Primero del Circuito Civil de la Provincia de Chiriquí, sobre los créditos que tuviera la empresa GAGO, S. A. a favor de la Empresa "DESARROLLO AGROPECUARIO, S. A.", por ser Crédito Laboral y SE MANTIENE el Secuestro Decretado sobre los otros bienes". (Fs. 17 a 21 expediente principal) (Fs. 27-32 expediente antecedente).

3. DISPONE que se devuelva el expediente al Juzgado Primero de Circuito de Coclé, Ramo Civil, y se retrotraiga la actuación para que se surta el trámite de la apertura del Incidente de Levantamiento de Secuestro a pruebas.

Notifíquese, Devuélvase y Cúmplase.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(Con Salvamento de Voto)
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO RAFAEL A. GONZÁLEZ.

Respetuosamente disiento de lo resuelto.

(1) La sentencia sostiene que no abrir el negocio a pruebas no es causal de nulidad insubsanable (Págs. 4 final y 5), lo cual es correcto; pero no se derivan de ello las consecuencias necesarias, como veremos.

(2) Hace referencia a la importancia que la Corte le da a no abrir el negocio a prueba, en la jurisdicción constitucional. ¿Hasta qué punto se justifica esta referencia, si la apreciación constitucional debiera hacerse desde otro ángulo? Las razones que en esa jurisdicción se toman en cuenta son de otra naturaleza; y si la norma legal presenta visos de inconstitucionalidad, ha de ventilarse la contradicción mediante la consulta o advertencia de inconstitucionalidad.

Lo dicho para sostener que las consideraciones propias del orden y de la jurisdicción constituciofnal no se pueden invocar cuando se ejerce la jurisdicción civil ordinaria, con el efecto de desconocer normas claras, substantivas o procesales. Ha de ventilarse el conflicto civil de conformidad con las normas civiles. En ningún caso directamente por consideraciones de orden constitucional.

Se recordará que se suprimió la posibilidad de invocar en casación , normas constitucionales como violadas, corrigiendo lo que expresaba el artículo 1156 del Código Judicial (Sentencia, Pleno, 26 de julio de 1989).

(3) La Sentencia sostiene que se trata (la no apertura) de "un vicio orgánico cometido en detrimento de las garantías de defensa" (f. 6). Esto es materia constitucional.

(4) Opino que el punto ha de resolverse de conformidad con lo que establece el artículo 730 C. J.: "La nulidad sólo se decretará cuando la parte que la solicite ha sufrido o puede sufrir perjuicio procesal".

(5) La única prueba pedida y no practicada es una "diligencia exhibitoria con la asistencia de peritos" (f. 12). Se trata de una acción exhibitoria.

(6) ¿Cuál es su contenido? Probar (a) que Empresas Gago, S. A. puso a órdenes del tribunal la suma que debe a Desarrollo Agropecuario, S. A. y (b) que para entonces la cesión de crédito no se había notificado a empresas Gago, S. A.

(7) ¿Si damos por probados estos hechos, ello influye en el fallo? Evidentemente no. La prueba pedida y dejada de practicar es innocua. Cualquiera que sea el resultado que se obtenga al practicarla, la decisión den derecho es la misma. Luego entonces debe aplicarse el artículo 730 del Código Judicial, porque al no practicarla no se ha acarreado perjuicio a la parte que solicita la nulidad.

En estas consideraciones me baso para salvar el voto., con el mayor respeto.

Fecha ut supra.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

JORGE ENRIQUE RUIDÍAZ PLATAÑIOTIS RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO SUMARIO QUE LE SIGUE A ANDES TRADING COMPANY. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA PRIMERA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El Dr. MANUEL E. BERMÚDEZ en su condición de apoderado especial de **JORGE ENRIQUE RUIDÍAZ PLATAÑIOTIS**, parte demandante en el proceso ordinario seguido contra **ANDES TRADING COMPANY**, ha interpuesto **Recurso de casación** contra la sentencia de 19 de octubre de 1995 dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia.

Cumplidas las reglas de reparto, el negocio se fijó en lista para que las partes alegaran en cuanto a la admisibilidad del recurso. En ese sentido los apoderados de ambas partes presentaron escritos, visibles de fojas 259 a 274 (oposición a la admisión) y de fojas 275 a 276 (alegato del recurrente sobre la admisión).

La Sala procede a verificar si el recurso de casación cumple con los presupuestos establecidos por el artículo 1165 del Código Judicial.

En tal sentido, se satisfacen los dos primeros requisitos puesto que la resolución recurrida en casación es de aquellas contra las cuales concede la ley dicho medio de impugnación; y el recurso ha sido interpuesto en el término legal.

Para determinar si en el escrito de formalización del recurso se cumple a cabalidad con las exigencias del artículo 1160 ibídem, es decir en lo que respecta a la expresión correcta de la causal invocada, los motivos que la fundamentan y las normas de derecho explicadas, se procede a examinar cada causal y los otros apartados, separadamente. Se invocan tres causales, una de forma y dos de fondo. Veamos:

1. La causal única de FORMA es "INFRACCIÓN POR NO ESTAR LA SENTENCIA EN CONSONANCIA CON LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDADA, porque no se resolvieron pretensiones que fueron objeto de la controversia lo cual ha influido en lo dispositivo del fallo". (Fs. 231 a 234).

Para efectos de esta causal, el recurrente no cita normas adjetivas o de carácter procesal que son las pertinentes cuando se invoca alguna de las causales de forma establecidas en el artículo 1155 del Código Judicial.

Se puede apreciar que sólo invoca el artículo 1400 del Código Civil, referente al Mandato. Además, como se observa en el concepto de la infracción de esta norma, el recurrente hace alusión al error sobre la apreciación de la prueba, que corresponde a la casación en el fondo.

Como se tiene dicho, las causales de forma se refieren a la violación de normas procesales, siempre recaen sobre contravenciones de preceptos de derecho procesal, que fijan límites al juzgador o indican cómo debe desarrollar su actividad durante el proceso.

Al no haberse citado y explicado la infracción de alguna norma congruente con la causal invocada, se considera que falta uno de los requisitos establecidos por el artículo 1160 antes citado, situación que impide la admisión de esta causal.

2. La primera causal de FONDO es "INFRACCIÓN DE NORMAS SUSTANTIVAS DE DERECHO POR ERROR DE DERECHO EN LA EXISTENCIA DE LA PRUEBA, lo cual ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la sentencia recurrida". (Fs. 235-245).

La Corte ha podido percibir ciertos errores en los motivos que se establecen como fundamento de la causal, tales como la ausencia del respectivo cargo de injuricidad congruente con la causal de fondo invocada en el primero,

segundo, tercero y cuarto, los cuales parecen aludir a la causal de forma invocada inicialmente. Además, los motivos segundo, cuarto y quinto a su vez citan una norma de derecho (artículo 724 del Código Judicial), lo que no es procedente en este apartado del recurso, aunado al hecho de que la misma es una norma de derecho procesal. Consecuentemente, vemos que el contenido de los motivos, en general, es confuso al no poder percibirse de su lectura la debida congruencia con la causal invocada; de allí que no se ajustan a la técnica de casación en cuanto a la forma de expresarlos pues no se limitan a determinar el obligante cargo contra la sentencia sino que expresan otras consideraciones o alegaciones al extremo que el cuarto motivo transcribe parte de una declaración del demandante.

Con respecto al apartado dedicado a las normas de derecho, a primera vista se observa que no fueron citadas en el orden pertinente, ya que cuando se trata de una de las causales probatorias en primer lugar debe invocarse la norma probatoria violada (en este caso la que establece el medio de prueba) y posteriormente la norma de derecho sustancial infringida como consecuencia del yerro probatorio. El recurrente lo hizo de forma contraria.

Sobre las normas que en concreto se citan en esta causal probatoria se encuentra el artículo 724 (numeral 3) (casos en que la ilegitimidad de la personería del representante de una de las partes no es causal de nulidad), el cual no es compatible con la causal invocada, debido a su naturaleza. Por tal motivo, cuando el recurrente desarrolla el concepto de su infracción, no expresa que haya sido desconocido a consecuencia del error probatorio que imputa a la sentencia y, como evidentemente tampoco es una norma que se refiera a alguna prueba, no cabe su inclusión en esta causal de fondo.

Finalmente, las dos normas probatorias citadas no son congruentes con la causal de error de hecho invocada sino con la de error de derecho, pues ambas se refieren a la valoración de documentos privados. Así en la explicación de cómo fue violada la segunda (artículo 844 del Código Judicial) el recurrente expresa que el error manifiesto cometido por el Tribunal Ad-quem "le impidió ver todas las pruebas habidas en el expediente y que sin lugar a dudas demuestran claramente el derecho que le asiste a mi mandante" (fs. 245); obviamente este concepto no concuerda con el contenido de la norma.

Por todas las consideraciones que han sido expuestas, a juicio de la Corte esta causal resulta ininteligible, por lo que no es viable su admisión.

3. La segunda causal de fondo es "INFRACCIÓN DE NORMAS SUSTANTIVAS DE DERECHO, POR ERROR DE DERECHO EN CUANTO A LA APRECIACIÓN DE LA PRUEBA".

Los dos primeros motivos no guardan relación con la causal, más bien parecen aludir a situaciones de índole procesal. El cuarto parece referirse a la otra causal probatoria, es decir a la de error de hecho previamente invocada.

La única norma que se cita como infringida es una norma procesal de carácter orgánico, cuya infracción en cualquier caso daría lugar a la casación en la forma. Con respecto a esta causal no se han invocado normas probatorias y sustanciales que serían las correspondientes. Por omitirse este apartado, la Sala no puede admitir la causal, de conformidad a lo preceptuado por el artículo 1167 del Código Judicial.

Resulta evidente, entonces, que el recurso es ininteligible pues incurre en múltiples contradicciones e incompatibilidades, incluyendo indistintamente requerimientos propios de la casación en la forma en las causales de fondo y viceversa.

Por lo que se deja expuesto, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ADMITE el recurso de casación interpuesto por JORGE ENRIQUE RUIDÍAZ PLATAÑIOTIS contra la sentencia de 19 de octubre de 1995 dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia dentro del proceso sumario que el recurrente le sigue a la sociedad ANDES TRADING COMPANY.

Notifíquese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DORADO INVESTMENT REAL STATE, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A DESARROLLO EL DORADO, S. A. Y CONDOMINIO EL DORADO. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA PRIMERA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Invocando como causal única de fondo la infracción de normas sustantivas de derecho por concepto de error de hecho sobre la existencia de la prueba que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida, el apoderado judicial de DORADO INVESTMENT REAL STATE, S. A. formalizó recurso de casación contra el auto del Primer Tribunal Superior de Justicia dictado en el juicio sumario de interdicto posesorio de perturbación de la posesión seguido contra DESARROLLO EL DORADO, S. A. y CONDOMINIO DESARROLLO EL DORADO, el 13 de diciembre de 1994. El recurso resultó admitido por ajustarse a las exigencias y requisitos reservados a estos casos y tiene la Sala que proceder a su examen, antes de la decisión que ha de ponerle punto final a la encuesta.

El casacionista expone los motivos a lo largo de 17 puntos que se pasan a sintetizar de la siguiente manera: La sociedad DORADO INVESTMENT REAL STATE, S. A. adquirió mediante contrato de compra venta celebrado con la empresa LUGOMAR, S. A. la finca N° 68,423, inscrita al tomo 1583, folio 156, Sección de la Propiedad, Provincia de Panamá, del Registro Público y emprendió en ese lugar la construcción de un edificio, a raíz de lo cual las empresas demandadas incurrieron en actos obstaculizadores de las vías de acceso a la propiedad en mención. Lo anterior provocó que DORADO INVESTMENT REAL STATE, S. A. demandase a DESARROLLO EL DORADO, S. A. y a CONDOMINIO EL DORADO por perturbación, utilizando los trámites del juicio sumario de interdicto posesorio, respaldando su pretensión con un número plural de pruebas relativas al derecho de propiedad afectado y a la perturbación causada, las que pueden apreciarse de fojas 13 a fojas 33 del expediente. El Juez de la causa (Sexto del Circuito) dictó inicialmente auto en que intimó a las demandadas a abstenerse de continuar con los actos de perturbación pero con posterioridad revocó su primera decisión. Correspondíole al Primer Tribunal Superior de Justicia resolver en apelación la controversia, lo que hizo profiriendo fallo confirmatorio del apelado "ante la ausencia de evidencia demostrativa del alegado derecho de servidumbre". Continúa el recurrente exponiendo en los motivos que, de conformidad con la Resolución N° 24 de 7 de noviembre de 1978 la Dirección General de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda se consignó que sobre la finca N° 53,679 (de la cual fue segregada la N° 68,423) se construyeron servidumbres privadas para permitir accesos permanentes para los lotes a segregar. Y, se añade que, mediante escritura pública N° 8,754 de 29 de diciembre de 1978 de la Notaría Segunda del Circuito de Panamá, el propietario de la finca N° 53,679 segregó de esta última un lote de terreno que devino en la finca N° 68,423, actualmente de propiedad de la parte actora de este juicio. Se indica que dicho predio fue objeto de enajenación sin que en el título constitutivo se hiciera constar que la servidumbre establecida en su favor se extinguía o había desaparecido. De acuerdo a la censura todos los hechos mencionados se encuentran acreditados a plenitud mediante las pruebas allegadas al proceso pero, como dichas probanzas no han sido tomadas en consideración por la resolución recurrida, se dictó sentencia contradiciendo y negando las pretensiones de la parte demandante.

En el recurso se denuncian violados los artículos 769, 819, 820, 821 y 822 del Código Judicial, así como lo dispuesto por el artículo 523 del Código Civil. Las normas del Código de Procedimiento tildadas de infringidas se refieren a los

medios de prueba, en especial a los documentales, a su calificación, a las formalidades que en ellos deben concurrir, a su naturaleza y a la autenticidad que hay que asignarles, una vez hayan sido incorporados al proceso en los términos consagrados por la Ley de Procedimiento. A juicio del recurrente las disposiciones mencionadas fueron violadas directamente por falta de aplicación cuando la sentencia recurrida desconoció la existencia de las pruebas, indicándose que las mismas son visibles a fojas 23, 25, 26, 33, 108 y 181 del expediente. Se incluye dentro de las normas infringidas, también, el artículo 773 del Código Judicial que consagra que los hechos amparados por una presunción de derecho no se tienen que probar; principio que se dice desconocido en este caso, donde las partes demandadas, según se afirma, reconocieron en el proceso la existencia de la servidumbre en discusión y que está representada por la calle de acceso interno a los predios en torno a los que gira la presente controversia. Por último, se aduce la violación del artículo 523 del Código Civil acusándose a la resolución que se impugna de desconocer que la servidumbre que se reclama fue creada por la parte demandada, ocurriendo que al tiempo de dividirse la propiedad no se dejó constancia, en el título de enajenación, de la extinción de la servidumbre, ni tampoco se hizo desaparecer el signo que la constituye con antelación a que se produjera el otorgamiento de la escritura (título traslaticio de dominio). Se afirma que, al no reconocer la servidumbre aparente establecida como un gravamen sobre la finca 53,679 para favorecer o servir a la finca 68,423, la resolución atacada impide la protección de los derechos de DORADO INVESTMENT REAL STATE, S. A. frente a las perturbaciones de que es objeto por parte de las demandadas en la finca de su propiedad.

El recurso de casación propuesto, como se deja dicho, fue admitido por la Sala y en el término adecuado los apoderados de las demandadas hicieron uso del derecho a alegar en su contra. En representación de CONDOMINIO DESARROLLO EL DORADO su apoderado judicial indicó que no se habían dado, con respecto a la finca 68,423, los presupuestos legales que permitiesen la aplicación del artículo 523 del Código Civil a la disputa planteada. Al sustentar su tesis advierte que la disposición legal en comento dicta que el signo aparente de la servidumbre que se pretenda hacer valer supone la existencia de dos fincas distintas pertenecientes a un solo propietario y que, en el caso subjúdice, de lo que se trata es de una situación diferente, donde lo que se produjo fue la enajenación de una parte de un predio (simple segregación) sin que el lote segregado de la finca madre se viera privado de acceso a la vía pública, por lo que no fue necesario establecer en su favor ninguna servidumbre de tránsito o de paso. Agrega el oponente que al proceso no se hicieron llegar piezas de convicción en capacidad de acreditar la existencia de un título constitutivo de la servidumbre, indispensable para aceptar su reconocimiento a favor de la finca adquirida por la parte demandada. Se sostiene que el derecho pretendido por la actora se quiere hacer surgir de la simple demarcación de los linderos fijados al producirse la segregación, factor que no tiene porqué considerarse en sí mismo como generador de un título constitutivo de servidumbre. Finalmente se destaca que la servidumbre con la cual pretende beneficiarse la parte demandante está representada en calles de circulación interna de carácter privado pertenecientes a una finca sujeta al Régimen de Propiedad Horizontal (Condominio El Dorado) en donde los propietarios han asumido los costos de mantenimiento, sin que el recurrente sea miembro de esa copropiedad, razón por la cual no se concibe cómo puede aspirar a usufructuar de gratis los beneficios que emanan de una obra a la cual no contribuyó a edificar, siendo por completo ajena a los costos invertidos en su construcción y mantenimiento.

Los abogados de DESARROLLO EL DORADO, S. A. (la otra demandada) se limitaron en su escrito de alegatos a resaltar que los diferentes planos de las fincas incorporados al expediente prueban que, a pesar de que el Registro Público certificó que la finca 68,423 colinda con una calle de circulación interna del Centro Comercial El Dorado, entre esa calle y el predio de propiedad de la parte demandante encuéntrase un espacio de tres metros de ancho destinado a las aceras y a la áreas verdes negando que su representada hubiese incurrido en algún momento en la perturbación de la posesión en contra de la parte demandante. Añade que el mecanismo procesal utilizado por la parte actora no fue el apropiado, pues interpuso una demanda por perturbación -interdicto posesorio- cuando debió emplear el remedio contemplado por el artículo 1343 del Código Judicial referente a la constitución, variación, extensión o modo de ejercer la servidumbre.

POSICIÓN DE LA CORTE.

Cuando el Primer Tribunal Superior de Justicia resolvió esta disputa en segunda instancia dejó dicho lo siguiente:

> "La parte recurrente expuso en su memorial de sustentación, que la aludida servidumbre ostenta una existencia precedente al presente reclamo, sin embargo no ofreció **pruebas contundentes de ello**, por lo que lo conducente, resulta ser la confirmación de la pieza impugnada".

Para la Sala es sobre ese punto en donde hay que centrar el examen y el análisis, a fin de determinar si los cargos de injuricidad formulados en el recurso de casación gozan de la justificación y la fuerza que les asigna la censura. No obstante, antes de entrar en esas consideraciones, es pertinente aludir a una de las argumentaciones empleadas por los oponentes de este recurso extraordinario. Las sociedades demandadas en este juicio al igual que la sentencia recurrida han indicado que el reclamo articulado carece de viabilidad a través del interdicto de perturbación, pues el mecanismo procesal argüido no es el apropiado para hacerlo. Han dicho que esta no es una demanda sobre constitución, variación o extinción de una servidumbre promovida al amparo del artículo 1343 del Código Judicial, pero para la Sala (fuera de considerar que un punto de vista semejante equivaldría a soslayar de manera inexcusable el problema de fondo) es evidente que lo que hay que decidir es si los hechos de perturbación que se alegan perpetrados en contra de la posesión pacífica se produjeron o no, circunstancia que, en caso afirmativo, bien pudieron originarse en conductas directa o indirectamente relacionadas con el desconocimiento de la servidumbre en caso de que hubiese existido ese derecho. No es concerniente al pleito invocar lo dispuesto en el artículo 1343 del Código Judicial, ya que la demanda no se refiere a la constitución, variación o extinción de una servidumbre o sobre el modo en que esta deba ser ejercida, sino acerca de si, por haberse pasado por encima de una servidumbre existente, se produjo o no una perturbación de la posesión, en cuyo caso cabe perfectamente el uso del remedio procesal previsto con el interdicto posesorio.

Le endilga el recurrente a la resolución atacada no haber tenido en cuenta el conjunto de pruebas aportadas con la finalidad de acreditar la existencia de la servidumbre constituida en favor del predio de su propiedad y como predio sirviente a la finca de las demandadas, quienes lo han venido perturbando en sus derechos al privarlo del acceso por el lugar señalado, de manera arbitraria e ilegal.

Sabido es que las servidumbres, aún en aquellos casos en que no aparezcan inscritas, se consideran limitaciones al goce absoluto del derecho de propiedad. Aparte de las que tienen su origen en la ley, las servidumbres también obedecen, en ciertas ocasiones, a la subordinación inevitable a la cual queda sometida la propiedad como resultado de las necesidades de coexistencia que advienen de las relaciones físicas existentes entre distintas propiedades privadas. Moviéndose dentro de esa esfera los propietarios tienen la facultad de autolimitar su dominio en beneficio de terceros concediendo, constituyendo o estableciendo las servidumbres en forma voluntaria. También, según lo consagra la legislación, es permisible y lícito distinguir entre las llamadas servidumbres aparentes y no aparentes. Las primeras son las que se pueden percibir a simple vista y se expresan a través de signos exteriores, materiales o concretos. Las segundas son las que no se pueden apreciar a simple vista, como aquellas que encierran un carácter o un derecho negativo: la de no levantar o no edificar una pared, por ejemplo.

Entre las servidumbres, la ley y la doctrina se encargan de incluir las denominadas "por destino del padre de familia". Son éstas servidumbres, de signo aparente, las ubicadas entre dos fincas, en cuyo caso la constitución de las mismas obedece al surgimiento de un título que tiene un origen puramente voluntario. Es a tales servidumbres a las que se refiere el artículo 523 del Código Civil. El recurrente en casación alega que dentro de esta categoría de servidumbre se encuentra la que sirve a la finca N° 68,423 de propiedad de su representado y que tiene como predio sirviente la finca 53,679 de propiedad de

las demandadas. Esa clase de servidumbres, tienen un modo especial de constitución derivado del consentimiento tácito del dueño o propietario que enajena un fundo. "... **la constitución se produce ipso jure, automáticamente, como un efecto ex lege, independientemente de que haya habido o no, propósito de que la servidumbre nazca, y siempre que las partes no hayan excluido expresamente en la escritura de enajenación la aplicación del precepto, o haya hecho desaparecer los signos que muestran la relación de servicio "entre las fincas"**", dice en sus comentarios el autor JUAN ROCA JUAN refiriéndose al artículo 541 del Código Civil Español, equivalente exacto del artículo 523 de nuestro Código Civil. (v. comentario del C. Civil y Corporaciones Forales, por MANUEL ALBALADEJO, Tomo 7°, Vol. 2, Pág. 78).

En otras palabras, estas servidumbres basadas en la conservación más allá de la enajenación de un signo aparente se deben presumir vigentes, salvo que en el acto jurídico en que se dispone sobre el dominio quede constancia de lo contrario. Se producirá el mismo efecto si, antes de otorgarse, la escritura se hace desaparecer físicamente el signo que representa a la servidumbre. Por eso, si no se hace la salvedad o no se hace desaparecer el signo habrá que presumir el título así como deducir la voluntad de mantener el estado de hecho y de derecho preexistente en relación con las fincas afectadas.

En el caso subjúdice la parte que se opone a la casación aduce que el artículo 523 del Código Civil no es aplicable en razón de que el mismo requiere que el signo aparente de servidumbre recaiga sobre dos fincas distintas pertenecientes a un solo propietario. Acerca de esta materia la opinión prevaleciente en la doctrina se inclina por considerar que, en caso de segregación, si los signos demostrativos de la servidumbre fueron establecidos por el dueño común ("el padre de familia") es irrelevante, para la subsistencia o la insubsistencia de la servidumbre, que el gravamen recaiga sobre dos fincas distintas pertenecientes a un único propietario o que se trate de una enajenación parcial, de una división o de una segregación efectuada sobre una sola finca madre. El significado que la doctrina le ha dado a la voz "**enajenación**" contenida en el artículo 523 ha sido muy amplio y comprende también la división que recaiga en una sola finca y que dé como resultado la separación de la propiedad. Ese es el criterio adoptado por el Tribunal Supremo de España en reiteradas sentencias. Dice el citado JUAN ROCA JUAN que "la jurisprudencia considera cumplido el requisito de la enajenación --separación de propiedades-- en el caso de <enajenación parcial o división en ambos casos, de una misma finca>; y en el de división material <de una finca poseída en común por varios dueños ... >, porque <la ratio juris es la misma>, ..." (Obra citada pág. 85). El Tribunal Supremo de España ha mantenido inalterable la doctrina de los signos aparentes como título de las servidumbres de que se ocupa el artículo 541 del Código Civil Español, según la cual esta disposición (523 del Código Civil panameño) es aplicable no sólo cuando se separa el dominio de dos fincas, sino también al dividirse una sola (sent. de 10 de abril de 1929). En sentencia del 6 de enero de 1932 el Tribunal Supremo de España vuelve a reiterar que la servidumbre continuará existiendo "**una vez separadas las fincas, si otra cosa no se expresa claramente al dejar de pertenecer al mismo patrimonio o si los signos aparentes no se hacen desaparecer**". Idénticas posturas adoptó el Tribunal Supremo de España en sentencias dictadas el 10 de octubre de 1957 y el 30 de octubre de 1959.

Ya hemos dicho que la forma de eliminar o excluir la constitución de esta clase de servidumbre consiste en expresar claramente la voluntad de hacer desaparecer el gravamen en el título de enajenación, y debe entenderse que no basta consignar que la finca se encuentra "libre de toda carga o gravamen", tema sobre el cual también se ha pronunciado la jurisprudencia española en sentencias del Tribunal Supremo. (V. ob. cit. pág. 86). El otro camino que se puede emplear es el de hacer desaparecer el signo aparente de la servidumbre antes del otorgamiento de la escritura usando para ello actos materiales que destruyan la apariencia de dicho signo, de lo cual deben quedar pruebas concluyentes e inequívocas.

Volviendo a los hechos en que se fundó la pretensión de la parte actora de este juicio es bueno precisar que los mismos, al relacionárseles con las pruebas aportadas, permiten arribar a ciertas conclusiones. Lo primero que hay que decir

es que ha quedado debidamente establecido, mediante las certificaciones expedidas por el Registro Público, que la finca 68,423, inscrita al tomo 1583, folio 156, de la Sección de la Propiedad, Provincia de Panamá, pertenece en la actualidad a DORADO REAL INVESTMENTS, S. A. como producto de una segregación de la finca N° 53,679, inscrita al tomo 1235, folio 440, Sección de la propiedad, Provincia de Panamá, del Registro Público y cuyo dueño fuera en aquel tiempo DESARROLLO EL DORADO, S. A. Posteriormente, dicha propiedad fue incorporada al Régimen de Propiedad Horizontal convirtiéndose en la finca 7330, inscrita al folio 268, tomo 133 de la Sección de Propiedad Horizontal en el Registro Público quedando a nombre de CONDOMINIO EL DORADO. Consta en autos, también, que la finca 68,423 colinda por su lindero Este con la finca 53,679 de la cual fue segregada, constituyendo este lindero una calle de hormigón denominada o identificada en los planos como "F", todo lo cual es verificable a través de las certificaciones expedidas por el Registro Público y el plano visible a fojas 202 del expediente. Acerca de los motivos y propósitos que obraron como causa y finalidad de la construcción de la calle "F", la Sala encuentra que el contenido de la copia debidamente autenticada de los documentos que corren de fojas 21 a 27 del expediente, revela los antecedentes y el historial que atañen a esa vía de tránsito construida en esos predios. Esos documentos también se refieren a las circunstancias existentes, con anterioridad a la individualización registral de los predios que fueron segregados de la finca madre, inicialmente identificados como los lotes número L-1, L-3, L-4, L-5, L-7 y L-8, planteándose en tales antecedentes la cuestión relacionada a la forma de cómo se facilitaría el acceso permanente a esos lotes una vez que éstos fueran objeto de segregación. Los documentos en mención consisten en copias de notas intercambiadas entre la Dirección de Obras y Construcciones Municipales del Municipio de Panamá y la Dirección General de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda, así como copia de la Resolución N° 24 de 7 de noviembre de 1978 dictada por el Ministro de ese ramo, en los cuales se hace alusión a "que sobre la finca 53,679 se han construido servidumbres privadas, que constituyen accesos permanentes para lotes a segregar" (subraya la Sala). Conforme a las constancias procesales el lote N° L-4 que corresponde a la finca 68,423 fue uno de los segregados de la finca 53,679, acto cumplido mediante la escritura pública N° 8,754 de 29 de diciembre de 1978 otorgada en la Notaría Segunda del Distrito de Panamá y se ha podido verificar que en dicho documento (escritura) el vendedor no hizo reserva alguna que indicase que la servidumbre de acceso existente junto al lindero del lado Este, o sea la calle "F", se extinguiera, desapareciera o dejara de tener vigencia con motivo de la enajenación (v. f. 14). Los signos aparentes de la servidumbre (la calle) tampoco han dejado de existir.

Como quiera que a juicio de la Sala se ha dejado establecido, sin ningún género de dudas, que las demandadas le impidieron el paso y le obstaculizaron la entrada a la parte actora a través de la calle F, que fue concebida y construida en sus orígenes como una vía de acceso permanente en favor de las fincas que se fueran a segregar de la finca 53,679, esta Superioridad estima que el cargo de injuricidad que se endilga contra la resolución proferida por el Tribunal Superior de Justicia debe prosperar y en consecuencia casa la sentencia.

SENTENCIA DE REEMPLAZO

La parte actora, DORADO INVESTMENT REAL STATE, S. A., hizo uso del interdicto posesorio de perturbación al considerar que las demandadas incurrieron en actos perturbadores de su derecho de propiedad, en su condición de titular de la finca N° 68,423 inscrita al folio 156, al tomo 1583 de la Sección de la Propiedad, Provincia de Panamá, del Registro Público y solicitó que se decretase intimación en contra de DESARROLLO EL DORADO, S. A. y CONDOMINIO EL DORADO para que cesasen en los actos de perturbación de los cuales se les acusaba.

Del examen de los hechos, de las pruebas y del derecho invocados por las partes, esta Sala deduce que lo medular de la controversia se contrae a determinar si existe o no, junto al lindero Este de la propiedad N° 68,423, constituida una servidumbre que tiene como predio sirviente al fundo identificado como la finca N° 53,679, inscrita al tomo 1235, folio 440, de la Sección de la Propiedad, Provincia de Panamá, que perteneció a la Sociedad DESARROLLO EL DORADO, S. A. y que posteriormente se incorporó a la Sección de Propiedad Horizontal del Registro Público como finca N° 7730, inscrita al folio 268, tomo

133 de dicha sección a nombre de CONDOMINIO EL DORADO.

La Sala ha logrado establecer que antes de producirse la segregación de la finca 68,423, desprendida de la finca madre 53,679, el propietario de esta última constituyó, mediante la construcción de una calle de hormigón, una vía para garantizar por ese conducto el acceso permanente a los lotes que más adelante fuesen segregados. Uno de los lotes segregados de la finca madre fue el que se numeraba como L-4 que luego se convirtió en la finca 68,423, actualmente de propiedad de la parte actora de este juicio. Al efectuarse la segregación el propietario vendedor no tuvo la prevención de deshacer o de declarar extinguida la servidumbre que había sido establecida para favorecer el acceso hacia la finca segregada, de manera que la servidumbre debe considerarse que ha subsistido, activa y pasivamente, después de efectuada la enajenación, ya que tampoco el signo que la representa (la calle construida) se hizo desaparecer antes del otorgamiento de la escritura que contiene el acto de segregación y venta de la propiedad favorecida por el gravamen que se reclama.

La Corte estima que en el caso subjudice ha quedado claramente establecido que la parte demandada constituyó una servidumbre de signo aparente y por "**diligencia del padre de familia**" que, al no declararse extinguida cuando se produjo la enajenación del predio dominante, continuó conservando por completo vigencia, sin que sea válida la argumentación de que en este caso no se estaba originalmente en presencia de dos fincas distintas pertenecientes al mismo propietario, pues la interpretación racional de la norma legal aplicable (art. 523 del Código Civil) implica la conservación del derecho, aún en aquellos casos en donde lo que se produzca sea una enajenación parcial o la división de una sola finca.

Comprobados plenamente en el juicio los hechos de perturbación denunciados por la parte actora, es preciso que la Sala ordene que los mismos cesen, de manera que la parte demandante deje de ser obstaculizada y molestada en el ejercicio pleno de los derechos que le corresponden en su condición de propietario, primordialmente en relación con el acceso a su predio a través de la denominada calle "F" que linda por el lado Este con la finca de su propiedad, contigua al lote identificado como la finca 53,679 que pertenece a la parte demandada.

Por lo antes expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CASA la sentencia de 13 de diciembre de 1994, proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia, REVOCA el Auto N° 361 de 6 de abril de 1994, dictado por el Juzgado Sexto del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo civil y FALLA: INTIMA A DESARROLLO EL DORADO, S. A. y a CONDOMINIO DESARROLLO EL DORADO que se abstengan de realizar actos de perturbación contra DORADO INVESTMENT REAL STATE, S. A., consistentes en impedir el acceso a través de la denominada calle "F" contigua al lindero Este de la finca N° 68,423, inscrita en el tomo 1583, folio 156, Sección de la Propiedad del Registro Público, Provincia de Panamá.

ADVIERTE a los demandados que de proseguir con sus actos de perturbación incurrirán en desacato al Tribunal y deberán pagar la indemnización correspondiente por los daños y perjuicios que causen.

ORDENA COMUNICAR lo antes resuelto al jefe de Policía del Corregimiento de Bethania para el caso de que esta orden deba ser cumplida mediante el uso de la fuerza.

Las costas a cargo de las demandadas se fijan en la suma de B/.1,500.00 balboas.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ

(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE

Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ANTONIO FLORES RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE ABEL PITTÍ CONCEPCIÓN. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA PRIMERA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La Sala de lo Civil de la Corte, mediante resolución de veintiséis (26) de enero de mil novecientos noventa y seis (1996), declaró admisible el recurso de casación interpuesto por ANTONIO FLORES contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, el treinta (30) de agosto de mil novecientos noventa y cinco (1995), dentro del proceso ordinario que le sigue ABEL PITTÍ al recurrente en casación.

Concedido el término que señala la ley, para que las partes alegaran en cuanto al fondo, venció dicho período sin que ninguna de las partes hicieren uso del mismo.

ANTECEDENTES DEL CASO:

El señor ABEL PITTÍ CONCEPCIÓN presentó demanda ordinaria declarativa contra ANTONIO FLORES, para que el Tribunal haga las siguientes declaraciones:

"...

A. Que por incumplimiento de parte de Don ANTONIO FLORES, se declara resuelto el contrato de compra y venta de setenta y cinco (75) árboles de madera de Cedro, celebrado entre Don ABEL PITTÍ CONCEPCIÓN y DON ANTONIO FLORES, mediante documento privado de fecha veintiocho (28) de febrero de mil novecientos ochenta (1980).

B. Que el demandado Don ANTONIO FLORES está obligado, como consecuencia de la declaración anterior, a restituir a Don ABEL PITTÍ CONCEPCIÓN, la cantidad de MIL BALBOAS (B/.1,000.00), con sus correspondientes intereses; que recibió como parte del precio del contrato de compra y venta mencionado en la declaración anterior.

C. Que el demandado Don ANTONIO FLORES está obligado, como una consecuencia directa de la primera declaración, a resarcir el DAÑO EMERGENTE, que ha sufrido el patrimonio de Don ABEL PITTÍ CONCEPCIÓN, o sea, el empobrecimiento real y efectivo que éste a sufrido, como consecuencia de los daños y perjuicios causados por el incumplimiento, en la cuantía que fuere determinada en el curso del proceso.

D. Que el demandado Don ANTONIO FLORES está obligado, en virtud de la primera declaración, a resarcir el LUCRO CESANTE, que a (sic) sufrido el patrimonio de Don ABEL PITTÍ CONCEPCIÓN, o sea, la ganancia o utilidad que éste dejó de percibir, como consecuencia directa del incumplimiento, en la cuantía que fuere determinada en el proceso.

E. En caso de oposición, Don ANTONIO FLORES queda obligado, a pagar las costas y gastos que resultaren al momento de concluir el proceso".

El Juzgado Primero del Circuito de Chiriquí, Ramo de lo Civil, mediante Sentencia N° 2 de 19 de enero de 1983, NIEGA las declaraciones pedidas por el demandante y le condena en costas por la suma de MIL BALBOAS (B/.1,000.00).

Apelada la resolución anterior, el Tercer Distrito Judicial del Cuarto Tribunal Superior de Justicia, mediante Sentencia Civil del 22 de septiembre de 1983, previa revocatoria de la sentencia apelada, DECLARA:

"...

a) Que por incumplimiento de parte de Don ANTONIO FLORES, se declara

resuelto el contrato de compra y venta de 75 árboles de madera de cedro, celebrado entre Don ABEL PITTÍ CONCEPCIÓN y Don ANTONIO FLORES, mediante documento privado de fecha veintiocho (28) de febrero de 1980;

b) Que el demandado Don ANTONIO FLORES está obligado, como consecuencia de la declaración anterior, a restituir a Don ABEL PITTÍ CONCEPCIÓN, la cantidad de MIL BALBOAS (B/.1,000.00), con sus intereses correspondientes; que recibió como parte del precio del contrato de compra y venta mencionado en la declaración anterior;

c) Que el demandado Don ANTONIO FLORES está obligado, como una consecuencia directa de la primera declaración, Don ABEL PITTÍ CONCEPCIÓN, o sea, el empobrecimiento real y efectivo que éste ha sufrido, como consecuencia de los daños y perjuicios causados por el incumplimiento, en la cuantía que fuere determinada conforme al procedimiento establecido en el artículo 553 del Código Judicial; y

d) Que el demandado Don ANTONIO FLORES está obligado, en virtud de la primera declaración, a resarcir el lucro cesante, que ha sufrido el patrimonio de Don ABEL PITTÍ CONCEPCIÓN, o sea, la ganancia o utilidad que éste dejó de percibir, como consecuencia directa del incumplimiento, en la cuantía que fuere determinada conforme al procedimiento establecido en el artículo 553 del Código Judicial.

Se CONDENA en costas a la parte demandada que se fijarán en el proceso de liquidación consignado en el artículo 553 del Código Judicial".

Contra la sentencia dictada en segunda instancia, tanto la parte demandante como la demandada, anunciaron casación, concediéndole el tribunal ad-quem el término de diez (10) días para que cada uno formalizara el recurso de casación anunciado, de conformidad con lo que establece la ley.

Consta a foja 362 del expediente, el Auto Civil dictado por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial de fecha 18 de septiembre de 1989, por medio del cual se DECLARA DESIERTO el recurso de casación anunciado y se condena en costas a cada una de las partes, ordenándose devolver el negocio al Juzgado de origen.

El apoderado judicial del señor ABEL PITTÍ CONCEPCIÓN promovió Liquidación de Condena en Abstracto dentro del proceso ordinario que le sigue a ANTONIO FLORES. El Juzgado Primero del Circuito de Chiriquí, mediante Auto N° 1002 de 12 de julio de 1994, condenó a ANTONIO FLORES al pago de la suma de TRECE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS BALBOAS (B/.13.672.00) en concepto de capital, daño emergente y lucro cesante más las costas que en derecho se estiman en la suma de DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO BALBOAS (B/.2.984.00).

Luego de apelada la resolución anterior, el Tribunal Ad-quem resolvió CONFIRMARLA, imponiendo costas de segunda instancia en la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA BALBOAS (B/.250.00), según consta a fojas 488 a 497 del expediente.

Contra esta última resolución la parte demandada presentó recurso de casación el cual se procede a analizar.

El recurrente basó su recurso tanto en la forma como en el fondo. Conviene, por tanto, analizar, en primer término, la causal en la forma planteada por el recurrente. La causal es que la sentencia recurrida condena a más de lo pedido en el libelo de demanda, incurriendo en extrapretita. Esta causal se fundamenta en un sólo motivo del siguiente tenor:

"La sentencia recurrida condenó al demandado ANTONIO FLORES al pago de la suma de B/.13.672,00 en concepto de capital, daño emergente y lucro cesante, más costas por la suma de B/.2.984,00 sin tomar en consideración el hecho de que la parte demandante fijó la cuantía de su demanda en la suma de B/.5.000,00 (ver fojas 49) razón por la

cual incurrió en la prohibición legal que veda condenar al demandado por la cantidad superior a la pretendida en la demanda".

Las violaciones al ordenamiento jurídico en que se fundamenta la causal, es el artículo 978 del Código Judicial, que consagra, como es sabido, el principio de congruencia de la sentencia. La modalidad en la incongruencia es el defecto conocido como extra-petita, es decir, condenar a más de lo que se planteó en la demanda. JORGE FÁBREGA, en su conocida monografía sobre la casación aborda en tema en los siguientes términos:

"...

3. El objeto del proceso es un punto de referencia esencial para determinar si el fallo ha observado el principio de congruencia. Como ha expresado el Tribunal Supremo de España: "La doctrina científica y la jurisprudencia tienen claramente proclamado que para apreciar a los efectos de la congruencia o desviación de una sentencia en relación con los pedimentos que le sirven de base, han de utilizarse como criterio de contraste los que rigen en general la identificación de las acciones, tomándose en consideración los tres elementos constitutivos esenciales de la acción y consiguiente de la demanda, a saber: los sujetos, al objeto y la causa o título de pedir". (S. de 19 de octubre de 1994 y 27 de abril de 1942)".

(CASACIÓN de Jorge Fábrega P. y Aura E. Guerra de Villalaz. PANAMÁ-1995; Pág. 192).

La modalidad de extra-petita o plus petita, señala el mismo autor, puede ser de carácter cuantitativo o cualitativo, estando, el presente recurso, en presencia del primero, es decir, por condenar a más de lo que se pidió.

Conviene analizar si en el proceso se planteó la cuantía de la demanda en la suma de CINCO MIL BALBOAS (B/.5.000.00), como alega el recurrente, en cuyo caso la condena decretada en la sentencia no podría sobrepasar esa suma, si se considerase que le asiste la razón al demandante. De otra suerte, tal limitación no se produce y, por tanto, la sentencia no viola el principio de la congruencia, al cual se refieren los artículos 470, 978 (citado por el recurrente) y el artículo 1155, numeral 7, ordinal c), es decir, se condene a más de lo pedido, todos estos artículos del Código Judicial vigente. Iguales principios aparecen en el Código Judicial anterior, adoptado mediante la Ley 61 de 1946, en sus artículos 551 y 552, bajo cuyo imperio se inició el proceso cuya sentencia de segunda instancia es objeto de recurso de casación.

Una lectura de la demanda con la cual se dio inicio a este proceso, que constituye el marco dentro del cual se ha de producir la decisión, no obstante, no le da la razón al recurrente, como de manera acertada sostuvo la sentencia recurrida (fs. 494 y 495), por las siguientes razones:

1. Porque en el petitum de la demanda, se plantea en las declaraciones pedidas, las que se transcriben:

"c) Que el demandado Don ANTONIO FLORES está obligado, como una consecuencia directa de la primera declaración, a resarcir el DAÑO EMERGENTE, que ha sufrido el patrimonio de Don ABEL PITTÍ CONCEPCIÓN, o sea, el empobrecimiento real y efectivo que éste ha sufrido, como consecuencia de los daños y perjuicios causados por el incumplimiento, en la cuantía que fuere determinada conforme al procedimiento establecido en el artículo 553 del Código Judicial; y

d) Que el demandado Don ANTONIO FLORES está obligado, en virtud de la primera declaración, a resarcir el lucro cesante, que ha sufrido el patrimonio de Don ABEL PITTÍ CONCEPCIÓN, o sea, la ganancia o utilidad que éste dejó de percibir, como consecuencia directa del incumplimiento, en la cuantía que fuere determinada conforme al procedimiento establecido en el artículo 553 del Código Judicial".

El artículo 533 del Código Judicial invocado en la demanda es el que correspondía al Código Judicial anterior, que es equivalente al artículo 983 del

Código Judicial vigente.

2. Porque en dicha demanda, al establecer la cuantía de la misma, dando cumplimiento del artículo 304, numeral 8° del Código anterior, se señaló lo que se transcribe a continuación:

> "...
> CUANTÍA: Para los fines exclusivos de la Competencia del Tribunal se fija en la cantidad de CINCO MIL BALBOAS (B/.5,000.00), sin perjuicio de que se determine en el curso del juicio, que el daño emergente y el lucro cesante sean de un monto mayor".

Por consiguiente, tanto en el petitum de la demanda como en el cuerpo de la misma, queda claro que el demandante no fijó una cuantía fija y determinada, por cuanto sus pretensiones, en razón de su naturaleza, no eran susceptibles de ser fijadas de manera precisa, en virtud de que a las alturas del proceso, se desconocían.

Por las razones que anteceden, esta Sala debe desestimar la primera causal invocada.

La segunda causal planteada es de fondo, y consiste en infracción de normas sustantivas de derecho, en el concepto de violación directa.

Para fundamentar dicha causal, señala como motivo lo que se transcribe:

> "La sentencia recurrida, al fijar el monto de la condena impuesta al demandado en proceso sumario (condena en abstracto) dejó de aplicar la norma sustantiva conforme a la cual cuando la obligación morosa consistiere en el pago de una suma de dinero, la indemnización de daños y perjuicios consistirá -salvo pacto en contrario- en el pago de intereses ya sean los que se hubieren convenido o, en defecto de estos últimos, en los intereses legales. La sentencia recurrida no solo condenó al pago de capital sino al de intereses y lucro cesante, lo cual constituye una transgresión de la norma legal aplicable al caso". (Fs. 517).

Alega el recurrente como disposiciones legales infringidas, el propio artículo 978 del Código Judicial también aducido en la primera causal de forma, y el artículo 993 del Código Civil. Como tiene declarada esta Corte, la causal en el fondo sólo cabe proponerlas cuando se cuestiona la aplicación de una norma sustantiva, con independencia de su ubicación en el Código Civil o en el Código Judicial, atendiendo a la naturaleza de la norma, mas que a su ubicación. Estos planteamientos se señalan por la Sala, no obstante reconocer que son principios elementales por haber sido señalados en copiosa jurisprudencia, por cuanto el recurrente plantea una norma adjetiva o de procedimiento en un recurso en el fondo, a lo que debe señalar esta Sala que el artículo 978 se refiere el contenido de la sentencia, y a enmarcar los supuestos en los cuales, si no se siguen, se violenta el principio de congruencia que deben tener las decisiones judiciales. Las pautas que fija esta norma no es que al momento de decidir lo haga el juez dentro de los parámetros de la ley sustantiva (esta obligación la tiene siempre), sino que la sentencia se encuentre enmarcada dentro del marco que le atribuye el demandante en su demanda, marco que opera para el juzgador como un límite infranqueable en su decisión.

La segunda norma que se estima violada sí es una norma de derecho sustantivo, y es el artículo 993 del Código Civil. No obstante, estima la Sala que esta disposición no es aplicable al supuesto planteado, toda vez que se refiere a un supuesto distinto, es decir, cuando el objeto del contrato sea la entrega de dinero, en cuyo caso se produce una excepción a la regla general en materia de indemnización, esto es, la contenida en el artículo 991 del Código Civil, en relación con el artículo 986 del Código Civil. La excepción a esta regla general se refiere a aquellos supuestos en los cuales la prestación consiste en una suma de dinero, en cuyo caso, la regla indemnizatoria es la que señala el recurrente, es decir el artículo 993, pero dándole un alcance que la norma no tiene, es decir, aplicando la indemnización por incumplimiento contractual en todos los supuestos, cuando dicha norma se aplica solamente a la

indemnización por el incumplimiento de obligaciones dinerarias. Además el artículo 993 del Código Civil se aplica a los casos de mora y no de incumplimiento contractual. Así lo entiende la doctrina civilista mas reputada. Así, para el derecho español, en el caso de deudas dinerarias, el reputado civilista LUIS DIEZ-PICAZO afirma:

> "En principio, si la obligación demorada es una obligación de dinero, el daño sufrido por el acreedor consiste en no haber dispuesto de capital y no haberse por consiguiente beneficiado con sus frutos, que deben consistir en el interés que dicho capital hubiera podido devengar. Esta regla se encuentra contenida en el art. 1,108 CC, de acuerdo con el cual <<si la obligación consistiere en el pago de una cantidad de dinero, y el deudor incurriere en mora, la indemnización de daños y perjuicios, no habiendo pacto en contrario, consistirá en el pago de los intereses convenidos, y a falta de convenio, en el interés legal>>. De este modo, la obligación pecuniaria es una suerte de obligación privilegiada, en la medida en que el acreedor no necesita demostrar el daño producido, pues se entiende que en este tipo de obligaciones el retraso, en virtud el sistema financiero, produce daño siempre".
>
> (FUNDAMENTOS DEL DERECHO CIVIL PATRIMONIAL II LAS RELACIONES OBLIGATORIAS, Luis Diez-Picazo; Cuarta Edición, Editorial Civitas, Madrid 1993; pág. 636).

Esta opinión del civilista es diametralmente opuesta al resto de las obligaciones, en cuyo caso, comprende el daño emergente y el lucro cesante, de acuerdo al artículo 1.106 del Código civil español, que es de idéntica redacción al artículo 991 del Código Civil (véase epígrafe 19, página 636 de la misma obra citada).

En este proceso se trata de la pretensión de resolución del contrato, demandándose la devolución de las sumas entregadas, más la indemnización de lo daños y perjuicios ocasionados por tal incumplimiento, que, analizado el comportamiento del deudor, constituye una acción dolosa. La razón de la pretensión de resolución contractual, se ubica en la manifestación del demandado, de no estar dispuesto a cumplir la porción de la obligación aún no cumplida, es decir, la entrega de cedro en bruto hasta completar la cantidad pactada y, en contraprestación, el pago, por parte del deudor, del remanente. No obstante, en el presente caso el interés del acreedor, es decir, la entrega de madera, no se encuentra satisfecha, por la negativa manifiesta de dicho deudor a cumplir dicha obligación de entrega, es decir, porque ya no le convenía la transacción. La disposición el Código Civil, el artículo 991, señala:

> "**Artículo 991**. La indemnización de daños y perjuicios comprende, no sólo el valor de la pérdida que haya sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener el acreedor, salvas las disposiciones contenidas en los artículos anteriores".

Como se puede apreciar sin esfuerzo, la indemnización por incumplimiento contractual abarca "no sólo el valor de la pérdida que haya sufrido sino la ganancia que haya dejado de obtener el acreedor", es decir, lo que el demandante incluyó en los literales C y D del petitum de la demanda que inició el presente proceso, en un caso como el presente en que la relación contractual existente e incumplida, es un contrato de compra-venta. Al no ser la obligación del deudor otra que la entrega del objeto del contrato, es obvio que no nos encontramos frente al supuesto de hecho previsto por el artículo 993, no solamente porque no se trata de una obligación que consiste en la entrega, por el deudor, de una suma de dinero, sino porque esa hipótesis solamente se ofrece cuando exista mora por parte del deudor, y no un manifiesto incumplimiento, como el que nos ocupa, en el cual no hay mora, sino una manifiesta intención de no cumplir con el contrato de compra venta celebrado, es decir, incumplimiento contractual ante lo cual resulta procedente, en ausencia de pacto expreso, la aplicación de la denominada condición resolutoria tácita regulada en el artículo 1009.

Sobre la distinción entre ambas figuras, se ha pronunciado el profesor LUIS

DIEZ-PICAZO, en la obra anteriormente citada, en la siguiente forma:

> "...
> De acuerdo con su significado usual, mora o demora es -se dice- lo mismo que retraso o retardo. Supone que el deudor debía haber cumplido ya y que todavía no lo ha hecho. Para que pueda hablarse con propiedad de retardo y de mora o morosidad es menester que no se haya producido un cumplimiento puntual de la obligación, en el momento establecido para ello, pero es necesario también que la obligación pueda todavía ser cumplida y que cumplida retrasadamente sea idónea para satisfacer el derecho del acreedor. Si la prestación se ha hecho imposible o no es ya idónea para satisfacer el derecho del acreedor, no hay mora, sino incumplimiento definitivo".
>
> (FUNDAMENTOS DEL DERECHO CIVIL PATRIMONIAL II LAS RELACIONES OBLIGATORIAS. Luis Diez-Picazo. Cuarta Edición, Editorial Civitas, Madrid, 1993, págs. 619-620).

Por lo demás, no resulta pertinente en el estado actual de este proceso, dilucidar si existía o no responsabilidad contractual ni las normas que a ella se aplican, toda vez que la fase actual se contrae a cuantificar el monto de la indemnización decretada por el tribunal.

Por las razones apuntadas, se desestima la segunda causal.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 30 de agosto de 1995 proferida por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, dentro del proceso ordinario propuesto por ABEL PITTÍ CONCEPCIÓN contra ANTONIO FLORES.

Las obligantes costas en casación, se fijan en la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA BALBOAS (B/.250.00).

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(Con Salvamento de Voto)
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO RAFAEL A. GONZÁLEZ

Con el mayor respeto expreso que no comparto el criterio expresado en cuanto a la primera causal invocada por el recurrente, la de extra petita. Soy de opinión que de conformidad con ella se debe casar la sentencia recurrida por las siguientes razones:

1. Tanto el artículo 304, ordinal 5 del Código Judicial viejo como el artículo 654, ordinal 5 del actual, establecen que si se demanda "pago de dinero", como es el caso, la demanda debe contener "la expresión de la cantidad que se reclama". Agregan ambas disposiciones (que son iguales al pie de la letra) que en caso de que la cuantía se exprese en más de determinada cantidad, se entenderá que se pide dicha cantidad más un balboa (B/.1.00), y el demandado no podrá ser condenado a más de la suma de dichos dos guarismos.

2. El principio que se deriva es claro: Estos juicios tienen un límite. No están abiertos al infinito.

3. El demandante en el libelo de la demanda fijó una cuantía, que, como menciona la Sentencia, declaró que era sin perjuicio de que el daño emergente y el lucro cesante fueran de monto mayor.

4. Los mismos artículos 304 y 654 de los respectivos Códigos Judiciales en el ordinal 8° dejan apreciar que la cuantía de un juicio, cuando se pide el pago de dinero, es la suma que se pretende. Dicen así:

"Artículo 654. (Código actual):
...
8. La cuantía de la demanda; si lo demandado no fuera exclusivamente el pago de dinero; este requisito no es necesario en los procesos que por su naturaleza no tienen cuantía".

"Artículo 304. (Código anterior):
...
8. Cuantía de la demanda, si lo demandado no fuere exclusivamente el pago de dinero. Este requisito no es necesario en los juicios que por su naturaleza no tienen cuantía".

Se observa que la puntuación ortográfica del Código viejo era mucho mejor que la del actual, sin que se quiera cambiar la concepción de las cosas.

5. Estas disposiciones son de orden público. Ninguna de las partes puede variarlas unilateralmente. A la cuantía, como hemos visto, sólo se podría aumentar en un balboa (B/.1.00), fórmula retórica que utiliza el Código en vez de negación, lo que significa en la práctica.

En conclusión, creo que no se puede condenar en concepto de daños y perjuicios, a más de B/.5,000.00 o B/.5,001.00, sin incurrir en extra petita.

Considero que el principio de que los juicios deben estar definidos en su cuantía cuando se trata de pago de dinero, es un principio de la mayor importancia. Precisa los intereses en juego y evita que los procesos sean ocasión propicia para crear nuevas realidades. En mi opinión nuestro derecho positivo se pronunció de esa manera.

Salvo, pues, el voto, respetuosamente.

Fecha ut supra.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RUTH HYACINTH THOMPSON RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO DE DIVORCIO QUE LE SIGUE JAMES HILARY APOLLO MINOTT. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA PRIMERA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La licenciada GRACIELA J. DIXON C., apoderada especial de la señora RUTH HYACINTH THOMPSON, recurre en casación contra la sentencia de 13 de septiembre de 1995, proferida por el Tribunal Superior de Familia, dictada en el proceso de divorcio promovido por JAMES HILARY APOLLO MINOTT contra RUTH HYACINTH THOMPSON.

Ingresado el expediente a la Secretaría de la Sala Civil, se fijó en lista por el término que señala la ley, procediéndose a dar traslado al Procurador General de la Nación quien emitió concepto mediante Vista N° 3 de 22 de febrero de 1996, visible de fojas 118 a 120 del expediente.

Cumplidos los trámites procesales inherentes a esta clase de recurso, pasa esta Sala de Casación Civil a pronunciarse sobre la admisibilidad del mismo, tomando en cuenta para ello los requisitos contemplados en el artículo 1165 del Código de Procedimiento Civil, así como también las exigencias formales señaladas en el artículo 1160 de la precitada legislación.

La resolución cuya impugnación aquí se impetra, es susceptible del recurso de casación, tal como señala el artículo 756 del Código de la Familia, puesto que se trata de una resolución de segunda instancia, dictada por el Tribunal Superior

de Familia en un proceso de divorcio.

Consta en autos que el recurso se anunció y formalizó en tiempo.

La causal invocada, cual es, "Infracción de normas sustantivas de derecho, por error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba, lo cual ha influido sustancialmente en el aspecto dispositivo de la resolución recurrida", está consagrada como tal en nuestro ordenamiento jurídico.

En cuanto a los motivos y la explicación de cómo han sido infringidas, la Sala observa que, en términos generales cumplen con los requisitos exigidos por la ley.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ADMITE del recurso de casación, en el fondo, propuesto por RUTH HYACINTH THOMPSON, mediante apoderado judicial.

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) ANA R. DE COLLADO
Secretaria ad-hoc

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

PAULINO ABADÍA CAJAR RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A COMPAÑÍA DE MARISCOS ISLAS DE LAS PERLAS, S. A. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA PRIMERA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El Licenciado Eduardo Ríos Molinar, en representación del señor **PAULINO ABADÍA CAJAR**, ha presentado recurso de casación contra la sentencia proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia el 12 de diciembre de 1995, dentro del proceso ordinario instaurado por el recurrente contra **COMPAÑÍA DE MARISCOS ISLAS DE LAS PERLAS, S. A.**

En vista de que se ha cumplido con los trámites de rigor, corresponde a la Sala determinar si el presente recurso de casación reúne los requisitos necesarios para su admisibilidad.

En primer lugar, se observa que la resolución impugnada es susceptible de recurso de casación, ya que se trata de una sentencia proferida en segunda instancia, por un Tribunal Superior, dentro de un proceso de conocimiento que tiene una cuantía superior a cinco mil balboas.

En segundo lugar, consta en el expediente que el recurso fue anunciado y presentado en tiempo oportuno y por persona idónea.

En tercer lugar, en relación con el escrito de formalización, la Corte advierte que se trata de recurso de casación en el fondo en el que se invocan dos causales que procede a analizar separadamente.

La primera causal consiste en "Infracción de normas sustantivas de derecho por violación directa", la cual se encuentra contemplada en el artículo 1154 del Código Judicial.

Los cinco motivos que le sirven de fundamento se limitan a señalar que la sentencia impugnada infringió normas sustantivas, manteniéndose en el mismo grado de abstracción de la causal. Los motivos dentro del recurso de casación deben

contener hechos concretos, que presenten de manera clara en qué consisten las infracciones que se le imputan a la sentencia de segunda instancia. Sin embargo, en el presente caso, el recurrente en casación no dice más que lo expresado al invocar la causal: que se violó la norma sustantiva. Consecuentemente, los motivos deben ser corregidos.

Las normas legales que se consideran violadas son congruentes con la causal invocada y resultan adecuadas, luego de un primer examen. No obstante, dentro de la explicación de las mismas se advierte que el recurrente hace alegaciones fundamentadas en medios probatorios, lo cual resulta contradictorio y también debe ser enmendado.

La segunda causal utilizada consiste en "Infracción de normas sustantivas de derecho por error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba", la cual ha sido enunciada en los términos del artículo 1154 del Código Judicial.

En cuanto a los motivos, se observa que han sido planteados correctamente y guardan relación con la causal probatoria invocada. No obstante, a pesar de que el presente proceso consiste en una reclamación por daños y perjuicios, entre las disposiciones legales que se consideran infringidas el recurrente en casación no incluyó la norma sustantiva correspondiente, razón por la cual la Corte debe ordenar, también, la corrección de esta segunda causal de casación.

En mérito de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA LA CORRECCIÓN del presente recurso de casación en el fondo, para lo cual concede al recurrente el término establecido por el artículo 1166 del Código Judicial.

Notifíquese.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

LUIS ERNESTO HERRERA MOJICA RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A CHÁVEZ, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA PRIMERA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El abogado BRAULIO CARRERA como apoderado de LUIS ERNESTO HERRERA MOJICA acude ante la Corte a interponer recurso extraordinario de casación en el juicio ordinario que su representado le sigue a CHÁVEZ, S. A. y en censura contra la sentencia dictada el 24 de mayo de 1995 por el Primer Tribunal Superior de Justicia.

El recurrente invoca como causal la infracción de las normas sustantivas de derecho en el concepto de violación directa y precisa, en los motivos, que el Tribunal de Segunda instancia, al desatar la controversia, equivocó la calificación del contrato que fue celebrado entre las partes, pues estimó que el negocio jurídico consistía en un arrendamiento de cosa cuando en realidad se trataba de un contrato de arrendamiento de obra. Según su tesis, de haberse aplicado las disposiciones legales que regulan en nuestro ordenamiento jurídico el arrendamiento de obra, la decisión del Tribunal hubiese resultado por completo diferente a los términos en que finalizó expresándose la resolución impugnada. Dícense violados, en forma directa, por omisión, los artículo 1296, 1340, 1345 y 1351 que en el Código Civil definen en qué consiste el contrato de arrendamiento de obras, la forma en que debe ejecutarse el mismo, las reglas que regulan las posibles modificaciones o cambios en la obra y en el precio de esta última, en caso de ser autorizados los ajustes por el propietario, y el momento en que se debe pagar el precio de la obra.

ANTECEDENTES.

La disputa jurídica que debe dirimir la Sala en casación empezó con la demanda ordinaria promovida por LUIS ERNESTO HERRERA MOJICA solicitando que contra CHÁVEZ, S. A. se dictase una condena para obligarlo a pagar la suma de B/.60,000.00 en concepto de reembolso de las expensas en que incurrió la parte actora al edificar un anexo que se construyó en un inmueble de propiedad de la parte demandada, solicitándose además que se declarase nulo de nulidad absoluta el contrato de arrendamiento N° 48,958, celebrado el 27 de marzo de 1985 entre las partes. Esta demanda fue debidamente contestada por CHÁVEZ, S. A. quien se opuso a las pretensiones y rechazó los hechos esgrimidos por el actor, demandando a su vez en reconvención para que se declarase que el demandante principal, LUIS ERNESTO HERRERA MOJICA, fuese condenado a pagarle la suma de B/.100.000.00 en concepto de indemnización.

Del libelo de la demanda principal y de su contestación se deduce que lo medular de este litigio queda reducido a la distinta significación que las partes le otorgan al acto o negocio jurídico celebrado entre ambos y al cual denominaron "CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN-ARRENDAMIENTO" (documento visible a fs. 81 y 82 del expediente). En ese documento se expresa que se celebra como formando parte del contrato de arrendamiento N° 48,958 celebrado por ellos el día 27 de marzo de 1985 y a través del cual CHÁVEZ, S. A. dio en arrendamiento a LUIS ERNESTO HERRERA MOJICA un local ubicado en el edificio Romanei, construido sobre la finca de su propiedad N° 20,496, inscrita a folio 228, tomo 490 del Registro Público. Este contrato de arrendamiento fue debidamente registrado en la Dirección de Arrendamientos del Ministerio de Vivienda (véase fs. 88, 89 y 90 del exp.). Mediante el otro documento, el llamado Contrato de CONSTRUCCIÓN-ARRENDAMIENTO que se celebró entre las partes, se autorizó expresamente al arrendatario (LUIS ERNESTO HERRERA MOJICA) a construir una obra física sobre una porción del resto libre del terreno perteneciente a la finca 20,496.

Para una mejor comprensión la Sala estima recomendable transcribir todas las cláusulas del contrato llamado de CONSTRUCCIÓN-ARRENDAMIENTO.

> "PRIMERO: Declara EL ARRENDADOR que es propietario de la Finca 20,496, Folio 228, Tomo 490, consistente en un lote de terreno y edificio comercial y de apartamentos sobre él construido, ubicada en la esquina de Calle B-1 y Calle "D" del barrio El Cangrejo, Corregimiento de Bella Vista de esta ciudad.
>
> SEGUNDO: Sobre una porción del resto libre de terreno, con frente a la Calle B-1 (frente al Hotel El Panamá), EL ARRENDATARIO se compromete a construir, a sus expensas, un local comercial de una sola planta, con facilidades de servicio sanitario y otras , de acuerdo con los planos preparados para tal efecto por el Arquitecto José A. Castro Ch., planos debidamente aprobados y registrados en el Departamento de Ingeniería Municipal con el número 104-85 el día 6 de marzo de 1985. Estos trabajos se ejecutarán bajo la vigilancia de una (sic) profesional idóneo contratado por EL ARRENDATARIO y conforme a las disposiciones legales sobre la materia. Además de correr a sus expensas con todos los gastos que ocasione esta edificación, EL ARRENDATARIO se obliga obtener y mantener vigente por todo el tiempo que dura la construcción un seguro de Responsabilidad Civil para indemnizar a terceros por cualquier daño o perjuicio material.
>
> TERCERO: EL ARRENDADOR concede a EL ARRENDATARIO un período de gracia de 65 días calendarios contados a partir de la fecha del presente Contrato para dar término a la edificación indicada en la Cláusula Segunda anterior. Vencido este período de gracia, o sea, el día 1° de junio de 1985, comienza a regir el Contrato de Arrendamiento número 48,895 (sic) que se adjunta y forma parte de este acuerdo.
>
> CUARTO: Al término del Contrato de Arrendamiento o a su cancelación por cualquier motivo las mejoras que EL ARRENDATARIO haya efectuado

a sus expensas, quedarán a favor de EL ARRENDADOR sin obligación alguna para este último.

QUINTO: EL ARRENDATARIO se compromete a solucionar por su cuenta y expensas la reubicación satisfactoria de los aires acondicionados de los locales colindantes.

SEXTO: Todos los gastos fiscales, notariales y registrales que ocasiones el otorgamiento e inscripción de este Contrato, así como los de su cancelación, correrán a cargo de EL ARRENDATARIO."

Evacuadas las pruebas aducidas y concluida la fase de los alegatos, el Juez primario resolvió la causa negándose a aceptar que el llamado contrato de CONSTRUCCIÓN-ARRENDAMIENTO fuese uno distinto e independiente del contrato de arrendamiento N° 48,958. En otras palabras, el juzgador no le dio al documento de marras otro sentido que el de una adición, addenda o agregado que las partes incorporaban al contrato de arrendamiento de cosa que entre ellas había sido originalmente convenido. La sentencia dictada absolvió a la parte demandada y le proporcionó idéntico tratamiento a la demandante en lo concerniente a la demanda de reconvención interpuesta, estimando que ninguno de los litigantes hizo llegar al proceso probanzas que meritaran sus pretensiones o acreditaran los hechos en que basaban sus respectivas reclamaciones. También se negó a declarar la nulidad del contrato de arrendamiento 48,958 peticionada por la parte actora. No obstante declaró que el señor LUIS ERNESTO HERRERA MOJICA había actuado con temeridad en este juicio.

La sentencia fue apelada por la parte actora de la demanda principal, la que extrañamente al sustentar el recurso sólo cuestionó la decisión del a-quo en lo concerniente a no haber accedido a declarar la nulidad absoluta del contrato de arrendamiento de cosa distinguido como el N° 48,958 y todos sus anexos, modificaciones y adiciones, enfatizando la supuesta ausencia de un objeto cierto del contrato, por haber recaído el alquiler sobre una **"cosa imposible"** y **"por no constar en escritura pública"**.

La Sala llama la atención sobre la circunstancia de que en la segunda instancia la parte actora no esgrimió en el alegato de sustentación ninguno de los argumentos referidos a la supuesta existencia de un contrato de arrendamiento de obra y tampoco nada que tuviese que ver con los extremos en que basaba aquel segmento de su pretensión en donde se sostiene que dejó de percibir la contraprestación correspondiente porque el precio de la obra que edificó no le fue satisfecho por CHÁVEZ, S. A. El Primer Tribunal Superior de Justicia constriñó su pronunciamiento en torno al pretendido cargo de nulidad que le endilgaba el apelante al contrato de arrendamiento de cosa celebrado por los litigantes. No encontrando el Tribunal Superior razones de hecho ni de derecho que justificaran lo pedido por el apelante, procedió a confirmar en todas sus partes la sentencia dictada por el Juez inferior.

LA CASACIÓN

Como dejamos dicho, el recurso de casación interpuesto es por razones de fondo y en el se utiliza como causal la violación directa de normas sustantivas de derecho, lo que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida. El cargo formulado por la censura, ya se ha visto, consiste en insistir en que el Tribunal Superior apreció indebidamente la naturaleza jurídica de parte de lo convenido por los contratantes (el llamado contrato de CONSTRUCCIÓN-ARRENDAMIENTO).

Sobre el particular, la Sala no puede dejar de reconocer, como lo ha hecho en pronunciamientos anteriores, que tratándose de la interpretación de los contratos se puede censurar en casación, sin desnaturalizar las características del recurso, la calificación jurídica del negocio o acto que las partes hayan celebrado. Es decir, la Sala puede conocer en casación de la calificación del contrato, además de la interpretación de las cláusulas que sean parte integrante del mismo. Puede acontecer, y así ha sucedido muchas veces, que un Tribunal al examinar una determinada relación contractual aplique las normas de derecho que

regulan un contrato de naturaleza jurídica diferente y en ese caso la Sala de casación debe admitir que, mediante el recurso extraordinario, se puede llegar a desentrañar la verdadera voluntad de los contratantes. Así como la Corte ha expresado que "es censurable en casación la violación a los criterios interpretativos que consagra el Código Civil", también es permisible indagar cuál es la calificación jurídica que debe dársele al contrato. Es lo que Calamandrei ha llamado la diagnosis. Esta también es, por supuesto, una cuestión de derecho y cuando se recurre en casación y se hacen esta clase de acusaciones, será necesario invocar la violación directa de la normas jurídicas sustantivas, su aplicación indebida o la interpretación errónea de las mismas.

Ahora bien, lo que no parece posible es examinar en casación la naturaleza o los efectos jurídicos de un acto al margen de lo que sobre esta materia indican las normas de derecho material contenidas en los artículos 1132 y siguientes del Código Civil sobre la interpretación de los contratos, pues, no basta con que se indague en qué consistió la voluntad de las partes, sino que además es necesario que se tengan en cuenta los efectos que la ley le atribuye a esa voluntad (v. libro CASACIÓN LABORAL, JORGE FÁBREGA, 1 y 2 pág. 249).

En atención a las consideraciones anteriores, la Sala estima que, antes de sacar cualquier conclusión y aún cuando el casacionista no hizo referencia alguna a los artículos 1132 y ss. (Cap. 4, Título II del Libro Cuarto del Código Civil) es a la luz de dichas disposiciones que tiene que iniciarse la dilucidación del problema y sólo después de que se haya contrastado el contrato o acto celebrado con esas normas cabría, si fuera el caso, internarse en los aspectos concernientes a las normas del Código Civil que regulan el contrato de arrendamiento de obra y que según el denunciante fueron violados por la resolución del Tribunal Superior.

Para comenzar tomemos lo dispuesto por el artículo 1132 del Código Civil, atinente a la intención de los contratantes y confrontémoslo con el contrato celebrado. De la lectura de cualquiera de las cláusulas del contrato se desprende que los términos en que éstas fueron redactadas son claros hasta la saciedad. De esas cláusulas se extrae sin mayor esfuerzo y sin tener que recurrir a ninguna especulación que la intensión de los contratantes fue la siguiente:

a) Que el acto se celebraba para que formara parte integral del contrato de arrendamiento N° 48,958, o sea del contrato de arrendamiento que se celebró teniendo como objeto un local ubicado en la finca N° 20,496 inscrita al tomo 490, folio 228 del Registro Público y de propiedad del arrendador CHÁVEZ, S. A. Así quedó literalmente pactado (cláusula primera y tercera del contrato).

b) Que el arrendatario se comprometió expresamente a construir a sus expensas sobre la finca N° 20,496, parte de la cual le fue dada en arrendamiento, una edificación en los términos que con mucha claridad quedaron especificados, enfatizando que correría con todos los gastos que la construcción de dicha obra ocasionárele (cláusula segunda).

c) Que al término del contrato de arrendamiento celebrado entre las partes las mejoras que "El Arrendatario haya efectuado a sus expensas quedarán a favor de El Arrendador sin obligación alguna para éste último" (cláusula cuarta).

Dice el artículo 1133 del Código Civil que "para juzgar la intención de los contratantes deberá atenderse principalmente a los actos de éstos, coetáneos o posteriores al contrato". Al estudiar las constancias procesales se revela que los actos de la parte actora, coetáneos o posteriores a la celebración del contrato, lejos de parecerse a la conducta de quien creyese que había celebrado un contrato de arrendamiento de obra, permiten más bien identificarlo con la de aquella persona que, después de celebrar en calidad de arrendatario un contrato de alquiler sobre una propiedad, busca la manera de ser autorizado por el arrendador para poder efectuar contratos de sub-arrendamiento, objetivo que logró, pues fue autorizado por el dueño de la cosa dada en arrendamiento para celebrar contratos de subarrendamientos, como se demuestra con los documentos visibles a fojas 71, 72, 73 del expediente. Luego, como consta también en autos, el arrendatario celebró sobre la cosa arrendada contrato de subarrendamiento con la empresa PIO PIO, S. A. (fs. 74 y ss.), y una persona sólo puede dar a otra en

subarrendamiento una cosa determinada si previamente ha celebrado con el dueño de la misma un contrato de arrendamiento de cosa y no un contrato de servicios o de obra.

Eso fue lo que hizo en la práctica LUIS ERNESTO HERRERA MOJICA por espacio de varios años, después de haber celebrado el contrato con CHÁVEZ, S. A. al cual desea que se le de el calificativo de arrendamiento de obra. Por otro lado, los términos del contrato fueron muy precisos sin que haya base para afirmar que están concebidos en términos genéricos (art. 1134), no se encuentran en el texto términos que puedan considerarse oscuros (art. 1139) o que se les pueda calificar de contradictorios (art. 1135). En otras palabras, el documento, ya sea que se le mire cláusula por cláusula o en su integridad, no permite que surjan dudas acerca de cuál fue la verdadera voluntad de las partes cuando lo celebraron y, en consecuencia, a la Sala no le está tampoco permitido efectuar interpretaciones que distorsionen el acuerdo libremente alcanzado por ellas. No encuentra la Sala motivos ni siquiera remotos para considerar que la voluntad de los contratantes fue el de celebrar un contrato de arrendamiento de obra.

Las disposiciones del Código Civil que se han comentado y que se refieren a las reglas de la interpretación de los contratos concuerdan plenamente con las reglas de interpretación consagradas por el artículo 214 del Código de Comercio, disposición que bien puede ser aplicada en el presente caso pues trátase de un contrato celebrado entre comerciantes y que constituye por sí mismo un acto de comercio. Para mayor claridad se transcribe textualmente lo prescrito en la norma:

"Reglas de interpretación:

ARTÍCULO 214. Los contratos de comercio se ejecutarán de buena fe, según los términos en que fueren convenidos y redactados, atendiendo más a la letra de los pactos, a la verdadera intención de los contratantes.

Las palabras deben entenderse en el sentido que les da el uso general, aunque alguno de los contratantes pretenda que las ha entendido de otro modo."

Es bueno destacar que las constancias procesales indican que no se puede sostener que LUIS ERNESTO HERRERA MOJICA en su condición de constructor de la obra haya efectuado una inversión sin lograr resarcirse de los recursos que a ese fin destinara. Por una parte, el señor HERRERA MOJICA utilizó y aprovechó directamente el local construido por espacio de dos años y, con posterioridad, percibió el canon que cobraba a la empresa PIO PIO, S. A. a quien le subarrendó el local por un lapso de cinco años. Además no hay supuestos de hecho ni de derecho que comprueben que la parte actora haya construido a título gratuito o que en su contra se haya generado el fenómeno del enriquecimiento sin causa.

Tras haber examinado las faltas levantadas en contra de la resolución dictada por el Tribunal Superior, esta Sala llega a la conclusión de que no existen méritos para que prosperen los cargos endilgados en contra de aquella decisión.

En consecuencia, la Corte Suprema, Sala de lo Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley NO CASA la sentencia dictada el 24 de mayo de 1995, dictada por el Primer Tribunal Superior, en el proceso ordinario que LUIS ERNESTO HERRERA MOJICA le sigue a CHÁVEZ, S. A.

Las costas de casación a cargo del recurrente se fijan en la suma de TRESCIENTOS BALBOAS CON 00/100 (B/.300.00).

Notifíquese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ

(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE

Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

JAIME OBREGÓN ORTEGA RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE VIRCA, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA PRIMERA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La firma forense TIMPSON Y ASOCIADOS, en su condición de apoderados especiales del señor JAIME OBREGÓN ORTEGA, oportunamente formalizó recurso de casación contra la sentencia de 29 de diciembre de 1995, proferida por el Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial en el proceso ordinario propuesto por VIRCA, S. A., contra JAIME OBREGÓN ORTEGA.

Fijado en término el negocio para alegar acerca de la admisibilidad, solamente el opositor presentó escrito en donde solicitó no admita la impugnación a la sentencia. Procede el Tribunal de Casación a determinar tal como lo disponen los artículos 1165 y 1160 del Código Judicial si procede la admisibilidad.

La resolución que se impugna es de aquéllas permitidas por la ley y el recurso fue presentado oportunamente.

El recurso se presentó en el fondo y se alegó una causal.

Al analizar el recurso para determinar si llena las formalidades establecidas en el artículo 1160 del Código Judicial, encuentra la Sala que el mismo debe ser corregido.

La causal es "Infracción de normas sustantivas de derecho, en concepto de error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba". Está consagrada como tal en la ley.

La Sala encuentra que el recurrente presenta cinco motivos, en los cuales no precisa, en qué consistió la mala valoración por parte del Tribunal Superior, ya que para invocar esta causal, no basta con señalar cuáles son las pruebas mal apreciadas, es necesario para su admisibilidad, que se establezca con claridad, cómo se dio el error de derecho en la apreciación de la prueba.

No obstante, en lo referente a las normas de derecho infringidas, la Sala observa, que el recurrente debe citar, en primer lugar, las disposiciones relativas al valor de las pruebas, y luego las normas sustantivas violadas como consecuencia de ese error.

Por otra parte, el casacionista se aleja de la técnica de casación cuando en la explicación de las disposiciones infringidas, no señala concretamente, cómo el Tribunal Superior ha violado las normas de derecho. Se le recuerda al recurrente que no debe caer en alegaciones innecesarias. De igual manera incurre en el error de transcribir jurisprudencia de la Corte, al igual que parte de su recurso de apelación, e indudablemente ello no es cónsono con el la técnica de este extraordinario recurso.

Estas y las anteriores anomalías deben ser subsanadas.

Por todo lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ORDENA LA CORRECCIÓN del recurso de casación, en la fondo, propuesto por JAIME OBREGÓN ORTEGA contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial el día 29 de diciembre de 1995, para lo cual le concede el término de cinco (5) días.

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) ELIGIO A. SALAS

(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

LUIS ALBERTO ESPINOZA RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO DE OPOSICIÓN A TÍTULO QUE LE SIGUE DORILA ESPINOZA DE RODRÍGUEZ. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA PRIMERA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El licenciado CARLOS DARÍO ESPINOZA, actuando en representación de la parte demandada en el juicio ordinario de oposición a título, señor LUIS ALBERTO ESPINOZA, que fuera instaurado por la señora DORILA ESPINOZA DE RODRÍGUEZ, ha interpuesto recurso de casación contra la sentencia de 31 de julio de 1995 dictada por el Tribunal Superior de Justicia del Tercer Distrito Judicial, mediante la cual se profirió fallo confirmatorio de la sentencia primaria en donde se declaró:

> "Que LUIS ALBERTO ESPINOZA no tiene derecho a que la Dirección de Reforma Agraria le adjudique un globo de terreno de aproximadamente 29 hectáreas, ubicado en Mata del Francés, Corregimiento Cabecera, distrito de Boquete que colinda por el NORTE: con camino hacia la carretera de asfalto de Caldera y Macano; SUR: Joaquín Pitty; ESTE: Hernán Guerra, y OESTE: Enrique Jaramillo y Mery Karica Vda. de Ferrari, toda vez que en el mismo está incluyendo un globo de terreno que ha poseído DORILA ESPINOZA DE RODRÍGUEZ."

El recurso se interpuso invocando la infracción de normas sustantivas de derecho, por error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba y se hace descansar en cinco motivos a lo largo de los cuales se detallan los cargos de injuricidad formulados contra la resolución que se impugna. En resumen los motivos expresan lo siguiente: la sentencia le otorgó un valor probatorio, del cual carecen, a los testimonios de DÍDIMO RODRÍGUEZ SUIRA y de EFRAÍN GONZÁLEZ MIRANDA, pues los mismos no son contestes ni logran acreditar el "animus domini" que debió demostrarse para poder reconocerle a la parte actora, DORILA ESPINOZA DE RODRÍGUEZ, el derecho de posesión en que sustenta su oposición al título reclamado por la parte demandada. Las pruebas testimoniales no logran acreditar que la actora hubiese poseído la cantidad de 19 hectáreas que reclama como suyas. Los testimonios vertidos no alcanzan a respaldar la titularidad de la posesión alegada por la actora. Desde otro ángulo, se denuncia que la inspección judicial practicada en el juicio se llevó a cabo sobre un globo de terreno distinto por completo al reclamado por la parte actora, con otros linderos y con diferente cabida superficiaria, a pesar de lo cual se le dio fuerza probatoria a esa diligencia para concluir declarando probado el hecho segundo de la demanda, alrededor del cual gira la presente controversia. Por último, se le censura a la sentencia haberle dado valor de confesión judicial a ciertas palabras vertidas por el señor LUIS ALBERTO ESPINOZA (parte demandada) que no tienen, según se indica, ningún viso que las asemeje a ese medio de prueba, como incorrectamente se ha apreciado en el pronunciamiento del Tribunal Superior.

Se dicen violados, del Código Judicial, el artículo 770, al no haber sido empleados como es debido los principios de la sana crítica al valorar los testimonios y la prueba pericial; el artículo 882 y el artículos 884, al considerarse como confesión algo que no la constituye; el artículo 896 por no tenerse en cuenta la condición de sospechosos de los testimonios empleados por la parte actora, al ser uno de los testigos un trabajador a su servicio en la actualidad y el otro por haber trabajado con ella anteriormente; el artículo 904, porque los dos testimonios en que apoya la sentencia su decisión son contradictorios y no se corroboran; el artículo 909, por habérsele dado valor a una declaración testimonial que es de carácter deductivo; y el artículo 967, porque se le ha dado certidumbre a un dictamen pericial practicado sobre un globo de terreno que no es al que se refiere el hecho segundo de la demanda, o sea que

no corresponde al terreno sobre el cual las partes han centrado el presente debate judicial. Además, se le endilga al Tribunal Superior la violación del artículo 418 del Código Civil, por no haberse reputado a la parte demandada, LUIS ALBERTO ESPINOZA, como un legítimo poseedor de buena fe; y el artículo 434 del mismo cuerpo legal, por no haberse presumido a favor de éste el justo título que se deriva de su condición de poseedor del bien en disputa.

EXAMEN DE LA SALA

Según expresa el recurrente al censurar la resolución impugnada en casación, ésta es imputable como consecuencia de que el Tribunal Superior al fallar erró en derecho al establecer la apreciación y valoración de las pruebas que se hicieron llegar al expediente con el propósito de respaldar la pretensión y probar los hechos en que se fundamenta la demanda.

Para efectuar el examen de los cargos de injuricidad, así como las infracciones que supuestamente se cometieron contra las normas jurídicas que se denuncian como violadas, la Sala de casación pasará, en primer término, a identificar los medios de prueba evaluados en este caso por el Tribunal Superior, los que, en efecto, se convirtieron en el sustentáculo de la sentencia por medio de la cual se le impide a LUIS ALBERTO ESPINOZA recibir en adjudicación el globo de terreno cuya titularidad solicitara ante la Dirección Nacional de Reforma Agraria y, de forma coetánea y paralela, se procederá a confrontar los cargos que formula el recurrente contra los elementos argumentales utilizados por el juzgador al establecer la fuerza probatoria de los medios empleados en este juicio.

Tres fueron los medios de prueba que el Tribunal Superior tomó en consideración para proferir el fallo. Estos fueron a saber:

1) Las declaraciones testimoniales de los señores DÍDIMO RODRÍGUEZ SUIRA (fs. 57 a 59) y EFRAÍN GONZÁLEZ MIRANDA (fs. 60 a 61).
2) La inspección pericial practicada en el globo de terreno en disputa (72 a 73).
3) La supuesta confesión judicial que se le atribuye a la parte demandada.

Veamos, en primer término, los aspectos atinentes a las pruebas testimoniales: En los tres primeros motivos en que basa su recurso el casacionista se censura a la sentencia resaltando que los dos testimonios valorados no son contestes, no acreditan que la parte actora hubiese poseído con ánimo de dueño (animus domini) y no reúnen los requisitos de idoneidad indispensables para que se les atribuya credibilidad en cuanto al contenido de las declaraciones. En conexión con esos tres motivos se estiman infringidos, del Código Judicial, los artículos 770 (reglas de la sana crítica); el artículo 896 (testimonios de naturaleza sospechosa); el artículo 904 (falta de corroboración al no coincidir los testimonios respecto al lindero norte del globo de terreno); y el artículo 909 (por habérsele dado fe a un testigo que declaró por inferencia).

Antes de entrar en consideraciones acerca de las reglas de la sana crítica y de su aplicabilidad en el caso subjúdice, conviene precisar si los otros cargos específicos formulados en contra de la prueba testimonial se encuentran correctamente fundamentados, de suerte que, desde el punto de vista del planteamiento que hace el recurrente, pueda dirimirse si sus peticiones merecen o no merecen prosperar.

Los testimonios atacados se virtieron, como ha quedado dicho, por parte de DÍDIMO RODRÍGUEZ SUIRA y EFRAÍN GONZÁLEZ MIRANDA. El primero manifestó que habita en la casa de la que la parte actora, DORILA ESPINOZA DE RODRÍGUEZ, es propietaria y que está ubicada dentro del lote o globo de terreno sobre el que la demandante reclama derechos posesorios antagonizando por esa razón con la parte demandada. Indica en su declaración que el globo de terreno viene siendo trabajado por la demandante, en su carácter de dueña del mismo, desde hace 18 o 20 años atrás. Añade en su declaración otras informaciones que revelan que tiene conocimientos detallados acerca de la actividad desplegada por la señora DORILA ESPINOZA DE RODRÍGUEZ sobre el lote, tales como quiénes son las personas

empleadas por ésta para trabajarlo, los nombres de los colindantes, y asegura que la tierra que le pertenece a la demandante se encuentra incluida dentro de los linderos del terreno cuya titularidad ha solicitado ante la Dirección de Reforma Agraria el señor LUIS ALBERTO ESPINOZA.

La declaración de este testigo ha sido calificada por el recurrente como sospechosa por tratarse de un empleado de la parte actora, que fue quien adujo su testimonio en este juicio.

Sin embargo, observa la Sala que la parte demandada no obró a tiempo para hacer valer el impedimento que ahora alega en casación, pues el momento de tachar al testigo por falta de imparcialidad, de acuerdo con lo establecido por el artículo 930 del Código de Procedimiento, precluyó al no presentarse la objeción antes de que rindiera su declaración. Por otra parte, a la hora de valorar lo dicho por un testigo que pudiese ser ubicado en la calidad de sospechoso, el juzgador debe apreciar el testimonio "de acuerdo con las circunstancias del caso", tal como también se indica en la norma del Código de Procedimiento arriba citada.

Cuando la Sala estudia con detenimiento la declaración rendida por DÍDIMO RODRÍGUEZ SUIRA se percata de que constituye un elemento que contribuye grandemente a aclarar los hechos sobre los cuales gira la presente controversia y, por lo tanto, no encuentra razón de fondo que amerite su desconocimiento. No es cierto tampoco que la sentencia censurada haya incurrido en violación del artículo 909 del Código Judicial al darle fe a un testimonio evacuado por una persona que no ha declarado de sus propias y directas percepciones. RODRÍGUEZ SUIRA dijo saber que DORILA ESPINOZA DE RODRÍGUEZ se ha comportado como dueña de esas tierras desde hace 18 o 20 años porque en ese lugar vivieron dos de sus hermanos desde que eran muy pequeños. Nada hay de extraordinario en que, a través de las relaciones surgidas y creadas por los vínculos del parentesco, el testigo haya podido enterarse por percepción directa de las circunstancias relativas a la posesión del lote en donde por tantos años vivieron sus hermanos.

Remitiéndonos al otro testimonio, al de EFRAÍN GONZÁLEZ MIRANDA, y a la descalificación que solicita para el mismo el casacionista, hay que decir, ante todo, que al examinar la declaración se comprueba que la misma es en esencia coincidente con lo declarado por el testigo anterior. GONZÁLEZ MIRANDA relata lo que sabe acerca de los vínculos que DORILA ESPINOZA DE RODRÍGUEZ ha mantenido por más de diez años con el predio disputado; expresa sus conocimientos sobre las mejoras y actividades que, a él le constan, la susodicha ha realizado dentro de ese globo de terreno y termina identificando la ubicación del mismo dentro de los linderos de las tierras que desea titular la parte demandada. No se trata, como afirma el recurrente, de un testigo sospechoso, porque el haber trabajado en otros tiempos para la parte actora en el sitio cuyos derechos se discuten, en vez de descalificarlo, por el contrario, lo convierte en un valioso conocedor de los hechos que en el juicio se debaten.

Sobre éstos dos testimonios queda pendiente considerar la validez de la afirmación que hace el casacionista en cuanto a que ambos son contradictorios y en cuanto a que, por no haberse tenido en cuenta esa deficiencia, la resolución censurada incurrió en violación de lo dispuesto por el artículo 904 del Código Judicial. Se ha hecho recaer la falta de concordancia de las dos declaraciones en lo que se manifestó respecto al lindero norte del predio. Sobre el particular RODRÍGUEZ SUIRA dijo que el globo colindaba por el norte "con ELADIO GAITÁN, padre de ERIC GAITÁN" (fs. 57). El otro, GONZÁLEZ MIRANDA, sobre el mismo punto indicó que colindaba "por el norte con ERIC GAITÁN". Como se ve la divergencia es mínima; se puede decir que casi inexistente y que, en realidad, pretender anular la validez de esas declaraciones por ese motivo equivale a una simpleza, sobre todo si los dos testimonios, tanto en términos generales como en los aspectos particulares a que se refieren, son concordantes y armonizan en relación con la materia objeto del interrogatorio.

La inspección ocular: Frente al valor probatorio que le otorgó el Tribunal Superior al resultado de la inspección judicial practicada en este juicio a solicitud de la parte actora, el casacionista, en el cuarto motivo del recurso, es del criterio que la diligencia se practicó sobre un globo de terreno ajeno a

aquél a que se refieren los hechos de la demanda. Con base en esa afirmación se empeña en afirmar que la resolución impugnada infringe el artículo 967 del Código Judicial, referente al valor que el juez debe asignarle al dictamen emanado de peritos.

Mediante la práctica de la inspección judicial cuyos resultados se objetan se le hace saber al juzgador que la cabida superficiaria real del globo inspeccionado es de aproximadamente 8 hectáreas; que en él existen signos de posesión consistentes en una cerca de alambres de púas y muros de piedra, una porqueriza y una casa hecha con bloques de cemento sin repellar, con techo de zinc y sin cielo raso, y que, según lo apreciado por los peritos, el lote inspeccionado se encuentra ubicado dentro de un lote de terreno de mayor extensión, incluyéndose en el informe la descripción de sus linderos.

Como se ve, se trata de una prueba que encierra una especial importancia, por lo que es preciso analizar si fue bien considerada o no al momento de dictarse la resolución que concluyó con la segunda instancia de este juicio. El argumento central del recurrente en este punto es que la inspección no se practicó en el terreno que ambas partes aseguran que les pertenece. Lo primero que advierte la Sala es que los peritos en su informe describen el lote inspeccionado dando las mismas señas que dan en sus declaraciones los testigos que presentó la parte actora; a saber: similitud en cuanto a los colindantes; igualdad en cuanto a los signos de posesión (cerca de alambre de púas y muro de piedras, porqueriza y una casa de bloques de cemento sin repellar, con techo de zinc y sin cielo raso) y similitud en cuanto a la antigüedad de las mejoras indicadas. También es muy decidor, en contra de lo asegurado por el recurrente, el hecho de que conste que la parte demandada, LUIS ALBERTO ESPINOZA, estuviese presente en la diligencia sin que hubiese advertido o hubiese dejado constancia en ese momento que se estaba practicando la diligencia en un sitio equivocado, sobre todo, si en ese mismo acto se permitió manifestar que ese lote (el de la inspección) lo había incluido en su solicitud de adjudicación ante la Reforma Agraria porque sobre el mismo él poseía un derecho. Esta expresión fue considerada en la resolución atacada como una confesión, opinión que la Sala, como se verá más adelante, no comparte, pero la misma sí es útil para confirmar que la diligencia de inspección judicial no se practicó en un terreno distinto al que se reclama en el proceso como, sin mayores fundamentos, lo sostiene el recurrente para invalidar la prueba.

La supuesta confesión del demandado: Ya hemos dicho que la Sala no le confiere a las palabras consignadas en el informe de la inspección judicial como pronunciadas por la parte demandada, la categoría de una confesión. Sabido es que la confesión, y más que ninguna la judicial, para que se produzca debe recaer sobre los hechos controvertidos en el proceso. En este caso las palabras del demandado, que han sido mensuradas como una confesión por el juzgador de instancia, no se estaban refiriendo al único hecho de la demanda que fue rechazado y negado por la parte demandada. Decir que la expresión "**es verdad que yo había incluido el pedazo de terreno de esta inspección y lo incluí en la solicitud de Reforma Agraria**" (fs. 70) o haber dicho que sí era cierto "**que él había incluido el lote que le disputa a la señora DORILA ESPINOZA DE RODRÍGUEZ en su solicitud de la Reforma Agraria porque tenía derecho**" (fs. 73), de acuerdo con lo que se afirma en el informe de inspección pericial practicado, equivale a una confesión con respecto a la controversia que se ventila en este proceso, carece por completo de lógica porque de ninguna manera las mismas perjudican a quien las hizo ni favorecen a la parte contraria. Mucho menos significan que el demandado aceptó como cierto el hecho segundo de la demanda, en donde la parte actora afirma:

> "**SEGUNDO:** En la mencionada solicitud el demandado ha incluido un globo de terreno de DIEZ Y NUEVE (19) hectáreas aproximadamente, el cual ha poseído desde hace más de diez años DORILA ESPINOZA DE RODRÍGUEZ haciéndole cumplir su función su función social íntegramente , terreno que colinda por el Norte, con ERICK GAITÁN, por el Sur, con HERNÁN GUERRA, por el Este, con Callejón sin nombre, y por el Oeste, con EVERARDO ESPINOZA".

En realidad lo que el demandado, en todo caso, hizo fue insistir en afirmar su derecho.

Luego de haber sido examinados los cargos que la censura le endilga a la resolución del Tribunal Superior, a partir de la valoración que éste hiciera a cada uno de los medios de prueba que favorece a la parte actora, la Sala se detendrá en el análisis de la acusación formulada por el casacionista en relación con la supuesta violación de los principios y reglas en que se basa la sana crítica, cuya aplicación, se dice, fue afectuada de manera incorrecta y defectuosa. La Corte ha reiterado en variadas y repetidas ocasiones que corresponde al casacionista precisar e indicar en qué forma el Juez dejó de aplicar la sana crítica; por qué se considera que no fue aplicada y cómo se incurrió por parte del juzgador en la falta de la cual se le acusa. Esas explicaciones deben ser suficientemente convincentes y demostrativas de que los principios en que se basan las reglas de la sana crítica no han sido tomados en cuenta por el juzgador, o sea que el razonamiento del juez ha incurrido en desconocimiento de los principios de la lógica o no se ha desarrollado de conformidad con el entendimiento humano o de acuerdo a la experiencia. Nada de lo anterior se pone de manifiesto en lo que atañe a los procedimientos intelectuales llevados a la práctica por el Tribunal Superior al asignarle el valor que le dio a los testimonios y a la inspección judicial practicada en este caso. Es más, la Sala concluye que la valoración de esas pruebas en su conjunto arrojan como resultado natural y logran poner de relieve que la parte demandante es poseedora, con ánimo de dueño, de una porción importante de los terrenos sobre los que pretende convertirse en propietario absoluto y exclusivo la parte demandada. Además, no hay razones de peso para dudar que esas pruebas han sido suficientes para llevar al ánimo del juzgador que DORILA ESPINOZA DE RODRÍGUEZ poseyó el predio que ocupa, con ánimo de dueño, en forma pacífica y por más de diez años, aparte de que durante ese tiempo, y probablemente por mucho más, lo ha trabajado y le ha ido incorporando diversas mejoras. Carece, entonces, de fundamento el cargo endilgado a la resolución de haber violado el artículo 418 del Código Civil, por cuanto que no han sido los supuestos derechos del demandado como poseedor de buena fe los que se probaron, quedando, en cambio, demostrado que es la parte actora, en todo caso, a quien se le puede considerar como poseedora legítima de las tierras en discusión. En cuanto a la otra norma del Código Civil que se dice infringida (art. 434) cualquier presunción que pudiera haber surgido en favor del demandado como poseedor quedó desvirtuada y contradicha por las pruebas que fueron incorporadas al expediente por la parte actora y a ellas esta Sala les confiere plena fuerza probatoria.

Por las anteriores consideraciones, la Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia de 31 de julio de 1995, dictada por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, dentro del proceso ordinario de oposición a título que DORILA ESPINOZA DE RODRÍGUEZ le sigue a LUIS ALBERTO ESPINOZA.

Las obligantes costas de casación a cargo del recurrente de fijan en la suma de CUATROCIENTOS BALBOAS con 00/100 (B/.400.00).

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ

(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE

Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

MICHAEL CARUSO & CO., INC. RECURRE EN CASACIÓN DENTRO DE LA SOLICITUD DE LEVANTAMIENTO DE SECUESTRO CON SOLICITUD DE ENTREGA DE CAUCIÓN PRESENTADA EN LA ACCIÓN DE SECUESTRO PROPUESTA POR MICHAEL CARUSO & CO., INC. CONTRA LA SOCIEDAD ALDO ROSSINI, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA PRIMERA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La firma forense ARIAS, FÁBREGA & FÁBREGA actuando en nombre y representación de MICHAEL CARUSO & CO., INC., formalizó recurso de casación contra la resolución de 10 de enero de 1996, dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia en el Incidente de Levantamiento de Secuestro propuesto dentro del Proceso Ordinario que MICHAEL CARUSO & CO. INC. le sigue a ALDO ROSSINI, S. A.

Encontrándose el recurso de casación en el despacho sustanciador para resolver la admisibilidad, los apoderados especiales de la parte demandada y de la demandante presentaron ante esta Sala de la Corte Convenio de Transacción, a fin de que sea considerado y aprobado, a efecto de dar por terminado este proceso.

El Convenio de transacción, que consta de fojas 53 a 57, fue celebrado conforme a las siguientes cláusulas:

"**PRIMERA:** LA DEMANDANTE declara que interpuso una Demanda Civil Ordinaria por daños y perjuicios contra la sociedad ALDO ROSSINI, S. A., por la suma de CIEN MIL BALBOAS (B/.100,000.00), la cual quedó radicada en el Juzgado Tercero de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá; y que actualmente dicho proceso se encuentra en conocimiento de la Sala Primera de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, en virtud de la interposición de un Recurso de Casación por parte de LA DEMANDANTE.

SEGUNDA: Asimismo, LA DEMANDANTE declara que interpuso una Demanda Civil Ordinaria por daños y perjuicios contra la sociedad CARDINALE, S. A., por la suma de CIEN MIL BALBOAS (B/.100,000.00) la cual quedó radicada y se encuentra actualmente en trámite ante el Juzgado Cuarto de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá.

TERCERA: LA DEMANDANTE Y LAS DEMANDADAS convienen expresa y formalmente, por este medio, en dar por terminado de común acuerdo, los Procesos Civiles Ordinarios descritos en las Cláusulas Primera y Segunda anteriores, a partir de la fecha de la firma del presente Convenio de Transacción, de conformidad con los términos y condiciones pactados en este mismo Convenio.

CUARTA: LA DEMANDANTE Y LAS DEMANDADAS convienen expresamente y de común acuerdo que como resultado de la terminación de los referidos Procesos Civiles Ordinarios, quedan también sin efecto, todas las medidas cautelares decretadas en contra de LAS DEMANDADAS; y convienen, además, que, en consecuencia, la mercancía que se encontraba secuestrada por razón de dichos procesos, cuya descripción consta en las Actas de las diligencias respectivas, y entre la cual se encuentran DOSCIENTOS SESENTA Y TRES (263) pares de calzados nuevos para niños, distinguidos con la marca "BONGO", sea liberada y entregada a LAS DEMANDADAS en un acto formal, en presencia de los Apoderados Especiales de ambas partes, los cuales dejarán constancia, en un documentos escrito, de la entrega y recibo de dicha mercancía por parte de LAS DEMANDADAS.

QUINTA: LA DEMANDANTE acepta que una vez en posesión de la mercancía distinguida con la marca "BONGO", que forma parte de la mercancía secuestrada descrita en la Cláusula Cuarta anterior, LAS DEMANDADAS podrán liquidar dicha mercancía dentro de un período de NOVENTA (90) días, contados a partir de la fecha de la firma del presente Convenio de Transacción.

SEXTA: Como consecuencia de lo anterior, LAS DEMANDADAS se obligan y comprometen formalmente a agotar, liquidar o, de cualquier otra forma, a poner definitivamente fuera de circulación del comercio

nacional todos y cualesquiera de los referidos productos y mercancías distinguidos con la Marca "BONGO", a más tardar el día veintiuno (21) de JUNIO de 1996, fecha en la cual expira el período de NOVENTA (90) días, al que se hace referencia en la Cláusula Quinta anterior. LAS DEMANDADAS también se obligan y comprometen a no importar, vender, comercializar ni usar de cualquier otra forma en la República de Panamá, con posterioridad al día veintiuno (21) de JUNIO de 1996, ningún producto distinguido con la Marca "BONGO" que no sea suministrado o proceda directamente de LA DEMANDANTE o de un licenciatorio o distribuidor autorizado por LA DEMANDANTE; así como tampoco cualquier otra marca que sea semejante, similar, parecida o susceptible de ser confundida con la Marca de Fábrica "BONGO" previamente usada y registrada y de propiedad exclusiva de LA DEMANDANTE, en la República de Panamá, en relación con calzados, prendas de vestir ni con ningún otro tipo de producto, artículo o mercancía.

SÉPTIMA: A más tardar al vencimiento del período de NOVENTA (90) días, contado a partir de la fecha de la firma del presente Convenio, es decir, a más tardar el día veintiuno (21) de JUNIO de 1996, LAS DEMANDADAS se obligan a entregar a LA DEMANDANTE una certificación escrita, haciendo constar que todos y cada uno de los productos y mercancías distinguidos con la Marca "BONGO", secuestrados por LA DEMANDANTE y entregados a LAS DEMANDADAS, por razón de la presente Transacción, han sido agotados, liquidados o de cualquier otra forma puestos definitivamente fuera de circulación del comercio panameño.

OCTAVA: LAS DEMANDADAS también aceptan y manifiestan estar plenamente conformes con que sean entregados a LA DEMANDANTE todos los CERTIFICADOS DE GARANTÍA depositados en concepto de fianza, en relación con las demandas y acciones de secuestro correspondientes a los Procesos Civiles Ordinarios objeto de este Convenio de Transacción.

NOVENA: Como consecuencia de todo lo antes pactado, por este medio, LA DEMANDANTE desiste formalmente de la pretensión de la Demanda Civil Ordinaria y de las acciones de secuestro correlativas a la misma, instaurada en contra de la sociedad CARDINALE, S. A.; y desiste, igualmente, de la pretensión de la Demanda Civil Ordinaria, y de las acciones de secuestro correlativas a la misma, instaurada en contra de la sociedad ALDO ROSSINI, S. A., así como también del RECURSO DE CASACIÓN interpuesto en relación con este último proceso, bajo la condición inexorable de que LAS DEMANDADAS cumplan fielmente con todas y cada una de las estipulaciones del presente Convenio de Transacción; y cumplan, asimismo, con todas las declaraciones, aceptaciones, renuncias, obligaciones y compromisos establecidos en las Cláusulas Tercera, Cuarta, Sexta, Séptima, Octava, Décima Primera, Décima Segunda y Décima Tercera del presente Convenio de Transacción.

DÉCIMA: LA DEMANDANTE también conviene en pagar a LAS DEMANDADAS al momento de la firma del presente Convenio, la suma de CUARENTA MIL DÓLARES (U. S. $40,000.00), moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, en concepto de compensación y reembolso de los gastos incurridos por LAS DEMANDADAS en relación con los Procesos Civiles Ordinarios objeto del presente Convenio de Transacción y las acciones de secuestro correlativas a los mismos.

DÉCIMA PRIMERA: LAS DEMANDADAS aceptan y reconocen haber recibido, a su entera satisfacción, la referida suma de CUARENTA MIL DÓLARES (U.S.$40,000.00) moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, mediante el Cheque N° 48898 del UNIÓN BANK de Los Angeles, California, Estados Unidos de América, de fecha 16 de febrero de 1996, girado a la orden del Licenciado ROLANDO CANDANEDO.

> **DÉCIMA SEGUNDA:** Ambas partes declaran y reconocen que no han sufrido daños o perjuicios de ninguna índole como resultado de los Procesos Civiles Ordinarios objeto del presente Convenio de Transacción ni de las acciones de secuestro correlativas a los mismos ni por efectos del Recurso de Casación interpuesto por LA DEMANDANTE dentro del proceso contra ALDO ROSSINI, S. A.; y, por tanto, no tiene ningún reclamo, queja, petición, acción o demanda adicional, pasada, presente o futura que formularse entre sí en relación con los referidos Procesos Civiles Ordinarios, salvo por aquéllas que pudieran surgir del cumplimiento del presente Convenio de Transacción. Asimismo, LAS DEMANDADAS aceptan y manifiestan estar plenamente conformes con los desistimientos efectuados por LA DEMANDANTE, por medio del presente Convenio de Transacción, de las Demandadas, las Acciones de Secuestro y el Recurso de Casación antes aludidos; y, en consecuencia, renuncian a interponer en el presente o en el futuro cualquier reclamo, queja, petición, pretensión, acción o demanda por daños o perjuicios o por cualquier otro motivo, en relación con dichos desistimientos. Por ende, LAS DEMANDADAS manifiestan y solicitan expresamente que ningún tipo de costas sean fijadas en contra de LA DEMANDANTE por razón de la instauración y desistimiento de dichos Procesos Civiles, las Acciones de Secuestro y el Recurso de Casación relativos a los mismos.
>
> **DÉCIMA TERCERA:** Las partes aceptan expresamente los términos y condiciones de este Convenio de Transacción y se obligan a que el mismo sea fielmente cumplido por ambas partes, así como por sus filiales, sucursales, subsidiarias, sucesores legales, cesionarios y licenciatarios en la República de Panamá.

La transacción es un medio extraordinario de terminación del proceso, que tiene una doble naturaleza jurídica por lo cual se encuentra regulada en el Código Civil (Art. 1500) como un negocio jurídico de derecho privado y en el Código Judicial (Art. 1068) como un acto procesal. El artículo 1068 del Código Judicial permite que las partes celebren la transacción en cualquier etapa del proceso, aún durante el trámite del recurso de casación.

Además de los requisitos formales para la validez de la transacción antes citada, como la presentación personal del documento que la contiene ante el juez que está conociendo el negocio, la doctrina y la jurisprudencia han reconocido tres (3) presupuestos que deben concurrir para su validez, que son:

1) Que exista una controversia o proceso pendiente o eventual;

2) Que la transacción celebrada por las partes tenga como finalidad precaver o poner fin a la controversia surgida entre ellas, es decir, sustituir una relación jurídica incierta y dudosa por una relación cierta e indiscutible;

3) Que las partes se hagan concesiones recíprocas.

La transacción se presentó dentro de la acción de secuestro propuesta por MICHAEL CARUSO & CO., INC. contra ALDO ROSSINI, S. A. que se resuelve por razón del proceso ordinario y que actualmente se encuentra en la Corte para resolver recurso de casación.

Como se ha podido observar en el escrito por el cual se formaliza la transacción la firma ARIAS, FÁBREGA & FÁBREGA actúa en nombre de la parte demandante (y recurrente en casación), mientras que el licenciado ROLANDO CANDANEDO NAVARRO, además de actuar en nombre de la parte demandada (ALDO ROSSINI, S. A.), lo hace en nombre de otra sociedad (CARDINALE, S. A.) quien también es demandada por la misma demandante pero en otro proceso que quedó radicado en otro juzgado (Juzgado Cuarto de Circuito) y que actualmente se encuentra en trámite.

Lo anterior evidencia que la transacción presentada por los apoderados judiciales de las partes involucra a otra persona jurídica que no es parte en

este proceso en que se dictó la resolución objeto del presente recurso de casación que se ventila ante esta Corporación.

En tal sentido, a esta Sala sólo han llegado los expedientes antecedentes que guardan relación con el juicio ordinario que se instauró ante el Juzgado Tercero del Circuito Civil de Panamá, en que figuraron como partes MICHAEL CARUSO & CO., INC. (demandado), y no figura como parte la sociedad CARDINALE, S. A., ni consta que el proceso en que, según se alega, aparece como demandado se haya acumulado al presente.

Por ello, conforme a lo antes señalado por esta Sala, la transacción no puede ser aprobada en lo que respecta al proceso en que figura como demandada la sociedad CARDINALE, S. A., pues esa sociedad para efectos del presente proceso (dentro del cual se recurre en casación), es un tercero que no figura como parte.

En otros casos se han presentado convenios de transacción en cuyas cláusulas se ven afectadas terceras personas y propiedades no involucradas en el proceso, por lo que la Corte ha permitido a los abogados de las partes presentar un nuevo convenio circunscrito a las partes y puntos relacionados con la litis. (Res. 21 de diciembre de 1993). Por esa razón, como en el convenio de transacción que se examina se incluye a una sociedad litigante en otro juicio, la decisión de esta Sala no puede extenderse a la controversia que se ventila en ese otro proceso. De allí que la aprobación que le impartirá la Sala a la transacción presentada se circunscribirá al proceso cuyas partes son MICHAEL CARUSO & Co. y ALDO ROSSINI, S. A., y donde ambas han manifestado su conformidad para que finalice la litis en los términos de la transacción acordada por ellas.

En consecuencia, la Corte Suprema, Sala de lo Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, APRUEBA LA TRANSACCIÓN propuesta sólo en cuanto al proceso civil ordinario que MICHAEL CARUSO & CO., INC. le sigue a la sociedad ALDO ROSSINI, S. A., que incluye la acción de secuestro y el incidente levantamiento de secuestro dentro del cual se interpuso recurso de casación.

Notifíquese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS

(fdo.) ROGELIO FÁBREGA Z. (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ

(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE

Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

CARLOS PAREJA RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE AIR PANAMÁ INTERNATIONAL, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA PRIMERA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La firma de abogados MORGAN Y MORGAN recurre en casación actuando en nombre y representación del señor CARLOS PAREJA, dada su inconformidad con lo resuelto por el Primer Tribunal Superior de Justicia en la sentencia de segunda instancia dictada para desatar la controversia cuyo origen radica en la demanda ordinaria que fue interpuesta contra AIR PANAMÁ INTERNACIONAL, S. A., con el objeto de que esta última resultase condenada al pago de la suma de B/.10,000.00 en concepto de perjuicios causados por el supuesto incumplimiento de un contrato de transporte aéreo internacional.

FALLO DEL TRIBUNAL SUPERIOR

El 25 de enero de 1995 el Primer Tribunal Superior de Justicia dictó sentencia confirmatoria de la proferida por el Juez de instancia en este caso, basado en su convicción de que no se llegó a producir el alegado incumplimiento del contrato de transporte aéreo internacional celebrado entre las partes,

contrario a lo pretendido por el demandante dentro de este juicio ordinario. Dejó establecido el Tribunal Superior en la resolución que se impugna lo siguiente:

> "El problema se encuentra precisamente en el reclamado incumplimiento de dicha relación por parte de la demandada.
>
> Según se desprende de los hechos fundamento de la pretensión, el incumplimiento consistió en la no transportación del actor en el vuelo 112 de la Compañía demandada el día 26 de octubre de 1983 con destino a Guayaquil, Ecuador; mientras que por su parte la demandada sostiene que no estaba obligada a transportar al demandado en ese preciso vuelo, sino por el contrario que su obligación era transportarlo a Guayaquil, lo que en efecto cumplió al hacerse sustituir por otro transportista (EASTERN AIRLINES).
>
> El meollo del asunto consiste en la interpretación del contrato u obligación existente entre las partes.
>
> Observa el Tribunal que el billete de avión adquirido por el demandante no tiene establecido fecha de retorno, aunque del mismo se infiere la obligación del transportista de brindar el servicio en el momento que el usuario así lo requiera. De allí que, aunque existe la obligación por parte del transportista de proporcionar el transporte al usuario, es necesario que se confirme la reservación, a fin de poder programar la realización del servicio requerido.
>
> Es opinión de este Tribunal, que dentro del proceso in examine, no se ha acreditado que el demandante hubiese confirmado la reservación de una plaza en el vuelo de Air Panamá Internacional, S. A. con ruta Panamá-Guayaquil, realizado el día 26 de octubre de 1983, por lo que no existía la obligación por parte del transportista de prestara (sic) el servicio con el vuelo antes descrito.
> ...
> El artículo 119 del Decreto Ley 19 de agosto de 1963, citado por el recurrente, define lo que para nuestra legislación se entiende por contrato de transporte aéreo y el artículo 120, del mismo Decreto Ley, establece algunos requisitos de forma para la validez de dichos contratos.
>
> Según el mismo, el transportista "se obliga, mediante remuneración, a conducir o llevar de un lugar a otro, por la vía aérea ..." al pasajero. En este caso, la obligación del transportista ha sido cumplida a cabalidad, toda vez que al no poder transportar al demandante en el vuelo del día 26 de octubre de 1993 (sic), realizó las gestiones pertinentes logrando que el demandante fuese transportado al día siguientes(sic) por otra compañía de aviación.
> ...
> El incumplimiento aludido por el demandante no ha sido demostrado, pues las pruebas aportadas por el demandante, aunque sirven para acreditar la relación contractual existente con la demandada, no aportan al proceso elemento de juicio suficiente para establecer que la empresa transportista incumplió su obligación; menos aún, en la forma que lo describe la actora en su libelo de demanda.
>
> En ese punto, es necesario establecer que la compra y posesión de un billete de pasaje para un viaje redondo, o sea, de ida y vuelta, no garantiza la reservación de una plaza en el vuelo de vuelta, pues es necesario notificar a la empresa transportista cuando se va a realizar dicho vuelo, para que la respectiva reservación sea realizada. No se ha acreditado en autos que en efecto, la demandada transportista se haya comprometido a transportar al demandante en el vuelo 112 de 26 de octubre de 1983.
>
> Así las cosas, no habiéndose acreditado el incumplimiento de la obligación de la demandada de transportar al demandante; resulta irrelevante examinar el resto de los aspectos de la pretensión, como

los perjuicios ocasionados a la actora y el monto de los mismos, por lo que la sentencia apelada debe ser confirmada."

RECURSO DE CASACIÓN

Luego de que la Sala de casación ordenara al recurrente la corrección de la impugnación originalmente presentada y terminara por declarar admisible sólo una de las causales invocadas, se debe entrar en las consideraciones que conduzcan a proferir la decisión final en esta causa.

La causal admitida por la Sala fue la segunda, consistente en la infracción de normas sustantivas de derecho en concepto de error de hecho sobre la existencia de la prueba que, según el casacionista, influyó sustancialmente en lo dispositivo del fallo. Se concreta la censura a través de dos motivos, en donde se hace constar que, aún cuando la empresa aérea demandada --AIR PANAMÁ INTERNACIONAL, S. A.-- se encargó ella misma de hacer llegar al expediente un documento de su propia elaboración en donde se acepta que el pasajero (CARLOS PAREJA) no pudo viajar en la fecha en que quiso hacerlo a consecuencia de la sobre venta de pasajes, el Tribunal Superior pasó por alto dicha prueba, así como también la declaración rendida por el señor JUAN A. BERNAL HERNÁNDEZ (empleado de la demandada) quien en testimonio vertido, corrobora el motivo que le impidió a la parte actora efectuar el viaje de Panamá a Guayaquil, por las mismas razones, es decir, por el exceso en que incurrió la demandada en cuanto a la venta de pasajes o cupos de viajes del vuelo. Como violados se señalan los artículos 769, y 819 del Código Judicial; 976 y 986 del Código Civil; y el artículo 173 del Decreto Ley N° 19 del 8 de agosto de 1963.

EXAMEN DE LA SALA

Bien sabido es que la causal de error de hecho sobre la existencia de la prueba al ser invocada supone que determinadas piezas probatorias que consten en el expediente se hayan ignorado completamente por el juzgador en la correspondiente sentencia que se profiera. También puede invocarse, por supuesto, cuando el juzgador haya estimado como existente un elemento probatorio que no obra en el expediente. Sin embargo, el hecho aislado de que un fallo se profiera desconociendo uno o varios de los elementos probatorios no bastaría por sí solo para que el cargo que se le endilgue a la sentencia prospere y surta los efectos que el recurrente persigue en cuanto a casar la resolución que se impugna. Para que la causal de error de hecho sobre la existencia de la prueba sea útil en sus propósitos de fulminar el fallo de instancia, preciso será, además, que el cargo tenga incidencia sobre la parte dispositiva de la resolución recurrida. Tomando en consideración lo que se acaba de exponer, la Sala ha tenido el cuidado de estudiar en forma detenida las razones en que basó el Tribunal Superior el fallo absolutorio dictado en favor de AIR PANAMÁ INTERNACIONAL, S. A. en este caso. El análisis realizado le permite a la Sala llegar a la conclusión de que aquella colegiatura al momento de fallar no se fundamentó en que la parte actora no hubiese probado los hechos que, de acuerdo a la censura, se demuestran con el documento visible a fojas 32 y la declaración del señor JUAN BERNAL HERNÁNDEZ que consta a fojas 126 del expediente (ambas dando cuenta de la sobre venta de los pasajes) y sostuvo, en cambio, que **"el meollo del asunto consiste en la interpretación del contrato u obligación existente entre las partes"**. La sentencia atacada puntualizó que el pasaje adquirido por el demandante, al no tener establecida fecha de retorno, impone sobre el usuario la obligación de confirmar la reservación de viaje, a fin de que el transportista pueda programar la realización del servicio contratado. Es en torno a este extremo del caso que el Tribunal Superior hace su pronunciamiento diciendo que "no se ha acreditado que el demandante hubiese confirmado la reservación de una plaza en el vuelo de Air Panamá Internacional, S. A. con ruta Panamá- Guayaquil, realizado el día 26 de octubre de 1983, por lo que no existía la obligación por parte del transportista de prestara(sic) el servicio con el vuelo antes descrito".

Acerca de lo acontecido cuando el señor PAREJA fue obligado a descender del avión porque no había sitio para él en la aeronave, el Tribunal Superior interpretó que " este hecho no demuestra incumplimiento de contrato por parte de la demandada, ya que lo descrito en este hecho se debe a que la preferencia en

este tipo de transporte la tienen, precisamente, las personas que, además de poseer un billete de viaje, han hecho su reservación para el vuelo en cuestión. Esto es así, porque quien tiene un boleto de vuelta, puede escoger el viaje que más le convenga y no el que le asigne la aerolínea".

Lo anteriormente expuesto resulta suficiente para que esta Sala adquiera la certeza de que no es cierto que haya sido la ignorancia recaída sobre las dos pruebas aludidas por el recurrente lo que provocó que se dictara un fallo en los términos en que lo hizo el Tribunal Superior en este caso. La Sala considera que ha sido a la inversa; los hechos que se demuestran a través de los medios probatorios señalados por el recurrente fueron, en efecto, valorados y apreciados por el Tribunal Superior, sin que el sentenciador los estimase relevantes para acreditar el pretendido incumplimiento del contrato por parte de la compañía aérea, en los términos alegados por el demandante.

Por lo expuesto, la Corte Suprema, Sala de lo Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia de 25 de enero de 1995 dictada por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial dentro del proceso ordinario que CARLOS PAREJA le sigue a AIR PANAMÁ INTERNACIONAL, S. A.

Las obligantes costas de casación se fijan en la suma de CUATROCIENTOS BALBOAS CON 00/100 (B/.400.00).

Notifíquese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

FINANZA, CONTADURÍA Y COBRANZA RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO SUMARIO QUE LE SIGUE CÉSAR AUGUSTO ACHÓN BALLESTEROS. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA PRIMERA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Ha sido interpuesto recurso de casación en el fondo debido a la inconformidad con la resolución dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia el día 18 de agosto de 1995 en el proceso sumario que le sigue el licenciado **CÉSAR AUGUSTO ACHÓN BALLESTEROS** a la Sociedad denominada FINANZAS, CONTADURÍA Y COBRANZAS, S. A. (FICONCO), en cuya parte dispositiva se decidió: "REVOCA en todas sus partes la Sentencia N° 88 de ocho (8) de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994), proferida por el Juzgado Tercero del Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá; DECLARA PROBADA la pretensión demandada por CÉSAR A. ACHÓN BALLESTEROS en contra de FINANZAS, CONTADURÍA Y COBRANZAS, S. A. a través del presente proceso sumario; y consecuencia CONDENA a la demandada FINANZAS, CONTADURÍA y COBRANZAS, S. A. a pagar a CESAR A. ACHÓN BALLESTEROS, con cédula de identidad personal número 3-64-231, la suma de SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO BALBOAS CON DIEZ CENTÉSIMOS (B/.7,845.10) en concepto de honorarios profesionales, más la suma de MIL CIEN BALBOAS CON CATORCE CENTÉSIMOS (B/.1,100.00) (sic) en concepto de costas de primera y segunda instancia, (art. 1055 y 1064 C. J.)".

ANTECEDENTES

El abogado CÉSAR AUGUSTO ACHÓN BALLESTEROS interpuso juicio sumario contra la empresa FINANZAS, CONTADURÍA Y COBRANZAS, S. A. (FICONCO), para que esta fuese condenada a pagarle la suma B/.9,742.04, en concepto de honorarios profesionales por la tramitación y representación asumida en el juicio ordinario de mayor cuantía que contra la COMPAÑÍA IDECO, S. A. fue incoado y debidamente concluido con sentencia dictada a favor de su representada. La suma de honorarios

profesionales que se reclama en este proceso sumario se calculó de acuerdo con la tarifa fijada por la Corte Suprema de Justicia, publicitada en la Gaceta Oficial N° 20,180 de 2 de febrero de 1988.

La parte demandada al dar contestación a la acción opúsose a las pretensiones del demandante y arguyó en su defensa dos aspectos relacionados con la naturaleza del acuerdo que según ella regulaba la relación contractual existente entre el demandante y la demandada. En primer lugar, adujo que entre las partes se había celebrado un contrato de servicios cuya aplicabilidad excluía el empleo de la tarifa aprobada por la Corte y, en segundo término, sostuvo que dicho acuerdo precisaba que el pago de los honorarios profesionales al abogado, para retribuir sus gestiones judiciales o extrajudiciales, quedaba supeditado a los efectos que surtiera una condición suspensiva que formaba parte del convenio pactado entre las partes de este juicio. Esa condición suspensiva proveía que el abogado sólo tendría derecho a percibir como remuneración un porcentaje de las sumas efectivamente recuperadas en virtud de la gestión que llevase a cabo; porcentaje que se calcularía a base del acuerdo vigente entre las partes. De conformidad con la parte demandada, como en el juicio interpuesto contra IDECO, S. A. no se pudo hacer efectiva la sentencia y no se recuperó la suma de dinero demandada, por consiguiente, no existía la obligación de pagar honorarios al abogado, ya que la condición suspensiva pactada nunca se produjo en la práctica.

El Juez de instancia resolvió el litigio dictando resolución favorecedora a las aspiraciones de la parte demandada estimando que la controversia debía ser resuelta a la luz de lo establecido en el convenio celebrado entre las partes, dentro del cual una de las cláusulas claramente condicionaba el pago de honorarios al hecho de que ciertamente se recuperaran las sumas de dinero que a FICONCO, S. A. debíanle sus deudores en mora, independiente de que el cobro se hiciese judicial o extrajudicialmente. Al no haberse logrado ese resultado tampoco, para el abogado, podía emerger el derecho a cobrar los honorarios profesionales.

El Tribunal Superior, en cambio, resolvió el litigio en la segunda instancia en un sentido por completo inverso al utilizado por el juez de primera instancia. Conviene, para mayor claridad, transcribir literalmente las partes medulares del pronunciamiento del Tribunal Superior que luego Sala tendrá que examinar pareándolas con los cargos de injuricidad que en su contra se formulan en el recurso de casación sobre el cual hay que decidir:

> "...
> Esta Corporación Judicial, dejando de lado el ahondar sobre la condición "subsidiaria" que le imputa el Juez A-quo a la tarifa legal, advierte que si bien el acuerdo llevado a cabo se impone en aplicabilidad al tratar de una convención con fuerza de Ley entre las partes, el mismo sólo entró a regular el porcentaje que habría de corresponder al abogado litigante sobre el total del dinero recuperado de cuentas morosas; lo que trata sin dudas, de una convención para variar los porcentajes que para tal efecto vienen establecidos en la tarifa legal, y que por cierto, como se aprecia, son sustancialmente más onerosos que los acordados. (Fs. 113).
> ...
> Si bien es cierto, como se expone en la sentencia acusada, que del término "recuperar" se entiende el tomar o adquirir lo que antes se tenía a través de la acción de "recibir"; el reclamo trata de la demanda de honorarios en atención a la gestión procesal que se requirió para el reconocimiento de una obligación y que implicó también la realización de actos confiados a través del apoderamiento.
>
> Se hace de suma importancia el destacar que los porcentajes a que se refiere la tarifa mínima de honorarios hacen alusión a las sumas en litigio, en otros términos, a la cuantía de la demanda; de manera tal, que dichos porcentajes son con relación a la cuantía de las pretensiones.
>
> Con lo anterior se arriba a la necesidad de distinguir que el acuerdo suscitado entre abogado y cliente, conllevó la intención del

primero de ajustar sus honorarios a un porcentaje inferior al mínimo establecido por la Ley, y no la renuncia a los honorarios que amerita su gestión abogadil; todo lo que se entiende como su oferta en una relación de trabajo, que parte de no ser gratuita.

El hecho de que la fase ejecutiva no haya sido fructífera, no condiciona el derecho del abogado a que se le reconozcan honorarios por haber logrado se declarara y condenara la obligación, en este caso, representada, por la condena de la sociedad IDECO, S. A. a pagar la suma de B/.73,869.00 a favor de FICONCO, S. A., producto de aproximadamente cinco (5) años de litigio. (fs. 114).
...
Finalmente sin agotar mayores consideraciones de orden constitucional que nos lleven cada vez más a tener que reseñar el derecho a la remuneración del trabajo, la fase ejecutiva de la obligación que en la actualidad se mantienen pendiente, requirió del agotamiento previo de esfuerzos tendientes a lograr el reconocimiento y condena de la misma, y éste esfuerzo del abogado debe de ser remunerado.

Siendo el caso de que el acuerdo entre las partes estableció una tarifa sólo para el caso de sumas efectivamente cobradas y recuperadas, corresponderá establecer los honorarios que corresponda al Licenciado CÉSAR A. ACHÓN por su gestión dentro del proceso incoado por FICONCO, S. A. en contra IDECO, S. A., en atención a la tarifa legal de honorarios mínimos vigentes ya la cuantía demandada o en litigio". (Fs. 115).

EL RECURSO DE CASACIÓN

La Sala declaró admisible el recurso de casación promovido por la parte demandada quien impugna la resolución del Tribunal Superior invocando la causal de infracción de normas sustantivas de derecho por violación directa, lo cual ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida. Fundamenta sus cargos en cuatro motivos, cuyo resumen se procede a efectuar a continuación. En el primero de ellos se dice que el Tribunal Superior infringió la ley sustantiva al tasar los honorarios del licenciado ACHÓN BALLESTEROS haciendo abstracción y desconociendo la existencia de un contrato celebrado entre cliente y abogado que impedía hacer uso de la tarifa legal aprobada por la Corte Suprema de Justicia. Inmediatamente y a continuación se afirma que ha sido violado el principio de derecho que consagra que las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes. Se añade que, cuando el Tribunal Superior arriba a la conclusión de que la intensión del demandante al celebrar el acuerdo de servicios profesionales con la parte demandada, fue la de limitar el alcance del mismo sólo a los casos en que se recuperaran sumas de dinero y que de ninguna manera se extendía a aquellos casos en que, dándose una gestión infructuosa no se hiciera efectivo el cobro, porque nunca fue su voluntad renunciar a los honorarios que ameritaba su trabajo como abogado, se está incurriendo en abierta violación de la regla jurídica según la cual, cuando los términos de un contrato son claros se atenderá al sentido literal de las cláusulas del mismo. Por último, se acusa al fallo de desconocer el principio de la libertad contractual, por echar a un lado lo convenido autónomamente por las partes en litigio a partir del contrato de servicios que entre ellos celebraron, para reemplazarlo por lo establecido en la tarifa legal, cuya aplicación sólo cabe con carácter subsidiario.

El recurrente indica como infringidos las disposiciones que a continuación se transcriben:

De la Ley 9 de 1984.

"ARTÍCULO 17. Cuando no mediare contrato de servicio entre el cliente y el abogado, queda entendido que ambos se sujetan a la tarifa de honorarios vigentes.

Del Código Civil los artículos:

"**Artículo 976.** Las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, y deben cumplirse al tenor de los mismos.

Artículo 1132. Si los términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido litera de sus cláusulas.

Si las palabras parecieren contrarias a la intención evidente de los contratantes, prevalecerá ésta sobre aquéllas.

Artículo 1106. Los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a la ley, a la moral ni al orden público."

DECISIÓN DE LA CORTE

Al ser sometida al examen de la Sala la resolución atacada mediante el uso del recurso de casación se debe despejar, antes que nada, si al margen del contrato de servicio celebrado entre las partes de este juicio, sería jurídico y conforme a derecho aceptar que la prestación de carácter profesional que el demandante realizó en favor de la parte demandada (actuación en el juicio ordinario de FICONCO, S. A. contra IDECO, S. A.) quede comprendida entre aquéllas a las que les sería aplicable la tarifa oficial sancionada por la Corte Suprema de Justicia, planteamiento central del fallo de segunda instancia dictado por el Tribunal Superior.

Lo primero que debe puntualizarse es el no cuestionamiento de la existencia del acuerdo celebrado entre las partes. Es un hecho comprobado y aceptado, tanto por las partes como por los dos juzgadores de instancia, que hubo acuerdo de voluntades para regir, al menos en principio, los derechos y las obligaciones emergentes de la relación de servicio que se desarrollaba entre los protagonistas de esta controversia. De manera que es insoslayable el examen de los términos y condiciones de ese acuerdo para poder esclarecer su alcance verdadero, así como lo abarcador de sus consecuencias. Se trata de un negocio jurídico que somete los derechos y las obligaciones contractuales a los efectos de una condición suspensiva, pues se hizo depender el derecho del abogado a cobrar sus honorarios y la obligación del cliente a pagarlos del hecho futuro e incierto consistente en que se produjeran los cobros de dinero que pagasen los deudores de FICONCO, S. A. como resultado de las gestiones judiciales o extrajudiciales que llevase a cabo el abogado ACHÓN BALLESTEROS en ejercicio de su actividad profesional. Eso significa, ni más ni menos, que si no se producían el cobro y la recuperación del dinero adeudado no había porqué esperar una remuneración en concepto de pago de honorarios conforme al porcentaje que también las partes habían previsto en el acuerdo a que llegaron. Un elemental razonamiento conduce a establecer que, si la recuperación del dinero fue cero, cero será también el porcentaje de honorarios que se tendría derecho a cobrar. No ha encontrado la Sala en las constancias procesales prueba, indicio o evidencia alguna que le permita inferir que entre las parte pudiese haberse celebrado otro acuerdo distinto sobre servicios profesionales que regulase la actividad que como abogado le prestaba el licenciado ACHÓN BALLESTEROS a la empresa FICONCO, S. A.

Otra verdad procesal que surge del expediente consiste en la incuestionable realidad de que, como resultado del juicio ordinario tramitado en contra de IDECO, S. A., no fue posible recuperar las sumas de dinero adeudadas y reclamadas. No encuentra la Sala un fundamento sólido para deducir que, en esa situación, el servicio prestado por el abogado extravasaba la esfera de las responsabilidades plasmadas en el contrato que fue celebrado entre las partes. Sencillamente, nada se puede alegar en ese sentido; y el documento que acredita el pacto y los conocimiento que nos proporciona la experiencia nos autorizan a pensar que entre abogado y cliente regía un contrato de esos comúnmente denominados o conocidos como "contra resultado", o sea que los honorarios dependerán de lo que se recupere al final del litigio o la gestión forma contractual que con bastante frecuencia se utiliza entre los abogados y sus clientes.

¿Puede acaso colegirse, como se sostiene en la resolución acusada, que el acuerdo no implicaba una renuncia a los honorarios en aquellos casos en donde habiéndose realizado el trabajo profesional no había sido posible recuperar lo adeudado? Pues bien, de la lectura del documento visible a fs. 37 del expediente en donde se encuentra reflejado el acuerdo de las partes no se puede extraer esa conclusión. Cliente y abogado llegaron a una concertación expresamente precisada, acordada libremente y que tiene, a juicio de esta Sala, plena validez, por lo que desvirtuarla equivaldría a desconocer que el contrato, en esencia, es la ley que debe regir la conducta de las partes.

En lo tocante a las deducciones fiscales que pudo hacer FICONCO, S. A., acreditando como pérdida en su declaración de rentas las sumas de dinero que no pudo recobrar de su deudor IDECO, S. A., conviene dejar sentado que esa operación de carácter fiscal no constituye ni representa una recuperación de las sumas adeudadas, pues esa circunstancia no implica que el dinero haya sido reintegrado al patrimonio del acreedor; o sea que no es cierto que lo haya recuperado y hasta el momento se tiene que considerar, desde el punto de vista económico, que ha habido una pérdida.

En vista de todo lo anterior la Sala tiene que admitir que la resolución censurada es susceptible de ser casada por haber infringido, en los términos indicados por el recurrente, el principio de la libertad de contratación (art. 1106 del C. Civil); la regla de interpretación de los contratos que prohíbe darle un sentido diferente a la intención de los contratantes, cuando los términos en que vienen redactadas las cláusulas evidencia cual ha sido su verdadera voluntad (art. 1132); y la norma que consagra que lo pactado es ley entre las partes (art. 976 del C. Civil). También la resolución ha vulnerado el artículo 17 de la ley 9 de 1984, puesto que, mediando un contrato de servicio entre el cliente y el abogado, pretendió aplicar la tarifa legal cuando esto sólo es posible hacerlo en forma subsidiaria.

Por las consideraciones expuestas, la Corte Suprema, Sala de lo Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CASA la sentencia de 18 de agosto de 1995 dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia y en su lugar CONFIRMA la resolución dictada en primera instancia en cuanto a la pretensión del demandante y ABSUELVE a la demandada FINANZAS, CONTADURÍA Y COBRANZAS de la demanda incoada en su contra por el licenciado CÉSAR AUGUSTO ACHÓN BALLESTEROS.

No se condena en costas en vista de que el demandante actuó con evidente buena fe.

Notifíquese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AGROPECUARIA COMERCIAL, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A PORCINOCULTORES UNIDOS DE AZUERO, S. A. Y PRODUCTORES ASOCIADOS, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA PRIMERA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Contra la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, el 2 de febrero de 1996, dentro del proceso ordinario que le sigue AGROPECUARIA COMERCIAL, S. A., a PORCINOCULTORES UNIDOS DE AZUERO, S. A., y PRODUCTORES ASOCIADOS DE AZUERO, S. A., la parte demandante anunció y formalizó, en tiempo oportuno, recurso de casación, en el fondo.

Ingresado el negocio a la Corte, fue fijado en lista por el término señalado en el artículo 1164 del Código Judicial. Vencido dicho término y el cual fue aprovechado por ambas partes, la Sala pasa a resolver sobre la admisibilidad del recurso presentado, tomando en cuenta para ello los requisitos que establecen los artículos 1160 y 1165 del Código Judicial.

La resolución cuya impugnación se impetra es de aquellas contra las cuales lo concede la ley, por tratarse de una sentencia de segunda instancia, proferida por un Tribunal Superior, dentro de un proceso ordinario, cuya cuantía es superior a la establecida por la ley. El recurso fue interpuesto en tiempo.

Se invocan dos causales, la primera de ellas es: "Infracción de la norma sustantiva de derecho por concepto de error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba, lo cual ha influido en lo dispositivo del fallo", la misma esta consagrada en la ley.

La segunda causal que invoca el recurrente es: "Infracción de la norma sustantiva de derecho por concepto de violación directa de la misma, lo que ha influido en lo dispositivo de la resolución recurrida", la misma también se encuentra consagrada como tal en nuestro ordenamiento jurídico.

La Sala observa que ambas causales tienen el mismo fundamento de hecho, expresado en los motivos. El recurrente, cuando sustenta la causal probatoria, señala claramente que su representado no firmó, ni reconoció las actas de la Junta de Accionistas de la sociedad PORCINOCULTORES UNIDOS DE AZUERO, S. A., en donde se le imputa el pago de obligaciones a terceros.

Por otra parte, cuando sustenta la causal de violación directa estima que el Tribunal Superior violó las normas de derecho al interpretar erróneamente el contrato de la Sociedad, y al establecer que en dicho contrato se imponía a los accionistas las obligaciones de la sociedad hacia terceros, lo cual, según el casacionista, no es así.

De cualquier manera, la incongruencia de las dos causales se basa en que en la primera, no se está de acuerdo con darle valor a las decisiones de la Junta de Accionistas, ya que las actas que emanaron de la misma, no fueron firmadas por su representado; y en la segunda, el recurrente nos dice que la demandada no está facultada para imputarle obligaciones a los miembros de la sociedad demandante, con fundamento en las actas que recogen lo ocurrido en sendas reuniones de juntas de accionistas de la demandada.

No es permitido que, al formular en un recurso de casación, una misma situación, sea fundamento a la vez, para dos causales de muy distinta naturaleza.

El recurrente debe escoger la causal que considere más viable, a fin de que esta Corporación pueda comprender con mayor claridad el punto controvertido, en consecuencia, procede a ordenar la corrección del mismo.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema, Sala de lo Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ORDENA LA CORRECCIÓN, del recurso de casación, en el fondo, formulado por AGROPECUARIA COMERCIAL, S.A, mediante apoderado judicial, para lo cual se concede el término de cinco (5) días, tal como lo señala el artículo 1166 del Código Judicial.

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DENIS LAWRENCE GILL, MARÍA DEL CARMEN VANZILLOTA DE GONZÁLEZ Y OSCAR ALEJANDRO GONZÁLEZ RECURREN EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO DECLARATIVO QUE LE SIGUE DENIS LAWRENCE GILL A MARÍA DEL CARMEN VANZILLOTA DE GONZÁLEZ Y OSCAR ALEJANDRO

GONZÁLEZ. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA PRIMERA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Contra la sentencia proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, de fecha 16 de marzo de 1995, el apoderado judicial del demandante, así como los apoderados judiciales de la parte demandada, han recurrido en casación.

Mediante resolución de 12 de diciembre de 1995, esta Sala de lo Civil, ordenó la corrección de la primera causal de fondo y admitió la segunda causal de fondo propuesta por el licenciado LUIS ARROCHA ROMERO, quien representa los interés del demandante. En la misma resolución se ordenó la corrección de la primera causal y se admitió la segunda causal ambas de fondo, invocados por el licenciado EMETERIO MILLER RAMÍREZ apoderado judicial de la señora MARÍA DEL CARMEN VANZILLOTA DE GONZÁLEZ; por último se ordenó corregir la primera causal de fondo y se admitió la segunda causal de fondo, propuesta por el licenciado RICARDO VILLARREAL ARISPE, apoderado judicial del señor OSCAR ALEJANDRO GONZÁLEZ.

Transcurrido el término señalado por ley, para la corrección ordenada, la Sala procedió a dictar resolución de 25 de enero de 1996, en la cual declaró inadmisible la causal de fondo propuesta por el licenciado ARROCHA ROMERO; se admitió la causal de fondo del recurso de casación presentado por el licenciado RICARDO VILLARREAL ARISPE y declaró inadmisible la causal de fondo del recurso de casación incoada por el licenciado EMETERIO MILLER, siendo esto dos últimos apoderados judiciales de los demandados, dentro del proceso ordinario motivo de estudio.

La Corte, al declarar admisible los recursos formulados, lo fijó en lista, a fin que las partes alegaran por escrito sobre el fondo, término que fue aprovechado únicamente por el licenciado MILLER RAMÍREZ apoderado de la señora MARÍA DEL CARMEN VANZILLOTA DE GONZÁLEZ.

El caso se encuentra en estado de fallar y a ello se procede, previas las consideraciones siguientes:

Los autos dan cuenta que el demandante señor DENNIS LAWRENCE GILL, promovió proceso ordinario declarativo de mayor cuantía contra MARÍA DEL CARMEN VANZILLOTA DE GONZÁLEZ, a objeto de que se declarara entre otras cosas, resuelto de pleno derecho, el contrato de arrendamiento desde el 30 de junio de 1989; así como también, que el señor DENNIS LAWRENCE GILL hizo reparaciones y mejoras a la finca de propiedad de la señora MARÍA DEL CARMEN VANZILLOTA DE GONZÁLEZ; que el contrato de opción de compra celebrado entre ambos el 20 de febrero de 1988 sobre la Finca N°110.920 de propiedad de la demandada VANZILLOTA DE GONZÁLEZ, quedó resuelto de pleno derecho el 30 de mayo de 1989 y, que, con motivo de esta resolución la señora MARÍA DEL CARMEN VANZILLOTA DE GONZÁLEZ está obligada a devolverle al señor DENNIS LAWRENCE GILL la suma de QUINCE MIL BALBOAS (B/.15,000.00) más intereses computados al diez por ciento (10%) anual desde el 30 de mayo de 1989.

El mencionado proceso ordinario declarativo quedó radicado en el Juzgado Primero del Tercer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil. El Juez Primero del Tercer Distrito Judicial, luego de surtidos los trámites de primera instancia, mediante Auto de 18 de junio de 1993, NEGÓ las pretensiones pedidas por DENNIS LAWRENCE GILL contra MARÍA DEL CARMEN VANZILLOTA DE GONZÁLEZ y OSCAR ALEJANDRO GONZÁLEZ; declaró probada la excepción de petición antes de tiempo formulada por los demandados MARÍA DEL CARMEN VANZILLOTA DE GONZÁLEZ y OSCAR ALEJANDRO GONZÁLEZ; declaró no probada la excepción de petición de modo indebido y ordenó el levantamiento del secuestro que pesa sobre la Finca N° 110.920.

En grado de apelación el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, profirió la sentencia de 25 de marzo de 1995, dentro del proceso ordinario declarativo de mayor cuantía incoado por DENNIS LAWRENCE GILL contra

MARÍA DEL CARMEN VANZILLOTA DE GONZÁLEZ y OSCAR ALEJANDRO GONZÁLEZ, mediante la cual:

> "REFORMA la sentencia de fecha 18 de junio de 1993, dictado por el Juzgado Primero del Circuito de lo Civil del Tercer Distrito Judicial de Panamá, de manera que en su parte resolutiva, se lee así:
>
> 1. Se DECLARA que el contrato de arrendamiento sobre la finca y mejoras, ubicada en Boulevard Costa del Sol, esquina Boulevard de Las Palmeras, Veracruz, Provincia de Panamá, celebrado entre la señora María del Carmen Vanzillota de González y el señor Dennis Lawrence Gill, el 21 de enero de 1988, ha quedado resuelto de pleno derecho, desde el día 14 de julio del año 1989.
>
> 2. Se DECLARA que el contrato de Opción de Compra celebrado entre la señora MARÍA DEL CARMEN VANZILLOTA DE GONZÁLEZ y el señor DENNIS LAWRENCE GILL, el 20 de febrero de 1988, sobre la mencionada finca y mejoras 110.920, ubicada en Boulevard Costa del Sol, esquina Boulevard de Las Palmeras, Veracruz, Provincia de Panamá, quedó resuelto de pleno derecho el día 14 de julio del año 1989.
>
> 3. Se DECLARA que la señora MARÍA DEL CARMEN VANZILLOTA DE GONZÁLEZ está obligada a devolverle al señor DENNIS LAWRENCE GILL, la suma de QUINCE MIL BALBOAS (B/.15,000.00), más intereses computados al diez por ciento (10%) anual, desde el día 14 de julio de 1989 hasta la fecha que se verifique la entrega, en virtud de la resolución del Contrato de Opción de Compra, relacionado directamente con la referida finca N° 110.920.
>
> Se NIEGA el resto de las declaraciones que aparecen en el libelo de demanda, como declaraciones segunda, quinta, sexta, séptima y octava.
>
> Se DECLARA como no probadas las excepciones de petición antes de tiempo y de modo indebido invocadas por los demandados.
>
> Se ORDENA el levantamiento del secuestro que pesa sobre bienes (dinero) de propiedad del señor OSCAR ALEJANDRO GONZÁLEZ".

Procede la Sala a resolver lo que sea de lugar, en virtud de que han recurrido tanto el demandante, como los dos co-demandados, por lo que resulta necesario analizar separadamente los recursos de casación interpuestos y, como lo expusimos anteriormente, han sido admitidos.

Al demandante, en el recurso interpuesto, se le admitió la segunda causal, que consiste en infracción de la norma sustantiva por error de derecho sobre la apreciación de la prueba, que ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo. Los motivos en los cuales hace descansar la citada violación, se han planteado de la siguiente forma:

> "PRIMERO: Consta en el expediente a fjs. 19-20, copia auténtica de la escritura pública número 6276 de 14 de julio de 1989, por la cual MARÍA DEL CARMEN VANZILLOTA DE GONZÁLEZ vende la finca 110.920 al señor OSCAR ALEJANDRO GONZÁLEZ, por la suma de B/.10.000.00. Siendo ésta, prueba de lo irrisorio del precio de venta de dicha finca, indicativo de una acción en fraude del derecho de un acreedor, el Ad-quem no valoró dicho documento en concordancia con las otras pruebas del expediente con las cuales se demostraba el fraude en perjuicio de su derecho alegado por el demandante.
>
> SEGUNDO: Consta en el expediente a fjs. 26,27 y 28 el informe de inspección y avalúo que hace ASETECNIA, S. A. de la finca 110.920, en el cual se valora la misma por la suma de B/.86,104.20; prueba que fuera aceptada por la demandada en su contestación a la demanda y que contradice el precio irrisorio por el cual la señora MARÍA DEL

> CARMEN VANZILLOTA DE GONZÁLEZ vendió el bien inmueble, sin embargo, el juzgador no apreció esto como prueba del fraude del derecho del acreedor demandante".

La causal invocada, que es el error de derecho en la apreciación de la prueba, se produce, como afirma el doctor JORGE FÁBREGA PONCE, cuando a la prueba traída al proceso en debida forma, se le da un alcance interpretativo distinto al que la norma le reconoce. El supuesto error de derecho se produce por una valoración errónea sobre la prueba documental, de dos documentos (Escritura Pública N° 6276 de 14 de julio de 1989), documento público y documento privado (avalúo de la propiedad), y consiste en que la venta que se hizo mediante escritura pública de la finca sobre la cual se había otorgado contractualmente opción de compra durante tres (3) años, a partir del 20 de febrero de 1988, se vendió por un precio irrisorio, para lo cual se sustenta en el avalúo que se le hizo a la propiedad en referencia, antes del vencimiento de la opción, venta ésta que se realizó en fraude de acreedores. Como es sabido, para que prospere la acción pauliana, es menester que se cumpla con dos requisitos: el perjuicio al acreedor y el fraude. La doctrina ha mantenido que es requisito que el deudor se haya hecho insolvente con el acto en fraude de acreedores. No obstante, este requisito de la insolvencia del deudor no es requerida, cuando el crédito está representado por una prestación determinada. La sentencia de 6 de mayo de 1974, citada por el doctor DULIO ARROYO, en su conocida obra "20 años de jurisprudencia de la Sala 1ª (Civil) de la Corte Suprema de Justicia, señala:

> "...
> En el segundo caso, cuando el crédito está representado por una prestación determinada, no es necesario probar la insolvencia del deudor para que prospere la acción revocatoria contemplada en el artículo 996 del Código Civil. En este caso el deudor lo es de una cosa determinada y para cumplir con esa obligación es obvio que debe mantenerla dentro de su patrimonio.
>
> Desde el momento en que el deudor realiza un acto mediante el cual hace salir de su patrimonio el bien comprometido, está incurriendo en fraude porque ese acto lo conduce al incumplimiento de la obligación que tenía adquirida con el acreedor respecto de ese bien.
>
> Eso es así debido a que el acreedor cuando celebró el contrato lo hizo por razón de ese bien determinado. De allí que su acreencia no puede ser satisfecha sino a través del bien comprometido. Por ello es necesario que ese tercero tenga conocimiento de que el acto que está realizando con el deudor es con el propósito de ayudarlo en el incumplimiento de la obligación adquirida. De lo expuesto se deduce que el deudor puede ser propietario de otros bienes y derechos en los cuales no tiene ningún interés el acreedor, y es por ello que no es necesario demostrar la insolvencia del deudor porque el fraude se realiza en este caso al poner fuera del alcance de su patrimonio el bien comprometido".
>
> (20 Años de Jurisprudencia de la Sala Primera (de lo Civil) de la Corte Suprema de Justicia de Panamá: 1961-1980. DULIO ARROYO CAMACHO. Panamá, 1982. Págs. 212-213).

Ahora bien; aún cuando fuese ese el caso, y se probase por el actor que la venta se había hecho con el exclusivo fin de perjudicar al acreedor, extremo éste que no ha sido probado, sino solamente el hecho de la venta, mediante la Escritura Pública N° 6276, de 14 de julio de 1989, es lo cierto que ese extremo carece de importancia frente a las pretensiones del demandante, que consisten en la devolución de sumas de dinero, entregadas al propietario a ser imputados a la venta si el optante ejerce la opción por, cuanto no es de su interés adquirir la mencionada finca, sobre la cual tenía un derecho de opción, y que son incompatibles con la acción revocatoria que se persigue, y que tiene como finalidad revocar dicha venta para que regrese al patrimonio la venta fraudulentamente realizada. Para que esa pretensión tenga sentido, es menester que el demandante desee adquirir el bien cuya opción tenía, pues de otra suerte no se comprende cual es la finalidad de la acción revocatoria. Es decir, el demandante incurre en la violación del principio general de Derecho, de que nadie

puede ir en contra de sus propios actos.

Por lo demás, el Tribunal ad-quem valoró debidamente la venta, cuando fue la base de la decisión para revocar la sentencia del juez a-quo, en razón de que fue precisamente dicha venta la que constituía el incumplimiento contractual del contrato de opción con respecto a la misma finca que fue objeto de la venta antes del término de vencimiento de la opción otorgada.

Entre las disposiciones legales infringidas, figura el artículo 963, que no se refiere a la enajenación a título oneroso, sino gratuito, es decir, mediante una donación. Por otra parte, el recurrente no señala cual es la disposición de carácter sustantivo que ha sido violado con ocasión de la valoración errónea de la prueba, como la jurisprudencia constante de esa Sala ha exigido. Véase la sentencia de 4 de agosto de 1982, citada por el doctor JORGE FÁBREGA en su monografía antes señalada, pág. 120.

En consecuencia, la Sala desestima la causal invocada por la parte demandante.

La representación procesal de la demandada MARÍA DEL CARMEN VANZILLOTA DE GONZÁLEZ, recurrió igualmente en casación, fundamentándose tanto en la forma como en el fondo, del cual solamente le fue admitida la segunda causal, esto es, haber incurrido en infracción de normas sustantivas de derecho en concepto de violación directa, la que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida, y fundamenta la causal en los siguientes motivos:

> "PRIMERO: El Tribunal Superior, al reformar la sentencia apelada, para formular las declaraciones primera, tercera y cuarta, y al declarar consecuencialmente, como no probada la excepción de petición antes de tiempo alegada oportunamente por nuestro representado, incurrió en error jurídico en la medida que desconoció que para que surgiera la obligación de devolver la suma abonada en señal de la opción de compra por el optante, conforme al contrato, era necesario que se cumpliera la condición previa de la notificación por escrito a la dueña y que transcurriera el término fijado en el contrato, error éste que influyó sustancialmente en lo dispositivo del fallo impugnado.
>
> SEGUNDO: De igual modo, el Tribunal ad-quen (sic) incurrió en error jurídico al interpretar el contrato de opción de compra en la medida que consideró que la violación contractual que le atribuyó a la demandada, señora MARÍA DEL CARMEN VANZILLOTA DE GONZÁLEZ, le permitía al demandante exigir el reembolso de la suma de QUINCE MIL BALBOAS (B/.15,000.00) abonados por éste, más los intereses pactados, sin (sic) fuera necesario la demostración "de la comunicación previa escrita" a que se refiere el contrato, error que lo condujo a violar la norma sobre interpretación de los contratos e influyó sustancialmente en lo dispositivo del fallo recurrido.
>
> TERCERO: Si el Tribunal Superior no hubiera incurrido en los errores de juicio o errores jurídicos en que cayó, la conclusión hubiese sido distinta, porque yerros lo condujeron a reformarla sentencia apelada y desconocer que la condición ni el término se habían producido y cumplido y que al momento de la demanda no era exigible la obligación de devolver la suma abonada como señala, todo lo que influyó sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida".

El recurrente estima que la violación consiste en haber exigido la devolución de la suma de QUINCE MIL BALBOAS (B/.15.000.00), sin que se hubiese cumplido la condición consignada en el contrato de opción para el caso de que el optante resuelva o decida no ejercer el derecho de opción sobre la finca, esto es, comunicar esa decisión por escrito a la propietaria de la finca 110.920, hasta cuya comunicación no se entendía exigible la prestación convenida, es decir, la devolución de las sumas adelantadas e intereses a la tasa de diez por ciento (10%) anual.

No obstante, el fundamento de la resolución impugnada del ad-quem para revocar la decisión del juez a-quo se basó en que la propietaria había violado e incumplido el contrato de opción, al vender la propiedad a otra persona distinta del optante antes de que venciese el término de la opción otorgada, es decir, tres (3) años. En efecto, el contrato de opción de compra, en su cláusula 3ª, otorga la opción y regula el efecto de la misma, es decir, la limitación a la venta a terceros de la finca, antes del vencimiento de la opción. La cláusula en mención es del siguiente tenor.

"...

TERCERA: Declara LA DUEÑA que se obliga con EL OPTANTE a concederle la primera opción de compra sobre la finca N° 110.920, Código 8005, rollo 7397 complementario, documento N° 1, asiento N° 1, de la Sección de Propiedad, Provincia de Panamá, Registro Público, por un precio de SETENTA Y NUEVE MIL BALBOAS (B/.79,000.00). Es convenido por ambas partes que EL OPTANTE tendrá un período de TRES (3) años para ejercer la opción y LA DUEÑA no podrá vender o negociar la referida finca durante todo este período. Esta opción podrá ser ejercida por EL OPTANTE en cualquier momento dentro de los tres (3) años aquí establecidos". (El subrayado es nuestro).

Por lo tanto, el incumplimiento de la propietaria de vender la finca a un tercero antes del vencimiento de la opción, constituye una manifiesta voluntad de incumplir el contrato de opción por parte de la propietaria, al dejar al contrato de opción, por razón de la venta, sin objeto.

El civilista español, Profesor LUIS DIEZ-PICAZO, señala como uno se los supuestos de incumplimiento definitivo la manifiesta voluntad del deudor de no cumplir, y señala:

"La voluntad de no cumplir puede ser inducida de actos concluyentes del deudor. Bajo esta luz, la idea jurisprudencial de la voluntad rebelde se comprende decisivamente. No se trata tanto de detectar una voluntad o un propósito de rebeldía, cosa que será siempre extraordinariamente difícil, cuanto de obtener o de incluir la razonable conclusión, con base en el anterior comportamiento del deudor, de que persistirá la situación de no cumplimiento. Dicho de otro modo, es la declaración de no querer cumplir y de que no se cumplirá, manifestada por actos concluyentes".

(Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial II Las relaciones obligatorias. Luis Diez-Picazo. Cuarta Edición. Editorial Civitas. Madrid, 1993. Pág. 663).

Por las consideraciones expuestas, esta Sala considera que la causal no prospera.

La representación procesal del segundo co-demandado OSCAR ALEJANDRO GONZÁLEZ, también ocurrió en casación e interpuso recurso de casación en el fondo, esgrimiendo, al efecto, dos causales, violación de la ley por aplicación indebida y violación directa. Resulta oportuno referirse a cada una de ellas. La primera causal, como se dijo, es infracción de la ley por aplicación indebida. Es claro que esta infracción prospera cuando se aplica la ley a un supuesto no previsto en ella. Y aduce el recurrente como disposiciones legales violadas, el artículo 1009 del Código Civil, el cual recoge la denonimada condición resolutoria tácita, aplicable a aquellos contratos que contienen obligaciones recíprocas, es decir, contratos sinalagmáticos, el que no se aplica a los contratos que consagran obligaciones en forma unilateral, como lo es el denominado contrato de opción, sin contraprestación y esto es cierto. Yerra al Tribunal Superior al deducir que un contrato de opción puede resolverse con fundamento en el artículo 1009, pues la hipótesis prevista, el supuesto de hecho de la norma, se aplica a contratos sinalagmáticos, contratos que contienen obligaciones recíprocas. Pero ello no incide en lo medular del fallo. A un contratista, sea de un contrato con obligaciones recíprocas o con obligaciones a cargo de una sola de las partes, le es lícito pretender la resolución de un contrato que ha sido incumplido por el deudor. Esto es particularmente cierto ante situaciones que constituyen manifestaciones del deudor de incumplir el

contrato apreciada de actos concluyentes del deudor, o, como lo señala la doctrina, la manifiesta voluntad del deudor de no cumplir. Para todos los contratos, el incumplimiento contractual le otorga al acreedor el derecho potestativo de pedir la resolución del contrato por razón de su incumplimiento y, si así lo hiciere, puede también optar por la indemnización de daños y perjuicios (artículo 986 del Código Civil, en relación con el artículo 1109 del mismo Código). La hipótesis contraria, conduciría a la tesis de que los contratos con obligaciones unilaterales del deudor no podrían ser resueltos, en virtud de una declaración judicial, aún a pesar de su incumplimiento.

La segunda causal de fondo consiste en la violación directa de la ley, y esta causal se apoya en los siguientes motivos:

> "PRIMERO: El Tribunal Superior, al reformar la sentencia apelada, para formular las declaraciones primera, tercera y cuarta, y al declarar, consecuencialmente, como no probada la excepción de petición antes de tiempo alegada oportunamente por nuestro representado, incurrió en error jurídico en la medida que desconoció que para que surgiera la obligación de devolver la suma abonada en señal de la opción de compra por el optante, conforme al contrato, era necesario que se cumpliera la condición previa de la notificación por escrito a la dueña y que transcurriera el término fijado en el contrato, error éste que influyó sustancialmente en lo dispositivo del fallo impugnado.
>
> SEGUNDO: De igual modo, el Tribunal a-quen (sic) incurrió en error jurídico al interpretar el contrato de opción de compra en la medida que consideró que la violación contractual que le atribuyó a la demandada, señora MARÍA DEL CARMEN VANZILLOTA DE GONZÁLEZ, le permitía al demandante exigir el reembolso de la suma de QUINCE MIL BALBOAS (B/.15,000.00) abonados por éste, más los intereses pactados, sin que fuera necesario la demostración "de la comunicación previa escrita" a que se refiere el contrato, error que lo condujo a violar la norma sobre interpretación de los contratos e influyó sustancialmente en lo dispositivo del fallo impugnado.
>
> TERCERO: Si el Tribunal Superior no hubiera incurrido en los errores de juicio o errores jurídicos en que cayó, la conclusión hubiese sido distinta, porque estos yerros lo condujeron a reformar la sentencia apelada y desconocer que la condición ni el término se habían producido y cumplido y que al momento de la demanda no era exigible la obligación de devolver la suma abonada como señal, todo lo que influyó sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida". (F. 677).

Ya se expresó al analizar la causal anterior, que el contrato no fue resuelto por otra razón que por el flagrante incumplimiento del contrato de opción, que obligaba a la propietaria a no vender o negociar la venta de la propiedad durante el término de la opción, es decir, por tres (3) años, obligación que quedó incumplida al proceder a vender la propiedad a persona distinta del titular de la opción, dentro del término de la opción.

De las normas que se estiman violadas, resulta pertinente la presunta violación del artículo 1107 del Código Civil, que proviene del artículo 1256 de su homólogo español. ENRIQUE QUIÑONERO FERNÁNDEZ ha abordado la aplicabilidad de esta norma a los contratos de opción, en los Comentarios al Código Civil español que dirige el Profesor MANUEL ALBALADEJO, en los siguientes términos:

> "...
> Otra cuestión que debe examinarse tiene relación con la llamada opción de compra. Entendida como un contrato por el que una persona se compromete a vender a otra algo, de manera que es el optario el que queda obligado unilateralmente hasta que el optante decida.
>
> La doctrina establece que el optante es aquel que adquiere únicamente la facultad de exigir el cumplimiento de esa venta proyectada; o aquel cuya posición jurídica es prevalente, ya que

sólo de él depende la celebración efectiva del contrato definitivo.

Por estas afirmaciones quizá pudiera entenderse que, en la opción, el cumplimiento del contrato se deja al arbitrio del optante y que posiblemente esto supusiese contradecir el artículo 1.256. Creo que no puede entenderse así, pues el precontrato (la opción lo es) cuando es unilateral debe reunir los requisitos del contrato al que tiende, al menos, para la posición, de aquélla de las partes a la que la otra puede imponer la vigencia del contrato preparado. Con lo que el arbitrio no cabría. Así lo han entendido recientemente la jurisprudencia, al establecer refiriéndose a la eficacia del precontrato, que su objeto ... es una prestación donde se conoce con precisión el concreto objeto sobre el que el contrato definitivo va a versar, sin que las partes puedan arbitrariamente separarse de lo dispuesto, pues en otro caso se infringirían los artículos 1.090, 1.256, 1.258 ..., que consagran la obligatoriedad de los contratos y el no poder quedar su cumplimiento al arbitrio de una de las partes.

DIEZ-PICAZO se refiere a la cuestión afirmando que es claro que el 1.256 no impide los contratos que genéricamente se llaman de opción, en los cuales la puesta en vigor del contrato o la decisión sobre su ejecución o inejecución se deja a voluntad de uno de los contratantes, como es el adquirente de la opción".

(Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales. Manuel Albaladejo y Silvia Díaz Albart. Tomo XVII Vol. 1° A. Editoriales de Derecho Reunidas. Madrid, 1993. Págs. 317-318).

La anterior conclusión es lógica. Es de la esencia del contrato de opción el derecho que se le otorga al optante de decidir si se ejecuta o no se ejecuta el contrato de opción, el cual, de acuerdo con Roca Sastre, "es un contrato preparatorio, consensual, unilateral o bilateral, gratuito u oneroso, en virtud del cual una de las partes o optante tiene la facultad de decidir a su arbitrio si se lleva a efectividad un contrato determinado, bien con el mismo, bien con un tercero". (Citado por PUIG BRUTAU, Fundamentos de Derecho Civil, tomo II, volumen 2, pág. 50).

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 16 de marzo de 1995, dictada por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ANA VICTORIA POSSE DE VALLARINO RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO DE SUCESIÓN TESTAMENTARIA DE LOUIS MARTINZ ANDERSEN. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA PRIMERA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Dentro del proceso de sucesión testamentaria del señor **LOUIS MARTINZ ANDERSEN (Q. E. P. D.)**, el apoderado judicial de la señora **ANA VICTORIA POSSE DE VALLARINO**, ha presentado recurso de casación contra la resolución proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia, el 16 de febrero de 1996.

Consecuentemente, esta Sala Civil procede a realizar un examen del presente negocio, con el fin de determinar si cumple o no con los requisitos necesarios para su admisibilidad.

La resolución que se pretende impugnar es susceptible de recurso de casación, ya que se trata de un auto que decide en segunda instancia una adjudicación de bienes hereditarios, cuya cuantía es superior al mínimo que establece la ley.

Consta en el expediente que el recurso fue anunciado y formalizado en tiempo oportuno y el recurrente es persona hábil.

En cuanto al libelo contentivo del recurso, la Corte observa que se trata de un recurso de casación en el fondo, en el cual se han invocado dos causales.

La primera causal consiste en la infracción de normas sustantivas de derecho por violación directa, que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida. Tanto los motivos como las disposiciones legales que se consideran infringidas, son congruentes con la causal invocada y resultan adecuadas en su aspecto formal.

La segunda causal es infracción de normas sustantivas de derecho por concepto de error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba, lo que ha influido sustancialmente en lo dispositivo del auto atacado, la cual ha sido enunciada en los términos del artículo 1154 del Código Judicial.

Sin embargo, la lectura de los motivos que le sirven de fundamento pone de manifiesto que lo que se pretende impugnar por medio de esta causal probatoria, es uno de los requisitos del contrato contenido en la Escritura Pública N° 3154 de 6 de abril de 1995, de la Notaría Quinta del Circuito de Panamá. Al respecto, la Sala ha señalado que el contenido de los contratos y la interpretación jurídica de sus cláusulas, se rige por las disposiciones sustantivas de nuestro Código Civil que regulan esta materia. Consecuentemente, el análisis jurídico de un contrato es independiente de toda cuestión de hecho y no puede impugnarse mediante las causales probatorias.

En mérito de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE la primera causal y DECLARA INADMISIBLE la segunda causal del recurso de casación interpuesto por el apoderado judicial de la señora ANA VICTORIA POSSE DE VALLARINO, dentro del proceso de sucesión testamentaria del señor LOUIS MARTINZ ANDERSEN (Q. E. P. D.).

Notifíquese.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ARTEMIO JAÉN V., DANILO MEDINA, MIGUEL GIRÓN, RAMIRO VERGARA Y CARLOS RÍOS RECURREN EN CASACIÓN EN EL PROCESO SUMARIO QUE LE SIGUEN A ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES PARA LA EXPORTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN, S. A. (A. P. E. C. S. A.). MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA PRIMERA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El Licenciado Jaime Antonio Ruiz, en representación del señor **ARTEMIO JAÉN**, **DANILO MEDINA**, **MIGUEL GIRÓN**, **RAMIRO VERGARA** Y **CARLOS RÍOS**, ha interpuesto recurso de casación contra la resolución proferida por el Tribunal Superior del Cuarto

Distrito Judicial el 13 de febrero de 1996, que decidió en segunda instancia el proceso sumario presentado por el recurrente contra la **ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES PARA LA EXPORTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN, S. A. (APECSA).**

Cumplidos los trámites procesales correspondientes a esta clase de negocio, es tarea de la Sala determinar si el presente recurso de casación reúne los requisitos necesarios para su admisibilidad.

En primer lugar, se observa que la resolución impugnada es susceptible del recurso de casación, ya que se trata de una resolución que decide en segunda instancia un proceso sumario. En relación con la cuantía, se advierte que si bien no fue establecido expresamente en el libelo de la demanda, existen elementos suficientes en el expediente que permiten concluir que es superior al mínimo que establece la ley.

En segundo lugar, el recurso fue anunciado y presentado en tiempo oportuno por personal hábil.

En tercer lugar, en cuanto al escrito de formalización se observa que se trata de un recurso de casación en el fondo en el cual se ha invocado como única causal, "INFRACCIÓN DE NORMAS SUSTANTIVAS DE DERECHO, POR VIOLACIÓN DIRECTA". Aún cuando se ha anunciado dicha causal, es preciso que la misma compagine con los motivos y la norma postulada.

En cuanto al primer motivo, no explica cuáles son los argumentos relacionados con las normas sustantivas que debieron aplicarse dentro del proceso. Los argumentos están expuestos en forma muy genérica, sin señalar la situación concreta, lo cual no es propio del recurso de casación.

Sucede lo mismo con el segundo motivo, ya que el recurrente no precisa ni demuestra en que concepto se dio la infracción de la norma.

La consecuencia de estos es que no se sabe en qué consecuencias se pronunció la sentencia de segundo grado contra la cual se recurre ni cómo lo hizo, lo cual en el aspecto fáctico constituya los cargos en que se le imputan. Por tanto, los motivos deben ser corregidos.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA LA CORRECCIÓN del recurso de casación presentado por el apoderado judicial de los señores ARTEMIO JAÉN, DANILO MEDINA, MIGUEL GIRÓN, RAMIRO VERGARA y CARLOS RÍOS, en los términos que establece la presente resolución, para lo cual concede el término establecido por el artículo 1166 del Código Judicial.

Notifíquese.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RAMÓN JUÁREZ ACHURRA RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A ELEUTERIO RAMOS. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA PRIMERA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Mediante resolución dictada el 19 de abril de 1996, esta Sala ordenó la corrección del recurso extraordinario de casación, en el fondo, propuesto por RAMÓN JUÁREZ ACHURRA, mediante apoderado especial, dentro del proceso ordinario que le sigue a ELEUTERIO RAMOS. Para tal fin, se concedió el término de cinco (5)

días hábiles, conforme lo pauta el artículo 1166 del Código Judicial. Dicho término ha vencido sin que la parte recurrente corrigiera el recurso, es decir, ha precluido el término.

El vencimiento del término para la corrección trae consigo la declaración de inadmisibilidad del recurso con la consiguiente imposición de costas a cargo del recurrente, tal como lo señala el artículo 1166:

> "ARTÍCULO 1166: Si el recurso adolece de defectos de forma, la Corte ordenará su corrección, señalando al recurrente las deficiencias o defectos. Si el recurrente no lo corrigiere conforme lo ordenado, dentro del término de cinco (5) días, la Corte declarará inadmisible el recurso, con costas de setenta y cinco balboas (B/.75.00) a quinientos cincuenta balboas (B/.550.00), según la cuantía o la importancia del asunto y devolverá el proceso al Tribunal del conocimiento".

En virtud de lo anterior, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA INADMISIBLE el recurso de casación, interpuesto por RAMÓN JUÁREZ ACHURRA, mediante apoderado especial.

Se condena en costas a la parte recurrente por la suma de SETENTA Y CINCO BALBOAS (B/.75.00).

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

LUIS ROGELIO ESQUINA RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO SUMARIO DE LIQUIDACIÓN DE CONDENA EN ABSTRACTO INCOADO POR LUIS ROGELIO ESQUINA CONTRA SERVICIOS TURÍSTICOS PANAMEÑOS, S. A. (EN ESPAÑOL) Y PANAMENIAN TOURIST SERVICE, INC. (EN INGLÉS) Y COMERCIALMENTE NATIONAL CAR RENTAL. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA PRIMERA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El licenciado BENIGNO VERGARA CÁRDENAS, apoderado especial del señor LUIS ROGELIO ESQUINA, recurre en casación contra la sentencia de 13 de febrero de 1996, proferida por el Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, dictada en el proceso sumario de liquidación de condena en abstracto que LUIS ROGELIO ESQUINA le sigue a SERVICIOS TURÍSTICOS PANAMEÑOS, S. A. (en español) y PANAMANIAN TOURIST SERVICES, INC. (en inglés) y comercialmente NATIONAL CAR RENTAL.

Ingresado el expediente a la Secretaría de la Sala Civil, se fijó en lista por el término que señala la ley, para que las partes alegaran sobre la admisibilidad del recurso, lo cual no fue aprovechado por ninguna de las partes.

Cumplidos los trámites procesales inherentes a esta clase de recurso, pasa esta Sala de Casación Civil a pronunciarse sobre la admisibilidad del mismo, tomando en cuenta para ello los requisitos contemplados en el artículo 1165 del Código de Procedimiento Civil, así como también las exigencias formales señaladas en el artículo 1160 de la precitada legislación.

La resolución cuya impugnación aquí se impetra, es susceptible del recurso de casación.

Consta en autos que el recurso se anunció y formalizó en tiempo.

Se invocan dos causales, la primera de ellas es "Infracción de normas sustantivas de derecho, por error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba, lo cual ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida", está consagrada como tal en nuestro ordenamiento jurídico.

En cuanto a los motivos, el recurrente debe ser más concreto y preciso al señalar en qué consistió el error valorativo por parte del Tribunal Superior, y no debe realizar alegaciones, ya que para éstas, la ley concede un término especial, después de admitido el recurso. Por otra parte la Sala observa que en dos motivos se señala una prueba que consta a fojas 45. La situación planteada en ambos motivos no ilustra al Tribunal si se trata de la misma prueba, porque la exposición no es clara.

En cuanto a las infracciones de las normas de derecho, el casacionista debe ceñirse a explicar cómo se infringió la norma, no debe realizar transcripciones de lo que contienen las pruebas, ni formular alegaciones en esta etapa del recurso.

Estas anomalías deben ser subsanadas.

La segunda causal invocada es "Infracción de las normas sustantivas de derecho por concepto de Error de Hecho sobre la existencia de la Prueba, lo que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la Resolución recurrida", la misma esta consagrada como tal en la ley.

En cuanto a los motivos y la explicación de cómo han sido infringidas las normas de derecho, la Sala observa que, en cuanto al aspecto formal cumplen con los requisitos exigidos por la ley.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ORDENA LA CORRECCIÓN, de la primera causal de fondo, para lo cual concede el término de cinco (5) días y ADMITE la segunda causal, en el fondo, del recurso de casación, propuesto por LUIS ROGELIO ESQUINA, mediante apoderado judicial.

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

HANESHER HOLDING, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A BANCO ALEMÁN PANAMEÑO, S. A. E IBERO AMÉRICA, A. G. (AHORA) BANCO ALEMÁN PLATINA, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA PRIMERA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El licenciado MANUEL E. BERMÚDEZ M., apoderado especial de HANESHER HOLDING, S. A., formuló recurso de casación contra la sentencia de 12 de febrero de 1996, dictada por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, en el proceso ordinario que HANESHER HOLDING, S. A. le sigue a BANCO ALEMÁN PANAMEÑO, S. A. E IBERO AMÉRICA BANK, A. G. (ahora) BANCO ALEMÁN PLATINA, S. A.

Se fijó el negocio en lista para que las partes alegaran sobre la admisibilidad del recurso, el cual ambas partes aprovecharon. Procede, entonces, la Sala a resolver sobre la admisión del mismo, en base a los artículos 1160 y 1165 del Código Judicial.

La causal es: "Infracción de normas sustantivas de derecho en el concepto de violación directa que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la

resolución recurrida", la misma está consagrada como tal en nuestro ordenamiento jurídico.

En cuanto a los motivos, la Sala advierte al recurrente que debe precisar en qué consistió la falta cometida por el Tribunal Superior, dado que en la mayoría de ellos realiza planteamientos relativos a las constancias procesales, perdiendo de vista que la finalidad del recurso es atacar directamente el fallo impugnado, señalando de forma clara y precisa los agravios sufridos por la parte afectada con la resolución reclamada. Ello significa que los motivos deben guardar congruencia con la causal invocada, además, deben ser dirigidos a establecer concretamente cómo el Tribunal Superior cometió el error que se alega, por tanto, no debe caer el casacionista, en recuentos y alegaciones innecesarias, pues las mismas tienden a confundir al Tribunal sobre cuál es la infracción que realmente se ataca en este recurso.

En las infracciones de las normas de derecho y en la explicación de cómo lo han sido, debe ser más específico y preciso, se incurre en alegaciones y recuentos procesales que no son compatibles con la formalidad de este recurso, por tanto el recurrente debe ceñirse a explicar cómo el Tribunal Superior infringió la norma y no caer en apreciaciones subjetivas del caso.

Estas anomalías deben ser corregidas.

Por lo anteriormente expuesto, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ORDENA LA CORRECCIÓN del recurso de casación, en el fondo, interpuesto por HANESHER HOLDING, S. A., mediante apoderado judicial, contra la sentencia del 12 de febrero de 1996. Para tal efecto concede el término de cinco (5) días.

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

JUSTINO ACEVEDO VÁSQUEZ RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A JOSÉ ÁLVAREZ PÉREZ. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA PRIMERA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El licenciado JUSTINO ACEVEDO V., actuando en su propio nombre y representación en el proceso ordinario que le sigue a JOSÉ ÁLVAREZ PÉREZ, ha impugnado a través de recurso extraordinario de casación, en el fondo, la sentencia de segunda instancia dictada por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial el 26 de enero de 1996.

Ingresado el expediente a la Secretaría de la Sala Civil, se fijó en lista por el término que señala la ley, para que las partes alegaran sobre la admisibilidad del recurso, dicho término fue aprovechado por ambas partes.

Cumplidos todos los trámites procesales, pasa esta Sala de Casación Civil a pronunciarse sobre la admisibilidad del mismo, tomando en cuenta para ello los requisitos contemplados en el artículo 1165 del Código de Procedimiento Civil, así como también las exigencias formales señaladas en el artículo 1160 de la precitada legislación.

La resolución cuya impugnación aquí se impetra, es susceptible del recurso de casación, puesto que se trata de una resolución de segunda instancia dictada por un Tribunal Superior en un proceso ordinario donde se ventilan intereses entre particulares con una cuantía superior a la señalada en el numeral 2 del

artículo 1148 del Código Judicial.

Consta en autos que el recurso se anunció y formalizó en tiempo.

El casacionista invoca como la única causal: "Infracción de normas sustantivas de derecho, por error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba, lo que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida", está prevista como tal en la ley.

La Sala observa que el recurrente en los tres motivos que presenta como sustento de su causal no se concreta a señalar en qué consistió la mala valoración de las pruebas por parte del Tribunal Superior, más bien realiza señalamientos a la primera instancia, y expone recuentos del proceso. Esta Corporación ha señalado en reiterada jurisprudencia que la casación puede equipararse a una demanda contra el fallo, y en este sentido estima que los motivos constituyen lo que son los hechos en una demanda. Debe contener datos jurídicos precisos que le sirvan de fundamento al recurso, y no meros alegatos.

Finalmente, la Sala le recuerda al casacionista que los motivos tienen como finalidad señalar, en forma específica, en qué consiste la inobservancia de la ley por parte del Tribunal que profirió la resolución, por lo que los motivos deben ser congruentes con la causal invocada. Si se ha señalado una causal probatoria se debe referir a la valoración por parte del Tribunal Superior, con respecto a las pruebas, indicando cuáles son las mismas y explicando el error valorativo del Tribunal Superior.

No corresponde en este momento realizar alegaciones que deben formularse en el evento que se declare admisible el recurso.

En cuanto a las normas de derecho infringidas, el casacionista debe ceñirse al numeral 3° del artículo 1160 del Código Judicial, en cuanto a la citación de las normas de derecho infringida y la explicación de cómo lo han sido. Ello significa que la explicación va inmediatamente después de la citación individual de cada una de ellas. No debe el casacionista señalar pruebas en este tercer requisito, como erróneamente lo ha indicado. Ello no es compatible con la formalidad del recurso extraordinario de casación.

Debe corregirse el recurso respecto a esta anomalía.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ORDENA LA CORRECCIÓN del recurso de casación en el fondo, interpuesto por JUSTINO ACEVEDO V., en su propio nombre y representación para lo cual se concede el término de cinco (5) días.

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ALBERTO SÁNCHEZ, EFRAÍN ALCIDES CORREA Y JOSÉ A. ISAZA RECURREN EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO PROPUESTO POR AGRO GANADERÍA SANTA FE, S. A. CONTRA MUNICIPIO DE TABOGA, ALBERTO SÁNCHEZ, EFRAÍN ALCIDES CORREA Y JOSÉ A. ISAZA. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA PRIMERA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La firma forense TRONCOSO, LACAYO & PORRAS, en carácter de apoderados judiciales de AGRO GANADERA SANTA FE, S. A., dentro del proceso ordinario que le

siguen a MUNICIPIO DE TABOGA, ALBERTO SÁNCHEZ, EFRAÍN ALCIDES CORREA, JOSÉ A. ISAZA ha solicitado ante esta Superioridad una Medida Cautelar, a objeto de que suspenda el proceso ejecutivo instaurado por LUIS ERNESTO CHU contra EFRAÍN ALCIDES CORREA, ante el Juzgado Primero del Circuito de Panamá y en el cual se pretende rematar la finca N° 113.440, inscrita al rollo 8110 de la Sección de la Propiedad, del Registro Público, de propiedad de EFRAÍN ALCIDES CORREA, conforme lo expresa el solicitante.

La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, advierte que el sustanciador conoce del recurso de casación formulado por el Licenciado FRANCISCO A. LAY, quien actúa en representación del MUNICIPIO DE TABOGA, ALBERTO SÁNCHEZ, EFRAÍN ALCIDES CORREA y JOSÉ ISAZA, partes demandadas en el proceso anteriormente indicado, encontrándose el negocio en la etapa de resolver.

Si bien es cierto el artículo 1157 del Código Judicial preceptúa que el recurso de casación suspende la ejecución de la resolución impugnada, y que la parte favorecida por sentencia de segunda instancia, puede obtener un secuestro o cualquiera otra medida cautelar reconocida por la ley, tal situación no es aplicable al negocio en estudio, dado que la petición no versa sobre la sentencia de segunda instancia que está conociendo la Sala de Casación, sino de otro proceso que se está ventilando en el Juzgado Primero del Circuito de Panamá, Ramo Civil, y es ante ese Tribunal que pueden ser propuestas las medidas cautelares que se estimen convenientes.

Es obvio entonces, que esta Superioridad carece de competencia para conocer de las medidas cautelares solicitadas, y que acceden a un proceso distinto del que conoce en vías del recurso de casación.

Por lo antes expuesto, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, SE INHIBE de conocer la solicitud de la medida cautelar incoada por AGROGANADERA SANTA FE, S. A., mediante apoderado judicial.

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==

INSTITUTO DE RECURSOS HIDRÁULICOS Y ELECTRIFICACIÓN (I. R. H. E.) RECURRE EN CASACIÓN EN EL INCIDENTE DE NULIDAD PROPUESTO POR AMÉRICA TORRALBO GARCÍA, NUMILA TORRALBO GARCÍA Y OTROS DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO QUE LES SIGUE EL INSTITUTO DE RECURSOS HIDRÁULICOS Y ELECTRIFICACIÓN (I. R. H. E.). MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, TREINTA (30) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA PRIMERA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La Sala de lo Civil, mediante la resolución de 16 de abril de 1996, ordenó al INSTITUTO DE RECURSOS HIDRÁULICOS Y ELECTRIFICACIÓN (I. R. H. E.), parte recurrente en casación, que corrigiera el recurso formalizado en el fondo y le concedió para tal efecto, el término de cinco (5) días, conforme lo pauta el artículo 1166 del Código Judicial.

La corrección fue efectuada dentro del término legal, por lo que procede la Sala a pronunciarse, en forma definitiva, sobre la admisibilidad del mismo.

En la resolución proferida por esta Sala, que corre de fojas 82 a 86, se le señaló a la parte casacionista, en la primera causal, que los motivos y el concepto de la infracción, contenían algunos defectos que debían ser corregidos.

En cuanto al primer motivo, se indicó que debía ser más concreto en explicar en qué consistió la falta cometida por el Tribunal Superior en la sentencia recurrida; así como también que no se deben enunciar normas de derecho, dentro de los motivos. Sin embargo, el casacionista, no es concreto e insiste en mencionar en todos los motivos normas legales.

Con respecto a ello, el recurrente debe ceñirse a lo preceptuado en el artículo 1160 del Código Judicial que indica, en su primera parte así:

> "ARTÍCULO 1160: El recurso será formalizado por medio de escrito que contendrá
>
> 1. Determinación de la causal o causales que invoque;
> 2. Motivos que sirven de fundamento a la causal;
> 3. Citación de las normas de derecho infringidas y la explicación de cómo lo han sido. ...".

Ello significa, que la citación de las normas que se dicen han sido violadas en la sentencia impugnada, debe hacerse dentro del tercer punto antes transcrito, con su respectiva explicación.

En lo referente al segundo motivo, la Sala le indicó al casacionista que, pese a que se señalaban los privilegios o derechos que tienen las Instituciones del Estado, debía atacar directamente la sentencia, dado que no concretiza cargos contra la misma. Con respecto a ello, se observa en el escrito de corrección que el licenciado PINILLA, no sólo desconoce lo ordenado, sino que además, elimina lo que esta Corporación había considerado aceptable en el primer recurso.

En el motivo tercero, además de reiterar normas de derecho; incorpora nuevos elementos como es, una transcripción que realiza de la sentencia del Tribunal Superior, lo que no es compatible con la formalidad de este recurso.

Finalmente, en el cuarto motivo, reitera los errores ya señalados, en la resolución del 16 de abril de 1996, por tanto, no cumplió con lo ordenado.

Por otra parte, en la explicación de las normas infringidas, la Sala señaló al recurrente. que se concretara a exponer en qué consistió la infracción de las normas, pero, esta anomalía no fue subsanada por el recurrente. Ello es así, dado que en la corrección únicamente se señala el artículo 4° del Decreto de Gabinete N° 235 de 1996, como infringido, incurriendo en extensos alegatos de manera repetitiva, y excluye los artículos sobre los cuales se le había ordenado hiciera una explicación más clara y precisa en cuanto a su violación. Procede este Tribunal a declarar la inadmisibilidad del recurso, de acuerdo a lo que establece el artículo 1167 del Código de Procedimiento Civil.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA INADMISIBLE el recurso de casación, en el fondo, propuesto por el INSTITUTO DE RECURSOS HIDRÁULICOS Y ELECTRIFICACIÓN (I. R. H. E.), en el incidente de nulidad propuesto por AMÉRICA TORRALBO GARCÍA, NUMILA TORRALBO GARCÍA Y OTROS, dentro del proceso ordinario que les sigue el INSTITUTO DE RECURSOS HIDRÁULICOS Y ELECTRIFICACIÓN (I. R. H. E.), contra el auto dictado por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial el día 28 de diciembre de 1995.

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE HECHO

EL LICENCIADO SANTANDER TRISTÁN DONOSO INTERPONE RECURSO DE HECHO CONTRA LA RESOLUCIÓN DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 1995, DICTADA POR EL PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL PROCESO SUMARIO DE INTERDICTO POSESORIO DE PERTURBACIÓN INTERPUESTO POR COLÓN INTERNACIONAL, S. A. CONTRA JORGE ALLEN, TOMÁS ROWE, BALTAZAR BETEGÓN Y OTROS. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA PRIMERA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El licenciado SANTANDER TRISTÁN DONOSO actuando en representación de **BALTAZAR BETEGÓN** interpuso ante esta Sala de la Corte **Recurso de Hecho** contra la resolución de 22 de noviembre de 1995 dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia que **NIEGA** el término para la formalización del recurso de casación, que anunciara contra el Auto de 31 de octubre de 1995 que declaró **DESIERTO** recurso de apelación, dentro del proceso **Sumario de Interdicto Posesorio de Perturbación** que **COLÓN INTERNACIONAL, S. A.** le sigue a **JORGE ALLEN, TOMÁS ROWE, BALTAZAR BETEGÓN** y otros.

Con el recurso de hecho se presentaron copias de la resolución que negó la casación y de la que declaró desierta la apelación, sin embargo dicha documentación resultó insuficiente para verificar "si la respectiva resolución era recurrible" en casación (artículo 1141 C. Jud.). En tal sentido, el pronunciamiento por razón de la apelación podría ser susceptible de casación si tuviera el efecto de poner fin al Proceso Sumario de interdicto posesorio, es decir, si la resolución contra la cual se intentó apelar fuese una sentencia (art. 974 C. Jud.).

En virtud de lo anterior el Magistrado Sustanciador en este recurso de hecho requirió al inferior el envío del expediente contentivo del proceso sumario de interdicto posesorio de perturbación seguido contra el recurrente, a fin de complementar las copias (artículo 1139 C. Jud.) y de poder decidir lo de lugar (fs. 17 a 20).

Recibidos los antecedentes que guardan relación con el presente recurso de hecho, la Sala ha podido observar en el expediente principal:

A fojas 87 consta el Auto de 31 de octubre de 1995 (contra el cual se negó formalización de casación) que declaró desierto el recurso de apelación anunciado contra la resolución de 26 de mayo de 1995 dictada por el Juzgado Segundo de Circuito de Colón, Ramo Civil.

Dicha resolución de 26 de mayo de 1995, visible a fojas 74, DENEGÓ recurso de revocatoria propuesto por BALTAZAR BETEGÓN contra la resolución de 26 de enero de 1995 dictada por el mismo juzgado. El escrito mediante el cual el recurrente formalizó la revocatoria (fundamentada en el ord. 4 del art. 1348) es de fecha 4 de abril de 1995, consta a fojas 67 y en la misma fecha dicho recurrente en su calidad de demandado también presenta escrito de contestación de la demanda, según se observa en la foja anterior (66).

El auto de 26 de enero de 1995, visible a foja 20, resolvió intimar a los demandados abstenerse de continuar efectuando actos de perturbación. Dicho auto obedeció a la solicitud previa que hiciera el demandante al juzgado de realizar inspección ocular y peritaje a los terrenos de su propiedad a fin de determinar: si existían personas perturbando con sus construcciones su propiedad, los nombres de los propietarios de las construcciones y, de ser así, se les solicite no seguir perturbando con sus construcciones.

A juicio de la Sala resulta obvio entonces, que el auto de 26 de enero de 1995 que posteriormente fue objeto de recurso de revocatoria y apelación de acuerdo a lo previsto por el artículo 974 del Código judicial es una sentencia pues decide una pretensión en este proceso sumario.

Consiguientemente en base a las consideraciones expuestas se ha podido aclarar que dicho pronunciamiento sobre el recurso de apelación tiene el efecto de poner fin al proceso, extinguir la pretensión; por lo que es susceptible de ser impugnado mediante recurso de casación a tenor de lo establecido en el artículo 1149 del Código Judicial en su primer ordinal.

La Corte no comparte el criterio del Tribunal Superior, al considerar que la respectiva resolución no es recurrible en casación y, en base a lo cual negó el término para la formalización de dicho recurso.

En consecuencia, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONCEDE el recurso de Hecho propuesto por Santader Tristán Donoso en nombre de BALTAZAR BETEGÓN contra el Auto de 22 de noviembre de 1995 dictado por el Primer Tribunal Superior de Justicia, dentro del Proceso Sumario de Interdicto Posesorio de Perturbación que COLÓN INTERNACIONAL, S. A. le sigue al recurrente y a otros; y ORDENA al Primer Tribunal Superior que conceda a la parte que recurre en casación en término de ley (10 días) para que formalice el recurso.

Notifíquese, Devuélvase y Cúmplase.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

IMPEDIMENTO

MANIFESTACIÓN DE IMPEDIMENTO PRESENTADA POR EL JUEZ DEL TRIBUNAL MARÍTIMO DE PANAMÁ, INC., LICENCIADO ÁLVARO CABAL EN EL PROCESO ORDINARIO DECLARATIVO QUE INVERSIONES PESQUEROS DE PANAMÁ, S. A. LE SIGUE A YOEMI BEYSI RODRÍGUEZ. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA PRIMERA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El licenciado ÁLVARO CABAL D., Juez Marítimo de Panamá, ha solicitado a esta Superioridad, se le separe del conocimiento del proceso ordinario declarativo propuesto por INVERSIONES PESQUERAS DE PANAMÁ, S. A. contra YOEMI BEYSI RODRÍGUEZ CHANG.

El Juez ÁLVARO CABAL D. fundamenta su solicitud en los siguientes términos:

"MANIFESTACIÓN DE IMPEDIMENTO DEL JUEZ MARÍTIMO DE PANAMÁ. HONORABLES MAGISTRADOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL:

Por la presente les pongo en conocimiento que en este proceso Ordinario (Declarativo) que INVERSIONES PESQUERAS DE PANAMÁ, S. A. le sigue a YOEMI BEYSI RODRÍGUEZ figura como apoderada especial de la demandada la firma forense SHIRLEY & DÍAZ, de la cual es socio principal el Lic. DÁMASO DÍAZ DUCASA con quien me une parentesco de consanguinidad, dentro del grado previsto en el numeral 1° del Artículo 146 de nuestro Código de Procedimiento Marítimo.

Visto lo anterior, respetuosamente solicito a la Sala me separe del conocimiento de dicho caso.

Fundamento de Derecho: Arts. 146 (1), 163 y c. c. del Código de Procedimiento Marítimo.

Panamá, trece (13) de mayo de 1996.

Atentamente,
(Fdo.)
Lic. Álvaro Cabal D.
Juez Marítimo".

A pesar de que no se ha acreditado el grado de consanguinidad o de afinidad entre el Juez Marítimo y el licenciado DÁMASO DÍAZ DUCASA, si se comprueba en providencia dictada por el Tribunal Marítimo de Panamá el 24 de noviembre de 1995 (fs. 80), que se tiene a la firma forense SHIRLEY & DÍAZ como apoderados judiciales de la parte demandada, y en la cual es socio el licenciado DÍAZ DUCASA.

La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, estima que el impedimento manifestado por el Juez ÁLVARO CABAL D., estaría comprendido dentro de la causal 1ª del artículo 146 de la Ley 8 de 30 de marzo de 1982, reformada por la Ley 11 de 23 de mayo de 1986.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL el impedimento manifestado por el Juez Marítimo, y LLAMA a su Suplente para que conozca del caso.

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

MANIFESTACIÓN DE IMPEDIMENTO DEL MAGISTRADO RAFAEL A. GONZÁLEZ, EN EL RECURSO DE HECHO INTERPUESTA POR EL LICDO. EDUARDO ESCOBAR DÍAZ EN CONTRA LA RESOLUCIÓN DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 1995, EMITIDA POR EL PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL PROCESO ORDINARIO DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO INTERPUESTA POR MENITZA CAJAR SIERRA CONTRA COMPAÑÍA BITE CORP. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA PRIMERA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El Magistrado RAFAEL A. GONZÁLEZ, ha presentado manifestación de impedimento, para que se le separe del conocimiento del recurso de hecho presentado contra la resolución proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia, el 18 de diciembre de 1995, dentro del proceso ordinario de prescripción adquisitiva interpuesto por MENITZA CAJAR SIERRA contra COMPAÑÍA BITE CORP.

El Magistrado RAFAEL A. GONZÁLEZ, fundamenta su solicitud de impedimento en los siguientes términos:

> "Respetuosamente solicito al resto de los Magistrados que conforman la Sala Civil, me separen del conocimiento del recurso de hecho presentado contra la resolución proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia, el 18 de diciembre de 1995, dentro del proceso ordinario de prescripción adquisitiva interpuesto por MENITZA CAJAR SIERRA contra COMPAÑÍA BITE CORP.
>
> Esta solicitud se debe a que soy primo del Magistrado Ponente en la resolución recurrida de hecho, Licenciado Octavio Amat.
>
> En vista de lo anterior, considero que en este caso se configura la causal contenida en el numeral 5 del artículo 749 del Código

Judicial, por lo que solicito se declare legal esta manifestación de impedimento.

Panamá, 23 de mayo de 1996.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ"

La circunstancia invocada por el Honorable Magistrado, es causal de impedimento y la misma está consagrada en el numeral 5° del artículo 749 del Código Judicial, por lo que corresponde designar al Magistrado de la Sala Penal, de acuerdo al orden alfabético que le corresponda.

En consecuencia, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL el impedimento invocado por la Magistrado RAFAEL A. GONZÁLEZ, para actuar en el recurso de hecho presentado contra la resolución proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia, el 18 de diciembre de 1995, dentro del proceso ordinario de prescripción adquisitiva interpuesto por MENITZA CAJAR SIERRA contra COMPAÑÍA BITE CORP., lo separa del conocimiento del mismo y conforme al artículo 78 del Código Judicial, llama al Magistrado de la Sala Penal, que de acuerdo al orden alfabético, debe asumir el conocimiento del proceso antes mencionado.

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS

(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ÓRGANO JUDICIAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA SEGUNDA DE LO PENAL

MAYO 1996

ACUSACIÓN PARTICULAR

ACUSACIÓN PARTICULAR INTERPUESTA POR MARITZA GISELA MONTENEGRO CONTRA ERNESTO MUÑOZ GAMBOA, POR LA SUPUESTA COMISIÓN DE DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Ha ingresado a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el expediente contentivo de la acusación particular interpuesta por el licenciado **Rigoberto A. Vergara C.**, actuando en nombre y representación de **MARITZA GISELA MONTENEGRO MONTENEGRO**, contra el Director Nacional del Instituto de Defensoría de Oficio, Licenciado **ERNESTO MUÑOZ GAMBOA**, por supuestos delitos contra la Administración Pública.

El apoderado de la parte acusadora, Licenciado **Rigoberto A. Vergara C.**, según lo establecido en el artículo 2013 del Código Judicial, tal como consta de fojas 1 a 5, señala que:

> "El acusador se obliga a continuar la acusación y a probar la verdad de su relato" (f. 5).

También, la parte acusadora denuncia como pruebas las que reposan en el sumario.

Así, pues, para determinarse la admisibilidad de la acusación, la misma ha de atenerse a los requisitos consignados en el artículo 2013 del Código Judicial -subrogado por la Ley 3 de 22 de enero de 1991-.

En este orden de ideas, es un hecho público y notorio que el acusado en el presente negocio, Licenciado **ERNESTO MUÑOZ GAMBOA**, actualmente se encuentra desempeñando el cargo de Director Nacional del Instituto de Defensoría de Oficio, por lo que por poseer la calidad de servidor público debe aplicársele lo dispuesto en el Capítulo II, Título IX del Código Judicial, sobre los Procesos Contra Servidores Públicos.

Por lo tanto, se procederá a resolver la admisibilidad de la presente acusación particular en base a la prueba sumaria presentada por la parte acusadora, toda vez que nos encontramos ante una acusación particular contra un servidor público, caso en el cual la carga de la prueba corresponde a la parte acusadora, y no debe ser decretada de oficio.

En tal virtud, a juicio de la Sala, cabe la aplicación del artículo 2471 del citado Código Judicial, del cual se desprende que, toda persona que promueva acusación o denuncia contra algún servidor público deberá acompañar la prueba sumaria de su relato, entendiéndose como tal, cualquier medio probatorio que acredite el hecho punible atribuido, los cuales deben ser idóneos, es decir, que por sí solos acrediten el hecho punible que se le imputa al denunciado.

Primeramente, cabe advertir que, estando el presente negocio en etapa de admisibilidad, con miras a otorgar a la parte acusadora el derecho de ser escuchada, y por encontrarse el sumario contentivo de la denuncia a que se refiere el acusador, en el Despacho del suscrito para su calificación legal, es por lo que, luego de analizados tanto el libelo de la acusación particular como el expediente contentivo de la denuncia, a falta de prueba sumaria eficaz que demuestre que el acto atribuido al denunciado constituye delito, lo procedente es no admitir la presente acusación particular.

En virtud de lo anterior, la Sala Penal de la Corte Suprema, administrado justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la acusación particular presentada por el licenciado Rigoberto A. Vergara C., actuando en nombre y representación de MARITZA GISELA MONTENEGRO MONTENEGRO,

contra el licenciado ERNESTO MUÑOZ GAMBOA y, en consecuencia, ORDENA el ARCHIVO del expediente.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) MARIANO HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACUSACIÓN PARTICULAR PRESENTADA POR EL LCDO. RIGOBERTO VERGARA DENTRO DE LA QUEJA PRESENTADA POR MARITZA GISELA MONTENEGRO CONTRA EL LCDO. ERNESTO MUÑOZ GAMBOA, POR SUPUESTOS DELITOS CONTRA EL HONOR. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Ha ingresado a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el expediente contentivo de la acusación particular interpuesta por el licenciado **Rigoberto A. Vergara C.**, actuando en nombre y representación de **MARITZA GISELA MONTENEGRO MONTENEGRO**, contra el Director Nacional del Instituto de Defensoría de Oficio, Licenciado **ERNESTO MUÑOZ GAMBOA**, por supuestos delitos contra el honor.

Según se desprende de los hechos descritos en el libelo de la acusación particular bajo estudio, **MARITZA MONTENEGRO** fue destituida del cargo de recepcionista del Instituto de Defensoría de Oficio, mediante Resolución N° 104 de 30 de octubre de 1995, expedida por el Director Nacional del Instituto de Defensoría de Oficio, Licenciado **ERNESTO MUÑOZ GAMBOA**, en virtud de lo cual, presentó queja ante la Procuraduría de la Administración, contra el licenciado **ERNESTO MUÑOZ GAMBOA**. La Procuraduría de la Administración, mediante Oficio N° NQ-N° 585 de 19 de diciembre de 1995, le solicitó un Informe explicativo de conducta al Director Nacional del Instituto de Defensoría de Oficio antes mencionado. En este orden de ideas, mediante Nota DODN.032-96 de 18 de enero de 1996, el Director Nacional del Instituto de Defensoría de Oficio, respondió a los requerimientos de la Procuraduría de la Administración.

En este sentido, alega la acusación particular:

> "Que en dicha nota el Director Nacional del Instituto de Defensoría de Oficio hizo aseveraciones calumniosas e injuriosas contra nuestra persona en los siguientes términos:
>
> 'Aunado a lo anterior, es absurdo y por lo mismo incomprensible, que luego de haber destituído (sic) a esta funcionaria por **incompetente, problemática e insolente**, un Defensor de Oficio de la sede (Licdo. **LUIS CARLOS AROSEMENA**) la haya nombrado en su despacho, específicamente en la sede del Instituto de Defensoría de Oficio y esta (sic) continúe en la misma Institución de la cual fue destituída (sic) e igualmente, llamo la atención sobre el hecho que si dicha funcionaria fue destituída (sic) por haber demostrado total **ausencia de requisitos para desempeñarse como simple recepcionista**, sea ahora contratada para ejercer las funciones de asistente de un Defensor de Oficio Distrital, labor esta (sic) que exige cierta preparación académica y requisitos mentales y **morales**, ausentes en ella, entre estos (sic) la **honestidad**, lealtad y un alto espíritu de cooperación y servicio a la administración de justicia, condiciones de las cuales carece **Maritza Montenegro**, la cual se caracteriza precisamente por lo falaz de sus afirmaciones, por la incongruencia de sus razonamientos y por lo intrigante de sus comentarios y actuaciones, tal como lo patentizan los documentos que se adjuntan a esta misiva.' ... ." (F. 2).

En virtud de lo anterior, la parte acusadora manifiesta:

> "Que dichas aseveraciones carecen de sustento tanto fáctico como jurídico, ya que la susenta no ha sido penada por delito contra el patrimonio, para ser calificada como deshonesta." (F. 2).

Finalmente, en el libelo de la acusación particular, se señala que, a **MARITZA MONTENEGRO** se le acusa de:

> "... **incompetente, falta de preparación académica y requisitos mentales y morales**, situación que queda desvirtuada por el hecho de haber ocupado el cargo de recepcionista mediante concurso y haber cumplido con todos los requisitos exigidos por el Órgano Judicial." (F. 2).

La parte acusadora denuncia como pruebas las que reposan en el sumario.

Así, pues, para determinarse la admisibilidad de la acusación, la misma ha de atenerse a los requisitos consignados en el artículo 2013 del Código Judicial -subrogado por la Ley 3 de 22 de enero de 1991-. En este sentido, según lo establecido en el artículo 2013 del Código Judicial, la Sala ha señalado que el compromiso de probar la verdad de su relato corresponde a la acusadora y no a su apoderado, salvo que se le haya facultado expresamente para ello y, en el caso sub-judice, se advierte que si bien el apoderado de la parte acusadora, Licenciado **Rigoberto A. Vergara C.**, señala en el libelo que:

> "El acusador se obliga a continuar la acusación y a probar la verdad de su relato" (f. 4).

Dicho apoderado no se encontraba debidamente facultado para obligarse a probar la verdad de su relato, razón suficiente para no admitir la acusación particular.

En este orden de ideas, es un hecho público y notorio que el acusado en el presente negocio, Licenciado **ERNESTO MUÑOZ GAMBOA**, actualmente se encuentra desempeñando el cargo de Director Nacional del Instituto de Defensoría de Oficio.

Por tratarse de acusación particular por la supuesta comisión de delitos contra el honor, se procederá a resolver la admisibilidad de la presente acusación en base a la prueba sumaria presentada por la parte acusadora, toda vez que en este caso, por el tipo de delito, corresponde a la parte acusadora aportar tales pruebas.

El artículo 180 del Código Penal, modificado por la Ley 1 de 5 de enero de 1988, es del siguiente tenor:

> "Artículo 180. Para proceder en los delitos contra el honor, se requiere querella de la parte ofendida, acompañada por la prueba sumaria de su relato. ..." . (Lo subrayado es nuestro).

Por lo tanto, cuando se promueve querella por los delitos de calumnia e injuria, se debe acompañar la prueba sumaria del relato, por cualquiera de los medios que enumera el artículo 2073 del Código Judicial, es decir, cualquier medio probatorio que acredite el hecho punible atribuido.

Primeramente, cabe advertir que, estando el presente negocio en etapa de admisibilidad, con miras a otorgar a la parte acusadora el derecho de ser escuchada, y por encontrarse el sumario contentivo de la querella a que se refiere el acusador, en el Despacho del suscrito para su calificación legal, es por lo que, luego de analizados tanto el libelo de la acusación particular como el expediente contentivo de la querella, a falta de prueba sumaria eficaz que demuestre que el acto atribuido al denunciado constituye delito, lo procedente es no admitir la presente acusación particular.

En virtud de lo anterior, la Sala Penal de la Corte Suprema, administrado

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la acusación particular presentada por el licenciado Rigoberto A. Vergara C., actuando en nombre y representación de MARITZA GISELA MONTENEGRO MONTENEGRO, contra el licenciado ERNESTO MUÑOZ GAMBOA y, en consecuencia, ORDENA el ARCHIVO del expediente.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(Con salvamento de voto)
(fdo.) MARIANO HERRERA
Secretario

SALVAMENTO DE VOTO DE LA MAGISTRADA AURA E. GUERRA DE VILLALAZ

La resolución que antecede mediante la cual no se admite acusación particular presentada por el licenciado Rigoberto Vergara, en representación de **MARITZA GISELA MONTENEGRO MONTENEGRO**, contra el licenciado **ERNESTO MUÑOZ GAMBOA**, se fundamenta en que no fue presentada la exigencia prevista por el artículo 180 del Código Penal, modificado por la Ley Primera de 1988 que obliga al querellante o acusador en los delitos contra el honor acompañar la prueba sumaria de su relato.

En el cuaderno que recoge la querella presentada por MARITZA GISELA MONTENEGRO MONTENEGRO contra el licenciado ERNESTO MUÑOZ GAMBOA, Director del Instituto de Defensoría de Oficio, por la comisión de delitos contra el honor en su perjuicio, nos apartamos del criterio de la mayoría porque la querellante aportó la documentación correspondiente en la que constan las expresiones injuriosas que se le dirigieron a través de un informe dado a la Procuraduría de la Administración, firmado por el Director del Instituto antes mencionado.

En el presente caso que recoge la acusación particular presentada por el apoderado de la querellante en relación con el mismo hecho delictivo, estimamos que sí se dio cumplimiento al artículo 180 del Código Penal y la documentación aportada adquiere los caracteres de prueba sumaria eficaz que obliga al menos a una ampliación de la fase instructoria a fin de clarificar los hechos imputados. Por otra parte, el ponente al momento de resolver la admisibilidad de la acusación particular tenía en su despacho el expediente que contenía la querella presentada contra el Director del Instituto de Defensoría de Oficio y por tanto tenía conocimiento de la aportación de pruebas documentales que servían de sustento a la querella presentada. La Ley no obliga que esas pruebas se repitan o se adjunten al escrito contentivo de la acusación particular, en virtud de que se trata de un cuadernillo que debe ser adicionado al expediente principal.

Por las razones anteriores, SALVO EL VOTO en la presente resolución.

Fecha ut supra.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AUTO APELADO

PROCESO SEGUIDO A PLINIO CEDEÑO VILLAMONTE POR EL DELITO DE HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA, EN PERJUICIO DE EVA MARÍA SANTOS. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, NUEVE (9) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

El Segundo Tribunal Superior de Justicia, mediante auto calendado 13 de

diciembre de 1995, abrió causa criminal contra Plinio Cedeño Villamonte como presunto infractor del Capítulo I, Título I del Libro II del Código Penal, en concordancia con disposiciones del Capítulo VI, Título II del Libro I del mismo Código, es decir por el delito genérico de homicidio en grado de tentativa, cometido en perjuicio de Eva María Santos. Contra esta decisión jurisdiccional anunció y sustentó recurso de apelación el defensor técnico del encausado, licenciado Ernesto Castillo Almengor.

El libelo de apelación permite determinar que el letrado acude a esta instancia con la finalidad de que se le otorgue a su defendido libertad condicional. Esta solicitud la expresa manifestando que "no se tomó en consideración que el delito que se le imputa a mi representado ... solo puede ser reprimido con pena que oscila entre 4 y 13 años, con 4 meses de prisión (sic), y como quiera que mi representado es un delincuente primario, al tomársele en cuenta las atenuantes comunes que modifican la responsabilidad penal, mi representado ... a (sic) cumplido con creces dos tercios de la condena" (f. 266).

Por conocida la pretensión y su fundamento, pasa esta Corporación de Justicia a resolver la alzada, en los términos previstos por el artículo **2428** del Código Judicial.

El cuaderno penal permite determinar que en horas de la madrugada del 14 de marzo de 1994, en la comunidad de Villalobos, corregimiento de Pedregal, Provincia de Panamá, el sindicado Cedeño Villamonte, encontrándose en estado de embriaguez, le propinó una herida con arma blanca a su concubina, Eva María Santos. Según el examen del médico forense, la paciente sufrió "herida cortante en muñeca de mano derecha con machete, que le produjo una cuasiamputación de mano derecha" (f. 24). Finalmente, el galeno forense dictaminó que "Su vida sí estuvo en peligro" (f. 25), por lo que le fue asignada una incapacidad provisional de 6 semanas, contadas a partir del día del hecho delictivo.

En cuanto a la pretensión que anuncia el recurrente, la Sala debe indicar que ésta no es la vía procesal para solicitar la libertad condicional de un reo, ya que el conocimiento de esa materia corresponde privativamente al Órgano Ejecutivo, quien la ejerce con intervención del Presidente de la República y la participación del Ministro respectivo, según lo preceptúa el numeral 12 del artículo 179 de nuestra Carta Fundamental.

Por otro lado, se advierte que para acceder al beneficio de la "libertad condicional" es imprescindible que el sindicado **haya sido** sancionado mediante sentencia condenatoria ejecutoriada, y que satisfaga dos requisitos, a saber: a) el cumplimiento de dos tercios de la pena y b) la comprobación hecha, por el Departamento de Corrección, en el sentido de que la reclusión se cumplió con un índice de readaptación adecuado, buena conducta y apego a los reglamentos carcelarios (art. 85, C. P.). De ahí que carezca de fundamento el hecho de que el recurrente gestione, por esta vía y en este momento procesal, la libertad condicional de Cedeño Villamonte, cuyo status es el de imputado, no de reo.

Por lo antes expuesto, LA CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA el auto de 13 de diciembre de 1995 dictado por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, venido en grado de apelación.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) JOSÉ M. FAÚNDES (fdo.) AURA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AUTO DE ENJUICIAMIENTO APELADO

APELACIÓN DEL AUTO DE LLAMAMIENTO A JUICIO EN LAS SUMARIAS SEGUIDAS A RODOLFO

BONILLA SÁNCHEZ Y JAIME RAÚL GONZÁLEZ DELGADO POR LOS DELITOS DE HOMICIDIO Y ROBO EN PERJUICIO DE ROSAURA CAMPOS Y JOSÉ DE LA CRUZ OJO CRUZ. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, TRECE (13) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Procedentes del Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial han ingresado a esta Sala Penal de la Corte Suprema, las sumarias instruidas contra **RODOLFO BONILLA SÁNCHEZ** y **JAIME RAÚL GONZÁLEZ DELGADO**, ambos sindicados por los delitos de homicidio y robo en perjuicio de quien en vida se llamara **ROSAURA CAMPOS** y el señor **JOSÉ DE LA CRUZ OJO CRUZ**, hecho ocurrido el 28 de diciembre de 1993 en la comunidad de Corotú de Chepo, en Las Minas de la Provincia de Herrera.

La apelación fue sustentada contra el auto de cinco (5) de octubre de 1994 emitido por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, mediante el cual se ABRE CAUSA CRIMINAL contra los prenombrados **BONILLA SÁNCHEZ y GONZÁLEZ DELGADO**. Entre otras, el Tribunal a-quo expresa las siguientes razones para sustentar su decisión:

> "...
> De igual modo adelantamos que entre otras pruebas emergen indicios contra los imputados que los comprometen con el actuar criminoso y es que el propio JOSÉ DE LA CRUZ OJO CRUZ (fs. 877-878), reconoció en declaración ampliatoria como de su propiedad, una linterna de mano que le fue incautada a los imputados, al igual que tres collares y un crucifijo color oro, que al tenerlos de presente expresó que pertenecían a su hoy difunta concubina.
>
> La narración comentada concuerda con la de BOLÍVAR DÍAZ (fs. 34-38), persona ésta que logró ver a uno de los implicados dentro de la casa y a quien se le despojó de ciento cincuenta y tres balboas (B/.153.00), y pese a que fue cuestionado por la defensa de los sindicados, mantuvo con firmeza su señalamiento, en cuanto a que esa noche vio a RODOLFO BONILLA SÁNCHEZ, uno de los co-partícipes del ilícito.
> ...
> Los dos fueron sometidos a exámenes psiquiátricos, determinándose por ese medio que tanto BONILLA SÁNCHEZ (fs. 292) como GONZÁLEZ DELGADO (fs. 293) son imputables, siendo evidente que ante la comprobación de la propiedad y preexistencia de los bienes objeto del robo, la prueba sobre la destrucción de un teléfono público, el protocolo de autopsia, la diligencia de reconocimiento del cadáver de ROSAURA CAMPOS PIMENTEL (fs. 138-140) y el certificado de defunción (fs. 341), además de las pruebas testimoniales e indiciarias que los comprometen con los hechos delictivos, siendo el móvil del delito de robo y surgiendo el homicidio como delito medio para llegar al fin o designio de los imputados, precisa enjuiciarlos." (Fs. 6, 7 y 11).

El Licenciado JOSÉ LUIS VARELA G., abogado de los sindicados, manifestó su inconformidad con el Auto en los siguientes términos:

> "... cabe destacar que mis representados al momento de rendir su declaración indagatoria ante el funcionario de instrucción del Distrito de Las Minas, y las veces en que se les ha ampliado dichas indagatorias, en la aludida Agencia del Ministerio Público y en la Fiscalía del Circuito de Herrera, han negado enfáticamente haber participado e incluso haberse encontrado, siquiera en el lugar de los hechos; pues, el señor BONILLA, manifiesta que para esa fecha y hora en que se cometió el delito, venía en compañía del imputado, GONZÁLEZ, desde El Barrero, Distrito de Pesé, cuando fueron detenidos ...

> ... el único testigo que le hace cargos al señor BONILLA, lo es el señor BOLÍVAR DÍAZ, quien se contradice en sus deposiciones que por ende le han sido ampliadas ante la Fiscalía del Circuito de Herrera, porque es muy difícil creer, que una persona a quien no conocía, la haya podido identificar en la oscuridad de la noche, por la rendija de una puerta y por el reflejo de una luz de un foco de mano, tal como así lo expresa el deponente, ...
>
> ... En el auto de vocación apelado, se ordena compulsar las copias pertinentes, a fin de que el Juzgado Municipal, de Las Tablas, asuma el conocimiento en cuanto a la comisión del delito de falso testimonio por parte de los señores JOSÉ ALBERTO MORÁN MARTÍNEZ, ARCADIO JOSÉ ESPINO y SILVIA MARÍA HASSÁN; la medida no tiene lugar en virtud de que ellos mismos han declarado que mintieron, de lo que se desprende que ya dejan esclarecidos sus atestados, por lo que consideramos que no es procedente haber tomado esa determinación, por lo que solicitamos también que sea revocada la misma." (Fs. 1066-1068).

Por otro lado, en un breve escrito de contestación a la sustentación de la apelación, el abogado de la acusación particular, el Licenciado JOSÉ E. GÓMEZ, manifiesta su interés en que se confirme el auto apelado:

> "... existen pruebas contundentes como lo es el testigo DÍAZ quien se encontraba en el lugar de los hechos y ha confirmado en sus testimonios cuantas veces ha sido llamado a declarar también existen las puebas (sic) del vehículo que conducía y que se logró probar los objetos robados que sirvieron como evidencias claves en la investigación." (F. 1071).

Por su parte, la Fiscal Primera Superior del Cuarto Distrito Judicial, al corrérsele traslado de la apelación, mantuvo su concepto en el sentido de que se confirme el llamamiento a juicio de los imputados:

> "...
> Por nuestra parte, mantenemos el criterio esbozado en la Vista Fiscal N° 52 datada 12 de septiembre del año que decurre, en donde sugerimos se llame a responder en Causa Criminal a los señores RODOLFO BONILLA SÁNCHEZ y JAIME RAÚL GONZÁLEZ DELGADO, toda vez que en el proceso penal, se han reunido a cabalidad los presupuestos que exige el artículo 2222 del Código Judicial; entre éstos, el señalamiento en reiteradas ocasiones hecho por el testigo presencial del suceso, señor BOLÍVAR DÍAZ; como también número plural de testimonios que ubican a los imputados BONILLA SÁNCHEZ y GONZÁLEZ DELGADO, en el lugar de los hechos, para la hora y fecha del mismo, pese a que BONILLA trató de introducir una coartada, tal como se deduse (sic) de la declaración de JOSÉ ROBERTO MORÁN MARTÍNEZ (fs. 272-275-300-302). Situación similar se dio con la deposición de ILDAURA CALDERÓN DE SANDOVAL (fs. 213-215), quien manifestó que su amigo GONZÁLEZ DELGADO le solicitó que declarara que estuvo en su casa en El Barrero de siete a diez de la noche; hecho este que la inquietó y por ser una falsedad, pues si bien estuvo en ese lugar fue a eso de cinco a seis de la tarde; apreciándose de esta manera, la coartada que deseaba establecer este imputado por su parte." (Fs. 1073-1074).

LOS HECHOS

De lo actuado en el sumario, se desprende que el mismo se inició a raíz del conocimiento que tuvo la Fuerza Pública del Distrito de Las Minas del hecho de sangre ocurrido en la comunidad de Corotú, corregimiento de Chepo, en la residencia del señor **JOSÉ DE LA CRUZ OJO CRUZ.**

En horas de la noche del día 28 de diciembre de 1992, aproximadamente tres o cuatro hombres penetraron en la casa del señor **OJO CRUZ**, cuando éste se encontraba durmiendo junto a su concubina, la señora **ROSAURA CAMPOS.** Amarraron

al primero, y a la segunda en vista de que gritaba y oponía resistencia, le hicieron un disparo a raíz del cual falleció dos días después en un centro hospitalario.

Igualmente, se encontraba por esos días hospedado en el hogar de los OJO CRUZ, el señor **BOLÍVAR DÍAZ** quien también fue amarrado y forzado por los malhechores a entregar el dinero que poseía, mientras que despojaban también al señor **JOSÉ DE LA CRUZ OJO** de novecientos ochenta y cuatro balboas, unas prendas de oro y un plano de un terreno de su propiedad, entre otros bienes muebles.

A fojas 19 a 23 del cuaderno penal, aparece el señor **JOSÉ DE LA CRUZ OJO CRUZ** narrando lo sucedido el día de marras. Nos dice que se encontraba en su casa en compañía de su señora ROSAURA CAMPOS y del señor BOLÍVAR DÍAZ, quien tenía como veintidós días de estar hospedado ahí. Que estaban durmiendo cuando unos sujetos desconocidos penetraron en la casa y los sujetaron tanto a él como a su esposa por el cuello; que uno de éstos les dijo que tenían que ceder o los mataban, luego los voltearon boca abajo sobre la cama atándolos de manos y pies; pero su señora ROSAURA CAMPOS empezó a gritar y fue entonces cuando le dijeron que se callara que sino la mataban, escuchando seguidamente un disparo como de revólver, luego del cual su esposa no volvió a hablar. Sigue diciendo la víctima, que después del disparo, los asaltantes le dijeron que les tenía que decir dónde tenía la plata; que él les dijo que en la cebadera, pero ellos insistían en que debía tener ocho mil balboas (B/.8,000.00) pues sabían que había vendido un terreno por aquellos días; que revolvieron toda la casa, se llevaron un plano de un terreno, el dinero de la cebadera [aproximadamente novecientos ochenta balboas (B/.980.00)] y otros bienes muebles, luego de lo cual, se fueron; que no logró ver el rostro de sus atacantes porque estaba boca abajo y amarrado; que cuando logró zafarse de las amarras encendió una "guaricha" y vio a su compañera amarrada, inconsciente y sangrando por la nuca; que en la madrugada la trasladaron al centro de Salud y luego al Hospital El Vigía de la ciudad de Chitré. También indicó la víctima que los asaltantes se llevaron un foco de mano color verde que era de su propiedad.

BOLÍVAR DÍAZ, otra víctima del ataque, narró que la noche en cuestión, se despertó en el momento en que los desconocidos agredían a los dueños de la casa, así que escuchó el ruido del escape del vehículo, los gritos de los asaltantes, el llanto de ROSAURA CAMPOS y luego el disparo que le cegara la vida. Inmediatamente vió cuando uno de los asaltantes se metía por debajo de la puerta del cuarto donde él se encontraba; logró verle perfectamente el rostro, pues el individuo llevaba un foco en la mano, con el cual alumbró todo el cuarto; que luego le ordenó que se acostara boca abajo, lo ató fuertemente y le tapó la cara con una sábana; que además le pidió entregara todo el dinero que tenía y se llevó el que había en la cartera que sumaba ciento cincuenta y tres balboas con ochenta y un centavos (B/.153.81); que mientras todo esto sucedía, se escuchaba el motor y el escape del automóvil de los malhechores que se movía de un lado a otro y minutos después se retiraron dejándolos amarrados; que seguidamente logró soltarse y se dirigió donde estaba la señora ROSAURA CAMPOS a quien le tocó el corazón para asegurarse que estaba viva aún. DÍAZ manifestó que el sujeto que entró por debajo de la puerta vestía camisa a cuadros y una gorra azul y que estaba dispuesto a identificarlo. Por ello, se realizó diligencia de reconocimiento (fs. 90-91) donde el testigo señaló a **RODOLFO BONILLA SÁNCHEZ** como el que participara en el asalto a la casa de JOSÉ DE LA CRUZ OJO; posteriormente ratificó lo dicho al realizarse el careo con el sindicado **BONILLA SÁNCHEZ** (fs. 287). Al ampliar su declaración, interrogado por la defensa de los sindicados, BOLÍVAR DÍAZ mantiene sus señalamientos contra BONILLA SÁNCHEZ (fs. 910-914), por ello viene a ser el testigo más importante en las presentes sumarias.

Diversas declaraciones obrantes en el sumario, indican que el medio de transporte utilizado por los asaltantes, lo fue el vehículo marca LADA-NIVA, color vino con franjas gris y blanca, tipo Jeep, con matrícula número 8-18053 de propiedad de la compañía arrendadora de autos DISCOUNT RENT-A-CAR, que fuera alquilado por el sindicado **JAIME RAÚL GONZÁLEZ** el día de los hechos en horas de la tarde. En este sentido declara **RAQUEL SOTO** (fs. 13-14) quien afirmó haber visto pasar el día 28 de diciembre de 1992 aproximadamente a las siete de la noche (7:00 p. m.), el aludido vehículo a gran velocidad, en dirección hacia

Chepo de Las Minas, y que en el mismo viajaban cuatro personas. Igualmente **ABILIO CRUZ QUINTERO** declaró haber visto el LADA-NIVA a eso de las diez de la noche (10:00 p. m.), aparentemente venía de regreso de Corotú luego de perpetrar el asalto. Al pasar frente al teléfono público de Chepo, ubicado cerca de la casa de este testigo, los ocupantes del vehículo bajaron y lo destruyeron. Este hecho fue reportado por **ABILIO CRUZ QUINTERO**, **MARTÍN ALMANZA MARÍN y MIGUEL GONZÁLEZ** al Destacamento de Policía de Las Minas. La búsqueda del aludido automóvil, que se inició aún sin saber que estaba también involucrado en el asalto a la casa de JOSÉ DE LA CRUZ OJO (f. 10), concluyó al interceptarlo en la vía de Chitré hacia Pesé, llegando a la entrada de La Arena aproximadamente a las doce y media de la madrugada (12:30 a. m.) del día 29 de diciembre de 1992. Ocupaban dicho vehículo, **JAIME RAÚL GONZÁLEZ y RODOLFO BONILLA SÁNCHEZ.**

Lo testificado por RAQUEL SOTO, ABILIO CRUZ QUINTERO y las numerosas declaraciones de residentes del poblado de Chepo, nos ayudan a concluir que el auto LADA-NIVA, de generales ya descritas, pasó por dicha comunidad con rumbo a Corotú, primeramente a las nueve de la noche (9:00 p. m.) y regresó a eso de las diez ó diez y media (10:30 p. m.). Es importante destacar que la presencia de un automóvil desconocido en la comunidad de Chepo, sumado a la velocidad con que viajaba y el daño que presentaba en el escape que ocasionaba gran estruendo, fue lo que llamó la atención de los residentes del lugar, quienes recuerdan claramente haber visto o escuchado el auto. Así tenemos a **CATALINA VALDÉS GONZÁLEZ** (fs. 16-18; 938-939); **FRANK RAMÍREZ** (fs. 64-65); **JUAN JOSÉ LAO RODRÍGUEZ** (fs. 66-67); **SATURNINO NORIEGA** (fs. 115-116); **FELÍCITA OJO** (fs. 117-118); **JULIO OJO RODRÍGUEZ** (fs. 121-123); **ROSALINDO CASTRO GONZÁLEZ** (fs. 124-125); **ARISTIDES OJO RODRÍGUEZ** (fs. 216-218) y **RAÚL ROSARIO OJO** (fs. 219-220).

Días después cuando el señor Personero condujo nuevamente hasta la comunidad de Chepo el auto LADA-NIVA ya descrito, a fin de llevar a cabo una diligencia judicial relacionada con el proceso, estos testigos lo reconocieron como el que pasó a gran velocidad el 28 de diciembre de 1992 a las horas antes mencionadas.

Al momento de la detención de **JAIME RAÚL GONZÁLEZ** y **RODOLFO BONILLA SÁNCHEZ**, se les encontró un revólver marca Charter Arms Corp. Stralford Com, calibre 38 corto, sin permiso, con el #671625, seis municiones dentro del cilindro, más la suma aproximada de B/.154.00 en efectivo, una gorra azul, dos sortijas, tres collares y un crucifijo.

El día 29 de diciembre se llevó a cabo la diligencia de Inspección Ocular del vehículo decomisado, y se encontró en la guantera una **linterna de mano color verde con blanco** cuya descripción coincide con la que JOSÉ DE LA CRUZ OJO reportó como robada de su casa el día de los hechos; además encontrándose él presente en dicha diligencia, manifestó que se trataba de la linterna de su propiedad (fs. 32-33).

Igualmente a fojas 6 y 7 consta un Informe de Investigación suscrito por el Sub-Teniente MANUEL S. MORENO Q. quien indica que cuando el imputado **JAIME RAÚL GONZÁLEZ** retiró el automóvil de la agencia de alquiler, éste registraba 1/8 de tanque de combustible y 59,085 Kms. de recorrido; y que al momento de la detención (12:58 a. m.) el kilometraje era de 59,277 kms. habiendo recorrido 192 kms. en un lapso de 7 horas aproximadamente. Finalmente indica el informe que la distancia de Chitré a Chepo de las Minas es de aproximadamente 65 kms. ...

Consta también en el sumario, copia del contrato de alquiler del automóvil LADA-NIVA matrícula 8-18053, suscrito por **JAIME RAÚL GONZÁLEZ** y la empresa SARASTY RENT-A-CAR con copia de la cédula y licencia de conducir del primero.

Ostensible a fojas 54 a 57 se aprecia la Diligencia de Inspección Ocular realizada en la residencia de JOSÉ DE LA CRUZ OJO, en la misma, los testigos juramentados manifestaron que no eran visibles signos de violencia en las puertas de la casa, pero que se apreciaba ropa regada como si alguien hubiese estado buscando algo, también hacen la salvedad de que la puerta de uno de los cuartos tiene en su parte inferior una abertura lo suficientemente grande como para facilitar la entrada de una persona por debajo; encontraron también un casquillo

de bala calibre 22 correspondiente a un rifle que JOSÉ DE LA CRUZ OJO le vendiera días antes a UBALDINO RAMOS (f.878), mantas manchadas de sangre y un par de lentes de sol también de propiedad del dueño de la casa. Por último declaran los testigos que la casa no ofrece ninguna seguridad y que las puertas pueden ser abiertas con suma facilidad.

El día 30 de diciembre de 1992 falleció la señora **ROSAURA CAMPOS** en el Hospital CECILIO CASTILLERO de la Ciudad de Chitré a causa del impacto de bala que recibiera el 28 de diciembre del mismo año (f. 45). De fojas 169 a 180 podemos observar el Protocolo de Necropsia que en su parte pertinente indica:

> "...
> OBSERVACIONES: El proyectil incidio (sic) en la región occipitoparietal derecha perferó (sic) hueso meninge luego se fragmentó en dos (2) recorrió una de las partes fragmentadas la masa encefálica occipitoparietal derecha y fue extraída en la craneotomía practicada por el neurocirujano. El otro fragmento recorrió el tejido encefálico a nivel de la región occipitoparietotemporal derecha, incidió en el límite que separa la fosa craneana media de la posterior en la intersección de la porción petrea del temporal (peñasco) y el techo de la caja del tímpano, luego se alojó en la fosa craneana media a nivel del quiasma óptico. Este fragmento del proyectil correspondía a la porción posterior del mismo." (F. 173).

Finalmente, el médico forense indica como causas de la muerte:

> **"I. Herida por proyectil de arma de fuego. Fragmento intracraneal."** (F. 180).

También consta en el expediente la Diligencia de Reconocimiento, Inspección Ocular y Traslado del cadáver (f. 138-140) al igual que el Certificado de Defunción de ROSAURA CAMPOS (f. 586).

En cuanto al arma homicida, tenemos que el Informe de Balística a fojas 747 del sumario, establece que el proyectil extraído a ROSAURA CAMPOS fue disparado por arma de fuego "calibre .25 auto ó 6,35mm. marca, BROWNING, BERETTA, WALTHER". Lo anterior indica que no fue el arma decomisada a los imputados (revólver marca Charter Arms Corp. Stralford Com, calibre 38 corto, #671625) la que ocasionó la muerte de la víctima, sino que el arma homicida fue otra que no se encontró durante la instrucción del sumario, a pesar de las diligencias que se llevaron a cabo para tal fin.

El revólver calibre 38 decomisado, resultó ser de propiedad de **VÍCTOR MANUEL CALDERÓN SÁEZ**, quien declaró que el arma le había sido sustraída de su automóvil en septiembre de 1991 habiendo reportado ese hecho en la P. T. J. de Las Tablas.

Por otro lado, apreciamos las versiones que de los hechos dan los sindicados **GONZÁLEZ DELGADO y BONILLA SÁNCHEZ**, donde niegan toda participación en el ilícito bajo investigación. De fojas 148 a 152 del cuaderno penal, se lee la declaración indagatoria que rindiera **RODOLFO BONILLA SÁNCHEZ**; manifestó ser amigo de **JAIME GONZÁLEZ DELGADO** desde hace más de 10 ó 12 años, no conoce a ninguna de las víctimas del hecho punible, interrogado sobre sus actividades del día 28 de diciembre de 1992, respondió:

> "... me fui para mi casa en donde permanecí hasta las seis de la tarde, ya que recuerdo que estaba viendo el programa de televisión Patrulla Motorizada que yo creo que termina como a las seis y lo vi hasta el final, cuando termino(sic) el programa me fui al Bar Moravel en la bicicleta, llegando yo al Bar Moravel como de seis y diez a seis y cuarto de la tarde, entonces yo me quede allí tomándome varias cervezas en compañía de una mujer que se llama DEYSI MARÍN y el piscero(sic) del Restaurante que se llama MORÁN, después llegó un señor que se llama ARCADIO ESPINO que es de Guararé y se tomó varias cervezas con nosotros. Luego yo le pedía al señor ARCADIO ESPINO que si me podía llevar al Barrero de Pesé, ya que él

tiene un carro, porque yo allí me iba a encontrar con mi amigo JAIME RAÚL GONZÁLEZ, entonces yo le pedí prestado a mi señora para la chinga diciéndole que si yo ganaba le pagaba y le daba algo más y entonces ella me dijo que tenía ochenta dólares (B/.80.00) y me los dio y como yo estaba pagando cervezas me quedé corto como con unos ocho dólares y por eso era que le pedí a mi señora dinero porque sabía que ella había cobrado unas vacaciones. Luego yo permanecí en el BAR MORAVEL, como hasta las nueve o nueve y cuarto tomando cervezas y como a esa hora yo le pregunté al señor ARCADIO ESPINO que si me podía llevar a encontrarme con mi amigo JAIME RAÚL GONZÁLEZ, entonces el señor ARCADIO me llevó hasta la casa donde se encontraba mi amigo JAIME RAÚL GONZÁLEZ y eso nos tomó como hora y algo que creo que eran como a las diez y media de la noche cuando llegué al Barrero de Pesé, encontrando en esa casa al señor JAIME que se encontraba en compañía de una muchacha que desconozco su nombre. Cuando yo llegué a la casa donde estaba JAIME, el señor ARCADIO inmediatamente se fue. Más tarde siendo como las once u once y media tiempo en que nos habíamos quedado JAIME y yo tomándonos una pachita y también la joven que nos acompañaba, pero no a tomar, entonces JAIME me dijo que fuéramos a echarle gasolina al carro porque quería llevar a la muchacha a un baile en el que creo que tocaba VICTORIO que se estaba realizando en Los Pozos, luego JAIME y yo montamos el carro como a eso de las once y media a doce de la noche y la muchacha se quedó y nos vinimos a echarle gasolina al carro en el Centro Económico que queda camino por La Arena de Chitré, antes de llegar a la bomba de gasolina vimos un patrulla que venía en dirección a Pesé, JAIME bajó las luces altas del carro, entonces el patrulla puso las luces rojas y yo le dije a JAIME que aguantara porque yo pensaba que era un accidente, JAIME detuvo el carro, entonces los policías se bajaron del patrulla y nos dijeron "Manos Arriba", cuando el oficial nos dijo que había recibido un reporte de un carro rojo sin placa que había debaratado (sic) un teléfono, que era un carro que estaba reportado desde Santiago que estaba en vaina y cuando el Oficial se dio cuenta que no era el carro nos dio algunas explicaciones de que ese era su trabajo que tenía que revisar los carros. Entonces él nos dijo que de todas maneras él iba a hacer un registro al carro y cuando él registró el carro encontró un revólver calibre 38 en la guantera del carro y que es de propiedad de JAIME entonces el Oficial le pidió el permiso a JAIME y él le respondió que no tenía permiso y el Oficial le dijo que siendo así teníamos que acompañar a la Guardia y todo eso creo que ocurrió como de doce y media a una de la mañana y después de todo eso nos llevaron presos y nos quedamos detenido (sic) ...".

Las personas a quienes hizo referencia **BONILLA SÁNCHEZ** en su indagatoria, como las que estuvieron con él el día de los hechos, (**JOSÉ ROBERTO MORÁN MARTÍNEZ** (fs. 273-275), **ARCADIO JOSÉ ESPINO ESPINO** (fs. 276-278) y **SILVIA MARÍN DE HASSÁN (DEYSI MARÍN)** (fs. 280-281;441)) testificaron en ese mismo sentido en sus primeras declaraciones. Sin embargo, posteriormente se retractan de lo declarado y manifiestan no haber visto ni estado con el imputado el día aludido; así, JOSÉ ROBERTO MORÁN MARTÍNEZ a foja 300 indica:

"... Yo dije en aquella declaración que el señor BONILLA había estado en el local de Moravel en fecha de diciembre, pero repito eso es mentira. Dije así porque Daisi me entregó este papel con las preguntas y respuestas ...

... Yo trabajé el día 28 de diciembre de 1992, doblando turno, es decir que también trabajé del turno de la tarde hasta las doce de la noche y en ese lapso no vía a RODOLFO BONILLA SÁNCHEZ en ese establecimiento comercial."

Similares declaraciones brindan los otros dos testigos; ARCADIO JOSÉ ESPINO ESPINO por su parte, declaró no haber estado con BONILLA SÁNCHEZ ni haberse tomado unas cervezas en su compañía en el Restaurante Moravel, agrega que tampoco

lo transportó hasta el Barrero de Pesé (fs. 390-392); SILVIA MARÍN DE HASSÁN (A) DEYSI MARÍN indicó de fojas 505 a 507 que declaró falsamente a petición de la señora de RODOLFO BONILLA SÁNCHEZ, pero que lo dicho no es cierto, puesto que en ningún momento estuvo con el imputado el día de los sucesos.

Queda evidenciada entonces, la coartada que intentó introducir **RODOLFO BONILLA SÁNCHEZ** a fin de liberarse de la responsabilidad que le pudiera caber dentro de las presentes sumarias.

Aunque los tres testigos mencionados incurrieron, al rendir sus primeras declaraciones, en el delito de falso testimonio, posteriormente y antes de que concluyera la etapa sumarial se retractaron de sus dichos, por lo cual les es aplicable lo dispuesto en el artículo 357 del Código Penal, es decir, que están eximidos de toda sanción por la comisión del aludido hecho punible. Se hace necesario revocar lo dispuesto por el a-quo en lo concerniente a la orden para la compulsa de las copias pertinentes a fin de que el Juzgado Municipal del Distrito de Las Tablas asuma el conocimiento por la supuesta comisión del delito de falso testimonio por parte de JOSÉ ROBERTO MORÁN MARTÍNEZ, ARCADIO JOSÉ ESPINO ESPINO y SILVIA MARÍN DE HASSÁN (A) DAYSI MARÍN, puesto que, como ya vimos, están eximidos de sanción.

Por su parte, **JAIME RAÚL GONZÁLEZ DELGADO**, quien declaró de fojas 153 a 157, niega toda vinculación con el hecho motivo de este proceso:

> "El lunes 28 de diciembre de 1992, yo llegué como de nueve a diez de la mañana a alquilar un carro en Rent-A-Car en Chitré, porque mi carro se encontraba dañado, la joven que me atendió o sea la Secretaria me dijo que en ese momento no tenía carro como el que yo quería o sea un NIVA de doble tracción, ya que es el único doble tracción que tenía la compañía y que tenía aire acondicionado, pero ella me dijo que como no había en el momento entregarían uno que venía de Santiago de cuatro a cinco de la tarde y yo después me fui para mi casa en Las Tablas y durante todo el resto del día me quedé en mi casa quedando me a dormir un rato y cuando me levante (sic) traté de encontrarle el daño a mi carro, pero no pude, entonces como a las cuatro y media decidí llamar a la compañía para ver si había entregado el carro y la Secretaria me dijo que el carro venía en camino de Santiago para Chitré y de una vez salí en bus de Las Tablas para Chitré, llegando a la compañía de carros como de cinco y media a las seis de la tarde, llegando yo a la compañía vi y me dijeron que el carro había acabado de llegar. Luego yo procedí a alquilar el carro, entregando la suma de dinero que había acordado con la compañía, entonces cuando me entregaron el carro que demoramos como media hora en revisarlo (choques, motor, llantas), terminando eso yo tome el carro en dirección al Barrero de Pesé como a las siete de la noche solo, ya que nadie me acompañaba, llegando a la casa de ILDAURA CALDERÓN, la cual es una conocida mía, encontrándose en la casa además de ella, los hermanos de ILDAURA, que los conozco por apodo CHANO y PIPO CALDERÓN y otros muchachos que conozco de vista y que no sé sus nombres, estos eran dos muchachos. Entonces yo me quedé a dormir un rato en la casa de ILDAURA, hasta como a las diez de la noche que fue a la hora en la que llegó el señor BONILLA. Quiero decir que desde que yo llegué al Barrero de Pesé el carro que yo alquilé no se movió en ningún momento, hasta las once y once y media de la noche que fui a echarle gasolina al cruce de Pesé, en compañía del señor BONILLA solamente, que fue la hora más o menos en que nos detuvieron que eran como las once y veinte a once y media y esto fue cerca a la entrada del Balniario (sic)." ...
>
> "Cuando yo llegué yo los saludé a los dos de ahí yo me retiré para la recámara en compañía de la joven ILDAURA CALDERÓN, ya que yo no hablé con ellos mucho, porque ellos están medio disgustados conmigo por que saben que yo tengo mi esposa, yo me quedé en el cuarto con ella y después me quedé dormido y me vine a levantar como a un

> cuarto para las diez, y cuando yo me levanté no vi a nadie solamente que escuché a ILDAURA que conversaba con su hermano CHANO y no vi en ese momento a más nadie, hasta como a las diez a diez y cuarto en que llegó el señor BONILLA que llegó en un carro, manifestándome el señor BONILLA que un paisano de allá de Las Tablas lo había traído, el carro yo no lo vi porque en ese momento yo me estaba bañando. El señor BONILLA y yo habíamos conversado como a las once de la mañana de vernos en el Barrero de Pesé en la noche y desde la mañana yo no lo había vuelto a ver hasta cuando llegó a esa hora ...".

Al igual que el otro imputado, **JAIME RAÚL GONZÁLEZ** intentó introducir una coartada relacionada con sus actividades del día del ilícito; por ello le pidió a **ILDAURA CALDERÓN** que declarara que él había estado en su casa de siete a diez y media de la noche, horas en que ocurrió el asalto en Corotú. Sin embargo, **ILDAURA CALDERÓN** reveló dicha solicitud que le hiciera **JAIME RAÚL GONZÁLEZ** estando en la cárcel, en su declaración visible a fojas 213-215 del sumario, y además niega que JAIME RAÚL GONZÁLEZ estuviera en su casa en las horas por él señaladas, por el contrario, indica que él pasó por ahí a eso de las cinco o seis de la tarde y que se quedó con ella como media hora y se fue; que luego volvió como a las doce y cincuenta y seis de la madrugada diciéndole que la iba a llevar a un baile pero que se retiró para poner gasolina al auto y no volvió más. En el mismo sentido declaran los hermanos de ILDAURA, **MANUEL CALDERÓN ANTÚNEZ (a) CHANO** (fs. 413-415) y **ADRIÁN CALDERÓN ANTÚNEZ (a) PIPO** (fs. 433-434).

La imputabilidad de los sindicados comprobada mediante los exámenes psiquiátricos (fs. 292 y 293); los antecedentes penales que presentan en sus respectivos historiales policivos (fs. 527 y 529); las declaraciones y el reconocimiento que de uno de los sindicados hiciera **BOLÍVAR DÍAZ**, testigo ocular de los hechos; los testimonios de residentes en Chepo que vieron pasar a gran velocidad al automóvil LADA-NIVA, color rojo vino con franjas blanca y con matrícula N° 8-18053 en el día y a la hora del asalto a la casa de JOSÉ DE LA CRUZ OJO; el contrato de arrendamiento de dicho vehículo a nombre de **JAIME RAÚL GONZÁLEZ**; el kilometraje que presentaba el vehículo al momento de su detención, no coincide con el supuesto recorrido hecho por GONZÁLEZ DELGADO únicamente hasta el Barrero de Pesé; la diligencia de registro del vehículo en la que se encontró el foco de mano reportado por la víctima JOSÉ DE LA CRUZ OJO como robado en el asalto a su casa; la comprobación de la propiedad y preexistencia de los bienes objeto del robo; la certificación sobre la destrucción del teléfono público; el protocolo de necropsia (hoz. 169-180) y el certificado de defunción (f. 586) de **ROZARÉ CAMPOS**; y la mala justificación por parte de los imputados sobre sus actividades del día del ilícito, son motivos suficientes para justificar el llamamiento a juicio por los delitos genéricos de robo y homicidio y contra la seguridad colectiva.

Siendo esta la realidad procesal, la Sala advierte que se encuentran ampliamente cumplidos los presupuestos del artículo 2222 del Código Judicial para que los sindicados por un delito puedan ser llamados a responder en juicio, por lo tanto, lo que procede es confirmar el auto recurrido en lo concerniente a la apertura de causa contra **RODOLFO BONILLA SÁNCHEZ** y **JAIME RAÚL GONZÁLEZ DELGADO**, y a la vez revocar la orden de compulsa de copias para la esfera de circuito a fin de que se investigara el falso testimonio rendido por JOSÉ ROBERTO MORÁN MARTÍNEZ, ARCADIO JOSÉ ESPINO ESPINO y SILVIA MARÍN DE HASSÁN.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, SALA PENAL administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, RESUELVE:

PRIMERO: REVOCA la orden de compulsa de copias contenida dentro del auto de 5 de octubre de 1994 emitido por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial a fin de que se procesara a JOSÉ ROBERTO MORÁN MARTÍNEZ, ARCADIO JOSÉ ESPINO ESPINO y SILVIA MARÍN DE HASSÁN (A) DAYSI MARÍN por falso testimonio.

SEGUNDO: CONFIRMA dicho auto en todo lo demás.

Notifíquese, Cúmplase y Devuélvase.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

APELACIÓN DEL AUTO DE LLAMAMIENTO A JUICIO, DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A DOMINGO LUIS CHÁVEZ MELÉNDEZ, POR DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE VÍCTOR CHÁVEZ. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS E. MUÑOZ POPE. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Mediante resolución del 6 de marzo de 1996, el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, declaró apertura de causa penal por la vía que interviene el Jurado de Conciencia, contra **DOMINGO LUIS CHÁVEZ MELÉNDEZ** (a) **"MINGO"**, como presunto infractor de las disposiciones contenidas en el Título I, Capítulo I, del Libro II del Código Penal, es decir, por el delito genérico de homicidio en perjuicio de Víctor José Chávez (a) "Chavito" (389-399).

Al momento de notificarse de esa decisión jurisdiccional, el imputado Chávez Meléndez apeló de la misma (f. 399 vt.); siendo sustentado el recurso dentro del término de ley por el licenciado Moisés Espino Bravo, Defensor de Oficio.

DISCONFORMIDAD DEL APELANTE

El licenciado Espino Bravo solicita se emita un auto de sobreseimiento a favor de Chávez Meléndez, al estimar que a éste no le quedó otra alternativa que defenderse dada la discusión que se había dado entre ambos y porque el difunto, quien era una persona de mayor peso y tamaño, tomó una silla para agredirlo, por lo que su defendido tuvo que recurrir a la utilización de un cuchillo.

Además, que no debe obviarse el hecho que ambos fueron compañeros en la prisión y en ella se habían dado altercados entre ambos, creando en su defendido un miedo invencible que lo llevó a tomar la decisión de defenderse (fs. 403-404).

OPINIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

La licenciada Nedelka Díaz de Castillo, Fiscal Primera Superior del Cuarto Distrito Judicial, al dar respuesta al traslado, manifiesta que no ve la ventaja y el miedo aterrador que pudiera tener Domingo Luis Chávez Meléndez a Víctor José Chávez, toda vez que el primero al momento de los hechos era de mayor peso y que en cuanto a la estatura sólo había una diferencia de cuatro centímetros. Señala que las pruebas testimoniales dan fe que hubo una discusión entre los protagonistas del hecho de sangre; que Domingo Luis Chávez Meléndez abandonó el local y regresó a los cinco minutos armado con un cuchillo; lo que es demostrativo que tuvo tiempo de reflexionar. Ello sin pasar por alto que Chávez Meléndez fue sentenciado por delito de Lesiones Personales. Concluye así, que la apertura de causa criminal contra de Chávez Meléndez merece la aprobación de la Corte Suprema de Justicia.

HECHOS

En horas de la noche del 20 de mayo de 1995 se produjo la muerte violenta de Víctor José Chávez (a) Chavito a consecuencias de herida sufrida con arma blanca, hecho ocurrido en el bar Monte C en Las Tablas, provincia de Los Santos. Vinculado a ese ilícito fue indagado Domingo Luis Chávez Meléndez (a) Mingo, contra quien se abrió causa criminal, situación que se procede a examinar en esta segunda instancia.

ANÁLISIS DE LA SALA

Observa la Sala que los testimonios allegados al expediente judicial, desvirtúan la excepción alegada por el apelante en el sentido que el imputado actuó en defensa y por un miedo invencible al hoy occiso. Veamos.

Teobaldo Higinio Batista Alemán señala que cuando Domingo Luis Chávez Meléndez llegó al bar a saludarlo, Víctor José Chávez se levantó de la mesa donde se encontraba y empezó a discutir con Domingo Luis Chávez Meléndez, que al preguntarles que pasaba, el imputado abrazó al hoy occiso, diciendo que eran amigos.

Luego Domingo Luis Chávez Meléndez se retiró del lugar y como a los cinco minutos apareció, su gesto indicaba que llevaba algo debajo del suéter y se dirigió hacia Víctor José Chávez quien se levantó y trató de defenderse con un taburete, pero el imputado le tiraba con algo que llevaba en la mano, que Víctor José Chávez corrió fuera del local y su agresor lo persiguió (fs. 25-35).

En el mismo sentido declaran **David Antonio Naranjo Pérez** (fs. 36-43), **Lourdes Herminia Sánchez de Barrios** (fs. 51-56), **Domiciano Arnulfo Quintero Cedeño** (fs. 44-50, 288-291, 347-348).

Interesante resulta lo declarado por **Jaime Rául Hernández**, compañero del imputado la noche de los hechos. Afirma que luego de la discusión, escuchó que su amigo Domingo Luis Chávez Meléndez le dijo a Víctor José Chávez que lo esperara que iba a la casa, que Víctor José manifestó que Mingo fue en busca de un cuchillo y como él (declarante) sabe que su amigo **"se atreve a cortar a cualquiera"**, le aconsejó que se fuera (fs. 171-179).

Por su parte **Aurelio A. Peralta Rodríguez** y **Roger A. Santamaría Beitía**, miembros de la Policía Nacional, afirman que vieron al occiso en el suelo y al imputado con el cuchillo en la mano, que éste corrió del lugar pero fue capturado (fs. 158-165 y 166-170).

Aunado a lo expuesto, si bien en su declaración indagatoria Chávez Meléndez afirma que no recuerda lo acontecido porque estaba embriagado (fs. 71-77 y 314-315), el **Informe de Evaluación Psicológica** rendido por el Dr. Luis E. Rodríguez, es demostrativo que el imputado le narró lo ocurrido aquella noche, admitiendo que salió de la cantina en busca de un cuchillo y al regresar lo utilizó para agredir al hoy occiso (fs. 309- 310).

En cuanto al planteamiento alegado por el apelante, en el cual hace mención de una resolución dictada en un país vecino, es un hecho completamente diferente a la situación examinada, toda vez que trata de implantar un temor que nunca tuvo su representado. Recordemos la actuación que tuvo Chávez Meléndez al abandonar el lugar y regresar con un cuchillo para agredir al hoy occiso y la opinión de su amigo Hernández, lo que más bien denota su personalidad agresiva.

Luego entonces, esta Sala avala la decisión del tribunal de primera instancia, toda vez que las pruebas se traducen en graves indicios contra Domingo Luis Chávez Meléndez (a) Mingo, quien de conformidad con el artículo 2222 del Código Judicial debe ser sometido a los rigores de un enjuiciamiento penal.

PARTE RESOLUTIVA

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA el auto de proceder apelado.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) CARLOS ENRIQUE MUÑOZ POPE
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AUTO CONSULTADO

JUICIO SEGUIDO A CLAUDINO MORALES VILLARREAL, POR DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE MANUEL ASPEDILLA MURILLO, Y DE LESIONES PERSONALES EN PERJUICIO DE LUIS DÍAZ SIERRA. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Procedente del Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, ha ingresado a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, en grado de consulta, el proceso en el que un jurado de conciencia encontró culpable a **CLAUDINO MORALES VILLARREAL** -miembro de la Fuerza Pública- por el delito de homicidio en perjuicio de **MANUEL ASPEDILLA MURILLO**, hecho ocurrido el 15 de abril de 1990 aproximadamente a las 10:00 a. m. en la carretera Panamericana, por los alrededores de Santa Fe, en la provincia de Darién.

Revelan los antecedentes del caso, que en la citada fecha se encontraron en la vía Panamericana, dos vehículos; uno, conducido por el Sr. **LUIS ANTONIO GONZÁLEZ**, quien era acompañado por el sindicado, **CLAUDINO MURILLO VILLARREAL**; el otro auto era un pick up amarillo, conducido por **LUIS DÍAZ SIERRA**, quien estaba acompañado por su hermana **BRUNILDA DÍAZ DE GUTIÉRREZ**, **SANDRA BERNAL**, su hijo **BOLÍVAR GUTIÉRREZ**, **JOSÉ DE LA CRUZ CONCEPCIÓN**, y el hoy occiso **MANUEL CLEMENTE ASPEDILLA**.

Las declaraciones incorporadas al expediente, se caracterizan por el hecho de que los ocupantes de ambos vehículos señalan el manejo irresponsable del otro, y le atribuyen provocaciones que fomentaron el hecho de sangre.

También se observa que el justiciado, **CLAUDINO MURILLO VILLARREAL**, admitió haber herido a **LUIS DÍAZ SIERRA** y al occiso, **MANUEL CLEMENTE ASPEDILLA**.

En ese sentido, sus acompañantes manifestaron que éste actuó en defensa propia, mientras que los ocupantes del pick up amarillo dijeron que el procesado actuó agresivamente.

Se recabaron en el proceso varias declaraciones, de los involucrados y los testigos, como la jurada de **LUIS ANTONIO GONZÁLEZ** (fojas 10-13) y la indagatoria del justiciado **CLAUDINO MURILLO VILLARREAL** (fs. 93-97), que coinciden en que lo que originó el hecho de sangre fue el manejo irresponsable de **LUIS DÍAZ** de quien dijo que "venía a una velocidad exagerada", dispuesto a pasarlos, pero que al parecer no conocía la condición del camino, y que luego de sufrir un percance, los buscaron para insultarlos y agredirlos. También señaló que dicho conductor lo insultó dos veces, y que en las inmediaciones del Kilómetro 61 en La Moneda, el mismo lo provocó para que se bajara del carro, y apedrearlo.

LUIS GONZÁLEZ dijo también que entonces el procesado intervino, y luego recibió pedradas por parte del mismo conductor -**LUIS DÍAZ**- y una joven que venía con él, lo que lo obligó -según él en defensa propia- a herir con su cuchillo a **DÍAZ**.

Mientras ambos peleaban, se acercó el hoy occiso **MANUEL CLEMENTE ASPEDILLA**, quien de buenas maneras le dio la mano y fue a ver qué pasaba con su amigo **LUIS DÍAZ**, quien pedía un revólver que estaba en el pick up para matar al sentenciado **CLAUDINO MURILLO** y resultó cortado inmediatamente, pues éste lo había cortado.

Finalmente, dijo que no pudo ver cómo salieron lesionados **DÍAZ** ni **CLEMENTE ASPEDILLA**.

Señaló **MURILLO VILLARREAL** que luego de encontrar en la carretera al vehículo manejado por **DÍAZ**, aquellos los esperaron en un puente, pensando que ellos -**GONZÁLEZ** y **MURILLO**- iban a pasar por allí; pero como su casa -de **GONZÁLEZ**-

está ubicada antes del puente, se detuvo allí.

Como los ocupantes del auto de **DÍAZ** se habían bajado del pick up, vieron donde se detuvieron, y dos de ellos -**DÍAZ** y **ASPEDILLA**- los fueron a buscar para provocarlos; **GONZÁLEZ** se bajó del auto, y recibió piedras de estos sujetos, siendo lesionado en el hombro derecho y el dedo meñique de la mano izquierda; ello obligó a **MURILLO** a sacar un cuchillito que tenía con la intención de que se fueran, pero eso los enojó más, y uno de ellos -**DÍAZ**- se le lanzó encima, cortándolo arriba de su muslo, y al otro -**ASPEDILLA**- lo lesionó abajo de la tetilla izquierda.

Por su parte, la Sra. **BRUNILDA DÍAZ de GUTIÉRREZ** (fs. 51-52) -hermana de **LUIS DÍAZ SIERRA**- dijo que antes de llegar a Santa Fe, fueron rebasados por un vehículo que les cerró el paso y los obligó a salirse a la cuneta de la carretera; dijo que cuando su esposo se dio cuenta de que uno de los ocupantes del otro auto cortó su hermano, se dirigió donde estaba ese individuo -el justiciado- y le cuestionó su acción; fue allí cuando éste lesionó al hoy occiso en el costado izquierdo, herida ésta que le produjo la muerte.

Señala también que su hermano -**LUIS DÍAZ**- se aproximó dos veces al otro vehículo para reclamarles su maniobra, lo que motivó que otro de los ocupantes -**MURILLO**- lo cortara y cayera éste al suelo; allí llegó **ASPEDILLA** y le preguntó al agresor por qué había cortado a su cuñado, quien lo cortó en el hombro izquierdo.

JOSÉ DE LA CRUZ CONCEPCIÓN manifestó que, luego de que el automóvil los hiciera salir de la carretera, ellos lo alcanzaron dos veces y los detuvieron cerca del puente que está antes de Santa Fe, para reclamarles su manejo desordenado. Cuando **DÍAZ** se bajó del camión para hablar, uno de los pasajeros del auto sacó un cuchillo, lesionándolo y derribándolo; el agresor también trató de agredirlo a él -**DE LA CRUZ**- pero salió corriendo; el finado fue a hablar con **MURILLO** de buenas maneras, pero éste se le abalanzó apuñaleándolo, y luego huyó al monte para fugarse.

Por su parte, **LUIS DÍAZ SIERRA** dijo que persiguió y alcanzó al vehículo que lo sacó a la cuneta, porque él es agente de tránsito y quería que el conductor le arreglara el problema de la llanta que se le había ponchado.

Como el individuo se fue, él lo persiguió y alcanzó; se bajo de su vehículo, se identificó como agente de tránsito de la Fuerza Pública, y le pidió al conductor que fuera a Santa Fe a arreglar el asunto. Se bajaron tres sujetos que iban con ese conductor, y entraron a un jardín.

Entonces salió **CLAUDINO MORALES** con un arma blanca y lo agredió en el brazo izquierdo, y estando él en el piso, también lo hirió en la pierna izquierda, luego fue y lesionó a **MANUEL ASPEDILLA** en el costado izquierdo.

El informe psiquiátrico del procesado revela que el mismo es imputable por la acción cometida.

La sentencia consultada señaló que la conducta de **MORALES** tipifica el artículo 131 del Código Penal, que establece el homicidio simple.

Ello es así, toda vez que las pruebas permiten deducir que el procesado "actuó con una previsión fugaz, intención o voluntad y desarrollo de los actos idóneos necesarios para ocasionarle la muerte al sujeto pasivo, es decir, su conducta es contentiva de un dolo de ímpetu, o sea, ocasionado por ira o temor, lo cual representa un estado de ánimo que no vicia el discernimiento; produce más bien una actuación impulsiva.

En el hecho que nos ocupa, MORALES se sintió insultado, agredido y posteriormente amenazado; es lo que ha alegado el procesado a lo largo del expediente."

Consideró también el a-quo, que no existen circunstancias atenuantes ni

agravantes.

Finalmente, se fijó la pena aplicable en ocho (8) años de prisión, y la pena accesoria de cinco (5) años de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas después del cumplimiento de la pena principal.

Vertidos los elementos más importantes del presente caso, se dispone la Sala a emitir su decisión, previa las siguientes consideraciones.

En el aspecto objetivo del ilícito, se comprobó la muerte de **MANUEL ASPEDILLA MURILLO** con el certificado de defunción ordenado por el Segundo Tribunal Superior de Justicia en ampliación.

En el aspecto subjetivo, se observa que los ocupantes de cada auto coinciden en que el otro vehículo provocó el incidente, así como que el deceso del supracitado fue incitado por los otros; ambos bandos coinciden en que **MORALES** ultimó a **ASPEDILLA**, siendo que el acompañante de **MORALES** sostuvo que fue en defensa propia, mientras los ocupantes del otro vehículo dijeron que lo mató sin que mediara esta situación.

Además, el propio **CLAUDINO MORALES** reconoció haber herido, tanto a **LUIS DÍAZ SIERRA** como al desaparecido **MANUEL ASPEDILLA MURILLO**, aduciendo que su acción fue en "defensa propia", porque se le arrojaron encima.

De lo anterior se deduce que la parte sensible en la decisión a tomar, se fundamenta en si en realidad se verificó la defensa propia, o justificación para la comisión del ilícito.

Es interesante observar la declaración jurada de **LUIS ANTONIO GONZÁLEZ ESCALA** -fs. 10 a 13- en la que señala que, al llegar ellos dos al rancho, **CLAUDINO** se bajó del carro, entró al rancho y se recostó en la mesa de billar; luego llegó **LUIS DÍAZ** insultando y con piedras en las manos, dirigiéndose a él **-GONZÁLEZ-** para insultarlo y desafiarlo a bajarse del carro. Entonces intervino el sentenciado y fue agredido inmediatamente por **DÍAZ** y una joven que estaba con él y también le tiró piedras; **MORALES** pudo esquivar algunas pedradas -señala el declarante- y allí fue donde en defensa propia sacó un puñalito que tenía.

Mientras peleaban **MORALES** y **DÍAZ**, se acercó el hoy occiso a la puerta del carro donde él **-GONZÁLEZ ESCALA-** se encontraba para pedirle de buenas maneras que bajara para arreglar las cosas; en eso, cayó al suelo, cortado, su compañero **LUIS DÍAZ**, y le dijo a **ASPEDILLA** que fuera al pick up a buscar el revólver porque lo habían cortado, lo que motivó que éste fuera a ver qué le había ocurrido, siendo cortado de inmediato por **MORALES**; cuando él **GONZÁLEZ** se bajó del carro, ya **ASPEDILLA** estaba cortado, pero él no pudo ver la acción en que fue herido el finado, afirmando que **MORALES** los cortó para defenderse. Luego éste, huyó al monte, tras la amenaza de arma de fuego por parte de otro de los acompañantes de **DÍAZ**.

Considera esta Corporación de Justicia que la declaración emitida por el declarante es contradictoria, toda vez que al ir el hoy occiso a ver a su compañero luego de hablar con él de buenas maneras y tratar de arreglar las cosas, es difícil justificar la necesidad del procesado de apuñalearlo inmediatamente que aquel se le acercó, ya que no tenía ninguna arma en la mano -ninguna declaración lo ha revelado- e iba con una buena actitud; además, **LUIS DÍAZ** ya estaba en el suelo, por lo que no representaba una amenaza para él.

Por su parte, **SANDRA BERNAL HARRISON**, cuñada del occiso y ocupante del mismo vehículo en que se transportaban manifestó en declaración jurada (fs. 52 a 54) que el hoy desaparecido se encontraba dormido durante el viaje, porque venían amanecidos de un baile, y no provocó al sentenciado.

JOSÉ DE LA CRUZ CONCEPCIÓN (fs. 55 a 57) declaró bajo juramento que **ASPEDILLA** fue a hablar con **MURILLO** de buenas maneras, luego de que hiriera a **DÍAZ**, y éste se le abalanzó encima, "apuñalándolo" y luego huyó al monte.

Esa declaración fue corroborada por **LUIS DÍAZ SIERRA** (fojas 58-61), quien dijo que en ningún momento hubo cruce de palabras de él o del hoy occiso, con **MURILLO**, solo vio cuando este se le abalanzó con un cuchillo, siendo cortado en el brazo izquierdo y cayendo al suelo; entonces, agredió a su cuñado, quien le preguntó por qué lo había cortado, siendo herido en el pecho por el supracitado.

CLAUDINO MORALES debidamente juramentado declaró (fs. 92-96) que todo pasó tan rápido que fue después del pleito que se dio cuenta de que había herido a ambas personas, a quien no conocía. También recalcó que actuó en defensa propia.

En otro sentido, la Sala advierte un detalle casi imperceptible en el expediente, pero que es un indicio que juega un papel importante para la decisión a tomar, y es el hecho de que luego de ser notificado de la sentencia de ocho (8) años de prisión, el sentenciado envía una pequeña nota al Magistrado Joaquín Ortega (f. 474 del infolio) en la que pregunta que si después de cumplida la sentencia, será rehabilitado como miembro de la Policía; esa nota revela que **CLAUDINO MORALES** se resignó a cumplir su sentencia, por lo que no apeló; para ello debió reconocer su culpabilidad implícitamente. Su defensor particular tampoco apeló la sentencia, ni interpuso ulterior recurso.

Además, todo parece indicar que hecho punible fue realizado sin que mediara un proceso de preparación del mismo, es decir, que fue realizado de manera súbita, repentina, y por ello no caben circunstancias agravantes, tal como lo señala el a-quo en su sentencia.

Por ello, todos los elementos expuestos inducen a esta Colegiatura a confirmar la sentencia consultada.

En mérito de lo anterior, la Corte Suprema, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA en todas sus partes la sentencia del 24 de septiembre de 1993, emitida por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) CARLOS E. MUÑOZ POPE (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN PENAL

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A JUAN ANTONIO ESKILDSEN, SINDICADO POR EL DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

El licenciado Álvaro Cedeño Barahona, defensor técnico de Juan Antonio Arias Eskildsen, interpuso recurso de casación en la **forma** y en el **fondo** contra sentencia calendada 19 de octubre de 1995 dictada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia. La meritada decisión jurisdiccional reforma la sentencia de primera instancia, en el sentido de condenar a Arias Eskildsen a la pena de 8 años de prisión e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por igual período, como responsable del delito de tráfico internacional de drogas.

En este momento procesal, corresponde a la Sala pronunciarse sobre la admisibilidad de este medio de impugnación extraordinario, a lo que procede.

El defensor técnico recurre en casación en la forma, con apoyo en la causal

prevista por el numeral 1 del artículo 2437 del Código Judicial, que se refiere a "La falta de competencia del Tribunal". Para sustentar esta causal, el casacionista argumenta básicamente que "El representante del Ministerio Público al notificarse de la sentencia absolutoria, apeló la misma ... El término para sustentar dicha apelación comenzaba a correr el día 8 de agosto de 1995, sin embargo ... presentó su sustentación el mismo 7 de agosto de 1995, cuando aún no se había iniciado el término" (fs. 426-427). Como se aprecia, esta argumentación no es atinente a la causal invocada (falta de competencia del tribunal), toda vez que con ella no se explica de qué manera Arias Eskildsen pudo ser procesado por un tribunal de justicia que no era competente para conocer del hecho punible por el que fue juzgado, más concretamente, a qué tribunal correspondía el conocimiento de la causa.

En lo que respecta a las disposiciones legales infringidas, el recurrente alega la vulneración de los artículos 240 y 498 del Código Judicial, en los conceptos de violación directa por comisión y omisión, respectivamente (fs. 427-428). Sobre este particular nuestra jurisprudencia ha señalado que el concepto de violación directa "sólo procede cuando se trata de normas sustantivas que tutelan derechos subjetivos, como es el caso de las contenidas en el Código Penal" (Registro Judicial, Marzo de 1995, pág. 195). Por consiguiente, resulta incongruente que se aduzca la infracción de un precepto legal del Código Judicial, en el concepto de violación directa.

En cuanto al recurso de casación en el fondo, el recurrente invoca la causal de "Error de derecho en la apreciación de la prueba" (f. 429), fundamentándola en tres motivos. En el primero se sostiene que la sentencia "ha dado todo el valor probatorio a un dictamen pericial" (f. 429); en el segundo se alega que el tribunal ad-quem no apreció el dictamen pericial de conformidad con las reglas de la sana crítica; y el tercero se refiere a que los peritos no fueron examinados conjuntamente. La Sala advierte que de la escueta redacción del primer y tercer motivos no surgen cargos claros y concretos de infracción, que pongan de relieve los errores in iudicando en que pudiera haber incurrido el tribunal de segunda instancia al proferir su decisión. En cuanto al segundo motivo, se advierte que consiste en apreciaciones subjetivas que contienen cargos, no explicados, por lo que se concluye que el vicio de injuridicidad se encuentra inadecuadamente formulado.

Finalmente, en lo concerniente a las disposiciones legales infringidas, el recurrente afirma que se ha violado el artículo 255 del Código Penal, de manera directa por comisión (f. 430). No obstante, para la Sala tal afirmación no resulta congruente con el argumento que se utiliza para sustentar la infracción alegada, pues si se dice que Arias Eskildsen fue condenado "sin que existiera plena prueba" de su culpabilidad, la causal que debió invocarse era la de indebida aplicación, que ocurre cuando "el Tribunal al seleccionar la norma aplicable al caso, comete el error de escoger la que no encaja o engloba la situación del hecho que se ventila" (Sentencia, Sala Segunda, 13 de noviembre de 1995).

En vista de que el libelo de casación adolece de defectos insubsanables, por carecer de las formalidades previstas en el numeral 3 del artículo 2443 del Código Judicial, resulta inevitable la consecuencia de la no admisión de este recurso extraordinario.

Por lo antes expuesto, LA CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE el recurso de casación en la forma y en el fondo interpuesto por el licenciado Alvaro Cedeño Barahona, defensor técnico de Juan Antonio Arias Eskildsen, contra la sentencia de 19 de octubre de 1995 dictada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, mediante la cual se condenó a Juan Antonio Arias Eskildsen a la pena de ocho años de prisión.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS

(fdo.) JOSÉ M. FAÚNDES

(fdo.) CARLOS E. MUÑOZ POPE
(CON SALVAMENTO DE VOTO)

(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO CARLOS E. MUÑOZ POPE.

Lamento, con todo respeto, no estar de acuerdo con la decisión que se adopta por la Sala en esta ocasión.

Si bien es cierto que el recurso de casación objeto de consideración en este momento adolece de los defectos enunciados, ello no significa que deba no admitirse el mismo, ya que se está afectando gravemente el derecho de defensa del sentenciado Antonio Arias E.

Al no admitir el recurso de casación por razón de la deficiente elaboración del mismo por el defensor técnico del señor Arias, se evita que el sentenciado pueda plantear su caso ante la Sala y ello equivale a una forma de indefensión, ya que aunque tiene un defensor formal, la actuación de este no ha sido idónea para que se escuche a su representado en esta esfera jurisdiccional.

No estoy planteando que hay indefensión porque se niegue el recurso del defensor, pues no siempre el defensor tiene razón cuando plantea una pretensión, recurso o acción, pero al menos debe permitirse a la defensa corregir los defectos del recurso de casación para que se examinen los argumentos que plantea en beneficio de los interesados de su representado.

Cada vez que no se admite un recurso de casación, como en el caso que nos ocupa, se coarta, limita y enerva el sagrado derecho de defensa que no puede ni debe ser afectado por argumentos formales, fácilmente subsanables por la vía de la corrección del recurso (artículo 2444 del Código Judicial).

Por todo lo expuesto, al no estar de acuerdo con la decisión de la mayoría, SALVO MI VOTO.

Fecha ut supra.

(fdo.) CARLOS E. MUÑOZ POPE
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A FELIPE HENRÍQUEZ REVILLA, POR DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

El licenciado Carlos Ameglio Moncada, en representación de **FELIPE HENRÍQUEZ REVILLA**, sentenciado por delito contra la salud pública, presentó recurso de casación contra la sentencia calendada el 27 de diciembre de 1995, emitida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, mediante la cual se confirma la de primera instancia que condena a su defendido a seis (6) años de prisión.

Surtidas las reglas de reparto y fijado en lista el negocio por el término de ocho días, al tenor de lo que dispone el artículo 2443 del Código Judicial, por Secretaría se informa al despacho que corresponde el momento procesal de resolver la admisibilidad del recurso presentado.

De acuerdo con las pautas formales establecidas en esta materia, se pasa a corroborar si lo afirmado en el auto de 27 de marzo (fs. 227-228) se compagina con la realidad procesal.

A fojas 210 consta que el licenciado Ameglio Moncada al notificarse del reingreso del expediente al Juzgado Undécimo de Circuito de lo Penal, anunció casación, tanto en el sello de notificación como en escrito recibido el 25 de enero de 1996. El Tribunal Superior al recibir el expediente, emitió la providencia de 22 de febrero, concediendo el término de quince días para que el recurrente llevara a cabo la formalización del recurso, lo que se cumplió el 11 de marzo con renuncia del término.

Esto demuestra que tanto el anuncio como la formalización del recurso se hicieron en tiempo oportuno.

Con relación a la persona que promovió el recurso y la penalidad señalada al delito al que se refiere este expediente, consta en autos que el recurrente es persona hábil y el delito contra la salud pública por el que fue sentenciado, tiene pena de prisión que excede de dos años.

Respecto a la formalización del recurso de casación en el fondo, se puede constatar que la historia concisa del caso, refleja los vicios de injuridicidad que se le imputan al fallo de segunda instancia, la única causal alegada es de tipo probatorio y se enuncia conforme a la denominación que le asigna el artículo 2434, numeral 1° del Código Judicial; los motivos guardan relación con la causal alegada y las disposiciones legales que se indican como violadas, al igual que el concepto de la infracción, se han presentado siguiendo las pautas establecidas por la legislación y la jurisprudencia nacional.

En virtud de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, representada por la suscrita Magistrada Sustanciadora en Sala Unitaria, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE el recurso de casación presentado en este caso y al tenor de lo dispuesto por el artículo 2445 del Código Judicial, corre traslado del negocio al Procurador General de la nación por el término de cinco días para que emita concepto.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A ENRIQUE MATA ZÚÑIGA Y OTROS, SINDICADOS POR EL DELITO DE SECUESTRO EN PERJUICIO DE JULY DE WATSON Y JOSÉ AGUILAR. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

La firma forense Arrocha, Blandón, Castro y Young propuso recurso extraordinario de casación en el fondo contra la sentencia de 2 de noviembre de 1995, proferida por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, confirmatoria de la sentencia dictada por el Juzgado Noveno del Primer Circuito Judicial que condena a Raúl Enrique Mata Zúñiga, a la pena de 6 años de prisión, como responsable del delito de secuestro cometido en perjuicio de José Aguilar.

HISTORIA CONCISA DEL CASO

El 23 de julio de 1985, José Aguilar acudió a la Fiscalía Auxiliar de la República para denunciar que había sido víctima de secuestro. Durante las investigaciones de rigor, el funcionario de instrucción hizo comparecer a Raúl Mata Zúñiga, Agustín Bedoya García, Abelardo Camelo Cárdenas, Darío Augusto Rua Álvarez, Diego León Berrío Castaño y Mario de Jesús Castro Berrío, para que rindieran declaración indagatoria en relación con el delito denunciado. La mayoría de los indagados admitieron que José Aguilar fue conducido a un

apartamiento con la finalidad de que informase sobre la localización de algunas personas, pero ninguno afirma que a la víctima se le haya exigido el pago de una recompensa a cambio de su libertad corporal.

Durante la etapa plenaria el Juzgado Noveno del Primer Circuito Judicial de Panamá abrió causa criminal contra Mata Zúñiga y otros, por infracción de las normas del Código Penal que sancionan el secuestro extorsivo. La decisión meritada fue apelada y confirmada por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá. Posteriormente, el tribunal a-quo ordenó que se acumulara a esta causa el proceso iniciado en virtud de denuncia presentada por Yuly Maglene Hidalgo de Watson, también por secuestro.

Mediante sentencia de 26 de enero de 1995, el a-quo condenó a Mata Zúñiga a la pena de 8 años y 9 meses de prisión, como responsable del delito de secuestro cometido en perjuicio de José Aguilar y July de Watson. Esta sentencia condenatoria fue recurrida en apelación ante el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, entidad colegiada que declaró la nulidad absoluta del proceso seguido a Raúl Mata Zúñiga y otros por la comisión del delito de secuestro cometido en perjuicio de July de Watson, y fijó en 6 años de prisión la condena decretada contra Mata por la comisión del delito de secuestro en perjuicio de José Aguilar.

CAUSAL QUE SE INVOCA

A juicio del recurrente, la sentencia atacada incurre en interpretación errada de la ley sustancial penal, causal prevista en el numeral 1 del artículo 2434 del Código Judicial. Esta causal procede cuando el juzgador le otorga a la norma sustantiva un alcance o sentido jurídico que no le corresponde.

MOTIVOS DE LA CAUSAL

La causal invocada por el recurrente se apoya en cuatro motivos. En el primero de ellos el casacionista sostiene que José Aguilar "jamás declaró que se le hubiera exigido el pago de una recompensa a cambio de su libertad" (f. 1726).

En el segundo motivo se afirma que en las declaraciones indagatorias rendidas por Mata Zúñiga, Agustín Bedoya García, Abelardo Camelo Cárdenas, Darío Rua Alvarez, Diego Berrío Castaño y Mario Castro Berrío "no consta que ... le exigieron una recompensa a JOSÉ AGUILAR o a otra persona como condición para su liberación" (f. 1726).

Según el tercer motivo, Mata no incurrió en la comisión del delito de secuestro extorsivo, toda vez que "ni la información respecto al paradero de una persona que sabe el destino de una supuesta droga, ni la droga en su esencia y naturaleza, constituyen `dinero, cosa o documento con efecto jurídico " (f. 1726).

En el cuarto motivo se sostiene que se ha incurrido en interpretación errónea de la ley, porque la sentencia censurada le otorgó "a los términos `precio de liberación y `cosa un sentido y alcance que no se corresponde con el sentido literal y espíritu" de la figura del secuestro agravado.

DISPOSICIONES LEGALES INFRINGIDAS

A juicio del casacionista, la sentencia atacada infringe el artículo 188 del Código Penal, en concepto de interpretación errada, por considerar que la recompensa o precio de liberación de José Aguilar consistía en "averiguar el paradero de Floyd Carlton con segundas intenciones" (f. 1730). En el mismo sentido, señala que de las declaraciones de la víctima no se desprende que "se le exigió una recompensa a cambio de su libertad. ... Más bien lo que sucedió ... es que no dijo nada y sin embargo, se le dejó en libertad. ... Es cierto que ... se afirma que se le retuvo contra su voluntad por unos días, pero no a la espera de una recompensa, sino mientras supuestamente terminaban `el operativo que tenían planeado en David'" (f. 1729).

El recurrente considera además que el cargamento de droga no puede ser el

patrimonio afectado de la víctima, por cuanto que "no se ha acreditado" la existencia de un cargamento de drogas y porque una cosa que es ilegal, "no puede ser un bien jurídico tutelado por el Código Penal" (f. 1730).

Concluye el recurrente que la conducta de su mandante no se encuadra en delito contra el patrimonio, "puesto que del proceso no emerge constancia alguna que acredite el posible o real perjuicio ocasionado al patrimonio legítimo del denunciante o de una tercera persona" (f. 1731).

Se menciona también como infringido el artículo 9 del Código Civil, en concepto de violación directa, por omisión, toda vez que la sentencia atacada realiza una interpretación "extensiva de la norma, sobrepasando el sentido literal de la misma, quizá en vano intento de consultar su espíritu, aunque en forma abusiva y errada" (f. 1732).

Por otra parte, el letrado considera que el artículo 10 del Código Penal ha sido infringido en forma directa, por omisión, ya que la resolución judicial censurada "ha pretendido darle a las palabras `cosa , `precio de liberación , `patrimonio , un sentido diferente al natural y obvio de las mismas, en claro desconocimiento de lo que dispone la norma precitada" (f. 1732).

OPINIÓN DEL PROCURADOR

Al contestar el traslado que le fuera corrido del recurso interpuesto, el Procurador General de la Nación llama la atención sobre el hecho de que la sentencia objeto de censura no da pie para invocar la causal invocada, porque el artículo 188 del Código penal "es una disposición legal transparente, clara, cuya redacción no necesita de mayor esfuerzo de interpretación. ..." (f. 1755).

En cuanto a los motivos, el representante del Ministerio Público desestima el primero, por considerar que la declaración de José Aguilar evidencia que "se le exigió ... para que pudiera obtener su libertad, que manifestara donde se podía localizar al señor Floyd Carlton, en consecuencia se colige que los sujetos pasivos de la acción penal requirieron de JOSÉ AGUILAR una cosa (información) a cambio de su libertad" (f. 1756).

En cuanto al cargo de injuridicidad que se formula en el segundo motivo, sostiene que es "propio de otra causal a la aducida en el recurso" pues, a su juicio, cuestiona la valoración probatoria hecha por el Tribunal Superior (f. 1757).

De igual manera censura el cuarto motivo, por considerar que el recurrente no explica "porque ... el Tribunal ... incurrió en una interpretación errada de la ley" (f. 1759).

Con relación a las disposiciones legales infringidas, el Procurador considera que el artículo 188 del Código Penal no ha sido infringido, como tampoco sus artículos 9 y 1°, toda vez que las pruebas recabadas acreditan que el secuestro de que fue víctima José Aguilar "tenía como propósito averiguar el paradero de Floyd Carlton que ... se había apropiado de un cargamento de droga perteneciente a unos colombianos" (f. 1763).

La Vista concluye con la solicitud de que no se case la sentencia atacada (f. 1764).

CONSIDERACIONES DE LA SALA

A) En cuanto a los motivos:

Como quiera que el primero y segundo motivos se encuentran íntimamente relacionados, es del caso analizarlos conjuntamente.

A tales efectos se considera que, según José Aguilar, él fue capturado por "RAÚL MATA y unos colombianos ...", con el propósito de que "yo le dijera el paradero de una persona ... la persona que me preguntaban era el CAPITAL (sic) FLOYD CARLTON ..." (fs. 2-3). Este relato de la víctima coincide con la

declaración rendida por el imputado Donaldo Benaias Flores Cordero, quien admite que José Aguilar fue aprehendido con la finalidad de conocer "el paradero de Floyd" (f. 312). Junto con el imputado Darío Augusto Rua Alvarez (f. 37), en la identificación del móvil participa también Abelardo Camelo, quien agrega que la averiguación sobre Floyd Carlton obedecía a que se había apoderado de "trescientos a quinientos kilos" de cocaína (f. 23).

Resulta necesario tener presente la redacción de la norma que rige el tipo penal bajo consideración:

> "ARTÍCULO 188. El que secuestre a una persona para obtener de ella o de otra, como precio de liberación, dinero, cosas o documentos con efecto jurídico, cualquiera que sea en favor del culpable o de otras personas designadas por el artículo que precede, será sancionado con 20 a 50 días multa".

Por lo visto hasta ahora de esta causa, no hay duda que la libertad de José Aguilar tenía **un precio** -requisito de la esencia del secuestro extorsivo-, el cual consistía en el suministro de información concerniente al paradero de Floyd Carlton. Como otro elemento del tipo penal, y contrariamente a lo que sostiene el recurrente, tenemos que ese pago no tiene porqué representar una merma en el patrimonio de la víctima o de terceras personas, sino **un beneficio** "en favor del culpable o de otras personas designadas por él".

El secuestro extorsivo remeda entonces la relación sinalagmática que regula la legislación civil. La libertad del secuestrado y el valor implícito en el concepto de beneficio a que se refiere la norma, constituyen las contraprestaciones que deben ser satisfechas para el surgimiento de esta particular forma de ilicitud penal.

Los conceptos "dinero", "cosas" o "documentos con efecto jurídico", comprendidos en el tipo, representan apenas especies del concepto genérico conocido en derecho como "**bienes**". La cuestión radica entonces en saber si la información de cuyo conocimiento pendía o condicionaba la libertad del secuestrado puede ser considerada un bien jurídico, con el mismo rango de los "documentos con efecto jurídico" de que trata el precepto.

Para Couture, BIEN "es **todo aquello que tiene** una medida de valor y puede ser objeto de protección jurídica" (Vocabulario Jurídico. Depalma. Buenos Aires. 1991). Si la toma de conocimiento de la información requerida tenía por objeto conducir a los secuestradores, o a quienes ellos servían, a la localización de *varios centenares de kilos de cocaína*, o su millonario valor en dinero, salta a la vista que estamos en presencia de un bien jurídico con una medida de valor económico evidentemente **muy alta**, de donde resulta que alto era entonces el precio a pagar por la extorsión, al menos por lo que representaba para los partícipes en la comisión del delito.

La doctrina exige que lo que se pida como precio para la liberación de la víctima debe ser **apreciable pecuniariamente**, es decir, **que tenga un valor económico**, concepto sobre el cual insiste el recurrente (TOCORA, Luis Fernando. Derecho Penal Especial. Tercera edición, Bogotá. 1991, pág. 78). Por lo visto hasta ahora, todo indica que tanto la exigencia doctrinal como la que formula el recurrente se encuentran ampliamente satisfechas en esta causa.

B.) Disposiciones legales infringidas:

Con apoyo en los artículos 9 y 10 del Código Civil, sostiene el recurrente que la sentencia atacada ha infringido el artículo 188 del Código Penal en concepto de interpretación errada, al considerar que los conceptos "cosas" y "precio de liberación", a los que se refiere la norma sustantiva y utiliza el Segundo Tribunal Superior, abarca o comprende la información que exigían de José Aguilar, es decir, la de "averiguar el paradero de Floyd Carlton con segundas intenciones" (f. 1730).

Resulta evidente que la sentencia apelada utiliza el concepto "cosa" en

sentido lato, como equivalente de la noción "bien", examinados anteriormente, vía por la que llega al mismo resultado exegético alcanzado por este tribunal de apelaciones.

Por las razones anteriores, LA CORTE SUPREMA, SALA PENAL, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 2 de noviembre de 1995, proferida por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(CON SALVAMENTO DE VOTO)
MARIANO E. HERRERA
Secretario

SALVAMENTO DE VOTO DE LA MAGISTRADA AURA E. GUERRA DE VILLALAZ

En virtud de que no comparto los criterios expuestos en la sentencia que antecede, explico a continuación las razones jurídicas que me conducen a salvar el voto en la presente decisión.

La causal de fondo invocada que señala la interpretación errada de la ley sustancial en la que incurre la sentencia censurada, está plenamente acreditada no solo por los motivos en que la fundamenta el recurrente, sino también por la infracción del artículo 188 del Código Penal, cuyo texto tipifica el secuestro extorcivo como lesión a los bienes jurídicos del patrimoio en primer término y de la libertad individual en segundo lugar.

La conducta asumida por **RAÚL ENRIQUE MATA ZÚÑIGA** de conformidad al voluminoso expediente 1,833 folios se subsume en lo dispuesto por el artículo 151 en relación con el 155 del Código Penal que tipifica la figura del secuestro simple o plagio que lesiona principalmente la libertad individual y que por el uso de la violencia puede afectar también el bien jurídico de la integridad personal.

No cabe duda alguna de que los cargos imputados a Mata Zúñiga y al resto de los procesados ausentes, no alcanza la categoría de un secuestro extorsivo en virtud de que el denunciante José Aguilar salió de su domicilio por su propia voluntad y conocía con antelación que se le indagaría sobre el paradero del Capitán Floyd Carlton, a quien le prestaba servicio en su empresa como mecánico de aviación. En el acto de traslado del denunciante al apartamento de Alberto Oldemar, no participó Mata Zúñiga y su intervención se limitó a llevar a cabo el interrogatorio que generó un intercambio de golpes entre las partes.

Como es sabido, nuestro Código Penal recoge tres tipos diferentes de secuestros. El primero de ellos como privación ilegal de libertad llevada a cabo por un particular en perjuicio de otro y que se fundamenta en la tutela del bien jurídico de la libertad individual. La segunda modalidad de secuestro la ubica el legislador entre los delitos contra el patrimonio y tal figura utiliza la privación de libertad como el vehículo o medio para obtener un beneficio económico para si mismo o para la persona designada por él, siendo el tipo más importante el que describe el artículo 188 del Código Penal. El tercer hecho punible en la que el secuestro o privación de libertad de las personas es el medio para obtener otros fines, los contiene nuestra legislación en la figura del rapto y tal conducta afecta el bien jurídico de la libertad sexual, pues la retención de las personas mediante violencia, intimidación o engaño se lleva a cabo con propósitos deshonestos.

En el presente caso, la realidad procesal que refleja una inexplicable morosidad judicial de once años y en la que el sentenciado es el único de los ocho procesados que se ha apersonado a los Tribunales de Justicia en los diferentes estadios procesales, cabe interpretar la ley penal en su sentido restrictivo, subsumiendo la conducta de Raúl Enrique Mata Zúñiga en el tipo penal del secuestro simple que regula de manera expresa el artículo 1561 del Código

Penal.

Como quiera que la mayoría de los que integran la Sala Segunda de lo Penal arriban a una conclusión diferente, dejo constancia de las razones por las que me aparto de tal decisión.

Panamá, veintinueve (29) de mayo de mil novecientos noventa y seis (1996).

fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) MARIANO HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A CALAZANCIO GONZÁLEZ CHÁVEZ, POR DELITO CONTRA LA VIDA E INTEGRIDAD PERSONAL, EN PERJUICIO DE REYES GONZÁLEZ BENÍTEZ. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, TREINTA (30) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Mediante auto calendado el 30 de abril del año que decurre, se dispuso mantener este negocio en Secretaría por el término de cinco días, a fin de que la parte interesada, en su calidad de recurrente, enmendara los defectos que se habían advertido en el escrito contentivo del recurso de casación presentado en el negocio penal seguido a CALAZANCIO GONZÁLEZ CHÁVEZ por el delito de lesiones personales en perjuicio de REYES GONZÁLEZ BENÍTEZ.

Dentro del término otorgado, se recibió por Secretaría un nuevo escrito que transcribe la primera parte del anterior y en relación con la segunda causal invocada que es la que se ordenó corregir, se advierte que incluyó como disposiciones legales infringidas algunas que versan sobre valoración de la prueba y añadió otras normas sustantivas que considera violadas indirectamente como consecuencia del error de derecho en la apreciación de la prueba.

Procede entonces admitir el recurso con relación a la segunda causal de fondo alegada, no así la primera, que mantiene defectos insubsanables.

Por tanto, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, representada por la Magistrada Sustanciadora, en Sala Unitaria, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE el recurso de casación presentado en este caso, en cuanto a la segunda causal de fondo invocada y dispone correr traslado del negocio al Señor Procurador General de la Nación por el término de cinco días para que emita concepto.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL JUICIO SEGUIDO A NICOMEDES CHANIS ARCIA, SINDICADO POR EL DELITO DE VENTA ILÍCITA DE DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, TREINTA (30) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

El licenciado Alcides Gabriel Zambrano González, defensor de oficio de Nicomedes Chanis Arcia, ha interpuesto recurso extraordinario de casación contra

la sentencia de 21 de diciembre de 1995, proferida por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, que condena a Chanis Arcia a la pena de 7 años y 7 meses de prisión, como responsable del delito de venta ilícita de drogas.

Corresponde en este momento decidir sobre la admisibilidad de esta iniciativa procesal, a lo que se procede.

El recurso ha sido interpuesto contra resolución que le pone término al proceso, dictada por Tribunal Superior de Distrito Judicial en segunda instancia, dentro de un proceso por delito de relacionado con drogas previsto en el artículo 258 del Código Penal, cuya pena de prisión es superior a dos años. Estas comprobaciones permiten establecer que el recurso ha sido interpuesto de conformidad con lo que preceptúa el artículo 2434 del Código Judicial.

En cuanto al examen correspondiente a los requisitos que enumera el artículo 2443 del Código Judicial, se comprueba que la resolución es de las que permite el recurso y que fue interpuesto en tiempo oportuno. Igualmente, en el escrito de formalización se expone con claridad la historia concisa del caso, la causal, los motivos y las disposiciones legales infringidas. Como quiera que la causal consiste en "error de derecho al calificar el delito, si la calificación ha debido influir en el tipo o en la extensión de la pena aplicable", prevista en el numeral 3 del artículo 2434 del Código Judicial, resulta procedente la admisión del recurso.

En razón de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE el recurso de casación en el fondo presentado contra la sentencia de 21 de diciembre de 1995, proferida por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, que condena a Chanis Arcia, a la pena de 7 años y 7 meses de prisión, como responsable del delito de venta ilícita de drogas y, DISPONE correrle traslado al Procurador General de la Nación por el término de Ley.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

CONFLICTO DE COMPETENCIA

CONFLICTO DE COMPETENCIA DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A RODOLFO RAMIRO ZEPEDA JARQUÍN, NOEL ENRIQUE CORALES, ROLANDO VALENTÍN CARRANZA MEJÍA Y OTROS, POR LA SUPUESTA COMISIÓN DE DELITOS CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, SEIS (6) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

La Juez Décima Penal del Primer Circuito Judicial de la Provincia de Panamá solicita se dirima conflicto de competencia surgido con el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Judicial de Chiriquí, dentro del proceso penal seguido a Rodolfo Ramiro Zepeda Jarquín, Gustavo Zepeda Jarquín, Noel Enrique Corrales Rolando Valentín Carranza Mejía y Héctor Noel Munguía Silva, sindicados por la comisión del delito de tráfico internacional de drogas.

Los imputados fueron detenidos en Paso Canoas, localidad de la frontera con Costa Rica, cuando llegaron por tierra procedentes de la ciudad de Panamá. Durante el registro que se les practicara, le fueron encontradas siete fajas que contenían 264 comprimidos de heroína, las que confesaron haber recibido en la ciudad capital para su transporte hasta Costa Rica.

En auto que expidiera el 17 de julio de 1995, la Juez Cuarta del Circuito Judicial de Chiriquí suscitó la cuestión de la competencia para conocer de este

negocio, de la siguiente manera:

> "Ahora bien, sin entrar en mayores consideraciones y en virtud de que se desprende de lo anterior que el hecho punible se inició en la ciudad de Panamá, lo que indica que por jurisdicción el competente para decidir la encuesta que nos ocupa, lo es el Juzgado del Circuito del Primer Distrito Judicial de Panamá, Ramo Penal, De Turno, por lo que este Tribunal debe inhibirse del conocimiento de la presente encuesta y remitirla a ese Despacho para que conozca y decida sobre su situación jurídica" (fs. 303-304).

Al plantear el conflicto de que ahora se conoce, la Juez Décima de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de la Provincia de Panamá, expresa lo siguiente:

> "1. Tal cual lo reseña el artículo 2000 del Código Judicial, el juez competente será aquel en donde se hayan descubierto pruebas materiales del delito; el distrito o circuito en el que el presunto imputado haya sido aprehendido; el de la residencia del imputado; o el de cualquiera que hubiese tenido noticia del hecho punible.
>
> 2. Lo plasmado en el artículo 2000 de la excerta legal bajo estudio nos permite indicar, sin duda alguna, que las pruebas materiales del delito, en esta ocasión, el material pernicioso para la salud (drogas) fue incautado en Paso Canoa, ubicado en los límites entre las Repúblicas de Panamá y Costa Rica, precisamente en la circunscripción circuitorial de la Provincia de Chiriquí.
>
> En segundo lugar, la detención de los implicados Rodolfo Ramiro Zepeda, Gustavo Adolfo Zepeda, Noel Enrique Corrales, Rodolfo Valentín Carranza y Héctor Noel Mugía Silva, se produjo en el sitio antes enunciado, tal y como lo plasman las constancias de autos.
>
> En tercer término, la captura de los imputados, que se produce en la provincia de Chiriquí, al decomisarse los 1,969.44 gramos de Heroína, ponen a la Fiscalía Primera Superior del Tercer Distrito Judicial con sede en Chiriquí al tanto de que se perpetró un ilícito Contra la Salud Pública, relacionado con Drogas, y fue por ello, que la noticia criminal se conoció en aquella región del país.
> ...
> Ello es así, por cuanto además, respecto al hecho que hace referencia la señora Juez Suplente de que el ilícito se inicio en la ciudad de Panamá, a este momento procesal no existe constancia o prueba fehaciente (luego de considerar que los imputados viajaron en automóvil desde la ciudad capital hasta la provincia de Chiriquí), que en efecto fuera en esta circunscripción territorial y no en otra donde les fuera entregada la droga; lo que a la luz del resto de las probanzas, sitio donde se descubre la droga, lugar donde son aprehendidos los imputados, y lugar donde se tiene la noticia del hecho punible; no es suficiente para fijar la competencia del proceso en esta circunscripción territorial" (fs. 369-371).

Como viene dicho, estas sumarias guardan relación con un delito de tráfico internacional contra la salud pública, en el que la droga incautada se encontraba en tránsito por el territorio de nuestro país. Aun cuando la droga no hubiere sido aun objeto de tráfico, el delito se consuma por el simple tránsito ilegal, hecho que visiblemente se produce con ese propósito, de manera que el descubrimiento de la droga en cualquier lugar del país tiene el efecto de excitar inmediatamente la intervención de las autoridades jurisdiccionales en materia penal.

Al contestar el traslado que le fuera corrido del conflicto, el Procurador General de la Nación consideró que este proceso penal debe ser adjudicado al Juzgado Cuarto de Circuito Judicial de la provincia de Chiriquí, por considerar que "los elementos materiales de la comisión del delito, se descubren en la circunscripción judicial ... de la esfera circuital de la Provincia de Chiriquí

..." (f. 379).

Corresponde ahora dirimir el conflicto, lo que deberá tener lugar de acuerdo con lo preceptuado por el artículo 2000 del Código Judicial. En este orden de ideas, al no seguirse el criterio del lugar de inicio de la comisión del hecho punible, según la propuesta de la Juez del Circuito Judicial de Chiriquí, hay que atender los supuestos contemplados en esta norma. Así, "se decidirá dando preferencia por el orden con que están expresados en los numerales", de donde resulta que los supuestos de los numerales 1 y 2 atribuyen claramente la competencia a la autoridad judicial de la provincia de Chiriquí, habida cuenta de la forma como ocurrieron los hechos.

Por las consideraciones anteriores, LA SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECIDE que le corresponde al Juzgado Cuarto del Circuito Judicial de Chiriquí el conocimiento de este negocio, y ORDENA que los detenidos Rodolfo Ramiro Zepeda Jarquín, Gustavo Zepeda Jarquín, Noel Enrique Corrales, Rolando Valentín Carranza Mejía y Héctor Noel Mungía Silva, sean puestos a sus órdenes.

Notifíquese.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

IMPEDIMENTO

MANIFESTACIÓN DE IMPEDIMENTO DE LA MAGISTRADA AURA E. GUERRA DE VILLALAZ DENTRO DEL CUADERNO QUE CONTIENE LA RESOLUCIÓN DE 19/ABRIL/1996, QUE RECHAZA DE PLANO, INCIDENTE DE NULIDAD CONTRA PROCESO DE EXTRADICIÓN QUE SE SIGUE A ALFREDO LÓPEZ, REQUERIDO POR LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA POR LA COMISIÓN DE DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, SIETE (7) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

La Magistrada Aura Emérita Guerra de Villalaz ha solicitado se le separe del conocimiento del recurso de reconsideración interpuesto contra la resolución de 19 de abril de 1996, mediante la cual la Sala Penal rechazó de plano el incidente de nulidad que presentara la licenciada Emma Alba Tejada dentro del proceso de extradición que se sigue a Alfredo López Rodríguez, quien es requerido por los Estados Unidos de América por la comisión de delitos relacionados con drogas.

La solicitud viene fundamentada en la consideración de que en este proceso actúa como abogado "el doctor ROLANDO VILLALAZ GUERRA, a quien me unen vínculos de parentesco dentro del primer grado de consanguinidad" (f. 15).

En vista que la manifestación de impedimento tiene sustento jurídico en lo que dispone el numeral 1 del artículo 749 del Código Judicial, es del caso acceder a su reconocimiento.

Por las razones expuestas, LA CORTE SUPREMA, SALA PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL el impedimento manifestado por la Magistrada Aura Emérita Guerra de Villalaz, DISPONE separarla del conocimiento de esta actuación y CONVOCA para que la reemplace al Magistrado de la Sala siguiente a quien corresponda.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS

(fdo.) JOSÉ M. FAÚNDES
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

QUEJA

QUERELLA PRESENTADA POR MARITZA GISELA MONTENEGRO, CONTRA ERNESTO MUÑOZ GAMBOA, DIRECTOR NACIONAL DEL INSTITUTO DE DEFENSORÍA DE OFICIO, POR LA SUPUESTA COMISIÓN DE DELITOS CONTRA EL HONOR. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Procedente de la Procuraduría General de la Nación, ingresó a la Sala Penal de la Corte Suprema, el sumario contentivo de la querella presentada por **MARITZA GISELA MONTENEGRO MONTENEGRO**, en su propio nombre, contra el licenciado **ERNESTO MUÑOZ GAMBOA**, Director Nacional del Instituto de Defensoría de Oficio, por la supuesta comisión de delitos contra el honor.

Según narra la querellante, ésta fue destituída del cargo de recepcionista del Instituto de Defensoría de Oficio, mediante Resolución N° 104 de 30 de octubre de 1995, expedida por el Director Nacional del Instituto de Defensoría de Oficio, Licenciado **ERNESTO MUÑOZ GAMBOA**, en virtud de lo cual, presentó queja ante la Procuraduría de la Administración, contra el licenciado **ERNESTO MUÑOZ GAMBOA.** La Procuraduría de la Administración, mediante Oficio N° NQ-N° 585 de 19 de diciembre de 1995, le solicitó un Informe explicativo de conducta al Director Nacional del Instituto de Defensoría de Oficio antes mencionado. En este orden de ideas, mediante Nota DODN.032-96 de 18 de enero de 1996 (fs. 7 a 11), el Director Nacional del Instituto de Defensoría de Oficio, respondió a los requerimientos de la Procuraduría de la Administración.

En este sentido, alega la querellante:

> "Que en dicha nota el Director Nacional del Instituto de Defensoría de Oficio hizo aseveraciones calumniosas e injuriosas contra nuestra persona en los siguientes términos:
>
> 'Aunado a lo anterior, es absurdo y por lo mismo incomprensible, que luego de haber destituído a esta funcionaria por **incompetente**, **problemática e insolente**, un Defensor de Oficio de la sede (Licdo. **LUIS CARLOS AROSEMENA**) la haya nombrado en su despacho, específicamente en la sede del Instituto de Defensoría de Oficio y esta (sic) continúe en la misma Institución de la cual fue destituída e igualmente, llamo la atención sobre el hecho que si dicha funcionaria fue destituída por haber demostrado total **ausencia de requisitos para desempeñarse como simple recepcionista**, sea ahora contratada para ejercer las funciones de asistente de un Defensor de Oficio Distrital, labor esta (sic) que exige cierta preparación académica y **requisitos mentales y morales**, ausentes en ella, entre estos (sic) la **honestidad**, lealtad y un alto espíritu de cooperación y servicio a la administración de justicia, condiciones de las cuales carece **Maritza Montenegro**, la cual se caracteriza precisamente por lo falaz de sus afirmaciones, por la incongruencia de sus razonamientos y por lo intrigante de sus comentarios y actuaciones, tal como lo patentizan los documentos que se adjuntan a esta misiva.'
> ... ." (F. 2).

En virtud de lo anterior, manifiesta la querellante, **MARITZA MONTENEGRO:**

"Que dichas aseveraciones carecen de sustento tanto fáctico como jurídico, ya que la susenta no ha sido penada por delito contra el patrimonio, para ser calificada como deshonesta." (F. 2).

Finalmente , la querellante señala en su escrito, que se le acusa de:

"... incompetente, falta de preparación académica y requisitos mentales y morales, situación que queda desvirtuada por el hecho de haber ocupado el cargo de recepcionista mediante concurso y haber cumplido con todos los requisitos exigidos por el Órgano Judicial." (F. 2).

La querellante aportó las siguientes pruebas:

1. Fotocopia de Certificado de reconocimiento de 21 de noviembre de 1994, expedido por la Corte Suprema de Justicia, a favor de **MARITZA G. MONTENEGRO M.**, otorgándole la calidad de funcionaria de carrera, en el cargo de recepcionista, a partir de 16 de enero de 1994 (f. 4).

2. Fotocopia de Certificado expedido por la Directora de Recursos Humanos de la Corte Suprema de Justicia, Maruquel Arosemena V., donde se certifica que **MARITZA GISELA MONTENEGRO MONTENEGRO**, inició labores en dicha institución el 27 de abril de 1992; y donde se acreditan los puestos desempeñados por la querellante desde abril de 1992 hasta octubre de 1995. (F. 5).

3. Fotocopia debidamente autenticada del informe de conducta de 18 de enero de 1996, suscrito por el Director Nacional de la Defensoría de Oficio, Licenciado **ERNESTO MUÑOZ GAMBOA** (fs. 7 a 11).

4. Fotocopia debidamente autenticada de la Nota N° Q-10 de 26 de enero de 1996, del Procurador Suplente de la Administración, enviada a la licenciada **MARITZA MONTENEGRO** (f. 6), de la cual se desprende que la destitución del cargo que desempeñaba ésta en el Instituto de Defensoría de Oficio, obedecía a faltas disciplinarias, que violaban el Reglamento Interno de la Institución.

El artículo 1980 del Código Judicial, en concordancia con el artículo 180 del Código Penal -conforme fue modificado por la Ley 1 de 5 de enero de 1988-, establece que en los delitos de calumnia e injuria, entre otros, es suficiente la querella del ofendido, para seguir procedimiento criminal.

Advierte la Sala, que por tratarse el presente negocio de delitos contra el honor, en los que la investigación sumarial no puede iniciarse de oficio, se presentó querella por la parte ofendida -en este caso, **MARITZA MONTENEGRO**-, cumpliendo con lo normado en el artículo 2031 del Código Judicial; en tal virtud, la querellante solicita al Procurador General de la Nación que se investiguen los delitos querellados y se impongan las sanciones penales correspondientes.

Además, la querella se presentó oportunamente, es decir, "... dentro del término de dos meses, contados a partir de la comisión del hecho punible instantáneo ...", según el artículo 2035 del Código Judicial.

Antes de entrar a calificar el mérito del presente sumario, observa la Sala que, el funcionario contra el cual se presentó la querella en el presente negocio, es decir, el licenciado **ERNESTO MUÑOZ GAMBOA**, actualmente se encuentra desempeñando el cargo de Director Nacional del Instituto de Defensoría de Oficio.

El artículo 180 del Código Penal antes mencionado, conforme fue modificado por la Ley 1 de 5 de enero de 1988, es del siguiente tenor:

"Artículo 180. Para proceder en los delitos contra el honor, se requiere querella de la parte ofendida, acompañada por la prueba sumaria de su relato. ... ". (Lo subrayado es nuestro).

Por lo tanto, cuando se promueve querella por los delitos de calumnia e injuria, se debe acompañar la prueba sumaria del relato, por cualquiera de los

medios que enumera el artículo 2073 del Código Judicial, es decir, cualquier medio probatorio que acredite el hecho punible atribuido.

De los antecedentes sumariales expuestos, se advierte que, si bien la prueba documental aportada por la querellante con la finalidad de acreditar los ilícitos imputados, reúne los requisitos de eficacia jurídica en cuanto a su autenticidad, según lo establecido por el artículo 820 del Código Judicial, a juicio de la Sala, dichos documentos adolecen de la exigencia primordial que para este tipo de procesos por delitos contra el honor establece el artículo 180 del Código Penal citado, como es la efectividad e idoneidad de la prueba sumaria para acreditar el hecho punible que se endilga. Entendiéndose que, aunque la querellante haya aportado una cantidad de documentos, se considera que los mismos no tienen el requisito de idoneidad suficiente para acreditar el hecho punible atribuido al denunciado.

La Procuraduría General de la Nación, mediante Vista N° 27 de 8 de abril de 1996 (fs. 13 a 18), por considerar que no existen los delitos contra el honor irrogados, toda vez que, "para que haya delito contra el honor se requiere que lo expresado afecte o lesione el honor de la persona involucrada; no obstante, como ha dicho el querellado, su criterio individual se dio a solicitud de un informe de la Procuraduría de la Administración, basándose en el historial de la exfuncionaria, ..." (f. 18), solicitó se dicte sobreseimiento definitivo de carácter impersonal dentro del presente sumario, por las consideraciones siguientes:

> "A fojas 7-11, notamos con mayor claridad que el querellado expuso de manera sistemática y conforme a los archivos de esa Institución todas las irregularidades en que incurriera la señora MONTENEGRO, lo cual nos parece mas (sic) que suficiente concordar en que la exfuncionaria no estaba actuando en lo correcto y, por ende, rebasó los límites que la propia ley de carrera judicial depara para el cumplimiento de las funciones que se asignan en la obtención de un cargo. Ello, lógicamente, acarrea sanciones y las que le fueron aplicadas indican que estaban en la justa medida que el caso ameritaba; sobre todo si se tiene presente que los servidores públicos sólo pueden hacer lo que la ley le (sic) señala.
>
> Además de lo anterior, es necesario tomar en consideración que en las actuaciones de los servidores públicos que puedan ser objeto de querella de la índole como la que se estudia en este caso, la Ley N° 1 de 5 de enero de 1988, en su artículo 9, sostiene lo que a continuación transcribimos:
>
> 'Artículo 9: El Artículo 178 del Código Penal queda así:
>
> Artículo 178: Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 172 y 173 de este código, no constituye delito contra el honor, entre otras situaciones, las discusiones, críticas y opiniones, sobre los actos u omisiones, relativos al ejercicio de sus funciones ...'
>
> De la disposición antes transcrita, se desprende que cualquier cuestionamiento que se intente hacer en torno al proceder de un servidor público en el ejercicio de sus funciones no se puede considerar como un delito contra el honor, y es así que, en el sumario que nos ocupa, no se ha lesionado el honor de persona alguna, pues del análisis objetivo a las constancias procesales, llegamos a la conclusión que la imputación hecha por el señor **ERNESTO MUÑOZ GAMBOA**, como Director Nacional del Instituto de Defensoría de Oficio, no es calumnioso (sic); toda vez que si se tiene como marco de referencia las actuaciones llevadas a cabo por la querellante, indudablemente, que esta persona no ha demostrado un mínimo de responsabilidad en el cargo para el cual fue designada como recepcionista. ... ." (Fs. 15 a 17).

Ahora bien, en relación con los supuestos delitos, denunciados en la presente querella, haremos las consideraciones siguientes: En primer lugar, según

se desprende del artículo 172 del Código Penal, modificado por la Ley 1 de 5 de enero de 1988, el delito de calumnia es, toda conducta humana llevada a cabo con previsión, al menos momentánea, intención, voluntad y desarrollo de los actos idóneos, para atribuirle falsamente a una persona la comisión de un hecho punible, es decir, "... la imputación falsa a otro de un delito ..." (Art. 2, Ley 1 de 5 de enero de 1988). Por lo que, la conducta reprochable en dicho delito, consiste en imputar falsamente a otro la comisión de un hecho punible. Y, en el caso sub-judice, no consta prueba alguna que vincule al licenciado **ERNESTO MUÑOZ GAMBOA** con la comisión del delito de calumnia.

En segundo lugar, según se desprende del artículo 173 del Código Penal, modificado por la Ley 1 de 5 de enero de 1988, podemos definir injuria como, toda acción humana llevada a cabo con intención, voluntad, previsión, al menos momentánea, y desarrollo de los actos idóneos, con la finalidad de ofender la dignidad, honra o decoro de una persona, mediante escrito o cualquier forma, es decir, "la expresión proferida o acción ejecutada en deshonra, descrédito o menosprecio de una persona." (Art. 2, Ley 1 de 5 de enero de 1988). De lo expuesto, se colige que, la conducta típica en este delito, consiste en ofender la dignidad, honra o decoro, entendiéndose como tales, el respeto que merece la persona de su familia, de su vida conyugal, de la vida privada, de su personalidad, etc.

Como hemos visto, los delitos contra el honor, conllevan agresiones a la honestidad y agresiones al honor, respectivamente.

En cuanto al fondo del asunto, la Sala es de la opinión, que los hechos atribuidos al funcionario denunciado, no constituyen los delitos que se le imputan, ya que los hechos expuestos en la querella no revelan en el querellado la intención dolosa de cometer dichas acciones delictivas, la conducta por él realizada no es típica, razón por la cual, no constituye delito a la luz de lo normado en el Código Penal, más por el contrario, la Sala ha llegado a la conclusión de que los hechos atribuidos al licenciado **ERNESTO MUÑOZ GAMBOA**, de acuerdo con lo señalado por el Jefe Máximo del Ministerio Público, no se enmarcan dentro de lo doloso, sino que el informe explicativo de conducta, del licenciado **MUÑOZ GAMBOA**, al que se ha hecho alusión en líneas anteriores, se adecúa a lo normado en el artículo 178 del Código Penal, reformado por la Ley 1 de 1988, y los señalamientos contra la querellante, **MARITZA MONTENEGRO**, no se consideran delito de injuria, por cuanto que dichas críticas, son el producto de un análisis o juicio de valor de acuerdo con la materia en controversia, por parte del licenciado **MUÑOZ GAMBOA**, luego de haber mencionado detalladamente los elementos que lo llevaron a tales conclusiones.

De los elementos probatorios incorporados a la querella no se infiere la comisión de ningún delito, entendiéndose que el querellado emitió tales críticas, en virtud del informe que le fuera solicitado por la Procuraduría de la Administración, por lo que es del caso proceder al archivo de la presente encuesta sumarial con sobreseimiento definitivo, de carácter impersonal, de conformidad con el ordinal 2 del artículo 2210 del Código Judicial.

Por lo expuesto, la Corte Suprema, Sala Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, SOBRESEE DEFINITIVAMENTE la presente encuesta sumarial, de manera impersonal, con base en el numeral 2 del artículo 2210 del Código Judicial y, por consiguiente, ORDENA el ARCHIVO del sumario contentivo de la querella presentada por MARITZA GISELA MONTENEGRO MONTENEGRO, en su propio nombre, contra el licenciado ERNESTO MUÑOZ GAMBOA, Director Nacional del Instituto de Defensoría de Oficio, por la supuesta comisión de delitos contra el honor.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(Con Salvamento de Voto)

(fdo.) MARIANO HERRERA
Secretario

SALVAMENTO DE VOTO DE LA MAGISTRADA AURA E. GUERRA DE VILLALAZ

MARITZA GISELA MONTENEGRO MONTENEGRO, ha presentado cuatro acciones distintas contra el licenciado ERNESTO MUÑOZ GAMBOA, Director del Instituto de Defensoría de Oficio, al considerar que ha sido lesionada en su honor por las expresiones vertidas en su contra en un documento público.

El Jefe del Ministerio Público, sin llevar a cabo diligencia alguna con posterioridad al auto cabeza de proceso que obra a fojas 12 de este cuaderno, emitió concepto a través de su Vista N° 27 de 8 de abril de 1996 y arriba a la conclusión que las expresiones utilizadas por el denunciado, al presentar informe solicitado por la Procuraduría de la Administración, no afecta o lesiona el honor de la persona involucrada, por tanto, no existe delito y el caso debe resolverse con un sobreseimiento definitivo impersonal.

Como es de todos sabido, el honor tiene dos acepciones: una de carácter eminentemente objetiva y que se traduce en el prestigio, estimación y consideración social que una persona se labra por su comportamiento ante el grupo laboral, profesional o en la comunidad en que se desenvuelve en su vida cotidiana. La otra acepción tiene una dimensión subjetiva y es el valor, la autoestima, el respeto que cada persona tiene de sí misma, en su dignidad humana.

Los delitos contra el honor o contra la honra, como se denominan en otras legislaciones, afectan bienes jurídicos propios del individuo, por su condición de ser humano, como lo son también: la vida, la libertad y el patrimonio. Los delitos contra el honor son delitos formales, cuyo resultado se representa en la violación del precepto prohibitivo ético-moral que nos indica: no calumniar, no difamar, no injuriar, etc., por tanto, quien recibe la expresión de menosprecio es quien puede ponderar la profundidad de la ofensa recibida.

En el caso que nos ocupa, el licenciado Muñoz Gamboa después de hacer un detallado informe sobre el expediente administrativo de la denunciante, cuyas faltas él mismo sancionó con órdenes de descuento de salario, memorandums y amonestaciones, no satisfecho con ello, le añadió un comentario sobre el nombramiento que le hizo un defensor distrital y llega a calificarla como una persona sin preparación académica, con ausencia de requisitos mentales y morales como los de honestidad, lealtad y alto espíritu de cooperación. Si estas expresiones no configuran un insulto o injuria, habría que preguntarse entonces qué palabras contienen descrédito y menosprecio para lesionar el honor de una persona.

El caso ameritaba una ampliación de la fase instructoria que permitiera clarificar a fondo el asunto planteado. Esto no se hizo y se optó por acoger la recomendación de la Procuraduría, decisión con la que no estoy de acuerdo y por ello SALVO EL VOTO de la presente resolución judicial.

Panamá, fecha ut supra.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE RECONSIDERACIÓN

RECURSO DE RECONSIDERACIÓN CONTRA RESOLUCIÓN DE 19/ABRIL/1996, DE LA SALA PENAL, CORTE SUPREMA, QUE RECHAZA DE PLANO INCIDENTE DE NULIDAD INTERPUESTO EN EL PROCESO DE EXTRADICIÓN SEGUIDO A ALFREDO LÓPEZ, REQUERIDO EN ESTADOS UNIDOS POR LA COMISIÓN DE DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, QUINCE (15) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

El licenciado Rolando Villalaz Guerra, actuando como apoderado judicial de Alfredo López Rodríguez, ha presentado a la Sala Penal de la Corte Suprema recurso de reconsideración contra la resolución de 19 de abril de 1996, proferida por esta Superioridad, que rechaza de plano incidente de nulidad que propusiera la licenciada Emma Alba Tejada dentro del proceso de extradición que se sigue contra López Rodríguez, quien es requerido por los Estados Unidos de América por la comisión de delitos relacionados con drogas.

El letrado manifiesta su disconformidad con la resolución judicial, por considerar que en el proceso de extradición que se sigue a su patrocinado se incurre en las causales de nulidad previstas en los numerales 4 y 5 del artículo 2297 del Código Judicial, porque los documentos presentados en la solicitud de extradición "no dan certeza sobre el o los verdaderos delitos por los cuales se le persigue causa criminal al sr. LÓPEZ RODRÍGUEZ, la existencia de documentos firmados por distintos jueces al igual que las ordenes de captura con fechas distintas ..." (f. 9), y porque la resolución N° 11, de 6 de octubre de 1995, dictada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, "no le fue notificada legalmente al apoderado judicial" de López Rodríguez (f. 9). Por otra parte, admite que "Si se ha debido reiterar algunos conceptos ya plasmados en el Incidente de Objeciones resuelto el 22 de enero de 1996 por esta Sala, se ha debido a que precisamente a que los documentos presentados con las carencias y deficiencias advertidas, permiten corroborar que no se ha precisado lo que en el artículo 2297 se señala como causa de nulidad en un proceso penal" (f. 10).

El recurrente solicita que se "reconsidere" la resolución atacada y que, "en su defecto, acoja el Incidente de Nulidad interpuesto" por la licenciada Alba Tejada (f. 10).

Con la finalidad de decidir sobre las pretensiones del recurrente, resulta importante adelantar que la Sala Penal, entre otras consideraciones, rechazó de plano el incidente de nulidad interpuesto por la licenciada Alba Tejada por no haber fundamentado la nulidad alegada en alguna causales de nulidad taxativamente señaladas por el artículo 2297 del Código Judicial (f. 8).

Pues bien, si tomamos en cuenta que la defensa del extradido, como hemos visto, es **ahora**, en la ocasión del "recurso de reconsideración", cuando sostiene que dentro del proceso de extradición seguido a Alfredo López se ha incurrido en las causales de nulidad previstas en los numerales 4 y 5 del artículo 2297 del Código Judicial, ello evidencia que lo que realmente se pretende es una revisión de lo actuado dentro del incidente de nulidad, suministrando nuevos elementos de juicio que la resolución supuestamente atacada no tuvo la oportunidad de valorar.

Aunque admite que el proceso de extradición es de naturaleza administrativa, el recurrente reitera que "la intervención de la autoridad judicial es precisamente la que va a precisar e identificar si se cumplen los presupuestos de ley para que una persona se acceda a extraditarla a petición de un Gobierno Extranjero o para que se rechaze la misma, si no se han cumplido con las formalidades que se establecen en nuestra ley penal y en los tratados que ha firmado Panamá en esta materia". Se trata de una argumentación reiterativa porque ese fue, precisamente, el objeto del incidente de objeciones ya resuelto por la Corte, fallo que también se pretende revisar ahora dentro de la vía incidental, cuando las supuestas causas de nulidad, alegadas en esta "reconsideración" ya fueron consideradas en aquel momento procesal.

Finalmente, la nulidad a que se refiere el numeral 5 del artículo 2297, invocada, también de naturaleza específica, concierne la falta de notificación de "autos o providencias que acojan o nieguen pruebas", categoría en la que no se encuentra comprendida la resolución número 11, de 6 de octubre de 1995, dictada por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Por lo antes expuesto, LA CORTE SUPREMA, SALA PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DENIEGA el recurso de reconsideración propuesto.

Notifíquese.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) MIRTZA A. FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(CON SALVAMENTO DE VOTO)
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO JOSÉ MANUEL FAÚNDES

Creo, y manifiesto mi respeto por el Fallo, que efectivamente se omitió en el proceso algo fundamental que es la notificación al apoderado del extradido lo que viola el artículo 2297 del Código Judicial.

Por otro lado, otra vez con respecto, el trámite de esta extradición ha superado el término de los 60 días a que se refiere la norma pertinente, visto que la detención del procesado ocurre en junio de 1995, y a la fecha actual han transcurrido 11 meses.

Es mi concepto muy modesto de que en los casos en que estos excesos de tiempo se den, dentro de los principios advertidos, negar la extradición, aún alegando que pudiera ser por los recursos interpuestos por los apoderados.

De ahí que no esté de acuerdo con el Fallo.

Fecha ut Supra.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE HECHO

RECURSO DE HECHO DENTRO DE LA ACUSACIÓN PARTICULAR PROPUESTA EN CONTRA DE CRISTÓBAL DELGADO Y OTROS POR PRESUNTA COMISIÓN DE DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO Y CONTRA LA SEGURIDAD COLECTIVA. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Ante la Sala Penal de la Corte Suprema, el licenciado **Carlos Eugenio Carrillo Gomila**, en representación de **CRISTÓBAL DELGADO MONTENEGRO**, anunció recurso de hecho contra el Auto de 25 de noviembre de 1993, proferido por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, mediante el cual se deniega el recurso de casación presentado por el recurrente, contra la Resolución de 6 de septiembre de 1993, proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia.

El recurso de casación fue presentado contra el Auto de 6 de septiembre de 1993, que a su vez confirmó el Auto de 14 de abril de 1993, dictado por el Juzgado Segundo del Circuito de Colón, Ramo Penal, que admitió el libelo acusatorio formulado por la empresa ORO CENTER, GOLD CENTER, S. A., contra los señores HAVIV AVIAD, SALIM MORDOCK, CRISTÓBAL DELGADO y ABRAHAM MORDOCK, por supuestos delitos contra el patrimonio y la Seguridad Colectiva.

El recurrente por su parte, en el recurso de hecho, plantea lo siguiente:

> "La resolución que se impugna mediante el recurso de Casación constituye un auto que al momento de confirmar la Admisión de la Acusación Particular propuesta dejó de resolver las excepciones de prescripción de la acción penal y cosa juzgada, tal como lo sustentamos en el escrito de formalización." (F. 3).

Según lo planteado por el licenciado **Carlos Eugenio Carrillo Gomila**, la citada Resolución de 25 de noviembre de 1993, es recurrible, al tenor del artículo 1137 del Código Judicial, que dice:

> "ARTÍCULO 1137. La parte que intente interponer el recurso de hecho pedirá al Juez que negó la apelación o la concesión del recurso de casación, antes de vencerse los dos días siguientes al día en que se notificó o se tuvo por notificada la negativa, copia de la resolución, su notificación, si la hay, la apelación, su negativa y las demás piezas que estime conveniente. ..." (Lo subrayado es de la Sala).

En la Resolución de 25 de noviembre de 1993, objeto del presente recurso de hecho, el Segundo Tribunal Superior, sostiene que:

> "No obstante, se ha presentado recurso de casación contra una resolución de admisibilidad de acusación particular y, de conformidad con lo previsto en el artículo 2435 del Código Judicial, sólo procede el recurso de casación contra los autos dictados en materia penal que rechazan una acusación o denuncia por delito público o privado, cuando se haya quebrantado alguna ley expresa al declarar que el hecho acusado o denunciado no constituye delito o que el acusador o denunciante no tiene facultad para acusar o denunciar, por su calidad o circunstancias o por las de la persona acusada o denunciada, por tanto, a contrario sensu, la resolución de admisión de una acusación o denuncia no admite el recurso de casación." (F. 10).

En este sentido, el recurrente se manifiesta en los términos siguientes:

> "... no se puede limitar al Tribunal a simples funciones secretariales de constatación sino de análisis jurídico de la viabilidad o no del acto de la parte, ya que admitir y mantener este concepto, conllevaría a que un Juzgador a sabiendas de que la acción penal objeto de la Acusación Particular ha prescrito no puede pronunciarse sobre la misma, a pesar de constatarlo, lo cual conculca los principios procesales anunciados". (F. 5).

A juicio de la Sala, por tratarse la Resolución contra la cual se interpuso recurso de casación de la decisión de una apelación contra la Resolución que admitió una acusación particular, dado que la misma, por su naturaleza, debe concederse en el efecto devolutivo, lo cual no puede entenderse como un traspaso total de las facultades del juez de primer grado al de segunda instancia, se entiende que la competencia del superior se circunscribe a la resolución recurrida, puesto que en caso contrario, el juez superior incurriría en usurpación de funciones. En cambio, si la apelación se concede en el efecto suspensivo, el superior asume el conocimiento del proceso y le corresponde decidir cualquier cuestión que surja en el mismo, aunque no se relacione con la resolución impugnada, toda vez que el juez inferior pierde la competencia en el negocio.

Por lo tanto, no puede decirse que en el caso sub-judice el Auto contra el cual se intentó promover recurso de casación, es susceptible de tal recurso, toda vez que el Auto que confirma la admisión de la acusación particular, no decide sobre excepciones que extinguen el proceso y, en tal virtud, el artículo 2435 del Código Judicial, establece que habrá recurso de casación en el fondo, "Contra los autos dictados en materia penal, que le pongan término al proceso mediante sobreseimiento definitivo o en que se decidan las excepciones, de cosa juzgada, prescripción de la acción penal o de la pena o aplicación de amnistía o de indulto, ...", y como hemos dicho, en este caso el superior que decidió la alzada no entró a conocer de tales excepciones, lo que hubiera entrañado una usurpación de competencia por parte de dicho juzgador, en este caso el Segundo Tribunal Superior de Justicia.

En conclusión, no es susceptible de recurso de hecho la Resolución que se limite a negar la concesión del recurso de casación, presentado contra una

Resolución contra la cual no cabe este recurso, nada se obtendría con revocar o reformar la última porque la Resolución que se supone ser la causa del agravio, tendría que quedar en firme produciendo todos sus efectos.

Por las circunstancias expuestas, considera la Sala que no puede acceder a lo pedido, y debe desestimar el recurso presentado.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, Sala Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE el recurso de hecho contra la Resolución de 25 de noviembre de 1993, proferida por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, mediante la cual se deniega el recurso de casación presentado por el recurrente, contra la Resolución de 6 de septiembre de 1993, proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) CARLOS E. MUÑOZ POPE (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) MARIANO HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE REVISIÓN

RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO POR EL LICENCIADO EDUARDO BADILLO PAZ A FAVOR DE DALYS OGLIVIES, SINDICADA POR EL DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA (TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS). MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, DOS (2) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

El licenciado Eduardo Badillo Paz ha presentado escrito de reconsideración contra la resolución calendada 28 de marzo de 1996 dictada por esta Sala, mediante la cual se resuelve no admitir el recurso de revisión interpuesto contra la sentencia de 16 de agosto de 1989, proferida por el Juzgado Cuarto Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, que condena a Dalys Oglivies a la pena de 6 años de prisión, como responsable del delito de posesión de drogas.

Como fundamento de su reclamo, el recurrente expresa que el libelo de revisión cumple a cabalidad con los requisitos que para su formalización exigen los artículos 2458 y siguientes del Código Judicial. En tal sentido, sostiene que "presentamos como prueba la práctica de diligencia de inspección judicial para demostrar que la pre-nombrada DALYS OGLIVIES no residía en el lugar allanado" (f. 11), y que la ejecutoria de la sentencia "se desprende del propio proceso penal cuestionado" (f. 11).

Por último, el licenciado Badillo Paz señala que "la norma que rige la materia, no plantea ni siquiera la posibilidad de no admisibilidad del recurso por defecto de forma, lo que si es cierto es que plantea la posibilidad de que el recurso de revisión se ha (sic) negado pero a partir del trámite que se establece en los artículos 2460 y 2461 del Código Judicial" (f. 11).

Conocidos los argumentos que sirven de apoyo al recurso de reconsideración, le corresponde a la Sala en este momento procesal decidir sobre su mérito.

De manera preliminar, debe la Corte observar que el "recurso de revisión" es un medio de impugnación de carácter extraordinario dirigido contra sentencias condenatorias **ejecutoriadas**, que tiene por objeto subsanar los errores que hayan podido cometerse, en cualquiera de los supuestos que la ley expresamente indica. La jurisprudencia patria es uniforme al señalar que este mecanismo procesal es de naturaleza eminentemente técnica, que debe ser presentado por un abogado y con el cumplimiento de formalidades legales precisas. De ahí se colige que, "si el

libelo de revisión no cumple con los requisitos estipulados en los artículos 2458 y 2459 del Código Judicial, se hace improcedente el medio impugnativo ... lo que en consecuencia indica que no es posible admitir el recurso de revisión contra la sentencia censurada" (Sentencia de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, de 26 de enero de 1996).

La simple lectura del libelo de revisión permite comprobar, en primer término, que el recurrente incumple lo preceptuado en el inciso primero del artículo 2458 del Código Judicial, pues no ha demostrado que la sentencia condenatoria impugnada se encuentre ejecutoriada. En efecto, el revisionista no aporta con el libelo del recurso, ninguna prueba documental que acredite que contra su patrocinada se haya abierto siquiera causa criminal por el delito de posesión de drogas, mucho menos que contra ella se haya dictado sentencia condenatoria por la comisión de tal hecho punible.

Por otro lado, no comprende la Sala la afirmación del recurrente cuando manifiesta que presentó "como prueba la practica de diligencia de inspección ocular" (f. 11), cuando en realidad lo que hace es una "Solicitud de practica (sic) de prueba" (f. 4), petición que resulta improcedente en esta etapa del proceso. Por tanto, no hay duda alguna sobre el hecho de que el recurrente no ha satisfecho la exigencia legal contenida en el artículo 2459 del Código Judicial, que exige la concurrencia de elementos probatorios que sirvan de sustento al recurso.

En vista de que en el libelo de revisión existen defectos formales que incumplen las exigencias legales establecidas en los artículos 2458 y 2459 del Código Judicial, la Sala considera correcta la decisión jurisdiccional censurada.

Por lo antes expuesto, LA CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NIEGA el recurso de reconsideración propuesto por el licenciado Eduardo Badillo Paz.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) JOSÉ M. FAÚNDES (fdo.) AURA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A AGUSTÍN PALMA ESPINOSA, SINDICADO POR EL DELITO DE ROBO EN PERJUICIO DEL BANCO EXTERIOR. MAGISTRADO PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, SEIS (6) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

El licenciado Rubén Pecchio Ospino, abogado, miembro del Instituto de Defensoría de Oficio, en representación de **AGUSTÍN PALMA ESPINOSA**, interpuso ante la Sala Penal de la Corte Suprema, recurso de revisión contra la sentencia de 26 de enero de 1993 dictada por el Juzgado Noveno del Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, dentro del proceso seguido a Harmodio Barragán Castillo y Agustín Palma Espinosa por el delito de robo a mano armada en perjuicio del Banco Exterior; en la cual se condenó a su representado a cumplir la pena principal de seis (6) años de prisión y la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, sin especificarse el término de esta última sanción.

FUNDAMENTO DEL RECURRENTE

El licenciado Pecchio Ospino, señala como fundamento legal de su solicitud la causal quinta del artículo 2458 del Código Judicial.

Expone que el hecho ilícito por el cual se condenó a Palma Espinosa se cometió el 30 de agosto de 1990 en horas de la mañana en la sucursal del Banco Exterior ubicada en la vía Bolívar de esta ciudad. Pero que no es posible que Palma Espinosa cometiera ese ilícito porque se encontraba detenido en la Penitenciaría de Villa Hermosa en Cali, Colombia desde el 16 de abril de 1990 dado que fue condenado a doce (12) años de prisión por un delito de hurto calificado, bajo el nombre de Carlos Correa Liquitan.

APORTA LAS SIGUIENTES PRUEBAS DOCUMENTALES:

1. Copia autenticada del Oficio 147 del 28 de agosto de 1992 dirigido por la Sección de Reseña e Identificación de la Cárcel del Distrito Judicial de Cali a la Cónsul de Panamá, en esa ciudad.

2. Copia autenticada de la nota EP/COL/SC/161/92 del 10 de septiembre de 1992 dirigida por el Embajador de Panamá en Colombia a la Asesora Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores.

3. Copia autenticada de la Nota EP/COL/080/93 del 25 de enero de 1993 dirigida por el Embajador de Panamá en Colombia a la Asesora Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores.

4. Copia autenticada de Nota dirigida por la Cónsul de Panamá en Cali al embajador de Panamá en Colombia de fecha 3 de marzo de 1993.

5. Copia autenticada de la Nota EP/COL/(1.003/93 del 18 de mayo de 1993 dirigida por el embajador de Panamá en Colombia a la Asesora Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores.

6. Expediente contentivo del proceso seguido a Harmodio Barragán Castillo y Agustín Palma Espinosa por el delito de robo en perjuicio del Banco Exterior, hecho denunciado por Ernesto Aurelio Carrión Ayarza, el cual se encuentra archivado en el Juzgado Noveno del Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá.

Solicita además, se reciba declaración a Agustín Palma Espinosa, con cédula de identidad personal N° 8-224-799, actualmente detenido en la Cárcel Modelo, Galería Cuarta; y a la señora Argelia Espinosa de Palma, con cédula de identidad personal 2-61-875, residente en el edificio Tuira, apto. 3-6, Sección A. Bethania (fs. 1-10).

SITUACIÓN PROCESAL

Observa la Sala que el recurso se ajusta a las formalidades de forma establecidas por el artículo 2459 del Código judicial.

Ahora bien, las pruebas que se acompañan a los hechos fundamentales, contrario a lo afirmado por el recurrente, no determinan que Correa Liquitan y Palma Espinosa sean la misma persona.

La nota de 3 de marzo de 1993 signada por la Cónsul de la república de Panamá en Colombia, señora Beatriz de Quijano, dirigida al Señor Alonso Fernández, Embajador de Panamá en el mencionado país, se refiere a la entrevista que sostuvo con el panameño **Carlos Correa Liquitan** en la cárcel del Distrito Judicial de Villahermosa de Cali, el día 25 de febrero de 1993, referente a detalles sobre su reclusión y comportamiento dentro del penal, donde purga **pena de prisión de doce (12) años.**

Es decir, que no se cuenta con pruebas dactilares y fotográficas del mencionado Correa Liquitan a objeto de compararlas con las de Agustín Palma Espinosa, quien se encuentra recluido en la cárcel Modelo de esta ciudad a ordenes de la Dirección Nacional de Corrección desde el día **14 de diciembre de 1993** por el delito de robo al Banco Exterior, tal como consta en el expediente principal mediante oficio N° 3864 S. J. de 21 de diciembre de 1993 que dirige el Director de la cárcel Modelo al Juez Noveno de Circuito Penal.

No obstante, dado que la causal invocada se refiere al descubrimiento de nuevos hechos después de la condena, se estima prudente admitir el recurso a objeto de practicar las pruebas pertinentes y luego analizar el alegato tanto del recurrente como del Procurador General de la Nación.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE el recurso de revisión presentado por el licenciado Rubén Ernesto Pecchio Ospino, contra la sentencia dictada por el Juzgado Noveno del Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, el 26 de enero de 1993.

Se abre el proceso a prueba por el término de 30 días, a objeto que el recurrente lleve a la práctica las mismas, como lo establece el artículo 2460 del Código Judicial.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SOLICITUD PARA QUE SE COMPULSEN LAS COPIAS QUE SEAN NECESARIAS PARA LA INVESTIGACIÓN QUE SE RECOMIENDA EN LA RESOLUCIÓN DE 26 DE JULIO DE 1995, EMITIDA POR LA SALA SEGUNDA DE LO PENAL, DONDE NIEGA EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN, DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A CANCIO M. CIACCI TASÓN Y OTROS, POR EL SUPUESTO HOMICIDIO DEL MENOR MARCOS ALBERTO RODRÍGUEZ JUSTINE. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, NUEVE (9) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996)

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Ha ingresado a la Sala Segunda de lo Penal, la solicitud de compulsa de las copias necesarias para darle curso a las recomendaciones contenidas en la sentencia calendada el 26 de julio de 1995, mediante la cual se resolvió el recurso de revisión del proceso penal seguido a **CANCIO M. CIACCI TASÓN y OTROS** por el delito de homicidio del menor **MARCOS ALBERTO RODRÍGUEZ JUSTINES**.

Como fundamento de esta solicitud, se anota que "por razón de la recomendación expresada en la resolución fechada el 26 de julio de 1995, emitida por la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, en donde se expresa que si las pruebas aportadas demuestran en alguna medida la falta de consistencia científica de los dictámenes aportados por el Instituto de Medicina Legal, lo que procede es una investigación previa por violación del artículo 355 del Código Penal".

Tal como lo señala el petente, con motivo del recurso de revisión presentado por los defensores de Cancio M. Ciacci Tasón, la Sala Segunda de la Corte le imprimió el curso procesal correspondiente, primero la fase de práctica de pruebas y luego el de alegatos de las partes. Al momento de dictar la sentencia, en la parte motiva de la misma, la Sala se refirió de manera particular a las exigencias normativas sobre la novedad, importancia y efectividad de los medios de prueba aportados; anotó también que cuando esas pruebas son testimonios, dictámenes e interpretaciones practicados e incorporados con la inmediación del funcionario de instrucción o el Juez de la causa y los mismos adolecen de un vicio que los anule o invalide, se requiere que tal alteración, deficiencia o falsedad se acredite en proceso separado, que es lo que se acostumbra hacer en todos aquellos casos en que se detecta en el curso del proceso indicios graves de cualquiera de las modalidades de falsedad testimonial.

En estos casos se ordena la compulsa de las copias y se remiten al Ministerio Público para que proceda a la investigación del caso.

Como a la fecha en que se presenta esta solicitud, han transcurrido nueve meses desde que se dictó la sentencia antes mencionada, no se cuenta con el expediente principal, el cual fue devuelto al Segundo Tribunal Superior de Justicia y solo se mantiene en archivo de la Sala Segunda el que contiene el recurso de revisión. Así las cosas,la Sala solo tiene potestad para compulsar las copias del expediente bajo su custodia actual y en cuanto a las que reposan en el expediente principal deben ser solicitadas por el funcionario de instrucción si las considera necesarias en la etapa de investigación.

Respecto a otras apreciaciones que se externan en el escrito de solicitud de compulsa de copias, referentes a la conducta asumida por algunos servidores públicos y por el Presidente de la audiencia del caso penal, de conformidad con las disposiciones vigentes sobre esta materia corresponde presentar las quejas o denuncias concretas, según el caso, ante las autoridades competentes, pero el medio utilizado carece de idoneidad jurídico para ese propósito.

Por lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA que se compulsen las copias de las pruebas periciales aportadas que aparecen en el expediente que contiene el recurso de revisión presentado por el licenciado Ramón F. Castellanos en relación con el proceso penal seguido a CANCIO CIACCI TASÓN y OTROS por los delitos de homicidio, secuestro y asociación ilícita en perjuicio del menor MARCOS ALBERTO RODRÍGUEZ JUSTINES y se REMITAN a la agencia del Ministerio Público de Turno para que se determine si los dictámenes emanados del Instituto de Medicina Legal en este caso, se subsumen en algún tipo penal.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE REVISIÓN PRESENTADO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A BERTO AZAEL MOSQUERA PALACIOS, SINDICADO POR EL DELITO DE FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO PÚBLICO. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, TRECE (13) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Ingresó a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, el recurso extraordinario de revisión presentado en su propio nombre por **BERTO AZAEL MOSQUERA PALACIOS**, detenido en la Cárcel Modelo, contra la sentencia N° 78 de 31 de octubre de 1989 (fs. 20 a 23), dictada por la señora Juez Octava de Circuito Penal de Panamá, Licenciada MARCELA GÓMEZ DE ANTINORI, que lo condenó a la pena de 2 años de prisión e inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos por igual término, por delito de falsedad (cédula de identidad personal); dicha sentencia quedó ejecutoriada el 25 de noviembre de 1992.

Cumplido lo normado por el artículo 2050 del Código Judicial -que impone a la Sala Penal de la Corte Suprema la obligación de poner en conocimiento de los Defensores de Oficio del Instituto de Defensoría de Oficio los recursos de apelación, casación y revisión ingresados a esta Superioridad, a fin de que éstos interpongan dichos recursos a favor de los reos que no tienen un abogado que los represente-, para tales fines, esta Colegiatura corrió traslado del presente negocio, a la licenciada **Beatriz Herrera Peña**, Defensora de Oficio (f. 6).

La licenciada **Beatriz Herrera Peña** en su escrito, visible de fojas 7 a 9,

señala que:

> "Es evidente que el recurso solicitado por el señor **MOSQUERA** requiere de ciertas formalidades de ley, toda vez que el artículo 2458 del Código Judicial establece taxativamente dentro de sus siete (7) numerales, los casos en que procede la revisión; que luego del análisis de este expediente es evidente que la condición de nuestro representado no califica dentro de lo normado en este artículo para proceder a formalizar el mismo, ya que no existen nuevos elementos o pruebas que varien (sic) su situación ni tampoco se dan los otros presupuestos.
>
> Se solicitó a favor del señor **MOSQUERA** una suspensión condicional de la ejecución de la pena pero la misma fue presentada al Juzgado Octavo de Circuito Rama Penal, (fs. 205-211), quien negó la misma porque al momento de su presentación, el señor **MOSQUERA** estaba a órdenes de Corrección (fs. 216-218), e instó a la defensa de ese entonces a interponer dicha solicitud ante este departamento (fs. 217).
>
> Consideramos, pues, que tampoco procede en este caso solicitarse la prescripción de la pena, dado el momento en que la sentencia quedó ejecutoriada y la sanción que se impuso, sin embargo, estimamos que es injusta la situación por la que atraviesa el señor **MOSQUERA**, por lo que estimamos procedente, solicitar en consecuencia el reemplazo de la pena ante esta dirección, porque creemos que en derecho y en justicia corresponde acceder a esta petición, no sin antes advertir que este tipo de acciones con anterioridad las hemos invocado acorde a lo normado en el artículo 2406 del Código Judicial que establece lo siguiente:
>
> **Artículo 2406**: "Las medidas a que se refieren los artículos anteriores, podrá adoptarlas el Órgano Ejecutivo, en cada caso, de oficio o a solicitud de parte".
>
> Por lo que se desprende que el reemplazo de pena (art. 2398 del C. J.) y la suspensión de la ejecución de la pena (art. 2400 C. J.) las podrá conceder el ejecutivo a través del Departamento de Corrección. Sin embargo, nuestra solicitud al respecto no ha sido atendida en virtud qu (sic) el artículo 2406, fue elevado a consulta ante la Procuraduría de la Administración por el Director de Corrección sin que a la fecha exista un pronunciamiento en cuanto a nuestras peticiones." (Fs. 7 a 9).

Ante tal situación, opina esta Sala que no es posible ordenar la revisión del proceso, toda vez que la misma abogada defensora de **BERTO AZAEL MOSQUERA PALACIOS**, concluye que no hay causal para interponerlo; por ello, en este caso no es posible admitir el recurso de revisión que trató de impetrar el propio detenido **MOSQUERA PALACIOS.**

Por otro lado, considerando que el papel del defensor de oficio es ir a la jurisdicción a proteger o reivindicar el derecho de su patrocinado, se colige que éste deberá velar porque se cumplan todas las garantías procesales en favor de su defendido, facilitándole al mismo la prestación de servicios legales competentes, justificándose la solicitud de suspensión condicional de la ejecución de la pena y el reemplazo de la pena impuesta al interno **MOSQUERA PALACIOS**, mediante sentencia judicial N° 78 de 31 de octubre de 1989 (fs. 20 a 23), dictada por la señora Juez Octava de Circuito Penal de Panamá, que lo condenó a la pena de 2 años de prisión e inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos por igual término; solicitud hecha ante la Dirección General de Corrección por parte de la defensora de **BERTO AZAEL MOSQUERA PALACIOS**, Licenciada **Beatriz Herrera Peña.**

En cuanto al silencio por parte de la Dirección Nacional de Corrección, la Sala considera oportuno llamar la atención al respecto, a fin de que en el menor

tiempo posible dicha Dirección se pronuncie en cuanto a la concesión de tal medida de reemplazo de la pena, tomando en cuenta que se trata de una pena de veinticuatro (24) meses de prisión, y que se trata de una pena corta privativa de libertad, que lo que representa es la corrupción de un delincuente primario como es el caso, debido al hacinamiento existente en nuestras cárceles, otorgada con la condición de que el favorecido observe una buena conducta, es decir, que no cometa un nuevo hecho punible durante el tiempo de la suspensión de la pena si se le concediere la misma.

En virtud de lo anterior, la Corte Suprema, Sala Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE el recurso de revisión interpuesto por BERTO AZAEL MOSQUERA PALACIOS; y, por consiguiente, ORDENA el ARCHIVO del expediente.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE REVISIÓN DENTRO DEL JUICIO SEGUIDO A JORGE ARIEL LACAYO, CONDENADO POR EL DELITO DE ROBO. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Conoce la Sala Segunda Penal el recurso extraordinario de revisión que, en su propio nombre, anunciara Jorge Ariel Lacayo contra la sentencia dictada por el Juzgado Primero del Tercer Circuito Judicial, que lo condena a la pena de 60 meses de prisión, como responsable del delito de robo.

Como quiera que tal iniciativa procesal requiere de su formalización por un abogado, el 20 de marzo de 1995 el despacho sustanciador dispuso que el Director del Instituto de Defensoría de Oficio designara a un abogado para que asumiera la representación de Lacayo en este asunto (f. 6).

En cumplimiento de esa decisión, el defensor de oficio designado ha presentado escrito en el cual informa que del proceso penal seguido a Jorge Ariel Lacayo no surgen "aquellos elementos nuevos que nos permitan formalizar el RECURSO, por lo que concluimos desafortunadamente no poder instaurar formalmente el presente RECURSO DE REVISIÓN" (f. 17).

Con vista en esa manifestación, la Corte no puede menos que considerar que el recurso extraordinario anunciado por el inculpado no cumple con los requisitos que a tales efectos exigen los artículos 2458 y 2459 del Código Judicial.

Por lo anterior, LA CORTE SUPREMA, SALA PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE el recurso de revisión anunciado por Jorge Ariel Lacayo.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A SALVADOR VÁSQUEZ GÓMEZ, POR EL DELITO CONTRA LA SALUD PUBLICA. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL

FAÚNDES. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Ingresó a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, el recurso extraordinario de revisión presentado en su propio nombre por **SALVADOR VÁSQUEZ GÓMEZ**, detenido en la Cárcel Pública de David, contra la sentencia # 3 de 19 de enero de 1996, dictada por la Juez Cuarta del Circuito de Chiriquí, Ramo Penal, que lo condenó a la pena de sesenta (60) meses de prisión, aumentada a setenta y dos (72) meses de prisión por el Cuarto Tribunal Superior de Justicia del Tercer Distrito Judicial de Chiriquí, por delito contra la Salud Pública.

Cumplido lo normado por el artículo 2050 del Código Judicial -que impone a la Sala Penal de la Corte Suprema la obligación de poner en conocimiento de los Defensores de Oficio del Instituto de Defensoría de Oficio los recursos de apelación, casación y revisión ingresados a dicha Superioridad, a fin de que éstos interpongan dichos recursos a favor de los reos que no tienen un abogado que los represente-, esta Colegiatura corre traslado de este negocio a la licenciada Micaela Morales Miranda, Sub-Directora Distrital del Instituto de Defensoría de Oficio del Tercer Distrito Judicial, quien mediante Resolución de 23 de enero de 1996 de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (fs. 16-17), fue declarada impedida y se le separó de actuar como Defensora de Oficio en el presente negocio; haciéndose, por consiguiente, una nueva designación del Defensor de Oficio en este caso, siéndole asignada dicha defensa al licenciado Roummel G. Salerno C., Defensor de Oficio.

El licenciado **Roummel G. Salerno C.**, en su escrito de 10 de mayo de 1996 (f. 19), manifestó lo siguiente:

> "... después de haber realizado una minuciosa y detallada lectura del expediente contentivo de aproximadamente 600 fojas somos de la opinión que no se dan los presupuestos procesales mínimos para dar cabida a la formalización del Recurso de Revisión solicitado." (F. 19).

Observa la Sala que el licenciado **Roummel G. Salerno C.**, al hacer el estudio respectivo del caso, no encontró causal que se adecúe a las normadas por el artículo 2458 del Código Judicial, y por esa razón, concluye en que no procede en el presente negocio el recurso de revisión.

Ante tal situación, opina esta Colegiatura que no es posible ordenar la revisión del proceso, toda vez que el mismo abogado defensor de **SALVADOR VÁSQUEZ GÓMEZ** advierte que no hay causal para interponerlo; por ello, en este caso no es posible admitir el recurso de revisión que trató de impetrar el propio detenido **VÁSQUEZ GÓMEZ**.

En virtud de lo anterior, la Corte Suprema, Sala Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE el recurso de revisión interpuesto por SALVADOR VÁSQUEZ GÓMEZ y, por consiguiente, ORDENA el ARCHIVO del expediente.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO POR REYNALDO CABALLEROS ELÍAS DENTRO DEL PROCESO QUE SE LE SIGUE POR DELITO DE POSESIÓN ILÍCITA DE DROGAS. MAGISTRADO PONENTE:

JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Ha reingresado a la Sala Penal de la Corte Suprema, el recurso de revisión interpuesto por el señor **REYNALDO CABALLERO ELÍAS**, quien se encuentra detenido en la Cárcel Pública de Colón purgando una pena de SEIS (6) AÑOS Y TRES (3) MESES DE PRISIÓN por el delito de Posesión Ilícita de Drogas.

Cumplido lo normado por el artículo 2050 del Código Judicial que impone a la Sala Penal de la Corte Suprema la obligación de poner en conocimiento de los Defensores de Oficio los recursos de apelación, casación y revisión ingresados a esta Superioridad, para que los mismos interpongan dichos recursos en favor de los reos que no tienen un abogado que los represente, recibe esta Colegiatura el escrito calendado 17 de abril de 1996, en el que el licenciado Cecilio César Castillo C., Defensor de Oficio asignado por la Defensoría de Oficio para interponer el recurso, manifiesta que después de haber revisado y analizado el expediente penal que el Juzgado Primero del Circuito Penal le siguió al señor REYNALDO CABALLERO ELÍAS en la sentencia N° 25 de 7 de marzo de 1995, mediante la cual condena al supracitado a cumplir la pena de 6 años y tres meses de prisión concluye que:

> "... no existe en el proceso, ninguno de los casos atacables, mediante el recurso de revisión, tal como lo establece el artículo 2458 del Código Judicial.
>
> Cabe anotar, que el cuaderno penal permite conocer, que el Sr. **REYNALDO CABALLERO ELÍAS**, fue condenado por el Tribunal de la causa, por considerarlo el propietario de 5.25 gramos de cocaína (crack) hecho que el mencionado niega.
>
> También evidencia el proceso, que la sentencia condenatoria fue recurrida en grado de apelación por el defensor y el sindicado, pero por razones no acreditadas en el expediente, la misma no fue sustentada.
>
> Luego de examinado el proceso y dialogado con el procesado, no hay duda, que la petición del sentenciado, de promover un recurso de revisión obedece a la situación procesal, de no haberse dado, la doble instancia, con el ánimo que el Superior examinara el Juicio Penal, no obstante tales alegaciones a nustero (sic) modesto criterio, no son objeto de un recurso de revisión".

Observa la Corte que el licenciado Cecilio César Castillo C. al hacer el estudio respectivo del caso, no encontró causal que se adecue a las normadas por el artículo 2458 del Código Judicial, y por esa razón, declina interponer el recurso que nos ocupa.

Ante tal situación, opina esta Colegiatura que al no existir mérito para continuar con el presente negocio se verifica el fenómeno jurídico denominado sustracción de materia porque el defensor advierte que no hay causal para interponerlo.

En virtud de lo anterior, la Corte Suprema, SALA PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE el recurso de revisión presentado por REYNALDO CABALLERO ELÍAS, y ORDENA el archivo del expediente.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES

(fdo.) CARLOS E. MUÑOZ POPE (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS

(fdo.) MARIANO HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SENTENCIA APELADA

APELACIÓN DE SENTENCIA CONDENATORIA, DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A PATRICIA BEDOYA BARRIGÓN Y OMAR PURRUTIA PINILLA WHITE PHILLIPS, POR DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE SERGIO FERNÁNDEZ AROSEMENA. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS E. MUÑOZ POPE. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Como consecuencia del veredicto de culpabilidad emitido por un jurado de conciencia, el Segundo Tribunal Superior de Justicia, mediante sentencia de 5 de enero de 1995, condenó a **OMAR PURRUTIA WHITE PINILLA** a la pena principal de dieciséis (16) años de prisión, a la accesoria de diez (10) años de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, una vez cumplida la sanción principal; y le impone la medida de seguridad preventiva de carácter personal, de estar obligado a presentarse cada mes a la Dirección Nacional de Corrección del Ministerio de Gobierno y Justicia durante diez (10) años, luego de cumplida la pena principal y a la prohibición de portar armas por el mismo lapso, una vez recuperada su libertad; y a **PATRICIA BEDOYA BARRIGÓN** a la pena principal de ocho (8) años de prisión y a la accesoria de cuatro (4) años de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, una vez cumplida dicha sanción (fs. 500-512).

Al notificarse de esa decisión jurisdiccional, el procesado White Pinilla anunció recurso de apelación (f. 515), siendo presentado el escrito sustentatorio por su defensor técnico, licenciado Eliécer A. Pérez Sánchez. La Sala, por tanto, conoce esta causa sólo en relación al recurso de apelación promovido en favor de Omar White Pinilla, por lo que está impedida de hacerlo respecto a Patricia Bedoya Barrigón.

DISCONFORMIDAD DEL APELANTE

El licenciado Pérez Sánchez, en extenso escrito, señala que a su defendido se le aplicó una sentencia intermedia de 16 años de prisión por ser el único partícipe del sexo masculino y por ubicar su conducta como cómplice primario. Con respecto a Patricia Bedoya, quien es la persona que causó la muerte, indica que se partió de 16 años, tal vez por ser mujer o del sexo débil y además se le premia con fundamento en lo que dispone el artículo 2112 del Código Judicial modificado por el artículo 23 de la Ley 3 de enero de 1991, con una rebaja de la mitad de la pena, supuestamente por revelar la identidad de los autores, cómplices o instigadores.

Por tanto, considera que el motivo que fundamenta la pena intermedia contradice los principios de igualdad y parcialidad del juzgador, puesto que se violenta el artículo 19 de la Constitución Nacional, dado que la pena no puede ser motivada estableciendo distinciones entre imputados en razón de sexo.

Además, que la conducta típica antijurídica y culpable desplegada por Bedoya Barrigón es de autora, la de Córdoba Cuesta es de cómplice primario y la de su defendido Purrutia White es de cómplice secundario o instigador.

Por un lado señala que Purrutia White fue declarado culpable no como autor sino como partícipe en la muerte de Hernández Arosemena, dado que el cuestionario a que fue sometido el jurado de conciencia se le preguntó ¿Es culpable o inocente de haber participado en la muerte del difunto Sergio Fernández? por lo que su conducta no se puede ubicar en lo establecido en el artículo 38 del Código Penal y que la declaración de declaratoria de culpabilidad lo ubica en alguna de las formas de participación a que se refiere los artículos 39, 40, 41 y 42 del código

punitivo o sea cómplices primarios, secundarios, instigadores o partícipes.

Luego concluye que la conducta de Purrutia White es la de instigador y no la de cómplice primario, como sostiene la sentencia recurrida. No obstante, se contradice, posteriormente, al señalar que la pena que se le debe aplicar a su defendido es la contemplada en el artículo 61 del Código Penal en su segundo párrafo, que se refiere al cómplice secundario. Por lo que solicita se condene a White Pinilla a la pena de principal de cuatro (4) años de prisión y a la accesoria por el mismo término.

Sobre la medida de seguridad aplicada considera que no existe en el expediente ningún examen científico que argumente la peligrosidad o estado de peligrosidad de Purrutia White, lo cual no ha sido replanteada en el presente juicio (fs. 537-547).

OPINIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

En respuesta al traslado, el licenciado Juan Antonio Tejada, Fiscal Primero Superior del Primer Distrito Judicial, considera que no le asiste razón al recurrente, por lo cual la sentencia recurrida debe ser confirmada en todas sus partes. Manifiesta que el tribunal al momento de ponderar la pena fue bastante benévolo con el procesado y hace referencia al salvamento de voto que indica la existencia de suficientes elementos y circunstancias para imponer a ambos procesados la pena máxima de 20 años de prisión (fs. 549-552).

FUNDAMENTACIÓN FÁCTICA

En horas de la noche del 15 de agosto de 1991, murió de manera violenta a consecuencia de herida sufrida con arma de fuego Sergio Fernández Arosemena, maestro de profesión, quien fue encontrado dentro del taxi que conducía, cerca del estadio Juan Demóstenes Arosemena por el área de Curundú. Por ese ilícito son declarados culpables Omar Purrutia White Pinilla y Patricia Bedoya Barrigón por un jurado de conciencia en la audiencia oral y pública celebrada el 14 de septiembre de 1995.

FUNDAMENTO DE LA SALA

Procederá la Sala a examinar los puntos objeto de la disensión de conformidad con las normas procedimentales.

El tribunal a-quo al analizar la situación de White Pinilla, aparte de reconocer que no registra antecedentes penales, determinó su actuación como la de un participe que estimuló la comisión del homicidio.

Es así que explica, que White Pinilla era el único varón y fue quien impartió la orden de ajusticiamiento; que desde un principio estuvo anuente a que se realizara el ilícito, al punto que proveyó el arma con que se ultimaría a la persona que iban a asaltar. Además, que se excusó de accionar el arma de fuego con el argumento de que para él sería más severo el castigo que si lo hiciera alguna de las damas que actuaban en su compañía.

Pero pasó por alto que como instigador es sancionado con la pena que la Ley señala al hecho punible; incluso señala que de darse la posibilidad de excluir la figura de la instigación en el papel desempeñado por White Pinilla, su conducta se trasladaría a la de un cómplice primario, con la misma trascendencia punitiva, dado que está probado que él fue quien suministró el arma de fuego.

Lo anterior es demostrativo, que la participación del procesado White Pinilla fue ubicada como instigador **-quien induce a otro a que realice un hecho punible-** y no como cómplice primario, posibilidad que también se admitió.

Se partió de la pena base de 16 años de prisión y al no observar circunstancias agravantes ni atenuantes, no se alteró ese criterio valorativo.

Al ponderar las pruebas demostrativas de la participación de White Pinilla,

esta Sala no comparte el criterio de la defensa, porque el actuar de White Pinilla está muy lejos de presentar las características de un cómplice secundario **-colaboración de poca monta -.**

En lo que respecta a las medidas de seguridad de carácter personal, nuestro código punitivo, establece que se aplican cuando el autor o participe sea declarado inimputable o disminuida su imputabilidad, por causa de enfermedad mental, por delincuencia habitual o profesional, por dependencia psicofarmacólogica y en los casos que de manera expresa se señale en el mismo (art. 113 del Código Penal).

Luego entonces, si se reconoció que es la primera vez que la justicia penal ordinaria concluye la culpabilidad de White Pinilla en un delito; y además, no hay prueba médico-legal demostrativa de que se den las circunstancias establecidas en el artículo 113 del Código Penal, se reformará la sentencia sólo en el sentido de eliminar las medidas de seguridad impuestas al procesado White Pinilla.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, REFORMA la sentencia apelada en el sentido de ELIMINAR las medidas de seguridad impuestas al procesado OMAR PURRUTIA WHITE PINILLA y lo CONFIRMA en todo lo demás.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) CARLOS E. MUÑOZ POPE
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

JUICIO CONTRA JOSÉ JOEL BEITÍA ELIZONDRO, SINDICADO POR HOMICIDIO EN PERJUICIO DE SU MENOR HIJA JOSELÍN BEITÍA ESCOBAR Y LESIONES PERSONALES EN PERJUICIO DE FULVIA ESCOBAR GÓMEZ. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS E. MUÑOZ POPE. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

En grado de apelación conoce la Sala el expediente que contiene el proceso penal seguido a **JOSÉ JOEL BEYTÍA ELIZONDRO**, quien fue sancionado por el Tribunal Superior de Justicia del Segundo Distrito Judicial como responsable de los delitos de homicidio y tentativa de homicidio en perjuicio de la infante **JOSELÍN BEYTÍA ESCOBAR y FULVIA ESCOBAR GÓMEZ** respectivamente.

La sentencia de 11 de enero de 1996 impuso a BEYTÍA ELIZONDRO la pena de 17 años de prisión y la accesoria de diez años de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, luego de surtido el proceso que en derecho se siguió ante el mencionado Tribunal Superior. Contra esta decisión interpusieron recurso de apelación el sancionado y su defensora de oficio.

Sustentado el correspondiente recurso de apelación por la defensa técnica del sentenciado, corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos en el recurso de apelación correspondiente.

En un breve escrito visible a folios 484-485 del expediente, la defensora de BEYTÍA ELIZONDRO manifiesta que el Tribunal Superior no tomó en cuenta que su defendido aceptó su responsabilidad y que se manifestaba arrepentido de los hechos.

Por otra parte argumentó también que las pruebas recabadas no demuestran

respecto de Fulvia Escobar que estemos en presencia de una tentativa de homicidio, pues a su juicio JOEL BEYTÍA sólo tuvo intención de lesionarla.

Al corrérsele traslado al Ministerio Público para que emita concepto sobre el recurso de apelación interpuesto por la defensa, el Fiscal Superior del Segundo Distrito Judicial recomendó que se mantuviera la resolución impugnada (fs. 488-489).

Para resolver la impugnación, la Sala estima conveniente hacer las siguientes consideraciones:

La Sala no comparte el argumento según el cual el Tribunal Superior no apreció correctamente la confesión de JOEL BEYTÍA, ya que la misma carece de relevancia y eficacia jurídica.

La supuesta confesión expresada durante la vista oral de la causa carece de todo valor, ya que la misma no fue espontánea ni oportuna para que pueda ser apreciada en favor del sujeto, pues la vinculación de BEYTÍA con los hechos punibles objeto de este proceso ya había quedado establecida con anterioridad.

De manera reiterada y constante ésta Sala se ha venido pronunciando sobre el contenido y alcance de la atenuante de confesión espontánea y oportuna del agente que está consagrada en el numeral 5 del artículo 66 del Código Penal, por lo que debe rechazarse este argumento.

Por lo que respecta a que BEYTÍA no tuvo la intención de causar la muerte de Fulvia Escobar y que debe cambiarse la calificación de homicidio tentado por el de lesiones personales, la Sala reconoce que no es fácil trazar una distinción nítida y objetiva entre una y otra figura, como bien pone de manifiesto toda la doctrina penal contemporánea.

En este caso, sin embargo, no cabe duda que existen argumentos objetivos que conducen a la Sala a compartir la calificación de los hechos respecto de Fulvia Escobar, ya que está comprobado que JOEL BEYTÍA con arma blanca atacó a su compañera y le causó graves heridas que pudieron producir la muerte de la misma si no es por la intervención de terceros.

Las numerosas heridas causadas por el victimario a su compañera y la gravedad de algunas de éstas (pabellón auricular izquierdo, región mandibular izquierda y otras), son indicativas de la intención de causar la muerte que la defensa pretende enervar sin mayores argumentos. Todas las heridas que se reseñan en el informe médico forense visible a fojas 82 del expediente ponen de manifiesto una intención seria y reiterada de causar la muerte por parte de JOEL BEYTÍA, quien al decir de quienes lo examinaron, es un sujeto de un carácter impulsivo que denota cierta peligrosidad. No le asiste razón a la defensa, por lo que debe descartarse este otro argumento.

La Sala, por otra parte, no puede pasar por alto que la pena impuesta por el solo homicidio de una infante de un mes de nacida pudo haber sido de veinte años de prisión, lo que aunado a la pena por la tentativa de homicidio impuesta por el delito cometido en perjuicio de Fulvia Escobar no deja duda que la pena impuesta por el Tribunal de primera instancia ha sido benévola, careciendo esta Superioridad de facultades para aumentarla como debiera ocurrir en casos como el que nos ocupa, en donde una niña de apenas un mes de nacida fue muerta por su progenitor en circunstancias inexcusables y muy recriminables.

Por todo lo expuesto, la SALA SEGUNDA DE LO PENAL DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia apelada.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) CARLOS ENRIQUE MUÑOZ POPE

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES

(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.

Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

PROCESOS SEGUIDOS A LUIS ANTONIO SÁNCHEZ MENDOZA Y CELSO ELOY GÓMEZ, SINDICADOS POR LOS DELITOS DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE AXIS BERNAL ESTRADA Y DE LESIONES EN PERJUICIO DE AXIS BERNAL (PADRE). MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, TREINTA (30) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

El Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, mediante sentencia calendada 9 de noviembre de 1995, condenó a Celso Eloy Gómez y a Luis Antonio Sánchez Mendoza a cumplir la pena de 20 años de prisión e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por el término de 5 años; el primero de ellos como autor "de los delitos de Homicidio Doloso Calificado, Lesiones Personales Calificadas, Robo Calificado y Asociación Ilícita para Delinquir" (f. 478), y al segundo como cómplice primario "de los delitos de Homicidio Doloso Calificado, Robo Calificado" y autor de "Asociación Ilícita para Delinquir" (f. 478), hechos punibles cometidos en perjuicio de Axis Bernal Estrada (occiso) y Axis Bernal Acevedo (lesionado).

Contra esta decisión jurisdiccional apelaron Celso Eloy Gómez y su defensor de oficio, licenciado Luis Carlos Arosemena Ramos, al igual que Luis Antonio Sánchez Mendoza.

En su escrito de sustentación sostiene el licenciado Arosemena Ramos que el tribunal a-quo no tomó en consideración que Gómez "padecía de enfermedad mental y que cuando consumía la droga denominada `PIEDRA , se transformaba" (fs. 493-494). También plantea el recurrente que "Mi patrocinado al rendir su declaración indagatoria expuso detalladamente, con pelos y señales, todo lo ocurrido y quienes participaron" (f. 494), por lo que a la luz de lo dispuesto en el artículo 2112 del Código Judicial tenía "derecho a una rebaja de hasta la mitad de la pena" (f. 494).

Finalmente, el letrado defensor solicita que se reforme la pena de 20 años, ya que, "De conformidad con el artículo 66 numerales 3, 4 y 5 del Código Penal la actuación posterior de **CELSO** modifica su responsabilidad penal" (f. 495).

La licenciada Mireya Rodríguez Monteza, defensora de oficio del imputado Sánchez Mendoza, expresa en primer término que la sanción penal impuesta por el a-quo es "excesiva e injusta", por cuanto que en la conducta de su patrocinado concurren circunstancias atenuantes que no fueron contempladas por el juzgador, como las contenidas en "el numeral octavo del artículo 66 del Código Penal" (f. 497).

De otra parte, la recurrente censura el grado de complicidad primaria que se le atribuye a su defendido, por considerar que "las declaraciones que tratan de incriminar a mi patrocinado, la madre del occiso ... Genaro Espinoza Morán ... y Celso Gómez ... son falsas, contradictorias y fueron absolutamente desechadas por las declaraciones de Catalino y de Celso Gómez en la fase plenaria" (f. 498).

La defensora técnica formula también reparos en torno a la culpabilidad de Sánchez Mendoza, señalando básicamente que "Quedó plenamente demostrado en la vista oral, que mi patrocinado no estuvo presente en el momento del Robo donde perdiera la vida AXIS BERNAL ESTRADA ... que mi patrocinado es inocente y que la pena impuesta por el Segundo Tribunal es injusta y deja de valorar otros hechos ciertos" (f. 499). No obstante, debe la Corte advertir que la culpabilidad de Sánchez Mendoza fue declarada por un jurado de conciencia, decisión visible a folios 357, 359 y 360 del cuaderno penal. Por tratarse, entonces, de un veredicto autónomo, definitivo, obligatorio e irrevocable, no sujeto a justificación normativa alguna, resultan improcedentes los reclamos formulados a este respecto.

Conocidos los argumentos de los recurrentes, pasa la Sala a resolver la sentencia condenatoria impugnada, sólo sobre los puntos censurados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2428 del Código Judicial.

Las piezas procesales permiten conocer que en horas de la noche del 30 de enero de 1993, en el sector de San Isidro, Distrito de San Miguelito, provincia de Panamá, resultó muerto Axis Bernal Estrada a causa de: "A) CHOQUE HEMORRÁGICO. B) PERFORACIÓN HEPÁTICO E HILEO RENAL. C) HERIDA PENETRANTE POR PROYECTIL DE ARMA DE FUEGO EN ABDOMEN" (f. 64), en tanto que Axis Vianor Bernal Acevedo recibió "herida por proyectil de arma de fuego en abdomen" (f. 159), que lo incapacitó por "TRES (3) SEMANAS" (f. 159). Las primeras investigaciones señalaron como responsables del hecho a Celso Eloy Gómez y Luis Antonio Sánchez Mendoza.

a) **Situación jurídica de Celso Eloy Gómez:**

En primer lugar, la Sala desestima la afirmación de que el imputado "padecía de enfermedad mental" (f. 494) al momento de perpetrar el ilícito, toda vez que, según lo consigna la psiquiatra forense del Instituto de Medicina Legal, el procesado Gómez "No tenía alterada sus facultades mentales en el momento de ocurrir los hechos ... No se marca (sic) dentro de las prerrogativas de los artículos 24 y 25 del Código Penal. Es psíquicamente imputable" (f. 144), y su responsabilidad emerge de su propia confesión, hecha tanto en la declaración indagatoria como en su ampliación.

De otra parte, con relación a la solicitud de "una rebaja de hasta la mitad de la pena" (f. 494) que reclama el recurrente, la Sala resalta que, según lo preceptuado en el artículo 2112 del Código Judicial, inciso final, el imputado que "revela la identidad de los autores, cómplices o encubridores, siempre y cuando aporte indicios suficientes para el enjuiciamiento de éstos, tendrá derecho a una rebaja de hasta la mitad de la pena, a criterio del Juez". Tal como se aprecia, la cooperación que brinda el indagado para esclarecer la autoría o participación en el delito investigado, es una circunstancia cuya valoración está supeditada al **criterio del juzgador**, de modo que carece de amparo legal exigir su reconocimiento en esta etapa procesal.

En cuanto a la pretensión de que se reconozcan en favor del procesado las atenuantes comunes consagradas en los numerales 3, 4 y 5 del artículo 66 del Código Penal, la Sala considera que tampoco le asiste razón a la defensa técnica. Si el imputado Gómez, al ser sometido a los rigores de la declaración indagatoria, admite que "tenía un arma de fuego en mis manos ... llegué a la casa ... le grité a los jugadores ... esto es un asalto ... desde la calle les apuntaba, monté el martillo del revólver ... un señor blanco ... se echó (sic) para atrás ... apreté el gatillo" (f. 70), resulta entonces inaceptable el argumento de que se encontraba en una situación de inferioridad. Tampoco es posible reconocer el arrepentimiento, pues el sentenciado, luego que detonó su arma de fuego, salió "corriendo ... cogí un bus y me fui a mi casa a Cerro Batea" (f. 70), es decir, no efectuó ningún acto tendiente a disminuir las consecuencias dañinas de su actuar delictivo.

De igual manera, si el propio reo afirma que "cuando vi el lunes el periódico, me di cuenta que el señor a quien disparé había muerto ... cogí mi ropa y me fui ... donde un abuelo mío en PANAMÁ VIEJO ... Después ... me fui para PAITILLA, donde vive mi abuela ... después en el día ... diecinueve de febrero ... fueron a buscarme cuatro detectives" (f. 70), por lo que está claro que no tenía la intención de asumir la responsabilidad derivada de su conducta ilícita. Además, se observa que con anterioridad a la diligencia indagatoria ya se habían recibido pruebas testimoniales que señalaban a Celso Eloy Gómez como autor del hecho de sangre, por lo que tampoco cabe el reconocimiento de la confesión espontánea y oportuna.

b) **Situación jurídica de Luis Antonio Sánchez Mendoza:**

Con relación a la solicitud de que se apliquen las circunstancias establecidas en el "numeral octavo del artículo 66 del Código Penal" (f. 497), en reiteradas ocasiones esta Corporación de Justicia ha manifestado que el reconocimiento de este beneficio está inscrito dentro la facultad discrecional del juzgador, de modo que el reclamo hecho por la recurrente a este respecto no puede ser considerado.

En cuanto a la complicidad primaria cuestionada por la defensa técnica, cabe destacar que se trata de un grado de participación criminal en el cual nuestro Código Penal ubica a "los que tomen parte en la realización del hecho punible o **presten al autor o autores un auxilio sin el cual el hecho no habría podido cometerse**" (art. 39 C. P.). La culpabilidad de Sánchez Mendoza, alias "Manamaná", como se dijo en párrafos precedentes, fue declarada por un tribunal de jurados de conciencia, tras ser comprobada su participación en los hechos punibles imputados. La prueba de que el proceder de Sánchez Mendoza se enmarca dentro del concepto de complicidad primaria emerge del relato que ofrece Celso Eloy Gómez, quien en su declaración jurada manifestó que "MANAMANÁ y el hermano de PINOCHO ... planearon el asalto, yo no conocía el área, y no tenía arma ni balas. Ellos me dijeron que había un prestamista que ... estaba jugando en la residencia de los Bernal, y me dijeron que ellos no podían hacerlo porque ellos vivían cerca de la residencia de los Bernal ... MANAMANÁ consequió (sic) las balas para el arma" (fs. 95-96). Precisamente la obtención de los proyectiles para cargar el arma homicida es un comportamiento que facilitó la ejecución del ilícito, por ende, se colige que la participación del reo se ubica dentro del concepto de complicidad primaria.

Con base en lo expuesto hasta ahora, se concluye que en la encuesta penal no existen circunstancias que modifiquen la responsabilidad criminal de los sentenciados. Sin embargo, no concuerda la Corte con la tasación de la pena que en el presente caso ha efectuado el tribunal a-quo; veamos. En primer lugar, se constata que el jurado de conciencia declaró culpable a Celso Eloy Gómez de haber participado en: a) la muerte de Axis Bernal Estrada (f. 353), b) las lesiones de Axis Bernal Acevedo (f. 354), c) el robo perpetrado en la residencia de la familia Bernal (f. 355), y d) la asociación ilícita para delinquir (f. 356). Por su parte, Luis Antonio Sánchez Mendoza también fue encontrado culpable de haber participado en los mismos hechos punibles, a excepción de las lesiones personales ocasionadas a Bernal Acevedo (fs. 357-360).

Se observa que, con fundamento en el artículo 64 del Código Penal, que regula el principio del concurso real de delitos, la sentencia apelada parte del ilícito más grave: "Homicidio Doloso Calificado, tipificado en el artículo 132, ordinal 6°, del Código Penal" (f. 476), fija en 20 años de prisión la pena aplicable y considera que "no es necesario hacer la operación aritmética con respecto a los otros delitos" (f. 476-477).

Ahora bien, resulta necesario destacar que la agravante específica establecida en el numeral 6 del artículo 132 del Código Penal consiste en que el homicidio se haya ejecutado "Inmediatamente después de haberse cometido otro delito, para asegurar su ocultación, su ventaja o la impunidad para sí o para un tercero o porque no se pudo alcanzar el fin propuesto". No obstante, la Sala advierte que el argumento empleado por el tribunal de instancia para condenar a los procesados a la pena de 20 años de prisión no guarda relación alguna con el contenido implícito de este tipo penal. El a-quo se limita simplemente a señalar que "los procesados violentaron la convivencia de sus víctimas ... no es justificada su forma de proceder, sorprendieron a sus víctimas" (f. 476), en lugar de exponer en forma detallada los elementos de hecho y de derecho que sustentan la configuración de la citada agravante.

En el caso que ahora nos ocupa, está comprobado que la resolución delictiva estaba dirigida a cometer un robo; sin embargo, debido a que el agresor portaba arma de fuego, se infiere de ese hecho que en esa conducta se encontraba implícita la voluntad de causar la muerte para **facilitar la ejecución** del propósito delictivo pues, para apoderase del dinero apostado en el juego de azar, Gómez sacó a relucir su arma de fuego "desde la calle les apuntaba" y alista "el martillo del revólver" (f. 70). Sobre este tema, la Sala Penal se ha pronunciado en reiteradas ocasiones señalando que, "cuando el homicidio constituye el delito-medio, la situación jurídica no se rige por los postulados del concurso real de delito, sino que la misma debe ser calificada como delito de homicidio agravado" (Registro Judicial, junio de 1993, pág. 198). Esto quiere decir, que el delito de robo pasa a formar parte del tipo penal de homicidio, de conformidad con lo preceptuado en el numeral 5 del artículo 132 del Código Penal.

Siendo esta la situación, la Corte pasa a dosificar la pena correspondiente, atendiendo los criterios que a continuación se exponen. En lo concerniente a la situación procesal de Celso Eloy Gómez, debe ser sancionado como autor del delito de homicidio en la forma agravada que contempla el numeral 5 del artículo 132, por lo que, con base en la discrecionalidad judicial prevista en el artículo 56 del Código Penal, considera la Sala que la pena correspondiente debe ser fijada en quince (15) años de prisión. Por lo que hace al delito de lesiones perpetrado en perjuicio de Axis Bernal Acevedo, las que, según la sentencia censurada, "son calificadas, porque produjeron incapacidad mayor de 30 días y están tipificadas en el artículo 136 del Código Penal, cuya pena es de 1 a 3 años" (f. 474), le atañe al juzgador fijar la pena en dos (2) años de prisión. Finalmente, por la comisión del delito de asociación ilícita para delinquir, consagrado "en el artículo 242 del Código Penal, cuya sanción es de 1 a 3 años" (f. 474), se fija también la pena en (2) años de prisión.

Como quiera que el procesado Gómez es culpable de tres hechos punibles, resulta indispensable proceder según el mandato que trae el literal b) del artículo 64 del Código Penal, a los efectos de individualizar la pena correspondiente. La operación aritmética respectiva da como resultado una pena líquida de diecisiete (17) años de prisión a imponer.

En cuanto a la situación procesal de Luis Antonio Sánchez Mendoza, como ya quedó establecido en párrafos precedentes, su conducta se enmarca, en la calidad de cómplice primario, dentro del numeral 5° del artículo 132 del Código Penal, lo que da lugar a que la Sala fije igualmente la pena en quince (15) años de prisión. Asimismo, por la autoría del delito de asociación ilícita para delinquir, se le impone una sanción de dos (2) años de prisión. Como se trata de dos hechos punibles, atendiendo a lo normado en el acápite a) del artículo 64 del Código Penal, el resultado se representa en una pena líquida de quince (15) años y ocho (8) meses de prisión.

En virtud de lo antes expuesto, LA CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, REFORMA la sentencia de 9 de noviembre de 1995, proferida por Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, en el sentido de CONDENAR a Celso Eloy Gómez a la pena de diecisiete (17) años de prisión, y a Luis Antonio Sánchez Mendoza a la pena de quince (15) años y ocho (8) meses de prisión, y la CONFIRMA en lo demás.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) JOSÉ M. FAÚNDES (fdo.) AURA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

TRIBUNAL DE INSTANCIA

SUMARIAS EN AVERIGUACIÓN DEL ACCIDENTE AUTOMOVILÍSTICO, EN COLISIÓN OCURRIDA ENTRE JUAN CARLOS CEDEÑO BETHANCOURT Y LA MAGISTRADA SANDRA HUERTAS DE ICAZA. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, TRECE (13) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Mediante Oficio N° 092-CP-JST-94, calendado el 25 de julio de 1994, el licenciado Joaquín Pérez Calderón, Juez Segundo de Tránsito, remitió al Presidente de la Corte Suprema de Justicia las diligencias relacionadas con un accidente de tránsito que tuvo lugar en la avenida Ricardo J. Alfaro y Miguel Brostella el día 16 del mismo mes y año, en el que fueron protagonistas el señor **JUAN CARLOS CEDEÑO BETHANCOURT**, conductor de un camión marca Nissan con matrícula

2C-763 y la Magistrada del Segundo Tribunal Superior de Justicia, **SANDRA HUERTAS DE ICAZA**, conductora de un auto sedán marca Nissan, con matrícula E-19.

De conformidad al procedimiento que se sigue en estos casos, se pidió a la Magistrada Sandra de Icaza declaración jurada escrita en la que debía responder el siguiente interrogatorio:

1. Clase y marca de automóvil que operaba al momento del hecho.
2. Dirección seguida por su vehículo.
3. En qué lugar de la vía ocurrió el hecho y en qué lugar recibió impacto su vehículo.
4. Qué clase de vehículo intervino con usted en la producción de la colisión, qué dirección seguía, en qué momento y circunstancias advirtió usted su presencia;
5. Manifieste si está de acuerdo con el reporte de tránsito sobre el accidente ocurrido.
6. Señale y aporte cualquier otro dato o información que contribuya a que se conozca mejor el hecho y se pueda adoptar la decisión legal que corresponde.

El 27 de octubre de 1994 (cfr. fs. 5-6) fue presentada la declaración jurada, solicitada a la Magistrada De Icaza, y en lo pertinente expresó que "el otro vehículo que intervino en la colisión, según aparece descrito en el reporte de accidente es marca Nissan camión con matrícula 2C-763. La dirección que seguía dicho vehículo era de la Avenida Miguel Brostella hacia la calle E El Dorado. El accidente se produce en momento en que estábamos haciendo el cruce de la avenida Ricardo J. Alfaro con respecto a la dirección seguida por cada uno de los vehículos involucrados. Advertí la presencia del otro conductor, cuando el mismo giró en forma de U, lo que está prohibido y existe señalamiento de tal prohibición."

Mediante providencia calendada el 7 de noviembre de 1994, se dispuso recibirle declaración al señor Juan Carlos Cedeño, quien era el otro conductor involucrado en el hecho motivo de la presente investigación, fijándose el día 14 de noviembre a las diez de la mañana, para la práctica de esa diligencia. A partir de ese momento, la Secretaría de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, inició la localización de Juan Carlos Cedeño, con cédula 2-145-853, con resultados infructuosos, pues ni en la dirección ni el teléfono suministrados conocían de su existencia y solo aparecía una persona de nombre Juan Jaén Espinosa, a quien se le citó a la Secretaría y aportó la documentación de identidad personal, probando así que no se trataba de la persona involucrada en el accidente de tránsito que origina este expediente, a pesar de que coincidía la dirección y teléfono anotados en el parte policivo de tránsito.

Mediante oficios dirigidos al Director Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, a la Caja de Seguro Social y a la Dirección de Cedulación del Tribunal Electoral, se llevaron a cabo distintas gestiones desde enero de 1995 y solamente el Director Nacional de Cedulación dio respuesta a lo solicitado, remitiendo copia de la cédula y de la solicitud en la que informa que el número de cédula suministrado corresponde a Juan Carlos Cedeño Bethancourt, nacido en Antón el 20 de noviembre de 1972 y repite la dirección de residencia en Cerro Batea, San Miguelito, lugar donde antes fue localizado Juan Jaén Espinosa, no así Juan Cedeño Bethancourt.

El informe de tránsito N° 29441 de 15 de julio de 1994, firmado por el Inspector N° 48, J. Mendieta, describe que el vehículo conducido por Cedeño fue el que impactó al de la Magistrada Sandra Huertas De Icaza, porque en su maniobra violó el artículo 80 inciso e) del Reglamento de Tránsito, que se refiere al cruce de las vías de tránsito reguladas por semáforos.

En vista de que este expediente ha permanecido por largo tiempo en secretaría para localizar al señor Juan Cedeño y por las diligencias realizadas se advierte que suministró una dirección falsa, a lo que se añade la ausencia colaboración interinstitucional de las oficinas de Tránsito y Transporte Terrestre para establecer quién es el propietario del camión Nissan del año 1980 que conducía Cedeño Bethancourt el día de la colisión, procede adoptar una

decisión con los elementos de juicio incorporados al expediente.

En las condiciones anotadas, en el expediente consta que se registró una colisión, el nombre de las personas involucradas, el informe de tránsito que señala con claridad que hubo una infracción reglamentaria de parte del conductor del camión y que éste en forma evasiva suministró teléfono y dirección que corresponden a otra persona; hay mérito para declarar a Juan Carlos Cedeño Bethancourt, incurso en infracción de tránsito.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA a JUAN CARLOS CEDEÑO BETHANCOURT, varón, panameño, soltero, mayor de edad, hijo de Juan Cedeño y Eneida Bethancourt, nacido en Antón, Provincia de Coclé, el 20 de Noviembre de 1972, portador de la cédula de identidad personal N° 2-145-853, CULPABLE de la colisión ocurrida el 16 de Junio de 1994 por haber infringido el literal e) del artículo 80 del Reglamento de Tránsito y lo SANCIONA al pago veinte balboas (B/.20.00) de multa a favor del Tesoro Nacional y a reparar los daños causados al vehículo de la Magistrada SANDRA HUERTAS DE ICAZA.

BASE LEGAL: artículos 70, 71, 80 literal e) y 160 numeral 20 del Decreto Ejecutivo 160 de 7 de junio de 1993.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

JUICIO SEGUIDO A ALBERTO ANTONIO GONZÁLEZ RAMOS, SINDICADO POR EL DELITO DE HOMICIDIO CALIFICADO COMETIDO EN PERJUICIO DE LEONARDO CAMPOS CRUZ. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, TREINTA (30) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Moisés Espino Bravo, defensor de oficio de Alberto Antonio González Ramos, ha interpuesto recurso de apelación contra la sentencia de 14 de marzo de 1996, proferida por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, que condena a González Ramos a la pena de 17 años con 6 meses de prisión, como responsable del delito de homicidio cometido en perjuicio de Leonardo Campos Cruz.

Según se desprende del libelo de apelación, el recurrente censura la aplicación de las circunstancias agravantes contempladas en los numerales 1 y 5 del artículo 67 del Código Penal, ya que, según su parecer, la "superioridad ..." y el "empleo de la astucia ..." se encuentran implícitos en la premeditación (f. 778).

Conocidos los argumentos medulares del recurrente, se pasa a resolver la alzada sólo sobre los puntos a que se refiere el impugnante, de conformidad con lo que establece el artículo 2428 del Código Judicial.

Las piezas procesales permiten conocer que en la madrugada del 19 de marzo de 1994, en el corregimiento de Los Llanos, Distrito de Ocú, provincia de Herrera, Alberto Antonio González Ramos esperó en un camino vecinal a Leonardo Campos Cruz, para asestarle un machetazo que le ocasionó una herida en el cuello. El dictamen médico-legal consignó que la herida "... fue de naturaleza necesariamente mortal. La perdida de las funciones motoras fue instantánea así como cualquiera capacidad para adoptar ninguna actitud de agresión o de defensa". Concluye el informe de la medicatura forense que la muerte fue causada por "a. Colapso neuromotor agudo. b. colapso volémico agudo. c. sección de médula espinal

y grandes vasos cervicales" (f. 143).

El tribunal a-quo encuadró la conducta del reo en el artículo 132 del Código Penal, por considerar que el homicidio fue ejecutado con premeditación. La sentencia impugnada individualiza en 15 años la pena base, la que se aumenta en dos sextas partes al aplicar las agravantes contempladas en los numerales 1 y 5 del artículo 67 del Código Penal. La sentencia disminuye en una sexta parte la pena, al reconocerle al reo la circunstancia atenuante prevista en el numeral 5 del artículo 66 del Código Penal. La operación aritmética fija en 17 años con 6 meses la pena de prisión aplicable al reo. (Fs. 770-771).

La Corte debe adelantar que es inexacto el argumento del recurrente, cuando señala que la sentencia atacada aumenta la pena de su defendido, por considerar que actuó con abuso de superioridad. En efecto, la sentencia en censura establece con claridad que se aplica el numeral 1 del artículo 67 del Código Penal, porque Alberto Antonio González Ramos, "empleó ... medios que dejaron completamente en indefensión a Leonardo Campos Cruz" (f. 770), afirmación que sin asomo de dudas manifiesta que el condenado empleó medios que debilitaron la defensa del ofendido. Siendo que el recurrente ataca una circunstancia de agravación común que la sentencia apelada no ha reconocido, corresponde a la Sala desestimar el reclamo sobre la aplicación del numeral 1 del artículo 67 del Código Penal.

En cuanto al reparo concerniente a la posible utilización de astucia, es importante resaltar que Alberto Antonio González Ramos, al rendir declaración indagatoria, sostiene que esperó a Leonardo Campos Cruz en un camino, y que cuando la víctima" ... iba de espalda ... salí al camino y le pegue un solo machetazo con mi rula ... (f. 76). El relato del sentenciado sólo refleja el propósito firme, reflexivo, persistente y bien meditado del imputado para ejecutar el delito de homicidio, pero no arroja evidencia que apunte a que el sentenciado hubiera utilizado algún artificio que permita determinar, sin asomo de dudas, que el sentenciado empleó astucia.

Luego de examinada la pretensión de la defensa técnica, se pasa a dosificar la pena correspondiente. El a-quo determinó que la conducta del reo se adecua en el numeral 2 del artículo 132 del Código Penal y fija la pena base en 15 años de prisión. La pena así fijada se aumenta en una sexta parte -17 años y 6 meses- , por cuanto se mantiene la aplicación de la circunstancia agravante prevista en el numeral 1 del artículo 67 del Código Penal. Sin embargo, la pena base se disminuye en una sexta parte, por concurrir en favor del encartado la atenuante prevista en el numeral 5 del artículo 66 del Código Penal, atenuante que la sentencia atacada reconoce al sentenciado. Así las cosas, la pena líquida aplicable al sentenciado queda fijada en 15 años de prisión.

Por lo antes expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, REFORMA la sentencia apelada, CONDENA a Alberto Antonio González Ramos a la pena de 15 años de prisión, y la confirma en todo lo demás.

Devuélvase y Notifíquese.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES R. (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

TRIBUNAL DE INSTANCIA

SUMARIAS SEGUIDAS A ERNESTO MUÑOZ GAMBOA, IMPUTADO POR EL DELITO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, SEGÚN DENUNCIA SUSCRITA POR MARITZA GISELA MONTENEGRO MONTENEGRO. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Procedente de la Procuraduría General de la Nación, ingresó a la Sala Penal de la Corte Suprema, el sumario contentivo de la denuncia criminal interpuesta por **MARITZA GISELA MONTENEGRO MONTENEGRO**, en su propio nombre, contra el licenciado **ERNESTO MUÑOZ GAMBOA**, Director Nacional del Instituto de Defensoría de Oficio, por la supuesta comisión de delito contra la Administración Pública.

Al presentar la denuncia bajo estudio, **MARITZA GISELA MONTENEGRO MONTENEGRO**, se manifiesta en los términos siguientes:

> "Resulta ser que yo estuve trabajando con el Lcdo. ERNESTO MUÑOZ GAMBOA, durante 4 años, era funcionaria de Carrera Judicial, debido a las desaveniencias (sic) que teníamos, más bien de índole personal, me vi obligada a renunciar el día 18 de octubre de 1995, en el cargo de Recepcionista titular. El Lcdo. LUIS CARLOS AROSEMENA, Defensor de Oficio Distrital me nombró como Auxiliar de Defensor de Oficio el día 19 de octubre de 1995, luego de haber sido nombrada y de haber renunciado, el Lcdo. MUÑOZ GAMBOA el día 30 de octubre de 1995, me destituye del cargo de recepcionista, cuando ya se había presentado la renuncia y había sido nombrada en otro puesto. Anteriormente el Lcdo. MUÑOZ GAMBOA m (sic) suspendió tres (3) días sin derecho a salario, aduciendo que había actuado en forma irrespetuosa arrogante, ese mismo día de la suspensión y le presenté un recurso de Reconsideración el cual nunca respondió, diciendo que él era el Jefe y me tenía que ir del Instituto porque él así lo ordenaba, gritándome en el pasillo, de eso hay testigos, y tomando como testigos a su Secretaria MITSELA DE LA CRUZ y al Lcdo. GABRIEL FERNÁNDEZ, estuvo apunto de agredirme físicamente. Testigos de eso son MIGADALIA CARRASCO, JACQUELINE BONILLA, ANAYANSI DE LA CRUZ, LCDO. RUBÉN PEKIU, y otras personas funcionarias del Instituto de Defensoría de Oficio, además visitantes. El Lcdo. MUÑOZ aduce que la destitución esta (sic) basada en el Fundamento de Derecho artículo 125 de la Ley N° 9 del 21 de junio de 1994, y el artículo 793 del Código Administrativo, el cual en conclusión me parece erróneo puesto que yo fui nombrada mediante carrera judicial, por lo que era titular en el cargo que desempeñaba. Según demuestra también hace algún tiempo atrás me quería destituir y pienso que como me adelanté a la renuncia buscó otros motivos para la destitución. ... ." (Fs. 1-2).

La denunciante aportó las siguientes pruebas:

1. Fotocopia debidamente autenticada de la Carta de renuncia, dirigida al licenciado **ERNESTO MUÑOZ GAMBOA**, fechada 18 de octubre de 1995 (f. 5).

2. Fotocopia debidamente autenticada de la Resolución N° 104 de 30 de octubre de 1995, mediante la cual el licenciado **ERNESTO MUÑOZ GAMBOA**, Director Nacional del Instituto de Defensoría de Oficio, destituye a la denunciante (fs. 6-7).

3. Fotocopia debidamente autenticada del Recurso de Reconsideración presentado por la denunciante, contra el Director Nacional de la Defensoría de Oficio, el día 29 de junio de 1995 (fs. 19-20).

4. Fotocopia debidamente autenticada del Formato de queja presentado ante la Procuraduría de la Administración, por la denunciante, contra el licenciado **ERNESTO MUÑOZ GAMBOA**, Director Nacional de la Defensoría de Oficio (fs. 17-18).

5. Fotocopia de la Nota N° 585 de 19 de diciembre de 1995, enviada al licenciado **MUÑOZ GAMBOA**, firmada por la Procuradora General de la Administración, mediante la cual solicita un informe explicativo, en virtud de la queja presentada en su contra (fs. 14 a 16).

6. Fotocopia debidamente autenticada del informe de conducta de 18 de enero

de 1996, suscrito por el Director Nacional de la Defensoría de Oficio, Licenciado **ERNESTO MUÑOZ GAMBOA** (fs. 9 a 13).

7. Fotocopia de Nota N° Q-10 de 26 de enero de 1996, del Procurador Suplente de la Administración, enviada a **MARITZA MONTENEGRO** (f. 8), de la cual se desprende que la destitución del cargo que desempeñaba ésta en el Instituto de Defensoría de Oficio obedecía a las siguientes razones:

> "Al incumplimiento de sus deberes como servidora pública; haberse ausentado injustificadamente de su puesto; el no usar correctamente su uniforme, y cometer irregularidades en el ejercicio de sus funciones que violan el Reglamento Interno de la Institución.
>
> Por estas faltas se procedió a sancionarla disciplinariamente, mediante amonestación verbal, luego escrita y finalmente se le destituyó. ..." (f. 8).

Primeramente, advierte la Sala que, el funcionario denunciado en el presente negocio, **ERNESTO MUÑOZ GAMBOA**, actualmente se encuentra desempeñando la posición de Director Nacional del Instituto de Defensoría de Oficio; en razón de esto, se trata de un proceso especial por la calidad de servidor público del denunciado, y debe aplicársele lo dispuesto en el Capítulo II, Título IX del Código Judicial, sobre los procesos contra servidores públicos. En este sentido, cuando se promueve denuncia o acusación por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de los servidores públicos, se debe acompañar la prueba sumaria del relato, por cualquiera de los medios que enumera el artículo 2073 del Código Judicial.

Por otro lado, de los antecedentes sumariales expuestos se advierte que, la prueba documental aportada por el denunciante con la finalidad de acreditar los ilícitos imputados reúne, en su gran mayoría, los requisitos de eficacia jurídica en cuanto a su autenticidad, según lo establecido por el artículo 820 del Código Judicial.

A juicio de la Sala, los documentos mencionados reúnen, el requisito de la autenticación, pero, adolecen de la exigencia primordial que para este tipo de procesos contra servidores públicos establece el artículo 2471 del Código Judicial, como es la efectividad e idoneidad de la prueba sumaria para acreditar el hecho punible irrogado.

La Procuraduría General de la Nación, mediante Vista N° 32 de 3 de mayo de 1996 (fs. 26 a 28), "por considerar que no se ha demostrado la comisión de hecho punible alguno", solicita se dicte sobreseimiento definitivo de carácter impersonal dentro del presente sumario, toda vez que:

> "El hecho atribuido por la denunciante al licenciado ERNESTO MUÑOZ GAMBOA constituye un acto eminentemente administrativo, por lo tanto la vía que para atacarlo prevé el ordenamiento legal es a través de los medios de impugnación ordinarios, los que de no prosperar abren el camino hacia la vía contencioso administrativa." (Fs. 27-28).

Ahora bien, el artículo 2471 dice que toda persona que promueva acusación o denuncia contra algún servidor público deberá acompañar la prueba sumaria de su relato, es decir, cualquier medio probatorio que acredite el hecho punible atribuido, los cuales deben ser idóneos, es decir, lo suficientemente elocuentes para que por sí solos acrediten el hecho punible que se le imputa al denunciado.

Con relación al fondo del asunto, la Sala es de la opinión, que la acción cuya ejecución se endilga al funcionario denunciado no constituye el delito que se le imputa, ya que esas evidencias no están relacionadas con los hechos imputados al servidor público denunciado, es decir, el abuso de autoridad y la extralimitación de funciones, los hechos expuestos en la denuncia no revelan en el denunciado la intención dolosa de cometer las acciones delictivas imputadas, la conducta por él realizada no es típica, razón por la cual, no constituye delito a la luz de lo normado en el Código Penal, más por el contrario, la Sala

ha llegado a la conclusión de que los hechos atribuidos al licenciado **ERNESTO MUÑOZ GAMBOA**, de acuerdo con lo señalado por el Agente del Ministerio Público, no se enmarcan dentro de lo doloso, sino que son consecuencias de actos administrativos, que en todo caso pueden ser ilegales o no, pero por sí solos no tipifican delito, conforme a nuestra legislación penal.

Además de que, los documentos aportados adolecen de la efectividad e idoneidad de la prueba sumaria para acreditar el hecho punible. Es decir, que aunque el denunciante haya aportado una cantidad de documentos, se considera que los mismos no tienen la idoneidad suficiente para acreditar el hecho punible atribuido al denunciado.

La Sala concuerda con lo señalado por el Jefe Máximo del Ministerio Público, en virtud de que de los elementos probatorios incorporados a la denuncia no se infiere la comisión de ningún delito, ya que la Resolución N° 104 de 30 de octubre de 1995 (fs. 6-7), es un acto arbitrario de trascendencia administrativa, no así un acto que configure una conducta delictiva de abuso de autoridad, por lo que es del caso proceder al archivo de la presente encuesta sumarial con sobreseimiento definitivo, de carácter impersonal, de conformidad con el ordinal 2 del artículo 2210 del Código Judicial.

Por lo expuesto, la Corte Suprema, Sala Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, SOBRESEE DEFINITIVAMENTE la presente encuesta sumarial, de manera impersonal, con base en el numeral 2 del artículo 2210 del Código Judicial y, por consiguiente, ORDENA el ARCHIVO del sumario contentivo de la denuncia criminal interpuesta por MARITZA GISELA MONTENEGRO MONTENEGRO, en su propio nombre, contra el licenciado ERNESTO MUÑOZ GAMBOA, Director Nacional del Instituto de Defensoría de Oficio, por la supuesta comisión de delito contra la Administración Pública.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) MARIANO HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ÓRGANO JUDICIAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA TERCERA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

MAYO 1996

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN

DEMANDA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO DOMINGO SANTIZO EN REPRESENTACIÓN DE ROSARIO MARTÍNEZ , PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL EL DECRETO N° 3 DE 1° DE JUNIO DE 1995, EXPEDIDO POR EL PRESIDENTE DEL PATRONATO DEL CENTRO VOCACIONAL "BASILIO LAKAS" Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, SEIS (6) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Lcdo. Domingo Santizo, actuando en representación de ROSARIO MARTÍNEZ, ha presentado demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción, para que se declare nulo por ilegal, el Decreto N° 3 de 1° de junio de 1995, expedido por el Presidente del Patronato del Centro Vocacional "Basilio Lakas".

El Magistrado Sustanciador procede en primer término a la revisión de la demanda incoada, en vías de determinar si el libelo ha cumplido con los requisitos legales que hagan viable su admisión.

A primera vista, se observa que la misma no puede ser admitida ya que el actor no ha acompañado copia autenticada del acto impugnado con la constancia de su notificación, consistente en el Decreto N° 3 de junio de 1995 por el cual se separó del cargo que ocupaba como funcionaria del Patronato del Centro de Educación Vocacional "Basilio Lakas". Esta situación contraviene lo dispuesto en el artículo 44 de la ley 135 de 1943 que establece: **"a la demanda deberá acompañar el actor una copia del acto acusado ..."**, elemento éste que no consta en el expediente, ya que si bien se hace referencia a la carta de despido de la señora MARTÍNEZ, no se dejó constancia del Decreto N° 3 de 1° de junio de 1995, acto principalmente acusado.

Tampoco se acompañó a la demanda, el recurso de reconsideración que la parte demandante, a foja 7 del libelo, indica haber presentado, ni de la supuesta decisión que confirmó dicha resolución agotando la vía gubernativa, circunstancia que no le permite a esta Sala determinar con precisión si la demanda ha sido interpuesta en tiempo oportuno, en atención a lo dispuesto artículo 27 de la ley 33 de 1946.

En el renglón contentivo de las disposiciones que se estiman violadas y el concepto en que lo han sido, se observa que la única norma que se aduce infringida es el artículo 68 de la Constitución Nacional. Hay que tener presente, como ha sido jurisprudencia constante y reiterada de esta Sala, que cuando la norma que se estima violada es de rango constitucional, no compete a este Tribunal entrar al examen del cargo planteado, por ser ésta una atribución privativa del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, guardián del control de la constitucionalidad.

Por motivos de economía procesal, y en vista de los diferentes defectos que se detectan en el libelo, la Sala no entra a conocer de la solicitud de suspensión de los efectos del acto impugnado que se incluye en la demanda, y lo procedente es negarle el curso legal a la misma, conforme a lo previsto en el artículo 50 de la ley 135 de 1943.

En consecuencia, el Magistrado Sustanciador en representación de la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción, interpuesta por el Licdo. Domingo Santizo en representación de ROSARIO MARTÍNEZ, para que se declare nulo por ilegal, el Decreto N° 3 de 1° de junio de 1995, emitido por el Presidente del Patronato del Centro Vocacional "Basilio Lakas".

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. ADEMIR MONTENEGRO, EN REPRESENTACIÓN DE ADELA C. DE CARDOZE, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 4/95 DE 17 DE MARZO DE 1995, DICTADA POR LA COMISIÓN NACIONAL DE BOLOS DE PANAMÁ, LOS ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, SEIS (6) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

Mediante Vista Fiscal N° 119 de 14 de marzo de 1996, la señora Procuradora de la Administración promovió y sustentó formal recurso de apelación contra la Providencia fechada 13 de febrero de 1996, mediante la cual el Magistrado Sustanciador **Admitió** las presentes Demandas de Plena Jurisdicción, formuladas por el licenciado **Ademeir Montenegro**, en representación de **ADELA C. DE CARDOZE**, **ELIA DE BENNETT**, **KAREN J. HOLDER Y NEREIDA DE MOCK**, para que se declaren nulas, por ilegales, las Resoluciones N° 4 /95, 2/95, 01/95 y 03/95 de 17 de marzo de 1995, dictadas por la Comisión Nacional de Bolos de Panamá, los actos confirmatorios y para que se hagan otras declaraciones. Dichas demandas fueron acumuladas mediante Resolución fechada 2 de agosto de 1995.

De acuerdo a la señora Procuradora de la Administración, en el presente proceso la Sala Tercera se encuentra imposibilitada de emitir un criterio jurídico, toda vez que la pretensión de las partes demandantes se ha extinguido. La precitada funcionaria basa su petición en los siguientes planteamientos.

> "La Comisión Nacional de Bolos mediante la Resolución N° 04 de 17 de marzo de 1995, resolvió suspender por el término de dos años a la jugadora ADELA CARDOZE, quien no podría participar en Campeonatos Nacionales, Torneos Nacionales, Torneos de Invitación, Campeonatos de Zona Americana, Juegos Regionales Centro Americanos y Panamá, Centroamericanos y del Caribe, Campeonatos Mundiales (FIQ) y Copas del Mundo.
>
> Decisión similar se profirió en los casos de la señora ELIA DE BENETT, (la Resolución 02/95) KAREN HOLDER (Resolución 01/95) y NEREIDA DE MOCK (Resolución 03/95), todas expedidas el 17 de marzo de 1995, por la Comisión Nacional de Bolos de Panamá.
> ...
> Con posterioridad a las decisiones adoptadas, la Comisión Nacional de Bolos emite las Resoluciones 13/95, 14/95, 15/95 y 16/95 de 4 de octubre de 1995 a través de las cuales se suspenden los efectos de las sanciones impuestas a las señoras KAREN J. HOLDER, ELIA DE BENNETT, NERIEIDA MOCK y ADELA DE CARDOZE, respectivamente. (Ver fojas 321 a 332 del expediente)." ...

De la alzada interpuesta, la parte actora mediante escrito que corre a fs. 345-347, presentó sus objeciones al presente recurso.

Encontrándose el proceso en estado de resolver, el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera, proceden a emitir las siguientes consideraciones en torno a la acción encausada.

El resto de la Sala considera que no puede accederse a lo solicitado por la Señora Procuradora de la Administración, toda vez que ello equivale a fallar el fondo de la presente controversia. En esta etapa del proceso corresponde a la Sala determinar si la demanda interpuesta cumple con los requisitos establecidos en las leyes rectoras de estos procesos.

En el caso en estudio, se observa que la parte demandante cumplió con los requisitos mínimos exigidos para la promoción de la demanda, ya que dirigió la misma al Magistrado Presidente de la Sala (artículo 102, Código Judicial); designó las partes y sus representantes, lo que se demanda, los hechos u omisiones fundamentales de la acción y las disposiciones que se estiman violadas y el concepto de la infracción (Artículo 28, Ley de 1946.

Por las anteriores consideraciones, el resto de la Sala estima que lo procedente es confirmar la decisión adoptada por el Magistrado Sustanciador y por lo tanto, debe ser confirmada.

En consecuencia, el resto de los Magistrados de la Sala Tercera, Contencioso Administrativo, de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMAN la Providencia de 13 de febrero de 1996, por la cual se ADMITEN las demandas Contencioso Administrativas de Plena Jurisdicción interpuestas por el Licenciado Ademir Montenegro, en representación de ADELA C. DE CARDOZE, ELIA DE BENNETT, KAREN J. HOLDER Y NEREIDA MOCK.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. FELIPE C. RANGEL, EN SU PROPIO NOMBRE Y REPRESENTACIÓN, PARA QUE SE DECLAREN NULAS POR ILEGALES, LA RESOLUCIÓN N° 13004-86 DE 1° DE OCTUBRE DE 1986, EMITIDA POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, Y LAS RESOLUCIONES N° 1025-95 J. D. DE 23 DE MARZO DE 1995 Y LA RESOLUCIÓN DE 9 DE AGOSTO DE 1995, EMITIDAS POR LA JUNTA DIRECTIVA DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, SEIS (6) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

En grado de apelación conocen el resto de los Magistrados de la Sala Tercera de la demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción interpuesta por el Lcdo. **FELIPE C. RANGEL**, en su propio nombre y representación para que se declaren nulas, por ilegales, la Resolución N° 13004-86 de 1° de octubre de 1986, emitida por la COMISIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, y las Resoluciones N° 10254-95 J. D. de 23 marzo de 1995 y la Resolución de 9 de agosto de 1995, emitidas por la JUNTA DIRECTIVA DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, y para que se hagan otras declaraciones.

El Magistrado Sustanciador del caso decidió **NO ADMITIR** la demanda presentada, tal como se aprecia a fs. 24 del expediente, por las siguientes razones:

> "Observa quien suscribe que el demandante, no ha cumplido con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 135 de 1943, que establece que "a la demanda deberá acompañar el actor una copia del acto acusado, con constancias de su ... notificación ...," ya que, en el presente caso, la parte actora presenta copia autenticada de una sola de las resoluciones que ataca como ilegales, tal como obra a foja 1 del expediente, y, no presenta ninguna prueba que demuestre que ha solicitado copia de las demás resoluciones, ni tampoco solicita que sea el Magistrado Sustanciador, quien pida copia autenticada de las mismas, previa admisión de la demanda, según lo previsto en el artículo 46 de la Ley 135 de 1943".

La parte actora al notificarse del Auto de 12 de marzo de 1996, anunció recurso de apelación de tal resolución, el día 22 de marzo de 1996, como consta a f. 24, reverso.

Observa este Tribunal, de segunda instancia que vencido el término para la sustentación del recurso de apelación, no se presentó escrito alguno.

En vista de que nos encontramos frente a un recurso de apelación contra un auto, lo procedente es declararlo desierto, en atención a lo dispuesto en el artículo 1122 del Código Judicial.

En consecuencia, el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera, Contencioso Administrativa, de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARAN DESIERTO el recurso de apelación anunciado por el Licenciado, FELIPE C. RANGEL en su propio nombre y representación dentro de la demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción, para que se declaren nulas, por ilegales las resoluciones N° 13004-86 de 1° de octubre de 1986 y N° 1025-95 J. D. de 23 de marzo de 1995 y la resolución de 9 de agosto de 1995.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA MORENO Y FÁBREGA, EN REPRESENTACIÓN DE JACSI PANAMÁ, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 4961-93 SUB. D. G. DE 29 DE JULIO DE 1993, PROFERIDA POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, NUEVE (9) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma Moreno y Fábrega, en representación de JACSI PANAMÁ, S. A., ha interpuesto demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción para que se declare nulos por ilegales, la Resolución N° 4961-93 SUB. D. G. dictada el 29 de julio de 1993, por la Dirección General de la Caja de Seguro Social, los actos confirmatorios y para que se hagan otras declaraciones.

En la Resolución N° 4961-93 SUB. D. G. la Dirección General de la Caja de Seguro Social condenó a la empresa Jacsi Panamá, S. A. al pago de B/.883.60 en concepto de Segunda Partida proporcional del Décimo Tercer Mes correspondiente al año de 1992; posteriormente el Director General de la Caja de Seguro Social, mediante la Resolución N° 6186-94 D. G. de 8 de abril de 1994, mantuvo en todas sus partes la resolución N° 4961-93 SUB. D. G., y la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, con motivo del recurso de apelación interpuesto por la empresa Jacsi Panamá, S. A. dictó la Resolución N° 9914-94-J. D. de 1° de diciembre de 1994, confirmando en todas sus partes la resolución originaria impugnada.

Admitida la presente demanda se corrió en traslado a la señora Procuradora de la Administración quien contestó la demanda mediante su Vista Fiscal N° 237 de 1° de junio de 1995, en la que se opuso a las pretensiones de la demandante (fs. 39-43). Además, se solicitó al funcionario demandado que rindiera el informe de conducta a que se refiere el artículo 33 de la Ley 33 de 1946, quien lo rindió por medio de nota fechada el 10 de mayo de 1995, en el cual opinó que la empresa JACSI PANAMÁ, S. A. adeuda a la Caja de Seguro Social la segunda partida del décimo tercer mes, porque aunque el artículo 8 de la Ley 20 de 12 de agosto de 1992 señala que es de orden público, no puede aplicarse antes de su vigencia o

retroactivamente como pretende el recurrente, en virtud de que su artículo 1° se refiere al período completo entre el 16 de abril y el 15 de agosto, estableciendo la restitución de estos dineros a los trabajadores a partir del 14 de agosto de 1992.

En el informe comentado el Director General de la Caja de Seguro Social agrega que el caso de la empresa JACSI PANAMÁ, S. A. incluye trabajadores cuyas relaciones laborales concluyeron antes del vencimiento del término completo de la segunda partida del Décimo Tercer Mes de 1992, y de la existencia en el mundo jurídico de la Ley 20 de 12 de agosto de 1992, por lo que la obligación de pagar las sumas proporcionales de las prestaciones concluidas antes de la nueva ley, surge bajo el imperio del literal m) del Artículo 24 de la Ley 30 de 26 de diciembre de 1991, el cual disponía que las sumas correspondientes a la segunda partida del Décimo Tercer Mes constituían parte integrante de los recursos de la Caja de Seguro Social para hacer frente a las erogaciones derivadas del Programa de Invalidez, Vejez y Muerte.

Por su parte, la actora alega que el acto administrativo impugnado viola los artículos 1 y 8 de la Ley 20 de 12 de agosto de 1992, y el literal m) del artículo 24 de la Ley 30 de 1991.

La demandante considera que la resolución impugnadaviola el artículo 8 de la Ley 20 de 1992, el cual preceptúa literalmente lo siguiente:

> "Artículo 8. Esta Ley es de orden público, comenzará a regir desde su promulgación y tiene efectos retroactivos a partir del catorce de agosto de mil novecientos noventa y dos."

Señala la parte actora que la Caja de Seguro Social desconoció que esta norma señala claramente que tiene efectos retroactivos, por lo que cualquier pago hecho al trabajador con anterioridad al 14 de agosto está amparado por ella y es legítimo, ya que la finalidad de la ley fue, y es, restituir a los trabajadores públicos y privados que laboren todo o parte del período, las sumas correspondientes a la segunda partida del Décimo Tercer Mes de 1992, en cualquier momento en que se hiciera el pago del mismo, total o parcial, antes o después de la promulgación de la Ley 20 de 1992.

Manifiesta la demandante que se violó, por aplicación indebida, el literal m) del Artículo 24 de la Ley 30 de 1991, que establece que los dineros correspondientes a la segunda partida del Décimo Tercer Mes forman parte de los recursos de la Caja de Seguro Social, porque dicha norma no debió ser aplicada en virtud de lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 20 de 1992.

Finalmente, la parte actora considera que la resolución impugnada violó por interpretación errónea, el artículo 1 de la Ley 20 de 1992, por no tomar en cuenta los efectos retroactivos de esta ley. El artículo 1° de la Ley 20 de 1992, dice textualmente:

> "Artículo 1. Restitúyase el pago de la segunda partida del Décimo Tercer (XIII) Mes a los trabajadores del sector público y privado a partir del 14 de agosto de 1992."

Manifiesta la demandante que aunque la ley señala que el dinero de la segunda partida del Décimo Tercer Mes debe entregarse a los trabajadores, la frase "a partir del catorce de agosto de 1992" ha llevado a la Caja de Seguro Social a pensar que por el hecho de que estas sumas fueron recibidas antes del 14 de agosto, puede incluirlas en sus ingresos, imponiendo a la empresa la carga de pagar dos veces una suma de dinero por un mismo hecho.

La señora Procuradora de la Administración se opuso a lo esgrimido por la parte actora, expresando lo siguiente:

> "... la Ley 30 de 26 de diciembre de 1991 estableció que, la suma correspondiente al pago de la segunda partida del Décimo Tercer Mes, la cual comprende el período entre el quince (15) de abril y el quince (15) de agosto de cada año, debía entregarse a la Caja de

> Seguro Social para el cumplimiento de sus fines. No obstante que con posterioridad se dictara la Ley 20 de 12 de agosto de 1992, mediante la cual se restituye la Segunda Partida del Décimo Tercer Mes, a partir del catorce (14) de agosto de 1992; por lo que debemos entender que pertenecen a la Caja de Seguro Social los pagos que se hicieran por concepto de décimo tercer mes proporcional en las liquidaciones por terminación de la relación de trabajo, verificados entre el 16 y el 14 de agosto de 1992.
>
> Como quiera que el pago de la segunda partida del Décimo Tercer Mes -por mandato de la Ley- se hace a partir del día quince (15) de agosto, las empresas debían pagar dicha prestación a los trabajadores activos, por ser beneficiarios directos. Sin embargo, ello no es lo que se discute en el caso subjúdice, puesto que tal como consta en los considerandos de las Resoluciones acusadas de ilegales los trabajadores ya habían cesado de laborar en la empresa demandante (JACSI PANAMÁ, S. A.), a la fecha en que la Ley 20 de 12 de agosto de 1992 empezó a regir y le devolvió dichas sumas a trabajadores, por lo que quedaron excluidos del ámbito de aplicación de la mencionada Ley." (Fs. 5 a 6).

Mediante la referida ley 20 de 1992, se sustrajo del presupuesto de la Caja de Seguro Social las sumas correspondientes a la segunda partida del décimo tercer mes, por lo que la nueva ley creó una renta sustitutiva de dichos ingresos aumentando en un 2% o más anual, los intereses que el Estado paga a la Caja de Seguro Social, por las obligaciones contraídas con dicha institución.

Dichos ingresos sustitutivos están establecidos por el artículo 3 de la Ley 20 de 1992, que a la letra dice:

> "Artículo 3. Las obligaciones del Estado contraídas en favor de la Caja de Seguro Social que consten en bonos, pagarés u otros valores similares, devengarán un interés de dos por ciento (2%) o más anual adicional a los intereses que actualmente paga el Estado. La suma total que estos intereses devengan, en ningún caso, serán inferiores a la suma de veinte punto cinco (20.5) millones al año.
>
> Mientras el Estado pague a la Caja de Seguro Social este dos por ciento (2%) o más adicional, ésta no podrá negociar ni en cualquier otra forma traspasar dichos créditos."

En las Actas de discusión en Segundo Debate de la Ley 20 de 1992, en el Pleno de la Asamblea Legislativa, se propuso el siguiente artículo: "Esta ley es de orden público, entrará en vigencia a partir del 14 de agosto de 1992 y tendrá efecto retroactivo desde el 1° de enero de 1992 para la aplicación del Artículo 4" (que pasó a ser el artículo 3 de la Ley 20 de 1992), con la finalidad de crear el efecto retroactivo a partir del 1° de enero de 1992 sobre el 2% de la deuda documentada y no documentada que tiene el Estado con la Caja de Seguro Social.

Dicha propuesta fue retirada en virtud de que se consideró que este artículo como fue propuesto, crearía nuevas erogaciones al Estado, que provocarían el veto de la Ley por parte del Presidente (Pág. 71 de las Actas de discusión en Segundo Debate de la Ley 20 de 1992, en el Pleno de la Asamblea Legislativa el 11 de agosto de 1992).

De lo anterior se desprende claramente que la intención del legislador fue que la Ley 20 de 1992 gravara la deuda del Estado con la Caja de Seguro Social, con un 2% o más adicional a los intereses ya establecidos, desde el 14 de agosto de 1992 y no antes, para así evitar el veto de la misma por parte del Ejecutivo. Como la Caja de Seguro Social no recibiría este ingreso del Estado antes del 14 de agosto de 1992, no podía dejar de percibir el dinero pagado en concepto de segunda partida del décimo tercer mes antes de dicha fecha.

Es por lo expresado que la Sala considera que aunque el precitado artículo 8 de la Ley 20 de 12 de agosto de 1992, establece que dicha ley es de orden público, que comienza a regir desde su promulgación y tiene **efectos retroactivos**

a partir del 14 de agosto de 1992, no existe tal efecto retroactivo, puesto que en su artículo primero señala que el pago de la segunda partida del décimo tercer mes debe hacerse a los trabajadores del sector público y privado a partir del 14 de agosto de 1992, ya que es el 15 de agosto cuando surge la obligación de pagar los dineros de la segunda partida del décimo tercer mes, que desde el mes de agosto de 1992 corresponde por mandato legal a los trabajadores. Por este motivo los pagos hechos antes del 14 de agosto de 1992, están regidos por el literal m) del artículo 24 de la Ley N° 30 de 26 de diciembre de 1991 y se hicieron legalmente a la Caja de Seguro Social. La obligación de pagar dicha prestación a los trabajadores surgió bajo imperio de la nueva Ley 20 de 1992, a partir del 14 de agosto de 1992.

El literal m) de la Ley 30 de 26 de diciembre de 1991 estaba vigente y era aplicable a los pagos de la segunda partida del décimo tercer mes hechos antes del 14 de agosto de 1992, por tanto, es la norma aplicable al pago que la empresa Jacsi Panamá, S. A., hizo el 27 de julio de 1992 a la Caja de Seguro Social en este concepto, tal como fue expuesto en la resolución acusada de ilegal, emitida por la Dirección General de la Caja de Seguro Social el 29 de julio de 1993.

En mérito de lo expuesto esta Sala debe declarar que la Resolución N° 49-93 SUB. D. G. de 29 de julio de 1993, y sus actos confirmatorios no violan los artículos 1 y 8 de la Ley 20 de agosto de 1992 y 24 literal m) de la Ley 30 de 26 de diciembre de 1991, y no prosperan los cargos de ilegalidad expuestos por la sociedad demandante Jacsi Panamá, S. A. contra de la Caja de Seguro Social.

Por consiguiente, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO SON ILEGALES, la Resolución N° 4961-93 SUB. D. G. de 29 de julio de 1993, los actos confirmatorios identificados como Resoluciones N° 6186-94 D. G. de 8 de abril de 1994 y N° 9914-94 J. D. de 1° de diciembre de 1994, emitidas por el Director General de la Caja de Seguro Social y por la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social respectivamente, y NIEGA las declaraciones pedidas por JACSI PANAMÁ, S. A.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA FORENSE AROSEMENA Y DÍAZ, EN REPRESENTACIÓN DE INMOBILIARIA TU HOGAR, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 6281-94-SUB-D. G. DE 20 DE MAYO DE 1994, EXPEDIDA POR EL SUBDIRECTOR GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, ACTOS CONFIRMATORIOS. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DIEZ (10) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma forense **AROSEMENA & DÍAZ** actuando en representación de **INMOBILIARIA TU HOGAR, S. A.**, ha presentado demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nula por ilegal, la Resolución N° 6281-94-SUB-D. G. de 20 de mayo de 1994, dictada por el Sub-director General de la Caja de Seguro Social.

Estima el recurrente que el acto administrativo impugnado es violatorio del artículo 5 de la Ley 1 de 1986 que reformó el artículo 142 del Código de Trabajo, los artículos 62 y 35-B del Decreto Ley N° 14 de 27 de agosto de 1954 Orgánico de la Caja de Seguro Social, y del artículo 62 del Código de Trabajo.

De la demanda instaurada se corrió traslado al funcionario responsable del acto administrativo impugnado para que rindiese un informe de conducta explicativo de su actuación, encontrándose el mismo en el expediente contentivo de este negocio. (Fs. 31-34 del expediente).

De igual forma se dio traslado a la señora Procuradora de la Administración, quien procedió a oponerse a las pretensiones del recurrente. (Fs. 35-51 del expediente).

Una vez surtidos todos los trámites legales establecidos para estos procesos, procede la Sala Tercera a desatar la controversia instaurada.

El origen del litigio radica en la emisión del acto administrativo mediante el cual la Caja de Seguro Social condenó a la empresa **INMOBILIARIA TU HOGAR, S. A.** al pago de B/.15,772.88 en concepto de cuotas de seguro social, prima de riesgos profesionales y recargos de ley, sumas dejadas de pagar durante el período comprendido del mes de enero de 1990 a diciembre de 1992.

La suma cargada fue detectada a raíz del examen a los libros de contabilidad, comprobantes de pago, planillas y demás documentos de la empresa, de cuyo examen se determinó (según la Caja de Seguro Social), que el patrono omitió el pago de cuotas y declaración de los salarios devengados por los trabajadores MANUEL GONZÁLEZ RUIZ, RICARDO BERMÚDEZ, MIRIAM COZZARELLI, FÉLIX SÁNCHEZ, MARÍA CRISTINA VILLA, CARMEN JIMÉNEZ, ENEDINA MONRROY y MIRNA SILVA, ello en virtud de que se calificó inadecuadamente la remuneración otorgada a estos señores como "Servicios Profesionales".

En consecuencia, el punto medular de esta controversia estriba en la determinación de la existencia o no de una relación obrero-patronal entre la empresa INMOBILIARIA TU HOGAR, S. A. y los señores **GONZÁLEZ RUIZ** y **BERMÚDEZ.**

EXPOSICIÓN DE CARGOS

Procedemos al planteamiento de los cargos de ilegalidad aducidos por el recurrente, y el primero de ellos descansa en el artículo 142 del Código de Trabajo, norma legal que establece la circunstancia de que el salario solamente podrá fijarse por unidad de tiempo (mes, quincena, semana, día u hora) y por tareas o piezas.

Sobre el particular, el recurrente conceptúa que resulta evidente la incorrecta apreciación de la Caja de Seguro Social en cuanto a la existencia de relación de trabajo y consiguiente pago de salarios a los trabajadores antes mencionados, puesto que éstos recibían pagos variables y por cantidades que no eran fijas.

Esta violación se conecta al texto del artículo 62 de la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social, norma que es del tenor siguiente:

> "Artículo 62: Para los efectos del Seguro Social privarán las siguientes definiciones:
> ...
> b) Sueldo: la remuneración total, gratificación, bonificación, comisión, participación en beneficios, vacaciones, o en valor en dinero y en especie que reciba el trabajador del patrono o empleador o de cualquier persona natural o jurídica como retribución de sus servicios o con ocasión de éstos. Se exceptúan del pago de cuotas de Seguro Social los viáticos, dietas y preavisos. Las gratificaciones de Navidad o aguinaldos y gastos de representación siempre que no excedan del sueldo mensual."

En este sentido, la parte actora insiste en el punto de que a los señores antes listados no se les remuneraba con el pago de salarios, sino de Honorarios por Servicios Profesionales, razón por la cual resultaba inaplicable a su situación jurídica el texto pretranscrito.

De igual forma, se aduce infringido el artículo 35-B de la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social, norma legal que establece la obligatoriedad para los patronos o empleadores de deducir a sus trabajadores las cuotas obrero-patronales.

En este contexto, el recurrente ha manifestado que la disposición comentada fue aplicada de manera indebida a la empresa de bienes raíces **INMOBILIARIA TU HOGAR, S. A.**, toda vez que al no mantener relación de trabajo esta empresa con los prenombrados, mal podrían haber procedido al descuento de cuotas obrero-patronales.

Finalmente, se invoca la infracción legal del artículo 62 del Código de Trabajo, texto que se reproduce de seguido:

> "Artículo 62. Se entiende por contrato individual de trabajo cualquiera que sea su denominación, el convenio verbal o escrito mediante el cual una persona se obliga a prestar sus servicios o ejecutar una obra a favor de otra, bajo la subordinación o dependencia de ésta.
>
> Se entiende por relación de trabajo, cualquier sea el acto que le da origen, la prestación de un trabajo personal en condiciones de subordinación jurídica o de dependencia económica.
>
> La prestación de un trabajo a que se refiere el párrafo anterior y el contrato celebrado producen los mismos efectos."

En este orden de ideas, el actor estima que la transgresión se produce en virtud de que nunca existieron las calidades descritas para definir una relación de trabajo, entre las siete personas antes nombradas y la empresa de Bienes Raíces, por lo que se aplica de manera indebida este texto legal a una situación errónea.

EXAMEN DE CARGOS

El informe de conducta remitido por la autoridad demandada refuta los cargos aducidos, indicando que conforme a la investigación adelantada: "**las sumas recibidas por las personas objeto del alcance son producto de una relación de trabajo, lo cual no escapa del ámbito de la aportación prevista en la legislación de Seguridad Social, por cuanto que tales sumas de dinero tienen su génesis en la relación de trabajo que mantenían con la empresa INMOBILIARIA TU HOGAR, S. A.**"

La Señora Procuradora de la Administración por su parte, mediante Vista Fiscal N° 353 de 21 de agosto de 1995, solicita al Tribunal que se nieguen las pretensiones del demandante, toda vez que coincide en que las personas que comprendidas en el alcance, efectivamente eran trabajadores de la empresa inmobiliaria.

Esta Superioridad, con vía a resolver la litis, procedió al examen de los cargos de ilegalidad propuestos por la parte actora, y que descansan básicamente en la alegada circunstancia de que nunca ha existido relación laboral entre los señores MANUEL GONZÁLEZ RUIZ, RICARDO BERMÚDEZ, MIRIAM COZZARELLI, FÉLIX SÁNCHEZ, MARÍA CRISTINA VILLA, CARMEN JIMÉNEZ, ENEDINA MONRROY, MIRNA SILVA, y la Empresa **INMOBILIARIA TU HOGAR, S. A.**

De esta forma, se analizó el legajo contentivo del expediente administrativo remitido por la entidad de seguridad social así como las pruebas aportadas en esta fase ante la Sala Tercera por la parte actora, desglosándose de manera individual la situación laboral entre la empresa y las prenombradas personas, con vías a establecer si efectivamente se ha configurado la existencia de una **relación de trabajo**, o se trata de personas que brindaron un servicio profesional, accidental o eventual a la empresa, circunstancia que indefectiblemente repercute en el fundamento del acto administrativo demandado.

Partimos de que el concepto de relación de trabajo, conforme al texto del

artículo 62 del Código de Trabajo presupone la existencia de un acto que origina la prestación personal de un servicio en condiciones de **subordinación jurídica o dependencia económica**, sea cual fuese la fuente o acto que origina la prestación.

El demandante ha alegado la inexistencia de una relación que vincule a las personas antes nombradas como "trabajadores" de la empresa **INMOBILIARIA TU HOGAR, S. A.**, pues dichas personas brindaron en su mayoría un trabajo eventual u ocasional, y particularmente en el caso de los señores GONZÁLEZ RUIZ y BERMÚDEZ, que originan la mayor parte de las cuotas cargadas como salarios, se presentan como profesionales independientes, desprovistos de las características medulares que revisten una relación de trabajo: Subordinación Jurídica y Dependencia Económica.

El primer señalamiento que debe verificar este Tribunal en relación con el caudal probatorio aportado en el negocio que nos ocupa, es su **manifiesta escasez**, puesto que tanto la labor investigativa de la Caja de Seguro Social como de la parte afectada ha sido limitada, sin la práctica de peritajes u otros medios idóneos para controvertir o aclarar las situaciones planteadas.

Sin embargo, de las piezas examinadas se derivan, en concepto de este Tribunal los siguientes puntos:

El señor MANUEL GONZÁLEZ RUIZ funge actualmente como representante legal de la empresa **INMOBILIARIA TU HOGAR, S. A.** De igual forma funge como representante legal de la empresa ADMINISTRACIÓN DE CONSTRUCCIONES, S. A.

Según consta a folios 14-15 del expediente administrativo, estas dos empresas habían suscrito en el mes marzo de 1992 un contrato con la finalidad de que la Empresa ADMINISTRACIÓN DE CONSTRUCCIONES, S. A. (en adelante identificada como ADCO, S. A.) se encargara de la administración, publicidad, funciones de ventas, etc. de **INMOBILIARIA TU HOGAR, S. A.**, y sería retribuida por la INMOBILIARIA con pagos de B/.750.00 mensuales, además de tres pagos adicionales (abril, agosto y diciembre) por un tercio de la cantidad pactada mensualmente.

En el año de 1990, el señor MANUEL GONZÁLEZ RUIZ sólo percibió la suma de B/.500.00 por parte de **INMOBILIARIA TU HOGAR, S. A.**, mismos que le fueron pagados en el mes de abril (cfr. foja 2 del Anexo N° 2 del expediente administrativo). Sin embargo, según consta a folio 52-54 del expediente principal, el Sr. GONZÁLEZ RUIZ declaró ingresos durante el año fiscal de 1990 por el orden de B/.34,015.85, circunstancia que evidencia de manera indiscutible que su principal y mayor fuente de ingresos (dependencia económica) no provenía de los honorarios pagados por **INMOBILIARIA TU HOGAR, S. A.**

De hecho, en el año 1991 el Sr. GONZÁLEZ RUIZ no percibió por parte de la **INMOBILIARIA** ningún pago, mientras que declaró ingresos por el orden de 33,047.81. (cfr. folios 3 del exp. administrativo -vs- fs. 54-55 del exp. principal).

Finalmente, en el año de 1992 sí percibe, a partir del mes de mayo de 1992 una remuneración mensual de B/.750.00, y en el mes de diciembre recibe una remuneración adicional de B/.250.00, lo que constituye un monto total de B/.6,500.00, pero su declaración de ingresos alcanzó los B/.49,488.57.

Sería conveniente manifestar por otra parte, que una de las razones invocadas por la Caja de Seguro Social para fundar la existencia de una relación de trabajo en este caso, es la supuesta existencia de una Unidad Económica entre la empresa **INMOBILIARIA TU HOGAR, S. A.** y **ADCO, S. A.**, por cuanto el actual representante legal de ambas empresas es el mismo señor MANUEL GONZÁLEZ RUIZ.

Sobre este particular la Sala debe manifestar que es desafortunada la observación que al respecto hace la entidad demandada, puesto que la Unidad Económica Empresarial y la Seguridad Social, son instituciones distintas.

La incorporación del concepto de Unidad Económica a nuestra legislación,

lleva en su génesis, el propósito claro de proteger los derechos laborales nacidos de una relación obrero-patronal, en los casos en que un trabajador preste servicios a varias empresas que funcionen dentro de una llamada "Unidad Económica".

El artículo 96 del Código de Trabajo, al tutelar el cumplimiento de las prestaciones laborales que corresponden al trabajador de una empresa parte de una Unidad Económica, no incluye las cuotas obrero patronales, puesto que la Seguridad Social es un elemento, distinto y extraño a esa relación.

Este mismo Tribunal, en sentencia de 5 de octubre de 1992, al examinar este tipo de situaciones comentó:

> "Ello pone de manifiesto, la incompatibilidad que existe, entre los efectos que produce la llamada Unidad Económica y el compromiso de Seguridad Social derivada de una relación de trabajo.
>
> No puede entonces pretenderse el cobro de cuotas obrero patronales a una empresa, por razón de que a juicio de la Caja de Seguro Social, ésta se encuentre en una situación de Unidad Económica con otra empresa, con la cual un mismo trabajador mantiene una relación laboral."

Finalmente, se ha señalado que las funciones del señor GONZÁLEZ RUIZ son las de un gerente de la empresa, lo que aunado a su calidad de dignatario de la misma hace concluyente su relación obrero patronal con **INMOBILIARIA TU HOGAR, S. A.**

La Corte advierte que durante el período investigado, nada indica que el señor GONZÁLEZ RUIZ haya realizado funciones a nivel de ejecución gerencial, ni en condiciones de subordinación jurídica o dependencia económica, haber estado sometido a horarios, directrices u órdenes, o a disposiciones de reglamento interno de la empresa. No existe el compromiso de una prestación personal de servicio a tiempo completo de administrador.

Sin embargo, en cuanto al punto de su condición de presidente y representante legal de la empresa investigada es oportuno reiterar los señalamientos vertidos por esta Superioridad, en el sentido de que por lo general, la doctrina y la jurisprudencia nacional han entendido que los dignatarios de la sociedades anónimas no deben considerarse trabajadores, mientras que no se de con respecto a ellos la nota elemental de subordinación jurídica respecto al empleador.

El Doctor **ARTURO HOYOS** en su obra "Derecho Panameño del Trabajo" cita las palabras del destacado tratadista Rafael Caldera, cuando al tratar el tema de la situación de los Directores y Dignatarios de Sociedades Anónimas, ha manifestado:

> "Yo he sostenido que el carácter de miembro de una Junta Directiva no da, ni quita, el carácter de trabajador; no lo atribuye por sí solo, pues quien lo tiene puede no hallarse bajo la dependencia de la empresa, ni tampoco lo quita, pues el hecho de que una persona preste servicios de carácter personal a una corporación bajo su dependencia, no se desnaturaliza por la circunstancia de que esté investido de un alto cargo dentro de la misma. Se trata, pues, de una cuestión de hecho: la de averiguar si en cada caso, aparte la función propiamente administrativa o representativa, existe o no, una relación de trabajo". (HOYOS, Arturo. Derecho Panameño del Trabajo. Panamá, 1982, Litografía e Imprenta Lil, S. A. págs. 253-254).

Por su parte, el propio Doctor **HOYOS**, en la obra supracitada (IBÍDEM), suscribe la opinión pretranscrita, en el sentido de que debe examinarse cada caso en concreto, para determinar si existe o no relación de trabajo, pero entendiéndose que la calidad de Director de una sociedad anónima ni agrega ni resta en cuanto a lo que la relación de trabajo se refiere, pero que debe entenderse que

en principio no existe relación laboral salvo prueba en contrario (cfr. sentencia de 11 de marzo de 1994).

Las circunstancias analizadas conducen a esta Sala a la conclusión de que el Sr. MANUEL GONZÁLEZ RUIZ desde el mes de mayo a diciembre del año 1992 ha estado brindando los servicios de asesoría en nombre de la **ADCO, S. A.** que ésta había pactado con la **INMOBILIARIA TU HOGAR, S. A.**, sin encontrarse en estado de dependencia económica, o realizar una función subordinada para esta empresa; tampoco consta que en el desempeño de esta asesoría el Sr. GONZÁLEZ RUIZ estuviese sometido a horario ni directrices de ninguna clase, y sus mayores o principales ingresos provienen de otras fuentes, tal como se desprende de sus declaraciones de renta.

Por ende, los cargos endilgados, en lo que concierne a la inexistencia de relación de trabajo entre el señor MANUEL GONZÁLEZ RUIZ y la empresa **INMOBILIARIA TU HOGAR, S. A.** prosperan en este caso, al no existir elementos de convicción que permitan establecer la existencia de relación de trabajo entre las partes nombradas en el período: enero 1990 a diciembre de 1992.

En el caso de MIRIAM COZZARELLI, FÉLIX SÁNCHEZ, MARÍA CRISTINA VILLA, CARMEN JIMÉNEZ, ENEDINA MONRROY y MIRNA SILVA, la situación irregular que se presenta en cuanto a su no inclusión en el régimen de seguridad social se justifica, según la parte demandante, por cuanto los mismos fueron contratados como trabajadores accidentales o eventuales.

Procedemos al detalle de cada caso, de seguido:

1. MIRIAM COZZARELLI percibió una remuneración de B/.150.00 en el mes de febrero de 1990;
2. FÉLIX SÁNCHEZ recibió la suma de B/.70.00 en el mes de enero de 1991;
3. MARÍA CRISTINA VILLA fue remunerada con B/.200.00 en el mes de noviembre del año 1991;
4. CARMEN JIMÉNEZ recibió B/.100.00, en el mes de octubre del año 1992. La misma cantidad recibieron la señora ENEDINA MONRROY en el mes de marzo de ese año, y la señora MIRNA SILVA en el mes de septiembre de 1992.

La empresa **INMOBILIARIA TU HOGAR, S. A.** insiste en que las personas listadas sólo fueron contratadas, según el caso, para cumplir una labor eventual o accidental (ocasional), atendiendo necesidades especiales que se le presentaron a la empresa, y que de cualquier forma, por tratarse de "trabajadores" con la calidad especial de ocasionales o eventuales, no debían ser incorporados al régimen de seguridad social.

Sin embargo, y pese a que efectivamente en ninguno de estos casos los prenombrados recibieron remuneración de manera continuada, sino por un mes, esta Sala no puede obviar la circunstancia de que no se presentó contrato de trabajo alguno, carencia probatoria que no puede suplir este Tribunal, por lo que no puede establecerse con certeza absoluta que se haya pactado una labor ocasional o eventual.

Este mismo Tribunal, en sentencia de 2 de diciembre de 1993, se pronunció sobre este particular en los siguientes términos:

> "En este caso era obligatorio que la empresa que contrató tales servicios eventuales, descontara de las sumas canceladas a los trabajadores antes mencionados la cuota obrero-patronal que exige la legislación de Seguridad Social.
> ...
> Lo anteriormente expuesto nos conduce a señalarle a la parte afectada que para que un trabajador tenga la calidad de eventual, o accidental u ocasional, debe constar en un contrato cuya duración no exceda de seis meses o un mes respectivamente, lo cual no ha sido comprobado en este proceso.
> ...
> En este mismo sentido, también considera el demandante que se violó

> el artículo 81 del Código de Trabajo, en relación a estos tres trabajadores, el cual explica que se considera trabajo ocasional o accidental, pero en líneas anteriores manifestamos que esta clase de trabajo por tiempo definido debe estar previsto en un contrato de trabajo, para que se considere como tal, requisito éste sine-qua-non, que no cumplió la empresa **BONLAC, S. A.** Por lo anterior de igual forma debió la empresa actora descontar del salario del señor Rodríguez lo correspondiente a la cuota obrero patronal y pagarlas a la Caja de Seguro Social."

En estas circunstancias, y ante la falta de sustento probatorio en el sentido de que los prenombrados efectivamente sólo hubiesen sido contratados como trabajadores accidentales o eventuales, no prosperan los cargos endilgados por la empresa demandante. Ello sin perjuicio de que según las propias investigaciones adelantadas por la Caja de Seguro Social, en la mayoría de estos casos las labores asignadas a los supuestos trabajadores accidentales o eventuales dicen relación con una prestación que no era momentánea, sino más bien de planta o de necesidad permanente de la empresa, como lo son los servicios de aseo y ventas, particularmente por tratarse de una agencia de bienes raíces.

Finalmente, procedemos a examinar la situación del señor RICARDO BERMÚDEZ, cuyas remuneraciones han sido calificadas por la Caja de Seguro Social como de salario, y no de honorarios profesionales.

La Corte advierte que según las constancias procesales, la relación entre el señor BERMÚDEZ y la empresa **INMOBILIARIA TU HOGAR, S. A.** surge en el mes de abril del año 1990, continuando de manera **ininterrumpida** hasta el mes de noviembre de 1992, es decir, por espacio de casi dos años.

Durante este período, los emolumentos del señor BERMÚDEZ se elevaron de B/.500.00 hasta la suma de B/.2,200.00, aunque con algunas fluctuaciones en determinados meses.

Se ha manifestado que el señor BERMÚDEZ es un profesional de la arquitectura que no laboraba para la empresa Inmobiliaria en condiciones de subordinación jurídica ni dependencia económica, y que prestaba igualmente servicios para la empresa ADCO, S. A.

Sin embargo, se allegaron al expediente principal las declaraciones de renta y del impuesto de licencia comercial de la empresa **ADCO, S. A.** misma que revelan que si bien el señor RICARDO BERMÚDEZ recibió honorarios por parte de ésta empresa en el año 1990, éstos ascendieron a la suma de B/.134.00, en contraposición con los B/.7,500.00 que percibió por parte de **INMOBILIARIA TU HOGAR S. A.** (cfr. fojas 2-4 del expediente administrativo -vs- foja 59-60 del expediente principal.

Más significativo aún resulta que para los períodos de 1991 y 1992 la empresa ADCO, S. A., parece no haber realizado pagos en ningún concepto al señor BERMÚDEZ, mientras que **INMOBILIARIA TU HOGAR, S. A.** le remuneró respectivamente con B/.11,500.00 y B/.14,806.67. Por otra parte, es preciso indicar que no existen piezas en el expediente que hayan podido comprobar que el señor BERMÚDEZ tuviese otras fuentes de ingresos, o desvirtuar que el mismo no se encontrase en condiciones de subordinación jurídica o dependencia económica.

Tampoco se ha aportado contrato alguno que evidencie en qué calidad, y para la prestación específica de qué servicios fue contratado el señor RICARDO BERMÚDEZ, por lo que la Sala también debe descartar los cargos de ilegalidad que se endilgan al acto administrativo acusado, en los que atañe a la relación entre la empresa **INMOBILIARIA TU HOGAR, S. A.** y RICARDO BERMÚDEZ.

DECISIÓN DE LA SALA TERCERA

Esta Máxima Corporación Judicial, con vista a las piezas que constan en autos, reconoce que prosperan los cargos planteados por el recurrente, sólo en lo que concierne a la persona de MANUEL GONZÁLEZ RUIZ, quien no tenía en el

período 1990-1992 relación de trabajo con la empresa afectada, y niega la pretensión de la parte actora en todo lo demás.

La Caja de Seguro Social deberá por tanto, en acatamiento a esta resolución judicial, elaborar un nuevo alcance a la empresa **INMOBILIARIA TU HOGAR, S. A.**, deduciendo de la cantidad fijada en la Resolución N° 6281-94 Sub-D. G. la cifra cargada por los supuestos "salarios" pagados al señor MANUEL GONZÁLEZ RUIZ.

En consecuencia, la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA PARCIALMENTE ILEGAL la Resolución N° 6281-94 Sub-D. G. de 20 de mayo de 1994, expedida por el Subdirector General de la Caja de Seguro Social, sólo en lo que respecta a las cuotas cargadas a la empresa INMOBILIARIA TU HOGAR, S. A. por el período enero 1990-diciembre 1992 que guardan relación con las remuneraciones del señor MANUEL GONZÁLEZ RUIZ.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL DR. NORBERTO CASTILLO, EN REPRESENTACIÓN DE VELKYS YARIELA SANTAMARÍA MARTÍNEZ, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL DECRETO EJECUTIVO N° 204 DE 14 DE AGOSTO DE 1995, EMITIDO POR EL ÓRGANO EJECUTIVO, POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DIEZ (10) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Doctor **Norberto Castillo**, en representación de **VELKYS YARIELA SANTAMARÍA MARTÍNEZ**, ha presentado demanda contencioso administrativa de Plena Jurisdicción para que se declare nulo, por ilegal, el **DECRETO EJECUTIVO N° 204 de 14 de agosto de 1995**, emitido por el ÓRGANO EJECUTIVO, por conducto del Ministerio de Educación, y para que se hagan otras declaraciones.

La señora Procuradora de la Administración mediante su Vista Fiscal N° 92 de 28 de febrero de 1996, que reposa a folios 16-19 del expediente, al notificarse de la Providencia calendada 5 de febrero de 1996 por medio de la cual el Magistrado Sustanciador decidió **ADMITIR** la presente demanda, presentó y sustentó formal recurso de apelación contra la misma, argumentando básicamente que dicha demanda no debió ser admitida por razón de que la parte demandante no ha acreditado debidamente el silencio administrativo, como forma de agotar la vía gubernativa, requisito *sine qua non* para recurrir en demanda ante la Sala Contencioso Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, a la luz del artículo 42 de la Ley 135 de 1943.

Al respecto, señaló la Procuradora de la Administración:

> "... el demandante omitió incluir en su escrito la petición al Magistrado Sustanciador, de solicitar al ente ministerial que compulsara la **certificación** (sic) acerca de si hubo o no contestación al Recurso de Reconsideración con Apelación en Subsidio, lo cual permitiría a la Sala verificar si se configuró o no el silencio administrativo, fenómeno jurídico que conduce al agotamiento de la vía gubernativa tal como lo establece el artículo 36 de la Ley Contencioso Administrativa".
>
> ... consideramos que el actor debió solicitar al Magistrado

> Sustanciador que requiriera una certificación a la autoridad correspondiente, ya que este es un requisito indispensable para confirmar si se produjo el agotamiento de la vía gubernativa, por silencio administrativo, que permite acudir ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia".

Encontrándose el proceso en estado de resolver, el resto de los Magistrados que integran este Tribunal proceden a externar las siguientes consideraciones:

Estima esta Superioridad que efectivamente el recurrente no cumplió ciertos requisitos legales para acudir debidamente ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, como lo representa la certificación referente a si se decidió o no el recurso de Reconsideración mencionado.

Preceptúa el artículo 46 de la Ley Contencioso Administrativa:

> ARTÍCULO 46: Cuando el acto no ha sido publicado o se deniega la expedición de la copia o certificación sobre publicación, se expresará así en la demanda, con indicación de la oficina donde se encuentre el original, o del periódico en que se hubiere publicado, a fin de que se solicite por sustanciador antes de admitir la demanda".

Si bien es cierto el demandante a fs. 6 del expediente alega la figura del Silencio Administrativo toda vez que según el actor, el señor Ministro de Educación no decidió el recurso de reconsideración presentado el 25 de agosto de 1995, no acredita esta situación debidamente, lo que se hubiese logrado acompañando la demanda con copia autenticada del memorial contentivo de la solicitud o recurso legal con fecha de presentación ante la entidad gubernativa, y la certificación de la institución de que una vez transcurridos dos meses, sobre los mismos no había recaído decisión alguna. La Sala Tercera ha reiterado de manera inveterada que cuando se niega la referida certificación, debe solicitarse al Magistrado Sustanciador que requiera al funcionario respectivo para que certifique si la solicitud o el recurso presentado ha sido resuelto; de lo contrario a la acción presentada no puede dársele curso legal, al no haberse comprobado que la vía gubernativa ha sido agotada.

Esta exigencia se justifica igualmente en la medida de que la certificación que acredita la negativa tácita por silencio administrativo permite ralizar el cálculo del término de prescripción de la acción.

En resumen, no se adjuntó la correspondiente certificación que hace constatar la negativa tácita de la decisión por silencio administrativo invocado, misma que debió expedir el Ministerio de Educación, por lo que le asiste razón al apelante, quien solicita la inadmisión de la demanda presentada en virtud de los vicios detectados.

En consecuencia, el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativa, de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, PREVIA REVOCATORIA de la Providencia fechada 5 de febrero de 1996, NO ADMITEN la demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción interpuesta por el Doctor NORBERTO CASTILLO, en representación de VELKYS YARIELA SANTAMARÍA MARTÍNEZ.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA ICAZA, GONZÁLEZ-RUIZ Y ALEMÁN, EN REPRESENTACIÓN DE DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S. A. PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 213-4271

DE 5 DE MAYO DE 1994, EXPEDIDA POR LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE INGRESOS DE LA PROVINCIA DE PANAMÁ, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, TRECE (13) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma forense **Icaza, González-Ruiz y Alemán**, en representación de **DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S. A.**, ha presentado Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° 213-4271 de 5 de mayo de 1994, expedida por la Administración Regional de Ingresos de la Provincia de Panamá, acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

La sociedad demandante **DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S. A.**, pretende que esta Sala declare la nulidad, por ilegal, de la Resolución N° 213-4271 de 5 de mayo de 1994, por medio de la cual la Administración Regional de Ingresos de la Provincia de Panamá, resolvió expedir liquidación adicional en cuanto a las deficiencias y ajustes en los rubros identificados como: Otros ingresos que comprende la utilidad en ventas de activo, y Publicidad y Promoción en Ventas y Gastos Gerenciales, del Impuesto sobre la Renta para los años 1991 y 1992 a favor del Tesoro Nacional.

Además, que como consecuencia de la declaratoria de ilegalidad, se declare que no está obligada a pagar al Tesoro Nacional las obligaciones tributarias dimanantes de las supuestas deficiencias anotadas en el punto anterior, y, por consiguiente, que el Ministerio de Hacienda y Tesoro está obligado a devolverle la suma de ciento noventa y dos mil doscientos treinta y tres balboas con cincuentiun centésimos (192,233.51) que depositó ante ese Ministerio para cumplir con el artículo 46 de la Ley N° 135 de 1943.

Las aludidas pretensiones las fundamenta el apoderado judicial de la recurrente en los siguientes hechos:

Que la sociedad demandante, DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S. A., vendió veinte (20) camiones de su propiedad obteniendo una ganancia por la suma de doscientos dieciséis mil ochocientos quince balboas (B/.216,815.00), la cual se asentó en los libros de la sociedad, el 2 de octubre de 1991. Que al momento de presentar su declaración jurada de renta correspondiente al período fiscal 1991, incluyó dicha ganancia dentro del renglón "ingresos no gravables", con fundamento en lo establecido en el literal e) del artículo 701 del Código Fiscal, vigente al 2 de octubre de 1991, conforme el cual no se consideraba como renta gravable la ganancia obtenida en la enajenación de bienes muebles en los casos en que el enajenante no negociara habitualmente en tales operaciones, por razón de que el negocio habitual de su representada es la distribución de cervezas y no la operación habitual de enajenación de bienes muebles. Sin embargo, la Administración Regional de Ingresos de la Provincia de Panamá mediante la Resolución N° 213-4271 de 5 de mayo de 1994, resolvió expedir una liquidación adicional por supuestas deficiencias en sus declaraciones de rentas correspondientes a los períodos fiscales 1991 y 1992.

Que mediante la Resolución enunciada en el párrafo anterior, la referida entidad consideró que dicha sociedad debió haber tomado en cuenta la ganancia dimanante de la venta de veinte camiones de su propiedad, como un ingreso gravable, con fundamento en el artículo 10 de la Ley 31 de 1991, que modificó el literal e) del artículo 701 del Código Fiscal. De igual manera, que a través de dicha resolución, la Administración Regional de Ingresos objetó los gastos identificados como Publicidad (Promoción en Ventas-Gastos Gerenciales), por considerar que el contribuyente no comprobó que tales gastos eran necesarios para la conservación de la fuente o la producción de la renta.

De la acción encausada se le dio traslado a la entidad administrativa demandada, que procedió a rendir su informe explicativo de conducta, legible a

fs. 46-56 del exp. argumentando básicamente lo siguiente:

> "Dicha resolución se expidió en base a investigaciones llevadas a cabo por auditores al servicio del Departamento de Auditoría Integral de la Dirección General de Ingresos quienes determinaron deficiencias en los rubros de otros ingresos (utilidad en ventas de activo), publicidad, promoción en ventas, gastos gerenciales, provisión para cuentas malas y otros gastos administrativos (prima de antigüedad).
>
> Los recurrentes en la partida de Otros Ingresos (utilidad en ventas de activo) alegan que la Administración `pretendía indebidamente aplicar, en forma retroactiva las reformas y/o adiciones introducidas a nuestro Código Fiscal mediante la Ley 31 de 30 de diciembre de 1991.
> ...
> Esta Administración reconoce que el período fiscal normal de un contribuyente va de el 1° de enero de un año al 31 de diciembre de ese mismo año, dicho en otras palabras el último día o el que cierra el período para todos los efectos es el 31 de diciembre.
>
> La Ley 31 de 30 de diciembre de 1991 en base a su Artículo 40 rige a partir del 31 de diciembre de 1991, precisamente el último día del cierre del período fiscal, por lo que consideramos es perfectamente aplicable desde el 1° de enero de 1991.
> ...
> El contribuyente declaró como Ingresos no Gravables B/.299,743.74 para el período 1991, de los cuales B/.216,815.00 corresponden a ganancias por venta de sus camiones.
>
> Para esta Administración las reformas al Artículo 701 del Código Fiscal, eran efectivas a partir del 1° de enero de 1991. por lo que eran gravables las ganancias obtenidas en la enajenación `de los demás bienes muebles .
> ...
> La investigación realizada por los auditores determinaron en el rubro de Publicidad (promoción en ventas-gastos gerenciales) diferencias por B/.23,360.00 y 58,915.00 para los años 1991 y 1992, respectivamente, que no fueron sustentadas por el contribuyente.
>
> El recurrente en su escrito se concretó a decir que esos gastos son enteramente necesarios para la producción de su renta y conservación de su fuente, no aportando ninguna prueba al respecto.
>
> La Carga de la Prueba recae en el contribuyente ... Así mismo el Artículo 697 del Código Fiscal establece en el acápite `f del Parágrafo 2 de que no son gastos o erogaciones deducibles, cualquier otro gasto, que aunque, deducible, no pueda ser comprobado satisfactoriamente cuando su prueba sea exigida por la Dirección General de Ingresos.
>
> Por lo que, no habiendo el contribuyente comprobado la deducibilidad de esos gastos se procedió a mantener la deficiencia."

La Procuradora de la Administración mediante Vista Fiscal N° 44 de 30 de enero de 1995, que reposa a fs. 57-71, solicitó a esta Sala denegar las pretensiones del recurrente en atención a lo siguiente:

Al presentar la parte actora una declaración jurada de su Renta Gravable en la cual no había anotado los ingresos percibidos por haber efectuado una venta de camiones propiedad de la empresa, que según el recurrente fue registrada en sus libros de contabilidad el 2 de octubre de 1991, fecha comprendida dentro del año fiscal de 1991, que finalizaba el 31 de diciembre de 1991, la misma al ser un Impuesto Nacional denominado Impuesto sobre la Renta, se computa dentro de un período denominado Año Fiscal, que se inicia el 1° de enero y finaliza el 31 de diciembre de cada año, y, por consiguiente, debía ceñirse a los mecanismos

necesarios para el cobro de ella, en este caso la Ley 31 de 30 de diciembre de 1991.

En lo que respecta a los gastos y erogaciones en los renglones de publicidad, considera la Procuradora de la Administración que tampoco se produce vicio de ilegalidad alguno en la resolución dictada por la Administración Regional de Ingresos que impone una liquidación adicional a la renta gravable, por haberse detectado deficiencias en las declaraciones de impuestos hechas al contribuyente, ya que el recurrente no aportó elementos probatorios con fuerza legal que lograran desvirtuar las investigaciones efectuadas por la Administración General de Ingresos, ya que sólo se limitó a indicar que se encontraban en sus archivos.

Cumplidos los trámites legales instituidos para este tipo de proceso, la Sala pasa a resolver la controversia encausada.

Primeramente se aduce infringido el artículo 40 de la ley 31 de 1991, que establece:

> "Artículo 40. Esta Ley comenzará a regir a partir del 31 de diciembre de 1991."

Sobre el concepto de la violación la parte actora sostiene lo siguiente:

> "De conformidad con la norma antes transcrita, la entrada en vigencia de la Ley 31 de 30 de diciembre de 1991, se da a partir de 31 de diciembre de 1991, por lo que sólo puede regir para aquellas actuaciones que se den a partir de esta última fecha.
>
> La Administración Regional de Ingresos de la Provincia de Panamá pretende aplicar de manera retroactiva las disposiciones de la Ley en mención, en el caso particular que nos ocupa, el artículo 10 de dicha ley, por el cual se modifica el literal e) del artículo 701 del Código Fiscal. La pretendida aplicación retroactiva de las disposiciones de la Ley 31 de 1991, es a todas luces ilegal, ya que el legislador no le dio el carácter de tal a las normas en mención.

También se aduce infringido el artículo 10 de la Ley 31 de 30 de diciembre de 1991, que por estar estrechamente vinculado al anterior cargo de violación, la Sala estima procedente analizarlos en su conjunto.

> "Artículo 10. Se modifican el primer párrafo y los literales c), e), y g) del artículo 701 del Código Fiscal y se le adicionan los literales h), i) y j), así:
>
> Artículo 701. Para los efectos del Impuesto sobre la Renta en los casos que a continuación se mencionan, se seguirán las siguientes reglas:
> ...
> e) Salvo lo preceptuado por el Artículo 44 de del Decreto de Gabinete N° 247 de 16 de julio de 1970, son gravables las ganancias obtenidas en la enajenación de bonos, acciones, cuotas de participación y demás valores emitidos por las personas jurídicas; así como las obtenidas en los demás bienes muebles."

Al referirse al concepto de la violación de esta disposición, el recurrente señala:

> "Con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 31 de 30 de diciembre de 1991, el literal e) del artículo 701 del Código Fiscal estaba redactado de forma tal que sólo se consideraba como renta gravable las ganancias obtenidas en la enajenación de bienes muebles en los casos en que el enajenante negociara habitualmente con tales operaciones. En virtud de la reforma por el artículo 10 de la Ley 31 de 1991, las ganancias obtenidas en la enajenación de bienes muebles se consideran como renta gravable con prescidencia de si el

enajenante negocia o no habitualmente con tales operaciones.

> La Administración Regional de Ingresos de la Provincia de Panamá, al expedir la liquidación adicional en contra de nuestra representada, pretende aplicar el artículo 10 de la ley 31 de 1991 a una situación que se dio con anterioridad a la entrada en vigencia de la mencionada Ley. Como señalamos anteriormente en el presente escrito, la ganancia obtenida por nuestra representada, dimanante de la venta de veinte camiones de su propiedad fue asentada en los libros de contabilidad de la sociedad e 12 de octubre de 1991, fecha en la cual hubiese constituido una renta gravable sólo en el caso de que DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S. A. se dedicara habitualmente a la enajenación de bienes muebles. Como señalamos anteriormente, nuestra representada se dedica a la distribución cervezas y jamás ha tenido dentro de su giro normal de negocio la enajenación de bienes muebles.
>
> Por lo anterior, debemos concluir que al expedir que liquidación adicional contra nuestra representada, pretendiendo que las ganancias dimanantes de la enajenación de un bien mueble, en una operación que se dio con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 31 de 1991, sea considerada como renta gravable ...".

Esta Superioridad estima que no le asiste razón a la parte actora al señalar que la Administración Regional de Ingresos de la Provincia de Panamá, aplicó retroactivamente las disposiciones legales contenidas en la Ley 31 de 1991, al proceder a gravar hechos económicos acaecidos con anterioridad a la entrada en vigencia de dicha ley, en virtud de los siguientes planteamientos.

Según el recurrente, la razón por la cual declaró como "Ingreso no Gravable" la cantidad de B/.216,815.00 correspondientes a las ganancias por venta de sus camiones para el período fiscal de 1991, obedeció, tal y como se expresara en líneas anteriores, a que la venta de los mismos se dio con sujeción a lo establecido en el literal e) del artículo 701 del Código Fiscal, vigente al 2 de octubre de 1991, conforme el cual no era sujeto de renta gravable la ganancia obtenida en la enajenación de bienes muebles en los casos en que el enajenante no negociara habitualmente en tales operaciones que era su caso, ya que habitualmente se dedica a la actividad comercial de distribución de cervezas y no a la enajenación habitual de bienes muebles.

En materia de impuesto sobre la renta, es conveniente indicar que se trata de un impuesto de período que de conformidad con el artículo 705 del Código Fiscal comprende el período general que comienza el 1° (primero) de enero y termina el 31 de diciembre del año fiscal en curso. Siendo así, las actividades que se hayan efectuado en un período fiscal anterior a la declaración jurada de renta cuyo pago debe efectuarse dentro de los tres meses del año siguiente, comprende todas las rentas que se hayan obtenido durante el año gravable anterior.

Dado lo expuesto, debe entenderse entonces que al gravar la Administración Regional de Ingresos a la sociedad demandante por la realización de hechos económicos acaecidos durante el período fiscal correspondiente al año de 1991, los mismos se rigen por la ley vigente al momento en que concluye dicho período, en este caso la Ley 31 de 30 de diciembre de 1991, que en su artículo 40 estableció que **entraría a regir a partir del 31 de diciembre de 1991.**

Sobre este punto es conveniente traer a colación la Sentencia de 25 de septiembre de 1992, en la que el Pleno de esta Corporación de Justicia al pronunciarse sobre la Inconstitucionalidad o no del artículo 7, y el parágrafo 2 (transitorio) de dicho artículo, de la Ley 31 de 1991, estableció que esa Ley, es decir, la Ley de 30 de diciembre de 1991, que entró en vigencia el 31 de diciembre de 1991, es aplicable a la renta gravable que se extiende del 1° de enero al 31 de diciembre de 1991. Para mayor ilustración veamos lo que al respecto se señaló en aquella ocasión:

"No obstante, el problema se plantea frente a dos aspectos: en

primer lugar, si la disposición legal, que es de orden público, cumple con el mandato constitucional en el cual es obligante, para producir efectos retroactivos, consignarlo en la misma ley; en segundo lugar, en caso de considerarse que no existe expresamente la retroactividad, si efectivamente esta ley, que entró en vigencia el 31 de diciembre de 1991, es aplicable a la renta gravable que se extiende del 1° de enero al 31 de diciembre de 1991, por efectos retroactivos, o si, por el contrario, su vigencia se inicia el 31 de diciembre de 1991, y el cobro de la tarifa allí señalada se realiza en función de que el impuesto de renta se produce al finalizar el año, esto es, a las doce de la noche de ese día 31 de diciembre, por lo que nada tiene que ver con la retroactividad.

El texto de la norma expresamente establece `Las personas jurídicas pagarán por su renta neta gravable del año fiscal de 1991 ... . De su redacción pudiera surgir la duda si el legislador le da a esta norma el carácter retroactivo a que se refiere el artículo 43 de la carta fundamental. La verdad es que el legislador le está dando carácter retroactivo a esta disposición, ya que no, en otra forma, pudiera entenderse la transcripción anterior que ordena a las personas jurídicas pagar su renta gravable del año fiscal de 1991, de acuerdo a la tarifa allí establecida. Como anteriormente se ha expresado, la retroactividad no es más que la aplicación de la norma a hechos pasados cuando ella no existía y, por lo tanto, si en la disposición atacada se ordena que se aplique al año fiscal de 1991 sin distinción, se cumple con el mandato del artículo 43 constitucional cuando se expresa que tendrá efecto o vigencia sobre una situación que se inicia el 1° de enero y termina el 31 de diciembre de 1991.

La norma atacada como inconstitucional, por infractora del artículo 43 de la Constitución Política de la República, tal como sostiene la demandante, no lo es por las razones valiosas que exponen el señor Procurador General de la Nación y el Dr. Mario J. Galindo H., sino porque se está frente a una norma de orden público en donde se expresa su alcance al año fiscal de 1991. No es menester, como aparentemente se esboza en las alegaciones formuladas por quienes han argumentado en este negocio, el uso de la palabra retroactiva como indispensable para considerar la aplicación a casos anteriores a su vigencia de una disposición legal de orden público o interés social, cuando, en casos como en el presente, el legislador, en forma precisa e indubitable, se refiere al período sobre el cual recae el gravamen establecido en la nueva ley. El mandato de aplicación de la ley al período fiscal iniciado el 1° de enero de 1991, es expreso, por lo que, consecuentemente con lo expuesto, se desestima la violación del artículo 43 de la Constitución Política de la República."

Por las consideraciones vertidas, no proceden los cargos de violación endilgados al artículo 40, y al literal e) del artículo 10 de la Ley 31 de 30 de diciembre de 1991.

En lo que concierne a la infracción del literal e) del artículo 701 del Código Fiscal, vigente antes de la promulgación de la Ley N° 31 de 30 de diciembre de 1991, según el cual no se consideraba renta gravable la ganancia obtenida en la enajenación de bienes muebles en los casos en que el enajenante no negociara habitualmente en tales operaciones, no es procedente entrar a examinar el cargo de violación endilgado al mismo, ya que este artículo no es aplicable al caso súbjudice. Esta disposición legal fue reformada por el artículo 10 de la Ley 31 de 1991, que como se estableciera en líneas anteriores, es la norma aplicable al presente proceso.

El artículo 10 de la Ley 31 de 1991, modifica entre otros, el literal e) del Artículo 701 del Código Fiscal estableciendo como gravables las ganancias obtenidas en la enajenación de bonos, acciones, cuotas de participación y demás valores emitidos por las personas jurídicas, así como las obtenidas en la

enajenación de los demás bienes muebles.

Al establecerse como gravable las ganancias obtenidas por el contribuyente en la enajenación de bienes muebles aún cuando el mismo no se dedique habitualmente a efectuar tales operaciones, lo procedente debió ser que la sociedad demandante **DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S. A.**, al momento de presentar su declaración jurada de renta correspondiente al período fiscal 1991, incluyera como **gravable** la ganancia obtenida por la venta de veinte camiones de su propiedad, que según alega se asentó en los libros de la sociedad, el 2 de octubre de 1991.

También se aducen infringidos el párrafo primero del artículo 697 del Código Fiscal y los tres primeros párrafos del artículo 29 (Principios Generales), que por estar vinculados entre si, procedemos a analizarlos en su conjunto. El texto de los mismos es el siguiente:

> "Artículo 697. Se entiende por gastos o erogaciones deducibles, los gastos o erogaciones ocasionados en la producción de la renta y en la conservación de su fuente; en consecuencia, no serán deducibles, entre otros, aquellos gastos, costos o pérdidas generados o provocados en negocios, industrias, profesiones, actividades o inversiones cuya renta sea de fuente extranjera o exenta. El Órgano Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Hacienda y Tesoro, establecerá las normas reglamentarias para la aplicación de los principios contenidos en este artículo."...
>
> "Artículo 29. (Principios Generales).
> Además de los mencionados en el Parágrafo uno del artículo 697 del Código Fiscal, los gastos o erogaciones deducibles cuya deducción de la renta bruta se autoriza son aquellos gastos de conservación o de producción de renta de fuente panameña, efectivamente pagados o incurridos en el año fiscal.
>
> Se entiende por gasto de conservación de una fuente de renta, aquel en que se tenga que incurrir necesariamente para mantenerla en condiciones de trabajo, servicio o producción, sin que adquiera aumento de valor por razón del gasto.
>
> Se entiende por gastos de producción de la renta, las demás erogaciones indispensables para obtener los productos o para percibir la ganancia." ...

La parte actora conceptúa la violación de las precitadas disposiciones legales, argumentando medularmente que al objetar la Administración Regional de Ingresos de la Provincia de Panamá la deducibilidad de las sumas pagadas por ella en concepto de gastos de publicidad (promoción en ventas-gastos gerenciales), que se determinaron por la cantidad de veintitrés mil trescientos sesenta balboas (23,360.00) y cincuenta y ocho mil novecientos quince balboas (58,915.00) para los años 1991 y 1992, respectivamente, basándose en que la vinculación de tales sumas y conceptos con la producción y conservación de su fuente, no fueron debidamente justificados, se encuentra divorciada de la realidad.

Ello obedece según el recurrente, a que un examen de los gastos efectuados, en los conceptos antes mencionados, durante los períodos fiscales 1991 y 1992, demuestra que los mismos son necesarios para la producción de la renta y conservación de su fuente.

Añade la sociedad demandante que estos gastos se refieren a desembolsos hechos por vendedores y gerentes del contribuyente, efectuados para pagar costos de degustación, agasajos y demás eventos realizados en interés directo de la producción de la renta, gastos estos que han sido efectuados en favor de personas que, por la naturaleza de sus actividades, carecen de organización administrativa y contable para producir los comprobantes correspondientes.

De conformidad con nuestra legislación fiscal, son considerados como

deducibles aquellos gastos que inciden necesariamente en la producción de la renta panameña o en la conservación de su fuente, siempre que el contribuyente acredite debidamente que tales gastos no aceptados como deducibles por la Administración, efectivamente fueron utilizados en la conservación de la renta.

En el presente caso, se observa a fs. 90-117 del expediente contencioso, que la parte actora ha acompañado una serie de pruebas periciales y copias fotostáticas de una serie de memorandos que indican la cantidad de B/.40,810.45, así como también de comprobantes de diarios cuyo monto asciende a B/.58,915.00, cantidad que concuerda con el ajuste efectuado por el fisco en concepto de Publicidad (Promoción en Ventas- Gastos Gerenciales), para el año de 1992.

En lo que respecta a los gastos de publicidad para el año de 1991, cuyo ajuste efectuado por la Administración Regional de Ingresos asciende a la suma de B/.23,360.00, cabe destacar que según se desprende del informe pericial (ver f. 92), y así se infiere de las copias fotostáticas aportadas, se estableció claramente, que la información correspondiente y sustentatoria de este año, era imposible acreditarla por razón de que "esta información se había microfilmado y que la misma se destruyó, se deterioró o se extravió."

La Sala estima, y de conformidad con nuestra legislación fiscal, que al acreditar la sociedad demandante que los gastos correspondientes al año de 1992 concernientes al renglón de Publicidad (Promoción en Ventas-Gastos Gerenciales) fueron incurridos en la conservación de la fuente y producción de la renta, efectivamente son deducibles.

Por lo tanto, prosperan los cargos de violación endilgados al acto acusado, sólo en lo concerniente al renglón Gastos de Publicidad (Promoción en Ventas-Gastos Gerenciales) para el año de 1992; no así para el año de 1991, ya que estos no fueron debidamente comprobados, y por ende, no pueden ser aceptados como deducibles.

En acatamiento a esta resolución judicial, la Administración Regional de Ingresos del Ministerio de Hacienda y Tesoro deberá proceder a la expedición de un nuevo alcance adicional, computándose a favor de la empresa demandante los gastos de publicidad antes mencionados como **efectivamente deducibles** para el período fiscal del año 1992, y en vista de que la empresa **DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S. A.** ya había procedido al pago de la totalidad del alcance expedido en concepto de Impuesto sobre la Renta e Impuesto Complementario (según consta en recibos N° 327.615.69 y 327.618.28, de 2 de diciembre de 1994 visibles a foja 23 del expediente), le asiste igualmente el derecho al contribuyente de que la administración tributaria le devuelva la proporción correspondiente de las deficiencias mencionadas en el punto anterior.

En consecuencia, la Sala Tercera, Contencioso Administrativa, de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA PARCIALMENTE ILEGAL, la Resolución N° 213-4271 de 5 de mayo, expedida por la Administración Regional de Ingresos de la Provincia de Panamá, acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones, y por consiguiente ORDENA que se haga la devolución que corresponda por la deducción reconocida.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO MIGUEL BATISTA GUERRA, EN REPRESENTACIÓN DE ELVIRA ISABEL PINEDA, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 242-93 DE 1° DE NOVIEMBRE DE 1993, EMITIDA POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO

PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, TRECE (13) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado **Miguel Batista Guerra**, en representación de **ELVIRA ISABEL PINEDA**, ha presentado Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° 242-93 de 1° de noviembre de 1993, emitida por la Comisión de Prestaciones de la Caja de Seguro Social, actos confirmatorios y para que se hagan otras declaraciones.

Con la presente acción el recurrente pretende que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° 243-93 de 1° de noviembre de 1993, emitida por la Comisión Nacional de Prestaciones Económicas de la Caja de Seguro Social, mediante la cual se decidió no considerar Riesgo Profesional el accidente reportado por la Empresa COMISIÓN DEL CANAL DE PANAMÁ, ocurrido el 27 de mayo de 1993, en el que falleció el señor OTONIEL SANTAMARÍA, S. S. 112-8759 y por lo tanto, no conceder pensión de sobreviviente, solicitada en calidad de madre a la señora ELVIRA ISABEL PINEDA, N° de cédula 4-97-1601. Que como consecuencia de la declaratoria de ilegalidad de dicha resolución, se declare la muerte de OTONIEL SANTAMARÍA como accidente de trabajo y a su vez, se le pague a la madre del occiso la pensión correspondiente.

El representante legal de la parte actora formula las pretensiones aludidas fundamentalmente, en los siguientes hechos:

> **PRIMERO:** El señor **OTONIEL SANTAMARÍA PINEDA**, trabajaba para la Comisión Del Canal De Panamá.
>
> El día veintiséis (26) de mayo de mil novecientos noventa y tres (1993), inició labores a 2100 horas y salió 0500 horas del día 27 del mismo año.
>
> **SEGUNDO**: El día veintisiete (27) de mayo a las 0700 horas, el señor **OTONIEL SANTAMARÍA PINEDA**, falleció como consecuencia de un accidente de tránsito.
>
> **TERCERO:** El accidente fue reportado como riesgo profesional por la Empresa Comisión del Canal de Panamá.
>
> **CUARTO:** Mi representante **ELVIRA ISABEL PINEDA**, en su condición de madre del fallecido **OTONIEL SANTAMARÍA**, solicitó a la Caja Del Seguro Social se reconociera una Pensión de Sobreviviente.
>
> **QUINTO:** La Comisión de Prestaciones de la Caja de Seguro Social resolvió no conceder la Pensión de Sobreviviente solicitada, mediante Resolución N° 242-93 de dos (2) de noviembre de mil novecientos noventa y tres (1993).
>
> **SEXTO:** La Comisión de Prestaciones Económicas de la Caja de Seguro Social, para arribar a la decisión arriba indicada se fundamentó en que el accidente en que perdiera la vida **SANTAMARÍA PINEDA** ocurrió a las 0950 horas (9:50 a. m.) de la mañana del día veintisiete (27) de mayo de mil novecientos noventa y tres (1993) y que según acreditaba en una certificación expedida por la Comisión del Canal de Panamá el señor **OTONIEL SANTAMARÍA PINEDA**, laboró para la empresa hasta las cuatro y diez (4:10 a. m.) de la mañana del día veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y tres (1993).
> ...
> **DÉCIMO:** Consta en el expediente que la hora en que terminó el turno del hoy occiso fue a las 0500 horas (5:00 a. m.) del día veintisiete (27) de mayo de mil novecientos noventa y tres (1993) Pág. 73.

> **DÉCIMO PRIMERO:** Desde el momento en que terminó el turno de trabajo es decir a las 0500 horas (5:00 a. m.) al momento en que ocurrió el accidente 0700 horas (7:00 a. m.) transcurrieron dos (2) horas y no cinco (5) como dice la Resolución impugnada.
> ...
> **DÉCIMO TERCERO:** El Protocolo de Necropsia, revela un grado elevado de alcoholemia, evidentemente se trata de un error toda vez que como queda dicho en el hecho anterior no dispuso el occiso de tiempo en el que pudo haber ingerido bebida alcohólica alguna."

De la acción encausada se le dio traslado a la entidad demandada que en su informe explicativo de conducta, legible a fs. 22-25, señaló que la razón medular por la cual se resolvió no considerar riesgo profesional el accidente reportado por el Patrono COMISIÓN DEL CANAL DE PANAMÁ, y por consiguiente se negó también dicha prestación, radicó en que la Comisión de Prestaciones, al evaluar los hechos, estimó que la contingencia no podía calificarse como un accidente de trayecto, a pesar de que se pudo comprobar que el hecho ocurrió entre las 7:00 y 7:30 a. m. del día 27 de mayo, en virtud de que se consideró que si se tomase como cierta esa hora, el tiempo transcurrido entre el momento en que salió de su trabajo, y el tiempo en que ocurrió el accidente, resultó excesivo para que dicho hecho pueda ser calificado como en trayecto. Además, el protocolo de necropsia reveló un grado de alcoholemia de 130 miligramos, que de acuerdo a la tabla de regulación se considera estado de ebriedad, de lo que se infiere que el occiso ingirió bebidas alcóholicas al salir de su trabajo lo que implica una desviación del trayecto que impide la contingencia como ocurrida "in-itinere". Siendo el fundamento de derecho de esta actuación, el Decreto de Gabinete N° 68 de 31 de marzo de 1970.

La Procuradora de la Administración mediante Vista Fiscal que corre a folios 47-59, se opuso a las pretensiones del recurrente argumentando medularmente que no es posible conceder la pensión de sobreviviente a la señora ELVIRA ISABEL PINEDA, madre del asegurado. A estos efectos sostiene:

> "Al no existir accidente de trabajo o la enfermedad profesional, no es posible conceder pensión de sobreviviente a la señora ELVIRA ISABEL PINEDA, madre del asegurado, toda vez que el artículo 32 del Decreto de Gabinete 68 de 31 de marzo de 1970 es claro al indicar: `Cuando el accidente de trabajo o la enfermedad profesional causen la muerte del asegurado habrá derecho a pensiones a las personas contempladas en el presente Artículo, y en la forma que aquí se establece ... c) Madre ... .
>
> Una interpretación a contrario sensu, nos aclara que cuando la muerte del asegurado no la cause un accidente de trabajo o la enfermedad profesional, no habrá derecho a pensiones para las personas contempladas en dicho artículo, incluyendo el literal c) que se refiere a la madre."

Cumplidos los trámites legales establecidos para estos procesos, la Sala procede a externar las siguientes consideraciones finales en torno a la presente controversia.

Se consideran violados los artículos 3; acápite c), 32; acápite c) del Decreto de Gabinete N° 68 de 1970 y el Artículo 293 del Código de Trabajo; ordinal 4, que por la relación que guardan entre si, es procedente analizarlos en su conjunto.

El texto legal de dichas disposiciones es el siguiente:

> "**Artículo 3-** También se considerará accidente de trabajo el que sobrevenga al trabajador:
> ...
> d) El que ocurra al trabajador al trasladarse de su domicilio al lugar en que desempeña su trabajo o viceversa."

> **"Artículo 293.** También se considerará accidente de trabajo el que sobrevenga al trabajador:
> ...
> 4. El que ocurra al trabajador al trasladarse de su domicilio al lugar en que desempeñe su trabajo o viceversa."
>
> **"Artículo 32.** Cuando el accidente de trabajo o la enfermedad profesional causen la muerte del asegurado, habrá derecho a pensiones a las personas contempladas en el presente Artículo, y en la forma que aquí mismo se establece:
> ...
> c) Madre: Una pensión equivalente al 20% del salario, durante 10 años, la cual se elevará el 30% de dicho salario, en caso de que, desde el comienzo, no hubiere beneficiarios de los contemplados en el ordinal b) de este Artículo."

Sobre el concepto de la violación de las precitadas normas legales, expresa el apoderado legal de la parte demandante que las mismas han sido violadas de manera directa, toda vez que el trabajador estaba de regreso a su casa luego de haber cumplido con el turno de trabajo, cuando ocurrió el accidente en que perdiera la vida. Por lo tanto, era obligante que se le pagara la pensión de sobreviviente solicitada a la madre del occiso. Además de que el acto impugnado, no distingue en concepto de que niega la pensión y al no hacerlo, le está negando el derecho que le asiste aún cuando la muerte no se considere profesional.

Frente a lo manifestado por el recurrente, estima esta Superioridad que no le asiste razón en virtud de que el accidente en el que falleció el asegurado no puede ser considerado como accidente de trabajo, en atención a los siguientes planteamientos.

Si bien es cierto, consta a fs. 73-74 del expediente gubernativo, que el señor **OTONIEL SANTAMARÍA PINEDA** culminó sus labores a las 5:00 a. m. del día 27 de mayo de 1993, y de igual manera, existen indicios de que el accidente ocurrió alrededor de las 7:00 a. m. del mismo día, dos horas después de que el hoy occiso terminó su jornada de trabajo, y no a las 9:50 a. m., como se hizo constar en el parte policivo, el Protocolo de Necropsia reveló que de acuerdo al resultado de los análisis toxicológicos, el fallecido asegurado presentó una alcoholemia de 130 mg, lo cual constituye un indicativo de que previamente al deceso el occiso consumió alcohol, tal como se aprecia a fs. 14-15. El grado de alcoholemia de 130 mg según la Tabla de servicio de Patología de la Caja de Seguro Social constituye una ebriedad media. Cfr. f. 30 del exp. gubernativo.

El hecho de haber presentado el asegurado **OTONIEL SANTAMARÍA PINEDA** estado de ebriedad al momento de su fallecimiento, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 4; literal b) del Decreto de Gabinete N° 68 de 1970, en concordancia con el 294; ordinal 2 del Código de Trabajo, constituye causal suficiente para que dicho accidente no se considere de trabajo. El texto de estas disposiciones es del tenor siguiente:

> **"Artículo 4-** No se considerará accidente de trabajo para efectos del presente Decreto de Gabinete en este Seguro:
> ...
> b) El que fuere producido por culpa grave del trabajador, considerándose como tal la desobediencia comprobada de órdenes expresas, el incumplimiento culposo o manifiesto de disposiciones del Reglamento de Prevención de Riesgos Profesionales y de Seguridad e Higiene Industriales y la embriaguez voluntaria, a no ser que en este caso el patrono o su representante le hayan permitido al trabajador el ejercicio de sus funciones, o cualquier otra forma de narcosis."
>
> **"Artículo 294.** No se considerará accidente de trabajo para efectos del presente Código:
>
> 2. El que fuera producido por culpa grave del trabajador,

considerándose como tal la desobediencia comprobada de órdenes expresas, el incumplimiento culposo o manifiesto de disposiciones del Reglamento de Prevención de Riesgos Profesionales y de Seguridad e Higiene Industriales y la embriaguez voluntaria, a no ser que en este caso el empleador o su representante le hayan permitido al trabajador el ejercicio de sus funciones en tal estado o en cualquier otra forma de narcosis".

El Tribunal tiene que concluir que en el presente caso, el accidente pudo ocurrir en dos circunstancias: que el occiso mientras cumplía su turno se encontraba en estado de ebriedad, lo cual parece incompatible dada la naturaleza delicada de la función que desempeñaba como Pasacables en la Comisión del Canal de Panamá, o, que efectivamente al momento en que se trasladaba hacia su residencia se desvió en el trayecto y procedió a la ingestión de bebidas alcohólicas. Ambas situaciones contravienen claramente las disposiciones legales en materia de accidente por trabajo, previamente citadas.

Por consiguiente, al no ser considerado el accidente del asegurado fallecido **OTONIEL SANTAMARÍA PINEDA**, como de trabajo, no era posible conceder la pensión de sobreviviente a la señora **ELVIRA ISABEL PINEDA**, madre del occiso, tal como se desprende de la interpretación a contrario sensu, del artículo 32 del Decreto de Gabinete N° 68 de 1970, que regula el derecho a pensiones que tienen los sobrevivientes cuando el accidente de trabajo o la enfermedad profesional causen la muerte del asegurado.

En lo que respecta a la violación del Artículo 56-E del Decreto Ley N° 14 de 1954, considera la Sala que no le es aplicable al caso súbjudice, ya que el mismo regula el derecho de pensión correspondiente a los sobrevivientes por muerte del asegurado o pensionado fallecido cuando la misma sea de origen no profesional, y no cuando el origen de esta, lo constituya un accidente de trabajo, que es la causa en la que descansan las pretensiones de la recurrente.

También se aducen infringidos los artículos 770 y 771 del Código Judicial que señalan lo siguiente:

"ARTÍCULO 770. Las pruebas se apreciarán por el Juez según las reglas de la sana crítica, sin que esto excluya la solemnidad documental que la ley establezca para la existencia o validez de ciertos actos o contratos.

El juez expondrá razonadamente el examen de los elementos probatorios y el mérito que les corresponde."

"ARTÍCULO 771. El juez practicará personalmente todas las pruebas pero si no lo pudiere hacer por razón del territorio, comisionará a otro para que en la misma forma las practique."

Alega el recurrente que las precitadas disposiciones fueron infringidas por omisión, dado que tales normas en relación con el artículo 36 del reglamento, obligan a la Comisión Económica a establecer las causas reales y veraces de cualquier accidente, cuando en el caso que nos ocupa el empleador denunció el hecho como accidente de trabajo.

Considera la Sala que no se ha dado tal infracción, por razón de que en el presente caso, y tal como lo señaláramos en líneas anteriores, se efectuaron todas las diligencias pertinentes con el fin de investigar las circunstancias que provocaron el accidente en que el que falleciera el asegurado, la hora aproximada en que aconteciera el mismo, y de esta manera proceder a determinar si dicho accidente podía ser considerado de trabajo. Sobre este punto, conviene traer a colación los señalamientos efectuados en la vía gubernativa por la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social en la Resolución N° 96-89-94-J. D. de 22 de septiembre de 1994:

"Que al sustentar la alzada el apoderado legal de la interesada adjuntó como prueba un certificado de la Comisión del Canal donde se

> informa, que el día del accidente el asegurado fallecido salió de su trabajo a las 5:00 a. m. y no a las 4:10 como se había certificado en documento a fojas 13 del expediente;
>
> Que por otra parte pide también la declaración testimonial de TOMÁS NAVARRO y OSCAR A. BONILLA las cuales como aspecto importante suscriben que el accidente ocurrió entre las 7:00 y 7:30 a. m. y no como había sido establecido en otras piezas en otras piezas que obran en el expediente, a las 9:50 a. m. (fojas 53, 51 y 29).
>
> Que al evaluar el escrito del apelante y las nuevas pruebas aportadas en 1 esta instancia observamos que las mismas no aportan en lo esencial, elementos que motiven contradecir la decisión adoptada en la instancia inferior; por cuanto que, aún si tomáramos como cierta la hora del accidente que deponen los testigos, el tiempo transcurrido entre la hora en que salió de su trabajo y la del accidente, revelan un exceso de tiempo para transportarse entre éste y su residencia, cuestión que aunado al estado de ebriedad que se le diagnosticó al occiso, nos permiten concluir que no hubo un accidente de trabajo "initinere."

La transcripción anterior la comparte la Sala por ser el resultado claro de la investigación realizada.

En consecuencia, la Sala Tercera, Contencioso Administrativo de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA QUE NO ES ILEGAL, la Resolución N° 242-93 de 1° de noviembre de 1993, emitida por la Comisión de Prestaciones Económicas de la Caja de Seguro Social, actos confirmatorios y para que se hagan otras declaraciones.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA FORENSE SOLÍS, ENDARA, DELGADO Y GUEVARA, EN REPRESENTACIÓN DE POLAR FRIGORÍFICO, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 4964-93-SUB-D. G. DE 29 DE JULIO DE 1993, EMITIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, CATORCE (14) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma **Solís, Endara, Delgado y Guevara** en representación de las Sociedades **POLAR FRIGORÍFICO, S. A., CARNES LA MEJOR, S. A., COMPAÑÍA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD, S. A., MACHETAZO CHITRÉ, S. A., INDUSTRIAS EL TORERO, S. A.**, ha presentado demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción con el objeto de que se declaren nulas por ilegales, las Resoluciones N° 4964-93-SUB-D. G. de 29 de julio de 1993, la N° 4967-93-SUB-D. G. de 29 de julio de 1993, la N° 4975-93-SUB-D. G. de 29 de julio de 1993, la N° 4957-93-SUB-D. G. de 29 de julio de 1993, y la N° 4959-93-SUB-D. G. de 29 de julio de 1993, todas emitidas por el Director General de la Caja de Seguro Social, actos confirmatorios y para que se hagan otras declaraciones.

A las empresas antes señaladas se les condenó al pago treinta y un balboas con noventa y uno centésimo (B/.31.91), cuatrocientos cuarenta y tres balboas con veinte centésimos (B/.443.20), doscientos sesenta y seis balboas con veintiocho centésimos (B/.266.28), seiscientos quince balboas con veinticinco centésimos

(B/.615.25), ciento ocho balboas con sesenta y cinco centésimos (B/.108.65) respectivamente.

Mediante Auto de 29 de marzo de 1995, la Sala Tercera ordenó la acumulación de las demandas que fueron presentadas individualmente, por razones de economía procesal y para mantener la unidad de causa.

ARGUMENTOS DE LA PARTE ACTORA

El apoderado judicial de las empresas demandadas solicita que se declare ilegales las resoluciones impugnadas en este proceso y se absuelva a las demandantes de la condena impuesta, dado que estima que dichas resoluciones infringen los artículos 24 literal m) de la Ley 30 de 26 de diciembre de 1991; 1, 7 y 8 de la Ley 20 de 12 de agosto de 1992; y 3 del Decreto de Gabinete N° 221 de 18 de noviembre de 1971.

Las razones que fundamentan la inconformidad de las empresas POLAR FRIGORÍFICO, S. A., CARNES LA MEJOR, S. A., COMPAÑÍA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD, S. A., MACHETAZO CHITRÉ, S. A., INDUSTRIAS EL TORERO, S. A., descansan en que las mismas fueron condenadas a pagar determinada suma de dinero -que anteriormente fueron mencionadas- a favor de la Caja de Seguro Social, en concepto de la segunda partida del décimo tercer mes, ya que según esta institución, estas sumas forma parte de sus recursos. Siguen manifestando los recurrentes, que la Caja de Seguro Social utilizó como fundamento legal para autotitularse dueña del derecho a recibir los pagos de la segunda partida del décimo tercer mes, el literal m) del artículo 24 de la Ley 30 de 26 de diciembre de 1991. Que esta norma jurídica fue derogada por el artículo 7 de la Ley 20 de 12 de agosto de 1992, y el artículo 1 de dicha ley 20, el cual restituye a los trabajadores el pago de la segunda partida del décimo tercer mes.

Continúan exponiendo las demandantes, que las normas de la Ley 20 de 12 de agosto de 1992 son de orden público y tienen efecto retroactivo por disposición expresa del artículo 8 de la misma Ley. Que al ser la Ley de orden público sus efectos son retroactivos y se le restituyen a los trabajadores la segunda partida del décimo tercer mes, lo que significa que las empresas afectadas no están obligadas a pagarle a la Caja de Seguro Social las sumas que reclama.

Posteriormente, el Magistrado Sustanciador le solicitó al Director de la Caja de Seguro Social rindiera informe de conducta en relación a las demandas interpuestas por **POLAR FRIGORÍFICO, S. A., CARNES LA MEJOR, S. A., COMPAÑÍA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD, S. A., MACHETAZO CHITRÉ, S. A., INDUSTRIAS EL TORERO, S. A.** Mediante Notas s/n de 21 de abril de 1995, el precitado funcionario señaló que la obligación de los patronos de pagar las sumas derivadas de la segunda partida del décimo tercer mes proporcional correspondiente al año 1992, se originó durante la vigencia del literal m) del artículo 24 de la Ley 30 de 26 de diciembre de 1991, que claramente preceptuaba que las cantidades correspondientes a esta prestación laboral constituían parte integrante de los recursos de la Caja de Seguro Social, para hacer frente a las erogaciones derivadas del Programa de Invalidez, Vejez y Muerte. También agrega el Director de la Caja de Seguro Social que concuerda con el recurrente, en el sentido de que el artículo 1 de la Ley 20 de 12 de agosto de 1992, al aludir a la segunda partida del décimo tercer mes, se está refiriendo al período completo entre el 16 de abril y el 15 de agosto de cada año. Adicionalmente señala, que esta restitución a los trabajadores de la segunda partida no puede aplicarse antes de la vigencia de la ley que dispone tal medida, como pretende el apelante, puesto que dicha legislación claramente dispone, en forma reiterada, que la aludida restitución operaría a partir del 14 de agosto de 1992.

Estima de igual manera el representante legal de la Caja del Seguro Social, que no comparte el criterio de la interpretación teleológica o finalista que esgrimen los recurrentes, y que no puede desconocerse el hecho de que el décimo tercer mes es una prestación laboral que deben satisfacer los empleadores a razón de un día por cada once de trabajo, y en tres partidas de cuatro meses anuales, lo que significa que si la relación concluye por cualquier causa antes del agotamiento del término de una de estas partidas cuatrimestrales, surge de

inmediato la obligación patronal de pagar la proporción del décimo que se haya generado dentro de la partida correspondiente. Que en los casos de los trabajadores cuyas relaciones laborales concluyeron antes del vencimiento del término completo de la segunda partida del décimo tercer mes de 1992, y también antes de la existencia en el mundo jurídico de la Ley 20 de 12 de agosto de 1992, surge la obligación los patronos de cumplir con el literal m) del artículo 24 de la Ley 30 de 26 de diciembre de 1991.

Por último, el artículo 8 de la Ley 20 de 12 de agosto de 1992, dispuso que dicha legislación es de orden público, y que tiene efectos retroactivos pero a partir del 14 de agosto de 1992, por lo tanto no tiene sentido el argumento relacionado con la retroactividad de la ley de que habla el recurrente, ya que la retroactividad tiene eficacia a partir de esta última fecha.

De igual manera se procedió a correrle traslado a la Procuradora de la Administración, quien mediante Vista N° 205 de 19 de mayo de 1995, se opuso a la pretensión incoada.

CRITERIO DEL PROCURADOR

La Procuradora de la Administración al contestar la demanda, indicó fundamentalmente lo siguiente:

> "... no puede desconocerse el hecho de que el Décimo Tercer Mes es una prestación laboral que deben satisfacer los empleadores a razón de un día de salario por cada once días de trabajo, y en tres partidas de cuatro meses anuales, lo cual obviamente significa que si la relación de trabajo concluye por cualquier causa antes del agotamiento del término de una de esta partidas cuatrimestrales, surge de inmediato la obligación patronal de pagar la proporción del Décimo Tercer Mes que se haya generado dentro de la partida correspondiente.
>
> En la situación que se analiza, nos encontramos precisamente ante casos de trabajadores cuyas relaciones laborales concluyeron antes del vencimiento del término completo de la Segunda Partida del Décimo Tercer Mes de 1992, y también antes de la existencia en el mundo jurídico de la Ley 20 de 12 de agosto de 1992. Sin embargo la obligación de los empleadores de pagar las sumas proporcionales de la citada prestación surge durante el imperio del literal m) del Artículo 24 de la Ley N° 30 de 26 de diciembre de 1991, el cual disponía que las sumas correspondientes a la segunda partida del Décimo Tercer Mes formaban parte del patrimonio de la Caja de Seguro Social."

Encontrándose el proceso en este estado los Magistrados de la Sala Tercera de la Corte Suprema entran a resolver la presente controversia.

DECISIÓN DE LA SALA TERCERA

Básicamente, el conflicto del presente negocio se centra en que el demandante señala que la segunda partida del Décimo Tercer Mes del año de 1992 le corresponde a los trabajadores por el efecto retroactivo de la Ley 20 de 1992 y por lo tanto es ilegal el cobro de las sumas arriba citadas, esto por un lado; por el otro, tanto el Director de la Caja del Seguro Social como la Procuradora General de la Nación, son de la opinión que a la Caja del Seguro Social le asiste el derecho de cobrar las sumas que se hayan generado en concepto de la Segunda Partida del Décimo Tercer Mes del año 1992 puesto que éstas se originaron durante la vigencia del literal m) del artículo 24 de la Ley 30 de 1991 que le otorga esta partida al Programa de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja del Seguro Social.

El apoderado judicial, de las empresas afectadas con la decisión de la Caja de Seguro Social, aduce que las infracciones legales comentadas se produce toda vez que el literal m) del artículo 24 de la Ley 30 de 20 de diciembre de 1991 "no podía ser actuada para regular una situación referente a la Segunda Partida del

Décimo Tercer Mes de 1992, porque fue derogada por el artículo 7 de la Ley 20 de 12 de agosto de 1992, cuyo artículo restituyó a los trabajadores -con efecto retroactivo por virtud de su artículo 8- el pago de la Segunda Partida del Décimo Tercer Mes."

Esta Superioridad advierte que mediante la referida Ley 20 de 1992, se sustrajo del presupuesto de la Caja de Seguro Social las sumas correspondientes a la segunda partida del décimo tercer mes, por lo que la nueva ley creó una renta sustitutiva de dichos ingresos grabando con un 2% o más anual, adicional a los intereses que el Estado paga a la Caja de Seguro Social en concepto de obligaciones que mantiene con dicha institución.

Dichos ingresos sustitutivos fueron establecidos por el artículo 3 de la Ley 20 de 1992, que a la letra dice:

> "Artículo 3. Las obligaciones del Estado contraídas en favor de la Caja de Seguro Social que consten en bonos, pagarés u otros valores similares, devengarán un interés de dos por ciento (2%) o más anual adicional a los intereses que actualmente paga el Estado. La suma total que estos intereses devengan, en ningún caso, serán inferiores a la suma de veinte punto cinco (20.5) millones al año.
>
> Mientras el Estado pague a la Caja de Seguro Social este dos por ciento (2%) o más adicional, ésta no podrá negociar ni en cualquier otra forma traspasar dichos créditos."

En vías de dirimir el punto controvertido que se presentaba en este negocio por razón de la supuesta retroactividad en la aplicación de la Ley 20 de 1992, la Sala Tercera procuró el acceso a las Actas de discusión en Segundo Debate de la referida excerta legal, constatando que en el Pleno de la Asamblea Legislativa se había propuesto originalmente un artículo con el siguiente texto: "**Esta ley es de orden público, entrará en vigencia a partir del 14 de agosto de 1992 y tendrá efecto retroactivo desde el 1° de enero de 1992 para la aplicación del Artículo 4**" (que pasó a ser el artículo 3 de la Ley 20 de 1992).

Evidentemente, dicho texto tenía la finalidad de crear el efecto retroactivo a partir del 1° de enero de 1992 sobre el 2% de la deuda documentada y no documentada que tiene el Estado con la Caja de Seguro Social.

Sin embargo, dicha propuesta fue retirada al considerarse que este artículo, de la manera en que estaba propuesto, crearía nuevas erogaciones al Estado que provocarían el veto de la Ley por parte del Presidente (Cfr. pág. 71 de las Actas de discusión en Segundo Debate de la Ley 20 de 1992 en el Pleno de la Asamblea Legislativa, en fecha de 11 de agosto de 1992).

Lo expresado nos lleva indefectiblemente a la conclusión de que la intención del legislador fue que la Ley 20 de 1992 grabara la deuda del Estado con la Caja de Seguro Social con un 2% o más adicional a los intereses ya establecidos, desde el 14 de agosto de 1992 y no antes, para así evitar el veto de la misma por parte del Ejecutivo. Dado que la Caja de Seguro Social no recibiría este ingreso del Estado antes del 14 de agosto de 1992, no podía dejar de percibir el dinero pagado en concepto de segunda partida del décimo tercer mes antes de dicha fecha.

Es por lo expresado que la Sala considera que aunque el precitado artículo 8 de la Ley 20 de 12 de agosto de 1992, establece que dicha ley es de orden público, que comienza a regir desde su promulgación y tiene **efectos retroactivos** a partir del 14 de agosto de 1992, **no existe tal efecto retroactivo**, puesto que en su artículo primero señala que el pago de la segunda partida del décimo tercer mes debe hacerse a los trabajadores del sector público y privado a partir del 14 de agosto de 1992, ya que es el 15 de agosto cuando surge la obligación de pagar los dineros de la segunda partida del décimo tercer mes, que desde el mes de agosto de 1992 corresponde por mandato legal a los trabajadores.

Por este motivo los pagos hechos antes del 14 de agosto de 1992, están regidos por el literal m) del artículo 24 de la Ley N° 30 de 26 de diciembre de

1991 y deben hacerse a la Caja de Seguro Social, porque la obligación de pagar dicha prestación surge antes del imperio de la nueva Ley 20 de 1992.

El literal m) de la Ley 30 de 26 de diciembre de 1991 estaba vigente para los pagos de la segunda partida del décimo tercer mes hechos antes del 14 de agosto de 1992, por lo que era la norma aplicable al pago que las empresas **POLAR FRIGORIFÍCO, S. A., CARNES LA MEJOR, S. A., COMPAÑÍA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD, S. A., MACHETAZO CHITRÉ, S. A., INDUSTRIAS EL TORERO, S. A.**, tenían que hacer a la Caja de Seguro Social en este concepto, tal como quedó expuesto en las resoluciones cuya ilegalidad se acusa, emitidas por la entidad de seguridad social.

Por lo antes expuesto esta Sala debe declarar que las Resoluciones N° 4964-93-SUB-D. G. de 29 de julio de 1993; N° 4967-93-SUB-D. G. de 29 de julio de 1993; N° 4975-93-SUB-D. G. de 29 de julio de 1993; N° 4957-93-SUB-D. G. de 29 de julio de 1993, y N° 4959-93-SUB-D. G. de 29 de julio de 1993, todas emitidas por el Director General de la Caja de Seguro Social, no violan los artículos 1, 7 y 8 de la Ley 20 de agosto de 1992; el 24 literal m) de la Ley 30 de 26 de diciembre de 1991, ni el artículo 3 del Decreto de Gabinete N° 221 de 18 de noviembre de 1971.

En consecuencia, la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA QUE NO SON ILEGALES las Resoluciones N° 4964-93-SUB-D. G. de 29 de julio de 1993, la N° 4967-93-SUB-D. G. de 29 de julio de 1993, la N° 4975-93-SUB-D. G. de 29 de julio de 1993, la N° 4957-93-SUB-D. G. de 29 de julio de 1993, y la N° 4959-93-SUB-D. G. de 29 de julio de 1993, emitidas por el Director General de la Caja de Seguro Social.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL DR. DONALDO SOUSA GUEVARA, EN REPRESENTACIÓN DE ELVIA SUIRA CASTILLO, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 5135 DE 7 DE JULIO DE 1995, EMITIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CAJA DEL SEGURO SOCIAL, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA: PANAMÁ, CATORCE (14) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La Procuradora de la Administración ha interpuesto recurso de apelación contra la Providencia de 26 de febrero de 1996, que admite la Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción interpuesta por el **Dr. Donaldo Sousa Guevara**, en representación de **Elvia Sierra Castillo**, para que se declare nula por ilegal, la Resolución N° 5135 de 7 de julio de 1995, emitida por la Dirección General de la Caja del Seguro Social.

La alzada se sustenta en la Vista Fiscal N° 148 de 9 de abril de 1996, mediante la cual la señora Procuradora de la Administración señala en lo medular, que la parte actora no ha demostrado el agotamiento de la vía gubernativa. Así, la señora Procuradora basa su petición en los siguientes planteamientos:

> "En efecto tal como se desprende de las constancias procesales, el recurrente para comparecer debidamente ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, debió probar a través de una Solicitud de Certificación, que la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social

> no ha proferido decisión alguna con respecto al Recurso presentado o en su defecto incluir en el libelo de la demanda la petición al Magistrado Sustanciador, de solicitar a la junta directiva que compulsara certificación acerca de si existe o no contestación al Recurso de Apelación interpuesto el día 20 de octubre de 1995, con la finalidad que la Sala verifique si se produjo o no el agotamiento de la vía gubernativa en virtud del fenómeno jurídico conocido como silencio administrativo."

De la alzada interpuesta, la parte actora presentó sus objeciones mediante escrito que corre en fojas 59 y 60 del expediente de marras, y en el que aduce que la admisión de la demanda debe confirmarse, en virtud de que con el libelo, había presentado los documentos necesarios para acreditar que el recurso de apelación presentado no había sido resuelto, comprobándose de esta forma, el silencio administrativo.

Encontrándose el proceso en este estado, el resto de los Magistrados que integran la Sala proceden a resolver lo pertinente.

Frente a lo señalado por la Procuradora de la Administración debemos indicar que compartimos su criterio, cuando sostiene que la parte actora no comprobó debidamente el agotamiento de la vía gubernativa, ya que como ha sido jurisprudencia reiterada de esta Sala, el agotamiento de la vía gubernativa en los casos en que se invoca el silencio administrativo, debe ser acreditado mediante certificación o constancia proveniente de la entidad respectiva, que indique si que el recurso o solicitud presentada, ha sido o no resuelta.

Si bien es cierto que la parte actora, mediante nota presentada el 16 de febrero de 1996 (cfr. f. 17) solicitó ante la Secretaría General de la Caja de Seguro Social la autenticación de un número plural de escritos, **no se solicitó en ningún momento** que se expidiese constancia o certificación de si había recaído pronunciamiento en relación al recurso de apelación presentado por **ELVIA SUIRA DE CASTILLO** el 20 de octubre de 1995 (visible a foja 14). Esta actuación habría permitido al Tribunal verificar las diligencias efectuadas por el interesado, encaminadas a probar la negativa tácita de lo pedido, por silencio administrativo, y por ende el agotamiento de la vía gubernativa, conforme lo previsto en los artículos 36 y 42 de la Ley 135 de 1943 modificada por la Ley 33 de 1946.

La deficiencia anotada hace concluir al resto de la Sala, que le asiste razón al apelante, y lo procedente es revocar la admisión de la demanda presentada.

En consecuencia, el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, PREVIA REVOCATORIA de la providencia de 26 de febrero de 1996, NO ADMITEN la demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción interpuesta por el Dr. Donaldo Sousa Guevara, en representación de Evelia Suira Castillo.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO GUSTAVO H. VILLALAZ-ISAZA EN REPRESENTACIÓN DE FELICIO SOLÍS VARGAS, PARA QUE DECLARE NULO POR ILEGAL EL DECRETO N° 017 DRH DE 12 DE ENERO DE 1996, DICTADO POR EL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, EL ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, CATORCE (14) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS

(1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Gustavo H. Villalaz-Isaza, actuando en nombre y representación de Felicio Solís Vargas, ha interpuesto ante esta Sala de la Corte Suprema de Justicia demanda contencioso-administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nulo, por ilegal, el Decreto N° 017 de 12 de enero de 1996, emitido por el señor Contralor General de la República, el acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

El demandante solicita que antes de admitir la demanda se requiera al señor Contralor General de la República, copia autenticada del acto originario impugnado y del acto confirmatorio con las constancias de su notificación (f. 19).

A fojas 4 y 5 del presente expediente reposa copia de la solicitud de las referidas copias, como prueba de la denegación de las mismas, por lo que con fundamento en el artículo 46 de la Ley 135 de 1943, y a fin de que se pueda comprobar si la demanda presentada cumple con los requisitos de la Ley para su presentación, debe requerirse al señor Contralor General de la República que remita a esta Sala copia autenticada de los actos impugnados.

De consiguiente, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, representada por la Magistrada que suscribe, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, antes de admitir la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nulo, por ilegal, el Decreto N° 017-DRH de 12 de enero de 1996, emitido por el Contralor General de la República, el acto confirmatorio y para que se haga otras declaraciones, DISPONE que por Secretaria se solicite al señor Contralor General de la República, que en el término de cinco (5) días, remita a esta Sala copia autenticada de los siguientes documentos:

1. Del Decreto N° 017-DRH, de 12 de enero de 1996, dictado por el Contralor General de la República, con la constancia de su notificación; y
2. De la Resolución 37, de 5 de febrero de 1996, dictada por el Contralor General de la República, con la constancia de su notificación.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA TROYANO, VISUETTI Y VILLALAZ, EN REPRESENTACIÓN DE AMÍLCAR SÁNCHEZ ELIZONDRO, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 33-94 DE 18 DE MAYO DE 1994, EMITIDA POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, QUINCE (15) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma forense **Troyano, Visuetti y Villalaz**, actuando en su calidad de apoderada judicial del señor **AMÍLCAR SÁNCHEZ ELIZONDRO**, ha presentado desistimiento de la Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción, para que se declare nula por ilegal, la Resolución N° 33-94 de 18 de mayo de 1994, emitida por la Contraloría General de la República.

En efecto, a foja 115 del expediente se aprecia el escrito de desistimiento presentado por la firma forense apoderada del recurrente, en momentos en que este Tribunal de Alzada se encontraba próximo a resolver el recurso de apelación propuesto por la señora Procuradora de la Administración.

Del presente escrito de desistimiento, se corrió traslado la citada representante del Ministerio Público, a los efectos de ponerle en conocimiento del mismo, en virtud de lo establecido en el párrafo segundo, artículo 66 de la Ley 135 de 1943, reformada por la ley 33 de 1946.

Dado que el precitado artículo establece que en cualquier estado del juicio es admisible por declaración expresa, el desistimiento del recurso contencioso administrativo, y el artículo 1063 del Código Judicial recoge el mismo principio, es perfectamente viable el desistimiento presentado por la firma **TROYANO, VISUETTI Y VILLALAZ**, en representación de **AMÍLCAR SÁNCHEZ ELIZONDRO.**

En consecuencia, el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativa, de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ADMITEN EL DESISTIMIENTO, presentado por la firma TROYANO, VISUETTI Y VILLALAZ, en representación de AMÍLCAR SÁNCHEZ ELIZONDRO, dentro de la Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción, para que se declare nula por ilegal la Resolución N° 33-94 de 18 de mayo de 1994, dictada por el Contralor General de la República.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA PITTY Y ASOCIADOS, EN REPRESENTACIÓN DE NIKOS II, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 603-04-225-ALCN DE 15 DE JULIO DE 1994, DICTADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSULAR Y DE NAVES DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y TESORO, ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma forense **Pitty y Asociados** actuando en represen tación de la sociedad **NIKOS II, S. A.**, ha interpuesto demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° 603-04-225-ALCN de 15 de julio de 1994, dictada por la Dirección Consular y de Naves del Ministerio de Hacienda y Tesoro, actos confirmatorios y para que se hagan otras declaraciones.

PRETENSIONES DE LA PARTE ACTORA

Con la presente acción el apoderado legal de la sociedad demandante pretende que esta Sala declare la ilegalidad de la Resolución N° 603-04-225-ALCN de 15 de julio de 1994 por la cual la Dirección Consular y de Naves "sancionó a la Nave **NIKOS II** con multa de setecientos cincuenta balboas (B/.750.00) por violar la Regla 3, Anexo V del Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación del Mar por los Buques, 1973/78". Que como consecuencia de dicha declaración, el Ministerio de Hacienda y Tesoro debe devolverle a la sociedad NIKOS II, S. A., la suma de B/.750.00 pagada en concepto de multa impuesta por la Dirección General Consular y de Naves.

INFORME DE CONDUCTA DE LA ENTIDAD DEMANDADA

De la acción encausada se le dio traslado a la entidad demandada, quien procedió a rendir informe explicativo de conducta básicamente, en los siguientes términos:

> "Esta Dirección General recibió de las Autoridades del Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos reporte oficial N° PS93122167 fachado 3 de diciembre de 1993, referente a una infracción cometida por la nave de bandera panameña `NIKOS II , al Convenio Internacional para prevenir la Contaminación del Mar por los Buques, 1973/78 (MARPOL 73/78). Este reporte vino acompañado de la Nota 164507/V-58-93 de 26 de febrero de 1994 firmado por L. J. Beach, Comandante en Jefe de la Guardia Costera Norteamericana. En el mencionado reporte, las Autoridades Estadounidenses indican, entre otras cosas, que en la inspección realizada a la nave `NIKOS II' el día 26 de noviembre de 1993, en el Puerto de Miami, por parte del personal del Servicio de Inspección de Salud de Animales y Plantas del Departamento de Agricultura de Miami, Florida, se pudo detectar que la nave había descargado basura plástica al mar y que no contaba con un incinerador, ni otro aparato similar para efectos de eliminar desechos al mar.
>
> Al respecto la Oficina de Seguridad Marítima en Nueva York comenta que en caso de que una nave no esté equipada con un incinerador (u otro aparato similar), la basura debe ser guardada en tanques de desperdicios para ser descargada en las facilidades del puerto. Al descargarse la basura se emite un recibo especial en donde se especifica dónde y cuándo fue que estos tanques se encontraban vacíos; se interrogó al capitán y se le pidió que presentara los recibos de descarga y éste no los presentó, por lo que se puede concluir que en efecto hubo descarga de basura al mar.
> ...
> Luego de considerar los hechos antes expuestos y las pruebas presentadas por las autoridades estadounidenses, esta Dirección General, en uso de las facultades que le concede la Ley 2 de 17 de enero de 1980, procedió a sancionar a la nave `NIKOS II con multa de setecientos cincuenta balboas (B/.750.00) mediante Resolución motivada N° 603-04-225-ALCN de 15 de julio de 1994, por violar el Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación del Mar por Buques, 73/78 en la Regla 3, Anexo V, citada anteriormente.
> ...
> Los reportes de dichas autoridades son preparados en el idioma inglés, por ser este el idioma universal, y los Convenios Internacionales de los cuales la República de Panamá es signataria no obligan al país de origen a expedirlos en el idioma oficial de la administración de la bandera del buque.
>
> Por el contrario, la sanción impuesta a la nave ha sido expedida en el idioma español, por lo que la Administración no ha infringido el idioma oficial."

OPINIÓN DE LA PROCURADORA DE LA ADMINISTRACIÓN

La señora Procuradora de la Administración, mediante Vista Fiscal N° 369 de 29 de agosto de 1995, se opuso a las pretensiones de la parte actora, argumentando que la Dirección Consular y de Naves del Ministerio de Hacienda y Tesoro, realizó las investigaciones del caso, antes de imponer la respectiva sanción, la cual tuvo su fundamento legal en la Ley 17 de 8 de noviembre de 1981, por la cual se aprueba el Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques, que establece las pautas a fin de que los Estados miembros actúen en caso de transgresión de las disposiciones allí estipuladas, dándole absoluta facultad para la aplicación de su Derecho Positivo correspondiente.

EXAMEN DEL CASO. ARGUMENTOS DE LA PARTE ACTORA

Cumplidos los trámites legales que rigen este tipo de procesos, la Sala procede a emitir las siguientes consideraciones finales en torno al caso en

examen.

Se consideran infringidos los artículos 464, 773, 864, 865 y 1212, todos del Código Judicial, los cuales la Sala estima procedente entrar a examinar en su conjunto.

El texto de las precitadas normas es del tenor siguiente:

"ARTÍCULO 464. El juez, al proferir sus decisiones, debe tener en cuenta que el objeto del proceso es el reconocimiento de los derechos consignados en la ley substancial y con este criterio se deben interpretar las disposiciones del presente Código. Las dudas que surjan en la interpretación de las normas de este Código, deberán aclararse mediante la aplicación de los principios constitucionales y generales del derecho procesal, de manera que se observe el debido proceso, la igualdad de las partes, la economía y la lealtad procesal."

"ARTÍCULO 773. Incumbe a las partes probar los hechos o datos que constituyen el supuesto de hecho de las normas que les son favorables.

No requieren prueba los hechos afirmados por una parte y admitidos por la contraria, respecto a los cuales la ley no exige prueba específica; los hechos notorios; los que estén amparados por una presunción de derecho, y el derecho escrito que rige en la Nación o en los Municipios.

Los hechos claramente reconocidos en el curso del proceso por la parte adversa, no requieren prueba."

"ARTÍCULO 864. Salvo lo dispuesto en convenios internacionales los documentos extendidos en país extranjero serán estimados como prueba, según los casos, si se presentaren autenticados por el funcionario diplomático o consular de Panamá con funciones en el lugar de donde proceda el documento y a falta de ellos, por el representante diplomático consular de una nación amiga. En este último caso, se acompañará un certificado del Ministerio de Relaciones Exteriores en que conste que en el lugar de donde procede el documento no hay funcionario consular o diplomático de Panamá.

Se presume, por el hecho de estar autenticados así, que los documentos están expedidos conforme a la ley local de su origen, sin perjuicio de que la parte interesada compruebe lo contrario.

Si los documentos procedentes del extranjero estuvieren escritos en lengua que no sea el español, se presentarán traducidos o se solicitará su traducción por intérprete público y en defecto de éste, por uno ad-hoc., nombrado por el Tribunal."

"ARTÍCULO 865. Cuando, no obstante lo anterior, el Juez advierta en el proceso un documento en lengua que no sea el español, ordenará su traducción conforme a lo dispuesto en el artículo anterior y a costa del proponente de la prueba.

Toda traducción puede ser impugnada por error esencial por medio de incidente; las partes y el juez, nombrarán los intérpretes del mismo modo que se nombran los peritos.

Los intérpretes nombrados de acuerdo con los artículos anteriores y los que hayan de intervenir en una diligencia por nombramiento del Tribunal, pueden ser recusados por los mismos motivos que los testigos y peritos."

"ARTÍCULO 1212. Son comunes en los procesos de conocimiento, las siguientes disposiciones:

...
4. Siempre habrá traslado de la demanda, pero en los términos en que para cada clase de proceso se señale."

Sostiene el recurrente que la Dirección Consular y de Naves del Ministerio de Hacienda y Tesoro al proceder al sancionar a la Nave NIKOS II con multa de B/.750.00 por supuesta violación a la Regla 3, Anexo V del Convenio Internacional para prevenir la Contaminación del Mar por Buques, 1973/78, quebrantó las formalidades legales contempladas en las precitadas normas legales que debieron cumplirse en el procedimiento legal aplicable, y por tanto, lesionó su derecho de defensa. No se respetó el derecho del contradictorio, ya que no se le comunicó a la persona jurídica sancionada la denuncia, cargo o acusación que supuestamente le hacían las autoridades estadounidenses, no se le permitió producir pruebas de descargo en su defensa, ni mucho menos alegar dentro de este proceso. Según el recurrente debió seguirse un procedimiento análogo o supletorio como el procedimiento gubernativo contemplado en el Código Fiscal o el procedimiento administrativo establecido por el Código Administrativo, no un procedimiento que no está contemplado en ningún ordenamiento legal.

Añade el recurrente que el hecho de que la Dirección General Consular y de Naves acogió un informe de autoridades extranjeras no remitido por el conducto diplomático regular, no autenticado y no traducido al idioma oficial de la República, y con base en dicho informe impuso una sanción a una nave, significa que la entidad demandada consideró y tomó como idóneas y fehacientes las pruebas remitidas por las autoridades de los Estados Unidos de América para considerar que el cargo había quedado demostrado plenamente, por lo que otorgó el valor legal de plena prueba a unos documentos que, según el Código Judicial, debieron desecharse por carecer de fuerza alguna para probar el supuesto hecho o cargo imputado a la nave.

También señala el representante legal de la parte actora que los documentos aportados como pruebas del hecho sancionado están redactados en idioma inglés, por lo que la autoridad correspondiente debió ordenar su traducción al español por un intérprete autorizado. De esta manera, se violó su derecho subjetivo o particular, porque de haberse ordenado y practicado la traducción al idioma español, los funcionarios habrían advertido que se trataba de un simple informe de una autoridad subalterna que pedía una investigación y no una acusación formal de la comisión de un hecho violatorio de una convención internacional.

MOTIVACIONES DEL TRIBUNAL

Primeramente, el recurrente ha endilgado una serie de cargos a ciertas normas procedimentales del Código Judicial que no guardan ninguna relación con el caso en examen. Estas disposiciones se refieren a los procesos civiles regulados en el Código Judicial, no así a los negocios de carácter administrativo, como lo es el que nos ocupa, a pesar de que el artículo 36 de la Ley 33 de 1946 les da el carácter de aplicación supletoria a las normas contenidas en el Código Judicial, "en cuanto sean compatibles con la naturaleza de los juicios y actuaciones que corresponden a la jurisdicción contencioso-administrativa."

En el presente negocio, se trata de una actuación de carácter meramente administrativo, mediante la cual la Dirección General Consular y de Naves procedió a sancionar con multa a una nave de bandera panameña por la transgresión de disposiciones en materia de Prevención sobre la Contaminación del Mar por los Buques. Esta actuación administrativa tiene su asidero jurídico en los ordinales 5 y 6 del Artículo 6, en concordancia con el Artículo 14, ambos, de la Ley 2 de 17 de enero de 1980 "por la cual se crea la Dirección General Consular y de Naves, y se dictan otras disposiciones", cuyo texto legal consideramos oportuno transcribir:

"ARTÍCULO 2: La Dirección General Consular y de Naves ejercerá las siguientes funciones:
...
5. Velar por el estricto cumplimiento de las normas legales de navegabilidad, seguridad, higiene y prevención de la contaminación del medio ambiente marino por parte de naves panameñas donde quiera

que se encuentren y las de cualquier nacionalidad que se hallen en aguas territoriales panameñas, así como por el desarrollo ordenado de la navegación en estas aguas, y sancionar las violaciones o incumplimiento de dichas normas.

6. Velar por el estricto cumplimiento y eficaz aplicación de las normas sobre navegación y buques, tales como las de seguridad de la vida humana en el mar, prevención de abordajes, de líneas de carga o francobordo, de la formación, titulación y guarda de la gente del mar y prevención de la contaminación de hidrocarburos u otras sustancias contaminadas, consagradas en los convenios internacionales ratificados por Panamá, así como sancionar la violación o incumplimiento de dichas normas."

"ARTÍCULO 14: En el ejercicio de sus funciones, la Dirección General Consular y de Naves podrá aplicar las siguientes sanciones mediante resolución motivada:

a) Amonestación escrita;
b) Multa; y
c) Cancelación de la matrícula o registro de la nave."

Igualmente, el Tribunal considera que en el caso bajo estudio, la entidad demandada al imponer la sanción pecuniaria a la nave **"NIKOS II"**, procedió de conformidad con lo dispuesto en la Ley 17 de 9 de noviembre de 1981, "por la cual se aprueba el Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques", que contempla los lineamientos a seguir por los Estados que son parte de dicho Convenio, en caso de que se den transgresiones a lo establecido en el mismo.

En tal sentido, se observa que la Dirección General Consular y Naves, previo a proceder a imponer la sanción al buque **NIKOS II**, llevó a cabo todas las investigaciones de rigor correspondientes.

A f. 6 del exp. gubernativo, se aprecia copia debidamente autenticada del reporte N° PS93122167 fachado 3 de diciembre 1993, que según las autoridades de la Dirección General Consular y de Naves consistía en un informe procedente de las autoridades del Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos de América, a través del cual se les informaba que el buque **"NIKOS II"** fue detectado descargando deshechos plásticos al mar violando la Regla 3, Anexo V del MARPOL 73/78, el día 26 de noviembre de 1993 en el Océano Atlántico. Cfr. 8.

También consta a f. 8 del exp. gub., copia debidamente autenticada del Memorándum N° 603-02-149-ALCN mediante el cual el jefe del Departamento Legal de la entidad demandada, le solicita a la Oficina Marítima en Nueva York (SEGUMAR) indique a la mayor brevedad posible el procedimiento a seguir en relación con la referida nave. De igual manera, consta Nota de fecha 13 de junio de 1994, suscrita por la Directora de SEGUMAR en la que se da respuesta al memorándum referido en el punto anterior, en la cual se recomienda que esta nave sea sancionada por descarga de deshechos plásticos al mar. Ver fs. 9-12. Dicha recomendación, según la precitada funcionaria, se dio con base a que en el momento en que se llevó a cabo la inspección, la nave en mención no poseía ningún incinerador ni otro aparato similar para efectos de eliminar la basura.

La anterior recomendación es corroborada nuevamente, tal como se observa a f. 20 del expediente gubernativo, al momento que se procedió a resolver el recurso de reconsideración interpuesto contra la resolución que impuso la sanción pecuniaria, hoy objeto de la presente acción, cuando se procedió a requerir de SEGUMAR el suministro de información relacionada con el caso subjudice, así como también al Jefe del Departamento Técnico de dicha institución, ver f. 22. En esta oportunidad la oficina de SEGUMAR en Nueva York señaló lo que a continuación consideramos oportuno transcribir, para mayor ilustración:

"SEGÚN EL REPORTE ENVIADO A ESTA OFICINA, AL MOMENTO EN QUE SE LLEVO A CABO LA INSPECCIÓN, LA NAVE NO POSEÍA NINGÚN INCINERADOR NI OTRO

APARATO SIMILAR PARA EFECTOS DE ELIMINAR LA BASURA SEGÚN MARPOL ANEXO V. EN CASO DE NO POSEER INCINERADOR (U OTRO APARATO SIMILAR), LA BASURA (PLÁSTICOS) DEBE SER GUARDADA EN TANQUES DE DESPERDICIOS PARA SER DESCARGADAS EN LAS FACILIDADES DE PUERTO, AL SER LA BASURA DESCARGADA, SE EMITE UN RECIBO ESPECIAL DONDE SE ESPECIFICA DONDE Y CUANDO FUE DESCARGADA. SEGÚN EL REPORTE DURANTE LA INSPECCIÓN SE ENCONTRÓ QUE LOS TANQUES SE ENCONTRABAN VACÍOS, SE INTERROGÓ AL CAPITÁN Y SE LE PIDIÓ QUE PRESENTARA LOS RECIBOS DE DESCARGA, Y ESTE NO PUDO PRODUCIRLOS, LO QUE SE PUEDE CONCLUIR QUE ESTA BASURA FUE DESCARGADA AL MAR."

De lo expuesto se colige entonces que en el presente negocio, la actuación de las autoridades de la Dirección General Consular y de Naves al proceder a sancionar con multa de SETECIENTOS CINCUENTA BALBOAS (B/.750.00) a la nave **NIKOS II** por violación a la Regla 3, Anexo V del Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación del Mar por Buques, 1973/78, se dio de conformidad con lo dispuesto en la Ley 17 de 9 de 1981, "Por la cual se aprueba el Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques, 1973, suscrito en Londres el 2 de noviembre de 1973", que en su artículo 4 establece lo siguiente:

"ARTÍCULO 4
Transgresiones

1) Toda transgresión de las disposiciones del presente Convenio, dondequiera que ocurra, estará prohibida y será sancionada por la legislación de la Administración del buque interesado. Si la Administración, después de ser informada de una transgresión, estima que hay pruebas suficientes como para incoar un procedimiento respecto a la presunta transgresión, hará que se inicie tal procedimiento lo antes posible de conformidad con su legislación.

2) Toda transgresión de las disposiciones del presente Convenio dentro de la jurisdicción de cualquier Parte en el Convenio estará prohibida y será sancionada por la legislación de dicha Parte. Siempre que ocurra tal transgresión, esa Parte tomará una de las dos medidas siguientes:

a) hacer que, de conformidad con su legislación, se incoe procedimiento, o

b) facilitar a la Administración del buque toda información y pruebas que lleguen a su poder de que se ha producido una transgresión.

3) Cuando se facilite a la Administración de un buque información o pruebas relativas a cualquier transgresión del presente Convenio cometida por ese buque, la Administración informará inmediatamente a la Parte que le haya facilitado la información o las pruebas, así como a la Organización, de las medidas que tome.

4) Las sanciones que se establezcan en la legislación de una Parte en cumplimiento del presente Artículo serán suficientemente severas para disuadir de toda transgresión del presente Convenio. La severidad de la sanción será la misma dondequiera que se produzca la transgresión."

La disposición legal precitada establece el procedimiento a seguir en el caso de que se den transgresiones a las disposiciones del referido Convenio Internacional por parte de la Administración del buque interesado. Este fue el procedimiento a seguir por parte de la Dirección Consular y de Naves al sancionar a la nave **NIKOS, S. A.**, tal como ha quedado debidamente comprobado en autos. Por lo tanto, no prosperan los cargos de violación endilgados al acto acusado de ilegal.

En lo que respecta a la violación del artículo 1213 del Código Fiscal que

establece el procedimiento a seguir en materia probatoria fiscal por parte de las autoridades competentes, la Sala considera que no es de aplicación al caso en comento, ya que esta es una norma de procedimiento ordinario administrativo en materia fiscal. En el presente negocio no estamos en presencia de una controversia en materia fiscal, tal como lo señaláramos en líneas anteriores, se trata de una actuación de carácter meramente administrativo, mediante la cual la Dirección General Consular y de Naves procedió a imponer una sanción pecuniaria a una nave de bandera panameña por la transgresión de disposiciones legales en materia de Prevención sobre la Contaminación del Mar por los buques.

Cabe acotar que al momento en que se le impusiera la multa, al recurrente se le señaló claramente que contra esa decisión podía interponer recurso de Reconsideración ante la Dirección General Consular y de Naves, entidad que emitió el acto acusado, y/o el de Apelación ante el Ministro de Hacienda y Tesoro. Además de que de uno u otro recurso o de ambos, podía hacer uso dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la notificación de dicha decisión, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 2 de 1980. De ambos medios de impugnación hizo uso el recurrente, según se desprende de fs. 17-18 y fs. 29-30 contentivas de los recursos de reconsideración y apelación, respectivamente, pudiendo aportar al hacer uso de estos recursos, las pruebas que a su juicio desvirtuaban la referida sanción.

En consecuencia, los Magistrados que integran la Sala Tercera, Contencioso Administrativo, de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARAN QUE NO ES ILEGAL, la Resolución N° 603-04-225-ALCN de 15 de julio de 1994, expedida por la Dirección General Consular y de Naves del Ministerio de Hacienda y Tesoro.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA INTERPUESTA POR EL LICENCIADO DALBER FERNÁNDEZ, EN REPRESENTACIÓN DE HUDSON TAPIA, PARA QUE SE CONDENE AL ESTADO PANAMEÑO AL PAGO DE SEIS MILLONES DE DÓLARES (B/.6.000.000.00), EN CONCEPTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS MATERIALES Y EMERGENTES POR LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DE LA DESAPARICIÓN DE LA MOTONAVE DIANA IV. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Dalber Fernández, actuando en nombre y representación del señor HUDSON TAPIA SIMMONS, interpuso ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia demanda contencioso-administrativa directa de indemnización por daños y perjuicios materiales y emergentes contra el Estado panameño, por la responsabilidad extracontractual en la que ha incurrido por la desaparición de la Motonave Diana IV.

Al resolver la admisión de la demanda, la Magistrada Sustanciadora considera que la misma no debe admitirse ya que el apoderado del actor no designó correctamente a la parte demandada. En efecto, a foja 48 se observa que en el punto relativo a la **"partes y sus representantes"**, el licenciado Fernández indicó que el demandado es el **"ESTADO PANAMEÑO como persona jurídica"**, designación que es errónea porque de acuerdo con los hechos de la demanda y las constancias de autos, la desaparición de la motonave Diana IV ocurrió mientras la misma estaba bajo custodia de la Autoridad Portuaria Nacional, en virtud del secuestro ordenado por el Tribunal Marítimo dentro del Proceso Especial de Ejecución de

Crédito Marítimo Privilegiado que HUDSON TAPIA SIMMONS interpuso contra la aludida motonave, tal como consta de la foja 1 a la 31. Por tanto, este último ente debió figurar como demandado.

La Sala ha expresado reiteradamente, que la correcta designación de las partes en las demandas contencioso-administrativas no sólo es necesaria para cumplir con el requisito establecido en el artículo 28 de la Ley N° 33 de 1946, sino también porque, en el caso de la parte demandada, el informe de conducta al que se refiere el artículo 33 de la misma Ley, sólo puede requerirlo el Magistrado Sustanciador al funcionario o entidad demandada. En el presente caso, si la motonave perdida estaba bajo la responsabilidad de la Autoridad Portuaria Nacional, por razón de una medida cautelar dictada dentro de un proceso por el Tribunal Marítimo, el informe de conducta respectivo sólo podría pedirse a dicho Tribunal y no al Presidente de la República como representante del Estado panameño.

Como el demandante no cumplió con el requisito anotado, su demanda no puede admitirse, de conformidad con el artículo 31 de la Ley N° 33 de 1946.

De consiguiente, la Suscrita Magistrada Sustanciadora, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la presente demanda contencioso-administrativa directa de indemnización por daños y perjuicios materiales y emergentes interpuesta por el licenciado Dalber Fernández, en nombre y representación del señor HUDSON TAPIA SIMMONS, contra el Estado panameño.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICDO. HUMBERTO A. COLLADO, EN REPRESENTACIÓN DE ESPERANZA ATENCIO DE GARRIDO, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL ACUERDO N° 18 DE 9 DE JUNIO DE 1993, EMITIDO POR EL CONSEJO MUNICIPAL DE CHITRÉ, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTE (20) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Lcdo. Humberto Collado, actuando en representación de Esperanza Atencio de Garrido, ha presentado demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción en la cual solicita a la Sala declare que es nulo, por ilegal, el Acuerdo N° 18 de 9 de junio de 1993, emitido por el Consejo Municipal de Chitré, el acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

En la demanda se formula pretensión consistente en que se declaren nulos los acto antes mencionados y que como consecuencia de ello, la señora Esperanza Atencio de Garrido tiene derecho a que se le restituya en el cargo de Tesorera Municipal del Distrito de Chitré y se le paguen los emolumentos dejados de percibir desde la fecha de su destitución a la fecha en que sea reintegrada.

En el acto impugnado, el Consejo Municipal del Distrito de Chitré acuerda destituir a la señora Esperanza Atencio de Garrido como Tesorera Municipal del Distrito de Chitré, por haber incurrido en las causales destitución contempladas en los numerales 1 y 3 del artículo 55 de la Ley N°106 de 8 de octubre de 1973. En los considerandos del acuerdo en mención, el Consejo Municipal del Distrito de Chitré afirma que la señora Atencio informó que el dinero depositado en caja hasta el 31 de diciembre de 1992, ascendía a la suma de B/.67,687.00 cuando en realidad ascendía a la suma de B/.94,064.64. Igualmente se afirma, que no fue sino a través del auditor de la Contraloría adscrito a ese Municipio, que el

Consejo Municipal pudo percatarse de la cifra correcta de los fondos municipales y se corroboró que dicha funcionaria había ocultado durante meses el monto correcto. A ello se añade, que la señora Esperanza Atencio al ser cuestionada por el nombramiento de una persona inexperta en la caja de la Tesorería Municipal, explicó que dicha unidad había sido recomendada por el ex-Asesor Legal del Municipio y para remover al funcionario necesitaba del apoyo del Consejo Municipal. En vista de la anterior solicitud, le envió nota fechada el 12 de mayo de 1993 a través del Presidente en la que se le concede el apoyo sugerido. No obstante lo anterior, la señora Atencio hizo caso omiso de la misma, por lo que la Cámara Edilicia consideró su actitud poco respetuosa, razón por la cual, la Presidenta del Consejo Municipal encomendó a la Comisión Judicial que estudiara su proceder.

La parte actora estima como violado, el numeral 1 y 3 del artículo 55 de la Ley 106 de 8 de octubre de 1973, el párrafo final del artículo 32 del Acuerdo N° 9 de 11 de marzo de 1985 y, finalmente, el artículo 41 y 52 de la Ley 106 de 8 de octubre de 1973.

El Lcdo. Collado sustenta su pretensión en base a que, según su opinión, el acto impugnado es nulo por ilegal ya que la señora Esperanza Atencio ha desempeñado el cargo de Tesorera Municipal del Distrito de Chitré en forma eficiente, responsable y ajustándose a la ley. Aunado a ello, afirma que el nombramiento del joven José Manuel Tello Quintero está entre las atribuciones y competencias de su cargo, no obstante aclara, que el comunicado a ella emitido por el Consejo Municipal a fin de trasladar al joven Tello fue acatado inmediatamente, pero posteriormente fueron acreditados sus méritos y solvencia moral, razón por la cual fue reubicado nuevamente en su cargo en la Tesorería Municipal.

A juicio de la parte actora, el numeral 1° y 2° del artículo 55 de la Ley 106 de 1973, que hace referencia a las causales de destitución de los Tesoreros Municipales, específicamente al incumplimiento de los deberes como servidor público y a la mala conducta en el ejercicio de sus funciones respectivamente, han sido violados por aplicación indebida. En relación a ello, estima la parte actora, que la Tesorera Municipal no incurrió en modo alguno en la causal de incumplimiento de sus deberes, dado que en lo relativo al saldo existente consta que comunicó oportunamente tanto al Honorable Consejo Municipal como al auditor y señor Alcalde, sobre la cantidad disponible en caja conforme a los ingresos percibidos, comunicación que se hizo mediante los oficios N° 70 de 10 de febrero de 1993 y N° 91 de 9 de marzo de 1993.

Igualmente, la parte actora estima como violado el párrafo final del artículo 32 que señala:

> "ARTÍCULO 32: Los funcionarios municipales a saber: Tesorero Municipal, Ingeniero Municipal, Abogado Consultor del Consejo, Veterinario, Relacionista Público, Agrimensor, sólo podrán ser destituídos de sus cargos por el Consejo en los siguientes casos:
> ...
> Una vez rendido el informe de la Comisión, el Consejo decidirá por el voto secreto de dos terceras partes (2/3) de sus miembros la destitución."

Con respecto a la violación endilgada al artículo antes citado, a criterio de la parte actora ha sido violado directamente por omisión, toda vez que el Consejo Municipal de Chitré está integrado por cinco (5) Concejales y para que se configure las dos terceras partes (2/3), se requiere del voto de cuatro (4) miembros o por lo menos más de tres (3), pues, "matemáticamente las dos terceras partes de cinco asciende a 3.33, es decir más de 3 y no hay razón, como lo alega el Consejo para que esa fracción numérica de 3.33 no deba redondearse al número inmediatamente superior a tres (3). A ello añade que la norma ordena que en los casos de destitución la votación se realice en forma secreta. También, la parte demandante considera como violado, el artículo 41 de la Ley 106 de 8 de octubre de 1973 que es del tenor siguiente:

> "ARTÍCULO 41: Todo proyecto de acuerdo o resolución, una vez

> cumplidos los trámites previstos en el Reglamento Interno del Consejo, pasará al pleno de éste, donde sufrirá un solo debate y será adoptado mediante el voto favorable de la mayoría absoluta, entendiéndose por ésta el número entero siguiente a la mitad de los miembros del Consejo. Se exceptúan los acuerdos especiales para cuya aprobación se requieran otras formalidades exigidas por esta Ley o por el reglamento del Consejo, y una vez aprobado, será remitido a la Secretaría para su promulgación."

Considera la parte demandante, que dicha disposición contempla un principio general sobre formalidades que debe cumplir el Consejo Municipal para la emisión de todo acuerdo o resolución. No obstante, afirma que la norma es clara al disponer que para ciertos acuerdos municipales se requiere el cumplimiento de otras formalidades exigidas por ley o por el Reglamento, y en el presente caso, el Consejo Municipal dictó un acuerdo especial en el que destituye a la Tesorera Municipal, por lo que debía ajustarse al reglamento. Finalmente, la parte actora estima como vulnerado el artículo 52 de la Ley 106 de 1973, tal como quedó reformada por el artículo 29 de la Ley 52 de 12 de diciembre de 1984, que prevé un término de dos años y medio como el período a cumplir por los Tesoreros Municipales una vez son escogidos por los Tesoreros Municipales. El Lcdo. Collado afirma que el período de su representada corresponde del 19 de septiembre de 1992 hasta el 19 de marzo de 1995 y el acto impugnado no respetó dicho período de nombramiento.

El Presidente del Consejo Municipal del Distrito de Chitré rindió el informe explicativo de conducta mediante Nota N° 253 fechada el 1 de noviembre de 1993 en los siguientes términos:

> "Como es sabido, el Consejo Municipal de Chitré, mediante Acuerdo Municipal N° 18 de 9 de junio de 1993 destituyó a la Tesorera Municipal del Distrito de Chitré, señora Esperanza Atencio de Garrido y este Consejo Municipal se fundó para tomar dicha medida en los siguientes hechos:
>
> PRIMERO: Hasta la sesión ordinaria efectuada el 12 de mayo de 1993, la Tesorera Municipal del Distrito de Chitré, señora Esperanza Atencio le había estado informando falsamente al Consejo Municipal que el dinero municipal depositado en caja hasta el 31 de diciembre de 1992 ascendía a la suma de B/.67,687.00 cuando en realidad había dinero en caja por la suma de B/.94,064.64 y para enero de 1993 esta cifra podo ser enteramente cierta para ella, como en efecto lo confirman los informes los informes escritos en los cuales ella trató de justificar contablemente un "**ingreso**" de B/26,377.64 en renglón de dinero en caja en ese mes. Esta argucia es absurda contablemente porque el dinero en caja no es un renglón sujeto a recaudaciones súbitas como ella quiso hacer ver.
>
> SEGUNDO: El Consejo Municipal no se hubiera percatado de esta irregularidad sino es porque el Auditor de la Contraloría adscrito a este Municipio, señor Manuel González, le informó de dicha situación, aclarando que había estado insistiendo varios meses con la señor Esperanza Atencio de Garrido que le **dijere la verdad a los Concejales"**. De todas esta actitudes se pudo concluir que la señora Esperanza de Garrido había ocultado delicadamente durante meses a esta Corporación el monto correcto del dinero en caja.
>
> TERCERO: Amén de lo anterior la Tesorera Municipal dejó de pagar injustificadamente las cuentas del I. R. H. E., I. N. T. E. L., I. D. A. A. N. y combustible del Municipio por un monto superior a los B/.26,000.00, llegando al extremo de informar falsamente a los concejales que las sumas en calidad de vigencias expiradas ascendían a tan sólo B/.5,000.00. Esta conducta de la señora Esperanza de Garrido es intolerable por cuanto en el presupuesto de 1992 estaban contempladas las partidas necesarias para afrontar esos gastos y existía, por tanto, dinero disponible para ello.

CUARTO: Al pedírsele explicaciones a la señora Esperanza Atencio de Garrido de semejante conducta nunca las dio, ocasionado con tan peculiar actitud el que el Consejo Municipal le perdiese totalmente la confianza y se hiciese imposible continuar trabajando juntos.

Sobre esto es oportuno indicar que el Auditor de la Contraloría adscrito al Municipio de Chitré le informó a esta Corporación que la señora Esperanza Atencio de Garrido le había expresado a él que ella había ocultado esos B/.26,064.64 de dinero en caja **"para que los concejales no los pudieran gastar en obras comunitarias"**. Este comentario es demostrativo de la mala fe que acompañó los censurables actos de la Tesorera Municipal que desencadenaron su destitución. Hemos concluido que esta actitud podría tener por explicación un posible deseo de venganza de parte de ella al no aumentársele su salario para el año 1993, tal como ella lo había solicitado.

La demandante en su libelo ha querido desvirtuar el hecho incontestable que cuando en las sesiones del Consejo Municipal se le solicitaba un informe del dinero en caja ella daba una cifra falsa: B/.67,687.00 queriendo hacer ver que como disfrazó dicha suma en sus informes escritos con un supuesto ingreso de B/.26,377.64 acaecido en enero de 1993 ya no hay conducta dolosa de su parte.

Ella sabía muy bien como presentaba sus informes de Tesorería con dos (2) meses de atraso los concejales se atenían a sus informes verbales durante las sesiones porque al momento de recibirse dichos informes escritos ya estaban desactualizados a la fecha, es decir, dos (2) meses después. ...

Se ha querido hacer ver que el Concejo Municipal no tenía por qué inmiscuirse en el nombramiento de José Manuel Tello Quintero porque el mismo era atribución de la señora Esperanza Atencio de Garrido según lo dispone el numeral 15 del artículo 57 de la Ley N° 106 de 1973. Ello no deja de ser cierto jurídicamente hablando. Pero no es menos cierto que del contexto de los artículos 17 y 18 de la Ley N° 106 de 8 de octubre de 1973 se desprende una facultad supervisora del Concejo Municipal respecto a los diferentes estamentos del engranaje administrativo de la Comunal y en especial de la Tesorería Municipal, de conformidad al numeral 7 del artículo 18 de dicha ley. Véase bien que el Conejo Municipal no tenía por qué inmiscuirse en el nombramiento de José Manuel Tello Quintero porque el mismo era atribución de la señora Esperanza Atencio de Garrido según lo dispone el numeral 15 del artículo 57 de la Ley N° 106 de 1973. Ello no deja de ser cierto jurídicamente hablando. Pero no es menos cierto que del contexto de los artículos 17 y 18 de la Ley N° 106 de 8 de octubre de 1973 se desprende una facultad supervisora del Concejo Municipal respecto a los diferentes estamentos del engranaje administrativo de la Comunal y en especial de la Tesorería Municipal, de conformidad al numeral 7 del artículo 18 de dicha Ley. Véase bien que el Consejo Municipal en este caso no actuó caprichosamente sino que lo hizo movido por una genuina preocupación por el manejo de los dineros de la Caja del Municipio ya que la propia señora Esperanza Atencio de Garrido (si es verdaderamente honesta tiene que reconocerlo) le confesó a esta Corporación que ni ella se había dado cuenta de la repentina aparición del señor José Manuel Tello Quintero en las instalaciones de la Tesorería Municipal que, como máxima autoridad administrativa del Municipio, mostró su disgusto por semejante situación. Aparentemente, la señora Esperanza Atencio de Garrido piensa que porque ella puede nombrar su personal, la Tesorera Municipal el darle al Concejo Municipal una versión diferente de la que le brinda a los demás.

Honorables Magistrados, el principal testigo de nuestra causa y del cargo principal lo es el señor Manuel González, quien descubrió el

falsamiento de los datos manipulado por la Tesorera Municipal de esta anomalía en vista de que dicha funcionaria no le confesaba a esta Corporación su incorrecta acción."

Por su parte, el Procurador de la Administración mediante la Vista N°74 de 18 de febrero de 1994 visible de foja 53 a 60 del expediente, se opone a las pretensiones de la parte demandante y estima que los cargos se ilegalidad que se le imputan al acto acusado no son fundados, toda vez que la señora Esperanza Atencio A. Garrido ha incurrido en las causales de destitución previstas en la ley.

Evacuados los trámites de ley, la Sala pasa a continuación a resolver la presente controversia.

Analizado el expediente, la Sala concluye que le asiste la razón a la parte actora por las razones que exponemos a continuación. En primer lugar, la Sala desea dejar sentado que mediante resolución fechada el 28 de septiembre de 1993, se resolvió suspender provisionalmente los efectos del Acuerdo N° 18 de 9 de junio de 1993 y de la Resolución N° 15 de 18 de agosto de 1993, ambos expedidos por el Consejo Municipal del Distrito de Chitré, toda vez que se trata de una servidora pública que fue nombrada por un período fijo según lo prevé el Acuerdo N° 27-A de 9 de septiembre de 1992 expedido por el Consejo Municipal de Chitré. En el anterior acuerdo se señala un período de nombramiento de dos años y medio a partir del 19 de septiembre de 1992, razón por la cual dicha suspensión procede según lo previsto en el artículo 74 de la Ley 135 de 1943.

En segundo lugar, se observa que entre las disposiciones alegadas como infringidas por la parte demandante, figura el artículo 55 de la Ley 106 de 1973, que contiene las causales de destitución de los Tesoreros Municipales. A juicio del Lcdo. Collado, los numerales 1 y 3 de dicho artículo que hacen referencia al incumplimiento de los deberes como servidor público y a la mala conducta en el ejercicio de sus funciones respectivamente, han sido violados en el concepto de aplicación indebida. Considera la Sala que tal violación se ha configurado, toda vez que si bien es cierto en el informe explicativo de conducta rendido por el Presidente del Concejo Municipal del Distrito de Chitré, se señala que la señora Atencio había informado hasta la sesión ordinaria efectuada el **12 de mayo de mayo de 1993**, que el dinero municipal depositado en caja hasta el 31 de diciembre de 1992 ascendía a la suma de B/.67,687.00 cuando en realidad había dinero por la suma de B/.94,064.64, no es menos cierto que dentro del expediente figuran sendas copias autenticadas de los oficios **N° 70 de 10 de febrero de 1993 y el N° 91 de 9 de marzo de 1993** visibles de fojas 16 a 19 del expediente, en las que la Tesorera Municipal del Distrito de Chitré comunicó oportunamente al Presidente del Consejo Municipal, al señor Alcalde y al auditor sobre el saldo según los libros al 31 de diciembre de 1992 y que asciende según dichas notas a la suma de B/.94,064.64. En virtud de lo anterior, y dado que las causales 1 y 3 del artículo 55 de la Ley 106 de 1973 fueron el fundamento legal para la destitución de la señora Atención en base a los anteriores hechos, aunado a que dentro del expediente no existe documentación alguna que desvirtúe fehacientemente los anteriores planteamientos, la Sala considera que, efectivamente, se ha dado la violación alegada. En cuanto al artículo 55 de la Ley 106 de 1973, la Sala reitera que el mismo fue objeto de pronunciamiento por parte del Pleno de esta Corporación de justicia en sentencia de 19 de octubre de 1995, y se determinó que dicha norma expresa la estabilidad de los Tesoreros Municipales, razón por la cual para que se configure la destitución es necesario que sea conforme a las causales allí contempladas.

Aunado a lo antes anotado, vale destacar que en la destitución de la señora Atencio no se siguió el procedimiento previsto en la ley para tal efecto. Lo anterior es así, toda vez que el artículo 41 de la Ley 106 de 8 de octubre de 1973 prevé el cumplimiento de ciertas formalidades contempladas en el reglamento, cuando se trata de acuerdos especiales como los casos de destitución. El Consejo Municipal, debió, pues, antes de proceder a la destitución de la Tesorera Municipal, aplicar el párrafo 2° del artículo 32 del Acuerdo N°9 de 11 de mayo de 1985, por medio del cual se aprobó el Reglamento Interno del Consejo Municipal del Distrito de Chitré, que prevé el nombramiento de una Comisión Judicial

nombrada por el Consejo, que deberá rendir un informe en un plazo no mayor de 30 días cuando se trate de acusaciones o denuncias contra el Tesorero Municipal como en este caso, basados en los numerales 1° y 3° del artículo en mención que igualmente hacen referencia al incumplimiento de sus deberes como servidor público y la mala conducta respectivamente. No consta en el expediente documentación que evidencie que se efectuó la investigación que se requiere para los efectos de la destitución.

En razón de todo lo antes expuesto, concluimos que la señora Esperanza Atencio, quien fue nombrada mediante el acuerdo N° 27-A de 9 de septiembre de 1992 a partir del 19 de septiembre de 1992 como Tesorera Municipal del Distrito de Chitré, debía terminar su período de dos años y medio el 19 de marzo de 1995. No obstante, a partir del 9 de junio de 1993, la señora Atencio fue destituida sin causa legal y fue nombrado como Tesorero Municipal el señor Ricaurter Villareal, fecha en la cual la señora Esperanza Atencio de Garrido no había culminado su período y sólo había desempeñado el cargo durante 8 meses y 22 días, faltándole para culminar su período 1 año, 9 meses y 8 días. En virtud de lo antes señalado, la Sala considera que el acto de nombramiento del señor Ricauter Villareal como Tesorero Municipal del Distrito de Chitré, a partir del 9 de junio de 1993 viola los artículos 52 y 55 numerales 1° y 3° de la Ley 106 de 1973 modificada por la Ley 52 de 1984, toda vez que la señora Esperanza Atencio de Garrido no fue destituída por las causas señaladas en el mencionado artículo 55.

Finalmente, en cuanto a la pretensión de la parte actora de que se le paguen los emolumentos dejados de percibir desde la fecha de su destitución hasta la fecha en que sea reintegrada, es importante señalar que en reiteradas ocasiones la Sala ha establecido que cuando se trata de funcionarios municipales, no existe norma legal que sancione el despido sin causa justificada, por lo que no prospera dicha pretensión. Así se manifestó la Sala en sentencia de 30 de junio de 1994 y más recientemente en sentencia fechada el 21 de diciembre de 1995.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA QUE ES NULO por ILEGAL el Acuerdo N° 18 de 9 de junio de 1993, emitido por el Consejo Municipal de Chitré, como también lo es su acto confirmatorio; ORDENA el reintegro de la señora Esperanza Atencio de Garrido al cargo de Tesorera Municipal del Distrito de Chitré por el término de un (1) año, nueve (9) meses y ocho (8) días calendarios a fin de que termine el período para el cual fue nombrada; y NIEGA la solicitud de los emolumentos dejados de percibir.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. RAMÓN ANDRADE, EN REPRESENTACIÓN DE SEBASTIÁN ARDINES, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL LA RESOLUCIÓN N° 14 DE 5 DE DICIEMBRE DE 1995, DICTADA POR LOS FISCALES DEL CIRCUITO JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE COLÓN. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTE (20) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Lcdo. Ramón Andrade, actuando en representación de **Sebastián Ardines**, ha promovido proceso contencioso administrativo de plena jurisdicción con el objeto de que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° 14 de 5 de diciembre de 1995, dictada por los Fiscales del Circuito Judicial de la Provincia de Colón.

El Magistrado Sustanciador procede a examinar la demanda a fin de determinar si la misma cumple con los requisitos necesarios para su admisión.

Observa quien suscribe que la parte actora no señala el concepto de la violación, dentro de la norma infringida, incumpliendo de esta manera el artículo 18, numeral 4, de la Ley 33 de 1946. La Corte ha señalado en múltiples ocasiones que el concepto de la violación debe relacionarse con los motivos de ilegalidad previstos en el artículo 16 de la Ley 33 de 1946, incluyendo las modalidades en que se haya producido la infracción literal de los preceptos legales.

En consecuencia, el Magistrado Sustanciador , actuando en representación de la Sala Tercera (Contencioso Administrativo) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por el Lcdo. Ramón Andrade, en representación de Sebastián Ardines, en contra de la Resolución N° 14 de 5 de diciembre de 1995, emitida por los Fiscales del Circuito Judicial de la Provincia de Colón.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICDO. ABDIEL GONZÁLEZ, EN REPRESENTACIÓN DE JOSÉ ALBERTO REMÓN, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 72-95 DE 3 DE JULIO DE 1995, EMITIDA POR EL MINISTRO DE VIVIENDA, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTE (20) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Lcdo. José Antonio Araúz Cuevas, apoderado judicial de los señores Clarence Carrigton y Lidya S. de Carrington, actuando como terceros interesados, dentro del proceso contencioso administrativo de plena jurisdicción, interpuesto por el Lcdo. Abdiel González en representación de José Alberto Remón, para que se declare nula por ilegal, la Resolución N° 72-95 de 3 de julio de 1995, emitida por el Ministro de Vivienda, ha presentado solicitud de desestimación del recurso de plena jurisdicción, antes descrito.

El apoderado judicial del tercero interesado fundamenta su solicitud en los siguientes términos:

> "... concurro con todo respeto, con el objeto de solicitarle que desestime la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por el Lcdo. Abdiel González, en supuesta representación de José Alberto Remón, en contra del Ministerio de Vivienda, en virtud de que la parte por la que supuestamente ha hablado, no ha aprobado lo hecho por este, mediante la ratificación que estipula el artículo 631 del Código Judicial. Recordamos que él actúa como gestor oficioso. Como quiera que esta aprobación debe darse en un plazo no mayor de 2 meses y excepcionalmente hasta por un mes más, lo cual no ha sucedido en el presente caso, solicitamos se ordene el archivo del expediente y se consigne a favor de nuestro representado, la fianza señalada por su despacho mediante resolución calendada 14 de septiembre de 1995 ..."

Los Magistrado que integran la Sala Tercera, estiman que le asiste razón al Lcdo. Araúz, por cuanto que el artículo 631 del Código Judicial establece que: "Por regla general, ninguno puede representar a otro en proceso, sino con poder otorgado con la formalidades legales; pero para notificarse de una demanda,

contestarla y para proponer o contestar alguna acción, incidente o recurso, cuando de no hacerlo pueda la parte sufrir gran perjuicio, no se necesita poder.

Cualquiera puede hacerlo, dando caución a satisfacción del juez de que la parte por quien habla lo aprobara como hecho por ella misma en el término hasta de dos meses, prorrogables por causa justificada hasta por un mes más a prudente arbitrio del Juez". En el presente caso, si bien es cierto que, el Lcdo. González estableció una caución de doscientos balboas (B/.200.00), tal y como se aprecia a fojas 33 y 34 del expediente, también es cierto que ya han trascurrido más de dos meses desde la presentación de la demanda, el 5 de septiembre de 1995, sin que el señor José Alberto Remón, haya ratificado la gestión oficiosa que ha realizado el Lcdo. González en su nombre.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema de Justicia, administrando Justicia en nombre de República y por autoridad de la Ley, ORDENA el archivo de la demanda contencioso administrativo de plena jurisdicción, interpuesto por el Lcdo. Abdiel González en representación de José Alberto Remón, para que se declare nula por ilegal, la Resolución N° 72-95 de 3 de julio de 1995, emitida por el Ministro de Vivienda.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA SOLÍS, ENDARA Y DELGADO, EN REPRESENTACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS FARMACÉUTICOS ECONÓMICOS, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 4968-93 SUB. D. G. DE 29 DE JULIO DE 1993, PROFERIDA POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTE (20) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma Solís, Endara, Delgado & Guevara, actuando en representación de las sociedades denominadas Establecimientos Farmacéuticos Económicos, S. A.; Compañía Goly, S. A. y Compañía de Mantenimiento Logil, S. A. ha presentado demandas contencioso administrativas de plena jurisdicción con el objeto de que se declaren nulas, por ilegales, las resoluciones N° 4968-93 SUB-D. G., N° 4963-93 SUB D. G.y N° 4960-93, todas del 29 de julio de 1993 dictadas por el Director General de la Caja de Seguro Social, los actos confirmatorios y para que se hagan otras declaraciones.

Las resoluciones impugnadas condenaron a las empresas arriba mencionadas a pagar a la Caja de Seguro Social las sumas de sesenta y tres balboas con ochenta y siete centésimos (B/.63.87), doscientos quince balboas con veintiséis centésimos (B/.215.26) y trescientos treinta y ocho balboas con veintitrés centésimos (B/.338.23), respectivamente, en concepto de Segunda Partida del Décimo tercer Mes correspondientes al año de 1992, las cuales fueron dejadas de pagar.

El apoderado judicial de las empresas demandadas solicita que se declaren ilegales las resoluciones impugnadas en este proceso y se absuelva a las demandantes de la condena impuesta porque estima que dichas resoluciones infringen los artículos 24 literal m) de la Ley 30 de 26 de diciembre de 1991, 1, 7 y 8 de la Ley 20 de 12 de agosto de 1992 y 3 del Decreto de Gabinete N° 221 de 18 de noviembre de 1971.

Mediante el auto de 29 de marzo de 1995 la Sala Tercera ordenó la

acumulación de las demandas presentadas por razones de economía procesal y para mantener la unidad de causa.

Del libelo de la demanda se le corrió traslado a la Procuradora de la Administración quien se opuso a la pretensión del demandante y corroboró el criterio del Director de la Caja del Seguro social, que en su parte medular dice lo siguiente:

> "... no puede desconocerse el hecho de que el Décimo Tercer Mes es una prestación laboral que deben satisfacer los empleadores a razón de un día de salario por cada once días de trabajo, y en tres partidas de cuatro meses anuales, lo cual obviamente significa que si la relación de trabajo concluye por cualquier causa antes del agotamiento del término de una de estas partidas cuatrimestrales, surge de inmediato la obligación patronal de pagar la proporción del Décimo Tercer Mes que se haya generado dentro de la partida correspondiente.
>
> En la situación que se analiza, nos encontramos precisamente ante casos de trabajadores cuyas relaciones laborales concluyeron antes del vencimiento del término completo de la Segunda Partida del Décimo Tercer Mes de 1992, y también antes de la existencia en el mundo jurídico de la Ley 20 de 12 de agosto de 1992. Sin embargo la obligación de los empleadores de pagar las sumas proporcionales de la citada prestación surge durante el imperio del literal m) del Artículo 24 de la Ley N° 30 de 26 de diciembre de 1991, el cual disponía que las sumas correspondientes a la segunda partida del Décimo Tercer Mes formaban parte del patrimonio de la Caja de Seguro Social."

Encontrándose el proceso en este estado los Magistrados de la Sala Tercera de la Corte Suprema entran a resolver la presente controversia.

Básicamente, el presente negocio se centra en que, por un lado, las demandantes señalan que la segunda partida del Décimo Tercer Mes del año de 1992 le corresponde a los trabajadores por el efecto retroactivo de la Ley 20 de 1992 y por lo tanto es ilegal el cobro de las sumas arriba citadas. Por el otro, tanto el Director de la Caja del Seguro Social como la Procuradora de la Administración, son de la opinión que a la Caja del Seguro Social le asiste el derecho de cobrar las sumas que se hayan generado en concepto de la Segunda Partida del Décimo Tercer Mes del año 1992 puesto que éstas se originaron durante la vigencia del literal "m" del artículo 24 de la Ley 30 de 1991 que otorga esta partida al Programa de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja del Seguro Social.

El apoderado judicial de la parte actora señala como violado por indebida aplicación el literal m) del artículo 24 de la Ley 30 de 20 de diciembre de 1991 puesto que la misma "no podía ser actuada para regular una situación referente a la Segunda Partida del Décimo Tercer Mes de 1992, porque fue derogada por el artículo 7 de la Ley 20 de 12 de agosto de 1992, cuyo artículo restituyó a los trabajadores -con efecto retroactivo por virtud de su artículo 8- el pago de la Segunda Partida del Décimo Tercer Mes".

Sobre este cargo, la Procuradora de la Administración consideró lo siguiente:

> "En efecto, consideramos que no existe indebida aplicación por parte de la Caja de Seguro Social del literal M del artículo 24 de la Ley N° 30 de 26 de diciembre de 1991, ya que las cantidades reclamadas por los demandantes a la Caja de Seguro Social, se dieron en un período en que la Segunda Partida del Décimo tercer Mes formaba parte del patrimonio de dicha institución.
>
> Ahora bien, es cierto que por efecto de la Ley N° 20 de 12 de agosto de 1992, se restituyó el pago de esa Segunda Partida del Décimo Tercer Mes a los trabajadores, no obstante, la Caja sólo está condenando a pagar aquella porción o parte que le corresponde, es decir

una segunda partida proporcional; ya que la referida Ley N° 20 estableció a partir de qué fecha retornaría o se le restituiría esa prestación laboral especial a los trabajadores.

A la Caja de Seguro Social le asiste el derecho de cobrar, y al demandante la obligación de pagar, las sumas que se hayan generado en concepto de Segunda Partida del Décimo Tercer Mes hasta el 13 de agosto de 1992, tal como se colige de la Ley. Si otro hubiera sido el sentido de dicha Ley, evidentemente que no se hubiera señalado fecha; pero al señalarse fecha de tal restitución a los trabajadores, quedo determinada la voluntad legislativa." ...

"... para explicar por vía de concepto, la supuesta violación del artículo 1 de la Ley 20 de 12 de agosto de 1992. Pasamos a explicar porqué.

El artículo 3° del Decreto de Gabinete N° 221 de 18 de noviembre de 1971, modificado por el 1° del Decreto de Gabinete N° 52 de 24 de febrero de 1972, literalmente dice:

"El artículo 3° del Decreto de Gabinete N° 221 de 18 de noviembre de 1971, quedará así: 'La bonificación especial debe pagarse en tres partidas proporcionales, así: el 15 de abril, el 15 de agosto y el 15 de diciembre de cada año'".

Si leemos la norma transcrita, nos percatamos que la misma no entra a definir el concepto de "Segunda Partida del Décimo Tercer Mes", y solamente se refiere a las fechas en las cuales se debe pagar cada una de las partidas. Por otro lado, esta misma disposición dictamina que las partidas deben pagarse proporcionalmente, y dicha proporcionalidad no puede entenderse solamente referida a la totalidad de cada una de las partidas sino a la proporcionalidad que pueda darse por el tiempo que haya laborado el trabajador dentro del período correspondiente a la partida que se tenga derecho. En este sentido, mal podría esta norma legal, citada por el actor, servir para fundamentar la presunta infracción del artículo 1 de la Ley N° 20 de 12 de agosto de 1992." ...

"La derogatoria de las disposiciones que hace el aludido artículo 7 de la Ley 20, específicamente del literal M de la Ley 30 de 26 de diciembre de 1991, y a la cual se refieren en forma muy subjetiva los demandantes, en efecto, ocurrió, pero a partir del momento que la misma ley dispone." ...

"Discrepamos de los conceptos anteriores emitidos por la firma forense Solís, Endara y Delgado ya que consideramos no se ha producido la alegada violación; en este caso del artículo 8 de la Ley N° 20 de agosto de 1992, puesto que la retroactividad señalada en dicho artículo surte efectos a partir de una fecha determinada que es el 14 de agosto de 1992, por lo que no puede ser objeto de aplicación antes de esa fecha con ningún otro método de interpretación utilizado."

La Sala comparte el criterio de la Procuradora de la Administración, aunado a lo anterior se debe señalar que, mediante la referida ley 20 de 1992, se substrajo del presupuesto de la Caja de Seguro Social las sumas correspondientes a la segunda partida del décimo tercer mes, por lo que la nueva ley creó una renta sustitutiva de dichos ingresos aumentando en un 2% o más anual, los intereses que el Estado paga a la Caja de Seguro Social, por las obligaciones contraídas con dicha institución.

Dichos ingresos sustitutivos están establecidos por el artículo 3 de la Ley 20 de 1992, que a la letra dice:

"Artículo 3. Las obligaciones del Estado contraídas en favor de la Caja de Seguro Social que consten en bonos, pagarés u otros valores

> similares, devengarán un interés de dos por ciento (2%) o más anual adicional a los intereses que actualmente paga el Estado. La suma total que estos intereses devengan, en ningún caso, serán inferiores a la suma de veinte punto cinco (20.5) millones al año.
>
> Mientras el Estado pague a la Caja de Seguro Social este dos por ciento (2%) o más adicional, ésta no podrá negociar ni en cualquier otra forma traspasar dichos créditos."

En las Actas de discusión en Segundo Debate de la Ley 20 de 1992, en el Pleno de la Asamblea Legislativa, se propuso el siguiente artículo: "Esta ley es de orden público, entrará en vigencia a partir del 14 de agosto de 1992 y tendrá efecto retroactivo desde el 1° de enero de 1992 para la aplicación del Artículo 4" (que pasó a ser el artículo 3 de la Ley 20 de 1992), con la finalidad de crear el efecto retroactivo a partir del 1° de enero de 1992 sobre el 2% de la deuda documentada y no documentada que tiene el Estado con la Caja de Seguro Social.

Dicha propuesta fue retirada en virtud de que se consideró que este artículo como fue propuesto, crearía nuevas erogaciones al Estado, que provocarían el veto de la Ley por parte del Presidente (Pág. 71 de las Actas de discusión en Segundo Debate de la Ley 20 de 1992, en el Pleno de la Asamblea Legislativa el 11 de agosto de 1992).

De lo anterior se desprende claramente que la intención del legislador fue que la Ley 20 de 1992 gravara la deuda del Estado con la Caja de Seguro Social, con un 2% o más adicional a los intereses ya establecidos, desde el 14 de agosto de 1992 y no antes, para así evitar el veto de la misma por parte del Ejecutivo. Como la Caja de Seguro Social no recibiría este ingreso del Estado antes del 14 de agosto de 1992, no podía dejar de percibir el dinero pagado en concepto de segunda partida del décimo tercer mes antes de dicha fecha.

Es por lo expresado que la Sala considera que aunque el precitado artículo 8 de la Ley 20 de 12 de agosto de 1992, establece que dicha ley es de orden público, que comienza a regir desde su promulgación y tiene **efectos retroactivos** a partir del 14 de agosto de 1992, no existe tal efecto retroactivo, puesto que en su artículo primero señala que el pago de la segunda partida del décimo tercer mes debe hacerse a los trabajadores del sector público y privado a partir del 14 de agosto de 1992, ya que es el 15 de agosto cuando surge la obligación de pagar los dineros de la segunda partida del décimo tercer mes, que desde el mes de agosto de 1992 corresponde por mandato legal a los trabajadores. Por este motivo los pagos hechos antes del 14 de agosto de 1992, están regidos por el literal m) del artículo 24 de la Ley N° 30 de 26 de diciembre de 1991 y se hicieron legalmente a la Caja de Seguro Social. La obligación de pagar dicha prestación a los trabajadores surgió bajo imperio de la nueva Ley 20 de 1992, a partir del 14 de agosto de 1992.

El literal m) de la Ley 30 de 26 de diciembre de 1991 estaba vigente y era aplicable a los pagos de la segunda partida del décimo tercer mes hechos antes del 14 de agosto de 1992, por tanto, es la norma aplicable al pago que las empresas demandantes, hicieran a la Caja de Seguro Social en este concepto, tal como fue expuesto en las resoluciones acusadas de ilegales, emitida por la Dirección General de la Caja de Seguro Social el 29 de julio de 1993. Por esto consideramos que tampoco se da la violación del artículo 3° del Decreto de Gabinete N° 221 de 18 de noviembre de 1971.

En mérito de lo expuesto esta Sala debe declarar que las resoluciones N° 49-68 SUB. D. G., N°4963-93 SUB-D.G. y N°4960-93 SUB-D. G. todas de 29 de julio de 1993 todas emitidas por el Director de la Caja de Seguro social, y sus actos confirmatorios no violan los artículos 1, 7 y 8 de la Ley 20 de agosto de 1992 y 24 literal m) de la Ley 30 de 26 de diciembre de 1991 y 3 del Decreto de Gabinete N° 221 de 18 de noviembre de 1971, y no prosperan los cargos de ilegalidad expuestos por las sociedades Establecimientos Económicos Farmacéuticos, El Nuevo Machetazo, S. A. y Compañía de Mantenimiento Logil, S. A.

Por consiguiente, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

DECLARA QUE NO SON ILEGALES, las resoluciones N° 4968-93 SUB-D. G., N° 4963-93 SUB. D. G. y N° 4960-93 SUB. D. G. todas del 29 de julio de 1993 expedidas por el Director General de la Caja de Seguro Social, los actos confirmatorios identificados como resoluciones N° 6179-94 D. G., 6185-94-D. G., 6187 -94-D. G. todas de 8 de abril de 1994 emitidas por el Director General de la Caja de Seguro Social y N° 9918-94 J. D., 9909-94 J. D. y 9908-94 J. D. todas de 1° de diciembre de 1994 emitidas por la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, y NIEGA las declaraciones pedidas por ESTABLECIMIENTOS ECONÓMICOS FARMACÉUTICOS, S. A., EL NUEVO MACHETAZO, S. A. y COMPAÑÍA DE MANTENIMIENTO LOGIL, S. A.

Notifíquese, Publíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA CHAVARRÍA, RODRÍGUEZ Y SÁNCHEZ, EN REPRESENTACIÓN DE JULIO ALBERTO CASTILLO, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 94 DE 5 DE MARZO DE 1993, PROFERIDA POR EL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS.PANAMÁ, VEINTE (20) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

Encontrándose en etapa de decidir el proceso contencioso administrativo de plena jurisdicción, promovido por la firma de abogados Chavarría, Rodríguez y Sánchez, en representación de Julio Arturo Castillo Castillo, para que se declare nula por ilegal, la Resolución N° 94 de 5 de marzo de 1993, proferida por el Contralor General de la República, esta Sala considera que es aplicable al presente caso el artículo 796 del Código Administrativo.

El texto de la norma es el siguiente:

"Artículo 796: Todo empleado público nacional, provincial, o municipal, así como también el obrero que trabaje en obras públicas, y en general todo servidor público, aunque no sea nombrado por decreto, tiene derecho, después de once meses continuados de servicio, a treinta días de descanso con sueldo, siempre que durante aquel tiempo, no haya tenido arriba de treinta días de licencia por enfermedad o por cualquier otra causa.*

El empleado público, nacional, provincial o municipal que después de once meses continuados de servicio fuere separado de su puesto, por renuncia o remoción, sin haber hecho uso del mes de descanso a que se refiere este artículo, tendrá derecho a que se le reconozca y pague el mes de sueldo que corresponda al descanso, siempre que su separación del cargo no obedezca a al comisión de alguna falta grave en el ejercicio de su empleo.

PARÁGRAFO: Esta (sic) vacaciones son obligatorias para todos los empleados públicos de que trata esta Ley y el Estado está obligado a concederlas.

Son acumulables las vacaciones correspondientes a dos años*

*Las frases que aparecen subrayadas, fueron declaradas inconstitucionales según sentencia de la Corte Suprema de fecha de 11 de agosto de 1975".

Estima la Sala que debe consultar al Pleno de la Corte Suprema la

constitucionalidad de esta disposición legal, en ejecución de lo previsto en el artículo 2548 del Código Judicial.

Estimamos que el Pleno debe determinar si el artículo 796 del Código Administrativo es compatible con lo dispuesto en el artículo 66 párrafo tercero de la Constitución.

El principio previsto en el párrafo tercero del artículo 66 de la Constitución, es que todo trabajador tiene derecho a vacaciones remuneradas. La norma cuya constitucionalidad consultamos parece contener un principio opuesto en cuanto a los servidores públicos, ya que parece imponer una sanción al trabajador que pese a cumplir con las condiciones específicas impuestas por Ley para acceder al derecho a vacaciones, es decir, haber cumplido con el período de trabajo efectivo de once meses continuos, no podrá hacer uso de este derecho, al haber sido destituido por una causa grave.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONSULTA AL PLENO, de la Corte Suprema de Justicia la constitucionalidad del artículo 796 del Código Administrativo.

Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA RIVERA, BOLÍVAR Y CASTAÑEDAS, EN REPRESENTACIÓN DE TARJETA DE CRÉDITO ESTRELLAMAR, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 213-060 DE 7 DE FEBRERO DE 1994, EXPEDIDA POR LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE INGRESOS DE LA PROVINCIA DE PANAMÁ, ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTE (20) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma Rivera, Bolívar y Castañedas, actuando en representación de TARJETA DE CRÉDITO ESTRELLAMAR, S. A., ha interpuesto recurso de apelación contra la resolución proferida por la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) expedida el 27 de febrero de 1996, mediante la cual no se admite la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, presentada para que se declare nula por ilegal la Resolución N° 213-060 de 7 de febrero de 1994, expedida por el Administrador Regional de Ingresos del Ministerio de Hacienda y Tesoro.

La Magistrada Sustanciadora no admitió la demanda por considerar que la apoderada de la demandante designó erróneamente a la parte demandada, pues, señaló como tal al Ministerio de Hacienda y Tesoro y al Ministro respectivo como su representante legal, y no al Administrador Regional de Ingresos de la Provincia de Panamá del Ministerio de Hacienda y Tesoro.

La firma Rivera, Bolívar y Castañeda afirma en su escrito de apelación, que en el libelo contentivo de la demanda se describe y se deja plasmado a lo largo del mismo, que el funcionario que expidió la Resolución N° 213-060 de 7 de febrero de 1994, es el Administrador Regional de Ingresos del Ministerio de Hacienda y Tesoro. Igualmente afirma, que la Administración Regional de Ingresos es una entidad administrativa que forma parte de la Dirección General de Ingresos, y que ambas a su vez forman parte del Ministerio de Hacienda y Tesoro, por lo que debe tenerse como correcta la designación del Ministerio de Hacienda y Tesoro como parte demandada. Con respecto a lo antes anotado, estima la parte actora que nuestro ordenamiento Constitucional "se inspira en ausencia de

formalismos", pues, lo que se persigue es que los ciudadanos tengan un pronunciamiento en cuanto al fondo de la controversia, con independencia de que el resultado le sea favorable o no. Finalmente, la parte actora concluye después de un análisis doctrinal, que el funcionario que dicta un acto administrativo acusado de ilegal, no es parte del proceso contencioso administrativo; que es la Nación la verdadera demandada, pues es la que deberá reparar el agravio cometido; y que la actuación del funcionario que emitió el acto se limita a rendir un informe de conducta dentro del término concedido. En razón de lo anterior, a criterio de la parte actora, la simple omisión de no mencionar al Administrador Regional de Ingresos del Ministerio de Hacienda y Tesoro como parte demandada no puede ser óbice para no admitir la demanda, pues, la doctrina dominante se inclina a que estas omisiones puedan ser corregidas.

Por su parte, la Procuradora de la Administración mediante la Vista N° 155 de 11 de abril de 1996, se opone a los criterios expuestos por la parte actora y solicita al resto de los Magistrados que conforman la Sala Tercera que confirmen la resolución apelada.

No coincide la Sala con los criterios expuestos por la parte actora, dado que la parte demandante no observó lo preceptuado en el numeral 1° del Artículo 43 de la Ley 135 de 1943 que prevé los requisitos necesarios que debe contener toda demanda ante la jurisdicción contencioso administrativa. Efectivamente, se observa que la parte demandante omitió designar al Administrador Regional de Ingresos y erró al nombrar al Ministerio de Hacienda y Tesoro como parte demandada y al respectivo ministro del ramo como su representante legal.

En razón de lo antes señalado, lo procedente es, pues, confirmar el auto apelado, toda vez que el artículo 50 de la Ley 135 de 1943 es claro al indicar que no se dará curso a la demanda que carezca de las formalidades contempladas en dicha ley.

En consecuencia, el resto de los Magistrados que conforman la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la resolución de 27 de febrero de 1996, por medio de la cual NO SE ADMITE la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por la firma Rivera, Bolívar y Castañedas en representación de TARJETA DE CRÉDITO ESTRELLAMAR, S. A.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA

(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO DIONISIO RODRÍGUEZ BERNAL, EN REPRESENTACIÓN DE PORFIRIO ARGUETA, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 30 DE 3 DE JULIO DE 1995, EMITIDA POR EL DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTE (20) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

I. ACTO IMPUGNADO

El Licenciado DIONISIO RODRÍGUEZ BERNAL, actuando en nombre y representación de **PORFIRIO ARGUETA**, ha promovido demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° 30 de 3 de julio de 1995, expedida por el Director General de la Policía Técnica Judicial.

II. LO QUE SE DEMANDA

La parte actora pretende que como consecuencia de la declaratoria de ilegalidad del acto impugnado se restituya al señor **PORFIRIO ARGUETA** a su puesto en la Policía Técnica Judicial; se le reconozcan todos aquellos derechos que pudo haber tenido durante el período que permaneció separado del cargo: pago de salarios caídos, ajuste o aumento salarial, décimo tercer mes proporcional, vacaciones, rango y derechos que pudiesen surgir; y que se le indemnice por los daños y perjuicios causados al dictarse la Resolución N° 30 de 3 de julio de 1995.

Alega el apoderado de la parte actora, que el señor **PORFIRIO ARGUETA** no se le permitió ejercer su derecho de defensa ante el Departamento de Responsabilidad Profesional; que es inocente de cualquier hecho doloso que se le pretenda imputar en el desempeño de su cargo; y que hasta la fecha de su destitución siempre fue un funcionario que se desempeñó con lealtad, honestidad y decoro en el ejercicio de su función.

III. NORMAS VIOLADAS Y EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN

Como normas violadas el demandante cita los artículos 43 y 45 de la Ley 16 de 9 de julio de 1991, "Por la cual se aprueba la Ley Orgánica de la Policía Técnica Judicial como una dependencia del Ministerio Público"; y los artículos 42 y 134 de la Resolución N° 25-94 de 15 de noviembre de 1994, proferida por el Procurador General de la Nación, "Por la cual se aprueba el Reglamento Interno de la Policía Técnica Judicial", cuyo texto transcribimos a continuación:

LEY N° 16 DE 9 DE JULIO DE 1991. (G. O. 21,830 de 16 de julio de 1991).

"Artículo 43. El Departamento de Responsabilidad Profesional estará encargado de la averiguación, investigación y trámite disciplinario de los miembros de la institución por razón de denuncias, quejas o faltas en el ejercicio del cargo o desempeño personal, con el propósito de crear profesionalismo y un alto grado de responsabilidad dentro de las filas de la institución. ...

Artículo 45. Todo funcionario o servidor de la Policía Técnica Judicial, por el hecho de serlo, está obligado a acatar la Ley, y demás leyes de la República; así mismo, a observar las normas morales y de buena costumbre que practica nuestra sociedad, tanto dentro de su vida pública como privada, y al cumplimiento del régimen disciplinario siguiente:

1. Las sanciones que pueden imponerse, si no se considera necesaria la remoción, a los miembros de la Policía Técnica Judicial, por infracción de la Ley, Decreto, Reglamento referentes al ramo o por falta disciplinaria que no constituya delito ni falta de policía, serán las siguientes:

a) Amonestación privada;
b) Amonestación escrita; y,
c) Suspensión sin goce de salario.

2. La amonestación privada consistirá únicamente, en reconvención oral por faltas leves y no habituales.
3. La amonestación escrita, por reincidencia en faltas leves o, según la naturaleza de la falta leve.
4. La suspensión sin goce de salario hasta por quince (15) días por faltas graves y no habituales o reincidencia en faltas leves.
5. El Reglamento Interno de la Institución tipificara las faltas leves y graves y las sanciones correspondientes a las mismas.
6. Todo miembro de la Policía Técnica Judicial está en el deber de denunciar ante el Jefe Superior las faltas de que tenga conocimiento cometidas por sus miembros. El jefe tendrá la obligación de oír los

cargos y descargos, y promover el trámite de la denuncia."

RESOLUCIÓN N° 25-94 DE 15 DE NOVIEMBRE DE 1994. (G. O. N° 22,675 de 2 de diciembre de 1994).

"ARTÍCULO 42. **De la Investigación que Precede a la Destitución.** La destitución de un funcionario deberá estar precedida por una investigación destinada a esclarecer los cargos que se le atribuyen a éste, en la cual se le permita ejercer su derecho a defensa. Dicha investigación debe ser realizada por el Departamento de Responsabilidad Profesional, tal como lo establece el artículo cuarenta y tres (43) de la Ley 16 de 1991.

Quedan exceptuados los actos que por su gravedad y notoriedad emeriten la remoción inmediata del funcionario, cumpliendo lo preceptuado en el artículo veinte (20) de nuestra Ley Orgánica."

"ARTÍCULO 134. **Del Derecho del Funcionario Acusado.** Se pondrá en conocimiento del funcionario acusado los cargos que se le imputan, inmediatamente se procederá a escuchar los descargos, debiéndose practicar aquellas pruebas que aduzca el investigado cuando sean procedentes."

Al exponer el concepto de la infracción de las normas citadas el demandante indicó que éstas se han violado por omisión, toda vez que el Director de la Policía Técnica Judicial no siguió el procedimiento establecido para estos casos. El Departamento de Responsabilidad Profesional debió iniciar las investigaciones y permitir el ejercicio del derecho de defensa del funcionario acusado. En el presente caso la investigación se inició en virtud del informe del inspector Víctor Jiménez; el hecho imputado al funcionario acusado no corresponde a la excepción de que trata el párrafo final del artículo 42 de la Resolución N° 25-94 de 15 de noviembre de 1994; el señor **PORFIRIO ARGUETA** es de los funcionarios que señala el artículo 20 de la Ley 16 de 1991; y que el artículo 45 de la Ley 16 de 1991 que se invoca como fundamento de derecho, no consagra entre sus supuestos la destitución del cargo por conducta impropia. (Fs. 11-12).

IV. OPINIÓN DE LA PROCURADURÍA

La señora Procuradora de la Administración solicitó desestimar los cargos impetrados contra la Resolución N° 30 de 3 de julio de 1995, por las siguientes razones:

"En el caso "IN EXAMINE", la Administración tenía la certeza de la ocurrencia de unos hechos lesionantes de la probidad administrativa, y se comisionó a un funcionario de la Institución para que recabara las pruebas indispensables a fin de formular, de inmediato, los cargos contra los posibles responsables. En otros términos, dada la existencia de indicios graves contra los posibles responsables, se procedió a la formulación de cargos."

Esta facultad, como se ha indicado, no es caprichosa ni arbitraria dado que está permitida por la ley. En relación a ésto, notamos que la condición para que se pueda, por vía de excepción, obviar el proceso disciplinario, lo es que se esté ante actos graves y notorios.

Detengámonos pues, en la enunciación descriptiva de los hechos que obraron en contra del hoy día demandante; tomando en cuenta que no estamos ante un sólo hecho causante de la sanción disciplinaria, sino más bien ante una serie de irregularidades o faltas administrativas-disciplinarias. Veamos ...

a. El abandono del cargo por un tiempo bastante largo, sin razón formalmente justificada y sin el debido permiso de su superior.

b. En consentir dirigirse a un lugar tan lejos de la sede (San Miguelito) a hacer, supuestamente, un "operativo de apoyo" en relación a un asunto particular de uno de sus compañeros.

c. El hecho de desviarse, luego de terminado el supuesto "operativo de apoyo", a un lugar distinto de su lugar de trabajo.

d. Es más esta acción de ir a otro lugar distinto de la sede en Ancón, tiene como justificación el ejercicio de una función de policía preventiva, impropia y anormal, respecto del papel de las funciones de los detectives de la Policía Técnica Judicial.

En cuanto a este último hecho anotado, debemos recordar que la Policía Técnica Judicial, si bien puede realizar operativos o pesquizas de nítido contenido preventivo; ello ha de ocurrir a modo excepcional. Esto es así, dado que sólo cuando un miembro de la Policía Técnica Judicial, es comisionado especialmente para ello, puede efectuar una labor preventiva. Y es que la Policía Técnica Judicial, investiga los hechos presuntamente delictivos, ya cometidos.

e. El permitir que otro funcionario, que no tenía la calidad de conductor, condujera el automóvil oficial, que él (el demandante) se comprometió a manejar, y del cual era responsable. ...

Tiene también importancia saber si las actuaciones anteriormente estudiadas tenían la calidad de notorias.

Desde nuestro punto de vista, no podía ser más evidente la falta de disciplina del señor ARGUETA CLAROS en tanto que el mismo confesó haber participado de aquellos actos y de haber abandonado, sin permiso, su puesto de trabajo, en el cual era Encargado o Jefe.

... En el caso de marras, esto nos conduce a señalar que, la protección de la permanente prestación del servicio público que específicamente ejercen los detectives de la P. T. J., obligan a los representantes de esta organización a sancionar ejemplar e inmediatamente, a aquellos funcionarios que sin autorización previa, se permiten la suspensión transitoria de esas fundamentales funciones públicas." (Fs. 26-30).

V. ALEGATO DE LA PARTE ACTORA

Al presentar su escrito de alegato, el demandante señaló que las afirmaciones de la señora Procuradora de la Administración carecen "de toda realidad jurídica y fáctica", (fs. 34) por no acompañar copia autenticada del oficio mediante el cual se solicitó al Procurador General de la Nación el previo concepto para proceder a la destitución del señor **ARGUETA**, ni el oficio mediante el cual el señor Procurador emitió su concepto favorable. Reitera el hecho de que al señor **ARGUETA** no se le inició la investigación correspondiente por parte del Departamento de Responsabilidad Profesional; y alega que éste no fue el autor directo de la colisión del vehículo de propiedad de la Policía Técnica Judicial, ni encubridor de dicho acto, sino que en el ejercicio de las funciones asignadas salió a dar un apoyo de urgencia, "corriendo la mala suerte de que el vehículo en que se transportaba fue colisionado por su compañero de labores, lo cual consideramos no constituye una actuación meritoria con la sanción de destitución del cargo, ya que este acto no puede calificarse de grave" (fs. 35).

VI. DECISIÓN DE LA SALA

A continuación la Sala procede a examinar las infracciones que la parte actora imputa a los actos impugnados, a fin de resolver la presente controversia.

El demandante estima violado el artículo 45 de la Ley N° 16 de 1991, que le ordena al Director de la Policía Técnica Judicial y a todo funcionario de la

Institución acatar esta Ley y demás leyes de la República, toda vez que al destituir el señor **PORFIRIO ARGUETA**, éste no siguió el procedimiento consagrado en los artículos 43 y siguientes de la Ley Orgánica, ni cumplió con los artículos 42 y 134 concordantes del Reglamento Interno de la Institución, los cuales consagran el procedimiento a seguir por parte del Departamento de Responsabilidad Profesional al investigar una falta disciplinaria.

El acto impugnado es la Resolución N° 30 de 3 de julio de 1995, dictada por el Director General de la Policía Técnica Judicial, mediante la cual se resolvió destituir al señor **PORFIRIO ARGUETA** por conducta impropia, y que señala en sus considerandos lo siguiente: que el señor **ARGUETA** inició labores en la Policía Técnica Judicial el día 1° de noviembre de 1991; que la presente investigación tuvo su origen en virtud del informe rendido por el inspector Víctor Jiménez, Jefe del Departamento de Investigaciones Criminales, en el que pone en conocimiento que el día 21 de mayo de 1995, al llegar a las instalaciones de la Policía Técnica Judicial, se percató que el vehículo Lumina Chevrolet, matriculado 005679, presentaba serios daños producto de una colisión; que existen claras contradicciones en cuanto a la forma como se dieron los hechos y los informes rendidos por los detectives **GÁLVEZ**, **GARCÍA Y ARGUETA**; que el parte de funciones de la División de Delitos Contra la Propiedad de ese día indica que el detective **ANTONIO GÁLVEZ** salió de la División en apoyo del detective **ARGUETA** y no como han venido señalando en los informes; y aunado a lo anterior reportaron como destino San Miguelito más no informaron su presencia en el sector de Santa Ana. (Fs. 1-3).

El acto impugnado fue confirmado mediante la Resolución N° DG-085-95 de 27 de julio de 1995, y en ésta se citan algunos hechos invocados en el escrito de reconsideración del señor **ARGUETA** que afirman que él fue a dar la cooperación al detective Gálvez "viendo la necesidad de que se trataba" y "sin saber específicamente de que se trataba"; que fue después de un tiempo bastante largo en que ya se había solucionado el problema, que regresaron a la base nuevamente; y que fue en cumplimiento de su deber que bajó del vehículo que él manejaba para dar auxilio a una joven que le estaban robando.

Observa la Sala, que el ordinal 5 del artículo 45 de la Ley 16 de 1991 dispone que el "Reglamento Interno de la Institución tipificará las faltas leves y graves y las sanciones correspondientes a las mismas". En desarrollo de esta norma, el artículo 34 del Reglamento Interno consagra entre las sanciones aplicables **la remoción del cargo**, que consiste en la separación definitiva del puesto que desempeña el funcionario, por infringir las disposiciones legales o el presente Reglamento. Entre las causales de destitución del Reglamento Interno se mencionan las siguientes:

> "...
> f. La conducta desordenada e incorrecta del funcionario que ocasione perjuicio al funcionamiento o al prestigio de la Institución.
> ...
> o. Ocasionar de modo intencional o por negligencia, daño grave y costoso de los equipos, herramientas, armas, máquinas, vehículos, edificios, instalaciones y demás bienes de la Institución.
> ...
> q. Cualesquiera otra causal que por su naturaleza amerite la remoción del cargo."

Los hechos y omisiones en que incurrió el señor **PORFIRIO ARGUETA** la noche del 20 de mayo de 1994, guardan relación con las causales previamente citadas, y además estas faltas se mencionan entre los deberes y prohibiciones del señor **PORFIRIO ARGUETA** como funcionario de la Policía Técnica Judicial, veamos:

> **RESOLUCIÓN 25-94 de 15 de noviembre de 1994.**
>
> "ARTÍCULO 29. **De los deberes.**
> ...
> f. Conservar en estado óptimo los objetos, instrumentos, útiles, equipos, armas, vehículos y maquinarias que les sean entregados para la ejecución de sus labores. ..."

"ARTÍCULO 31. **De las prohibiciones.**
...
b. Realizar en horas laborables, funciones o tareas que pugnen con sus obligaciones como funcionarios públicos, en general, y en especial, como funcionario de la Institución.
...
f. Realizar sin previa autorización, actividades que no sean afines al desempeño de sus labores en el ámbito de trabajo.

g. Realizar actos que atenten contra la integridad de la Institución y la seguridad de las personas que colaboran con ella.
...
o. Utilizar o permitir el uso de cualquier bien del Estado, para fines ajenos a las actividades propias de la Institución. ..."

A juicio de la Sala, el hecho de abandonar su puesto de trabajo en la base de la Policía Técnica Judicial sin reporte de salida y siendo el responsable de ese turno en su respectiva división; el ausentarse por aproximadamente cuatro horas, desde la 1:15 a. m. hasta las 5:00 a. m. reportando sólo como destino San Miguelito y sin informar su presencia en el sector de Santa Ana, lugar donde el detective Omar García colisionó el vehículo de la institución; y el causar daños al vehículo asignado a su división, tales como: la tapa del motor chocada, la defensa delantera chocada (irreparable), camisa frontal destruida, retrovisor interno roto, guardafango delantero lateral derecho golpeado, lámpara direccional lateral derecho parte frontal rota, farol lateral derecho roto, base de la defensa delantera torcida, asiento lateral derecho parte frontal dañado, mata perro roto, y posibles daños mecánicos (fs. 2), son hechos que constituyen faltas previamente tipificadas en el Reglamento Interno de la Policía Técnica Judicial, sancionadas con la remoción del cargo.

Adicionalmente, el artículo 42 ibídem preceptúa que quedan exceptuados de investigación los actos que por su gravedad y notoriedad ameritan remoción inmediata del funcionario, siempre que se cumpla con lo indicado en el artículo veinte (20) de la Ley Orgánica, que preceptúa que el Director de la Policía Técnica Judicial es la autoridad con facultad para nombrar y remover a los jefes y servidores públicos de esta Institución, y exige en estos casos, el previo concepto del Procurador.

En el caso que nos ocupa, el Director General de la Policía Técnica Judicial alega en su informe de conducta que actuó conforme a lo preceptuado en el artículo 42 del Reglamento, porque fue por la gravedad y la notoriedad de las faltas que destituyó al señor **ARGUETA**; y que "él mismo hizo el Informe de Novedad, calendado 21 de mayo de 1995, en el cual explica todo lo acontecido el día de los hechos." (Fs. 19).

También consta a foja 45 copia autenticada del oficio DPG-961-95 de 22 de junio de 1995, mediante el cual el Procurador General de la Nación comunica al Director de la Policía Técnica Judicial que "revisó y encontró conforme la solicitud de previo concepto hecha ... para la **DESTITUCIÓN** de los Detectives **OMAR GARCÍA**, ... y **PORFIRIO ARGUETA**, ... infringiendo ambos, claras disposiciones de la Ley 16 de 9 de julio de 1991, en su artículo 45."

En cuanto a la violación del derecho de defensa que alega el señor **PORFIRIO ARGUETA**, consta a foja 9 en el hecho tercero de la demanda, que interpuso en tiempo oportuno recurso de reconsideración y agotó la vía gubernativa, y además que pudo recurrir a la vía contencioso administrativa. En cuanto a las otras pretensiones del demandante, observa la Sala que el artículo 30 literal b) del Reglamento Interno, dispone que estos funcionarios tienen el derecho de recibir las remuneraciones en concepto de salarios caídos, cuando la Institución ordena la separación del cargo y el funcionario **comprueba plenamente que no ha cometido los hechos respectivos**, pero en autos se ha probado que el señor **PORFIRIO ARGUETA** no cumplió sus deberes como funcionario de la Policía Técnica Judicial el día de los hechos, 20 de mayo de 1995.

Al Director de la Policía Técnica Judicial le son atribuidas las funciones

de nombrar y remover a los funcionarios de dicha Institución, por lo que en virtud de la excepción prevista en el párrafo final del artículo 42 del Reglamento, como autoridad máxima de la institución, podía destituir al señor **ARGUETA** sin la investigación por parte del Departamento de Responsabilidad Profesional. Por tanto, como el señor **PORFIRIO ARGUETA** fue destituido por la autoridad competente, y pudo ejercer su derecho de defensa mediante los recursos legales, al sancionarlo no se ha violado el debido proceso, ni norma sustantiva alguna. Ante esta realidad, la Sala considera que no se han violado los artículos 43 y 45 de la Ley 16 de 1991, y 42 y 134 del Reglamento Interno de la Policía Técnica Judicial, normas de procedimiento aplicables en los casos en que el Departamento de Responsabilidad Profesional hace la investigación de los hechos imputados al funcionario respectivo.

De consiguiente, la Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES ILEGAL, la Resolución N° 30 de 3 de julio de 1995, expedida por el Director General de la Policía Técnica Judicial, y NIEGA las otras declaraciones pedidas.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL DR. JAVIER CASTILLO G. EN REPRESENTACIÓN DE KIA PANAMÁ, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° DN-41-2-95 EMITIDA POR EL DIRECTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INAFORP). MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El doctor Javier Carrillo González, actuando en representación de la sociedad Kia Panamá, S.A, ha interpuesto recurso de apelación contra la resolución proferida por la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de 4 de marzo de 1996, mediante la cual no se admite la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, presentada para que se declare nula por ilegal la Resolución DN-41-2-95 emitida por el Director del Instituto Nacional de Formación Profesional.

La Magistrada Sustanciadora no admitió la demanda por considerar que el apoderado de la demandante omitió designar expresamente a las partes y sus representantes y por otro lado, dirigió erróneamente su libelo a todos los Magistrados de la Sala Tercera.

El doctor Carrillo, afirma en su escrito de apelación, que en primer lugar el artículo 99 del Código Judicial establece que la Ley 135 de 1943 será aplicada por la Sala Tercera en cuanto no contradiga lo dispuesto en el mencionado Código de procedimiento toda vez que el artículo 469 de dicho cuerpo de normas establece que cualquier error de defecto en la identificación no es óbice para que el Juez acceda a lo pedido. Por otro lado, el sostiene que, el artículo 43 de la Ley 135 de 1943, no establece que se deben designar expresamente a las partes y sus representantes al mismo tiempo y que a lo largo del libelo contentivo de la demanda quedaron efectivamente designadas. Finalmente, considera el recurrente que el dirigir la demandan al Presidente de la Sala Tercera es una omisión subsanable, por lo cual debe ordenarse su devolución para que se corrija la misma, como lo establece el artículo 51 de la Ley 135 de 1943.

Por su parte, la Procuradora de la Administración mediante la Vista N° 144

de 9 de abril de 1996, se opone a los criterios expuestos por la parte actora y solicita al resto de los Magistrados que conforman la Sala Tercera que confirmen la resolución apelada.

No coincide la Sala con los criterios expuestos por la parte actora, dado que la parte demandante no observó lo preceptuado en el numeral 1° del Artículo 43 de la Ley 135 de 1943 que prevé los requisitos necesarios que debe contener toda demanda ante la jurisdicción contencioso administrativa. Efectivamente, se observa que la parte demandante omitió designar expresamente a las partes y a sus representantes, constituida la parte demandante por la Sociedad KIA PANAMÁ, S. A. , representada por el doctor Javier Carrillo González y la parte demandada, por el Director Nacional del Instituto Nacional de Formación Profesional, representado por la Procuradora de la Administración, tal y como lo establece el artículo 348 del Código Judicial.

Por otro lado, si bien es cierto que el dirigir la demanda al Presidente de la Sala Tercera, no es óbice para la admisión de la misma, como ya lo hemos mencionado en párrafo anterior, en el libelo se incumple con lo establecido en el numeral 1 del artículo 43 de la Ley 135 de 1943, razón suficiente para no admitir la presente demanda contencioso administrativa, en atención a lo preceptuado en el artículo 50 de la ley.

En consecuencia, el resto de los Magistrados que conforman la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la resolución de 4 de marzo de 1996, por medio de la cual NO SE ADMITE la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por el doctor Javier Carrillo González, en representación de KIA PANAMÁ, S. A.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA

(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA GALINDO, ARIAS Y LÓPEZ, EN REPRESENTACIÓN DE ESTELA DE CABALLERO Y OTROS, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA NOTA N° D. G. N° 209-94 DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 1994, EMITIDA POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma de abogados Galindo, Arias & López, en representación de Estela caballero y otros, ha promovido proceso contencioso administrativo de plena jurisdicción contra la Caja del Seguro Social con el objeto de que se declare nula por ilegal el acto administrativo contenido en la Nota D. G. 209-94 del 21 de septiembre de 1994 dictada por el ex-Director de la Caja de la Caja de Seguro Social y en consecuencia, la institución demandada reciba el pago de las cuotas patronales de cada uno de los demandantes no remitidas por el Banco Nacional durante el período comprendido entre el 1° de enero de 1965 hasta el 30 de septiembre de 1978 y por lo tanto se les otorgue el ajuste retroactivo de sus pensiones de jubilación de conformidad a la ley 11 de 1956 y la Ley 20 de 1975.

La parte demandante considera que el acto por ella impugnado ha infringido los artículos 75, 76 y 79 de la Ley 11 de 1956, 42, 43 y 46 de la Ley 20 de 1975, 1° de la Ley 76 de 1978, 35-B, 57, 66 y 83 del Decreto Ley 14 de 1954, 29 de la ley 135 de 1943, 464, 460 y 782 del Código Judicial.

El Procurador de la Administración contestó la demanda mediante la Vista

N° 144 de 19 de abril de 1995. En dicho documento el Procurador se opone a las pretensiones de la parte demandante por considerar que no le asiste la razón ni el derecho a los demandantes.

Observa la Sala que la controversia se centra en el hecho de que la Caja del Seguro Social no quiere aceptar el pago por parte del Banco Nacional de las cuotas obrero patronales de 1965 a 1978 correspondientes al sistema de jubilación especial establecido para los empleados de la citada institución bancaria por la Ley 11 de 1956.

Como resultado del incumplimiento de pago de las correspondientes cuotas obrero patronales, hecho aceptado por el Banco Nacional, los demandantes, ahora jubilados, no pudieron beneficiarse del plan de jubilación especial del Banco Nacional (Ley 11 de 1956), consecuentemente no reciben la suma total de su jubilación.

El beneficio otorgado por la Ley 11 de 1956, en su artículo 75, consiste en que, al tener como mínimo 28 años de laborar o 60 años de edad y haber prestado sus servicios durante 20 años continuos, los empleados y el Banco Nacional seguirían pagando la cuota obrero patronal hasta que fuera otorgada la pensión de vejez de la Caja de Seguro Social y entonces tendrían derecho al pago de una pensión equivalente al 75% del último salario devengado, con un límite de quinientos balboas (B/.500.00). Los empleados cumplieron su parte y no así el Banco, que ha aceptado su incumplimiento y de diferentes maneras ha querido cumplir o reponer su falta. Una de las maneras que el Banco Nacional considera viable y adecuadamente legal, es remitirle a la Caja del Seguro Social las cuotas dejadas de pagar y así, la Caja otorgue los beneficios reclamados por los demandantes.

Lo anterior motivó que los jubilados enviaran el memorial de 9 de agosto de 1994 a la Dirección General del Seguro Social, que respondió mediante la Nota D. G. N-209-94 del 21 de septiembre de 1994, cual es el acto administrativo aquí impugnado.

Una vez presentada la demanda se le corrió traslado al citado funcionario, quien contestó mediante informe de conducta sin fecha y señaló lo siguiente:

> "En dicha ocasión se negó tal solicitud, en vista de que la misma no provenía del Banco Nacional de Panamá, entidad que como patrono incurrió en mora en el pago de la cuota obrero patronal, por lo que no se podía acceder a lo pedido hasta tanto la Caja de Seguro social no calculara el monto a pagar, incluyendo en éste, el recargo de diez por ciento (10% y el interés de uno por ciento (1%) por mes o fracción de mes, por el incumplimiento de la obligación legal, tal y como lo dispone el Artículo 58 del Decreto Ley N° 14 de 1954, entidad que como patrono moroso debía ser notificada en primera instancia.
>
> Debe entenderse que la solicitud elevada por este grupo de jubilados tenía como finalidad acogerse a lo dispuesto en la Ley N° 11 de 7 de febrero de 1956 (Artículos 75, 76 y 79) y en la Ley N° 20 de 22 de abril de 1975, que reformó la anterior (Artículo 46) que les permite luego de jubilarse (por legislación especial) seguir pagando, conjuntamente con el Banco Nacional de Panamá, cuotas obrero-patronales que generan derecho, luego, a que estos se acojan al riesgo de vejez otorgado por la legislación de seguridad social, situación de constitucionalidad discutible, pues se crea un privilegio a favor de estos jubilados, ya que legalmente aquellas personas que deseen retirarse de la ocupación que desempeñan y se acojan de una jubilación especial no pueden luego optar por la pensión de vejez del programa de la seguridad social. Indistintamente de lo anterior, la Caja de Seguro Social no se ha negado a reconocer el derecho contenido en las excertas precitadas, sino que los principios de estricta legalidad en las actuaciones administrativas (Artículo 18 de la Constitución Nacional) impone la obligación de acatar las normas jurídicas superiores, como es el

> caso del Artículo 80 del Decreto Ley de 1954, que responsabiliza al patrono de los perjuicios que sufrieren, en este caso, los asegurados cuando la Caja no pudiere conceder a éstos las prestaciones a que tuvieren derecho, debido al incumplimiento de obligaciones por parte de éste.
>
> El sistema de seguridad social panameño se fundamenta en los principios de solidaridad y capitalización, más aún cuando el Artículo 298 de la Constitución Nacional en su párrafo segundo señala que
>
> "Las jubilaciones de los servidores públicos se fundarán en estudios actuariales y proporciones presupuestarias razonables," siendo este el caso de los demandantes."

De todo lo anteriormente expuesto debemos prestar especial atención al hecho que los demandantes son jubilados y están siendo beneficiados como tal por una pensión. Esto nos lleva a observar la petición que motivó la presente demanda, **"Que a todos los jubilados del Banco Nacional de Panamá, que son demandantes en este proceso, les corresponde el ajuste retroactivo (a partir de la fecha que adquirieron el derecho) de sus pensiones de jubilación de conformidad con lo previsto en las leyes 11 de 1956 y 20 de 1975".**

De lo anterior se desprende que la restitución del derecho que motivó la presente demanda no es otra cosa que el ajuste de las pensiones de jubilación, a partir de la fecha que lo adquirieron (efecto retroactivo).

Las pensiones de jubilación fueron otorgadas por la Caja de Seguro Social mediante resolución, individualmente a cada jubilado según les correspondía.

Sin embargo, los jubilados demandantes fundamentaron la demanda de plena jurisdicción en la Nota del Banco Nacional dirigida a su apoderado judicial, sin impugnar los actos mediante los cuales la Caja de Seguro Social otorgaron las jubilaciones de pensión de vejez que se desea sea ajustada, que es el acto original que causa la presente demanda.

Esto es así puesto que, primero se otorga la jubilación especial del Banco Nacional y después la pensión de jubilación por vejez. Por lo tanto, cuando se emitió la resolución de jubilación de la Caja de Seguro Social a cada uno de los jubilados, debió estar incluido el ajuste solicitado en la presente demanda, pues es claro que de haber sido así no hubiera existido la presente demanda.

Veamos lo que nos dice el Profesor Jesús González Pérez al respecto:

> "Si lo que se demanda del Órgano Jurisdiccional es no sólo la anulación de un acto sino el reconocimiento de una situación jurídica individualizada, es incuestionable que únicamente puede delimitarse adecuadamente la pretensión acudiendo al fundamento en sentido estricto; por ejemplo, si se pretende el reconocimiento del derecho a una cantidad de dinero, la pretensión sólo quedará delimitada cuando se conozca la causa en virtud de la cual se pide (devolución de un impuesto indebidamente pagado, cumplimiento de un contrato, indemnización de perjuicios, etc.)
>
> (Jesús González Pérez, Manual de Derecho Procesal Administrativo, Editorial Civitas, S. A. primera edición, 1990, pág. 189).

Por las razones anteriores consideramos que siendo una acción de plena jurisdicción en la cual se solicita la restitución de un derecho, se debe conocer la causa en virtud de la cual se pide la declaración de nulidad; por lo que el acto que se debió impugnar es la resolución por medio de la cual la Caja otorgó la pensión de vejez a cada uno de los demandantes. Es evidente que ya ha transcurrido el término de dos meses para tal impugnación

De lo anterior concluimos que, no es viable la petición de ajuste de las

pensiones de vejez porque los jubilados demandantes dirigieron la presente demanda contra el acto contenido en la nota D. G. 209-94, sin impugnar los actos originales que motivaron la presente acción, cuales son los actos a través de los cuales la Caja de Seguro Social otorgó la pensión individualmente a los demandantes. Siguiendo este orden de ideas, debemos remitirnos al artículo 43 a) de la Ley 135, que es del tenor siguiente:

> "ARTÍCULO 43 a). Si la acción intentada es la de nulidad de un acto administrativo, se individualizará éste con toda precisión; y si se demanda el restablecimiento de un derecho, deberá indicarse las prestaciones que se pretenden, ya se trate de indemnizaciones o de modificación o reforma del acto demandado o del hecho u operación o de modificación o reforma del acto demandado o del hecho u operación administrativa que causa la demanda."

El artículo anterior es claro, señala que si la acción intentada es la de nulidad de un acto administrativo, éste debe individualizarse con toda precisión; y si se demanda el restablecimiento de un derecho, deben indicarse las prestaciones que se pretenden, ya se trate de indemnizaciones o de modificación o reforma del acto demandado o del hecho u operación administrativa que causa la demanda. En el caso que nos ocupa no se han individualizado los actos administrativos mediante los cuales la Caja de Seguro Social otorgó la pensión de vejez. Al no demandarse los actos administrativos cuya declaración de nulidad se debió pedir en su momento oportuno, no puede la Sala condenar en abstracto el ajuste aquí solicitado.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ACCEDE a las pretensiones de los demandantes, en cuanto piden que se declare nulo el acto administrativo contenido en la Nota N° D. G. 209-94 de 21 de septiembre de 1994 emitida por la Dirección de la Caja del Seguro Social y que se hagan otras declaraciones.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA MORENO Y FÁBREGA, EN REPRESENTACIÓN DE POSTENLOSA, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 4847-93-SUB. D. G. DE 7 DE JUNIO DE 1993, EMITIDA POR LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La sociedad Postenlosa, S. A., ha presentado por intermedio de sus apoderados especiales, la firma de abogados Moreno y Fábrega, demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción con el objeto de que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° 4847-93-SUB-D. G. de 7 de junio de 1993, dictada por el Subdirector General de la Caja de Seguro Social, los actos confirmatorios y para que se hagan otras declaraciones.

La resolución impugnada condenó a la empresa Postenlosa, S. A. a pagar a la Caja de Seguro Social la suma de ochenta y siete mil dos ciento noventa y dos balboas con ochenta y nueve centésimos (B/.87,292.89) en concepto de cuotas obrero patronales, prima de riesgos profesionales y recargos de ley, sumas dejadas de pagar durante el período comprendido entre el mes de enero de 1989 a

junio de 1992 más los intereses que se causen hasta la fecha de su cancelación de los salarios percibidos de los señores Alberto Bermúdez, Adolfo Quelquejeu, Denis Vargas, Roberto Ferro, Jorge Espinoza, César González e Ivanova Pilota.

El apoderado judicial de la empresa demandada solicita que se declaren ilegales las resoluciones impugnadas en este proceso y se absuelva a la demandante de la condena impuesta porque estima que dichas resoluciones infringen el artículo 2, del Decreto Ley 14 de 1954; el artículo 62 en sus literales b) y c) y el parágrafo 1°; 66-A del Decreto Ley 14 de 1954, artículo 1361 del Código Civil y el artículo 37 de la Ley 32 de 1927.

Básicamente, la parte actora sustenta su pretensión en base a los siguientes puntos: a) La inexistencia de relación laboral entre los socios y la sociedad, b) los dineros recibidos fueron en justo concepto de dividendos tal y como lo establece la ley, y c) Los pagos recibidos por el resto de las personas que aparecen dentro del alcance, se dieron en concepto de sub-contratos por servicios profesionales que se daban de manera esporádica y sobre los cuales se hicieron las declaraciones correspondientes al caso.

Posteriormente, el Magistrado Sustanciador procedió a solicitar al Director de la Caja de Seguro Social un informe de conducta el cual es del tenor siguiente:

> "En tal sentido, las apreciaciones que hace la parte apelante con respecto al contenido de los actos administrativos no se ajustan a la realidad jurídica, y prueba de ello son las hojas de detalles de las omisiones en remuneraciones pagadas y no declaradas, visibles de fojas 1 a 4 del expediente, en la cual se observó continuidad de pagos por parte de la empresa (persona jurídica) a favor de los señores Adolfo Quelquejeu Jr. y Alberto Bermúdez, como retribución de los servicios que prestaban, situación ésta que los vinculaba a la existencia de una relación obrero patronal con la empresa y no por servicios profesionales.
>
> Por lo que las sumas recibidas por las personas que aparecen en el informe de auditoría, es producto de una relación de trabajo, la cual no escapa del ámbito de la aportación prevista en el campo de la seguridad social, por cuanto tales sumas de dinero tienen su génesis en la relación de trabajo que mantenían con la empresa."

Del libelo de la demanda se le corrió traslado al Procurador de la Administración quien se opuso a la pretensión del demandante.

Encontrándose el proceso en este estado los Magistrados de la Sala Tercera, entran a resolver la presente controversia.

El apoderado judicial de la demandante considera que el artículo 2 del Decreto Ley 14 de 1954, que establece el régimen obligatorio del Seguro Social para todos los trabajadores, "a quienes se les se le ha impuesto esta obligación no pertenecen a la misma, por cuanto los ingenieros Adolfo Quelquejeu Jr., Alberto Bermúdez y demás socios no son trabajadores dependientes de la sociedad POSTENLOSA, S. A. sino por el contrario, ejercen una actividad profesional", y agrega que es "una sociedad civil cuyo objeto es la realización de una actividad profesional en el campo de la construcción", la cual ejercen por medio de la demandada como socios y no como empleados.

La Sala observa que, contra las afirmaciones de la Caja de Seguro social, en cuanto a la existencia de la relación de trabajo, la empresa sostiene que no solo no existe relación obrero patronal, sino que ni siquiera se debe catalogar como trabajadores a quienes la Caja desea cobrar la cuota obrero-patronal, puesto que son socios accionistas y las sumas a que se refiere la Caja de Seguro Social han sido repartidas en concepto de dividendos en proporción a su aportación.

Encontramos entonces que el punto a debatir en este caso se centra en cuanto a que si existe o no relación laboral entre Postenlosa, S. A. y los señores Adolfo Quelquejeu jr., Alberto Bermúdez, Jorge Espinoza, Denis Vargas,

Roberto Ferro, César González e Ivanova Picota.

Según el Informe de Conducta (foja 56), las apreciaciones de la Caja de Seguro Social para determinar la relación de trabajo se basa únicamente en que se observó "continuidad en los pagos" por parte de Postenlosa, S. A. a favor de los señores citados.

Cabe destacar que el Informe de Conducta de la Caja de Seguro Social, se apoya en la nota N° DAL-M-92-574 de 21 de diciembre de 1992 suscrita por la **Dirección de Asesoría Legal** que se encuentra a fojas 20 y 21 del expediente administrativo, la cual versa específicamente sobre el caso que nos ocupa y es del tenor siguiente:

> "Si usted nos lo permite intentaremos plasmar los parámetros a seguir en aquellos casos de profesionales liberales dueños o no de empresas, por ser ésta la problemática relevante.
>
> Lo que determina la obligación de cotizar al régimen de seguro social es la prestación de servicios dentro de una relación laboral. Sabemos que la forma más eficaz de comprobar la relación laboral es de que haya pruebas de la subordinación jurídica o de la dependencia económica, conceptos regulados en los Artículos 64 y 65 del código de Trabajo.
>
> Si un profesional liberal (médico, arquitecto, abogado, etc.) dueño o no de una empresa (persona jurídica) configura elementos de la subordinación jurídica, o sea, cumple con un horario, tiene oficina, recibe o da órdenes (dirección administrativa), ocupa cargos administrativos (como por ejemplo el de gerente), o en el caso de la dependencia económica, si se comprueba que la mayoría de sus ingresos provienen de un mismo patrono, este último deberá ser considerado como trabajador.
>
> Los criterios determinantes de comprobación de la relación laboral son y han sido del conocimiento de nuestros auditores, esto en nada ha cambiado, pues imperan los mismos elementos.
>
> Han existido muchos antecedentes perfectamente legales, de profesionales liberales que siendo dueños de empresas han cotizado como trabajadores en razón de haberse sometido a los elementos de subordinación de la relación laboral. No existe disposición en nuestro ordenamiento jurídico, que prohíba que un profesional liberal, dueño de empresa, ocupe un cargo administrativo dentro de la misma. Serán los elementos propios de la relación laboral (**bajo subordinación jurídica**) lo que determinará la existencia real y eficaz de la prestación del servicio." (La negrilla es nuestra).

No encontramos en todo el expediente administrativo, documento o declaración alguna que nos indique que en el presente caso existen los elementos propios de la relación laboral requerido por la nota arriba suscrita, tales como la subordinación jurídica o dependencia económica entre los señores citados y la empresa Postenlosa, S. A.

Muy por el contrario, del análisis de la Dirección de Auditoría del Departamento de Auditoría a Empresas de la Caja de Seguro Social que reposa en fojas 1 a 4 del expediente administrativo, encontramos que si bien existen pagos por parte de Postenlosa, S. A. a los señores citados, los mismos no son continuos, pues se pagaba algunos meses al año y otros no, así como que la suma a pagar no siempre es la misma, lo que nos lleva a concluir que no existía obligación alguna de pagar una suma de dinero mensualmente y corrobora la versión de la demandante en cuanto a que se paga, o mejor dicho se reparten dividendos sólo cuando hubiere ganancias. Veamos los períodos que se pretenden cobrar: de enero a junio de 1992, Alberto Bermúdez no recibe ingreso alguno en marzo, tampoco Adolfo Quelquejeu recibe ingresos en marzo y abril, Denis Vargas sólo recibe ingresos en marzo y mayo, Roberto Ferro se le paga o recibe ingresos

únicamente en abril y a Jorge Espinoza no recibe absolutamente nada en este período. En el año de 1991, Alberto bermúdez y Adolfo Quelquejeu reciben ingresos en marzo y septiembre; Jorge Espinoza sólo recibe ingresos en abril y junio; Denis Vargas no recibe ingresos en marzo, junio, julio agosto y octubre y Roberto Ferro no recibe ingreso alguno. En el año de 1990 Alberto Bermúdez y Adolfo Quelquejeu no reciben ingresos alguno en febrero, marzo, junio, septiembre y noviembre, Jorge Espinoza no recibe ingresos en junio, Denis Vargas únicamente recibe ingresos en febrero, marzo, noviembre y diciembre. En el año de 1989 Alberto Bermúdez no recibe ingresos en abril, mayo, julio y diciembre, Adolfo Quelquejeu no recibe en mayo, julio ni diciembre, Jorge Espinoza no recibe en febrero, marzo, abril, mayo, junio ni agosto, César González no recibe en octubre, noviembre y diciembre e Ivanova Picota no recibe en agosto, septiembre, octubre, noviembre ni diciembre.

En casos similares, la Sala Tercera se ha pronunciado anteriormente, veamos la sentencia de 23 de abril de 1981, la cual es del tenor siguiente:

> "Sin embargo, en el caso planteado la Sala observa que, además de las razones expuestas en el informe anteriormente copiado por los peritos mencionados, en donde se explica que el sistema de contabilidad llevado por la empresa permite la participación de sus empleados en las ganancias mensualmente, también concurren otros hechos y razones que inequívocamente indican que se trata del reparto de utilidades.
>
> En efecto, no consta en la investigación realizada por los funcionarios de la Caja que entre esa compañía y sus empleados se hubiese pactado individualmente o en forma colectiva la obligación de pagar las sumas en referencia.
>
> Se observa que no son los mismos meses de cada uno de esos años cuando obtenían la ganancia que le permitiera hacer la distribución.
>
> Ni son los mismos meses de cada uno de esos años cuando se hacen dichos pagos, y las sumas de dinero que le correspondía a cada empleado por su participación en las ganancias son distintas cada mes.
>
> Basta señalar al respecto que los pagados en el año de 1979 correspondieron a los meses de enero, febrero, marzo, mayo, junio, julio, septiembre y noviembre; en el año de 1975 ocurre en los meses de enero, mayo, junio, septiembre y octubre; durante el año de 1976 fue en los meses de enero, marzo, mayo, julio y octubre, en el año de 1977 se pagó en los meses de entero y febrero; y en el año de 1978 los meses de enero, febrero, marzo, mayo, junio y julio.
>
> De acuerdo con el informe pericial mencionado la empresa lleva un sistema de contabilidad que le permite determinar mensualmente sus ganancias, y solamente en el mes en que se producen ganancias se paga participación a los empleados."

En conclusión, la Caja de Seguro Social se fundamentó en conclusiones subjetivas y no objetivas al condenar a Postenlosa, S. A. a pagar la suma de B/.87,292.89 en concepto de cuotas obrero- patronales, prima de riesgos profesionales y recargos de ley durante el período de enero de 1989 a junio de 1992, se fundamentó únicamente en que se recibía una suma mensual y reiterada, lo cual no es correcto y si bien, la Caja de Seguro Social hace alusión a los elementos necesarios para que se configure toda relación de trabajo, no sustentan en qué se basan para concluir que en este caso existe tal relación ni explican cómo se ha comprobado que se reúnen los tan citados elementos de toda relación laboral.

Pues bien, si no existe relación de trabajo entre Postenlosa, S. A. y Alberto Bermúdez, Adolfo Quelquejeu, Denis Vargas, Roberto Ferro, Jorge espinoza, César González e Ivanova Pilota, no existe tampoco un salario o sueldo, por lo que, mal puede entonces Postenlosa, S. A. descontar la cuota del Seguro Social

a los citados y por ende la Caja de Seguro Social no puede cobrar las cuotas de Seguro Social, prima de riesgos profesionales y recargos de ley que pretende.

Estando así las cosas, consideramos que el estudio de las demás infracciones está demás, pues una vez comprobadas las infracciones arriba señaladas, se accede a las pretensiones del actor.

Por todo lo anteriormente expuesto, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA que ES ILEGAL la Resolución N° 4847-93 SUB-D. G. de 7 de junio de 1993 expedida por el Subdirector General de la Caja de Seguro Social y sus actos confirmatorios, las resoluciones N° 5376-94-SUB. DG. de 12 de enero de 1994 emitida por la Sub-Dirección General de la Caja de Seguro Social y N° 9989-94-J. D. del 22 de diciembre de 1994, emitida por la Junta directiva de la caja de Seguro Social.

Notifíquese, Publíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA RIVERA, BOLÍVAR Y CASTAÑEDA EN REPRESENTACIÓN DE AEROLÍNEAS PACÍFICO ATLÁNTICO, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL COBRO CONTENIDO EN LA FACTURA N° 36876 DE 19 DE JUNIO DE 1995, EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN DE AERONÁUTICA CIVIL, ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma forense Rivera, Bolívar y Castañeda ha presentado advertencia de inconstitucionalidad de los artículos 19, 20, 21 y 22 de la Resolución N° 173 de 13 de mayo de 1980, de la Junta Directiva de Aeronáutica Civil, publicada en la Gaceta Oficial N° 19,104 de 3 de julio de 1980. La advertencia ha sido presentada dentro de la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción promovida por la firma forense Rivera, Bolívar y Castañeda en representación de AEROLÍNEAS PACÍFICO ATLÁNTICO, S. A. para que se declare nulo por ilegal el cobro contenido en la Factura N° 36876 de 19 de junio de 1995, expedida por la Dirección de Aeronáutica Civil, actos confirmatorios y para que se hagan otras declaraciones.

Como el artículo 2549 del Código Judicial exige que, una vez presentada la advertencia, el funcionario judicial que conoce del proceso, sin más trámite, eleve la consulta al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, el Magistrado Sustanciador, procede de conformidad con dicha norma.

En consecuencia, el suscrito Magistrado Sustanciador, en representación de la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONSULTA al Pleno de la Corte Suprema la inconstitucionalidad de los artículos 19, 20, 21 y 22 de la Resolución N° 173 de 13 de mayo de 1980 expedida por la Junta Directiva de Aeronáutica Civil y publicada en la Gaceta Oficial N° 19,104 de 3 de julio de 1980.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTO POR EL LICENCIADO FELIPE RANGEL, EN REPRESENTACIÓN PROPIA, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 13004-86 DE 1° DE OCTUBRE DE 1986, EMITIDA POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS DE LA CAJA DEL SEGURO SOCIAL, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Licenciado **FELIPE RANGEL**, actuando en su nombre y representación, ha presentado desistimiento de la Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción, incoada con el fin de que se declarase nula por ilegal, la Resolución N° 13004-86 de 1 de octubre de 1986, emitida por la Comisión de Prestaciones Económicas de la Caja del Seguro Social.

En efecto, a foja 34 del expediente se aprecia el escrito de desistimiento que fue presentado por el Licdo. Rangel, antes de que se surtiera un recurso de apelación que el prenombrado había incoado contra el auto de 22 de abril de 1996 que había negado la admisión de la demanda en cuestión. Las razones en que se sustenta el desistimiento presentado pueden subsumirse en el hecho alegado de que la vía gubernativa no se había agotado en este caso, razón por la cual el recurrente hará uso de los recursos pertinentes en dicha instancia.

Del presente escrito de desistimiento, se corrió traslado a la señora Procuradora de la Administración a los efectos de ponerle en conocimiento del mismo, en virtud de lo establecido en el párrafo segundo, artículo 66 de la Ley 135 de 1943, reformada por la ley 33 de 1946.

Dado que el precitado artículo establece que en cualquier estado del juicio es admisible por declaración expresa, el desistimiento del recurso contencioso administrativo, y el artículo 1063 del Código Judicial recoge el mismo principio, es perfectamente viable el desistimiento presentado por el LICDO. FELIPE RANGEL, en su propia representación.

En consecuencia, el Magistrado Sustanciador en representación de la Sala tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ADMITE EL DESISTIMIENTO presentado por Licenciado FELIPE RANGEL, en su propia representación dentro de la Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción, para que se declare nula por ilegal la Resolución N° 13004-86 de 1° de octubre de 1986, dictada por la Comisión de Prestaciones Económicas de la Caja del Seguro Social.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. CARLOS J. GEORGE, EN REPRESENTACIÓN DE ALEXIS COBOS MORÁN, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL ACTO ADMINISTRATIVO CONTENIDO EN LA NOTA N° 120-44-84 DE 30 DE OCTUBRE DE 1984, SUSCRITA POR EL GERENTE GENERAL DEL INSTITUTO PANAMEÑO DE TURISMO, ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado **Carlos J. George**, en representación de **ALEXIS COBOS MORAN**, ha presentado Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción para que se declare nula, por ilegal, la Nota N° 120-44-84 de 30 de octubre de 1984, suscrita por el Director General del Instituto Panameño de Turismo, actos confirmatorios y para que se hagan otras declaraciones.

Cabe señalar que esta Sala al pronunciarse en Auto de 19 de junio de 1995, (foja 88), sobre el recurso de apelación que interpusiera el Procurador de la Administración contra la Providencia de 29 de septiembre de 1994, (f. 43), por la cual se admitió la demanda enunciada en el párrafo anterior, decidió que la presente acción era inadmisible contra la Nota N° 120-44-84 del 30 de octubre de 1984, emitida por el Gerente General del Instituto Panameño de Turismo. Sin embargo, en dicha resolución se confirmó la Providencia objeto del recurso de apelación, en cuanto a la admisión de la demanda en estudio contra la Resolución N° 70/94 del 26 de mayo de 1994, dictada por el Gerente General del Instituto Panameño de Turismo y el acto confirmatorio de dicha resolución, consistente en la Resolución N° 25/94 del 18 de julio de 1994, expedida por la Junta Directiva de la referida institución.

Por lo tanto, es en base a estas dos últimas resoluciones, que esta Superioridad procede a emitir un pronunciamiento de fondo respecto de la ilegalidad o no de las mismas.

PRETENSIONES DE LA PARTE ACTORA

Con la presente acción el representante legal de la parte demandante pretende que la Sala declare que es nula, por ilegal, la Resolución N° 70/94 de 1994 por la cual el Instituto Panameño de Turismo decidió no acceder a su solicitud de que esta entidad, le pagase la suma de VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA BALBOAS (B/.24, 840.00) en concepto de indemnización de salarios dejados de percibir por el incumplimiento del Contrato N° 65/84 del 21 de junio de 1984, con la consecuente obligación del Instituto Panameño de Turismo (IPAT), de indemnizar al señor **ALEXIS COBOS MORÁN** por la suma antes mencionada.

LOS HECHOS Y OMISIONES FUNDAMENTALES DE LA PRESENTE ACCIÓN

Las pretensiones del recurrente descansan en los siguientes hechos:

"III.I. Entre el Instituto Panameño de Turismo (IPAT) y mi poderdante **ALEXIS COBOS MORÁN**, se celebre (sic) el Contrato identificado con el N° 65/84, calendado el 21 de junio de 1984, el cual reemplazo (sic) la actuación administrativa contenido (sic) en el Decreto N° 115, de 30 de septiembre de 1983, cuyo texto original reposa en los archivos de dicha institución oficial.

III.2. Mi Poderdante también firmó Contrato con el Instituto para el Aprovechamiento de los Recursos Humanos, dentro del marco de los beneficios afrecidos (sic) por el Programa Especial para perfeccionamiento de los Servidores Públicos, por el término de tres (3) años, a partir del 21 de junio de 1984.

III.3. Con fecha de 30 de octubre de 1984, a sólo cuatro (4) meses de vigencia del Contrato, el **LIC. ALBERTO GARCÍA DE PAREDES**, Gerente General del IPAT en esa fecha, le envió a mi representado la Nota del Tenor siguiente:

30 de octubre de 1984

120-44-84

Señor
Alexis Cobos
E. S. M.

Señor Cobos:

El Instituto Panameño de Turismo tiene programas de fuerte inversión inmediata para el incremento del turismo en Panamá lo que demandará grandes sumas de dinero y por el momento no contamos con los recursos económicos suficientes para desarrollar las actividades que nos permitan llevarlos a la realidad.

Es por ello que nos vemos en la penosa situación de no poder renovarle su contrato para el año fiscal 1985. Por consiguiente, el contrato N° 65/84 celebrado entre el IPAT y su persona culminará para los efectos legales el 31 de diciembre de 1984 del año en curso.

...

III.4. El señor Gerente General del IPAT **LIC. ALBERTO GARCÍA DE PAREDES**, desatendiendo un claro dictamen del Departamento de Asesoría Legal, dejó de ordenar el pago de la suma de B/.920.00 mensuales, en concepto de salarios según (sic) lo convenido en la cláusula segunda del Contrato N° 65/84 de 21 de junio de 1984, situación que le ocasionó graves perjuicios al funcionario **ALEXIS COBOS MORAN.**

III.5. Mi representado, el Señor **ALEXIS COBOS MORÁN** por su parte, cumplió a cabalidad con los Contratos suscritos con el IPAT y el IFARHU, matriculándose y asistiendo con puntualidad, y obteniendo buenas calificaciones en el Curso Superior sobre Gerencia y Dirección Hotelera en la Universidad Politécnica de Madrid, tal como lo certificó en su oportunidad **DON VICENTE VISSACGIL** Secretario del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Politécnica de Madrid, España.

III.6. En forma inexplicable, extralegal, arbitraria, y so pretexto de ejercer sus funciones, los señores **ALBERTO GARCÍA DE PAREDES y JULIO ELÍAS QUIJANO**, exgerente del IPAT, sin expedir resuelto o Decreto de Destitución, perfeccionado ningún (sic) Acto Administrativo de Contrato, fundado en alguna de las causales de resolución que especifica la cláusula quinta (5ª), del Contrato 65/84, de 21 de junio de 1984, por si, y ante si, se negó a cumplir lo pactado con mi poderdante cuya naturaleza es ley entre las partes."

INFORME DE CONDUCTA DE LA ENTIDAD DEMANDADA

El Gerente General del Instituto Panameño de Turismo (IPAT), a través del informe explicativo de conducta que reposa a fs. 45-48 del exp., señaló a esta Corporación de Justicia medularmente, lo siguiente:

"I. ANTECEDENTES

A. NOTA EXPEDIDA POR LA GERENCIA GENERAL DEL IPAT N° 120-44-84, DEL 30 DE OCTUBRE DE 1984.

...

El 21 de junio de 1984 el Instituto Panameño de Turismo suscribe contrato N° 65/84 con el señor Alexis Cobos, el cual tenía un período de duración del 1° de enero de 1984 al 31 de diciembre de 1984, con la finalidad de que el Contratista prestara sus servicios como Jefe de Relaciones Públicas. Mediante Nota N° 120-44-84 del 30 de octubre de 1984, la Gerencia General del Instituto Panameño de Turismo informa al Sr. Alexis Cobos que el contrato N° 65-84 culminaría para los efectos legales el 31 de diciembre de 1984, por lo cual, le informaba la no renovación de la relación contractual para el año 1985.

...

B. RESOLUCIÓN DE LA GERENCIA GENERAL N° 70/94 Y RESOLUCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° 25/94.

El 13 de mayo de 1993 el Señor Alexis Cobos, mediante apoderado le-

gal, presenta al Instituto Panameño de Turismo una reclamación `indemnizatoria de salarios dejados de percibir, por incumplimiento del contrato N° 65/84 del 21 de junio de 1984 . (fiel copia del contenido del Poder presentado ante esta Institución). Igual reclamación realiza el apoderado legal en su escrito.
...
II. ALGUNAS CONSIDERACIONES

Es necesario manifestar que el Contrato N° 65/84 fue cumplido por el Instituto Panameño de Turismo hasta su fecha de terminación, es decir, el 31 de diciembre de 1984. No existió ninguna acción administrativa de resolución de dicho documento legal y el hoy reclamante cobró sus honorarios hasta la fecha de terminación legal de contrato. La actuación de la Gerencia General, identificada mediante la nota N° 120-44-84 del 30 de octubre de 1984, se limitó a informar la no renovación del contrato para el año fiscal 1985. Consideramos que el IPAT tenía la facultad de renovar o no el contrato, debido a que no existía ninguna cláusula contractual que obligara a la Institución a su renovación.

La actuación administrativa reciente que impulsó el Instituto Panameño de Turismo sobre el tema de referencia, se limitó a contestar una reclamación indemnizatoria de salarios dejados de percibir por un supuesto incumplimiento del contrato N° 65/84. En ningún momento el Instituto Panameño de Turismo entra a analizar la nota N° 120-44-84 emitida por la Gerencia General de esta entidad Pública el 30 de octubre de 1984, ya que esta actuación se encuentra debidamente ejecutoriada. Como ya expusimos, la misma fue elevada a la consideración de la Honorable Corte Suprema de Justicia en diversas ocasiones, sin que en aquellos años se produjera una sentencia en contra de la misma. Es de notar igualmente, que el Señor Alexis Cobos, según Poder que reposa en nuestro despacho, se limitó a realizar una solicitud de indemnización, es decir, no solicita la revocación de la nota N° 120-44-84 del 30 de mayo de 1984, la cual si es elevada ante su honorable despacho con la intención que sea declarada nula por ilegal."

OPINIÓN DE LA PROCURADORA DE LA ADMINISTRACIÓN

La señora Procuradora de la Administración mediante Vista Fiscal N° 22 de 11 de enero de 1996, legible a fs. 113-125 del expediente, solicitó a la Sala Tercera denegar las declaraciones impetradas por la parte demandante. Al respecto sostiene que el recurrente ha instaurado una demanda contra un acto administrativo legítimo ya que lo que hizo el Instituto Panameño de Turismo mediante la nota N° 120-44-84 de 30 de octubre de 1984, fue dar cumplimiento a lo estipulado en el Contrato N° 65/84 de 21 de junio de 1984, el cual regía sólo por un año, es decir, del 1° de enero de 1984 al 31 de diciembre de 1984. Por tanto, lo que se hizo fue comunicar al señor Cobos Morán, que no se le contrataría para el año siguiente.

También señala la Procuradora de la Administración que en lo que respecta a las alegaciones por parte del recurrente de que se debió respetar la licencia por tres años que le había sido otorgada por el Instituto Panameño de Turismo, no le asiste razón ya que al dejar de ser funcionario público, el 31 de diciembre de 1984, mal puede tener derecho a una licencia, que en efecto le fue otorgada en su calidad de empleado público en ese momento. Añade que en este sentido, el IPAT respetó ese derecho hasta el momento en que el mismo fungiera como servidor público, por lo que obviamente, por vía de consecuencia, al terminar la contratación de trabajo con dicha entidad, su licencia con sueldo terminaba también en esa fecha, ya que a partir de ese momento dejaba de ser funcionario público, que constituye uno de los requisitos estatuidos precisamente, en el artículo 4° de la Ley N° 31 de 2 de septiembre de 1997. El IPAT respetó la vigencia del contrato N° 65/84, y nada lo obligaba a renovarlo, de conformidad con el artículo 794 del Código Administrativo.

EXAMEN DEL CASO. ARGUMENTOS DE LA PARTE ACTORA

Cumplidos los trámites legales instituidos para este tipo de procesos, la Sala procede a resolver la controversia encausada.

El demandante señala como infringidos los artículos 4°, 5° y 8° de la Ley N° 31 de 1977, "Por la cual se crea y reglamenta el Programa Especial para el Perfeccionamiento Profesional de los Servidores Públicos y se faculta al Instituto de Recursos Humanos (IFARHU) para dirigirlo", y el artículo 1107 del Código Civil, que por estar estrechamente relacionados, la Sala estima procedente analizarlos en su conjunto.

El texto de las precitadas disposiciones en el orden establecido, es el siguiente:

"ARTÍCULO 4° Se le concederá licencia con sueldo completo, hasta por tres (3) años, al aspirante a este Programa Especial de Perfeccionamiento si cumple con los siguientes requisitos:

a) Ser panameño;

b) Ser servidor público y haber prestado servicios por un término no menor de dos (2) años, en la administración pública;

c) Tener título o diploma en la disciplina en la que aspira a perfeccionarse;

d) No tener más de cuarenta y cinco (45) años de edad;

e) Haber realizado con eficiencia, responsabilidad, lealtad y dedicación las labores a él encomendadas en la institución o ministerio en el cual trabaja;

f) No haber recibido, para hacer estudios de postgrado o especialización, licencia con sueldo o beca en los dos (2) últimos años anteriores a su solicitud de licencia:
g) Aspirar a realizar estudios que sean de necesidad para la dependencia estatal en la que presta servicios o para el desarrollo nacional; y
h) Ser patrocinado por la institución en la cual trabaja.

Tendrán preferencia los aspirantes que no hayan recibido este tipo de beneficios anteriormente."

"ARTÍCULO 5° El beneficiario firmará un contrato con el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) y la Institución en la que trabaja, con la cual se compromete a:

a) Regresar al país tan pronto termine sus estudios y prestar servicios al Ministerio o Institución en la que trabaja, por un término mínimo equivalente al doble del período correspondiente a la licencia que recibió;

b) Enviar al Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) de acuerdo con el sistema establecido en la institución educativa en la que estudia; copia autenticada de los comprobantes de matrícula, evaluación y terminación satisfactoria de los estudios; y

c) Cumplir con todas las obligaciones que se establezcan en el citado contrato."

"ARTÍCULO 8° Al beneficiario que concluye satisfactoriamente sus estudios se le garantizará al término de la licencia la reincorporación en su cargo."

"ARTÍCULO 1107: la validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contratantes."

Argumenta el apoderado judicial de la parte actora que las precitadas disposiciones legales han sido infringidas en el concepto de violación directa, por comisión, en virtud de que el acto administrativo contenido tanto en la Nota N° 120-44-84 de 30 de octubre de 1984, por la cual se le comunicó a su representado, la decisión de no renovarle el Contrato 65/84 de fecha 21 de junio de 1984, que había suscrito con el IPAT para prestar sus servicios como Jefe del Departamento de Relaciones Públicas de dicha entidad, con vigencia fiscal del 1° de enero de 1984 al 31 de diciembre de 1984, como en las Resoluciones 70/94 de 26 de mayo de 1994, y la 25/94 confirmatoria de la anterior, desconocen el derecho consagrado en tales disposiciones.

Según el recurrente, ello obedece a que amparado en las precitadas normas, previo cumplimiento de los requisitos señalados en las mismas, por parte de su representado, a éste se le concedió licencia con sueldo por el término de tres años para cursar estudios en la Escuela de Hotelería en la Universidad de Madrid, razón por la cual al proceder el IPAT sin expedir resuelto o Decreto de Destitución, o perfeccionado ningún acto administrativo de Resolución de Contrato, fundado en algunas de las causales de resolución que especifica la cláusula quinta (5ª) del referido Contrato 65/84, por si, y ante si, a no renovar dicho contrato para la siguiente vigencia fiscal, se negó a cumplir lo pactado en el contrato 65/84, y por consiguiente, desconoció su derecho consagrado en las disposiones antes citadas, por razón de que al no renovársele su contrato, tampoco se le renovó su licencia por estudios.

MOTIVACIONES DEL TRIBUNAL

La Sala estima que la actuación del Instituto Panameño de Turismo contenida en la Resolución N° 70/94 del 26 de mayo de 1994, mediante la cual dicha institución no accedió a indemnizar al señor **COBOS MORÁN** en concepto de salarios dejados de percibir, por incumplimiento del Contrato N° 65/84 del 21 de junio de 1984, no conlleva vicios de ilegalidad, previa las siguientes consideraciones.

Consta a f. 6 del expediente, copia autenticada del Resuelto N° 19 de 15 de marzo de 1982, por medio del cual al recurrente se le nombró como Jefe de Relaciones Públicas en el Instituto Panameño de Turismo, a partir del 1 de febrero de 1982. De igual manera, se observa a f. 130 del Decreto N° 159 del 10 de diciembre de 1982, por medio del cual la Gerencia General del IPAT le concede al señor **COBOS MORÁN** licencia con sueldo por estudios en el extranjero (España) por un término de tres (3) años, según el programa especial para perfeccionamiento profesional para servidores públicos, de acuerdo con la Ley N° 31 de 2 de septiembre de 1977. Con base en esta decisión se suscribió el Contrato N° F. P. 82-458 de 14 de octubre de 1982 entre el IPAT y el IFARHU por medio del cual el IPAT concedió al recurrente una "licencia del cargo que ocupaba en dicha institución con goce de sueldo completo por el término de tres (3) años contados a partir del mes de noviembre de 1982, para realizar estudios de Relaciones Públicas Turísticas en el Centro Español de Nuevas Profesiones en Madrid España", al respecto ver f. 127-128.

También se observa en autos que mediante el Decreto N° 115 del 30 de septiembre de 1983, se le declaró al funcionario **COBOS MORÁN** insubsistente de su nombramiento como Jefe del Departamento de Relaciones Públicas del IPAT. Decisión que fuera posteriormente dejada sin efecto a través del Resuelto N° 7 de 5 de junio de 1984. Con base a esta última decisión, el IPAT y el señor **ALEXIS COBOS MORÁN** celebraron el 21 de junio de 1984, el Contrato N° 65/84 de prestación de sus servicios como Jefe del Departamento de Relaciones Públicas que en su Cláusula Tercera establecía que la duración del mismo era **a partir del 1° de enero de 1984 hasta 31 de diciembre de 1984.**

Por consiguiente, al proceder la entidad administrativa demandada a comunicarle al recurrente por medio de la Nota N° 120-44-84 de 30 de octubre de 1984, que el precitado contrato N° 65/84 por medio del cual prestaba sus servicios a dicha entidad, no podía ser renovado para el año fiscal de 1985, y que por lo tanto, el mismo culminaría para los efectos legales el 31 de diciembre de 1984, a juicio de este Tribunal, no constituía violación alguna a lo dispuesto en dicho contrato, ya que al tener término de duración el mismo, la entidad

administrativa se reservaba el derecho, una vez vencido dicho término, de proceder a renovarle o no el contrato al recurrente, como en efecto lo hizo. Aunado a esto, dentro del mismo no existía ninguna cláusula que estableciera que al vencer el término de duración del mismo, la institución estaba obligada a su renovación.

Al no haberse dado violación alguna a lo pactado en el aludido contrato 65/84, no es procedente acceder a la solicitud formulada por el recurrente en el sentido de que el IPAT está obligado a pagarle la suma de B/.24,480.00, en concepto de indemnización de salarios dejados de percibir por el incumplimiento del precitado contrato N° 65/84 del 21 de junio de 1984. Máxime cuando a fs. 142 del expediente, se constata mediante certificación que data de 11 de marzo de 1996, la cual fuera expedida por la Subgerente General del Instituto Panameño de Turismo que "al señor Cobos le fue pagado su salario hasta el 31 de diciembre de 1984 y se le efectuaron las deducciones legales correspondientes."

Sin perjuicio de lo manifestado, la Sala estima procedente indicarle al demandante que el hecho de que a la fecha del vencimiento del contrato 65/84, estuviera gozando de licencia con sueldo que le fuera otorgada por un período de tres (3) años, en virtud del Contrato N° F. P. 82-458 celebrado con el IPAT y el IFARHU, por el cual se acogió al "Programa Especial para el Perfeccionamiento Profesional de Servidores Públicos", reglamentado por la Ley 31 de 1977, no constituía causal de impedimento para que el IPAT procediera a dar por terminada la relación contractual entre él y dicha institución. Esta situación se da en atención a que el demandante al estar contratado por un período de tiempo definido, una vez venciera el término por el cual fuera contratado, era un funcionario de libre nombramiento y remoción, pues no gozaba de estabilidad en el cargo, o al menos no existe prueba en contrario.

En este sentido considera la Sala que el principio de inamovilidad en el goce de la licencia con sueldo del beneficiario con dicho programa, consagrado en la Ley 31 de 1977, que regula el "Programa Especial para el Perfeccionamiento de los Servidores Públicos", estaba sujeto a su status de **ser funcionario público. Debe entenderse que mientras el beneficiario con dicho programa tenga la calidad de funcionario público y cumpla con las demás exigencias contempladas en dicha ley, permanecerá en el goce de la licencia con sueldo que a tales efectos le ha sido otorgada.** Así se desprende de lo establecido en el supra transcrito artículo 4° de la citada Ley 31 de 1977, citado por el recurrente como infringido, que señala que para que proceda este beneficio el beneficiario con este programa especial de perfeccionamiento **debe ser servidor público.**

El Contrato celebrado entre el IPAT y el IFARHU en el cual se le concedió al recurrente la licencia mencionada, y como bien lo señalara la señora Procuradora de la Administración, estaba subordinado a su condición de servidor público, por ende al terminar su relación laboral con la entidad demandada, en el cargo de Jefe del Departamento de Relaciones Públicas el 31 de diciembre de 1984 consecuentemente, desapareció su derecho a disfrutar de la licencia con sueldo de la cual gozaba, repetimos **por ser servidor público.**

Por los argumentos vertidos, la Sala estima que no le asiste razón a la parte actora, y por lo tanto, no prosperan los cargos de violación endilgados.

En consecuencia, los Magistrados que integran la Sala Tercera, de la Corte Suprema administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARAN QUE NO ES ILEGAL la Resolución N° 70/94 de 26 de mayo de 1994, emitida por el Gerente General del Instituto Panameño de Turismo, confirmada mediante la Resolución N° 25/94 de 18 de julio de 1994.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA SOLÍS, ENDARA DELGADO Y GUEVARA EN REPRESENTACIÓN DE LAS SOCIEDADES INDUSTRIAS EL TORERO, S. A., TRANSPORTE LIGO, S. A., FINCAS BREMER, S. A. Y POLLNETT, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULAS POR ILEGALES, LAS RESOLUCIONES N° 4966-93 SUB. D. G. DE 29 DE JULIO DE 1993, LA N° 4973-93 SUB. D. G. DE 29 DE JULIO DE 1993, LA N° 4958-93 SUB. D. G. DE 29 DE JULIO DE 1993 Y LA N° 4965-93 SUB. D. G. DE 29 DE JULIO DE 1993, TODAS EMITIDAS POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma Solís, Endara, Delgado y Guevara en representación de las sociedades INDUSTRIAS EL TORERO, S. A., TRANSPORTE LIGO, S. A., FINCAS BREMER, S. A. y POLLNETT, S. A., ha presentado demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción para que se declare nulas por ilegales las Resoluciones N° 4966-93 SUB-D. G. de 29 de julio de 1993, N° 4973-93 SUB-D. G. de 29 de julio de 1993, N° 4958-93 SUB-D. G. de 29 de julio de 1993 y N° 4965-93 SUB-D. G. de 29 de julio de 1993, todas emitidas por el Director General de la Caja de Seguro Social, actos confirmatorios y para que se hagan otras declaraciones.

Mediante Auto de 29 de marzo de 1995, la Magistrada Ponente ordenó la acumulación de las demandas presentadas individualmente por la firma Solís, Endara, Delgado y Guevara, por razones de economía procesal y para mantener la unidad de la causa, de conformidad con los artículos 709, 710 y 711 del Código Judicial.

I. CONTENIDO DE LOS ACTOS IMPUGNADOS

Las resoluciones demandadas emitidas por la Caja de Seguro Social resolvieron condenar a las empresas INDUSTRIAS EL TORERO, S. A., TRANSPORTE LIGO, S. A., FINCAS BREMER, S. A. y JUGUETERÍA EL MACHETAZO a pagar a favor de la Caja de Seguro Social, la sumas de veinticuatro balboas con cincuenta y dos centésimos (B/.24.52), ciento cincuenta y cinco balboas con cuarenta y ocho centésimos (B/.155.48), setenta y nueve balboas con noventa centésimos (B/.79.90) y seis mil setenta y tres balboas con cincuenta y cuatro centésimos (B/.6,073.54), respectivamente, en concepto de Segunda Partida proporcional del Décimo Tercer Mes correspondiente al año de 1992.

II. INFORME DEL FUNCIONARIO DEMANDADO

En el informe de conducta rendido por el Director General de la Caja de Seguro Social, el 10 de mayo de 1995, expresó que las empresas Industrias El Torero, S. A., Transporte Ligo, S. A., Fincas Bremer, S. A. y Juguetería el Machetazo, adeudan a la Caja de Seguro Social la segunda partida proporcional del décimo tercer mes, porque aunque el artículo 8 de la Ley 20 de 12 de agosto de 1992 señala que esta ley es de orden público, no puede aplicarse antes de su vigencia o retroactivamente como pretende el recurrente, en virtud de que la restitución de estos dineros a los trabajadores se ordena a partir del 14 de agosto de 1992.

En el informe comentado el Director General de la Caja de Seguro Social agrega que el caso de las precitadas empresas incluye trabajadores cuyas relaciones laborales concluyeron antes del vencimiento del término completo de la segunda partida del Décimo Tercer Mes de 1992, y de la existencia en el mundo jurídico de la Ley 20 de 12 de agosto de 1992, por lo que la obligación de pagar las sumas proporcionales de las prestaciones concluidas antes de la nueva ley, surge bajo el imperio del literal m) del Artículo 24 de la Ley 30 de 26 de diciembre de 1991, el cual disponía que las sumas correspondientes a la segunda partida del Décimo Tercer Mes constituían parte integrante de los recursos de la Caja de Seguro Social para hacer frente a las erogaciones derivadas del Programa

de Invalidez, Vejez y Muerte.

III. NORMAS INVOCADAS COMO VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN

El apoderado judicial de las empresas demandadas solicita que se declare ilegales las resoluciones impugnadas en este proceso y se absuelva a las demandantes de la condena impuesta, restituyendo las sumas consignadas como requisito de admisibilidad de las presentes demandas, porque considera que las resoluciones emitidas por la Caja de Seguro Social en contra de sus representadas, han violado los artículos 24 literal m) de la Ley 30 de 26 de diciembre de 1991; 1, 7 y 8 de la Ley 20 de 12 de agosto de 1992; y 3 del Decreto de Gabinete N° 221 de 18 de noviembre de 1971, conforme quedó modificado por el artículo 3 del Decreto de Gabinete 52 de 24 de febrero de 1972, los cuales preceptúan lo siguiente:

> **"ARTÍCULO 24.** El artículo 31 del Decreto Ley N° 14 de 27 de agosto de 1954 quedará así:
>
> Artículo 31. Los recursos de la Caja de Seguro Social para los programas de enfermedad y maternidad y para los de invalidez, vejez y muerte, incluidos los gastos de administración que demande la gestión de estos programas, estarán constituidos por los siguientes ingresos:
> ...
> m) Las cantidades correspondientes a la segunda partida del décimo tercer mes, que serán pagadas por los empleadores particulares y por el Estado, las cuales serán destinadas exclusivamente para el Programa de Vejez, Invalidez y Muerte; ...
> **ARTÍCULO 1.** Restituyase el pago de la segunda partida del Décimo Tercer (XIII) Mes a los trabajadores del sector público y privado a partir del 14 de agosto de 1992.
>
> **ARTÍCULO 7.** Esta ley modifica el parágrafo primero del artículo tercero del Decreto de Gabinete N° 221 de 18 de noviembre de 1971, modificado por el artículo 1 del Decreto de Gabinete N° 52 de 24 de febrero de 1972; deroga el acápite M) del artículo 31 el decreto ley N° 14 de 27 de agosto de 1954, modificado por el artículo 24 de la Ley N° 30 de 26 de diciembre de 1991, y cualquier disposición que le sea contraria.
>
> **ARTÍCULO 8.** Esta ley es de orden público, comenzará a regir desde su promulgación y tiene efectos retroactivos a partir del 14 de agosto de 1992.
>
> **ARTÍCULO TERCERO.** Modificado por el artículo primero del Decreto de Gabinete N° 52 de 24 de febrero de 1972 cuyo texto reza así:
>
> El Artículo 3° del Decreto de Gabinete N° 221 de 18 de noviembre de 1971, quedará así: "La bonificación especial debe pagarse en tres partidas proporcionales, así: El 15 de Abril, el 15 de Agosto, y el 15 de diciembre de cada año."

Señala el apoderado de las sociedades demandantes que dicha norma fue violada por indebida aplicación, puesto que las resoluciones impugnadas reconocieron "la aplicación de una norma que no podía ser actuada", ya que aún cuando la vigencia de la ley 20 de 1992 comenzó a partir del 13 de agosto de 1992, su efecto retroactivo expresamente acordado por la misma ley regula los hechos y situaciones que ocurrieron con anterioridad a su vigencia, incluso los actos ya cumplidos bajo la vigencia del literal M del artículo 24 de la Ley 30 de 1991.

Considera que las resoluciones impugnadas violaron directamente por omisión el artículo 1 de la Ley 20 de 12 de agosto de 1992, aplicable a todo o cualquier pago relativo a la Segunda Partida del Décimo Tercer Mes de 1992, y señala que según el artículo 3 del Decreto de Gabinete N° 221 de 1971, ésta partida es la

correspondiente al período desde el 16 de abril hasta el 15 de agosto de cada año, y el artículo 1 de la Ley 20 se está refiriendo al concepto legal de la segunda partida, por lo que la ley quiso innegablemente atribuir a sus normas efectos retroactivos.

Con respecto al artículo 7 de la Ley 20 de 1992, el apoderado judicial de las actoras manifestó que fue violado directamente por omisión, ya que esta disposición tenía efectos retroactivos por mandato del artículo 8 de la Ley 20 y a su vez derogó el literal m) del artículo 24 de la Ley 30 de 1991, por lo que todo pago situación o conflicto referente a la segunda partida del décimo tercer mes de 1992, debía ser resuelto aplicando aquél y no la norma derogada.

La parte actora señaló que "el efecto retroactivo de la ley 20, expresamente declarado en su artículo 8, significa que sus normas atrapan regulándolos, hechos y situaciones que ocurren con anterioridad a su vigencia incluso a los actos ya cumplidos bajo la vigencia del literal M del artículo 24 de la ley 30 de 1991", por lo cual se violó dicho artículo 8 en forma directa por inaplicación.

Finalmente, el representante de las empresas demandantes expresó que las resoluciones emitidas por la Caja de Seguro Social en contra de las demandantes violaron, por errónea interpretación, el artículo tercero del Decreto de Gabinete N° 221 de 1971, porque sostienen "arbitrariamente, que el derecho de la Caja a cobrar y la consiguiente obligación del patrono, de pagar se limita a una parte de la Segunda Partida del Décimo Tercer Mes que denomina 'Segunda Partida Proporcional', desconociendo que para la ley, es Segunda Partida del Décimo Tercer Mes todo el período comprendido entre el 16 de abril y el 15 de agosto."

IV. OPINIÓN DE LA PROCURADURÍA DE LA ADMINISTRACIÓN

La señora Procuradora de la Administración, en su Vista Fiscal N° 204 de 19 de mayo de 1995, se opuso a las pretensiones de las demandantes y señaló lo siguiente:

> "Nos oponemos al planteamiento del actor de que esta disposición indica, que cuando se refiere a "Segunda Partida del Décimo Tercer Mes", debe entenderse la misma como la Partida Completa y por tanto la Caja de Seguro Social no debe cobrar parte o porción de ella. Este concepto es totalmente ajeno a la realidad jurídica, puesto que la actuación de la Caja de Seguro Social se fundamentó en la Ley 14 de 1954, modificado por la Ley 30 de 26 de diciembre de 1991, cuyo literal M) incluyó entre los ingresos de la Caja: "Las cantidades correspondientes a la Segunda Partida del Décimo Tercer Mes que serán pagadas por los empleadores particulares y por el Estado, las cuales serán destinadas exclusivamente para el Programa de Vejez, Invalidez y Muerte"." (Fs. 134).

V. OPINIÓN DE LA SALA

Mediante la referida ley 20 de 1992, se sustrajo del presupuesto de la Caja de Seguro Social las sumas correspondientes a la segunda partida del décimo tercer mes, por lo que la nueva ley creó una renta sustitutiva de dichos ingresos aumentando en un 2% o más anual, los intereses que el Estado paga a la Caja de Seguro Social, por las obligaciones contraídas con dicha institución.

Dichos ingresos sustitutivos están establecidos por el artículo 3 de la Ley 20 de 1992, que a la letra dice:

> **"ARTÍCULO 3.** Las obligaciones del Estado contraídas en favor de la Caja de Seguro Social que consten en bonos, pagarés u otros valores similares, devengarán un interés de dos por ciento (2%) o más anual adicional a los intereses que actualmente paga el Estado. La suma total que estos intereses devengan, en ningún caso, serán inferiores a la suma de veinte punto cinco (20.5) millones al año.
>
> Mientras el Estado pague a la Caja de Seguro Social este dos por

ciento (2%) o más adicional, ésta no podrá negociar ni en cualquier otra forma traspasar dichos créditos."

En las actas de discusión en Segundo Debate de la Ley 20 de 1992, en el Pleno de la Asamblea Legislativa, se propuso el siguiente artículo: "Esta ley es de orden público, entrará en vigencia a partir del 14 de agosto de 1992 y tendrá efecto retroactivo desde el 1° de enero de 1992 para la aplicación del Artículo 4" (que pasó a ser el artículo 3 de la Ley 20 de 1992), con la finalidad de crear el efecto retroactivo a partir del 1° de enero de 1992 sobre el 2% de la deuda documentada y no documentada que tiene el Estado con la Caja de Seguro Social.

Dicha propuesta fue retirada en virtud de que se consideró que este artículo como fue propuesto, crearía nuevas erogaciones al Estado, que provocarían el veto de la Ley por parte del Presidente (Pág. 71 de las Actas de discusión en Segundo Debate de la Ley 20 de 1992, en el Pleno de la Asamblea Legislativa el 11 de agosto de 1992).

De lo anterior se desprende claramente que la intención del legislador fue que la Ley 20 de 1992 gravara la deuda del Estado con la Caja de Seguro Social, con un 2% o más adicional a los intereses ya establecidos, desde el 14 de agosto de 1992 y no antes, para así evitar el veto de la misma por parte del Ejecutivo. Como la Caja de Seguro Social no recibiría este ingreso del Estado antes del 14 de agosto de 1992, no podía dejar de percibir el dinero pagado en concepto de segunda partida del décimo tercer mes antes de dicha fecha.

Es por lo expresado que la Sala considera que aunque el precitado artículo 8 de la Ley 20 de 12 de agosto de 1992, establece que dicha ley es de orden público, que comienza a regir desde su promulgación y tiene **efectos retroactivos** a partir del 14 de agosto de 1992, no existe tal efecto retroactivo, puesto que en su artículo primero señala que el pago de la segunda partida del décimo tercer mes debe hacerse a los trabajadores del sector público y privado a partir del 14 de agosto de 1992, ya que es el 15 de agosto cuando surge la obligación de pagar los dineros de la segunda partida del décimo tercer mes, que desde el mes de agosto de 1992 corresponde por mandato legal a los trabajadores. Por este motivo los dineros correspondientes a la segunda partida proporcional del décimo tercer mes, están regidos por el literal m) del artículo 24 de la Ley N° 30 de 26 de diciembre de 1991 y deben ser pagados a la Caja de Seguro Social. La obligación de pagar dicha prestación a los trabajadores surgió bajo el imperio de la nueva Ley 20 de 1992, a partir del 14 de agosto de 1992.

El literal m) de la Ley 30 de 26 de diciembre de 1991 estaba vigente y era aplicable a los pagos de la segunda partida del décimo tercer mes que debían hacerse antes del 14 de agosto de 1992, por tanto, es la norma aplicable al pago que las empresas Industrias El Torero, S. A., Transporte Ligo, S. A., Fincas Bremer, S. A. y Pollnet, S. A. debían hacer a la Caja de Seguro Social antes de la entrada en vigencia de la Ley 20 de 1992, tal como fue expuesto en la resoluciones acusadas de ilegales, emitidas por la Caja de Seguro Social el 29 de julio de 1993.

En mérito de lo expuesto esta Sala debe declarar que las Resoluciones N° 4966-93 SUB D. G. de 29 de julio de 1993, N° 4973-93 SUB D. G. de 29 de julio de 1993, N° 4958-93 SUB D. G. de 29 de julio de 1993 y N° 4965-93 de 29 de julio de 1993, y sus actos confirmatorios no violan los artículos 1, 7 y 8 de la Ley 20 de agosto de 1992, ni el literal m) del artículo 24 de la Ley 30 de 26 de diciembre de 1961, así como tampoco violaron el artículo 3 del Decreto de Gabinete 52 de 24 de febrero de 1972.

Por consiguiente, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO SON ILEGALES, la Resoluciones N° 4966-93 SUB D. G., N° 4973-93 SUB D. G., N° 4958-93 SUB D. G. y N° 4965-93 SUB D. G., de 29 de julio de 1993, sus actos confirmatorios emitidos por el Director General de la Caja de Seguro Social y por la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social respectivamente, y NIEGA las declaraciones pedidas por INDUSTRIAS EL TORERO, TRANSPORTE LIGO, S. A., FINCAS BREMER, S. A. y POLLNETT, S. A.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. CARLOS BONILLA EN REPRESENTACIÓN DE DEPORTES Y ZAFARIS, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL LA RESOLUCIÓN N° 6131-94 D. G. DE 30 DE MARZO DE 1994, DICTADA POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, EL ACTO CONFIRMATORIO DICTADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Carlos Bonilla, actuando en nombre y representación de la sociedad Deportes y Zafaris, S. A., interpuso ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia demanda contencioso-administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nulos, por ilegales, la Resolución N° 6131-94 D. G. de 30 de marzo de 1994 dictado por el señor Director General de la Caja de Seguro Social, y el acto confirmatorio dictado por la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, y para que se hagan otras declaraciones.

Conjuntamente con las pretensiones de la demanda el apoderado judicial de la parte actora solicita al Pleno de la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, que ordene la suspensión provisional de los efectos del acto impugnado en los siguientes términos:

> **"PETICIÓN ESPECIAL**: Solicitamos respetuosamente la suspensión provisional del acto impugnado como quiera que es precisamente a la Caja de Seguro Social quien debe hacerle frente a la responsabilidad del pago de las prestaciones a la Señora **MARÍA ELENA OSSES DE ROMERO**, en su condición de madre del causante **JULIO CÉSAR ROMERO OSSES**. "(F. 10).

El acto impugnado lo constituye la Resolución N° 6131-94 D. G. de 30 de marzo de 1994 por medio de la cual se condena a la sociedad Deportes y Zafaris, S. A., a pagar la suma de B/.36,000.00, en concepto del pago íntegro de las prestaciones resultantes del accidente de trabajo ocurrido al trabajador Julio César Romero Osses.

La Sala pasa examinar los argumentos planteados por la parte actora para decidir, conforme a derecho, si procede o no dicha solicitud de suspensión provisional.

El artículo 73 de la Ley 135 de 1943 faculta al Pleno de la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) para suspender los efectos del acto impugnado "si a su juicio ello es necesario para evitar un perjuicio notoriamente grave". Procede la Sala a analizar la gravedad del perjuicio acusado por el acto impugnado.

Observa la Sala que el demandante no detalla los perjuicios potenciales que sufriría, ni presentan pruebas acreditando la existencia de los mismos. La Sala Tercera (Contencioso Administrativa) ha sido clara y reiterativa en establecer la necesidad de que la parte actora alegue y compruebe que el posible perjuicio sea notoriamente grave e irreparable.

En virtud de lo anteriormente expuesto, estima la Sala que no debe accederse a la petición antes mencionada.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ACCEDE a la solicitud de suspensión provisional de la Resolución N° 6131-94 D. G. de 30 de marzo de 1994 dictado por el señor Director General de la Caja de Seguro Social, y el acto confirmatorio dictado por la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, y para que se hagan otras declaraciones.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO EMILIO DE LEÓN LOKEE, EN REPRESENTACIÓN DE RUBÉN DARÍO RODRÍGUEZ, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL RESUELTO N° 022 DE 19 DE OCTUBRE DE 1994, EXPEDIDO POR EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA DE PANAMÁ (IDIAP), Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Lcdo. Emilio De León Lokee, actuando en representación de RUBÉN DARÍO RODRÍGUEZ, ha interpuesto demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción con el objeto de que se declare nulo por ilegal, el Resuelto N° 022 de 19 de octubre de 1994, expedido por el Director General del Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá (IDIAP), y para que se hagan otras declaraciones.

En la demanda se formula una pretensión contencioso administrativa consistente en una petición dirigida a la Sala Tercera para que ésta declare que es nulo por ilegal el Resuelto N° 022 de 19 de octubre de 1994, expedido por el Director General del Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá (IDIAP) mediante el cual se declara insubsistente su nombramiento; que se restablezca la vigencia del Resuelto de Personal N° 001 de 16 de febrero de 1990, expedido por el Director General del Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá que reintegra al Ing. Rubén Darío Rodríguez en el cargo de Ingeniero Agrónomo II, y también, que se restablezca la vigencia del Resuelto N° 006 de 16 de febrero de 1990, expedido por el Director General del Instituto de Investigación Agropecuaria (IDIAP) mediante el cual se nombró de manera permanente a su representado. Finalmente, y consecuencia de las anteriores declaraciones, se solicita que el Director General del Instituto de Investigación Agropecuaria (IDIAP) reintegre al Ing. Rubén Darío Rodríguez al cargo de Ingeniero Agrónomo II y se le paguen los sueldos dejados de percibir desde la fecha de destitución hasta el día en que efectivamente se le restituya.

El Director General del Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá, envió el respectivo informe explicativo de conducta mediante la Nota N° N-0146-95 de 21 marzo de 1995. En dicha nota, que reposa de fojas 45 a 46 del expediente, se expresa lo siguiente:

> "En efecto, Honorables Magistrados de nuestra Máxima Corporación de Justicia, mediante Resuelto N° 022 de 19 de octubre de 1994, quien suscribe DECLARO INSUBSISTENTE el nombramiento de RUBÉN RODRÍGUEZ, a partir del 21 de octubre de 1994. Contra esta decisión recurrió el afectado anunciando y sustentando Recurso de Reconsideración con Apelación en subsidio el día 28 de octubre del año reciente 1994.
>
> Por otro lado el día 20 de febrero de 1995, el Licdo. EMILIO DE LEÓN LOKEE, solicitó le certificara "QUE NO FUE DECIDIDO EL RECURSO DE

RECONSIDERACIÓN, CON APELACIÓN EN SUBSIDIO". Al respecto, debe comunicar que ninguna clase de documento, ya sea contestación a los recursos presentados o certificación de solicitada, ha sido posible entregársela o informar a los interesados, por cuanto que además de no llamar a la Institución para preguntar por el trámite de sus acciones legales, tampoco dejaron dirección o número de teléfono alguno donde pudiéramos localizarlos, ni siquiera la hoja membretada del Licdo. DE LEÓN cuenta con los datos expresados. Siendo así las cosas, cómo pretendían los Recurrentes que le hiciéramos llegar lo pedido.

Distinguidos Magistrados, esa es la verdad de los hechos y consideramos firmemente haber actuado dentro de los parámetros de la Ley en el trámite del negocio administrativo in-examine.

Finalmente, considera esta Dirección que el Resuelto impugnado N° 022 de 19 de octubre de 1994, está fundamentado en causales legales de destitución, por lo que la misma debe ser confirmada y surtir todos los efectos jurídicos-administrativos."

La parte demandante sostiene que es nulo el Resuelto N° 022 de 19 de octubre de 1994, toda vez que viola el artículo 10 de la Ley 22 de 1961, "Por el cual se dictan disposiciones relativas a la prestación de Servicios Profesionales en Ciencias Agrícolas"; el artículo 16 de la Ley 51 de 1975, "Por la cual se crea el Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá y se determina su organización y funciones"; y el artículo 18 literal a) del Reglamento Interno de Personal del IDIAP, en concordancia con el artículo 104 del mismo reglamento. Los anteriores artículos en su orden respectivo son del tenor siguiente:

"ARTÍCULO 10: Los profesionales idóneos al servicio del Estado solo podrán ser destituidos por razones de incompetencia física, moral o técnica. En cada caso particular, el Consejo Técnico Nacional de Agricultura hará las investigaciones necesarias para establecer la veracidad de los cargos, oyendo a las partes. El Consejo Técnico Nacional de Agricultura decidirá y solicitará lo conducente al Órgano Ejecutivo si se hubiere cometido infracción al presente artículo de esta Ley."

"ARTÍCULO 16: Las funciones de la Dirección General son las siguientes:

a. Servir de órgano ejecutor de todas las resoluciones y acuerdos de la Junta Directiva;

b. Elaborar el Plan Nacional de Investigación Agropecuaria y someterlo a consideración de la Junta Directiva para su aprobación;

c. Elaborar el Plan Nacional de Investigación Agropecuaria y someterlo a consideración de la Junta Directiva para su aprobación y ejecutarlo a través de los Centros de Experimentación Agropecuaria;

ch. Preparar el Reglamento Interno, que contenga toda la organización técnico-administrativa del Instituto, y someterlo a la aprobación de la Junta Directiva;

d. Proponer ante la Junta Directiva los convenios internacionales que considere convenientes a los intereses del Instituto;

e. Proponer ante la Junta Directiva, para su aprobación, la contratación de técnicos o expertos extranjeros que sean necesarios para el buen funcionamiento del Instituto;

f. Autorizar gastos que no excedan la suma de B/.50,000.00;

g. Representar legalmente al Instituto, en los casos que el Ministro

de Desarrollo Agropecuario, en su calidad de Presidente de la Junta Directiva, delegue su representación;

h. Nombrar, contratar, promover y resolver al personal administrativo y técnico del Instituto, de acuerdo a las disposiciones del Reglamento Interno; e

i. Ejercer cualesquiera otras funciones que le delegue la Junta Directiva o le señale el Reglamento Interno."

"ARTÍCULO 18: Los empleados al servicio del Instituto tendrán los siguientes derechos:

a. Estabilidad en el ejercicio del cargo, salvo los casos de remoción por causa determinada en la Ley y el Reglamento Interno, mediante el procedimiento que ésta y los reglamentos señalan al efecto ..."

"ARTÍCULO 104: Las destituciones y descensos de categoría serán hechas por la autoridad nominadora, una vez concluya la investigación sumaria y se comprueben los cargos imputados por cualesquiera de las siguientes causales:

a. La incapacidad o ineptitud del empleado para el cargo que desempeña,

b. La infracción reiterada de las obligaciones y prohibiciones impuestas en este Reglamento,

c. Haber sido condenado el empleado por falta cometida en el ejercicio de sus funciones,

d. Observar el empleado una conducta desordenada o incorrecta o ejecutar actos incompatibles con el decoro y dignidad de su cargo, en perjuicio del buen nombre del Instituto,

e. La inasistencia al trabajo durante tres (3) días consecutivos o más, sin causa justificada,

f. El suministrar datos o informes de carácter confidencial, sin la autorización respectiva."

La Sala pasa a continuación a examinar las infracciones que la parte demandante imputa al acto cuya declaratoria de nulidad demanda.

En cuanto al artículo 10 de la Ley 22 de 1961, estima la parte actora que ha sido violado de forma directa por comisión, dado que, en su opinión, es falso el cargo de incompetencia técnica utilizado para destituir a su representado, aunado al hecho de que se le desconoció el derecho que le asiste para que el Consejo Técnico de Agricultura investigara la veracidad del cargo imputado. En relación al artículo 16 de la Ley 51 de 1975, estima la parte actora que ha sido violado de manera directa por comisión, toda vez que el artículo en mención, no faculta al Director General del IDIAP a declarar insubsistente por supuestos motivos presupuestarios un nombramiento en dicha entidad. Con respecto al artículo 18 literal a) del Reglamento Interno de Personal del IDIAP en concordancia con el artículo 104 de la misma excerta legal, considera la parte demandante que igualmente han sido violados de manera directa por comisión, pues se desconoce el derecho a la estabilidad de su representado y al debido proceso que las mismas reconocen a los empleados del IDIAP, al destituir a su representado sin cumplirse el procedimiento previsto que exige una investigación sumaria previa y la comprobación de los cargos imputados bajo causales específicas de destitución. Finalmente, añade que en la parte resolutiva del acto impugnado, se expresa como causal de destitución "motivos presupuestarios" y ésta no está consignada en el antes citado artículo 104.

Por su parte, la Procuradora de la Administración contestó la demanda

mediante la Vista N° 155 de 18 de abril de 1995, visible de fojas 47 a 57 del expediente, en el que se opone a las pretensiones de la parte demandante por considerar que el acto acusado se ajusta a derecho. A criterio de la Procuradora de la Administración, en el considerando de la Resolución N° 022 de 19 de octubre de 1994 se expresa de forma clara la deficiencia en el desempeño de las funciones del señor Rubén Rodríguez en el cargo de investigador. A ello añade, que el artículo 104 del Resuelto N° R. I. P. V-02 de 23 de abril de 1980, que constituye el Reglamento Interno de la Institución, faculta a la autoridad nominadora para efectuar las destituciones y descensos y en este caso es el Director General del IDIAP. Por otro lado, la Procuradora de la Administración también afirma que el actor yerra en sus apreciaciones, toda vez que el derecho a la estabilidad no es absoluto, sino que está condicionado a la observancia de una buena conducta y eficiencia en el desempeño de las funciones encomendadas. Finalmente, la Procuradora de la Administración opina que tampoco se ha desconocido el debido proceso, dado que del proceso de investigación se coligen las deficiencias que sirven de fundamento para la destitución del cargo y que se encuentran debidamente explicadas en la parte motiva del Resuelto N° 022 de 19 de octubre de 1994, visible de fojas 1 a 2 del expediente.

En cuanto al artículo 10 de la Ley N° 22 de 1961 antes citado, vale destacar en primer lugar, que la palabra "solo" allí contenida, fue declarada inconstitucional por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia mediante sentencia de 28 de septiembre de 1984, dado que limita las causas de destitución o despido de los servidores públicos y excluye otras causales comunes de destitución surgidas de los deberes que la Constitución expresamente instituye como garantía mínima para el ejercicio eficiente de la función encomendada. En segundo lugar, y en cuanto a la violación directa alegada al artículo en referencia, coincide la Sala con los criterios expuestos por la parte actora, dado que, efectivamente, no obran en el expediente pruebas contundentes que demuestren a la Sala que se ha configurado la justa causa de destitución en que el Director General del Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá fundamentó la parte motiva del Resuelto N° 022 de 19 de octubre de 1994. Observa la Sala, que el artículo 10 de la Ley 22 de 1961, es claro al enunciar que los profesionales idóneos al servicio del Estado, podrán ser destituidos por razones de incompetencia física, moral o técnica. No obstante, aclara a fin de que lo anterior se configure, que en cada caso en particular el Consejo Técnico Nacional de Agricultura hará las investigaciones necesarias para establecer la veracidad de los cargos. Se trata, pues, de un servidor público con estabilidad en el empleo en razón de una Ley que expresamente la prevé.

En razón de lo antes anotado, estima la Sala que el acto acusado viola el artículo 10 de la Ley 22 de 1961 en forma directa, ya que mediante el mismo se destituyó al señor Rubén Rodríguez sin que se haya comprobado la causa invocada por la Administración que hace alusión a incompetencia y bajo rendimiento técnico. Por el contrario, obra en el expediente documentación relativa a la hoja de vida del señor Rodríguez conjuntamente con otra documentación allegada, entre la que se destaca la Resolución N° 10-95 de 7 de marzo de 1995, expedida por el Consejo Técnico Nacional de Agricultura que es visible a fojas 69 y 70 del expediente, en la que se resolvió el recurso de apelación interpuesto en uso de las facultades legales concedidas por el artículo 10 de la Ley N°22 de 30 de enero de 1961 y el artículo 15 del Decreto 265 de 24 de septiembre de 1968. Observa la Sala, que en la Resolución 10-95 el Consejo Técnico destaca que mediante nota fechada el 30 de diciembre de 1994, se le notificó al Director General del IDIAP sobre el recurso presentado a fin de que expresara las causas, motivos y pruebas que sustentan la medida contra el señor Rodríguez, sin que a la fecha de expedición de dicha resolución se obtuviera respuesta alguna. Mediante la resolución en mención, el Consejo Técnico Nacional de Agricultura ordena el reintegro del señor Rubén Darío Rodríguez al Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá y, además, solicita a la misma institución, reconsiderar el Resuelto N° 022 de 19 de octubre de 1994.

Finalmente, en cuanto a la violación que se le imputa al artículo 16 de la Ley 51 de 1975 y al artículo 18 literal a) en concordancia con el artículo 104 del Reglamento Interno de Personal del Instituto de Investigación Agropecuaria, la Sala se abstiene de efectuar un análisis de los mismos, dado que la ilegalidad del acto acusado ha sido efectivamente probada con la violación directa al

artículo 10 de la Ley 22 de 1961 alegado por la parte actora como infringido.

Debe, pues, la Sala acceder a las pretensiones de la parte demandante con exclusión al pago de los salarios dejados de percibir, pues, la regla general es que un servidor público sólo tiene derecho a percibir salarios como retribución al trabajo efectivo, salvo los casos en que la ley disponga expresamente lo contrario como en los eventos de enfermedad o licencia remunerada, que no sucede en este caso.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley DECLARA que es nulo por ilegal el Resuelto N° 022 de 19 de octubre de 1994, expedido por el Director General del Instituto de Investigación Agropecuaria (IDIAP) mediante el cual se declara insubsistente el nombramiento del Ing. RUBÉN DARÍO RODRÍGUEZ y SE ORDENA restablecer la vigencia del Resuelto de Personal N° 001 de 16 de febrero de 1990, expedido por el Director General del Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá en lo que respecta al reintegro del Ing. RUBÉN DARÍO RODRÍGUEZ en el cargo de Ingeniero Agrónomo II; restablecer la vigencia del Resuelto N° 006 de 16 de febrero de 1990, expedido por el Director General del Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá (IDIAP) mediante el cual se nombró de manera permanente al Ing. RUBÉN DARÍO RODRÍGUEZ en el cargo de Ingeniero Agrónomo II; e igualmente ordena al Director General del Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá (IDIAP) reintegre al Ing. RUBÉN DARÍO RODRÍGUEZ al cargo de Ingeniero Agrónomo II en dicha institución.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.)
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA ALEMÁN, CORDERO, GALINDO Y LEE, EN REPRESENTACIÓN DE MISTER POLLO, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LAS RESOLUCIONES N° 213-702 DE 9 DE MARZO DE 1992 Y 213-5118 DE 10 DE JULIO DE 1992, EMITIDAS POR EL ADMINISTRADOR REGIONAL DE INGRESOS DE LA PROVINCIA DE PANAMÁ, Y LA RESOLUCIÓN N° 205-045 DE 18 DE JULIO DE 1994, EXPEDIDA POR LA COMISIÓN DE APELACIONES DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y TESORO, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La sociedad denominada Mister Pollo, S. A., ha presentado, por intermedio de su apoderado judicial especial, la firma de abogados Alemán, Cordero, Galindo & Lee, demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción contra la Administración Regional de Ingresos de la Provincia de Panamá.

En la demanda se formula pretensión consistente en petición dirigida a la Sala Tercera para que sean declaradas ilegales y por lo tanto nulas, las resoluciones N° 213-702 de 9 de marzo de 1992 y N° 213-5118 de 10 de julio de 1992, ambas emitidas por la Administración Regional de Ingresos de la Provincia de Panamá, y la Resolución N° 205-045 de 18 de julio de 1994 emitida por la Comisión de Apelaciones de la Dirección General de Ingresos y se hagan otras declaraciones.

Alega la parte demandante que mediante la Resolución N° 213-702 de 9 de marzo de 1990, la Administración Regional de Ingresos le expidió liquidación adicional por deficiencias en las Declaraciones Juradas de Renta de los años de 1988, 1989 y 1990 que corresponde a la suma B/.5,988.64, B/.1,377.22 y B/.12,270.91 respectivamente.

Como normas violadas se señalan los artículos 697 del Código Fiscal, 29 del Decreto N° 60 de 28 de Junio de 1965 y el artículo 181 del decreto Ejecutivo 170 de 27 de octubre de 1993.

Con relación a los cargos frente al artículo 697 del Código Fiscal y al artículo 29 del Decreto Ejecutivo, ambos se estudiarán en su conjunto pues ambas tratan sobre lo mismo y es que la Dirección Regional de Ingresos prorrateó la deducción del impuesto entre dos compañías cuando ninguna norma en nuestro ordenamiento fiscal lo permite.

El Administrador Regional de Ingresos de la Provincia de Panamá rindió su informe de conducta mediante la Nota N° 213-563 de 28 de julio de 1992. En ésta, en su parte pertinente, señala lo siguiente:

> "Al respecto este despacho al dictar la resolución consideró que las sociedades **MISTER POLLO, S. A. y POLLOS CINCUENTA, S. A.** son dos personas jurídicas, afiliadas, que tienen los mismos suscriptores, explotan la misma actividad económica y que utilizan el mismo nombre comercial de: **MISTER POLLO**, no describiéndose al contribuyente en particular al hacerse los anuncios publicitarios.
>
> En vista de lo anterior se procedió al prorrateo del gasto incurrido en base a las ventas de cada contribuyente (MISTER POLLO, S. A. y POLLOS CINCUENTA, S. A.).
>
> Esta Administración pudo observar que las facturas de publicidad están a nombre de **MISTER POLLO, S. A.** y fueron pagadas por ésta; no es menos cierto que ambas empresas utilicen el nombre comercial MISTER POLLO en los anuncios eléctricos, casos, servilletas y no su razón social, lo que nos llevó a la conclusión de que ambas sociedades se benefician con la citada publicidad, razón por la cual se prorrateó el gasto en base a las ventas de cada contribuyente, con fundamento en los principios de contabilidad generalmente aceptados y el cuarto párrafo del Artículo 29 del Decreto 60 de 28 de junio de 1965 que se refiere a los gastos y erogaciones deducibles, el cual fue aplicado en este caso y que dice que a falta de comprobantes y contabilidad del contribuyente o en el caso de que la contabilidad no reflejara un resultado acorde con la realidad o por cualquier motivo las proporciones no pudieran determinarse con claridad según tales comprobantes, la porción deducible se establecerá proporcionalmente a los ingresos totales de ambos tipos de rentas.
>
> Del análisis resulta que los gastos de publicidad se le cargaron a la sociedad **MISTER POLLO, S. A.** y no **POLLOS CINCUENTA, S. A.**, porque ésta última tuvo pérdidas o crédito fiscal, tal y como consta en áudito simultáneo realizado a ambas sociedades, lo que trajo como consecuencia de la deducibilidad de la primera empresa sube, a la vez que baja el Impuesto sobre la renta que debe pagar, siendo esto el problema y no otro.
>
> En tal sentido se resolvió mantener en todas sus partes la resolución 213-702 de 9 de marzo de 1992 dictada por esta Administración Regional de Ingresos de la Provincia de Panamá."

Por su parte, la Procuradora de la Administración contestó la demanda mediante la Vista N° 78 de 16 de febrero de 1995. Dicha funcionaria se opone a las pretensiones de la parte demandante pues considera que la resolución impugnada se fundamenta en las normas legales que regulan la materia y, al igual que el funcionario de instrucción, se fundamentó para emitir su criterio en el párrafo cuarto del artículo 29, del Capítulo II sobre Gastos y Erogaciones Deducibles, Título II, del Decreto N° 60 del 28 de junio de 1965, por el cual se reglamentan las disposiciones del Impuesto sobre la Renta, y señala lo siguiente:

> "Aunado a lo anterior, como puede colegirse del párrafo cuarto del

> artículo 29 en comento, cuando por cualquier motivo no pueda establecerse con exactitud la proporción respectiva de los gastos de cada contribuyente en relación con una renta gravable y una renta exenta, procede hacer un prorrateó en base a los ingresos totales de ambas rentas, a fin de determinar la porción deducible. De esta operación resultó que la Administración Regional de Ingresos de la Provincia de Panamá resolviera que la empresa Mister Pollo, S. A., sólo pueda deducirse el 54% de los gastos efectivamente incurridos por ella en la publicidad de la marca de comercio "MISTER POLLO" para los años de 1988 a 1990, en tanto que la empresa Pollos Cincuenta S. A. sólo esta autorizada par deducirse el 46% de dicho gasto (véanse los respectivos cuadros, visibles de la foja 2 a la foja 6 inclusive, contenidos en la Resolución 213-702 del 9 de marzo de 1992."

No concordamos con lo anteriormente expuesto, pues todo parece indicar que tanto la Procuradora de la Administración como el funcionario de instrucción, confunden el significado de la norma, pues cuando el artículo 29 se refiere a "la porción deducible se establecerá proporcionalmente a los ingresos totales de ambos tipos de rentas" se trata de los diferentes tipos de renta generada por una misma empresa, los cuales, unos está sujeta al impuesto sobre la renta y otros no, como son las rentas obtenidas en el territorio nacional y las obtenidas en el extranjero y estas puedan estar exentas.

El artículo 29 del Decreto 60 de 1965 no trata sobre la posibilidad de prorratear los gastos deducibles de la renta entre dos empresas cuando el fisco considere que es lógico y razonable o en base a los principios de contabilidad. Este artículo le permite al fisco prorratear los gastos deducibles del impuesto sobre la renta cuando una misma empresa obtiene ingresos de diferentes fuentes, ya sea localmente o del extranjero, e incurre en gastos o erogaciones para obtener ingresos de dichas fuentes, y por uno u otro motivo éstas rentas están exentas del pago impuesto de la renta. En otras palabras, prevé la tesis, en que una empresa que genere diferentes tipos de ingresos, locales y de fuente extranjera o que estén exentos, no puede pretender la empresa sumar los gastos que no generan pago de impuestos a los gastos que sí producen una renta gravable, como lo es la generada dentro del territorio nacional.

Por lo tanto, si la Dirección General de Ingresos se fundamentó en el artículo 29 del Decreto Ejecutivo 60 de 1965, para prorratear los gastos deducibles incurridos en una empresa con otra empresa, se debe señalar que la norma no contempla esta situación y por ende la Sala concuerda con el demandante en el sentido de que no existe norma alguna que faculte a la Dirección General de Ingresos para prorratear los gastos de publicidad en que incurre un contribuyente con otros contribuyente aún cuando dicha publicidad trate de marcas utilizadas en común o beneficie a ambos.

En el presente caso y en base a lo anteriormente expuesto, encontramos que no podemos aceptar que los gastos deducibles por Mister Pollo, S. A. sean prorrateados con Pollos Cincuenta, S. A., por el hecho de que los gastos de publicidad inciden directamente en la producción y conservación de la renta de Pollos Cincuenta, S. A.

Referente a la violación en forma directa del artículo 181 del Decreto Ejecutivo 170 de 27 de octubre de 1993 al declarar improcedente el recurso de apelación y no se discutió sobre el fondo de la demanda, consideramos que el recurso de apelación se ajustó a lo que establecen las disposiciones legales, pues se observa que este recurso fue interpuesto por el apelante al momento de notificarse de la resolución original, a la vez con el de reconsideración. Allí se anunció que se apelaba en subsidio. Posteriormente fue sustentado el recurso de apelación oportunamente, como consta y se encuentra a fojas 49 a 52 del expediente administrativo. Además, no debe perderse de vista que los precedentes señalados, tanto por el funcionario administrativo como la Procuradora de la Administración, han sido sentencias dictadas por esta Corporación de Justicia cuando estamos ante un recurso contencioso administrativo presentado ante esta Sala contra los actos confirmatorios y no el acto original, hipótesis en que no se cumplen los requisitos exigidos en el artículo 42 de la Ley 33 de 1946.

Por todas las razones anteriormente expuestas, consideramos que debemos acceder a las pretensiones del actor.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA que SON ILEGALES las resoluciones N° -213-702 de 9 de marzo de 1992 y N° 213-5118 de 10 de julio de 1992, ambas dictadas por la Administración Regional de Ingresos de la Provincia de Panamá del Ministerio de Hacienda y Tesoro y la Resolución N°205-045 de 18 de julio de 1994 proferida por la Comisión de Apelaciones de la Dirección General de ingresos del Ministerio de Hacienda y Tesoro y por lo tanto ORDENA que se le devuelva a la empresa denominada MISTER POLLO, S. A., la suma la suma consignada en calidad de depósito para acudir a la vía contencioso administrativa que ascienda a la cantidad de B/.29,141.00.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA ICAZA, GONZÁLEZ RUÍZ Y ALEMÁN, EN REPRESENTACIÓN DE INDUSTRIA NACIONAL DE PLÁSTICOS, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 213-8451 DE 14 DE JULIO DE 1986, LA N° 213-13930 DE 24 DE NOVIEMBRE DE 1986, DICTADAS POR LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE INGRESOS DE LA PROVINCIA DE PANAMÁ; Y, LA N° 205-25 DE 29 DE MAYO DE 1987, DICTADA POR LA COMISIÓN DE APELACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y TESORO. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Magistrado **JORGE FÁBREGA** ha presentado solicitud para que se le declare impedido y en consecuencia se le separe del conocimiento de la demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción interpuesta por la firma ICAZA, GONZÁLEZ-RUIZ Y ALEMÁN en representación de **INDUSTRIAL NACIONAL DE PLÁSTICOS, S. A.**, para que se declare nula por ilegal, la Resolución N° 213-8451 de 14 de julio de 1986, la nota N° 213-13930 de 24 de noviembre de la Provincia de Panamá; y la N° 205-25 De 29 de mayo de 1987, dictada por la Comisión de Apelaciones de la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Hacienda y Tesoro.

El Magistrado **FÁBREGA** para fundar su solicitud de impedimento sostiene de manera escueta que "tiene pleito pendiente" con la firma demandante, causal de impedimento contemplada en el artículo 749 ordinal 11 del Código Judicial.

Esta Superioridad, al considerar la solicitud de impedimento del Magistrado **JORGE FÁBREGA** debe señalar en primer término, que no se ha precisado la circunstancia de si el pleito pendiente al que hace alusión el juzgador es de carácter personal entre el letrado y la firma forense en cuestión, o si se trata de una situación que se produce en el curso corriente de sus actividades como abogado en ejercicio de la profesión, al ostentar la representación judicial en algún proceso de una parte contraria a ICAZA, GONZÁLEZ-RUIZ Y ALEMÁN.

Cualquiera que fuese la situación, estas circunstancias fácticas se encuentran excluidas de las causales especiales de impedimento que para esta clase de procesos prevé el artículo 78 de la Ley 135 de 1943, cuya aplicación prima sobre la causal general invocada por el Magistrado **FÁBREGA** para fundar su solicitud de impedimento, esto es el artículo 749 numeral 11 del Código Judicial, por lo que no es dable acceder a la petición presentada.

En consecuencia, el resto de los Magistrados de la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES LEGAL el impedimento manifestado por el Magistrado JORGE FÁBREGA para conocer de la demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción, interpuesta por la firma ICAZA, GONZÁLEZ-RUIZ Y ALEMÁN, en representación de INDUSTRIAL NACIONAL DE PLÁSTICOS, S. A., para que se declare nula por ilegal, la Resolución N° 213-8451 de 14 de julio de 1986, la nota N° 213-13930 de 24 de noviembre de la provincia de Panamá; y la N° 205-25 de 29 de mayo de 1987, dictada por la Comisión de Apelaciones de la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Hacienda y Tesoro, y DISPONE que continúe conociendo del referido negocio.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR LA FIRMA AROSEMENA, NORIEGA Y CONTRERAS, EN REPRESENTACIÓN DE JOSÉ AROSEMENA GUERRERO, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL ACTO ADMINISTRATIVO CONTENIDO EN LA NOTA N° DNPE 048-93 DE 24 DE MARZO DE 1993, PROFERIDA POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, LA NEGATIVA TÁCITA POR SILENCIO ADMINISTRATIVO AL NO RESOLVER EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN CON APELACIÓN EN SUBSIDIO, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma forense **AROSEMENA, NORIEGA & CONTRERAS**, en representación de **JOSÉ AROSEMENA GUERRERO**, ha presentado demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción para que se declare nula, por ilegal, la Nota N° DNPE 048-93 de 24 de marzo de 1993, proferida por el Director General de la Caja de Seguro Social, la negativa tácita por silencio administrativo al no resolver el recurso de reconsideración con apelación en subsidio, y para que se hagan otras declaraciones.

PRETENSIONES DE LA PARTE ACTORA

Con la presente acción el apoderado judicial de la parte actora solicita a esta Superioridad que se declare la nulidad, por ilegal, del acto administrativo contenido en la Nota N° DNPE 048-93 de 24 de marzo de 1993, mediante la cual se negó el pago de sumas retroactivas reclamadas con motivo de la pensión de vejez anticipada que le fuera reconocida a su representado el señor AROSEMENA GUERRERO por la Resolución N° C. de P. 7661 de 10 de mayo de 1991, con la consecuente declaración de que se reconozcan y ordene a pagar a la Caja de Seguro Social al recurrente la suma de ONCE MIL QUINIENTOS SIETE BALBOAS CON DIEZ CENTÉSIMOS (B/.11,507.10), en concepto de vejez anticipada retroactiva desde el 15 de septiembre de 1989, hasta el 28 de febrero de 1991, correspondiente a treinta (30) quincenas retroactivas no pagadas, sumas a las que tiene derecho por razón de que le fueron reconocidas en la Resolución N° C. de P. 7661 de 10 de mayo de 1991.

LOS HECHOS Y OMISIONES FUNDAMENTALES DE LA PRESENTE ACCIÓN

Las pretensiones del recurrente se fundamentan en los siguientes hechos:

Que el día 12 de abril de 1989, el señor **JOSÉ AROSEMENA GUERRERO** nacido el 21 de junio de 1934, solicitó ante la instancia correspondiente de la Caja de Seguro Social el reconocimiento de su pensión por riesgo de vejez anticipada, ya

que el día 21 de junio de 1989, cumpliría con el requisito de edad para tener derecho a la pensión solicitada. Que en cumplimiento de las normas contenidas en el Decreto- Ley N° 14 de 27 de agosto de 1954, y el artículo 2 del Reglamento para el Cálculo de Pensiones de Vejez, Invalidez y Muerte, que regulaban la materia en ese momento, aportó el día 11 de septiembre de 1989, constancia del cese de labores, en el cual se hizo constar que el último día de la relación laboral, que tenía al momento de solicitar la prestación, trabajado y pagado fue el 30 de junio de 1989, día en que renunció y el patrono aceptó la renuncia.

Que luego del cumplimiento de los anteriores requisitos legales y reglamentarios para el reconocimiento del derecho a su prestación por vejez anticipada, y dada la inexistencia de prohibiciones al derecho constitucional de trabajar, el señor **AROSEMENA GUERRERO** suscribió el día 15 de julio de 1989, 15 días después de haber terminado la relación laboral por renuncia, un nuevo contrato con su anterior empleador, en concepto de servicios profesionales, con atribuciones de mera asesoría y con una remuneración distinta, surgiendo así una nueva relación laboral.

Posteriormente, añade el recurrente que la Comisión de Prestaciones Económicas de la Caja de Seguro Social mediante Resolución N° C. de P. 7661 de 10 de mayo de 1991, reconoció al señor **AROSEMENA GUERRERO** la pensión de vejez anticipada solicitada por la suma de B/.823.00, la cual según la propia resolución, entraría en vigencia a partir de la presentación del cese de labores, documento que fuera presentado el día 11 de septiembre de 1989, por lo que el pago de la prestación debió hacerse a partir del 11 de septiembre de 1989. Pese a ello, agrega el demandante que los funcionarios de la Caja de Seguro Social exigieron, para iniciar los pagos de la referida pensión, que el asegurado **AROSEMENA GUERRERO** presentara una segunda constancia de cese de labores de la nueva relación iniciada, luego del cumplimiento de todos los requisitos que exigió la Caja de Seguro Social. Ante esta situación, sostiene el recurrente que el 1° de marzo de 1991, presentó ante dicha institución de seguridad social una segunda constancia de cese de labores. Sin embargo, al momento en que recibió su primer pago de Pensión de Vejez Anticipada, solamente se le pagó la remuneración retroactiva desde marzo de 1991, que fue la fecha de entrega del segundo cese de labores hasta el momento en que inició el pago de la prestación, no así el pago retroactivo desde septiembre de 1989, que fue cuando entregó inicialmente la constancia de cese de labores con los requisitos correspondientes, desconociéndose hasta la fecha, el pago de las sumas correspondientes al período que va entre la presentación del cese de labores y esta primera fecha de pago, hecho que a su juicio, contraviene claramente el contenido de la precitada Resolución 7661, y las mas elementales disposiciones de seguridad social sobre esta materia y el principio de estricta legalidad.

Según el representante legal de la parte actora, a su mandante le corresponde la suma de B/.11,507.10, equivalentes a 30 quincenas retroactivas no pagadas, sumas a las que tiene derecho porque le han sido reconocidas en la Resolución N° C. de P. 7661 de 10 de mayo de 1991.

INFORME DE CONDUCTA DE LA ENTIDAD DEMANDADA

La entidad de seguridad social mediante su informe de conducta, legible a fs. 46-51, procedió a indicar su actuación básicamente, en los siguientes términos:

> "... Es menester indicar señor Magistrado que la inconformidad manifestada por el señor JOSÉ AROSEMENA GUERRERO contra la actuación de la Caja de Seguro Social, surge en virtud de la incorrecta apreciación que le da a un documento carente de todo valor jurídico, el cual pasamos a explicar.
>
> Como bien se ha indicado en párrafos anteriores, el señor JOSÉ AROSEMENA GUERRERO, presentó el día 12 de abril de 1989, escrito solicitando se reconociera a su favor una pensión de vejez anticipada.

> Posterior a ello y sin que existiera requerimiento por parte de la Caja de Seguro Social, se adjuntó al expediente a insistencia del asegurado un formulario de los utilizados para presentar los cese de labores, el cual no cumple con los aspectos formales exigidos por la Institución para acreditar la extinción de la relación de trabajo, a efectos de iniciar el pago de la pensión de vejez.
> ...
> La fundada pretensión del señor JOSÉ AROSEMENA GUERRERO, consiste en que a juicio suyo, para efecto del pago de su pensión de vejez anticipada, la Caja de Seguro Social desestime el cese de labores presentado el 11 de junio de 1991, expedido con todas las formalidades legales, y considere para dichos efectos el formulario que carece de todo valor legal que aparece a foja (4) del expediente.
>
> Este último documento huérfano de base legal para generar algún efecto, tampoco tuvo incidencia sobre la conducta laboral del asegurado, puesto que, como lo refleja la cuenta individual del señor JOSÉ AROSEMENA GUERRERO, el mismo continuó cotizando de manera ininterrumpida con el patrono ESTACIÓN PAITILLA, S. A. desde la fecha en que formalizó la solicitud el 10 de abril de 1989 hasta el mes de febrero de 1991."

OPINIÓN DE LA PROCURADORA DE LA ADMINISTRACIÓN

La señora Procuradora de la Administración mediante Vista Fiscal N° 331 de 7 de agosto de 1995, que reposa a fs. 54-69, se opuso a las pretensiones del recurrente argumentando medularmente, que la Caja de Seguro Social mediante Resolución N° C. de P. 7661 de 19 de mayo de 1991, sí reconoció a favor del señor JOSÉ AROSEMENA GUERRERO una pensión de vejez anticipada por la suma mensual de B/.823.10, a partir del cese de labores, y que el hecho de que no se tome en cuenta el primer documento presentado e identificado como certificado de cese de labores, no implica un desconocimiento por parte de la institución de seguridad social, al derecho adquirido del demandante a que se le paguen sus prestaciones a partir de la fecha de aceptación de la renuncia. En este caso, agrega la precitada funcionaria, no se trata de negarle los derechos de jubilación, derecho a laborar, ni mucho menos el derecho al cobro de su prestación, sino la inconformidad por parte del recurrente con el período desde el que se empieza a contar, con el fin de realizar el pago retroactivo.

EXAMEN DEL CASO. ARGUMENTOS DE LA PARTE ACTORA

Cumplidos los trámites legales instituidos para este tipo de proceso, la Sala procede a externar las siguientes consideraciones finales en torno a la controversia.

Se estima que el acto acusado de ilegal, ha infringido el artículo 50 del Decreto-Ley N° 14 de 27 de agosto de 1994, que era el vigente para la época de la resolución, cuyo tenor era el siguiente:

> **Artículo 50:** La pensión de vejez tiene como finalidad de reemplazar dentro de ciertos límites los sueldos o salarios que deja de percibir el asegurado al retirarse de la ocupación que desempeña.
>
> Para tener derecho a la pensión de vejez, se requiere:
>
> a) Haber cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad las mujeres y sesenta (60) los hombres.
> b) Haber acreditado por lo menos ciento ochenta (180) meses de cotizaciones."

Según el recurrente, la precitada disposición legal ha sido infringida en el concepto de violación directa, por omisión, ya que al ser la finalidad de la pensión de vejez asegurar, bajo ciertos parámetros y limitaciones, que la persona retirada de la vida activa cuente con algunos medios económicos que reemplacen los sueldos o salarios que deja de percibir de la ocupación que desempeñaba hasta ese momento, consecuentemente, al negarse el pago de sumas retroactivas

reclamadas, implica el desconocimiento de tan elemental principio, y por tanto, de dicha disposición.

También se consideran infringidos los artículos 51 y los dos primeros párrafos del Artículo 54-A del Decreto-Ley 14 de 1954, vigentes en aquella época, que establecían:

> "**Artículo 51:** El pago de la Pensión de Vejez se iniciará a partir de la fecha en que el asegurado formule la solicitud respectiva y cumpla con las condiciones establecidas en el artículo 50."
>
> "**Artículo 54-A:** Se establece el régimen de pensiones anticipadas para los asegurados que tengan acreditados por lo menos, ciento ochenta (180) meses de cotizaciones.
>
> La pensión anticipada se podrá conceder a los hombres que hayan cumplido por lo menos cincuenta y cinco (55) años de edad o a las mujeres que hayan cumplido por lo menos, cincuenta (50) años de edad."

Sostiene el apoderado legal de la parte demandante que la infracción de tales normas, consiste en que al ser analizadas concordantemente, el inicio del pago de la Pensión de Vejez debe efectuarse "a partir de la fecha en que el asegurado formule la solicitud respectiva y cumpla con las condiciones establecidas en el artículo 50". Según lo manifestado por el representante legal del recurrente, esta situación explica que la pretensión en el presente proceso, sea el reconocimiento y pago de sumas retroactivas dejadas de pagar en concepto de la pensión de Vejez Anticipada reconocida a su representado, ya que desde el 11 de septiembre de 1989, había cumplido con todos los requisitos, y no necesitaba presentar otro cese de labores por las relaciones de trabajo o profesionales que tuvo que mantener para subsistir desde el 12 de abril de 1989, fecha en que presentó la solicitud, hasta el 1 de marzo de 1991, que fue la fecha en que se inició el pago de la pensión.

Aunado a lo expuesto, también sostiene el recurrente que la exigencia por parte de la Caja de Seguro Social de presentar otros cese de labores adicionales, a los efectos de obtener el pago de la pensión de vejez anticipada no establecido en ley alguna, pugna con el principio de legalidad, y además restringiría el derecho de trabajar constitucionalmente reconocido.

MOTIVACIONES DEL TRIBUNAL

A juicio de esta Superioridad no se ha dado la violación endilgada al Artículo 50 del Decreto-Ley 14 de 1954, en virtud de que esta disposición legal alude al derecho de pensión de vejez otorgable a los varones mayores de 60 años y las mujeres mayores de 55 años que además, hubiesen acreditado un mínimo de ciento ochenta (180) meses de cotizaciones, y no es de aplicación a la situación del recurrente cuyas pretensiones se basan en el desconocimiento por parte de la institución de seguridad social de hacer efectivo el pago retroactivo de la pensión de vejez anticipada, al que alega tiene derecho.

Tal aseveración se desprende de las constancias procesales aportadas al presente proceso, en las que claramente se constata que el señor **AROSEMENA GUERRERO**, solicitó el día 12 de abril de 1989, ante la Comisión de Prestaciones Económicas de la Caja de Seguro Social, la prestación de **Vejez Anticipada** (ver f. 1 del exp. adm.). Dicha prestación efectivamente, le fue reconocida mediante la Resolución N° C. de P. 7661 de 10 de mayo de 1991, (foja 42 del exp. gub.), en virtud de que cumplía con los requisitos legales que regulaban la materia en cuanto a edad y cotizaciones, es decir, que poseía la edad requerida para concederle la jubilación anticipada (55 años), y que a la fecha en que solicitó la referida prestación, tenía acreditadas más de 180 cotizaciones.

De lo expuesto, se infiere entonces que el reconocimiento de la pensión de vejez anticipada al recurrente, se dio en base al artículo 54-A, y no al artículo 50, ambos, del Decreto-Ley 17 de 1954. Por tanto, mal podría darse la infracción

de el precitado artículo, por lo que no prospera el presente cargo de violación.

En lo que concierne a la violación de los artículos 54-A y el 51 del Decreto-Ley 17 de 1954, la Sala considera que efectivamente, las mismas sí han sido objeto de transgresión por parte de la institución de seguridad social, en atención a lo siguiente:

Según la entidad demandada, el pago de la pensión de vejez anticipada del señor **AROSEMENA GUERRERO** se dio en razón de que el primero de los dos formularios de los cese de labores que éste hizo llegar a dicha entidad, de fecha 20 de julio de 1989, (Ver f. 4), no cumplía con los requisitos establecidos en el artículo 222 del Código de Trabajo en los caso de terminación de la relación de trabajo por renuncia, esto es, no reflejaba acuso de recibo, ni tampoco constancia de haber sido ratificado por las autoridades de trabajo.

A juicio de este Tribunal, carece de fundamento la aplicación por parte de la entidad demandada, del artículo 222 de Código de Trabajo, a la situación del señor **JOSÉ AROSEMENA GUERRERO**, ya que lo que esta norma regula es la intervención por parte de la autoridad administrativa de trabajo en las notificaciones previas que hace el trabajador al empleador en los casos en que renuncia, sin causa justificada, a los efectos de que pueda ser invocada posteriormente por el empleador en un juicio de carácter laboral, con el objeto de percibir una indemnización por razón de la responsabilidad del trabajador de no realizar la notificación previa.

Por consiguiente, al no ser de aplicación el artículo 222 del Código de Trabajo al presente caso, se pone de manifiesto que el pago de la pensión de vejez anticipada la cual fuera reconocida mediante Resolución N° C. de P. de 10 de mayo de 1991, al señor **AROSEMENA GUERRERO** debió efectuarse, tal y como se estableció en dicha Resolución, **a partir de la fecha de la presentación del cese de labores**. Según reposa a f. 4 del exp. gub., así como también a f. 2 del exp. contencioso, la fecha de presentación del cese de labores ante dicha institución, se efectuó el día 11 de septiembre de 1989, y no partir del 1° de marzo de 1991, como alega la referida entidad de seguridad social. De esta manera se le da fiel cumplimiento al supracitado Artículo 50 del Decreto-Ley 17 de 1954, en concordancia con lo dispuesto en el Artículo 2 del Reglamento para el Cálculo de las Pensiones de Vejez, Invalidez y Muerte que Otorga la Caja de Seguro Social, cuyo texto legal reproducimos a continuación, para mayor ilustración:

> "Artículo 2°: Las pensiones de vejez se pagarán a partir de la fecha de solicitud, siempre y cuando el asegurado cumpla con los requisitos que establece la Ley Orgánica. Sin embargo, a fin de que el asegurado pueda recibir el primer pago en una fecha cercana a la del retiro, se le faculta para presentar su solicitud por adelantado, dentro de un plazo no mayor de tres meses a la fecha de retiro que él voluntariamente señale. A estos últimos efectos, se considerará como fecha de solicitud la fecha de retiro señalada por el asegurado en el formulario respectivo, y el pago se realizará a partir de esta fecha." (Lo resaltado es de la Sala).

Dado que a la fecha en que presentara el cese de labores ante la entidad demandada, el 11 de septiembre de 1989, el señor **AROSEMENA GUERRERO**, había cumplido los 55 años de edad y había acreditado más de 180 cotizaciones pagadas a la Caja de Seguro Social, a juicio de este Tribunal, la Caja de Seguro Social debe proceder a pagarle la pensión de vejez anticipada reconocida retroactivamente, por la Resolución N° C. de P. 7661 de 10 de mayo de 1991, durante el período comprendido del 15 de septiembre de 1989 al 28 de febrero de 1991; ya que no fue sino hasta el 1° de marzo de 1991, en que la Caja de Seguro Social procedió a hacer efectivo el pago de la prestación concedida, según se desprende de lo establecido en la Nota DNPE 048-93 de 24 de marzo de 1993, que reposa a f. 11 del expediente contencioso.

El hecho de que el recurrente siguiera laborando en concepto de servicios profesionales con su antiguo empleador, y por consiguiente, continuase cotizando ante la Caja de Seguro Social durante el período comprendido entre el cese de

labores y el pago efectivo de la pensión de vejez anticipada, es comprensible e indispensable desde el punto de vista de la necesidad de supervivencia de todo ser humano. Máxime cuando la solicitud de pensión de vejez anticipada fuera efectuada el 12 de abril de 1989, y el pago de la misma se procedió a hacer efectivo a partir de 1° de marzo de 1991.

Esta Superioridad en **Sentencia de 23 de marzo de 1994**, en un caso similar al que nos ocupa, en el cual la Caja de Seguro Social negaba el pago retroactivo de una pensión de vejez anticipada en virtud de que el recurrente, posterior a la presentación del cese de labores, continuó cotizando a la Caja de Seguro Social, con motivo de las remuneraciones recibidas por contratos de servicios profesionales suscritos, señaló lo que se transcribe a continuación:

> **"El hecho de que el impugnante haya tenido que suscribir contratos de servicios profesionales y por ende, haya continuado cotizando ante el Seguro Social en el período comprendido entre el cese de labores con el IRHE, y, el pago efectivo de la pensión de vejez anticipada, es a juicio de la Corte, totalmente comprensible e inclusive indispensable desde el punto de vista de la necesidad de supervivencia de todo ser humano. Lo anterior se corrobora sin lugar a dudas, debido a que la solicitud de pensión de vejez anticipada se efectuó el 21 de febrero de 1989, y, la misma se pagó efectivamente el 7 de septiembre de 1990, es decir, 19 meses posterior a la formulación de la petición bajo estudio.**
>
> **Avalar la actual posición de la Caja de Seguro Social, significaría obstaculizar a la luz de la Sentencia de 15 de febrero de 1984, del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, el constante desarrollo Social, económico y político de la sociedad que el Estado debe garantizar, puesto que el trabajo en si es un derecho y un deber de todo individuo; siendo contrario a la finalidad de dicho Estado, todo acto que tienda a restringir, limitar, impedir o prohibir el completo y cabal ejercicio del trabajo."** (CASO: DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, interpuesta por la firma forense **Sucre, Arias, Castro y Reyes**, en representación de **TEÓFILO ALVARADO KINKEAD**, para que se declare nula por ilegal, el acto administrativo contenido en la Nota de 25 de agosto de 1992, emitida por el Jefe del Departamento de Pensiones y Subsidios de la Caja de Seguro Social, y para que se hagan otras declaraciones.
> SENTENCIA: 23 de marzo de 1994).

Por las consideraciones expuestas, son procedentes los cargos de ilegalidad endilgados a los artículos 51 y 54-A del Decreto-Ley N° 17 de 1954.

En lo que respecta al cargo de violación impetrado al Artículo 22-A del Decreto Ley 14 de 1954, la Sala considera pertinente no entrar a conocer del mismo, por razón de que la ilegalidad del acto acusado, ya ha sido debidamente comprobada con la infracción de los artículos 54-A y 51 del aludido Decreto-Ley 17 de 1954, alegados por la parte actora como infringidos.

En consecuencia, los Magistrados que integran la Sala Tercera, Contencioso Administrativa, de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA NULA, POR ILEGAL, la Nota N° DNPE 048-93 de 24 de marzo de 1993, emitida por el Director General de la Caja de Seguro Social, y se ORDENA el pago retroactivo de la Pensión de Vejez Anticipada dejada de pagar por parte de la Caja de Seguro Social, a favor del señor JOSÉ AROSEMENA GUERRERO a partir del 15 de septiembre de 1989, hasta el 28 de febrero de 1991.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA FORENSE ARIAS, FÁBREGA Y FÁBREGA EN REPRESENTACIÓN DE COMPAÑÍA DE PRODUCTOS DE ARCILLA, S. A. PARA QUE SE DECLAREN NULAS POR ILEGALES, LA RESOLUCIÓN N° 6366-85 SUB-D. G. DEL 18 DE DICIEMBRE DE 1985, DICTADA POR EL SUB-DIRECTOR GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Magistrado **JORGE FÁBREGA** ha presentado solicitud para que se le declare impedido y en consecuencia se le separe del conocimiento de la demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción interpuesta por la firma forense **ARIAS, FÁBREGA Y FÁBREGA** en representación de **COMPAÑÍA DE PRODUCTOS DE ARCILLA, S. A.**, para que se declaren nulas por ilegales, la Resolución N° 6366-85 SUB-D. G. del 18 de diciembre de 1985, dictada por el Sub-Director General de la caja de Seguro Social.

Sostiene el Magistrado **FÁBREGA** para fundar su solicitud de impedimento, que la firma MORENO Y FÁBREGA de la cual es socio, **funge en la actualidad como la Asesora Legal de la empresa COMPAÑÍA DE PRODUCTOS DE ARCILLA, S. A.**, situación prevista para configurar el impedimento legal, conforme al numeral 13 del artículo 749 del Código Judicial.

Esta Superioridad estima que la situación invocada se encuentra fundamentada en una causal de impedimento general, excluida de las causales específicas de impedimento para el juzgador en los procesos contencioso administrativos, establecidas en el artículo 78 de la Ley 135 de 1943. Sin embargo, considerando los argumentos del Magistrado **FÁBREGA** a la luz del texto del artículo antes citado, la Sala ha reconocido en diversas oportunidades que la circunstancia de que el juzgador sirva como **Asesor Legal** de la empresa demandante en procesos judiciales, evidencia una vinculación subjetiva con la parte actora (**interés en las resultas del negocio**), y hace viable la solicitud de impedimento requerida, a tenor de lo previsto en el numeral 4° del artículo 78 de la Ley 135 de 1943.

En consecuencia, el resto de los Magistrados de la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA QUE ES LEGAL el impedimento manifestado por el Magistrado JORGE FÁBREGA para conocer de la demanda Contencioso Administrativa de plena jurisdicción interpuesta por la firma forense ARIAS, FÁBREGA Y FÁBREGA en representación de COMPAÑÍA DE PRODUCTOS DE ARCILLA, S. A. para que se declaren nulas por ilegales, la Resolución N° 6366-85 SUB-D. G. del 18 de diciembre de 1985, dictada por el Sub-Director General de la caja de Seguro Social.

Se dispone en consecuencia que se realice un nuevo reparto del negocio de marras al Magistrado Suplente que le siga en turno, por orden alfabético, al Magistrado impedido.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA DUDLEY & ASOCIADOS EN REPRESENTADOS DE BANCO AGRO-INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE PANAMÁ (BANAICO), S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN CBN N° 12-96 DE 18 DE ABRIL DE 1996 DICTADA POR LA COMISIÓN BANCARIA NACIONAL DEL

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y POLÍTICA ECONÓMICA, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma Dudley & Asociados, en representación del BANCO AGRO-INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE PANAMÁ (BANAICO), S. A., interpuso demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución CBN N° 12-96 de 18 de abril de 1996, dictada por la Comisión Bancaria Nacional del Ministerio de Planificación y Política Económica, y para que se hagan otras declaraciones.

En la presente demanda el recurrente solicita se declare nula, por ilegal, la Resolución N° CBN N°12-96 de 18 de abril de 1996, emitida por la Comisión Bancaria Nacional del Ministerio de Planificación y Política Económica, por medio de la cual negó el recurso de reconsideración interpuesto por Banco Agro-Industrial y Comercial de Panamá (BANAICO), S. A. contra la Resolución N° 7-96 de 21 de marzo de 1996 y mantuvo en todas sus partes la citada Resolución, pero no solicita la nulidad del acto originario, o sea de la Resolución N° 7-96 de 21 de marzo de 1996, dictada por la Comisión Bancaria Nacional.

El artículo 29 de la Ley 33 de 1946 preceptúa que no será indispensable dirigir la demanda contra los actos simplemente confirmatorios que hayan agotado la vía gubernativa pero que dichos actos quedarán sin valor alguno si se anula el acto originario impugnado. De conformidad con esta norma es necesario promover la presente demanda no contra el acto confirmatorio, como se hizo, sino contra el acto originario, tal cual lo ha expresado anteriormente esta Sala en la resolución de 20 de febrero de 1995, dictada dentro de la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por el Instituto de Enseñanza Bilingüe, S. A. contra la Resolución N° 9793-94 J. D. de 2 de noviembre de 1994, emitida por la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, y en la resolución de 18 de febrero, dictada dentro de la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por Florentina Sánchez de Loaisiga contra la Resolución N° 6481-91-JD de 24 de octubre de 1991, expedida por la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social.

Por lo expuesto no debe dársele curso a la presente demanda de conformidad con lo establecido en el artículo 31 de la Ley 33 de 1946.

De consiguiente, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, representada por la Magistrada que suscribe, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por la firma Dudley & Asociados, en representación del BANCO AGRO-INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE PANAMÁ (BANAICO), S. A., para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° 12-96 de 18 de abril de 1996, emitida por la Comisión Bancaria Nacional del Ministerio de Planificación y Política Económica, y para que se hagan otras declaraciones.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA LICENCIADA SANDRA AGUILAR, EN REPRESENTACIÓN DE SILVERIO RÍOS Y SONIA GONZÁLEZ, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° SCCA-59 DE 10 DE FEBRERO DE 1995, EMITIDA POR EL ALCALDE DE SAN MIGUELITO, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS

(1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La licenciada Sandra Aguilar, actuando en nombre y representación de **SILVERIO RÍOS Y SONIA GONZÁLEZ**, ha promovido demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° SCCA-59 de 10 de febrero de 1995, emitida por el Alcalde de San Miguelito.

La parte actora solicita además que se declare nula, por ilegal, la Resolución C. Ci. 012-95 de 27 de marzo de 1995, dictada por la Gobernación de la Provincia de Panamá, y que como consecuencia de las nulidades decretadas se reponga el derecho de los señores **SILVERIO RÍOS Y SONIA GONZÁLEZ**, quienes aparecen como propietarios del lote H-6 ubicado en Los Andes N° 2, finca 138,257, inscrito en el Registro Público al rollo 15932, documento #3 de la Sección de la Propiedad de la Provincia de Panamá.

Por medio del acto impugnado el Alcalde del Distrito de San Miguelito resolvió anular el proceso de solicitud de adjudicación y tenencia de tierras resuelto mediante la Resolución Alcaldicia N° SCCA-139 de 9 de diciembre de 1993, que adjudicó provisionalmente a los señores **SILVERIO RÍOS Y SONIA GONZÁLEZ** el lote de terreno identificado con el No. H-6, ubicado en Los Andes N° 2 del Corregimiento Belisario Porras.

Al admitirse la presente demanda se corrió traslado al señor Procurador de la Administración quien, mediante la Vista Fiscal N° 346 de 11 de agosto de 1995, solicitó a esta Sala denegar las pretensiones del demandante (fs. 82-98). Además, se solicitó al Alcalde de San Miguelito que rindiera el informe de conducta a que se refiere el artículo 33 de la Ley 33 de 1946, lo que hizo oportunamente (fs. 54-56).

La parte actora estima que el acto administrativo impugnado viola los artículos 98 numerales 1 y 3 y 722 del Código Judicial; 338 del Código Civil y el artículo 33 de la Ley 135 de 1943 en concordancia con el artículo 34 ídem, cuyo texto transcribimos a continuación:

CÓDIGO JUDICIAL.

> **"98.** A la Sala Tercera le están atribuidos los procesos que se originen por actos, omisiones, prestaciones defectuosas o deficientes de los servidores públicos, resoluciones, órdenes o disposiciones que ejecuten, adopten, expidan o en que incurran en ejercicio de sus funciones o pretextando ejercerlas, los funcionarios públicos o autoridades nacionales, provinciales, municipales y de las entidades públicas autónomas o semiautónomas.
>
> En consecuencia, la Sala Tercera conocerá en materia administrativa de los siguiente:
>
> 1. De los decretos, órdenes, resoluciones o cualesquiera actos, sean generales o individuales, en materia administrativa, que se acusen de ilegalidad;
> ...
> 3. De los recursos contenciosos en los casos de adjudicación de tierras y de bienes ocultos;
> ..."
> **"722.** Son causales de nulidad comunes a todos los procesos:
>
> 1. La de distinta jurisdicción, la cual es absoluta y puede ser alegada por cualquiera de las partes como incidente, en el mismo proceso o mediante recursos de revisión.
> El Juez la declarará de oficio en el momento en que la advierta;

2. La falta de competencia;

3. La ilegitimidad de la personería;

4. El no haberse notificado al demandado la providencia que acoge la demanda y ordena su traslado en aquellos procesos que exigen este trámite;

5. La falta de notificación o emplazamiento de las personas que deban ser citadas como parte aunque no sean determinadas o de aquellas que hayan de suceder en el proceso o cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordene expresamente;

6. La falta de citación al Ministerio Público en los casos expresamente determinados por la Ley;

7. La suplantación de la persona del demandante o del demandado; y,

8. No abrir el proceso o incidente a prueba en los procesos de conocimiento, o no señalar audiencia en los casos en que la Ley exija este trámite."

CÓDIGO CIVIL.

"**Art. 338**. Nadie podrá ser privado de su propiedad sino por autoridad competente y por graves motivos de utilidad pública, previa siempre la correspondiente indemnización."

LEY 135 DE 1943.

"**ARTÍCULO 33**. Por la vía gubernativa proceden los siguientes recursos en los asuntos administrativos de carácter nacional:

1. El de reconsideración ante el funcionario administrativo de la primera instancia, para que se aclare, modifique o revoque la resolución;
2. El de apelación, ante el inmediato superior, con el mismo objeto.

Estos recursos ordinarios no excluyen el de avocamiento, en la forma establecida por las leyes, decretos o reglamentos especiales."

Al expresar el concepto en que se infringieron las normas transcritas el demandante indicó que las mismas se han violado porque: el Alcalde del Distrito de San Miguelito no tiene competencia para declarar la nulidad del proceso de adjudicación y tenencia de tierras resuelto mediante la Resolución N° SCCA-139 de 9 de diciembre de 1993, más aún cuando los señores **SILVERIO RÍOS Y SONIA GONZÁLEZ** tienen título inscrito en el Registro Público; que se violó por indebida aplicación el artículo 722 del Código Judicial porque esta norma consagra las causales de nulidad comunes a todos los procesos ordinarios, pero no es aplicable al proceso administrativo; y que se ha violado por omisión el artículo 33 de la Ley 135 de 1943 al declarar desierto el recurso de apelación promovido ante la Gobernación, privando al demandante de su derecho de recurrir. (Fs. 41-42).

A estos cargos se opuso la señora Procuradora de la Administración, en razón de la falta de competencia del Alcalde del Distrito de San Miguelito para conocer de las controversias en los casos de adjudicación de tierras, ya que en nuestro ordenamiento legal el control de los actos administrativos mediante los cuales se adjudica tierras, una vez ejecutoriados, lo ejerce la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia; y en virtud del principio de la irrevocabilidad de los actos administrativos, toda vez que el acto que hoy se acusa de ilegal, ha violado la presunción de legalidad y de estabilidad de otro acto normativo de la misma jerarquía, afectando derechos subjetivos inscritos en el Registro Público.

En este caso compete a la Sala pronunciarse sobre la legalidad o ilegalidad de la Resolución N° SCCA-59 de 10 de febrero de 1995, emitida por el Alcalde del

Distrito de San Miguelito para resolver la solicitud de nulidad de la Resolución No. SCCA-139 de 9 de diciembre de 1993, formulada por el señor Juan Alfredo Quintero.

A juicio de la Sala, procede el cargo de violación del artículo 98 numeral 3 del Código Judicial, toda vez que la norma invocada atribuye competencia privativa a la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo para resolver los conflictos en los casos de adjudicación de tierras, y en el caso que nos ocupa, no podía el Alcalde del Distrito de San Miguelito resolver la solicitud que le fue formulada de anular un acto administrativo dictado por él, que estaba ejecutoriado y había sido ejecutado, por carecer de competencia para revocar sus propios actos.

Si bien, la autoridad demandada invoca como fundamento de su actuación el artículo 15 de la Ley N° 106 de 8 de octubre de 1973, el cual preceptúa que los decretos de los Alcaldes sólo podrán ser reformados, suspendidos o anulados por la misma autoridad que los dictó, el mismo no es aplicable porque esta facultad se refiere a los decretos de los Alcaldes pero no a sus resoluciones, las cuales pueden ser recurridas dentro del término de ley y en ejercicio de los recursos correspondientes. Observa la Sala, que no fue sino hasta un año después de haberse dictado y ejecutoriado la Resolución N° SCCA-139 de 1993, que se pidió su anulación mediante solicitud formal. En los considerandos del acto impugnado se lee, que la solicitud de nulidad fue admitida mediante auto N° 569 de 16 de noviembre de 1994, es decir, casi un año después de haberse proferido la Resolución N° SCCA-139 de 9 de diciembre de 1993, que adjudicaba provisionalmente el lote H-6 a los señores **SILVERIO RÍOS Y SONIA GONZÁLEZ**, por lo que al 16 de noviembre de 1994, ya estaba ejecutoriada.

Consta además en autos, que el lote H-6 ubicado en Los Andes N° 2, del Corregimiento Belisario Porras, fue adjudicado provisionalmente a los señores **SILVERIO RÍOS Y SONIA GONZÁLEZ** el 9 de diciembre de 1993 (fs. 55), segregado y traspasado a título de venta mediante Escritura Pública N° 28 de 10 de junio de 1994 (fs. 21); e inscrito en el Registro Público el 6 de julio de 1994 (fs. 22 vta.). Por tanto, se trata de un derecho adquirido a favor de los señores **SILVERIO RÍOS Y SONIA GONZÁLEZ** e inscrito en el Registro Público de la Propiedad, que no puede ser cancelado sino en virtud de "auto o sentencia ejecutoriada o de escritura o documento auténtico en el cual expresen su consentimiento para la cancelación la persona a cuyo favor se hubiese hecho la inscripción o sus causahabientes o representantes legítimos", conforme lo preceptúa el artículo 1784 del Código Civil.

Como quiera que la Sala ha comprobado la violación del artículo 98 numeral 3 del Código Judicial, no considera necesario examinar el resto de los cargos de ilegalidad que se imputa al acto administrativo impugnado.

De consiguiente, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE ES NULA, POR ILEGAL, la Resolución N° SCCA-59 de 10 de febrero de 1995, dictada por el Alcalde del Distrito de San Miguelito.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA BERROCAL Y DÍAZ, EN REPRESENTACIÓN DE EMPRESAS Q & Q, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL RESUELTO N° DG-692-94 DE 11 DE MAYO DE 1994, EMITIDO POR EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE RECURSOS HIDRÁULICOS Y ELECTRIFICACIÓN (I. R. H. E.), Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MAYO DE MIL

NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma Berrocal & Díaz, actuando en nombre y representación de la sociedad Empresas Q & Q, S. A., ha interpuesto, ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción para que se declare nulo, por ilegal, el Resuelto N° DG-692-94 de 11 de mayo de 1994, expedido por el Director General del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (I. R. H. E.), y para que se hagan otras declaraciones.

I. CONTENIDO DEL ACTO IMPUGNADO

Mediante el acto impugnado, el Director General del I. R. H. E. señaló que en la primera convocatoria del Concurso de Precios N° 1036-93, correspondiente al suministro, transporte y entrega en el sitio de biocidas orgánicos biodegradables, en el cual se recibió propuestas de las empresas Prodima, S. A. por B/.137,772.00, Empresas Q & Q, S. A. por B/.126,675.00, Proquinsa por B/.112,124.25, Suplidora Central, S. A. por B/.56,831.25 y Químicos y Similares, S. A. por 137,775.00, la Comisión Evaluadora que analizó las propuestas presentadas, recomendó adjudicar definitivamente el Concurso de Precios N° 1036-93 a Empresas Q & Q, S. A. por un monto de B/.126,675.00, y posteriormente el Departamento Gestor decidió declarar desierta la primera convocatoria y anular el Concurso de Precios N° 1036-93, **"debido a que en la actualidad se tiene en existencia en el Almacén de la Planta de San Francisco y Bahía Las Minas, Microbiocida Orgánico Biodegradable y se está en trámite de adquirir más durante el período fiscal."**; por lo que de acuerdo con el artículo 25 del Decreto Ejecutivo N° 33 de 3 de mayo de 1985, resolvió declarar desierta la primera convocatoria del Concurso de Precios N° 1036-93 y anular en todas sus partes el trámite de compra y notificar esta resolución a los interesados para que puedan hacer uso de los recursos conferidos por el Artículo 32 del Decreto Ejecutivo N° 33 de 3 de mayo de 1985.

II. HECHOS DE LA DEMANDA

El apoderado judicial de la empresa demandante expresó en los hechos de su demanda lo siguiente:

"...

SEGUNDO: El día seis (6) de septiembre de 1993, el INSTITUTO DE RECURSOS HIDRÁULICOS Y ELECTRIFICACIÓN (I. R. H. E.) celebró la primera convocatoria del concurso de precios N° 1036-93, correspondiente al suministro, transporte y entrega en el sitio de biocidas orgánicos biodegradables, cuyo precio estimado por el Estado era de CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL DÓLARES (US $147,000.00).

TERCERO: Nuestra poderdante, EMPRESAS Q & Q, S. A., participó y presentó su propuesta en dicho concurso de precios y la comisión evaluadora recomendó adjudicarle definitivamente el concurso de precios N° 1036-93, por la suma de CIENTO VEINTISÉIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO (US $126,675.00).

CUARTO: Posteriormente, sin fundamento legal, y en contra de los intereses del Estado, el INSTITUTO DE RECURSOS HIDRÁULICOS Y ELECTRIFICACIÓN (I. R. H. E.), mediante el resuelto que por este medio se impugna, decide declarar desierta la primera convocatoria del concurso de precios N° 1036-93 y anular en todas sus partes el trámite de compra del mismo.

QUINTO: EL INSTITUTO DE RECURSOS HIDRÁULICOS Y ELECTRIFICACIÓN (I. R. H. E.) fundamenta su errada decisión en dos (2) razones:

1. "Debido que en la actualidad se tiene en existencia en el almacén de la planta de San Francisco y Bahía las Minas microbiocida orgáni-

co biodegradable."

2. "Se está en trámite de adquirir más durante el período fiscal."
...
SEXTO: El día veintitrés (23) de mayo de mil novecientos noventa y cuatro (1994), nuestra poderdante, EMPRESAS Q & Q, S. A., presentó recurso de reconsideración con apelación en subsidio en contra del Resuelto N° DG-692-94, fechado el once (11) de mayo de mil novecientos noventa y cuatro (1994) y firmado por el entonces Director General del INSTITUTO DE RECURSOS HIDRÁULICOS Y ELECTRIFICACIÓN (I. R. H. E.), GONZALO CÓRDOBA, por medio del cual se declara desierta la primera convocatoria del concurso de precios N° 1036-93 y se anula en todas sus partes el trámite de compra del mismo, en perjuicio de la parte demandante, a quien originalmente la Comisión Evaluadora recomendó adjudicar definitiva y positivamente dicho concurso de precios.

SÉPTIMO: El día veintitrés (23) de julio de mil novecientos noventa y cuatro (1994) transcurrieron dos (2) meses sin que recaiga decisión resolutoria sobre el recurso de reconsideración con apelación en subsidio interpuesto, de manera tal, que se ha dado una negativa tácita por silencio administrativo, sin que el Director General o la Junta Directiva del INSTITUTO DE RECURSOS HIDRÁULICOS Y ELECTRIFICACIÓN (I. R. H. E.) resolviera o contestara el recurso de reconsideración con apelación en subsidio interpuesto. ..." (Fs. 13 a 15).

III. NORMAS INVOCADAS COMO VIOLADAS Y CONCEPTO DE SU VIOLACIÓN

Afirma la parte demandante que el acto impugnado viola, en forma directa por omisión, los artículos 47 del Código Fiscal y 25 del Decreto N° 33 de 3 de mayo de 1985, los cuales son del siguiente tenor literal:

"**ARTÍCULO 47.** En la celebración de la licitación se observarán las siguientes reglas:
...
Dentro de los ocho (8) días siguientes a la expiración del término anterior, los interesados podrán presentar por escrito las observaciones y aclaraciones que consideren oportunas, las que serán incorporadas al expediente. El dictamen de la Comisión Evaluadora no es obligatorio para la autoridad que debe decidir, siempre que ésta justifique técnica y económicamente, mediante resolución motivada, que el dictamen no consulta los mejores intereses del Estado.

ARTÍCULO 25. Se declarará desierta la Licitación Pública, el Concurso de Precios o Solicitud de Precios, cuando no se presente más de una propuesta válida o porque las propuestas presentadas fueren consideradas elevadas o gravosas.

Cuando ello ocurra, el Ministro o Titular de la institución pública correspondiente, por resolución hará la declaración de desierta y, si lo considera conveniente, puede disponer la celebración del mismo acto por segunda vez, pero deberá anunciarse con una anticipación de días equivalente al plazo mínimo señalado en la Ley para el acto anterior.

Si se repite la declaratoria de desierta, el funcionario expresado puede solicitar al Ministro de Hacienda y Tesoro que le autorice la contratación directa."

La parte actora manifiesta que la resolución impugnada ignora el contenido del artículo 47, según el cual el I. R. H. E. debió justificar y explicar las razones técnicas y económicas por las cuales el dictamen de la comisión evaluadora, en el que recomendó adjudicar definitivamente el concurso de precios a la sociedad Empresas Q & Q, S. A., no se adecúa a los mejores intereses del

Estado, omitiendo dicho requisito en el resuelto impugnado, pues se limitó a declarar desierto el acto invocando razones contradictorias que no tienen justificación técnica o económica alguna.

A juicio del demandante, en el caso que nos ocupa no se da ninguno de los supuestos del artículo 25 del Decreto N° 33 de 1994, según el cual se declara desierta una licitación si se presenta una sola propuesta o si las propuestas son consideradas elevadas y gravosas. Señala que en el concurso de precios N° 1036-93 se presentó un total de cinco propuestas y que el precio estimado por el Estado era de B/.147,000.00, permitiendo el Código Fiscal que las adjudicaciones de los actos públicos se hagan hasta un 10% por encima del precio oficial, que en este caso representaría la suma de B/.161,700.00, y a la sociedad Empresas Q & Q, S. A. le fue adjudicado provisionalmente el concurso de precios por B/.126,675.00, suma que está lejos de ser gravosa o elevada. Para anular el Concurso de Precios N° 1036-93 se invocó razones ilógicas y contradictorias, haciendo ver que la celebración del concurso de precios fue un error, ya que existía en las bodegas inventario del producto concursado, pero a continuación se señala que se está en trámite de adquirir más del producto durante el período fiscal, quedando de manifiesto que sí era necesario adquirir el producto.

IV. OPINIÓN DE LA PROCURADURÍA DE LA ADMINISTRACIÓN

La señora Procuradora de la Administración, mediante la Vista Fiscal N° 1 de 6 de enero de 1995, se opuso a las pretensiones de la parte actora y señaló que las licitaciones públicas se inician con la confección del pliego de condiciones, seguida del llamado a la licitación, la presentación de propuestas, la apertura de los sobres, la adjudicación provisional, la adjudicación definitiva y finalmente se perfecciona con la formalización del contrato administrativo. Manifestó que la adjudicación provisional es una medida de control ligada a la legitimidad y al mérito del acto mismo que consiste en la recomendación que realiza la Comisión Evaluadora de las propuestas sobre la forma en que debe adjudicarse la licitación y según el numeral 9 del artículo 47 del Código Fiscal, contra esta adjudicación provisional nadie puede oponerse, ya que no es un acto administrativo definitivo o firme porque no es el acto final de la licitación, no causa estado y en ese momento la Administración Pública no está obligada a contratar con el adjudicatario provisional.

V. CONSIDERACIONES Y ANÁLISIS DE LA SALA

El artículo 62 del Código Fiscal señala que en los concursos de precio, como el que nos ocupa, se aplicarán las disposiciones sobre licitaciones públicas, con excepción de los artículos 32, 40, 48, 58 y 59 del Código Fiscal. El artículo 48 del Código Fiscal, modificado por el artículo 17 del Decreto de Gabinete N° 45 de 20 de febrero de 1990, e inaplicable en los concursos de precios, preceptúa que "Mediante resolución motivada se declarará desierta toda licitación, bien **por falta de postores o bien porque las propuestas presentadas se consideren elevadas o gravosas.**", norma que es similar al artículo 25 del Decreto N° 33 de 1985, "por el cual se reglamenta el Capítulo IV del Título I del Libro I del Código Fiscal, Solicitud de Precios y los respectivos Contratos con el Estado". De acuerdo con este precepto reglamentario se puede declarar desierta una licitación pública, concurso o solicitud de precios: **cuando no se presenta más de una propuesta válida** y **porque las propuestas presentadas fueren consideradas elevadas o gravosas**. El precitado artículo 25 del Decreto N° 33 de 1985 desarrolla el artículo 48 del Código Fiscal, por lo que si éste último no es aplicable en virtud de lo preceptuado por el artículo 62 del Código Fiscal, tampoco lo es el mencionado artículo 25, y no se ha producido la violación alegada por la parte actora.

A foja 326 del expediente administrativo, consta la Nota de 19 de abril de 1984, dirigida al Ingeniero René Rivera por el Ingeniero Rodolfo Batista, comunicación que motivó el acto administrativo impugnado. En esta nota se informa que a la fecha había en el Almacén de la Planta de San Francisco suficiente Microbiocida Orgánico Biodegradable Q-300, para un año de dosificación, el cual sería alternado con Hipoclorito de Calcio para que el microorganismo no creara resistencia a un sólo producto, y que se estaba en trámite de comprar más del

producto denominado Clorina. A foja 327 del expediente administrativo consta la Nota N° DEO-036-94 de 20 de abril de 1994, dirigida por el Ingeniero René Rivera al licenciado José Marrone (jefe de asesoría legal) en la cual se informa que se ha tomado la decisión de cancelar el Concurso de Precios N° 1036-93, con base en las razones explicadas en la referida nota de 19 de abril de 1984.

La Sala considera que las precitadas notas que sirvieron de fundamento al Resuelto N° DG-692-94, mediante el cual se decidió anular en todas sus partes el trámite de compra, con motivo de que en el Almacén de la Planta de San Francisco y Bahía Las Minas hay en existencia "Microbiocida Orgánico Biodegradable y porque se está en trámite de adquirir más (refieriéndose al clorine) durante el período fiscal", ponen en evidencia los errores cometidos en el resuelto impugnado al señalar que el insumo que estaba en trámite de comprarse era Microbiocida Orgánico, del cual se tenía suficiente para un año de dosificación (Q-300), cuando realmente se estaba tramitando la compra de más Clorina, y no explica que el uso alternado de ambos productos era conveniente para evitar que los mocroorganismos atacados se hicieran resistentes a los productos usados.

En virtud de lo antes expuesto, esta Sala considera que no se ha producido la violación del artículo 47 del Código Fiscal, ya que las razones expuestas acerca de la existencia en inventario del Microbiocida Orgánico, y la compra de un producto diferente para combatir los microorganismos es una justificación económica y técnica suficiente para que la autoridad ordenara la cancelación del concurso de precios N° 1039-93.

Por lo expresado, el Resuelto N° DG-692-94 de 11 de mayo de 1994, no ha violado los artículos 25 del Decreto N° 33 de 1985, ni el artículo 47 del Código Fiscal y así procede a declararlo esta Sala.

Por consiguiente, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES ILEGAL el Resuelto N° DG-692-94 de 11 de mayo de 1994, emitido por el Director General del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (I. R. H. E.) y NIEGA las demás declaraciones pedidas por EMPRESAS Q & Q, S. A., dentro de la presente demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR LA LICENCIADA IRENE STANZIOLA, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE AGENCIAS COSMOS, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 4362-SUB-D. G., DEL 17 DE FEBRERO DE 1993, DICTADA POR LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, EL ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

Mediante Vista N° 432 del 13 de octubre de 1995, la señora Procuradora de la Administración presentó ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia recurso de apelación contra la Providencia fechada el 7 de septiembre de 1995, a través de la cual el Magistrado Sustanciador admitió la demanda contencioso-administrativa de plena jurisdicción interpuesta por la licenciada Irene Stanziola, en nombre y representación de AGENCIAS COSMOS, S. A., contra la Resolución N° 4362-SUB-D. G., del 17 de febrero de 1993, el acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

I. LOS FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Estima la representante del Ministerio Público, que la meritada demanda no debió admitirse porque no cumplió con el requisito establecido en el numeral 4° del artículo 43 de la Ley N° 135 de 1943, pues, "no contiene referencias a los motivos de ilegalidad en el concepto de la violación de las normas que estima infringidas el demandante. Tampoco se puede inferir o colegir el sentido en que, a su criterio, se produce la transgresión". Agrega, que a pesar de que la jurisprudencia de la Sala ha admitido demandas que carecen de los motivos de ilegalidad, en esta oportunidad no es procedente su admisión, pues sólo encontramos en ella la inconformidad de la empresa AGENCIAS COSMOS, S. A. con el acto demandado, mas no se deduce el motivo legal de dicha inconformidad (fs. 56-60).

II. ARGUMENTOS DE LA PARTE OPOSITORA AL RECURSO

En el escrito de oposición al recurso, la apoderada judicial de AGENCIAS COSMOS, S. A. pidió a la Sala que confirmara la Resolución apelada, ya que en el punto V del libelo de la demanda que se estima defectuosa, se señala claramente las disposiciones legales violadas y el concepto de tales violaciones. Para sustentar su afirmación, la opositora transcribió nuevamente las normas que cita como violadas, así como el concepto de su infracción. (Fs. 65- 71).

III. DECISIÓN DEL RESTO DE LOS MAGISTRADOS DE LA SALA

Tal como se ha visto, la señora Procuradora de la Administración impugnó la resolución que admitió la demanda por considerar que en la misma no se hizo referencia a los motivos de ilegalidad del acto acusado y, por tanto, no se cumplió con el requisito establecido en el numeral 4° del artículo 43 de la Ley N° 135 de 1943.

En la demanda se observa que, en efecto, la apoderada de la actora no especificó el motivo de ilegalidad del acto impugnado, al expresar el concepto en que dicho acto infringió las disposiciones que cita como violadas. Sin embargo, a juicio del resto de los Magistrados de la Sala, esta omisión no es razón suficiente para inadmitir la presente demanda, en la que los motivos de ilegalidad se desprenden de la explicación detallada que la parte actora hizo del concepto en que fueron infringidos cada uno de los preceptos que invoca como violados, indicando la forma en que supuestamente se han producido dichas violaciones (Cfr. fs. 33-38), todo lo cual permite a la Sala conocer y examinar el fondo de las infracciones que se alegan.

Por estas razones, el resto de los Magistrados de la Sala estima que la admitida demanda cumple con el requisito establecido en el numeral 4° del artículo 43 de la Ley N° 135 de 1943 y, por tanto, la resolución apelada debe confirmarse.

De consiguiente, el resto de los Magistrados de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la Providencia del 7 de septiembre de 1995, mediante la cual se admitió la demanda contencioso-administrativa de plena jurisdicción interpuesta por la licenciada Irene Stanziola, en nombre y representación de AGENCIAS COSMOS, S. A., contra la Resolución N° 4362-SUB-D. G., del 17 de febrero de 1993, dictada por la Subdirectora General de la Caja de Seguro Social, el acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL

LICENCIADO CARLOS ARAÚZ, EN REPRESENTACIÓN DE EDMUNDO BOTELLO, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL ACUERDO N° 11 DE 18 DE DICIEMBRE DE 1995, EMITIDO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE TABOGA, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TREINTA (30) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Carlos Araúz, actuando en nombre y representación de Edmundo Botello, interpuso ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia demanda contencioso-administrativa de plena jurisdicción para que se declare nulo, por ilegal, el Acuerdo N° 11 de 18 de diciembre de 1995, emitido por el Concejo Municipal del Distrito de Taboga, y para que se hagan otras declaraciones.

Conjuntamente con las pretensiones de la demanda, el licenciado Araúz solicita que la Sala decrete la suspensión provisional del Acuerdo N° 11 de 18 de diciembre de 1995 emitido por el Concejo Municipal del Distrito de Taboga mediante el cual se anula el contrato de arrendamiento celebrado el 1° de junio de 1994 entre el Municipio de Taboga y Edmundo Botello.

El apoderado judicial de la parte actora fundamenta su petición en los siguientes términos:

> "Decretar la suspensión en sus efectos del Acuerdo 11 de 18 de diciembre de 1995 dictado por el Consejo (sic) Municipal del Distrito de Taboga, por el cual se Anula (sic) el Contrato (sic) de Arrendamiento (sic) Celebrado (sic) entre el Municipio de Taboga y EDMUNDO BOTELLO firmado el 1° de junio de 1994, toda vez que el Kiosko (sic) "Ana Raquel" representa un medio de ayuda económica para mi representado y el mismo se encuentra cerrado y se impide la entrada por orden del Señor Corregidor en acatamiento a lo establecido en el Acuerdo N° 11 de 18 de diciembre de 1995.
>
> Respetuosamente solicitamos se suspendan los efectos del acuerdo N° 11 de 18 de diciembre de 1995 dictado por el Consejo Municipal del Distrito de Taboga para evitar un perjuicio notoriamente grave y se permita al Señor EDMUNDO BOTELLO la apertura, uso y goce pacífico del Kiosko "Ana Raquel". (F. 82).

Sobre el particular, el artículo 73 de la Ley 135 de 1943 faculta al Pleno de la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) para suspender los efectos del acto impugnado "si a su juicio ello es necesario para evitar un perjuicio notoriamente grave". Procede la Sala a analizar la gravedad del perjuicio acusado por el acto impugnado.

En este caso el recurrente no logra probar el perjuicio notoriamente grave y de imposible reparación que pueden causar los actos administrativos impugnados a ellos. El demandante debió señalar detalladamente en qué consiste el daño que puede causar el acto impugnado y de qué manera dicho perjuicio es grave o de imposible reparación.

En vista de que el demandante no ha podido comprobar el perjuicio notoriamente grave de los efectos de los actos impugnados, lo que procede es, pues, no acceder a la petición de suspensión provisional solicitada por la parte actora.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ACCEDE a la solicitud de suspensión provisional de los efectos del Acuerdo N° 11 de 18 de diciembre de 1995, emitido por el Concejo Municipal del Distrito de Taboga.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA CHAVARRÍA, RODRÍGUEZ Y SÁNCHEZ EN REPRESENTACIÓN DE FERNAVICO, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 6962-94-SUB-D. G., DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 1994, DICTADA POR EL SUB-DIRECTOR GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, LOS ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TREINTA (30) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma forense Chavarría, Rodríguez y Sánchez, actuando en nombre y representación de **FERNAVICO, S. A.**, ha promovido demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° 6962-94-SUB-D. G. de 29 de septiembre de 1994, emitida por el Sub-director General de la Caja de Seguro Social, los actos confirmatorios y para que se hagan otras declaraciones.

El apoderado judicial de la parte actora solicita en su libelo, se suspenda provisionalmente los efectos del acto impugnado, en razón de que a causa de la Resolución No. 6962-94-SUB-D. G. de 1994, la empresa **FERNAVICO, S. A.** se ha visto obligada a formalizar con la Caja de Seguro Social el Acuerdo de Pago #96-05-0155 por la suma de 306,000.00, carga que afecta sensiblemente la liquidez y capacidad financiera de la empresa; además esta obligación fue asumida bajo protesta porque de no hacerlo la empresa incurriría en mora y sus trabajadores no recibirían las prestaciones y servicios por parte de la Caja de Seguro Social; sin embargo la empresa no está en capacidad de atender, desde el punto de vista económico y financiero, esta obligación de pago, hecho que la compulsará a incumplir sus obligaciones comerciales, afectando el giro normal de su negocio. (Fs. 25-26).

De conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Ley 135 de 1943, el Pleno de la Sala puede decretar la suspensión provisional de los efectos del acto impugnado, si a su juicio ello es necesario para evitar un perjuicio notoriamente grave, el cual debe ser probado, de acuerdo con copiosa jurisprudencia de la Sala.

La demandante invoca como fundamento de su solicitud los perjuicios económicos que puede sufrir la empresa a causa del Acuerdo de Pago #96-05-0155 suscrito con la Caja de Seguro Social; no obstante, en el presente caso, la parte actora no ha presentado pruebas de los graves perjuicios que alega sufrirá si se ejecuta el acto impugnado, por tanto, la petición hecha debe negarse. Los cargos de ilegalidad que la parte demandante hace al acto impugnado serán objeto de un exhaustivo análisis, al resolver el fondo de la controversia.

De consiguiente, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NIEGA LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL de los efectos de la Resolución N° 6962-94-SUB-D. G. de 29 de septiembre de 1994, dictada por el Sub-director General de la Caja de Seguro Social.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR LA FIRMA FORENSE SHIRLEY Y DÍAZ, EN REPRESENTACIÓN DE DISTRIBUIDORES DE MARISCOS, SEAFOOD DISTRIBUTORS, CORP., PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA DECISIÓN ADOPTADA POR LA COMISIÓN TÉCNICA DE INCENTIVOS A LAS EXPORTACIONES EN REUNIÓN DEL 12 DE MARZO DE 1994, LOS ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TREINTA (30) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

Mediante Vista N° 147 del 9 de abril de 1996, la señora Procuradora de la Administración apeló de la Providencia fechada el 18 de enero de 1996, a través de la cual se admitió la acción contencioso-administrativa de plena jurisdicción interpuesta por la firma forense Shirley y Díaz, en nombre y representación de DISTRIBUIDORES DE MARISCOS, S. A., SEAFOOD DISTRIBUITORS, CORP., contra la decisión adoptada por la Comisión Técnica de Incentivos a las Exportaciones en la reunión celebrada el 1° de marzo de 1994; los actos confirmatorios y para que se hagan otras declaraciones.

I. LOS FUNDAMENTOS DEL RECURSO

En opinión de la representante del Ministerio Público, la meritada demanda no debió admitirse porque los actos impugnados debieron acusarse individualmente. Aun cuando los mismos están relacionados por haber sido emitidos por la Comisión Técnica de Incentivos a la Exportación y haber negado el Certificado de Abono Tributario a la DISTRIBUIDORA DE MARISCOS, S. A., SEAFOOD DISTRIBUTORS, CORP., plantean situaciones distintas que imposibilitan a la Sala para emitir un pronunciamiento de fondo. Agrega, que su criterio se fundamenta en el artículo 43 a) de la Ley Contencioso-administrativa, que exige la individualización del acto administrativo con toda precisión (fs. 110-117).

II. LOS ARGUMENTOS DE LA OPOSITORA AL RECURSO

En su escrito de oposición al recurso, la firma apoderada de la demandante pidió la confirmación de la resolución impugnada, ya que los actos demandados no sólo guardan relación íntima, sino que cada uno es consecuencia necesaria y directa del anterior y responden a la misma situación jurídica, cual es la negativa de la Comisión Técnica de Incentivos a las Exportaciones de reconocerle a la Empresa DISTRIBUIDORES DE MARISCOS, (SEAFOOD DISTRIBUTORS, CORP.) el incentivo fiscal de abono tributario (CAT) a que tiene derecho. Sostiene, además, que de los hechos de la demanda se desprende que, en realidad, se trata de un solo acto y no de actos administrativos distintos, por lo cual debían impugnarse en la misma demanda (fs. 123-128).

III. DECISIÓN DEL RESTO DE LOS MAGISTRADOS DE LA SALA

Estima el resto de los Magistrados de la Sala que no le asiste razón a la señora Procuradora de la Administración, pues, del examen de las constancias procesales se desprende que los dos últimos actos que en el presente caso se impugnan, se limitan a confirmar la decisión que la Comisión Técnica de Incentivos a las Exportaciones adoptó en su reunión del 1° de marzo de 1994 y que fue comunicada a la empresa demandante por medio de la Nota N° CAT-N-079-93, del 17 de marzo de 1994.

Lo anterior se infiere de los hechos de la demanda y de las pruebas que constan en autos, en particular, de la certificación expedida por el Director Ejecutivo del Instituto Panameño de Comercio Exterior, contenida en la Nota ASELEG N° 160, del 19 de julio de 1995, cuya parte pertinente expresa lo siguiente:

> "En atención a su Oficio N° 626 de 4 de julio de 1995, recibido en nuestro Despacho el 14 de julio próximo pasado, mediante el cual

> solicita Certificación relacionada con una decisión adoptada por la Comisión Técnica de Incentivos a las Exportaciones ... por este medio hacemos constar lo siguiente:
>
> La decisión contenida en la Nota N° CAT- N-079-93 de 17 de marzo de 1994, adoptada por la Comisión Técnica de incentivos a las Exportaciones no se adoptó mediante Resolución, pero la misma quedó plasmada en el Acta N° 3-94 de 1° de Marzo de 1994, la cual fue firmada por el Pleno de dicha Comisión.
>
> Es necesario aclarar que el Ex Director del Instituto Panameño de Comercio Exterior en función de Secretaría de la Comisión, le comunicó a la empresa en primera instancia, la decisión de la Comisión a través de la Nota antes enunciada.
>
> Posteriormente dicha decisión fue reiterada a la empresa mediante Nota fechada 8 de septiembre de 1994." (Fs. 46-47).

Cabe agregar, asimismo, que la propia Resolución N° 19 del 13 de marzo de 1995, expedida por la señora Ministra de Comercio e Industrias, también impugnada en el presente negocio, resuelve "DESESTIMAR por improcedente el recurso de apelación propuesto por la empresa DISTRIBUIDORES DE MARISCOS, S. A. -SEAFOOD DISTRIBUTORS CORP. en contra de la Nota N° CAT-N-079-93 de 17 de marzo de 1994, reiterada mediante la Nota S/N de 8 de septiembre de 1994" (f. 7).

Por las razones expuestas, el resto de los Magistrados de la Sala considera que la resolución apelada debe confirmarse.

De consiguiente, el resto de los Magistrados de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la Providencia del 18 de enero de 1996, mediante la cual se admitió la demanda contencioso-administrativa de plena jurisdicción a que se refiere el presente negocio.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO EMILIO DE LEÓN, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR JOSÉ DEL CARMEN ESPINOZA, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL RESUELTO N° 032 DEL 15 DE JUNIO DE 1995, EXPEDIDO POR EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA DE PANAMÁ; ASÍ COMO LA NEGATIVA TÁCITA POR SILENCIO ADMINISTRATIVO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TREINTA (30) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Emilio De León, actuando en nombre y representación del señor JOSÉ DEL CARMEN ESPINOZA QUINTERO, promovió recurso de apelación contra la Providencia del 25 de marzo de 1996, mediante la cual no se admitió la demanda contencioso-administrativa de plena jurisdicción interpuesta contra el Resuelto N° 032, del 15 de junio de 1995, expedido por el Director General del Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá.

De acuerdo con la resolución impugnada, la demanda interpuesta por el licenciado De León no fue admitida porque "la parte demandante no agotó la vía gubernativa para poder accionar ante esta Sala en demanda Contencioso

Administrativa de Plena Jurisdicción, tal como exige el artículo 25 de la Ley 33 de 1946", ya que no promovió oportunamente el recurso de apelación contra el acto administrativo que en el presente negocio se impugna (fs. 83-85).

En estas circunstancias, el resto de los Magistrados que componen la Sala estiman que, antes de resolver la alzada, se hace necesario pedir al Director General del IDIAP, que certifique si fue o no decidido el recurso de apelación interpuesto contra el Resuelto N° 032 del 15 de junio de 1995, sustentado el 6 de noviembre del mismo año. Dicha solicitud fue previamente hecha al Honorable Magistrado Sustanciador en la demanda (f. 81).

De consiguiente, el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley DISPONE que, por Secretaría, se requiera al Director General del Instituto de Investigaciones Agropecuarias de Panamá, a fin de que certifique si el recurso de apelación promovido por el licenciado Emilio De León, en nombre y representación del señor JOSÉ DEL CARMEN ESPINOZA QUINTERO, contra el Resuelto N° 032, del 15 de junio de 1995, fue o no resuelto y, en caso afirmativo, que se remita a este Tribunal copia autenticada del acto que lo resuelve.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA ALFARO, FERRER, RAMÍREZ Y ALEMÁN, EN REPRESENTACIÓN DE COMPAÑÍA ASTOR, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 010 DE 20 DE MARZO DE 1995, EMITIDA POR LA MINISTRA DE SALUD, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TREINTA (30) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

Mediante escrito fechado 17 de mayo de 1996, la firma Alfaro, Ramírez & Alemán, actuando en nombre y representación de **COMPAÑÍA ASTOR, S. A.**, ha desistido del recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción presentado el 26 de marzo de 1995, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° 010 de 20 de marzo de 1995, dictada por la señora Ministra de Salud, dentro del proceso administrativo de adjudicación de la Licitación Pública N° 001-DP-94 para el suministro de 19,615 viales o ampollas de Suero Antiojídico Polivalente Líquido.

Del escrito de desistimiento se corrió traslado a la señora Procuradora de la Administración, por el término de tres días, quien no se opuso al mismo.

A juicio de la Sala el desistimiento presentado por el demandante es procedente de conformidad con lo preceptuado en el artículo 66 de la Ley 135 de 1943, en concordancia con el artículo 1080 del Código Judicial, y por tanto, debe acogerse.

De consiguiente, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ACOGE EL DESISTIMIENTO de la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, interpuesta por la firma Alfaro, Ferrer, Ramírez y Alemán, actuando en nombre y representación de Compañía Astor, S. A., para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° 010 de 20 de marzo de 1995, emitida por la Ministra de Salud, y para que se hagan otras declaraciones.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL DOCTOR MIGUEL ANTONIO BERNAL VILLALAZ, EN REPRESENTACIÓN DE YARITZA AMELIA SOLANO DE VILLALAZ, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 713 DE 18 DE SEPTIEMBRE DE 1995, EMITIDA POR LA MINISTRA DE SALUD Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Miguel Antonio Bernal V., actuando en nombre y representación de **YARITZA AMELIA SOLANO DE VILLALAZ**, promovió recurso de apelación contra el auto de 1 de febrero de 1996, mediante el cual el Magistrado Sustanciador no admitió la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° 713 de 18 de septiembre de 1995, emitida por la Ministra de Salud.

Una vez anunciada la impugnación, el Sustanciador, mediante providencia de 25 de abril de 1996, concedió el recurso de apelación, y por providencia de 6 de mayo de 1996, se otorgó un término de 3 días para que el apelante sustentara su recurso y 3 días adicionales para las objeciones de rigor.

Vencidos los términos señalados, según el informe secretarial de 21 de mayo de 1996, el apelante no sustentó la alzada, por lo que, al tenor de lo dispuesto en el artículo 1122 del Código Judicial, debe declararse desierto el recurso de apelación promovido. (Fs. 18).

Por las anteriores consideraciones, el resto de los Magistrados de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARAN DESIERTO el recurso de apelación promovido por el licenciado Miguel Antonio Bernal V., en representación de YARITZA AMELIA SOLANO, contra el auto de 1° de febrero de 1996.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD INTERPUESTA POR EL DOCTOR ROLANDO VILLALAZ, EN REPRESENTACIÓN PROPIA PARA QUE SE DECLARE NULOS, POR ILEGALES, TODOS LOS ACTOS PÚBLICOS CELEBRADOS POR LA AUTORIDAD DE LA REGIÓN INTEROCEÁNICA SOBRE SOLICITUD DE PRECIOS PARA ADQUIRIR VIVIENDAS EN RESIDENCIAL ESPINAR, PROVINCIA DE COLÓN Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TRECE (13) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El doctor Rolando Villalaz Guerra, actuando en su propio nombre, interpuso

ante esta Sala de la Corte Suprema de Justicia demanda contencioso-administrativa de nulidad, el 29 de marzo de 1996, para que se declarara nulos, por ilegales, todos los actos públicos celebrados por la Autoridad de la Región Interoceánica sobre solicitud de precios para adquirir viviendas en Residencial Espinar, Provincia de Colón y para que se hagan otras declaraciones.

Al resolver sobre la admisión de la demanda, la Magistrada Sustanciadora consideró que la misma no debía admitirse, porque en el punto relativo al petitum de la demanda, el actor pidió la nulidad de "todos los actos públicos celebrados por la Autoridad de la Región Interoceánica sobre solicitud de precios para adquirir viviendas en Residencial Espinar, Provincia de Colón" y no se individualizó los actos acusados con toda precisión, como lo exige el artículo 43 a) de la Ley N° 33 de 1946, por tanto, resolvió no admitir la demanda.

El doctor Rolando Villalaz corrigió la demanda presentada antes de notificarse de la resolución que no la admitía y debe resolverse ahora acerca de la admisión de la demanda corregida.

En la parte final de su libelo, el doctor Villalaz pidió la suspensión provisional de los efectos de los actos acusados, sin embargo, por razones de economía procesal, antes de resolver esta solicitud debe examinarse si la demanda corregida cumple con los requisitos legales para ser admitida.

A juicio de la Magistrada Sustanciadora la demanda corregida es también inadmisible porque, si bien los actos que se impugnan fueron debidamente individualizados, se pide que se declare que son nulos por ilegales "los avisos de convocatoria de la Autoridad de la Región Interoceánica de Solicitud de precios para viviendas en el Residencial Espinar en la provincia de Colón" que fueron publicados en distintos periódicos dentro de la República y estos avisos de convocatoria son actos preparatorios y no actos definitivos que son los impugnables mediante la vía contencioso administrativa, como lo preceptúa el artículo 42 de la Ley 135 de 1943, cuyo tenor literal es el siguiente:

> "Artículo 42. Para ocurrir en demanda ante el Tribunal de lo Contencioso-administrativo es necesario que se haya agotado la vía gubernativa, lo que se entenderá cuando los actos o resoluciones respectivas no son susceptibles de ninguno de los recursos establecidos en los artículos 33, 38 , 39 y 41, o se han decidido, ya se trate de actos o resoluciones definitivas, o de providencias de trámite, si estas últimas deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, de modo que le pongan término o hagan imposible su continuación." (El subrayado es nuestro).

Por tanto, no debe dársele curso a la demanda corregida en cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 50 de la citada ley.

De consiguiente, la suscrita Magistrada Sustanciadora, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la demanda contencioso-administrativa de nulidad, corregida, interpuesta por el doctor Rolando Villalaz Guerra, en su propio nombre y representación, para que se declaren nulos, por ilegales, todos los actos públicos celebrados por la Autoridad de la Región Interoceánica sobre solicitud de precios para adquirir viviendas en Residencial Espinar, Provincia de Colón y para que se hagan otras declaraciones.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR LA FIRMA RIVERA Y BOLÍVAR, EN REPRESENTACIÓN DE HERCILIA R. ESPINOSA, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, EL DECRETO N° 294 DE 7 DE DICIEMBRE DE 1994, EMITIDO POR EL ÓRGANO

EJECUTIVO, POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTE (20) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma de abogados Rivera y Bolívar, ha presentado demanda contencioso administrativa de nulidad contra el Órgano Ejecutivo, integrado en este caso por el Presidente de la República y el Ministro de Vivienda.

En la demanda se formula pretensión consistente en una petición dirigida a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia para que ésta declare que es ilegal y, por lo tanto, nulo el Decreto Ejecutivo N° 294 del 7 de diciembre de 1994, expedido por el Órgano Ejecutivo por conducto del Ministerio de Vivienda. En dicho decreto se toman medidas en materia de vivienda, específicamente trata sobre la exclusión del ámbito de aplicación de la Ley 93 de 4 de octubre de 1973 los contratos de arrendamientos de bienes inmuebles destinados para uso habitacional cuyo canon de arrendamiento sea mayor de B/.150.00 mensuales.

La parte demandante considera que el Decreto Ejecutivo N° 294 de 1994 ha violado el artículo 1° de la Ley 93 de 4 de octubre de 1973.

Considera la parte actora que se ha violado el artículo 1° de la Ley 93 de 1973 en forma directa en concepto de indebida aplicación puesto que el Órgano Ejecutivo "a pesar que tiene facultad de determinar los contratos de arrendamientos que se regirán por la libre contratación, ésta facultad no es absoluta, sino por el contrario, tiene límites que le impone la propia ley" cual es el carácter de orden público de los arrendamientos destinados a habitación. Añade que si bien es justo que después de veinte (20) años de imperio de la ley 93 de 1973, es necesario y de derecho que los arrendadores equiparen los canones a los costos actuales, no es justo "ni legal" por otro lado que el Órgano Ejecutivo permita un aumento desmesurado, por lo que, al momento de expedir el Decreto Ejecutivo, se debió fijar un tope porcentual o un techo. La Procuradora de la Administración contestó la demanda mediante la Vista N° 509 de 23 de noviembre de 1995. La mencionada funcionaria, que interviene en este proceso en interés de la ley, considera que se deben desestimar las violaciones alegadas en vista que el Órgano Ejecutivo actuó de conformidad con la Ley, en este caso, con el artículo 1° de la Ley 93 de 1973 y agrega lo siguiente:

> "Ciertamente que la finalidad del arrendamiento destinado para habitación, por ser de orden público, es servir a la colectividad, lo que se evidencia al consagrar nuestra Carta Política el intervencionismo Estatal, dirigido a los sectores de menor ingreso, interviniendo en la relación privada entre arrendador y arrendatario, pero no podemos obviar lo referente a la transición necesaria, para la total liberación a que hace referencia la doctrina, al referirse a la política arrendaticia, y que en el caso del Decreto Ejecutivo N° 294 de 7 de diciembre de 1994, tomó en consideración, el Órgano Ejecutivo, y lógicamente fundamentado en una LEY FORMAL.
>
> Es importante recordar, que han transcurrido más de veinte (20) años desde la expedición de la Ley 93, así como desde la fecha en que se reformó la misma, mediante Ley N° 28 de 1974, y que precisamente esta ley, preveía los cambios que se suscitaran en el futuro, por lo que facultó al Ejecutivo para liberalizar la contratación, condicionándolo y estableciéndole restricciones las cuales se han cumplido en el caso del acto impugnado, cuya legalidad nos resulta evidente."

Concordamos con los señalamientos de la Procuradora de la Administración, a lo que sólo nos queda añadir que los cambios que la ley previó en el tiempo los podemos encontrar en el artículo 38 de la Ley 93, el cual se refiere a las autorizaciones de los canones de arrendamiento por motivos como los siguientes: aumentos en los costos de operación o mantenimiento, el descenso de la tasa de

rentabilidad por debajo de lo justo y razonable, uso, localización o pérdidas.

Estamos además frente a una ley de orden público. en cuanto a este concepto se ha señalado que "la noción de orden público resulta de un conjunto de principios de orden superior, políticos, económicos, morales y algunas veces religiosos, a los cuales una sociedad considera estrechamente vinculada la existencia y conservación de la organización social establecida; la separación de los distintos poderes que ejercen el gobierno, la libertad individual, la propiedad, etc." (tomado de Gustavo Penagos, El acto Administrativo, 5ª edición, Tomo II, Ediciones Librería del Profesional, Bogotá, pág. 303).

Encontramos que la ley 93 no dejó de contemplar, o como señala la Procuradora de la Administración, la Ley 93 "previó" lo arriba señalado, pues para el buen funcionamiento de una sociedad se han tomado en cuenta una serie de factores los cuales son justos y razonables, factores que están contenidos en el artículo 38 de la misma ley. Todos estos elementos buscan un equilibrio entre los miembros de una sociedad para el buen funcionamiento de un país, de un orden social establecido, el cual debe ser el objetivo de toda ley con carácter de orden público.

En relación a que se debió establecer un tope o un margen porcentual en el aumento de los canones de arrendamiento superiores a B/.150.00, esta Sala en caso similar, mediante sentencia de 18 de abril de 1996 señaló lo siguiente:

> "En tal sentido, vemos que el Órgano Ejecutivo al expedir el Decreto Ejecutivo N° 7, en su artículo 1, acápite C, disposición acusada de ilegal, no hizo alusión a **"los tramos de canones de arrendamientos"**. Para proceder a fijar los contratos de arrendamiento tomó en consideración otras características de los contratos de arrendamiento como lo son los diferentes usos que se da a los locales arrendados, y excluyó del ámbito de aplicación de la referida ley 93 los locales comerciales, para uso profesional actividades industriales o docentes. en esta forma, no se ha contravenido el principio de orden público de los arrendamientos de bienes inmuebles particulares destinados para establecimientos comerciales, uso profesional, actividades industriales y docentes, consagrado en el artículo 1 de la Ley 93 de 1973, porque el artículo 38 de la Ley 93 claramente se refiere a **tramos de canones de arrendamiento u otras características**, que en relación con el artículo 1 de la citada Ley, se refiere tanto **al monto del arrendamiento** como otras características del mismo, tales como el uso que se de al local arrendado.
>
> Lo señalado, no rebasa los limites de la potestad reglamentaria conferida en la Ley 93 al Órgano Ejecutivo".

Igualmente, en el presente caso el Órgano Ejecutivo decidió no poner un tope porcentual de los canones de arrendamiento liberados de la Ley 93, en vista de que existían otros factores o características a tomar en cuenta, como los ya señalados en el artículo 38 de la misma ley.

Por todo lo anteriormente expuesto, considera la Sala que el Decreto Ejecutivo N° 294 de 7 de diciembre de 1994 no es ilegal.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley DECLARA que no es ilegal el Decreto ejecutivo N° 294 de 7 de diciembre de 1994.

Cópiese, Notifíquese y Publíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA

(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LCDO. ALEXIS VIANOR HERRERA, EN SU PROPIO NOMBRE Y REPRESENTACIÓN, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL ARTÍCULO 8 DEL DECRETO EJECUTIVO N° 175 DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 1995, EMITIDO POR EL ÓRGANO EJECUTIVO, POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y TESORO. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Alexis Vianor Herrera, actuando en su propio nombre y representación, ha presentado demanda contencioso administrativa de nulidad, con el objeto que se declare nulo, por ilegal, el artículo 8 del Decreto Ejecutivo N° 175 de 14 de septiembre de 1995, emitido por el Órgano Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Hacienda y Tesoro.

En la demanda, se solicita que se declare nulo el artículo 8 del Decreto Ejecutivo N° 175 de 14 de septiembre de 1995 expedido por el Órgano Ejecutivo por medio del cual, "se habilita papel sellado para uso exclusivo de las Notarías." Esa norma tiene el siguiente texto:

> "ARTÍCULO: Los instrumentos públicos y demás actos notariales que se expidan en papel que no cumpla con los requisitos exigidos por este Decreto se presumirán, a estos efectos, sin valor legal, sin perjuicio de las sanciones establecidas en los artículos 986 y 987 del Código Fiscal."

Sostiene el apoderado judicial de la parte demandante que, el acto impugnado ha infringido los artículos 956, 986, 987 del Código Fiscal y el artículo 1141 del Código Civil cuyos textos son los siguientes:

> "ARTÍCULO 956: Cuando llegare a faltar papel sellado para el expendio se usará papel habilitado para los actos y documentos en que deban emplearse conforme a este Título. La habilitación se hará por medio de una nota fechada y firmada que pondrá el funcionario recaudador respectivo, cobrando el importe del papel sellado mediante las estampillas correspondientes, que adherirá y anulará en el papel que así se habilite.
>
> También podrán habilitarse como papel sellado los formularios preparados oficialmente por dependencias del gobierno nacional, impresos en papel simple adhiriéndose estampillas fiscales que cubran el valor del papel sellado, los cuales serán anulados por el funcionario que reciba o expida los formularios mencionados.
>
> También podrá el Órgano Ejecutivo habilitar como papel sellado hojas de papel de calidad y dimensiones similares a las de aquel, para uso exclusivo de las Notarías Públicas que funcionen en la República, estableciendo los requisitos que estimen convenientes para garantizar la autenticidad de dicho papel y para evitar su falsificación. Este papel se denominará "PAPEL NOTARIAL". Hechas las habilitaciones de que trata este párrafo las Notarías estarán obligadas al uso de "PAPEL NOTARIAL" y no podrán usar el papel sellado de que trata el artículo 496 del Código Fiscal.
>
> La violación de esta disposición acarreará la pérdida del cargo sin perjuicio de las sanciones fiscales que correspondan y multa de mil balboas (B/.1,000.00) a cinco mil balboas (B/.5,000.00).
>
> ARTÍCULO 986: El que falsifique el papel sellado, las estampillas postales o las estampillas de timbre fiscal de la República, será castigado con reclusión por cuatro (4) a ocho (8) años, y multa de cuatro mil a diez mil balboas (B/.4,000.00 a B/.10,000.00) según la

cuantía de la falsificación.

El que a sabiendas haga uso de papel sellado o estampillas postales o estampillas de timbre fiscal de la República falsificados o los ponga a la venta, o de cualquier otra manera los ponga en circulación, será castigado con reclusión por tres (3) a seis (6) años de multa de dos mil a seis mil balboas (B/.2,000.00 a B/.6,000.00) según la cuantía de la falsificación ..."

ARTÍCULO 987: Los que otorguen, admitan, presenten, transmitan o autoricen documentos sin que en éstos aparezcan que se ha pagado el impuesto correspondiente, serán sancionados con multa no menos de diez (10) veces ni mayor de cincuenta (50) veces la suma defraudada o arresto de uno (1) a tres (3) años. En ningún caso la multa podrá ser inferior a cincuenta balboas (B/.50.00) ...

ARTÍCULO 1141 del Código Civil: Hay nulidad absoluta en los actos o contratos.

1. Cuando falta alguna de las condiciones esenciales para su formación o para su existencia;

2. Cuando falta algún requisito o formalidad que la ley exige para el valor de ciertos actos o contratos, en consideración a la naturaleza del acto o contrato y no a la calidad o estado de la persona que en ellos interviene;

3. Cuando se ejecuten o celebren por personas absolutamente incapaces, entendiéndose únicamente por tales, los dementes, los sordomudos que no puedan darse a entender por escrito y los menores impúberes."

El licenciado Alexis Vianor Herrera V., fundamenta su pretensión en los siguientes hechos:

"1. En ejercicio de la potestad reglamentaria que le atribuye la parte final del artículo 956 del Código Fiscal, el Órgano Ejecutivo expidió el Decreto Ejecutivo N° 175 de 14 de septiembre de 1995, por el cual regula la habilitación de papel común como papel sellado para uso exclusivo de las Notarías.

2. La citada disposición del Código Fiscal señala las sanciones que acarrea la violación de dicha disposición contemplando tres tipos de penas, a saber: pérdida del cargo, las sanciones fiscales que correspondan y multas de Mil a Cinco Mil Balboas.

3. Los Artículos 956, 986 y 987 del Código Fiscal tienen contempladas todas las penas a que se hacen acreedores los que falsifiquen o los que otorguen, admitan, presenten, transmitan o autoricen documentos sin el pago del impuesto de timbre correspondiente.

4. El artículo 1141 del Código Civil, señala taxativamente las causas de nulidad absoluta de los actos o contratos.

5. El artículo 8 del Decreto Ejecutivo 175 de 14 de septiembre de 1995, siendo un decreto reglamentario, adiciona una sanción o pena no contemplada en la ley fiscal ni en el Código Civil, al declarar sin valor legal los instrumentos públicos y demás actos notariales que se expidan en papel común habilitado como papel sellado con fines notariales que no cumpla con los requisitos exigidos en el decreto reglamentario."

El Ministro de Hacienda y Tesoro, envió el respectivo informe explicativo de conducta, mediante la Nota N° 101-01-663-DMHYT de 12 de octubre de 1995. En dicha nota, se expresa de fojas 15 a 17, lo siguiente:

"... Mediante la Ley N° 38 de 10 de abril de 1974, se adicionó un párrafo al artículo 956 del Código Fiscal, facultándose al Órgano Ejecutivo para habilitar, como papel sellado, hojas de papel de calidad y dimensiones similares a las de aquel, para uso exclusivo de las Notarias Públicas que funcionen en la República.

La meritada disposición legal faculta, además, al Órgano Ejecutivo para que establezca requisitos que estime convenientes para garantizar la autenticidad de dicho papel y para evitar su falsificación.

... De acuerdo con el artículo 956 del Código Fiscal, la Dirección General de Ingresos tiene la facultad legal de habilitar como papel sellado hojas de papel de calidad y dimensiones similares a las de aquel; esto de conformidad a los parámetros establecidos en el artículo 947 de la citada excerta legal. Además, conforme al Decreto 175 se pueden establecer aquellos otros requisitos que permitan garantizar la autenticidad del papel habilitado, puesto que dentro de ello queda así comprendido en la frase `estableciendo los requisitos que estime convenientes para garantizar la autenticidad de dicho papel y evitar su falsificación .

El Decreto 175 ha respondido a la escasez de papel sellado, previendo que sea eludido o defraudado el Fisco con la utilización o uso de papel con medidas, calidades distintas y las hojas del papel habilitado. A tal punto es la restricción del Código Fiscal que advierte que `no podrán usar papel sellado de que trata el artículo 946 ... .

Honorable Magistrado, el artículo 8 del Decreto 175 establece una presunción procesal que hace posible o que es conveniente para la exigencia del papel habilitado y garantiza la cabal aplicación del mismo, ya sea en cuanto a su uso, dimensiones y calidades que a su vez permitirán garantizar o probar en un momento dado la existencia de aquellos actos que deban hacerse constar por instrumento o documento público.

No está demás señalar que existe para las Notarías la obligación de utilizar el papel habilitado de manera que es indispensable que el Decreto 175 advirtiera a la ciudadanía en general, que el no uso del papel habilitado trae como consecuencia probable los efectos ya contemplados en otras disposiciones como el Código Civil y Judicial, que prevén las consecuencias del no cumplimiento de la solemnidades formales de los actos que deben hacerse constar en papel sellado genuino o habilitado".

La Procuradora de la Administración contestó la demanda mediante la Vista N° 3 de 2 de enero de 1996, en la cual apoya las pretensiones de la parte demandante, por considerar que el acto administrativo citado es ilegal.

La Sala Tercera (Contencioso Administrativa) pasa a resolver la presente controversia previas las siguientes consideraciones.

Observa la Sala, que la demanda de nulidad que nos ocupa, se basa en el hecho que, según la parte demandante, el Órgano Ejecutivo por conducto del Ministerio de Hacienda y Tesoro ha rebasado el ámbito de la ley que pretende reglamentar, al declarar en el artículo 8 del Decreto Ejecutivo 175 de 14 de septiembre de 1995 sin valor legal "los instrumentos públicos y demás actos notariales que se expidan en papel que no cumpla con los requisitos exigidos por este Decreto".

La Sala se ha manifestado en diversas ocasiones en relación con la facultad que posee el Presidente de la República con el Ministro respectivo de reglamentar las leyes, la cual está concedida en el numeral 14 del artículo 179 de la Constitución Política. En esa norma se señala que el Presidente de la República, con la participación del Ministro respectivo, tiene potestad para reglamentar las

leyes que lo requieran a fin de asegurar o facilitar su cumplimiento o aplicación.

De lo antes expuesto, se colige que no se trata de una función legislativa, sino de una potestad para reglamentar leyes concedida al Órgano Ejecutivo para su efectiva aplicación y cumplimiento. En ese sentido Gustavo Penagos afirma que, "la generalidad que tiene o debe tener la orden o el reglamento no es criterio suficiente para hacerlo participar de la función legislativa, porque él no "crea" modifica ni extingue una norma jurídica. Solamente provee, en forma general, el modo práctico de su aplicación." (El Acto Administrativo, Tomo I, Cuarta Edición, Ediciones Librería del Profesional, Bogotá, 1987, pág. 425).

Igualmente esta Sala ha señalado que la potestad reglamentaria posee una serie de límites que se derivan del principio constitucional de la "reserva de ley", como de la propia naturaleza de los reglamentos, particularmente los reglamentos de ejecución de ley, como en este caso, que están subordinados a ella. Es decir, dichos actos no pueden alterar en ningún caso, ni el texto ni el espíritu de la ley que reglamenta. Como corolario de lo anterior, también se ha manifestado que los límites de la potestad reglamentaria pueden ser de carácter formal o de índole material. Con respecto a este tópico, la Sala en sentencia fechada el 29 de octubre de 1991 señaló que:

> "Los primeros atañen a la competencia para dictar el reglamento, al respecto por las normas de superior jerarquía, sobre todo a la Constitución y a las leyes, según se prevé en el artículo 15 del Código Civil, y al respecto por el procedimiento legal para la elaboración y promulgación de los reglamentos. Los límites materiales hacen relación con la limitación de la potestad discrecional de reglamentar las leyes, que debe ejercerse en interés público y no con abuso o desviación de poder; a la materia que puede ser objeto del reglamento, entendiéndose que el mismo `está ordenado inicialmente al propio campo de funciones que la Administración tiene atribuidas en el concierto público. (Eduardo García de Enterría y Tomás Ramón Fernández, op. cit., pág. 216) y también se refiere a la irretroactividad de los reglamentos, en virtud del principio previsto en el artículo 43 de la Constitución que, si bien se refiere a las leyes, a fortiori es aplicable a los reglamentos, que están subordinados a las leyes."

Después del análisis efectuado, queda claro, pues, que todo reglamento está subordinado tanto a la Constitución como a las leyes, de conformidad con el artículo 15 del Código Civil. En el caso de los reglamentos de ejecución de las leyes, el respeto a la jerarquía normativa es, como ha quedado establecido, uno de los límites formales de la potestad reglamentaria. No obstante, a criterio de la Sala, no se ha dado la violación a los artículos 956, 986 y 987 del Código Fiscal, toda vez que la presunción contemplada en el artículo 8 del Decreto Ejecutivo 175 de 14 de septiembre de 1995, no infringe las citadas normas del Código Fiscal, pues, no impone cargas tributarias, ni sanciones pecuniarias o privativas de la libertad.

Finalmente, en cuanto al cargo de ilegalidad que se le imputa al artículo 8 del Decreto Ejecutivo N° 175 de 14 de septiembre de 1995, por ser violatorio del artículo 1141 del Código Civil, coincide la Sala con lo expresado por la parte actora en la medida en que aquella norma reglamentaria establece una presunción de nulidad de un acto privado la cual no admite prueba en contrario. Esa sanción no está contemplada en la ley. Lo anterior es así, dado que, si bien es cierto que en nuestro país la potestad reglamentaria de las leyes puede extenderse a diversas materias del campo jurídico privado, no es menos cierto que el Órgano Ejecutivo sólo puede hacerlo si la materia no constituye reserva de ley como es el caso de las presunciones jure et de jure.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA QUE ES NULO POR ILEGAL el artículo 8 del Decreto Ejecutivo N° 175 de 14 de septiembre de 1995 emitido por el Órgano Ejecutivo por conducto del Ministerio de Hacienda y Tesoro.

Notifíquese, Cúmplase y Publíquese En La Gaceta Oficial.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO RAFAEL SOLANO G., EN REPRESENTACIÓN DE SANDRA ISABEL ELETA BOYD, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 14 DE 30 DE MARZO DE 1992, DICTADA POR LA ALCALDÍA DEL DISTRITO DE PORTOBELO. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Rafael Solano G., actuando en nombre y representación de Sandra Isabel Eleta Boyd, ha interpuesto ante esta Sala de la Corte Suprema de Justicia demanda contencioso-administrativa de nulidad para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° 14 de 30 de marzo de 1992, dictada por la Alcaldía del Distrito de Portobelo, y para que se hagan otras declaraciones.

La demanda interpuesta fue admitida y se corrió en traslado a la Procuradora de la Administración quien, mediante su Vista Fiscal N° 442 del 23 de octubre de 1995, solicitó a la Sala, que declare nulo el acto acusado. (F. 106). También se requirió, y se recibió oportunamente, un informe explicativo de conducta del Alcalde Municipal del Distrito de Portobelo, cumpliendo lo preceptuado en el artículo 33 de la Ley 33 de 11 de septiembre de 1946. (Fs. 89-106).

Cabe señalar que como parte interesada en este negocio intervino la firma Moreno y Fábrega en nombre y representación del señor Alberto Fabio Díaz Caballero, quien se opuso a las pretensiones de la demandante. (Fs. 76-83 y 125-135).

I. CONTENIDO DEL ACTO IMPUGNADO

La Resolución acusada tiene el contenido siguiente:

"RESOLUCIÓN N° 14
DE DERECHO POSESORIO

Por medio de la cual el señor ARSENIO JIMÉNEZ SOLÍS, traspasa unas mejoras de Terreno Nacional al señor ALBERTO FABIO DÍAZ CABALLERO.

CONSIDERANDO

ART. PRIMERO: Que el señor ARSENIO JIMÉNEZ SOLÍS, varón, panameño, mayor de edad, portador de la cédula de identidad personal N° 3-83-550, traspasa unas mejoras de Terreno Nacional (sic), la cual le fue concedido mediante recibo del Municipio del Dtto. (sic) de Portobelo, fechado el día 13 de Julio de 1955, al señor ALBERTO FABIO DÍAZ CABALLERO, varón, panameño, mayor de edad, casado, portador de la cédula de identidad personal N° 8-115-699, con residencia en el Corr. (sic) de San Francisco, Prov. de Panamá, Ave. 3ª, Sur, casa N° 34.

ART. SEGUNDO: Que las mejoras en un lote de terreno Nacional (sic) que el señor ARSENIO JIMÉNEZ SOLÍS, traspasa al señor ALBERTO FABIO DÍAZ CABALLERO, se encuentra dentro de los siguientes linderos: AL NORTE: Terreno Nacional y Baja Mar, AL SUR: Baja Mar y Playa Huerta,

ESTE: Terreno Nacional y el señor CELEDONIO MOLINAR, AL OESTE: BAJA MAR. Consistente de quince (15) Héctarias. (sic).

ART. ÚNICO: Concede el Derecho Posesorio al señor ALBERTO FABIO DÍAZ CABALLERO en el lugar denominado PUERTO FRANCÉS, del Dtto. de Portobelo.

Dado en el Despacho (sic) de la Alcaldía del Distrito de Portobelo, a los treinta (30) días del mes de marzo de mil novecientos noventa y dos (1992).

REGISTRADO EN EL LIBRO DE REGISTRO DE DERECHOS POSESORIOS CON EL N° 13 B/.25.00.

HERNÁN DEL CID KENNION
ALCALDE DEL DISTRITO DE PORTOBELO

YAQUEL VEGA
Secretario (sic)."

II. NORMAS VIOLADAS Y EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN

Según el demandante, la Resolución N° 14 de 30 de marzo de 1992, violó los artículos 5,13 y 17 de la Ley 91 del 22 de diciembre de 1976; los artículos 3,5 y 7 de la Ley 21 del 16 de diciembre de 1986; los artículos 3,5,8,116 y 141 del Código Fiscal; los artículos 3, 17 (8 y 10),38,39 y 42 de la Ley 106 del 8 de octubre de 1973.

La primera disposición que se estima infringida es el artículo 17 de la Ley 91 del 22 de diciembre de 1976, que es del tenor siguiente:

"Artículo 17. El Instituto Panameño de Turismo y la Dirección General de Recursos Naturales Renovables del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, serán responsables por la promoción, conservación, manejo y uso del Parque. Las responsabilidades de cada una de esas entidades serán establecidas mediante convenio entre el Ministerio y el Instituto Panameño de Turismo y se regirán por un reglamento, que para la conservación, uso y manejo del Parque dicten dichos organismos."

Al exponer el concepto de la infracción, la actora manifiesta que esta norma se violó porque no corresponde a la Alcaldía del Distrito de Portobelo la promoción, conservación y manejo del Parque de Portobelo, la norma citada otorga esta responsabilidad a otras instituciones. Además, por tratarse de áreas que no pertenecen a los ejidos municipales, escapan del marco de las facultades que la Ley señala a esta entidad distrital. Por último, señala la actora que el Municipio de Portobelo no tiene capacidad técnica ni competencia legal para cumplir o emitir las decisiones relacionadas con esta área especial.

Los apoderados judiciales del señor Díaz Caballero, quien actúa como tercero interesado, en su alegato afirman que esta norma no es aplicable en la controversia que nos ocupa porque en el acto que aquí se impugna se adjudica unos derechos posesorios y las instituciones a las que la norma se refiere no están facultas para hacer adjudicaciones. Además, en su opinión, esta disposición establece ciertas limitaciones a un área de terreno, que se refieren a la manera en que han de ser desarrolladas o utilizadas, pero no a su apropiación por particulares.

Con respecto al artículo 13 ibídem, la actora únicamente estimó violados los literales a, b y c, cuyo texto es el siguiente:

"Artículo 13. La recomendación de declaratoria de monumentos históricos dentro de los conjuntos monumentales tendrá los siguientes efectos:

a) Quedarán afectados por lo dispuesto en la legislación vigente en

la materia.

b) No podrán ser cedidos o enajenados bajo ningún título a personas particulares.

c) Sólo podrán realizarse en él obras de consolidación, conservación y restauración cuando la condición del monumento y una suficiente documentación de archivos así lo permitan y según lo establecido mediante acuerdos internacionales sobre la materia, siempre que se ajusten a las circunstancias ambientales e históricas de Panamá y hayan sido aprobadas y ratificadas formalmente ..." (El subrayado es nuestro).

La actora señala que el artículo citado, se violó porque mediante la resolución acusada la Alcaldía de Portobelo concedió derechos posesorios, a pesar de la prohibición de ceder a cualquier título, que contiene el literal b y de las demás limitaciones impuestas por la norma. En relación con este cargo, el tercero interesado alega que la resolución impugnada, no puede violar el artículo citado porque la prohibición a la que se refiere va dirigida a la posible apropiación de monumentos históricos y el terreno al cual se hace referencia no ha sido declarado monumento histórico.

El artículo 5 de la Ley 91 del 22 de diciembre de 1976, que el actor cita como violado, establece lo siguiente:

"Artículo 5. Confiéresele categoría de Conjuntos Monumentales a las áreas históricas de Portobelo, Panamá Viejo y el Casco Antiguo de la Ciudad de Panamá, así como el Parque Nacional de Portobelo."

La actora asegura que este precepto se ha infringido por violación literal ya que, debido a que el área sobre la cual se han concedido derechos posesorios es parte del Parque Nacional de Portobelo, posee una categoría especial, y su uso debe ajustarse a lo que permita la ley sustantiva, circunstancia que ha desconocido el acto acusado. Sobre este punto, el tercero interesado se muestra de acuerdo en que ésta es un área que posee una categoría especial, pero no coincide en que dicha norma prohíba que los terrenos dentro del Parque Nacional de Portobelo puedan ser objeto de apropiación. También señala que el artículo anteriormente citado, reconoce al área como un Conjunto Monumental, sobre la cual existen restricciones para el aprovechamiento y no para la apropiación, por lo que señala a los artículos 8 y 9 de la misma ley que se refieren a las restricciones administrativas que existen para desarrollar el lugar, poniendo una serie de obligaciones a los propietarios, pero no prohíbe su apropiación.

Otra disposición que se estimada violada por la actora es el artículo 3 de la Ley 21 del 16 de diciembre de 1986, que preceptúa lo siguiente:

"Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley, se entiende como ámbito de acción del Instituto, todas las funciones que pasen a ser de su responsabilidad por mandato expreso de esta u otras leyes y todas aquellas relativas a bosques, aguas, suelos, fauna y flora silvestre, parques naturales, reservas equivalentes y cuencas hidrográficas en el territorio nacional, que al momento no estén siendo definidas, planificadas, organizadas, coordinadas, reguladas, dirigidas o determinadas sus políticas y acciones de conservación y desarrollo por otra entidad estatal definida por Ley ..."

En opinión del recurrente, esta norma ha sido quebrantada, porque al dictarse el acto impugnado se crea un problema de usurpación de competencias, ya que el Alcalde de Portobelo realiza o lleva a cabo actos de poder o disposición de estas áreas, que están bajo la responsabilidad del Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables.

El artículo 5 de la mencionada Ley, que también se considera infringido, dispone lo siguiente:

"Artículo 5. Para el logro de los objetivos enunciados, el Instituto

tendrá las siguientes funciones y facultades:

1. Actuar como autoridad rectora en el desarrollo, aprovechamiento, manejo y conservación de los recursos naturales renovables.

2. Orientar y dirigir las acciones de conservación y mejoramiento del ambiente natural encaminadas a prevenir la contaminación ambiental que pueda afectar los recursos naturales renovables, mitigar sus efectos contaminantes y recuperar el equilibrio ecológico.
...
10) Aplicar las normas jurídicas vigentes sobre los recursos naturales renovables.
..."

Considera la actora que el precepto transcrito se violó porque el Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables es la única entidad rectora en el desarrollo, aprovechamiento, manejo y conservación de las áreas silvestres protegidas y no la Alcaldía de Portobelo, que ha usurpado las funciones de la referida Institución.

En cuanto al artículo 7 de la Ley en cita, esta norma dispone lo siguiente:

"Artículo 7. Las actividades de protección, aprovechamiento, conservación y desarrollo de los recursos naturales renovables, se regirán por las leyes especiales que regulan la materia o que con tal fin se expidan en el futuro."

Conforme a lo expresado por la actora, este artículo fue violado directamente, por infracción literal de la ley, porque el Alcalde "se abroga facultades que la ley no le asigna". (F. 12).

Respecto a la alegada violación de los citados artículos 3,5 y 7, los apoderados judiciales del tercero interesado expresan que para que estas normas pudieran ser violadas por el acto impugnado, habría que partir del supuesto de que la materia objeto de ese acto administrativo es un bien inmueble de naturaleza forestal o un recurso natural renovable. Esta opinión coincide con la de la señora Procuradora de la administración, quien en su vista fiscal expone:

"A nuestro juicio, la Resolución N° 14 de 1992, no ha tenido la pretensión de afectar el patrimonio forestal ni animal de las quince (15) hectáreas, dadas en posesión al señor ALBERTO FABIO DÍAZ CABALLERO. Lo que sí ha hecho dicha resolución, es conceder al señor DÍAZ CABALLERO, unos derechos posesorios sobre una tierra propiedad de la Nación."

Agrega el tercero interesado que la concesión de este derecho, no infringe la normativa que regula el Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables, debido a que las obligaciones que le impone la ley al Instituto consisten en proteger el desarrollo de los terrenos que forman el Parque Nacional de Portobelo, que tiene la categoría especial de Conjunto Monumental.

El apoderado de la actora considera que el acto acusado también violó el artículo 3 del Código Fiscal, norma que a continuación transcribimos:

"Artículo 3. Son bienes nacionales, además de los pertenecientes al Estado y los de uso público, según los enumera la Constitución en sus artículos 254 y 255, todos los existentes en el territorio de la República que no pertenezcan a los Municipios, a las entidades autónomas o semiautónomas, ni sean individual o colectivamente de Propiedad particular."

A juicio de la demandante, el acto acusado viola la disposición transcrita debido a que el Alcalde de Portobelo no podía disponer de bienes que no han sido declarados patrimonio municipal y además concedérselos a particulares bajo cualquier título.

Sostiene la actora, que la resolución atacada viola el artículo 5 del Código Fiscal, el cual preceptúa lo siguiente:

> "Artículo 5. Los Municipios y las Asociaciones de Municipios tienen sus respectivas haciendas que se rigen, en cuanto a su organización, administración y disposición, por los Acuerdos respectivos, dentro de los límites prescritos por la Constitución y la Ley."

Se considera infringida esta disposición por la demandante, en el concepto de violación directa, ya que el Municipio de Portobelo sólo puede disponer de los bienes de su propiedad y no de bienes pertenecientes a otras personas.

La demandante considera violado el artículo 8 del mismo Código, cuyo contenido expresa lo siguiente:

> "Artículo 8. La administración de los bienes nacionales corresponde al Ministerio de Hacienda y Tesoro. Los destinados al uso, o a la prestación de un servicio público serán administrados por el Ministerio o entidad correspondiente, de conformidad con las reglas normativas y de fiscalización que establezca el Órgano Ejecutivo.
>
> Cada Ministerio, entidad descentralizada y empresa estatal mantendrán un inventario actualizado de los bienes muebles e inmuebles de propiedad de las entidades estatales, incluyendo los de los Municipios.
>
> La Contraloría General de la República ejercerá sobre los bienes nacionales la atribución fiscalizadora que le es privativa de conformidad con la Constitución y las leyes.
>
> Parágrafo: Las entidades públicas tendrán un término de nueve (9) meses para completar el referido inventario y remitir copia del mismo al Ministerio de Hacienda y Tesoro, a partir de la vigencia de este Decreto."

La actora considera que se violó el mencionado artículo porque los Parques Nacionales, en especial el de Portobelo, son áreas de uso público, cuya dirección ha sido conferida al Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables en virtud de su condición de área protegida. Este hecho no fue tomado en cuenta por el Alcalde de Portobelo al dictar el acto acusado.

El artículo 116 del Código Fiscal, que se cita como violado, establece lo siguiente:

> "Artículo 116. Son inadjudicables las siguientes tierras baldías:
> ...
> 3. Los terrenos inundados por las altas mareas, sean o no manglares, así como los comprendidos en una faja de doscientos metros (200 m.) de anchura y hacia dentro de la costa, en tierra firme."

En el concepto de la infracción, la parte actora manifiesta que esta norma se violó en forma directa por la resolución acusada, ya que en las áreas sobre las cuales se han concedido derechos de posesión, existen áreas que son inadjudicables.

Con relación al artículo 141 del Código Fiscal, esta norma es del contenido siguiente:

> "Artículo 141. La adjudicación y el uso de las tierras comprendidas en el área y ejidos de las poblaciones serán reglamentados por los respectivos Consejos Municipales de acuerdo con las leyes sobre la materia.
>
> En todo caso se respetarán los derechos de los ocupantes con edificios construidos dentro del área de las poblaciones.

Parágrafo 1: Aún cuando los Municipios no hayan obtenido los títulos de sus áreas o ejidos según este Código, la adjudicación y el uso de las tierras ocupadas por núcleos urbanos se regirán por los reglamentos Municipales de acuerdo con las leyes sobre la materia.

Parágrafo 2: Sin embargo, podrá el Ministerio de Hacienda y Tesoro adjudicar a los particulares lotes en plena propiedad dentro de las tierras reservadas a los Municipios descritos en el Artículo 14O, si se reúnen las siguientes condiciones:

1. Que tal adjudicación haya sido solicitada por el Municipio respectivo.

2. Que se trate de un ocupante que acredite sus derechos posesorios.

3. Que el lote que se vaya a adjudicar no tenga un área mayor de 1000 m2.

4. Que dicho lote se ajuste, por su localización y dimensiones a la futura lotificación del núcleo poblado que será objeto de reglamentación por el Municipio.

5. Que sobre dicho lote se vaya a construir una vivienda financiada por una entidad sin fines de lucro, que trabaje con fondos suministrados por organismos nacionales o internacionales, según proyecto de contrato respectivo que se le presente al Municipio.

6. Que el pago del lote de terreno adjudicado se haga al Municipio respectivo cuando éste dicte la reglamentación correspondiente."

En opinión de la demandante, esta norma ha sido violada porque el Municipio de Portobelo reconoció derechos posesorios en un área que no constituye un núcleo urbano y cuya administración ha sido adjudicada por ley, a otra institución.

El artículo 3 de la citada Ley, establece lo que sigue:

"Artículo 3. Las autoridades municipales tienen el deber de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República, los decretos y órdenes del Ejecutivo y las resoluciones de los tribunales de justicia ordinaria y administrativa."

Al exponer el concepto de la infracción, la actora señala que la violación se produjo porque las autoridades alcaldicias del distrito de Portobelo, omitieron su obligación de cumplir la Ley que crea e incorpora al Parque Nacional de Portobelo parte de los terrenos cuyos derechos posesorios fueron cedidos al señor Alberto Fabio Díaz Caballero.

Con respecto a la violación de los numerales 8 y 10 del artículo 17 de la Ley N° 106 de 1973, la Sala observa que el actor incurrió en el error de no citar el contenido actual de estos dos numerales, sino su texto antes de ser modificados por la Ley N° 52 de 12 de diciembre de 1984, que expresaba lo siguiente:

"Artículo 17. Los Consejos Municipales tendrán competencia exclusiva, para el cumplimiento de las siguientes funciones:

8. Disponer de los bienes y derechos del Municipio y adquirir los que sean necesarios para la eficiente prestación de los servicios públicos municipales, con las limitaciones que establezca esta ley.
...
10. Reglamentar el uso, arrendamiento, ventas y adjudicación de solares o lotes y demás bienes municipales que se encuentren dentro de las áreas y ejidos de las poblaciones, y de los demás terrenos municipales ...".

En opinión del recurrente, esta disposición fue violada directamente por

el acto atacado debido a que le corresponde al Consejo Municipal disponer de los bienes que son de propiedad del Municipio y no a los Alcaldes. Además, para que los Municipios puedan disponer de estos bienes, es necesario que se hayan declarado bienes municipales.

El artículo 38 de la ley 106 del 8 de octubre de 1973 dispone lo siguiente:

> "Artículo 38. Los Consejos dictarán sus disposiciones por medio de Acuerdos o Resoluciones que serán de forzoso cumplimiento en el distrito respectivo tan pronto sean promulgados, salvo que ellos mismos señalen otra fecha para su vigencia."

El citado precepto se considera violado directamente por infracción literal de la ley, ya que el alcalde expidió la resolución acusada sin autorización del Consejo Municipal.

El apoderado de la actora considera que el acto atacado violó el artículo 39 ibídem, norma que a continuación transcribimos:

> "Artículo 39. Los Acuerdos se promulgarán por medio de su promulgación en tablillas ubicadas en la Secretaría del Consejo en las de la Alcaldía y en las corregidurías. Estos Acuerdos serán fijados por el término de diez (10) días calendario a fin de que surtan sus efectos legales.
>
> Los Acuerdos referentes a impuestos, contribuciones, derechos, tasas y adjudicación de bienes municipales deben ser publicados en la Gaceta Oficial."

La actora considera que este artículo se violó por infracción literal de la ley, porque no se utilizó el procedimiento indicado en la misma para promulgar la resolución impugnada.

Finalmente, también se considera infringido el artículo 42 de la Ley en cita, cuyo contenido expresa lo siguiente:

> "Artículo 42. Los Consejos adoptarán por medio de Resoluciones las decisiones que no sean de carácter general y establecerán en su Reglamento los requisitos relativos a otros no previstos en esta ley."

De acuerdo con la actora, esta norma se refiere a otras decisiones que no sean las de transmitir en carácter de adjudicación a cualquier título lotes o tierras, por lo que si el alcalde en el acto acusado actuó en la creencia de estar disponiendo lícitamente de un área municipal, faltó al procedimiento, con lo cual, aún en es supuesto, se estaría en presencia de un acto ilegal.

III. CONSIDERACIONES Y ANÁLISIS DE LA SALA

Por razones de economía procesal la Sala estima que debe confrontar el acto acusado, en primer lugar con el artículo 3 del Código Fiscal, en relación con el artículo 3 de la Ley 106 de 1973. En el artículo 3 del Código Fiscal se define como bienes nacionales, los pertenecientes al Estado y los de uso público, y los existentes dentro del territorio de la República que no pertenezcan a los municipios, a las entidades autónomas o semiautónomas ni sean individual o colectivamente de propiedad particular. Como por medio del artículo único de la resolución impugnada se resuelve conceder derechos posesorios sobre bienes nacionales, y el Alcalde Municipal de Portobelo no está facultado para disponer de los mismos, a juicio de la Sala le asiste la razón a la demandante cuando alega que el acto impugnado viola el artículo 3 del Código Fiscal. El Alcalde de Portobelo no puede reconocer derechos posesorios sobre bienes nacionales cuya adjudicación, sí procede, corresponde a la Dirección Nacional de Reforma Agraria, de conformidad con el artículo 139 del Código Agrario y a los numerales 1 y 8 del literal a) del artículo 12 de la Ley 12 de 25 de enero de 1973.

Por las mismas razones, se considera infringido el artículo 3 de la Ley 106

del 8 de octubre de 1973, norma de carácter general que ordena a las autoridades municipales que deben cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República.

Ahora bien el acto impugnado, que es la Resolución N° 14 de 30 de marzo de 1992, consta de dos considerandos que se refieren a mejoras construidas sobre un lote de terreno nacional. Al rendir el informe de conducta la autoridad demandada expuso lo siguiente:

> "... encontramos que el señor Arsenio Jiménez (sic) Solís, es poseedor de un documento expedido a su favor por la Reforma Agraria, que no haya cumplido como es debido con las tramitaciones legales del caso en ese entonces, no se puede desconsiderar que es dueño y poseedor (sic) de las mejoras en dicho globo de terreno, ya que dicho documento fue (sic) expedido anticipadamente a cualquier fundamento legal pronunciados por el letrado en derecho. Con lo anterior, al vender al señor Jiménez su posesión y mejoras al señor Díaz (sic), a nuestro juicio, esta Institución no ha incurrido en nínguna (sic) actuación ilegal, mas (sic) bien hemos servido de aval en una transacción personal y reafirmando lo ya concedido por la Reforma Agraria en 1965 a favor del señor Arsenio Jiménez Solís como legitimo (sic) dueño de unas mejoras y posesión de un globo de Terreno (sic) ubicado en este Distrito de Portobelo (Puerto Fracés) (sic), de 15 héctarias (sic) ..."

Con base en el documento, que según el señor Alcalde, la Reforma Agraria expidió al señor Arsenio Jiménez Solís, se dictó el acto impugnado.

De acuerdo con el artículo 139 del Código Agrario se reconocerán derechos posesorios a quienes ocupen tierras estatales que cumplan con su función social, y este reconocimiento compete a la Comisión de Reforma Agraria de conformidad con el artículo 12 (a) 1° y 8°) de la Ley 12 de 1973.

El traspaso de los llamados derechos posesorios o mejoras en tierras estatales fue reglamentado por la Comisión de Reforma Agraria por medio de la Resolución N° CRA-096, fechado el 4 de agosto de 1966. Conforme esta reglamentación el traspaso debe ser autorizado por los Jefes Provinciales de la Reforma Agraria mediante una Resolución, previo el cumplimiento de ciertos requisitos y sujeto al procedimiento que en esa resolución se establece.

Compete por tanto, a la Comisión de la Reforma Agraria reconocer los derechos posesorios sobre terrenos nacionales y aprobar su traspaso de acuerdo con las normas citadas y demás relacionadas del Código Agrario y del Ministerio de Desarrollo Agropecuario.

El señor Alcalde sólo tiene facultad para reconocer derechos posesorios sobre terrenos municipales, de conformidad con los acuerdos que dicte el Consejo Municipal al efecto. Por tanto, al confrontar el acto impugnado con el artículo 3 del Código Fiscal, en relación con el artículo 3 de la Ley 106 de 1973, se ha determinado la ilegalidad del acto impugnado, y así debe declararse.

Ante esta realidad se estima irrelevante confrontar el acto impugnado con las otras normas citadas como violadas.

El demandante pretende que además de la declaratoria de ilegalidad del acto impugnado se declare: a) que el señor Alberto Fabio Díaz Caballero, a favor de quien el Alcalde Municipal de Portobelo resolvió reconocer derechos posesorios, "debe abstenerse de actos de posesión y utilización" sobre el lote de terreno en disputa; b) que su mandante ni ninguna otra persona está obligada "a soportar el ejercicio de derechos de posesión otorgados por la Alcaldía" mediante el acto impugnado; c) que Alberto Fabio Díaz Caballero carece absolutamente de derechos de posesión sobre el mencionado lote de terreno.

Como ha quedado expuesto, hacer estas declaraciones compete a la Comisión de Reforma Agraria, entidad que, a solicitud de parte interesada deberá resolver acerca de los derechos posesorios sobre el lote descrito en el acto impugnado.

Además, el fin de los procesos contencioso-administrativos de nulidad, como el que nos ocupa, es únicamente la preservación del orden jurídico y sólo procede declarar la nulidad de los actos ilegales.

Es en los procesos contencioso-administrativos de plena jurisdicción que, además de anularse el acto impugnado, por ilegal, puede demandarse el restablecimiento de derechos subjetivos violados.

Por lo expuesto, las declaraciones a que nos hemos referido deben negarse.

De consiguiente, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley DECLARA NULA, POR ILEGAL, la Resolución N° 14 de 30 de marzo de 1992, expedida por el Alcalde Municipal del Distrito de Portobelo y NIEGA las otras declaraciones pedidas.

Cópiese y Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD INTERPUESTA POR EL LICENCIADO MIGUEL SIFONTES, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE IDALDO ATENCIO BÓSQUEZ, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 2 DEL 18 DE AGOSTO DE 1995, DICTADA POR LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA DE HERRERA Y EL ACTO CONFIRMATORIO. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Miguel Sifontes, actuando en nombre y representación del señor IDALDO ATENCIO BÓSQUEZ, interpuso ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia demanda contencioso-administrativa de nulidad para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° 2 del 18 de agosto de 1995, dictada por la Dirección Provincial de Educación de Herrera y el acto confirmatorio.

Al resolver la admisión de la demanda, la suscrita Magistrada Sustanciadora estima que la misma no debe admitirse porque los actos que en el presente caso se impugnan no constituyen actos definitivos o finales, es decir, no ponen término a una actuación o negocio administrativo ni crean, modifican o extinguen una situación de derecho que afecte al demandante. Los actos atacados tienen el carácter de "preparatorios o de mero trámite", en la medida en que simplemente resuelven solicitar al Órgano Ejecutivo la aplicación de la sanción disciplinaria de destitución, contra el educador IDALDO ATENCIO BÓSQUEZ. Así se desprende de la parte resolutiva de la Resolución N° 2 del 18 de agosto de 1995, que expresa lo siguiente:

> "ARTÍCULO UNO: Solicitar al Órgano Ejecutivo, por conducto de la Dirección Nacional de Primer Nivel de Enseñanza, la destitución de su cargo del maestro Idaldo Atencio Bósquez por conducta que riñe con la moralidad que debe observar un educador." (Fs. 1-2).

Como los actos que se impugnan no tienen el carácter de definitivos o finales, tampoco son acusables ante la jurisdicción contencioso-administrativa, tal cual ha señalado reiterada jurisprudencia de esta Sala (Cfr. fallos del 12 y 15 de junio de 1992 y 20 de enero de 1994, entre otros). En todo caso, sería impugnable el acto mediante el cual se sanciona con la destitución al prenombrado señor ATENCIO BÓSQUEZ.

Sin perjuicio de lo expresado y a manera de ilustración, la suscrita

Magistrada Sustanciadora estima necesario referirse a otros defectos de la demanda que igualmente la hacen inadmisible, a saber:

A foja 10 se observa que el acto confirmatorio fue notificado al demandante el día 29 de febrero de 1996 y la demanda contencioso-administrativa se interpuso el 9 de mayo del mismo año, es decir, cuando la acción estaba prescrita. El artículo 42 B) de la Ley N° 135 de 1943, dispone a este respecto que la acción encaminada a obtener la reparación de derechos subjetivos prescribe, salvo disposición en contrario, al cabo de dos (2) meses contados a partir de la notificación del acto que causó la demanda.

Por otra parte, la demanda no se dirigió al Magistrado Presidente de la Sala, tal como ordena el artículo 302 del Código Judicial. Tampoco contiene la designación de las partes y de sus representantes, ni la exposición del concepto de la infracción de las normas que se citan como violadas, requisitos esenciales exigidos por los numerales 3 y 4 del artículo 43 de la precitada Ley.

Finalmente, se observa que el apoderado del actor interpuso una demanda contencioso-administrativa de nulidad, acción dirigida a atacar actos de carácter general y no situaciones de naturaleza individual o particular, como la del presente caso, que guarda relación exclusiva y directa con el señor IDALDO ATENCIO BÓSQUEZ.

Por las razones anotadas, la suscrita Magistrada Sustanciadora considera que la presente demanda no debe admitirse y así procede a decidirlo.

De consiguiente, la suscrita Magistrada Sustanciadora, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la demanda contencioso-administrativa de nulidad interpuesta por el licenciado Miguel Sifontes, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° 2 del 18 de agosto de 1995, dictada por la Dirección Provincial de Educación de Herrera y el acto confirmatorio.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JOSÉ D. FAJARDO EN REPRESENTACIÓN DE BERASVAS, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL RESUELTO N° 135 DE 22 DE FEBRERO DE 1995, DICTADO POR EL MINISTERIO DE HACIENDA Y TESORO. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado José D. Fajardo, actuando en nombre y representación de **BERASVAS, S. A.**, ha promovido y sustentado recurso de apelación contra la Resolución de 23 de abril de 1996, mediante la cual el Magistrado ponente **no admite** la demanda Contencioso Administrativa de Nulidad promovida contra el Resuelto N° 135 de 22 de febrero de 1995, proferido por el Órgano Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Hacienda y Tesoro.

Mediante el auto apelado, el Magistrado Sustanciador señaló que la demanda presentada por **BERASVAS, S. A.** contra el Resuelto N° 135 de 22 de febrero de 1995, carecía de ciertos requisitos formales y esenciales, que imposibilitaban su admisión; que la sociedad demandante intervino en el proceso gubernativo ante el Ministerio de Hacienda y Tesoro, al presentar recurso de reconsideración contra la misma resolución que se impugna en este proceso, N° 135 de 22 de febrero de 1995, recurso que le fue negado mediante la Resolución N° 363 de 24

de mayo de 1995, por medio de la cual se confirmó en todas sus partes el acto original, y se advirtió a **BERASVAS, S. A.** que esa decisión agotaba la vía gubernativa. Siendo ello así, el peticionista debió instaurar una acción de plena jurisdicción y no de nulidad para enervar los efectos de la Resolución N° 135 de 1995.

Señaló además el Magistrado Sustanciador, que la demanda pretende en realidad la reparación de los derechos subjetivos de **BERASVAS, S. A.**, lo que debe demandarse mediante la acción de plena jurisdicción; y que como no se presentó la constancia de notificación del recurso de reconsideración mencionado, tal como lo requiere el artículo 44 de la Ley 135 de 1943, la demanda no puede admitirse como de plena jurisdicción, porque en autos no se ha probado que fue interpuesta en tiempo oportuno conforme lo exige el artículo 42 b) de la Ley 135 de 1943.

Por su parte, el demandante sustentó el recurso de apelación alegando que, en la vía gubernativa, ante el Ministerio de Hacienda y Tesoro, se le dijo que no era parte en el proceso administrativo de bien oculto; que el demandante optó por presentar acción de nulidad, no en calidad de afectado, sino de persona jurídica domiciliada en la República, acción que no tiene término de prescripción y que se puede interponer en cualquier momento a partir de la notificación, expedición o publicación del acto acusado; que no es cierto que en esta demanda de nulidad se haya solicitado reparación de perjuicio alguno; que por tratarse de una demanda de nulidad no se presentó la constancia de notificación, sino la constancia de publicación del acto acusado, Gaceta Oficial N° 22745 de 20 de marzo de 1995; y que la solicitud de suspensión provisional obedece a que el acto impugnado es "atentatorio a una colectividad de personas jurídicas y naturales como consta en el abundante caudal probatorio que se aportó con la demanda". (Fs. 63-65).

En opinión de la representante del Ministerio Público, debe mantenerse el auto recurrido porque no consta que el demandante haya cumplido con el artículo 44 de la Ley 135 de 1943, que obliga a acompañar la demanda con copia del acto acusado y las constancias de notificación; que la demanda que procedía era de plena jurisdicción y no la de nulidad; y que el término perentorio para esta demanda es de dos meses, de conformidad con el artículo 42 b) de la Ley 135 de 1943, el cual parece haber transcurrido en exceso, porque la demanda de nulidad fue recibida el 29 de marzo de 1996, casi un año después de dictada la Resolución 363 de 24 de mayo de 1995.

Evacuados los trámites de Ley, el resto de los Magistrados de la Sala proceden a resolver la alzada interpuesta.

Del examen de los autos se desprende, que la sociedad **BERASVAS, S. A.** a través de su apoderado legal sustentó recurso de reconsideración contra la Resolución No. 135 de 22 de febrero de 1996 (fs. 20-21); que este fue resuelto mediante la Resolución N° 363 de 24 de mayo de 1995 (fs. 21); que si bien, la autoridad administrativa señaló en ésta resolución, que "se trata de un Proceso administrativo de Bien Oculto del Estado, del cual la sociedad **BERASVAS, S. A.** no forma parte según el procedimiento fiscal especial estipulado para los Procesos de Bien Oculto ..." (fs. 14), esta autoridad decidió resolver el recurso interpuesto y conocer el fondo de la acción planteada, confirmando en todas sus partes el Resuelto N° 135 de 22 de febrero de 1995 y advirtiendo a la sociedad **BERASVAS, S. A.**, en el artículo segundo, que esa resolución agotaba la vía gubernativa (fs. 21).

Por tanto, una vez agotada la vía gubernativa la sociedad **BERASVAS, S. A.** podía dentro de los dos meses siguientes de notificada la resolución, recurrir ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, con la acción de plena jurisdicción. Sin embargo, la sociedad **BERASVAS, S. A.** dejó transcurrir casi un año, para presentar ante la Sala demanda contencioso administrativa de nulidad, que como hemos señalado en reiteradas ocasiones, persigue la defensa de la legalidad abstracta, pretendiendo que se enmienden los actos creadores de situaciones jurídicas generales, impersonales y objetivas, mientras que con la demanda de plena jurisdicción se pretende la protección de intereses jurídicos de carácter particular, personales o subjetivos, como es el caso que nos ocupa.

El propio demandante de fojas 46 a 48 expresa, que los graves perjuicios económicos que causa el Resuelto N° 135 de 1995, se dan por el secuestro de más de cuatro millones en contra de los bienes de la sociedad **BERASVAS, S. A.** y que también este resuelto pone en peligro la titularidad de los residentes de la barriada Nuevo Colón, cuyos terrenos son propiedad de **BERASVAS, S. A.**

La Resolución N° 363 de 24 de mayo de 1995, resolvió confirmar el Resuelto N° 135 de 22 de febrero de 1995, que declaró **BIEN OCULTO** del Banco Hipotecario Nacional las 24 hectáreas con 2807.74 metros cuadrados, que forman parte de la finca 6702, inscrita al tomo 1168, folio 192, Sección de la Propiedad, Provincia de Colón, del Registro Público; y confirió personería jurídica y facultad legal al denunciante, señor **PLUTARCO ANTONIO CASTILLO PÉREZ** para asumir y gestionar la defensa de los intereses del Banco Hipotecario Nacional, tendientes a la recuperación del bien inmueble de dicho Banco Oficial. En virtud de esta facultad, el señor **PLUTARCO ANTONIO CASTILLO**, interpuso ante esta Sala, demanda contencioso administrativa de nulidad, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° 4-1 de 20 de febrero de 1992, proferida por la Junta Directiva del Banco Hipotecario Nacional, proceso en el cual la sociedad **BERASVAS, S. A.** es contraparte, conforme el auto de 25 de agosto de 1994 que reposa a foja 62 de dicho expediente.

Por las razones expuestas, debe confirmarse la resolución apelada.

De consiguiente, el resto de los Magistrados de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMAN el auto de 23 de abril de 1996, mediante el cual el Magistrado Sustanciador no admitió la demanda contencioso administrativa de nulidad, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° 135 de 22 de febrero de 1995, proferida por el Órgano Ejecutivo por conducto del Ministerio de Hacienda y Tesoro.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

JURISDICCIÓN COACTIVA

INCIDENTE DE RESCISIÓN DE SECUESTRO, INTERPUESTO POR LA LICENCIADA EDA RODRÍGUEZ, EN REPRESENTACIÓN DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, DENTRO DEL JUICIO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, CASA MATRIZ, CONTRA PEDRO AGUSTÍN D'MEZA LASSO Y NEREYDA GARCÍA DE D'MEZA. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TRES (3) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La licenciada Eda Rodríguez, actuando en nombre y representación de la CAJA DE SEGURO SOCIAL, ha presentado incidente de rescisión de secuestro, dentro del proceso por cobro coactivo que sigue el BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, CASA MATRIZ, contra PEDRO AGUSTÍN D'MEZA LASSO y NEREYDA GARCÍA DE D'MEZA.

La pretensión del incidentista consiste en que se deje sin efecto el auto de secuestro N° 2334 de 26 de septiembre de 1991, proferido por el Juzgado Ejecutor del BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, CASA MATRIZ, copia del cual reposa a foja 8 del expediente. El apoderado judicial de la Caja de Seguro Social fundamenta su petición alegando que la Finca N° 109805, inscrita en el Rollo 7126, Asiento 1, Documento 1, Sección de la Propiedad, Provincia de Panamá, de propiedad de Pedro Agustín D'Meza Lasso y Miriam Elizabeth Pérez de D'Meza, **secuestrada** por

el Banco Nacional de Panamá, fue gravada con primera hipoteca y anticresis a favor de la Caja de Seguro Social mediante Escritura Pública N° 2193, de 20 de marzo de 1987, otorgada por la Notaría Segunda del Circuito de la Provincia de Panamá, e inscrita en el Registro Público en la Ficha 84848, Rollo 7126, Documento 1, Asiento 4 Sección de Hipotecas y Anticresis del Registro Público, desde el 12 de noviembre de 1987.

Con el incidente se aportó certificación del Registro Público sobre la Finca secuestrada y los gravámenes hipotecarios y anticréticos que pesan sobre esta a favor de la Caja de Seguro Social, y copia debidamente autenticada del auto ejecutivo N° 517-91 de 30 de diciembre de 1991, mediante el cual el Juzgado Ejecutor de la Caja de Seguro Social libró mandamiento de pago en contra de Pedro Agustín D'Meza Lasso y Miriam Elizabeth Pérez de D'Meza, hasta la concurrencia de B/.32,484.91 de capital, intereses y gastos de cobranza, sin perjuicio de los intereses que se causen hasta el completo pago de la obligación; decretó embargo sobre la finca N° 109805, inscrita en el Rollo 7126, Documento 1 de la Sección de la Propiedad, Provincia de Panamá hipotecada por los deudores a su favor; y ordenó su venta en pública subasta. En la parte posterior del auto ejecutivo el Juez Ejecutor y el Secretario del Juzgado certifican que ese embargo, decretado el 30 de diciembre de 1991, está vigente y que la hipoteca que dio origen al proceso está inscrita en el Registro Público en la Ficha 84848, Rollo 7126, Documento 1, Sección de la Propiedad del Registro Público, desde el 12 de noviembre de 1987.

Admitido el presente incidente se corrió en traslado al Juez Ejecutor del Banco Nacional de Panamá, Casa Matriz, a los ejecutados y a la señora Procuradora de la Administración por el término de tres días.

La señora Procuradora de la Administración, mediante la Vista Fiscal N° 506 de 22 de noviembre de 1995, señaló que le asiste la razón al incidentista y que el secuestro practicado por el Banco Nacional de Panamá el 26 de septiembre de 1991, que recae sobre la Finca N° 109805 antes descrita debe levantarse según lo prevé el artículo 549 del Código Judicial (fs. 39 a 41).

Consta en el expediente (fs. 8) copia del auto de secuestro N° 2334 de 26 de septiembre de 1991, cuya rescisión se pide, emitido por el Juez Ejecutor del Banco Nacional de Panamá, Casa Matriz, en el cual decretó formal secuestro sobre la Finca N° 109805, inscrita al Rollo 7126, Documento 1, de la Sección de la Propiedad, Provincia de Panamá, perteneciente a PEDRO AGUSTÍN D'MEZA LASSO, con cédula N° 8-101-449, hasta la concurrencia de B/.12,694.23, en concepto de capital, intereses vencidos, gastos de cobranza, más los intereses que se causen hasta la cancelación de la obligación. Dicha auto de secuestro fue corregido posteriormente por el Auto N° 47 de 7 de enero de 1992, tal como consta a foja 28 del expediente, en el cual el Juez Ejecutor del Banco Nacional de Panamá dejó constancia que el formal secuestro decretado por dicha institución sobre la Finca N° 109805, inscrita al Rollo 7126, Documento 1 de la Sección de la Propiedad de la Provincia de Panamá, corresponde solamente a la cuota parte de la finca perteneciente a Pedro Agustín D'Meza Lasso, y no sobre la totalidad de la misma.

Según el párrafo segundo del artículo 1705 del Código Judicial el embargo, y consiguiente depósito, cuando lo hubiere de una cosa se **rescindirá** si al Juez que lo decretó se le presenta copia auténtica de un auto de embargo de dichos bienes dictado en un proceso hipotecario seguido en virtud de una **hipoteca inscrita con anterioridad a la fecha de embargo**. Al pie de dicha copia debe aparecer una certificación autorizada por el respectivo Juez y Secretario, con expresión de la fecha de inscripción de la hipoteca en que se basa el juicio, la fecha del auto de embargo, y que dicho embargo está vigente. Esta certificación deberá ser de fecha no anterior a seis meses. El Juez que rescinda el depósito pondrá los bienes a disposición del tribunal donde se tramita el proceso hipotecario, de manera que este pueda verificar si el depósito, en virtud del auto de embargo, está vigente.

En el presente caso ha quedado acreditado que el gravamen hipotecario que alega el incidentista es de fecha anterior al auto de secuestro emitido por el Juzgado Ejecutor del BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, CASA MATRIZ; y la certificación

del Juzgado Ejecutor de la CAJA DE SEGURO SOCIAL cumple con lo dispuesto en el artículo 1705 antes citado.

A juicio de este Tribunal el incidentista ha probado los hechos expuestos en el incidente, por lo que procede acceder a lo solicitado.

En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, RESCINDE EL SECUESTRO decretado por el Juzgado Ejecutor del BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, CASA MATRIZ sobre la Finca N° 109805, inscrita al Rollo 7126, Documento 1, de la Sección de la Propiedad, Provincia de Panamá, propiedad de PEDRO AGUSTÍN D'MEZA LASSO y MIRIAM ELIZABETH PÉREZ DE D'MEZA, mediante Auto N° 2334 de 26 de septiembre de 1991, corregido mediante el Auto N° 47 de 7 de enero de 1992, ambos proferidos dentro del proceso por cobro coactivo que sigue dicha entidad bancaria estatal contra PEDRO AGUSTÍN D'MEZA LASSO Y NEREYDA GARCÍA DE D'MEZA, y ORDENA al Juez Ejecutor del BANCO NACIONAL DE PANAMÁ comunicar esta decisión al Registro Público y poner la Finca N° 109805, inscrita en el Rollo 7126, Documento 1, de la Sección de la Propiedad, Provincia de Panamá a disposición del Juzgado Ejecutor de la CAJA DE SEGURO SOCIAL, quien tramita el juicio ejecutivo hipotecario por jurisdicción coactiva promovido contra PEDRO AGUSTÍN D'MEZA LASSO y MIRIAM ELIZABETH PÉREZ DE D'MEZA.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

INCIDENTE DE RESCISIÓN DE SECUESTRO, INTERPUESTO POR EL LICENCIADO JOSÉ A. HENRÍQUEZ, EN REPRESENTACIÓN DE NORIS EDITH GUERRA DE CONTE, DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, CASA MATRIZ, CONTRA JAIME LUIS MARTÍNEZ Y OTROS. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, SEIS (6) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado José Henríquez actuando en representación de la señora **Noris Edith Guerra de Conte**, ha interpuesto Incidente de Rescisión de Secuestro dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que le sigue el Banco Nacional de Panamá, Casa Matriz a Jaime Luis Martínez y Otros.

ARGUMENTOS DE LA PARTE ACTORA

La incidentista requiere el levantamiento del secuestro ordenado sobre la finca N° 107357, esgrimiendo en el libelo de su pretensión, básicamente el argumento de que la finca N° 107357, inscrita al rollo 6376, asiento 01, documento 04 de la Sección de la Propiedad de la Provincia de Panamá, secuestrada mediante Auto N° 152 de 12 de febrero de 1992, no pertenecía al difunto Laurencio Conte Oro (q. e. p. d.) fallecido el 31 de julio de 1987, ya que la misma fue adjudicada a sus herederos Noris Edith Guerra vda. de Conte Oro y a sus menores hijos Laurencio Conte Manzzo, Yahira Itzel Conte Manzzo e Iriam Alberto Conte Manzzo mediante Auto fechado 19 de noviembre de 1991.

Añade la interesada que la finca sujeta a la medida cautelar de secuestro no constituía garantía hipotecaria, y que el Banco Nacional de Panamá no era acreedor hipotecario ni participó como acreedor en el proceso de sucesión intestada del señor Laurencio Conte Oro y, en consecuencia, su crédito no se incluyó dentro del pasivo de la herencia; aunado a que asevera la petente que el señor Jaime Martínez, codeudor de Laurencio Conte Oro, está pagando su deuda.

POSICIÓN DE LA PROCURADURÍA DE LA ADMINISTRACIÓN

La señora Procuradora de la Administración al referirse al negocio in examine, solicita que se denieguen las peticiones del actor, en atención a que la incidentista no enmarca su petitium en los preceptos estatuídos en el artículo 549 del Código Judicial y debido a que no consta en el Registro Público que se haya cumplido con la formalidad de inscribir el bien inmueble en contienda a nombre de los herederos declarados, tal como lo ordenó el Juez al decidir lo referente a la sucesión intestada del señor Laurencio Conte Oro (q. e. p. d.).

Ante esta circunstancia, señala la entidad bancaria que al emitir el Juzgado Ejecutor del Banco Nacional de Panamá, el Auto N° 152 de 12 de febrero de 1992, la finca N° 107.357 aparecía inscrita a nombre del señor Conte Oro; por lo que en consecuencia, la inscripción del 17 de marzo de 1992 del secuestro decretado ingresó al Registro Público sin reparos, al no constar que sus propietarios eran otras personas.

En este sentido se puntualiza que los artículos 1131 y 1791 contemplan el requisito de inscripción en el Registro Público como un acto constitutivo y no de mera publicidad, ya que el cumplimiento de la misma es indispensable para sustentar un derecho frente a terceros.

DECISIÓN DE ESTA SUPERIORIDAD

Encontrándose el proceso en este estado, los Magistrados que integran la Sala Tercera de lo Contencioso, entran a resolver la contienda planteada.

Sobre el particular es importante indicar que ciertamente no es viable admitir la petición de la incidentista en atención a que la parte actora incumple los requisitos que se exigen en los artículos 537, 544 o 549 del Código Judicial, para proceder a desestimar los efectos del secuestro ordenado por el Banco Nacional de Panamá y en consecuencia, acceder a rescindir dicha medida cautelar tal como lo solicita la incidentista.

Es de lugar señalar, que el Banco Nacional de Panamá, en ejercicio de la facultad que le otorga el derecho a cobrar coactivamente sus créditos no satisfechos, no tiene la obligación de acudir ante el proceso de sucesión del de cujus para presentar su crédito, ya que precisamente la figura de la jurisdicción coactiva fue introducida e instituida en nuestro derecho a favor de diversas entidades del Estado, para que éstas pudiesen resarcir mediante proceso de ejecución las acreencias exigibles que tuviesen pendientes los titulares de las morosidades en mención para con dichas instituciones.

Por consiguiente, no es atendible la petición de la incidentista dado que sería necesario que los herederos presentaran un título inscrito con anterioridad al ingreso de la orden de inscripción del Auto de secuestro en el Diario del Registro Público para proceder a la rescindir el secuestro impugnado, tal como lo exige el artículo 544 del Código Judicial, en concordancia con el artículo 1788 numerales 2 y 3 de la misma excerta legal. Ahora bien, no podemos soslayar el hecho de que, aun cuando los herederos se amparen en la aceptación de la herencia en controversia a beneficio de inventario, éstos quedan igualmente vinculados y obligados con respecto a la deuda no saldada para con el Banco Nacional de Panamá, puesto que, los herederos, únicamente estarían exentos de toda responsabilidad, en el caso que de se consuman los bienes de la sucesión o la parte correspondiente al heredero requerido al pago, precisamente en el procedimiento de liquidar cuentas, y por ende de saldar los créditos presentados a la sucesión; no quedando como consecuencia de dichas operaciones, remanentes de activos para cubrir el pasivo que constituye la deuda del Banco Nacional de Panamá con relación a la herencia del señor Conte Oro, tal como lo estatuye el artículo 906 del Código Civil. Por consiguiente, no prospera la solicitud de la incidentista.

En mérito de lo expuesto, los Magistrados que integran la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARAN NO PROBADO el Incidente de Rescisión de Secuestro propuesto por el licenciado José Henríquez actuando en representación de la

señora Noris Edith Guerra de Conte.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO TOMÁS VEGA CADENA, EN REPRESENTACIÓN DE CARLOS BARRIGA, DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, CASA MATRIZ, A CREDILUM, S. A. Y OTROS. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, CATORCE (14) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Tomás Vega Cadena, actuando en nombre y representación de CARLOS BARRIGA, ha promovido excepción de prescripción dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que le sigue el BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, CASA MATRIZ, a CREDILUM, S. A., LIGIA AROSEMENA DE BARRIGA, SIXTO BARRIGA y CARLOS BARRIGA PLAZA.

El apoderado judicial de la parte actora en los hechos de su demanda expresa que el 17 de septiembre de 1973, el Banco Nacional de Panamá celebró con la Empresa Credilum, S. A. el contrato de préstamo N° 73A-1287, por la suma de B/.15,000.00 a largo plazo, a un interés de 9% más 4% anual en concepto de comisión por manejo. La representante de la empresa es Ligia Arosemena de Barriga, quien se constituyó en codeudora solidaria, conjuntamente con Sixto Barriga y Carlos Barriga.

Expuso también que el 22 de abril de 1976, el Banco Nacional de Panamá, Casa Matriz, decretó embargo sobre cuentas por cobrar de Credilum, S. A. en las empresas Multicobros Cosmopolita, S. A., por B/.13,023.59 en concepto de capital e intereses más B/.1,302.25 de costas, actuación que tan sólo notificó a Sixto Barriga y a Ligia de Barriga el 19 de mayo de 1976.

El 13 de agosto de 1976, el Banco Nacional de Panamá libró mandamiento de pago solamente contra Carlos Barriga hasta por B/.14,325.94, en concepto de capital, intereses, costas judiciales, y no hay constancia de la notificación de este auto. El 25 de julio de 1995, mediante Auto N° 716 el Juzgado Ejecutor del Banco Nacional de Panamá decretó secuestro hasta la concurrencia de B/.12,154.94 en concepto de capital más intereses, y por medio de la Nota de Secuestro Bancario N° 95 (14010-01) 1329 de 25 de julio de 1995, se comunicó esta medida cautelar y se tuvo como resultado el secuestro de dinero de Carlos Barriga, jubilado del Primer Banco de Ahorros, S. A. hasta la suma de B/.1,193.10, causándole graves perjuicios.

El apoderado judicial del excepcionante solicitó que en virtud de los artículos 1650 y 1649-A del Código de Comercio, se declare prescrita la acción del Banco Nacional de Panamá para cobrar el crédito a su favor, porque luego de la notificación imperfecta del 19 de mayo de 1976, no existe constancia de la interrupción de la prescripción a la que se refiere el artículo 658 del Código Judicial, o que la parte deudora haya hecho abonos o arreglo de pago alguno, y agregó que consta que desde 1984 se hizo una gestión de cobro infructuosa, transcurriendo en exceso el término de prescripción establecido por la ley en cinco años.

Admitida la presente excepción de prescripción se corrió en traslado al Juez Ejecutor del Banco Nacional de Panamá y a la señora Procuradora de la Administración por el término de ley.

El licenciado Carlos Bieberach, apoderado judicial de Juzgado Ejecutor del Banco Nacional de Panamá, se opuso a la excepción de prescripción presentada, y señaló que no es cierto que después de la notificación de 19 de mayo de 1976, no hay constancia de que se haya interrumpido la prescripción, puesto que una vez ordenada la citación de los ejecutados por edicto el 23 de diciembre de 1977, se notificó al defensor de ausente de los deudores del auto ejecutivo que libró mandamiento de pago por la vía ejecutiva a favor del Banco Nacional de Panamá, en contra de Credilum, S. A., Ligia Arosemena de Barriga, Sixto Barriga y Carlos Barriga.

Mediante la Vista Fiscal N° 489 de 17 de noviembre de 1995, la señora Procuradora de la Administración señaló que le asiste la razón al excepcionante ya que a partir del 13 de septiembre de 1984, el Banco Nacional de Panamá no realizó gestión en el proceso y de conformidad con los artículos 1650 y 1649-A del Código de Comercio, procede declarar probada dicha excepción de prescripción.

A foja 26 del expediente del proceso ejecutivo por cobro coactivo consta el auto ejecutivo de 13 de agosto de 1976, mediante el cual Juzgado Ejecutor del Banco Nacional de Panamá libró mandamiento de pago contra Carlos Barriga, por la suma de B/.14,930.84 en concepto de capital, intereses y costas judiciales, más los intereses que se produzcan hasta la cancelación de la obligación y decretó formal embargo sobre el 15% del excedente del salario mínimo que devenga el ejecutado como empleado de la Mueblería La Garantía y sobre las acciones que posea en dicha empresa. Posteriormente, en virtud de que mediante el auto de 13 de agosto de 1976 no se libró mandamiento de pago contra otros deudores, mediante el auto ejecutivo de 23 de noviembre de 1977, el Juzgado Ejecutor del Banco Nacional de Panamá libró mandamiento de pago por la vía ejecutiva contra CREDILUM, S. A., representada por LIGIA AROSEMENA DE BARRIGA, y contra ella en su carácter personal, contra SIXTO BARRIGA y CARLOS BARRIGA, como codeudores, hasta la concurrencia de B/.12,097.94 en concepto de capital, B/.2,978.28 en concepto de intereses hasta el 28 de julio de 1977 y B/.1,302.35, en concepto de costas, o sea un total de B/.16,378.57, sin perjuicio de los intereses que se sigan venciendo hasta la cancelación. En dicho auto de 23 de noviembre de 1977 se ordenó, por ignorarse el paradero de los ejecutados, la citación de los mismos por medio de edictos publicados conforme a la ley (fs. 50 del expediente del proceso ejecutivo).

A foja 51 del expediente ejecutivo se lee copia del edicto de 23 de noviembre de 1977, por el cual se cita y emplaza a los deudores para que comparezcan a hacer valer sus derechos en el juicio ejecutivo seguido en su contra y se les advierte que de no comparecer en el término de 10 días desde la última publicación del Edicto, se les nombrará un Defensor de Ausente. Dicho Edicto fue publicado en la Gaceta Oficial el martes 6 de diciembre de 1977 y en el diario El Matutino, los días 5, 6 y 7 de diciembre de 1977.

Vencido el término de emplazamiento de los ejecutados el 21 de diciembre de 1977, se designó al Doctor Aurelio Alí Bonilla como defensor de ausente de Credilum, S. A., Ligia Arosemena de Barriga, Sixto Barriga y Carlos Barriga, y fue posesionado el 22 de diciembre de 1977. El 23 de diciembre de 1977, el Doctor Aurelio Alí Bonilla se notificó del auto ejecutivo dictado el 23 de noviembre de 1977 en contra de los ejecutados (fs. 64 a 66 del expediente del proceso ejecutivo).

La siguiente actuación del Juzgado Ejecutor, tal como consta a foja 169 del expediente del proceso ejecutivo por cobro coactivo, fue el envío de la nota N° 84(104-320-01)823, de 19 de julio de 1984, comunicando al Idaan secuestro decretado en contra de los deudores, mediante resolución fechada el 4 de enero de 1983 (fs. 160).

Posteriormente se dictó el referido Auto N° 716 de 25 de julio de 1995 decretando secuestro contra Credilum, S. A., Ligia Arosemena de Barriga, Sixto Barriga y Carlos Barriga Plaza, y sobre cualesquiera sumas de dinero, valores, prendas, bonos, acciones, cajilla de seguridad y demás bienes que mantuvieran depositados en los Bancos de la localidad; sobre cualesquiera vehículos o equipo rodante que aparecieran inscritos a sus nombres en las Tesorerías Municipales de la República de Panamá y sobre el quince por ciento (15%) del excedente de

salario mínimo que devengaran como empleados públicos o particulares, hasta la suma de B/.12,154.94 en concepto de capital sin perjuicio de los intereses que se sigan causando hasta el completo pago de la obligación (fs. 181 a 182). Dicho auto de secuestro fue comunicado a los Municipios y Bancos locales, y el 18 de agosto de 1995 el Primer Banco de Ahorros puso a disposición del Juzgado Ejecutor del Banco Nacional de Panamá la suma de B/.1,193.10 disponible en la cuenta corriente N° 18-17186 C 182833 perteneciente a Carlos Barriga Plaza.

Consta en la copia autenticada del contrato de préstamo suscrito el 17 de septiembre de 1973 por Silverio Melfi en su calidad de Gerente de Crédito Encargado de la Gerencia General del Banco Nacional de Panamá, Ligia Arosemena de Barriga en su calidad de Presidente y Representante Legal de Credilum, y por Ligia Arosemena de Barriga, Sixto Barriga y Carlos Barriga como codeudores solidarios, que las firmas de **Ligia Arosemena de Barriga y Sixto Barriga** fueron reconocidas como auténticas y puestas en presencia de Notario Público y testigos el 17 de septiembre de 1973 (fs. 24 a 27 del expediente).

La Sala observa que dicho contrato de préstamo no prestaba mérito ejecutivo contra el señor **Carlos Barriga**, el 23 de noviembre de 1977, fecha en que se libró el mandamiento de pago, porque según el ordinal 4° del artículo 1166 del Código Judicial vigente hasta 1987, prestaban mérito ejecutivo "los documentos privados de cualquier clase, siempre que el **deudor haya reconocido su firma ante Juez o haya presentado el documento a un Notario para su certificación o protocolización** o haya sido declarado confeso en rebeldía, o haya muerto y los herederos reconozcan la firma". Ante este hecho, antes de que el Banco Nacional de Panamá dictara auto ejecutivo en su contra, debía preparar la vía ejecutiva citando al señor Carlos Barriga para que compareciera a reconocer su firma en dicho documento privado, tal como lo establecía el artículo 1189 del Código Judicial vigente hasta 1987, que a la letra dice:

> "Artículo 1189. El acreedor tiene derecho de pedir que reconocido el documento por el deudor o notificado al mismo la cesión del crédito o hechas ambas cosas o confesada la obligación en posiciones por el deudor, le libre la ejecución y se le notifique allí mismo el mandamiento de pago, sin dejarlo ausentar del despacho hasta que se practique esa diligencia y el tribunal así lo hará, si el documento presta mérito ejecutivo.
>
> Si no compareciere el deudor citado para reconocer su firma se aplicará en lo que sea conducente el artículo 892.
>
> Cuando alguna de esas diligencias se encomiende a un tribunal comisionado, éste procederá lo mismo que si fuere el del conocimiento al librar el mandamiento ejecutivo. Una vez notificado procederá de acuerdo con el artículo 1196 y luego que haya cumplido los deberes que esta disposición impone devolverá todo lo actuado al tribunal comitente. En este caso, el ejecutado podrá interponer todos los recursos legales que puedan favorecerle, los que serán atendidos por el tribunal de conocimiento."

Como el anterior requisito se omitió, sólo es válida la notificación del auto ejecutivo al defensor de ausente de Credilum, S. A., en representación de Ligia Arosemena de Barriga y Sixto Barriga, pero no lo es la notificación del auto ejecutivo al defensor de ausente de Carlos Barriga, puesto que no está facultado para reconocer, ni reconoció, su firma en contrato de préstamo, requisito indispensable antes de dictar el auto ejecutivo en su contra.

El artículo 1706 del Código Judicial establece lo siguiente:

> "Artículo 1706. Dentro de los ocho (8) días siguientes a la notificación del mandamiento ejecutivo, puede el ejecutado proponer las excepciones que crea le favorezcan; pero no se suspenderá la práctica de las diligencias ejecutivas, las cuales deben adelantarse hasta poner el proceso en estado de dictar auto de remate, para aguardar la decisión sobre las excepciones que se hayan propuesto."

En el expediente del proceso ejecutivo por cobro coactivo que le sigue el Juzgado Ejecutor del Banco Nacional de Panamá a Carlos Barriga, no hay constancia de que este haya reconocido la deuda o que renovara la obligación mediante algún arreglo de pago u otra forma, y en virtud de que el auto ejecutivo dictado por el Juzgado Ejecutor del Banco Nacional de Panamá no le fue notificado personalmente a Carlos Barriga, y no se ha interrumpido el término de prescripción de la acción. Durante el proceso seguido contra Credilum, S. A. y otros, Carlos Barriga no se manifestó conocedor de las acciones en su contra, por lo que se le debe dar por notificado desde el momento en que presentó su escrito de excepción de prescripción.

Finalmente según el artículo 1650 del Código de Comercio, el término para prescripción de acciones comenzará a correr desde el día en que la obligación sea exigible, y el plazo para el pago de la obligación contraída por los ejecutados el 17 de septiembre de 1973, era de treinta y seis meses o tres años, por lo cual hasta el 27 de septiembre de 1995, fecha en la que el excepcionante presentó su escrito, ha pasado en exceso el término de cinco años contemplado por el precitado artículo 1650 para la prescripción ordinaria en materia comercial, término que no fue interrumpido porque no se le notificó oportunamente el auto ejecutivo, el cual, además, fue dictado sin preparar la vía ejecutiva.

En virtud de lo antes expuesto, la Sala debe declarar prescrita la acción para el cobro de la obligación contraída por Carlos Barriga en su calidad de codeudor de Credilum, S. A., a favor del Banco Nacional de Panamá.

En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA PROBADA LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN presentada por el licenciado Tomás Vega Cadena en representación de Carlos Barriga, dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que le sigue el BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, CASA MATRIZ, a CREDILUM, S. A. y OTROS.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

TERCERÍA COADYUVANTE, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS QUINTERO, EN REPRESENTACIÓN DE DARÍO PITTÍ SERRANO, DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, (SUC. DE DAVID), A CAFETALERA CHIRICANA, S. A. Y TORREFACTORA CHIRICANA, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTE (20) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Lcdo. Carlos Quintero, actuando en representación de DARÍO PITTÍ SERRANO, ha presentado tercería coadyuvante dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que le sigue el Banco Nacional de Panamá, (Suc. de David) a Cafetalera Chiricana, S. A. y Torrefactora Chiricana, S. A.

El apoderado judicial de DARÍO PITTÍ SERRANO solicita que se reconozca el derecho para que con el producto de la venta en pública subasta o remate se le pague al señor Darío Pittí Serrano, la suma de cuarenta y cinco mil balboas 00/100 en concepto de capital (prestaciones laborales), costas y gastos, en virtud de la Resolución del Juzgado Primero de Trabajo de la Tercera Sección, que aprueba la Transacción o Arreglo Amigable Extrajudicial celebrado entre DARÍO PITTÍ SERRANO Y CAFETALERA CHIRICANA SOCIEDAD ANÓNIMA, en que consta la suma a pagar a DARÍO PITTÍ S. por las prestaciones laborales demandadas en juicio a su favor.

El tercerista fundamenta su solicitud en los siguientes términos:

PRIMERO: EL JUZGADO PRIMERO DE TRABAJO DE LA TERCERA SECCIÓN, mediante Resolución aprobó la Transacción o Arreglo Amigable Extrajudicial celebrada entre DARÍO PITTÍ SERRANO y CAFETALERA CHIRICANA SOCIEDAD ANÓNIMA y TORREFACTORA CHIRICANA SOCIEDAD ANÓNIMA, en que consta que las sociedades mencionadas, aceptan y reconocen pagar efectivamente a DARÍO PITTÍ SERRANO la suma de CUARENTA Y CINCO MIL BALBOAS 00/100 (B/. 45,000.00) en concepto de prestaciones laborales demandadas en juicio laboral ante este Juzgado de Trabajo: Resolución que está debidamente ejecutoriada.

SEGUNDO: Que en efecto, como lo expresa y señala el hecho anterior, las sociedades CAFETALERA CHIRIANA, S. A. y TORREFACTORA CHIRICANA, S. A., adeudan a DARÍO PITTÍ SERRANO, la suma de CUARENTA Y CINCO MIL BALBOAS CON 00/100 (B/. 45,000.00).

TERCERO: Que en virtud de lo que dispone la Ley en cuanto Tercería Coadyuvante, se presenta esta acción.

Observa la Sala que, de fojas 41 a 42 del expediente administrativo, aparece el auto fechado el siete de octubre de 1991, en el cual el Juez Ejecutor del Banco Nacional libró mandamiento de pago por la vía ejecutiva en favor del Banco Nacional de Panamá, Sucursal Casa Matriz y en contra la Cafetalera Chiricana, S. A., representada legalmente por Darío Pittí Serrano, Augusto Altamirano Lacayo y Torrefactora Chiricana, S. A. Prestó mérito ejecutivo en dicha ejecución según consta a foja 22 del expediente, el pagaré N° 90014 de 23 de noviembre de 1989 debidamente autenticado ante la Notaría Primera del Circuito de Panamá y el Pagaré N° 90016 del 13 de diciembre de 1989, también autenticado ante la misma notaría, cuyos montos ascienden a B/.75,000.00 y a B/.100,000.00 respectivamente.

Por su parte, observa igualmente la Sala que la parte actora aduce en el punto primero del libelo contentivo de la demanda, que el Juzgado Primero de Trabajo de la Tercera Sección, aprobó la transacción o arreglo amigable extrajudicial celebrada entre Darío Pittí Serrano y Cafetalera Chiricana, S. A. y Torrefactora Chiricana, S. A. No obstante, se observa que no consta dentro del expediente dicha resolución, razón por la cual a criterio de esta Sala, la solicitud del tercerista no se ajusta con los requerimientos previstos en artículo 1794 numeral 5 en concordancia a lo estipulado en el artículo 1639 numeral 1° del Código Judicial.

En razón de lo anterior, lo procedente en este caso es, pues, rechazar de plano de la tercería coadyuvante por ser manifiestamente improcedente tal como lo ordena el artículo 697 del Código Judicial.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RECHAZA DE PLANO la Tercería Coadyuvante interpuesta por el Lcdo. Carlos Quintero en representación de DARÍO PITTÍ SERRANO dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que le sigue el Banco Nacional de Panamá a Cafetalera Chiricana, S. A. y Torrefactora Chiricana, S. A.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

TERCERÍA COADYUVANTE, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO HÉCTOR GUERRA NÚÑEZ, EN REPRESENTACIÓN DE GRACIELA HERNÁNDEZ DE MORENO Y OTROS DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL A QUEEN CHEMICAL INDUSTRY, INC. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTE (20) DE

MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Lcdo. Héctor Guerra Núñez, actuando en representación de GRACIELA HERNÁNDEZ DE MORENO Y OTROS, ha presentado tercería coadyuvante dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que le sigue la Caja de Seguro Social a QUEEN CHEMICAL INDUSTRY, INC.

El tercerista fundamenta su solicitud en los siguientes términos:

"PRIMERO: La QUEEN CHEMICAL INDUSTRY, INC., es una empresa que en Calle Cuarta de Río Abajo, se dedicaba a la fabricación de cosméticos y perfumes en general.

SEGUNDO: En el desarrollo de su actividad la QUEEN CHEMICAL INDUSTRY, INC., contrató los servicios de todos mis representados, los cuales a la postre quedaron cesantes por la acción de acreedores y de la adversa situación económica de aquélla.

TERCERO: La cesantía de mis representados justificó que demandáramos a la QUEEN CHEMICAL INDUSTRY, INC., al haber despido de mis representados por razones de índole económica, sin el cumplimiento de la formalidad, que en estas circunstancias, le impone el artículo 215 del Código de Trabajo, el cual en este aspecto sentencia:

"Cuando el despido tuviese como causa una de las señaladas en el acápite c) del artículo 213, el empleador deberá comprobar la causa respectiva ante las autoridades administrativas de trabajo.

En los casos de que trata este artículo, el despido sin cumplimiento de los requisitos señalados en el inciso anterior, se consideran de pleno derecho injustificado".

CUARTO: La Dirección General de Trabajo y Bienestar Social, por virtud de la Demanda Laboral interpuesta condenó a la QUEEN CHEMICAL INDUSTRY, INC., a pagar a favor de todos mis representados todas las prestaciones y derechos laborales por despido injustificado, además de los salarios caídos, recargos, intereses, costas, según Sentencia distinguida como RESOLUCIÓN N° 31-DGT-53-95 de 26 de septiembre de 1995.

QUINTO: Para estos días, estamos enterados de que la Caja de Seguro Social, a través del Juzgado Ejecutor de la misma, está señalando el cinco (5)."

Mediante auto de 16 de octubre de 1995 se le corrió traslado de la tercería al Juez Ejecutor de la Caja de Seguro Social y a la Procuradora de la Administración.

La apoderada judicial de la Caja de Seguro Social se opone a la pretensión de cobro preferencial que intenta hacer valer el tercerista frente al derecho de la Caja de Seguro Social, sobre la base de que el artículo 166 del Código de Trabajo, señala la preferencia en el crédito sobre el importe de los salarios, prestaciones e indemnizaciones adeudadas por parte de la empresa a los trabajadores en caso de "quiebra o insolvencia del empleado". A su criterio, de la norma antes señalada, se colige que para que proceda la preferencia en el crédito, debe darse como consecuencia de un proceso de quiebra o en caso de insolvencia del empleador comprobada legalmente, situación que en su opinión, no se acredita en el expediente.

Por su parte, la Procuradora de la Administración mediante la Vista N° 533 de 6 de diciembre de 1995, observa en cuanto a la pretensión del tercerista, que el crédito que intenta hacer valer en el caso que nos ocupa, no satisface los

requerimiento legales previstos en el numeral 5 del artículo 1794 del Código Judicial, razón por la que solicita a esta Sala que declare no probada la tercería interpuesta.

Observa la Sala que según la documentación que reposa en el expediente, la empresa Queen Chemical Industry Inc, omitió el pago de las cuotas obrero patronales a la Caja de Seguro Social, razón por la que el Juzgado Ejecutor de dicha entidad, procedió a expedir el auto fechado el 5 de septiembre de 1991 visible a foja 7 del expediente administrativo, mediante el cual se libra mandamiento de pago por la vía ejecutiva a favor de la Caja de Seguro Social y en contra de Queen Chemical Industry y Inc. por la suma de setenta y cinco mil quinientos cuarenta y un balboas con noventa y tres centésimos (B/.75,541.93).

Al proceso por cobro coactivo en referencia, se presentó la señora Graciela Hernández de Moreno y otros, con el propósito de intervenir como terceros coadyuvantes a fin de obtener todas la prestaciones y derechos laborales como prima de antigüedad, indemnizaciones, vacaciones proporcionales y décimo tercer mes y salarios adeudados.

Observa la Sala, que en la tercería coadyuvante que nos ocupa se presenta como recaudo ejecutivo, la Resolución N° 31-DGT/53-95 de 26 de septiembre de 1995, dictada por la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Bienestar Social. El tercerista invoca como fundamento derecho los artículos 166 y 167 del Código de Trabajo.

Una vez efectuado el estudio del expediente, no coincide la Sala con los criterios esbozados por el tercerista toda vez que, por un lado, su solicitud no se ajusta a los requisitos legales previstos en el numeral 5 del artículo 1794 del Código Judicial, pues el auto ejecutivo expedido por la Caja de Seguro Social es de fecha anterior al de la Resolución N° 31-DGT-53-95 de 26 de septiembre de 1995 expedido por la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo, y, por el otro lado, el fundamento invocado no se subsume en lo previsto en el artículo 166 del Código de Trabajo, toda vez que dicho artículo preceptúa la prelación del crédito laboral sólo en los supuestos de quiebra e insolvencia, aspectos que no han sido acreditados en el expediente.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA NO PROBADA la tercería coadyuvante interpuesta por Héctor Guerra Núñez en representación de Graciela Hernández de Moreno y otros, dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que le sigue la Caja de Seguro Social a Queen Chemical Industry, Inc.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. ANTONIO LOAIZA EN REPRESENTACIÓN DE INMOBILIARIA CARIOCA, S. A. DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE EL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ LE SIGUE A INMOBILIARIA CARIOCA, S. A. Y BORIS JAVIER AGUILAR. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Licenciado Antonio Loaiza Batista ha presentado, en representación de INMOBILIARIA CARIOCA, S. A., recurso de reconsideración en contra de la resolución de 13 de marzo de 1996 emitida por este Tribunal Colegiado, mediante la cual se resuelve la excepción de prescripción interpuesta dentro del proceso

ejecutivo por cobro coactivo que el Banco Nacional de Panamá le sigue a Inmobiliaria Carioca, S. A.

El actor propuso el medio de impugnación en referencia, ya que se manifiesta en completo desacuerdo con los conceptos emitidos por esta máxima Corporación de Justicia en la precitada resolución de 13 de marzo de 1996.

En este orden de ideas es indispensable resaltar que mediante fallo de 26 de mayo de 1993, dentro del caso JILMA ALIXIA RODRÍGUEZ DE VILLAMIL VS EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, decretó que no era judicialmente viable por parte de los intervinientes interesados, interponer recursos de reconsideración en contra de las resoluciones dictadas por el Pleno de esta Sala en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, por considerar que este medio de impugnación procesal en estos casos en concreto, antagoniza directamente con el contenido de los artículos 203 numeral segundo de la Constitución Política vigente y, con el artículo 100 del Código Judicial; consagrando de esta manera un precedente jurídico de gran importancia procesal basado en la exacta aplicación de los textos de las disposiciones antes mencionadas. La discrepancia a la que hacemos alusión entre las normas antes mencionadas y el recurso de reconsideración propuesto en contra resoluciones emitidas por esta Sala, se observa en el sentido de que el artículo 203 de la Constitución vigente numeral segundo estatuye que las decisiones de la Corte Suprema de Justicia y específicamente los dictámenes de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, son finales, definitivas y obligatorias; por lo que mal podríamos reconsiderar una decisión que no admite consideración adicional, por ser las mismas terminantes y conclusivas.

Por otro lado, el Código Judicial en el artículo 100 en concordancia con el artículo 98 numeral 4° de la misma excerta legal, taxativamente dispone que las resoluciones que decidan las apelaciones, tercerías o cualquier incidente que se ventilen en esta Sala dentro de los procesos por cobro coactivo son finales, definitivas y obligatorias; no procediendo en consecuencia, recurso alguno en contra de dichos pronunciamientos ya que estos son vinculantes, de cumplimiento forzoso, invariables, inmodificables e inimpugnables.

Así las cosas, es evidente por los motivos antes señalados que el recurso de reconsideración incoado ante este Tribunal Colegiado, no prospera por tratarse de una resolución dictada por la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema, deviniendo la situación planteada, en firme y por lo tanto en cosa juzgada, una vez se notifique en debida forma a las partes la resolución en cuestión.

En consecuencia, los Magistrados que integran la Sala Tercera de la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, RECHAZAN DE PLANO el recurso de reconsideración interpuesto por el Licenciado Antonio Loaiza en representación de Inmobiliaria Carioca, S. A.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

TERCERÍA COADYUVANTE, INTERPUESTA POR EL LCDO. JAIME DELGADO ANGUIZOLA, EN REPRESENTACIÓN DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, ZONA DE CHIRIQUÍ, A FRUTAS PANAMEÑAS (FRUPASA) E INGEMAR LUNDBERG. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Lcdo. Jaime Delgado Anguizola, actuando en representación de la Caja de Seguro Social, ha presentado tercería coadyuvante dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que le sigue el Banco de Desarrollo Agropecuario, Zona de Chiriquí, a Frutas Panameñas, S. A. (FRUPASA) e Ingemar Lundberg.

El apoderado judicial de la Caja de Seguro Social solicita la admisión de la tercería para que una vez resuelta se ordene que del producto de los bienes perseguidos en este proceso, se pague a la Caja de Seguro Social, la suma de B/.22,934.28 que le adeuda FRUTAS PANAMEÑAS (FRUPASA) en concepto de cuotas obrero patronales y otros descuentos de ley, más costas, gastos e intereses hasta la fecha de la cancelación. El tercerista fundamenta la tercería en los siguientes términos:

> "PRIMERO: FRUTAS PANAMEÑAS, S. A. (FRUPASA) está inscrita en la Caja de Seguro Social como patrono número 4Z-001-0066, según consta en los registros de esta Institución.
>
> SEGUNDO: Desde su inscripción, FRUTAS PANAMEÑAS, S. A. (FRUPASA), se obligó a pagar las cuotas obrero patronales tal como lo señala el Artículo 66 A) del Decreto Ley número 14 del 27 de agosto de 1954 que constituye la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social.
>
> TERCERO: FRUTAS PANAMEÑAS, S. A. (FRUPASA), ha incumplido la obligación contraída al omitir el pago de las cotizaciones ordenadas por la ley.
>
> CUARTO: FRUTAS PANAMEÑAS, S. A., adeuda a la Caja de Seguro Social, la suma de B/.22,934.28 en concepto de cuotas obrero patronales y otros descuentos de ley, más las costas, gastos e intereses legales.
>
> QUINTO: El Juzgado Ejecutor del BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, ZONA DE CHIRIQUÍ, ha señalado el día 4 de agosto de 1993, como fecha para el remate de los bienes embargados en este Juicio.
>
> SEXTO: La Caja de Seguro Social goza de preferencia respecto de los créditos por aportes obrero patronales y recargos legales, tal como lo señala el artículo 77 del Decreto Ley número 14 del 27 de agosto de 1954, Orgánica de esta Institución."

Mediante auto de 22 de marzo de 1994 se admitió la tercería y se corrió traslado de la misma al Juez Ejecutor del Banco de Desarrollo Agropecuario, Zona de Chiriquí y a la Procuradora de la Administración.

El Juez Ejecutor del Banco de Desarrollo Agropecuario, en escrito fechado el 17 de mayo de 1994, visible de fojas 23 a 24 del expediente, niega los hechos en que se fundamenta la tercería. Por su parte, la Procuradora de la Administración mediante la Vista Fiscal N° 358 de 9 de agosto de 1994, solicita a la Sala que revoque el auto de 22 de marzo de 1994 que admite la tercería. A juicio de la Procuradora, la Caja de Seguro Social no cumple con el requisito previsto en el artículo 1794 numeral 5 del Código Judicial, pues, el crédito a favor de la Caja de Seguro Social no puede ser entendido como de fecha anterior al crédito a favor del Banco de Desarrollo Agropecuario, toda vez que las certificaciones de deuda que presenta dicha institución, contenidas en la resolución sin fecha de moratoria patronal de la empresa (a foja 1) y la resolución fechada el 9 de julio de 1993 son posteriores al auto de mandamiento ejecutivo expedido por el Banco de Desarrollo Agropecuario el 10 de febrero de 1992. Con respecto a ello, el resto de los Magistrados que conforman la Sala, en resolución fechada el 1° de febrero de 1996, resolvió confirmar el auto de admisión de la tercería coadyuvante fechado el 22 de marzo de 1994. En razón de la anterior declaración, la Procuradora de la Administración, mediante la Vista N° 93 de 28 de febrero de 1996, estima que la tercería coadyuvante sí reúne con los requisitos necesarios previstos en el artículo 1794 del Código Judicial, razón por la cual debe ser declarada probada.

Evacuados los trámites de ley, procede la Sala a resolver la presente controversia.

A fojas 27 y 28 del expediente, aparecen los autos fechados ambos el 10 de febrero de 1992, en los cuales el Banco de Desarrollo Agropecuario libró mandamiento de pago por la vía ejecutiva contra FRUTAS PANAMEÑAS, S. A. (FRUPASA) Y/O INGEMAR LUNDBERG y decreta formal secuestro hasta la concurrencia de B/.70,000.00 por capital más los intereses que hasta la fecha se calculan en B/.60,805.36 y B/.3,500 en gastos de cobranza respectivamente. Prestó mérito ejecutivo en dicha ejecución, el contrato privado N° 49-81 fechado el 5 de marzo de 1981, en el que consta que FRUTAS PANAMEÑAS, S. A. y/o INGEMAR LUNDBERG recibió B/.70,000.00 al 16% anual, a un plazo de 4 años, para desarrollar proyecto agrícola, con garantía de futura cosecha. De lo antes expuesto claramente se desprende, que el Banco de Desarrollo Agropecuario no goza de un crédito preferente con respecto al crédito que tiene a su favor la Caja de Seguro Social, pues, pesa sobre la finca objeto de remate un secuestro practicado de manera ordinaria, toda vez que no se trata de un crédito garantizado con derechos reales ni tampoco de obligaciones reconocidas por las autoridades laborales tal como lo prevén los numerales 1 y 2 del artículo 1072 del Código Fiscal.

Igualmente observa la Sala, que la tercería coadyuvante que nos ocupa ha sido presentada en tiempo oportuno, y se apoya en un título ejecutivo de fecha anterior al auto de 10 de febrero de 1992, expedido por el Juez Ejecutor del Banco de Desarrollo Agropecuario.

Del estudio del expediente concluye la Sala que le asiste la razón a la Caja de Seguro Social, dado que además de poseer un crédito exigible, el mismo tiene la categoría de privilegiado según lo dispuesto en el artículo 77 del Decreto Ley N° 14 de 27 de agosto de 1954. El derecho de la Caja de Seguro Social de intervenir como tercero coadyuvante en el presente proceso ejecutivo está acreditado, dado que presentó como prueba del mismo y recaudo ejecutivo contra FRUTAS PANAMEÑAS (FRUPASA) e INGEMAR LUNDBERG una certificación de deuda que representa el saldo adeudado por ellos desde **agosto de 1984 a marzo de 1985** cuyo monto asciende a la suma de B/.22,934.28.

En virtud de lo anterior, la Caja de Seguro Social podrá satisfacer su crédito, dado que, efectivamente, tiene la categoría de privilegiado según lo dispuesto en los numerales 1 y 2 del artículo 1072 del Código Fiscal en concordancia con lo señalado en el artículo 1661 del Código Civil.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA PROBADA la tercería coadyuvante interpuesta por el Lcdo. Jaime Delgado, en representación de la Caja de Seguro Social dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que le sigue el Banco de Desarrollo Agropecuario a FRUTAS PANAMEÑAS, S. A. (FRUPASA) e INGEMAR LUNDBERG y ORDENA que del producto de los bienes embargados se pague al tercerista en el orden de prelación que la ley determina.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS

(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EXCEPCIÓN DE PAGO PARCIAL, INTERPUESTO POR EL LICENCIADO RAFAEL PONCE GONZÁLEZ, EN REPRESENTACIÓN DE OMAR SEBASTIÁN RÍOS GALLEGOS, ESTELLA MARIS RÍOS DE RÍOS Y LA PERLINA, S. A., DENTRO DEL JUICIO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, DE DAVID, PROVINCIA DE CHIRIQUÍ. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado **RAFAEL PONCE GONZÁLEZ** actuando en representación de la **OMAR SEBASTIÁN RÍOS GALLEGOS, ESTELLA MARIS RÍOS DE RÍOS** y **LA PERLINA, S. A.**, ha interpuesto Excepción de Pago Parcial dentro del juicio ejecutivo por cobro coactivo que le sigue a los prenombrados, el Banco Nacional de Panamá, Sucursal de David, Provincia de Chiriquí.

Mediante auto N° 69 de 17 de julio de 1991 adicionado por el auto N° 84 de 8 de agosto de 1991, se libró mandamiento de pago ejecutivo, por vía coactiva, en favor del Banco Nacional de Panamá, Sucursal de Volcán, contra la Sociedad **La Perlina, S. A.** y los fiadores solidarios de la obligación contraída con la entidad bancaria, por un monto total de B/.89,913.28 en concepto de capital e intereses, más gastos de cobranza coactiva, toda vez que la deudora había incumplido con el contrato de dos préstamos tipo agrícola pactados con el Banco Nacional, declarándose de plazo vencido la obligación contraída.

El proceso ejecutivo fue posteriormente delegado a la sucursal del Distrito de David, que en ejercicio de la jurisdicción coactiva, decretó formal embargo hasta la concurrencia de B/.94,679.77 (al 30 de abril de 1992), sobre bienes muebles e inmuebles pertenecientes a la Sociedad demandada y sus fiadores solidarios.

Mediante la interposición del incidente que nos ocupa, los excepcionantes pretenden demostrar la no procedencia de una parte de la pretensión que se les cobra por razón de los dos préstamos concedidos por la institución bancaria. Así, se aduce la existencia de pagos **parciales** supuestamente no acreditados a su favor, cuya cuantía ascienden a B/.42,300.58.

Posterior a la notificación del auto ejecutivo, se realizó un abono en favor del saldo adeudado, por lo que el embargo decretado fue parcialmente rescindido, aplicándose el producto de la venta al préstamo de **La Perlina, S. A.**

Encontrándose en esta etapa la ejecución, la parte demandada propuso excepción de pago parcial, incidencia que se pasa a resolver de seguido.

ARGUMENTOS DEL EXCEPCIONANTE

En el escrito contentivo del incidente de excepción, la parte demandante manifiesta en lo medular, que la Sociedad **La Perlina, S. A.** ha venido realizando pagos al Banco Nacional de Panamá que no le fueron computados a su deuda al momento de expedir el auto que libra mandamiento ejecutivo; pagos que se detallan de la siguiente manera:

1). el 31 de octubre de 1990 realiza dos pagos por el orden de B/.4,581.48 y B/.7,482.70
2). el 3 de junio de 1992 realiza pago por la suma de B/.3,000.00
3). el 6 de julio de 1992 realiza pago por la suma de B/.236.40
4). el 23 de septiembre de 1992 realiza pago por la suma de B/.20,372.11
5). el 23 de noviembre de 1992, realiza pago por la suma de B/.459.91
6). el 23 de noviembre de 1992 efectúa un pago por la suma de B/.6,167.98

Según relata la parte actora, los desembolsos en mención ascienden a un total que supera los cuarenta mil balboas, mismos que no fueron totalmente reconocidos o indebidamente cargados al rubro de gastos y cobranzas, mas no a la deuda en concepto de capital e intereses. Manifiesta de seguido, que en ningún momento debió expedirse el auto de libramiento de pago por el total de B/.89,913.28, aumentada posteriormente hasta la suma de B/.94,679.77 en el año 1992, dado que si hubiesen reconocido o acreditado los pagos efectuados, la obligación pendiente resultaría notablemente inferior a la suma planteada en la ejecución.

POSICIÓN DE LA PROCURADURÍA DE LA ADMINISTRACIÓN

Mediante Vista Fiscal N° 22 de 12 de enero de 1994, la Procuraduría de la Administración en la figura del Lic. DONATILO BALLESTEROS, solicitó a la Sala Tercera, para un mejor entendimiento de la controversia sub-júdice, se procediese

a la elaboración de un informe de capital, gastos de cobranza, intereses, pagos abonados por los deudores, etc., con el fin de que se conociera con certeza la suma adeudada, y se despejase la interrogante de si los abonos efectuados habían sido acreditados a la deuda o no, lo que constituye el elemento medular de la pretensión.

Según el representante del Ministerio Público ello resultaba imprescindible en este negocio, habida cuenta de que no existía constancia en el caudal probatorio de si los pagos realizados por el actor efectivamente habían sido cargados, y en caso afirmativo, en cuál de los renglones: gastos, cobranzas, capital o intereses.

De esta forma, se aceptaba la pretensión del excepcionante en cuanto al reconocimiento de pago parcial, sólo en la medida de que quedara probado que la cuantía reclamada no hubiese sido debidamente acreditada a favor del deudor, y así se reflejase en el informe pericial solicitado. Se acotaba sin embargo, que de ser reconocido el incidente de pago parcial, ello no interrumpiría los efectos de la ejecución iniciada, como pretendía hacer valer el excepcionante.

EXAMEN DEL TRIBUNAL

Colocado el proceso en estado de fallar, este Tribunal Colegiado advirtió que la solicitud presentada por la Procuraduría de la Administración al contestar el libelo de la excepción propuesta, en el sentido de que se procediera a la elaboración de un informe de capital, gastos de cobranza, intereses, pagos abonados por los deudores y cualesquiera otros gastos que pudieran adicionarse, con el fin de conocer la cifra exacta a pagar, resultaba fundamental para la solución de la litis, en vista de que sólo dicho informe permitiría a esta Corporación Judicial contar con los elementos de juicio necesarios para decidir con exactitud los derechos y obligaciones disputados en la controversia, que giran en torno a las cantidades realmente debidas o saldadas.

Por ende acogió dicha solicitud y se dispuso, con fundamento en los artículos 62 de la Ley 135 de 1943 y 782 del Código Judicial, la realización en la Casa Matriz del Banco Nacional de Panamá, de una inspección ocular al expediente crediticio y tarjetas bases del préstamo correspondiente de **LA PERLINA, S. A.**, **OMAR SEBASTIÁN RÍOS GALLEGOS** y **ESTELLA MARIS RÍOS DE RÍOS**, para proceder posteriormente a la elaboración de un informe, detallando de manera básica:

1° las sumas pagadas a capital e intereses, gastos legales y gastos de cobranza;
2° las sumas realmente adeudadas en cada uno de estos renglones por parte de los incidentistas, a la fecha de celebración de la pericia.

La inspección ocular y el informe precitado fue elaborado y entregado a la Secretaría Administrativa de la Sala Tercera de la Corte Suprema por las licenciadas JUANA VALENCIA y JUDITH NÚÑEZ, profesionales en el campo de la auditoría, y el mismo reposa a folios 71-74 del expediente principal.

Sin embargo, y antes de proceder al estudio del dictamen pericial, esta Superioridad considera de lugar hacer énfasis en que, conforme a los documentos y pruebas que reposan en autos, el contrato suscrito entre la sociedad **La Perlina, S. A.** y el Banco Nacional de Panamá (cfr. fojas 13-26 del expediente administrativo) estableció de manera clara en su cláusula quinta que "**la falta de pago de una de las cuotas convenidas ... o de cumplimiento de cualesquiera otra obligación contenida en el contrato determinarían el vencimiento del plazo de toda la deuda y daría derecho al banco para exigir su pago inmediato.**"

La fórmula de pago venía estipulada en la cláusula cuarta, de la siguiente forma: La parte deudora se obligó a amortizar el capital y los intereses del préstamo en desembolsos de siete mil balboas en el primer año, veinte mil balboas en el segundo año, y veinticinco mil balboas en el tercer año, capital e intereses. Contrato éste, firmado el 23 de enero de 1984, por un crédito total de B/.92,000.00.

Sin embargo, según consta a folios 30-31 del expediente administrativo, al

17 de julio de 1991, la sociedad deudora había incumplido con el pago o pagos estipulados, lo que producía el vencimiento del plazo de toda la deuda, circunstancia que era del conocimiento del deudor, tal como se desprende del contenido del informe visible a foja 59 del expediente administrativo, en que se recoge el hecho acaecido el día 30 de septiembre de 1991 (posterior al libramiento ejecutivo) cuando el propio señor RÍOS, representante legal de **La Perlina, S. A.** compareció ante el Juzgado Ejecutor del Banco Nacional solicitando un arreglo de pago que suspendiese la gestión de ejecución, lo que incluso pudiese constituir una aceptación implícita de la cuantía de la deuda.

Los razonamientos de la parte actora en el sentido de que por razón de los pagos que se efectuaban no debía procederse a la ejecución, quedan pues desvirtuados en este sentido, y no existen dudas por ende, en cuanto a que la actuación de la entidad bancaria al proceder a la ejecución obedece a la falta de cumplimiento del contrato de préstamo.

La tesis del excepcionante encuentra basamento en este caso, en la alegada circunstancia de que los pagos efectuados en los años 1990 y 1992 no fueron tomados en cuenta en el auto de libramiento de pago -por lo que la suma adeudada es considerablemente inferior- y que algunos fueron cargados al renglón de gastos de cobranza, mas no a la amortización de capital o intereses, siendo éstas las circunstancias fundamentales de las que se asiste la parte actora con el fin de que se le deduzca al total de la deuda que mantiene con el Banco Nacional, la cantidad de B/.42,300.58.

Es preciso en este contexto subrayar que el auto que libra mandamiento por vía ejecutiva tiene fecha del 17 de julio del año 1991, por lo que mal hubiesen podido haberse incluido en ese momento, pagos realizados en el año 1992. Además, la suma cuantificada para la ejecución fue de B/.89,913.28, adicionada posteriormente hasta la concurrencia de B/.94,679.77 (al 23 de octubre de 1992) debido a que la entidad bancaria continuó efectuando las actualizaciones del estado del crédito resultante del aumento progresivo de la deuda al interés estipulado en el contrato de préstamo hipotecario.

DESGLOSE DEL EXAMEN PERICIAL

El examen pericial a los libros del Banco Nacional ha permitido con toda exactitud deslindar los siguientes puntos:

a) Cuál es el estado actual (al 28 de febrero de 1996 en que se realiza la pericia) de la deuda existente; y
b) en qué renglones les fueron acreditados los pagos efectuados, y si efectivamente éstos se computaron de manera íntegra.

La pericia realizada ha dictaminado que:

1. En cuanto al préstamo N° 84 AG-40010 tipo Agrícola, cuyo monto era de B/.52,000.00 se acreditó abono a capital por la suma de B/.7,000.00, y 8 abonos a intereses, y sólo se cargaron como gastos de cobranza la suma de B/.500.00 de conformidad con lo establecido en la Resolución N° 26-91-JD de 11 de diciembre de 1991 expedida por la Junta Directiva del Banco Nacional. Dicha resolución, establece de igual forma que desde el momento en que el Departamento de Préstamos Centralizados tenga conocimiento de los gastos de cobranza fijados, **todo abono que se reciba para ser aplicado a la obligación se hará en el siguiente orden: a) gastos de cobranza; b)intereses;** c) capital.

Por ende, la suma adeudada (capital e intereses) hasta el 26 de febrero de 1996 asciende a B/.50,348.76.

En el caso del préstamo N° 85 AG-50005-002 tipo Agrícola, por un monto de B/.40,000.00 se acreditaron a capital 7 abonos a deuda por el orden de veinte mil balboas, y 10 abonos de intereses por el orden de B/.15,663.42, siendo que el total adeudado alcanza los B/.25,189.78.

Cabe destacar que contrario a lo aducido por el excepcionante, cada uno de

los pagos que aduce no le fueron cargados, sí le fueron computados, aunque por la fecha en que algunos se produjeron (con posterioridad al auto de libramiento ejecutivo), se reflejan actualizados y correctamente en el examen pericial. El auto de libramiento era pues, un detalle actuarial (a esa fecha) del monto adeudado.

Por otro lado, en lo atinente a los renglones y al orden en que se computaron los pagos del deudor, se advierte que todos fueron acreditados a capital e intereses del préstamo, y sólo la suma de B/.500.00 en concepto de gastos de cobranza fueron deducidos del pago de B/.6,167.98, también computados a los intereses del préstamo, por las razones antes comentadas.

La Sala estima en estas circunstancias, que la excepción de pago parcial puede reconocerse sólo en la medida de que posterior al auto de libramiento ejecutivo se han realizado amortizaciones a la deuda contraída que marcan una diferencia a favor de la excepcionante por el orden de B/.19,141.28.

Siendo ello así, la suma base pagadera (al 28 de febrero de 1996) y por tanto exigible al continuar la ejecución de la **SOCIEDAD LA PERLINA, S. A., OMAR RÍOS** y **ESTELA DE RÍOS**, asciende a B/.75,538.54, más los intereses y gastos legales que se produzcan hasta el momento del entero resarcimiento del crédito adeudado, correspondiéndole al Juzgado Ejecutor realizar el ajuste en el libramiento ejecutivo, con base a la reciente actualización que arrojó el examen pericial efectuado.

En consecuencia, la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA PARCIALMENTE PROBADA la Excepción de pago parcial de la obligación propuesta por el licenciado RAFAEL PONCE GONZÁLEZ actuando en representación de la OMAR SEBASTIÁN RÍOS GALLEGOS, ESTELLA MARIS RÍOS DE RÍOS y LA PERLINA, S. A., dentro del juicio ejecutivo por cobro coactivo que le sigue a los prenombrados, el Banco Nacional de Panamá, Sucursal de David, Provincia de Chiriquí.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO ADELMINO ANTONIO RIVERA VARGAS, EN REPRESENTACIÓN DE ALEXIS STANZIOLA PINZÓN, DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, CASA MATRIZ, A CENTRO INTERNACIONAL DE MUEBLES, S. A. Y OTROS. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Adelmino Antonio Rivera Vargas, ha interpuesto en representación de ALEXIS STANZIOLA PINZÓN, excepción de prescripción de la acción, dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que le sigue el BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, CASA MATRIZ, a CENTRO INTERNACIONAL DE MUEBLES, S. A. y OTROS.

La presente excepción está en la etapa procesal de resolver y antes de emitir un pronunciamiento, la Sala estima necesario dictar auto para mejor proveer, con fundamento en el artículo 1801 del Código Judicial, en relación con los artículos 1712 y 782 ídem. Estas normas preceptúan que en los procesos por cobro coactivo se procederá conforme a las disposiciones que regulan los juicios ejecutivos y demás normas legales sobre la materia; que en las excepciones que

se promuevan en los procesos ejecutivos el Juez podrá decretar pruebas de oficio con arreglo a lo dispuesto en el artículo 782; y que el Juez debe, en cualquier momento, ordenar de oficio la repetición o perfeccionamiento de cualquier prueba, cuando ha sido mal practicada o sea deficiente.

Como no fueron debidamente autenticadas las copias presentadas por la Procuraduría de la Administración en las que se detalla las fechas de abonos a la obligación contraída por los deudores con el Banco Nacional de Panamá (fs. 35 a 46), esta prueba es deficiente y la Sala estima necesario perfeccionarla, por su importancia para esclarecer los hechos que motivan la excepción.

A foja 1 del expediente se aprecia copia debidamente autenticada del contrato de préstamo celebrado con el Banco Nacional de Panamá por Centro Internacional de Muebles, S. A., Isaac Blasser y Alexis Stanziola el 10 de diciembre de 1975, por la suma de B/.33,000.00, y a foja 8 consta el Auto N° 538 de 25 de abril de 1995, por medio del cual el Juzgado Ejecutor del Banco Nacional de Panamá, adicionó el auto de 13 de marzo de 1978 y libró mandamiento de pago ejecutivo contra Centro Internacional de Muebles, S. A., Isaac Blasser y Alexis Stanziola hasta la concurrencia de B/.30,961.68, lo cual indica que los deudores abonaron a la obligación contraída.

Con el fin de establecer cuándo fue la última interrupción de la prescripción la Sala dispone solicitar al Departamento de Contabilidad del Banco Nacional de Panamá que, con base en los documentos que reposan en esa institución, presente un informe en la cual se haga constar la fecha y monto del último pago hecho al Banco Nacional de Panamá por los deudores para abonar la obligación contraída por Centro Internacional de Muebles, S. A., Isaac Blasser y Alexis Stanziola, mediante el contrato de préstamo celebrado el 10 de diciembre de 1975.

En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA que por Secretaría se requiera al Banco Nacional de Panamá, Casa Matriz, que, en el término de diez (10) días:

1. Remita un informe en el cual conste la fecha y monto del último abono a la obligación contraída con esa institución, mediante el contrato de préstamo de 10 de diciembre de 1975, por Centro Internacional de Muebles, S. A. y los codeudores Isaac Blasser Cweiber con cédula N° 2-47-225 y Alexis Stanziola con cédula N° 9-112-2720; y

2. Autentique y devuelva a la Secretaría las fotocopias que forman las fojas 35 a 46 del presente cuaderno, las cuales se le remiten con este fin.

Notifíquese y Comuníquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL, INTERPUESTO POR EL LICENCIADO VÍCTOR HARDING, EN REPRESENTACIÓN DE DIOVELIS JAÉN, CONTRA LA SENTENCIA DE 25 DE MARZO DE 1996, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: GRUPO HOTELERO MAR Y SOL, S. A. -VS- DIOVELIS JAÉN ÁBREGO. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, SEIS (6) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA (LABORAL).

VISTOS:

El licenciado **VÍCTOR HARDING**, actuando en su calidad de apoderado judicial

de **DIOVELIS JAÉN**, ha presentado ante esta Superioridad, Recurso de Casación Laboral contra la sentencia de 25 de marzo de 1996, proferida por el Tribunal Superior de Trabajo, dentro del proceso laboral: **GRUPO HOTELERO MAR Y SOL, S. A. -vs- DIOVELIS JAÉN ÁBREGO.**

Del recurso de casación se le corrió traslado a la contraparte del negocio, que se opuso a la admisión del mismo, argumentando en lo medular que el petente no explicó en qué consistían las infracciones a los artículos cuya violación se aduce.

Por consiguiente, esta Superioridad procede al examen del libelo en vías de determinar si el mismo cumple con los presupuestos legales que condicionan su admisión.

En este punto se advierte que efectivamente el casacionista, en la parte final de su escrito dentro del renglón **"Disposiciones Legales Infringidas y Concepto de la Infracción"**, sustenta su pretensión en el hecho de que la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Trabajo, que concede una autorización de despido a una trabajadora que gozaba de fuero de maternidad, resulta violatoria de un número plural de normas contenidas en el Código de Trabajo, a saber: los artículos 5, 70, 113, 185, 191, 732, 806, 813, y 213 de la citada excerta legal.

Sin embargo, este Tribunal constata que el casacionista no ha cumplido con el requisito formal previsto en el artículo 926, numeral 3° del Código Laboral, cuyo tenor literal se reproduce de seguido:

> "Artículo 926. El recurso de casación no está sujeto a formalidades técnicas especiales, pero deberá contener:
> ...
> **3. Cita de las disposiciones infringidas con expresión del concepto en que lo han sido.**"

De la lectura del libelo se desprende de manera indubitable que el actor se limita a **enunciar** una serie de disposiciones legales que estima infringidas por la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Trabajo, **mas no explica o detalla en forma alguna** en qué consiste la infracción, impidiendo a esta Magistratura cotejar las normas que se consideran vulneradas con la sentencia acusada.

Esta Superioridad ha venido reiterando la imperiosa necesidad de que se exprese en el libelo, tanto la disposición cuya vulneración se acusa, preferiblemente con su respectiva transcripción, como el **concepto** en que se produce dicha transgresión con base a alguna de las causales legales específicas (violación directa, interpretación errónea e indebida aplicación), de un modo objetivo y claro, que permita a la Sala decidir si el cargo impetrado es fundado o no.

La omisión absoluta de esta exposición lógica-jurídica impide a la Sala Tercera conocer en qué consiste la controversia que surge entre las consideraciones en que el Tribunal Superior ha basado la sentencia expedida, y la pretensión del casacionista, decidida en forma adversa, puesto que la cognición de esta Superioridad en esta clase de negocios está circunscrita precisamente a los cargos específicos del libelo, y las deficiencias en el planteamiento de este punto específico, no pueden ser suplidas por la Corte.

Sobre este particular son consultables, entre otras, las sentencias de 2 de abril de 1984; 17 de enero de 1991; 18 de junio de 1991 y de 9 de julio de 1992.

En estas circunstancias, lo pertinente es negarle curso legal al recurso de Casación Laboral presentado.

En consecuencia, la Sala Tercera LABORAL de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE el

Recurso de casación Laboral presentado por el licenciado VÍCTOR HARDING, actuando en su calidad de apoderado judicial de DIOVELIS JAÉN, contra la sentencia de 25 de marzo de 1996, proferida por el Tribunal Superior de Trabajo, dentro del proceso laboral: GRUPO HOTELERO MAR Y SOL, S. A. -vs- DIOVELIS JAÉN ÁBREGO.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL, INTERPUESTO POR EL LCDO. BOLÍVAR J. CANO EN REPRESENTACIÓN DE ISRAEL COBA, CONTRA LA RESOLUCIÓN DE 20 DE MARZO DE 1996, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DENTRO DEL PROCESO LABORAL: ISRAEL COBA VS MANUEL CARRERA Y/O CAPAT. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTE (20) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA. (LABORAL).

VISTOS:

El licdo. Bolívar José Cano Cruz, actuando en representación de Israel Coba Quintero, ha presentado recurso de casación laboral contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Trabajo de fecha 20 de marzo de 1996, dentro del proceso promovido por su representado contra Manuel Carrera Morán y/o CAPAT, S. A.

En el recurso se pide a la Sala que case la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Trabajo, de fecha 20 de marzo de 1996, y que a su vez declare injustificado el despido y se ordene el reintegro del trabajador mas el pago de los salarios caídos.

Observa la Sala que estamos en presencia de una demanda que se origina como consecuencia de un despido injustificado, las cuales, según dispone el artículo 218 del Código de Trabajo, se interponen ante las Juntas de Conciliación y Decisión y en los lugares donde no funcionen éstas, en los Tribunales de Trabajo.

En el presente caso, estamos ante una demanda que se inicia en el Juzgado de Trabajo de la Quinta Sección a pesar de ser competencia de las Junta de Conciliación y Decisión, pues no existe una en la localidad.

Esta Sala, en reiteradas ocasiones ha señalado que las demandas que se inicien en las Juntas de Conciliación y Decisión no admiten ulterior recurso y que la sentencia del Tribunal Superior de Trabajo es definitiva.

Corresponde entonces sí la Sala Tercera debe admitir o no el presente recurso por haber sido presentado el reclamo ante un tribunal de trabajo en sustitución de una Junta de Conciliación y Decisión, veamos.

El artículo 8 de la Ley 1 de 1986 permite apelar ante el Tribunal Superior de Trabajo las sentencias emitidas por las Juntas de Conciliación y Decisión que excedan de dos balboas (B/.2,000.00), **"o cuando el monto de las prestaciones e indemnizaciones que se deban pagar en sustitución del reintegro, incluyendo los salarios vencidos, exceda de dicha suma".**

El caso que nos atañe, el despido se produjo el 19 de abril de 1994 y la resolución de primera instancia tiene fecha de 26 de mayo de 1995, por lo que al ser un trabajador con un salario de B/.500.00 mensuales, los salarios caídos superan los dos mil balboas. Por lo tanto, en caso que la empresa demandada fuera condenada por los tribunales laborales a reintegrar al trabajador y optare por sustituir el reintegro, la suma que debería pagar excede los dos mil balboas.

Es claro entonces que la presente demanda se enmarca dentro de lo que dispone el artículo 8 de la Ley de 1986. Este artículo contiene un parágrafo el cual dispone lo siguiente:

> "Las Decisiones del Tribunal Superior de Trabajo en los casos previstos en la presente disposición tienen carácter definitivo, no admiten ulterior recurso y producen efecto de cosa juzgada".

Este parágrafo es claro y no admite discusión, y al no distinguir a qué recurso se refiere esta norma, se debe entender que incluye el recurso de casación laboral pretendido por el actor.

En mérito de lo anteriormente señalado, es evidente que se debe declarar improcedente el recurso de casación, de conformidad al articulo 8 de la Ley 1 de 17 de marzo de 1986. Pues nos encontramos ante una sentencia que resuelve un conflicto en el cual el monto de las prestaciones e indemnizaciones, más los salarios caídos que se deban pagar en sustitución del reintegro es mayor de dos mil balboas, resolución que una vez apelada y resuelta por el Tribunal Superior de Trabajo, tiene carácter definitivo, no admite ulterior recurso y produce efecto de cosa juzgada.

En consecuencia, la Sala Tercera (LABORAL) de la Corte Suprema, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, RECHAZA DE PLANO el recurso de casación presentado por el Licdo. Bolívar José Cano Cruz, dentro del proceso laboral promovido por ISRAEL COBA QUINTERO contra MANUEL CARRERA MORAN Y/O CAPAT.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL, INTERPUESTO POR EL LCDO. ELVIS ALBERTO POLO, EN REPRESENTACIÓN DE MÁXIMO HENRÍQUEZ Y OTROS, CONTRA LA SENTENCIA DE 26 DE ENERO DE 1996, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DENTRO DEL PROCESO LABORAL: MÁXIMO HENRÍQUEZ Y OTROS VS ALLIED CONTRACTORS CO., INC. Y/O LEETEL, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTE (20) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA. (LABORAL).

VISTOS:

El Licdo. Elvis Alberto Polo Vargas, apoderado judicial especial de Máximo Henríquez, Pedro De La Cruz, Martín Cáceres y otros, ha presentado recurso de casación laboral contra el auto expedido por el Tribunal Superior de Trabajo el 26 de enero de 1996, dentro del proceso laboral de ejecución de sentencia propuesto por sus representados contra Allied Contractors Co., Inc. y/o Leetel, S. A.

En el recurso se solicita a la Sala Tercera que revoque el auto proferido por el Tribunal Superior de Trabajo y que, en su lugar, se obligue a la empresa Aseguradora Mundial, S. A., quien actuó como fiadora, a entregar lo solicitado en el oficio N° 015-JCD-2 dictado por la Junta de Conciliación y Decisión.

Se trata de un proceso de ejecución de sentencia en el cual los demandantes solicitaron la ejecución de la Resolución N° 51-DGT 53/94 de la Dirección General de Trabajo que condena a las empresas Leetel, S. A. y Allied Contractors Co., Inc. a pagar a los trabajadores demandantes la suma de B/.53,394.08 en concepto de prestaciones laborales. El Juzgado Segundo de Trabajo declaró debidamente ejecutoriada dicha resolución y para tales efectos elevó a categoría de embargo el certificado de Garantía N° 14445 de 11 de marzo de 1994. El Tribunal Superior

de Trabajo modificó el Auto N° 243 del 29 de agosto de 1995 y levantó el embargo decretado a la fianza que Leetel, S. A., a través de la compañía Aseguradora Mundial, S. A., constituyó a favor del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica para responder por los perjuicios que pudiera ocasionar la falta de cumplimiento del contrato N° CC-2886 celebrado entre ellos y mantuvo el embargo decretado sobre el Certificado de Garantía N° 14445 del 11 de marzo de 1994 consignado como caución para levantar un secuestro practicado a bienes muebles de las sociedades demandadas.

El recurrente sostiene que la sentencia por el impugnada ha violado los artículos 893, 734, 738 y 868 del Código de Trabajo.

La Sala observa que estamos en presencia de una demanda de ejecución de sentencia. Este tipo de demandas se rigen por las disposiciones contenidas en el Capítulo IV del título VII del Código de Trabajo, en el cual el artículo 898 señala lo siguiente:

> "Contra las resoluciones dictadas en los procedimientos a que se refiere este capítulo sólo puede interponerse el recurso de apelación, sujeto a las condiciones previstas en este Código".

Este artículo es claro y no admite discusión, y al indicar que solo puede interponerse el recurso de apelación contra las resoluciones dictadas en los procedimientos a que se refiere ese capítulo, se debe entender que excluye al recurso de casación laboral pretendido por el actor.

En mérito de lo anteriormente señalado, es evidente que se debe declarar improcedente el recurso de casación, de conformidad con el articulo 898 del Código de Trabajo. Pues nos encontramos ante una sentencia que resuelve una demanda de ejecución de sentencia, resolución que una vez resuelta por el Tribunal Superior de Trabajo, sólo puede interponerse el recurso de apelación.

En consecuencia, la Sala Tercera (LABORAL) de la Corte Suprema, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, RECHAZA DE PLANO el recurso de casación presentado por el Licdo. Elvis Alberto Polo Vargas contra el Auto de 26 de enero de 1996 proferido por el Tribunal superior de Trabajo, dentro del proceso laboral promovido por Máximo Henríquez, Pedro a. de La Cruz, Martín Cáceres y otros contra la empresa Allied Contractors Co., Inc. y/o Leetel, S. A.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL, INTERPUESTO POR LA LICENCIADA MÓNICA IVANKOVICH L'HOESTE, EN REPRESENTACIÓN DE EDGAR IVANKOVICH ANZOLA, CONTRA LA RESOLUCIÓN DE 21 DE MARZO DE 1996, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DENTRO DEL PROCESO LABORAL: EDGAR IVANKOVICH ANZOLA-VS-ALMACENAJES INDUSTRIALES, S. A. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTE (20) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA. LABORAL.

VISTOS:

La licenciada Mónica IvanKovich L'Hoeste actuando en nombre y representación de Edgar IvanKovich Anzola, interpuso oportunamente ante esta Sala de lo Laboral, Recurso de Casación Laboral contra la Sentencia de 21 de marzo de 1996, dictada por el Tribunal Superior de Trabajo dentro del proceso laboral: EDGAR IVANKOVICH ANZOLA-vs-ALMACENAJES INDUSTRIALES, S. A.

En el referido proceso ante la Junta de Conciliación y Decisión se declaró, mediante la Sentencia PJ-1, fechada el 24 de octubre de 1995, el despido justificado del señor Edgar Ivankovich Anzola y, en consecuencia, se condenó a la empresa al pago de un mes de preaviso, 8 semanas de indemnización, décimo tercer mes y vacaciones proporcionales por un monto de B/.4,920.44 menos los descuentos legales. (Fs. 153-168).

Esta Sentencia fue apelada y el Tribunal Superior de Trabajo, al resolver el recurso la modificó, absolviendo a la empresa ALMACENAJES INDUSTRIALES, S. A. de las reclamaciones incoadas en su contra y ordenándole a la empresa demandada la sustitución del cheque N° 0934 de 7 de junio de 1995 por la suma de B/.4,406.73 correspondiente a las prestaciones a que tiene derecho el demandante, que está vencido, por otro cheque por la misma suma a fin de que sea entregado al demandante, con fundamento en los artículos 52, 54, 212 numeral 3, 735, 940 y demás concordantes del Código de Trabajo.

Señala el recurrente en su escrito de casación que la resolución de segunda instancia emitió un fallo confuso en su redacción, sin argumentar positiva o negativamente sobre las alegaciones del demandante, y "se limitó a repetir lo expresado por la Junta de Conciliación y Decisión, manteniendo un criterio formalista del contrato de trabajo, sin considerar la naturaleza y circunstancias concurrentes al mismo."

Antes de entrar a examinar los cargos contra la sentencia impugnada, la Sala debe examinar si procede la interposición del recurso de casación laboral.

En relación con este punto, el artículo 8 de la Ley 1 de 17 de marzo de 1986 dispone lo siguiente:

> "Artículo 8. En adición a lo dispuesto en el artículo 914 del Código de Trabajo, el recurso de apelación puede interponerse ante el Tribunal Superior de Trabajo contra las sentencias dictadas por las Juntas de Conciliación y Decisión en los procesos cuya cuantía exceda de Dos Mil Balboas (B/.2,000.00), o cuando el monto de las prestaciones e indemnizaciones que se deban pagar en sustitución del reintegro, incluyendo los salarios vencidos, exceda de dicha suma. En estos casos, no se causarán salarios vencidos durante la segunda instancia del proceso.
>
> PARÁGRAFO: Las sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Trabajo en los casos previstos en la presente disposición tienen carácter definitivo, no admiten ulterior recurso y producen el efecto de cosa juzgada".

Esta norma la ha aplicado la Sala en reiterados fallos (Sentencia de 28 de junio de 1990, Sentencia de 20 de julio de 1991, Sentencia de 15 de diciembre de 1992 y Sentencia de 31 de mayo de 1994), y ha resuelto que el recurso de casación laboral no puede ser admitido, cuando la Resolución del Tribunal Superior que se pretende casar, fue expedida al resolver recurso de apelación interpuesto contra una sentencia proferida por las Juntas de Conciliación y Decisión.

En consecuencia, la Corte Suprema de Justicia, Sala Tercera-Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, RECHAZA DE PLANO el Recurso de Casación Laboral interpuesto por la licenciada Mónica IvanKovich L'Hoeste en representación de Edgar IvanKovich Anzola, contra la Sentencia dictada por el Tribunal Superior de Trabajo el 21 de marzo de 1996, dentro del proceso laboral promovido por EDGAR IVANKOVICH ANZOLA contra ALMACENAJES INDUSTRIALES, S. A.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL, INTERPUESTO POR EL LICENCIADO FRANCISCO ESPINOSA CASTILLO, EN REPRESENTACIÓN DE BOLÍVAR CASTILLO, CONTRA LA SENTENCIA DE 28 DE MARZO DE 1996, EMITIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: BOLÍVAR CASTILLO -V- SUPERMERCADOS Y COMISARIATOS, S. A.; CASA DE LA CARNE N° 3, S. A.; FORTUNATO MANGRAVITA, S. A.; MANGRAVITA, S. A. Y OTROS. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTE (20) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA. LABORAL.

VISTOS:

El licenciado Francisco Espinosa Castillo en su condición de apoderado judicial de Bolívar Castillo, interpuso oportunamente ante esta Sala Laboral, recurso de casación laboral contra la resolución de 28 de marzo de 1996, dictada por el Tribunal Superior de Trabajo, mediante la cual confirmó el Auto N° 35 de 16 de febrero de 1996, emitido por el Juez Cuarto de Trabajo de la Primera Sección, en el Proceso Laboral promovido por BOLÍVAR CASTILLO contra SUPERMERCADOS Y COMISARIATOS, S. A., CASA DE LA CARNE N° 3, S. A., FORTUNATO MANGRAVITA, S. A., MANGRAVITA, S. A. Y OTROS.

Antes de proceder al estudio del fondo de la controversia, la Sala pasa a examinar el presente recurso de casación para resolver sobre su admisibilidad.

Consta en autos que, la resolución que se impugna fue proferida en la etapa ejecución de la Sentencia dictada por la Junta de Conciliación número 5, el 8 de junio de 1994, mediante la cual condenó a Supermercados y Comisariatos, S. A., Casa de la Carne N° 3, S. A., Fortunato Mangravita, S. A., Mangravita, S. A. y otros a pagarle al señor Bolívar Castillo, la suma de B/.46,059.85 en concepto de condena económica, más las costas de ejecución tasadas en el 10%, menos la suma de B/.17, 699.33 que el demandante recibió al momento que fue liquidado.

En efecto, en el expediente principal se lee, a foja 250, un escrito presentado por el apoderado legal del demandante, ante el Juez Cuarto de Trabajo, solicitándole que tomara como salario base mensual "la suma de B/.1,450.00 y semanal de B/.334.64" , en vez del salario base mensual de B/.1,150.00 considerado por las empresas demandadas, solicitud que fue negada por el referido juzgado mediante auto N° 35 de 16 de febrero de 1996 (fs. 284-286). Contra la decisión anterior la demandante interpuso oportunamente recurso de apelación (f. 289). Mediante Auto de 28 de marzo de 1996, el Tribunal Superior de Trabajo conoció de la apelación y decidió confirmar el auto N° 35 de 16 de febrero de 1996, dictado por el juez a quo, quedando así, agotados los medios de impugnación contra la decisión, de acuerdo con el artículo 898 del Código de Trabajo el cual establece que contra las resoluciones dictadas en los procedimientos de ejecución de sentencia, sólo puede interponerse el recurso de apelación, sujeto a las condiciones previstas en dicho Código.

Esta Sala, en reiterados fallos (auto de 9 de diciembre de 1991 dictado en el proceso legal promovido por SITRAPRODEC contra Piedras Picadas, auto de 13 de julio de 1992, dictado en el proceso laboral promovido por Marcos A. Pérez contra Galvanizadora Metálica, S. A., y auto de 4 de agosto de 1992, dictado en el proceso legal promovido por la señora Ana Isabel Vda. de González contra la Asociación Franco Panameña de Enseñanza (Escuela Franco Panameña Louis Pasteur), ha resuelto que las decisiones expedidas dentro de un proceso de ejecución de sentencia, no pueden ser impugnadas mediante el recurso de casación, conforme lo dispuesto en el artículo 898 del Código de Trabajo en relación con los artículos 925 y 928 del mismo Código.

De consiguiente, la casación interpuesta es improcedente y, por tanto, no debe dársele curso.

Por todo lo antes expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala Tercera-Laboral, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, RECHAZA DE PLANO el Recurso de Casación Laboral propuesto por el licenciado

Francisco Espinosa Castillo en nombre y representación de Bolívar Castillo contra la resolución de 28 de marzo de 1996, emitida por el Tribunal Superior de Trabajo.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL, INTERPUESTO POR LA LICENCIADA ELIZABETH MORENO TOROK, EN REPRESENTACIÓN DE CONSTANTINO BEITÍA, CONTRA LA SENTENCIA DE 27 DE FEBRERO DE 1996, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: CONSTANTINO BEITÍA -VS- VENTAS DE EQUIPOS, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA. LABORAL.

VISTOS:

La Licda. Elizabeth Moreno Torok, quien actúa en representación del señor Constantino Beitía González, ha presentado recurso de casación laboral contra la sentencia expedida por el Tribunal Superior de Trabajo el 27 de febrero de 1996 dentro del proceso laboral promovido por su representado contra Ventas de Equipo, S. A.

Se trata de un proceso de trabajo dentro del cual la demandante solicita se condene a la empresa demandada a pagar la suma de sesenta y nueve mil ciento veinte balboas en concepto de pensión alimenticia por incapacidad absoluta permanente para laborar, más costas, gastos, recargos e intereses. El juzgador de primera instancia no accedió a la petición del demandante y el Tribunal Superior de Trabajo confirmó la sentencia de primera instancia mediante la Sentencia de 27 de febrero de 1996, resolución que se impugna en el presente recurso de casación.

La Sala pasa a examinar los cargos que se formulan a la sentencia de segunda instancia.

El recurrente considera que la sentencia por él impugnada ha infringido los artículos 300 y 304 del Código de Trabajo.

Veamos los cargos relacionados con el artículo 300 del código de Trabajo. Señala el recurrente que la infracción al artículo citado fue en el concepto de indebida aplicación, puesto que el Tribunal Superior de Trabajo no debió aplicar este artículo porque su representado sufrió una enfermedad no profesional, por cuanto el derrame sufrido no fue consecuencia de la clase de trabajo que realiza.

La Sala considera que el recurrente confunde la sentencia del Tribunal Superior de Trabajo. Esto se desprende por cuanto el recurrente al tratar de demostrar por qué el Tribunal Superior de Trabajo ha aplicado indebidamente el articulo en cuestión, transcribió un párrafo de la sentencia en el que se fundamenta, el cual es el siguiente:

> "Ello, no obstante, en el caso subjúdice la reclamación del trabajador demandante está dirigida a obtener del demandado el pago de una suma de dinero correspondiente a una incapacidad absoluta permanente por razón de una **ENFERMEDAD NO PROFESIONAL** ..." (Lo subrayado es nuestro).

Debemos observar que el párrafo arriba transcrito comienza señalando que "la reclamación del demandante está dirigida ..." lo que nos indica que el

Tribunal Superior enfatiza la pretensión del demandante, no de lo que el propio Tribunal Superior considera para emitir una resolución. Además, agrega el Tribunal Superior de Trabajo que la enfermedad no profesional aludida no ha sido debidamente comprobada y que el artículo 330 del Código de Trabajo se "refiere básicamente a los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales" lo que concuerda con la reclamación del recurrente. Por lo tanto consideramos que el Tribunal Superior de Trabajo no infringió la norma citada.

La otra infracción señalada por el recurrente, se refiere a que el Tribunal Superior de Trabajo debió aplicar el artículo 304 del Código de Trabajo puesto que "en el evento de que el empleador demandado hubiese pagado al trabajador Constantino Beitía las cuotas correspondientes al Seguro Social, esta institución hubiese perfectamente cubierto la incapacidad del trabajador, sea ésta ocasionada por enfermedad profesional o por enfermedad común".

Por su parte, el Tribunal Superior de Trabajo declaró que la enfermedad sufrida por el demandante "no ha sido debidamente comprobada, cuando de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 300 del Código de Trabajo la responsabilidad del empleador en materia de riesgos profesionales, se refiere básicamente a los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales".

Concordamos con el Tribunal Superior de Trabajo puesto que tanto el artículo 300 como el artículo 304 del Código de Trabajo se encuentran en el título II de "Riesgos Profesionales" del Código de Trabajo, y el artículo 291 define riesgos profesionales como "los accidentes y las enfermedades a que están expuestos los trabajadores a causa de las labores que ejecutan ...", lo que nos indica que, contrariamente a lo señalado por el actor, las normas de este título si bien no distinguen es porque éste capítulo únicamente trata sobre enfermedades ocurridas como consecuencia de las labores habituales ocurridas en el trabajo.

Por todo lo anteriormente expuesto, considera la Sala que no se han producido las infracciones que el recurrente imputa a la sentencia de segunda instancia.

En consecuencia, la Sala Tercera (LABORAL) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia expedida por el Tribunal Superior de Trabajo el 27 de febrero de 1996, dentro del proceso abreviado de trabajo promovido por Elizabeth Moreno Torok contra Ventas de Equipos, S. A.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL, INTERPUESTO POR EL LICENCIADO JOSÉ DE JESÚS GÓNDOLA MOLINAR, EN REPRESENTACIÓN DE JAMES ANDERSON, CONTRA LA SENTENCIA DE 28 DE FEBRERO DE 1996, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: JAMES ANDERSON -VS- PANAMÁ AIR MARINE SAFETY & SUPPLY INC. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA. (LABORAL).

VISTOS:

El licdo. José de Jesús Góndola Molinar, actuando en representación de James Anderson, ha presentado recurso de casación laboral contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Trabajo de fecha 28 de febrero de 1996, dentro del proceso promovido por su representado contra Panamá Air marine Safety and Supply Inc. (PAMAR).

En el recurso se pide a la Sala que case la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Trabajo, de fecha 28 de febrero De 1996, y que en su lugar se acceda ala pretensión del trabajador y se ordene el pago de la indemnización salarios caídos, más los recargos e intereses que se causen.

Observa la Sala que estamos en presencia de una demanda que se origina como consecuencia de un despido injustificado, que, según dispone el artículo 218 del Código de Trabajo, se tramitan ante las Juntas de Conciliación y Decisión y en los lugares donde no funcionen éstas, en los Tribunales de Trabajo.

Esta Sala en reiteradas ocasiones ha señalado que las demandas que se inicien en las Juntas de Conciliación y Decisión no admiten ulterior recurso y que la sentencia del Tribunal Superior de Trabajo es definitiva.

La presente demanda se enmarca dentro de lo que dispone el artículo 8 de la Ley de 1986. Este artículo contiene un parágrafo el cual dispone lo siguiente:

> "Las Decisiones del Tribunal Superior de Trabajo en los casos previstos en la presente disposición tienen carácter definitivo, no admiten ulterior recurso y producen efecto de cosa juzgada".

Este parágrafo es claro y no admite discusión, y al no distinguir a qué recurso se refiere esta norma, se debe entender que incluye el recurso de casación laboral interpuesto por el actor.

En mérito de lo anteriormente señalado, es evidente que se debe declarar improcedente el recurso de casación, de conformidad al articulo 8 de la Ley 1 de 17 de marzo de 1986, pues nos encontramos ante una sentencia que resuelve un conflicto que se origina en las Juntas de Conciliación y Decisión como resultado del despido del demandante, resolución que una vez apelada y resuelta por el Tribunal Superior de Trabajo, tiene carácter definitivo, no admite ulterior recurso y produce efecto de cosa juzgada.

En consecuencia, la Sala Tercera (LABORAL) de la Corte Suprema, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, RECHAZA DE PLANO el recurso de casación presentado por el Licdo. José de Jesús Góndola, dentro del proceso laboral promovido por JAMES ANDERSON contra PANAMÁ AIR MARINE SAFETY AND SUPPLY INC. (PAMAR).

Notifíquese Publíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL, INTERPUESTO POR EL LCDO. ANTONIO OSORIO ÁBREGO, EN REPRESENTACIÓN DE ELENA ROJAS DE CONCEPCIÓN, CONTRA LA SENTENCIA DE 15 DE MARZO DE 1996, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: ELENA ROJAS DE CONCEPCIÓN VS NOHAMED MAHMUD ABDEL HAMID ABED Y/O ALMACÉN LA FAMA. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA. (LABORAL).

VISTOS:

El licdo. Antonio Osorio Ábrego, ha presentado recurso de casación laboral contra la sentencia de 15 de marzo de 1996 proferida por el Tribunal Superior de Trabajo dentro del proceso laboral instaurado por su representada, la trabajadora Elena Rojas De Concepción contra Mohamed Mahmud Abdel Hamid Abed y/o Almacén La Fama.

En el recurso se pide a la Sala que case la sentencia de segunda instancia

y a la vez condene a la parte demandada al pago de ocho mil ciento treinta y dos balboas con treinta centavos (B/.8,132.30).

Se trata de un proceso laboral en el cual la demandante pide que los demandados sean condenados al pago de la suma arriba mencionada en concepto de indemnización, vacaciones vencidas, horas extras, décimo tercer mes no pagado, días feriados más los gastos, intereses y costos que genere el proceso.

El juzgador de primera instancia condenó a los demandados a pagarle al demandante la suma de cinco mil cincuenta y nueve balboas con cuarenta centésimos (B/.5,059.40) en concepto de salario, vacaciones, décimo tercer mes, indemnización más costas intereses y gastos y absolvió a la demandada de las demás pretensiones. El Tribunal Superior de Trabajo modificó la sentencia de primera instancia y condenó a los demandados al pago de doscientos setenta balboas (B/.270.00) en concepto de vacaciones vencidas, decimotercer mes vencido y proporcional más los intereses establecidos en el artículo 169 del Código de Trabajo y la absolvió de las demás pretensiones incoadas en su contra.

La Sala pasa a examinar las infracciones que se endilgan a la sentencia de segunda instancia.

La recurrente considera que la sentencia por ella impugnada ha infringido los artículos 33 numerales 1° y 2°, 36 numeral 4°, 40, 41, 48, 49, 50, 69, 148, 151, 218, 569, 570, 732, 864, 735 y 765 del Código de Trabajo.

Referente a los cargos endilgados a la sentencia frente a los artículos 33, 36, 40, 41, 48, 49, 50, 66, 69, 148, 151 y 735 del Código de Trabajo la actora se limita a explicar en qué consiste la norma y lo que las pruebas presentadas en el proceso acreditaron.

La Sala observa que pretende la recurrente que aquélla entre a analizar y juzgar el criterio que el Tribunal Superior de Trabajo le diera a las pruebas. Por ello cabe señalar que en diferentes ocasiones esta Sala ha manifestado que el presente recurso no es una tercera instancia. El recurso de casación laboral se limita a confrontar la sentencia de segunda instancia con las normas substantivas de la legislación laboral que se puedan haber violado.

Cabe añadir, cuando se trata de errores en la interpretación o valoración de las pruebas, errores que salten a la vista sin mayor esfuerzo, como por ejemplo, ignorar la existencia de un documento o suponer que existe uno que no está acreditado en el proceso, puede entonces la Sala Tercera entrar a conocer del caso. Pero es obligante que el recurrente indique en qué consiste la violación a las reglas de la sana crítica para que la Sala entre a conocer del mismo y de comprobarse los cargos, casar la sentencia.

Al sustentar la infracción a los artículos señalados, la recurrente no señala en qué consiste el error cometido por la sentencia del Tribunal Superior. Como señalamos, el recurrente se limita a decir que las pruebas presentadas en el proceso acreditaron su reclamo, pero no indica a cuáles pruebas se refiere y cómo o por qué dichas pruebas acreditan su pretensión, por lo que le es imposible a esta Sala el estudio del mismo. Siendo esto así los cargos endilgados a las normas citadas no prosperan.

Con respecto a las supuestas infracciones a los artículos 218, 569, 570, del Código de Trabajo y el numeral 2° del artículo 1° de la Ley 53 de 1975, cabe señalar que son normas de carácter procedimental, lo que de acuerdo al artículo 928 del Código de Trabajo, el tribunal de Casación debe rechazar los cargos cuando se pida la corrección, reposición o práctica de trámites procesales, lo que ocurre en el presente negocio y por lo tanto, estos cargos no proceden.

Con respecto a la infracción de los artículos 732 y 864 del Código de Trabajo, señala el recurrente que han sido infringidos directamente puesto que el Tribunal Superior de Trabajo no aplicó las reglas de la sana crítica, no apreció la prueba testimonial ni la declaración de parte y dice que el "perito dejó constancia en su informe, que no existía registro, planilla alguna, que lo que existía era un cuaderno de apuntes presumiblemente del ALMACÉN LA FAMA". Y

añade "estas opiniones del Perito eran con el objeto que la prueba se valorara conforme a los criterios de la sana crítica y se tomara en cuenta la fuente de la prueba ...". Sin embargo cabe resaltar que la recurrente no terminó la frase del perito, veamos la frase completa:

"lo que encontramos fue un cuaderno de apuntes presumiblemente del ALMACÉN LA FAMA, visiblemente alterado y de dudosa credibilidad". Pues bien, si el propio perito no le da credibilidad al cuaderno en cuestión, no vemos cómo el recurrente pretende que el Tribunal Superior de Trabajo se lo dé. Sin embargo el Tribunal Superior de Trabajo evaluó correctamente el citado peritaje.

Por otro lado, si bien la parte recurrente al señalar las infracciones a los artículos 732, y 864 indica a que prueba se refiere, se observa que pretende que se le dé un valor diferente a la prueba, pero no nos dice en que consistió el error del juzgador, pues se limitó a señalar el valor de la prueba, según ella. Además, con respecto a la sana crítica, esta Sala ha mantenido el criterio arriba señalado cuando los cargos que se endilgan se refieren a la valoración que el juzgador de segunda instancia le haya dado a las pruebas. Por lo tanto consideramos que estos cargos tampoco proceden.

Sobre la violación al artículo 765 del Código de Trabajo, a lo que se debe señalar que esta norma procesal no debe ser objeto de este recurso extraordinario por ser una norma de carácter procesal.

En consecuencia, la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley NO CASA la Sentencia proferida por el Tribunal Superior de Trabajo el 15 de marzo de 1995, dentro del proceso laboral entablado por ELENA ROJAS DE CONCEPCIÓN -vs- MOHAMED MAHMUD ABDEL HAMID ABED y/o ALMACÉN LA FAMA.

Cópiese, Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL, INTERPUESTO POR EL LICENCIADO RANDOLPH A. LAWSON EN REPRESENTACIÓN DE RODOLFO CHIARI, CONTRA LA RESOLUCIÓN DE 15 DE ABRIL DE 1996, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: RODOLFO CHIARI-VS-INVERSIONES NATO, S. A. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA. LABORAL.

VISTOS:

El licenciado **RANDOLPH LAWSON**, actuando en su calidad de apoderado judicial del señor **RODOLFO CHIARI**, ha presentado Recurso de Casación Laboral contra la resolución de 15 de abril de 1996, dictada por el Tribunal Superior de Trabajo dentro del proceso laboral **RODOLFO CHIARI-vs-INVERSIONES NATO, S. A.**

De acuerdo al artículo 927 del Código de Trabajo, se emplazó a la parte demandada para que hiciera valer sus objeciones frente al recurso propuesto, sin que en el término de ley hubiese comparecido al proceso.

El Tribunal Superior de Trabajo, en el auto demandado, sostuvo básicamente lo siguiente:

El Juez a quo al resolver, expresó lo que sigue:

`Este Tribunal, revisando las constancias procesales tiene algunas objeciones que formular a la solicitud presentada, pues el documento

> que se aporta como recaudo ejecutivo no se deriva una obligación líquida o susceptible de liquidación, exigible, ni mucho menos de plazo vencido, requisitos básicos que debe cumplir un documento para que se le califique de "título ejecutivo". Obsérvese que no se establece una cuantía determinada, sólo se indica que el trabajador reclama el pago de sus derechos adquiridos y demás prestaciones laborales. No existe obligación reconocida de parte de la empresa, pues el simple señalamiento que se hace en el acta que INVERSIONES NATO, S. A. se le citará para que comparezca en una nueva fecha para traer una propuesta de pago, no constituye el reconocimiento de una obligación, por lo que ésta ni existe, ni es exigible y mucho menos es de plazo vencido, pues no consta fecha alguna en la que supuestamente debía cumplirse la obligación.
>
> Este Tribunal Superior coincide con la Juez a quo, habida cuenta de que el documento presentado por el petente como título ejecutivo no reúne los requisitos elementales, como es el reconocimiento del empleador de una deuda a favor de otra persona que se encuentre vencida, sea exigible y líquida."

El casacionista para sustentar su recurso contra lo expresado por parte del Tribunal que conoció la alzada, señaló que la resolución de 15 de abril de 1996 viola el artículo 994 del Código de Trabajo. Fundamenta la transgresión invocada manifestando en lo medular:

1. que el documento aportado sí presta mérito ejecutivo, por tratarse de un reconocimiento del empleador sobre las sumas adeudadas; y

2. que el Juzgador Ad-quem "no apreció las pruebas, conforme a las reglas de la sana crítica, esto es, conforme a normas fundamentales de la lógica o de la experiencia o puntos objetivos de referencia."

Encontrándose el proceso en este estado, la Sala Tercera entra a resolver la controversia jurídica planteada.

Según se desprende de las constancias de autos, el señor RODOLFO CHIARI inició ante los Juzgados Seccionales de Trabajo, un proceso laboral ejecutivo contra la empresa INVERSIONES NATO, S. A. El proceso en cuestión quedó radicado ante el Juzgado Segundo de Trabajo, despacho judicial que debió examinar si la prueba que se adjuntó al libelo, efectivamente constituía título ejecutivo.

En este sentido, luego del examen de rigor, se arribó a la conclusión de que el documento que se aportó como recaudo ejecutivo no era un reconocimiento de deuda a favor de persona alguna, ni de éste se derivaba una obligación líquida o susceptible de liquidación, exigible, ni de plazo vencido.

Dicho documento era una citación para que la empresa demanda compareciera con una propuesta de un arreglo de pago de supuestos "derechos adquiridos y demás prestaciones laborales". Se advierte que la empresa demandada nunca compareció a la citación, mas es éste el documento que al cual la parte demandante le atribuye mérito ejecutivo.

El Juzgador A-quo fue enfático en este sentido, al considerar que en dicho documento no se establecía una cuantía determinada, sólo se indicaba que el trabajador reclamaba el pago de sus derechos adquiridos y demás prestaciones laborales. Tampoco existía una obligación reconocida de parte de la empresa, pues el simple señalamiento que se hacía en el acta de que a INVERSIONES NATO, S. A. se le citaría para que compareciera a presentar una propuesta de pago, no constituía el reconocimiento de una obligación, por lo que ésta ni existía, ni era exigible y mucho menos de plazo vencido, pues no consta fecha alguna en la que supuestamente debía cumplirse la obligación.

El Tribunal Superior se hizo eco de los razonamientos adelantados por el Juez a-quo, indicando que el documento aportado carece de los elementos y requisitos esenciales para que preste mérito ejecutivo contra la empresa.

Una vez examinadas las constancias procesales, esta Superioridad concluye que la resolución judicial proferida por el Tribunal Superior de Justicia encuentra fundamento legal, toda vez que el proceso ejecutivo descansa en el **título ejecutivo** y para librarse mandamiento ejecutivo debe existir certeza de la prestación ejecutiva, **acreditándola mediante alguno de los actos a los cuales la ley le asigna expresamente el carácter de título ejecutivo.**

En el negocio sub-júdice, por tratarse de un supuesto título de naturaleza extrajudicial, el demandante requería la existencia de un instrumento (reconocimiento ante las autoridades de trabajo) en que constara la aceptación de una deuda del empleador en favor del demandante, que se encontrase vencida, fuese exigible y líquida, o susceptible de liquidación, presupuestos legales de los que evidentemente adolece el documento presentado, en el que sólo se cita a la parte empleadora para que presente un arreglo de pago sobre supuestas prestaciones adeudadas, sin que este último haya reconocido deuda alguna en favor del señor **CHIARI.**

Por otra parte, el casacionista ha invocado la violación del artículo 994 del Código de Trabajo, mismo que prevé qué tipo de obligaciones originadas en una relación de trabajo son susceptibles de ser exigidas por vía ejecutiva y bajo qué condiciones, acotando que la transgresión se produce por la indebida apreciación del material probatorio, sin la correcta aplicación de los principios de la sana crítica.

En concepto de esta Superioridad, el Tribunal Ad-quem ha examinado el documento que sirve de prueba para acreditar el supuesto título ejecutivo, de manera racional, con arreglo a la ley, la lógica, y la experiencia. La apreciación probatoria aparece debidamente motivada, resaltando los aspectos que evidencian la aplicación de un criterio lógico-jurídico por el Juzgador.

Esta valoración es idónea y no tiene por qué ser cuestionada por esta Sala, pues coincide con las reglas mínimas que establece el Código de Trabajo en el artículo 732: **objetividad**, **sensatez**, **y lógica razonable**, a fin de otorgarle su **justo valor** al material probatorio.

Tampoco existe razón alguna para considerar que la apreciación de las pruebas por parte del tribunal de segunda instancia, deviene en **error de hecho**, pues este se produce cuando aparece de manera incontrovertible y evidente que se dio por establecido un hecho sin respaldo probatorio o se omitió la valoración de alguno que se encontraba **debidamente** probado y ninguna de estas dos situaciones se produjo en el negocio sub-júdice.

Por ende, debe concluirse en virtud de todo lo anteriormente expuesto, que no se ha producido la violación alegada en relación al artículo 994 del Código de Trabajo.

En consecuencia, la Sala Tercera LABORAL, de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA el auto de 15 de abril de 1996 proferida por el Tribunal Superior de Trabajo que le puso fin al proceso laboral RODOLFO CHIARI-vs-INVERSIONES NATO, S. A.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL, INTERPUESTO POR EL LCDO. ELÍAS IBARRA, EN REPRESENTACIÓN DE WALTER ROY TOMLINSON, CONTRA LA SENTENCIA DE 23 DE ABRIL DE 1996, EMITIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: WALTER ROY TOMLINSON -VS- CLUB DE GOLF DE PANAMÁ, S. A. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA

Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA. LABORAL.

VISTOS:

El licenciado **ELÍAS IBARRA** ha presentado Recurso de Casación Laboral contra la sentencia de 23 de abril de 1996 proferida por el Tribunal Superior de Trabajo, dentro del proceso laboral **WALTER ROY TOMLINSON** -vs- **CLUB DE GOLF DE PANAMÁ, S. A.**

El negocio laboral dentro del cual se origina el recurso que nos ocupa, tiene su génesis en un proceso instaurado en el Juzgado Segundo de Trabajo de la Primera Sección, mediante el cual el señor **TOMLINSON** solicitó el pago de recargos por trabajo en días domingo y de fiesta nacional por una suma que asciende a B/.15,115.20 a la empresa CLUB DE GOLF, S. A. con la cual sostiene, mantuvo una relación de trabajo entre los años 1972 a 1993. Esta pretensión fue negada en esa instancia, decisión confirmada por el Tribunal Superior de Trabajo en sentencia de 23 de abril de 1996 al señalar que:

> "Este Tribunal Superior en incontables oportunidades ha señalado que para que exista relación laboral se deben presentar los presupuestos establecidos en artículo (sic) del Código de Trabajo que a saber son:
>
> 1. Prestación personal del servicio
> 2. Subordinación jurídica, y
> 3. Dependencia económica.
>
> De las constancias procesales, se extrae diáfanamente que si bien el primer presupuesto se presenta, no ocurre igual circunstancia con el elemento dependencia económica. Veamos por qué:
>
> A fojas 97-103 el Departamento de Cuentas individuales de la Caja de Seguro Social extiende certificados de sueldos de la cuenta individual del demandante, observándose que en dicho historial no aparece de manera alguna reporte patronal que corresponda a la empresa demandada, muy por el contrario se deja ver que el demandante ha tenido relación laboral con otras empresas distintas a la demandada.
>
> Por otro lado, la parte que alega trabajó en días domingo y feriados debe, a la luz de nuestra normativa laboral (art. 735 C. T.) probar sus alegaciones y no encontramos en el presente proceso constancia que pueda llevar a este tribunal a pensar que dichas jornadas en domingos o días de fiestas, efectivamente fueron laborados o que laboradas fueron dejadas de pagar, por lo cual no nos es dable acceder a lo peticionado."

El casacionista sustenta su pretensión aduciendo que la sentencia impugnada resulta violatoria de los artículos 6, 62, 63, 64, 65, 66, 535, y 737 del Código de Trabajo y el artículo 74 de la Constitución Nacional.

De acuerdo al artículo 927 del Código de Trabajo, se emplazó a la parte demandada para que hiciera valer sus objeciones frente al recurso propuesto, sin que en el término de ley hubiese comparecido al proceso.

Sin embargo, antes de entrar a deslindar la controversia incoada, esta Superioridad procede al examen del libelo en vías de determinar si el mismo cumple con los presupuestos legales que condicionan su admisión.

En este punto se advierte que el escrito presentado adolece de varios defectos, que se examinan de seguido:

En primer término se observa que el petitorio del casacionista se encamina

hacia el acogimiento del recurso de casación contra **dos sentencias laborales**, la sentencia N° 75 de 29 de diciembre de 1995 proferida por el Juzgado Segundo de Trabajo mediante la cual se **absuelve a la empresa** demandada del pago de las prestaciones laborales (fs. 110-114 del expediente laboral), y la sentencia de 23 de abril de 1996 expedida por el Tribunal Superior de Trabajo que confirma la resolución de primera instancia.

Tal proceder no resulta compatible con la normativa que regula este tipo de procesos, toda vez que conforme a lo previsto en el artículo 925 del Código de Trabajo el recurso de casación pretende la impugnación de sentencias y autos dictados por el Tribunal Superior de Trabajo, y aunque se trate de resoluciones que resuelven una litis en segunda instancia, el recurso de Casación no es una tercera instancia destinada a evaluar la pretensión laboral de la parte demandante, sino que es un proceso autónomo que tiene por objeto principal: enmendar los agravios inferidos a las partes por la resolución recurrida, o los perjuicios irreparables o graves causados por razón de la naturaleza de la misma, y procurar la exacta observancia de las leyes. (A. 924 del Cód. de Trabajo).

Así es de advertir, que el casacionista en repetidas ocasiones acusa a las "sentencias impugnadas" de violatorias de un número plural de artículos del Código de Trabajo, insistiendo en la viabilidad jurídica de su pretensión en el pago de prestaciones laborales.

Por otra parte, al examinar el renglón contentivo de los cargos de ilegalidad endilgados contra "las sentencias impug-nadas", mismos que incluyen una norma de rango constitucional cuya acusada violación no es revisable por parte del Tribunal de Casación Laboral, sino del Pleno de la Corte Suprema en su calidad de guardián del control de la constitucionalidad de actos de autoridad y de las leyes, se observa que el casacionista realiza una exposición deficiente de cargos.

Así, el artículo 926, numeral 3° del Código Laboral, establece entre los elementos que debe contener el recurso de casación:

> "Artículo 926. El recurso de casación no está sujeto a formalidades técnicas especiales, pero deberá contener:
> ...
> **3. Cita de las disposiciones infringidas con expresión del concepto en que lo han sido.**"

Conforme a la disposición citada ut supra, la Sala Tercera de lo Laboral ha venido exigiendo la necesidad de que se exprese en el libelo del recurso de Casación Laboral, tanto la disposición cuya vulneración se acusa (preferiblemente con su respectiva transcripción), como el **concepto** en que se produce dicha transgresión con base a alguna de las causales legales específicas (**violación directa**, **interpretación errónea e indebida aplicación**), de un modo objetivo y claro, que permita a la Sala decidir si el cargo impetrado es fundado o no.

En el negocio sub-júdice, la exposición del casacionista, no sólo es poco organizada (con narrativa de circunstancias fácticas que se dieron en la expedición de la resolución de primera instancia del Juzgado Seccional de Trabajo que no son atendibles ni pertinentes en esta etapa), sino que **además omite por completo la explicación del concepto en que se producen las transgresiones legales**.

Esta exigencia no obedece a un designio caprichoso del Tribunal. Encuentra sustento legal en la norma antes citada, y en la circunstancia de que la omisión de una exposición con **lógica-jurídica** impide a la Sala Tercera conocer en qué consiste la controversia que surge entre las consideraciones en que el Tribunal Superior ha basado la sentencia expedida, y la pretensión del casacionista decidida en forma adversa, máxime cuando la cognición de esta Superioridad, por la naturaleza del recurso, está circunscrita precisamente a los cargos específicos del libelo.

Sobre este particular son consultables, entre otras, las sentencias de 18

de junio de 1991; de 9 de julio de 1992 y más recientemente de 6 de mayo de 1996.

En estas circunstancias, la Sala Tercera arriba a la conclusión de que lo pertinente es negarle curso legal al recurso de Casación Laboral presentado, por razón de los defectos anotados que impiden un examen de fondo de la pretensión del casacionista.

En consecuencia, la Sala Tercera LABORAL de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE el Recurso de Casación Laboral presentado por el licenciado ELÍAS IBARRA, actuando en su calidad de apoderado judicial de WALTER ROY TOMLINSON contra la sentencia de 23 de abril de 1996, proferida por el Tribunal Superior de Trabajo, dentro del proceso laboral: WALTER ROY TOMLINSON -vs- CLUB DE GOLF DE PANAMÁ, S. A.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

IMPEDIMENTO

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL, INTERPUESTO POR EL LCDO. HIPÓLITO MARTÍNEZ, EN REPRESENTACIÓN DE GREGORY BURICH, CONTRA LA SENTENCIA DE 29 DE FEBRERO DE 1996, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DENTRO DEL PROCESO LABORAL: GREGORY BURICH VS PANAMÁ TUG SERVICES, S. A. Y PETROTERMINAL DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTE (20) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA. (LABORAL).

VISTOS:

La Honorable Magistrada **Mirtza Angélica Franceschi de Aguilera** ha manifestado impedimento para conocer del recurso de casación laboral propuesto por el Lcdo. Hipólito Martínez, en representación de GREGORY BURICH, contra la Sentencia de 29 de febrero de 1996, dictada por el Tribunal Superior de Trabajo, dentro del proceso laboral: GREGORY BURICH VS PANAMÁ TUG SERVICES, S. A. Y PETROTERMINAL DE PANAMÁ, S. A.

La Magistrada Franceschi de Aguilera fundamenta su impedimento en los siguientes términos:

> "... porque antes de ser Magistrada actué como apoderada judicial del Atlantic Pacific Insurance Company of Panamá, S. A. aseguradora de PANAMÁ TUG SERVICES, S. A. en el proceso ordinario promovido contra ambas sociedades.
>
> De consiguiente solicito a los Honorables Magistrados me declaren impedida de acuerdo con lo que dispone el numeral 2 del artículo 647 del Código de Trabajo."

La Magistrada Franceschi de Aguilera fundamenta su impedimento de acuerdo a lo establecido en el numeral 2 del artículo 647 del Código de Trabajo, el cual se señala como causal de impedimento de los Magistrados o Jueces para conocer un asunto, "... el tener interés directo o indirecto debidamente explicado en el proceso, el Juez o Magistrado, su cónyuge o alguno de sus parientes en los grados expresados en el ordinal anterior ...".

En vista de que el impedimento invocado se ubica dentro de la causal antes citada, lo procedente es pues declarar legal el mismo.

En consecuencia, el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera

(Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA que es LEGAL el impedimento invocado por la Magistrada MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA, la separa del conocimiento del negocio interpuesto y procede a llamar al Magistrado Rafael González de la Sala Primera, para que asuma el conocimiento del mismo.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA

(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

TRIBUNAL DE INSTANCIA

DEMANDA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA DE NULIDAD INTERPUESTA POR LA PROCURADORA DE LA ADMINISTRACIÓN, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL ÓRGANO EJECUTIVO, PARA QUE SE DECLARE NULOS, POR ILEGALES, LOS RESUELTOS N° 51 DEL 19 DE ABRIL, N° 172 DEL 21 DE SEPTIEMBRE, N° 189, N° 190 Y N° 191, DEL 18 DE NOVIEMBRE, TODOS EXPEDIDOS EN 1993. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA.

HONORABLE MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, PLENO:

En atención a lo dispuesto en el artículo 2548 del Código Judicial, tengo a bien consultar al Pleno de la Corte Suprema de Justicia la constitucionalidad de la frase **"el Procurador de la Administración"**, consagrada en el artículo 370 del Código Judicial.

I. LOS HECHOS DE LA CONSULTA

PRIMERO: Mediante Resolución Ejecutiva N° 4 del 15 de diciembre de 1995, el Órgano Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Hacienda y Tesoro facultó a la señora Procuradora de la Administración para que promoviera proceso de inconstitucionalidad o contencioso-administrativo de nulidad contra los Resueltos N° 189, 190 y 191, del 18 de noviembre de 1993; N° 51 del 19 de abril y N° 172 del 21 de septiembre, todos expedidos en 1993.

SEGUNDO: A través de la Vista N° 165 del 16 de abril de 1996, la representante del Ministerio Público interpuso demanda-contencioso administrativa de nulidad contra los mencionados actos.

TERCERO: Al momento de resolver la admisibilidad de la presente demanda, la Magistrada Sustanciadora estima que la frase **"el Procurador de la Administración"**, consagrada en el artículo 370 del Código Judicial, que faculta a la Procuradora de la Administración para instaurar acciones de esta naturaleza ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, es contraria al numeral 2° del artículo 203 de la Constitución Política, por lo cual se procede a elevar la consulta constitucional respectiva.

II. LA FRASE CONSULTADA

En el presente caso se estima inconstitucional la frase **"el Procurador de la Administración"**, consagrada en el artículo 370 del Código Judicial, norma cuya parte pertinente transcribimos a continuación:

> **"Artículo 370.** El Procurador General de la Nación, **el Procurador de la Administración** y los Fiscales de Distrito, no podrán promover acciones civiles o contencioso-administrativas en que sea parte la Nación, sin orden e instrucciones del Órgano Ejecutivo. ..." (El subrayado es nuestro).

III. LA NORMA VIOLADA Y EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN

La disposición constitucional que se considera infringida por la frase acusada es el ordinal segundo del artículo 203 de la Constitución Política, norma ésta que tiene el contenido siguiente:

> **"Artículo 203.** La Corte Suprema de Justicia tendrá, entre sus atribuciones constitucionales y legales, las siguientes:
> ...
> 2. La jurisdicción contencioso-administrativa respecto de los actos, omisiones, prestación defectuosa o deficiente de los servicios públicos, resoluciones, órdenes o disposiciones que ejecuten, adopten, expidan o en que incurran en ejercicio de sus funciones o pretextando ejercerlas, los funcionarios públicos y autoridades nacionales, provinciales, municipales y de las entidades públicas autónomas o semiautónomas. A tal fin, la Corte Suprema de Justicia **con audiencia del Procurador de la Administración**, podrá anular los actos acusados de ilegalidad; restablecer el derecho particular violado; estatuir nuevas disposiciones en reemplazo de las impugnadas y pronunciarse prejudicialmente acerca del sentido y alcance de un acto administrativo o de su valor legal. ..." (El subrayado es nuestro).

De acuerdo con el precepto constitucional transcrito, a la Corte Suprema de Justicia le corresponde ejercer la llamada **"jurisdicción contencioso-administrativa"**, definida como "aquella que tiene por objeto específico el conocimiento de las pretensiones que se deduzcan en relación con los actos de la Administración pública, sujetos al Derecho administrativo" (Legislación de la Justicia Administrativa. Civitas. Bibliotecas de Legislación. Editorial Civitas, S. A. Undécima Edición. Madrid. 1989. pág. 325).

La disposición constitucional en cita está desarrollada por normas tanto del Código Judicial, como de la Ley N° 135 de 1943, modificada por la Ley N° 33 de 1946. De acuerdo con el artículo 98 del citado Código, en concordancia con el artículo 73 del mismo cuerpo normativo, el ejercicio de la jurisdicción contencioso-administrativa corresponde a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia la cual, en cumplimiento de esta atribución constitucional, puede anular los actos acusados de ilegales; restablecer el derecho particular violado; estatuir nuevas disposiciones en reemplazo de las impugnadas y pronunciarse prejudicialmente acerca del sentido y alcance de un acto administrativo o de su valor legal. Según el párrafo final del artículo 203 de la Carta Fundamental, estas funciones debe ejercerlas dicha Sala **"con audiencia del Procurador de la Administración"**.

A juicio de quien suscribe, la frase que estimamos inconstitucional infringe el mencionado ordinal 2° del artículo 203, ya que esta disposición establece una función específica al Procurador de la Administración dentro de los procesos contencioso-administrativos, distinta de la de promover demandas ante esta Sala. En nuestro concepto, cuando el citado ordinal 2° utiliza la expresión "con audiencia del Procurador de la Administración" se refiere a que en los procesos contencioso-administrativos de que conoce la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia debe escucharse la opinión del representante del Ministerio Público.

De acuerdo con CABANELLAS, esta expresión "significa el acto de oír un juez o tribunal a las partes, para decidir los pleitos y causas" (CABANELLAS, Guillermo. **Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tomo I**. Edit. Heliasta. 16ª edición. Buenos Aires. 1981. pág. 410). También se ha definido, como "el acto por medio del cual una autoridad administrativa o judicial, en función de juzgar, oye a las partes o recibe a las pruebas" (Enciclopedia Jurídica Omeba. Tomo I. Bibliográfica Omeba. 1986. 936).

Si bien el numeral 1° del artículo 217 de la Constitución Política faculta al Procurador de la Administración para que, en su calidad de agente del Ministerio Público, defienda los intereses del Estado o de los Municipios, el cumplimiento de esta función no es jurídicamente posible mediante la promoción de demandas contencioso-administrativas, pues, en estos casos la Sala Tercera

debe decidir, previo concepto u opinión del referido funcionario, para lo cual se le corre traslado por el término de cinco días luego de admitida la demanda. Cabe resaltar, que cuando la Procuraduría de la Administración cumple su atribución de emitir concepto, realiza también una tarea verdaderamente orientadora e ilustrativa para Sala Tercera, pues aporta razones o juicios jurídicos sobre la legalidad o no del acto administrativo o de la disposición que se acusa.

Si se admite la tesis de que el Procurador de la Administración puede promover demandas contencioso-administrativas ante la Sala Tercera de la Corte contra actos dictados por la administración, se desnaturaliza este tipo de procesos, pues, posteriormente, este funcionario no podría emitir concepto. En otras palabras, no podría ser simultáneamente acusador y defensor del acto impugnado, o, como en el presente caso, demandante del acto y defensor de la ley. A este aspecto se refirió el Pleno de la Corte Suprema de Justicia en su fallo del 20 de agosto de 1953, al indicar que cuando el Fiscal del Tribunal Contencioso-administrativo promueve una demanda para anular un acto de la administración, se rompe "el equilibrio necesario en la relación jurídica correspondiente, al dejar desamparado el acto administrativo, por convertirse en su acusador el mismo funcionario que por ministerio de la Ley, debe asumir su defensa" (Jurisprudencia Constitucional. Tomo I. Universidad de Panamá. Sección de Investigación Jurídica. Panamá. 1967. pág. 203).

En nuestro concepto, la atribución que da el artículo 370 del Código Judicial al Procurador de la Administración para que defienda los intereses nacionales y municipales mediante la promoción de demandas contencioso-administrativas no puede ser ejercida en los procesos contencioso-administrativos, en los que el mismo texto constitucional señala a dicho funcionario una función especial que cumplir.

El examen de la constitucionalidad de la frase acusada lleva también a analizar la naturaleza jurídica de la figura del Procurador de la Administración, cuya inclusión en la normativa constitucional como parte del Ministerio Público, ha merecido las críticas de juristas panameños como los Doctor César Quintero y Eduardo Morgan. Éste último autor comenta sobre el punto, lo siguiente:

> "Otra crítica de fondo a la reforma es la contenida en el fallo de la Corte Suprema de Justicia citado por Quintero (Registro Judicial N° 20 de 1953, pág. 265). Consiste en que el Órgano Ejecutivo, al estarle vedado por derecho revocar sus actos creadores de derechos subjetivos a terceros, tiene que demandar su anulación ante la jurisdicción Contencioso-administrativa por intermedio del Ministerio Público, dándose el caso de que en tales situaciones, dicho Ministerio es el patrono de la Administración para demandar y también, lo que está mal, el defensor del acto, por ser el Procurador de la Administración -defensor de los mismos- funcionario del aludido organismo.
>
> La reforma parece inspirada en la legislación Colombiana donde se le atribuye al Ministerio Público, representado por el Fiscal (independiente) de lo Contencioso-Administrativo, participación en los juicios Contencioso-administrativos."
>
> (MORGAN, Eduardo Jr. **Los recursos contencioso-administrativos de nulidad y de plena jurisdicción en el Derecho panameño**. Centro de Impresión Educativa. 2° edición. Panamá. 1982. págs. 89-90).

Por las razones anotadas, la suscrita Magistrada Sustanciadora estima necesario, antes de resolver la admisibilidad de la demanda interpuesta por la Procuradora de la Administración, elevar la consulta respectiva ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, a fin de que se decida sobre la constitucionalidad o no de la norma consultada.

Panamá, diez (10) de mayo de mil novecientos noventa y seis (1996).

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ÓRGANO JUDICIAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES

MAYO 1996

CARTA ROGATORIA

COMISIÓN ROGATORIA LIBRADA POR EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚMERO 4, DE DENI (ALICANTE), ESPAÑA, DENTRO DEL PROCESO DE MAYOR CUANTÍA N° 458/91 QUE SE LE SIGUE A CHARLES D. BACKER DIRKS, PETRA I. BACKER DIRKS Y COASTLINE CORPORATION, S. A. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, QUINCE (15) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

Cursa en la Sala de Negocios Generales la Carta Rogatoria procedente del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 4, de Denia (Alicante), España, dentro del proceso de mayor cuantía N° 458/91 que se le sigue a CHARLES D. BACKER DIRKS, PETRA I. BACKER DIRKS & COASTLINE CORPORATION, S. A.

El presente exhorto tiene como propósito la siguiente práctica de pruebas:

> A) "Que el legal representante de la mercantil "Euro Invest Properties", con domicilio en la República de Panamá, Calle 53 y Urbanización Obarrio, Torre Bancosur, piso 16, conteste al interrogatorio de preguntas y repreguntas que se adjuntan al presente."

Dicho cuestionario se aprecia a fojas 3 y 4 del cuadernillo, así como el interrogatorio de repreguntas visible a foja 5 del expediente.

Una vez vista en qué consiste la rogatoria efectuada por las autoridades españolas, observa la Sala que tanto España como la República de Panamá, son suscriptoras de la Convención Interamericana sobre Exhortos y Cartas Rogatorias.

Por otra parte, le corresponde a la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, en cumplimiento de las atribuciones que le asigna el artículo 101 del Código Judicial, el conocimiento de estos negocios para su cumplimiento y diligenciamiento en nuestro país.

La diligencia solicitada consiste en un interrogatorio al Representante Legal de la sociedad Euro Invest Properties, S. A., dentro de un proceso que mayor cuantía seguido contra los señores Charles D. Backer Dirks, Petra I. Backer Dirks y Coastline Corporation, S. A. Se trata pues de la práctica de una prueba dentro de un proceso civil.

Sobre el particular, el artículo 2 de la Convención Interamericana claramente señala que serán tramitados aquellos exhortos o cartas rogatorias emanadas de procedimientos jurisdiccionales en **materia civil** o comercial, **que tuvieren como objeto la recepción o obtención de pruebas o informes, siempre que la diligencia solicitada no fuere contraria a disposiciones legales en el estado requerido.**

A criterio de la Sala, el suplicatorio español no viola nuestro ordenamiento jurídico interno, por lo que cabe brindarle la cooperación a las autoridades españolas.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA VIABLE la Carta Rogatoria procedente del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número Cuatro de Denia (Alicante) España, y ORDENA al Juzgado Quinto de Circuito Civil, realizar el interrogatorio de preguntas y repreguntas solicitado por las autoridades costarricenses.

Una vez realizada la diligencia, SE ORDENA remitir el expediente nuevamente a la Secretaría de la Sala Cuarta de Negocios Generales para su posterior devolución a través de la Cancillería, a las autoridades españolas.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

CARTA ROGATORIA EXPEDIDA POR LA ALCALDÍA PRIMERA DE PENSIONES ALIMENTICIAS DE SAN JOSÉ, REPÚBLICA DE COSTA RICA, DENTRO DE LA DEMANDA DE PENSIÓN ALIMENTICIA N° 123-95 PROMOVIDA POR DORIS FRANCO SÁNCHEZ CONTRA SAYED DUMANI VANEGAS. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, QUINCE (15) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

Por vía diplomática fue enviada la Carta Rogatoria proveniente de la Alcaldía Primera de Pensiones Alimenticias de San José, República de Costa Rica, dentro del proceso de pensión alimenticia entablado por la señora DORIS FRANCO SÁNCHEZ contra el señor SAYED DUMANI VANEGAS. El mismo fue remitido por la Dirección General de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores a esta Superioridad mediante Nota DGPE/DCL/0636/96 de 10 de abril de 1996.

El objetivo del presente exhorto es **"Solicitar al Seguro Social de la República de Panamá, a fin que certifique el salario que devenga la señora DORIS FRANCO SÁNCHEZ con pasaporte N° 754946, en dicha institución, y quien se desempeña como fisioterapeuta en el Hospital Central de Panamá"**. La prueba solicitada por la autoridad costarricense se detalla a foja 1 y reverso del expediente.

Cabe destacar que este es el segundo suplicatorio que atiende esta Sala Cuarta de Negocios Generales dentro del Proceso de pensión alimenticia que se ventila en el hermano país de Costa Rica. El primero de ellos, fue declarado viable mediante resolución de esta Sala de 14 de marzo de 1996 y devuelto al Ministerio de Relaciones Exteriores el 18 de abril del presente, debidamente diligenciado.

El domicilio o posible ubicación de la señora Doris Franco Sánchez, se indica como el Seguro Social (Sur), Panamá de 7:00 a. m. a 4:00 p. m. de lunes a viernes, teléfono 229-3800.

La Sala de Negocios Generales estima que de acuerdo al artículo 4 de la Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero, aprobada mediante Ley 13 de 23 de octubre de 1975, los exhortos o cartas rogatorias deberán contener la relación de los elementos pertinentes para su cumplimiento que entre los cuales destacan:

a) Una indicación clara sobre el objeto de la prueba solicitada.

b) Copia de los escritos y resoluciones que funden y motiven el exhorto o carta rogatoria, así como los interrogatorios y documentos necesarios para su cumplimiento.

c) Nombre y dirección tanto de las partes como de los testigos, peritos y demás personas intervinientes y los datos indispensables para la recepción u obtención de la prueba.

d) Informe resumido del proceso y de los hechos materia del mismo en cuanto fuere necesario para la recepción u obtención de la prueba.

e) Descripción clara y precisa de los requisitos o procedimientos especiales que el órgano jurisdiccional requiriente solicite en relación con la recepción u

obtención de la prueba, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 2, párrafo primero y en el Artículo 6.

Del estudio del expediente se aprecia, sin lugar a dudas, que el proceso de pensión alimenticia fue entablado por la señora Doris Franco Sánchez, por lo cual al ser la señora Franco Sánchez la parte actora tiene conocimiento del proceso.

La documentación ha sido presentada por la vía diplomática a través del Consulado de Costa Rica aquí en la ciudad de Panamá, razón por la cual se hace innecesario el requisito de la legalización de firmas de acuerdo al artículo 13 de la Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero, aprobada por la República de Panamá mediante Ley 13 de 23 de octubre de 1975.

Como quiera que la diligencia solicitada sólo consiste en una certificación por parte de la Caja del Seguro Social y en virtud de un principio de reciprocidad, la Sala de Negocios Generales como órgano jurisdiccional del Estado requerido, acepta realizar la diligencia solicitada por las autoridades costarricenses.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA VIABLE el diligenciamiento en el territorio nacional de la Comisión Rogatoria procedente de la Alcaldía Primera de Pensiones Alimenticias de San José, República de Costa Rica, dentro del proceso de pensión alimenticia entablado por la señora DORIS FRANCO SÁNCHEZ contra el señor SAYED DUMANI VANEGAS y ORDENA al Director de la Caja del Seguro Social que expida la certificación con respecto al salario que devenga en dicha institución, la señora DORIS FRANCO SÁNCHEZ, en los términos que señala la presente resolución.

Una vez realizada la diligencia, SE ORDENA remitir el expediente a la Cancillería, para su posterior devolución a las autoridades jurisdiccionales costarricenses.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES

(fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ (fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

COMISIÓN ROGATORIA LIBRADA POR EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚMERO SEIS CIVIL, SECCIÓN 1ª EN LOS AUTOS DE DECLARATIVO DE MENOR CUANTÍA-RECLAMACIÓN DE CANTIDAD, NÚMERO 0626/87, ENTABLADO POR ENRIQUE BERMÚDEZ VILLARDELL, SUBROGADO EN ANTEX INVESTMENT INC. CONTRA DA. ELENA IMIRIZALDU. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

La Dirección General de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, ha remitido a este despacho el cuaderno contentivo de la comisión rogatoria librada por el Juzgado de Primera Instancia Número Seis, Civil, Sección 1ª en los autos declarativo de menor cuantía-reclamación de cantidad, número 0626/87, entablado por Enrique Bermúdez Villardell, subrogado en Antex Investment Inc. contra Da. Elena Imirizaldu.

El propósito del exhorto expedido por las autoridades de Barcelona, España es solicitar mediante a la Dirección del Registro Público, "certificación sobre el contenido de todos lo asientos e inscripciones correspondientes a la Sociedad ANTEX INVESTMENT, INC., desde la primera inscripción a la última acreditando si el señor José Baudín Pastor ocupa el cargo de presidente de la misma."

Es necesario aclarar, que tanto Panamá como España son suscriptoras d la Convención Interamericana sobre Exhortos y Cartas Rogatorias de 1975 que regula todo lo relativo a esta materia. Sin embargo, necesario que los documentos estén debidamente autenticados por la autoridad consular panameña acreditada en el país requiriente o en su defecto, la legalización de las firmas de la autoridad que emite el exhorto, se debe realizar a través de la incorporación del sello de la apostilla.

En el mismo orden de ideas se requiere que la solicitud no sea violatoria al orden público interno y en el caso que se requiera se traduzca el suplicatorio al idioma español.

Observa la sala que la documentación procedente del Juzgado de Primera Instancia Número Seis Civil, Sección 1° ha sido remitida a esta Sala sin la mencionada autenticación consular, de igual forma se observa que no se ha incorporado el sello de la apostilla que suprime la exigencia de legalización para los documentos públicos extranjeros.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA NO VIABLE la comisión rogatoria librada por el Juzgado de Primera Instancia Número Seis, Civil, Sección 1ª en los autos declarativo de menor cuantía-reclamación de cantidad, número 0626/87, entablado por Enrique Bermúdez Villardell, subrogado en Antex Investment Inc. contra Da. Elena Imirizaldu y ORDENA la devolución del expediente a la Cancillería, para su posterior devolución a las autoridades jurisdiccionales españolas.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(Con Salvamento de Voto)

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO RAFAEL A. GONZÁLEZ

Respetuosamente salvo el voto porque considero que la exposición de motivos no se ajusta a la situación que se ventila:

1) En primer lugar, se habla de documentos que es necesario que estén debidamente autenticados; pero no hay ningún documento en juego. Lo que se pide mediante el exhorto rogatorio es una certificación del Registro Público de Panamá.

2) También habla de que falta la apostilla. Sin embargo, no hay a qué ponerle apostilla.

Considero, respetuosamente, que no hay razón alguna para declarar no viable el exhorto rogatorio.

Fecha ut supra.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

CARTA ROGATORIA SIN NÚMERO, DE 14 DE DICIEMBRE DE 1995, LIBRADA POR EL JUZGADO CINCUENTA Y OCHO PENAL DEL CIRCUITO DE SANTA FE DE BOGOTÁ, D. C., REPÚBLICA DE COLOMBIA, DENTRO DEL PROCESO N° 5521 SEGUIDO CONTRA RODRIGO BOTERO MEJÍA Y OTROS, POR LOS DELITOS DE EXPORTACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

La Dirección General de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, por medio de Nota N° DGPE/DCL/N° 0636/96, remitió para los trámites pertinentes, la carta rogatoria librada por el Juzgado Cincuenta y Ocho Penal del Circuito de Santa Fe de Bogotá, D. C., República de Colombia, dentro del proceso N° 5521 seguido contra Rodrigo Botero Mejía y otros, por los delitos de exportación ficticia, estafa, ocultamiento de documento público, falsedad y prevaricato por omisión.

Al examinar la carta rogatoria en referencia, esta Sala observa que el objeto de la misma es que las autoridades panameñas competentes realicen las siguientes diligencias:

> "Certificar, si la firma "IMPOREXPO INTERNACIONAL, S. A.", aparece inscrita, o registrada ante la Dirección General de Registro Público de ese País, remitir copias auténticas del documento pertinente.
>
> Certificar igualmente, desde cuándo fue creada esta firma, qué personas han sido sus directivos (identificarlas perfectamente).
>
> Especificar el domicilio de la citada entidad, qué personas son las encargadas de administrarlas, suministrar sus domicilios actualizados.
>
> Si ante las autoridades marítimas de ese país, se encuentran inscritas o matriculadas dos motonaves con los nombres de "PENÉLOPE" y "PENÉLOPE I", indicativos 4.409 Panamá, FLAG BLT 1.969 SINGLEDEKER GRT 3.044.
>
> Precisar, qué identificación distingue una motonave de la otra, el nombre de sus capitanes, jefes de máquinas, listado de Tripulaciones.
>
> Pedimos comedidamente, se informe, si las personas anteriores aún laboran en estas embarcaciones, desde qué fecha lo han hecho."

Según lo establece el numeral 3 del artículo 101 del Código Judicial, a la Sala Cuarta le corresponde recibir exhortos y comisiones rogatorias librados por tribunales extranjeros y determinar su cumplimiento en el territorio nacional y considerar si vulnera o no el orden público y, en el evento de que no lo vulnere, determinar el funcionario o tribunal que debe cumplirlo.

La solicitud de colaboración internacional a que se ha hecho referencia no es contraria a nuestro derecho interno, y en virtud de que no existe entre ambos Estados convención alguna que regule los exhortos y comisiones rogatorias, el procedimiento a seguir en cuanto al diligenciamiento de la carta rogatoria será conforme a lo estipulado en nuestro Código Judicial como fuente supletoria en este caso.

Del estudio de la carta rogatoria en cuestión, se observa claramente que el mismo se encuentra legalizado en virtud de que fue remitido a esta Corporación por medio de Agente Consular.

La Sala estima conveniente acceder a lo pedido basándonos en los principios de reciprocidad y cooperación internacional que rigen las relaciones internacionales entre los países.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA VIABLE el diligenciamiento de la carta rogatoria librada por el Juzgado Cincuenta y Ocho Penal del Circuito de Santa Fe de Bogotá, D. C., República de Colombia, dentro del proceso N° 5521 seguido contra RODRIGO BOTERO MEJÍA y otros, por los delitos de exportación ficticia, estafa, ocultamiento de documentos

públicos, falsedad y prevaricato por omisión y ORDENA a las Direcciones de el Registro Público y de Consular y Naves que expidan las certificaciones solicitadas por las autoridades de la República de Colombia en los términos que señala la presente resolución.

Una vez realizadas las diligencias, REMÍTASE el expediente a la Cancillería para su posterior devolución a las autoridades jurisdiccionales colombianas.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

COMISIÓN ROGATORIA PROCEDENTE DEL TRIBUNAL MUNICIPAL POPULAR DE LA PLAZA DE LA REVOLUCIÓN DE LA REPÚBLICA DE CUBA, LIBRADA DENTRO DEL PROCESO DE DIVORCIO POR JUSTA CAUSA N° 2576/92, ENTABLADO POR DIGNA ANDREA MONTESINO CONTRA EL SEÑOR REINALDO ERNESTO RODRÍGUEZ GARCÍA, A FIN DE QUE ESA CORPORACIÓN JUDICIAL DETERMINE SU VIABILIDAD PARA EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, TREINTA (30) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

Cursa en la Sala de Negocios Generales la Carta Rogatoria procedente del Tribunal Municipal Popular de la Plaza de la Revolución de la República de Cuba, librada dentro del proceso de divorcio por Justa Causa N° 2576/92, entablado por DIGNA ANDREA MONTESINO contra el señor REYNALDO ERNESTO RODRÍGUEZ GARCÍA.

El presente exhorto tiene como propósito que se declare la viabilidad del embargo del salario del demandado, señor Reynaldo Ernesto Rodríguez García, por la suma de ciento ochenta pesos mensuales, que deberá hacerse en forma retroactiva desde el mes de junio de 1995, y cuya dirección aparece identificada como Calle Quinta, Panamá Viejo, Ciudad de Panamá.

Analizada la cuestión planteada se observa que entre la República de Cuba y la República de Panamá, no existe convención o tratado que regule la materia de exhortos o cartas rogatorias.

Sin embargo, resulta imperativo señalar los artículos 2 y 3 de la Convención sobre Exhortos y Cartas Rogatorias aprobada por Panamá a través de la Ley 12 de 23 de octubre de 1975, cuyo texto sirve de base para la tramitación de estos negocios y que determinan el alcance de los procesos a ser tramitados mediante cartas rogatorias.

Los suplicatorios sólo serán tramitados dentro de actuaciones y procesos en materia civil y comercial y que tengan por objeto lo siguiente:

a) La realización de actos procesales de mero trámite, tales como notificaciones, citaciones o emplazamientos en el extranjero;

b) La recepción y obtención de pruebas e informes en el extranjero, salvo reserva al respecto.

Asimismo el artículo 3 señala lo siguiente sobre el trámite:

"... no se aplicará a ningún exhorto o carta rogatoria referente a actos procesales distintos de los mencionados en el artículo anterior; en especial, **no se aplicará a los actos que impliquen ejecución coactiva**."

El texto transcrito en negrillas pone de manifiesto que resulta imposible realizar la diligencia solicitada por las autoridades jurisdiccionales cubanas, toda vez que la carta rogatoria exige el cumplimiento de un acto que implica la ejecución de una medida coactiva, como lo es el embargo del salario al señor Reynaldo Ernesto Rodríguez.

La Sala manifiesta además, que la República de Cuba no forma parte de la Convención y aún a pesar del interés de esta Sala en virtud de un principio de reciprocidad, para realizar la diligencia, el objeto de la misma, violaría nuestro ordenamiento jurídico interno, en virtud de que la diligencia pedida rebasa el alcance de la Convención aludida.

Al analizar los documentos presentados, llama poderosamente la atención que en fecha diecinueve (19) de junio de 1995, fue presentado ante esta Sala por el apoderado judicial del señor Reynaldo Ernesto Rodríguez García, la solicitud de reconocimiento y ejecución en la República de Panamá de la sentencia N° 693 de 24 de mayo de 1993, proferida por el Tribunal Municipal Popular de Plaza de la Revolución de la República de Cuba, sentencia que fue declarada ejecutable por la Sala mediante resolución de veintiocho (28) de febrero de mil novecientos noventa y seis (1996). Cabe señalar que dicha sentencia es la misma que da origen a la rogatoria que solicita el embargo.

Lo indicado en el párrafo anterior, conduce a estimar que en este negocio carece de objeto solicitar una diligencia, cuyo trámite no es posible mediante rogatorias.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA NO VIABLE la Carta Rogatoria procedente del Tribunal Municipal Popular de la Plaza de la Revolución de la República de Cuba, librada dentro del proceso de divorcio por Justa Causa N° 2576/92, entablado por DIGNA ANDREA MONTESINO contra el señor REYNALDO ERNESTO RODRÍGUEZ GARCÍA y DISPONE que se devuelva la documentación al Ministerio de Relaciones Exteriores para su devolución a las autoridades jurisdiccionales cubanas.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES

(fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(Con Salvamento de Voto)

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO RAFAEL A. GONZÁLEZ.

Estoy de acuerdo con lo resuelto, no obstante en la parte motiva, penúltimo párrafo, se hace la afirmación de que la sentencia de que se trata ya fue declarada ejecutable por la Sala, mediante resolución de 28 de febrero de 1996. Luego se expresa que ello "conduce a estimar que en este negocio carece de objeto solicitar una diligencia, cuyo trámite no es posible mediante rogatorias".

Considero, respetuosamente, que es defectuosa la relación lógica de estas consideraciones, porque en este negocio no se está pidiendo el exequátur de la sentencia aludida, sino que se ejecute una de las medidas dispuestas por ella, que consiste en el pago de una pensión alimenticia.

Cabría, pues, en todo caso, indicar que sobre la base de que la sentencia de 24 de mayo de 1993, el Tribunal Municipal Popular de la Plaza de la Revolución de la República de Cuba (expediente 2576-92), ha sido declarada ejecutable en Panamá, los interesados pueden solicitar su ejecución ante los tribunales panameños competentes por medio de un profesional del derecho.

Salvo, pues, el voto respetuosamente.

Fecha ut supra.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EJECUCIÓN DE SENTENCIA EXTRANJERA

LUZMILA LAWSON DE BLANCO, SOLICITA SE DECLARE EJECUTABLE EN PANAMÁ LA SENTENCIA PROFERIDA POR EL JUZGADO GENERAL DE JUSTICIA DE APELACIONES DE LA CORTE DEL DISTRITO DEL CONDADO DE CUMBERLAND, CAROLINA DEL NORTE, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, SEIS (6) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

El licenciado Randolph A. Lawson R., apoderado judicial de la señora Luzmila Lawson Blanco, ha presentado ante esta Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, solicitud para que sea reconocida en la República de Panamá la sentencia extranjera expedida por el Juzgado General de Justicia de Apelación de la Corte de Distrito, del Duodécimo Distrito Judicial del Condado de Cumberland, Estado de Carolina del Norte, Estados Unidos de Norteamérica.

Los peticionarios fundamentan su solicitud en los siguientes hechos:

"PRIMERO: Que el señor CLEMENTE BERNARDO HARWOOD Jr. interpuso demanda de divorcio contra la señora LUZMILA LAWSON DE BLANCO, a inicios del mes de noviembre de 1992.

SEGUNDO: Que efectivamente se declaró disuelto el vínculo matrimonial existente en aquel entonces entre los señores CLEMENTE BERNARDO HARWOOD Jr. y LUZMILA LAWSON BLANCO.

TERCERO: De dicho matrimonio nació el niño CLEMENTE HARWOOD III.

CUARTO: Que la señora LUZMILA LAWSON BLANCO interpuso acción por la custodia y manutención del niño CLEMENTE HARWOOD III.

QUINTO: Que en la sentencia de 14 de noviembre de 1993; firmada y expedida el 1° de febrero de 1994, por el Juzgado General de Justicia de Apelación de la Corte de Distrito del duodécimo Distrito Judicial del Condado de Cumberland, (Estado de) Carolina del Norte, Estados Unidos de Norteamérica, se condenó al señor CLEMENTE HARWOOD Jr. a pagar a nuestra representada la suma de TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS DÓLAR (sic), ($392.00) por mes, a partir del día 5 de noviembre de 1993.

SEXTO: El señor CLEMENTE BERNARDO HARWOOD Jr. no ha cumplido con lo previsto en la mencionada sentencia."

ANTECEDENTES DEL CASO

Se cuentan entre los antecedentes del caso, que se corrió traslado al señor Procurador General de la Nación, para que emitiera concepto, y éste en Vista 59 de 25 de noviembre de 1994, expuso el siguiente concepto:

"En cuanto a la rebeldía, nos percatamos, un vez analizada la sentencia en estudio, que la misma opera claramente, por que si bien es cierto que la señora Luzmila Lawson B., fue la cónyuge demandada en el proceso de divorcio que instauró el señor Clemente Harwood; a su vez fue presentada una reconvención en la que la señora Lawson solicita la custodia y manutención de su menor hijo, habido dentro del matrimonio, demanda que no fue notificada al señor Harwood,

según se desprende del hecho segundo de la demanda (ver foja tres del expediente).

En base a estas consideraciones, esta Procuraduría es de la opinión que, en vista que está involucrados los intereses de un menor y el Estado tiene la obligación de proteger y garantizar el derecho de los menores a la salud, educación y seguridad, se le debe conceder al petente el término que establece la ley para corregir la omisión mencionada."

En cuerpo colegiado, la Sala de Negocios Generales dictó Resolución de fecha 3 de enero de 1995, en la cual atendiendo el concepto emitido por el señor Procurador General de la Nación, declara la Nulidad de lo Actuado a partir de la foja 9 del expediente y Ordena la reposición del proceso, concediendo 5 días a partir de la notificación de la Resolución de 3 de enero de 1995 para aducir excepciones y presentar oposición a la ejecución de la sentencia extranjera.

De foja 17 a 40 del presente negocio se observa las medidas procesales tomadas para efectuar la notificación del señor Lawson. A partir de la foja 37 del expediente se observa el edicto emplazatorio y pruebas de recortes de periódico presentada por el apoderado judicial de la señora Luzmilla Lawson. A través del mencionado edicto emplazatorio se realizó la notificación del señor Harwood, se entiende que de esta forma, el mismo fue notificado personalmente, cumpliendo así con el requisito de la notificación, establecida en el artículo 1410 del Código Judicial.

OPINIÓN DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN

Conforme a lo dispuesto en el artículo 1410 del Código Judicial, se le corrió traslado del presente negocio al señor Procurador General de la Nación, a fin que emitiera concepto y quien en Vista N° 12 de fecha 27 de marzo de 1996, conceptuó que se han cumplido con los requisitos exigidos por el artículo 1409 del código Judicial.

DECISIÓN DE LA SALA

Cumplido con el procedimiento establecido por el artículo 1410, para la homologación de sentencias extranjeras, la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia pasa a conocer la solicitud a fin de examinar si la sentencia de fecha 14 de noviembre de 1993, puede ser reconocida en la República de Panamá.

Esta Superioridad se muestra de acuerdo con lo expuesto por el señor Procurador General de la Nación, ya que de conformidad con las pruebas presentadas en la solicitud, se advierte que si bien es cierto que en primer término se ha obviado el requisito de la notificación, el mismo fue subsanado al realizar la notificación por edicto emplazatorio fijado en la Secretaría General del Órgano Judicial, el día 25 de enero de 1995. La notificación del señor Clemente Harwood se efectúo por edicto emplazatorio ante la imposibilidad de realizar la notificación personal, tal y como se observa de foja 20 a 33 del expediente.

Por tanto la Sala observa que se han cumplido con los requisitos establecidos en el artículo 1409 del Código Judicial, ya que la sentencia en examen ha sido dictada como consecuencia de un pretensión personal, cuyos efectos son lícitos en la República de Panamá, la misma presenta las correspondientes traducciones al idioma Español y las correspondientes autenticaciones por el funcionario consular correspondiente, por lo que la Sala asume que la sentencia fue dictada conforme a las normas del Estado de carolina del Norte.

En consecuencia, LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA EJECUTABLE en la República de Panamá la sentencia de fecha 14 de noviembre de 1993 proferida por el Juzgado General de Justicia de Apelaciones de la Corte del Distrito del Condado de Cumberland, Carolina del Norte, Estados unidos de América.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

VITTA LÓPEZ DE BURKE, SOLICITA EL RECONOCIMIENTO Y LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA DE DIVORCIO DICTADA POR LA CORTE SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE WATERBURRY, EN WATERBURRY, ESTADO DE CONNECTICUT, DE FECHA 22 DE JUNIO DE 1992, MEDIANTE EL CUAL SE DECRETÓ LA DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO MATRIMONIAL QUE LA UNÍA A PHILLIP M. BURKE. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL GONZÁLEZ. PANAMÁ, SEIS (6) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

VITTA LÓPEZ DE BURKE, mediante apoderada especial, solicita a la Sala de Negocios Generales de la Corte Suprema el reconocimiento y ejecución de la sentencia de divorcio proferida por la Corte Superior del Distrito Judicial de Waterburry, Estado de Connecticut, del 22 junio de 1992, Estados Unidos de América, mediante la cual se declara disuelto el vínculo matrimonial existente con PHILLIP M. BURKE.

La peticionaria fundamenta su solicitud en base a los siguientes hechos:

> "**PRIMERO**: Que la señora VITTA LÓPEZ DE BURKE y el señor PHILLIP BURKE, están formalmente divorciados mediante sentencia proferida por la Corte Superior del Distrito Judicial de Waterbury, Estado de Connecticut, del 22 de junio de 1992.
>
> **SEGUNDO**: Que la señora VITTA LÓPEZ DE BURKE, es la demandada en la demanda de divorcio, y la misma no entró en rebeldía toda vez que fue notificada personalmente de la demanda y compareció ante los Tribunales de Justicia.
>
> **TERCERO**: Que la señora VITTA LÓPEZ DE BURKE, desea inscribir dicha sentencia de divorcio en el Registro Civil de Panamá, y así cumplir con las leyes panameñas para tales efectos".

Además a la solicitud de ejecución de sentencia de divorcio se adjuntaron los siguientes documentos: Copia de la Sentencia de 22 de junio de 1992, expedida en la Corte Superior del Distrito Judicial de Waterbury, Estado de Connecticut, debidamente autenticada y traducida al idioma español y el certificado de matrimonio emitido por la Dirección del General del Registro Civil de Panamá.

Admitida la solicitud presentada ante esta Corporación, se corrió traslado al señor Procurador General de la Nación, quien en su Vista N° 14 de 26 marzo de 1996 señala lo siguiente:

> "La presente solicitud cumple con la totalidad de los requisitos exigidos por la disposición supracitada ya que, tratántadose de un proceso de divorcio, la sentencia es producto del ejercicio de una acción personal. Además, observa este despacho que no se configura la rebeldía, ya que la señora VITTA BURKE -la propia demandada- es quien solicita la ejecución de la sentencia proferida."
>
> "Igualmente, en cuanto al cumplimiento de las formalidades para la presentación de documentos procedentes del extranjero que establece el artículo 864 del Código Judicial, se observa que la firma del juez de la causa que aparece en la referida sentencia está certificada por el Cónsul General de Panamá en Miami, la cual, a su

vez, ha sido autenticada por el Departamento de Legalizaciones y Autenticaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores y la dicha resolución judicial ha sido traducida del inglés a nuestro idioma oficial, tal como se requiere en estos casos."

"En atención a las consideraciones antes expresadas, el criterio de esta Procuraduría es que resulta procedente acceder a la presente solicitud de exequátur."

Observa la Sala, en cuanto a la licitud de la sentencia que nos ocupa que efectivamente, la misma es conforme a lo establecido en el artículo 1409 del Código Judicial, ya que, dicha sentencia fue dictada a consecuencia del ejercicio de una acción personal, no fue proferida en rebeldía y es la parte demandada la que formula la solicitud de reconocimiento y ejecución de la presente sentencia extranjera. Se aprecia, además, que toda la documentación proveniente del extranjero se encuentra debidamente autenticada por las autoridades consulares correspondientes, como también se encuentra traducida a nuestro idioma oficial, requisitos éstos necesarios para que se declare su ejecutabilidad en la República.

Por lo antes expuesto, y en cumplimiento con lo establecido en los artículos 1409 y 1410 del Código Judicial, procede la Sala a declarar ejecutable la sentencia.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA EJECUTABLE en la República de Panamá la Sentencia de Divorcio de 22 de junio de 1992, expedida en la Corte Superior del Distrito Judicial de Waterbury, Estado de Connecticut, Estados Unidos de América, mediante la cual se declara disuelto el vínculo matrimonial entre VITTA E. BURKE y PHILLIP M. BURKE.

Se autoriza a la Dirección General del Registro Civil para que realice las anotaciones respectivas en su libro de divorcios en los términos de la presente resolución.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ

(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

MARCELA BARDAYAN ZAYAT, SOLICITA EL RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA EXTRANJERA DICTADA POR EL JUZGADO SUPERIOR TERCERO EN LO CIVIL Y MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL DISTRITO FEDERAL Y ESTADO MIRANDA EN CARACAS, VENEZUELA, CON FECHA DE 23 DE OCTUBRE DE 1981, MEDIANTE LA CUAL SE DISUELVE EL VÍNCULO MATRIMONIAL QUE LA UNÍA AL SEÑOR WALTER SALOMÓN BONDER. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

MARCELA BARDAYAN ZAYAT, mediante su apoderado especial el licenciado David A. Davarro P. solicita a la Sala Cuarta de la Corte Suprema de Justicia el reconocimiento y ejecución de la sentencia de divorcio de fecha 23 de octubre, dictada por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado de Miranda en Caracas, Venezuela, mediante el cual se disuelve el vínculo matrimonial que la unía al señor WALTER SALOMÓN BONDER.

ANTECEDENTES DEL CASO

Entre los antecedentes del caso se cuentan que la señora Marcela Bardayan Zayat y el señor Walter Salomón Bonder, contrajeron matrimonio el día 2 de marzo de 1978, en la Ciudad de Caracas, República de Venezuela. Posteriormente, el día 11 de mayo de ese mismo año volvieron a contraer matrimonio en la Ciudad de Colón, República de Panamá.

La referida solicitud de reconocimiento y ejecución de sentencia extranjera se fundamenta en que la existencia de sentencia de divorcio de fecha 23 de octubre de 1981 dictada por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado de Miranda en Caracas, República de Venezuela, que disuelve el vínculo matrimonial que unía a los señores Marcela Bardayan Zayat con Walter Salomón Bonder.

OPINIÓN DEL PROCURADOR

Conforme a lo dispuesto en el artículo 1410 del Código Judicial, se le corrió traslado del presente negocio al Procurador General de la Nación para que emitiera concepto.

El Procurador General de la Nación en Vista N° 16 de 12 de abril de 1996 visible de foja 14 a 17 señaló que se trata de una pretensión personal y se ha cumplido con el requisito de la notificación de la demanda en el tribunal de la causa.

Sin embargo, afirma el señor Procurador que la sentencia extranjera contiene el cumplimiento de una obligación se considera ilícita en la República de Panamá, toda vez que la sentencia de divorcio extranjera, se refiere al matrimonio celebrado entre las partes en la República de Venezuela, en una fecha distinta al celebrado en la República de Panamá y distinto al que aparece inscrito en la Dirección de Registro Civil panameño.

DECISIÓN DE LA SALA

Cumplido con el procedimiento establecido en el Código Judicial para la homologación de sentencias extranjeras, la Sala Cuarta de la Corte Suprema de Justicia, pasa a conocer la solicitud presentada con la finalidad de examinar si la sentencia de fecha 23 de octubre de 1981, puede reconocerse en la República de Panamá.

La Sala se manifiesta de acuerdo con lo expresado por el señor Procurador, en cuanto al cumplimiento de los requisitos de la pretensión personal y la notificación del demandado. Sin embargo, difiere la Sala de la opinión vertida por Procurador General de la Nación toda vez que expresa que la obligación no es lícita en la República de Panamá, ya que la sentencia de divorcio en análisis disuelve el matrimonio celebrado en Caracas, Venezuela, de fecha 2 de marzo de 1978, distinto matrimonio al celebrado en la República de Panamá en fecha 11 de mayo de 1978.

Al respecto, la Sala manifiesta que para que un matrimonio surta efectos jurídicos en la República de Panamá, debe estar registrado en la República de Panamá, es decir su inscripción tiene que constar en la Dirección de Registro Civil.

Si bien es cierto que se realizó un nuevo matrimonio en la cuidad de Colón en fecha 11 de mayo de 1978, éste se efectúa entre las mismas partes, es decir Marcela Bardayan Zayat y Walter Salomón Bonder. Cabe destacar que el matrimonio celebrado en la República de Panamá es un acto posterior al acto realizado en Venezuela y anterior al divorcio realizado también en dicho país. Por tanto, aunque no se haya inscrito el matrimonio venezolano en el Registro Civil panameño, el matrimonio celebrado en la ciudad de Colón es un acto constitutivo de inscripción mediante el cual el vínculo matrimonial surte sus efectos jurídicos en nuestro país.

Por lo tanto, tomado en consideración lo expuesto en líneas anteriores, esta Magistratura es de la consideración que procede declarar ejecutable la sentencia de divorcio en análisis.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA EJECUTABLE en la República de Panamá la sentencia de divorcio dictada por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Mercantil de la circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado de Miranda en Caracas, Venezuela, de fecha 23 de octubre de 1981 mediante la cual se disuelve el vínculo matrimonial que le unía a los señores MARCELA BARDAYAN ZAYAT a WALTER SALOMÓN BONDER.

Se autoriza a la Dirección General del Registro Civil para que realice las anotaciones respectivas en su libro de divorcios en los términos de la presente resolución.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EXHORTOS

EXHORTO LIBRADO POR EL JUZGADO NACIONAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL N° 5 DE LA CAPITAL FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, REFERENTE A LOS AUTOS CARATULADOS "CORREA, CARLOS NORBERTO Y OTROS S/ DEFRAUDACIÓN". MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, QUINCE (15) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

Por vía diplomática fue remitido a esta Sala de Negocios Generales el exhorto librado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5 de la Capital Federal de la República Argentina, referente a los autos caratulados "CORREA, CARLOS NORBERTO Y OTROS S/ DEFRAUDACIÓN".

El presente exhorto tiene como propósito es recabar la información de parte del representante legal del Overseas Financing of Meilen, Panamá, con domicilio en la Vía España 200, piso 7mo. Panamá, respecto a:

1. Informe la composición accionaria y su directorio durante el período comprendido entre los años 1984 a 1990.

2. Si durante el período comprendido entre los años 1984 y 1990 ha recibido fondos en deposito o dado préstamos y/o garantías y en su caso informe fecha, condiciones, garantías y montos de las siguientes empresas: 1) Banco del Interior y Buenos Aires (BIBA), 2) BIBA OFF SHORE, 3) LIGSA, 4) OFF-SHORE FINANCIAL INVESTMENT CORP, 5) BANK OF INVESTMENT AND TRADE, IND; 6) WORLD WIDE, S. A. 7) PARIBAS, S. A.; 8) OPTIMUS, S. A. 9) HIGH RATE, S. A. 10) TECNOLÓGICA, S. A.; 11) IADISA, S. A.; 12) TRIDAS, S. A. 13) SALTING, S. A. 14) CÍA. DEL INTERIOR Y BS. AS., S. A.; 15) MONTAGU, S. A. 16) TOURVELLE, S. A.; 17) INTELLIGENCE, S. A.; 18) KUWAIT, S. A.; 19) DAITO GROUP, S. A.; 20) GRUPO MONTAGU DE INVERSIONES, S. A.; 21) PALMARES INMOBILIARIA, S. A.; 22) BRIDAS SAPIC, S. A. 23) COMPAÑÍA DE PERFORACIONES RÍO COLORADO, S. A. 24) PAPEL DE TUCUMÁN, S. A.; 25) FININVER, S. A. ; 26) SERVOIL, S. A. 27) POLIBUTENOS ARGENTINOS, S. A.; 28) HARENGUS, S. A. 29) BRIDAS AUSTRAL, S. A.; 30) OVERSEAS FINANCING OF MEILEN, S. A.

Analizada la cuestión planteada observa la Sala que tanto la República de Panamá, como la de Argentina son suscritoras de la Convención Interamericana sobre exhortos o cartas rogatorias, ratificada en nuestro ordenamiento jurídico, mediante la Ley 12 de 23 de octubre de 1975.

De conformidad con el numeral 3 del artículo 3 del artículo 101 del Código Judicial, le compete a la Sala Cuarta de Negocios Generales recibir los exhortos

o cartas rogatorias, librados por los tribunales extranjeros y determinar su cumplimiento en el Territorio Nacional así como el funcionario o tribunal que debe cumplirlo.

Transmitido por vía diplomática y de acuerdo al artículo 6 de dicha Convención Interamericana sobre Exhortos y Cartas Rogatorias de 1975 y cuyo texto transcribimos, tenemos que:

> "**Artículo 6:** Cuando los exhortos o cartas rogatorias se transmitan por vía consular o diplomática o por intermedio de la autoridad central será innecesario el requisito de la legalización".

Si bien es cierto que la solicitud efectuada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5 de la Capital Federal de la República Argentina, cumple con todos los requisitos de forma para su diligenciamiento, esta Superioridad observa que el objetivo de la presente rogatoria es realizar una investigación sobre los fondos económicos que las mencionadas empresas durante un período determinado pero esta información solo es posible suministrase cuando se ha presentado una **acción exhibitoria** y conforme a las normas de procedimiento que nuestro orden interno establece para tal finalidad; y es evidente que en el caso que ahora nos ocupa tal medida no se ha presentado, por lo tanto se desestima pues este petitorio.

Para complementar lo esgrimido por esta Magistratura, a continuación reproduciremos el artículo 89 del Código de Comercio cuyo tenor es el siguiente:

> "**Artículo 89:** Ninguna autoridad está facultada para obligar al comerciante a suministrar copias o reproducciones de sus libros (o parte de ellos), correspondencia o demás documentos en su poder. Cuando procediese obtener algún dato al respecto, se decretará la **acción exhibitoria** correspondiente. El comerciante -que suministrare copia o reproducciones del contenido de sus libros, correspondencia u otros documentos para ser usada en litigio en el exterior, en acatamiento a orden de autoridad que no sea de la República de Panamá, será penado con multa no mayor de cien balboas (B/.100.00)".

En adición a todo lo expuesto, esta Superioridad también aprovecha la oportunidad para puntualizar que, en reiteradas ocasiones se ha manifestado que en procesos de carácter penales y criminales que se gesten o lleven a cabo en otras jurisdicciones, y necesite conocer informaciones que ayuden a los juzgadores a resolver dichas controversias y las cuales reposan en nuestro país, si no se abre el proceso de que trata conforme a el ordenamiento jurídico panameño, y de acuerdo a las normas y procedimientos que rigen dentro de nuestro territorio; ni esta Sala, ni ningún Juez o Fiscal panameño podrá a través de la vía del exhorto o comisión rogatoria, otorgar las autorizaciones para que se efectúen diligencias de esta naturaleza, puesto que de hacerlo se estaría vulnerando nuestro orden público interno y nuestra soberanía jurídica. Entendidos ambos elementos, como toda autodefensa, toda reserva y toda excepción con que cuenta un Estado de Derecho para proteger su sistema jurídico e institucional.

Para finalizar la Sala desea puntualizar que aunque la Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero, especifica en su artículo 15 que los Estados Partes podrán ampliar el contenido de la Convención a aquellas materias sujetas a jurisdicción especial que a la letra dice:

> "**Artículo 15:** Los Estados Partes en esta Convención podrán declarar extienden las normas de la misma a la tramitación de exhortos o cartas rogatoria que se refieran a la recepción u obtención de pruebas en materia criminal, laboral, contenciosa-administrativa, juicios arbitrales u otras materia objeto de jurisdicción especial. Tales declaraciones se comunicarán a la Secretaría General de las Organizaciones de los Estados Americanos".

En este mismo orden de ideas esta Magistratura observa que según consulta efectuada al 15 de junio de 1995 al Departamento de Consular y Legalizaciones del

Ministro de Relaciones Exteriores, confirma que la República de Panamá no ha declarado la intención de extender la aplicación de la Convención Interamericana sobre exhortos o cartas rogatorias y Recepción de Pruebas en el extranjero en materia penal, laboral y contencioso administrativo u otra materia de jurisdicción especial.

Por todo lo previamente expuesto no es posible acceder a la solicitud librada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5 de la Capital Federal de la República Argentina en los autos caratulados "CORREA, CARLOS NORBERTO Y OTROS S/ DEFRAUDACIÓN".

En consecuencia, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA NO VIABLE el diligenciamiento en el Territorio Nacional del exhorto librado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5 de la Capital Federal de la República de Argentina, dentro de los autos caratulados "CORREA, CARLOS NORBERTO Y OTROS S/ DEFRAUDACIÓN" de la ciudad de Buenos Aires, Argentina y ORDENA que el mismo sea devuelto a la Cancillería Panameña para la aplicación de los ulteriores trámites aplicables a la materia.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES

(fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ (fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO RAFAEL A. GONZÁLEZ

Respetuosamente salvo el voto por discrepar del criterio en que se sustenta la sentencia de mayoría.

Se trata de un exhorto que tiene como propósito recabar cierta información de parte de OVERSEAS FINANCING OF MEILEN, S. A., con domicilio en Panamá, en un proceso penal.

La mayoría de la Sala sostiene que:

> "... el objetivo de la presente rogatoria es realizar una investigación sobre los fondos económicos que las mencionadas empresas durante un período determinado pero esta información solo es posible suministrase cuando se ha presentado una **acción exhibitoria** y conforme a las normas de procedimiento que nuestro orden interno establece para tal finalidad; y es evidente que en el caso que ahora nos ocupa tal medida no se ha presentado, por lo tanto se desestima pues este petitorio".
>
> Para complementar lo esgrimido por esta Magistratura, a continuación reproduciremos el artículo 89 del Código de Comercio cuyo tenor es el siguiente:
>
> **Artículo 89**: Ninguna autoridad está facultada para obligar al comerciante a suministrar copias o reproducciones de sus libros (o parte de ellos), correspondencia o demás documentos en su poder. Cuando procediese obtener algún dato al respecto, se decretará la **acción exhibitoria** correspondiente. El comerciante -que suministrare copia o reproducciones del contenido de sus libros, correspondencia u otros documentos para ser usada en litigio en el exterior, en acatamiento a orden de autoridad que no sea de la República de Panamá, será penado con multa no mayor de cien balboas (B/.100.00)".

Contrariamente a ese criterio, la acción exhibitoria, en opinión mía, no es propia de los procesos penales, sino de los civiles, mercantiles y laborales, en los cuales se consideran en primer plano intereses individuales. En lo Penal se requiere la información de parte de quien está en situación de suministrarla,

o se realiza una inspección ocular de parte de la autoridad competente.

Salvo, pues, el voto respetuosamente.

Fecha ut supra.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EXHORTOS N° 1508-95 Y 1510-95 LIBRADOS POR EL JUEZ DE LETRAS SECCIONAL SUPERNUMERARIO DE EL PROGRESO, DEPARTAMENTO DE YORO, REPÚBLICA DE HONDURAS, DENTRO DEL PROCESO INSTRUIDO CONTRA OSCAR RAQUEL GUILLÉN CONTRERAS, SINDICADOS POR LOS DELITOS DE ROBO, FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS, EN PERJUICIO DE LA CORPORACIÓN SALVADOREÑA DE CALZADO, S. A., LA FE Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL GONZÁLEZ. PANAMÁ, QUINCE (15) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

La Dirección General de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, ha remitido a este despacho los cuadernos contentivos de los exhortos N° 1508-95 y 1510-95 librados por el Juez de Letras Seccional Supernumerario de El Progreso, Departamento de Yoro, República de Honduras, dentro de proceso instruido contra OSCAR RAQUEL GUILLÉN CONTRERAS, sindicado por los delitos de robo, falsificación de documentos públicos y privados, en perjuicio de la Corporación Salvadoreña del Calzado, S. A. la Fe y la Administración Pública del Estado de Honduras.

Mediante providencia de 24 de abril de 1996 el Magistrado Sustanciador decidió acumular ambos exhortos de conformidad con lo que establece el Código Judicial Panameño en sus artículos 709 y 710, en virtud que ambos suplicatorios versan sobre el mismo proceso y solicitan diligencias similares.

Una vez acumulados ambos expedientes, se aprecia que el propósito del Exhorto N° 1508-95 expedido por las autoridades de la República de Honduras consiste en:

> **"Elevar solicitud a la Oficina de la Dirección General de Comercio e Industrias de Panamá a fin de que se constate e informe a este Juzgado si en esas oficinas se encuentra Registrada la Sociedad Mercantil SMOOR Y PAREDES y en caso afirmativo indicar cuál es su giro comercial ...".**

Cabe observar que la denominación correcta de la institución requerida por la mencionada autoridad es la Dirección General de Comercio Interior del Ministerio de Comercio e Industrias.

En el caso del Exhorto N° 1510-95 expedido de igual forma por las autoridades hondureñas, su petición se fundamenta en lo siguiente:

> **"Que la Oficina de Registro Público de la República de Panamá, constate e informe a este Juzgado si en esas Oficinas se encuentra Registrada la Sociedad Mercantil SMOOR Y PAREDES y en caso afirmativo indicar cuál es su giro comercial ..."**

La documentación procedente del Juez de Letras Seccional Supernumerario de El Progreso, Departamento de Yoro, República de Honduras, ha sido remitida a esta Sala de conformidad a lo establecido en el artículo 13 de la Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero, que claramente indica que cuando el exhorto sea enviado por la vía consular o diplomática, como en este

caso en particular, o por conducto de la autoridad central, será innecesario el requisito de la legalización de firmas.

Las solicitudes han sido presentadas conforme lo regula la Convención sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero, por lo que no contraviene nuestro orden público interno y la práctica de pruebas que se exigen del Tribunal Panameño son perfectamente viables en nuestro territorio, por lo que es permisible darle curso a los exhortos, dentro del proceso que ahora nos ocupa.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA VIABLES los exhortos N° 1508-95 y 1510-95 librados por el Juez de Letras Seccional Supernumerario de El Progreso, Departamento de Yoro, República de Honduras, dentro del proceso instruido contra Oscar Raquel Guillén Contreras, por el delito de Robo, Falsificación de Documentos Públicos y Privados en perjuicio de la Corporación Salvadoreña del Calzado, S. A., la Fe y la Administración Pública del Estado de Honduras y ORDENA a la Dirección General de Comercio Interior del Ministerio de Comercio e Industrias y al Registro Público que expidan las certificaciones solicitadas por las autoridades hondureñas en los términos que señala la presente resolución.

Una vez realizadas las diligencias a través de la Secretaría de la Sala Cuarta de Negocios Generales, REMÍTASE el expediente a la Cancillería, para su posterior devolución a las autoridades jurisdiccionales de la República de Honduras.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ

(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

COMISIÓN ROGATORIA LIBRADA POR EL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO UNO DE MADRID, ESPAÑA, DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A JUAN CARLOS RUBIO MONTES Y ANNABELLE GONZÁLEZ CALVO DE LA PUERTA Y OTRO, POR EL DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL GONZÁLEZ. PANAMÁ, QUINCE (15) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

Por conducto del Director Encargado del Departamento de Consular y Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, ha ingresado a este Despacho, cuaderno contentivo del Exhorto librado por el Juzgado Central de Instrucción Número 1 de Madrid, España, dentro del proceso por el delito de la salud pública contra Juan Carlos Rubio Montes y Annabel González Calvo de la Puerta.

El propósito del presente suplicatorio es solicitar de la Fiscalía Especial de Drogas:

a) Se identifique, mediante declaración del agente Residente JUAN RAMÓN VALLARINO LÓPEZ y, en su caso de ALFONSO GÓMEZ MÉNDEZ, JORGE POSADA LARA, PATRICIA LARA Y JUAN RAMÓN VALLARINO ARIAS, a los verdaderos titulares de las acciones de **LATINCO, S. A.**

b) Se identifique la posible existencia de cuentas corrientes a nombre del ciudadano colombiano **MIGUEL ÁNGEL LAVERDE GALLEGO** a quien menciona en el apartado IV (visible a foja 6 del expediente).

c) Identificación de la cuenta, movimientos, ingresos y pagos de la que fue

titular **RICARDO ANTONIO VELÁZQUEZ QUINTERO** en el Banco de Occidente (Panamá), S. A.

d) Bloqueo de los saldos de cuentas, imposiciones a plazo o cualesquiera otros activos inmobiliarios o financieros de cualquier clase que puedan existir en la república de Panamá nombre de las personas citadas en el apartado II (visible a foja 4 del expediente), así como a nombre de **Luis Alberto Barrientos, Ana María Velázquez Quintero, Miguel ángel Laverde Gallego, Latinco S. A. Jiménez Vanegas y Genaro Cerquera Vaquero.**

La solicitud efectuada por las autoridades españolas se realiza en base a que en el Juzgado Central de Instrucción N° 1 se sigue un proceso por delito contra la salud pública, derivado del tráfico de cocaína y posterior blanqueo de dinero obtenido de los beneficios de tal actividad; tal y como se desprende de la exposición de los hechos visibles de foja 3 a 8 del expediente.

Una vez visto en qué consiste el pedido efectuado por las autoridades españolas, la Sala de Negocios Generales considera lo siguiente:

La Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero establece en el artículo XVI que el **"Estado requerido podrá rehusar el cumplimiento de un exhorto o carta rogatoria cuando sea manifiestamente contrario a su orden público"**. Al respecto, esta Magistratura observa normas de Derecho Interno que es necesario aplicar, al estudiar lo pedido por el Juzgado Número 1 de Madrid, España.

Le corresponde a la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, en cumplimiento de las atribuciones que le asigna el artículo 101, numeral 3 del Código Judicial, el conocimiento de estos negocios para el cumplimiento y diligenciamiento en nuestro país.

El Texto Único de la Ley de Drogas contiene normas referentes a la cooperación internacional en cuanto a la investigación de delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes, en los artículos 33 y 34, los cuales transcribimos a la letra:

> **"Artículo 33:** Las investigaciones de los delitos enumerados en el artículo 261 del Código Penal, también podrán ser iniciadas en cooperación o por petición del Estado en el que se hayan cometido tales delitos"
> ...
> **"Artículo 34:** En los delitos que trata la presente Ley especial, **los tribunales panameños serán competentes aun cuando el hecho ilícito por el cual se proceda, se haya cometido en el extranjero, siempre y cuando el producto del ilícito o cualquier elemento constitutivo de éste se haya realizado o produzca sus efectos totales o parciales en territorio panameño, y en los demás casos en que sea aplicable el artículo 9 del Código Penal".**

En éste mismo orden de ideas, el Capítulo V de los Delitos contra la Salud Pública, en el artículo 261 establece cuando es aplicable la Ley panameña, en delitos cometidos en el extranjero:

> **Artículo 261: Se aplicará la ley penal panameña en los casos** contemplados en los artículos 255, 257, 258, 259, 260 y 262 de éste Código, **cometidos en el extranjero, siempre que dentro del territorio panameño se hubiesen realizado los actos encaminados a su consumación o cualesquiera transacciones con bienes provenientes de dichos delitos relacionados con drogas.**

En concordancia, el artículo 9 numeral 1 y el artículo 261 de nuestro Código Penal establece lo siguiente:

> **"Artículo 9:** Se aplicará la Ley penal panameña por los hechos punibles cometidos en el extranjero cuando:

1. Producen o debieran producir sus resultados, en todo o en parte, en el territorio panameño". ...

En virtud de que el presente suplicatorio consiste en la investigación de actos constitutivos del delito continuado de tráfico de estupefacientes, que como ya hemos señalado en líneas anteriores está tipificado en nuestras leyes penales internas y en virtud que el mismo cumple con los requisitos exigidos por nuestro ordenamiento interno, es posible conceder la viabilidad al presente exhorto en sus puntos a, b y c.

Sin embargo en relación a lo pedido en el punto "d" de la presente comisión rogatoria se trata de un "bloqueo de saldos de cuentas, imposiciones a plazos o cualesquiera otros activos inmobiliarios o financieros de cualquier clase en la República de Panamá", la propia Convención sobre Exhortos y Cartas Rogatorias es clara al señalar en el artículo III que no se aplicara a actos procesales que impliquen ejecución coactiva, por lo tanto se imposibilita, por la vía del exhorto, el diligenciamiento de lo pedido en este caso por las autoridades españolas.

Aunado a lo anterior el artículo 2077-A del Código Judicial establece lo siguiente:

"2077-A:
... cuando exista peligro de que la eventual disposición de una cosa relacionada con el delito pueda agravar o prolongar sus consecuencias o facilitar la comisión de otros delitos, el Juez, a solicitud del funcionario de instrucción, podrá sin más trámite, autorizar el secuestro penal mediante resolución motivada de inmediato cumplimiento. ...

La norma es clara cuando establece que el secuestro penal sólo procede a solicitud del funcionario de instrucción panameño, previamente autorizado por el Juez de la causa en la República de Panamá. Se desprende del texto de la norma citada, que no es a través de la vía del exhorto o comisión rogatoria que esta solicitud se pueda efectuar en la República de Panamá.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley DECLARA VIABLE la Comisión rogatoria librada por el Juzgado Central de Instrucción N° 1 de Madrid, España, dentro del proceso seguido a Juan Carlos Rubio Montes y Annabell González Calvo de la Puerta y otros por delito contra la salud pública en sus puntos A, B y C y NO VIABLE punto D. Se AUTORIZA que el mismo sea diligenciado por la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, utilizando para tales efectos las normas jurídicas de vigentes.

Una vez efectuadas las diligencias pertinentes del exhorto que nos ocupa REMÍTASE a la Sala de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia para que a través de la Cancillería Panameña sea devuelto a las autoridades españolas.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EXHORTO ROL. N° 20.646 LIBRADO POR EL SÉPTIMO JUZGADO CRIMINAL DE VALPARAÍSO, CHILE, DENTRO DEL PROCESO CARATULADO "FALSIFICACIÓN DE INSTRUMENTO PRIVADO Y FRAUDE AL FISCO", EN CONTRA DEL SEÑOR GUILLERMO ANTONIO KEGEVIC AHUMADA. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL GONZÁLEZ. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996)

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

El Departamento de Consular y Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, ha remitido a este despacho el cuaderno contentivo del exhorto Rol. N° 65 librado por el Séptimo Juzgado Criminal de Valparaíso, Chile, dentro del proceso caratulado "Falsificación de Instrumento Privado Fraude al Fisco", en contra del señor GUILLERMO ANTONIO KEGEVIC AHUMADA.

El propósito de la carta rogatoria tiene como objetivo lo siguiente:

> **"Que los representantes legales de Patton, Moreno y Asvat, con domicilio en el Edificio Hong Kong Bank, 6to. Piso, Av. Samuel Lewis, Apt. 6-4298, El Dorado, Panamá, República de Panamá, presten declaración al tenor de cómo es efectivo que ellos enviaron un fax al N° 56.32.213904 de Chile con fecha 26 de mayo de 1992 y dos siguientes faxes al N° 56.32.233357, uno de fecha 1° de junio de 1992 y otro de fecha 04 de junio de 1992, todos remitidos al Gerente General de la Empresa Marítima, S. A., donde se señala expresamente que la factura N° 132129 de fecha 31 de enero de 1991, por la suma de US $3,485, no ha sido emitida por ellos, la numeración no es la utilizada por dicho Estudio Jurídico, los montos señalados en dicha factura no son los que ellos ordinariamente cobran, que todas sus facturas llevan la firma del abogado encargado del caso, lo que no ocurre en la especie, que ellos no han realizado las gestiones jurídicas que allí se señalan, que no es efectivo que a esa fecha EMPREMAR, S. A. les adeudare US$3,485 y que ningún funcionario de EMPREMAR, S. A. les canceló a la fecha de emisión de esa factura dicha cantidad."**

La petición del tribunal chileno se encuentra detallada en el punto tres (3) del suplicatorio, visible a foja 4 del cuadernillo. Se observa además que la rogatoria fue transmitida a esta Superioridad a través de la vía diplomática, de conformidad con establecido en el artículo 6 de la Convención Interamericana sobre Exhortos y Cartas Rogatorias, razón por la cual resulta innecesario el requisito de la legalización de firmas.

Vale la pena señalar que a foja nueve (9) del expediente, las autoridades chilenas invocan dicha Convención de la cual tanto las Repúblicas de Chile y Panamá forman parte. Sin embargo, dicha convención en su artículo 2 indica textualmente lo siguiente en cuanto al alcance de la misma:

> **"La presente Convención se aplicará a los exhortos o cartas rogatorias expedidas en actuaciones y procesos en <u>materia civil y comercial</u> por los órganos jurisdiccionales de uno de los Estados partes en esta Convención ..."**

Del estudio del expediente se desprende que se trata Del estudio del expediente se desprende que se trata de un proceso en materia penal en el cual el delito tipificado lo constituye la falsificación de instrumento privado y fraude al fisco.

La Sala de Negocios Generales de la Corte Suprema manifiesta de acuerdo con información suministrada por nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores que la República de Panamá no ha declarado que extiende el ámbito de aplicación de dicha convención a la tramitación de exhortos que se refieran a materia criminal.

No obstante lo anterior, dado que la solicitud en esta oportunidad no es contraria a nuestro ordenamiento jurídico interno, que la República de Chile forma parte de la Convención y que además la prueba solicitada consiste en una declaración de los representantes legales de una firma forense en la República de Panamá, accede ante lo pedido.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA VIABLE la Exhorto Rol. 20.646 librado por el Juzgado séptimo Juzgado

Criminal de Vaparaíso, Chile, dentro del proceso caratulado "Falsificación de Instrumento Privado y Fraude al Fisco", en contra del señor Guillermo Antonio Kegevic Ahumada y ORDENA que el mismo sea diligenciado por el Juzgado Quinto de Circuito Penal del Primer Distrito Judicial de Panamá.

Una vez realizada la diligencia, SE ORDENA remitir el expediente contentivo de la presente documentación a la Sala de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia para su posterior devolución a través de la Cancillería Panameña para su devolución a las autoridades chilenas.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ

(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES

CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

TRIBUNAL DE INSTANCIA

RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR EL LICENCIADO JULIÁN GARCÍA TREJOS CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 87-95 DE FECHA DE 23 DE NOVIEMBRE DE 1995, EMITIDA POR LA COMISIÓN DE PERSONAL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, RAMO PENAL DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL GONZÁLEZ. PANAMÁ, SIETE (7) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

Ingresó a esta Sala Cuarta de Negocios Generales, de la Corte Suprema de Justicia el cuaderno contentivo del Recurso de Apelación propuesto por el licenciado Gilberto Ryall Zúñiga, quién actúa en nombre y representación del licenciado Julián García Trejos, en contra de la decisión contenida en la Resolución N° 87-95 de 23 de noviembre de 1995, la cual resuelve el Concurso N° 299-95 (INTERNO) de la Posición N° 1667 de Defensor de Oficio Distrital de Panamá.

Los puntos más relevantes en los que se apoya el apoderado judicial del recurrente, se pueden resumir de la siguiente manera:

> "PRIMERO: Al evaluar a mi poderdante la Comisión de Personal del Primer Distrito Judicial, Ramo Penal, le reconoció la cantidad de 74.98 puntos".
>
> "SEGUNDO: Mi mandante no está de acuerdo con el anterior puntaje, por las siguientes razones:
>
> A) En cuanto a la experiencia laboral:
>
> 1) Se le atribuyen dos (2) años seis (6) meses en el cargo como Defensor de Oficio, cuando a la fecha de entrega de la documentación del concurso tenía cumplidos ya los tres (3) años y un poco más.
>
> 2) Actualmente se encuentra dando clases de Derecho en el Centro Regional Universitario de la Chorrera, pero a pesar de haber acreditado tal hecho con la certificación correspondiente, no se le reconoció ningún punto por su Servicio Docente Universitario.
>
> B) En cuanto a las ejecutorias y publicaciones: 1) Presentó aproximadamente constancia de cuatro (4) publicaciones de contenido jurídico aplicable, pero no se le adjudicó puntaje alguno. 2) También presentó aproximadamente constancia de cinco (5) conferencias de contenido jurídico aplicable, dictadas en igual número de seminarios, pero tampoco se le adjudicó puntaje alguno.

> C) En cuanto a los conocimientos: Entre otras constancias donde acredita sus conocimientos y habilidades, adjuntó diploma escolar donde acredita el dominio de una lengua extranjera (inglés), tal y como lo contempla el correspondiente formulario del concurso, pero no se le reconoció puntaje por este hecho".
>
> "TERCERO: Mi poderdante considera que tiene derecho a un mayor puntaje.
>
> Por todo lo antes expuesto, solicita se revoque la resolución recurrida y en su lugar se proceda al reconocimiento de los puntos que no le fueron debidamente acreditados a mi mandante, de acuerdo con la totalidad de lo planteado en la anterior sustentación ..."

Una vez transcrita la parte medular del reclamo presentado por el recurrente, es menester pasar analizar lo resuelto por la autoridad que conoció del recurso de reconsideración en primera instancia.

La Comisión de Personal del Primer Distrito Judicial de Panamá, Ramo de lo Penal, resolvió el recurso de reconsideración mediante Resolución N° 02-96 de 25 de enero de 1996 en la que se decide modificar la Resolución N° 87-95, y concedió el recurso de apelación interpuesto subsidiariamente para que surtiera ante esta Superioridad.

Con relación con lo argumentado por el recurrente en el hecho segundo, en su primer punto del escrito, esta Sala es del criterio que sólo puede ser valorada la experiencia de Defensor de Oficio que se desprende de la certificación del Órgano Judicial visible a fojas 22, la que evidencia claramente que como Defensor de Oficio ha laborado en esta institución dos años con seis meses y diez días, por lo que se desestima este cargo.

En torno a la Certificación expedida por el Centro Regional Universitario de Panamá Oeste de la Universidad de Panamá en la misma no se específica, ni las materias que dicta el Licenciado Trejos con la finalidad de determinar si las mismas son cónsonas al concurso o afines, de manera tal que se pueda cuantificar los puntos de una forma real; ni la cantidad de horas que dicta el mismo para computar la categoría de Docente Universitario por lo que mal podría asignarle esta Sala puntuación alguna conforme al Cuadro de Evaluación establecido en el artículo 24 del Reglamento de Carrera Judicial, por lo que esta Superioridad desestima este cargo.

En torno a las ejecutorias y publicaciones observa la Sala que las mismas fueron valoradas en su totalidad y la Comisión de Personal realizó los ajustes necesarios al reconsiderar el presente negocio y asignarle una décima (0.10) de puntos que fueron agregados al puntaje inicial que había obtenido, por lo que se desestima pues este cargo.

En cuanto a otros conocimientos; la Sala desea puntualizar que el Reglamento de Carrera Judicial es claro al señalar en su artículo 23 lo siguiente:

> "Artículo 23: Si el aspirante ha realizado estudios en el extranjero debe presentar los documentos debidamente autenticados **y si estuvieren en lengua extranjera deberán presentarse traducidos al español por un intérprete público autorizado**". (Las negrillas son nuestras).

Se desprende de la documentación aportada a fojas 64 del presente cuaderno que la misma fue ingresada al mismo, sin su correspondiente traducción lo que imposibilita de manera total la evaluación, por lo que se desestima este cargo.

Esta Superioridad observa que no existen otros elementos, pruebas, reparos o argumentos dentro del presente recurso que determinen que el puntaje no fue evaluado correctamente, de acuerdo con los reglamentos vigentes sobre la materia

y aprueba la modificación dispuesta por la Comisión de Personal.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA EN TODAS SUS PARTES la Resolución N° 87-95 de 23 de noviembre de 1995 emitida por la Comisión de Personal del Primer Distrito Judicial de Panamá, Ramo de lo Penal, la cual decidió la lista de los seleccionables para el Concurso N° 299-95 (Interno) para la posición (1667) de DEFENSOR DE OFICIO DISTRITAL y la Resolución N° 02-96 de 25 de enero de 1996 mediante la cual se modifica la Resolución N° 87-95 de 23 de noviembre de 1995 y ORDENA, una vez notificadas las partes involucradas en el presente negocio, se devuelva el expediente a la Secretaría de la Comisión de Personal para que se cumplan los ulteriores trámites procesales aplicables a esta materia.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ

(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EDUARDO BARROSO MORALES INTERPONE DENUNCIA CONTRA EL LICENCIADO LUIS ALBERTO ARBOLEDA POR FALTA A LA ÉTICA PROFESIONAL DEL ABOGADO (TRIBUNAL DE HONOR). MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

Procedente del Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados, ha ingresado a la Secretaría de la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, el cuaderno que contiene la denuncia por Falta a la Ética y Responsabilidad del Abogado, interpuesta por EDUARDO BARROSO MORALES en contra del licenciado LUIS ALBERTO ARBOLEDA.

El Tribunal de Honor, en virtud de lo preceptuado por el artículo 26 de la Ley 9 de 18 de abril de 1984, reformada por la Ley 8 de 16 de abril de 1993, emitió mediante Vista de 11 de agosto de 1994 (visible de foja 26 a 35 del expediente), requerimiento a este tribunal para "que decrete la citación a juicio del licenciado **LUIS ALBERTO ARBOLEDA** por faltas a la ética cometidas en el ejercicio de la profesión.

La denuncia interpuesta por el señor EDUARDO BARROSO MORALES, a través de nota fechada 21 de febrero de 1994, dirigida al Tribunal de Honor, y corroborada el 25 de febrero de 1994 en el formulario de denuncias del Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados (visibles a fojas 1, 6 y 7 del expediente), resalta el hecho de que le otorgó poder al licenciado Arboleda el 6 de octubre de 1993 para que lo representara en un proceso de liquidación de condena en abstracto instaurado en contra del señor Manuel Insturaín y/o Agencia de Aduana Alvarado, S. A., dado que, según el señor Barroso, el señor Insturaín se negó a cubrirle los gastos que se ocasionaron producto de una colisión vehicular.

El señor Barroso afirma, en dicha denuncia, haberle entregado al licenciado Arboleda, a través de la secretaria de éste, "la suma de setecientos ochenta balboas (B/.780.00) para cubrir los gastos de peritaje, fianza, gastos de trámite, etc."

El señor Barroso expresa textualmente en su denuncia que "ni siquiera consignó la fianza que era de doscientos ochenta y seis balboas (B/.286.00) y en forma irresponsable me comunicó que era de B/.500.00 (quinientos balboas)" y que " en conclusión el Sr. Arboleda ni resolvió el caso para lo cual contraté y tampoco me ha regresado el dinero ...".

El Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados mediante Vista de 11 de agosto de 1994, resuelve requerir a este tribunal que decrete la citación a juicio del licenciado Luis Alberto Arboleda, por faltas a la ética cometidas en el ejercicio de la profesión, sustentándose en los criterios siguientes:

> "... el Tribunal de Honor, al culminar el análisis de los hechos denunciados sobre la conducta del licenciado Luis Alberto Arboleda, estima que en efecto, el licenciado incurrió en las siguientes faltas a la ética en el ejercicio de su profesión tipificadas en los ordinales (sic) b. ch y e del artículo 34 del Código de Ética y Responsabilidad Profesional del Abogado en correlación con los artículos 4, 5, 7, 8, 9 y 10 del precitado código, a saber:
>
> Artículo 34: incurre en falta a la ética el abogado que: ...
>
> b. Demore maliciosamente la iniciación o prosecución de las gestiones que le fueren encomendadas;
>
> ch. Retenga dineros, bienes o documentos suministrados en relación con las gestiones realizadas;
>
> e. No rinda a su cliente las cuentas de la gestión o manejo de bienes, ...
>
> Como complemento a las normas infringidas, transcribimos los siguientes artículos:
>
> Artículo 4: El abogado se abstendrá de toda gestión puramente dilatoria que entorpezca el normal desarrollo del procedimiento, así como el uso de pruebas falsas, amañadas o desfiguradas.
>
> Artículo 5: El abogado debe actuar con honradez y buena fe. No ha de aconsejar, tolerar o valerse de actos fraudulentos sin fuundamento real, afirmar negar con falsedad.
>
> Artículo 7: El abogado debe ser puntual y llevar a cabo oportunamente las diligencias propias de la actuación profesional.
>
> Artículo 8: El abogado debe obtener un integral conocimiento de la causa de un cliente antes de aconsejarle sobre la misma; está en la obligación de darle una opinión franca sobre los méritos de ella y el resultado probable del litigio pendiente o que se tiene perspectiva. No proporciona seguridades respecto del resultado de su gestión, especialmente si de ello depende que se le otorgue el poder correspondiente.
>
> Artículo 9: Siempre que el caso admita un arreglo justo, el abogado debe aconsejar al cliente que evite el litigio mediante ese arreglo, o que ponga término al juicio mediante transacción.
>
> Artículo 10: Respecto de la prestación de servicios profesionales el abogado debe:
>
> a. convenir una remuneración justa por su servicio profesional;
>
> b. abstenerse de retener, concluido el servicio prestado, los dineros, bienes o documentos suministrados en relación con las gestiones realizadas;
>
> c. utilizar los dineros aportados con el cliente sólo en beneficio de la causa de éste;
>
> ch. rendir oportunamente al cliente las cuentas de la gestión y manejo de bienes;
>
> d. otorgar recibo de pago de honorarios o gastos.

> Al adecuar los hechos denunciados a las disposiciones descritas evidenciamos que:
>
> 1. El denunciado demorado (sic) la prosecución del proceso encomendado el 17 de noviembre de 1993 y que a la fecha no se ha corrido traslado de la demanda en abstracto a los demandados en la Causa que se gestiona ante el Juzgado Cuarto de Circuito del Primer Circuito Judicial, Ramo Civil contraviniendo el ordinal b del artículo 34.
>
> 2. Que en efecto, el LICENCIADO ARBOLEDA cobró en concepto de peritaje y gastos de secuestro (ver foja 6) por una actuación que a la fecha no ha consignado la Fianza de Perjuicio correspondiente. De igual forma según consta en autos, que recibió para tramitar el negocio encomendado la suma total de **SETECIENTOS OCHENTA BALBOAS** (fojas 5, 6 y 7) violando los ordinales ch y e del precitado artículo."

Aunado a lo antes transcrito, el Tribunal de Honor confirma sus fundamentos basándose en el contenido del Oficio N° 962 de 6 de junio de 1994 (visible a foja 25 del expediente), proferido por el Juzgado Cuarto del Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil, en respuesta a la Diligencia que el Tribunal de Honor emitiera con fecha 17 de marzo de 1994 con el fin de esclarecer los hechos denunciados. El Oficio 962 de 6 de junio de 1994 establece lo siguiente:

> "el Proceso de Liquidación de Condena en Abstracto fue presentado el día 17 de noviembre de 1993 ... el negocio está en trámite, habida cuenta que la demanda corregida no ha sido notificada a la parte demandada. La última actuación del Tribunal es la Providencia de 6 de abril de 1994 admitiendo la Demanda corregida y ordenando correr en traslado a la parte demandada.
>
> **En la acción de Secuestro no se ha consignado la Fianza de Perjuicio correspondiente.**"

Dado lo manifestado por el Juzgado emisor del oficio antes citado, el Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados concluye así:

> "... es indiscutible que la queja presentada por el señor EDUARDO BARROSO MORALES se fundamenta en hechos veraces y reiteramos que, a nuestro juicio, el licenciado **LUIS ALBERTO ARBOLEDA**, ... infringió los ordinales descritos b, ch, y e del artículo 34 del Código de Ética y Responsabilidad Profesional del Abogado en correlación con los artículos 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de la precitada excerpta legal; En consecuencia, El TRIBUNAL DE HONOR, RESUELVE:
>
> REQUERIR a la SALA DE NEGOCIOS GENERALES de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA que decrete la citación a juicio del **LICENCIADO LUIS ALBERTO ARBOLEDA** por **faltas** a la ética cometidas en el ejercicio de la profesión."

Mediante providencia de 19 de octubre de 1994, se ordena darle traslado del expediente al denunciado conforme al artículo 28 de la Ley 9 de 18 de abril de 1984, reformada por la Ley 8 de 16 de abril de 1993, a fin de que el licenciado Arboleda presente los escritos de excepciones y de oposición correspondientes a la petición de llamamiento a juicio solicitado por el Tribunal de Honor.

A foja 47 del expediente consta el Informe Secretarial de fecha 31 de marzo de 1995, en el cual se le informa al Magistrado Sustanciador de que se habían efectuado todas y cada una de las diligencias consagradas en nuestras normas procesales tendientes a notificar al licenciado Luis Alberto Arboleda y que habían sido infructuosas. En base a este informe se ordena, en providencia de 3 de abril de 1995 (visible a foja 49 del expediente), lo estatuído en el artículo 30 de la Ley 9 de 18 de abril de 1984, reformada por la Ley 8 de 16 de abril de

1993, que establece el emplazamiento por edicto cuando no fuera posible hallar al denunciado para notificarle el requerimiento del Tribunal de Honor, dándose cumplimiento del mismo mediante la fijación del Edicto N° 95 (visible a foja 50 del expediente), siendo remitida una copia del mismo por correo al licenciado Arboleda a su dirección profesional, la cual fue posteriormente devuelta por la Dirección de Correos, al no encontrarse en la dirección que aparece en autos.

En providencia de 26 de junio de 1995 (visible a foja 53 del expediente), se hace constar que fueron utilizados todos los mecanismos de notificación contemplados por la Ley 9, reformada por la Ley 8 y por el Código Judicial, razón por la cual se tiene por notificado al licenciado Arboleda del expediente contentivo de la denuncia interpuesta en su contra por el señor Eduardo Barroso Morales por supuestas faltas a la Ética y a la Responsabilidad Profesional del Abogado, y se ordena, que a tenor de lo consagrado en el artículo 30 de la Ley 9 de 1984, reformada por la Ley 8 de 1993, se le designe un defensor de ausente quien lo representará en todo el trámite del juzgamiento.

En Nota N° CSJ-SNG-185-95 de fecha 30 de junio de 1995, se solicitó al Instituto de Defensoría de Oficio la designación de un defensor de Oficio Distrital Judicial, para que represente al licenciado Arboleda, siendo escogido el licenciado Gabriel E. Fernández, según la solicitud de designación N° 0462, de fecha 28 de julio de 1995, proferida por el Instituto de Defensoría de Oficio.

Mediante providencia de 24 de noviembre de 1995 (visible a foja 59 del expediente), el Magistrado Sustanciador, antes de decidir si existe o no mérito para solicitar el enjuiciamiento del licenciado Arboleda, solicitó, de oficio, el expediente contentivo del Proceso de liquidación en Abstracto al Juzgado Cuarto del Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil, denominado Eduardo Barroso Morales contra Manuel Esturaín y/o Agencias de Aduanas Alvarado, S. A.

Tomando en consideración los hechos anteriores, la Sala pasa al análisis del contenido de la denuncia en los siguientes términos:

Al analizar el expediente contentivo del proceso de Liquidación de Condena en Abstracto, que da pie para la denuncia interpuesta ante esta Superioridad, se observa que el señor Eduardo Barroso Morales le confirió poder especial al licenciado Luis Alberto Arboleda, visible a foja 10 del mismo, el cual fue presentado ante el Juzgado Tercero del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil, en Turno, el 17 de noviembre de 1993, y repartido al Juzgado Cuarto del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil, el 22 de diciembre de 1993. Adjunto a la misma, el licenciado Arboleda presentó una acción de secuestro, a la cual hace referencia la Juez Cuarta del Primer Circuito Judicial de Panamá, en el Oficio N° 962 de 6 de junio de 1994, que remitió al Tribunal de Honor del Colegio de Abogados (visible a foja 25 del expediente contentivo de la denuncia) y señalando además, que en la acción de secuestro **no se había consignado la Fianza de Perjuicio correspondiente**.

Observa la Sala, que se adjuntan a la denuncia cinco (5) recibos, en los cuales se hace constar el dinero recibido del señor Eduardo Barroso (visibles de foja 3 a 5 del expediente que contiene la denuncia) con la siguiente descripción: Recibo N° 023 del 6 de octubre de 1993 por B/.10.50 en concepto de gastos por trámites; Recibo N° 026 del 22 de octubre de 1993 por B/.50.00 en concepto de gastos de Proceso Administrativo; recibo N° 032 del 12 de noviembre de 1993 por B/.200.00 en concepto de Peritaje y gastos de secuestro, Recibo S/N del 3 de diciembre de 1993 por B/.20.00 en concepto de abono a honorarios y el recibo N° 036 del 9 de diciembre de 1993 por B/.500.00 en concepto de gastos, totalizando una cantidad de B/.780.00 (setecientos ochenta balboas) que afirma el señor Eduardo Barroso haberle entregado al licenciado Arboleda a través de su Secretaria.

El señor Barroso fundamenta su denuncia en que el licenciado Arboleda únicamente confeccionó el poder y la demanda que presentó ante el Juzgado del Primer Circuito Judicial de Panamá, en Turno, no obstante, no consignó la fianza de perjuicio correspondiente, ni efectuó la devolución del mismo al denunciante,

a pesar de que le había hecho entrega del dinero para tal efecto el día 12 de noviembre de 1993.

Basándose en las consideraciones anteriores, la Sala advierte que las actuaciones del licenciado Luis Alberto Arboleda están al margen de la ética de un profesional del derecho, aunado a esto el hecho de que no fuera posible notificarlo a través de toda la investigación levantada por el Tribunal de Honor, y de igual forma la imposibilidad de este tribunal de hacerlo bajo todos los mecanismos estatuídos por la Ley 9 de 18 de abril de 1984, reformada por la Ley 8 de 16 de abril de 1993 y por los consagrados en nuestras normas procesales, dejan establecidos la falta de responsabilidad y de seriedad del licenciado Luis Alberto Arboleda en su conducta profesional.

"Nuestras sociedades se han transformado en sociedades reivindicativas, en las que todos reclaman derechos para sí y deberes para algún otro es, a la larga, una sociedad que no funciona ... Llega un punto en el que el coro de los derechos produce una sociedad parasitaria con resultados negativos. Pero sobre todo una sociedad entretejida únicamente por acciones interesadas, gestionada sólo por animales utilitarios, por egoísmos racionalmente calculados no puede ser una buena sociedad"(Giovanni Sartori, citado por Hoyos, Arturo en su obra **Justicia, Democracia y Estado de Derecho**, Editado por la Corte Suprema de Justicia, Panamá, 1996, pág. 115).

Por tanto, advierte la Sala que el licenciado Arboleda no se ha conducido de forma honesta, toda vez que retuvo dineros en relación con la gestión realizada a favor del señor Barroso sin rendir cuentas acerca de su labor, además, según lo preceptuado en el artículo 5 del citado código, "el abogado debe actuar con honradez y buena fe. No ha de aconsejar, tolerar o valerse de actos fraudulentos sin fundamento real, afirmar, negar con falsedad", encontrando esta Superioridad suficientes elementos de juicio que ameritan el llamamiento a juicio del licenciado Luis Alberto Arboleda.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ORDENA EL LLAMAMIENTO A JUICIO, del licenciado LUIS ALBERTO ARBOLEDA, varón, panameño, abogado en ejercicio, con cédula de identidad personal N° 8-235-2470 con localización posible en Vía España y Calle Manuel María Icaza, Edificio Campo Alegre, Segundo Piso, Oficina 2-C, de conformidad con la Ley 9 de 18 de abril de 1984, reformada por la Ley 8 de 16 de abril de 1993, en la denuncia interpuesta por el señor Eduardo Barroso Morales, por faltas a la ética y la responsabilidad profesional del abogado, y se establece que próximamente se fijará la fecha para la celebración del debate oral, en cuyo acto se practicarán las pruebas que presenten las partes.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES

(fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ (fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=